



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

Departamento de Geografía

Programa de Doctorado

TERRITORIO, MEDIO AMBIENTE Y SOCIEDAD

Título de la tesis doctoral

**DINÁMICAS SOCIOTERRITORIALES EN LA
AMAZONÍA BOLIVIANA. EL TERRITORIO
INDÍGENA MOJEÑO-IGNACIANO COMO
ESTUDIO DE CASO.**

Doctoranda:

VIRGINIA JABARDO PEREDA

Directores:

MANUEL MOLLÁ RUIZ-GÓMEZ

(Universidad Autónoma de Madrid)

JUAN CARLOS GIMENO MARTÍN

(Universidad Autónoma de Madrid)

Madrid, 2013

Al pueblo Mojeño-Ignaciano

*“Ya vengo de Mojos misterioso, identidad definitiva de la pampa en medio
de la tierra y de la aurora, donde yace el yomomo y la tacuara junto a la garza,
el tucán y la bandurria, cerca del ciervo, el caimán, la capihuara, del lado en
que nace el sol y la sucuana, y supura el caldo de la caña
los más dulces manantiales de rocío”.*

RUBER CARVALHO UREY. *Mi patria Grande.*

AGRADECIMIENTOS

Mi primer y más sincero agradecimiento se lo debo a todas aquellas personas que con su colaboración han hecho posible este trabajo.

Quiero agradecer el apoyo recibido de mis directores: a Manolo por haber depositado su confianza en mí desde el primer día; a Juan Carlos por sus aportaciones y consejos. A ambos por haber formado parte de este proyecto.

Mi etapa boliviana está repleta de experiencias vividas y compartidas con mucha gente: Karina, Gabriela, la señora Sarita, Elisa, Nemesio, don Pedro, Rolando, los técnicos de CIPCA y de HOYAM, Viviana, Eduardo. A todos ellos les agradezco su colaboración. Pero sobre todo a los ignacianos e ignacianas que me acogieron en sus comunidades. Porque gracias a ellos este trabajo es mucho más que una tesis.

No puedo dejar de mencionar la ayuda y el interés mostrado por Maggie desde el principio. También quiero dar las gracias a Sarah, Annet y Tane por hecho más cálida mi estancia en Aberdeen.

Y de mi estancia en Florianópolis le debo mucho a Mauricio, por su inmensa generosidad, a Valentina y Ramón y a Óscar de quien tanto he aprendido.

Gracias a todos aquellos miembros del departamento de Geografía que de una u otra manera me han ayudado durante los años del doctorado. Sobre todo a mis compañeros de batalla: a Rodri, Gillian, Julián, Víctor, Estrella, por las terapias de las sobremesas. Pero especialmente mil gracias a Ali, por haber recorrido este camino a mi lado, por sus ánimos, por su ayuda y por haber estado hasta el final.

Quiero expresar mi gratitud a todos mis amigos y amigas y en particular a la panda del Sanagus por todos los buenos ratos, y a Isa e Ina por su apoyo incondicional.

No habría sido posible haber llegado hasta aquí sin el cariño de mi familia. Gracias a mi tío Pablín por darle color a este trabajo y a Tere por su confianza y su curiosidad infinita. Gracias a mis padres por su esfuerzo, por apostar todo, por enseñarme a soñar; y gracias a mi hermano Javi, por su felicidad, por su entusiasmo, por soñar conmigo.

Por último quiero agradecer a Ivan, mi compañero de viaje, haberme ayudado a saltar. Este trabajo es también suyo.

INDICE

| | |
|--|-----|
| Introducción | 13 |
| Summary | 22 |
| | |
| 1. Marco General de la investigación | 29 |
| 1. 1. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA | 29 |
| 1. 2. LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO | 31 |
| 1. 3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN | 33 |
| 1. 4. HIPÓTESIS | 42 |
| 1. 5. OBJETIVOS | 44 |
| 1. 5. 1. Objetivos específicos | 45 |
| 1. 6. METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN | 48 |
| 1. 6. 1. Reflexiones metodológicas. Diálogo en el marco de la interdisciplinariedad | 48 |
| 1. 6. 2. Técnicas de investigación | 73 |
| | |
| 2. Marco teórico. Elementos conceptuales | 96 |
| 2. 1. APROXIMACIONES CONCEPTUALES: TERRITORIO, ESPACIO, LUGAR | 98 |
| 2. 1. 1. Geografías del lugar; Geografías de la identidad | 101 |
| 2. 1. 2. Reflexiones acerca del “espacio” y “territorio” | 107 |
| 2. 1. 3. Conceptos complementarios: Territorialidad, desterritorialización. El vínculo con la identidad | 113 |
| 2. 2. LA NATURALEZA EN LAS CIENCIAS SOCIALES. CONSIDERACIONES TEÓRICAS | 119 |
| 2. 2. 1. Ontologías indígenas; ontologías occidentales | 120 |
| 2. 2. 2. Naturaleza-Cultura: un debate por resolver. Limitaciones y persistencia del esquema binario | 125 |
| 2. 2. 3. El papel de la naturaleza en las cosmologías indígenas de Bolivia | 138 |
| 2. 3. EL TERRITORIO PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS AMAZÓNICOS DE BOLIVIA. PERCEPCIÓN TERRITORIAL DEL PUEBLO MOJEÑO-IGNACIANO | 142 |
| 2. 3. 1. El territorio como mecanismo de lucha para los pueblos indígenas | 142 |
| 2. 3. 2. Diferencias conceptuales manejadas desde los discursos oficiales y de las organizaciones indígenas | 146 |
| 2. 3. 3. Voces de Mojos: significado del territorio para los indígenas ignacianos | 153 |
| 2. 3. 4. Dimensiones del concepto “territorio” | 158 |
| 2. 4. DEBATES ACERCA DE LA CATEGORÍA ÉTNICA, LA IDENTIDAD Y LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 172 |
| 2. 4. 1. ¿Quién es quién? Aproximaciones al concepto de “identidad” | 173 |
| 2. 4. 2. El otro: la construcción de la alteridad | 177 |
| 2. 4. 3. Más allá de la identidad: la condición étnica | 179 |
| 2. 4. 4. Territorializando identidades o identidades territorializadas | 185 |
| 2. 4. 5. Reificación de la identidad indígena | 188 |
| 2. 4. 6. Cajón desastre: confusiones conceptuales entre pueblos indígenas, indianismo, indigenismo y movimientos indígenas | 190 |
| 2. 4. 7. ¿Indio, salvaje, ciudadano, campesino u originario? La complejidad de la construcción conceptual | 204 |

| | |
|---|-----|
| 2. 4. 8. Emergencia de los pueblos indígenas como nuevos sujetos políticos | 214 |
| 3. Contexto geográfico: La Amazonía boliviana y los Llanos de Mojos | 221 |
| 3. 1. BOLIVIA: PAÍS MEGADIVERSO | 223 |
| 3. 1. 1. Grandes regiones y subdivisiones regionales | 228 |
| 3. 2. LA COMPLEJIDAD DE LA REGIÓN AMAZÓNICA | 238 |
| 3. 2. 1. Confusiones conceptuales sobre la “Amazonía”. Diversidad de criterios | 239 |
| 3. 2. 2. Ecosistemas amazónicos | 245 |
| 3. 3. LA AMAZONÍA BOLIVIANA | 247 |
| 3. 4. LOS LLANOS DE MOJOS DEL DEPARTAMENTO DEL BENI | 258 |
| 3. 4. 1. La sabana de Mojos | 261 |
| 3. 5. GEOGRAFÍA DEL TERRITORIO INDÍGENA MOJEÑO IGNACIANO | 300 |
| 4. Revisión etnohistórica: del reino del Gran Paitití al Estado Plurinacional | 317 |
| 4. 1. MOJOS PRECOLONIAL | 317 |
| 4. 1. 1. Organización política y socioespacial | 320 |
| 4. 1. 2. Actividades económico-productivas | 324 |
| 4. 1. 3. Patrón de asentamiento | 326 |
| 4. 2. PERÍODO REDUCCIONAL | 330 |
| 4. 2. 1. Organización política y socioespacial | 335 |
| 4. 2. 2. Actividades económico-productivas | 335 |
| 4. 2. 3. Patrón de asentamiento | 337 |
| 4. 3. PERÍODO POSTJESUÍTICO. El colonialismo en “Moxitania” | 338 |
| 4. 3. 1. Transformaciones económicas | 342 |
| 4. 4. PERÍODO REPUBLICANO | 343 |
| 4. 5. PERÍODO ACTUAL | 349 |
| 4. 5. 1. Características sociopolíticas y demográficas del municipio de San Ignacio de Mojos | 350 |
| 4. 5. 2. Estructura económica mojeña | 357 |
| 4. 5. 3. Movimiento étnico en Bolivia: contexto internacional y emergencia del pueblo mojeño como nuevo sujeto político | 382 |
| 4. 5. 4. Aspectos socioculturales | 406 |
| Introducción Parte II | 430 |
| 5: ¿La tierra para el que la trabaja? o ¿el territorio para los indígenas? | 434 |
| Tenencia de la tierra en Mojos | |
| 5. 1. ACTORES SOCIALES Y RELACIONES DE PODER | 437 |
| 5. 1. 1. Comunidades indígenas | 446 |
| 5. 1. 2. Ganaderos | 449 |
| 5. 2. PROBLEMÁTICAS EN TORNO A LA TENENCIA DE LA TIERRA EN MOJOS | 460 |
| 5. 2. 1. Sistemas de tenencia de la tierra | 461 |
| 5. 2. 2. Tipos de propiedad agraria. El caso del Territorio Indígena Mojeño-Ignaciano | 465 |

| | |
|---|---------|
| 5. 2. 3. Modalidades de acceso a la propiedad de la tierra | 473 |
| 5. 3. ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y USOS DEL SUELO | 480 |
| 5. 3. 1. Instrumentos del ordenamiento territorial en Bolivia | 482 |
| 5. 3. 2. Niveles de ordenamiento territorial en Bolivia | 488 |
| 5. 3. 3. Avances del proceso de ordenamiento territorial | 491 |
| 5. 3. 4. Planificación territorial en el Beni | 494 |
| 5. 3. 5. Ordenamiento territorial en Mojos, la TCO TIMI | 498 |
| 5. 4. CONCLUSIONES | 513 |
| 6. Pueblos indígenas tocando a las puertas del derecho.El proceso de saneamiento y sus consecuencias | 516 |
| 6. 1. ANTECEDENTES DEL PROCESO DE SANEAMIENTO: DE LA REFORMA AGRARIA A LA MARCHA POR EL TERRITORIO Y LA DIGNIDAD. | 518 |
| 6. 1. 1. La Reforma Agraria de 1953 | 519 |
| 6. 1. 2. La Reforma Agraria de 1996 | 523 |
| 6. 2. NORMATIVA LEGAL REFERENTE A LA CUESTIÓN AGRARIA | 530 |
| 6. 2. 1. Instrumentos legales internacionales | 532 |
| 6. 2. 2. Instrumentos legales nacionales | 540 |
| 6. 3. EL PROCESO DE SANEAMIENTO DE TIERRAS EN MOJOS | 546 |
| 6. 3. 1. Etapas del proceso de saneamiento | 550 |
| 6. 3. 2. Modalidades de saneamiento | 551 |
| 6. 3. 3. Evolución del proceso de saneamiento y titulación del Territorio Indígena Mojeño-Ignaciano | 554 |
| 6. 3. 4. Conflictos territoriales en Mojos | 566 |
| 6. 4. LOGROS Y AVANCES CONSEGUIDOS TRAS LEY INRA | 585 |
| 6. 5. LAS DIFICULTADES DEL PROCESO DE SANEAMIENTO | 591 |
| 6. 6. INTENTOS DE RECONDUCCIÓN DE LA REFORMA AGRARIA. NUEVOS INSTRUMENTOS LEGALES | 595 |
| 6. 7. CONCLUSIONES Y RETOS PARA EL FUTURO | 599 |
| 7. Dinámicas Forestales. Planes de Manejo Forestal como alternativa sostenible | 602 |
| 7. 1. POTENCIAL FORESTAL DE BOLIVIA | 606 |
| 7. 1. 1. Aprovechamiento forestal en Mojos-Beni | 609 |
| 7. 1. 2. Características de la explotación forestal en Bolivia y en el Preandino-amazónico | 615 |
| 7. 2. PERSPECTIVA HISTÓRICA DEL DESARROLLO FORESTAL EN MOJOS | 625 |
| 7. 2. 1. El uso de los bosques en el mítico “Reino del Paititi” | 626 |
| 7. 2. 2. La irrelevancia del sector forestal durante el periodo colonia | 626 |
| 7. 2. 3. La nueva política forestal tras la proclamación de las independencias | 627 |
| 7. 2. 4. Nuevas directrices políticas a raíz de la Revolución Nacional | 627 |
| 7. 2. 5. Las políticas neoliberales en el sector forestal | 629 |
| 7. 2. 6. Tendencia actual del sector forestal en Bolivia y el Beni | 630 |
| 7. 3. USUARIOS DE LOS BOSQUES EN LA REGIÓN DE MOJOS | 637 |

| | |
|---|---------|
| 7. 3. 1. Comunidades indígenas del TIMI | 638 |
| 7. 3. 2. Empresas madereras | 643 |
| 7. 3. 3. Motosierristas, piratas y cuarteros | 647 |
| 7. 3. 4. Productores de madera a pequeña escala: Agrupaciones Sociales de Lugar (ASLs) | 649 |
| 7. 3. 5. Estancias ganaderas | 651 |
| 7. 4. INSTANCIAS DE CONTROL DE RECURSOS FORESTALES | 652 |
| 7. 5. MARCO JURÍDICO REFERENTE A LA CUESTIÓN FORESTAL | 656 |
| 7. 5. 1. Planes Generales de Manejo Forestal | 666 |
| 7. 5. 2. Controversias en torno a la legislación forestal | 677 |
| 7. 6. LA CUESTIÓN FORESTAL EN MOJOS | 679 |
| 7. 6. 1. Causas de la deforestación en el Beni | 679 |
| 7. 6. 2. La tala selectiva en el TIMI | 696 |
| 7. 6. 3. El impacto de la deforestación en la región de Mojos | 698 |
| 7. 7. NUEVAS ESTRATEGIAS DE MANEJO DE RECURSOS FORESTALES. El plan de manejo forestal específico de cacao | 706 |
| 7. 8. DESAFÍOS REFERENTES A LA CUESTIÓN FORESTAL | 709 |
| 7. 9. PROPUESTAS DE FORESTERÍA COMUNITARIA Y CONCLUSIONES | 714 |
| 8. Nuevos espacios de poder y de gestión territorial. El proceso de las autonomías indígenas: un capítulo inconcluso | 719 |
| 8. 1. LAS AUTONOMÍAS INDÍGENAS | 722 |
| 8. 1. 1. Definición Autonomías Indígenas | 723 |
| 8. 1. 2. Antecedentes de las propuestas autonómicas y del modelo descentralizador | 725 |
| 8. 1. 3. Alcances y limitaciones del régimen autonómico | 729 |
| 8. 2. LA GESTIÓN TERRITORIAL INDÍGENA | 736 |
| 8. 2. 1. Definición de GTI | 737 |
| 8. 2. 2. Dimensiones de la Gestión Territorial Indígena | 739 |
| 8. 3. CONCLUSIONES | 741 |
| Conclusiones | 747 |
| Conclusions | 769 |
| Bibliografía | 786 |
| FUENTES BIBLIOGRÁFICAS | 786 |
| RECURSOS DIGITALES | 817 |
| GLOSARIO DE SIGLAS | 820 |
| ÍNDICE DE CUADROS | 824 |
| ÍNDICE FIGURAS | 826 |
| ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS | 828 |
| ÍNDICE DE GRÁFICOS | 830 |
| ÍNDICE DE MAPAS | 831 |

| | |
|----------------|-----|
| ANEXO 1 | 832 |
| ANEXO 2 | 833 |
| ANEXO 3 | 839 |
| ANEXO 4 | 840 |
| ANEXO 5 | 849 |
| ANEXO 6 | 850 |
| ANEXO 7 | 851 |
| ANEXO 8 | 852 |
| ANEXO 9 | 853 |

Introducción.

Ubicados en la gran planicie que conforma la Llanura de Mojos del departamento del Beni (Bolivia), habita el pueblo indígena mojeño-ignaciano, proveniente de la familia lingüística *arawak*. Existen vestigios arqueológicos que evidencian la presencia de asentamientos de ésta y otras culturas indígenas de la Amazonía boliviana en dicho espacio geográfico, ya desde el periodo precolombino, que nos hablan de la ocupación histórica de la pampa beniana. Debido, en buena medida, a la continua desposesión de territorios comunales que ha venido aconteciendo en esta región desde la época colonial, los mojeños -constituidos como movimiento indígena- reclaman frente al Estado el reconocimiento y la apropiación de tales espacios en base a las necesidades reproductivas de sus comunidades.

El territorio ha constituido para la población mojeño-ignaciana la base sobre la que han (re)configurado su identidad cultural. Sobre él han desplegado sus formas de vida, sus organizaciones locales, sus actividades socioproductivas y sus estructuras simbólicas. En los territorios que habitan se proveen de los recursos naturales necesarios para la reproducción de las unidades domésticas. Estos constituyen la “Casa Grande”¹, la “madre” como así es denominado por los *comunarios*².

La historia de tales poblaciones étnicas ha estado marcada por una paulatina pero constante privación del acceso a territorios comunales profesada tanto por colonizadores extranjeros (caso de ejércitos españoles y misiones jesuíticas) como por *terceros*³. Frente a tal situación estas poblaciones adoptaron diferentes estrategias⁴ hasta que a finales del

¹ Referido al vínculo entre naturaleza y cultura.

² Usaré este término, “comunarios”, por ser la manera en la que los mismos habitantes de las comunidades de los pueblos indígenas de Mojos se denominan así mismos.

³ Término que se concede en Bolivia a “*los ganaderos, agricultores, colonos y comunidades que no son miembros del Pueblo Indígena u Originario*” asentados al interior de territorios indígenas (<http://www.inra.gob.bo>)

⁴ La sociedad *originaria* de Mojos ha pasado por un sin número de formas de resistencia posibles frente a quienes han considerado competidores, es decir, frente a otros pueblos indígenas, exploradores y ejércitos invasores provenientes de Europa, misioneros, ganaderos, compañías madereras, colonos agrícolas, e incluso frente al poder estatal. Claros ejemplos de ello han sido: la huída al interior de los bosques; la aceptación e imposición de la organización colonial; la

siglo pasado se produjo un salto cualitativo que marcó un punto de inflexión en la historia del movimiento indígena de Mojos. Durante la segunda mitad del siglo XX tuvo lugar, en los bosques de esta región, una masiva explotación de tipo selectivo de aquellos recursos naturales de mayor valor comercial. Ésta llegó de la mano de empresas madereras financiadas por capital extranjero (proveniente principalmente de Estados Unidos), provocando una fuerte deforestación que acabó con algunas de las especies más abundantes, como fue el caso de la mara o caoba. Este episodio fue el desencadenante definitivo que inauguró un nuevo escenario de lucha política en el que el enfrentamiento abierto hacia el Estado se antojaba como la única y determinante opción. El año 1990 fue testigo del inicio de un arduo y tenso –en ocasiones incluso violento– proceso de lucha por el reconocimiento de los derechos colectivos⁵ de los pueblos indígenas de tierras bajas⁶. Entre el conjunto de derechos sobresaldrían por encima de todos los derechos territoriales. Los pueblos indígenas de Mojos esperaban que en base a estos, el Estado les reconociera como legítimos propietarios de tales territorios. Brotó entonces un sentimiento de lucha que fue canalizado por el *Movimiento Indígena del Oriente Boliviano*⁷, en el que el pueblo mojeño desempeñó un rol fundamental por tomar la iniciativa de entre el conjunto de pueblos indígenas de tierras bajas⁸.

En el año 1990 tuvo lugar la *Marcha por el Territorio y la Dignidad*⁹ la cual significó un hito del movimiento indígena a nivel nacional, constituyendo el acontecimiento político de mayor envergadura de la historia contemporánea de los pueblos indígenas amazónicos de Bolivia. Tras dicha movilización –para muchos inesperada aunque para algunos otros, bastante previsible– las poblaciones étnicas de Mojos¹⁰ (véase **gráfico 4. 1**) inauguraron un proceso de visibilización a nivel político, que hasta entonces ni siquiera habían imaginado. Los nuevos sujetos políticos

rebelión armada; las marchas pacíficas, hasta el intento de diálogo frente al Estado nacional, en el caso de Bolivia: plurinacional.

⁵ Estos consisten en el derecho a la autodeterminación, al mantenimiento de sus instituciones políticas, socioculturales, económicas y jurídicas, al uso de las lenguas indígenas, a la gestión territorial indígena, a la administración de la justicia bajo sus propias formas locales, a la consulta en caso de explotación de los recursos naturales de los territorios que habitan, a la indemnización en caso de daños ambientales en los mismos, a la práctica de los conocimientos *tradicionales*, etcétera.

⁶ Las tierras bajas corresponden en Bolivia a las regiones biogeográficas: amazónica, chaqueña y brasileña paranense (Navarro, 1997).

⁷ Éste movimiento surgió a raíz de las demandas territoriales en la década de los ochenta del siglo pasado, el cual tras una serie de movilizaciones pacíficas logró insertar la cuestión indígena en la agenda política nacional.

⁸ Además del pueblo mojeño, pertenecen a este grupo el pueblo guaraní, weehayek, tapieté, tacana, yuracaré, yuqui, chimán, lecos, mosetén, baure, chacobo, iténez, pacaguara, araona, cavineño, sirionó, cayubaba, itonama, chiquitano, guarayo y ayoreo.

⁹ Los grupos indígenas de Mojos marcharon durante 34 días desde Trinidad, capital del departamento del Beni, hasta La Paz, sede del gobierno nacional, recorriendo unos 700 kilómetros. Mi intención no es en estos momentos entrar en detalles. Los próximos capítulos darán buena cuenta de ello.

¹⁰ Estos son: mojeño (trinitario e ignaciano), yuracaré, movima y chimán.

demonstraron conformar parte de un movimiento indígena a nivel nacional dispuesto a desplegar todo su potencial en favor del reconocimiento jurídico de lo que hasta entonces les había sido negado por las instituciones estatales o en el mejor de los casos, omitido o ignorado. En los primeros años de lucha, las demandas no cesaron pese a los leves intentos por parte del gobierno de calmar la situación. Por el contrario, se verían incrementadas, replicando en diversos puntos geográficos de la región amazónica y del conjunto del país, como consecuencia del contagio social. Desde la administración estatal no se vislumbró otra opción que la de ceder, en parte, a las peticiones de los grupos étnicos.

A tenor de todo ello, el 18 de octubre de 1996 entró en vigor la Ley número 1715¹¹, más conocida como *Ley INRA* por provenir *del Instituto Nacional de la Reforma Agraria*. Dicha ley tenía la complicada tarea de regular las demandas de tierras de los pueblos indígenas y las concesiones de las mismas en el conjunto del territorio nacional. A la misma me remitiré con frecuencia en el presente estudio por un motivo específico. Y es que la *Ley INRA* dio lugar al surgimiento de la nueva figura legal denominada *Tierra Comunitaria de Origen* (TCO), referida ésta a un espacio geográfico delimitado en base a los requerimientos de cada uno de los pueblos *originarios* (véase **cuadro 3. 2**) que así lo solicitasen –además de cumplir ciertos criterios- y concedido en propiedad privada a cada uno de estos.

De manera particular, el pueblo mojeño-ignaciano, tras haber constituido la Subcentral del TIMI (*Territorio Indígena Mojeño Ignaciano*, conformada por 19 comunidades pertenecientes a dicho grupo étnico: véase **cuadro 4. 4**) –organización representante de las comunidades ignacianas- demandó la titularidad comunitaria de la tierra en el año 1999. Debido al solapamiento de varios factores, entre ellos la lentitud del proceso de regularización y la negligencia de algunos cargos tanto de la propia Subcentral como del propio INRA, hasta el año 2011 la titulación de la TCO TIMI no se dio por finalizada. El área actual correspondiente a ésta es de 98. 398 hectáreas, las cuales están ocupadas casi en torno al 49% por estancias ganaderas (véase **mapa 6. 4**) Este fenómeno, que determina el acceso y uso de los recursos naturales entre los agentes locales que operan al interior de dicho espacio territorial, constituye la principal fuente de conflictos que envuelve a los diversos actores sociales de Mojos; estos son indígenas y ganaderos principalmente.

La reciente obtención legal del título de propiedad de la TCO, ha desencadenado entre los indígenas ignacianos una reformulación de sus estructuras locales socioeconómicas así como de su organización política, en torno a la reivindicación del

¹¹ Tan solo 10 años después, a fecha de 28 de noviembre de 2006, sería modificada por la Ley número 3545 *de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria*, cuestión acerca de la que trataré en el capítulo 6.

territorio. La lucha por el reconocimiento de los derechos territoriales ha propiciado la articulación de las comunidades ignacianas en torno a una organización sociopolítica supracomunal: la Subcentral del TIMI que a la vez se coordina con niveles superiores de acción -centrales regionales y departamentales-. En su lucha por hacer valer la gestión territorial indígena, las comunidades mojeño-ignacianas han fortalecido sus prácticas locales de manejo de recursos al mismo tiempo que participan en los canales de intercambio regional a nivel productivo. Del mismo modo, se ha visto transformada su relación con el Estado, ahora que éste se presenta como Estado plurinacional, según la *Nueva Constitución Política del Estado* (NCPE) aprobada a comienzos del 2009. Aunque se cuenta con muy poco margen a la hora de anticipar las implicaciones que el nuevo texto constitucional tendrá, desde el punto de vista jurídico, sobre las *naciones y pueblos originarios* –como así son definidos los pueblos indígenas en la NCPE- se puede adelantar que el nuevo régimen autonómico provocará consecuencias trascendentales para aquellos, en caso de que se haga efectivo. La razón que lo explica es la creación de las *Autonomías Indígenas* –en el marco de la ampliación de derechos y libertades concedido por el gobierno de Evo Morales a los pueblos indígenas del país-que permitirán a los grupos étnicos de Bolivia garantizar el libre gobierno en base a sus propias instituciones locales, al interior de la entidad territorial asociada a cada uno de ellos y reconocida también formalmente.

A efectos de todo ello el conjunto de comunidades ignacianas han readaptado los esquemas perceptivos en los que se proyecta su relación con el entorno local, con los territorios, en definitiva, con el espacio.

He orientado el presente trabajo a diagnosticar la realidad socioterritorial, sus particularidades y los procesos o dinámicas que giran en torno a ella. Atenderé cuestiones que pueden resultar interesantes tanto para el ámbito científico de nuestro país, en el que no abundan los trabajos sobre las poblaciones amazónicas de Bolivia, como del ámbito boliviano. En este último caso, la literatura científica dedicada al análisis socioterritorial de la Amazonía aparece en las más de las veces atravesada por una mirada parcial al estar los autores de tales trabajos implicados en el proceso de visibilización política de los grupos indígenas.

Un compromiso de este trabajo es recorrer el viaje de vuelta: devolver el conocimiento adquirido, los testimonios recogidos y las experiencias vividas por parte de aquellos que han hecho capaz la realización del mismo. Será interesante para los propios comunarios verse representados y para quienes codo con codo trabajan con ellos a diario -con esto me estoy refiriendo a los técnicos y empleados de las ONGs que operan en la

región- repensar acerca de sus prácticas y actividades con los habitantes de las comunidades mojeñas.

Doy paso a continuación a presentar una aproximación de lo que será desarrollado en profundidad a lo largo del estudio. En primer lugar cabe señalar que la investigación consta a grandes rasgos de 2 partes. La primera de ellas tiene por objetivo situar la problemática a tratar en un marco teórico-metodológico específico así como en un contexto geohistórico particular del caso que nos ocupa. Esta primera parte viene constituida por los cuatro primeros capítulos. El capítulo 1 en concreto, abre el trabajo con un marco general sobre la investigación. En éste se explica en primer término el porqué de la problemática a estudiar, el porqué abordar un estudio que pivota sobre dos variables concretas: el territorio y la identidad étnica, el porqué acercarnos a este trabajo desde la Geografía y la Antropología, miradas que permiten combinar técnicas de investigación provenientes de ambas y que conjugan el clásico trabajo etnográfico gracias al que se han recogido las voces protagonistas de los habitantes de Mojos, con algunas herramientas geográficas como son el uso de los *Sistemas de Información Geográfica* (SIG).

El segundo capítulo recoge las reflexiones planteadas en el anterior para entrar en detalle en el análisis de las categorías analíticas que serán posteriormente manejadas a lo largo de la investigación, como son a parte del territorio y la identidad, las acepciones teóricas correspondientes a espacio, lugar, etnicidad, pueblo indígena, *originario*. Daré cuenta además de los postulados teóricos derivados tanto de la Geografía Humana y Regional como de los estudios sobre etnicidad propios de la Antropología e incluso la Ecología Política, en los que me he inspirado para construir los esquemas conceptuales que guiarán el trabajo y los cuales ponen de manifiesto la relevancia de centrar el análisis de las cuestiones indígenas desde lo local, desde el territorio que a su vez actúa como eje de las interpelaciones lanzadas por las poblaciones indígenas de la Amazonía al Estado. El territorio es concebido entonces desde un enfoque dual y en ocasiones contradictorio que intercala la concepción indígena que los ignacianos poseen del mismo -definida por la integralidad y la multidimensionalidad- a diferencia del espacio delimitado geográficamente en el que habitan un número concreto de personas que da forma a la definición utilizada por los poderes públicos. Quedará demostrado de qué manera la coyuntura nacional e internacional ha forzado a estas poblaciones a adoptar herramientas discursivas que les habían sido ajenas hasta el momento, con la finalidad de ver hechas realidad sus demandas territoriales. Los préstamos discursivos incorporados en su retórica provienen tanto de las fuentes del derecho internacional, como de la legislación del propio país, de las organizaciones pro-indigenistas o del movimiento ecologista.

El enfoque local conduce a dedicar expresamente un capítulo al contexto geográfico que para el caso de Mojos ha condicionado en buena medida las actuales dinámicas territoriales en esta región al consistir en un ecosistema sujeto a la inundación anual el cual ha forzado a las poblaciones que desde la época prehispánica lo han habitado, a desarrollar un modelo de gestión territorial capaz de sobrevenir a las particularidades biofísicas de la sabana inundable del Beni, la más extensa del mundo. En concreto se presta especial atención al territorio comunal que ocupan los indígenas ignacianos y el cual corresponde a la TCO del TIMI.

Pero si queremos entender de qué manera se han transmitido los sistemas locales de manejo del entorno natural que en su día desarrollaron las antiguas culturas hidráulicas del Mojos precolombino, es indispensable remontarnos a dicho periodo y realizar por lo tanto, una revisión etnohistórica que pasando por la época colonial (siglos XVII y XVIII) y la republicana (desde comienzos del siglo XIX en adelante), alcance el momento actual. En cada una de ellas me detendré para dar muestra de los cambios que, a nivel socioeconómico, político y cultural, tuvieron lugar en el seno de las comunidades indígenas de Mojos como consecuencia del contacto con la sociedad nacional y las imposiciones que se sucedieron desde la implantación de las misiones jesuíticas en la región, así como la manera particular como se modificaron las lógicas del manejo territorial indígena.

La idea de esta primera parte es presentar una panorámica general para dar paso a continuación al análisis –desde una perspectiva situacional¹²– de las cuestiones más específicas que atañen al pueblo mojeño-ignaciano en su contexto local pero sin perder de vista su imbricación en el escenario nacional.

El segundo bloque de la investigación (capítulos 5 al 8) comienza con una breve presentación que introduce las cuestiones a tratar –presentadas en perspectiva diacrónica-. El quinto capítulo se detienen en el análisis de la problemática referente a la tenencia de la tierra en el oriente boliviano y en Mojos concretamente, que aparece vinculada a las cuestiones étnicas y a las formas en las que los pueblos indígenas de esta región han visto restringido el acceso a la tierra en base a un sistema de dominación que ha perpetuado las relaciones asimétricas y de poder entre dos grupos sociales en concreto: los ganaderos y las comunidades indígenas. Una parte importante de este

¹² Considero que tanto la dimensión cultural como la dimensión natural (de naturaleza) constituyen variables cambiantes y no estáticas. No son entes ahistóricos. Los fenómenos ocurridos en el exterior influyen sobre las alteraciones que puedan afectar a las sociedades. También los procesos intrínsecos a las propias comunidades locales han actuado como dispositivo de cambio. Éstas se han reinventado a sí mismas a medida que han modulado la relación con el espacio.

capítulo se dedica al ordenamiento territorial el cual se presenta como herramienta eficaz para redimir la situación de desigualdad en el acceso a la tierra.

El sexto capítulo retoma el hilo del anterior para sumergirse de lleno en el proceso de saneamiento de la tierra en Bolivia y las implicaciones a nivel socioeconómico, que ha tenido para las poblaciones indígenas. Fundamentalmente por la presión que éstas ejercieron ante el Estado al articularse en el movimiento indígena del oriente debido a la explotación masiva de los recursos naturales en los bosques del Beni y por los conflictos, de componente étnico, surgidos a raíz de las invasiones de territorio a manos de las estancias ganaderas que pueblan el paisaje de la región. Todo ello en relación al marco legal nacional e internacional en materia agraria. En este mismo capítulo se hará un repaso a la historia del movimiento, a los motivos que llevaron a los indígenas del oriente a articularse en una entidad regional, a demandar ante el Estado el conjunto de derechos colectivos a los que hice alusión al comienzo, a las tendencias internas del mismo, a la reacción de gobiernos nacionales y *terceros*, a la relación de las organizaciones indígenas frente a estos últimos y, en último lugar, a la manera en que esta serie de fenómenos provocó alteraciones de naturaleza sociopolítica entre los habitantes indígenas de Mojos.

La problemática ligada a la explotación de los recursos naturales es la cuestión que justifica el siguiente capítulo que diagnostica la política forestal de Bolivia y el marco jurídico que la regula, los actores protagonistas de la misma y en último término algunas estrategias de manejo de recursos que recientemente se han puesto en marcha entre los comunarios de Mojos, con las que se pretende fomentar la gestión territorial indígena entre estos para fortalecer las prácticas locales de uso de los recursos naturales. Asimismo se demostrará con datos el impacto ambiental sufrido en los bosques del país y en la llanura mojeña así como el potencial forestal de los mismos, el cual ha permitido que las comunidades indígenas desarrollen sus formas de vida en base al sustento que estos les proveen. Estas cuestiones me llevan a tratar el problema de la *Gestión Territorial Indígena* (GTI) que junto con la cuestión de la autonomía de las naciones y pueblos *originarios* del país, a la que hacía alusión, conforman el contenido del último capítulo del trabajo. En éste, tanto la GTI como las *Autonomías Indígenas* aparecen ligadas por el hecho de que la primera allana el camino para el libre ejercicio de las instituciones locales de los pueblos indígenas que habitan en un territorio comunal, en cuanto al manejo y la apropiación del mismo. Este planteamiento es interesante además porque retoma el concepto del territorio como espacio apropiado sugerido en el capítulo 2.

Para concluir la investigación aportaré unas reflexiones finales que darán cierre al estudio. Asimismo dejarán abiertas las puertas a investigaciones futuras debido al grado de incertidumbre que envuelve el panorama actual en todo el país a causa de la

implantación de modelos autonómico y en particular en el contexto mojeño-ignaciano debido a la escasa producción de trabajos que a día de hoy existen sobre este pueblo indígena.

Son varios interrogantes que surgen para este trabajo. Resulta interesante para comprender las dinámicas actuales que tienen lugar en Mojos, discernir acerca de los modelos de manejo territorial durante el periodo prehispánico, los cuales se encontraban sujetos a las particularidades de un contexto geográfico: el de la llanura beniana, que dejó desde entonces su huella en la organización del territorio de las poblaciones locales. De ahí que la *Gestión Territorial Indígena* (GIT) se haya planteado por los organismos oficiales como una herramienta capaz de incorporar las prácticas locales de manejo del territorio, pero: ¿en qué lugar queda la participación de la población local en los recientes planes de GTI?. En este contexto, si el recién instaurado modelo político-administrativo descentralizado que reconoce el nivel autonómico indígena amplía las competencias de autogobierno para aquellos pueblos indígenas reconocidos institucionalmente por el Estado, surge la pregunta para el caso que nos ocupa de pensar ¿qué cambios podría acarrear el actual proceso de autonomías indígenas para las comunidades ignacianas? No obstante, para que el pueblo indígena mojeño-ignaciano logre alcanzar el nivel autonómico es crucial que administre su etnicidad, su imagen como pueblo *originario*, frente al Estado y frente al resto de la sociedad nacional, en el marco de las reivindicaciones territoriales, pero ¿de qué manera?, ¿cuáles son las estrategias discursivas y la línea de acción que canalizan dichas demandas?. Cabe aclarar que para lograr la *Autonomía Indígena* en Bolivia, se requiere de una certificación ministerial de los territorios ancestrales habitados por aquellos pueblos que así la demandan. Esto explica en buena medida el porqué la identidad étnica y las demandas territoriales aparecen intrincadas en el mismo proceso social. Y explica también las constricciones que han empujado a los pueblos indígenas de Bolivia a acatar las condiciones establecidas por los poderes públicos a la hora de ver reconocidos jurídicamente los territorios que habitan. En este juego de tensiones los indígenas mojeños se reinventan constantemente. Ejemplo de ello es el actual proceso en el que se está discutiendo la conversión del municipio de San Ignacio de Mojos en *Autonomía Indígena*. Si los habitantes de dicho municipio se aferran a esta opción, el futuro de las comunidades locales de Mojos seguramente vislumbrará un horizonte en el que éstas puedan ejercer sus formas de gobierno en base a sus propias instituciones locales y sus lógicas de conocimiento.

Por el momento sólo nos queda esperar a conocer cuál será el camino que los indígenas mojeños decidan tomar.

Para dar fin a esta introducción añadir que aspiro a que este trabajo adquiriera un carácter innovador y pueda constituir una guía para posteriores investigaciones y estudios sociales dirigidos a conocer más en profundidad y a hacer inteligible la realidad en la que viven las comunidades ignacianas del TIMI -dado que son del todo escasos los que existen hasta el momento- así como a contribuir con nuevos planteamientos a los debates sobre la temática indigenista en el contexto de las tierras bajas en Bolivia. Abogo por que este tipo de trabajos puedan ofrecer una mejor aproximación a la realidad por la que atraviesan las poblaciones indígenas de la Amazonía y desmontar los estereotipos que giran en torno a ellas. Desde el panorama político, expectante de los efectos resultantes del contexto autonómico, el futuro de estos pueblos se presenta incierto. Este trabajo propondrá algunas claves para su reflexión.

Considerando además a la universidad como espacio de intercambio del conocimiento y de reflexión sobre los procesos sociales en los que interactúan los grupos humanos, aprovecho la oportunidad, para dar constancia desde aquí y como parte de la agenda académica, del proyecto de dominación que ha subordinado al pueblo indígena mojeño desde el periodo colonial. Esta investigación alberga por lo tanto el propósito de sumarse a aquellos trabajos generadores de conocimiento orientado a la transformación social. Transformación de un mundo en el que los pueblos indígenas puedan contribuir a escribir la historia del mismo.

SOCIOTERRITORIAL DYNAMICS IN THE BOLIVIAN AMAZON. THE CASE OF *MOJEÑO-IGNACIANO* INDIGENOUS TERRITORY.

Summary.

The *Mojeño-Ignaciano* indigenous people are settled at the great Mojos Plain of the Beni Department in Bolivia. Archeological remains prove the presence of human groups in this area since pre-Columbian times. These also prove occupation of this geographic space in the historical post-Columbian period. Due to the constant loss of communal territory that has been happening in this region since the colonial era, *Mojeño* Peoples, constituted as an indigenous movement, are making claims to the State for the recognition and re-appropriation of what they consider and defend as their *original* territory.

The territory has been for *Mojeño-Ignaciano* communities the basis on which they have (re) formulated their cultural identity. Around it they have developed their lifestyle, their local organizations and their socio-symbolic structures. The territories which they inhabit provide them with the necessary resources for their development. Those territories constitute the “Big House”, the “Mother”.

The history of these ethnic populations has been marked by a gradual but steady territorial dispossession. To face this situation, they adopted different strategies¹. Nevertheless, at the end of the last century, a qualitative leap had occurred which marked a turning point in the history of the Mojos indigenous movement. During the second half of the twentieth century there was a selective exploitation of natural resources –with high commercial value, in the forests of this region. A huge amount of foreign capital was invested in timber companies, causing significant deforestation that exhausted some of the most abundant species, such as mahogany. This episode would

¹ Indigenous societies of Mojos have gone through different forms of resistance against whoever have been considered their opponent: other indigenous peoples, explorers and armies from Europe, missionaries, ranchers, loggers, agricultural settlers, and the State. Some examples of those forms are: the flight into the woods, the imposition of colonial organization, the armed rebellion, peaceful marches, etc.

be the trigger that inaugurated a new stage of struggle. In 1990, an arduous, tense and even violent process for the recognition of collective rights², mainly territorial ones, had started. For indigenous peoples of the Bolivian lowlands³, the aim was to get land legal recognition in order to legitimate the occupation, control and management of those territories. It was the context where the *Indigenous Movement of Eastern Bolivia* -in which *Mojeño* people played an essential role-, rose up⁴.

In 1990, took place the *Marcha por el Territorio y la Dignidad*⁵, which was a national milestone. It was the largest political event in the contemporary history of Amazonian indigenous peoples of Bolivia. As a result, they achieved political visibility. They became new political subjects who belonged to a national indigenous movement, ready to claim to the State for legal recognition. In the early years of the struggle, the government made mild attempts to calm down the situation. In contrast to this, indigenous claims were increasing and spreading out over the country. Therefore, the only choice for the government was to transfer some powers to the indigenous movement.

Given those events, in 1996 the Law No. 1715 (*INRA Law*⁶) came into effect. This law had the difficult task of regulating claims and land grants to indigenous peoples of the entire national territory. I will often refer to it for a specific reason: the INRA Act led to the emergence of a new legal instrument called *Tierra Comunitaria de Origen* (TCO), referring to communal lands and related delimited geographical areas.

In 1999, *Mojeño-Ignaciano* people claimed the ownership of the geographical space where they inhabit which the referred as the TCO *Territorio Indígena Mojeño-Ignaciano* (TIMI): The TCO TIMI is composed of 18 communities belonging to that ethnic group. Due to the overlap of several factors: the slowness of the land demarcation process and negligent behaviors of both official members of the National Institute of Agrarian Reform and some indigenous chiefs, the land titling was not completed until 2011. The current area of the TCO TIMI is 98, 398 hectares; 49% of which are occupied by cattle ranches (**map 6. 4**). This fact, which determines the

² These rights are: self-determination; to maintain its political, cultural, economic and legal institutions; to use the indigenous languages; indigenous territorial management; the administration of justice under their own local forms; to enquire for the exploitation of natural resources of the territories they inhabit; the compensation for environmental damage in their territories; the practice of *traditional* knowledge, and so on.

³ Bolivian lowlands correspond to three biogeographic regions: Amazon, Chaco and Brazilian Paranaense (Navarro, 1997).

⁴ Besides the *mojeño* other indigenous peoples are part of this movement: guaraní, weehayek, tapieté, tacana, yuracaré, yuqui, chimán, lecos, mosetén, baure, chacobo, iténez, pacaguara, araona, cavineño, sirionó, cayubaba, itonama, chiquitano, guarayo and ayoreo.

⁵ They walked during 34 days from Trinidad, capital of Beni, to La Paz (site of the national government) as a protest campaign against the State, claiming for territorial rights.

⁶ 10 years later this law was modified by Law No. 3545.

access and use of natural resources, is the main source of conflict between indigenous peoples and various social actors, mainly ranchers.

The recent legal recognition of the TCO TIMI, has precipitated among indigenous of Mojos, a rearticulation of socioeconomic local structures as well as political reorganization, around the territorial factor.

The dispute for the recognition of land rights has led to the articulation of *Mojeños-Ignaciano* indigenous communities around a supra sociopolitical organization: the *Subcentral* which is also coordinated with higher levels of political action (regional, central and departmental). In their struggle to enforce indigenous territorial management, they have strengthened their local practices of resource management while they are participating in regional trade channels at the production level. Their relationship with the State also has been transformed, mainly after the new and last Constitution of the State, approved in 2009.

It is not possible yet to anticipate the implications that the new Constitution will have over the indigenous peoples. But it is probable that the new decentralized State model will cause deep consequences over the ethnic groups' territorial system. The reason for this is the creation by Evo Morales's Administration of a new legal status: *Indigenous Autonomy*. This process is framed within the context of indigenous rights expansion which leads to ensure Bolivian ethnic groups their self-government based on their local institutions, within a territorial entity associated with each of them.

I have oriented this work to analyze the socioterritorial reality, its peculiarities and the dynamics that revolve around it. I will formulate questions of interest for the academic communities in Spain, where there are not many works about indigenous populations of the Bolivian Amazonia, and in both Latin America and Bolivia. For the last case, the scholarly research on socioterritorial analysis in the Amazonian context has a partial approach due to the fact that many authors are involved in the indigenous rights political process.

A purpose of this work is also to give back the acquired knowledge, collected data and living experiences to those that have made it possible. It will be important for *Mojeño-Ignacianos* community members to see themselves represented, and for technicians and employees of NGOs who work daily with indigenous communities to rethink their practices and activities there.

I will comment briefly what will be developed in depth throughout the study. Firstly it should be noted that this work broadly consists of two parts. The first one

aims to put the issue to be discussed into a theoretical-methodological framework and into a geographic and historical context. Chapter 1 presents a general approach and the rationale for studying socioterritorial dynamics in the Bolivian Amazon; for focusing on two specific elements: *territory* and *ethnic identity* and for combining methodologies from both Geography and Anthropology.

The second chapter reflects in depth on analytical categories other than territory and identity: space, place, ethnicity, indigenous, etc. I will provide theoretical elements from Human and Regional Geography, from Anthropology and its studies of ethnicity, and even from Political Ecology. I was inspired by those elements for building the conceptual scheme that will guide the research and will highlight the relevance of focusing the analysis of indigenous issues on a local perspective: the territory. Therefore, this concept is conceived from a dual approach: an indigenous conception of territory defined as an integrated and multidimensional space, and a definition used by public authorities as geographical and delimited space inhabited by a specific number of people.

I show how the national and international situation has forced indigenous people to adopt external discursive tools in order to make effective their territorial claims. Discursive borrowings incorporated into the rhetoric of indigenous movements, come from both international and national legislation as well as from pro-indigenous or environmental movements.

The local approach leads to devote a specific chapter to the geographical context. In the case of Mojos, this has influenced over current regional territorial dynamics. This singular ecosystem subjected to annual flooding, has forced populations to develop a land management model able to face the biophysical characteristics of the flooded savanna of Beni, the largest in the world. I will pay special attention to it in the territory occupied by the *Mojeño-Ignacianas* communities, which corresponds to the TCO TIMI.

In order to understand how local systems of environmental management have been transferred, we should go back to pre-Columbian times to know how those cultures developed such a specific hydraulic infrastructure. Therefore I will present an ethnohistorical outline which will include socioeconomic, political and cultural transformations that have taken place in Mojos.

The aim of this first part is to present an overview previous to the analysis, from a situational perspective⁷ of the specific issues that concern *Mojeño-Ignaciano* people in

⁷ I consider both cultural and natural dimensions as variable, changing; neither static nor ahistorical entities.

their local context, and at the same time taking account of their participation in the national stage.

The second section (chapters 5 to 8) begins with a brief presentation of the issues in a diachronic perspective. The fifth chapter analyzes the problems concerning land tenure in eastern Bolivia and specifically in Mojos (land tenure in this region is linked to ethnic issues). Also I will consider the restrictions to communal land access for indigenous peoples caused by the agrarian structure which is based on a domination system that has perpetuated asymmetrical relations of power between ranchers and indigenous communities. An important part of this chapter is devoted to territorial planning which is considered by the State as an effective tool to redeem inequality in access to land in Bolivia.

The sixth chapter deals with the process of land titling in Bolivia and its socioeconomic implications for indigenous people. The indigenous movement of eastern of Bolivia mainly rose up due to massive exploitation of natural resources in the Beni forests and ethnic conflicts caused by territorial invasions of cattle ranches. In this chapter I will review the history of the indigenous movement, the reasons of its articulation, the current tendency of the movement, the collective rights that it demands, the reaction of national governments and *third parties*⁸ to it, the relationship between these groups and indigenous organizations, and the sociopolitical changes that these phenomena caused in *Mojeño-Ignaciano* communities.

Exploitation of natural resources is the main issue of the next chapter. It analyzes Bolivia's forest policy and legal framework that regulates it and the main actors in the forest and resources management strategies of community members of Mojos, which encourage indigenous territorial management in order to strengthen local practices of use of natural resources. I will demonstrate also the environmental impact impinged upon the country's forests and upon the plains of Mojos; as well as the potential of this region for forestry, which has allowed indigenous communities to develop their lifestyles based on forests resources.

These questions lead me to deal in the last chapter with the issue of *Territorial Indigenous Management* a part of *Indigenous Autonomies*. Both topics are linked by the fact that the first one eases the running of local institutions by indigenous peoples living in a communal territory, in direct relation to the management and ownership of

⁸ Term used in Bolivian legislation which refers to "*ranchers, peasants, settlers and communities that do not belong to indigenous peoples*" settled into indigenous territories (<http://www.inra.gob.bo>)

their geographical space. This approach is also interesting because it takes the concept of territory suggested in Chapter 2, as appropriated space.

As a final section I will provide some conclusions. Although they leave open the door for future research due to the state of uncertainty of the new decentralized state model, especially in *Mojeño* context and considering the scant production of scholarship on that local sociopolitical process.

There are several questions that arise in this work. It is interesting to understand the current dynamics that take place in Mojos, different from life patterns of the pre-Hispanic period, subject to the singularities of the geographical context: the plains of Beni, which has left its mark on the territorial organization of local populations. That is why *Indigenous Territorial Management* (GIT) has been considered by government agencies as a tool capable of incorporating local practices of land management, but how is the participation of local people in those recent GTI plans?. In this context, if the recently established decentralized political-administrative model that recognizes political agency to indigenous peoples at the local level extends the powers of self-government to those peoples institutionally recognized by the State, the following question arises: what changes could lead the ongoing indigenous autonomies for *Mojeño-Ignaciano* communities? However, in order to achieve the legal condition of Autonomy, *Mojeño* people must manage their ethnicity, their image as indigenous people, to show themselves to the State and to the rest of national society, within the framework of territorial claims. Although, in which way? What are the discursive strategies and the line of action that channel those demands? It is necessary to make clear that for achieving *Indigenous Autonomy* in Bolivia, it is required a ministerial certification of *ancestral* territories inhabited by the peoples who are claiming them. This explains why the ethnic identity and territorial claims are involved in the same social process. And also it explains the constraints that have pushed indigenous peoples of Bolivia to accept the conditions established by authorities in order to get legal territorial recognition. In this context, *Mojeño* identity is constantly reinvented: an example of that is the conversion of San Ignacio municipality into a *Indigenous Autonomy*. Inhabitants of this municipality choose this option because it offers a future in which local communities of Mojos could be ruled by themselves: selfgovernment will be linked to local government structures based on their own local institutions and their logics of knowledge.

To conclude this introduction I would like to add that I hope this work could provide an innovative guide for further research and social studies aimed to know in

depth the process in which *Mojeño-Ignaciano* communities of TIMI are involved- given that at the present time this works are quite scarce. Also this work will try to contribute new approaches to studies about Bolivian lowlands.

I advocate that such work can dismantle stereotypes of Amazonian indigenous peoples. The political scene, expectant of the effects resulting from the Autonomies's context, defines an uncertain future for these peoples. This work will propose some clues to think about it.

Considering the university as a place of exchange of knowledge and reflection on social processes in which human groups interact, as part of the academic agenda, I want to show the project of domination that has subordinated *Mojeño* people since the colonial period. Therefore, this research holds the purpose of joining those works oriented to social transformation. The transformation of a world in which indigenous peoples can contribute to the writing of its.

1. Marco General de la investigación.

1. 1. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA.

A la hora de elegir un caso de estudio se plantean, en base al trabajo de Hammerseley y Atkinson (1994) tres factores principales: dónde, cuándo y con quién observar, además de decidir qué tipo de información interesa para la investigación y de qué manera registrarla. De esta manera “*establecemos un primer criterio de análisis de la información y realizamos un filtro del objeto de estudio, por lo que se constituyen tres grandes dimensiones a lo largo del proceso de extracción de muestras: el tiempo, la gente y el contexto*” (ibíd., 61).

Para evitar entrar en confusiones teóricas, desde un primer momento procuré delimitar con precisión lo que pretendía ser estudiado o, dicho en otras palabras, definir el objeto de estudio. Para lo cual debía tener muy claro en qué momentos y con qué agentes pretendía analizar los fenómenos a tratar en la investigación. Estos elementos debían conjugarse de manera precisa en un mismo eje de coordenadas teóricas.

A la hora de reflexionar acerca de lo que me proponía investigar fui consciente de las discrepancias que surgen a la hora de definir desde distintas aproximaciones teóricas ciertas categorías analíticas. Mi intención es entonces aclarar porqué centré la atención en el estudio de las dinámicas socioterritoriales en Mojos. Los acontecimientos sociales que estaban acaeciendo en la región a raíz de la demanda por parte del movimiento indígena del oriente boliviano del reconocimiento de los derechos territoriales, desencadenaron toda una serie de movilizaciones pacíficas. Éstas precipitaron la inclusión en la legislación nacional de una nueva institución jurídica vinculada con la propiedad comunal de la tierra de los pueblos indígenas. El texto constitucional incorporó algunas novedades que proporcionaron mayor cobertura legal a la lucha histórica que estos grupos habían mantenido frente a los *terceros* – fundamentalmente- por la defensa de los territorios que ocupaban. Estos últimos no se resignaron a perder el control sobre la propiedad de la tierra que, desde la implantación

de la República, había sido expropiada a las comunidades indígenas. Una ola de conflictos por la apropiación territorial se sucedió en Mojos y como consecuencia, un fortalecimiento de sus formas organizativas a nivel tanto local como regional.

Estos hechos estimularon la exploración de dicha realidad, motivando la consiguiente formulación del problema. Opté por prestar mayor atención a las dinámicas territoriales sin detenerme demasiado en nociones de paisajes o ecosistemas. Tanto éstas como la noción de territorio constituyen construcciones conceptuales que derivan del corpus científico hegemónico. Si en mi trabajo me decanté por el uso de categoría de territorio, como ya me referí en la introducción, es por una razón principal y es que éste es el término que las poblaciones indígenas de Bolivia han incorporado en sus discursos a la hora de hacer efectivas sus demandas territoriales frente al Estado. El motivo de ello es claro: el tipo de lenguaje manejado desde las esferas de poder, tanto de Bolivia como de la esfera internacional, es el que marca las pautas y ofrece las directrices que los grupos étnicos deben aceptar compartir en caso de que quieran formar parte del juego de tensiones entre los agentes externos y la propia política indigenista boliviana. Ésta fue diseñada por el Estado en el marco del multiculturalismo allá por los años noventa del siglo pasado, para atender la diversidad étnica del país e incorporar en su agenda la cuestión étnica. La yuxtaposición de ambas lógicas de acción, de ambos discursos, confluye en la retórica que los mojeño-ignacianos recrean para participar en la arena política de Bolivia. De esta manera, el uso, por parte de los organismos nacionales e internacionales, del concepto de territorio -definido como el hábitat que han ocupado históricamente los pueblos indígenas, del cual se apropian y el que supone la base para alcanzar su desarrollo económico, social y cultural- confiere a tales poblaciones la legitimidad que frente a dichas instituciones es requerida al insertarse en los canales de la legalidad institucional. De ahí que este trabajo conjugue la escala local con otra que tenga en cuenta las dinámicas regionales e incluso internacionales, las cuales son innegables.

La tenencia y usos de la tierra, el manejo, la utilización, el aprovechamiento o la gestión de los recursos que se encuentran al interior de los territorios que habitan, el respeto y la conservación del medio ambiente, la propiedad intelectual de los conocimientos indígenas sobre la biodiversidad, etcétera, son reivindicaciones constantes de los pueblos indígenas. En base al territorio, a la ocupación de éste, a las reivindicaciones por su reconocimiento, uso y gestión, en base a los conflictos surgidos por su apropiación o su concepción, han tenido lugar en Mojos una serie de fenómenos de naturaleza sociopolítica, cultural y económica, que han reconfigurado el contexto local entre los comunarios mojeño-ignacianos. El factor territorial ha jugado un rol determinante -aunque no exclusivo- en los cambios acaecidos en el contexto local de

Mojos.

Evitaré, en la medida de lo posible, dejarme arrastrar por aquellas investigaciones que prefieren considerar a los grupos indígenas como entidades culturales sin ningún tipo de interrelación con los procesos globales, ajenos a la historia -como ya apuntaba desde la perspectiva del sistema-mundo Eric Wolf (1987)- viviendo en un punto que se colapsaría, debido a la inamovilidad y el estatismo, en una prehistoria que no se corresponde con el resto de la humanidad. En definitiva, entidades sin historicidad, pueblos primitivos, “gente sin historia”, sin contactos con el resto del mundo, sin conexión con la realidad. Lewellen retoma a Wolf para señalar el error que supondría ignorar el “entorno histórico y social” en el análisis etnográfico de comunidades culturales específicas en vez de adoptar como referencia un “sistema global” (2009: 283). En este caso en particular veremos hasta qué punto la llegada de los ejércitos europeos a mediados del siglo XVII a lo que hoy día se considera la región amazónica de Bolivia y el asentamiento de las misiones jesuíticas en el mismo periodo, fueron el detonante que ocasionó la eclosión de los grupos culturales que tras un proceso de etnogénesis dieron lugar a los pueblos indígenas del Mojos actual.

1. 2. LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO.

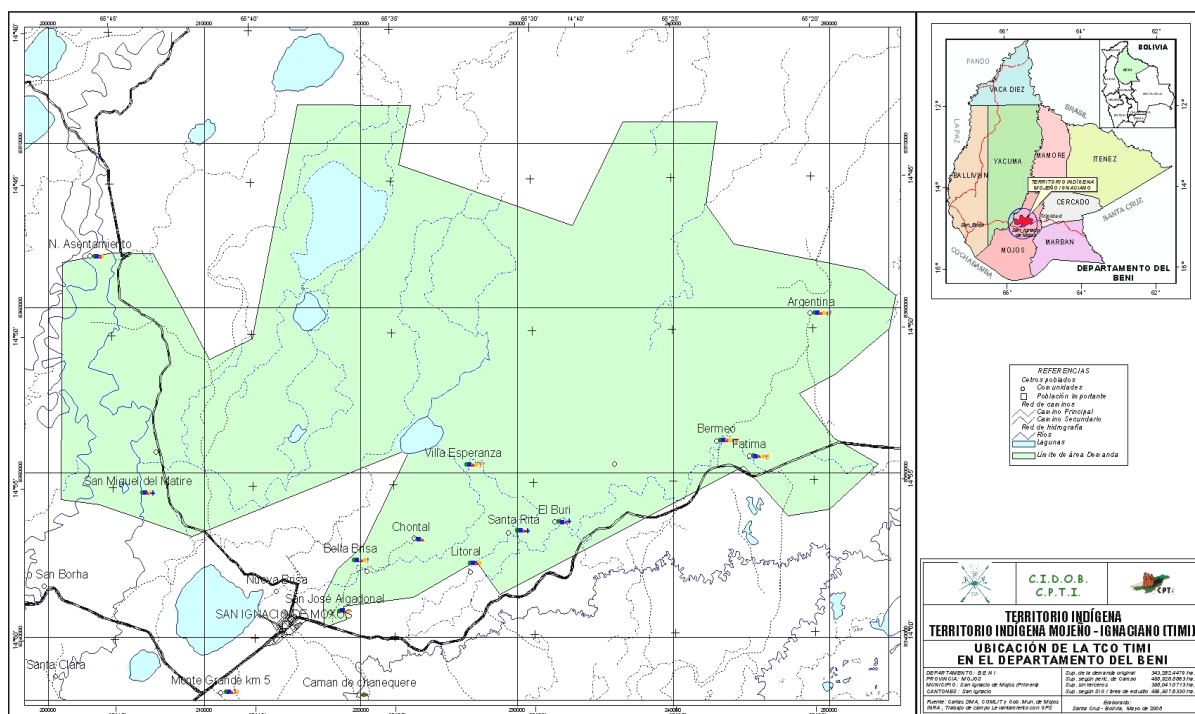
Puesto que este trabajo dedica un capítulo exclusivo al análisis del contexto geográfico (véase **capítulo 3**) en el que se enmarcará la misma, en este punto quiero introducir de manera breve algunos datos sobre el *lugar* que nos permitan a partir de este momento ubicar el área de estudio a la que se ceñirá el presente trabajo. Las unidades analíticas interaccionan en el escenario de la investigación. El hecho de fijar el *lugar* contribuye a delimitar las cuestiones a tratar en un área concreta y en base a las variables de tiempo y espacio, lo cual me permite a su vez definir el análisis posterior. En él se genera una relación dialógica entre los sujetos sociales –pueblos indígenas, *terceros* y frente a las esferas del poder- imbricados en ella. Relaciones históricamente asimétricas que tras la visibilización política de las poblaciones indígenas en la década de los 90 del pasado siglo, buscan ser revertidas por estos.

Algunas disciplinas como la Antropología, la cual ha sido la más representativa en cuanto a trabajos etnográficos se refiere, han puesto tradicionalmente el énfasis en el estudio de “*sociedades de pequeño tamaño donde predominan las relaciones cara a cara y colectivos locales (como el pueblo)*” (Hammerseley y Atkinson, 1994: 57). Éste es un aspecto a tener en cuenta a la hora de elegir el área de estudio o el *lugar*, entendido éste como “*contexto determinado en el cual ocurren los fenómenos*” (*ibíd.*). Una aclaración primordial que nos llega de manos de los mismos autores es que en ocasiones

el objeto de estudio no se circunscribe en exclusividad al área de estudio en cuestión. En estos casos puede “*ser necesario salir fuera del lugar para encontrar información sobre aspectos relevantes del estudio*” (ibíd.).

En este caso he definido el área de estudio como la TCO TIMI (véase **figura 1. 1**), espacio delimitado geográficamente. Sin embargo, y en base a la aclaración de Hammerseley y Atkinson, no podemos reducir a este espacio físico la investigación en sí, puesto que se dan otra serie de procesos externos que influyen en las dinámicas internas de dicho territorio y que no pueden dejar de tenerse presente. Una vez más me remito a Wolf para apoyar esta idea (1987).

Figura 1. 1. Localización del área de estudio.



Fuente: CPTI-CIDOB.

La figura superior corresponde a la TCO TIMI -con una extensión de 98.398 hectáreas- inserta en la provincia de Mojos del departamento del Beni, región que forma parte de la Amazonía boliviana. Al interior de la TCO se localizan 12 comunidades ignacianas: Santa Anita del Mátire, San Miguel del Mátire, San José Algodonal, Bella Brisa, Chontal, Litoral, Santa Rita, El Buri, Villa Esperanza, Bermeo, Fátima y Argentina. Otras 6, también ignacianas, se localizan al exterior de los límites geográficos de la propia TCO y sin embargo pertenecen institucionalmente a ella. Es decir, están adscritas a dicha TCO a pesar de no formar parte de su extensión territorial. Explicaré a qué se debe este fenómeno y las implicaciones identitarias y de lucha por la autonomía que

ello conlleva. Este segundo grupo viene conformado por Santa Clara, Nueva Brisa, Chanekere, Ichasi Awásare, Florida y Monte Grande Km 5.

Un dato importante a señalar es que las características geográficas y la ubicación de este área en relación al resto del territorio nacional han influido en su devenir histórico, económico y político y ha generado una serie de particularidades que en otras regiones, como es el caso de la andina o los valles, no se encuentran. La gran responsable de ello es la sabana inundable de Mojos (véase **fotografía 1. 1**), la cual condiciona, en buena medida, el desarrollo de las comunidades locales mojeñas que en ella habitan.

Fotografía 1. 1. Llanura de Mojos.



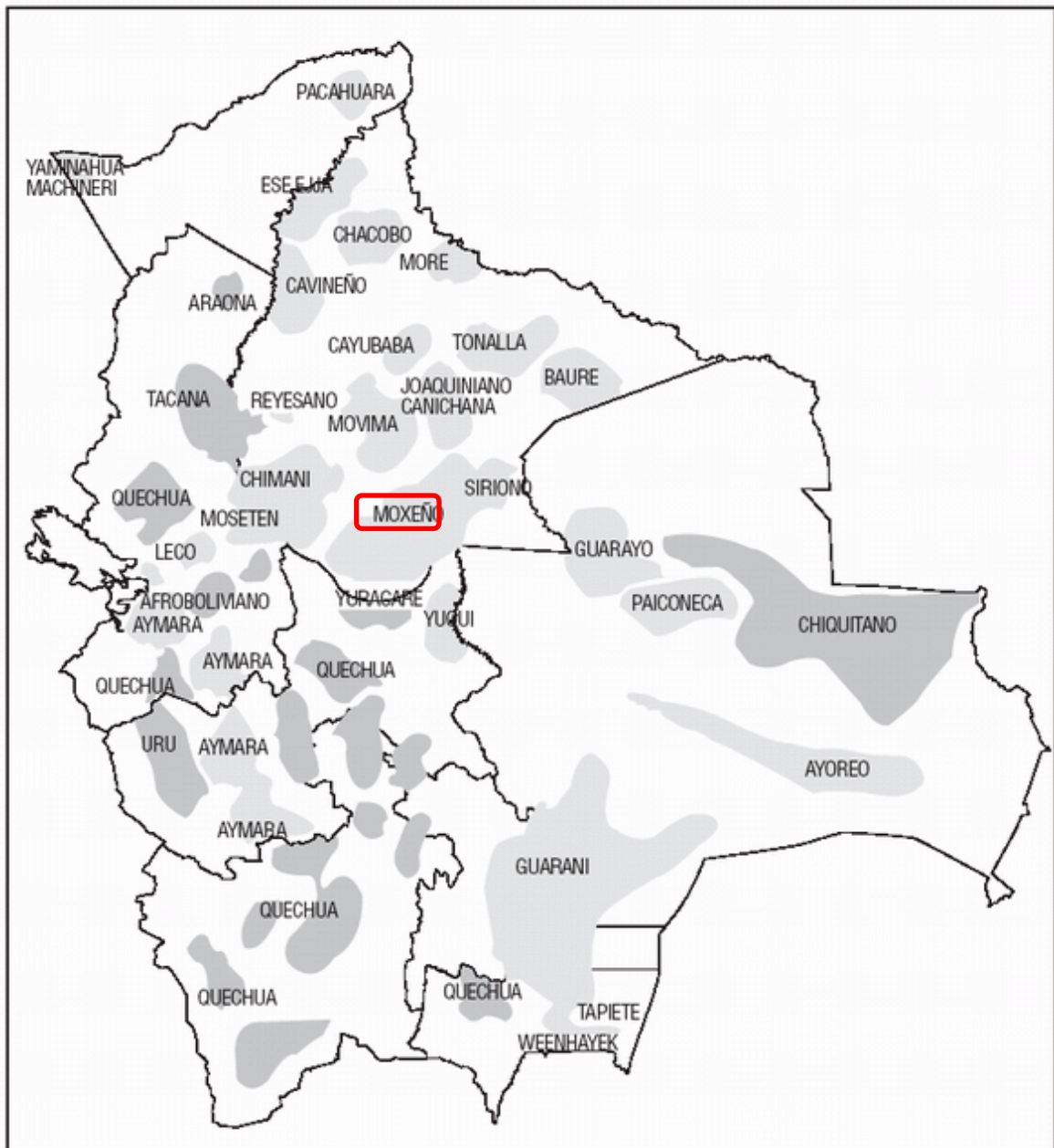
Fuente: Virginia Jabardo Pereda

1. 3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

“Si tuviéramos que seleccionar el país con más posibilidades del mundo de resistirse a la globalización de la cultura y de afirmar la política populista, Bolivia sería un candidato obvio”
MANUEL CASTELLS. *La era de la información. Economía, sociedad y cultura: El poder de la identidad.*

“De Montevideo o Buenos Aires no más a Bolivia se la ve transparente y lúcidamente india. India desde su más profunda raíz étnica, su proceso histórico y su presente trágico”
FAUSTO REINAGA. *Tierra y libertad. La revolución nacional y el indio.*

Bolivia, país multicultural, es uno de los países de América Latina que alberga mayor población indígena (véase **figura 1. 2**). El porcentaje demográfico relativo a la etnicidad reconocida se sitúa en altos índices, con cifras que rozan el 66% de la población del país según fuentes oficiales del *Instituto Nacional de Estadística* (INE, 2001), convirtiéndose en el país latinoamericano con el porcentaje étnico más elevado. Su diversidad étnico-cultural está presente en todo el territorio. Cualquier trabajo sobre la realidad plurinacional boliviana notará la presencia de dicha diversidad étnica. Bolivia se ha visto además inmersa en un convulso recorrido histórico hasta llegar a convertirse Evo Morales, en el primer presidente indígena (*aymara*) de la historia del país.

Figura 1. 2. Distribución de los pueblos indígenas de Bolivia.

Fuente: Ministerio de Asuntos Campesinos y Pueblos Indígenas Originarios (MACPIO), 2002.

El rol adquirido en relación a la participación ciudadana por parte de la población *originaria* –como se denomina a los pueblos indígenas en el texto constitucional- se ha visto reactivado desde el reconocimiento del Estado plurinacional y multiétnico. Bolivia está viviendo en el momento actual un proceso de reconfiguración político-administrativa a la vez que se reconoce como Estado plurinacional. En el presente vive inmersa en el proceso autonómico del que no es posible aventurar mucha información por encontrarse aún en ciernes (véase **capítulo 8**). No erraríamos al afirmar que Bolivia es además uno de los países latinoamericanos con mayor activismo en cuanto a movimientos sociales se refiere. A parte de los movimientos campesinos, sindicales,

destacan los movimientos indígenas. Este trabajo optó por ser uno más de aquellos enfocados al estudio de la cuestión indígena. Y en virtud de los motivos expresados, opté por Bolivia para llevar a cabo un análisis sobre el indigenismo.

Tras esta breve contextualización cabría reconocer el motivo personal principal que ha propiciado la presente investigación, que evidentemente es la inquietud inicial por las cuestiones que dan cuerpo a la misma: por la visibilización adquirida por parte de las “nuevas” identidades culturales amazónicas en la esfera política y a nivel público entre la comunidad internacional; por el significado y la relación de éstas con los espacios en los que radican sus estructuras socioeconómicas, materiales y simbólicas; la reapropiación y la gestión territorial, la historicidad de dichos territorios así como la reconceptualización de los mismos y de los procesos identitarios surgidos en torno a las reivindicaciones territoriales.

Sin embargo, a medida que me fui adentrando en el proceso de investigación, la significación social del objeto de estudio fue ocupando una cuestión de interés prioritario en el conjunto de la misma. El cuestionamiento del modelo estatal en Bolivia por parte de las poblaciones indígenas me condujo a cuestionar el proyecto colonial que había mantenido subordinado históricamente a los grupos étnicos en el contexto latinoamericano. Al entrar en contacto con la realidad de Mojos, fui progresivamente asumiendo un papel de interlocutora social para dar cuenta desde la universidad, del proceso sociopolítico en el que los pueblos indígenas de la Amazonía boliviana se ven inmersos. Proceso que a su vez forma parte del contexto glocal en donde el comportamiento social de estas poblaciones tiene mucho que ver con la búsqueda del fortalecimiento de las prácticas culturales locales para frenar el impacto del sistema neocapitalista del ámbito euro-americano. Mi interés mudó entonces, para dar a conocer de qué manera ocurren estos fenómenos en mi propia área de estudio y el alcance de los mismos. Así es como confluyeron los intereses académicos y los personales, dando origen al presente trabajo que no deja de ser un proceso aún en construcción y abierto a nuevas preguntas las cuales suponen un desafío añadido a plantear en futuras investigaciones.

Por otro lado, en el marco de los estudios sobre la etnicidad y tras haber optado por la elección del pueblo indígena mojeño-ignaciano debo aclarar que uno de los factores que impulsó al presente trabajo a prestar especial atención al análisis de la cuestión territorial en el ámbito de los movimientos indígenas, fue el hecho de asumir tal cuestión como eje de las reivindicaciones de dicho movimiento, al ser la demanda legal de la tierra el elemento que concentra el resto de asuntos vinculados a los pueblos *originarios* de Bolivia. Miguel Urioste hace hincapié en el vínculo que existe entre tierra y territorio en el caso de Bolivia (2003) debido, en su mayor parte, a que da forma al conjunto de

demandas sobre acceso a los recursos naturales, autonomía, reconocimiento de formas de vida *tradicionales*, mantenimiento de sistemas productivos, instituciones indígenas, etcétera. Estas ideas le sirven a Urioste para anunciar que “*dada la particularidad de Bolivia, el tema indígena no es accesorio ni marginal, es más bien un tema determinante y central*” (ibíd., 41). Vargas Vega nos ayuda a entender este estrecho vínculo que se produce en Bolivia entre la noción de tierra y de territorio y que parte de las demandas indígenas dado que:

“la lectura cultural y política de la tierra como espacio geográfico da lugar al nacimiento del concepto de territorio, que ya no es una disputa simplemente por el suelo, sino que abarca la gestión de todos los recursos del subsuelo y la gestión política del territorio con las personas que viven en ese territorio” (2003b: 442).

Otras justificaciones que explican el porqué de la elección de Bolivia y de la región amazónica en particular, es que transcribiendo las palabras de Chirif y García Hierro, “*es Bolivia el país en el cual se ha llevado a cabo el más actualizado y candente proceso de legalización de tierras indígenas amazónicas*” (2007: 43). Es en este país en donde, como señalan estos autores, han sido elaboradas algunas de las más destacadas normativas legales referidas a la “*legalización de tierras indígenas*”, al mismo tiempo de ser el lugar en donde mayores conflictos agrarios se han dado (ibíd.). Todo esto hace que analizar los conflictos territoriales en la región amazónica de Bolivia entrañe gran interés y suponga un reto para la investigación social.

Hablar actualmente de territorio en Bolivia equivale a hablar de conflictos. El presente trabajo tendrá la tarea de analizar en qué medida la tenencia de la tierra en el país ha articulado las relaciones sociales entre las comunidades indígenas y los *terceros*. Pero eso vendrá más adelante. En estos momentos me interesa incidir en que la cuestión territorial ha constituido y constituye aún a día de hoy, el vértice tras el que han eclosionado el resto de reivindicaciones por parte de los grupos étnicos de Bolivia.

Uno de los elementos que aparece ligado más estrechamente frente a la temática del territorio es la identidad. Y es que los pueblos indígenas de Bolivia, al igual que muchos otros en América Latina, han reconfigurado su propia identidad en aras de lograr el reconocimiento territorial, procurándose para ello de elementos provenientes de discursos externos (legislaciones internacionales, ONGs o investigadores sociales). En el caso que nos ocupa se puede afirmar con rotundidad que la autoidentificación como indígenas de los grupos étnicos de Mojos ha permitido hacer efectiva la demanda de territorio. En este sentido, investigaciones recientes apuntan a la compleja red que entraña el tema del territorio en Mojos, en torno al cual surgen la mayor parte de conflictos y se ven redefinidas “*las identidades étnicas y la transformación del papel de*

las organizaciones indígenas, su construcción, su praxis, su discurso político y su acción colectiva” por lo que la demanda territorial en esta región “*refuerza y define la Identidad Étnica Mojeña, definiendo luego la Identidad Colectiva Política*” (Lazo, 2007: 4-5).

Y es que cualquier estudio que trate la cuestión indígena no debe pasar por alto la cuestión territorial puesto que el territorio supone la base sobre la cual las poblaciones *originarias* bolivianas recrean su identidad, haciendo que ambas variables aparezcan intrincadas y actúen, consecuentemente, de manera conjunta, hasta el punto de que la una no puede desvincularse de la otra y viceversa. El territorio adopta por lo tanto, un significado propio para aquellas poblaciones étnicas que lo habitan. Un análisis sobre cuestiones étnicas implica, en la Amazonía boliviana, el análisis de las dinámicas socioterritoriales que orbitan en torno a aquellas, motivo por el cual están ambas presentes en esta investigación.

Los estudios amazónicos vivieron su gran esplendor a partir de la década de los 70 del siglo pasado, momento en el que desde la disciplina antropológica y de manera particular desde el campo de la Ecología Cultural, se concedió prioridad al estudio de las poblaciones indígenas del espacio amazónico (Surrallés, 2004: 139). La atención se fijó fundamentalmente en el estudio de las adaptaciones de dichas poblaciones -vistas éstas como entidades fijas e inmóviles- al medio ambiente en el que habitaban. En realidad, las etnografías dedicadas al análisis de sociedades amazónicas, se caracterizaron en dicho periodo por consistir en trabajos descontextualizados y por presentar a los grupos indígenas como radicalmente opuestos a la sociedad nacional y en lucha constante por resistir frente a las imposiciones de ésta. En los estudios sobre cuestiones indígenas de las tierras bajas de Bolivia predominó un enfoque histórico-antropológico que prestó especial atención a temáticas vinculadas al manejo de recursos, tenencia de la tierra, ocupación de espacios, etcétera. Pero a partir del último cuarto del siglo XX emergió una temática que ha acaparado un especial interés: la emergencia del movimiento indígena, la capacitación de sus líderes, la formación o reformulación de las identidades étnicas, el reconocimiento de derechos territoriales y el nuevo rol que como sujetos políticos han adquirido las poblaciones indígenas. Sin embargo, no se puede decir que existan estudios caracterizados por un enfoque integral.

Es merecido por tanto, destacar la abundancia de la literatura producida sobre el estudio de los movimientos indígenas a partir, principalmente, de la década de los noventa del siglo pasado. La entrada en escena de los indígenas con un nuevo estatus jurídico reconocido institucionalmente, tanto en Bolivia como en la esfera internacional, marcó una ruptura con los anteriores trabajos que asumían a estas poblaciones como objetos -marginales- de estudio. Las nuevas investigaciones cedían la voz a aquellos a

quienes se les había negado la participación en la esfera política, logrando, los pueblos indígenas, hacerse hueco desde ese momento en la agenda política nacional. Habían permanecido durante décadas etiquetados en categorías impuestas que les negaban su propia identidad. Pero ahora eclosionan en la arena política como entidades culturales reconfiguradas. En el caso boliviano los trabajos se han centrado en su gran mayoría en la zona andina, existiendo como consecuencia una carencia de estos en cuanto a la región amazónica. Diversos motivos dan razón de ello: en el Altiplano boliviano se localiza el grupo étnico aymara (véase **fotografía 1. 2**), el cual constituye la población *originaria* más numerosa del conjunto del país la cual ha acaparado, por tal razón, la atención de las investigaciones sociológicas.

Fotografía 1. 2. Indígenas aymaras en Bolivia.



Fuente: Virginia Jabardo Pereda

Asimismo, el grupo aymara, presenta el índice más elevado en tanto en cuanto a etnicidad en Bolivia se refiere, en base al censo del INE elaborado en Bolivia para conocer cuántas personas se autoidentifican como pertenecientes a un pueblo indígena (véase **cuadro 2. 1**). Y comparte otros escenarios geográficos como es el caso de los aymaras de Perú lo cual propicia los estudios *cross-culturales*. El hecho de que el actual presidente de Bolivia haya declarado su pertenencia al pueblo aymara -a pesar de que desde muchos frentes esta información haya sido puesta en tela de juicio- ha incrementado la aparición de estudios que tienen a las poblaciones andinas como protagonistas.

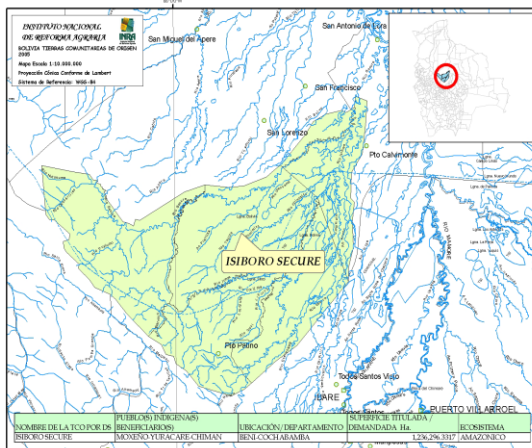
Otro motivo que ha desviado la atención de los pueblos *originarios* de la Amazonía boliviana, lo ha constituido la relevancia del movimiento indígena en otros países amazónicos, entre los que destaca Brasil. La magnitud en este país alcanzada por éste, incluso por el *Movimiento sin Tierra* (MST), ha relegado a un segundo plano el análisis del movimiento indígena de las poblaciones amazónicas de Bolivia. Es por ello que una de las principales motivaciones del presente trabajo supone llenar parte de ese vacío

existente, centrando la atención en un grupo étnico en particular, de entre los 34 que pueblan la región amazónica de Bolivia: el pueblo mojeño-ignaciano.

Por otro lado, con respecto a la definición de un área de estudio busqué aquella que respondiese primordialmente a factores de accesibilidad. La razón de peso que me llevó a decantarme por las comunidades indígenas ignacianas fue de carácter eminentemente práctico: el hecho de contactar y colaborar durante algunos años con el *Centro Estudios Amazónicos*, CEAM -con sede en Barcelona- facilitó tal elección. Dicha organización viene realizando desde hace casi dos décadas proyectos inscritos en el marco de la cooperación y el desarrollo en la región de Mojos, junto con la ONG HOYAM (Hoya Amazónica), como contraparte. El contacto con esta organización me ayudó a empezar a tejer una red de contactos en Mojos que irían definiendo las pautas de trabajo posteriores.

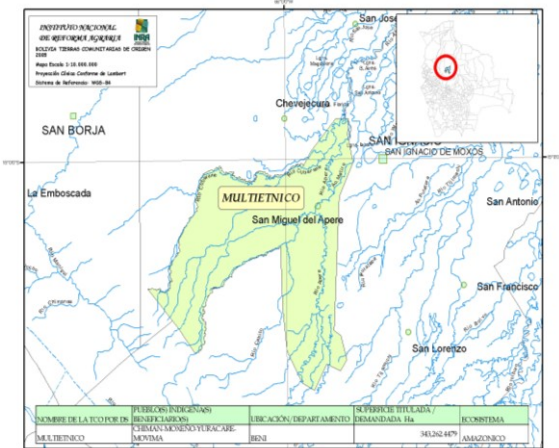
Puesto que en Mojos se localizan varias poblaciones *originarias*, las dimensiones de la presente investigación me obligaron a decantarme por un grupo en particular que permitiese la viabilidad del trabajo de campo. Dicho esto cabría añadir que uno de los motivos primordiales me llevaron a delimitar el marco territorial y poblacional en la TCO TIMI fue el factor geográfico y es que la región de Mojos se ve condicionada por las inundaciones anuales de la pampa. La inexistencia de carreteras pavimentadas dificulta enormemente el transporte entre las comunidades al quedar los caminos anegados durante el periodo de lluvias. Esto convierte al periodo seco, que va de abril a octubre, en el mejor (y podría decir único) momento para poder moverse por la región y poder acceder con mayor facilidad a las comunidades indígenas, las cuales se ubican en las áreas forestales de la sabana. Las comunidades mojeño ignacianas son aquellas pertenecientes al grupo étnico mojeño que más cercanas se encuentran al municipio de San Ignacio de Mojos (entre 5 y 40 kilómetros de distancia separan San Ignacio de las comunidades), el cual se convirtió en mi punto de partida hacia las comunidades en las que realicé el trabajo de campo. El pueblo mojeño está representado además en otras dos *Tierras Comunitarias de Origen*: el *Territorio Indígena Multiétnico*, TIM y el *Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécore*, TIPNIS (véase **mapa 1. 1** y **1. 2**). Teniendo en cuenta las dificultades de accesibilidad al terreno y la duración del trabajo de campo, preferí optar por aquella población más próxima a San Ignacio, ésta es la que habita en la TCO del TIMI.

Mapa 1. 1. TCO TIPNIS.



Fuente: www.amazonia.bo

Mapa 1. 2. TCO TIM.



No sería sin embargo el único motivo que determinó la elección. Más importante todavía es que el pueblo mojeño constituya el pueblo indígena de la región amazónica de Bolivia con mayor población (más de 75.000 personas). De entre la multiplicidad de poblaciones *originarias* del oriente boliviano, el pueblo mojeño ha destacado además por su elevada participación en el seno del movimiento indígena de las tierras bajas de Bolivia. La acción colectiva que ha desarrollado con vistas a alcanzar toda una serie de derechos, entre los que sobresalen los territoriales, es digna de reconocimiento. Este trabajo por tanto, considera justo otorgar el lugar que se merece a quienes lograron por méritos propios cambiar la historia de invisibilización que un tupido velo -alimentado por cientos de años de colonización y exclusión- se cernió sobre los pueblos indígenas amazónicos en este país del continente sudamericano. Entre estos destaca de forma particular el pueblo mojeño quien “*en su corto tiempo de lucha organizada ha logrado colocar problemáticas en relevancia mayor no sólo para su sector sino para el país en su conjunto*” (Lazo, 2007: 4).

Parte del capítulo 4 se dedicará a explicar los motivos que desencadenaron la entrada en escena de estos nuevos actores sociales en el panorama político nacional y veremos de qué manera los cambios producidos como consecuencia, han derivado en una nueva relación para con el Estado. Pero esto será más adelante. Por el momento lo que me interesa exponer es el nuevo rol adquirido como sujeto políticos por las poblaciones indígenas de la Amazonía boliviana, el cual ha logrado llamar la atención a estudios como el presente.

Otra de las razones que me condujo a centrar esta investigación en las comunidades ignacianas lo conforma el para entonces –durante mi trabajo de campo– aún abierto proceso de saneamiento de la tierra. No sería hasta el año 2011, en el mes de marzo concretamente, cuando el TIMI lograra definitivamente concluir su proceso de

titulación como TCO. Todo ello confería un interés especial para este trabajo dado que los estudios existentes hasta el momento habían preferido centra su atención en aquellas TCOs ya tituladas. Debo admitir no obstante, que la atracción que suponía el análisis de un proceso aún inconcluso no estuvo exenta de dificultades que oscilaron entre variaciones constantes, conflictos sociales a tenor de la tenencia de la tierra, cambios legislativos, disputas en la arena política, vaivenes en las relaciones sociales entre los actores implicados, falta u omisión de información, precaución y temor de algunos informantes al narrar su versión de los hechos y un largo etcétera que obligaban a prestar máxima atención a cada una de las nuevas piezas que iban conformando el puzzle de las dinámicas socioterritoriales en Mojos y en particular en las comunidades mojeño-ignacianas.

Pero no sólo el dinamismo social y político fue motivo para despertar el interés de este trabajo sino que el contexto geográfico supuso un aliciente más. Y es que pese a que los llanos de Mojos forman parte de la región amazónica (cuestiones éstas que serán discutidas ampliamente en el tercer capítulo), las particularidades medioambientales le confieren a este espacio un interés especial por su excepcional localización. El hecho de estar las comunidades ignacianas ubicadas en la llanura mojeña ha condicionado históricamente, como veremos, las dinámicas socioproductivas de los grupos humanos que en ella habitan. Determina, del mismo modo, la percepción del entorno natural al ser consideradas las unidades paisajísticas en función de la fisiografía de la planicie aluvial de inundación. Esta razón conduce a desdibujar los estereotipos que suelen representar la Amazonía como foresta exuberante, recreando una imagen de esta región como masa forestal densa, la cual choca con lo que en realidad constituye el espacio geográfico de la llanura del Beni.

Habría que subrayar para finalizar este apartado que el presente texto aspira también a convertirse en una contribución teórica a los trabajos dedicados a repensar las pugnas por el territorio y las reformulaciones identitarias que en base a ellas tienen lugar en Bolivia. También a reparar la deuda académica que existe frente a los pueblos indígenas de la Amazonía boliviana y de manera particular frente al pueblo mojeño-ignaciano. Una de las intenciones es que se enmarque en los debates actuales de la geografía humana española en diálogo con la anglosajona, las geografías de la resistencia, las geografías de la identidad así como en los estudios sobre la etnicidad.

1. 4. HIPÓTESIS.

La hipótesis o conjetura se plantea en términos de teoría, la cual procuraré confirmar al término de la investigación. Consiste por tanto, en un enunciado provisional sobre un proceso excepcional que está teniendo lugar en Mojos. Quedaría abierta la posibilidad de que dicha asunción previa no sea definitivamente revalidada. Por tal motivo no viene formulada como proposición definitiva. La hipótesis de partida servirá para orientar la investigación. Esta se convertirá en el hilo conductor de la misma. La hipótesis principal se enuncia de la siguiente manera:

Debido a las dinámicas socioterritoriales que en la región amazónica boliviana se definen por la reducción, expropiación y reapropiación de territorio por parte de los *terceros* desde el periodo colonial, el pueblo indígena mojeño-ignaciano se está viendo inmerso en una serie de transformaciones a nivel sociocultural, político y económico y de construcción de la etnicidad, marcadas por la actualidad política, lo cual les ha sumergido en un proceso de reconstrucción identitaria con el fin de consolidar los territorios que legítimamente consideran propiedad comunal. La institucionalización de las *Tierras Comunitarias de Origen* no ha resuelto los problemas de fondo referentes al agro boliviano, los cuales requieren de nuevas acciones y renovadas políticas conducentes a redefinir, junto con la participación de las poblaciones locales, en un plano de justicia social, las relaciones de desigualdad que tradicionalmente han desplegado los gobiernos de turno frente a las poblaciones indígenas de Bolivia.

Una vez planteada la hipótesis de partida es necesario llevar a cabo la “operacionalización de conceptos teóricos”, proceso que consiste en traducir dichas hipótesis en “variables empíricas o indicadores” (Cea D’Ancona, 1996: 87). Se requerirán *indicadores* que faciliten la validación de lo planteado en dicha hipótesis. El próximo capítulo se dedicará a encontrar las *variables* precisas referentes a los conceptos teóricos como *territorio, espacio o identidad*.

Para que se entienda de manera simplificada, aunque en su debido momento analizaré en profundidad, anticipo unas breves notas. En las últimas décadas del pasado siglo XX la deforestación de los bosques del departamento del Beni -insertos estos en la cuenca amazónica boliviana- se vio incrementada por la acción de los *terceros*. A tenor de este proceso de ocupación y de explotación de los recursos naturales de Mojos, se produjo una eclosión del movimiento indígena del oriente. Los graves impactos ambientales -consecuentemente, sociales y económicos- que cada vez eran más

evidentes, desencadenaron entre los pueblos indígenas de esta región la toma de conciencia desde el punto de vista político acerca de los procesos sociales en los que se veían involucrados. Fue de esta manera como se originó la incipiente organización del movimiento indígena del oriente boliviano, marcando una etapa de cambio sociopolítico dentro del movimiento de resistencia indígena, en donde la reivindicación territorial constituyó la principal demanda. Aprovechando la coyuntura política, los grupos étnicos desplegaron todo un programa de reivindicaciones relativas al reconocimiento de derechos colectivos, todas ellas avaladas por el factor étnico, el cual parecía justificar cualquier acción colectiva en la esfera pública. El elemento identitario fue entonces reformulado con el fin de convertirse desde entonces en el patrocinador de las estrategias de los grupos indígenas. El pueblo mojeño no se mantuvo al margen de los acontecimientos, sino que por el contrario formó parte activa del movimiento indígena del oriente.

Las dinámicas de conflicto que irrumpieron en el escenario local de las comunidades ignacianas, en base al factor territorio, provocaron alteraciones en los sistemas indígenas locales y en sus formas de vida y de percibir la realidad que les rodea. Con todo se mostraron dispuestos a demandar no solo el reconocimiento de la ocupación física de un espacio geográfico sino también la gestión de los recursos naturales existentes en el mismo.

El grupo étnico mojeño-ignaciano está experimentando ciertos cambios a raíz de la participación en la agenda política regional y nacional y de la adopción de un nuevo estatus jurídico en el recién inaugurado modelo estatal autonómico. Cambios en la manera de relacionarse frente al Estado, frente al resto de actores sociales de Mojos y frente a otros pueblos indígenas de la región y del país.

Conviene explicar de manera breve que, inicialmente, previo al trabajo de campo, la conjetura fue enunciada en términos diferentes. En un principio asumí que la población mojeño-ignaciana se había visto sometida a un proceso de pérdida del territorio al estar la TCO, en la que se insertan, ocupada casi en la mitad de su extensión por estancias ganaderas. Más tarde y una vez que tuve la posibilidad de acceder al terreno y de conocer de primera mano lo que estaba ocurriendo, la hipótesis inicial fue reformulada para plantearse en el modo que enuncié algunas líneas más arriba. Esto no significó, no obstante, la negación de la realidad que acontece, dado que acepto los postulados que reconocen el despojamiento territorial que han sufrido las sociedades indígenas de la Amazonía boliviana desde la llegada de los conquistadores europeos, lo cual precipitó una eminente reformulación de sus patrones socioculturales. Sin embargo, el hecho de formular las dinámicas socioterritoriales en términos de pérdida del territorio, me conducía a asumir indirectamente a la cultura mojeño ignaciana como una

sociedad *originaria* anclada en un pasado lejano. Por eso, tras replantear la asunción de partida, opté por reorientar el enfoque considerando la reapropiación territorial, los viajes de ida y vuelta, que han definido las dinámicas socioterritoriales en la Amazonía boliviana. Esto permitió enriquecer el trabajo al vincular el contexto local de Mojos con los procesos sociopolíticos y territoriales propios del país. Evité así ceñir mi investigación al estudio de una realidad ajena a un escenario externo más amplio en el que estaba intrincada. De otra manera no habría sido posible volver la mirada al estudio de las estrategias de lucha, de la formación de subjetividades, de los mecanismos de apropiación local de proyectos, discursos, ideas, recursos, provenientes de otro contexto cultural y desplegados por las comunidades indígenas.

Basta reconocer por tanto, que el trabajo empírico modificó el punto de partida inicial influyendo en la reformulación teórica del objeto de estudio. Lo teórico y lo empírico se posicionaron en un mismo eje de coordenadas para apoyarse el uno sobre el otro y viceversa. Si, en principio, la hipótesis fue formulada desde un marco teórico específico pero de tal manera que requería el trabajo etnográfico, éste sirvió para ajustar los postulados desde donde se partía.

1. 5. OBJETIVOS.

Uno de los primeros pasos del trabajo consistió en establecer unos objetivos definidos los cuales pretenden ser respondidos a medida que la investigación se desarrolle. Estos me servirán para formular a lo largo del estudio una serie de preguntas a las que buscaré responder. Por ello deberán responder tanto a la viabilidad como a la coherencia frente al marco metodológico y las herramientas utilizadas. La finalidad de ello será lograr dar respuesta a los planteamientos teóricos. Los objetivos se plantearán de tal manera que dos variables se proyecten en una misma relación. Para ello las categorías analíticas serán traducidas en determinadas variables (en el caso que nos ocupa cualitativas) (Cea D'Ancona, 1996) que nos permitan obtener evidencias empíricas.

Teniendo presente lo anterior puedo finalmente anunciar que el objetivo general de la presente investigación constituye **en diagnosticar e identificar las transformaciones producidas en el seno de las estructuras locales socioeconómicas, políticas y económicas del grupo étnico mojeño-ignaciano, en base a las dinámicas socioterritoriales, dando a conocer la situación por la que está atravesando dicho grupo social, de la mano del saneamiento de tierras y titulación de territorios, con las consecuentes mutaciones que operan al interior de su organización.** Es decir, pretendo

analizar de qué manera en base a la apropiación territorial dichas estructuras se han visto modificadas puesto que la consecución de un espacio territorial propio ha sacudido los cimientos sobre los que se asentaban las instituciones locales ignacianas. La presente investigación constituye una aproximación teórica encaminada a revelar aquellos elementos propios del universo mojeño que han sido sometidos a una readaptación a la nueva realidad. Y es que -como apuntaba en la hipótesis de este trabajo- la década de los años 90 marcó un punto de inflexión en el devenir de los pueblos indígenas de la Amazonía boliviana, cuando favorecidos por la coyuntura internacional y arropados por un sinfín de asociaciones y organizaciones no gubernamentales, se vieron inmersos en una espiral de cambio en la que las demandas territoriales se convirtió en el principal instrumento de la lucha por el reconocimiento de derechos colectivos. Ante esta serie de cambios a nivel internacional y nacional, la población mojeña, junto con otros grupos étnicos ya mencionados, se movilizó dando como resultado la emergencia del movimiento indígena del oriente boliviano. Aprovechando la oportunidad única que les era brindada en el nuevo contexto de lucha política, se dispusieron a reclamar ciertos espacios geográficos (denominados institucionalmente como *Tierras Comunitarias de Origen*) como propiedad comunal en los que poder *continuar* su desarrollo local. Veremos que si bien el reconocimiento de los derechos territoriales se convirtió en el motivo principal que justificaba las demandas indígenas, otros intereses velados se encontraban presentes aunque no de manera explícita. Muy ilustrativamente lo expresa Terence Turner al mencionar que “*son conscientes (los pueblos indígenas) de que el mantenimiento de la integridad física de su base de subsistencia territorial resulta el mejor medio de retener el control de sus comunidades, y de continuar viviendo de acuerdo con sus propios valores y sistemas sociales*” (2004: 433).

1. 5. 1. Objetivos específicos

Las particularidades propias de la población mojeño ignaciana y del contexto geográfico en el que se asientan, obligan a atender otra serie de cuestiones que no pueden dejar de tenerse en cuenta. Y es que el objetivo general de la investigación integra a toda una serie de planteamientos secundarios pero no por ello menos importantes. Se enumeran a continuación los objetivos específicos que pretende alcanzar este trabajo:

- Identificar los problemas estructurales referentes al agro boliviano, dado que es en este contexto que se enmarcan las demandas territoriales en Mojos y de manera específica en la TCO TIMI. Para ello se busca analizar los elementos específicos del proceso agrario como lo son el saneamiento de tierras y la consecuente titulación de

dicha *tierra comunitaria*.

- Pensar acerca del vínculo que articula las relaciones entre el pueblo mojeño-ignaciano y el espacio geográfico demandado. Veremos además en qué medida las comunidades ignacianas mantienen una peculiar relación, que algunos incluso califican como interesada, frente a la TCO.

- Demostrar hasta qué punto las dinámicas socioambientales han determinado las respuestas del pueblo mojeño-ignaciano frente a los procesos territoriales. Tras la exposición de una revisión etnohistórica sobre sociedades *tradicionales* que habitaban los llanos de Mojos, podremos comprobar de qué manera estas poblaciones, ya desde el periodo prehispánico, desarrollaron ciertos sistemas de manejo del territorio que les permitieron desplegar un amplio elenco de respuestas adaptativas.

- Reflexionar acerca de la reconceptualización territorial que ha tenido lugar como consecuencia de los cambios producidos en las lógicas comunales del grupo étnico ignaciano como por parte de la práctica reivindicativa desplegada frente al Estado nacional y Plurinacional actual. Una de las principales estrategias que ha focalizado la lucha por el reconocimiento de los derechos territoriales en Mojos ha requerido de una nueva noción de territorio que se adapte a lo estipulado por las esferas gubernamentales.

- Analizar, del mismo modo, la reconceptualización de la identidad étnica en base a la apropiación del territorio. Se pretende entender hasta qué punto la dimensión identitaria mojeña va ligada al proceso de reivindicación territorial y es que volviendo a la idea anterior, los pueblos *originarios* se han insertado desde tiempos recientes en unos esquemas de acción ajenos a sus lógicas de reconocimiento – endógeno y frente al exterior- colectivo. El factor étnico se ve constantemente reconfigurado en base a las nuevas exigencias legislativas y político-administrativas.

- Hacer dialogar a dos disciplinas sociales como son la Geografía y la Antropología en el marco de la interdisciplinariedad. Relacionado con el punto anterior se pretende por lo tanto, suscitar una reflexión acerca de los estudios de la etnicidad insertos en un contexto local en donde la identidad se reconfigura en base a un proceso de territorialización, lo cual conduce a un análisis de *identidades territorializadas*.

- Esclarecer las situaciones de conflicto que tienen lugar al interior de la TCO TIMI, entre dos actores sociales principales: los ganaderos y las comunidades ignacianas. Considero que la fuente principal que provoca este tipo de conflictos es la apropiación de los espacios naturales de Mojos y como consecuencia pretendo incorporar a este estudio una tipología de tales conflictos.

- Exponer algunas de las alternativas de gestión territorial y de conservación de recursos naturales que recientemente se están llevando a cabo en la TCO TIMI, revalorizando el importante rol que en ello juega el conocimiento local indígena así como el mantenimiento de la jurisdicción sobre los territorios que ocupan.
- Concebir espacios de reflexión y debate que giren en torno a la cuestión indígena en Bolivia, y de modo específico en Mojos, encaminados a generar propuestas y a debatir acerca de cómo han intervenido los procesos que en este trabajo se plantean en la nueva relación establecida entre las poblaciones indígenas de Mojos y el Estado. Dar a conocer fuera de las fronteras de Bolivia, la realidad de estas poblaciones es uno de los objetivos que persigue este trabajo.

Para concluir este apartado añadiré sólo una idea complementaria y es que ante todo y clasificado éste como objetivo transversal, se tratará de aplicar un enfoque integral que abarque el conjunto de reflexiones que giran en torno a la cuestión territorial en la Amazonía boliviana. Pero esto se enlaza con el marco metodológico que aparece a continuación, dado que constituye al mismo tiempo una herramienta metodológica que busca alcanzar una reflexión más profunda de lo que hasta el momento han generado los escasos estudios enfocados de manera específica al análisis de la cuestión del territorio en la TCO TIMI. Frente a la idea de la ambiciosa “*búsqueda de la aprehensión de la totalidad*” algunos autores han advertido sobre sus riesgos y es que ésta puede llegar a “*demandar del investigador una formación previa enciclopédica*” (Velasco y Díaz de Rada, 1997: 32-33). Según estos autores, esta tendencia al holismo -consolidada a la luz del trabajo de campo de Malinowski- puede verse satisfecha en caso de que sea seleccionado algún sector o grupo social específico (*ibíd.*). En este caso el grupo étnico mojeño-ignaciano es el que se ha escogido para procurar alcanzar, hasta donde sea posible, tal conocimiento. Aunque al mismo tiempo admito que mi mirada es sólo una más de muchas posibles, el trabajo realizado en un tiempo y momento particular.

1. 6. METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN.

1. 6. 1. Reflexiones metodológicas. Diálogo en el marco de la interdisciplinariedad.

El análisis de las relaciones históricas mantenidas entre los grupos humanos y los territorios en los que estos habitan, la relación espacio/sociedad, ha constituido el objeto de estudio de muchas disciplinas y en especial de los estudios geográficos y de manera particular de la Geografía Humana. Desde la década de los ochenta y noventa del siglo pasado las ciencias sociales comenzaron a prestar especial atención a estudios sobre migraciones, movilidad, territorialidad, a medida que el concepto de Estado moderno quedaba obsoleto. La globalización propulsó en el terreno de las ciencias sociales nuevas propuestas teóricas –posmodernismo, posestructuralismo, pensamiento crítico o constructivismo- emergentes de la mano de nuevos planteamientos que atendían a la transnacionalización, desterritorialización y *deslocation* y prestaban mayor atención a los estudios de lugares, a las identidades territoriales o a percepciones subjetivistas de los procesos espaciales o de individuación de los sujetos como actores.

Parte de estas nuevas corrientes llevaron a cabo la deconstrucción de algunas categorías analíticas como es el caso del territorio, el cual se vio sometido a una reconceptualización (lo veremos en el próximo capítulo). Éstas se abrieron paso para dar respuestas a los nuevos procesos sociales en los que la relación entre el territorio y los grupos humanos se articulaba en lógicas que habían cambiado los tradicionales esquemas. Las investigaciones comenzaron a enfocar sus estudios en el vínculo entre ambas variables en términos de identidad. El caso de la Geografía Cultural es sumamente ilustrativo. Si bien es cierto que la ciencia geográfica se preocupó desde su profesionalización en el siglo XIX por el estudio de las interacciones entre los grupos humanos y las dinámicas naturales “*de modo sistemático, explicativo y territorializado*” (Sevilla, 2010: 30), fue a partir de los últimos decenios del siglo pasado cuando este tipo de cuestiones comenzaron a ser estudiadas desde nuevas aproximaciones teórico-metodológicas de la mano de la renovación de las categorías de análisis propias de los estudios geográficos, como veremos a continuación que ocurrió.

Alicia Lindón expone brillantemente los “giros teóricos” en los que el conjunto de disciplinas sociales y en particular la Geografía Humana se vieron inmersos y los que llevaron a un replanteamiento de los conceptos utilizados tradicionalmente en los estudios geográficos, así como las teorías y métodos de los mismos (2010).

También en el seno de la Geografía Regional se produjo una renovación o renacimiento. Dicha disciplina, que desde su institucionalización en el siglo XIX enfocó su interés en el estudio de regiones, se muestra a día de hoy más preocupada por las dinámicas territoriales y humanas de una región concreta, de un lugar específico, de un

contexto local (como puede ser el caso de la TCO TIMI). Se presenta como una nueva manera de entender el territorio a escala local.

Desde los años 40 hasta finales de la década de los 70 la Geografía Regional se encontraba sumida en el descrédito. Jacobo García Álvarez realiza un magistral repaso por los derroteros por los que ésta atravesó desde su origen (2006). Sin embargo, en la década de los 80 y 90 del siglo pasado se produjo un giro teórico-metodológico (al igual que ocurrió con el conjunto de disciplinas sociales) que hizo resurgir el interés por los estudios de escalas menores a la vez que emergía un gran mosaico de novedosos enfoques (Mendoza, 2001: 16). Esto coincidió además con la eclosión de un nuevo paquete de herramientas de análisis metodológico abanderado por las nuevas tecnologías lo cual impulsó la revitalización de la Geografía Regional en su conjunto (*ibíd.*). Los estudios de los lugares adquirieron una renovada pertinencia desde dos tendencias: una *revisionista* que echaba mano y recuperaba parte de los elementos que definieron las obras clásicas y otra “nueva”, marcada por una revalorización de los estudios de lugares (García Álvarez, 2006).

Este amplio elenco de trabajos caracterizados por asumir un enfoque regional adoptaría al mismo tiempo una perspectiva analítica propia de la geografía político-cultural, de las teorías sociales de reconocidos sociólogos (como es el caso de Giddens o Pierre Bourdieu), de aproximaciones teóricas referidas a la construcción social de la región, la competencia entre regiones, los desajustes económicos y sociales o la ordenación del territorio (Mendoza, 2001). De ahí que haya quienes consideran a la geografía como una ciencia interdisciplinar al abarcar y sintetizar el conocimiento procedente de otros campos (Delaney, 2005).

El surgimiento de la “nueva geografía regional” -como así la denomina Joan Nogué- o la “geografía regional reconstituida” -en términos de Nigel Thrift- muestra un interés renovado por la región, por la “especificidad de los lugares” (1989: 64). Pero el nuevo enfoque regional supera las concepciones anteriores (supera el análisis del *pays* de Vidal de la Blache). Si bien la geografía clásica privilegió el estudio de las regiones entendidas estas como “*entidades físicas, tangibles u objetivas con caracteres propios cuya singularidad debía desentrañar el geógrafo*” (García Álvarez, 2006: 29) desde el renacer de la geografía regional se atendió la particularidad del lugar, entendiendo a la región como espacio vivido, experimentado, imaginado, sentido (Nogué, 1989; Albet i Mas, 2001). Desde la geografía de los lugares lo que se pretende es conocer de qué forma se “*viven, se apropian, se sienten los espacios de escala mediana, y de ser preciso, cómo los individuos y los grupos los transforman con base en su propia identidad*” (Claval, 2010). Se comienza a prestar atención al “*estudio de la libertad, de la consciencia, de las emociones, de los sentimientos, de las sensaciones, de las percepciones, de las ideas,*

como elementos esenciales de la interpretación territorial" (Albet i Mas, 2001: 40). Y es que como bien señala García Álvarez, comprender el lugar *"requiere entender las relaciones y localizaciones generales en que se sitúa, pero también los significados que emanan del sujeto; adoptar simultáneamente la perspectiva descentrada del científico y la visión subjetiva del narrador"* (2006: 54). Hiernaux sugiere en términos similares *"una nueva concepción del espacio que combine su esencia física con la dimensión subjetiva"* (2010: 49). La asimilación del *"giro espacial"* es alentada además por Paul Claval (2010).

La nueva aproximación metodológica le debe mucho al legado proveniente de la geografía humanística de los años 70 (Albet i Mas, 2001; Nogué, 1989). La conceptualización del lugar guarda estrecha relación con el espacio en el que los grupos humanos construyen su identidad, fuertemente ligada al territorio. Estos lugares se consideran *"procesos históricamente contingentes"* al propiciar la interacción entre lo social y lo espacial de una sociedad dada (Albet i Mas, 2001) o, dicho de otra manera, como *"proceso histórico de formación, reproducción y transformación de estructuras espaciales"* (Nogué, 1989: 68).

El giro posmoderno ha contribuido a las ciencias sociales con el aporte de todo un conjunto de nuevos conceptos. No siempre nuevos, sin embargo, sino que muchos de ellos han pasado por el filtro de la deconstrucción para poder continuar siendo válidos en los análisis de una nueva realidad híbrida, reorganizada en base a nuevos parámetros, descentralizada. La posmodernidad se ha convertido, entre otras cosas, en el escenario desde el cual las minorías o grupos subalternos, los *otros* (etnias, mujeres, homosexuales, etcétera) hacen oír su propia voz. Estos grupos -que vienen denominados no de manera del todo acertada como *"minoritarios"*¹³- construyen su identidad al tiempo que la negocian frente al Estado en base al lugar, a lo local. El lugar se llena de significado y por eso la nueva geografía regional *"pone el énfasis en los aspectos sensoriales, afectivos, estéticos y simbólicos"* de las relaciones *"entre el ser humano y su entorno"* (ibíd.). Las comunidades se definen en función de su espacialidad, convertida en elemento discursivo de su identidad, que cuestiona los pilares sobre los que se yergue la modernidad y el capitalismo.

Pero no sólo desde la geografía lo local adquiere una nueva dimensión. Si bien desde la geografía política, económica y cultural, se asume el reto de reconsiderar la región desde una perspectiva más local como medio para el análisis de los procesos sociales y culturales que se desarrollan en las organizaciones espaciales, otras disciplinas

¹³ En el caso de Bolivia los grupos étnicos superan el 60% de la población total del país. En este caso se trata de una denominación que les ha sido impuesta de la mano de dominación a la que se han visto sometidos históricamente en base a las relaciones de poder asimétricas en las que se les ha otorgado un papel marginal, invisibilizándolos hasta su emergencia como movimientos social.

apuestan por la misma dirección. Es el caso de la antropología ecológica, la ecología política, la economía política o la psicología ambiental en el marco del posdesarrollo (Escobar, 2000). Escobar dirige sus críticas hacia las ciencias del mundo occidental por la marginalización que han sometido al *lugar* como categoría de estudio, apostando por su recuperación y la de los modelos culturales (locales) de la naturaleza. Para este autor, y en línea con los planteamientos anteriores, los procesos históricos no pueden ser aislados de la “especificidad del lugar” (*ibíd.*, 124). No obstante, este antropólogo distingue entre las nociones de espacio y lugar, a diferencia de los geógrafos como Albert Hirschman o Nogué, para quien “*espacio y lugar son dos caras de la misma moneda*” en una constante “tensión dialéctica” donde la diferencia radica en que “*el espacio tiene un carácter más abstracto e indiferenciado, que se convierte en lugar a medida que le vamos otorgando significados y valores*”, mientras que “*los lugares dan carácter al espacio y encarnan las experiencias y las aspiraciones de los individuos*” (Nogué, 1989: 69). En el marco de la nueva geografía regional, para Joan Nogué, se ha pasado del espacio al lugar y del lugar a la región (1989).

Cada nivel que conforma la jerarquía espacial (local, regional, mundial) aparece caracterizado por unos conceptos, métodos y técnicas de análisis específicos para cada uno de ellos (Farinós, 2005: 226). En el contexto global reconoce Farinós la predominancia de la escala local en numerosos trabajos. La singularidad del espacio constituyente del área de estudio de la investigación, conduce a adoptar un enfoque local en el análisis socioespacial de dicho *lugar*, sin dejar de lado la interdependencia con los fenómenos globales que le confieren su singularidad en un proceso de *feedback* al verse, en buena medida, ligados e integrados en una realidad geohistórica y social más amplia. Farinós advierte que estas interconexiones constantes dan como resultado un amalgama de actores económicos y poblacionales que se renueva continuamente y que “*hace difícil identificar sociedad local con arraigo territorial*” lo cual le lleva a afirmar que las transformaciones globales modifican la territorialidad y confieren dinamismo al territorio que deja de ser mero soporte para adquirir “valor de intercambio” de toda clase de procesos que lo perturban (*ibíd.*, 228). Estos contextos propician la reformulación de las identidades étnicas, como ha sucedido en Mojos, vinculada a un espacio local pero interconectada con las redes globales, operando a doble escala: local/global. Estas ideas apoyan los planteamientos que mencionaba al comienzo del capítulo desarrollados por Wolf (1987).

Dicho esto podemos concluir que la nueva retórica del *lugar*, un nuevo paradigma basado en el *lugar*, puede ser utilizado para corregir las asimetrías que ha impuesto el capitalismo y la modernidad. Nosotros, como científicos sociales, tenemos por lo tanto la responsabilidad y el compromiso intelectual, de dotar de una renovada significación al

concepto de lugar, de región, de espacio. No podemos, ni debemos, dejar de aprovechar la posibilidad que nos brindan estas nuevas herramientas de análisis social. Todo este amplio conjunto de cuestiones guarda una estrecha relación con los planteamientos del presente trabajo por lo que hay que reconocer la aportación de dichos enfoques.

1. 6. 1. 1. ¿Dónde está el sujeto? Escasa consideración de las poblaciones indígenas en los estudios geográficos de la Amazonía.

Señalaba líneas atrás que desde la nueva geografía regional se toma en consideración no sólo la dimensión tangible y material del *lugar* sino también las subjetividades, por lo que se concede un renovado interés a la dimensión subjetiva de los actores que dan vida y se apropian del espacio.

Sin embargo, las investigaciones geográficas contemporáneas que han centrado su atención en la región amazónica, y en particular la Amazonía de Bolivia¹⁴, no siempre han tenido presente el factor humano. De manera particular las poblaciones indígenas, a quienes no les ha sido reconocido en su justa medida el rol desempeñado en relación a las dinámicas del territorio. Por lo general estos estudios se han caracterizado por el análisis de cuestiones relativas a la fisiografía, morfología o hidrografía de la región, los sistemas de manejo de la tierra, los usos del suelo y su cobertura vegetal, la explotación de los ecosistemas y la conservación de la biodiversidad. Principalmente por este motivo esta investigación se enmarca en una metodología interdisciplinar, donde los más bien escasos estudios geográficos que existen sobre la región amazónica de Bolivia, se vean completados por algunos análisis provenientes de otras disciplinas.

Pero esto se debe señalar exclusivamente para el caso de Bolivia dado que desde la Geografía, en particular desde la Geografía Humana, están comenzando a oírse voces que abogan por que dicha disciplina sea elaborada desde el área de estudio y por la población de dicha área. Éste viene a ser el principal postulado de una muy reciente y novedosa subdisciplina nacida en el seno de la Geografía Humana anglosajona y a la que se le ha denominado como *Geografía Indígena* atendiendo a la revitalización de las culturas *originarias* (Coombes, Johnson J., Howitt, 2011). Esta nueva corriente que aparece en los últimos años de la primera década del presente siglo, supone un paso trascendental en el análisis de los procesos socioespaciales vinculados a contextos donde prima lo étnico. Estos estudios se están llevando a cabo fundamentalmente por científicos pertenecientes al mundo anglosajón quienes están desarrollando sus investigaciones en aquellos países de dicho ámbito que albergan poblaciones indígenas como es el caso de

¹⁴ Véase Muñoz Reyes, 1991; Zeitum, 1991; Navarro, 1997, 2002; Montes de Oca, 1989 y 2004. Si bien existen excepciones como la del estudio llevado a cabo por Ibisch y Mérida, 2003. Se debe matizar, no obstante, que éste consiste en un estudio sobre los ecosistemas y la biodiversidad de Bolivia.

Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Canadá o incluso Finlandia. En la región latinoamericana se podría afirmar que este tipo de trabajos aún no han despegado. Razón de ello para que la presente investigación contribuya a la aparición de una nueva agenda de trabajo dentro de la Geografía Humana latinoamericana.

En este sentido la reflexión metodológica suscita algunos vacíos teóricos. La cuestión indígena ha sido tratada tradicionalmente desde aproximaciones sociohistóricas, antropológicas, sociológicas e incluso arqueológicas¹⁵. En lo que respecta a la disciplina geográfica ésta se sumó a tales trabajos de manera más tardía. Pualani en concreto critica que las revistas geográficas no hayan prestado la atención que merecen cuestiones relativas a los estudios indigenistas (2007). No ha sido común encontrar estudios interdisciplinarios que amalgamen distintas perspectivas del conocimiento científico en este campo.

En relación al grupo étnico ignaciano en particular, no existe una importante producción científica¹⁶. Sí que es cierto que variada literatura científica se ha encargado de analizar algunas de las cuestiones que ocupan de manera tangencial este trabajo al centrar su atención en el estudio de grupos amazónicos. Se han ocupado de examinar quiénes son los actores que intervienen en las dinámicas territoriales, la degradación ambiental de los hábitats amazónicos, las estrategias de resistencia y las transformaciones culturales de estas sociedades indígenas, las formas de vida *tradicionales* y las posibilidades que alberga la continuidad de éstas, la adaptación a los ecosistemas amazónicos, etcétera.

Diversas disciplinas en Bolivia se han encargado del análisis de cuestiones indígenas desde un enfoque en parte sesgado. Desde la Antropología se desarrollaron investigaciones sobre los aspectos socioculturales de tales poblaciones (Canedo, 2009; Cuentas Alarcón, 2000); la Geografía puso su énfasis en el estudio del medio físico amazónico y de la explotación de los recursos naturales de éste (Navarro G., 2002; Montes de Oca, 2004); la Biología y las Ciencias Ambientales se preocuparon por cuestiones relativas a la biodiversidad y a la conservación de los hábitats naturales amazónicos (Ibisch y Mérida, 2003); la Sociología en general prefirió centrar su atención en la aparición de las poblaciones indígenas como sujetos políticos y nuevos actores sociales, la organización y las reivindicaciones derivadas de dicho movimiento (Lehm, 1999; Guzmán I., 2004; Molina W., 2004, 2008); los estudios jurídico-legislativos por su parte contribuyeron a poner el acento en todo aquello relacionado con la inmersión de

¹⁵ La emergencia del movimiento indígena de los pueblos amazónicos en Bolivia impulsó la aparición de dichos estudios principalmente desde la década de los noventa del siglo pasado.

¹⁶ No puedo dejar de mencionar la tesis doctoral de Gabriela Canedo o algunos trabajos como el de Ismael Guzmán, 2004; Rolando Labrana, 2010-2011, o Mirna Cuentas Alarcón, 2000, que centran su atención en la parcialidad ignaciana.

estos grupos sociales en las estructuras del derecho occidental así como en los rasgos que definían el derecho consuetudinario indígena (Juncosa, 1992; Libermann y Godínez, 1992; Oliva, 2004; Berraondo, 1999, 2006) etcétera. Por otro lado los trabajos consultados en materia de análisis territorial poseen de igual forma un sesgo disciplinar muy marcado, en contraposición a la concepción manejada por las comunidades ignacianas acerca del territorio, el cual constituye una “realidad multidimensional” integrada como elemento definidor en los diversos sistemas políticos, culturales, materiales, de los sistemas de conocimiento y de los sistemas simbólicos, en la esfera de la producción y tecnología (Urioste, cit. en Vargas Vega, 2003: 30). Este es un tema del que trataré en profundidad en el próximo capítulo.

Este conjunto de trabajos optaron por enfoques más específicos, sin plantearse tales cuestiones como elementos interrelacionados en una misma red¹⁷. La ambición del presente trabajo consiste en articular estas notas con el objetivo de generar un conocimiento más abarcador, sistémico e integral de la cuestión que nos atañe. Y sobre todo contribuir a validar la propia y particular percepción de la realidad que las comunidades locales de Mojos sostienen a día de hoy para que ésta sea codificada conforme a la experiencia colectiva de dicho grupo humano.

Para ello el enfoque regional así como la Geografía Humana -en especial del ámbito anglosajón- ha constituido un campo especial del que obtener una perspectiva que se ajuste más a lo que la investigación actual pretende.

Mencionaba lo reciente de la aparición de la nueva subdisciplina o, si se prefiere, de la nueva tendencia surgida en el seno de la Geografía Humana: la *Geografía Indígena*. Los trabajos que se enmarcan en esta nueva corriente buscan revisar algunas premisas que se asentaron de manera firme en la disciplina geográfica en relación a la cuestión indígena y que ahora se están viendo sometidas a un cuestionamiento conceptual. Por otro lado pretende devolver la iniciativa de acción a las comunidades indígenas para restituir el valor que entraña el conjunto de conocimientos locales. Reconoce la herencia colonial que ha caracterizado tradicionalmente el enfoque en los estudios indígenas. Este reconocimiento se convierte en el punto de partida desde el cual se busca restablecer, en el marco del proceso de descolonización, los postulados de las investigaciones geográficas en relación a las poblaciones indígenas. Esta nueva estrategia introspectiva está dirigida a lograr una colaboración, cooperación y reciprocidad para con los protagonistas de dichas investigaciones, es decir, las comunidades indígenas, desde una nueva ética investigadora, la cual comienza incluso a rechazar la noción de investigación por considerarla un producto colonial (Smith L., 1999). El presente trabajo

¹⁷ Es justo reconocer que los estudios de carácter legislativo establecieron un estrecho nexo entre los derechos territoriales, medioambientales y el derecho a la autodeterminación de las poblaciones indígenas, situando distintas variables en un mismo plano teórico.

ha encontrado por lo tanto, un punto de apoyo fundamental en el conjunto de esta literatura.

De la mano de los estudios insertos en la corriente de la *Geografía Indígena*, aparece una nueva metodología de investigación denominada “*Metodologías Indígenas*” (Smith L., 1999; Kovach, 2009; Denzin, 2008), la cual se ha definido como las:

“maneras alternativas de pensar sobre los procesos de investigación (...) Son enfoques fluidos y dinámicos que enfatizan las perspectivas circulares y cíclicas. Sus principales objetivos son asegurar que la investigación de asuntos indígenas sea alcanzada desde en una perspectiva más comprensiva, respetuosa, y éticamente correcta acorde con una la indígena” (Pualani, 2007: 133).

Estos trabajos que vienen fundamentados en ciertos enfoques occidentales propios de la metodología cualitativa -a pesar de que paradójicamente sea esto lo que pretenden reconstruir- presentan un innovador planteamiento en cuanto se refiere a las epistemologías indígenas o a la deconstrucción de algunos postulados teóricos. Constituyen interesantes manuales de cómo enfrentarse a la realidad indígena en el caso de investigaciones (o mejor dicho trabajos) vinculados con dicha temática. La pretensión fundamental de este conjunto de estudios consiste en otorgar voz a aquellos que han sido “investigados” durante décadas sin haber contado con la posibilidad de manifestar a través de ellos mismos su propia episteme. De aquí que esta metodología si bien ha contribuido a ampliar la visión del presente trabajo, permitiendo un análisis más crítico y poder leer entre líneas gran parte de la literatura escrita hasta el momento sobre la realidad de los pueblos indígenas de Mojos, no ha constituido la guía de trabajo principal por una razón fundamental. Y es que concede gran relevancia a la autodeterminación de las poblaciones indígenas ya que a partir de esta plataforma se pueden direccionar el resto de planteamientos desde el propio contexto indígena, sin la distorsión y las imposiciones de enfoques característicos del discurso colonial. Este trabajo presta atención a dicho aspecto pero de manera puntual. En el último capítulo se abordará la cuestión de la autonomía indígena ligada a la gestión del territorio pero no constituye el eje del trabajo. La búsqueda de la autenticidad o la incorruptibilidad hace que cierta retórica esencialista impregne algunos de estos discursos¹⁸.

Pualani lanza una feroz crítica a las metodologías occidentales que considera han subyugado durante tanto tiempo a las metodologías indígenas, a su racionalidad, ante lo que propone incorporar éstas últimas a la investigación geográfica. Enmarca las investigaciones que se han llevado a cabo sobre poblaciones indígenas en el colonialismo,

¹⁸ Algunos autores como Linda Smith son indígenas.

lo cual ha provocado la invalidación del conocimiento indígena, por lo que, en palabras de Pualani, es tan importante descolonizar nuestras mentes y disciplinas (2007: 131).

Para esta autora uno de los aspectos más importantes de una investigación desarrollada en comunidades indígenas es que debe realizarse en beneficio de las mismas, en caso contrario no debería llevarse a cabo, lo cual debe conducir a los geógrafos a plantearse éticamente las relaciones con dichos grupos (*ibíd.*). Es totalmente necesario que las comunidades indígenas formen parte de ese proceso de investigación para que sus voces sean escuchadas (*ibíd.*, 133). Esto favorecerá que el conocimiento sea localizado.

Supone un desafío el completar esas lagunas del conocimiento con trabajos definidos por un enfoque holístico e integrador que nos acerquen a la comprensión de la realidad que se está viviendo en el Mojos actual. Pero para ello es de primera necesidad que las diversas disciplinas se den la mano en busca de la consecución de un conocimiento más riguroso a la vez que científico. El geógrafo mexicano Daniel Hiernaux, expone una feroz, a la vez que valiente, crítica de la escasa consideración que se ha tenido a la disciplina geográfica por parte del resto de ciencias sociales en los estudios dedicados a la dimensión espacial (2010). Es por tal motivo que Hiernaux propone fervientemente el encuentro con otros campos científicos –pese a que esto suponga un replanteamiento conceptual y metodológico– de los que la geografía tendría tanto que aprender y tanto que aportar. Junto con Lindón ambos reconocen que “(...) *la complejidad del mundo actual requiere de los acercamientos interdisciplinarios y la construcción de nuevos cuerpos teóricos*” (Lindón y Hiernaux, 2006: 9).

Al hilo de las razones expuestas, los postulados teórico-metodológicos que dan cuerpo a este trabajo, provienen de diversas disciplinas entre las que destacamos la Geografía –tanto humana como regional, así como la *Geografía Indígena*–, la Ecología Política y la Antropología Ecológica (Hardesty, 1979), que en algunos contextos científicos se ha confundido con la Ecología Humana¹⁹. Incluso hay quien defiende que la

¹⁹ La Ecología Humana ha sido definida como la ciencia encargada del estudio de las interacciones entre los grupos humanos y su medioambiente (Hawley, 1975; Richerson and Mc Evoy, 1976; Sutton y Anderson, 2004; Kassam, 2009). Si atendemos esta definición puede que no encontremos mucha diferencia con el objeto de estudio de la Geografía Humana. La novedad de aquella radica en que la unidad de análisis pivota en la comunidad humana, entendida ésta desde el punto de vista de la ecología en general como la “*organización de organismos adaptados, o en proceso de adaptación, a una unidad de territorio concreta*” (Hawley, 1975: 80) o como la “*población organizada territorialmente, más o menos completamente arraigada en el suelo que ocupa, con unidades individuales que viven en una relación de mutua interdependencia simbiótica*” (Ezra, 1973: 45). Kassam por el contrario, distingue a la Ecología Humana frente a la Geografía Humana porque la primera presta atención al organismo y la segunda al medio ambiente y como resultado, la adaptación no ha sido desarrollada en profundidad desde una concepción geográfica (2009: 29). Y es que la disciplina de la Ecología Humana en sí apareció como una de las tres ramas de la Ecología propiamente científica, y consecuentemente se desarrollaría a partir de esta ciencia biológica (siendo las otras dos la Ecología vegetal y la

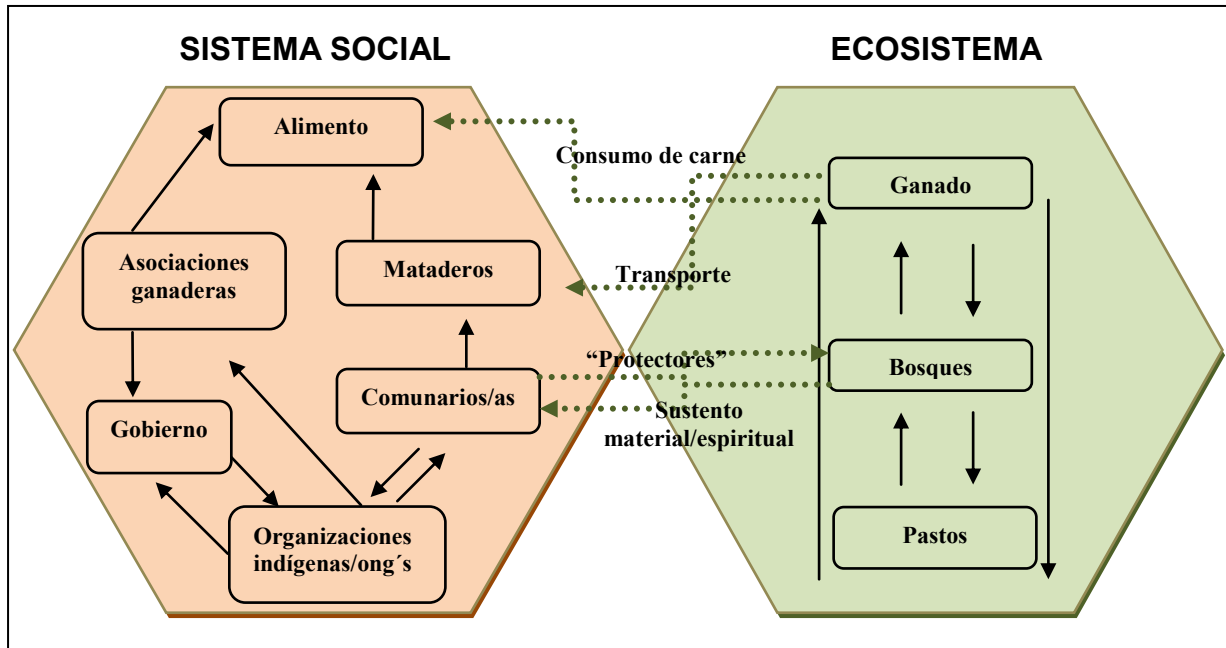
Antropología Ecológica no sería más que otra forma de denominar a la Geografía Humana, al mostrarse interesadas ambas en el análisis de la interacción entre las sociedades humanas y el medio natural. La principal diferencia vendría definida por la prioridad concedida desde el enfoque ecológico de la Antropología a la cultura como factor que posibilita la adaptación al medio. Para la presente investigación en particular ésta ha significado un gran aporte, aunque no siempre se haya compartido su enfoque metodológico. En ocasiones se analizan comunidades humanas consideradas como ecosistemas en sí mismas e interaccionando con el resto de organismos que pueblan su entorno.

Por último y para concluir este apartado señalar que el enfoque histórico aparecerá en todos y cada uno de los capítulos de la investigación, por mi propia formación académica pero fundamentalmente porque considero que este estudio así lo requiere.

Ecología animal). La primera de ellas sería desarrollada por botánicos; de la segunda se ocuparían los zoólogos y de la Ecología Humana en particular, sociólogos o investigadores sociales (Hawley, 1975: 20). Por el contrario, Sutton y Anderson la vinculan a la Ecología Cultural, inaugurada por Julian Steward, y perteneciente al campo de la Antropología (2004). Para estos la Ecología Humana es la versión moderna de la Ecología Cultural.

No obstante, su significado está sujeto a ambigüedades. Cabe señalar que en el ámbito universitario español existe en la UNED una asignatura denominada “Ecología Humana” perteneciente a la carrera de Sociología, la cual se apoya en una bibliografía en donde destacan títulos que se clasifican dentro de la Antropología Ecológica, a la vez que existe una asignatura que lleva por nombre “Ecología Humana: Biohistoria” vinculada al departamento de Ecología e impartida en la licenciatura de Ciencias Biológicas.

Esta disciplina parte para el estudio de la interdependencia entre los organismos y su medio, de la premisa de la adaptación al medio. Hawley reconoce la importancia de la Ecología Humana entre las ciencias sociales tales como la Demografía, la Geografía Urbana, la Economía o la Sociología (1975: 81-85; 1962: 10). La compara con la Geografía y de manera particular con la Geografía Humana en su concepción moderna patrocinada por Paul Vidal de la Blache, argumentando que si bien ésta “*estudia las adaptaciones del hombre a su medio geográfico*” subrayando la “*influencia del medio geográfico sobre el hombre*”, la Ecología Humana por su parte además de estar interesada del mismo modo por “*las relaciones del hombre con su medio geográfico, se concentra en las interdependencias humanas que se desarrollan en la acción y reacción de una población con su habitat*” (ibíd., 82-84). Pero en contra de lo que afirma Hawley, la Geografía Humana no ha dejado de lado las interrelaciones entre los grupos humanos, aunque sí es cierto que ha prestado más atención al estudio entre las sociedades y el medio físico, lo cual no excluye el postulado anterior. Otros autores como Mc Kenzie señalan que, a pesar de que ambas disciplinas presentan muchos puntos en común, la principal diferencia está en que la geografía “*tiene por objetivo el espacio y la ecología el proceso*” (McKenzie, 1973: 57). Con ellos se refiere a los procesos de cambio que tienen lugar en la interacción de los grupos humanos con el medio físico. Al estudio de los procesos como objeto de estudio de la Ecología Humana también apunta Robert Ezra (1973: 55). En otras palabras pero viniendo a decir lo mismo, la Ecología Humana hace hincapié en el análisis entre las interacciones ambientales y los procesos sociales (Richerson and Mc Evoy 1976: xiii) sin negar el hecho de que todas estas ideas provenientes de la ciencia ecológica no puedan ser traspasadas al plano de las relaciones humanas y ser traducidas según este esquema: competencia por la apropiación de un territorio específico, ajustado a los principios de dominación y sucesión que condicionen a su vez la distribución de la población dentro de unos límites territoriales. Sin ir más lejos, Ezra establece una equivalencia conceptual entre competencia a nivel biótico y conflicto a nivel social (1973: 50). Sin embargo, a pesar de que enriquece un debate metodológico sobre qué herramientas aplicar a una investigación sobre dinámicas territoriales y conflictos entre diversos actores sociales por la ocupación de un mismo espacio territorial, no será el caso ya que deberíamos extrapolar y forzar los planteamientos que dan cuerpo a este trabajo.

Figura 1. 3. Interacción sistema social mojeño-ecosistema²⁰.

Fuente: elaboración propia.

1. 6. 1. 2. Cartografías indígenas. Reflexiones acerca de la validez de su aplicación.

De la mano de la *Geografía Indígena*, aparece la *Cartografía Indígena* (o lo que vendría a significar lo mismo: la *etn-cartografía*). Ésta pretende incorporar las tecnologías geográficas a la realidad particular a estudiar y evitar de este modo la pérdida de información además de aspirar a minimizar la asimilación y reinterpretación a la que se ven abocadas las sociedades indígenas cuando su propio conocimiento local es traducido por las técnicas de cartografía del mundo occidental (Wickens y Pualani, 2008). Esto no significa desechar las tecnologías geográficas actuales y negar tanto sus ventajas como sus aportes para el conocimiento científico. Más bien lo que se busca conseguir a través de esta nueva aplicación es que las poblaciones indígenas con quienes se trabaja, participen del proceso de cartografiar el escenario geoespacial en el que ellas mismas se desenvuelven y en el que se insertan las dinámicas culturales y las actividades materiales de cada una de ellas.

Los *Sistemas de Información Geográfica* (SIG) han constituido una herramienta fundamental para la protección de los recursos naturales de los territorios indígenas así

²⁰ En la **figura 1. 3** se ilustra el sistema interactivo entre los factores más significativos que intervienen en la relación entre el sistema social humano y el ecosistema de la región mojeña. En base a éste se pueden percibir los intercambios de energías y de información, entre los elementos que componen ambos sistemas, demostrando que cada uno influye o tiene repercusión sobre el otro, y viceversa. Todos los elementos por lo tanto juegan un papel dinamizador de las relaciones que se establecen entre ellos.

como de su soberanía territorial. Esto es un hecho innegable y por ello es justo reconocer el mérito de tales tecnologías. El problema radica en la limitada y a veces inapropiada interpretación que en ocasiones se ha llevado a cabo sobre la representación de cartografías indígenas. Debido a ello, autores como Margaret Wicknes y Renee Pualani, abogan por la adopción de un nuevo lenguaje cartográfico orientado a preservar el conocimiento y soberanía cultural de las poblaciones indígenas (2008: 107). La *Geografía Indígena* va más allá al proponer que sean estas mismas culturas quienes elaboren sus mapas desde redes conjuntas de geógrafos pertenecientes a la academia y a pueblos indígenas. Ya a mitad de la década de los noventa del siglo XX, algunos autores se mostraron especialmente interesados en averiguar los efectos que provocaba el exportar información geográfica, propia de los SIG del mundo occidental, a países en desarrollo o del Tercer Mundo -donde aún no se conocía dicho lenguaje geográfico- para lo que se propusieron estudios *cross-culturales* como herramienta para comprender tales re-representaciones (Rundstrom, 1995).

La cartografía si bien transmite la visión oficial hegemónica del mundo, no es sólo una práctica en manos del poder, desde el otro lado pueden surgir cartografías de resistencia frente a las que tradicionalmente han ordenado el espacio (Radcliffe y Westwood, 1999: 194). En Bolivia surgió de manos de la confederación indígena CIDOB, en la década de los ochenta: el *Centro de Planificación Territorial* (CPTI) con un equipo de expertos cartógrafos encargado en elaborar la cartografía indígena para validar la ordenación territorial del país y la asignación de títulos de propiedad de la tierra. A partir de los métodos y técnicas cartográficas utilizadas por el Estado se pusieron en marcha proyectos cartográficos alternativos que diseñaban de manera visual las representaciones territoriales de los pueblos indígenas.

Los mapas presentados por estos equipos topográficos han contribuido a la demanda territorial justificando la ocupación ancestral del territorio por parte de las poblaciones *originarias* y el derecho, por tanto, a apropiarse de éste bajo los criterios jurídicos manejados por el Estado. Sin embargo, Radcliffe y Westwood advierten de las dificultades que en los diferentes países latinoamericanos han entrañado tales proyectos cartográficos, los cuales han estado plagados de contradicciones (1999: 198). En el caso boliviano por ejemplo, el suelo ha llegado a ser titulado a los pueblos indígenas identificados como tales. Por el contrario, el subsuelo o el “vuelo forestal” que para estos grupos forman parte del territorio de la misma manera que el suelo, el aire, los bosques, los seres vivos que en ellos habitan y las entidades inanimadas que configuran el paisaje, no son tenidos en cuenta a la hora cartografiar los territorios indígenas. El debate entre la propiedad y el usufructo de estas tierras está servido.

Tras conceder una valoración netamente positiva a la trascendencia de dichos planteamientos y lo innovador de estas propuestas, en el diseño de esta investigación se tuvo presente en todo momento la necesidad de contar con la participación de las comunidades ignacianas a la hora de elaborar y analizar posteriormente la cartografía indígena. Si bien me vi obligada a recoger y analizar aquella información geográfica desde varios centros ajenos al grupo ignaciano y que de otra manera habría sido imposible, entre los que destacamos el IGM y el CPTI. No obstante, toda la información recogida por estas instituciones, provino del propio conocimiento local que los vecinos de las comunidades mojeñas aportaron acerca del territorio, su uso, manejo, tenencia y su percepción. El hecho de poder combinar los sistemas de información geográfica y las tecnologías más avanzadas con el conocimiento *tradicional*, posibilitó generar un conjunto de significados a partir de los valores culturales e identitarios transmitidos por medio de historias orales, leyendas, cuentos, mitos y toda una serie de prácticas comunales que dan cohesión y definen la cultura ignaciana. No obstante, es justo reconocer que la creación, partiendo de cero, de un SIG a partir del propio conocimiento indígena suponía una tarea titánica, la cual fue del todo inalcanzable para la presente investigación. Encontrándome en esta situación no puedo más que agradecer la cesión de la información cartográfica recibida.

Es justo admitir que en el momento de representar la cartografía indígena del pueblo mojeño-ignaciano se pierde parte del conocimiento cultural de dicha población, lo cual sucede al no poder enunciar sobre una imagen gráfica la complejidad de las interrelaciones y los significados geográficos que encierra su propia cosmología. En relación a esta idea Robert Rundstrom crea el concepto de “cartografía del proceso” para referirse a las cartografías indígenas (1995). Este término alude a diversas modalidades – oral, escrita, representativa- de generar imágenes transmisoras, entre generaciones, del conocimiento indígena. Este concepto hace además hincapié en la trascendencia de las historias sobre los lugares del territorio en el que habitan, así como de los nombres que confieren a dichos lugares, los topónimos. Esto conduce a pensar en la *Loma Santa*, lugar que geográficamente no está delimitado con exactitud pero que viene referido a un lugar simbólico recreado por la experiencia mojeña, opuesto a un espacio definido por límites espaciales al estilo de la cartografía occidental. Murray Li demuestra en su trabajo que los *Lindu* establecen vínculos con los territorios que habitan a través de nombrar los elementos que constituyen el paisaje, lo cual difícilmente podría ser reconocido por cualquier individuo ajeno a las comunidades *Lindu* sin el uso de un mapa, al estilo occidental (2008: 350). De ahí que el intento de representarlo por medio de un SIG provocase una pérdida de significado simbólico y cultural, e incluso identitario, lo cual actúa como limitación a estos sistemas. En este sentido es de gran

interés y relevancia la propuesta de Wicknes y Pualani de crear un nuevo lenguaje cartográfico que sirva para transformar las marcas y signos gráficos a nuevas categorías y variables alternativas que representen significados epistemológicos y ontológicos del conocimiento cultural indígena (2008: 113).

Algunas críticas epistemológicas se han sucedido en esta misma línea acerca de los diversos lenguajes manejados por un lado por el conocimiento indígena y por otro por los *Sistemas de Información Geográfica*. Estos últimos reducen a figuras y a unidades cartesianas la información cultural de las poblaciones indígenas hasta el punto de desvincularse o, dicho de otra manera, alienarlas de su propio contexto al considerarlas susceptibles de ser medidas por medio de una mera herramienta técnica, lo cual supone una evidente pérdida de conocimiento y significado cultural (Bauer, 2009: 236).

Cabe mencionar a colación de todo esto el logro más destacado de la participación ignaciana en el proceso de mapeo del territorio indígena. En relación al interés que nos mueve destacaría ante todo la reconstrucción de los hechos históricos, de las experiencias vividas, de los saberes locales, de los lugares habitados, de los sitios sentidos, de los espacios apropiados por todos aquellos que han poblado el territorio de Mojos. La recuperación de dicha memoria colectiva concede un papel protagonista a la población indígena al hacerles partícipes del proceso de apropiación de su territorio sin excluirlos. En esta reconstrucción queda impresa su propia cosmología, su propia racionalidad ecológica y cultural que, muchas veces, les ha sido negada en las redes de conocimiento del ámbito euroamericano. Un aspecto clave fue el hecho de poder compartir con el resto de comunarios dicho proceso. En este sentido Offen cita literalmente al antropólogo Enrique Sánchez y al abogado de derechos indígenas Roque Roldán Ortega para referirse a esta idea señalando que *“lo más importante fue poner a trabajar juntos a jóvenes y viejos, hombres y mujeres y socializar un conocimiento tradicional sobre los recursos biológicos y sobre el territorio comunitario como parte de la propia identidad”* (2002: 36-37, cit. en Offen, 2009: 182). Una idea importante que tiene que ver con todo esto es que por medio de la reproducción del conocimiento indígena a la hora de definir el territorio, se va dando forma a una indigeneidad que los individuos más mayores van transmitiendo a los más jóvenes a través de discursos cargados de una simbología que reproduce la territorialidad indígena (Sletto, 2009: 271).

La identidad de las comunidades ignacianas se ha visto, a su vez, influenciada por los procesos de mapeo. Estos han incidido en la reconfiguración de los significados de las prácticas y discursos identitarios. Pero uno de los factores que indiscutiblemente entraña más relevancia en el asunto del que venimos tratando, es la cuestión de la revalorización del conocimiento indígena. La noción de territorio que emerge en base a la representación espacial impulsa un proceso de reconocimiento cognitivo que contagia al

grupo, dotándolo de un significado que tiene más que ver con valores culturales y con la propia racionalidad del conocimiento local, tal y como es entendido por Arturo Escobar (2000).

Otro aspecto a destacar de los procesos de mapeo y que tiene enorme interés con las cuestiones que se discuten es que las poblaciones indígenas los han utilizado para conceder un significado más político a la cuestión identitaria (Offen, 2008: 167). Esta idea viene confirmada en el caso del TIMI y es que la delimitación geográfica del espacio demandado –la TCO– ha transitado por un proceso de reconfiguración étnica que gira en torno a la articulación de la categoría ignaciana y el vínculo de ésta con el territorio, habitado y reivindicado como propio. Sin embargo, las comunidades indígenas de Bolivia se han visto obligadas a cartografiar sus territorios con el fin de demostrar su existencia *originaria* y el estrecho vínculo territorial que les arraiga a la tierra. Es la única manera de la que disponen para hacer ver la trascendencia de sus demandas puesto que en caso de que no puedan disponer libremente de sus tierras, su existencia se verá amenazada. Las comunidades mojeñas, al igual que ha ocurrido con la gran mayoría de pueblos indígenas de Bolivia, han sido cartografiadas para facilitar el proceso de titulación de la tierra. Frente a esto, son varias las voces que se han alzado contra el engaño y la injusticia que ha seguido al reconocimiento territorial por parte de organismos, tanto internacionales como aquellos del propio aparato estatal²¹. El hecho de que legalmente hayan sido reconocidos como propietarios legales de un territorio comunal sujeto a ciertas prerrogativas, no conlleva la justicia social que se pretendía conseguir. La aplicación de la ley no implica que se haga con justicia, de ahí que algunos autores afirmen que “*ni el proceso de mapear ni la ley son justas*”, constituyendo ambas instrumentos del poder (Wainwright y Bryan, 2009: 170).

En el caso de Bolivia, el Estado creó en 1996 la categoría de “*Tierra Comunitaria de Origen*” con el fin de demarcar las áreas comprendidas por territorios ancestralmente habitados (controlados y manejados) por poblaciones indígenas (estos territorios, se ajustan al mismo esquema de las políticas neoliberales puestas en marcha en el resto de países de Latinoamérica en relación al reconocimiento de los territorios indígenas en cada uno de los países). El multiculturalismo y las nuevas formulaciones provenientes de los estados plurinacionales urgían a adoptar conceptos más adecuados a la nueva realidad sociocultural emergente. Pero el territorio no se entendía de la misma manera en el marco del Estado que en el imaginario indígena (consiste en un término divergente en la concepción de los mojeño-ignacianos, para quienes el significado del mismo

²¹ Evito hacer alusión directa a los protagonistas de tales testimonios debido a lo delicado del asunto entre las comunidades locales de Mojos.

aparece asociado a un espacio multidimensional conformado por la articulación de múltiples elementos, tanto naturales y materiales como culturales y simbólicos).

Los ignacianos se apropian y perciben el medio natural en la interrelación con éste y lo transmiten y experimentan como espacio vivido, mediante toda una serie de acciones y prácticas narrativas y rituales. Un claro ejemplo de ello es la ancestral danza de los macheteros -danza guerrera que simboliza el atardecer y el amanecer en la región amazónica- de unos personajes ataviados con plumas de parabas (especie de loro que abunda en la Amazonía) y pieles de tigre.

De la misma manera, los topónimos del territorio mojeño forman parte de la percepción de estos habitantes, quienes asimilan el espacio en función de la localización de ciertas referencias geográficas, como es el caso de la laguna Isirere. La historia de esta laguna encierra toda una leyenda que nos transporta a los orígenes de San Ignacio y la cual se cree que en ocasiones cobra vida debido a la actitud de los vecinos del municipio (entrevista a Julio Noza).

La cartografía ignaciana fue elaborada a partir de los conocimientos de los más ancianos quienes pusieron sobre la mesa sus experiencias pasadas y su saber local. Todo ello fue compartido con el resto de comunarios:

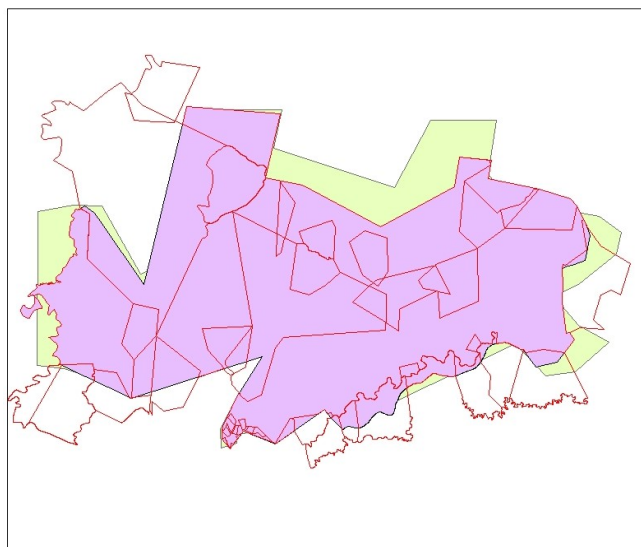
“recorríamos caminos y monte con los técnicos (del INRA) y les decíamos dónde estaban nuestros chacos y cuales tierras usábamos y ellos lo marcaban. Mucha gente de la comunidad se reunía y discutía sobre unos linderos de más allá o de más cerca de aquí (de la comunidad)” (entrevista a Hilario Jiménez).

La idea que inmediatamente nos viene a la cabeza tras los comentarios de este comunario ignaciano es la manera en que tras la demarcación del territorio, de la TCO, por parte de los funcionarios del INRA, los habitantes de Mojos se enfrentaron irremediablemente a la idea de propiedad privada, hasta entonces desconocida para la gran mayoría de indígenas mojeños. Basta señalar que en las comunidades existían hasta el momento títulos pro-indiviso que precisamente evitaban la venta de tierras y la parcelación al ser considerados como títulos comunales. Esto en algunos casos, ya que en otros muchos carecían de dichos títulos debido a que se regían por el derecho consuetudinario.

Bjorn Sletto señala que la existencia de bordes, límites territoriales, fronteras, implica para las poblaciones indígenas la existencia de propiedad, lo cual es ajeno a los valores de muchas culturas indígenas (2009: 266). Esto explica la indefinición de los límites territoriales a la hora de presentar los indígenas ignacianos la demanda de TCO al INRA y la consiguiente tramitación y titulación por parte de éste (véase **figura 1. 4**). La cuestión que está en juego es que para los pueblos indígenas de Bolivia y el mojeño en

nuestro caso particular, el significado y alcance del límite territorial no es el mismo que el utilizado por la cartografía occidental. Al igual que ocurre a los *pemones* de la gran sabana venezolana que describe Sletto, los ignacianos conciben un territorio menos homogéneo, más flexible, cambiante, sin tanta rigidez. En esto tiene mucho que ver la itinerancia, la movilidad entre comunidades, el traslado de chacos, las quemadas estivales de la sabana, los efectos de las irrigaciones provocadas por la inundación anual, los espacios de caza, etcétera. Todo ello genera grandes dificultades a la hora de delimitar con el uso de los SIG, el territorio ocupado por los ignacianos.

Figura 1. 4. Superposición de límites de la TCO TIMI²².



Fuente: elaboración propia en base a los datos de CPTI.

En su definición más comúnmente aceptada, los mapas son representaciones gráficas (si bien cada vez más digitales) de una superficie geográfica concreta. La cartografía consiste por tanto en una forma de representar el mundo, “*de hacer geografía en el sentido literal de escribir el mundo*” (Wainwright y Bryan, 2009: 154). Pero dicha acepción entraña más significados. Estos tienen que ver con la idea de poder, de construcción de un control territorial, un ordenamiento político, que fragmenta e invisibiliza todo un conjunto de dinámicas socioculturales y simbólicas complejas al tiempo que impone un modelo de conocimiento basado en procesos históricos, los cuales actúan como fuerza legitimadora. A la vez, los mapas representan una jerarquía de valores en función de los propósitos y convencionalismos selectivos sobre los que han sido elaborados. Karl Offen define al mapa como un “*objeto político porque da forma y a*

²² Esta imagen refleja hasta 3 demarcaciones diversas entre las que la diferencia territorial es más que visible. Refleja las renegociaciones entre las comunidades del TIMI, el sector ganadero y los técnicos del INRA.

la vez refleja la realidad misma que se supone representa de manera transparente”, pero la transparencia no es nunca completa y por ello especifica que:

“un mapa es una herramienta didáctica que muestra la realidad no tal cual es, sino como la quiere hacer ver quien levanta el mapa. Los mapas son testimonios tejidos a punta de signos y símbolos que, en conjunto, constituyen una visión del mundo específica, es decir, una política geográfica” (2009: 167).

La *etn-cartografía* además de hacer uso de los *Sistemas de Información Geográfica*, debería integrar en el proceso cartográfico el trabajo de campo etnográfico, las observaciones en terreno, entrevistas, etcétera, para mapear el espacio cultural.

No sólo en Bolivia los pueblos indígenas han sacado partido del *etnomapeo* ambiental, sino que en el conjunto de países de la región latinoamericana una nueva política geográfica indígena ha emergido. Es el caso de Colombia, Nicaragua, Perú, Brasil, Surinam, Panamá u Honduras. Las instituciones encargadas en desarrollar proyectos de mapeos en territorios indígenas, en la mayor parte de los casos lo han hecho movidos por una lógica ecológica, con vistas a preservar el medio ambiente, el cual suele poseer en estos contextos geopolíticos y culturales, elevados índices de biodiversidad. El motivo que ha impulsado estos proyectos ha sido fundamentalmente conceder a las organizaciones indígenas una herramienta de utilidad práctica a la hora de reclamar los derechos territoriales sobre los territorios demandados (Offen, 2009). Los mapas indígenas han desempeñado un rol fundamental en el proceso de lucha de los derechos territoriales así como en “la creación y el reconocimiento del concepto de territorio” (*ibíd.*, 167). La elaboración de mapas ha actuado en beneficio de las comunidades indígenas en el sentido de otorgarles la posibilidad de ver representados frente al Estado, los límites territoriales de los espacios que ocupan. La cartografía participativa es una herramienta que de algunos años a esta parte viene siendo utilizada por diversos colectivos entre los que destacan organizaciones no gubernamentales, científicos, asociaciones en defensa de los derechos indígenas, etcétera. Estos procesos implican la participación de los grupos indígenas en cuestión.

El incremento de la disponibilidad en cuanto a las tecnologías geográficas se refiere y el hecho de ser cada vez más accesibles, unido al incremento de las necesidades rurales de hacer legible la defensa territorial, llevó a una explosión de proyectos de mapeado de territorios indígenas (Roth, 2009: 207).

Otra denominación para ésta nueva metodología, a parte de la *etn-cartografía*, es la *counter-mapping*, lo cual literalmente se traduce como “contramapear” referido a la acción de crear mapas a partir de postulados opuestos a los que considera la normativa cartográfica en el ámbito científico occidental que divergen en la manera de mirar, imaginar, sentir y representar un determinado espacio geográfico. Supone, desde el

punto de vista de la geopolítica posmoderna, una oposición entre la cartografía que parte del Estado (hegemónico) y las comunidades indígenas (contrahegemónicas) (Sletto, 2009). Desde esta perspectiva, la cartografía participativa y los *Sistemas de Información Geográfica* contribuyen a la reivindicación, reconocimiento y defensa de los derechos por la tierra, buscando una mayor participación en el manejo y usos de ésta. Y desde un punto de vista técnico, los SIG constituyen una herramienta de primer orden a la hora de comparar un amplio conjunto de atributos (geoespaciales). Estos pueden ser relacionados con distintas informaciones geográficas, de diversas escalas, distancias, ángulos, creando toda una serie de capas que sirven para mostrar de manera sintética y analítica la información geográfica pertinente. No obstante, no hay que olvidar que la relación entre las comunidades indígenas y el Estado ha marcado las pautas que han caracterizado el uso y el acceso de la tierra, lo cual significa que de una u otra manera la estructura estatal siempre se verá inmersa en la definición de territorialidad indígena.

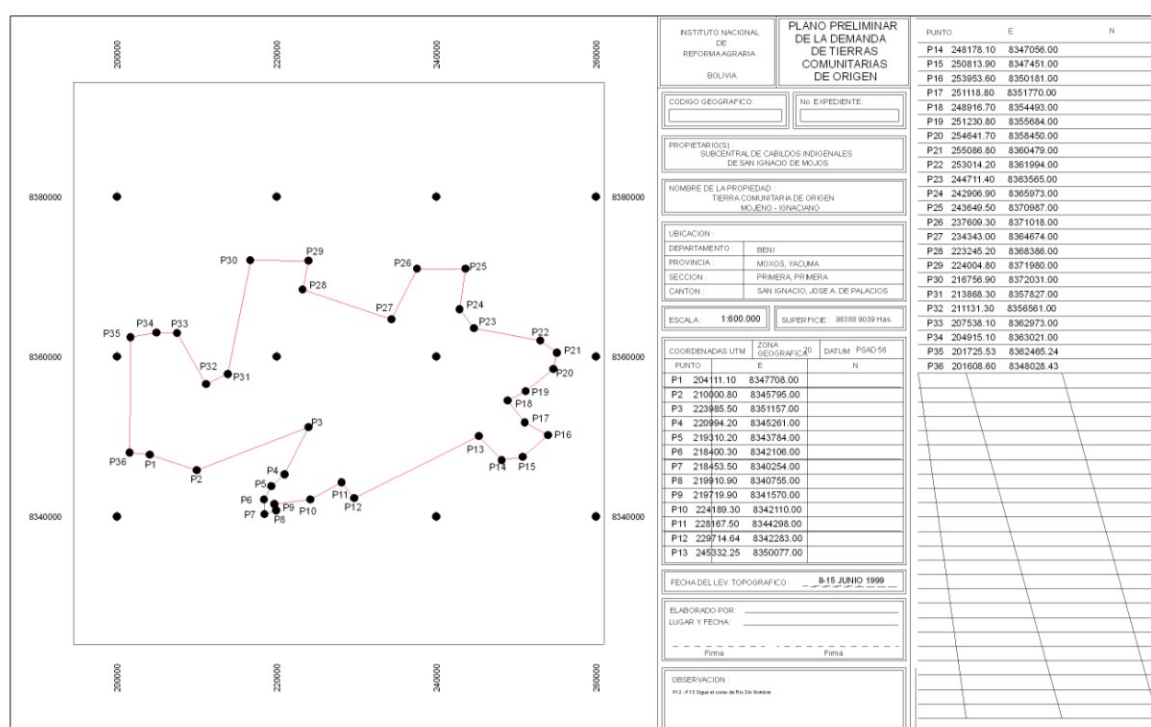
El proceso de “counter-mapping” apuesta además por la:

“protección de los derechos territoriales indígenas, demarca y protege los territorios tradicionales, maneja las tierras comunitarias, protege la biodiversidad, aumenta la conciencia sobre los conflictos y sus resoluciones, empodera a las comunidades y promueve la diversidad cultural” además de *“crear una posibilidad esperanzadora para incrementar la visibilidad de grupos marginalizados y por tanto disminuir las asimetrías del poder”* (Bauer, 2009: 234).

El problema clave de todo lo que se viene comentando es que la cartografía, tal y como la entendemos desde la disciplina geográfica, establece una serie de límites, de fronteras espaciales en el terreno, que da lugar a un espacio estático y homogéneo el cual invisibiliza los procesos culturales y las dinámicas socioterritoriales que tienen lugar en lo que para las comunidades indígenas significa dicho espacio. Ante este fenómeno de abstracción espacial, Robin Roth propone reconsiderar y asumir -lo que a sus ojos sería más acertado- un espacio viviente, que verdaderamente represente el espacio como morada, como vivienda de las comunidades que en él habitan (2009). Otros autores han reflexionado del mismo modo sobre las consecuencias de las abstracciones espaciales (Wainwright y Bryan, 2009). La espacialidad territorial indígena se ve simplificada por una simbología determinada a base de líneas, polígonos y puntos, ángulos, distancias, escalas y proyecciones -*Universal Transverse Mercator System*-, de longitud y latitud, lo cual reduce el territorio indígena a una abstracción que no se corresponde con la representación real de la relación que ellos mantienen con el entorno físico y natural en el que se asientan y que manejan (véase **figura 1. 5**). Estos espacios abstractos que sintetizan y analizan la información geográfica responden a las características de

estatismo y homogeneidad. Pero lo más relevante de ello es que aparecen como entidades externas y ajenas a los grupos humanos, como algo “*separado de la especificidad del lugar*”²³ (Roth, 2009: 209). Y es que, como bien señalan Wainwright y Bryan, la cartografía siempre implica tal abstracción y la consecuente simplificación (2009: 155). En relación a ello Bauer alerta frente a lo contraproducente que puede llegar a ser el proceso de *etn-cartografía* al alienar al productor del producto en cuestión, es decir, del mapa, en el caso de que la cartografía sea elaborada por gente extraña a los habitantes del propio territorio (2009: 235). Cabe la posibilidad de que aquellos manipulen y controlen la información sobre los recursos y el uso de la tierra (*ibíd.*).

Figura 1. 5. Esquema demanda TIMI



Fuente: CPTI

Tim Ingold apunta que el paisaje se construye a través del movimiento entre lugares inmersos en una red de idas y venidas que dan lugar a la región (2000: 155 y 219-242). Para este autor el elemento definidor del espacio, como lugar donde se habita, es el movimiento. Este movimiento hace que el mundo esté en continua formación. Es por esta razón que los habitantes de una determinada región se muestran incapaces de especificar la localización de lugares en función de un sistema de coordenadas al ser asumidos estos por sus historias y no por su localización (*ibíd.*, 219).

²³ Esto tiene mucho que ver con el binomio dicotómico naturaleza-cultura que ha predominado en las ciencias y la tendencia a ver la naturaleza como algo dado, ajeno a las sociedades.

Por su parte Bauer aboga por representar la información cultural de las poblaciones indígenas en sus propios términos, con “*su propio sistema de referencia*” (2009: 243).

El giro posmoderno propició la crítica de la cartografía al despojarla de la concepción empirista que se atribuía a las interpretaciones de los mapas como representaciones objetivas, para reorientar la valoración crítica de estos como herramientas al servicio del poder, es decir, de los intereses del Estado (nación) (*ibíd.*, 235). Pualani dirige otra de sus críticas a la pérdida de conocimiento que se produce en el ejercicio de traducción a las cartografías occidentales cuando las herramientas como los SIG se constituyen como instrumentos de poder en manos de los geógrafos (2007: 132). Kassam es otro de quienes se suma a la opinión de que los mapas como metáfora espacial han sido utilizados como instrumentos del poder colonial, desde la Geografía. Además, inspirado en Foucault, demuestra la etimología de conceptos como “región” que proviene del francés *regere*, que significa ordenar; o la noción de “provincia” proveniente a su vez del latín “provincia” referido al territorio conquistado (1980, cit. en Kassam, 2009: 193).

De igual forma no tardaron en llegar, de la mano de diversos autores, las críticas hacia la *cartografía participativa* o *etnocartografía*²⁴. Todos ellos coincidieron en que bajo el paquete de medidas propio de las políticas multiculturales implementadas por regímenes neoliberales, los estados reconocieron un conjunto de acciones que en apariencia defendían los derechos de los grupos subalternos. Lejos de la realidad, éstas consistieron en un arma de doble filo por el hecho de perpetuar la dominación hegemónica del poder estatal. Esto era posible al obligar o presionar a los grupos indígenas a hacer uso de los mismos instrumentos (institucionales) que el propio estado utilizaba para reconocer los territorios al interior de su espacio nacional y poder ejercer de esta manera su control directo. De aquí que encontremos en los trabajos sobre este tema críticas acerca de los aspectos políticos que entrañan las tecnologías geográficas como el SIG y metodologías como la cartografía participativa. Kenneth Bauer apunta a éstas como medio de refuerzo y recreación de las históricas relaciones de dominación-resistencia entre el Estado y las poblaciones indígenas en el caso del Tíbet (2009). Este autor incluso utiliza el término de “la nueva tiranía” para referirse a la participación de los grupos étnicos en los proyectos de mapeado (Cooke y Kothari, 2001 cit. en Bauer, 2009: 234) puesto que podría servir para perpetuar de manera sutil la hegemonía con respecto a dichos grupos (*ibíd.*, 235).

²⁴ El número 16 (2) de la revista *Cultural Geographies* (2009) recoge toda una serie de artículos en los que se hace hincapié en los efectos negativos y las implicaciones a nivel sociopolítico e incluso epistemológico de la cartografía participativa así como del empleo de los SIG.

En la misma dirección van las objeciones de Bryan y Wainwright (2009) o de Sletto quien defiende que tras la pretensión de los estados por salvaguardar los territorios indígenas subyace otra realidad vinculada a intereses agraristas referidos al uso y explotación de la tierra (2009: 268). Bryan y Wainwright se muestran críticos ante la práctica cartográfica y para ello proponen reflexionar sobre las limitaciones de dicho ejercicio y repensar las posibilidades de la cartografía legal a la hora de hacer efectivas las demandas territoriales frente al Estado (2009). Para estos autores, la cartografía indígena no sería la solución dado que se enmarca en el contexto del neoliberalismo multicultural donde el Estado continúa ejerciendo su supremacía hegemónica. Su discusión, en definitiva, se refiere a los modos en que las tecnologías geográficas adquieren validez para los movimientos indígenas en su lucha por el reconocimiento territorial. Además claman por reorientar los proyectos cartográficos desde una geografía poscolonial al defender la idea de que “*las representaciones coloniales del espacio que deniegan la existencia de los pueblos indígenas son violentas*” y por lo tanto deben ser respondidas (2009: 154).

Sin embargo, no podemos dejar de reconocer el eficaz instrumento que para las poblaciones indígenas supone la *etnocartografía* en materia legislativa, puesto que hasta el momento es la única herramienta con la que éstas han podido demostrar la ocupación de tierras. No podemos dejar de lado los requerimientos legales que precisan de representaciones espaciales de los grupos humanos a pesar de que tales representaciones delimiten espacios abstractos en vez de espacios culturales. La cuestión clave es cómo la espacialidad indígena puede ser representada desde la inclusión de la compleja red que conforma el conjunto de dinámicas socioculturales.

Roth, por su parte, es de la opinión de que en los procesos de mapeo indígena, los territorios, el manejo y el uso de la tierra y de los recursos naturales no se puede inscribir en espacios abstractos. Tal abstracción ignora la complejidad de la espacialidad indígena construida a partir de diferentes escalas y a través de una multiplicidad de relaciones socioecológicas desplegadas en la interacción entre el medio ambiente y las dinámicas socioculturales de las poblaciones (2009). Retomando algunas ideas de Bryan y Wainwright, el hecho de inscribir los territorios indígenas en la misma lógica cartográfica proveniente del Estado, constituye un fenómeno que justifica y perpetúa la exclusión del ámbito de poder (2009: 170).

Otra serie de cuestionamientos que han de ser tenidos en cuenta se enmarcan en una perspectiva social. Y es que nos podemos preguntar qué tipo de participación se desarrolla en estos procesos. Algunas críticas en esta línea se dirigen hacia los miembros de la comunidad que lideran tales procesos, quienes frecuentemente forman parte de la élite de la correspondiente comunidad (Bauer, 2009), pudiendo ser manipulados (lo cual

ha ocurrido en el caso de algunos de los líderes ignacianos sometidos en el pasado al engaño de técnicos y *terceros*). Los miembros más mayores de la comunidad son quienes asumen el rol de mediadores frente a los técnicos o investigadores. Son ellos quienes poseen los conocimientos más autorizados o de mayor confianza a la hora de recrear y representar el espacio geográfico y simbólico en el que habita la comunidad. El factor generacional se suma a la componente de género. Esto supone otra crítica que debería ser superada en este tipo de procesos participativos. Es común entre los proyectos de mapeado la escasa representatividad de las mujeres, quienes quedan relegadas frecuentemente a un segundo plano (si no son excluidas), como efectivamente demuestra el caso de Nicaragua y Belice analizado por Brian y Wainwright (2009). Este fenómeno pone de manifiesto algunos de los límites de la participación que no implica la inexistencia de relaciones de desigualdad.

Pero no sólo se dan situaciones en las que los líderes son cooptados por las organizaciones u organismos que ponen en marcha los proyectos. Sino que ellos mismos pueden acometer ciertas negligencias con vistas a superar los logros en un principio planteados. Bjorn Sletto así lo atestigua tras su trabajo en las comunidades de la sabana en Venezuela (2009). Los líderes *pemones* han reconvertido los límites de los territorios por los que luchan, buscando un mayor utilitarismo, redibujando el espacio geográfico original (*ibíd.*, 254).

Pero si de la función utilitarista de los mapas tratamos no podemos dejar de mencionar, aunque sea de manera sucinta, los beneficios que ha reportado al Estado desde el punto de vista del control territorial. Los diversos estudios a los que me vengo refiriendo en la cuestión de los procesos participativos de la *etn-cartografía*, retoman algunas ideas de pensadores de la talla de Gramsci o Foucault para demostrar en qué medida los estados se han servido de los mapas a la hora de marcar los límites definidores del control y mantenimiento del territorio. Desde una perspectiva *foucaultiana* el poder estatal, junto con las instituciones que le dan forma, ordena a la gente en el espacio para asegurar una eficiente “*vigilancia de la conducta individual*” (Sletto, 2009: 256) puesto que los límites y fronteras son asumidos como construcciones a partir de procesos sociales (Roth, 2009: 209) y supeditados a discursos sobre la nación, región e identidad (Sletto, 2009: 256). Esto viene a decir que los intentos del Estado por mantener a la gente al interior de unas fronteras, bien sean éstas internas o exteriores no son más que intentos para mantener la dominación política, y por ende cultural, sobre los grupos que históricamente han sido sometidos a manos de la élite política dominante. Robin Roth alude a los mapas como una herramienta del Estado-nación que en realidad “*no simplemente representan el territorio sino que realmente lo producen*”, lo cual

ocurre porque la abstracción espacial no es una política neutral sino que “*es producida en relación a las relaciones de poder capitalistas e imperialistas*” (2009: 209).

La cartografía oficial constituye por tanto un reflejo de la retórica que anteriormente adelantaba: dominación-resistencia. Ante esto surgen como oposición narrativas enmarcadas en definiciones conceptuales de identidad, autenticidad que aparecen con una fuerte carga esencialista y consideran el (re)diseño y la (re)producción de las fronteras nacionales como expresión contingente ante el Estado-nacional. El hecho de rehacer los límites que definen la territorialidad indígena “*debe ser entendido como producción cultural, representada como parte de un complejo repertorio de resistencia*” (Sletto, 2009: 272).

Tras este breve repaso a algunas de las críticas realizadas desde la Geografía Cultural y la Antropología Ecológica a las cartografías indígenas, principalmente a los procesos de mapeo en poblaciones indígenas, el presente epígrafe cierra con las siguientes conclusiones. Ya hemos visto hasta qué punto los mapas topográficos *modernos* representan la superficie terrestre, lo cual conlleva la reinterpretación de los mapas cognitivos indígenas con la consecuente pérdida de significado e información. He analizado, de igual modo, el carácter de los mapas como instrumento de poder, de lo que brota la pretensión de reflejar, del modo más integral posible, el conocimiento indígena, además de advertir acerca de los riesgos que se corren con la aplicación de los SIG. Ante esto surge de nuevo la misma cuestión a la que aún no se ha dado respuesta: ¿puede el conocimiento cultural de las poblaciones indígenas ser traducido a un lenguaje y lógica cartográfica propia de las tecnologías occidentales?. En caso de que esto no sea posible, ¿cómo podrían ser mapeadas las dinámicas territoriales indígenas?, ¿es posible acercarnos más a una “justicia geográfica” en los términos de Wainwright y Bryan? Volviendo al estudio de caso del presente trabajo, reconozco que las comunidades ignacianas no pueden ser cartografiadas como una abstracción espacial sino que es mi misión intentar recrear una espacialidad territorial más compleja que represente las relaciones socio-espaciales de este grupo, su interacción con el medio físico, simbólico y natural en el que habitan. El territorio comunal ignaciano es particularmente complicado de cartografiar. La existencia de zonas de bosque, con usos forestales o silvopastoriles, que se convierten cada año en zonas de uso agrícola y del mismo modo chacos que son absorbidos por las áreas de bosque, pone de manifiesto la flexibilidad, el dinamismo y porosidad de los linderos que separan viviendas de chacos y de montes. Se puede entender lo complicado del hecho de dividir este espacio territorial en polígonos. Tal consideración está en relación con la idea de espacialidad frente a estacionalidad, de considerar la componente espacial pero no la temporal (Roth, 2009: 215). Por poner sólo un ejemplo, el calendario agrícola mojeño sufre importantes variaciones a lo largo del

año por la rotación de cultivos. Esto, unido al sistema de roza, tumba y quema propio de las comunidades indígenas de Mojos, explica la ambigüedad de mapear este territorio sujeto a cambios constantes. Sin olvidar además que la tenencia de la tierra posee la particularidad de ser compartida. Por decirlo de otro modo: al interior de la TCO del TIMI, se localizan hasta 50 estancias ganaderas que responden a la modalidad de propiedad privada, fenómeno que provoca una discontinuidad y ruptura territorial ajena a la cosmología indígena. Si bien los aspectos físicos del espacio son aquellos que pueden ser plasmados de manera más sencilla, otros elementos relacionados directamente con estos quedan excluidos de la representación cartográfica. Me estoy refiriendo por ejemplo a los efectos de las inundaciones, no desde el punto de vista geográfico sino más bien social. Las inundaciones que se producen anualmente en Mojos condicionan de manera absoluta el uso del suelo de la pampa: los chacos se localizan en las zonas más altas mientras que las viviendas y las estancias ganaderas ocupan zonas de una altitud inferior. Los conflictos que surgen por la ocupación del suelo son una consecuencia directa de este fenómeno. Influye irremediablemente en las relaciones sociales entre los habitantes del territorio. El manejo de los recursos se ve del mismo modo afectado por las inundaciones. Nos podemos preguntar entonces ¿cómo mapear estos fenómenos en constante transformación?, ¿de qué manera se podrían representar sobre un mapa los espacios destinados a diferentes usos, cambiantes a su vez, a lo largo del año y los procesos que se derivan de ellos? Para estos casos Roth propone “*producir múltiples mapas representando diferentes estaciones y modelos de uso de la tierra socialmente diferenciados*” (2009: 221). Otra propuesta válida sería la creación de nuevas categorías que tengan en cuenta aspectos que vayan más allá de los convencionales. Esto al menos es lo que intentó y en parte logró Robin Roth en su trabajo con comunidades indígenas del norte de Tailandia, con vistas a conseguir “*más que un espacio abstracto*” (2009).

Para concluir con este tema me gustaría dejar abierto a modo de provocación el dilema entre ¿mapear o no mapear?, o dicho de otra manera y parafraseando a Offen: “*mapeas o te mapean*” (2009). Si nos decantamos por la segunda opción de la disyuntiva, continuará ocurriendo lo que hasta ahora: personas ajenas a los pueblos indígenas llevarán a cabo la labor de cartografiar sus territorios. Si por el contrario decidimos mapear nos enfrentaremos ante el insalvable obstáculo de la pérdida de conocimiento indígena e información cultural, además de traducir ésta a la lógica cartesiana, con la consecuente transformación de sus prácticas locales (Roth, 2009: 208). La crítica de este autor se dirige hacia la resignación –a la que considera ni necesaria ni deseable– de llevar a cabo este tipo de proyectos cartográficos por la mera razón de considerarlos la única opción de estos grupos étnicos para demostrar sus derechos al reconocimiento del manejo, uso y tenencia de la tierra (*ibíd.*). Para Roth es

por tanto, absolutamente necesaria una renovación de dicha práctica y ante todo es necesario ser siempre conscientes acerca del tipo de espacio que estamos cartografiando. Comparto esta opinión.

1. 6. 2. Técnicas de investigación.

La presente investigación ha combinado tanto técnicas de investigación cuantitativas como cualitativas para analizar los procesos territoriales de Mojos. En lo que se refiere a las primeras se ha recurrido principalmente a fuentes estadísticas así como a los *Sistemas de Información Cartográfica*, sobre los que acabo de reflexionar.

La metodología de la investigación que ha marcado las pautas del trabajo viene definida por un dualismo entre las actividades llevadas a cabo durante la fase del trabajo de gabinete y las actividades realizadas en el trabajo de campo. Otras se enmarcan en el proceso intermedio, formando parte tanto de una como de otra etapa (véase **figura 1. 7**).

El trabajo etnográfico consiste en un método de investigación más propio de la disciplina antropológica. Sin embargo, tradicionalmente ha sido utilizado como herramienta de trabajo desde múltiples saberes científicos. En aquellos estudios en los que se requiere una amplia información aportada por personas, las entrevistas, los grupos de discusión, los cuestionarios, etcétera, son la mejor manera de conseguirlo. La Geografía no sería menos. En particular la Geografía Humana ha recurrido al trabajo etnográfico para comprender los contextos sociales y los comportamientos de las personas que forman parte de estos (Cloke *et al.*, 2004). Se mencionó el giro cultural que a partir de la década de los noventa se vivió en el seno de la Geografía Humana (y Regional), que al mismo tiempo fue etnográfico, imbuido de los cambios que estaban teniendo lugar en el conjunto de las ciencias sociales tras la aparición de los estudios culturales. Dicho método me ha permitido acercarme al objeto de estudio desde una aproximación etnogeográfica.

El presente trabajo ha requerido esencialmente de la utilización de técnicas esencialmente cualitativas para poder abordar la problemática en la que se ven inmersas las comunidades indígenas del pueblo mojeño-ignaciano. El trabajo de campo constituye una herramienta de primer orden para el conjunto de las ciencias sociales. Mediante el trabajo de campo se articulan y se ordenan las experiencias, interpretaciones, acontecimientos y sentimientos de aquellos que se enfrenan a la tarea de analizar y comprender los fenómenos que tienen lugar en relación a las dinámicas socioespaciales; a caracterizar el medio físico y humano, el escenario natural; a obtener un buen

conocimiento del paisaje y su configuración. En definitiva, a interpretar fenómenos sociogeográficos desde una perspectiva holística del espacio.

En términos geográficos, la experiencia de los trabajos de campo se remonta a los momentos iniciales de la Geografía moderna. Pero sobre todo se hizo más patente con el auge de los estudios regionales a partir de la obra de ilustres geógrafos como Paul Vidal de la Blache. En este contexto la observación en el campo –por encima de toda una serie de métodos cuantitativos- constituía la fuente primaria a la hora de obtener la información pertinente para un posterior análisis geográfico (Montilla, 2005: 189). Montilla recupera una cita de aquel para subrayar la importancia que reviste esta actividad señalando que *“con los libros se hace una geografía mediocre, con los mapas se logra una geografía mejor, pero solo se consigue auténtica geografía sobre el terreno”* (ibíd., 188).

Antecedentes más tempranos los encontramos en los viajes de aquellos exploradores que ya desde el siglo XVI comenzaron a dirigirse principalmente al continente americano y a enfrentarse a una realidad hasta entonces desconocida, demostrando de esa manera que los viajes y las exploraciones han guardado tradicionalmente un estrecho vínculo con la disciplina geográfica (Godoy y Sánchez, 2007; Pedone, 2000). Por encima de todos destacó la figura de Humboldt, quien se convirtió en el referente para tantos geógrafos científicos que vinieron más tarde y quienes continuaron su estela, como es el caso del francés Alcides D’Orbigny que dedicó gran parte de su obra (siglo XIX) a Bolivia.

Las salidas al campo constituyen una práctica primordial para lograr un acercamiento a la problemática con la que se enfrenta la presente investigación. Estas facilitan el conocimiento del medio en el que se interactúa. La toma de contacto con el área de estudio incide en la configuración posterior de geografías resignificadas por el prisma de los propios referentes del observador. La posición del investigador, su tradición académica y sus correspondientes prejuicios determinan el proceso investigador y los resultados que se obtienen. Y es que en este contexto subyace al mismo tiempo un proceso marcado por la dualidad desplegada en la incorporación de determinados modelos analíticos y epistémicos los cuales implican una consecuente (re)interpretación de los métodos de análisis etnogeográficos.

El trabajo de campo como herramienta metodológica ha resultado por tanto fundamental en este contexto. Gracias a éste he podido articular y ordenar en buena medida toda una serie de planeamientos que darían forma a la futura investigación. Las observaciones recogidas a partir de las salidas al campo han facilitado la propuesta de trabajo y han moldeado el análisis posterior de una problemática que hunde sus raíces en un pasado remoto –hace casi cinco siglos- y que sin embargo, ha emergido

recientemente debido a la toma de conciencia por parte de un sector importante de la población que se ha erigido en las últimas décadas como nuevos sujetos y actores sociales en la arena política de Bolivia. Me estoy refiriendo a los pueblos indígenas. Por esta razón consideré que la entrada al campo propiciaría el contacto directo con la situación real y me permitiría aproximarme más de cerca al objeto de estudio –en este caso también al sujeto, o sujetos, de estudio-.

Claudia Pedone realiza una revisión sobre el trabajo de campo enmarcado en la metodología cualitativa, la cual ha sido en más de una ocasión relegada –fundamentalmente por los enfoques neopositivistas- a un segundo plano o considerada subordinada a los métodos cuantitativos (2000). Esta autora que cuestiona el dualismo entre ambas metodologías, aboga en su trabajo por la complementariedad de técnicas de investigación para alcanzar la validez de las investigaciones geográficas. En este sentido recupera una cita de Sauer para destacar la importancia del trabajo de campo en la disciplina geográfica:

“la geografía era antes que nada conocimiento adquirido mediante la observación, que uno ordena luego, mediante la reflexión y el nuevo examen de las cosas que ha mirado, y que de lo que se ha experimentado por contacto directo surge la comparación y la síntesis. En otras palabras, siempre que sea posible, el entrenamiento principal del geógrafo tendría que consistir en trabajo de campo” (1956, cit. en Pedone, 2000: 6).

Todo análisis socioespacial de las relaciones entre poblaciones humanas y los territorios que ocupan y con los interactúan, no puede prescindir de los sujetos o actores sociales que modulan dichas relaciones. A la hora de entender, experimentar y vivir estas dinámicas, el trabajo de campo nos ofrece la posibilidad de alcanzar el entendimiento de los fenómenos etnogeográficos que se suceden en el área de estudio. En este caso los Llanos de Mojos de Bolivia.

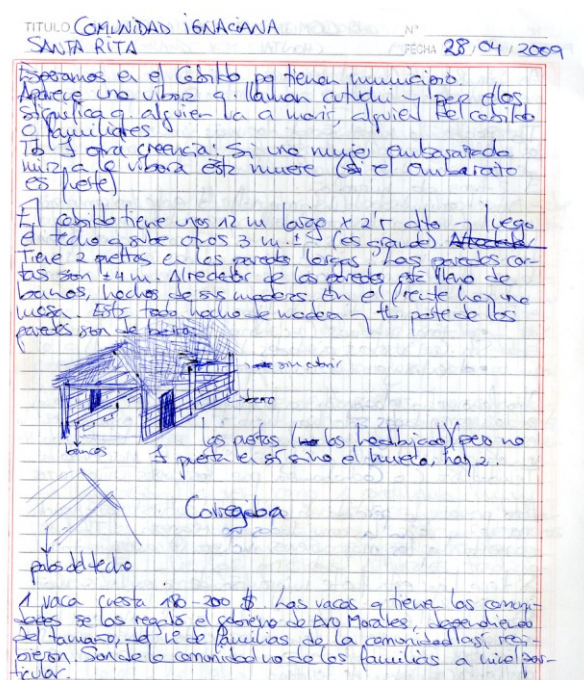
Por dicha razón en el momento de efectuar el análisis de los procesos territoriales que están teniendo lugar en Mojos se requiere de una comprensión real de las dinámicas existentes en esta región así como de la relación entre los actores sociales y el desarrollo físico espacial. Las salidas de campo para entender el funcionamiento del entorno natural por un lado y a las comunidades indígenas por otro, permiten desentrañar o descodificar la realidad de los procesos de reapropiación territorial que están afectando a las poblaciones *originarias* de la Amazonía boliviana. La toma de contacto con la realidad de la región me ha permitido por tanto aproximarme a la comprensión del escenario geográfico, de las dinámicas socioterritoriales que en él se desenvuelven y de los actores que participan en el proceso.

El hecho de identificar, comprender y describir la relación vinculante entre el ámbito espacial y los asentamientos humanos no cabe duda que constituye una parte esencial del análisis de los procesos territoriales en Mojos. Por ello es evidente que el trabajo de campo constituye un primer paso del todo necesario a la hora de emprender una investigación de tales características y la herramienta de trabajo fundamental que permita organizar las observaciones pertinentes de las experiencias y la información obtenida durante el mismo. Sólo a través de éste podrá generarse una comprensión de la realidad integral y compleja no condicionada por imágenes previas.

Dicho esto he de admitir que una serie de condicionantes, a los cuales me referiré más adelante, no hicieron posible permanecer en el terreno el tiempo deseado. Mis estancias en campo se repartieron en dos periodos: de marzo a junio de 2009 y de junio a septiembre de 2010. Durante este tiempo pude recopilar gran parte de la información sobre la que se sustenta el presente trabajo. Pese a la relevancia concedida al trabajo de campo, no me fue posible sin embargo, llevar a cabo una etnografía propiamente dicha.

Para la recopilación de la información me serví de técnicas tales como: participante, entrevistas individuales (semiestructuradas), encuestas de hogar, observación, discusiones grupales²⁵, análisis documental y de representaciones gráficas. La información directa resultante del trabajo de campo, de las estancias en las comunidades, ha sido del todo valiosa para acercarme a conocer la realidad del pueblo mojeño. Las informaciones, reflexiones, ideas, argumentos, preguntas, reflexiones y experiencias vividas eran anotadas en el cuaderno de notas (véase **figura 1. 6**) que resultó imprescindible para articular el conjunto de la información obtenida durante el trabajo de campo.

²⁵ Las encuestas por muestreo son una herramienta de la investigación social propias de las disciplinas occidentales, por lo que debemos ser cautos y tener en cuenta las dificultades que puedan surgir a la hora de aplicarlas en contextos donde no estén habituados a este tipo de técnica de investigación. Los sesgos van a aparecer con toda seguridad lo cual podría generar desconfianza, sometiendo a cuestionamiento la fiabilidad y validez que de ellas se obtendría. En el caso de esta investigación debe ser considerado un aspecto fundamental y es la conflictividad en torno a la problemática a tratar. Esto perjudica en parte la veracidad alcanzada a través de las encuestas y entrevistas al mostrarse los encuestados reticentes a la hora de responder a una serie de preguntas que consideran comprometidas o que les puede situar en una situación cuanto menos embarazosa en el caso de que se vean implicados de manera directa en el objeto de análisis. La responsabilidad y la prudencia deben ser entonces los principios éticos que guíen nuestra investigación. Frente a estas dificultades una manera de anticiparse a los conflictos que puedan surgir es llevar a cabo un análisis previo de la población objeto de estudio, lo cual puede contribuir a paliar estas complicaciones intrínsecas a cualquier investigación social.

Figura 1. 6. Ejemplo de cuaderno de notas.

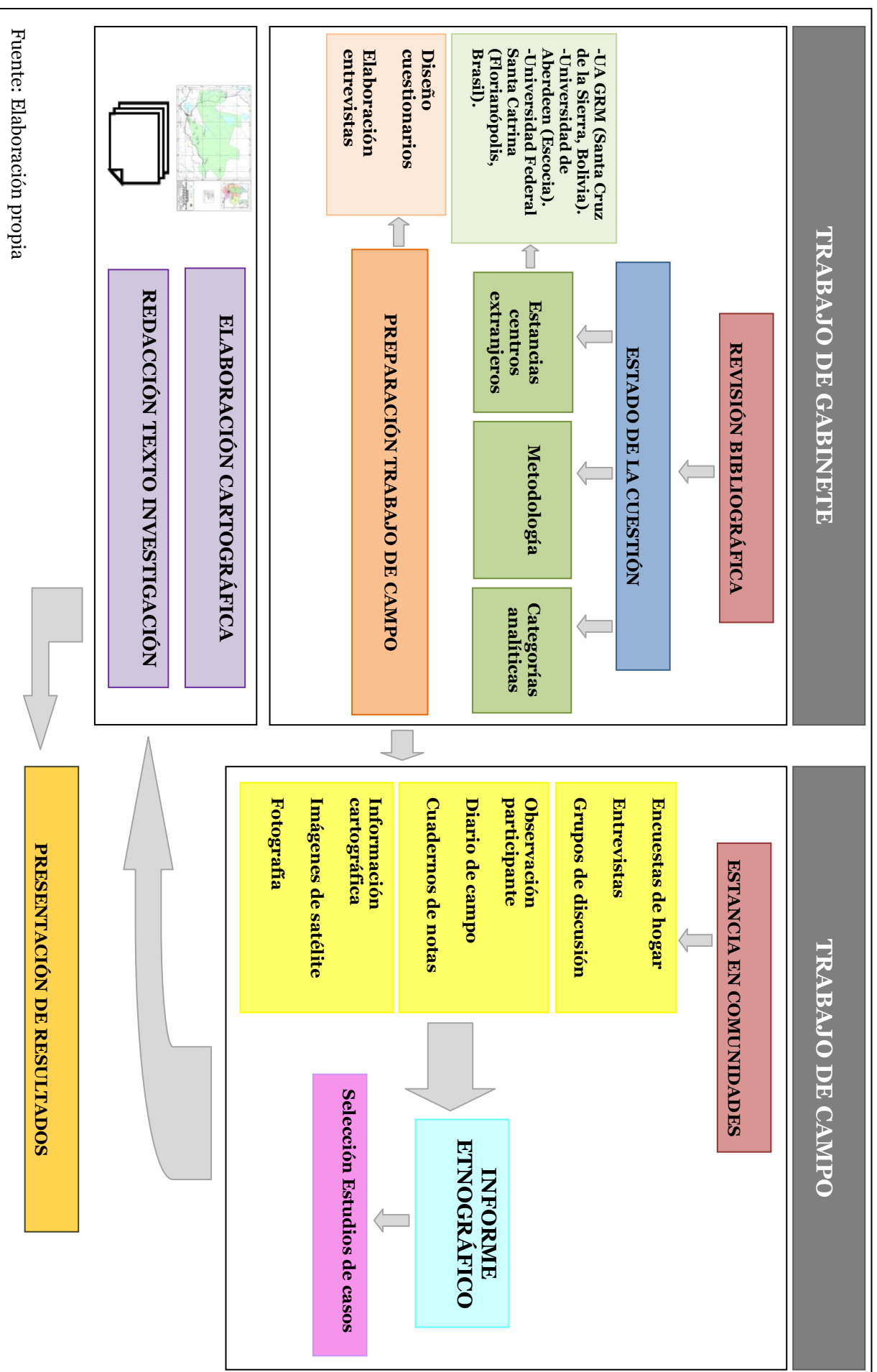
Fuente: Virginia Jabardo Pereda

En primer lugar realicé la revisión y el análisis bibliográfico pertinente para obtener información sobre la problemática a tratar. Ésta ha sido posible gracias a la consulta de una compleja variedad de materiales documentales existentes en diversos centros de investigación, bibliotecas e instituciones y organismos que cuentan con material especializado en estas materias, como la Biblioteca Hispánica de la *Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo* (AECID) de Madrid; las bibliotecas de Humanidades de la facultad de Filosofía y Letras, Educación, Ciencias y Derecho de la *Universidad Autónoma de Madrid* (UAM) o la Biblioteca Central de la *Universidad Nacional de Educación a Distancia* (UNED) Madrid. En Aberdeen (Escocia), se contó con la posibilidad de revisar el extenso catálogo bibliográfico con el que cuenta la biblioteca de su universidad, del mismo modo que se hizo con los fondos bibliográficos de la biblioteca de la Universidad Federal de Santa Catarina en Florianópolis (Brasil). En Bolivia, aprovechando las estancias de investigación financiadas por la UAM se consultaron los fondos de la Biblioteca de la facultad de Sociología de la *Universidad Autónoma Gabriel René Moreno* (UAGRM) de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) y de la asociación *Apoyo Para el Campesino-Indígena del Oriente Boliviano* (APCOB); del *Centro de Investigación y Promoción del Campesinado* (CIPCA) en Trinidad y San Ignacio de Mojos; del *Centro de Estudios Jurídicos e Investigaciones Sociales* (CEJIS) en Santa Cruz de la Sierra y Trinidad; de la *Confederación Indígena del Oriente Boliviano* (CIDOB) en Santa Cruz de la Sierra; de la *Pastoral Social Cáritas*

(PASOC) en Santa Cruz de la Sierra; del *Centro de Investigación y Documentación de Desarrollo del Beni* (CIDDEBENI) en Trinidad; del *Centro de Planificación Territorial Indígena* (CPTI) en Santa Cruz de la Sierra; de la Fundación TIERRA de Santa Cruz de la Sierra; de HOYAM en San Ignacio de Mojos y Trinidad y el catálogo del museo del Cabildo de San Ignacio de Mojos; del *Instituto Nacional de la Reforma Agraria* (INRA) de Santa Cruz de la Sierra y Trinidad; de la *Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra* (ABT) de Santa Cruz de la Sierra y Trinidad y por último el *Instituto Geográfico Militar* (IGM) de Trinidad.

En dichos centros, bibliotecas y archivos conté con la posibilidad de consultar los fondos y fuentes bibliográficas y documentales como libros, tesis, revistas; fuentes primarias como son los censos del *Instituto Nacional de Estadística* (INE), informes sobre los saneamientos y concesiones de títulos de tierras, actas; fuentes cartográficas; fuentes estadísticas del INRA, de la ABT o de la CFB (*Cámara Forestal de Bolivia*), además de otras fuentes secundarias, textos legislativos, fuentes *on-line* como portales de internet o *website*. Lo que se ha pretendido con el acopio bibliográfico sobre el objeto de estudio es enmarcar teórica y metodológicamente la investigación así como contextualizarla para estructurar el diagnóstico de la problemática a tratar.

Figura 1. 7. Esquema proceso de investigación



Las estancias en el campo coincidieron con la época seca dado que como ya mencioné, las condiciones climáticas y geográficas dificultan sobremanera el acceso a las comunidades de Mojos al encontrarse estas anegadas durante las inundaciones anuales. Debido a ello, la movilidad en este territorio se ve enormemente condicionada por dichas circunstancias. Además, los suelos son muy arcillosos y el drenaje es muy limitado lo cual incrementa las dificultades para la movilidad. Escogí tales comunidades bajo criterios de accesibilidad.

A parte de las entrevistas semiestructuradas a los corregidores de cada comunidad, por ostentar estos la máxima autoridad que representa a los ignacianos en cada una de las comunidades, éstas las realicé con informantes claves, referidos estos a expertos (sociólogos, antropólogos, geógrafos o ambientólogos) y técnicos de algunas de las organizaciones e instituciones que operan en la región como son HOYAM o CIPCA. A la hora de ponerme en contacto con los informantes clave tuve principalmente en cuenta la opinión que me proporcionaron los expertos en la materia de la que pretendía tener conocimiento. La *bola de nieve* fue indispensable para crear una red de contactos que me posibilitara valorar aquellos informantes que más podían aportar a la investigación, teniendo en cuenta la limitación del tiempo del que disponía. El valor de estas entrevistas sería inestimable para la investigación puesto que me ofrecía la posibilidad de obtener un conocimiento más riguroso que el que en ocasiones conseguí a través de las personas de las comunidades. Y es que es justo reconocer que no siempre colaboraban de la manera que se requería, por la desconfianza que les suscitaba mi presencia.

También me interesaba conocer la visión del otro grupo social protagonista en Mojos con quienes la población indígena mantiene una relación dual. Estos son los ganaderos -de enorme importancia a la hora de enfrentarnos al tema de los conflictos por la tenencia de la tierra- organizados en la Asociación de Ganaderos de San Ignacio, en donde mantuve varias entrevistas con su Presidente -Miguel Arias- así como en la *Federación de Ganaderos del Beni* (FEGABENI) -principal organismo éste del departamento, encargado en asuntos relacionados con la ganadería beniana- en donde pude entrevistarme con algunos técnicos. De primordial importancia fue obtener la opinión de los máximos representantes del gobierno municipal así como de varias de las oficinas municipales (la de cultura y forestal) del mismo San Ignacio, o del Juzgado Agrario, desde donde se coordinaba gran parte de las políticas de gestión pública que afectan al conjunto de las comunidades ignacianas. Por su parte los líderes indígenas aportaron un enfoque fundamental a la hora de comprender los procesos de demandas territoriales frente al Estado. Entre ellos cabría destacar la contribución que supuso las largas conversaciones mantenidas con la presidenta de Mujeres de la *Central de*

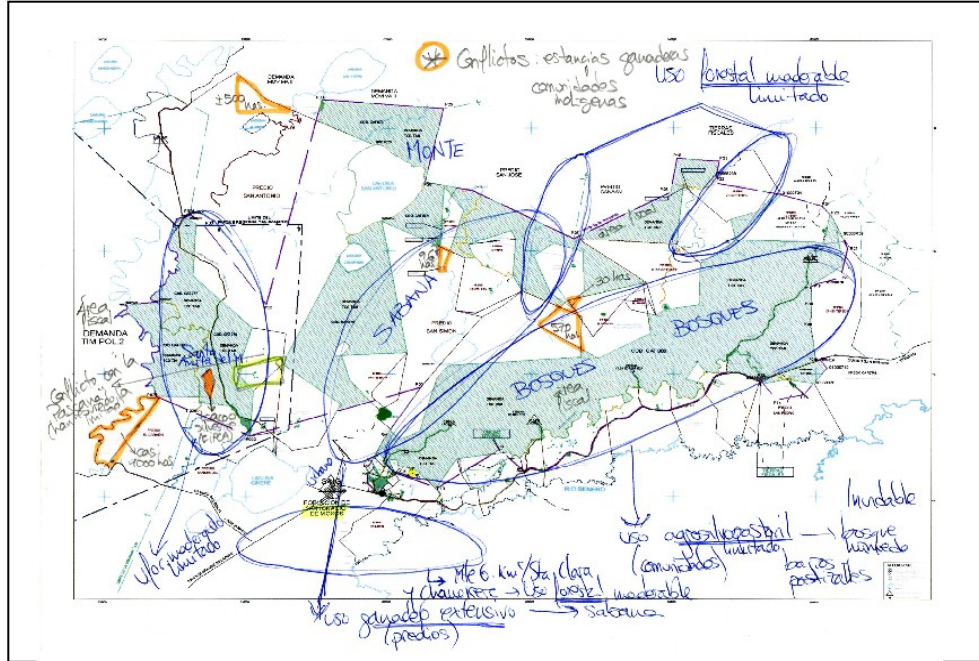
Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEM-B), el presidente de la Subcentral de la TCO TIMI, así como con el secretario de Tierras y Territorio y de Recursos Naturales y con la Presidenta de las Mujeres de la misma organización, con quienes me reuní en varias ocasiones y quienes me facilitaron una revisión muy nítida del movimiento mojeño ignaciano. En total fueron entrevistadas casi medio centenar de personas (véase **anexo 1**), que aportaron su visión principalmente del tema del saneamiento de tierras, del fenómeno de organización y capacitación política que ha tenido lugar dentro del movimiento indígena, de los conflictos y la gestión territorial, etcétera. Las entrevistas constituyeron por tanto, uno de los instrumentos esenciales a la hora de obtener información que de otro modo hubiese resultado sumamente complicado.

Retomando la idea de Honorio Velasco y Díaz de Rada sobre la búsqueda de la totalidad que define el trabajo etnográfico, se nos advierte de la ventaja de seleccionar a los informantes en base a su “*cualificación y su accesibilidad*” (1997: 35). De aquí que las entrevistas con los informantes clave, que en el caso de las comunidades fueron, como mencionaba, los corregidores, se acogieran con mayor interés para los resultados del estudio en cuestión. Posteriormente transcribí las grabaciones de audio del conjunto de entrevistas que realicé, con la finalidad de ser examinadas en profundidad, tanto en lo que se contaba como en lo que se omitía: los silencios desvelaron información importante.

A continuación comentaré el rol de observador participante que adopté durante las estancias en campo. Sin embargo, la observación no pudo por sí misma aportarme la información que requería. Las entrevistas funcionaron en este sentido como complemento, sirviendo para “*comparar las inferencias producidas por las observaciones*” y aquello que se escapa a la observación (Hammersley y Atkinson, 1994: 142).

El retorno al área de estudio en el año 2010 fue enormemente positivo por una razón principal y es que tras la primera estancia comencé a analizar ya de vuelta en España, la información hasta entonces recopilada. Pero al mismo tiempo me surgieron nuevos planteamientos provenientes de nuevas lecturas y de las reflexiones que afloraban a raíz de pensar acerca del trabajo empírico, los que obligaban al menos a una segunda estancia tras la que pudiera dar respuesta a tantos interrogantes. En este sentido cabría destacar las cuestiones ligadas a la cartografía y es que durante la primera etapa conseguí un importante material digital para la futura elaboración de la cartografía en cuestión. Una vez que esta fue elaborada pude mostrarla a los comunarios en las sucesivas visitas a las comunidades, quienes me permitieron completar algunos datos topográficos y sobre todo situar los conflictos más delicados por el acceso a las tierras (véase **figura 1. 8**).

Figura 1. 8. Croquis sobre los usos del suelo y conflictos en el TIMI.



Fuente: elaboración propia

En estos momentos la perspectiva me ayuda a reconocer el valor de la intermitencia entre los periodos de recopilación de la información y la reflexión que de ésta se debe hacer. Me ha ayudado para enmendar errores y para dar tiempo y lugar al surgimiento de nuevos cuestionamientos. Aunque reiterando lo que ya mencioné, hubieran sido necesarias más entradas al campo.

Otro procedimiento metodológico que ha constituido una herramienta primordial de trabajo han sido, como ya comentaba, los *Sistemas de Información Geográfica*. Veíamos anteriormente las limitaciones que emergen en relación a la cartografía. A esto hay que añadir la falta de información existente en cuanto a los SIG del área de estudio en particular, lo cual supuso un gran impedimento a la hora de desarrollar ciertos análisis socioespaciales.

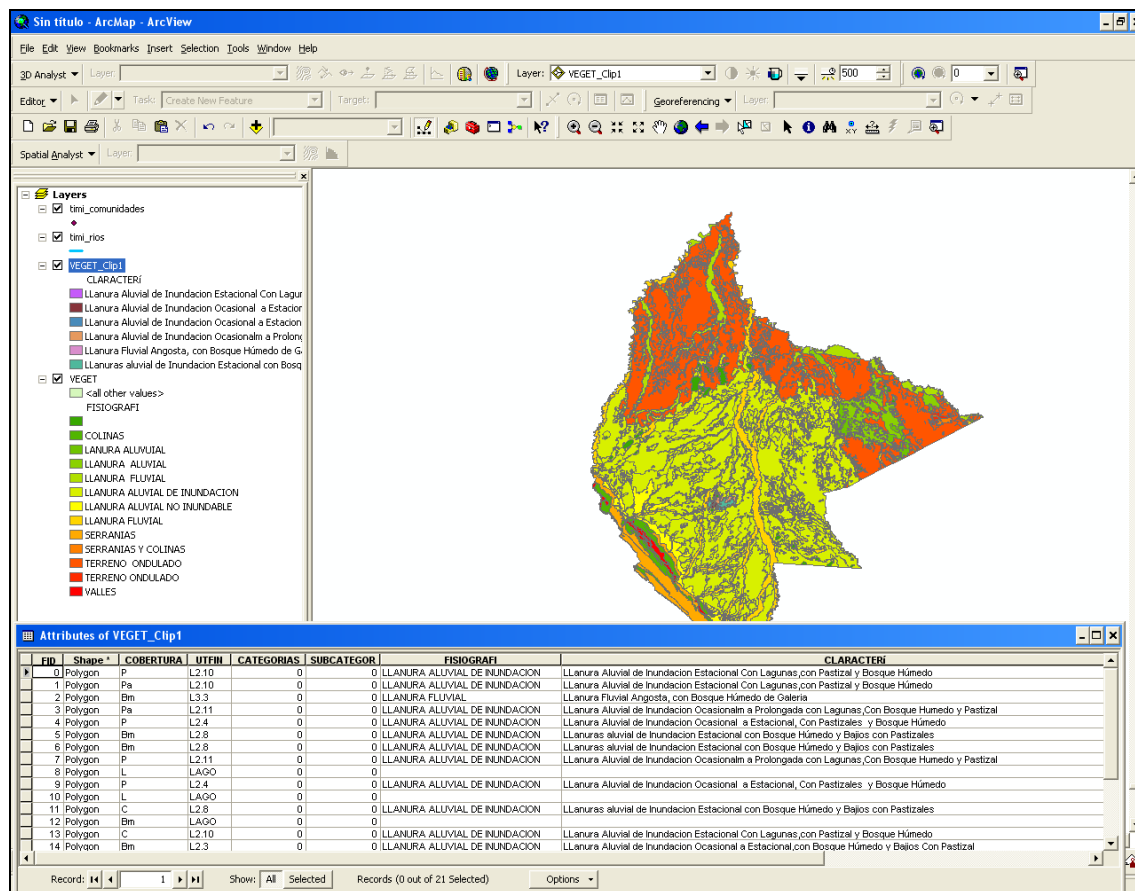
Un SIG viene entendido en una de sus definiciones más tempranas como un conjunto de herramientas utilizadas para capturar, almacenar, comprobar, integrar, mapear, analizar y exponer información espacialmente referenciada de la superficie de la tierra (Department of Environment 1987, cit. en Lindsley, 1997: 157). Para ESRI (*Environmnet Systems Research Institute*) un SIG es un “conjunto de herramientas para la manipulación y la interrogación de las entidades espaciales y sus atributos asociados” (*ibíd.*).

Los *Sistemas de Información Geográfica* han constituido un método de trabajo de gran utilidad para la disciplina geográfica por la gran contribución que supone la representación digital de la superficie terrestre. Este trabajo, pese a las limitaciones,

contiene aquellas salidas gráficas necesarias para comprender el análisis de los conflictos territoriales en Mojos (véase **figura 1. 9**). Para ello el IGM me proporcionó dos hojas del mapa topográfico (20-13 y 20-09, siendo la primera sobre la que más se trabajó por coincidir en mayor medida con el área de estudio) que corresponde a la región mojeña con una escala de 1: 250.000. Si bien, el grueso de la información geoespacial de la TCO TIMI fue facilitada por el CPTI. La proyección y el sistema de referencia de coordenadas o *datum* que utilicé fue la denominada *Proyección Transversal Universal Mercator* (UTM), uso 19 Sur y el sistema geodésico mundial de 1984 (*World Geodetic System 1984*, WGS84). El software utilizado para la elaboración de la cartografía digital fue el ARC/GIS versión 9.3, el cual me permitió recoger la información de las capas relativas a los asentamientos poblacionales, los polígonos de las estancias ganaderas, los caminos, ríos, lagunas, etcétera, así como de la misma TCO, su demanda y la subsiguiente titulación.

Gracias a todo ello elaboré la cartografía correspondiente a la investigación, en particular al área de estudio de la TCO del TIMI. La cartografía se ha ocupado del uso actual de la tierra, la ocupación forestal, vegetación, tanto del departamento del Beni como del propio territorio ignaciano. El software de información geográfica me facilitó el análisis de las dinámicas socioeconómicas. Todo ello con la finalidad de comprender la articulación entre los diversos niveles de interacción de los aspectos biofísicos y las actividades sociales y económicas. Pasé por varias etapas en lo que se refiere al proceso de elaboración cartográfica. En primer lugar diseñé, a partir de la información geográfica obtenida, una base de datos que aportaría la información espacial, la cual tras editar y crear la topología correspondiente fue analizada, explorando las relaciones pertinentes entre los datos espaciales, sus cualidades y atributos, hasta plasmar en pantalla las salidas gráficas definitivas.

Figura 1. 9. Ejemplo de salida gráfica sobre la vegetación del Beni y TCO TIMI.



Fuente: elaboración propia

1. 6. 2. 1. La entrada al campo: fases del trabajo en las comunidades.

Visité 14 de las 19 comunidades que conforman la TCO TIMI²⁶. Aquellas que excluí fueron por motivos prácticos, al ser de gran dificultad la entrada al terreno. Diversas fases sucedían la visita a las comunidades, para lo cual se requería del seguimiento y cumplimiento de un protocolo establecido por la Subcentral del TIMI, máxima autoridad entre los ignacianos:

1. Desde San Ignacio de Mojos, eje político y económico de la provincia de Mojos, acudía a la Subcentral del *Territorio Indígena Mojeño-Ignaciano*, en donde solicitaba una vista con el Presidente de dicha institución. Tras explicarle el motivo de mi investigación éste debía dar el visto bueno a las visitas y estancias en las comunidades de la TCO. Obtenía de esta manera el correspondiente permiso que me autorizaba la entrada al terreno. El secretario de Tierras y Territorio o en su defecto otro miembro de

²⁶ Estas fueron Argentina, Fátima, Bermeo, El Buri, Villa Esperanza, Santa Rita, Chontal, Litoral, Bella Brisa, Nueva Brisa, Algodonal, Monte Grande Km 5, San Miguel del Mátire y San Miguel del Mátire.

la Subcentral, era asignado como acompañante e intermediario entre los comunarios y yo. Tras ello acudía a Radio Mátire, la radio local, donde depositaba un comunicado el cual era anunciado para advertir a los comunarios de mi visita y así poder reunir al máximo número de personas posibles. Hay que tener en cuenta que los chacos se localizan a varios kilómetros de las viviendas familiares y a ciertas horas de la mañana los hombres se encuentran trabajando en ellos. Significa esto que son sólo las mujeres quienes permanecen en la vivienda al cuidado de los hijos y atendiendo las labores domésticas. Por eso, dar aviso era fundamental para encontrarme con el mayor y más variado número de personas posible. Además tuve que contactar con otras organizaciones para exponer las intenciones del estudio así como sus características y las pretensiones que buscaba.

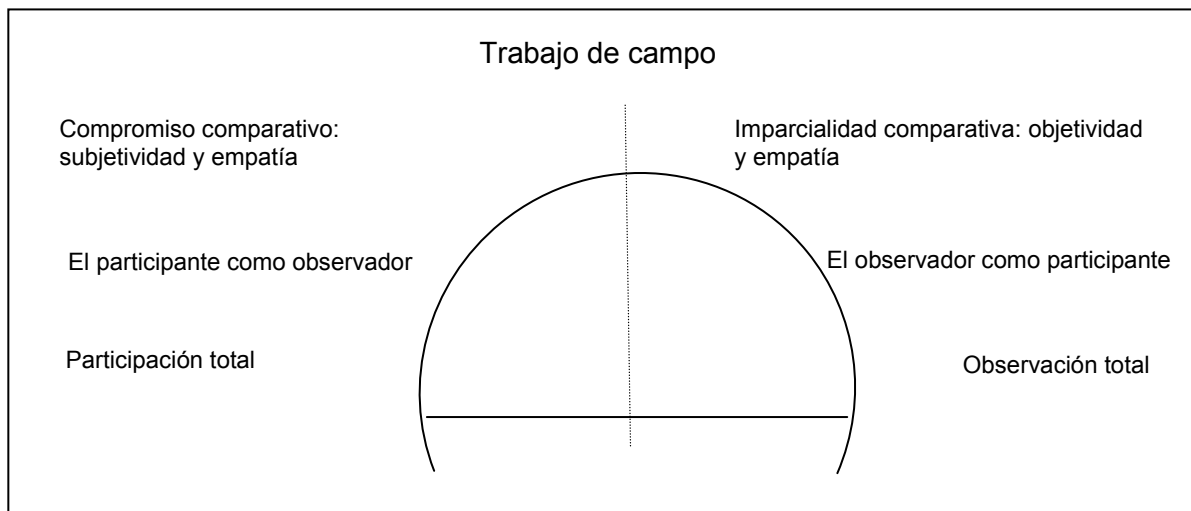
2. Tras la llegada a cada una de las comunidades, el Secretario de Tierras y Territorio me facilitaba el contacto con las máximas autoridades de cada comunidad, es decir, con el corregidor o en su defecto, si éste se encontraba ausente, con el cacique. A estos les explicaba el motivo de mi visita y estancia. Una vez que aceptaban acogerme y facilitarme la información de la que ellos disponían y la cual pudiera interesarme, se convocaba en el cabildo a los miembros de la comunidad a los que se les explicaba nuevamente más la razón de mi presencia.

3. Una vez que me establecía en las comunidades ponía en marcha el conjunto de técnicas de investigación que me permitirían obtener la información deseada para someterla posteriormente a un análisis sistémico. En las comunidades efectué las encuestas de hogar estandarizadas (véase **anexo 2**) a partir de una muestra aleatoria teniendo siempre en cuenta la variable de género. Las encuestas pretendieron constituir una muestra representativa y heterogénea de la población ignaciana, ajustada al tiempo y los recursos de los que disponía. En relación a las encuestas por muestreo no podemos olvidar que constituyen una herramienta de trabajo característica del ámbito euroamericano, por lo que se recomienda precaución al aplicarlo a estudios referidos al mundo en desarrollo (del Val Cid y García de Cortázar, 2005: 17).

Además de las encuestas y entrevistas otra de las técnicas que desarrollé fue la adopción de la actitud de observadora participante (véase **figura 1. 10**). Llevé a cabo observación selectiva y sistemática en situaciones concretas: en las actividades de la vida cotidiana de los habitantes de las comunidades del TIMI, en las relaciones entre los comunarios y otros grupos sociales, en las labores del campo, la pesca, la

recolección, la confección de artesanía, en las fiestas, en las reuniones que transcurrían en el cabildo, etcétera. En definitiva, en su quehacer diario.

Figura 1. 10. Roles teórico-sociales para el trabajo de campo.



Fuente: Hammersley y Atkinson, 1994: 122.

En el cuadro superior se podría añadir un nuevo rol, éste es el de la *participación observante*. Y es que en una investigación etnográfica puede surgir el dilema de involucrarse en mayor o menor medida, lo cual nos hace cuestionarnos hasta qué punto es ética la neutralidad. Debemos plantearnos desde nuestro papel de científicos sociales que el enfoque de ningún modo es inocente. Es más, debemos cuestionarnos si, desde una perspectiva *emic*, los propios indígenas son o no conscientes del significado que los científicos conceden a las categorías construidas socialmente en las que posteriormente basan sus análisis. En este sentido, Balée sugiere la validación de las propias categorías indígenas (*emic*) de clasificación utilizando una metodología determinada encaminada a reconocer los conceptos nativos más que imponer aquellos etnocéntricos (2004).

Pero el rol de observador participante no tiene porqué ir ligado a una posición neutral y objetiva, sino que cabe la posibilidad de tomar partido por aquello que así se considere desde el punto de vista ético y es que “*en la medida en que los objetos del etnógrafo son discursos y acciones sociales llevadas a cabo por personas, la etnografía redefine la objetividad como intersubjetividad*” (Velasco y Díaz de Rada, 1997: 218). En este sentido Sponsel se posiciona a favor de considerar a los indígenas como “colegas” más que como meros informantes por lo que se suma a la reconsideración del papel ético de los investigadores (1995b: 280-281). En este marco de referencia la objetividad o neutralidad no es por más tiempo útil (*ibíd.*, 282).

En otro orden de cosas el hecho de optar por la adopción de uno de los roles no exime al resto, puede darse el caso, en función de la situación en la que nos encontremos, que otros roles puedan ser más convenientes dependiendo del contexto en el que estemos inmersos en cada momento de la investigación. Así lo indican Hammerseley y Atkinson cuando señalan que “*las decisiones sobre el rol que hay que adoptar en el campo dependerán de la investigación y del tipo de lugar en el que ésta se lleve a cabo*” (1994: 126). Otra de las actitudes que estos autores nos proponen es la del “nativo marginal”, la cual se posiciona entre el “extrañamiento” y la “familiaridad” (*ibíd.*). Mi intención en todo momento fue involucrarme con los habitantes de Mojos, lo cual asumí como una necesidad al mismo tiempo que una responsabilidad para el rigor del estudio.

En esta misma dirección valoran Honorio Velasco y Ángel Díaz de Rada el trabajo de campo como proceso de socialización en el que adoptar el “punto de vista del nativo” se convierte en una prioridad que favorece la “sensibilización” hacia la cultura que se pretende estudiar (1997: 26) y en la que en definitiva se aprende a relacionarse. Esto nos permite hablar del extrañamiento, que se convierte en un ejercicio necesario para comprender a la otra cultura ante la que a pesar de acercarse inevitablemente habiendo asumido unas categorías previas (*ibíd.*, 113), debemos enfrentarnos e interaccionar si lo que buscamos es alcanzar su comprensión de la manera más holística posible. En este sentido adquiere tanta relevancia en el trabajo etnográfico el cuestionamiento de aquellos aspectos que no encajan con nuestros propios esquemas cognitivos.

Cabe recordar la reformulación de la hipótesis de partida al que se sometió la presente investigación tras surgir diversas anomalías a raíz de los planteamientos teóricos desde los que se partía y la experiencia empírica vivida durante la fase del trabajo de campo. Lejos de suponer una contrariedad contribuyó a iluminar el proceso etnográfico, enriqueciendo como consecuencia los resultados finales.

Volviendo a las técnicas de análisis, Velasco y Díaz de Rada consideran la observación y la entrevista como dos tipos de producción de la información donde la primera de ellas corresponde a la categoría *etic* por constituir el “*discurso que basa su racionalidad fuera de un sistema*” y la segunda a la categoría *emic*, referida al “*discurso que basa su racionalidad dentro de un sistema particular*” dando lugar a una información que sería el “*resultado de una interacción entre ambos tipos de discurso*” (1997: 34-35). Ambas por lo tanto se complementan, la observación nos permite acercarnos a la realidad mientras que la entrevista “*proporciona sentido a las acciones a veces incomprensibles que se observan*” (*ibíd.*, 34). La combinación de ambas sentó las bases encargadas en dar a conocer el proceso de reconocimiento sociopolítico de los habitantes ignacianos, considerados estos como sujetos activos y

protagonistas de su propia historia y no meros espectadores sobre los que otros narraron sus experiencias vitales.

Aquí entra en juego un aspecto que adquiere notable relevancia por las implicaciones que en sí conlleva toda investigación de carácter etnográfico, y es el fenómeno de la traducción. Debemos ser conscientes de los diferentes discursos que manejamos a la hora de redactar cualquier texto científico, los registros, las formas y el lenguaje varían inevitablemente cuando nos movemos entre uno y otro. Así el investigador hace uso de ciertas herramientas discursivas, de cierta retórica que en ocasiones no da fe de los fenómenos y situaciones sociales que debería describir y es que *“el investigador en realidad transcribe esa experiencia en las categorías y valores de su cultura y en función de los conocimientos de su disciplina”*, o dicho de otro modo, traduce *“una cultura en términos de otra”* (Velasco y Díaz de Rada, 1997: 51), regida esta última por un lenguaje científico ajeno a aquel en el que tienen lugar los procesos sociales objeto de estudio. La equivalencia conceptual es un terreno delicado a la hora de estudiar hechos sociales insertados en esquemas diferentes a los que se manejan en la sociedad del propio investigador. En este sentido Cruces, declara de forma muy ilustrativa que las ciencias sociales *“tratan de generalizar sobre el comportamiento y la acción humana a partir de categorías nacidas en el contexto social del investigador (...)”* (2007: 308). Me remito una vez más a Consuelo del Val Cid y Marisa García de Cortázar para referirme en este caso al problema de la traducción. Estas autoras cuestionan la validez de traspasar los conceptos usados de una realidad social a otra. Al mismo tiempo inciden en *“la necesidad de proporcionar la pregunta elaborada en una lengua original en las mismas palabras cuando es preguntada en una lengua diferente”*, el problema es que algunos conceptos no tienen *“equivalentes en el lenguaje local”* (2005: 25-26). Para resolver estos inconvenientes proponen algunas soluciones como la *consistencia interna* o el *test de estabilidad* (ibíd.). Y Cruces plantea la paradoja que emerge al enfrentarnos a interpretar realidades de contextos ajenos al nuestro propio para lo que señala por un lado que *“se trataría de esforzarse por encontrar las configuraciones de comparación más pertinentes en cada caso (...)”* siendo prudentes dado que *“si exageramos el componente traductivo de la investigación social habremos de renunciar, en última instancia, a nuestras categorías de análisis”* (2007: 312-313). Alerta del peligro de *“reducir la voz del otro”* o de *“vampirizarla en un ejercicio de ventriloquia”* (ibíd., 310).

Retomando el trabajo de campo en sí cabe añadir que los grupos de discusión se realizaron en cuatro comunidades: Bella Brisa, Chontal, Monte Grande Km 5 y Santa Rita. Estos se llevaron a cabo en el Cabildo de la comunidad, espacio simbólico por el

significado que alberga y por ser el lugar en el que se desarrolla el conjunto de actividades que tienen que ver con los asuntos comunales (en el Cabildo se reúnen hombres y mujeres para dar fe de todo lo que afecta a la comunidad). El trabajo con estos grupos focales fue -desde el punto de vista metodológico- esencial a la hora de conocer la experiencia colectiva de las comunidades con las trabajé, por el enriquecimiento que aportó la dinámica de grupo. En estos grupos de discusión tuve también en cuenta la presencia de las mujeres y sobre todo de ancianos y ancianas por constituir una importante fuente primaria de información basada en su experiencia personal. Una vez más Hammersley y Atkinson nos iluminan, esta vez en relación a cómo valorar las entrevistas de grupo, las cuales *“permiten un mayor número de gente a la que entrevistar, tienen la ventaja de que así la situación en la que se produce la entrevista será menos extraña para los entrevistados y les animará a ser más francos”* además de que *“los informantes se incentivan unos a otros a hablar”*, y a pesar de que la situación pueda descontrolarse, para el entrevistador ofrece una visión más amplia del grupo social en cuestión (1994: 161-162). Si bien esto es cierto también lo es el sesgo en las respuestas apartadas por los entrevistados en presencia del resto de comunarios quienes *“contaminan sus respuestas conforme a las normas y valores de su propia sociedad”* (del Val Cid y García de Cortázar, 2005: 31). Este fenómeno era muy habitual que ocurriese, hasta el punto de que algunos ignacianos caían en contradicciones entre las entrevistas personales y los grupos de discusión al sentirse cohibidos a responder con sinceridad cuando el resto de los vecinos de la comunidad se encontraban presentes. Un ejemplo que tiene que ver con lo que venimos tratando son las entrevistas a algunas mujeres, quienes en ocasiones lanzaban una mirada de aprobación a sus maridos antes de responder a lo que se les preguntaba, para asegurarse de esta manera que efectivamente podían responder “libremente”.

1. 6. 2. 2. Dificultades encontradas en el trabajo de campo.

Pero no todo serían buenos resultados. El trabajo de campo constituyó un proceso en el cual fui aprendiendo a medida que éste avanzaba y a medida que se presentaban obstáculos que en ocasiones fueron insalvables. Si bien diseñé un borrador de lo que sería el futuro trabajo etnográfico, éste se vio irremediablemente reajustado a los imprevistos que surgieron. Me vi consecuentemente obligada a acoplarme a un plan de trabajo diferente del que en un principio había planteado y el cual requería ciertos cambios. Tuve constancia de que *“toda investigación es una actividad práctica que requiere el ejercicio de un juicio en el contexto: no se trata de seguir simplemente unas reglas metodológicas”* (Hammersley y Atkinson, 1994: 39).

Uno de los mayores inconvenientes sería el uso de información secundaria que no se adecuó de manera apropiada a la investigación y es que como ya ha sido señalado, no abundan precisamente los estudios sobre las dinámicas sociales en el territorio mojeño-ignaciano. Parte de la información disponible no se acomodaba a los objetivos del estudio, en buena medida por ser incompleta. Pero no sólo, ya que si bien se tuvo la posibilidad de consultar datos secundarios, estos no pudieron ser contrastados siempre que se quiso para valorar su validez y rigor científico.

El acceso a la información podría ser señalado como el principal problema. Una vez más retomo a Hammersley y Atkinson quienes apuntan a las dificultades de la obtención de la información como uno de los principales obstáculos a superar en la investigación etnográfica, así como las negociaciones iniciales, los permisos para la entrada al campo o la actitud con la que se acoge a los investigadores, dado que puede que algunos no estén lo suficientemente preparados para divulgar la información necesaria u otros quizá prefieran no hacerlo por motivos personales (1994: 71 y 95). En muchas ocasiones los comunarios se mostraron reticentes a compartir la información que poseían. La razón de ello es lo delicado de la cuestión territorial y los conflictos que están aún sin resolver entre algunas comunidades ignacianas y las estancias ganaderas que colindan con éstas. La situación a día de hoy continúa siendo delicada y hay que tener en cuenta que en las primeras entradas al terreno, el proceso de saneamiento de tierras se encontraba aún sin completar, por lo que cualquier pequeño movimiento era considerado con gran prudencia. Algunos desconfiaban de mi presencia creyendo que la información que me facilitasen podría ser utilizada en su contra. Si bien no puedo decir que encontrase una actitud hostil, sí que es cierto que mi persona incomodaba a más de uno y que ciertos comunarios se mostraron impasibles a la hora de colaborar. Pero sería injusto generar una imagen de rechazo. La gran mayoría me recibió y acogió con gran respeto y colaboró en la medida de sus posibilidades para facilitarme el trabajo. Por todo lo dicho procuré asimilar con precaución los comentarios de los informantes evitando tomar como verdades absolutas las informaciones obtenidas mediante entrevistas. Ocurrieron varias cosas: se dio el caso de que el entrevistado pretendió dar cierta imagen que no se correspondía con la realidad de los hechos; los entrevistados fueron incapaces de responder o reflexionar sobre las cuestiones que les fueron planteadas y en otras ocasiones incluso se llegó a omitir parte de la información por temor a represalias si ésta salía a la luz. En todas estas situaciones la finalidad debe ser *“interpretar correctamente cualquier tipo de información que caiga en nuestras manos”* (ibíd., 148).

Otra dificultad a la que me enfrenté fue la retórica a la que gran parte de los informantes de las comunidades recurrían. En muchas ocasiones manejaban un

discurso (bien aprendido) cargado de tintes esencialistas en el que ensalzaban la pureza de su identidad étnica frente a la ocupación de los territorios -que consideran de su propiedad por derecho consuetudinario- por parte de los *carayanas*. La subjetividad, el utilitarismo y la carga emocional caracterizaban gran parte de las conversaciones con estos. Por ello fue básica la lectura entre líneas a la hora de llevar a cabo el análisis discursivo. Sin embargo, podemos (y debemos) llegar a entenderlo si comprendemos todo lo que se juegan en el proceso de titulación de tierras. No sólo el hecho de lograr la titularidad de ciertos territorios estaba en juego sino el reconocimiento sociopolítico de un grupo social que ha permanecido en la sombra para el resto de la sociedad nacional durante cientos de años. Además, la situación, como ya he mencionando, es enormemente delicada. La violencia ha actuado en varios niveles de acción: desde los conflictos entre comunidades y estancias; enfrentamientos entre comunarios y funcionarios de algunas de las instituciones encargadas del proceso de saneamiento de tierras (principalmente el INRA); ataques a las organizaciones proindigenistas (caso de CIPCA); expulsión de personas influyentes en el proceso de empoderamiento de la sociedad mojeña (caso de Enric Jordà, párroco de San Ignacio de Mojos) o quema de documentos que demostraban la titularidad de las tierras en Mojos (INRA de Santa Cruz o CEJIS en Trinidad). En mi caso me fue imposible consultar algunos títulos acreditativos de la propiedad de la tierra en el *Instituto Nacional de la Reforma Agraria* en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra puesto que poco tiempo antes de mi llegada, se le prendió fuego a la sede de dicha institución. Sin embargo, en el caso del INRA de Trinidad ocurrió que pese a contar con numerosísimos documentos sobre el proceso de saneamiento en la TCO TIMI, la cual suponía el área de estudio, me impidieron la consulta de estos. A día de hoy puedo señalarla como la situación más frustrante dado que hubiese sido de enorme utilidad para la investigación el haber podido acceder a dichos documentos, cartografía, informes, etcétera, que constituirían una fuente de información trascendental para el estudio de las dinámicas socioterritoriales²⁷.

²⁷ Tras varias idas y venidas a la oficina del INRA de Trinidad donde se me obligó a entregar todo tipo de documentación necesaria para certificar la petición de la información que buscaba (cartas de presentación, carta en la que se exponía los motivos y la finalidad de nuestra investigación, autorización firmada por la Universidad de la que provenía y documentación personal) me fue comunicado que me concederían una cita, la cual tendría lugar días después con uno de los técnicos. Al no recibir respuesta pasado un tiempo razonable, envié varios correos electrónicos en los que insistía en la necesidad de acceder a cierta información pertinente para el trabajo, que consistía principalmente en la consulta cartográfica. Tras esto recibí hasta dos correos más en los que se pedía de nuevo que enviase mis intenciones bien expuestas, lo cual volví a hacer. En uno de ellos concretamente se me comunicó que “*esto llevaría tiempo para su envío distrayendo a nuestro personal de sus tareas asignadas en función de las metas institucionales*”, además de anunciarme el coste económico que suponía la información geográfica que solicitaba. Sin embargo, insistí que aceptaba asumir los costes económicos que me fueran solicitados y detallé que concretamente requería información sobre

Otro de los conflictos en los que me vi inmersa fue la cuestión económica. El hecho de acudir a las comunidades suponía ciertos gastos habituales de transporte: alquiler de motos y combustible, así como el pago correspondiente al conductor de éstas para el equipo (cabe recordar que era acompañada por algún miembro de la Subcentral que actuaba de intermediario entre las comunidades y yo). Además debía cubrir los costes de la manutención del personal. Todo esto son cuestiones lógicas. Sin embargo, cada día que pasaba me era solicitada una suma de dinero cada vez mayor, que llegado a cierto punto no pude hacer frente. En una ocasión, tras mostrarme reticente a pagar cierta cantidad de dinero, mi intermediario renunció a acompañarme más. Lo mismo me ocurrió en alguna institución oficial en la que me ofrecieron el material que solicitaba a cambio de sumas de dinero que no se correspondieron con lo que finalmente me fue entregado²⁸. Los regateos estaban a la orden del día.

No podría afirmarlo con rotundidad pero sí percibí en algunas declaraciones cierta tendencia a no tomarme verdaderamente en serio. Puede que en ello influyese la edad o la identificación étnica (fui objeto de ciertas acusaciones en esta última dirección en calidad de “española” tomado como sinónimo de expoliadora). Por el contrario, no encontré trabas por la componente de género. Una vez más, en este sentido, echo mano de las advertencias sobre el proceso etnográfico provenientes de Hammersley y Atkinson cuando señalan que *“la etnia no es meramente una cuestión de características físicas, sino que también implica cuestiones de cultura, poder y estilos personales”* (1994: 112).

“la fecha de demanda de la TCO del TIMI, el tipo de saneamiento, los actores participantes en el proceso, qué sucede con las 5 comunidades que a pesar de estar afiliadas a la Subcentral TIMI, geográficamente no se encuentran al interior de la TCO (es decir cómo se sanean dichas comunidades), los tipos de propiedad que existen en el interior de la TCO TIMI (comunal, privada, etcétera), así como material cartográfico”. Al continuar sin recibir respuesta me puse en contacto vía telefónica con el director general del INRA quien después de varias conversaciones (en la última la comunicación fue interrumpida de manera brusca sin dar más explicaciones) me iba dando largas pidiéndome que llamase otro día por encontrarse siempre ocupado o reunido, como evidentemente lo requiere su cargo. En esta serie de conversaciones una y otra vez me reiteraban que no entendían lo que se solicitaba, a pesar de haberlo explicado en diversas ocasiones y de diversas maneras: vía telefónica, vía correo electrónico y vía postal (a parte de habérselo explicado a la secretaria de dicha oficina de manera personal la primera vez que acudí a la institución). Sin más intención que dar a conocer esta anécdota por la relevancia que adquiere para el presente análisis y sin pretender acusar o cuestionar el trabajo de nadie, he decidido explicar de manera breve lo que ocurrió dado que lo considero enormemente ilustrativo para hacer ver las dificultades a las que un investigador se expone al trabajar cuestiones relativas a los conflictos territoriales en Mojos. Supuso además un bache que no pudo ser solventado en el proceso de investigación y el cual hubiera aportado una información de gran valor y riqueza al trabajo. Es por este motivo que considero pertinente incluirlo como una de las dificultades del proceso de investigación.

²⁸ A modo anecdótico añadir que en otra ocasión me vi obligada a pagar la suma de 35 dólares por un CD que debía contener cierta información sobre planes de manejo forestal en el TIMI. Cuando comprobé el material me di cuenta que éste incluía una tabla de Excel con información que nada tenía que ver y un DVD de una duración de 7 minutos sobre la situación forestal de Bolivia. En estas situaciones las reclamaciones de nada me sirvieron.

Otra de las problemáticas presentes en este trabajo y a la que hacía alusión anteriormente, ha sido la traducción o la equivalencia conceptual. Y es que, como mencionaba, no siempre las aproximaciones conceptuales que utilizamos son coincidentes en el contexto en el que en realidad trabajamos. Es decir, tanto las encuestas como las entrevistas se prepararon como borrador para dar la posibilidad a la modificación en caso de que fuera necesario. Sirva como ejemplo las preguntas dirigidas a conocer la percepción del paisaje entre la población de Mojos. Una vez que comenzaron las primeras encuestas me percaté de que al formular la pregunta relativa a la valoración del paisaje, ésta no era entendida de la misma manera que yo misma la planteaba, teniendo que ser, como consecuencia, reformulada para poder obtener la información pertinente. Y esto es debido a que los contextos sociales y culturales entre entrevistador y entrevistado no comparten las mismas cuestiones y por tanto responden a estas problemáticas de manera diversa, o bien los significados difieren de una cultura a otra. Por eso los conceptos que utilice puede que no puedan ser traspasados a la cultura mojeña. Es evidente que las nociones de muchos de los términos utilizados en esta investigación no son compartidos por la población de Mojos. Son cuestiones que pertenecen al eterno debate entre el universalismo y el relativismo en las ciencias sociales.

Una dificultad añadida fue la imposibilidad de contactar con algunos personajes claves del movimiento indígena de Mojos. Con ello me estoy refiriendo a los principales líderes, quienes paulatinamente fueron cooptados por las instancias gubernamentales, lo cual redujo mis posibilidades de contacto. De uno de ellos –Pedro Nuni- obtuve respuesta a la cita solicitada meses después de haber vuelto a España. Sus agendas les impidieron atenderme como me hubiera gustado. A esto se unió las marchas que anualmente tenían lugar y las cuales partían en las más de las veces desde la ciudad de Trinidad hacia la Paz, sede del gobierno boliviano. En mi última estancia en el país, la marcha coincidió con parte del periodo en el que me encontraba realizando el trabajo de campo por lo que para ciertos asuntos fui atendida por delegados de la Subcentral o de la CEPEN-B, al encontrarse algunos de los máximos responsables participando en dichas marchas.

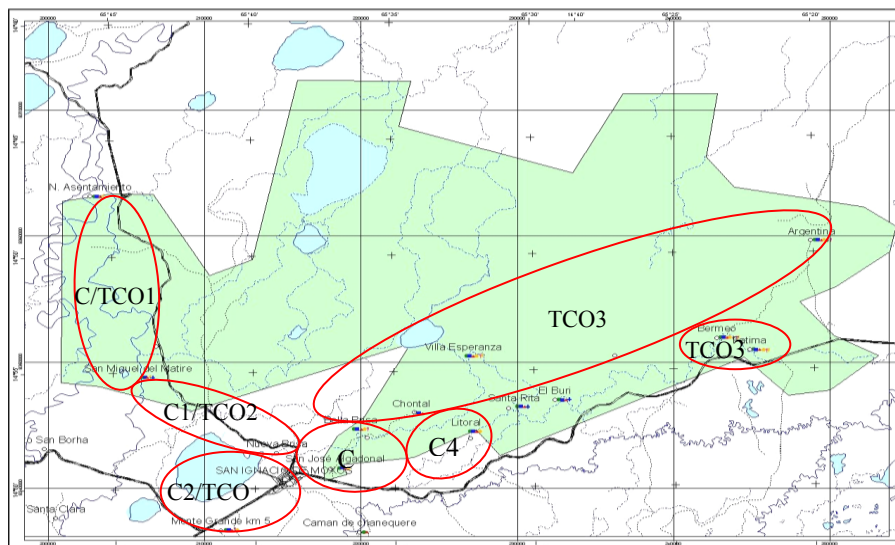
Y sin duda alguna, lo más complicado en cuanto a la obtención de información se refiere, fue el acceso a fuentes cartográficas para elaborar mis propios mapas. Ha sido un camino el cual se podría calificar de tedioso el hecho de disponer de escasa y del todo insuficiente información. Ha sido, indudablemente, una de las cuestiones que más quebraderos de cabeza me produjo. Aunque en este punto debo reconocer la colaboración del CPTI desde donde me proporcionaron todo con lo que ellos contaban, así como el IGM de Trinidad, pese a las trabas que me pusieron y el elevado costo que

me exigieron por dos hojas de un mapa topográfico. Lamentablemente son las únicas fuentes que puedo mencionar. Por dicho motivo, en numerosas ocasiones me he servido de la cartografía ya elaborada por los organismos oficiales que para la provincia de Mojos son, por otro lado, prácticamente inexistentes. Siempre que me fue posible diseñé las figuras que aparecen en este trabajo. Pese a que la cartografía no es el grueso de esta investigación espero que estas dificultades puedan en un futuro ser subsanadas por otros trabajos.

Y por último cabe reiterar el complicado acceso a la región durante los meses de lluvia (de noviembre a abril), durante los que la carretera principal que conecta Trinidad y San Ignacio se convierte en un barrizal. Desde ésta se accede a los caminos secundarios que atraviesan los bosques del TIMI y llegan a cada una de las comunidades. Pero muchos de ellos permanecen prácticamente intransitables. Desde mi experiencia personal puedo narrar brevemente la aventura que supuso alcanzar el pueblo de San Ignacio de Mojos desde Trinidad, separadas ambas localidades por un tramo de apenas 90 kilómetros, los cuales requirieron de 4 días para ser completados, tiempo en el que el camión que nos trasladaba quedó atascado en varias ocasiones, obligándonos a pernoctar en él, con todas las inclemencias que ello conlleva. Finalmente, en la tarde del cuarto día un tractor encargado en arreglar la carretera me permitió completar los últimos 30 kilómetros que faltaban para llegar al lugar de destino.

Esto nos puede ayudar a comprender la razón por la que se hizo imposible acceder a la zona norte de la TCO. Añadido a las dificultades de tránsito se sumaba además la indisponibilidad de aquellos que podrían haberme acompañado. Igualmente influyó el hecho de tener que atravesar por muchas de las estancias ganaderas que actúan de frontera entre el tramo Sur y los bosques más septentrionales.

Figura 1. 11. Zonas del área de estudio a las que se accedió.



Fuente: elaboración propia en base a los datos de CPTI.

En la figura superior aparecen identificadas las secciones a los cuales pude acceder. Aquellos nombrados como “C” se refieren a los tramos de carretera y las estancias y áreas libres de ocupación que en estas zonas se ubican (véase **mapa 6. 4**). Por el contrario, la etiqueta de “TCO” se refiere a las comunidades ignacianas que se encuentran al interior del TIMI y aquellas que aún estando fuera de dicha TCO pertenecen a la misma. De esta manera “C/TCO1” correspondería a la zona que se sitúa entre las comunidades de San Miguel del Mátire y Santa Anita del Mátire, a las que se accede por la carretera principal que va desde Trinidad pasando por San Ignacio y que continúa hasta San Borja. En el tramo denominado como “C1/TCO2” se insertan las comunidades mojeñas de Nueva Brisa, Algodonal y Flores Coloradas, así como otras más de las estancias ganaderas mas próximas a San Ignacio. Éste propiamente se localiza en lo que se ha nombrado como “C2/TCO4” que además incluye la comunidad de Monte Grande Km5, pequeñas parcelas ganaderas y la laguna Isirere -referente geográfico pero sobre todo simbólico, por la leyenda que encierra, de los habitantes de la región-. Por su parte “C3” y “C4” hacen alusión a los tramos de la carretera principal que atraviesa parte de la zona más meridional del TIMI y en donde se asientan, de la misma manera, otra serie de estancias ganaderas. La sección “TCO3” abarca la mayor parte de las comunidades ignacianas: Bella Brisa, Chontal, Litoral, Villa Esperanza, Santa Rita, El Buri, Fátima, Bermeo y Argentina. En este área se localizan además las estancias ganaderas de superficie más extensa y las que más conflictos han hecho surgir frente a los territorios comunales.

En base a este marco general, queda aclarado el propósito de la investigación, la justificación de la misma así como la manera en la que ésta se ha hecho posible (aún con las dificultades encontradas). Esta primera aproximación al objeto de estudio se hace necesaria para entender el porqué de un trabajo como este, su significación académica y el interés que entraña para el conjunto de disciplinas sociales. Con él se ha presentado de manera sucinta el contexto local de Mojos -vinculado con las dinámicas (nacionales e internacionales)- en el que se entrará con más detalle en los próximos capítulos. También se han dado algunas pistas acerca del entramado teórico del trabajo, el cual atraviesa de manera transversal el conjunto del mismo. Doy paso entonces al desarrollo del segundo capítulo: el marco teórico.

2. Marco teórico. Elementos conceptuales.

Son diversas las tradiciones académicas que se han dedicado a teorizar sobre las relaciones entre los grupos humanos y el entorno espacial, sobre las relaciones entre el hombre y la naturaleza. Entre ellas destacan la Geografía Humana, la Ecología Cultural, la Antropología Ecológica o la Historia Ambiental. Sin la intención de excluir ni de dar prioridad a unas sobre otras, este capítulo tratará de integrar las interpretaciones conceptuales que más interesen al marco teórico de la presente investigación.

Antes de sumergirnos de pleno en los contenidos del presente capítulo, cabe aclarar algunos detalles. Tras la consulta y análisis de un amplio conjunto de trabajos provenientes de diversas disciplinas científicas, se ha encontrado una extensa gama de definiciones relativas a conceptos tales como “territorio”, “lugar”, “pueblo indígena”, “originario”, etcétera, los cuales serán examinados en términos relacionales. En algunos casos nos enfrentaremos a significados confusos, poco precisos, opuestos e incluso polémicos, en función de las connotaciones que adquieren en cada uso contextual a partir del marco conceptual en el que se sitúen.

Abordaré toda una serie de categorías analíticas y descriptivas con la finalidad de proporcionar una posterior comprensión sobre los procesos de demandas territoriales que desde finales del siglo pasado están teniendo lugar en Mojos. Procuraré explicar cómo ha surgido el movimiento indígena en esta zona y cómo han generado los mojeños-ignacianos su propio discurso identitario. El pueblo ignaciano define su estrategia colectiva en términos de identidad y sobre la base del territorio. La configuración de una aparece ligada a la configuración de la otra. Es decir, se produce un proceso por el que la identidad y el territorio se articulan en una relación dialógica de reconfiguración continua mutua. Estudiar, por tanto, la manera en la que se configuran y redefinen los conceptos de territorio e identidad en el seno del pueblo mojeño, nos permitirá obtener un campo de análisis definido para concebir de manera integral la problemática social a la que nos enfrentaremos a lo largo de la investigación.

Teniendo en cuenta que la problemática principal que entraña el estudio de los pueblos indígenas lo constituye la cuestión territorial y que ésta aparece inextricablemente ligada a la cuestión identitaria, que a su vez viene definida sobre el espacio geográfico que determina el territorio, dedicaré el presente capítulo a explorar el significado y alcance de ambos conceptos. Además y como bien señala Lazo *“el tema territorio, es el eje central de los conflictos que se suscitan en Mojos”* que *“redefine las identidades étnicas y la transformación del papel de las organizaciones indígenas, su construcción, su praxis, su discurso político y su acción colectiva”* (2007: 6).

Desde nuestra ontología científica forzamos a los procesos sociales que intentamos explicar a ser concebidos en los mismos términos de los que nos valemos para interpretar tales procesos a través de esquemas de significados contruidos por nosotros mismos²⁹. Esto sucede en muchas ocasiones, principalmente cuando nos situamos en otras coordenadas culturales y en otros escenarios geográficos. Somos incapaces de entender los procesos sociales desarrollados en otras culturas lo cual nos empuja a pasarlo por nuestro propio filtro cultural en busca de su comprensión. Nos empeñamos en reducirlos a ciertas categorías analíticas que sirvan a nuestros propios esquemas de conocimiento. Les imponemos una perspectiva epistémica que sea capaz de dar sentido a nuevas realidades a las que nos enfrentamos. Esto es lo que precisamente advierten Blaser y de la Cadena y lo que definen como “impensable”, lo cual en los términos en los que estos lo utilizan vendría a referirse a las construcciones conceptuales aplicadas de manera forzosa en los análisis de los movimientos sociopolíticos indígenas del ámbito latinoamericano. Los instrumentos conceptuales de los que disponemos a la hora de teorizar sobre tales procesos resultan insuficientes, lo cual nos ha llevado a adoptar nuestras propias categorías científicas con la finalidad de lograr una comprensión pretendidamente aproximada (2009). El concepto de cultura es un ejemplo de ello puesto que supone, desde la visión de estos autores, una imposición hegemónica epistémica, al recurrir desde el conocimiento occidental a su uso para invisibilizar ontologías ajenas a la moderna, como sucede con aquellas de las poblaciones indígenas, que quedan reducidas a nuestros patrones de conocimiento (2009: 6-7) porque además la cultura no es algo con lo que se pueda manipular la naturaleza (Escobar, 2000: 118). Este autor, en la misma dirección que Blaser y de la Cadena y en base al trabajo de MacCormack y Strathern (1980) expone que al intentar comprender la manera en la que las poblaciones indígenas y campesinas construyen lo que ellos entienden por naturaleza, no podemos aplicar nuestros propios conceptos de

²⁹ Acerca de los problemas de terminología que surgen en el seno de la etnografía a la hora de explorar fenómenos sociales véase Gluckman, 2004. En un plano similar, Surrallés se cuestiona la incongruencia en la que caemos al tratar de comprender las cosmologías indígenas a partir de nuestro propio lenguaje científico y conceptual (2004).

naturaleza, cultura y sociedad, debiendo analizarlos “*no como entes dados y presociales, sino como constructos culturales*” (1980, cit. en Escobar, 2000: 118). No obstante, se requiere de un conjunto de convenciones o códigos culturales que nos permitan situarnos en un plano de conocimiento sin olvidar que las categorías que manejamos son socialmente construidas.

Sin dejar de reconocer la artificialidad de las categorías manejadas desde la academia, Paul Cloke y Ron Johnston entienden la necesidad de hacer uso de ellas para explicar el mundo en que vivimos concluyendo que éstas, pese a las simplificaciones que establecen, son necesarias (2005). Su aplicación deriva de la necesidad imperiosa de simplificar nuestro mundo para lograr su comprensión, de lo que resultan las divisiones binarias de clasificación. La comprensión de los procesos sociales se hace más fácil si se nos aparece de manera simplificada a partir de nuestras operaciones mentales y capacidad cognitiva aunque y como bien indica Descola, “*la categorización no debería ser reducida a meras clasificaciones taxonómicas*” (2001: 112).

A pesar de las limitaciones que reconozco existentes y teniendo siempre en consideración los postulados de los autores anteriormente citados, la presente investigación procurará alcanzar una comprensión lo más rigurosa y fiel a la realidad mojeña. Para ello haré uso de ciertas herramientas conceptuales que faciliten el correspondiente análisis de las dinámicas territoriales en Mojos.

2. 1. APROXIMACIONES CONCEPTUALES: TERRITORIO, ESPACIO, LUGAR.

Son diversas las categorías que maneja esta investigación. Conceptos como espacio, tierra, territorio, lugar, entorno o región serán continuamente mencionadas. De acuerdo con la perspectiva que se le pretenda dar entrañan una complejidad específica. Jacobo García Álvarez lo expresa muy bien al señalar que:

“Cualquier espacio geográfico conforma simultáneamente, dependiendo cómo se contemple, un paisaje, un territorio, una región, es espacio geométrico, un punto en una red más amplia de relaciones, un centro o una periferia en la división espacial del sistema político y económico. Lo esencial, por lo tanto, estriba en dilucidar la lógica más adecuada para el objetivo concreto que persigamos” (2006: 54).

Ahora bien, no siempre se ha tenido en consideración la conexión con el marco sociopolítico en el que se inscriben. No son, por tanto, independientes en absoluto a éste. Todas ellas poseen un significado particular vinculado al tipo de relaciones que desde su propio ámbito se despliegan. El hecho de ser categorías construidas

socialmente nos lleva a pensar que son además cambiantes, móviles y que se encuentran en constante reconfiguración.

Las diversas categorías a las que nos enfrentamos, como bien señalan Montañez y Delgado, no constituyen categorías de análisis neutras o vacías de contenido, sino que por el contrario son “*expresiones de la especialización del poder y de las relaciones de cooperación o de conflicto que de ella se derivan*” (1998: 120). De esta manera podemos considerar que dotan de contenido a las estructuras de poder que en base a ellas se articulan³⁰. Tales estructuras obtienen su legitimidad cuando actúan y se reconfiguran sobre un espacio territorial específico. Es por esta razón que se ha pasado a entender el espacio así como el territorio como categorías construidas históricamente (Montañez y Delgado, 1998; Farinós, 2005). Del mismo modo el lugar y el espacio han sido entendidos como creación histórica (Escobar, 2000; Gupta y Ferguson, 1992).

Los grupos sociales juegan un rol determinante en dicho proceso. Son estos quienes dan forma a dichos conceptos. Es en el escenario que conforma el territorio en el que se suceden los conflictos entre los diversos grupos sociales que se disputan su ocupación. Al mismo tiempo, la interacción resultante permite la configuración del espacio. Milton incluso considera que es en el territorio donde se produce la mediación ente el mundo y la sociedad nacional o local (2000: 288). Claval por su parte anuncia que el espacio ha sido entendido por la geografía como el “*estudio de la inserción de la sociedad en la naturaleza*” (2002: 23). Y es que los grupos sociales confieren identidad al lugar que habitan y del que se apropian, lo cual conduce a tratar la cuestión de las identidades territoriales.

En opinión de David M. Smith –quien utiliza sin sustanciales distinciones los conceptos de territorios, lugar y espacio- ocupar territorios es esencial para la supervivencia humana, por lo que es de total necesidad; sin embargo, esta ocupación puede darse de dos maneras: mediante un acceso exclusivo por el que un único grupo social mantiene el control territorial o a través de la ocupación por parte de varios grupos del mismo espacio geográfico lo cual puede desencadenar conflictos por la posesión de los recursos y el manejo de la tierra (1990).

³⁰ Sobre un estudio de las espacialidades del poder desde la Geografía Humana véase la parte 4 de Massey, Allen y Sarre (1999) y como síntesis, la introducción a dicha sección en donde se muestra el resurgimiento del interés por las relaciones de poder en el marco de la Geografía. La mayor parte de este conjunto de investigaciones de tendencia posestructuralista, se inspira en los planteamientos de Foucault acerca del ejercicio del poder, de Giddens o Max Weber. En concreto, Agnew centra su análisis en la geopolítica del poder, que –según el autor- pivota en varios presupuestos, siendo el más importante el ejercicio del poder por parte del Estado-nación quien por medio del establecimiento de fronteras, determina la soberanía territorial y delimita un espacio geográfico fijo el cual no tiene porqué definirse por su papel integrador sino que en muchas ocasiones lleva a cabo políticas de exclusión frente a minorías (1999). Un planteamiento similar es el que aparece en el trabajo de Gupta y Ferguson (1992) quienes destacan el papel del Estado en la creación de sociedades nacionales adscritas a un territorio delimitado por fronteras, que en realidad no tienen porqué ser coincidentes.

Tampoco queda clara la distinción que establece Eugenia Ramírez al referirse a conceptos como espacio, entorno o lugar, que utiliza indistintamente al afirmar que:

“nos desarrollamos en un entorno (...) Contribuimos a crear el espacio (...) por medio de nuestras propias prácticas consolidantes o transformativas del entorno (...) Estos lugares son siempre sociales. Primero porque son socialmente contruidos, compartidos, contestados, negociados, etc. y, segundo, porque producen socialidad, relación, interacción” (2007: 278).

No obstante, sí distingue del todo entre el espacio y el territorio, el primero referido *“a una dimensión de nuestro universo y nuestra extensión en el mismo”* mientras que la segunda categoría aparece asociada al sentido de la apropiación, al control y dominio del mismo (*ibíd.*, 280) lo cual está estrechamente conectado con la cuestión del poder.

Esta consideración es del todo relevante puesto que nos permite reflexionar acerca de la perspectiva temporal y geoespacial así como del estudio de la escala –ya sea ésta la nacional, local o regional- (Montañez y Delgado, 1998). De acuerdo con esta idea, Radcliffe y Westwood señalan que la interacción producida de las diversas escalas de acción desarrolladas tanto desde el Estado como por los actores sociales, ha permitido reconfigurar el mapa de los estados (pluri)nacionales (1999: 45). Farinós aclara la división escalar aplicada desde Ritter al análisis del espacio en la síntesis geográfica, la cual atiende a diversos niveles bien delimitados (local, regional, mundial) y que, con sus propias bases metodológicas, la Teoría General de Sistemas³¹ se encargó de impulsar de manera más nítida pese a que su perspectiva fuese posteriormente replanteada por la geografía posmoderna (2005). No obstante, el fenómeno de la mundialización articula todo el conjunto de escalas (Lévy, 2010: 84).

Para Montañez y Delgado *“toda relación social tiene ocurrencia en el tiempo y se expresa como territorialidad”* siendo *“el territorio el escenario de las relaciones sociales y no solamente el marco espacial que delimita el dominio soberano de un Estado”* con lo que es en el espacio donde los individuos y los grupos sociales despliegan sus estrategias de apropiación, lo configuran y redefinen en función de los procesos sociopolíticos en los que se ven involucrados y a los que a la vez dan forma (1998: 122). La actividad espacial se configura entonces a partir de la interacción de los agentes que participan y operan en dicho proceso y que se involucran y conforman un entramado de relaciones sociopolíticas y espaciales. Los conceptos de espacio, lugar, territorio y territorialidad, serán desentrañados en los siguientes epígrafes. Damos paso a ello.

³¹ Este marco conceptual considera, en palabras del propio Farinós, *“los territorios como estructuras que reflejan el estado del sistema”* (2005: 226).

2. 1. 1. Geografías del lugar; Geografías de la identidad.

En trabajo que ha resultado de gran interés para este trabajo es el de Radcliffe y Westwood, quienes hacen hincapié en los planteamientos que desde las geografías posmodernas se vienen realizando cada vez con mayor intensidad acerca del vínculo lugar-nación-identidades (1999). La disciplina geográfica se ha lanzado a explorar en mayor profundidad los sentidos de lugar relacionados con cuestiones identitarias entre las comunidades locales. Distintos sentidos del lugar han comenzado a ser teorizados. Se ha dejado atrás la consideración del lugar y el espacio como receptáculo pasivo que adquiere sentido a partir de los procesos sociales que le confieren significado para atender a las ideologías y discursos cargados de contenido político inscritos en el lugar (Keith y Pile, 1993). No es por tanto casual que Clara Copeta abogue por la relación “Identidad/Geografía” entendiendo que la categoría (descriptiva) de la identidad adquiere una nueva dimensión fundamental en el análisis del territorio y del paisaje (2009)³².

Para científicos como Chirif y García Hierro, el territorio constituye el referente más importante para la identidad colectiva de los grupos indígenas (2007: 27). Como se verá a continuación, cuando centremos nuestra atención en la cuestión identitaria, el concepto de *identidades territorializadas* aparece asociado en buena medida a las *geopolíticas indígenas*, motivo por el que algunos autores se atreven a afirmar que “la geografía está siendo convertida en un referente irrenunciable de la identidad en cuanto parte de las memorias y cartografías del poder indígena” (Mamani, 2005: 119). Una *geografía de las identidades* ejercerá, por tanto, de marco conceptual de la investigación.

Para Martín López y Giménez Benítez, los territorios -entendidos estos como espacios en los que se articula todo un complejo entramado de relaciones sociales que configuran identidades opuestas- albergan diversos ámbitos y entre ellos los lugares (2009). Las *geografías de la identidad* y los *imaginarios correlativos* (Radcliffe y Westwood, 1999) han propiciado el análisis teórico del vínculo existente entre las categorías de identidad y lugar. Las *geografías de la identidad* –o los “espacios de representación” en términos de Lefebvre³³- se refieren al sentimiento de pertenencia que los individuos adquieren en la cotidianeidad frente a determinadas espacialidades subjetivadas; por el contrario los *imaginarios correlativos* desde una perspectiva

³² Copeta repasa sucintamente la relación entre la identidad y el lugar desde los trabajos de Paul Vidal de la Blache; mientras que en los años 50 y 60 se concedió prioridad al vínculo entre identidad y región, en la década de los 70 y 80 se volvió a explorar el concepto de identidad de acuerdo al lugar, habiendo sido éste redefinido, lo cual favorecería que la identidad sea entendida en términos relacionales (2009: 17-19).

³³ Los *espacios de representación* son aquellos espacios vividos, a diferencia de la *representación del espacio* entendido éste como espacio concebido (Keith y Pile, 1993; Agnew, 2005).

posestructuralista posibilita un marco de interacción entre las subjetividades y los espacios locales (*ibíd.*, 51-52). De esto se trasluce que los procesos de articulación identitaria se experimentan y se viven como propios en el ámbito espacial. Es decir, la identidad emerge en el marco geográfico, ambiental, psicológico y cultural de cada sociedad, en el seno donde los grupos humanos interactúan. Esta idea reitera el porqué de este trabajo, el porqué vincular el estudio de la identidad con el lugar, con el territorio. Sin ir más lejos, el pueblo mojeño ha negociado su identidad en un contexto interactivo frente a otros grupos sociales pero sobre todo en un proceso de interacción con su medio ambiente lo que le ha permitido la construcción de un *lugar*, de un *espacio local* politizado, cargado de significado ideológico y cultural.

Desde la geografía se apostó por las *políticas del lugar* en respuesta a las *políticas del poder* para referirse a las acciones que en el día a día se desarrollan en el espacio local (las dinámicas socioculturales, económicas y ambientales) sin tener porqué asimilar las políticas provenientes del nivel estatal (Gibson-Graham, 2006; Keith y Pile, 1993; Massey, 1994, 1993; Radcliffe y Westwood, 1999). Las políticas basadas en el lugar pueden contribuir a la construcción de prácticas basadas en la diferencia y a la aparición de espacios sionaturales alternativos (Escobar, 2008). Toda esta serie de trabajos tendieron a considerar lo local como algo relacional y no simplemente como escala de análisis. Pero sobre todo tendieron a pensar en el lugar como espacio en el que se articulaban las relaciones sociales, dinámicas y cambiantes.

Escobar, quien reconoce y valora el aporte de la geografía económica y política en la reinterpretación del lugar (*geografía del lugar*) (2010b: 139, 2005: 163), sugiere, en base al trabajo de David Harvey, que es el momento de tener en cuenta que “*las personas y sus ambientes, los lugares y las identidades, son constituidos mutuamente*” (1999, cit. en Escobar, 2010b: 139) dado que tanto la experiencia de los individuos como la colectiva se desenvuelven en un lugar. Esto ha llevado a señalar que “*la identidad personal y cultural está atada a un espacio; un toponálisis explora la creación de la identidad a través del lugar. La experiencia geográfica empieza en lugares, alcanza a los otros a través de espacios y crea paisajes o regiones para la existencia humana*” (Tilley, 1994: 15, cit. en Escobar, 2010b: 135). Y es que para Escobar adquiere enorme interés tener en consideración las dimensiones culturales del espacio (2010b: 169) llevándole a aceptar la idea de que “*la cultura se asienta en lugares aún cuando de ninguna manera se restringe a estos*” (Basso, 1996, cit. en Escobar, 2010b: 141) razón por la que este investigador apuesta por el diálogo entre la Antropología y la Geografía, encaminado a enriquecer ambos campos de investigación. De ahí que otras disciplinas también se interesasen por la perspectiva del lugar y por la

conexión entre identidad y lugar como sucedió en el campo de los estudios antropológicos³⁴.

Lindón en su defensa por el diálogo interdisciplinar entre la Geografía y otras ciencias advierte la afinidad de ésta con otros campos, como lo es el desarrollo local gracias al que podemos encontrar nuevas definiciones de territorio como “*aquello que permite cristalizar y producir sinergias entre los actores, sus acciones colectivas, las identidades para que de allí emerja lo local y el desarrollo local*” (Klein, 1997 y 2006; Klein y Fontan, 2003 y 2004, cit. en Lindón, 2010: 31).

Una magnífica compilación de Andreu Viola sobre estudios de desarrollo incluye algunos artículos que desmantelan la *naturaleza del lugar* (2000). Este conjunto de trabajos instan a considerar el conocimiento local, defendiendo la idea de la inconveniencia de la naturalización de los lugares, siendo más adecuado, desde su visión, su deconstrucción, con lo que se podrían atender los procesos identitarios sin deslegitimar los territorios. Consistiría, por lo tanto, en reinventar el pensamiento y las teorías según la lógica de las culturas asentadas en los lugares. Esto quiere decir, pensar desde la perspectiva del lugar para enterrar la división binaria naturaleza-cultura, que ha perdurado por tanto tiempo en el conjunto de disciplinas científicas.

Si debemos reconocer una meditada y del todo precisa reflexión acerca del lugar ésta se encuentra en el trabajo de Noel Castree (2004). Su investigación cuestiona varios dogmas que han sido del todo aceptados en relación a las representaciones del lugar las cuales han dominado el campo de la Geografía Humana. Noel se atreve incluso a discutir los planteamientos de algunos geógrafos humanos vinculados a las corrientes más críticas³⁵. Su intención se dirige a restituir la posición analítica que la categoría de lugar había perdido para redefinirla en términos relacionales, lo cual se enmarca en la perspectiva que él viene a denominar como “geografía diferenciales”³⁶

³⁴ Véase Escobar 2000; 2010b, 2005; Gupta y Ferguson, 1992; Appadurai, 2001 y Augé, 1995. Estos trabajos reconocen la importancia del análisis desde un enfoque que tenga en consideración lo local aunque, como matiza Escobar, la deriva de dichos trabajos a los procesos de desterritorialización, ha llevado a algunos investigadores a perder de vista la dimensión del lugar y las prácticas basadas en éste (2010b: 140).

También los estudios feministas han llamado la atención sobre la manera cómo las relaciones de poder moldean la identidad (Rose G., 1993). Rose habla de los espacios de resistencia que no son tales sino más bien nuevas maneras de repensar el poder, el espacio, la identidad, de manera diferente. Es otra modalidad del “tercer espacio” de la que hablaba Soja.

³⁵ Castree parte de los trabajos de reconocidos geógrafos como David Harvey, Doreen Massey o Michael Watts por ser estos algunos de los más influyentes en el ámbito de la Geografía Humana crítica y porque a partir de sus trabajos se logra abarcar una buena parte de los estudios más significativos dedicados a teorizar sobre la categoría del lugar (2004). En síntesis: Watts presta atención a la identidad del lugar; Massey enfoca su análisis en la naturaleza de los lugares; mientras que Harvey, por su parte, explora el campo geográfico de la justicia entre agentes (2004). En esta investigación aparecen menciones al antropólogo Arturo Escobar, del que se valoran sus contribuciones al estudio del lugar advirtiendo que ha constituido un aporte fundamental para la “resurrección de la localidad” (*ibíd.*, 141). Volveremos más adelante a ello.

³⁶ Ésta es una noción defendida también por Harvey (1996).

(2004). El término relacional apunta al modo en el que muchos grupos sociales no actúan bajo parámetros binarios, como ocurre en el caso de los pueblos indígenas quienes actúan en términos relacionales³⁷. Las *geografías diferenciales* se definen por oposición a las “geografías de la desposesión”, aquellas que han protagonizado la historia colonial y por la que tantos pueblos indígenas se vieron despojados de los territorios habitados y que ahora, buscando revertir este fenómeno, hacen suyos (*ibíd.*, 136). No obstante nos previene de los riesgos de asumir un enfoque de análisis local. En ocasiones, se ha dado como resultado la exclusión de quienes han contribuido a constituir esos lugares que ahora son pretendidos por aquellos que los consideran propios al considerarse a sí mismos los auténticos y por tanto legítimos dueños (*ibíd.*, 149). De ahí que Castree abogue por la translocalidad que pueda aplacar estos efectos, la cual está presente del todo en el indigenismo (*ibíd.*, 156 y 163).

Otra de las alertas acerca de la aparición de efectos adversos en el proceso de producción de lo local lo constituye el ejemplo de las poblaciones *yamomani* de Brasil, las cuales Appadurai se ha dedicado a explorar (2001). Se han dado casos en los que poblaciones indígenas han sido *localizadas* por los estados quienes se esfuerzan en tener bajo su control y dominio al conjunto de la población (más si cabe a aquellas en las que pueden aparecer conatos de resistencia) lo cual ha facilitado la explotación en dicho lugar. En Mojos, la titulación de los territorios comunales a favor de las comunidades indígenas que allí habitan constituiría un claro ejemplo. En la opinión de Wilder Molina, en Bolivia ha sucedido que el resultado de la concesión por parte del Estado de derechos colectivos a las poblaciones indígenas, ha sido la *localización de las mismas*, lo cual acentúa consecuentemente su sedentarización y la disminución de los movimientos poblacionales (entrevista).

A tenor de ello, es interesante la reflexión de Escobar acerca de la defensa que del territorio hacen numerosas comunidades y la cual implica la defensa de toda una serie de relaciones sociales y culturales basadas en el lugar, haciendo emerger entre las comunidades indígenas el factor de la territorialidad como uno de los elementos centrales para las políticas del lugar (2008).

En una dirección muy concurrente con el trabajo de Castree, Arturo Escobar lleva a cabo una pausada reflexión acerca de las contribuciones de la perspectiva del lugar. El antropólogo recupera los debates sobre el lugar, noción que ha sido redefinida por distintas disciplinas en los últimos años, desde la antropología ecológica y la geografía

³⁷ Una apuesta por la redefinición de las categorías binarias y la adopción de epistemologías relacionales en el seno de la Geografía Humana se encuentra presente en el trabajo de Massey, Allen y Sarre (1999) en donde se propone pensar en términos de relaciones para hacer frente a las constricciones del pensamiento binario.

posestructuralista, a los estudios culturales, la ecología política, los estudios feministas y en definitiva, la teoría social³⁸.

Escobar apunta al concepto de “atopía” para criticar hasta qué punto el lugar había sido ignorado y lo define como “*experiencia de una locación en particular con alguna medida de anclaje (inestable, sin embargo) y de conexión con la vida cotidiana, aún si su identidad es construida, atravesada por el poder, y nunca fija*” (2010b: 130). La idea de poder tampoco pasa, por lo tanto, desapercibida en el trabajo de Escobar. Un aspecto que entraña especial interés en los planteamientos de este autor, vinculado con los movimientos sociales de carácter eminentemente ambientalista, es el fenómeno articulador de las formas de política cultural que se viene desarrollando en el lugar. Esta visión concede una alternativa crítica al poder, sin olvidar que tampoco los lugares son ajenos a la configuración de determinadas estructuras de poder en su seno (2000: 128-129; 2010b: 157), lo cual sería enormemente ingenuo de pensar.

Su intención va dirigida a reconocer el papel del lugar, el cual había quedado relegado a un segundo plano -en el contexto de la globalización-. El lugar había sido subordinado al espacio, el cual, enmarcado en los estudios de la modernidad, contribuyó a la invisibilización de formas subalternas de conocimiento y de los modelos culturales de la naturaleza -que amalgaman el ámbito biofísico, el humano y el supernatural vinculando el lugar, la naturaleza y la cultura- (2000: 115-119, 125, 133; 2010b: 147).

La pretensión de Escobar es recuperar la perspectiva del lugar en la exploración de dichos modelos, los cuales son abordados poniendo el énfasis en el conocimiento local³⁹ (2000). Este autor pone especial interés en la concepción de la localidad y la importancia del lugar frente al espacio -ambos establecen la asimetría global

³⁸ La Ecología Política sirve a Escobar como área de estudio interdisciplinar y marco conceptual para abordar, entre otras cuestiones, la relación entre naturaleza y cultura o entre espacio, lugar y territorio e identidad, las cuales se construyen en términos relacionales (2010a). En este trabajo presenta un amplio catálogo de epistemologías de la naturaleza: constructivismo dialéctico, interaccionismo constructivo, perspectivas fenomenológicas, anti-esencialismo pos-estructuralista, neo-realismo de Deleuzian y realismo holístico (2008; 2010a; 2010b). Lo más interesante para este trabajo es la definición de naturaleza en base a la distinción entre la epistemología positivista que reduce a aquella a una existencia previamente dada frente a la epistemología constructivista que cuestiona la definición de naturaleza como algo unitario y eterno independiente a las sociedades humanas, lo cual da como resultado para Escobar la imposibilidad de explorar las relaciones naturaleza-cultura desde un enfoque positivista que no tenga en cuenta la dimensión relacional entre ambas variables al verse atrapada en una lógica binaria, cartesiana, dualista (2010a: 5-6).

³⁹ Escobar, inspirado en otros trabajos, considera el conocimiento local como “*una actividad práctica, situada, constituida por una historia de prácticas pasadas y cambiantes*” (Hobart, 1993: 17-18; Ingold, 1996, cit. en Escobar, 2000: 123) además de constituir “*un modo de conciencia basado en el lugar*” (ibíd., 125).

(espacio)/local (lugar)⁴⁰ - que ha configurado el análisis metodológico en el marco de la globalización, a diferencia del lugar que representa “lo otro de la globalización”, la cual debe ser repensada (2000: 127-128). Si en este trabajo Escobar opone el lugar al espacio, en un estudio posterior rectifica y aclara que no se debe considerar el lugar como “*«el otro» del espacio –el lugar como lo puro y lo local en oposición a la dominación del espacio global- dado que el lugar está ciertamente conectado con, y en cierta medida está producido por lógicas espaciales*” (2010b: 141, 2005: 163). Incluso llega a admitir “*un sentido global del lugar*” en los términos utilizados por Massey (1997, cit. en Escobar, 2005: 166). Puede que esta rectificación se deba a una reflexión acerca de lo que él mismo se empeña en redefinir, es decir, las esquemas binarios que en ese caso se reflejan en la dicotomía global-local. Si bien es cierto que Escobar apuesta en sus trabajos por la adopción de un enfoque translocal en los términos en los que se refiere el propio Castree.

Y es que la definición de lugar no está, por consiguiente, exenta de polémica. Radcliffe y Westwood reconocen la amplia gama de matices que adquiere dicho concepto en el que en ocasiones se toma en consideración el elemento identitario o la superposición de lugares que genera la competencia entre aquellos implicados, los espacios habitados por los grupos humanos o los sentimientos de comunidad y pertenencia vinculados con tales lugares (1999: 168). Pero no podemos ocultar las estructuras de poder, las relaciones sociales que interactúan y se generan en estos y los conflictos consecuentes y las negociaciones o imposiciones por su ocupación. En este sentido Harvey advierte de la importancia que encierra el localizar y contextualizar los procesos sociales puesto que “*la asignación de lugar dentro de alguna estructura socio-espacial indica roles distintivos, capacidades para la acción y el acceso al poder*” (1996: 265).

Con respecto a esta idea, Agnew aclara que el planteamiento por el que se concibe al espacio como opuesto al lugar es propio de la modernidad durante la que se consolidó la polarización entre ambas nociones y propició que se aceptara que una y otra representasen diferentes tipos de espacialidad en vez de asentarlas en un plano relacional y reconectar dichos conceptos que en muchas disciplinas se consideran sinónimos (2005). El espacio se asociaría con la localización en algún lugar y el lugar por el contrario con la ocupación de dicha localización, constituyendo un espacio vivido, más específico que el espacio en sí (*ibíd.*, 82). Argumenta que la oposición entre ambos conceptos debe ser superada puesto que ambos se definen en su interacción (2005) y propone dejar de concebir al espacio en relación a lo general y universal frente

⁴⁰ Se asocia el espacio con el capital, con la historia, mientras que el lugar aparecería relacionado con las culturas y minorías locales, con la tradición, con lo local (Escobar, 2000: 128; 2010b: 130).

al lugar asociado éste a lo específico y local (2006: 51). El trabajo de Agnew enfatiza la percepción del individuo en el estudio del espacio. Conforme a ello Neil Smith y O'Keefe cuestionan la acepción del espacio como un ente abstracto universal y desde una reflexión marxista (según estos geógrafos, Marx criticó la fetichización del espacio por parte de la Geografía) apuestan por conceder una perspectiva histórica al “espacio” y de esta manera, tenerlo en consideración al tratar la transformación de la naturaleza por parte de las sociedades humanas (1980: 37) cuestión en la que incidiré posteriormente.

Y al hilo de estos últimos planteamientos, cabe resaltar para finalizar este apartado el énfasis en la diferencia entre las categorías de lugar y la de espacio. Conforme al trabajo de Molina, Vargas y Soruco esta última se define por una mayor abstracción que el lugar, más vinculado éste con lo particular, con lo local (2008). En la misma dirección marcan Ellison y Martínez Mauri la diferencia en la abstracción a la que conduce la noción de espacio frente a aquella de lugar, más experimentada por las personas, más tangible, más cercana y, en definitiva, más concreta (2009).

2. 1. 2. Reflexiones acerca del “espacio” y “territorio”.

A continuación doy paso al análisis de algunas categorías analíticas a las que este trabajo se referirá reiteradamente. Las que más nos interesan son dos fundamentalmente: “espacio” y “territorio”. Veremos que si bien en numerosas ocasiones son utilizadas de manera indistinta, no tienen porqué poseer el mismo significado ni definirse en términos equivalentes, aunque en muchos trabajos, se confundan. Concretamente en la presente investigación, el territorio será definido como espacio geográfico en el marco de las demandas territoriales del movimiento indígena del Oriente boliviano.

En el seno de la Geografía Humana occidental, entiende Massey que por norma general se acepta la idea de que “*el espacio está socialmente constituido*” así como que “*es el producto de relaciones*” por lo que cabe entenderse que “*el espacio está siempre en proceso de conversión*” (1999: 283), que se constituye en el seno de procesos interactivos siendo un proyecto “inacabado” que da lugar a un “sistema abierto” (*ibíd.*, 284). Esta idea del espacio como el ámbito en el que tienen lugar las relaciones sociales que a su vez lo constituyen es respaldada por Agnew (2005).

Los estudios sobre el territorio eclosionaron de tal manera que en Francia se crearía la categoría de “ciencias del territorio” (Ellison y Martínez Mauri, 2009: 14). Pero la multiplicidad conceptual no tardaría en poner de manifiesto la ambivalencia del concepto, lo cual propició la aparición de otros conceptos como “territorialidad” y

“territorialización” que a su vez provocó confusiones (*ibíd.*). Recuperaré estas nociones en el próximo epígrafe.

El trabajo de Mazurek (2006) señala una diferencia fundamental entre las nociones de espacio y territorio. Este geógrafo relacionaría al espacio con un sistema de localización frente al sistema de actores al que se refiere el territorio. De ello se deduce que única y exclusivamente los espacios que son apropiados por los grupos sociales pueden convertirse en territorios a la vez que cualquier territorio tiene su propio espacio al ser aquel el sustentador de una identidad y de un sentimiento de pertenencia a un determinado lugar (cit. en Molina, Vargas y Soruco, 2008: 82-83).

Para Farinós por el contrario, el espacio pierde primacía como categoría de análisis en el momento en el que se concede mayor atención al territorio, lo cual sucede cuando el espacio viene a ser entendido en relación a los procesos, es decir y como lo expresa este autor: “*el espacio se territorializa*” (2005: 220). Martínez de Pisón define el territorio como “hecho geográfico” referido al “*espacio que consideramos como solar, recurso y soporte de las especies o de la acción local de las sociedades humanas. Es el espacio geográfico disponible*” mientras que en el paisaje como rostro del territorio se configuran un sistema de relaciones (2010: 57). La localidad y la dimensión relacional están también presentes en esta concepción. La percepción del territorio como configuración y organización del espacio la encontramos asimismo en los trabajos de otros geógrafos (Verdier, 2010; Trillo, 2010).

Por su parte Montañez y Delgado consideran que el territorio delimita una jurisdicción, una soberanía, una propiedad, por lo que está relacionado con la gestión y dominio de un espacio determinado (1998: 123) lo cual vendría a demostrar la evidente relación entre ambas categorías.

Desde una óptica geográfica cargada de reflexiones filosóficas, el geógrafo Milton Santos, concibe el espacio como un conjunto de elementos fijos, establecidos en el lugar y que modifican a éste, y una red de flujos constituida por las acciones que condicionan y configuran los elementos fijos, creando ambos en su interacción la realidad geográfica susceptible de convertirse en objeto de estudio para la disciplina geográfica (2000: 53). Otra definición de Milton Santos sobre el espacio es la referida a la conjunción entre el sistema de acciones y de objetos, entendidos estos como los artefactos resultado del trabajo y no de elaboración natural (2000). Pero al margen de planteamientos de carácter filosófico, nos quedamos para nuestro trabajo con aquella que presenta a la naturaleza del espacio, objeto además de su trabajo, “*formado, por un lado, por el resultado material acumulado de las acciones humanas a través del tiempo y, por otro lado, por las acciones actuales que le animan y que hoy le atribuyen un dinamismo y una funcionalidad*” (2000: 89).

Jacques Lévy ha sido otro de los geógrafos que se ha embaucado en la teorización del espacio al cual define como una dimensión que forma parte del sistema social, lejos de constituir un elemento externo a la sociedad (2010: 83). La dimensión relacional adquiere entonces un interés renovado en los trabajos de la Geografía (y otras disciplinas) de los últimos años. De ahí que Escobar apunte a las investigaciones que en el campo de la Geografía se han dedicado en la primera década del nuevo siglo a plantear nuevos debates sobre “representaciones espaciales” (Pickles, 2004); “teorías no-representacionales” (Thrift, 2007), “geografías híbridas” (Whatmore, 2002); “geografía humana sin escala” (Marston, Jones y Woodward, 2005; debate en Transacciones del Instituto de Geógrafos Británicos 32 (2), 2007); “ecologías emergentes” (Rocheleau y Roth, 2007; Rocheleau y otros, 2001) y el paso del “dualismo a las ontologías relacionales” (Castree, 2003; Braun, 2008), hayan dado como resultado que *“el espacio ya no se considera más como algo ontológicamente dado sino como el resultado de procesos relacionales”* (2010a: 7).

Lévy pone el acento en los procesos sociales que configuran el espacio y no en su dimensión cuantitativa y concede prioridad a la importancia que adquiere el espacio para la sociedad proclamando que ésta *“es, por excelencia, el entorno de lo social”* (2010: 86). Mientras que, según anuncia Lévy, los términos referentes a entorno - entendido éste como *“marco englobante sobre el cual los englobados actúan”* o *“sistema de interacciones relativamente equilibrado entre el todo y las partes”*- y ambiente, pese a haber sido considerados comúnmente como sinónimos, vendrían a expresar realidades diversas (*ibíd.*, 85). La consideración del entorno permite para Lévy dar cuenta de la forma en la que los actores operan en la realidad social, siendo el espacio habitado un entorno que integra además el conjunto de realidades sociales (*ibíd.*, 85-87)⁴¹.

Paulatinamente, nuevas perspectivas fueron surgiendo movidas por el afán de superar la clásica definición del espacio. En este sentido han sido reconocidos los esfuerzo de los trabajos realizados desde la Geografía Feminista (principalmente los trabajos de Rose, Graham y Gibson⁴²) y el poscolonialismo *“para superar las*

⁴¹ No la debemos confundir con la noción de medio ambiente, en la que el presente trabajo no se detiene. Algunos planteamientos asocian dicho concepto al de biodiversidad, en particular aquellos derivados de los programas ambientalistas y de movimientos ecologistas. En relación a ello, Escobar expone que para tales movimientos sociales la biodiversidad se define como *“territorio más cultura”* referido a las dinámicas eco-culturales y económicas desplegadas por las comunidades que habitan determinado espacio (2000: 131) por lo que la relación entre el lugar y el territorio sería crucial en una investigación de movimientos sociales (2010b: 131).

⁴² Escobar reconoce la aportación desde la geografía económica, dentro de la que se posicionan Graham y Gibson, quienes enfatizan aquellos planteamientos en los que critican que el capitalismo haya adquirido una (casi) total legitimidad como único modelo válido que no deja espacio para el desarrollo de prácticas locales basadas en el lugar (2010b: 151-154; 2005: 173-176, 178).

limitaciones de la sociología espacial y el construccionismo espacial” y repensar la relación entre el espacio y la sociedad (Smith S., 1999: 20) para lo que se plantea una tercera vía que en palabras de Edward Soja ha venido a ser definida como *thirdspace* (*tercer espacio*) (Soja, 1999, Soja, 1996, cit. en Smith S., 1999: 20 y Escobar, 2000: 128; 2010b: 155). Esta expresión apunta a una nueva manera de entender el espacio por parte de aquellas sociedades –tradicionalmente oprimidas o “identidades híbridas”– que lo utilizan como recurso estratégico a la hora de materializar sus demandas espaciales (Smith S., 1999: 20). Por su parte Escobar entiende el *tercer espacio* como aquel que supera el primero, el espacio material y el segundo espacio, el simbólico, convirtiéndose en el espacio vivido por sus habitantes (2000: 128; 2010b: 155). El *tercer espacio* de Soja trasciende la lógica binaria. Lo más innovador e interesante de este nuevo enfoque consiste para Susan Smith en la consideración que se hace a los procesos de construcción de la identidad en su ambigüedad, multidimensionalidad y complejidad internas (1999).

Sin embargo, el propio Soja es quien lo define de manera más precisa. Con este nuevo concepto, este autor pretende alentar en el seno de la Geografía a quienes se dedican al estudio de nociones como espacio, lugar, territorio, ciudad, región, *location* o medio ambiente, a pensar de manera diferente y ante todo a tener en cuenta la dimensión de espacialidad que según el propio geógrafo había caído en el olvido. Soja sitúa esa nueva dimensión en el marco del giro espacial que tuvo lugar en el seno de las ciencias sociales y las humanidades cuando en éstas se concibieron nuevos planteamientos para entender las relaciones sociales y la sociedad en sí (1999: 261). Su objetivo va encaminado a recuperar la esfera de la espacialidad frente a aquella de carácter histórico y otra de carácter social y aportar una nueva ontología. Ahí es en donde el *tercer espacio* captura la dialéctica espacialidad-historicidad-socialidad inmersas en una relación interactiva (*ibíd.*, 262). De ahí que frente a la polarización entre el primer espacio (espacialidad materializada) y el segundo espacio (cognitivo, imaginado) proponga un *tercer espacio*, un espacio vivido que provea de un nuevo lenguaje, que constituya un nuevo concepto teórico-analítico, que aporte, abra el camino hacia una nueva realidad epistemológica, que suponga una nueva herramienta metodológica la cual pueda ser asumida por las comunidades locales en su lucha contra la opresión dominante a la que se han visto sometidas históricamente (1999).

Hacía mención, en base al trabajo de Radcliffe y Westwood, que bajo el prisma de un nuevo enfoque enmarcado en la posmodernidad, la Geografía comenzó desde la década de los noventa del siglo pasado, a prestar mayor atención al lugar y los procesos que en éste se desarrollan. Y es que como bien señala Ulrich Oslender, desde el marco de las *geografías de la resistencia*, muchos trabajos efectuados desde la disciplina

geográfica redujeron tanto al espacio como al lugar a una categoría estática, carente de significación política y por tanto desligada de las relaciones de poder, cumpliendo una mera función ilustrativa (2002).

Montañez y Delgado, por otro lado, se apoyan en Geiger (1996) para definir el territorio como la “*extensión terrestre delimitada que incluye una relación de poder o posesión por parte de un individuo o un grupo social*” (1998: 123-124). La idea del poder y del control político es compartida por otros autores (Herbás y Patiño, 2010; Strang, 2001). Esta última sugiere que ningún grupo social conforma su proyecto cultural de manera aislada, ni de otros grupos sociales con los que interacciona ni del entorno físico en el que actúa, desplegando toda una serie de estrategias de negociación que ha permitido a muchos grupos que han carecido tradicionalmente de poder -desde el punto de vista socioeconómico y político- ganar influencias en un escenario del que se habían mantenido excluidos (2001: 70). Las relaciones de poder implícitas en la construcción del espacio y de las narrativas de dominación y resistencia ha sido un asunto al que el geógrafo Oslender le ha dedicado máxima atención (2002).

Otra investigadora que ha dedicado sus esfuerzos a la cuestión de las *espacialidades del poder*, de forma particular en América Latina, ha sido Sarah Radcliffe, como bien indicaba anteriormente. Radcliffe se centra en el análisis de la tríada *relaciones de poder-proyectos de Estado incompletos-episodios de resistencia*, en el contexto latinoamericano (1999). Es este trabajo se detiene a examinar de qué manera las identidades son construidas ligadas a los territorios y a los lugares, como procesos contestatarios en el marco de las espacialidades de poder. Estos fenómenos suceden al mismo tiempo que los Estados recrean imaginarios geográficos e identitarios, los cuales son constantemente manipulados por medio de sus instituciones, de narrativas histórico-espaciales, discursos, etcétera, en base a los cuales legitiman su soberanía (1999: 230).

Oslender ensalza la perspectiva del lugar en el análisis de los movimientos sociales con la intención de ubicar a estos en su contexto específico, perspectiva que aporta nuevas reflexiones metodológicas en las que el factor étnico juega además un papel fundamental (2002).

En un marco conceptual similar sitúan Lois y Pazos (2009) la emergencia de la “*identidad de la resistencia*” referida a aquellos movimientos identitarios que se basan en la localidad, en el lugar y que apelan a la solidaridad entre las comunidades para consolidar el control sobre un espacio particular, lo cual lleva a la consideración del vínculo entre identidad y territorio (*ibíd.*, 232-233). De ahí que abran uno de sus trabajos anunciando que la categoría de identidad supone uno de los campos que encierra mayor interés en el seno de la Geografía Cultural (*ibíd.*, 231).

En todo este debate no podría faltar la mención a otra de las categorías que tienen mucho que ver con las discusiones que se vienen planteando. Esta es la noción de “tierra”. El concepto de tierra consiste por el contrario en un término que a primera vista no entraña tanta complejidad ni encierra tanta ambigüedad como las nociones de territorio, espacio o lugar. Una acepción común sobre el concepto de tierra la recoge la siguiente definición: *“espacio de una determinada área territorial, de propiedad individual o colectiva al que se tiene derecho de uso económico, sin que intervengan terceros, bajo condiciones que define el mercado”* (Polanco, 1991; Cupe, 1994; Grünberg, 2002; Mazurek, 2006, cit. en Herbás y Patiño, 2010: 14-15).

La diferencia entre las categorías de tierra y territorio lo conforma, en palabras de Herbás y Patiño, el factor identitario que hace que la preservación de la cultura e identidad se conciba en el ámbito territorial mientras que para el caso del concepto de tierra está ausente (2010).

El geógrafo humano Hubert Mazurek se ha atrevido también a establecer una diferencia sustancial entre ambos términos pese a su complementariedad⁴³. Mazurek entiende que se ha adoptado una visión sesgada tanto del uno como del otro y critica igualmente *“la visión técnica de la superficie terrestre, necesaria para desarrollar una actividad agrícola”*, y por lo tanto excluyente del ámbito urbano. Esto significa que el espacio boliviano se fragmente en “pequeñas entidades independientes” donde el único criterio para su identificación sea la disponibilidad de recursos naturales. Para Mazurek la definición más acertada para el concepto de territorio sería la siguiente: *“el territorio es una realidad cotidiana, espacio construido y apropiado histórica, social y culturalmente por individuos, comunidades, pueblos, etcétera generando identidad y cohesión de la sociedad, tanto a nivel rural como urbano porque no puede existir una sociedad sin territorio”*⁴⁴ así como *“la porción de superficie terrestre apropiada por un grupo social con el objetivo de asegurar su reproducción y satisfacción de sus necesidades vitales”*⁴⁵.

Una noción de territorio que se maneja desde la perspectiva de los modelos locales lo concibe como *“una entidad multidimensional que resulta de los muchos tipos de prácticas y relaciones; y también establecen vínculos entre los sistemas simbólico/culturales y las relaciones productivas que pueden ser altamente complejas”* (Escobar, 2000: 120). La dimensión múltiple es del todo pertinente con la percepción que las comunidades mojeñas poseen del territorio dado que especifica la

⁴³ Hubert Mazurek, “Los Territorios” en <http://hablemosdegeografia.blogspot.com.br/2010/09/blog-los-territorios-de-hubert-mazurek.html>

⁴⁴ *Ibíd.*

⁴⁵ *Ibíd.*

consideración relacional de los procesos territoriales en los que las identidades étnicas hacen suyo un territorio en el que desarrollan sus actividades locales y formas de vida. Es además, en este espacio multidimensional que las comunidades recrean “*sus valores sociales, económicos y culturales*” (Escobar, 2000: 130). Esta condición relacional se revela de manera similar en la configuración del espacio en donde se genera todo un ensamblaje de conexiones espaciales a las que los actores dan forma en su interacción localizada.

El hecho de que el territorio sea apropiado por los grupos humanos nos lleva a pensar en la construcción de la identidad de acuerdo a éste. Los actores sociales conforman un proceso identitario a partir del reconocimiento, uso y manejo del territorio y en base a dicho manejo cada cultura le otorga un significado particular al espacio geográfico en el que se asienta y manipula.

2. 1. 3. Conceptos complementarios: Territorialidad, desterritorialización. El vínculo con la identidad.

En relación a las cuestiones de las que venimos tratando otro término pertinente es el de *territorialidad*. En un estudio temprano, Ingold hacía mención a la falta de consenso sobre la noción que nos compete aunque él optaba por definirla como la “*apropiación del espacio por los grupos humanos*” a diferencia del territorio al que entendería como la tierra ocupada por los grupos humanos (1986: 130). También está presente en las definiciones manejadas por Ingold el elemento de la defensa del territorio, intrínseco a la noción de territorialidad (*ibíd.*, 32-133). Pese a que este autor define la territorialidad en relación a la tenencia de la tierra –lo cual será el hilo conductor del capítulo 5- reconoce la dimensión relacional de aquel concepto (1986).

Ha sido considerado que la territorialidad emerge en el proceso de configuración en el tiempo, a través de la memoria histórica de un territorio. En el momento en el que éste viene a ser apropiado, se territorializa, se hace un uso territorial, se le experimenta, se conforma su correspondiente territorialidad. Por lo que se podría entender la territorialidad como la experiencia vital y social de un territorio (Herbás y Patiño, 2010: 15). La territorialidad también ha sido definida en términos relacionales entre los territorios y los procesos sociales que en estos se desenvuelven (Delaney, 2005: 15). Algunos años antes, Casimir retomaba el trabajo de Taylor para referirse al entramado de comportamientos, sentimientos y conocimientos que se entrelazan en un lugar específico bajo determinadas representaciones culturales y sociales recreando la territorialidad de cada grupo (1992: 19). La territorialidad se presenta a su vez como una proyección de la memoria colectiva de una comunidad indígena con base a un

territorio que evoca un particular sentimiento de pertenencia al lugar. En estos lugares es en los que se inscribe la memoria colectiva que llenará de contenido la dimensión identitaria. Otros autores anuncian que el concepto de territorialidad puede ser utilizado ideológicamente con fines sociales ligados al control del territorio por parte de determinado grupo además de aparecer asociada a un lugar específico (Johnston, Knight y Kofman, 1988: 5, cit. en Smith D., 1990: 4). En lo que respecta al concepto de territorialidad, la cultura de cada grupo étnico se manifiesta como uno de los factores sustentadores de la misma.

Diversas concepciones sobre la territorialidad han sido expresadas en otros trabajos como es el caso de Montañez y Delgado (1998). Estos autores la consideran como “*el grado de control de una determinada porción de espacio geográfico por una persona, un grupo social, un grupo étnico, una compañía multinacional, un Estado o un bloque de Estados*” (Montañez, 1997, cit. en Montañez y Delgado, 1998: 123) o como el “*conjunto de prácticas y sus expresiones materiales y simbólicas capaces de garantizar la apropiación y permanencia de un determinado territorio por un determinado agente social, o Estado, los diferentes grupos sociales y las empresas*” (en Lobato Correa, 1996: 252, cit. en Montañez y Delgado, 1998: 124). Este trabajo coincide en la idea de apropiación del territorio, bien sea por parte de un individuo o un colectivo, con los anteriormente citados. Esto nos llevaría a deducir que una vez más la territorialidad aparece asociada a las representaciones de identidad y al vínculo de ésta con el espacio. En esta última definición, del mismo modo se encuentra implícita, la idea de las *geografías del poder* que ordenan las interacciones sociales en el espacio.

Sin embargo, no siempre la condición de la apropiación estuvo presente en la conceptualización de la categoría territorial:

“*el término territorio es usado para designar una porción de naturaleza y un espacio que es demandado por una determinada sociedad que garantiza a todos o a algunos de sus miembros, derechos estables de acceso al control y uso de todo o parte de los recursos encontrados dentro de él y los cuales es capaz (la sociedad) de explotar*” (Godelier, 1979: 138, cit. en Ingold, 1986: 136).

Ingold también prestó atención a la definición geográfica de territorio definido éste en términos de delimitación física a partir de demarcaciones artificiales que provocan exclusiones, vinculado con las definiciones de los estados nación que delimitan la soberanía y la jurisdicción de estos (1986: 156).

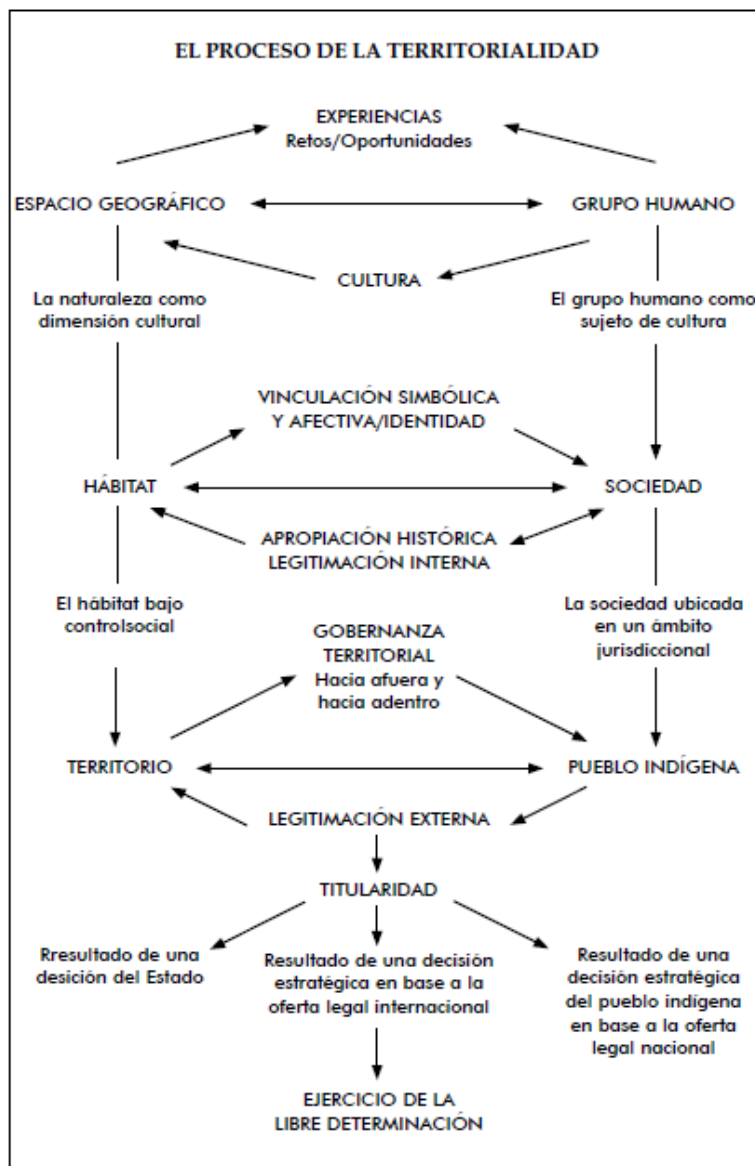
La condición de la apropiación por parte de los pueblos indígenas de Bolivia de los espacios geográficos que conforman el territorio aparece en el trabajo de Albó (2008). Esta condición favorecería el brote de un mayor nivel de concienciación con respecto a la luchas por el territorio de dichos grupos sociales (2008: 247). La cuestión

del poder aparece en los planteamientos de Ingold al tratar de definir la noción de territorio (1986: 131). La interpretación de la memoria colectiva como experimentada en el territorio es una idea que ha sido planteada por diferentes autores. Ramírez se ha referido con ello a la aparición de “lugares de la memoria” por los que queda establecido un estrecho vínculo ente el territorio y la identidad (2007: 279).

Desde la Geografía han aparecido otros trabajos dedicados a examinar los “lugares de la memoria” (García Álvarez, 2010; Verdier, 2010; Trillo, 2010; Puente, 2010). Este es un concepto que pese a aparecer en la historiografía francesa con la publicación de *Les Lieux de Mémoire* de Pierre Nora en 1984, fue incorporado a la Geografía (más la producida en el ámbito anglosajón; la Geografía española no le prestó demasiada atención (García Álvarez, 2010; Verdier, 2010). De este modo la temática de la identidad y de la memoria colectiva se hacía hueco en dicha disciplina. Verdier admite la analogía que los trabajos de geógrafos como Roncayolo o Raffestin establecen entre la memoria -entendida según los términos de Nora- y el territorio. Piveteau, va más allá y considera al territorio como “lugar de memoria” (cit. en Verdier, 2010: 215).

En el caso del pueblo mojeño-ignaciano este fenómeno viene expresado con clara evidencia dado que por medio de su memoria colectiva han conformado su propia construcción territorial. Es sobre el territorio que han creado y reconfigurado su cultura, sus estructuras sociopolíticas y sus sistemas económico-productivos.

García Hierro y Surrallés entienden por su parte la territorialidad como “*la manera en que un pueblo concibe y ejerce su relación con el hábitat que legítimamente se atribuye como propio y con el que se identifica*” (2009: 26). Estos autores ante una definición de territorialidad, ponen el acento en la libre determinación que para el caso del pueblo mojeño no ha sido tenida en cuenta sino hasta años recientes (véase **figura 2. 1**). Aunque es cierto que en base a dicha concepción se requeriría del autogobierno para poder desarrollar una gestión territorial acorde con su propia cosmovisión.

Figura 2. 1. Esquema proceso de territorialidad

Fuente: García Hierro y Surrallés, 2009: 30.

En el esquema superior podemos apreciar distintos elementos que formarán parte del trabajo y que como bien demuestra dicha figura, aparecen interrelacionados en un complejo entramado en el que se integran irreversiblemente.

Ahora bien, han aparecido voces que matizan dicha concepción y consideran la territorialidad no como “*resultado del comportamiento social sobre el territorio, sino como el proceso de «construcción» de dicho comportamiento*” (Raffestin, 1999, cit. en Farinós, 2005: 216). Sin embargo esta visión del territorio queda a día de hoy algo distante de muchas realidades sociales que tienen lugar a diario en nuestra sociedad lo cual ha llevado a algunos investigadores a hablar de *desterritorialización*.

Pero si hay una definición que explica la idea de territorialidad es la que la relaciona con “*las acciones, practicas, móviles, intenciones, recursos, procesos*

cognitivos y las historias particulares que acompañan a construcción de los territorios” (Ellison y Martínez Mauri, 2009: 14) o lo que viene a ser lo mismo, el ejercicio de la gestión territorial y el gobierno del mismo en un espacio concreto. La territorialidad pone de manifiesto la cualidad procesual de las relaciones sociales configuradas en el territorio (*ibíd.*).

Debemos reflexionar a la hora de afirmar el vínculo entre un territorio y un espacio delimitado⁴⁶. En esta dirección apunta Ramírez que *“el territorio delimitado, con fronteras, como confín de la soberanía y el poder, es un elemento definitorio del Estado nacional moderno como organización política y administrativa (...) Las identidades colectivas nacionales que éste organiza tienen una dimensión territorial (...)”* (2007: 281). La presente investigación se enfrenta con una dificultad que responde a la disociación de escalas en cuanto al concepto de territorio manejado. Por un lado nos encontramos ante un territorio entendido como *continuum* que trasciende la dimensión geográfica, frente a un espacio localizado y definido por unos límites que lo detienen en el espacio. Sobre ello trataré en profundidad más adelante.

Autores como Gilberto Giménez vinculan el concepto de “desterritorialización⁴⁷” con el de “etnicización” (2000). La desterritorialización ha sido definida por varios autores de manera muy similar. Según Peña Guzmán correspondería a *“los procesos con que los grupos indígenas han sido despojados de sus dominios territoriales”* lo cual ha significado *“la pérdida de la capacidad para ejercer control y dominio efectivo sobre los procesos de organización material y simbólica de los espacios que ocupan”* (1998: 151). Una definición muy aproximada la proponen Montañez y Delgado al plantear que el proceso de desterritorialización supone la *“pérdida del territorio derivados de la dinámica territorial y de los conflictos de poder entre los distintos agentes territoriales”* (1998: 125). Sin embargo, es interesante la visión que propone Terence Turner al explorar el fenómeno de los procesos de desterritorialización, los cuales para este autor vienen a ser no como tales sino como una nueva realidad multi-territorializada (2004: 429) dado que las fronteras quedan diluidas en los nuevos contextos geográficos. Esto provoca el mantenimiento de los lazos culturales frente a un territorio pese a que éste sea abandonado. Me referiré en más de una ocasión a la movilidad intercomunal que se produce con alta frecuencia en Mojos, la cual permite reconocer y asumir el territorio.

Los fenómenos de *desterritorialización* provocarían una fractura de las colectividades humanas con sus vínculos territoriales, como efectivamente ha tenido lugar en Mojos. A través de la acción de los terceros, los indígenas mojeños se

⁴⁶ Para un análisis en profundidad sobre los procesos de desterritorialización véase Gupta y Ferguson (1992); Gupta (2003); Appadurai (1996); Farinós (2005).

⁴⁷ Giménez, 2000.

encuentran “*etnicizados por la colectividad dominante – karayanas- colonizadora que según el proceso histórico ha usurpado y avasallado el territorio de los mojeños*” (Canedo, 2009: 37). Se puede constatar que en la región de Mojos se da una dominación étnica, por parte de la población blanca que controla las estructuras de poder, hacia los indígenas, quienes se han visto históricamente sometidos a aquel grupo.

En el capítulo próximo entraré a analizar con más detalle las controversias que entraña el concepto de región. Retomando una vez más el trabajo de Montañez y Delgado, las regiones se presuponen como “*sistemas territoriales abiertos que en permanente interacción con otras regiones construyen su propia identidad económica, cultural, social y política*” (Santos, 1997, cit. en Montañez y Delgado, 1998: 131) las cuales albergan además un significado cultural e histórico específico (*ibíd.*, 133).

Varios autores se han enfrentado a la conceptualización de estas categorías. En concreto en cuanto respecta a la región amazónica, en particular al área boliviana y a su configuración social en base a discursos estatales que no lograron definirla ni como espacio ni como unidad territorial –sino como región periférica- hasta la adopción de un enfoque desarrollista conectado a la planificación territorial (Molina, Vargas y Soruco, 2008).

Pero también encontramos el factor identitario ligado al concepto de región. El trabajo de Copeta admite que la reformulación del concepto de identidad se vio favorecido por los proyectos de planificación territorial y de ordenación del territorio (2009). Si, tradicionalmente términos como el de espacio y territorio adquirieron posiciones estratégicas para las políticas de desarrollo, a partir de los años ochenta del pasado siglo, el territorio logró especial atención en el marco de la gestión territorial en términos de identidad y de sentimiento de pertenencia a un lugar (Farinós, 2005). Mazurek, en la misma dirección, sugiere tener en consideración la base identitaria del territorio en la definición que de éste se hace para el manejo administrativo en el marco de los planes de ordenamiento territorial (Herbás y Patiño, 2010). Esto explica en buena medida que las poblaciones indígenas del oriente boliviano invirtieran el imaginario geográfico construido en torno a la región para generar uno propio, desde su particular visión del lugar y de ese modo “*tratar de aclarar su propios lugares, a saber, los grandes territorios de los cuales depende su subsistencia*” y contrarrestar así la imagen de territorio vacío que desde las geografías imaginarias oficiales le había sido otorgada (Radcliffe y Westwood, 1999: 193).

2. 2. LA NATURALEZA EN LAS CIENCIAS SOCIALES. CONSIDERACIONES TEÓRICAS.

La reflexión sobre el concepto de naturaleza en las ciencias sociales es una cuestión que viene de lejos. Los griegos fueron de los primeros que se atrevieron a teorizar sobre este ámbito, subordinando el poder de la naturaleza a la actividad humana capaz de modificar aquella a su antojo (Smith N. y O'Keefe, 1980: 31). Desde el periodo de la Ilustración, los hombres de ciencia comenzaron a apropiarse del escenario natural desde el que definían sus postulados científicos acerca del significado del mundo, del ser humano y de la presencia de éste en un espacio que cada vez se mostraba menos desconocido al ser aprehendido desde aproximaciones propias de paradigmas positivistas⁴⁸. La naturaleza se consideró de esta manera como un todo orgánico a la vez que externo. Algo dado que podía ser descifrado.

Durante muchos años ha persistido en las ciencias sociales -así como en las ciencias naturales- una dicotomía entre naturaleza y cultura. Dicha dicotomía ha estado amparada por los discursos del ámbito científico occidental imbuidos de un racionalismo y de una tradición cartesiana. Estos han estado, del mismo modo, marcados por un fuerte carácter dual que ha articulado toda una serie de oposiciones binarias tales como natural-social, salvaje-doméstico, masculino-femenino, etcétera, organizando el conocimiento moderno. Esta concepción dicotómica, que obedece a planteamientos duales, se ha fundamentado -en palabras de Soper- en la percepción de la naturaleza como opuesta a la humanidad, antitética, aquello prístino que no ha sido alterado por la mano del hombre (1995) (es decir, prácticamente nada). Si tenemos en cuenta esta perspectiva, se concebiría a la naturaleza como "otredad" (*ibíd.*), dimensión que retomaré en los próximos epígrafes de este capítulo. Así entendido, la cultura constituiría un atributo esencial inherente a la condición humana, entendida ésta desde la óptica del mundo occidental como civilizado en contraste a la condición salvaje del mundo natural.

La antropología (Descola, 1996; Descola, 2004, Descola y Pálsson, 2001; Surrallés y García Hierro, 2004; Escobar, 2000; 2005, 2010a, 2010b; Ingold, 2000; Viveiros de Castro, 2004; Kassam, 2009; Seeland, 1997; Luque y Robles, 2006; Posey, 2001) fue una de las disciplinas científicas que con más interés se embarcó -desde un

⁴⁸ Smith y O'Keefe exponen tres contradicciones que se suceden en relación a la concepción de la naturaleza (1980: 30-31). La primera es que tradicionalmente se ha venido a considerar el estudio de la naturaleza como un campo específico de las ciencias naturales mientras que las ciencias sociales se encargarían del estudio de la sociedad. La segunda se refiere a la manera que ambas afrontan el estudio de la naturaleza al ser considerada por la ciencias naturales como algo autónomo de la actividad humana, a la vez que algo socialmente construido desde el punto de vista de las ciencias sociales. La tercera y última premisa es la que se refiere a la apropiación por parte de los seres humanos de las "leyes de la naturaleza" para sus propios propósitos.

enfoque posmoderno y desde perspectivas culturalistas- en el desmantelamiento del paradigma que establece la distinción entre naturaleza y cultura⁴⁹. Partiendo del reconocimiento de la condición de la naturaleza como construcción social (Descola, 2001; 2004) estos trabajos se encaminan a replantear dicha categoría para así poder explorar aspectos propios de cosmologías no occidentales (Viveiros de Castro, 2004) y no aceptar sin más una “*percepción de la naturaleza mediatizada a través de la cultura*” (Kassam, 2009: 70).

Antes de dar paso a tales debates, considero conveniente presentar una breve exposición acerca de las ontologías indígenas y occidentales que contribuirá a construir un marco de referencia y teórico para las próximas discusiones.

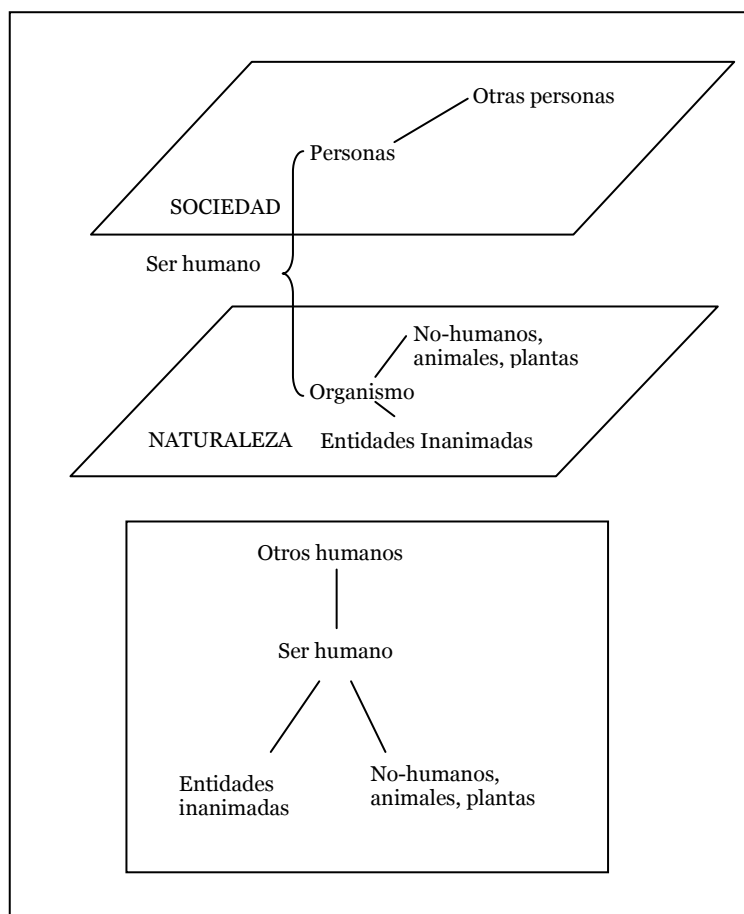
2. 2. 1. Ontologías indígenas; ontologías occidentales.

Previamente a sumergirnos de pleno en tales cuestiones, podemos apreciar las diferencias entre ambos sistemas de conocimiento (véase **figura 2. 2**). Ingold pone de manifiesto, a través del siguiente esquema, la concepción occidental dual por un lado y por otro refleja las ontologías no-occidentales. La parte inferior muestra la inexistencia de dos ámbitos separados: naturaleza-sociedad; únicamente existe uno en el que cohabitan tantos los seres humanos, las plantas, animales, los elementos físicos de los paisajes en los que aquellos se desenvuelven, etcétera. En este plano, los seres humanos no se perciben como seres individuales, sino más bien como organismos-personas que establecen relaciones con otros seres humanos y entidades inanimadas de su medio ambiente. Para estos, las distintas esferas se mantienen integradas, sin que se dé separación total. Su mundo se concibe de una manera integral. Por el contrario, según el esquema de las ontologías occidentales, la naturaleza aparece separada del plano de la sociedad la cual interviene sobre aquella mediante su apropiación.

⁴⁹ En el campo de la antropología, la dicotomía naturaleza-sociedad se vio propiciada por los trabajos de Lévi-Strauss y como consecuencia, por la tendencia estructuralista de dicha disciplina (Descola, 2001: 103-104, Viveiros de Castro, 2004: 41). Pálsson distingue tres paradigmas en relación a las relaciones entre los seres humanos y el medio ambiente: orientalismo, paternalismo y comunalismo.

Kaj Århem pone de manifiesto la continuidad entre la naturaleza y la sociedad entre los pueblos indígenas amazónicos por lo que propone, inspirado en el trabajo de Croll y Parkin (1992), el concepto de *ecocosmología* referido éste a “*los modelos integrales de conectividad entre los humanos y la naturaleza*” en el seno de dichas poblaciones (2001: 214). En concreto, él explora la *ecocosmología* de los *makunas*, pueblo indígena asentado en la Amazonía colombiana quienes desarrollan sus actividades de subsistencia tras una mediación chamánica entre hombres y dioses que conceden a aquellos el permiso para la caza, pesca, etcétera, en base a una ideología de la reciprocidad (2001). También Descola se refiere al “*continuum*” que caracteriza las cosmologías indígenas de las tierras bajas de Sudamérica (2004: 28).

Figura 2. 2. Sistemas de conocimiento



Fuente: Ingold, 2000: 46.

No obstante, es justo reconocer que los planteamientos de Ingold acerca de las ontologías no-occidentales, se refieren de manera particular a las sociedades de cazadores-recolectores. Dado que los agentes y protagonistas de nuestra investigación basan su economía productiva en la agricultura de subsistencia, siendo la caza y la recolección actividades complementarias, no podemos aceptar del todo el esquema de Ingold. Asimismo las comunidades mojeñas si bien comparten las ideas acerca de la integridad del mundo en el que habitan, en los últimos años se están viendo superadas por toda una serie de proyectos de comercialización y explotación de los recursos naturales, totalmente ajenos a sus modelos locales. Estos proyectos se están poniendo en marcha por obra, fundamentalmente, de las organizaciones sociales y de desarrollo que operan en la región.

Los planteamientos de Escobar acerca de las ontologías indígenas (alternativas al modelo occidental), pretenden demostrar la existencia de “*diversos regímenes culturales para la apropiación de la naturaleza*” o “*construcciones alternativas del mundo*” (2010a: 4-5) por parte de comunidades, principalmente del Tercer Mundo, que manejan modelos locales de naturaleza (independientes de la dicotomía naturaleza-

cultura) diferentes a los que predominan en el mundo occidental (2010b: 147). Tim Ingold por el contrario, no concibe dos maneras alternativas de ver el mundo, sino de aprehenderlo (2000: 42).

Señala Descola en uno de sus artículos en el que analiza las cosmologías de los pueblos indígenas de la Amazonía, que “*en el pensamiento moderno, la naturaleza solamente tiene sentido por oposición a las obras humanas, tanto si a éstas las queremos llamar cultura como si las consideramos sociedad, historia o espacio antropizado*” (2004: 27). Klaus Seeland en la introducción que abre el trabajo sobre el conocimiento indígena y los aspectos socioculturales relacionados con los bosques en las culturas no europeas sugiere que, pese a la común percepción por parte del mundo occidental de la naturaleza como algo separado de la cultura y civilización, muchas culturas indígenas *tradicionales* mantienen amalgamados los aspectos materiales, espirituales y sociales que configuran su realidad, la cual organiza un mundo estructurado de manera integral (1997).

Sin embargo en los trabajos antropológicos encontramos también la persistencia de tal visión dual. Sirva como ejemplo el trabajo de Laura Rival quien sostiene que aquellas sociedades que se dedican a actividades de caza, pesca, recolección y horticultura distinguen entre la naturaleza y la cultura, categorías que aparecen opuestas y además “*transforman material y simbólicamente su medio creando espacios domesticados -huertos y viviendas- en oposición a los espacios salvajes*” (2004: 113-114).

Por el contrario, Víctor Toledo y Narciso Barrera-Bassols, presentan la existencia de “dos ecologías”, al desenmascarar el saber y el conocimiento de apropiación de la naturaleza tanto entre poblaciones indígenas como en la sociedad occidental (2008). Estos autores apuntan a la existencia de dos modos diversos de comprensión, de articulación de la naturaleza, de aproximación y apropiación de ésta, por parte de las distintas sociedades, generando un modelo *tradicional* y otro *moderno* (*ibíd.*, 65-66). Otra de las apreciaciones de estos autores que tienen mucho que ver con lo que venimos tratando y que es de suma importancia para este trabajo es que el conocimiento indígena de la naturaleza, local y colectivo, ha sido sometido a un análisis fragmentado desde las investigaciones sociales. Los esquemas cognitivos indígenas de las prácticas productivas desarrolladas han sido sometidos a un proceso de disociación. Y esto se debe a que los científicos prefirieron un modelo de investigación en el que se estudiaban dimensiones separadas del todo que suponía el “sistema total de conocimiento” lo cual refleja una clara disyuntiva entre la dimensión simbólica y la producción (*ibíd.*, 70). Estos autores pretenden demostrar en esta obra la eclosión que han alcanzado los sistemas productivos *modernos*, y frente a ello, desde la

agroecología⁵⁰, proponen como alternativa la recuperación de los sistemas productivos no-occidentales de diferentes lugares del planeta (2008).

Para autores como Muir, Rose D., y Sullivan el “lugar” adquiere un especial reconocimiento en el proceso de constitución del conocimiento indígena, quedando la universalidad exenta de la importancia que se le ha concedido desde un enfoque occidental (2010). Lo cual quiere decir que las cosmologías indígenas han otorgado especial énfasis a la idea de que “*el conocimiento proviene de un lugar específico*” (que enlaza con los planteamientos del anterior epígrafe) en contraste con el pensamiento euroamericano en donde el contexto sociocultural ha quedado relegado a un segundo plano y que por el contrario aparece incrustado en el conocimiento indígena (*ibíd.*, 261).

Otros trabajos, desde el seno de la Geografía, han fijado sus críticas en la aceptación general que considera al conocimiento occidental como universal y defienden por oposición la existencia de una gran variedad de conocimientos pese a que estos hubieron quedado subyugados por el pensamiento occidental (Johnson y Murton, 2007). Estos autores abogan, desde una posición del todo crítica, por la contribución de nuevas narrativas subalternas de entender la naturaleza, basadas en el lugar, que influyan y den forma a “*una nueva ontología anti-colonial/anti-imperial*” con la intención de decolonizar dicha construcción de la naturaleza que ha fijado -desde una perspectiva espacial y temporal- a los pueblos indígenas (*ibíd.*, 126-127). Para ello sería necesario aunar esfuerzos entre la ontología occidental y aquellas de las poblaciones indígenas, reconociendo las voces de estos (*ibíd.*).

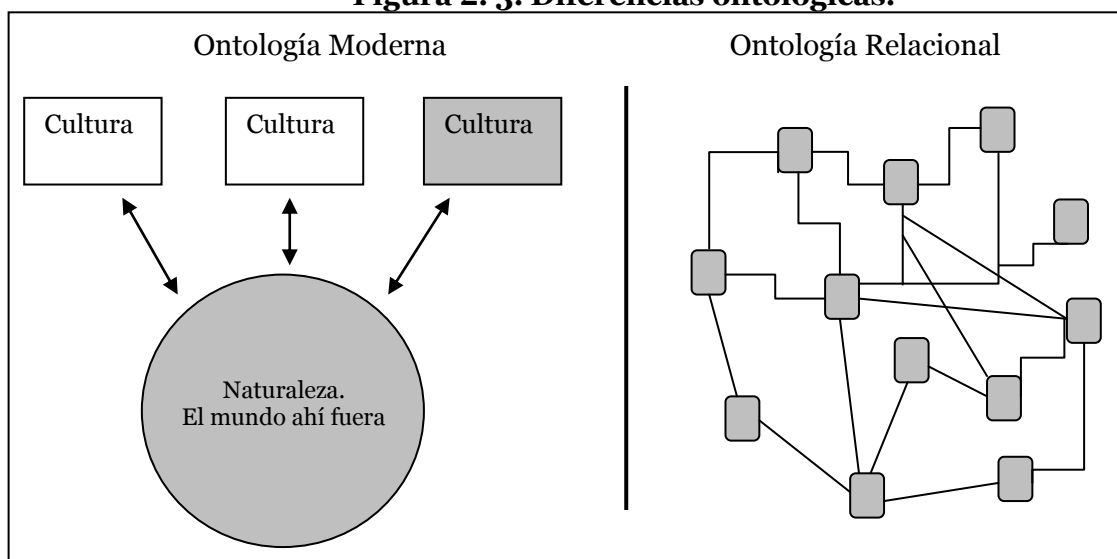
El trabajo de Johnson y Murton acerca de la cuestión de las ontologías indígenas teoriza sobre la dimensión holista que caracteriza al conocimiento y experiencia indígena frente a la compartimentalización occidental (2007). Nuestra experiencia propia como individuos nos permite entender el mundo en el que nos situamos y con el que nos relacionaremos conforme a la posición que adoptemos y a la manera en la que nos reconozcamos (de género, étnica, de clase o de estatus). Ésta depende del contexto personal y del grupo con el que nos identificamos.

La investigadora indígena Renee Pualani defiende fervientemente que el conocimiento indígena -en el que el conjunto de sus partes está vinculado entre sí- es holístico, mientras que el occidental aparece como compartimentalizado (2007). Desde una perspectiva indígena, el conocimiento se inserta en una red de relaciones (2007: 134), es decir, es un conocimiento de tipo relacional (véase **figura 2. 3**).

⁵⁰ A pesar de que la agroecología surge como disciplina científica en la década de los setenta del siglo pasado, como práctica se remonta a los orígenes de las culturas agrarias y del desarrollo de la agricultura.

En la misma dirección apunta Mario Blaser y Marisol de la Cadena acerca de las diversas formas culturales de entender el conocimiento que desde una perspectiva occidental fracciona lo cultural-natural en el clásico esquema binario al que hacía mención anteriormente (2009). Sin embargo, esta ontología (la occidental) es una más de tantas posibles, como son las ontologías indígenas que pertenecen a aquellas que no se ordenan de acuerdo a esquemas dicotómicos (*ibíd.*, 6). Comparten, por tanto, la misma idea defendida por Johnson y Murton de la existencia de ontologías alternativas y de su posible a la vez que necesario reconocimiento y de alguna manera, su adopción.

Figura 2. 3. Diferencias ontológicas.



Fuente: *ibíd.*, 7.

En la imagen superior aparecen claramente expuestas las diferencias entre la ontología propia de los pueblos indígenas de América y Australia y la que caracteriza a la ontología occidental, en donde el ámbito de la naturaleza por un lado y la cultura por el otro, es concebido de manera fragmentada por la ontología *moderna* a diferencia de lo que sucede en el caso de las ontologías indígenas que idean “todo lo que existe” de manera relacional sin atender a la lógica binaria naturaleza-cultura (*ibíd.*). Este dualismo ontológico ha venido a ser denominado como “disyunción sujeto-objeto” (Luque y Robles, 2006: 54).

Esta lógica relacional aparece reflejada en la cosmología mojeña y se manifiesta en la concepción integral de ambas dimensiones. Las diversas esferas que dan forma a la cosmología mojeña (organización social, lógicas territoriales, actividades productivas, sistemas de creencias, identidad) se manifiestan en los mismos lugares. Por ello es que no pueden fragmentarse en ámbitos contrapuestos. No se puede desligar este saber indígena del territorio en el cual se conforma. Todo hace referencia al

territorio, todo adquiere sentido en base a éste. En el capítulo 4 retomaré estas cuestiones prestando mayor atención al conocimiento local en sí del pueblo mojeño.

2. 2. 2. Naturaleza-Cultura: un debate por resolver. Limitaciones y persistencia del esquema binario.

No son, por tanto, en absoluto recientes los postulados que oponen la naturaleza y la cultura. La larga tradición que en las ciencias sociales ha marcado la divisoria y distinción entre ambas está siendo contestada por trabajos provenientes de distintas disciplinas.

Desde el perspectivismo amerindio, el investigador brasileño Eduardo Viveiros de Castro, sugiere que no es para nada conveniente continuar con la clásica división entre cultura y naturaleza a la hora de explicar aspectos representados en cosmologías no-occidentales *“sin someterla antes a una crítica etnológica rigurosa”* (2004: 37).

También Descola y Pálsson reconocen que hasta no hace muchos años, estudios antropológicos partían de la consideración del paradigma dualista (2001: 12-13). Descola señala de qué manera los antropólogos, al llevar a cabo estudios etnográficos, comprendieron que la dicotomía naturaleza-cultura no era una herramienta adecuada a la hora de mostrar los modos de vida de las gentes protagonistas de sus estudios (2001: 101).

En el campo de la Geografía son igualmente numerosos los trabajos dedicados a la deconstrucción de tal lógica binaria. Sarah Whatmore apunta a que desde el periodo ilustrado, este esquema reportaba a la naturaleza al mundo de lo prístino, lo salvaje y desconocido, lo cual a día de hoy resulta complicado pensar dado que el ser humano ha llegado a los lugares más recónditos (1999a: 4-5).

La escasa consideración que se ha mostrado en algunas descripciones etnográficas llevadas a cabo por los primeros exploradores que se toparon con las culturas indígenas y que contribuyeron a fijar la separación entre la cultura y civilización occidental frente a la “naturaleza” de dichas poblaciones (imagen que trascendería al pensamiento geográfico moderno) ha sido cuestionada por Johnson y Murton, quienes critican que el conocimiento indígena fuera marginado en dichos trabajos al considerar a los actores sociales como objetos de estudio (2007). Estos autores reiteran que desde principios del siglo XVIII cuando los viajeros del continente europeo se dedicaron a describir nuevos paisajes y culturas consideradas exóticas, prístinas, primitivas, se creó una imagen fija, inmóvil y ahistórica de las culturas indígenas convirtiéndolas en *“invisibles para las relaciones existentes entre estos y sus entornos inmediatos, incluyendo las complejas instituciones culturales, políticas y*

económicas que organizaron estas relaciones” (ibíd., 123). En el caso de Bolivia el explorador decimonónico por excelencia fue Alexander D’Orbigny, quien recorrió el continente sudamericano entre 1826 y 1833, lo que le aportó información suficiente para elaborar una vasta obra, *Viaje a la América Meridional*, en la que realiza detalladas descripciones al más puro estilo *humboldtiano*, de los 8 países⁵¹ en los que realizó su estadía (2002). En ellos se describen desde lúgubres páramos, llanuras desérticas, torrentes de agua, montañas escarpadas y abruptas, hasta majestuosas cadenas montañosas, sinuosos senderos, paisajes desoladores, precipicios, exuberante vegetación, flores encantadoras; pueblos primitivos, salvajes, poblaciones ajenas al desarrollo, al margen del progreso económico, etcétera, que dieron lugar a toda una serie de imaginarios etnogeográficos.

Estamos de acuerdo con Johnson y Murton que, curiosamente, todo este grupo de viajeros no se detienen a reconocer la ayuda asistida por parte de las poblaciones indígenas que en sus viajes les acompañaban y quienes les permitieron entender la nueva realidad a la que se enfrentaban compartiendo su propio conocimiento local con los europeos (2007: 123). De ahí que algunos autores señalen que “*el viraje desde una perspectiva dualista hacia una monista parece haber sido desencadenado por el trabajo de campo entre pueblos indígenas para los cuales la dicotomía naturaleza-sociedad no tenía ningún sentido*” (Descola, y Pálsson, 2001: 17-18) idea que también aparece respaldada por Escobar (2000).

Estas reflexiones nos hacen plantearnos una serie de cuestiones: ¿qué aporte generaría la revisión de nuestros esquemas dualistas?, el hecho de pensar las cosmologías indígenas desde una óptica occidental ¿supondría el rechazo a los modelos cognitivos locales?, ¿cómo trazar el vínculo entre naturaleza y sociedad en nuestro propio estudio de caso?. Estas son algunas cuestiones que surgen al enfrentarnos a la comprensión de las percepciones del entorno para los habitantes de la Llanura mojeña. Si partimos del reconocimiento de las interacciones entre los pobladores de Mojos y sus entornos naturales el hecho de atender a la cosmología de los mojeño-ignacianos nos da la oportunidad de comprobar que la dicotomía establecida entre naturaleza y cultura no es conveniente, puesto que no se ajusta a los patrones de comportamiento de esta población. Las relaciones entre las sociedades humanas y los entornos en los que habitan y de los que se apropian y transforman como consecuencia, constituye uno de los ámbitos de estudio científico más interesantes. No obstante, desde algunos puntos

⁵¹ Brasil, la República del Uruguay, la República Argentina, la Patagonia, la República de Chile, la República de Bolivia y la República del Perú.

de vista, la naturaleza ha sido concebida por oposición a la sociedad, habiendo sido definida como un concepto social cultural e históricamente específico (Nightingale, 2006: 3).

Son múltiples los trabajos que desde distintas disciplinas se han encargado de aproximarse a los nexos que vinculan la naturaleza y la sociedad o la naturaleza y la cultura. La dicotomía que distingue tales categorías ha sido ampliamente cuestionada desde numerosos ámbitos. La Geografía ha contribuido desde su perspectiva y de forma particular desde la literatura crítica de la Geografía Humana anglosajona. Johnson y Murton recuperan el trabajo de Wathmore (2002). Esta geógrafa apunta a que debido a que la Geografía mantuvo en buena medida el esquema binario que divide y separa las categorías de naturaleza y cultura, de manera incluso más intensa que otras disciplinas, optó por retornar a la cuestión de su división dado que la separación entre el ámbito social y natural había sido intensificada por la división interdisciplinar entre la Geografía Física y Humana (2002: 2, cit. en Johnson y Murton, 2007: 123) planteamiento que podría ser superado tras la revitalización de los nuevos debates naturaleza-sociedad que cuentan con la posibilidad de orientar “nuevos diálogos” entre ambas ramas de la disciplina geográfica (Cloke y Johnston, 2005: 7-8).

Como bien expone Sarah Whatmore, tras el velo que se cernió sobre la concepción ilustrada del esquema dual naturaleza-sociedad, a finales de los 80 y en la década de los 90 comenzaron a alzarse voces desde la Geografía Humana para reformular dicha dicotomía: los geógrafos denominados radicales teorizaron sobre el espacio sin la naturaleza (1999a; 1999b). En palabras de Margaret Fitzsimmons había tenido lugar un “*peculiar silencio sobre la cuestión de la naturaleza*” entre los geógrafos (1989: 106). Parecía como si la Geografía se hubiera quedado anclada en el estudio del espacio, al que se le concedió prioridad frente a la noción de lugar o incluso se le consideró a este último como mera modificación del espacio (Agnew, 2005: 85 y 87).

Las geógrafas Sarah Radcliffe o Margarte Fitzsimmons comparten la opinión de Whatmore y consideran que estos silencios tuvieron mucho que ver con la separación de la naturaleza y el espacio en la Geografía Humana (Radcliffe, 1999: 22) o entre la Geografía Humana y Física (Whatmore, 1999a: 4; Fitzsimmons, 1989: 111). Para el geógrafo mexicano Hiernaux la separación entre ambas ramas de la disciplina geográfica sería el reflejo de la “*división binaria cultura/naturaleza impuesta por el pensamiento moderno*” (2010: 52). Ante tal disociación, Jacobo García manifiesta que algunos autores apuestan por la Geografía Regional como punto de encuentro entre la Geografía Física y Humana (2006: 27). Este autor reconoce que la emergencia de una conciencia ecológica podría contribuir en la Geografía a la recuperación de la tradición

ambiental que marcó a esta disciplina en los primeros decenios del siglo pasado y al mismo tiempo para acercar posturas entre el ámbito de la física y de lo humano (*ibíd.*, 29 y 39).

De manera gradual, tanto desde la Geografía como desde otros campos científicos, se han ido dando pasos para superar dicha dicotomía. Ha aparecido una nueva Geografía que enfatiza el enfoque del posestructuralismo (Demeritt, 1994; Whatmore, 1999a; 1999b; Castree, 1995; Zimmerer, 1994, 2006; Fitzsimmons, 1989, 2004; Smith S., 1999; Watts, 2005; Braun, 2008; Nihgtingale, 2006; Massey, Allen y Sarre, 1999; Cloke y Jonhston, 2005), empeñado en redefinir el conocimiento sobre la naturaleza. Desde el posestructuralismo se ha puesto el acento en la problemática distinción entre naturaleza-sociedad, demostrando de esta manera que la “*naturaleza solo puede ser entendida a través de procesos sociales*” (Nihgtingale, 2006: 4). Toda esta literatura aboga además por la deconstrucción de los esquemas binarios que considera una herramienta de dominación al oponer un término por encima del otro: naturaleza/sociedad, masculino/femenino, humanidad/animalidad, espacio/lugar, global/local, etcétera. El pensamiento binario, visto desde esta perspectiva, habría actuado como un medio de opresión ante realidades subalternas, locales, conformadas por minorías.

Este debate despertó en el seno de la Geografía Humana crítica, con obras que iban más allá del marxismo, integrando las interpretaciones de trabajos del posestructuralismo, del feminismo, de los estudios poscoloniales y de proyectos medioambientales así como de subdisciplinas como la antropología ecológica (Whatmore, 1999b: 23).

Encontramos, por tanto, otra serie de trabajos que sin medrar las aportaciones realizadas desde la Geografía, proponen vincular otra serie de aproximaciones desde otras disciplinas al propio análisis geográfico. Es lo que sucede en el caso de la Ecología (Demeritt, 1994; Zimmerer, 1994, 2006; Fitzsimmons, 2004, 1989). Este grupo de geógrafos, interesados en el análisis de cuestiones medioambientales, proponen en sus obras aunar el enfoque ecológico y geográfico para alcanzar una más compleja comprensión de las relaciones entre la sociedad y el medio ambiente o la naturaleza⁵², puesto que la Geografía como disciplina científica posee una larga tradición en el estudio de las relaciones entre ambas⁵³.

⁵² Ingold propone una diferenciación entre la naturaleza y el medio ambiente en base a nuestra propia concepción como seres humanos formando parte del mundo en el que vivimos o fuera de él, capaces de apropiarnos de éste. Es decir, aquel ámbito externo a nosotros correspondería a la naturaleza, por el contrario, el medio ambiente es el entorno en el que vivimos los grupos humanos y como consecuencia nos consideramos dentro de él (2000: 20 y 41).

⁵³ Arturo Escobar, desde la Ecología Política, apuesta por la incorporación de nuevos enfoques vinculados principalmente a aquellas investigaciones que tengan en cuenta la dimensión del

Sin ir más allá de estas propuestas, interesa el planteamiento de Zimmerer acerca de la cuestión de la etnicidad que para el autor juega un papel determinante en las relaciones entre las poblaciones y su entorno físico y natural, aspecto que además lamenta que haya sido desestimado por los planteamientos tradicionales de la Ecología y los cuales pretende recuperar (1994, 2006).

También Hiernaux sugiere integrar “lo ambiental y lo humano” en el camino de la renovación de la Geografía y cita a Reclús para señalar que “*El hombre es la naturaleza que toma conciencia de sí misma*” (1905: 505, cit. en Hiernaux, 2010: 57).

David Harvey se suma a la consideración del lenguaje transdisciplinar que la Geografía tiene posibilidad de alcanzar, lo cual supondría una más que adecuada herramienta a la hora de tratar cuestiones y problemáticas relativas a la Ecología con la que generar gran heterogeneidad de discursos que pivoten sobre el análisis de naturaleza (1996: 172).

Gracias a la contribución de estos trabajos, entre otros, han emergido nuevos postulados teóricos así como nuevos horizontes metodológicos. Demeritt apuesta por su parte, por los trabajos de Latour o Haraway para enmarcar el estudio de la naturaleza afrontando ésta tanto como un actor material como un objeto socialmente construido que contribuya a evitar y superar el dualismo naturaleza-cultura (1994). Parte para llegar a esta conclusión de una reflexión acerca de la concepción de la naturaleza por parte de los historiadores medioambientales y de los geógrafos culturales, quienes mantendrán -en palabras del autor- posturas irreconciliables, mientras continúen encerrados en su propio lenguaje. Los primeros la consideran como un actor histórico, autónomo, como un agente que existe y actúa sobre los seres humanos independientemente de la percepción de estos (*ibíd.*, 164) mientras que los geógrafos culturales por contraste consideran la naturaleza como una construcción cultural⁵⁴. Estos llevan a cabo una interpretación hermenéutica de la naturaleza y extraen el paisaje para interpretarlo como texto (apoyándose para ello en los trabajos de Geertz o Derrida) moldeado éste por “*un conjunto de narrativas, conceptos e ideologías*” (*ibíd.*, 168). En cambio, para los historiadores medioambientales, el paisaje se analiza como la interacción entre naturaleza-cultura.

Whatmore se muestra de acuerdo en que los geógrafos culturales categorizan la naturaleza a través de su representación y en este marco simbólico emerge la categoría

lugar en sus análisis, con lo que busca recuperar desde la Antropología Ecológica la perspectiva del lugar con el objetivo de generar nuevas concepciones acerca de los modelos culturales de la naturaleza (2000).

⁵⁴ Un esquema similar expone Descola en relación a los trabajos etnográficos que interpretan las relaciones entre los seres humanos y sus entornos naturales en la cuenca amazónica, entre los cuales se distinguen dos enfoques: uno que entiende la naturaleza como un objeto y otro de corte esencialista que subordina la sociedad a los determinismos medioambientales (1996).

de paisaje como el escenario en el que los seres humanos asumen y dan forma a su entorno y el modo en que vemos y representamos el mundo (1999a: 7). Sin embargo, al mismo tiempo, advierte de los riesgos que se corren al aceptar que los seres humanos nos relacionemos con la naturaleza y que dicha relación esté culturalmente mediada puesto que dicho planteamiento excluye multitud de factores propiamente naturales (*ibíd.*, 9) constituyendo un planteamiento del todo reduccionista a la vez que determinista. Ambas interpretaciones corren el riesgo de impedir “*encontrar un nuevo lenguaje capaz de describir la naturaleza como un actor real de la historia humana y como un objeto socialmente construido de esas historias*” (Demeritt, 1994: 179).

Una reflexión similar enuncia Castree desde un enfoque propio del marxismo, al exponer que la propia teoría marxista concibe la naturaleza como una “*entidad material y actor en la historia*” sin considerarla como algo fijo, algo inmodificable y universal separada de la sociedad (1995: 25). Por tanto Castree, en la misma línea que Demeritt, apuesta por repensar la naturaleza como producida, la cual desempeña a la vez un papel activo y real en la historia y geografía de las sociedades capitalistas (*ibíd.*).

Pálsson por su parte defiende que un camino para superar el planteamiento dicotómico que distingue entre naturaleza-sociedad podría ser extrapolar “*el enfoque marxiano que generalmente se limita a las relaciones humanas*” al análisis de las relaciones que se producen entre los seres humanos, entre las sociedades, y el medio ambiente (2001: 81).

La reflexión tanto de Demeritt como de Castree, nos ayuda a considerar las posibilidades de integrar las reflexiones de otras disciplinas a la propia geográfica para reforzar nuestro propio entendimiento. Siguiendo la dirección propuesta por Demeritt, el propio Zimmerer respalda la idea de incorporar nuevos planteamientos provenientes de disciplinas no geográficas pero que en realidad comparten muchos de los postulados e inquietudes analíticas a la hora de acercarnos a la comprensión de la naturaleza. Para lograr un nuevo lenguaje que nos permita profundizar en dicha realidad, este autor sugiere lo que él viene a denominar como “nueva ecología” para repensar el campo de las relaciones humano-medioambientales (1994). Para ello un conjunto variado de disciplinas que él considera insertas en el campo de la Geografía Humana y que poseen cierto enfoque ecológico como pueden ser la Ecología Cultural, la Ecología Política o la Ecología Humana, deben aunar esfuerzos y aproximaciones teórico-metodológicas e intercambiar préstamos conceptuales y analítico-descriptivos.

En el caso de la Antropología ya desde los trabajos tempranos de Julian Steward (inspirado en los trabajos de Ratzel (Raffles, 2002)), Leslie White, pasando por Rappaport, Odum, Bateson, Sponsel, Posey, hasta los más actuales de Tim Ingold o

Emilio Morán, han incorporado la perspectiva ecológica a los análisis efectuados desde dicha disciplina, enfatizando lo relacional⁵⁵.

Del mismo modo que Zimmerer, Margaret Fitzsimmons apuesta por la incorporación en el campo de la Geografía del enfoque ecológico, principalmente aunque no sólo, en los debates sobre naturaleza y sociedad y aboga a la vez por la apertura de la Geografía a otras disciplinas que permita adquirir nuevas perspectivas de estudio, lo cual constituye una gran oportunidad para enriquecer la propia disciplina al crear redes de trabajo que articulen el conocimiento y la acogida de nuevas herramientas de análisis (2004).

La integración de dichos sub-campos ecológicos, de la “nueva ecología” en la Geografía Humana supondrá un avance para los propios estudios propios de dicha rama científica, interesados en adquirir nuevas herramientas con las que reformular las relaciones organismos-medioambiente (Zimmerer, 1994: 111). El ejemplo del concepto de adaptación de Barrows (uno de los pioneros éste en el ámbito de la Ecología Humana) resulta paradigmático⁵⁶.

El manejo adaptativo y la resiliencia ecológica han sido estudiados por otros autores (Muir, Rose D., y Sullivan, 2010) quienes defienden que ambas responden a contextos de cambio y reconocen el papel de los seres humanos en los sistemas ecológicos en donde las relaciones sociales condicionan aquellas.

⁵⁵ No obstante, desde el propio campo científico de la Antropología se ha cuestionado dicha perspectiva con autores como Murphy o Sahllins, planteándose la viabilidad del enfoque ecosistémico aplicado a las unidades de análisis (Morán, 2008).

⁵⁶ Los planteamientos de la Ecología Cultural en cuanto al estudio de las interacciones entre las sociedades humanas y el medio ambiente se basaron en el estudio de la adaptación humana al medio físico y natural, lo cual provocó que en muchas ocasiones se cayese en un determinismo ambiental, además de asumir el medio ambiente como algo dado. Años más tarde, en la década de los 80, la Antropología Ecológica recuperó dichos análisis pero esta vez teniendo en cuenta la historicidad de conceptos como naturaleza y cultura y la conformación mutua entre ambas en base a su interacción en la que además intervenían toda una serie de factores externos.

Para un análisis más profundo sobre la adaptación de las sociedades humanas a su hábitat consultar Morán, 2008. En esta obra Morán realiza un repaso a las teorías que han dedicado sus esfuerzos al estudio de la adaptación humana al medio ambiente desde el determinismo ambiental, el determinismo cultural (si el uno biologiza la cultura el otro culturaliza la biología), a las teorías darwinistas de la evolución y su influencia posterior, hasta llegar a la Ecología Cultural de Julian Stewart, la Antropología Ecológica de Vayda y Rappaport, la Etnoecología o la Historia Ambiental, para finalizar con la Ecología Política (2008).

Otro trabajo que enfoca su análisis en las estrategias adaptativas de las sociedades es el de Berkes (1989). Desde el enfoque de la Ecología Cultural, las sociedades humanas se han adaptado a través de la cultura. Así en la década de los 70 del siglo pasado, los estudios sobre Ecología Humana prestaban su atención a la adaptación de las sociedades humanas al medio ambiente en el que vivían. Incluso en los últimos años siglo XX algunos trabajos se hacían eco de tal enfoque (Bresler, 1996).

Para el caso de Mojos los trabajos tempranos dedicados al estudio de la adaptación de las sociedades amazónicas véase Metraux (1942) y Nordenskiöld, (1930).

Los límites en la Ecología Humana y la Geografía Humana en el mundo anglosajón son en muchas ocasiones difusos.

Fue precisamente desde la Antropología Ecológica desde donde aparecieron la gran parte de estudios dedicados a las sociedades indígenas de la Amazonía (modelos de asentamiento, manejo y uso de recursos, percepción, relación e interacción con el entorno, etcétera) los cuales enfocaron su análisis en las adaptaciones de dichas sociedades a factores ecológicos (Sponsel, 1995a). Si bien, a partir de finales de la década de los ochenta y en plenos noventa, algunos antropólogos amazonistas comenzaron a desarrollar en sus investigaciones un enfoque que prestaba especial interés a la influencia y el impacto de los factores externos sobre las dinámicas sociales, políticas y culturales de los pueblos amazónicos (Morán, 1993, 2008; Sponsel 1995a; 1995b).

La propia Leslie Sponsel, instaba a los trabajos de la Antropología Ecológica a prestar no sólo atención a las adaptaciones de las sociedades indígenas a su medio ambiente, sino a los impactos culturales y medioambientales proferidos desde la sociedad occidental, proponiendo para ello un cambio de paradigma en los estudios antropológicos de la Amazonía (1995a: 3, 1995b: 279), enfoque éste que sería reapropiado por la Ecología Política.

Esta es la línea que adopta MacLean Stearman en el estudio de los Yuquis de las tierras bajas de Bolivia al hacer ver las consecuencias que tuvo para este pueblo indígena el contacto con la sociedad de mercado, que les ha llevado entre otras cosas a abandonar de modo paulatino actividades *tradicionales*, como la caza, para centrar más su producción en la agricultura (1995).

Para Watts, el estudio de las respuestas adaptativas a los avatares medioambientales se enmarca en la separación naturaleza-cultura puesto que consideran que las sociedades correspondientes se muestran capaces de controlar la naturaleza (2005: 153). Pero si prestamos mayor atención a este fenómeno en el seno de las culturas indígenas nos podemos dar cuenta que éstas no actúan para dominar simplemente la naturaleza considerándola como algo que se puede manipular sino que se llevan a cabo toda una serie de estrategias adaptativas a los condicionantes impuestos por el entorno natural y físico.

El trabajo de Muir, Rose D. y Sullivan propone, en la misma dirección de aquel de Zimmerer, adoptar una perspectiva que ponga énfasis en lo social para facilitar, de esta manera, las aproximaciones metodológicas en trabajos que versen sobre el conocimiento indígena. De ello se deduce que unas “buenas” relaciones sociales contribuyen a generar unas “buenas” condiciones ecológicas (2010: 262). En el caso de Mojos es evidente que un uso y manejo de los recursos acorde con un mantenimiento ecológico propicia unas relaciones sostenibles basadas en la reciprocidad, la cooperación y el intercambio entre los grupos humanos. Por el contrario, emergen los

conflictos cuando hay un manejo desigual por parte de un sector sobre otro con la consecuente fractura entre ellos.

El vínculo existente entre las relaciones sociales y ecológicas ha sido propuesto en otros trabajos. Concretamente en el marco del conocimiento *tradicional* indígena - específicamente entre las poblaciones aborígenes- considerando que éstas mantienen armónicas relaciones ecológicas con el medio ambiente (Muir, Rose D., y Sullivan, 2010). Algunos trabajos como el efectuado por CEJIS, sobre el pueblo ignaciano, consideran que éste mantiene una relación de armonía para con el medio ambiente, conformando una determinada complementariedad entre las comunidades y el entorno natural en el cual habitan y del cual se sirven para satisfacer sus necesidades llegándose incluso a hablar de la “espiritualidad del bosque” (2003: 242). Esta investigación tendrá muy presente la interacción de las comunidades indígenas en cuestión con su entorno, el cual supone la base de su existencia.

No obstante y retomando lo que ya advertía Zimmerer, este conjunto de préstamos analíticos debe ser reformulado por la propia disciplina geográfica. Por el hecho de integrar las perspectivas de la “nueva ecología” la capacidad de la Geografía Humana avanzará para contribuir a un entendimiento transdisciplinar que involucre a la conservación del medio ambiente y su relación con el desarrollo de las sociedades (1994: 119).

En otro de sus trabajos, Zimmerer parte del análisis sobre el proceso de interacción de las sociedades humanas y su medioambiente y sugiere que se establece un nexo a través de la identidad social (2006). En este sentido Nightingale plantea que la naturaleza es producida a través de las relaciones sociales que actúan como mecanismo en dicho proceso y al mismo tiempo el entorno físico y humano se percibe de distinta manera en función del grupo social que lo configure así como de la posición que cada individuo ocupe en la estructura social (2006: 6). Martínez López y Giménez Benítez, tras realizar trabajo de campo con las comunidades indígenas *mocovíes* del chaco argentino, han demostrado que el territorio (*etnoterritorio*) se ve atravesado por fuerzas y tensiones que cada uno de los agentes sociales, desde su posición particular, despliegan en su interacción, lo cual determina las posiciones de cada uno de ellos a nivel social (2009).

En el caso que nos ocupa, el territorio entendido como medio físico es apropiado de forma diferente por cada uno de los sectores sociales que intervienen en su configuración siendo significado por medio del conjunto de relaciones sociales desplegadas por dichos grupos. De este planteamiento se deduce, en palabras de Nightingale, que “*sociedades y medio ambiente son co-producidos*” (2006: 7).

También desde otros campos de investigación como la Ecología Política, entre los que destacan los trabajos del propio Zimmerer (1994, 2006) o Arturo Escobar (2000, 2010a, 2010b), se aboga por romper la dicotomía a la que me refería anteriormente. Asimismo, los estudios feministas de finales del pasado siglo, han puesto su énfasis en situar las relaciones de poder en el nexo naturaleza-sociedad, cuestionando del mismo modo dicho dualismo y defendiendo que la naturaleza y la sociedad están inextricablemente unidas (Nightingale, 1996)⁵⁷.

Pero en este breve repaso sobre la concepción de la naturaleza no se puede dejar de mencionar algunas ideas que ya anticipó Marx en sus trabajos. Más bien las interpretaciones geográficas que se han llevado a cabo posteriormente a partir de sus reflexiones. No sólo por la relevancia de este autor ni porque interese de forma especial al presente trabajo, sino más bien por las repercusiones que tuvo en otros científicos sociales que a partir de sus análisis pusieron en marcha todo un debate sobre ello. Me detendré en aquellos que considero que más pueden aportar a la investigación a la hora de definir algunas ideas previas sobre la concepción de la naturaleza misma.

Neil Smith y O'Keefe apuntan a la perspectiva histórica de Marx en relación con la naturaleza pese a que éste no realizó una teoría sistemática sobre dicha categoría aunque sí aparezca implícita en el materialismo histórico (1980). Castree reconoce del mismo modo que Marx no desarrolló una teoría de la naturaleza sino que sería Alfred Schmidt quien a través de su obra *-El concepto de la naturaleza en Marx-* desarrolló lo que vino a denominar como “ideología de la naturaleza” a partir de los escritos del autor alemán (1995: 221). Un aspecto que entraña gran interés para este trabajo es que, en palabras de Smith y O'Keefe, Marx no concebía la separación entre naturaleza y sociedad puesto que aquella “*está siempre relacionada con la actividad social*” (1980: 32). Para Marx, según entiende Watts, la relación entre cultura y naturaleza, entre los seres humanos y la misma (relación dialéctica y relacional) estarían mediadas por el trabajo dado que la organización y el significado que adquiere éste transforman la naturaleza desde el punto de vista biofísico en un acto de apropiación (2005: 160-161).

Sin embargo y sin ser en absoluto experta en la obra de este reconocido intelectual ni en literatura marxista, me aventuro a contradecir a Smith y O'Keefe en relación a lo expuesto debido a que Marx defendía la constitución de la sociedad en base a prácticas humanas a partir de la apropiación de la naturaleza, lo cual cuestionaría dicha unidad defendida por tales autores.

David Harvey se suma al cuestionamiento de la forma en la que desde el periodo de la Ilustración –con la aportación de científicos de la talla de Hume, Locke, Descartes o Newton- se consideró que el hombre era capaz de dominar la naturaleza a partir de

⁵⁷ Para un estudio sobre la geografía y el feminismo véase Rose G., (1993).

las leyes –universales- que regían la naturaleza y a las que se podía alcanzar a través de la experimentación y observación obtenidas a través de la concepción científica inductiva o deductiva del conocimiento (1996).

Una cita extensa que considero del todo ilustrativa y que por dicho motivo decidí incluir a tenor de todas estas discusiones teóricas, es la que a continuación muestra que cualquier proceso de ocupación de la naturaleza es no sólo material sino además simbólico:

“(...) el proceso de apropiación de la naturaleza, inherente a cualquier sociedad, no puede comprenderse –como por desgracia se ha hecho- como proceso exclusivamente material, casi siempre de carácter económico como si la apropiación material careciera de sentidos. Toda apropiación material es al mismo tiempo simbólica, puesto que se apropia de lo que tiene o hace sentido. El mapa, por ejemplo (instrumento tan apreciado por los geógrafos), es una forma de re-presentación de la realidad, y no la realidad misma, que como tal constituye una forma de apropiación simbólica, condición de su apropiación (...) Las identidades colectivas implican por tanto un espacio hecho propio por los seres que las fundan, vale decir, implican un territorio” (Porto-Goncalves, 2001: 5-6, cit. en Luque y Robles, 2006: 50-51).

Muy elocuentemente, Bonfil Batalla traslada el debate entre naturaleza y sociedad a la asimetría asumida tradicionalmente entre la civilización occidental y la india (1990). En su trabajo critica la ambición de los hombres en la sociedad occidental por querer dominar tanto a la naturaleza como a otros pueblos mientras que *“en la civilización india el hombre es parte integrante e indisoluble del cosmos y su realización plena consiste en ajustarse armónicamente el orden universal de la naturaleza”*, conviviendo con ésta a la que en absoluto pretende subyugar (1990: 197-198).

Un planteamiento alternativo es que el ser humano, al requerir de la naturaleza lo necesario para su desarrollo social y productivo, se apropia de ella y la transforma para vencer sus propias necesidades. Predomina entonces en los planteamientos marxistas, una visión un tanto utilitarista en la que la naturaleza se presenta como algo externo. Quizá por dicho motivo, Neil Smith y Phil O’Keefe reconocen la existencia de cierto dualismo en la concepción de Marx acerca de la naturaleza que no se refiere a ésta específicamente sino a la comprensión y entendimiento de la relación entre las sociedades humanas con aquella (1980: 34).

Geógrafas como Whatmore (1999a; 1999b) y Fitzsimmons (1989) inciden en la construcción social de la naturaleza, principalmente desde la tradición marxista en lo

que se refiere a la transformación material de aquella pese a que también desde la Geografía Cultural se haya aplicado un enfoque similar.

Sin embargo, al hilo de las reflexiones de Smith y O'Keefe, cabe apuntar un último comentario y es que el proyecto de la modernidad de dominación y control de la naturaleza lejos de haberse visto atenuado, se ha perpetuado tras la sutileza de los programas conservacionistas dirigidos a la preservación de la misma que en la actualidad lo que buscan, en muchas ocasiones, es desplegar esquemas diferentes de apropiación que nos recuerdan a los planteamientos más positivistas los cuales consideraban la naturaleza como algo orgánico, susceptible de ser ordenado. En esta misma dirección apunta Eder en su trabajo sobre la construcción de la naturaleza (1996). Este autor argumenta que los grupos humanos han sido quienes la han reducido a la mínima expresión a través de su manipulación y consecuente transformación. En términos similares, Whatmore llama la atención sobre las implicaciones que supone la representación de la naturaleza, en absoluto inocente, puesto que ésta *“no es un proceso neutral que simplemente produce una imagen especular de una realidad externa fija”* como si de una fotocopia se tratase (1999a: 7). Sin ir más lejos, la región amazónica ha sido definida como *terra nullius* o *tierra incognita* con la intención, por parte de los poderes gubernamentales, de explotarla y fomentar su colonización.

Actualmente muchas de las políticas que prevalecen y orientan los programas de conservación de los bosques o los parques nacionales se mueven en esta dirección. Lo cual demuestra que la percepción del medio ambiente condiciona las lógicas de interacción entre éste y las sociedades humanas así como los mecanismos que intervienen en dicho proceso dialógico. Nos enfrentamos, por tanto, a innumerables maneras distintas de percibir la naturaleza. Asimismo Eder señala que la creciente dominación de la naturaleza por parte del conocimiento científico, dio como resultado un incremento de la clásica división social (1996: 22). Este autor se suma a quienes consideran que la modernidad redujo la apropiación material de la naturaleza a la propia explotación (vinculada ésta con la organización de las relaciones entre grupos sociales). Esta explotación es señalada como una de las principales causantes de la crisis medioambiental (Eder, 1996: 23-24; Castree, 1995) siendo para Castree *“la más inmediata manifestación de las contradicciones de la estructura social del capitalismo”* (1995: 26). Cuestiona de esta manera la visión utilitarista más propia del marxismo que convierte la naturaleza en un valor comercial.

Eder advierte de los mecanismos con los que la teoría económica coloca en la esfera capitalista a la naturaleza, sometiéndola a un proceso de instrumentalización con la que comerciar (1996: 27). Critica firmemente la *“reducción de la naturaleza a un*

factor de producción, un recurso económico el cual es constitutivo para la teoría económica” y es que al considerar exclusivamente la naturaleza en términos económicos se convierte en algo externo (*ibíd.*, 25). En esta dirección propone Lèvy cierta clasificación con que hace corresponder la consideración de la naturaleza desde el paradigma agro-industrial como el “*conjunto de recursos disponibles*”, frente al paradigma neo-naturalista que defiende el “*punto de vista y derechos intrínsecos*” de la naturaleza a diferencia del enfoque posmaterialista el cual la define como “*patrimonio que se inventa y se valoriza*” (1994: 88). El propio Harvey disiente acerca del valor de la naturaleza como recurso, la cual se muestra susceptible de ser comercializada pese a que “*la elección del valor está en nosotros y no en la naturaleza*” (1996: 163).

Con todo ello, Castree, propone superar el dualismo entre naturaleza y sociedad a partir de un proceso de simbolización de la primera a través de la cultura (1995). Y es que, sin lugar a dudas, uno de los geógrafos, junto a David Harvey, que más interés ha mostrado en el análisis marxista de la “producción de la naturaleza”, es el geógrafo británico Noel Castree. Concretamente me baso en uno de sus trabajos -en donde problematiza acerca de las aportaciones que ofrece el marxismo en la explicación sobre la manera cómo la naturaleza es producida bajo el capitalismo- que trata acerca de las relaciones entre el medio ambiente, enmarcadas en el ámbito del capitalismo, para entender cómo se construye lo que él viene a denominar “naturaleza social” (*ibíd.*). Castree comienza llamando la atención en las implicaciones que tiene el hecho de adoptar una u otra perspectiva a la hora de llenar de contenido al concepto de naturaleza. A partir de la obra de Schimdt -traducida al inglés en el año 1971- Castree diserta sobre la concepción marxista de la unidad entre sociedad y naturaleza, cuya separación no tendría sentido, alegando lo absurdo de situar la naturaleza como algo externo si la relación desplegada entre ésta y la sociedad constituye un producto histórico, por lo que ambas se representan mutuamente (*ibíd.*, 16-17). Castree se une a la opinión de que el capitalismo ha sido el gran responsable de la transformación de la naturaleza y de las relaciones sociales, estando éstas inmersas en dicho proceso transformativo y de apropiación de la naturaleza. Pero deja ver las limitaciones de dicho sistema dependiente que requiere de esta última para poder perpetuarse, demostrando su imbricación -de la misma manera que cualquier otro sistema de producción- en dicho ámbito (*ibíd.*, 23). Una reflexión que surge a raíz de los planteamientos de Noel Castree es que, efectivamente el capitalismo está incrustado en el medio natural pero, al mismo tiempo, la propia maquinaria de la producción capitalista provoca o contribuye a la emergencia de otros entornos que a su vez delimitan la propia producción capitalista, proceso que demuestra lo inextricablemente unidos que ambos se encuentran.

El propio Castree hizo un repaso a la concepción de la naturaleza no exclusivamente por parte de Marx sino además por parte de aquella literatura de carácter marxista. De ahí que tuviera en gran consideración los trabajos de otro de los grandes geógrafos contemporáneos como es Harvey, uno de los pioneros, en palabras del propio Castree en poner el énfasis “*sobre los aspectos sociales de la dialéctica sociedad-naturaleza que Marx buscó capturar*”, lo cual permitió comenzar a pensar la naturaleza como producto (*ibíd.*, 18-19).

David Harvey ha prestado, en alguno de sus trabajos, especial atención a las cuestiones de la naturaleza, incorporando los debates surgidos en el seno de la Geografía Humana (1996). Para Harvey, según Watts, el esquema binario naturaleza-cultura “*es visto dialécticamente como un proyecto socio-ecológico, un ecosistema creado*” en el que “*los seres humanos, como otros organismos, son sujetos activos transformando la naturaleza de acuerdo a sus leyes y están siempre adaptándose a los ecosistemas que ellos mismo construyen*” (2005: 162). Lo cual nos sugiere que se mantiene en cierta medida la dicotomía naturaleza-sociedad, presentando a la naturaleza en virtud de las dinámicas de cambio social.

2. 2. 3. El papel de la naturaleza en las cosmologías indígenas de Bolivia.

La controversia surgida en el seno de la consideración de la existencia o no de la relación entre la naturaleza y los grupos humanos ha sido cuestionada frontalmente por los discursos indigenistas en Bolivia. La inquebrantable relación entre ambas - consideradas como medio ambiente y sociedad- es defendida hasta la saciedad, alegando la unidad e indivisibilidad entre ellas (Catoira, 1994).

El actual presidente -Evo Morales- reitera en continuación dicha premisa. Frente a la opinión internacional abogó en uno de sus discursos más emblemáticos (Cumbre del Clima de Copenhague en el año 2009, el 17 de diciembre) por la necesidad prioritaria de defender la “Madre Tierra”, la naturaleza -dado que ésta es “sagrada”- anunciando que la Madre Tierra es nuestro hogar⁵⁸. Cuestionaba la existencia de

⁵⁸ Bolivia ha llegado al punto de conferir 11 derechos a la naturaleza equivalentes a los derechos del hombre:

el derecho a la vida y a la existencia;

el derecho a continuar ciclos vitales y procesos libre de la alteración humana;

el derecho a no tener su estructura celular contaminada o alterada genéticamente;

el derecho “a no ser afectada por mega infraestructuras y proyectos de desarrollo que afecten el balance de los ecosistemas y las comunidades de los pobladores locales”;

el derecho al aire limpio y al agua pura;

el derecho al equilibrio;

el derecho a no ser contaminada; además de existir una propuesta de creación de un Ministerio de la Madre Tierra (<http://www.olca.cl>)

políticas de destrucción de la Madre Tierra, la cual era sometida a un proceso de mercantilización lo cual le llevaba a defender que “*la madre no se alquila, no se vende ni se viola, hay que respetarla*” (Svampa, Stefanoni y Fornillo, 2010: 272). Aparece como una característica de los pueblos indígenas, en particular de los amazónicos, quienes creen en la existencia de “los dueños del monte”⁵⁹, quienes no buscan dominar ni lucrarse con la tierra, por el contrario lo que prima es la consecución de la armonía y el equilibrio con la Pachamama o Madre Tierra (Letamendia, 2011: 142). Otros trabajos van más allá y defienden la “*relación espiritual con el medio ambiente*” llegando incluso a hablar de las culturas ecológicas cuyas “*pautas culturales, sus rituales, su forma de organización social, están estructurados en función de, y son una respuesta al medio ambiente*” (Libermann y Godínez, 1992: 145).

Es una constante de los discursos de Evo Morales la asociación de la Madre Tierra y la naturaleza, a las que se concibe como sinónimos. No parece, sin embargo, haberlo recordado al haber autorizado, pese a las numerosas protestas, movilizaciones y marchas indígenas, la construcción de la carretera que atravesará el TIPNIS, refugio de tantas familias *originarias*. La mercantilización a la que ha sometida la Madre Tierra a manos de una empresa del país vecino –Brasil- está en total oposición frente a sus populares postulados acerca de la búsqueda del equilibrio entre la naturaleza y los seres humanos. Curiosamente, su programa, amalgama de preceptos provenientes del socialismo, la cosmología indigenista y ciertos tintes de nacionalismo, acusa al capitalismo de personarse como el principal responsable de explotar y destruir la naturaleza y saquear de manera salvaje sus recursos, privatizándolos, frente a lo que propone la lucha y derrocamiento desde el modelo socialista y desde el respeto a la Madre Tierra. Los discursos de Morales hacen continua referencia a la inversión del esquema del *vivir mejor* -propio del modelo de producción capitalista que considera que vivir mejor se consigue a través de la explotación de recursos y de destrucción de la Madre Tierra- por el *buen vivir* –*suma q’amaña* o *sumak kawsay*- basado éste en la solidaridad y reciprocidad (capitalismo por socialismo) (Svampa, Stefanoni y Fornillo, 2010). El *buen vivir* –incorporado a la Constitución del Estado boliviano así como del ecuatoriano- sintetiza la esencia del modo de vida de la organización comunitaria del *ayllu*, basada en la armonía y equilibrio de la comunidad con la naturaleza (Introducción de Larrabeutzu, 2011 en Letamendia, 2011). El *vivir bien* debe por tanto ser entendido en términos de solidaridad, de igualdad, de complementariedad y reciprocidad, por ello ven esencial defender el derecho de la Madre Tierra, puesto que sin ésta el *vivir bien* sería irrealizable (Svampa, Stefanoni y Fornillo, 2010: 265-285).

⁵⁹ Aunque si lo que se pretende es negar la condición de propiedad que los pueblos indígenas poseen o, mejor dicho, no poseen de la naturaleza, la noción de “dueños del bosque” es algo cuanto menos curioso.

Las fuentes de estos discursos beben de aquellas proclamas libertarias de mitad de siglo, encarnadas en el caso boliviano en Fausto Reinaga quien en el prólogo de su obra más famosa gritaba lo siguiente:

“De ahí, que cuando los dos millones y medio de indios claman: TIERRA, ejercitan, esgrimen el derecho del hijo a reconquistar su madre. La voz de la justicia aureola la frente y los puños del pueblo indio en su marcha hacia la posesión y uso de la Tierra, su Pachamama” (1953: 4).

Figura 2. 4. Diseño imagen “Madre Tierra”.



Fuente: Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales

Desde la perspectiva de Cajete los pueblos indígenas experimentan la naturaleza como parte de sí mismos mientras que al mismo tiempo son parte de la naturaleza constituyéndose las relaciones humanas en compleja interacción con ésta (2000, cit. en Johnson y Murton, 2007: 126).

En el caso de las comunidades mojeñas además de interactuar con otros actores sociales, lo hacen también con sus entornos naturales. En este sentido me atrevo a afirmar que los mojeño-ignacianos han desarrollado un proceso de adaptación a su medio ambiente el cual se basa en un equilibrio entre este grupo étnico y los recursos naturales. Si el binomio naturaleza-sociedad se ve en algún momento alterado por cualquiera de ambas partes, repercutirá en dicho equilibrio trayendo como consecuencia transformaciones en ambas componentes.

Un aspecto que se reitera, casi de manera ferviente, en el conjunto de la bibliografía que trata sobre cuestiones indígenas, es la armonía entre los pueblos

indígenas y la naturaleza (mostraré hasta qué punto tratar de cuestiones ambientalistas en América Latina se asocia con cuestiones indígenas). Una grandísima parte de la literatura que se ha escrito sobre la relación de las poblaciones originarias con sus entornos es bastante idealista y no reconoce la realidad de muchas sociedades indígenas que han optado por comerciar con los recursos disponibles, en vez de mantener la sostenibilidad de su entorno. Este último aspecto es en realidad un hecho que se repite entre la mayor parte de poblaciones indígenas. No reconocerlo sería atentar contra la verdad. No obstante, no debe porqué alarmar a quienes defienden la *autenticidad* de los pueblos indígenas (a aquellos que se sitúan en posiciones del todo esencialistas) dado que, como venimos comentando, estos grupos sociales viven inmersos en la *aldea global* que les hace partícipes de sus dinámicas internas. Dicho esto, ¿por qué no aceptar que existan indígenas que hayan optado por convertir en bienes mercantiles los recursos de sus entornos?, ¿acaso ellos tienen menos derechos que el resto para comerciar con estos?, ¿están las redes de mercado diseñadas de tal manera que los excluya de todo tipo de transacción? La respuesta parece del todo negativa.

Chirif, García Hierro y Chase Smith, quienes reconocen abiertamente la mencionada armonía, el respeto y el mantenimiento de la naturaleza inscrito en el código ético y moral de la cosmovisión indígena, han afirmado en una de sus obras que:

“la sociedad indígena ha usado el bosque y el agua para proveerse de todos los bienes materiales, para satisfacer las necesidades de sus integrantes sin jamás destruirlo. A la vez, ha descubierto en la naturaleza el mundo espiritual que le sirve para soportar y vitalizar su cultura. Por esta razón las sociedades indígenas han podido establecer esta armonía con el medio ambiente” (1991: 20).

Está demostrado que el manejo de recursos llevado a cabo por estas poblaciones causa un impacto ambiental mucho más reducido, o incluso mínimo, y que los entornos de estas comunidades locales se presentan menos modificados y degradados, lo cual está íntimamente relacionado con la interacción entre tales sociedades y su medio natural.

Sin dejar de aceptar esta premisa reitero que no es positivo el generalizarla al conjunto de poblaciones indígenas, aunque prime en muchas de ellas. El medio ambiente amazónico característico de Mojos ha sido sometido a un total proceso de antropización por sus pobladores, lo cual nos conduce a reconocer la manipulación

cultural sufrida en este espacio *natural* pese a que el manejo desarrollado en esta región se haya orientado a la preservación de la naturaleza⁶⁰.

2. 3. EL TERRITORIO PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS AMAZÓNICOS DE BOLIVIA. PERCEPCIÓN TERRITORIAL DEL PUEBLO MOJEÑO-IGNACIANO.

El concepto de territorio en Mojos ha ido transformándose y reformulándose a lo largo del tiempo. Algunas autoras como las antropólogas bolivianas Gabriela Canedo o Zulema Lehm, han dedicado parte de sus estudios a estas cuestiones. Canedo se ha centrado más en la reflexión de las dinámicas territoriales en el Mojos contemporáneo (2008, 2009, 2010). Por su parte Lehm ha optado por profundizar en el movimiento milenarista del siglo XIX que tuvo lugar en el Beni y por el cual miles de indígenas participaron del movimiento ya conocido como la *Búsqueda de la Loma Santa* (1999).

Son muchas las aristas que encontramos en el significado de una noción tan cambiante y la cual encierra tantos intereses encontrados que condicionan su alcance.

2. 3. 1. El territorio como mecanismo de lucha para los pueblos indígenas.

La categoría de territorio supone la herramienta esencial con la que los pueblos indígenas de Bolivia se han lanzado a reivindicar frente al Estado toda una serie de derechos –indicados en la introducción de este trabajo– que consideran les fueron usurpados con la colonización. El tema de las demandas territoriales constituye además la punta de lanza de las reivindicaciones (junto con el derecho a la autodeterminación) del movimiento indígena en todo el conjunto del continente sudamericano. En la región amazónica adquieren una importancia fundamental por los intereses que están en juego, lo que empuja al surgimiento de conflictos entre diversos grupos sociales. Supone un tema de gran relevancia en la actualidad boliviana, el cual ha generado fuertes polémicas en el país⁶¹.

⁶⁰ El hecho de reconocer que los pueblos indígenas desarrollan un modo de producción alternativo al capitalismo no debe confundirnos ni hacernos caer en posturas esencialistas puesto que en todo el planeta habitan poblaciones indígenas que han generado paisajes culturales, desde los kayapó de la Amazonía, los Kagore shona de Zimbabue, los Khumbu de Nepal a los Maorí de Nueva Zelanda (Posey, 2001). Al hilo de ello Klaus Seeland menciona al comienzo de su trabajo que “*un espacio natural siempre aparece como un paisaje cultural porque es un espacio socialmente apropiado*” (1997: 1).

⁶¹ El movimiento indígena en la región del Beni, de donde extraje el material empírico, se ha articulado en torno a las demandas territoriales. A raíz del surgimiento de dicho movimiento se consolidó y afianzó el sentimiento de pertenencia a un espacio, a un lugar concreto, lo cual permitió la conformación de las respectivas plataformas de reivindicación de la etnicidad

El territorio adquiere especial interés en relación al movimiento indígena de Mojos. Con vistas a lograr el reconocimiento territorial se han visto empujados a adoptar un lenguaje político que les ha permitido articular sus demandas. Por este motivo es que el término “territorio” ha sido y es fundamental como instrumento discursivo legitimador de las organizaciones indígenas. En palabras de Will Kymlicka *“la supervivencia de las culturas indígenas en todo el mundo depende sobremanera de la protección de su base territorial, de ahí que los pueblos indígenas hayan luchado tenazmente para mantener la propiedad de sus tierras”* (1996: 69). Es por ello que el territorio se presenta como una de las principales reivindicaciones de los movimientos indígenas ya que supone el eje en el que se articulan las formas de vida de estos pueblos⁶². Y no sería menos para los mojeños-ignacianos.

Para Kymlicka la solución más eficiente frente a la expropiación y venta de las tierras que históricamente han pertenecido a poblaciones indígenas sería la creación de *“reservas en las que la tierra es de propiedad comunal y/o fiduciaria, y no puede ser alienada sin el consentimiento de la comunidad en su conjunto”* (ibíd.). En esto consistirían las TCOs, en espacios inalienables y territorios comunales en los que los grupos étnicos podrían desarrollar sus prácticas locales. Lo cual supondría un freno al proceso de colonización que por parte de actores externos (empresas ganaderas, madereras o hidrocarburíferas y mineras) despojó en todo el conjunto de la Amazonía a numerosas comunidades indígenas de amplias extensiones de territorio. Estos colonos serían quienes desplegasen estrategias destinadas a convertir la propiedad comunal tradicional en títulos territoriales a nivel individual. Y como señala Kymlicka *“cuando la tierra está dividida y es alienable, los miembros más acaudalados de la sociedad predominante pueden comprar la tierra y otros recursos de los que depende la comunidad. Además la tierra individualizada y alienable es más vulnerable a la expropiación por parte de los gobiernos”* (ibíd.). Por esta razón es que el movimiento indígena se organizó en la Amazonía con la intención de reclamar el reconocimiento de sus derechos territoriales, los cuales les habían sido históricamente negados.

Las reivindicaciones territoriales pusieron de manifiesto los vacíos legales que existían principalmente en el derecho boliviano con respecto a la territorialidad indígena, la regulación de las actividades de uso y aprovechamiento de los recursos de estos espacios y el reconocimiento de formas de propiedad indígena, bien sean

mojeña. A partir de las estrategias de resistencia indígena, estas poblaciones articulan su propia identidad que aparece ligada a la componente territorial.

⁶² Will Kymlicka manifiesta en su obra *Ciudadanía multicultural* que según los estudios de algunos investigadores *“en la actualidad, la principal causa de los conflictos étnicos en el mundo es la lucha de los pueblos indígenas para proteger sus derechos territoriales”* (1996: 51).

comunitarias o colectivas. El proceso de despojamiento de territorios sufrido de manos de *terceros* y que se ha llevado a cabo desde la llegada de los españoles, es para las organizaciones y grupos indígenas el principal fenómeno que debe ser revertido. Los pueblos indígenas buscan recuperar el territorio que consideran mermado por las constantes incursiones externas que repercuten sobre el desarrollo cultural. Por esta razón están dispuestos a luchar hasta el final por la defensa de sus territorios.

Así lo demostró el pueblo indígena mojeño-ignaciano al efectuar la *Marcha por el Territorio y la Dignidad* del año 1990, la cual realizó el recorrido desde Trinidad hasta La Paz, aglutinando a numerosos grupos indígenas de las tierras bajas de Bolivia, a los que posteriormente se unieron otros grupos étnicos (quechuas y aymaras) de la parte occidental a la llegada al departamento de La Paz, quienes comprendieron la importancia de apoyar a sus *hermanos* indígenas frente al gobierno neoliberal que en ese momento controlaba el poder político en Bolivia. Como resultado se comenzaron a titular los territorios comunales indígenas.

Históricamente, a los gobiernos bolivianos no les ha interesado conceder demasiados derechos a las comunidades indígenas de la Amazonía, ni conceder demasiadas prerrogativas para que estos manejen y exploten sus territorios conforme a sus costumbres locales. Desde la llegada de Evo Morales al poder, esto está cambiando. Si bien muy lentamente. Los gobiernos de turno, a lo largo de la tradición legislativa boliviana, no se han caracterizado por tener muy en cuenta la opinión de los grupos étnicos. Se les ha tradicionalmente considerado como grupos minoritarios. Por estos motivos adquiere enorme importancia el derecho a la toma de decisiones propias de los pueblos indígenas a la hora de decidir el uso y manejo de los recursos naturales que se encuentran en sus territorios. El derecho a la consulta y la participación es una de las reclamaciones más importantes que las poblaciones *originarias* efectúan.

En el contexto actual boliviano los indígenas han adoptado un papel protagonista debido en buena medida a que el presidente de la República de Bolivia es “originariamente” indígena (presuntamente). Sin embargo, existe diferencia entre grupos aymaras o quechuas por un lado y los pueblos indígenas de la Amazonía por el otro. Estos últimos han sufrido una mayor discriminación frente al resto.

La creciente explotación a la que los territorios amazónicos habían sido sometidos desde mediados del siglo pasado, constriñó a las comunidades que los habitaban, a orientar sus demandas al reconocimiento de dichos espacios (el tema de las luchas territoriales en el contexto del movimiento indígena mojeño será tratado más adelante y en profundidad en siguientes capítulos).

No sólo en Bolivia tuvieron lugar estos hechos. En diversos países sudamericanos durante la década de los años 80, los respectivos gobiernos llevaron a cabo el

reconocimiento y titulación de grandes extensiones territoriales en la Amazonía a favor de grupos indígenas⁶³. Bolivia, al igual que otros países del continente sudamericano con fuerte presencia de población indígena como son el caso de Perú, Ecuador, Colombia o Brasil, daría paso a la creación de instituciones jurídicas que reconocieran la existencia de los territorios indígenas. En tal país apareció la figura legal de las *Tierras Comunitarias de Origen*, las cuales correspondieron a una invención propia del Estado-nación.

Sería un equívoco hacer equivaler las TCOs con los territorios que fueron habitados por los pueblos indígenas de Bolivia en el periodo precolonial. Con la llegada de los conquistadores europeos, tales poblaciones fueron reemplazadas a otros lugares. Ahora bien, en el caso de Bolivia esto sucedió mayormente en el área andina, en las tierras altas, dado que la región amazónica fue un territorio con mayores dificultades de acceso. En la Amazonía boliviana serían las reducciones jesuíticas las que ubicaron a las diferentes parcialidades indígenas en distintos asentamientos comunales en los que se impuso una homogenización de lengua, religión y formas de vida. Por eso no deja de llamar la atención que en la legislación boliviana se reitere en diversas ocasiones la existencia precolonial de las naciones y los *Pueblos Indígena Originario Campesinos*. Las actuales TCOs son residuos territoriales de los espacios que ocuparon previo a la expropiación de tierras implementada desde el periodo hispánico. A colación de esta idea apunta Salgado que: “*las TCO no son coincidentes con los territorios tradicionales y que por tanto no satisfacen del todo a los pueblos indígenas*” (2010: 227). Es por eso que no se da una equivalencia entre los territorios titulados e institucionalizados por el Estado y los territorios vividos por los pueblos indígenas. Pese a ello, es la herramienta más eficaz con la que cuentan para consolidar la base territorial y continuar las luchas en este campo. O como señalan García Hierro y Surrallés, en referencia a la “*relación pueblo indígena-territorio*”, cuentan “*con una legitimidad histórica con suficientes argumentos como para lograr el respeto jurídico*” lo cual les ha llevado a buscar el “*mayor nivel de seguridad posible en el repertorio institucional*” (2009: 24-25).

⁶³ En Brasil, por ejemplo, este proceso fue llevado a cabo de manos de la *Fundação Nacional do Índio* (FUNAI), administración de asuntos indígenas. En este país, al igual que sucedió en el caso boliviano, la emergencia de organizaciones indígenas se debió al hecho de no reconocer los territorios indígenas, lo cual favorecería la articulación del movimiento. Además, en Brasil la Iglesia católica tuvo mucho que ver en el empuje del movimiento indio y pro-indio, que reclamaba la demarcación de los territorios indígenas debido a que los conflictos interétnicos eran cada vez más numerosos (Albert, 2004: 224). De manera similar al proceso vivido en Brasil, en Mojos si la Iglesia no fue determinante sí que influyó o al menos contribuyó en la configuración del movimiento indígena (al menos de su repertorio discursivo).

2. 3. 2. Diferencias conceptuales manejadas desde los discursos oficiales y de las organizaciones indígenas⁶⁴.

Anunciaba al comienzo del capítulo la dificultad que entraña para esta investigación la disociación de escalas geográficas a la hora de comprender la percepción territorial entre los mojeños. Según la concepción mojeña el territorio no constituiría un espacio delimitado por demarcaciones o hitos físicos, desde el punto de vista geográfico, sino que se entiende más como un *continuum*. Lo determinante para los mojeños estriba más en los procesos que tienen lugar en el territorio que en el número concreto de hectáreas. La dimensión relacional se proyecta en la percepción territorial. Sin embargo, estas comunidades indígenas se han visto en la obligación de hacer uso de los instrumentos que el Estado nacional les reporta con la finalidad de poder alcanzar el reconocimiento de sus demandas en términos jurídicos. Las fuentes a las que se ven obligados a recurrir provienen por tanto del derecho internacional y de las leyes y reglas del juego establecidas por el Estado boliviano en materia de derechos territoriales y de uso, control, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales.

Este aspecto es de suma importancia ya que desde una óptica nacional se opta por un planteamiento estático y cuantitativo del territorio. Se establecen parámetros demográficos sobre los que se fundamenta la legitimidad adquirida por los territorios reconocidos a favor de los múltiples grupos indígenas que han llevado a cabo la demanda de estos espacios geográficos. Por el contrario, los pueblos *originarios* bolivianos, y más concretamente los amazónicos -en este caso particular el pueblo mojeño- generan una imagen del territorio que va más allá del clásico enfoque geográfico que recurre a criterios cuantificables a la hora de demarcar los territorios y delimitar las fronteras entre las diversas categorías de propiedades (privadas y comunales) tituladas. Desde el gobierno boliviano se ha establecido una preferencia por la perspectiva geográfica basada en la delimitación física de estos espacios. Los intereses de éste se centran en conocer básicamente el número de individuos que en ellos se encuentran, qué pueblos, comunidades locales o grupos étnicos están presentes, habitan en ellos, así como los límites, las fronteras de los mismos, saber hasta dónde llegan y lo que consideran sus tierras. La antropóloga Gabriela Canedo con respecto a esta cuestión señala en uno de sus artículos que las comunidades mojeñas se han visto inmersas en un proceso en el que les ha tocado “*revivirse a modo de territorio cercado por mojones, títulos de propiedad, juicios legales, decretos presidenciales, etcétera*” en plena contradicción frente a su propia cosmovisión referida a un territorio sin límites geográficos (2008: 17-19).

⁶⁴ Véase Berraondo (2006).

En contraposición pero en un eje complementario encontramos un nuevo concepto como es el de *territorialidades múltiples*, manejado en el análisis de los procesos territoriales de los pueblos amazónicos bolivianos. Desde esta perspectiva se apuesta por enfocar estas cuestiones de manera más holística e integradora, más acorde con las ontologías indígenas. Se recalca el significado propiamente indígena de territorio como “Casa Grande” (Catoria, 1994) referido al lugar en el que se proveen de todo lo necesario para su continuidad cultural. También Massey en relación a este concepto mencionaba al comienzo de uno de sus trabajos la necesidad de “*imaginar el espacio como la esfera de la posibilidad de la existencia de multiplicidad, un espacio en el que se diferencian narrativas co-existentes*” (1999a: 1). Puede darse además que estas múltiples territorialidades se superpongan en un mismo espacio (Montañez y Delgado, 1998: 123) pero además “*no sólo deben corresponder sino responder al carácter de nuestra formación histórica, multiétnica y pluricultural, sino también a nuestra condición de individuos, colectividades e instituciones, en su dimensión económica, social y cultural*”; en suma, las territorialidades deben reconocer al Estado y éste a aquellas (Ardaya, 2009: 61).

En la TCO del TIMI, las comunidades localizadas al interior del territorio comunal, poseen una fuerte afinidad orgánica en base a la relación de pertenencia a dicho territorio. El sentimiento de pertenencia étnica y orgánico es por tanto esencial: en el TIMI las comunidades pertenecen al pueblo mojeño-ignaciano.

Las demandas efectuadas por el pueblo mojeño se han encaminado a abarcar el mayor espacio posible para que su concepto de territorio pueda caber en lo que está delimitado por las leyes. El concepto de territorio, en la pugna frente al Estado, se vuelve más agrarista, más *campesinista* y más occidental. La ocupación territorial tiene también que ver con otros usos que no son solo agrícolas. La socióloga Zulema Lehm habla de la paradoja que supone para el pueblo mojeño el mostrarse entre el ser “civilizado” y el “salvaje” a la hora de demandar territorio. Y es que desde el Estado se continúa manteniendo la imagen del salvaje como aquel que se desplaza por el territorio en busca de recursos, motivo el cual les lleva a demostrar su sedentarismo basado en el desarrollo de un sistema agrícola.

La territorialidad en Mojos está configurada a partir de diversas dimensiones. En términos políticos hay una construcción que hace referencia al Mojos actual que como división político-administrativa, es el resultado, es una parte residual (como ya mencionaba), del *Gran Mojos*. Sin embargo, en términos orgánicos se ha tratado de abarcar un territorio más amplio reivindicando un espacio que está relacionado con el Mojos de la época colonial, con el Mojos de las antiguas reducciones jesuíticas. Hay un intento en términos orgánicos de poder construir una territorialidad sobre ese referente

histórico de la época colonial (entrevista a Ismael Guzmán). Aparecen así hasta 3 tipos diversos de territorialidades no coincidentes. Es otro de los motivos por los que es más conveniente el uso de la noción de *territorialidades múltiples*. La condición residual de las actuales TCOs es una visión compartida por el investigador Wilder Molina, quien las considera como límites ficticios (entrevista).

Asistimos, por tanto, a un fenómeno de reconfiguración de la propia concepción territorial por parte de las comunidades locales de Mojos. Es por este motivo que Canedo se suma a quienes reconocen la controversia aparecida en torno a la confrontación entre la lógica occidental basada en la propiedad privada y la titulación de tierras comunales, representada en la figura de las TCOs que en realidad consisten en una propiedad privada titulada a cierta personería jurídica colectiva⁶⁵. No obstante, continúa siendo la única y mejor alternativa con la que cuentan los mojeños para hacer efectivas las demandas territoriales. Pese a ello, Pedro García Hierro manifiesta lo difícil que les resulta a las poblaciones indígenas asimilar la noción de propiedad privada en relación a la tierra y en particular menciona el caso boliviano en donde el territorio aparece más ligado a un pueblo que a una persona individual (2004: 280).

Por ello, al igual que el resto de pueblos indígenas amazónicos de Bolivia, el pueblo mojeño-ignaciano se ha visto inmerso en esta espiral impuesta por la normativa estatal adoptando y adaptándose a los procedimientos reglados por la legislación boliviana y los canales administrativos propios del país que les legitima a la hora de participar en el espacio nacional. Como consecuencia, los propios indígenas reclaman un número concreto de hectáreas, visto que es desde este escenario desde donde pueden obtener lo demandado. El derecho occidental obliga a las poblaciones indígenas a asumir preceptos jurídicos ajenos a sus formas locales de gestión territorial. Consecuentemente, este ajuste institucional provoca entre otras cosas un desajuste con los sistemas de gobernanza territorial indígenas (Chirif y García Hierro, 2007: 22-23)⁶⁶ al sentirse forzados a adaptarse a una situación jurídica coyuntural del todo anómala a la que ellos han venido manejando. Aunque, pese a la obligación de ajustarse a un marco normativo específico, los estados no se han molestado, por norma general, en avanzar hacia una seguridad jurídica de los territorios indígenas previamente titulados además de conceder en las más de las ocasiones lo que García Hierro y Surrallés consideran “espacios marginales”, espacios de baja calidad en relación a la fertilidad de los suelos (2004: 9).

⁶⁵ Para Pedro García Hierro, para que se dé por parte de los estados el reconocimiento territorial, se deben cumplir una serie de requisitos tales como: la territorialidad originaria, la ocupación tradicional y la actual, la aceptación del territorio como espacio de vida, como hábitat y el reconocimiento de criterios integrales (2004: 286-288).

⁶⁶ Para un análisis más detenido acerca de lo que se entiende por gobernanza territorial véase Chirif y García Hierro (2007); García Hierro y Surrallés (2009) y Farinós (2005).

En las comunidades mojeñas se refieren a ello con las siguientes palabras:

“Si continúan quitándonos las tierras, el territorio que es chico, no puede marchar así y verá usted que el territorio en el que vivimos no produce mucho pues (...) Había parte baldía, yo lo conocí 4 años atrás per llegaron los ganaderos y no más se quedaron con ello” (entrevista a Huáscar Gutiérrez).

La percepción territorial para los pueblos amazónicos no guarda, en definitiva, correspondencia con la del Estado. En Mojos en particular, las comunidades indígenas no entienden que el espacio local pueda ser delimitado por demarcaciones físicas. Por el contrario éste es definido *“por las diversas relaciones-sentimientos que sus miembros establecen en un largo proceso; adquiere límites por la forma en que sus miembros (se) relacionan (con) ese espacio permanentemente y casi de forma natural y cotidiana”* (Molina y Soleto, 2002: 10-11). Es decir, la definición indígena se expresa en otros términos que no se corresponden a lo que en última instancia deben asumir. A este respecto Chirif y García Hierro exponen que para la visión territorial de los pueblos indígenas de la Amazonía, los territorios constituían *“constelaciones de hábitos, prácticas y relaciones sociales que, al contrario de las nuevas concepciones territoriales, todos podían describir”* (2007: 26). Los pueblos indígenas perciben el territorio en base a la experiencia vivida y a la memoria colectiva, lo perciben de esta manera debido a que actúan en él y en él se involucran de manera activa. Por el contrario, la visión oficial del Estado se asocia a una percepción utilitarista del territorio que se convierte en un bien comercial. Desde el Estado se concede primacía al concepto más geográfico del territorio el cual consistiría en *“el espacio social limitado que inscribe un cierto tipo de significados sobre segmentos definidos del mundo material”* (Delaney, 2005: 14).

Uno de los trabajos publicados por Díaz de Rada tras su etnografía con los pueblos *samis* de Noruega advertía la movilidad como característica del territorio de estas sociedades frente a una visión fija y estática, propia de la planificación del territorio proveniente desde la administración estatal (2008: 201). Un esquema similar refleja el estudio de Óscar Calavia sobre el territorio de los *yaminawa* –pueblo indígena de Brasil- en el que señala que:

“si nuestra noción de territorio está anclada en la ojetivación -idealmente en la petrificación: piedras miliares, cerros, murallas- del espacio y de la memoria, ella se pierde necesariamente en una geografía cuyos componentes son vivos, móviles y dotados de intencionalidad” (2004: 127).

Ambos constituyen ejemplos del todo análogos a la presente investigación dado que de acuerdo con la cosmovisión de las comunidades locales de Mojos, la espacialidad no es fijada geométricamente por hitos en un momento determinado y permanece inalterable, sino que se constituye en función de los requerimientos de la población de dichas comunidades. Asimismo, el pueblo mojeño manifiesta un alto nivel de movilidad motivada por la escasez de recursos de sus territorios. No sólo en lo referente a la búsqueda de recursos sino a la movilidad periódica entre comunidades e incluso entre éstas y el núcleo urbano de San Ignacio. Este fenómeno, si bien podría ser visto como una forma de disrupción territorial, permite, por el contrario, a los indígenas ignacianos, conformar la imagen que poseen del territorio que habitan, facilitando el conocimiento de éste. Esas rutas itinerantes permiten además el mantenimiento de las relaciones espaciales. Tras las reuniones con los grupos de discusión de la comunidad de Monte Grande Km5, quedó recogida la siguiente información:

“Si sois mojeño como no vas a conocer, uno sale a un lado, a trabajar a otro, y uno va conociendo, la riqueza de las montañas, las pampas, lo que se ha destruido, todo eso lo conocemos, es nuestro territorio pues”.

Para Gupta y Ferguson en cambio, la movilidad de las personas puede dar como resultado una aparente “*desterritorialización de la identidad*” o al menos una sensación de “*pérdida de las raíces territoriales*” (1992: 9). Sin embargo, el material empírico de la presente investigación permite hablar del efecto contrario en el contexto espacial mojeño.

Gloria Ardaya se basa en el trabajo de Hernáinz para defender el sentido que el territorio adquiere desde la perspectiva de los pueblos y comunidades indígenas en donde “*predomina la dimensión vertical del territorio, en tanto que hace referencia al vuelo o espacio aéreo, suelo o subsuelo*” (2009: 64). Esta idea difiere de lo que tradicionalmente se ha considerado en Bolivia como territorio, el cual es dimensionado en dos planos, ambos horizontales: el suelo y el subsuelo⁶⁷. El Estado boliviano se ha reservado la competencia de disponer de los recursos naturales para su comercialización pese a que conceptualmente éste sea indivisible. Ante esta realidad García Hierro aboga por integrar la dimensión cultural en la definición jurídica del territorio dado que la indivisibilidad de los territorios indígenas no es en absoluto

⁶⁷ Birk señala hasta 3 niveles en los que el espacio boliviano queda dividido: el suelo hasta los 30 cm de profundidad; el subsuelo que empieza donde termina el suelo, es decir, a partir de 30 cm bajo tierra y el sobresuelo que corresponde al área de los árboles (2000: 18).

compatible con la función económica orientada a desintegrar tal espacio en campos independientes (2004).

Para las poblaciones indígenas dicha división carece de sentido puesto que el territorio, como viene siendo explicado, abarca mucho más y como señala Birk: en Bolivia “*el territorio no consiste solamente en la parte física, sino que comprende también la esfera espiritual*” (2000: 24) poniendo énfasis en la integridad como característica fundamental. El territorio indígena no sólo se conforma a partir de los recursos naturales susceptibles de ser explotados, sino que como señala Mamani, en éste se reproduce además la vida social y espiritual (2005: 120). Las partes que lo conforman no pueden ser desvinculadas unas de otras. El conjunto constituye un todo.

Chirif y García Hierro explican de forma muy precisa que en realidad lo que se titula a nombre de los pueblos indígenas es el suelo en el sentido del espacio superficial, quedando el resto de recursos naturales, los que se encuentran en las aguas, el subsuelo, los bosques, etcétera, en manos del Estado, quien posee la prerrogativa de efectuar concesiones a inversores externos (2007: 28). Desde una visión económica, la percepción del territorio por parte de los aparatos estatales, queda aún más restringida al acceso y aprovechamiento de los recursos naturales. La fauna, la flora, los ríos, etcétera, adquieren importancia como bienes comercializables generadores de ganancias al ser puestos en valor en el mercado. Además la función económica de los territorios indígenas debe ser entendida no como el comercio y la explotación de los recursos naturales sino como “*la reproducción de las condiciones de sobrevivencia y desarrollo de un pueblo*” (García Hierro, 2004: 292).

Todos estos planteamientos recuerdan mucho los debates presentados anteriormente acerca de la dicotomía naturaleza-cultura. Extrapolándolo al caso mojeño se percibe una gran coincidencia entre la visión más propia de las comunidades indígenas y otra oficial que correspondería al Estado.

Esto nos aclara en parte la inexistencia de unanimidad en el significado del territorio para ambas partes. El Estado, de acuerdo a un modelo de economía liberal, ha venido considerando el territorio en relación a la tierra y al bien mercantil que el agro supone para el mercado de tierras. De acuerdo con la clasificación de Lévy que atiende los diversos paradigmas con respecto a la consideración de la naturaleza y que se mencionaba al comienzo de este capítulo, Chirif y García Hierro advierten de la visión que desde el Estado se posee de ésta como agro, con un fin decididamente mercantil y productivo (recordemos el paradigma agro-industrial de Lévy) y del mismo modo que fue apuntado por Harvey, como un recurso con valor intrínseco para comercializar (2007: 28-29).

Los pueblos indígenas no poseen la misma concepción occidental sobre el territorio. Su visión tiene un carácter socionatural. Ismael Guzmán considera que sin el territorio, dichas comunidades étnicas de la Amazonía, no podrían mantenerse ni cultural ni materialmente (2004: 101). Guzmán apunta así a la relación pérdida territorial-transformación cultural.

En la reforma de la carta magna boliviana del año 1994 se introdujo por primera vez la cuestión de los territorios pero vinculado exclusivamente al ámbito agrario, es decir, refiriéndose no al concepto de territorio indígena sino al de “tierra comunitaria de origen” (Albó, 2008: 257). Y es que, como bien ha señalado de Vries, la condición de territorio indígena queda incorporada en la legislación boliviana a través del concepto de TCO. Esto significó una gran victoria, si no la más importante hasta el momento. La TCO en un principio no admitía la autonomía política y dejaba la explotación de los recursos naturales en manos del gobierno, quien estaba legitimado para hacer concesiones a empresas externas, si bien tras un ejercicio de consulta con las comunidades locales que lo habitaban (1998: 12). Además, y como bien apuntan Chirif y García Hierro, el Estado obliga a las poblaciones indígenas a aceptar las condiciones que el reconocimiento de los derechos territoriales conlleva, por lo que se les exige soportar pesadas cargas para la consecución de aquellos (2007: 27) incluso renunciar a parte de su soberanía política.

Con todo, el pueblo mojeño-ignaciano no tuvo más remedio, al igual que el resto de pueblos indígenas de Bolivia que pusieron en marcha la demanda de titulación de tierras, que ajustarse al espacio geográfico que se corresponde con la *Tierra Comunitaria de Origen del Territorio Indígena Mojeño Ignaciano*, la cual constituye una figura legal creada por una institución del Estado boliviano, el *Instituto Nacional de la Reforma Agraria*, INRA.

2. 3. 3. Voces de Mojos: significado del territorio para los indígenas ignacianos.

Si hasta ahora se ha venido teorizando acerca de la definición geográfica del Estado y la propia percepción de los indígenas, en especial del pueblo mojeño, a continuación se incluye una extensa pero muy ilustrativa definición que el propio presidente de la Subcentral del TIMI –Erasmus Yujo- elaboró para definir lo que los comunarios entienden como “territorio” en una mesa radial sobre “Territorialidad de la cultura mojeña” en marzo del 2007. Según Erasmus:

“El territorio es la vida del indígena (...) el territorio es la denuncia de los pueblos indígenas”, “el territorio es un espacio donde nosotros los indígenas nos proveemos de las necesidades de la vida”, “el territorio nos da la subsistencia de cada uno de los que habitamos en el territorio”, “el territorio es la esperanza de nuestros hijos”, “el territorio es el futuro de las generaciones que vienen detrás de nosotros”, “el territorio es el espacio donde desarrollamos nuestras políticas buscando un desarrollo comunitario, donde los comunarios y comunarias toman sus propias decisiones de desarrollo comunitario mediante sus formas de organización y sus usos y costumbres”, “el territorio es cómo el hombre indígena se relaciona con el bosque, con la naturaleza propia”, “el territorio es tan importante porque de él vivimos”, “el territorio es donde producimos, donde cosechamos nuestros productos con el esfuerzo”, “el territorio es donde cultivamos el arroz, la yuca, el plátano, el maíz, la caña. Es donde producimos, donde criamos a nuestros animalitos. Éste es el beneficio que nos puede proporcionar el territorio. Nos proporciona la vivienda como es la casa, donde están nuestros animales, la pesca, donde se benefician con la hoja de motacú, la tacuara, las chontas, donde se benefician de los bejucos, las tierras para construir sus propias viviendas para protegerse de las lluvias, del frío. Donde recolectamos frutos, como el chocolate silvestre, como el café y muchos otros frutos”.

Otra definición pronunciada en el seno del pueblo mojeño es la que nos aporta Sixto Vejarano, comunario del pueblo mojeño, anterior presidente de la Subcentral indígena del TIMI, miembro fundador y anterior presidente de la *Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni* (CPEM-B) y primer alcalde indígena del municipio de San Ignacio de Mojos:

“El territorio es un concepto muy sagrado, delicado y respetuoso. Es donde está nuestra identidad, nuestra cultura viva y supervivencia; allí todos somos iguales y aún mantenemos es respeto mutuo entre nosotros. Es nuestra propia vida, nuestra casa grande y nuestro supermercado. Es el contacto directo que tenemos con la madre naturaleza, donde se esconden nuestras normas, costumbres y justicias comunitarias.

Nuestra sabiduría se encuentra allí, sabiduría que nos han querido ocultar y exterminar pero no lo han logrado, porque están vivos nuestros abuelos, nuestros padres, nosotros, la nueva generación, y estamos vivos para compartir y enseñar a nuestros hijos y a los que se consideren amigos y asuman un compromiso social con los pueblos indígenas. En definitiva, el territorio es el aire, el agua, la luz, el sol y la luna”⁶⁸.

Otras definiciones acerca del territorio son las siguientes:

“(...) el territorio, aquí hemos estado siempre, aquí han vivido nuestros antepasados y aquí queremos quedarnos (...) Nos da las cosas que nosotros venimos usando para comer, para los chacos, los animalitos del bosque tienen que vivir y sin tierras no se puede, no se puede” (entrevista a Nicolás Noé, Santa Rita).

“Cada vez somos más, nos damos cuenta de que acá no tenemos suficiente y si perdemos nuestras tierras, ¿qué será de nosotros?, ¿dónde van a vivir nuestros hijos si no pueden tener sus chaquitos ni nada?, está feo” (...) (entrevista a Huáscar Gutiérrez, Monte Grande).

“Nuestro modo de trabajar es rozar y tumbar y nos beneficiamos de la caza, de los bosques, para el consumo de la familia de cada uno, para que coman nuestros hijos y nuestros amigos y si no tuviéramos tierras no podríamos hacer todo esto, nos tendríamos que ir, ¿no ve?” (entrevista a Esteban Pacema, corregidor de Chontal).

“Entonces el territorio aquí nos permite que las culturas de nuestras comunidades, que las familias puedan sobrevivir, puedan cultivar, sacar maderas de los bosques para preparar las viviendas, todas las cosas, para continuar nuestras actividades en los cabildos de la comunidad, todos juntos para decidir qué hacer” (entrevista Beatriz Guarena, Santa Rita).

“Todas las comunidades ignacianas tenemos nuestro territorio comunal y queremos mantener las tierras, si no las mantenemos no va a haber donde trabajar, pero si no las cuidamos, digamos, nos quedamos sin tierras, si deforestamos (...) pero el gobierno nos tiene que ayudar, o sea digamos, primero hay que titular la tierra, hacer un plan de ordenamiento predial que no se está aplicando porque viene gente de fuera y, digamos, se aprovechan, por eso tenemos que luchar nuestra tierra, los Suárez aquí han

⁶⁸ Conferencia pronunciada en las Jornadas “Las voces de la Amazonía”, con título *El territorio, punto clave de la existencia en el mundo indígena*, Barcelona, mayo 2005.

ocupado mucho, mucho territorio” (entrevista Celso Saavedra, corregidor de Santa Anita del Mátire)⁶⁹.

“Es la Madre Tierra, que sustenta, que da vida a las comunidades las cuales son habitadas por los pueblos indígenas, por lo tanto para nosotros el territorio es la vida, es la vivencia y el territorio para nosotros es donde puede subsistir la familia mediante sus recursos, casas, pesca, cultivan y producen el medio de sustento diario, los recursos maderables, también están las medicinas tradicionales (...) El territorio es como la Casa Grande que da vida a todos los vivientes de dentro del territorio, es donde pueden vivir los indígenas (...) También el territorio es donde el pueblo practica su creencia, digamos, su costumbre, su cultura, donde se practica la creencia de la vida religiosa, cada comunidad festeja su fiesta de acuerdo a su cultura, practica su lengua materna, su danza folclórica, la vida tradicional, digamos, cómo eligen sus autoridades de forma democrática por medio de usos y costumbres, sus autoridades. Por eso el territorio es esencial para la vida del pueblo indígena mojeño. El territorio, digamos, lo es todo para nosotros” (entrevista a Erasmo Yujo, ex Presidente de la Subcentral del TIMI).

A raíz de esta serie de intervenciones de los propios mojeños se puede llegar a entender lo que significa la noción del territorio desde la cosmovisión ignaciana. Para ellos el territorio lo es todo. Llama la atención que no hagan una clara distinción entre tierra y territorio, ambos son utilizados como sinónimos. Además el factor generacional está también muy presente y la necesidad de preservar sus espacios comunales con vistas al mantenimiento de las futuras generaciones. Pero si hay un aspecto que destaca son las escasas referencias a la lucha territorial y es que es común escuchar a los comunarios mojeños rechazando los conatos de violencia que ha habido por la ocupación y despojamiento territorial. Sus estrategias históricas por excelencia han sido la huida a los bosques y evitar mantener frentes abiertos. Esto nos puede dar pistas de la influencia que desde organizaciones externas se han desplegado a la hora de elaborar un discurso de reivindicación frente al Estado por la titulación de tierras. No obstante, no se puede negar el protagonismo que adquirió el pueblo mojeño en las marchas de la década de los 90 a favor del reconocimiento de derechos territoriales. Se podría decir que a nivel orgánico la reivindicación territorial ha sido fuertemente asimilada pero que en la vida diaria de las comunidades se preferiría un ambiente más sosegado.

A partir de estas declaraciones es conveniente concebir el territorio desde la perspectiva de las *territorialidades múltiples* por el hecho de englobar múltiples

⁶⁹ Santa Anita del Mátire se fundó como comunidad en el año 2001, y desde ese año el actual corregidor, que trabajó toda su vida en el departamento del Pando, ocupó desde su fundación tal cargo.

esferas del universo ignaciano, como son la sociocultural, material y espiritual. En base a éste se configura su identidad (idea fundamental para este trabajo). Constituye, según lo denominan, “la Casa Grande”. Y es más, Erasmo Yujo en su intervención señala que el antiguo territorio de su pueblo era mucho más amplio, superando el departamento del Beni, pero que durante siglos, por los diversos hechos acontecidos en el Oriente boliviano, han ido perdiendo su territorio ancestral, han sido despojados de sus tierras, hasta que se ha visto dividido en provincias, en TCOs. Yujo hace de esta manera alusión al *Gran Mojos* precolonial, producto de la memoria colectiva del pueblo mojeño. Quiere con ello dejar patente la historicidad del territorio habitado *tradicionalmente*.

El territorio es por lo tanto la “Madre Tierra” que sustenta a las comunidades, la vida y vivencia donde subsisten las familias gracias a los recursos que de ella se proveen. El lugar en donde practican sus creencias, cultura, costumbres, espiritualidad, reciprocidad, etcétera. Es por ello que debe atenderse a la integridad del mismo (si bien ésta es una condición que será sometida a cuestionamiento en el capítulo 5). Además de la concepción integral, los mojeños asumen cierta indisolubilidad entre ellos mismos y sus territorios. Ambos están relacionados. O, dicho de otra manera, ambos se pertenecen, *“el indígena y su territorio son solo uno”* (Chirif, García Hierro y Chase, 1991).

Las viviendas familiares constituyen la referencia medular del territorio ignaciano. En torno a éstas es que se desarrolla gran parte del día a día en las comunidades. En torno a éstas se reúne la unidad doméstica. Es en este espacio en el que se plantan algunos árboles que servirán como complemento alimenticio. Más allá se encuentra el bosque el cual se reconoce por el conjunto de comunarios a partir de una toponimia que distingue entre arroyos, lomas, montes y bajuras. Éste no se considera como espacio desconocido o salvaje aunque esté más alejado, sino que es parte de la “Casa Grande” dado que es aquí en donde se cultivan los chacos familiares y en donde habitan los animales de caza.

El pueblo mojeño, al igual que el resto de pueblos indígenas, está ligado al espacio, al territorio que habita y frente al que han desplegado toda una serie de respuestas adaptativas debido a la particular geografía que ha condicionado la cultura mojeña. Este vínculo justifica el sentimiento de pertenencia y la identificación que esta sociedad mantiene para con este territorio. García Hierro y Surrallés expresan en relación a esta idea que:

“Cada pueblo vive en su territorio porque ha aprendido a vivir ahí y no en otro sitio. Cada territorio responde positivamente al pueblo con el que se identifica porque recibe de él el trato que mejor se ajusta sus requerimientos y características. El

territorio, conjunto integral de los elementos naturales de un espacio geográfico identificado con un pueblos determinado (...)” (2009: 24).

Retomando el debate conceptual entre diversas categorías analíticas como lo son “tierra” y “territorio”, cabe reiterar que ambas -pese a su uso indistinto en muchas ocasiones- tampoco comparten el mismo significado en Mojos. El territorio tiene un matiz más amplio. El territorio no sólo explica el espacio geográfico de pertenencia, sino el espacio donde actores humanos practican y reproducen la vida en comunidad y donde se establece una relación de equilibrio entre el hombre, la biodiversidad y la naturaleza. En este sentido cabe recordar a Lévy que entendía la naturaleza como “*la relación de los seres humanos con el mundo biofísico*” (2005: 83). En el caso del pueblo mojeño-ignaciano, el “territorio” marca la relación de interdependencia entre la comunidad indígena y la naturaleza⁷⁰.

La tierra por el contrario, constituiría parte del territorio, de dicho espacio en el que se reproduce la vida en comunidad, cultura y rituales, la producción económica, organización social y política y toda una serie de prácticas en relación con su

⁷⁰ Como idea consensuada se ha establecido que la relación entre la cultura y la naturaleza de los pueblos indígenas es de carácter interdependiente, es decir, existe una fuerte relación que les une a ambas. Tradicionalmente los indígenas han desarrollado técnicas de manejo sustentable en lo que se refiere al uso de recursos. Este es un aspecto discutible en el momento actual, ya que se han dado diversos casos de poblaciones indígenas que no se están acogiendo del todo a lo que se entiende por desarrollo sostenible, entre ellos algunas comunidades del pueblo mojeño-ignaciano. Con esto no quiero decir que esta población no respete sus entornos, sino que han existido algunos casos concretos de comunarios, movidos por presiones externas, han hecho primar sus intereses económicos a su *tradicional* cosmovisión. Sí que es absolutamente cierto que este grupo étnico es totalmente dependiente de los recursos naturales de su medio: su subsistencia va ligada a dichos recursos y su identidad a su territorio. Y no sólo eso, como explicaré en próximos capítulos, desde la época precolombina el pueblo mojeño se ha adaptado a su medio natural, creando una cultura, su limnocultura, propia de un entorno caracterizado por el agua. Obligados a sobrevivir en un ecosistema de inundación tuvieron que desarrollar un sistema de manejo ambiental adecuado a su medio.

En el seno del pueblo mojeño han tenido lugar situaciones tensas, de conflicto interno entre los propios comunarios cuando alguno de estos ha decidido vender los recursos maderables del entorno de la comunidad (el cual tiene estatuto de tierra colectiva) a un precio muy inferior al precio que adquieren en el mercado externo. Huáscar Gutiérrez -corregidor de Monte Grande Km5- señala que “*hay corregidores que se aprovechan de la situación, del mando, y se aprovechan de manera personal, sin consultar a las bases, hicieron chequeos, cortaron madera y lo vendieron a los ganaderos que compraban madera para hacer sus alambradas*”, refiriéndose a los procesos de explotación maderera de la década de los 80 (entrevista). Sin embargo, son todavía muchos comunarios quienes niegan conocer dichos episodios o se muestra reticentes a responder ante estas preguntas.

Estos hechos no son aislados y se sabe que han sucedido entre otras poblaciones indígenas como es el caso de los Kayapó de Brasil entre quienes aparecieron algunos miembros que vendieron de manera ilegal recursos forestales y dieron lugar a lo que se ha venido a denominar “*estrategia paradójica*” establecida “*entre alteridad negociada y continuidad cultural, entre territorialidad comunitaria y lógica comercial*”, estrategias que se han situado entre dos polos opuestos, entre el “*expolio ecológico*” y el “*desarrollo sostenible*” (Albert, 2004: 241-243).

Como consecuencia se produce una transformación en el sistema de valores socioculturales mojeño, al preferir disponer de dinero rápido antes que conservar y preservar los recursos naturales que las generaciones futuras requerirán para su futuro desarrollo.

cosmovisión como pueblos indígenas. El acceso a la tierra se ha visto modificado según las épocas y los actores -a parte de las comunidades indígenas- que se han visto involucrados. El territorio es un instrumento político ya que a raíz de él la población mojeña se ha organizado en el sentido de que el orden social es proyectado en las lógicas de organización territorial⁷¹.

En base al trabajo de Camacho (2007), desde CIDOB establecen una diferencia entre los conceptos de tierra y territorio, por el que éste tendría una “*base histórica, social e identitaria*” mientras que aquel está ligado a la “*posesión individual*” más que a la “*supervivencia de la cultura y la identidad*”⁷².

2. 3. 4. Dimensiones del concepto “territorio”.

Son múltiples las interpretaciones teóricas que se han dedicado a definir el concepto de “territorio”. En cuanto a territorios indígenas se refiere, esta problemática se ha visto incrementada debido a la utilidad que alberga para el reconocimiento de derechos para las colectividades indígenas. Con todo, las distorsiones y malentendidos en torno a este término, que me dispongo a analizar, están servidas. Por ello no debe extrañar que se haya llegado a mencionar que:

“(…) en los últimos años la noción de territorio indígena ha adquirido múltiples significados en las demandas indígenas y la producción teórica afín en ciencias sociales. A veces se utiliza para referirse a la idea de jurisdicción, otras a la de espacio geográfico a demarcar, otras al hábitat, biodiversidad y conocimientos sobre la naturaleza y otras a la etno-territorialidad” (Ellison y Martínez Mauri, 2009: 14).

Esta investigación manejará un concepto de territorio el cual abarca diferentes dimensiones⁷³. Por ello se podría hablar justamente de una construcción holística de la categoría del término. Considero al territorio indígena como ámbito englobador de las diversas esferas en las que las poblaciones indígenas se reproducen como identidades sociales, asumiendo y desempeñando un rol determinado que les lleva a autodefinirse

⁷¹ Incluso en el pasado 2004 obtuvieron la victoria en las elecciones municipales, convirtiéndose Sixto Bejarano en el primer alcalde indígena del municipio, aunque a causa de las presiones de los terratenientes, principalmente de los ganaderos, se vio obligado a dejar su cargo.

⁷² www.cidob-bo.org/gti/territorio.html

⁷³ De manera sintética podemos anticipar que desde su condición económica consideraremos al “territorio” como unidad de recursos; desde un enfoque político-jurisdiccional “territorio” referido al derecho, al uso, manejo, control y aprovechamiento de los recursos naturales que en ellos se encuentran; desde el punto de vista geográfico el territorio como espacio delimitado en el que se localizan recursos naturales y de los que se apropia los grupos sociales; y siguiendo una concepción antropológica, fundamentalmente consideraremos al territorio como espacio identitario en el que se articulan las estructuras socio-culturales de los grupos étnicos que en ellos habitan.

como colectividades con identidad propia. Estas colectividades interactúan con otros grupos sociales y como consecuencia generan un determinado sistema de relaciones sociales.

Atendiendo a un enfoque político-administrativo, el territorio se vendría a referir a aquel espacio geográfico que delimita la soberanía de un Estado. Esta definición aparece en el trabajo de Echeverri (2004) del *Instituto Amazónico de Investigaciones* (IMANI), que ha explorado la semántica de dicha categoría. Por otro lado se sirve también del ámbito de estudio más próximo a las ciencias naturales -en particular la etología- para sugerir otra noción de territorio vinculada al espacio defendido por los individuos quienes actúan motivados por la apropiación de los recursos naturales para su reproducción (*ibíd.*, 260). Ambas definiciones servirían como aporte pero en ambas, igualmente, se podrían añadir ciertos matices para hacer validar la concepción del territorio que más acorde se correspondería con el presente trabajo.

Conforme a la definición de “territorio” en un sentido político-jurisdiccional, incluyo la que aparece en la reciente *Constitución Política del Estado* boliviano, aprobada en febrero del 2009. Si bien la condición jurídica del territorio asumida por el Estado no guarda correspondencia frente a la propia concepción indígena, ésta se maneja para hacer validar la ocupación histórica de un espacio geográfico determinado para cada pueblo. En ella se constata que:

*“el territorio indígena originario campesino, que incluye el derecho a la tierra, al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables en las condiciones determinadas por la ley; a la consulta previa e informada y a la participación en los beneficios por la explotación de los recursos naturales no renovables que se encuentran en sus territorios; la facultad de aplicar sus normas propias, administrados por sus estructuras de representación y la definición de su desarrollo de acuerdo a sus criterios culturales y principios de convivencia armónica con la naturaleza. Los territorios indígenas originarios campesinos podrán estar compuestos por comunidades”*⁷⁴.

Y que:

“el territorio indígena originario campesino comprende áreas de producción, áreas de aprovechamiento y conservación de los recursos naturales y espacios de reproducción social, espiritual y cultural. La ley establecerá el procedimiento para el reconocimiento de estos derechos” (artículo 403.I y II)⁷⁵.

⁷⁴ <http://bolivia.unfpa.org/content/constituci%C3%B3n-pol%C3%ADtica-del-estado>

⁷⁵ *Ibíd.* No obstante, la CPE no incluye suficientes aspectos relativos al territorio, es en algunos puntos imprecisa y no está bien definida en lo que se refiere a las competencias territoriales.

Lo interesante de esta definición es que amalgama diversos aspectos de la noción de territorio los cuales serán tratados. Las diversas perspectivas que se incluyen constatan la necesidad de considerar al “territorio” como un todo integral, en donde todos sus componentes se nos presentan interrelacionados. No solamente se refiere a un punto de vista *económico o productivo*, más propio de las legislaciones occidentales, sino que también hace alusión al factor *socio-cultural*. Sin embargo, en líneas generales, en la legislación boliviana prevalecen los criterios económico-productivos de la tierra y los recursos.

En el capítulo noveno de la misma constitución, correspondiente a *Tierra y Territorio*, se menciona que:

*“El Estado reconoce, protege y garantiza la propiedad comunitaria o colectiva, que comprende el territorio indígena originario campesino, las comunidades interculturales originarias y de las comunidades campesinas. La propiedad colectiva se declara **indivisible, imprescriptible, inembargable, inalienable e irreversible**⁷⁶ y no está sujeta al pago de impuestos a la propiedad agraria. Las comunidades podrán ser tituladas reconociendo la complementariedad entre derechos colectivos e individuales respetando la unidad territorial con identidad”⁷⁷.*

La TCO del TIMI se ajustaría por tanto a esta concepción territorial y poseería los derechos que en ella se reconocen. La cuestión es su cumplimiento, el cual en numerosas ocasiones ha sido violado. Tal espacio geográfico, espacio delimitado físicamente por mojones, se encuentra en pleno proceso de reconfiguración por parte de los mojeño-ignacianos.

Sin embargo, habrá que esperar los resultados de la nueva constitución en lo que se refiere a la descentralización administrativa y política del proceso de las autonomías ya que es ahora cuando la diversidad cultural de Bolivia cuenta con una gran oportunidad a la hora de articular por sí misma sus territorios y de llevar a cabo su propia gestión territorial. La interculturalidad de la constitución boliviana debe propiciar la consolidación de territorios de cada uno de los pueblos indígenas u *originarios* del Estado. Además, en palabras del investigador social Wilder Molina, “*la autonomía indígena ya es un derecho colectivo que dota de cualidad político-estatal a*

⁷⁶ La negrita es mía y se refiere a las características de las TCOs. Los próximos capítulos abordarán estas cuestiones para explicar en qué consisten estos adjetivos y porqué se adscriben a las propiedades colectivas otorgadas según la legislación del Estado boliviano a las diferentes poblaciones indígenas.

⁷⁷ <http://bolivia.unfpa.org/content/constituci%C3%B3n-pol%C3%ADtica-del-estado>

las tierras comunitarias de origen (TCO), en sentido de la posibilidad de convertirse en unidades territoriales con funciones de gobierno estatal” (2009a)⁷⁸.

El ordenamiento territorial boliviano ha asumido otra definición de territorio. Sin embargo, sobre estas cuestiones trataré el tema 5 por lo que lo pospongo para más adelante.

Existen otras definiciones en la legislación no sólo boliviana, sino de los organismos internacionales que, como apuntaba anteriormente, desempeñan un papel fundamental para los pueblos indígenas dado que es a partir de aquellos que logran su legitimidad frente a la opinión internacional, la que a su vez es decisiva a la hora de presionar a en los países que albergan poblaciones indígenas.

Atendiendo al *Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo*⁷⁹, sobre *Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes*, adoptado el 27 de junio de 1989, se estipula que:

“al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna u otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación” (artículo 13, punto I)⁸⁰.

Asimismo se indica que el uso del término “tierras” en los artículos 15 y 16 *“deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna u otra manera” (artículo 13, punto 2)⁸¹.* Berraondo pone de manifiesto la equivalencia conceptual entre el término de tierras y territorio manejado por el derecho occidental internacional (2006). En los citados artículos se explica la *“utilización, administración y conservación”* de los recursos naturales existentes en los territorios indígenas. Pero lo más importante es que se otorga un reconocimiento legal a los territorios de los grupos étnicos, quienes cuentan con pleno derecho a decidir sobre sus recursos además de a ser indemnizados en el caso de que estos se vean dañados. Es igualmente significativo la parte del artículo 13. 2 que hace mención a lo que supone el concepto de territorio, el cual no se ajusta a una frontera delimitada sino que también abarca a los espacios requeridos por los pueblos indígenas para satisfacer sus necesidades. Esto significa que los bosques, montes, lagunas, así como la biodiversidad, forman parte de sus

⁷⁸ “Autonomía indígena es desarrollo pero...”, Trinidad: CIDOB (material inédito).

⁷⁹ Bolivia sería uno de los primeros países latinoamericanos en firmar dicho convenio.

⁸⁰ <http://www.ilo.org/indigenous/Conventions/no169/lang-es/index.htm>

⁸¹ *Ibíd.*

territorios, son regiones que los pueblos indígenas “*utilizan de una u otra manera*”. Una disposición fundamental de este Convenio es que manifiesta de forma expresa la relación “*especial*” que existe entre “*las culturas y valores espirituales de los pueblos*” para con sus tierras o territorios. Nuevamente se reconoce por lo tanto, la importancia que suponen los territorios para la preservación de las culturas indígenas.

El territorio viene siendo definido por las organizaciones indígenas como el soporte cultural de la existencia de estos. Conforme a planteamientos tales como el de Vargas Vega, se podría afirmar que “*se ha pasado de una lectura geográfica de la tierra a una lectura política y cultural de la tierra, en términos de autonomía, de auto-gobierno y de representación e identidad*” (2003b: 439). La autoidentificación les sirve a los pueblos indígenas para demostrar los lazos que les ligan al territorio y desde ese posicionamiento efectúan sus demandas.

La *Ley INRA* también propone otro concepto de “territorio”, aunque refiriéndose para ello, como ya quedó indicado, a las TCOs. Así las:

“tierras comunitarias de origen, son los espacios geográficos que constituyen el hábitat de los pueblos y comunidades indígenas y originarias, a los cuales han tenido tradicionalmente acceso y donde mantienen y desarrollan sus propias formas de organización económica, social y cultural, de modo que aseguran su sobrevivencia y desarrollo. Son inalienables, indivisibles, irreversibles, colectivas, compuestas por comunidades y mancomunidades, inembargables e imprescriptibles” (artículo 41)⁸².

Estas últimas características que definirían los territorios indígenas serían reconocidas más tarde por la Constitución, como queda comprobado en la definición de ésta que se incluía anteriormente. Este aspecto entraña enorme importancia dado que, en ocasiones, la legislación boliviana es un tanto confusa y como consecuencia se produce un solapamiento en cuestión de derechos. En este caso se equipara la noción de territorio a la propuesta por el Convenio 169. El hecho de que el texto constitucional valide la disposición de la ley INRA y le otorgue rango de ley es del todo novedoso y positivo para los pueblos indígenas. De esta manera estos se ven más amparados o al menos poseen más herramientas a la hora de hacer efectivas sus demandas.

La *Ley INRA* admite la componente histórica de los territorios indígenas, al reconocer que son *originarios* y al reconocer que a dichos espacios las comunidades indígenas han accedido *tradicionalmente*. Se reconoce igualmente que en estos territorios han desarrollado sus sistemas socio-económicos y culturales y que estos son fundamentales para el futuro desarrollo de dichas comunidades.

⁸² <http://constituyentesoberana.org/info/?q=texto-ley-agraria>

En el ámbito latinoamericano el territorio se convirtió en el eje en torno al que giran las demandas de los pueblos indígenas. Según Ellison y Martínez Mauri “*en las últimas décadas el concepto de territorio –tanto simbólicas como materiales- que una sociedad mantiene con su espacio*” (2009: 15). En Bolivia y en concreto en la región de Mojos se mantuvo esta tendencia. El *Anteproyecto de Ley de los Pueblos Indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía*, en su capítulo II sobre el *Territorio Indígena* (y los recursos naturales) incluye una definición sobre este ambiguo concepto por el que se definió como:

“*las tierras tradicionalmente ocupadas y poseídas por los pueblos indígenas, las que constituyen su hábitat o espacios socio-económicos y los utilizados para sus actividades de producción, caza, pesca, recolección, agricultura, ganadería y otras de transformación, así como las áreas imprescindibles para la generación, sustentación y producción de una dinámica económica y social capaz de garantizar su propio desarrollo*” (Anomymous, 1990: 160).

Esta ley fue proclamada por una comisión nombrada por el gobierno boliviano en septiembre de 1990, como parte de la política indigenista y en el marco del *Plan Nacional para la Defensa y el Desarrollo Indígena*. Y fue adoptada sin ningún tipo de cuestionamiento por los propios indígenas, quienes la aceptaron e incluyeron en sus proclamas. Esta definición como ya viene siendo habitual, incluye los aspectos que se vienen señalando en las demás conceptualizaciones: la perspectiva a largo plazo necesaria para el desarrollo venidero del correspondiente pueblo indígena, la existencia de los recursos que la comunidad requiere para su subsistencia además de los espacios igualmente imprescindibles para el desarrollo de sus estructuras socioculturales.

Y siempre dentro del contexto político-jurisdiccional, en el contexto internacional, se debe hacer mención y comentar brevemente *La Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo*, que tuvo lugar en Río de Janeiro, en el año 1992, y a la que asistieron 170 estados. En ésta, la participación indígena fue muy limitada. Por dicha razón los pueblos indígenas celebraron una contra-conferencia -*La Conferencia Mundial de Kari-Oca* (Brasil)- la cual “*supuso el definitivo reconocimiento de la importancia del medio ambiente para la existencia de los Pueblos Indígenas*” (Berraondo, 1999: 75) y de la cual surgió la Declaración que lleva el mismo nombre. En los trabajos sobre derechos medioambientales siempre se considera a Río como el hito que marcó el principio del reconocimiento de los derechos medioambientales. Sin embargo, en lo que se refiere a los pueblos indígenas la *Declaración de Kari-Oca* resultó fundamental ya que paralelamente a Río fueron los propios indígenas quienes reclamaron sus derechos además de las responsabilidades que los Estados deberían

tener para con sus culturas y territorios. Según esta Declaración los pueblos indígenas manifiestan la importancia del mantenimiento de sus culturas, los propios valores de éstas, la importancia de la conservación de la biodiversidad y sobre todo la relación que les une a sus tierras y territorios: *“Pertenece a la tierra. No podemos estar separados de nuestras tierras y territorios”* (punto 31); *“Nuestros territorios son totalidades vivientes en permanente relación vital entre los seres humanos y la naturaleza. Nuestra cultura se desarrolla poseyéndolos”* (punto 32); *“La definición de territorio comprende el espacio (el aire), la tierra y el mar”* (punto 34). Dicha Declaración denuncia asimismo el uso que los gobiernos están haciendo de los territorios indígenas a favor del progreso (un progreso, basado en el crecimiento económico, entendido de manera diferente a la cosmovisión indígena), lo cual afecta desde su perspectiva al desarrollo cultural de dichas comunidades.

En la resolución aprobada por la *Asamblea General de Naciones Unidas*⁸³ el 13 de septiembre del pasado 2007, se aprobó la *Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas* en la que se cita que:

“los pueblos indígenas tienen derecho a la conservación y protección del medio ambiente y de la capacidad productiva de sus tierras o territorios y recursos. Los Estados deberán establecer y ejecutar programas de asistencia a los pueblos indígenas para asegurara esa conservación y protección, sin discriminación” (artículo 29. 1)⁸⁴.

En este artículo se puede comprobar de igual forma que ambas variables (pueblo indígena/ territorio) van de la mano. Sin embargo, el carácter que se le confiere al territorio es más bien economicista ya que se refiere a su capacidad productiva. Así, la dimensión económica del territorio consistiría en el mismo como unidad de recursos naturales. En palabras de Sarela Paz Patiño, serían *“los espacios físicos en los que se desarrollan actividades productivas y de aprovechamiento de los recursos naturales por parte de las poblaciones étnicas”* (1998: 123).

Paz Patiño reflexiona sobre el imaginario de la espacialidad y territorialidad indígena como construcción conceptual. En su artículo *Los territorios indígenas como reivindicación y práctica discursiva*, analiza el concepto polisémico de “territorio indígena” (1998). En él defiende que dicho término abarca varias dimensiones: *“constituye una forma de derecho, una categoría de reivindicación histórica, una*

⁸³ Este organismo internacional creó ya en el año 1983 el Grupo de Trabajo de los Pueblos Indígenas y declaró en 1993 el Año de los Pueblos Indígenas, instituyendo la Década de los Pueblos Indígenas más tarde (Letamendia, 2011: 139).

⁸⁴ http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf

unidad de recursos naturales y una práctica discursiva” (ibíd., 120). Esta definición incide y enfatiza la condición multidimensional del territorio indígena.

Por un lado la dimensión económica el territorio se refiere al espacio que aporta todos aquellos recursos naturales requeridos para el sustento de los grupos étnicos que en ellos habitan. Otros autores, pese a reconocer la condición económica del territorio, advierten que éste “*no es la suma de los recursos que contiene y que son susceptibles de apropiación o de relaciones económicas: su naturaleza se basa en esa integración de elementos físicos y espirituales que vincula un espacio de la naturaleza con un pueblo determinado*” (García Hierro, 2004: 289).

En diversas ocasiones se ha criticado el hecho de que los grupos indígenas no exploten el bosque basándose en criterios de beneficios económicos. Se ha considerado que los indígenas no aprovechan los recursos de los bosques y que pese a ser los propietarios de enormes extensiones éstas sean improductivas económicamente (este planteamiento prejuicioso es muy propio de los ganaderos de San Ignacio que no comprenden porqué las comunidades indígenas demandan tal cantidad de tierras como son las más de 98.000 hectáreas de la TCO TIMI). Ante lo que los propios indígenas se han defendido aludiendo que la gestión territorial desempeñada por sus comunidades requiere de amplias extensiones de territorio, lo cual explica porqué cada pueblo debe decidir sobre la “*disposición y el control*” de sus propios recursos. Si, como bien matiza García Hierro, se tuviese exclusivamente en cuenta la explotación agraria del territorio indígena, éste se vería reducido sorprendentemente a en torno un 2% del espacio inicial, es decir, lo correspondiente a los chacos o áreas familiares de cultivo agrícola (2004: 293-294). Pero el territorio indígena es algo más que una extensión agraria, es un tejido de relaciones sociales que integra distintas dimensiones las cuales aparecen interrelacionadas. Por ese motivo, señala García Hierro que, en algunos documentos internacionales como el Convenio 169, se hace hincapié en la noción de hábitat para llamar la atención sobre la integralidad territorial indígena (ibíd., 294).

Por otro lado, a parte de la dimensión económica, los indígenas están ligados a sus territorios por un nexo tanto cultural como espiritual. Gerardo Zúñiga Navarro explica la relación indígenas-territorio desde un enfoque cultural (1998). Para ello se inspira en parte, en el *Movimiento Indio Tupaj Katari*:

“el indio, de acuerdo a los principios cósmicos de la naturaleza, es la misma Pachamama (la tierra); la relación del hombre con la naturaleza es la que forma su ciencia y su cultura. Su cultura da vida a la humanidad, permitiéndole conservarse de acuerdo a los principios e indicadores de la naturaleza. Nosotros pertenecemos a la Pachamama, porque ella nos da el sustento de la vida y nuestros malkus nacieron de su entraña, y, al terminar, su ciclo de vida, se convierten en la misma tierra” (1998: 145).

Esta cita ilustra el sentimiento de pertenencia de los indígenas para con sus territorios, su tierra, sobre los que conforman su propia identidad en base a un espacio articulado e integrador. Desde el mismo marco referencial se ha apostado por una definición de territorio como *etnoterritorio*, de sumo interés para el enfoque de este trabajo y el que se entiende como “*espacialidad socialmente construida, vinculada primordialmente a la identidad colectiva*” (Toledo Llancaqueo, 2005: 17, cit. en Martín López y Giménez Benítez, 2009: 166). Esta concepción contiene al menos dos elementos que vienen siendo resaltados a lo largo de la investigación: las relaciones sociales y las relaciones de poder que construyen y articulan un espacio geográfico concreto y la ligazón de dicho espacio con la colectividad que lo habita, que lo vive, siente y experimenta y sobre el que configura su identidad como grupo.

Otros autores como el antropólogo alemán Gudrun Birk, ofrecen otras definiciones de territorio indígena:

“el espacio en el que cada pueblo ha vivido desde antes de la llegada de los españoles en el siglo XVI. Este espacio comprende la totalidad de los recursos naturales que se encuentran en él, la flora, la fauna, los ríos y lagos y los recursos del subsuelo; según la percepción indígena, todos ellos forman un conjunto integral que no puede ser dividido en partes, ya que todos están interrelacionados. Pero el territorio no consiste solamente en la parte física, sino que comprende también la esfera espiritual” (2000: 24).

Ismael Guzmán va más allá y reflexiona sobre el territorio como principio de desarrollo. Para este investigador es aquello “*que da sentido de identidad indígena*”. “*El territorio es el espacio-madre que posibilita la reproducción cultural (...) pero también la reproducción biológica*” (2004:101). Por ello si desaparece el territorio o se ve reducido o limitado, tendrían lugar profundas transformaciones culturales en el seno de los grupos étnicos que habitan en dichos espacios.

Otro experto en la cuestión indígena de Bolivia es el antropólogo Xavier Albó que reconoce el papel desempeñado por las poblaciones amazónicas -no sólo de Bolivia, sino también en Ecuador y Perú- quienes lograron poner el énfasis en la perspectiva territorial, frente al factor tierra, por la que luchaban los pueblos indígenas de la región anadina (2008: 247). Desde este enfoque el territorio serían los “*espacios geográficos socialmente apropiados para vivir en ellos aprovechando sus diversos recursos en armonía con la naturaleza*” (ibíd.).

Figura 2. 5. Apropiación del territorio



Fuente: Chirif, García y Chase, 1991: 85.

Otros autores como Chirif, García y Chase, aportan una definición de territorio indígena un tanto idealizada:

“los montes, valles, ríos y lagunas que se identifican con la existencia de un pueblo indígena y que le han provisto de sus medios de vida; la riqueza heredada de sus antepasados y el legado que están obligados a entregar a sus descendientes; un espacio en el que cada pequeña parte, cada manifestación de la vida, cada expresión de la naturaleza es sagrada en la memoria y en la experiencia colectiva de ese pueblo y que se comparte en íntima interrelación con el resto de los seres vivos respetando su natural evolución como única garantía del mutuo desenvolvimiento; el ámbito de libertad sobre el que dicho pueblo ejerce su dominio permitiéndole desarrollar sus elementos nacionales esenciales y por cuya defensa o reivindicación estará dispuesto a derramar su sangre cada miembro de ese pueblo, antes que soportar la vergüenza de tener que mirarse en los ojos de su pueblo despojado” (1991: 27-28).

De esta definición se pueden extraer algunas conclusiones. Estos autores consideran al territorio indígena como un espacio no delimitado en base a unas fronteras concretas sino por amplios espacios vinculados al grupo étnico. Además, este entorno, *originario*, al que se adaptaron ya los antepasados del pueblo indígena, le

aporta lo necesario para satisfacer sus necesidades vitales. Dicha provisión deberá disponer de una previsión a largo plazo, es decir, las generaciones futuras deberán contar con la posibilidad de que los recursos naturales existentes en el territorio que ocupan se preserven para sostener al conjunto de la población. El territorio indígena es también, según su perspectiva, el soporte de la identidad comunitaria como pueblo, de su memoria colectiva, el soporte de su cosmovisión y proyección espiritual sobre su propio entorno natural.

Algunos elementos de la anterior definición aparecen también implícitos en el *Primer Encuentro Cumbre Entre Pueblos Indígenas y Ambientalistas*, que tuvo lugar en Iquitos, Perú, el 9 de mayo de 1990. Se puede entender con mayor claridad lo que significa para los pueblos indígenas el territorio. El punto 1 incluye afirmaciones como “*los pueblos indígenas, nuestros territorios y la Amazonía nos pertenecemos, somos uno solo. Cualquier destrucción a una parte afecta también a la otra. Se trata pues de conservar y de conservarnos; de proteger y de protegernos*” (Juncosa, 1992: 103-104). En este documento se especifica que el territorio amazónico es para los indígenas un todo, “la VIDA misma” (*ibíd.*, 104). Pero si hay algo que sobresalga en dicho documento es la caracterización del territorio: lo que define los territorios indígenas de la Amazonía sería la integridad. Dicha integridad ha llevado a algunos trabajos a plantear, para el caso de los territorios indígenas de Mojos, el enfoque de sistemas referido a la conformación territorial a partir del conjunto de unidades ecológicas tales como las pampas, bosques, fuentes de agua, montes y todos los elementos naturales que estos ámbitos engloban al tiempo que todo ello se ve inserto en las prácticas de manejo y el conjunto de estrategias de producción y reproducción social (CIPCA, 2005: 3).

Uno de los párrafos del anterior documento abarca los aspectos más importantes de las reivindicaciones efectuadas por parte de los pueblos indígenas:

*“un territorio concebido como continuidad, sin fisuras ni fraccionamiento, íntegro y diversificado pero cuya garantía jurídica no haga diferencia entre sus diversos elementos, tan amplio como sea necesario para asegurar la vida correcta de cada Pueblo correspondiendo a su propia concepción territorial de ocupación actual o tradicional; un territorio cuya concepción y guía de manejo sea la propia cultura del Pueblo que lo ha vivido y al que debe reconocerse la más amplia capacidad de disposición y control sobre sus recursos. Como corresponde a un pueblo”*⁸⁵ (Juncosa, 1992: 106; Chirif, García y Chase, 1991: 181; Libermann y Godínez, 1992: 127).

⁸⁵ Esta definición ha sido elaborada por *Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica* (COICA) y aparece citada en los correspondientes trabajos citados.

Esto nos hace retomar la idea de indivisibilidad del territorio, del territorio íntegro sin divisiones en su interior. Sin embargo y como señalaba en párrafos anteriores, es un aspecto que no siempre se cumple por la existencia de otras propiedades privadas en el interior de los territorios reconocidos legalmente como TCOs. En base a dicha definición se aclara aquello de la integridad, se concibe el territorio como un espacio integral constituido por los bosques, lagunas, valles, montes, montaña, fauna, flora, lugares sagrados, aires, agua, seres humanos, mitos, subsuelo, etcétera. La visión indígena no concibe la separación entre las partes integrantes de sus territorios. Tal integridad es además un requerimiento obligatorio que el Estado ordena con vistas a la titulación de los territorios indígenas. Los estados imponen a las poblaciones indígenas ordenamientos jurídicos que distorsionan y desvirtúan la realidad de los propios pueblos (García Hierro, 2004). Estos fenómenos han llevado a autores como Chirif y García Hierro a declarar que “*el criterio mezquino de atribución de un número de hectáreas por familia obligó a muchos pueblos a estructurar sus territorios (...)*” (2007: 23). En la TCO TIMI la carretera (camino) que comunica Trinidad y San Ignacio de Mojos ha constituido el eje principal a partir del cual se han asentado las comunidades. Una gran mayoría de TCOs, como el TIMI, presentan fisuras internas ya que dentro de este espacio se localizan diversas propiedades privadas, principalmente de explotaciones ganaderas.

De ahí viene la referencia hacia el ámbito jurídico-legislativo, el cual a través de los decretos y leyes sobre la regulación, manejo, uso y explotación de los recursos naturales sí establece divisiones con respecto a dichos recursos. De ahí las Leyes Forestales, la Ley de Medio Ambiente, la Ley de Hidrocarburos, etcétera. Cada una de ellas establece un ordenamiento jurídico concreto para cada caso. Esta concepción contraria a la que mantienen los pueblos indígenas sobre sus territorios es contra la que pretenden luchar. Más adelante veremos como acuden a la propia legislación para modificar aspectos como estos.

El sociólogo Wilder Molina reconoce que “*no todas las TCOs o TIOC⁸⁶ en el Beni ahora tienen un territorio continuo e íntegro, ya que el saneamiento de tierras ha generado cortes en su interior, es decir islas, separaciones, desprendimientos*” (2009b). Por tal motivo, el factor de la indivisibilidad es un aspecto del todo cuestionable en lo que respecta al reconocimiento de territorios comunales indígenas en Bolivia. Molina desmiente la continuidad territorial de las TCO, afirmando que:

⁸⁶ *Tierras Indígenas Originarias Campesinas*. La nueva denominación que la CPE les ha concedido a las TCOs es un concepto que se está comenzando a aplicar desde que ha sido incluido en la *Ley Marco de Autonomías*. Sin embargo, si nuestra investigación opta por el uso del concepto de TCO es porque a día de hoy los pueblos indígenas no han asimilado la nueva noción de territorio que una vez más viene dictada desde arriba, lo cual explica su reticencia.

“la TCO es un nombre que representa un tipo de propiedad privada con límites de la tierra que les pertenece a ciertas organizaciones étnicas. La TCO materializa la idea de territorio indígena que surge desde las organizaciones indígenas del Beni, en 1990. Ahora la ley estatal la otorga a demanda de organizaciones indígenas que representan a pueblos y comunidades. Porque las TCOs no son lo mismo que el territorio de un pueblo étnico, aunque pueden ser su parte o si se quiere ahora su residuo (...) Aunque la ley hace entender, implícitamente, que la continuidad territorial no es un requisito en la posibilidad de pasar a la autonomía indígena” (ibíd., 3-4).

Pero no sólo Molina se ha referido a la discontinuidad territorial⁸⁷. El hecho de que las tierras tituladas al pueblo mojeño se intercalen con hasta 50 estancias ganaderas, propiedades privadas que invaden el territorio comunal, priva de la integridad que en un principio califica a los territorios indígenas. Chirif y García Hierro demuestran hasta qué punto estos espacios devienen en cercamientos que poco tienen que ver con la percepción que los pueblos amazónicos poseen del territorio (2007). Canedo, quien ha realizado su trabajo de campo entre las poblaciones indígenas de Mojos, muestra hasta qué punto el concepto de territorio manejado por el Estado distorsiona el de las comunidades indígenas, vinculado éste último con una concepción ilimitada y no “cercada” del mismo, siendo *“la apropiación e interiorización del espacio geográfico lo que constituye el territorio”* (2010: 7). Tengamos presentes estas reflexiones a las que volveremos en el capítulo 5.

También Tamburini ha puesto de manifiesto en relación a la cuestión territorial el efecto negativo de las concesiones de planes de manejo forestal al interior de los territorios comunales indígenas (sobre esto me detendré en el capítulo 7). Estos dan como resultado un incremento de la desestructuración al interior de dichos territorios, propiciando la “lógica disgregacionista” de los elementos que conforma el territorio tales como el suelo, subsuelo, fauna y flora, fuente de agua, etcétera (1997: 23).

Otros teóricos no obstante, no parecen tan alarmados ante la discontinuidad espacial, por el contrario admiten que ésta es una de las características del conjunto de sociedades del planeta (Gupta y Ferguson, 1992). Sin embargo, la realidad de las sociedades indígenas se rige por una lógica particular en cuanto a la representación del espacio se refiere. El ejemplo de Mojos así lo atestigua.

⁸⁷ Gupta y Ferguson apuntan a la discontinuidad espacial que tradicionalmente las sociedades han hecho efectivas sobre la división del espacio a través de la cartografía de los territorios geográficos, principalmente en cuanto se refiere a los estados-nación (1992).

Atendiendo a otras definiciones como la propuesta por COICA⁸⁸, la indivisibilidad del territorio indígena debe prevalecer por encima de fragmentaciones físicas. Constituiría de esta manera una característica imprescindible de dicho espacio y por otro un requisito primordial a la hora de delimitar el territorio con vistas a su reconocimiento. Otros autores discrepan en relación a este planteamiento, como es el caso de Balza Alarcón, para quien dicho espacio puede presentarse de manera continua o discontinua (2001: 79). En efecto, este fenómeno tiene lugar en muchas de las *Tierras Comunitarias de Origen* del espacio boliviano y en particular del TIMI.

No es casual que Gabriela Canedo se refiriera en su tesis de doctorado (2009), al proceso de titulación de TCOs en Mojos como “utopía cercada”. Canedo explica de qué manera el territorio histórico mojeño ha sido fragmentado a partir de la incursión y posterior asentamiento de grupos que actúan bajo otras lógicas de apropiación del territorio que muy poco o nada tienen que ver con la cosmovisión mojeña. La discontinuidad y la fragmentación por consiguiente, caracterizan actualmente el territorio en Mojos. Ahora bien, y como queda expresado en un informe de CIPCA, este fenómeno ha permitido consolidar el movimiento indígena en la región convirtiéndose en *“un factor movilizador en términos de demanda de espacios de participación en la toma de decisiones y luego la participación política para acceder a estos espacios demandados”* (CIPCA, 2005: 2).

El imaginario referido a la ligazón entre un territorio delimitado y la población que lo habitaba, propia de las estructuras socioespaciales de los Estado-nación se resquebraja en el momento que se tiene en cuenta la existencia de territorios discontinuos atravesados por diversos grupos sociales así como territorios que se superponen entre sí.

Tras este breve estudio sobre las diferencias de conceptualización referidas al término “territorio”, concluyo aportando la definición que este trabajo tendrá en todo momento presente al referirse a la categoría de “territorio”. El territorio indígena sería:

La principal reivindicación del movimiento indígena - la cual surge como práctica discursiva- espacio mítico y soporte identitario de las poblaciones indígenas que lo perciben como espacio comunitario en el que se ha ido construyendo la memoria colectiva de la comunidad –en este caso la comunidad mojeña-ignaciana -, y en el que “tradicionalmente” ha tenido lugar su reproducción, tanto material como espiritual, así como su organización social, que guiarán el devenir de las generaciones futuras.

⁸⁸ Desde la Coordinadora se contempla la definición de territorio indígena como *“un territorio concebido como continuidad sin fisuras ni fraccionamiento, íntegro y diversificado (...)”* (COICA: 25, cit. en Zúñiga, 1998: 144).

2. 4. DEBATES ACERCA DE LA CATEGORÍA ÉTNICA, LA IDENTIDAD Y LOS PUEBLOS INDÍGENAS.

La bibliografía dedicada al “indigenismo” y al análisis de la categoría de “pueblos indígenas” (veremos que ambas difieren en su dimensión conceptual) es ingente. Por este motivo, a la hora de exponer una aproximación epistemológica del término surgen ciertas dificultades. Lograr una definición coherente con este trabajo es un objetivo a alcanzar. Pero ante esto y antes de comenzar, se debe tener presente que no existe consenso con respecto a la definición de “pueblo indígena”. A la hora de enfrentarnos a los textos nos encontramos con una gran diversidad conceptual que nos habla de “pueblos indígenas”, “sociedades indígenas”, “pueblos originarios”, “grupos étnicos⁸⁹”, “comunidades indígenas”, “originarias”, “autóctonas”, “tribales”, etcétera, en función de los postulados teóricos desde los que se reflexione. La cuestión de la conceptualización de “pueblo indígena” está plagada de ambigüedades. En el caso boliviano ni siquiera se encuentra una definición homogénea en los textos oficiales manejados en las esferas institucionales.

⁸⁹ Según la definición que proponen Carlos Giménez y Graciela Malgesini se define a los grupos étnicos como: “1. grupos sociales o comunidades socioculturales. 2. configurados social e históricamente. 3. que forman parte de una sociedad mayor en la que interactúan con otros grupos étnicos de los cuales se diferencian. 4. cuyos miembros comparten de forma dinámica y cambiante, ciertos rasgos culturales, físicos, lingüísticos o religiosos, así como un determinado tipo de organización. 5. pudiendo ser esos rasgos o características bien asumidos como tales o bien adjudicados por otros. 6. estando conformados por la estructura de relaciones con otros grupos. 7. y habiendo en todo caso conciencia de la pertenencia o la adscripción al grupo (identidad étnica)” (2000: 216). Los grupos étnicos comparten una serie de rasgos diacríticos que nos ayudan a definirlos y son los que aparecen a continuación: “1. El origen y la descendencia común; 2. La historia común y la memoria colectiva; 3. Las similitudes en el aspecto físico, aspecto externo o rasgos raciales; 4. Las costumbres compartidas y formas de comportamiento; 5. El lenguaje o dialecto común; 6. El folclor o aspectos encuadrados como folk o “popular”: dieta, vestido, música, tradición oral, etcétera; 7. Las prácticas y creencias religiosas y 8. La conciencia política” (ibíd., 217).

Una definición mucho más temprana de la categoría de “grupo étnico” fue la que sugirió Barth en su obra de 1969 y que algunos años después sería reformulada por Cardoso de Oliveira (1976). Para Fredrik Barth “los grupos étnicos son categorías de adscripción e identificación que son utilizadas por los actores mismos y tiene, por tanto, la característica de organizar interacción ente los individuos” (en Fernández Moreno, 2007: 98). Añade además que desde una perspectiva antropológica se propuso como definición ideal la siguiente: el grupo étnico entendido como una comunidad que: “1. En gran medida se autoperpetúa biológicamente; 2. Comparte valores culturales fundamentales realizados con unidad manifiesta en formas culturales; 3. Integra un campo de comunicación e interacción; 4. Cuenta con unos miembros que se identifican a sí mismo y son identificados por otros y que constituyen una categoría distinguible de otras categorías del mismo orden” (ibíd.), los cuales son cuestionados uno por uno por Barth.

Para Eugenia Ramírez en cambio, en base al trabajo de Smith y Hutchinson (1996), “el grupo étnico se define por una denominación propia –el etnónimo–, por mitos de ancestralidad común, memoria histórica compartida, uno o más elementos culturales comunes, el vínculo con un territorio (patria) y un sentido de solidaridad entre sus miembros” (2007:156). Ramírez considera además al grupo étnico como una “clasificación colectiva” (ibíd., 198) de individuos que construyen su propia grupalidad o como “actores colectivos” (ibíd., 200).

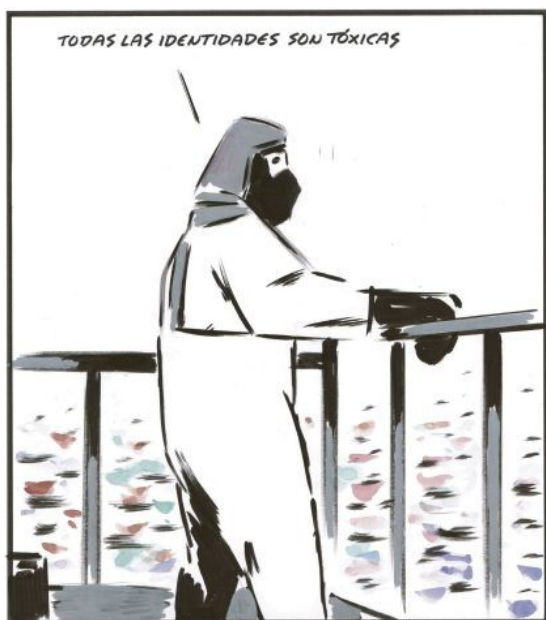
2. 4. 1. ¿Quién es quién? Aproximaciones al concepto de “identidad”.

Para comenzar con estas cuestiones, presentaré una primera idea de análisis que tiene mucho que ver con las características que entraña la “identidad”.

He preferido presentar una sumaria aproximación a la construcción teórica de la misma, algunos breves apuntes que considero primordiales para adentrarme más adelante en el análisis conceptual de una de las categorías analíticas que será manejada en el desarrollo de la investigación y a las que me remitiré en continuación. Y es que la identidad presenta una dualidad: nos referimos a ella como categoría analítica y descriptiva por un lado y como herramienta de investigación por otro. La identidad alberga una gran complejidad en su definición debido en buena medida a que ha sido una categoría estudiada por diversas disciplinas. Desde la psicología y la sociología o la antropología y la geografía, se han dedicado muchas páginas a esclarecer el significado

de “identidad”, el cual encierra múltiples acepciones.

Antes de comenzar a desglosarlas querría incluir el apunte de Escobar, inspirado en el trabajo de Comaroff que defiende que la perspectiva relacional también es aplicada a los estudios de la identidad, y entiende las identidades “*no como cosas sino como relaciones a las cuales se les dota de contenido de acuerdo con su permanente construcción histórica*” (1996: 166, cit. en Escobar, 2005: 201).



Fuente: El Roto. El País, 26/09/2012

Otra de las advertencias que no pueden pasar desapercibidas es que como bien señala Eduardo Restrepo es que los científicos sociales deberían cuestionarse si están o no legítimamente capacitados para estudiar e interpretar “desde fuera” y “desde arriba” los procesos identitarios de los grupos étnicos a los que no pertenecen (2004: 31). Y más importante todavía será el hecho de que desde la academia se pongan en marcha trabajos encaminados a la deconstrucción de dicha categoría que como consecuencia supongan el desempoderamiento de las comunidades que utilizan la identidad étnica como instrumento de reivindicación, lo cual sería contraproducente para los pueblos indígenas que sobre ella comprometen su lucha (*ibíd.*, 30-35). Como investigadores

sociales que actuamos debemos desarrollar un trabajo comprometido frente al estudio de los fenómenos sociales sobre los que pretendemos alcanzar su comprensión.

Para este trabajo, una de las obras que han servido como referente en el análisis tanto de la identidad como de la etnicidad es el de Eugenia Ramírez Goicoechea (2007). Esta antropóloga lleva a cabo un pormenorizado ejercicio de deconstrucción de la noción de la identidad. Su crítica comienza por el cuestionamiento del cariz que ha adoptado tal concepto en base al carácter individualista y arrelacional, excluido además de lo social, que le ha sido otorgado por la tradición intelectual propia del pensamiento occidental, a la que responsabiliza de haber opuesto el individuo ante la sociedad. Esto ha repercutido en que la construcción de la identidad se haya hecho en base a dicha “*ideología del individualismo*” (2007: 79). Recupero la definición de Ramírez que entiende la identidad como la “*identificación entre miembros de un mismo grupo o categoría y sus efectos en términos de pertenencia (*‘belonging’*), comunidad (*‘commonality’*), conectividad, cohesión, autocomprensión y autoidentificación, solidaridad y lealtad, conciencia y acción colectiva*” (ibíd., 2007: 81).

La identidad puede adoptar diferentes expresiones a la hora de manifestarse, pudiéndose hablar de fluctuaciones de la misma. Pueden, del mismo modo, primar unos aspectos sobre otros, pero de una u otra manera a través de la identidad interiorizamos una determinada representación de nosotros mismos frente a los demás y es en esta interacción donde desplegamos todo un juego de similitudes y divergencias que nos oponen a la vez que nos acercan y aproximan a los otros. Las relaciones sociales que se producen en estas interacciones son configuradas y ordenadas en función de las identidades asumidas por cada uno como expresión de la experiencia, la cual es a su vez configurada en la misma dinámica. Al asumir cierta identidad nos identificamos con algo y con algunos con quienes compartimos una forma de ser, de sentir, de estar, de hacer, de pensar, de actuar en la vida, definido todo ello y dominado a su vez por un ámbito sociocultural particular. En este sentido cabe añadir que uno de los geógrafos más reconocidos de los últimos tiempos y que ha mantenido una visión más crítica como es David Harvey ha enfocado la cuestión identitaria desde las “*relaciones de clase dentro de las dinámicas del capitalismo*” y es que para Harvey cualquier tipo de identidad, bien sea de género, étnica, identidad religiosa, etcétera, que los actores buscan enfatizar, aparece imbricada en alguna forma de lucha de clases que trasciende las localidades (Harvey, 1996: 359).

Una propuesta sobre lo que se entiende por “identidad” nos llega a través del trabajo de Giddens quien afirma que “*la identidad propia no es un rasgo distintivo que posee el individuo. Es el yo entendido reflexivamente por la persona en virtud de su biografía*” (1991, cit. en Castells, 1998: 32). Por tanto, el contexto personal que

envuelve a la persona y la toma de conciencia de todo lo que le rodea le permite asumir su propia identidad. Esta idea nos lleva a pensar que la identidad no es una categoría dada, no es un *a priori*, no es una categoría natural del ser humano, intrínseca a los sujetos, sino que es algo que se construye en la interacción con los demás y con el entorno en función de las necesidades y experiencias de cada sujeto, adquiriendo un significado objetivo que toma relevancia en un contexto determinado y el cual los individuos hacen suyo en ese proceso de interiorización (Ramírez, 2007; Castree, 2004; Nah A. H., 2006; Díaz de Rada, 2008; Jiménez, 1990; Malgesini y Giménez, 2000; Fenton, 2003; Song, 2003; Albó, 2002; Mires, 1991; Castells, 1998). El siguiente fragmento da cuenta de ello:

“Podríamos decir que nos inventamos entre todos la identidad⁹⁰, las identidades, como herramienta para manejarnos entre nosotros mismos y ordenar y entender la realidad que generamos (...) Las identidades son contingentes, dependientes de una historia de relaciones sociales, del desarrollo ontogenético, los sucesos, los acontecimientos, los contextos, los poderes, las agencias, los grados y tipos de institucionalización y formalización, las motivaciones, las intenciones, los efectos no previstos de las acciones, la autonomía y el espacio para poder definirse y practicarse entre otras identidades, la memoria, su relación con otros procesos sociales, etc.” (Ramírez, 2007: 88).

Retomaré esta idea más adelante, dedicada al análisis conceptual de “pueblo indígena” dado que en este caso se entiende de manera muy clara hasta qué punto los grupos socioculturales instrumentalizan la identidad en base a sus propias estrategias de acción, principalmente en la interpelación frente al Estado. Las relaciones de poder confieren el marco de análisis del proceso de construcción de la identidad (Castells, 1998: 29).

En el seno de este debate acerca de la construcción de dicha categoría, varios autores señalan que si bien esta idea ha sido ampliamente reconocida, lo interesante es en realidad el hecho de desvelar quién, para qué y porqué se construyen las identidades en determinados contextos (Castree, 2004: 142; Castells, 1998: 29). Dicho en otras palabras y en relación a la imagen simbólica del indio, Mires indica que *“el problema reside, en primer lugar, en quién lo imagina y, en segundo lugar, en cómo lo imagina”* (1991: 167).

Al afirmar que las identidades se construyen las estamos considerando como categorías contingentes con plena flexibilidad. Algunos autores han venido a

⁹⁰ Posteriormente Ramírez matizará esta idea al rectificar que hay quienes *“inventan más que otros”* al tener un poder (y la capacidad) para ello (2000: 90-91).

denominar a este fenómeno como “constructivismo estratégico” (Albó, 2008) por el que se reinventan “comunidades imaginadas” (Pajuelo R., 2007 cit. en Albó, 2008: 241) o “esencialismo estratégico” (Mamani, 2005: 115; Restrepo, 2004: 26) en donde la etnicidad aparece como “ficción colectiva” (Restrepo, 2004: 18). Otro tipo de ficción es a la que apunta este último autor citado al referirse a la etnicidad como “*ficción analítica*” en el sentido que son los propios científicos o académicos quienes generan la propia definición y en base a ella interpretan y analizan los procesos en los que dicha categoría desempeña un rol definidor.

Diversos tipos de identidad son definidos por Manuel Castells: “identidad legitimadora”; “identidad de resistencia” e “identidad proyecto”, siendo éstas dos últimas las que más interesan al presente trabajo (1998). La segunda atiende a las “*formas de resistencia colectiva contra la opresión*” (ibíd., 31) lo cual podríamos aplicar a la comunidades territoriales de Mojos, mientras que de la última podemos extraer la cuestión de la producción de actores o sujetos sociales colectivos -como así ha sucedido con los indígenas mojeños- que actúan con la intención de transformar el contexto social (1998: 32).

Molina, Vargas y Soruco proponen la siguiente definición:

“la identidad cultural es el conjunto de repertorios culturales interiorizados (representaciones, valores, símbolos) a través de los cuales los actores sociales (individuales o colectivos) demarcan sus fronteras y se distinguen de los demás actores en una situación determinada, todo ello dentro de un espacio físico y socialmente estructurado” (2008: 16).

Mientras que otra de las nociones de identidad entendida desde la geografía la define como:

“el sentimiento de adhesión que un individuo o un colectivo de individuos experimentan hacia una serie de atributos geográficos, históricos, psicológicos, ambientales, lingüísticos, religiosos y, en general, culturales, que se viven como propios, ya sea individual o colectivamente” (Lois y Pazos, 2009: 233).

2. 4. 2. El otro: la construcción de la alteridad.

Hablar de identidad conlleva prestar atención a las narrativas de la alteridad, de la otredad⁹¹, que se fundamenta en determinados mecanismos de identificación por oposición. Otro concepto que forma parte del mismo proceso. La alteridad representa lo inverso de la identidad, es decir “*la clasificación social de personas y gentes como diferentes*” (2007: 98) y el hecho de definirse por lo que no se es. Y es que al formar ambas variables parte del mismo proceso, al construir una se constituye la otra y viceversa. Existe por tanto la posibilidad de una reversibilidad. No puede darse la identidad sin alteridad. No significa, no obstante, que se deba producir irremediabilmente una “alternancia de opuestos” (Dumont, 1987 cit. en Díaz de Rada, 2008: 204) ni mucho menos que estos opuestos tengan porqué ser excluyentes.

En esta línea ha cuestionado Restrepo la ecuación de desigualdad y subordinación que define a un sujeto de acuerdo a la negación del otro (2004: 22). Pero en el caso que nos ocupa vemos que esta lógica de oposición de identidades es una constante cuando se traslada al ámbito de la política y se oponen las categorías de *indígena/blanco*; *colla/camba*⁹²; *mojeño/carayana*⁹³. Este conjunto de unidades étnicas se yuxtaponen en una relación asimétrica en la que uno de los grupos étnicos permanece subordinado al *otro*. Estos constituyen un fiel reflejo de la extrema polarización que caracteriza al país y que se vio acrecentada tras el surgimiento de las nacionalidades en Bolivia en el que cada vez más se hacía necesaria la puesta en marcha de un proyecto multicultural y multiétnico. Tal polarización se da en el nivel social a escala sobre todo regional, pero también nacional. En Bolivia es claro el contraste entre dos regiones: las tierras altas y las tierras bajas. Actualmente, con la implantación del proceso autonomista, esta tendencia lejos de atenuarse, se ha visto acrecentada. Por

⁹¹ Murray Li nos previene sobre el riesgo que se corre en estos casos al afirmar tan contundentemente la otredad desde un esquema dual que poco espacio deja a planteamientos diluidos en la extrema frontera que queda establecida entre el *ellos* y el *nosotros*, entre lo tradicional y lo moderno o entre víctimas o agresores (2008).

Gupta y Ferguson cuestionan firmemente el proyecto de cultura crítica que, a partir sobre todo de la década de los ochenta, presentaba una radical divisoria entre el *nosotros* y los *otros* y generaba como resultado la *exotización* y *nativización* de aquellos *otros* a quienes se hacía necesario, desde tal enfoque, colocar en un marco de análisis propio sin tener en cuenta la interrelación espacial de las distintas culturas y sociedades. Ante esto lo que proponen es redefinir el concepto de cultura y contextualizar la aparición de las diferencias culturales en espacios compartidos e interconectados dado que vivimos en un espacio transnacional (1992).

⁹² Términos que se manejan en Bolivia para referirse a los pueblos indígenas de tierras bajas y a los colonos respectivamente.

⁹³ Denominación que utilizan los indígenas del oriente boliviano para designar a la población blanco-mestiza, a quienes consideran tienen la cara plana, *carayana*, estableciendo una distinción basada en los rasgos físicos externos –faciales concretamente-, en contraste a ellos mismos. En este mismo sentido Sarah Radcliffe y Sallie Westwood apuntan a la racialización de la lengua al asignar determinadas categorías a grupos socioculturales impregnadas de enunciados connotativos y en muchas ocasiones peyorativos y es que “*la lengua no es pasiva y cumple un papel clave en la construcción del terreno movedizo de las identidades*” (1999: 67).

medio de los etnónimos como mojeño o ignaciano, los individuos que como tales se consideran, se posicionan en un espacio en el que concurre otro grupo social, la población blanco-mestiza o los *carayanas*, trazando una línea divisoria fuertemente marcada⁹⁴. El proceso de construcción de la identidad mojeña está atravesado por complejas tensiones emergentes en la conjunción interétnica con otros sectores sociales. La oposición por contraste frente a *los otros* los configura como grupo étnico. Esto quiere decir que un miembro de determinado grupos étnico no invoca su propia identidad hasta que no se posiciona en un plano de confrontación frente al *otro* (Cardoso de Oliveira, 2009: 91).

Esto guarda mucha relación con la dualidad que caracteriza a la noción de “identidad” en el sentido que difiere la manera de cómo uno se ve a sí mismo a cómo es visto por los demás. Jiménez expone un ejemplo sobre ello al mostrar hasta qué punto durante el periodo colonial los españoles se veían a sí mismo como superiores y por lo tanto como legítimos dominadores de una sociedad (república de indios) compuesta por individuos que requerían cierta protección y tutela (Jiménez, 1990: 67) debido a no haber alcanzado aún el estado civilizatorio y mantenerse en el estado salvaje, en la barbarie. Esteva-Fabregat apunta la misma idea pero a otra escala. Para este autor en el proceso de inmersión del indio en la sociedad nacional éste se topa con determinadas barreras que le hacen tomar conciencia de su exclusión e inferioridad frente a otros grupos sociales al mismo tiempo que la propia sociedad del Estado-nación recrea su estructura dominante en dicha interacción (1990: 108). Frente al Estado-nación, en múltiples ocasiones, se produce un proceso de negociación de la propia identidad en función del contexto o de la situación, hasta el punto que ha venido a denominarse este fenómeno como “negociación situacional de la identidad social” (Malgesini y Giménez, 2000: 166) que permite a los grupos sociales ciertas negociaciones en torno a la identidad a partir de las interacciones entre ellos. Aunque pese a tales relaciones de intercambio de conocimiento, relaciones de poder, cada uno de los grupos sociales posee su propia “cultura interna” o en los términos de Douglas su “personalidad institucional ficticia” (1987, cit. en Strang, 2001: 70).

A parte de la alteridad, otra categoría analítica y descriptiva, estrechamente vinculada a aquella de identidad y utilizada en el marco de las investigaciones sociales así como en el ámbito político, es la “etnicidad”, herramienta aplicada al análisis de las interacciones entre sujetos colectivos y comunidades humanas en determinados procesos socioculturales y políticos.

⁹⁴ Consultar Díaz de Rada (2008).

2. 4. 3. Más allá de la identidad: la condición étnica.

La etnicidad ha sido definida como “*uno de los modos de identificación social con un determinado grupo a partir de características de tipo cultural, físico, lingüístico, etcétera*” (Malgesini y Giménez, 2000: 159). Ambos autores expresan que a menudo los estudios dedicados a estas cuestiones comparten cuestiones sobre la raza y el racismo a pesar de que la primera de dichas categorías, es decir, la etnicidad, posee su “propio estatus” (2000: 159). Si bien es cierto que frecuentemente tanto una como otra noción aparecen vinculadas (Fenton, 2003; Song, 2003). Sin embargo, Cardoso puntualiza que la noción de raza se asocia a la base biológica, mientras que la de etnia se vincula con la base social (2007: 149).

Uno de los trabajos que supuso una referencia para lo que vendría después en el marco de los estudios sobre la etnicidad fue el de Frederik Barth quien publicó en el año 1969 *Los grupos étnicos y sus fronteras*, obra que enfocaba el análisis de la etnicidad desde los límites o fronteras simbólicas que los grupos sociales establecen en sus relaciones. Uno de los planteamientos más destacados de esta novedosa obra es que defiende que la diversidad cultural no se mantiene debido al asilamiento geográfico y social puesto que las distinciones entre diversos grupos socioculturales pueden continuar incluso si tales grupos interaccionan con otros (Barth, 1976). Lo interesante para Barth no es analizar a un grupo cultural en sí sino las relaciones sociales mantenidas frente a otros con los que interaccionan en las fronteras, en los límites de tales grupos.

Eduardo Restrepo incluye en su obra sobre la etnicidad (2004) cuatro características fundamentales que, en palabras del autor, se han consolidado para definir tal categoría. Éstas serían la contingencia; la no reductibilidad frente a otros ámbitos de lo social; la heterogeneidad y la relacionalidad e imbricación con las esferas del poder y estrategias de resistencia (2004: 26). Comparto todas ellas aunque incluiría además la instrumentalización de la etnicidad en aras de lograr intereses sociopolíticos y culturales por parte del grupo étnico que de ella hace uso.

Al igual que ha sucedido con el término de identidad, el concepto de etnicidad se ha visto sometido a un proceso de reificación, habiendo sido esencializado, principalmente de mano de trabajos de las ciencias sociales que posteriormente muchos grupos han aprovechado para adoptarlo y adaptarlo a sus propios contextos situacionales. A aquellas teorías que han sido denominadas como “primordialistas” les cuesta reconocer el carácter flexible de la etnicidad, debido a que admiten una serie de rasgos esenciales y naturales de los grupos, como pueden ser la lengua, las costumbres, la religión o la sangre (Ramírez, 2007: 148-149). Estos interpretan la etnicidad como algo dado, inherente al ser humano, estático. Esta tendencia establece una

“*naturalización de la etnicidad*”, lo cual viene a decir que ésta se presenta como algo inherente a la condición humana (como un elemento presocial a ésta) e independiente del sujeto por ser un hecho objetivo (Restrepo, 2004: 14).

En cambio, la mayor parte de los trabajos dedicados a la etnicidad reconocen el dinamismo de las representaciones étnicas presente en los procesos sociales. La etnicidad en este caso presentaría un alto grado de fluidez y flexibilidad. Este otro grupo, el cual viene denominado como “instrumentalista” y el cual continua el enfoque de Barth, critica el esencialismo que caracteriza a los anteriores y apuestan por: el reconocimiento de las interacciones entre los diversos grupos étnicos que poseen un sentimiento de pertenencia al propio grupo el cual está en constante redefinición así como por las adscripciones étnicas que son “*variables, negociadas, revisadas y revitalizadas según situaciones e intereses*” (2007: 150), idea que ha sido señalada con anterioridad y que reiteraré por ser de gran interés. En este caso la etnicidad aparece como una estrategia en pro de la consecución de determinados objetivos políticos, sociales y culturales (Restrepo, 2004: 16).

Malgesini y Giménez comentan brevemente la distinción entre las diversas aproximaciones al estudio de la etnicidad: el paradigma “primordialista”, el “circunstancialista” y el “instrumentalista” (1997: 160-161)⁹⁵. Fenton se une a estos trabajos y da a conocer las diferencias existentes entre primordialistas y circunstancialistas (2003). Los primeros surgieron en el seno de las ciencias sociales en Rusia, destacando autores como Sokolovski y Tishkov (Fenton, 2003: 73; Malgesini, y Giménez, 2000: 161). Para este primer grupo la etnicidad aparece como algo inherente al ser humano, se objetiviza, poseyendo rasgos reconocibles como lo pueden ser el territorio, la lengua, la mentalidad, etcétera (Fenton, 2003: 73).

A diferencia de estos, los circunstancialistas consideran que la identidad étnica cobra importancia en unos contextos concretos por lo que viene determinada por las circunstancias (*ibíd.*, 84) y “*deriva más bien de la utilización estratégica de los bagajes culturales con objetivos de tipo político o económico*” (Malgesini, y Giménez, 2000: 162). En este sentido Miri Song (2003) explica hasta qué punto muchos grupos minoritarios eligen ciertos aspectos que configuran y dan forma a una etnicidad singular, para lo cual se sirve como ejemplo de ello de las comunidades afroamericanas y las asiático-americanas.

Dos tendencias presenta Restrepo (2004) para entender la etnicidad, entre las que se engloban muchas de las aproximaciones que se han venido señalando hasta ahora. Por un lado el enfoque que predomina en los trabajos científicos occidentales

⁹⁵ Para entender de manera sintética el debate entre esencialismo y constructivismo véase Escobar, 2005: 200-201.

que consideran “*la etnicidad como una contingente construcción histórica*” (idea que se viene repitiendo en esta investigación) y por otro lado la definición utilizada por movimientos sociales y étnicos del Sur que por el contrario consideran la etnicidad:

“como una característica esencial que diferencia a determinadas poblaciones y que, en consecuencia, perfila y legitima su específica intervención política en las esferas locales, locales, nacionales y transnacionales en aras de demandar una serie de derechos económicos y culturales derivados de su condición étnica” (2004: 9-10).

Partiendo del dualismo que plantea Restrepo para caracterizar la categoría de etnicidad, podemos aceptar que ambas tendencias son compatibles y por ende no excluyentes. Es decir, reconociendo el hecho de que la etnicidad se vea inmersa en un proceso de reconfiguración continua puede al mismo tiempo constituir una herramienta política que sirva para canalizar las reivindicaciones de los grupos étnicos.

Señalaba que la etnicidad se manifiesta a menudo en el campo político. Esta idea ha sido defendida también por Fenton (2003). En este caso podemos definirla como herramienta para la negociación de los intereses particulares de los grupos étnicos. Hasta el punto de que algunos partidos políticos se apropian de la categoría “étnica” para encarnar la representación de ciertos grupos étnicos, como sucede en el caso del MAS, liderado por Evo Morales en Bolivia. Consistiría entonces en una posible estrategia de acción que aquellos sectores de la sociedad que se consideran en desigualdad de cualquier signo utilizarían para limar el poder de quienes controlan el acceso a las esferas dominantes –política y económicamente- de cualquier sociedad. Y es que remontándonos una vez más a Ramírez, “*la Etnicidad, como proceso clasificatorio, incorpora siempre poder*” (2007: 157).

La etnicidad es, por tanto, una categoría que se compone y recompone en función de los acontecimientos y a partir de elementos que considera apropiados para legitimarse como tal. Recrea una dinámica de configuración constante. Pero en este proceso y recuperando la idea de la alteridad es necesaria la participación de los otros. Es frente a estos ante quien se negocia la etnicidad y es precisamente en ese proceso de negociación que ésta sufre modificaciones en su seno además de absorber nuevos elementos que le confieren su singularidad. Strang nos aclara una vez más que los grupos sociales “*se definen a sí mismos parcialmente en relación a los otros*” (2001: 71). La porosidad y permeabilidad de las fronteras de estos procesos, en los mismos términos que utiliza Ramírez (2007: 179) -inspirada a su vez en Barth- es intrínseca a la configuración de la etnicidad.

En base a la reflexión de Díaz de Rada (2008) acerca de cómo analizar un espacio étnico desde la indagación etnográfica tras realizar el trabajo de campo con población

sami de Noruega, algunas claves se nos desvelan para afrontar con mayor conciencia crítica la propia experiencia en campo. Del mismo modo que él opta por romper la frontera étnica entre *samis* y noruegos (etnónimos referidos a grupos sociales que no tienen porqué ser excluyentes) en nuestro caso no existe una clara oposición entre ignaciano, mojeño o boliviano.

Díaz de Rada señala que, en referencia a los *samis*, estos grupos étnicos eran “*seres humanos debatiéndose (...) entre las múltiples escalas de sus identificaciones sociales, y eventualmente étnicas*” (2008: 202). Lo cual demuestra que mojeño y boliviano, tal y como sucedía ente *sami* y noruego, no tienen porqué referirse a “*grupos sociales diferenciados*” (*ibíd.*, 190) sino que puede darse una “*coidentificación*” (*ibíd.*, 191) como así sucede. Esta idea nos remite nuevamente a pensar en el carácter utilitario de la etnicidad, es decir, en cada contexto o en cada situación se recurre a una u otra categoría étnica.

Los actores sociales crean etnicidad. Ésta determina la relación que establecerán frente a los demás. Y esto tiene mucho que ver con el campo de la etnopolítica. Díaz de Rada precisa que la etnicidad y la etnopolítica están estrechamente vinculadas por el hecho de que la diversidad cultural se manifiesta cuando existen intereses en juego entre sujetos políticos (*ibíd.*, 213). Si bien en algunos casos se derivan conflictos en las interacciones de los grupos, esto no siempre tiene porqué ser así. En el caso de Mojos, en buena medida los conflictos han venido determinando las relaciones sociales, siendo una constante.

Restrepo, acerca de las de las tendencias dedicadas al estudio de la etnicidad, incluye aquella que considera dicha categoría como “*superestructura*” desde la tradición marxista (2004: 15-16). Desde este enfoque los conflictos étnicos se perciben desde la lucha de clases analizando el vínculo entre *etnicidad* y *clase*. En una obra publicada en los años setenta, Cardoso equiparaba las contradicciones entre el sistema interétnico y la estructura de clase, lo cual le llevaba a señalar en un principio que “*la polarización de las clases en torno a intereses diametralmente opuestos es homóloga a la polarización de las unidades étnicas que componen el sistema interétnico*” (2007: 118) pese a que posteriormente rectifica sobre la idea de que “*las relaciones de clase y étnicas constituyen verdaderas antinomias*” (*ibíd.*, 134) rechazando la analogía que las había atribuido. En base a esta consideración, se podría pensar que la condición étnica está sujeta a intereses económicos. No obstante hay que tener en cuenta la época y la especificidad histórica desde el que Cardoso expone sus planteamientos.

En el caso de Bolivia podríamos aceptar una perspectiva desde la lucha de clases si establecemos una férrea dicotomía entre la población indígena y la población blanco-mestiza del país. Pese a efectivamente se pueda concebir dicha realidad, algunos

autores advierten sobre los riesgos de considerar al conflicto étnico como lucha de clases (Polet *et al.*, 2010). Sin embargo, las dinámicas socioculturales e histórico-políticas en el país han condicionado las relaciones entre ambos grupos sociales, las cuales no pueden ser reducidas hasta ese punto. En el caso de que los grupos indígenas vengán considerados como etnoclases, bajo unas condiciones económicas inferiores al grupo dominante, podríamos asumir estos conflictos bajo el enfoque propuesto por Harvey.

En el contexto de Mojos, este discurso basado en la dominación de una clase social sobre otra parece estar bien aprendido dado que aparece de manera reiterativa en aquellos argumentos que cuestionan la subordinación de los indígenas frente a los *carayanas*. Ignacio Cusere –corregidor de Algodonal- comenta lo siguiente:

“mayormente la clase indígena, que somos nosotros, somos la que la han hecho enriquecer a los ricos y es la clase indígena, mal pagados, la que les mantiene su ganadería. Muchos (se refiere a los karayanas de San Ignacio) han vivido de la plata del mercado en nombre de la clase indígena” (entrevista).

En el contexto boliviano se produjo en la década de los 80 del siglo pasado un *“cambio de lugar de la interpelación de los sujetos sociales y políticos desde la identificación étnico cultural”*, rechazando *“la imposición de una clasificación racial/étnica de la población”* (Molina R. y Vadillo, 2007: 5).

En la misma línea defienden otros autores como Vargas-Hernández que tanto los conflictos étnicos como los de clase sustentan *“la lucha por la identidad de los movimientos indígenas”* por lo que ambas componentes forman parte de dichos movimientos (2005: 456). Y siguiendo en este debate, Rodolfo Stavenhagen se cuestiona si los conflictos étnicos que han surgido en las últimas décadas a nivel mundial no ponen de manifiesto la componente étnica sobre la lucha de clases o si es ésta la que ha mantenido encubierta las luchas étnicas del pasado (cit. en Mamani, 2005: 21). La postura que plantea Stavenhagen nos incita a reflexionar sobre estas cuestiones y provoca un interesante debate acerca de los motivos que han articulado los conflictos y las luchas entre diversos grupos sociales. Y es que no faltan las discrepancias al tratar estas cuestiones. Mires por su parte, cuestiona la lógica clasista que reduce el conflicto étnico a la lucha de clases, lo cual simplifica al máximo una dinámica social tan compleja (1991: 23-24 y 111).

Es cierto que las relaciones de poder en Bolivia han estado enmarcadas en la dominación histórica por parte de la población blanco-mestiza sobre el resto de grupos étnicos que conforman el panorama (pluri)nacional y por un control diferencial de los bienes. A este nivel, los indígenas bolivianos establecen sus diferencias frente a los

blanco-mestizos (frente a los *carayanas*, frente a los *cambas*). En Bolivia uno de los grupos socioculturales ha mantenido históricamente bajo su control los medios de producción y la mano de obra indígena y el acceso a los recursos naturales dando lugar a una relación desigual y estratificada. Ahora bien, dicho esquema de dominación-subordinación, se ha sustentado en la etnicidad. Esto no quiere decir que la cuestión de las clases permanezca ajena a las luchas en Bolivia por el poder. En los discursos del pensamiento indígena, fundamentalmente en aquellos pronunciados por el actual presidente de la República -Evo Morales- se hace latente la férrea oposición entre la civilización y sociedad indígena y la occidental a quienes consideran invasores, colonizadores y enemigos. Ésta se proyecta en los blancos. No deja de ser curioso que si en líneas generales los movimientos indígenas opten por mantenerse al margen de los partidos políticos y de la subordinación a estos, buscando su propia autonomía (Vargas-Hernández, 2005: 461), en el caso de Bolivia con el MAS como máximo exponente, no se dé el mismo fenómeno. Es más, este partido, gobernante en Bolivia desde diciembre de 2005, sólo nominalmente ya se identifica con una ideología política concreta: el socialismo. Ante esto cabe señalar que pese a que se presente como MAS, en realidad el nombre completo es MAS-IPSP o “*Movimiento al Socialismo-Instrumento Político de Soberanía de los Pueblos*”, lo cual quiere decir que se sirven de dicho partido político como herramienta de lucha para obtener -todos los grupos que lo conforman- representación en el escenario político nacional (Polet *et al.*, 2010: 14).

Algunos autores (Mayorga, 2006) han analizado el discurso de Evo Morales. En estos se combina cierta retórica radical con posturas más moderadas. Incorpora además elementos del nacionalismo por un lado, en donde destaca la refundación de la nación pero concebida ésta como “*articulación de naciones originarias*” encaminada a alcanzar la soberanía frente a empresas multinacionales extranjeras (*ibíd.*, 23). Por otro lado aparecen elementos más propios del indigenismo, como es el caso del multiculturalismo en el sentido de “*reconocimiento de la diversidad étnica*” (*ibíd.*, 25) pese a que la cultura aymara se posicione por encima de todas ellas (Polet *et al.*, 2010: 16). Otra misión a cumplir por la nueva nación sería reflejar la realidad pluriétnica del país, descolonizando el Estado (*ibíd.*). En estos discursos se vislumbra además la intención de establecer un vínculo entre el colonialismo y el imperialismo. Es por estos motivos que el mensaje actual que se desprende del discurso oficial de Bolivia está encaminado a mostrar y revalorizar los antiguos valores y costumbres, apelando a su pasado, de lo que en su día fue un gran imperio libre del exterminio de los blancos y del sometimiento colonial. Curiosamente, al mismo tiempo que buscan desmarcarse del proyecto de nación colonial buscan también cierto acercamiento o al menos reproducen algunos estilos de desarrollo de aquellos. Esta idea aparece también en el estudio de

Chávez Mendoza sobre la aculturación e identidad de los Waunana del Chocó (1990: 315) (pueblo indígena que habita en Colombia y Panamá).

Polet cuestionan el discurso del MAS por su indefinición, señalando, principalmente, que en realidad su objetivo no es la reivindicación anti-capitalista sino un programa de corte nacionalista a la vez que etnicizado (2010: 15)⁹⁶.

2. 4. 4. Territorializando identidades o identidades territorializadas.

Algunos estudios han profundizado de manera muy acertada en el análisis de las geografías transnacionales de las políticas de la identidad en Bolivia, desde la imbricación de marcos conceptuales interdisciplinarios que aúnan aproximaciones de la Ciencia Política, la Geografía, la Sociología o la Antropología (Andolina, Radcliffe y Laurie, 2005; Radcliffe y Westwood, 1999). Estos trabajos insisten en la reconfiguración de la nación en base a la emergencia de identidades indígenas y la creación de nuevas identidades políticas en el país a partir de la confluencia de diversos discursos e ideologías provenientes tanto de organismos internacionales, de redes transnacionales, de organización no gubernamentales, grupos ambientalistas y del movimiento ecologista internacional⁹⁷, grupos en defensa de los derechos humanos, de

⁹⁶ Para un análisis más profundo acerca de las políticas del Presidente Evo Morales y su gobierno véase el monográfico “Bolivia: ¿el fin del enredo?”, *Nueva Sociedad*, n° 209, 2007.

⁹⁷ Siffredi y Spadafora (2001) repasan el interés de las agencias medioambientales por presentar una imagen estereotipada del indígena como *guardián de la naturaleza* caracterizado por sus virtudes conservacionistas, lo que les llevó a prestar su atención a los pueblos amazónicos quienes adquirieron el rol de “indio ecológico” o “buen salvaje ecológico” en los términos que lo usan Conklin y Graham (1995). Esto explica las estrechas relaciones entre los ambientalistas y las organizaciones indígenas, ambos compartiendo un programa de acción. Luque y Robles comentan los intereses estatales que existen en México por incorporar lo indígena y ambiental y desarrollar proyectos de “etno-desarrollo sustentable” (2006: 35) por lo que el manejo sustentable de los recursos y de la biodiversidad supone una oportunidad para el reconocimiento de la diversidad cultural.

Sobre el mito del *indio ecológico* léase Calavia (2006).

Se produce una retroalimentación de prácticas discursivas entre la re-creación del indígena y los movimientos ecologistas, desde donde se ha lanzado la imagen del “indio natural” (Mires, 1991: 168). Ciertamente es que las demandas de los movimientos indigenistas y ecologistas presentan grandes analogías y ambas corren de manera paralela en muchos sentidos, llegándose a afirmar que en la región amazónica ambas tendencias han encajado tan claramente “*hasta el punto que, por lo menos en América Latina, es casi imposible referirse a la cuestión ecológica sin hacer mención a la cuestión indígena*” con lo que se corre el riesgo de generar una imagen, si no se pone límites, de “*naturalización del indio*” (ibíd., 1991: 208). Ahora bien, otros autores ven beneficioso para la preservación de las culturas indígenas el encuentro entre ambos. Así lo manifiestan Andolina, Radcliffe y Laurie quienes defienden que estas alianzas contribuyeron en buena medida a poner en marcha los programas de etnodesarrollo (2005: 144, 150).

Albert recurre al término de “reinención ecologizada” (2004: 237) para demostrar el lazo que unió desde la década de los ochenta al movimiento indígena y a las organizaciones ecologistas. Fruto de esa unión se produciría una dialéctica de la que ambos se beneficiarían y autoalimentarían a partir de la difusión de la imagen de los pueblos indígenas como los *guardianes de la naturaleza* hasta el punto que “*los grandes temas del ecologismo amazónico encontraron rápidamente su lugar en el discurso político de los líderes indígenas según*

científicos sociales (fundamentalmente antropólogos⁹⁸), de líderes cooptados, incluso de la Iglesia católica en el caso de Mojos. Toda esta red de alianzas está compuesta por elementos que se retroalimentan configurando los discursos utilizados por los grupos indígenas para efectuar sus demandas, siempre en base a la identidad como elemento catalítico de éstas.

El proyecto nacional de Bolivia da cabida a tal sinfín de actores sociales que incorporan sus propios discursos con el objetivo de dar forma a una comunidad imaginada. A partir de este amalgama discursivo, surge en el seno de las organizaciones indígenas una retórica conformada por incorporaciones y préstamos externos que la moldean y llenan de contenido. Las alianzas entre estos actores han propiciado el surgimiento de redes transnacionales de movimientos indígenas que superan las fronteras entre Estados⁹⁹. Este ensamblaje de ideas ha dado como resultado el surgimiento de *“geografías imaginadas por las que se articulan narrativas que aúnan a la nación con un lugar o espacio compartido”* (Radcliffe y Westwood, 1999: 43). Esto está inextricablemente vinculado con las *identidades territorializadas*.

Alice M. Nah plantea lo crucial del debate acerca de la manera en que las identidades indígenas son territorializadas y pone el énfasis en las relaciones de poder que se crean entre quienes se consideran pobladores legítimos y los colonizadores que ocuparon el espacio posteriormente, lo cual genera un estrecho vínculo entre grupos humanos y el espacio geográfico, que adquiere significados connotativos (2006). Como hacía referencia al comienzo del presente capítulo, las geopolíticas indígenas envuelven todos estos procesos que exploran la manera en la que los grupos étnicos crean estrategias para configurar un lugar, un espacio territorial y desde él desplegar su programa de acción el cual entra en conflicto con otros grupos sociales por la apropiación y ocupación territorial.

Strang enfatiza la importancia que la tierra adquiere para los grupos indígenas a la hora de justificar la legitimidad de su posesión que consecuentemente posibilita la continuidad cultural de dichos grupos puesto que es en la cotidianeidad que establecen estrechos vínculos físicos, emocionales y espirituales con la tierra (2001: 83). Esta idea fue ya concebida por Bonfil Batalla quien advirtió acerca de la total necesidad de la

modalidades variables en función de su experiencia de contacto y de su formación en una amplia gama que va desde la manipulación de estereotipos new age sobre la naturaleza y la madre Tierra hasta síntesis ‘ecochamánicas’ complejas” (ibíd.).

Incluso hay quienes han llegado a hablar de “etnicidades ecológicas” propia de aquellos pueblos indígenas que mantienen una relación armoniosa con la naturaleza, de la que se nutren y de la que cuidan en base a la observación de los ciclos reproductivos de ésta (Parajuli, 2001: 560).

⁹⁸ Letamendia expone el proceso de *feedback* producido a partir de la participación de los antropólogos en la reconfiguración de la identidad (2011).

⁹⁹ Siendo éste el caso de COICA, fundada en el año 1996, y la cual aglomera al conjunto de pueblos indígenas de la Amazonía.

conservación y consolidación de los territorios étnicos por constituir la única manera de garantizar la pervivencia de los grupos indígenas y como consecuencia de sus culturas, motivo por el que las reivindicaciones territoriales constituyen una de las más importantes demandas del movimiento indígena, si no la más importante (1990: 203). En este contexto es del todo pertinente la definición que Balza Alarcón hace del territorio en el caso boliviano, el cual considera como *“todo espacio que es actualmente imprescindible para que un pueblo indígena acceda a los recursos naturales que hacen posible su reproducción material y espiritual, según sus características propias de organización productiva y social”* (2001: 79). Para Terence Turner se establece un lazo entre el mantenimiento de la integridad territorial y el mantenimiento de sus sistemas sociales lo cual les empuja a luchar por los territorios dado que admiten que *“supondría su disolución social y, probablemente, su extinción cultural la pérdida de los lugares, en los que están situados sus hogares y aldeas y los espacios limitados que comprenden sus bases territoriales y los recursos de los que dependen para sobrevivir”* (2004: 433-434).

En este sentido Farinós viene a denominar *culture economy* al *“intento de revalorizar los lugares a partir de su propia identidad cultural”*, o dicho de otra manera constituiría *“el conjunto de estrategias para transformar la cultura (el saber local, la forma propia de hacer las cosas) en recursos disponibles para el desarrollo territorial”* que puede adoptar diferentes formas entre las que destacan y es del todo pertinente para este trabajo, aquellas encaminadas a construir una determinada identidad y de manifestarla al exterior (2005: 227). Sin embargo, algunas voces críticas dudan sobre si verdaderamente la consolidación del espacio territorial sea capaz de garantizar en sí misma la continuidad y el futuro de las poblaciones indígenas (Chirif y García Hierro, 2007: 27).

Mucho se ha escrito sobre la aparición de los Estados nación en América Latina, los cuales surgieron en el marco de procesos históricos en los que la identidad territorial desempeñó un rol fundamental con el que se legitimaba el sentimiento de pertenencia de los individuos que vivían al interior del mismo. De igual modo, el territorio ha constituido un elemento de primer orden en los procesos identitarios que se han conformado en las últimas décadas en Bolivia. Los pueblos indígenas del país tomaron conciencia de la exclusión a la que se veían sometidos por parte del propio Estado nacional. No se sentían partícipes de éste. Optarían entonces por reivindicar su propio espacio geográfico a la vez que reivindicar su participación y reconocimiento en las esferas gubernamentales. Podríamos afirmar que en Bolivia las identidades indígenas se han configurado a partir de la identificación con geografías imaginadas de acuerdo a *“representaciones espaciales implícitas e imágenes vinculadas a espacios*

específicos que circulan en los discursos oficiales sobre la nación” (Radcliffe y Westwood, 1999: 95). Las identidades aparecen imbricadas en las espacialidades imaginadas que en su historia poscolonial se han visto reconfiguradas. Las identidades canalizan la memoria colectiva que se vincula con una geografía territorializada en base a dicha identidad. La memoria colectiva del grupo étnico se proyecta en los lugares geográficos que confieren identidad a la comunidad correspondiente.

La ficción escondida en la noción de las *identidades territorializadas*, es reconocida por Castree quien advierte que la demanda de espacios territoriales está legitimada por las referencias a la ocupación y habitabilidad de tales espacios y a los orígenes de los grupos que efectivamente llevan a cabo dichas demandas (2004: 142). Retomando el marco analítico del *thirdspace* de Soja, es interesante vincular este *tercer espacio* con las identidades híbridas que así lo articulan y definen. Como bien señala Susan Smith, toda forma de cultura está inmersa en un continuo proceso de hibridación, es decir, se ve en constante transformación en su contacto con otras formas culturales, recreando tales identidades (1999: 20). En una línea próxima y en el marco de la poscolonialidad que vincula las cuestiones de la identidad con el lugar, se preguntan Gupta y Ferguson a qué lugares pertenecen estas culturas híbridas y si el encuentro colonial ha propiciado la aparición de una “nueva cultura” (1992: 7-8)¹⁰⁰.

2. 4. 5. Reificación de la identidad indígena.

Algunos riesgos que pueden surgir a la hora de enfrentarnos al estudio de los grupos étnicos es que los actores sociales son en ocasiones reificados lo cual nos puede llevar a caer en un “fundamentalismo cultural” si pasamos a considerar que el hecho de asumir un etnónimo se corresponde de manera irreversible a compartir unas determinadas atribuciones sociales (Díaz de Rada, 2008: 227).

Para el caso de los movimientos étnicos, como ocurre con el indigenismo, los líderes indígenas han contribuido a la recreación de un discurso basado en la autenticidad. Castree en referencia al surgimiento de las élites indígenas y en base al trabajo de Watts, avanza que la aparición de líderes carismáticos entre las bases de los movimientos indígenas contribuyeron en buena media a forjar las nuevas identidades sociales que fueron aquellas que se lanzaron a la demanda de espacios territoriales (Watts, 1999: 92, cit., en Castree, 2004: 141).

Eugenia Ramírez les ha concedido diversas denominaciones tales como líderes étnicos, instigadores étnicos o élites étnicas (2007). Pese a la diversidad conceptual su cometido es el mismo: “*conformar, dirigir, orientar, confluir voluntades, energías,*

¹⁰⁰ Para un análisis en profundidad sobre culturas híbridas véase Canclini, 2001.

intenciones, deseos, sentimientos, aglutinar ciertas autclasificaciones y experiencias identitarias hacia una objetivación social mediante discursos, representaciones, actividades, ocupación de lugares sociales y políticos, etc.” (ibíd., 229). Sin embargo, en esta definición se echa en falta un aspecto y es la condición de interlocutores que los líderes indígenas adquieren en su posición y que les hace mediar entre las comunidades indígenas, con las que se identifican, y el Estado, a partir de canales de diálogo. Es cierto que movilizan al resto de actores indígenas pero lo hacen desde una plataforma de intermediación frente a las instituciones estatales. Es cierto que menciona la posible cooperación entre estas élites y el poder pero esto no tiene porqué referirse a la intermediación entre ambos agentes. El papel de estos es de suma importancia en el seno de los movimientos indígenas puesto que definen y conceden claridad a los programas de acción y los correspondientes discursos. Dan sentido, coherencia y unidad a las reivindicaciones del propio movimiento, las cuales aparecen, en buena medida, de forma consensuada.

Un aspecto interesante a señalar al respecto es que en todo este asunto los líderes étnicos pueden verse sometidos a un proceso de cooptación por parte del Estado, lo cual ha sucedido entre los líderes mojeños, entre los que se ha dado algún caso que tras incorporarse al ejecutivo de La Paz, se han alejado de las bases del movimiento indígena que les catapultó a las más altas esferas del poder. Desde una posición un tanto crítica, Esteva-Fabregat asume que las redes de la sociedad nacional envuelven a tales líderes integrándolos en ésta, lo cual le lleva a cuestionarse hechos como el que acabo de señalar y la actitud de tales líderes, señalando que al mismo tiempo que representan a sus comunidades de origen *“adoptan los modos culturales de la sociedad nacional y participan activamente en ésta por medio de actividades políticas y de redes ampliadas de solidaridad y compromisos sociales”* (1990: 107). Con este planteamiento daría la impresión de que se continúa buscando la autenticidad étnica que se pretende anclada en un espacio atemporal, fijo e inmóvil y carente de historicidad. Continúa costando admitir que también las sociedades indígenas están inmersas en un mundo global caracterizado por el intercambio de información por medio de redes transnacionales que operan a nivel mundial. Ahora bien, es cierto que las élites indígenas en muchas ocasiones, reformulan las demandas desde su óptica personal, desoyendo como consecuencia, algunas de las reivindicaciones originales y volcando en ellas sus propios objetivos.

A tenor de todo ello han aparecido trabajos más recientes como el de Andolina,

Radcliffe y Laurie, quienes analizan el papel de los líderes indígenas de los *ayllus*¹⁰¹ del altiplano boliviano (2005). Estos dirigentes validan la identidad de sus comunidades a partir de la incorporación a las redes transnacionales, tal y como se señalaba anteriormente. Son estos líderes quienes contribuyen a adecuar los preceptos del Estado hacia sus comunidades, adaptándolos a su propia idiosincrasia.

2. 4. 6. Cajón desastre: confusiones conceptuales entre pueblos indígenas, indianismo, indigenismo y movimientos indígenas.

La aparición del concepto de “pueblo indígena” le debe mucho a la emergencia del movimiento indígena el cual, como ya sabemos, centró sus reivindicaciones en el reconocimiento de toda una serie de derechos colectivos entre los que sobresalen los derechos territoriales y el derecho a la soberanía (Johnson *et al.*, 2007: 118). Noel Castree nos advierte que indigenismo no es sinónimo de pueblos indígenas (2004). El indigenismo hace relación a un movimiento social global que cumple ciertos requisitos: ser un colectivo que adscrito a una identidad particular (indígena) busca reconocimiento y utiliza ésta como recurso para sus luchas específicas; la segunda característica que debe albergar es la lucha dirigida al control territorial, a los “*recursos físicos, culturales y de información*” por ser estos considerados por los grupos indígenas, inalienables (2004: 151-152). Otra de las características que Castree remarca para el indigenismo es la translocalidad o globalidad e internacionalidad –referida al estrecho vínculo que mantiene el movimiento indígena y las instituciones internacionales por un lado y las regulaciones desplegadas por tales organismos en relación a las demandas de las poblaciones indígenas por otro- que posee y que hace que algunas nociones como las de lugar, cultura e identidad se vuelvan obsoletas y pierdan parte de su significado original (*ibíd.*, 2004: 156).

Una definición del todo elocuente entiende que el:

“indigenismo, como movimiento social, es un tipo de activismo sociopolítico que incorpora la reivindicación étnica a la reivindicación de autonomía y libertad de gestión y decisión. Constituye un conjunto de movimientos de protesta contra la discriminación y la minusvaloración de las poblaciones autóctonas precolombinas en las construcción nacional y económica del Estado y, en todo caso, al giro pluralista introducido por el XI Congreso Indigenista Interamericano de Managua, en cuanto al respeto y reconocimiento, defensa y protección de los derechos indígenas, su autonomía y su

¹⁰¹ Esta investigación contiene en su comienzo una definición de *ayllus* como “estructuras indígenas-comunitarias de los Andes de las familias ampliadas, basadas en patrones de liderazgo y la ocupación de espacios territoriales específicos” (2005: 1).

consideración como sujeto social activo en todos los ámbitos sociales y del Estado" (Fernández Fernández, 1998, cit. en Ramírez, 2007: 244).

Conforme a esta definición se concibe el indigenismo como inserto en el ámbito de los movimientos sociales, lo cual lo hace equipararse a los movimientos indígenas. Veremos a continuación que dicha asociación aparece en otros trabajos, de lo que se deduce que no existe una clara distinción entre indigenismo y movimiento indígena o dicho de otra manera, que ambos representan en líneas generales la misma cosa. Ambos dirigen sus esfuerzos al reconocimiento del mismo catálogo de derechos que mencionaba unas líneas más arriba.

Óscar Arce Quintanilla señala al año 1940, fecha en la que se creó el *Instituto Indigenista* durante el *Congreso de Páztcuaro*, como el despegue del indigenismo¹⁰². Este autor distingue varias etapas que marcan la trayectoria de dicho movimiento hasta el año 90 (1990: 20-30). La primera de ellas iría desde 1940 hasta 1955 cuando los temas que más preocupaban al movimiento correspondían a educación, lengua y cultura. La segunda etapa abarcaría el periodo que va entre 1955 y 1970 cuando la "comunidad" adquirió mayor relevancia. Entre 1975 y 1990 los intereses se desplazaron hacia asuntos vinculados con las tecnologías tradicionales y el etnodesarrollo. Finalmente, a partir del año 1990 se puso mayor énfasis en los derechos humanos, la autonomía, la paz, etcétera. En el momento actual podemos afirmar que los derechos territoriales son el eje central de las demandas del movimiento indígena en el continente latinoamericano así como la participación en la arena política de los grupos indígenas constituidos como nuevos sujetos políticos, hasta no hace mucho excluidos del campo de la política. Este breve recorrido nos muestra las variaciones internas acaecidas en el seno del indigenismo así como la evolución de las temáticas a tratar en función de las coyunturas en cada uno de los países (1990: 20-21).

Los planteamientos de Escobar, en la línea del posdesarrollo, apuestan -como vimos anteriormente- por la perspectiva del lugar recreada por las identidades, tales como los grupos indígenas (2000, 2005, 2010b). Este autor sitúa los movimientos sociales, especialmente aquellos *localizados* en los bosques tropicales, sobre cuatro pilares principales: la identidad, el territorio, la autonomía política y su particular visión de desarrollo (2000: 130).

Por el contrario, Mamani señala que el indigenismo consiste en "*la corriente*

¹⁰² En esta obra, no obstante, se apunta a que a la hora de buscar los orígenes sobre el indigenismo nos podríamos incluso retrotraer a Bartolomé de las Casas que desde una época temprana defendió "*con precisión y claridad el contenido cultural del indio americano*" demostrando de esta manera poseer una "*actitud moderna respecto del problema indio*" (1990: 35-36).

literaria, artística y académica de los no indígenas con respecto a los indios o indígenas” siendo una construcción clasificatoria del “otro” con respecto al indígena” (2005: 15). Otros autores han resaltado la dualidad que encierra el indigenismo el cual se presenta por un lado como movimiento social, como herramienta de lucha política y por el otro como proyecto político encaminado a la consecución de un Estado multinacional y pluricultural (Letamendia, 2011).

Pero no siempre eran compartidos los postulados y las directrices de las políticas indigenistas. Al indigenismo le brotaron ramas internas. Como reacción surgió tras un debate en el seno del movimiento, otra filosofía paralela pero diferenciada en algunos aspectos: el indianismo. De esta manera el indianismo surgiría como respuesta a las políticas indigenistas que se estaban desarrollando en los países de América Latina y bajo propuestas de modelos alternativos al desarrollo y nuevas formas de interrelación con el Estado nacional (Arce, 1990: 21). Alcina se inspira en Marie-Chantal Barre para definir el indianismo como la filosofía que:

“se fundamenta en la visión cósmica de la vida y del mundo que para el indio significa equilibrio y armonía entre los distintos elementos de la naturaleza, de la cual él mismo es parte integrante. El indianismo es también la búsqueda y la identificación con el pasado histórico, pues pasado y presente forman un todo inseparable basado en la concepción colectivista del mundo” (1990a: 14).

El indianismo toma forma institucional tras la celebración en el año 1980 del *I Congreso de Movimientos Indios de América del Sur*, reunido en Ollantaytambo (Cuzco). Es ahí cuando se configura la ideología del indianismo. La principal diferencia señalada entre indianismo e indigenismo sería que el primero *“defiende los principios fundamentales de independencia cultural y autonomía política frente a un indigenismo principalmente aculturador y colonialista”* (ibíd., 1990b: 38). La misma denuncia manifiesta Bonfil Batalla al poner énfasis en el *“carácter colonialista del indigenismo”*, pero no sólo, dado que acusa a las *“ciencias sociales puestas a su servicio”* expresado en la *“exclusión y negación del otro”* (referido a los pueblos indígenas) ante lo que sugiere *“ver el fenómeno desde la perspectiva india y no, como hasta ahora, desde la perspectiva de la sociedad dominante”* (1990: 191-192).

En la misma dirección señala Madani que el indianismo sería *“una construcción discursiva del indio de acuerdo a su propia vivencia cultural y política”* (2005: 15). Para Mires por el contrario, el eje en torno al cual gira la indianidad sería el redescubrimiento del indio al entender por indianismo *“la creencia (y praxis) de que ‘lo indio’ sólo tiene su zona de residencia en un supuesto pasado pre-colombino al que hay que descubrir para recuperar”* (1991: 164).

En suma, se puede simplificar concluyendo que el indianismo consistiría en la ideología que ha sido producida por los indígenas y el indigenismo, a diferencia de aquella, enunciada por los no indígenas.

Estos debates sobre el indigenismo abonaron los estudios antropológicos del panorama latinoamericano.

El término “indígena” apareció en cambio en el periodo de posguerra, siendo creado de la mano de instituciones internacionales como *Naciones Unidas* y la *Organización Internacional del Trabajo* lo cual sugiere que la categoría de pueblos indígenas debe su aparición en su “interacción con el mundo moderno” confirmando que las identidades no vienen dadas sino que se construyen en virtud de las circunstancias de cada momento (Castree, 2004: 153). En cambio para situar el origen del concepto de “indio” es necesario remontarnos al periodo de las colonias en el continente latinoamericano y a esta categoría se refiere Alfredo Jiménez al citar a Bonfil Batalla en la explicación que éste último ofrece sobre dicha noción, la cual constituiría:

“una categoría supraétnica producto del sistema colonial (...) La estructura social de las naciones recién inauguradas conservó, en término generales, el mismo orden interno instaurado durante los tres siglos anteriores y, en consecuencia, los indios continuaron como una categoría social que denotaba al sector dominado bajo formas coloniales, ahora en el seno de países políticamente independientes (...) El indio sigue apareciendo en ellos con las mismas características que tenía en el siglo XVI (...) Los mismos estereotipos, los mismos perjuicios, consolidados por más de trescientos años de régimen colonial que... exigía esas imágenes para racionalizar el orden de dominio de explotación imperante” (Jiménez, 1990: 46-47).

Al igual que sucedía con los conceptos de identidad o etnicidad, nos topamos con varias dificultades al intentar definir la categoría de “pueblos indígenas”. Es un término que encierra cierta ambigüedad. Uno de los motivos que explican la dificultad de definir este término es que la colonización adjudicó unas fronteras bien delimitadas a estos grupos étnicos que en la era poscolonial y posmoderna no tienen cabida (Johnson et al., 2007: 117). Sin embargo, como queda señalado en esta obra, más que lograr alcanzar una definición concreta lo interesante de esto es el debate que se genera (*ibíd.*, 118).

Otros trabajos como el de Shaw, Herman y Dobbs (2006) nos alertan acerca del amplio rango que existe en torno a esta definición y previenen sobre la aceptación y el consecuente uso de dicha categoría que puede llegar a referirse a aquellas personas que son originarias de un lugar concreto, excluyendo a quienes han emigrado a otros lugares (*ibíd.*, 268). El término de “pueblos indígenas” funciona entonces como un

paraguas que recoge diversas concepciones pero que comúnmente se ha referido a menudo a aquellos grupos que mantienen lazos espirituales y ancestrales con la tierra y cuyos ancestros ocuparon ese espacio previamente a la colonización y cuyas naciones permanecen además sumergidas al interior de estados creados por los poderes coloniales (*ibíd.*).

De la misma manera que afirmaba que la categoría de identidad no viene dada, lo mismo ocurre con la categoría de “indígena”, la cual ha sido socialmente construida. La indigeneidad no viene dada *per se* y además se presenta estrechamente vinculada a las dinámicas y relaciones de poder, construyéndose por tanto en la interacción, que a menudo es conflictiva aunque no tiene porqué llegar a serlo, con otros actores sociales (Nah, 2006). La adscripción a unos u otros grupos configura en múltiples casos las relaciones de subordinación-dominación entre diversos sujetos colectivos. Esta idea viene apuntada por Noel Castree quien cita a Castells para referirse a la manera cómo el colectivo autodenominado indígena se sirve de una “identidad de resistencia” a la hora de hacer efectivas sus demandas (1997, cit. en Castree, 2004: 136). Para Castree el indigenismo ha tomado forma como movimiento social global, constituyendo –en los términos utilizados por Radcliffe (1999)- un “colectivo transnacional no-diaspórico” que lucha por “geografías diferenciales”, referido esto a la lucha por el derecho a crear sus propios espacios (2004: 136). Para Francisco Letamendia, el indigenismo como movimiento social puede ser entendido como aquel “movimiento por el que los marginados pueblos originarios americanos excluidos históricamente del poder del Estado reinventan sus identidades y reivindican sus valores, proyectando su significado en el conjunto de la sociedad y más allá de las fronteras” (2011: 139). Una de las razones que explican la situación de exclusión frente al Estado-nación en la que se encuentran los pueblos indígenas y el porqué de haber sido considerados como minorías es la falta de control sobre los recursos tangibles e intangibles (Castree, 2004: 161).

Una concepción de los indígenas marcadamente idealista¹⁰³, ha sido en ocasiones explotada por estos, amparada a su vez por definiciones provenientes de organismos internacionales y de los propios movimientos indígenas, desde donde se mantienen una férrea defensa de las culturas *originarias* ocultando los préstamos discursivos que éstas han ido incorporando con el correr de los tiempos. El anclado paradigma *rousseauiano* del “buen salvaje” no ha resultado en absoluto beneficioso para los indígenas. Hacia los

¹⁰³ Se han conocido casos de comunidades campesinas que se han autoidentificado como poblaciones *originarias* y autóctonas para sumarse de esta manera a la demanda y consiguiente titulación territorial, lo cual supone un agravio frente a aquellas poblaciones indígenas en las que el territorio que han habitado desde tiempos históricos supone la base para su desarrollo tanto material como espiritual.

años setenta, los movimientos ambientalistas y conservacionistas así como las organizaciones no gubernamentales, fundamentalmente del Norte de Europa, legitimaron dichos discursos de idealización del indio¹⁰⁴. La manipulación de estos -con un sesgo tanto esencialista como victimista- no es excepcional sino que está a la orden del día. Ante este fenómeno se propone cautela a la hora de enfrentarse al análisis de la realidad por la que atraviesan en el momento actual un sinfín de pueblos indígenas. Marcus Colchester aclara de manera muy ilustrativa estos supuestos al señalar que “*se ha descubierto que muchos indígenas amazónicos tienen una actitud oportunista más bien que conservacionista para con el medio ambiente y logran el equilibrio ecológico porque sus sistemas políticos tradicionales y los modelos de asentamiento fomentan la movilidad. Así pues, los indígenas trasladan sus poblados, campos y expediciones de caza a zonas nuevas una vez que las localidades cercanas están agotadas, porque ello exige menos esfuerzo que lograr menores ingresos de sus ubicaciones actuales. De este modo, el equilibrio se logra de manera no intencionada mediante la retroalimentación negativa más bien que mediante una preocupación consciente por el uso excesivo*” (1995: 29).

Una de las definiciones más manejada en Bolivia por los pueblos indígenas de tierras bajas y la cual ha sido tomada muy en consideración en este trabajo, es la que aparece en el capítulo I de la *Ley de los pueblos indígenas del Oriente, el Chaco y la Amazonía* (Juncosa, 1992: 67; Libermann y Godínez, 1992: 66). Esta definición entraña especial interés por haber sido enunciada por los propios pueblos indígenas y no por del derecho internacional. Según ésta, se considera pueblo indígena a:

“los grupos Étnicos de Oriente, el Chaco y de la Amazonía de Bolivia, que descenden de poblaciones que habitaron en el país desde la época precolombina, con organización social específica, a través de la cual una colectividad humana se identifica y sus miembros son reconocidos como pertenecientes al mismo, diferenciándose de la colectividad nacional por regirse total o parcialmente por su propia organización y que posee un vínculo territorial definido en función de su ser, de su hábitat y de su vivir comunitario”.

De acuerdo a la presente definición un “pueblo indígena” supone una comunidad con orígenes en el periodo prehispánico, identificada con el territorio en el que habita,

¹⁰⁴ Un caso muy concreto muestra la decepción que se produjo en la opinión pública internacional tras ser reconocidos como propios los territorios en los que el pueblo indígena kayapó de Brasil habitaba. Estos, poco después de ver titulado su territorio decidieron poner a la venta los recursos forestales a empresas exportadoras, apoyándose en la validez del derecho a decidir por sí mismos las decisiones que les afectarían sobre la soberanía de sus recursos. Mi investigación no entrará a juzgar este tipo de acciones, que por otro lado admite como totalmente legítimas.

con sus propias costumbres y organización social. En el artículo 4 se insiste en que “*los términos de «Pueblos Indígenas» y «Pueblos originarios» son equivalentes*” (Libermann y Godínez, 1992: 66).

Y es que lamentablemente la mayor parte de acepciones que se manejan en Bolivia sobre la categoría de “pueblos indígenas” han sido formuladas por discursos oficiales provenientes del Estado, a través de leyes en las más de las veces, o por las disposiciones que se desprenden de organismos internacionales, como es el caso de la OIT o las Naciones Unidas. Este último organismo en el año 1983 publicó el denominado *Informe Cobo* -en referencia al por entonces relator especial de la ONU: Martínez Cobo- en el que se incluye otra definición sobre pueblos o naciones indígenas:

“son aquellas que poseyendo una continuidad histórica con la sociedad pre-colonial y preinvasora, se consideran ellas mismas distintas de otros actores de la sociedad, ya sea prevaleciendo en aquellos territorios o en parte de ellos. Ellas constituyen actualmente un sector no dominante en la sociedad y están determinadas a preservar, desarrollar y transmitir a generaciones futuras sus territorios ancestrales y su identidad étnica, como base de su existencia cotidiana como pueblos de acuerdo a sus propios patrones culturales, institucionales, sociales y sistemas legales” (Mires, 1991: 17).

De esta definición podemos extraer varios aspectos que sería interesante fuesen comentados. El primero de ellos es que es una definición temprana en relación al resto de documentos que son y han sido manejados por los pueblos indígenas a la hora de presentarse ante el panorama internacional como tales. En segundo lugar, una vez más es una noción que nos llega y que ha sido configurada por personas ajenas al mundo indígena en cuestión. Es decir son los *otros* quienes determinan e imponen los criterios que una nación indígena debe cumplir para poder ser considerada como tal. Un tercer y último aspecto que llama la atención es que califica la empresa de la conquista como invasora, lo cual no sucede en el conjunto de documentos oficiales que incluyen la definición de pueblos indígenas u *originarios*. Este “atrevimiento” hace un guiño a la legitimidad de la lucha que estos actores sociales llevan a cabo.

Sin embargo, a día de hoy sólo encontramos apenas dos definiciones de “pueblo indígena” contenida en la legislación nacional. Esta es la que aparece en la *Ley de Participación Popular* por la que se les define como:

“la colectividad humana que descende de poblaciones asentadas con anterioridad a la conquista o colonización, y que se encuentran dentro de las actuales fronteras del estado; poseen historia, organización, idioma o dialecto y otras

características culturales, con la cual se identifican sus miembros reconociéndose como pertenecientes a la misma unidad socio-cultural; mantienen un vínculo territorial en función de la administración de su hábitat y de sus instituciones sociales, económicas, políticas y culturales”¹⁰⁵.

Tal y como se puede observar, esta definición mantiene grandes similitudes con la anterior incluida en la *Ley de los pueblos indígenas del Oriente, el Chaco y la Amazonía*. El único aspecto en el que se diferencian es que en esta última se añade una componente cultural que en la anterior no aparece. Es una cuestión significativa que completa la definición de “pueblo indígena”.

La otra definición es la que recientemente ha quedado recogida en la *Ley Marco de Autonomías y Descentralización* de Bolivia y la cual se refiere tanto a “pueblos indígenas” – o naciones- como a “campesinos”, lo cual diluye a ambos sujetos de derecho en una misma categoría, difuminando su naturaleza jurídica (retomaremos esta idea en el capítulo 8):

“Son pueblos y naciones con anterioridad a la invasión o colonización, constituyen una unidad sociopolítica, históricamente desarrollada, con organización, cultura, instituciones, derecho, ritualidad, religión, idioma y otras características comunes e integradas (...)” (art. 6, III)¹⁰⁶.

La existencia precolonial de las “naciones” y “pueblos indígena originario campesinos” aparece además en el artículo 2 y en el artículo 30.I de la NCPE.

Otra de las definiciones referidas a “pueblo indígena”, del todo similar a la que mencionaba anteriormente es la que aparece en el *Proyecto de Ley Indígena*, referente a los pueblos indígenas del Oriente, El Chaco y la Amazonía, y por la que se otorga la condición de pueblos indígenas a “*las agrupaciones humanas de Bolivia, que descenden de poblaciones que habitaron el país desde la época precolombina, y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan de manera íntegra o parcial, su cultura, lengua y organización social*” (artículo 1).

El *Anteproyecto de Ley en cambio de los Pueblos Indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía*, presentado por CIDOB en el año 1992 al entonces presidente de la República, propone que se considera “Pueblo Indígena” a:

“las agrupaciones humanas que poseen las siguientes características: 1) Historia, cultura, idioma propio; 2) Cuentan con una organización social específica, con la cual se identifican reconociéndose sus miembros como pertenecientes al mismo ámbito

¹⁰⁵ http://www.legislacionmunicipal.fam.bo/Archivo/Docs/Leyes/Ley_1551.pdf

¹⁰⁶ <http://www.gobernabilidad.org.bo/component/content/article/2-noticias/362-ley-marco-de-autonomias-y-descentralizacion-de-bolivia>

cultural; 3) Poseen sus propias formas de organización política y ejercen su poder de decisión autónomo; 4) Poseen una interrelación territorial históricamente definida, en función del control de su hábitat, del repertorio cultural y de su carácter de vida comunitario” (Molina R., y Vadillo, 2007: 12).

Esta serie de definiciones coinciden en varios puntos: la descendencia prehispánica, la vinculación territorial sobre la que se legitima su identidad indígena y las formas de vida así como de organización social. Pero un aspecto que entraña especial interés es que todas ellas sirvieron al movimiento indígena de tierras bajas de Bolivia para articularse como tal y proferir las reivindicaciones posteriores frente al Estado.

En un estudio sobre grupos indígenas en Bolivia debemos ser prudentes y reconocer la ambigüedad que se esconde tras las diversas acepciones del término. Éste puede variar en función de las disposiciones legislativas que se consideren y las fuentes consultadas.

Y es que existe un gran elenco de definiciones. Todas ellas legítimas y en ocasiones contradictorias entre sí. Esto se debe en buena medida a que nos enfrentamos a un tema polémico desde el punto de vista político, al estar vinculado con los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Principalmente porque en este paquete de derechos, sobre los que recae el peso son aquellos referidos a la tierra y el territorio. Y digo esto porque es en los territorios donde se encuentran las grandes riquezas del país en cuanto a recursos naturales se refiere. Estos recursos, tan codiciados en un país que alberga tan alta tasa de biodiversidad, han sido apropiados históricamente por la población blanco-mestiza. Los derechos sobre la propiedad de la tierra son aquellos que presentan la amenaza más temida por parte de los grupos no-indígenas al poseer estos fuertes intereses de carácter económico. Esto explica que en la gran mayoría de los países de América Latina, los gobiernos reconozcan la existencia de las poblaciones étnicas, no así la redistribución de los recursos que cuentan con un valor añadido (Castree, 2004: 160).

Desde el punto de vista jurídico, los pueblos indígenas de Bolivia obtuvieron hace algún tiempo el derecho al uso y manejo de los recursos naturales que se encuentran en sus territorios¹⁰⁷. Sin embargo, como ha quedado ya comprobado en el presente

¹⁰⁷ El artículo 32. II de la *Ley Forestal*, aprobada el 12 de julio de 1996, señala que “*se garantiza a los pueblos indígenas la exclusividad en el aprovechamiento forestal en las tierras comunitarias de origen*”. Y según el artículo 32. III “*No requiere autorización previa el derecho al uso tradicional y doméstico, con fines de subsistencia, de los recursos forestales por parte de las poblaciones rurales en las áreas que ocupan, así como de los pueblos indígenas dentro de sus tierras forestales comunitarias de origen. Asimismo se garantiza a los propietarios este derecho dentro de su propiedad para fines no comerciales. La reglamentación determinará los recursos de protección contra el abuso de este derecho*” (http://www.gobernacionlapaz.gob.bo/archivos/Normas/RG_Ley_1700.pdf)

artículo, la ambigüedad también impregna el alcance y significado de la noción de “territorio”, que en la legislación boliviana no reconoce los recursos del subsuelo así como los aspectos simbólicos y culturales de tal categoría, lo cual entraña enorme valor para las sociedades indígenas.

2. 4. 6. 1. Criterios de etnicidad en Bolivia: la *autoidentificación*.

Volviendo una vez más al tema de la etnicidad y de las identidades étnicas, esta vez centrando nuestra atención en Bolivia, destaca la relevancia de la “certificación étnica”, categoría jurídica incluida en una de las cláusulas de la *Ley INRA* por la que los indígenas reclaman y defienden los territorios como derecho colectivo en base a su pertenencia étnica. Gracias a este documento acreditativo de la condición étnica, los indígenas pueden demostrar su etnicidad y reclamar como consecuencia aquella superficie territorial que estimen oportuna pero que ante todo consideren necesaria. Posteriormente y previa elaboración de un *Estudio de las Identificaciones de las Necesidades Espaciales* (EINES), se les concede a título colectivo, un número determinado de hectáreas. El *Ministerio de Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios* (MAIPO) certifica la identidad de las comunidades que demandan territorios indígenas, es decir, su “*reconversión a TCO*” lo cual supone una “*certificación institucional*” (Molina R. y Vadillo, 2007: 11). Esto nos lleva a reflexionar sobre lo ficticio y artificioso de la identidad que en este caso viene concedida desde las esferas gubernamentales. En Bolivia se ha medido incluso la etnicidad. Pero, ¿cuánto de indígena es Bolivia?.

En relación a esto considero oportuno referirme al asunto de los marcadores étnicos utilizados en Bolivia a la hora de determinar la pertenencia étnica de cualquier miembro. Uno de los expertos en cuestiones étnicas de los mal llamados países andinos (Bolivia posee un 60% de su territorio nacional en la región amazónica) -Xavier Albó- señala que en los primeros años del movimiento indígena surgido en el Oriente boliviano “*el referente inmediato y natural de todos ellos para identificarse a sí mismos era su condición de pueblos indígenas*” (2002: 208). Pero no es baladí recordar y tener presente que las identidades colectivas étnicas de Bolivia se reconfiguran en función de los requerimientos que les exija el contexto en el que en cada momento están inmersos. Algunos trabajos dedicados al estudio de la etnicidad en este país sudamericano, han creado un indicador al que han denominado “índice combinado de etnicidad” o “grado de etnicidad” de acuerdo a tres criterios bien definidos: hablar la propia lengua originaria; nacer en una comunidad rural (o equivalente) y sentirse miembro del pueblo correspondiente (Albó y Quispe V., 2004: 61) (véase **cuadro 2. 1**). Desde mi opinión surge una objeción principal frente a los

criterios utilizados que tiene que ver con las limitaciones que supone considerar exclusivamente tales requisitos. Y es que en Bolivia existe un importante número de indígenas urbanos, es decir, los nacidos en área no rurales o trasladados a éstas. En el caso del pueblo mojeño en el que existe un alto índice de movilidad, muchas familias cambian a menudo su residencia para asentarse en la capital del municipio: San Ignacio de Mojos, con vistas a prosperar y lograr una mejora de sus condiciones de vida. Pero continúan perteneciendo a dicho pueblo indígena y reconociéndose como tales.

Cuadro 2. 1. Índice combinado de etnicidad.

| Aprendió a hablar en lengua originaria | Nació en comunidad rural o equivalente | Se siente miembro de un pueblo originario | Grado de etnicidad resultante |
|--|--|---|-------------------------------|
| Sí | Sí | Sí | 4. alto |
| Sí | No | Sí | 3. medio |
| No | Sí | Sí | |
| No | | Sí | 2. discursivo |
| Sí | Sí | No | 1. velado |
| Sí | | No | |
| No | Sí | No | |
| No | No | No | 0. No indígena |

Fuente: Albó y Quispe V., 2004: 62.

Sí que comparto absolutamente el criterio principal que utiliza Albó y Quispe en este estudio: el de la autoidentificación por el hecho de reconocerse como miembros de determinado pueblo indígena (2004: 61). Y veremos de qué manera es el criterio que prima en la práctica mayoría de análisis sobre la clasificación de la identidad étnica. Es además un criterio reconocido por el Convenio 169. Pero la autoidentificación no deja de ser una categoría construida, un término vago y cargado de ambigüedad que como bien señalan Paul Cloke y Johnston “*exclusivamente existe como una abstracción*” que permite a los individuos adscribirse a un grupo y consecuentemente rechazar su pertenencia a otro distinto (2005: 1).

Ante esto, algunos trabajos se han mostrado impasibles llevando a cabo un feroz cuestionamiento (Pinto G., Terceros, Landívar, 2010). Estos autores critican la pregunta “capciosa” incluida en el censo 2001 acerca de la autoidentificación étnica en la que se consulta la pertenencia a los siguientes pueblos indígenas: Quechua, Aymara, Guaraní, Chiquitano, Mojeño, Otro nativo o Ninguno. Estos autores luego de analizar los resultados del censo, se percataron de que en muchos casos se dio que personas que no pertenecían a ningún pueblo *originario* no respondieron nada. Resultó entonces

que no se consideraron como “no indígenas” y fueron contabilizados manera automática como pertenecientes a algún pueblo indígena al dejar en blanco la casilla de “ninguno”. De ahí que para estos, el censo del INE de Bolivia del 2001 apunte a más de un 60% de población indígena¹⁰⁸. Sería la ocasión perfecta para que desde el gobierno de Evo Morales, basándose en los resultados de dicha estadística, se defendiera la imagen de país de mayoritariamente *originario* que supondría el espaldarazo definitivo al movimiento político liderado por los indígenas. No resulta extraño entonces que Pinto, Terceros y Landívar insinúen que Bolivia es más bien un “experimento indigenista” puesto en marcha por diferentes ONGs europeas, fundaciones y asociaciones religiosas, que incluso llegaron a participar en el diseño del cuestionario del propio censo (*ibíd.*, 26).

Desde los organismos de gobierno, otras herramientas estadísticas han sido utilizadas en el proceso de identificación de población indígena y no indígena como sucede con los censos y las principales encuestas del país (MECOVI y ENDSA) que han partido de 3 indicadores como son:

“i) la declaración de la población de quince y más años de pertenencia o no a uno de los pueblos indígenas; ii) el idioma que las personas declaran hablar, presente en la mayor parte de los Censos; iii) la declaración de las personas de 4 y más años del idioma con el que aprendieron a hablar” (Molina R. y Vadillo, 2007: 16).

Si comparamos con los criterios propuestos por Quispe y Albó descubrimos que ambos comparten una casi total coincidencia aunque difieren en algunos aspectos como el relativo a haber nacido en una comunidad rural (mencionaba que es posible sentirse indígena pese a haber nacido en núcleos urbanos: indígenas urbanos como resultado de procesos de etnogénesis en las ciudades principales de Bolivia).

Otros estudios también han apuntado al uso de la lengua precolonial como marcador de la identidad indígena (Andolina, Radcliffe, y Laurie, 2005) aunque a diferencia del estudio de Albó y Quispe, confieren un carácter singular a los indicadores étnicos reconociendo que a parte del idioma indígena, la territorialidad se constituye como un indicador clave, convergiendo ambas variables en una misma escala (2004: 137). Esto contribuye a sostener una vez más la importancia del vínculo entre territorio e identidad que manejan los pueblos indígenas de la Amazonía. Y justifica que el eje de coordenadas teóricas de este trabajo oscile entre ambas categorías de análisis.

Mireya Maritza Peña Guzmán defiende en uno de sus artículos (1998) el significado de la autoidentificación de los pueblos indígenas desde la propia percepción

¹⁰⁸ Otros trabajos, en base a un estudio del PNUD del año 2003, consideran a Bolivia como país mestizo (Toranzo Roca, 2004: 63; Mansilla y Zegada, 1996: 50).

de estos y no desde una perspectiva etnocéntrica. Peña Guzmán reitera los requisitos fundamentales a los que hacían mención Andolina, Radcliffe y Laurie, para que una comunidad (en el caso de poblaciones amazónicas) se considere indígena: la autoidentificación por un lado, la conciencia de su identidad indígena y la vinculación al territorio y añade que “*el derecho a definir qué y quién es indígena debe reconocerse a los mismos pueblos indígenas*” (1998: 134). Ambos requisitos los cumpliría el pueblo indígena mojeño-ignaciano.

El pueblo indígena mojeño ha canalizado su demanda a través de la indianidad, basando su etnicidad sobre un territorio. Han generado un discurso a partir de la identidad étnica en base al territorio en el que han habitado desde el periodo prehispánico. De la misma manera Bruce Albert expresa que “*inscribían su identidad colectiva en espacios territoriales abiertos cuya ocupación se legitimaba en referencia a los tiempos de los orígenes y a los lugares de una geográfica mítica*” (2004: 228). Como venimos reiterando, la identidad se ha visto sometida a un proceso de construcción a través de cierta experiencia histórica de larga duración que ha configurado la memoria colectiva del pueblo mojeño de la Amazonía boliviana.

En el proceso de construcción de la identidad mojeña, se han llevado a cabo diversas estrategias de resistencia. Se ha interpelado al estado boliviano en favor de la creación de modelos de reconocimiento de derechos indígenas. Se ha superado, como consecuencia, la invisibilización de las poblaciones indígenas al emerger las “formaciones nacionales de alteridad” (Briones, 2005) frente a la identidad nacional. La identidad del pueblo indígena mojeño se encuadra en un contexto regional, más que nacional, estando marcado el proceso de diferenciación frente a los *carayanas* del Beni. A raíz de ello se han generado nuevas geografías imaginadas.

El asunto de la autoidentificación viene regularizado en el *Convenio 169 de la OIT*, aprobado el 27 de junio de 1989 y ratificado por Bolivia el 11 de julio de 1991. Con todo, dicho convenio proporciona la definición más extendida y acertada sobre “Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes”. En ésta a la que los grupos étnicos de Bolivia han recurrido para efectuar sus demandas. En ella se han inspirado para interpelar al Estado en nombre de su identidad indígena.

Esta idea es compartida por otros trabajos como es el de Hernán Ávila quien al comienzo de su obra señala que debido a las “*dificultades para encontrar una fórmula consensuada que determine la condición indígena o étnica en Bolivia (...) entenderemos como indígena la definición propuesta por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo*” (2009: 23). Según dicho convenio se entiende por pueblos indígenas aquellos que:

“por el hecho de descender de poblaciones que habitan en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas” (artículo I)¹⁰⁹.

Otro documento al que ya me he referido en este capítulo es la *Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas* aprobada por *Naciones Unidas*. En ésta se incluye un artículo que será del mismo modo trascendental para todos aquellos pueblos que han decidido identificarse como indígenas. Se considera que *“los pueblos y las personas indígenas tienen el derecho a pertenecer a una comunidad o nación indígena, de conformidad con las tradiciones y costumbre de la comunidad o nación que se trate”* (artículo 9). Andolina, Radcliffe y Laurie explican hasta qué punto los estados se han aprovechado y han adoptado a su parecer las disposiciones legales provenientes de organismos internacionales (2005: 137).

Así esta definición se aproxima bastante a las que hacía mención anteriormente. Con todo, en el caso que interesa a esta investigación, el pueblo indígena mojeño-ignaciano cumple todos los requisitos necesarios para ser definido como pueblo indígena frente a los organismos internacionales.

Adelanto una idea en relación a la cuestión de la autoidentificación que tiene mucho que ver en el momento actual con el tema de las autonomías indígenas. Según la *Nueva Constitución Política del Estado*, reformada y aprobada en febrero del 2009 y, en el marco de la organización político-administrativa, se reconocen 4 niveles de autonomía: el regional, provincial, municipal e indígena. Esta última supone para los pueblos reconocidos como indígenas el derecho a adoptar una serie de competencias sobre su propio desarrollo social, cultural, económico, de acuerdo con su identidad y visión, así como el derecho a gestionar su propio territorio, la propiedad de los recursos naturales, etcétera (artículo 290)¹¹⁰. Las autonomías indígenas constituyen una figura constitucional que reglamenta la organización de los territorios habitados por comunidades indígenas. Cuentan con la posibilidad de convertirse en unidades territoriales en las que se establezcan gobiernos locales autónomos, con funciones específicas y recursos propios. Podrían manejarse de manera autónoma al municipio y al departamento y su estructura quedaría subordinada a la realidad cultural de cada comunidad local. Por estos motivos muchos pueblos reclaman el derecho a ser considerados indígenas para así contar con la posibilidad de realizar reivindicaciones

¹⁰⁹ <http://www.ilo.org/indigenous/Conventions/no169/lang-es/index.htm>

¹¹⁰ <http://bolivia.unfpa.org/content/constituci%C3%B3n-pol%C3%ADtica-del-estado>

territoriales así como su derecho a la libre determinación. Por tal motivo es que reclaman el reconocimiento colectivo como pueblos. El derecho a la autodeterminación les confiere la posibilidad de gestionar y administrar su propio desarrollo político, económico y sociocultural, regular sus propios procesos, según su propio sistema de valores y organización social, el derecho a participar del uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales existentes en sus territorios, de la gestión de estos, etcétera. Son cuestiones que por ahora quedan simplemente apuntadas pero que serán recuperadas para dar cierre al presente trabajo haciendo especial hincapié en las implicaciones que conlleva el tema autonómico frente a la gestión territorial indígena.

Concluyo este punto lanzando una pregunta, y es que si la etnicidad puede medirse, ¿cuánto de indígena es Bolivia?.

2. 4. 7. ¿Indio, salvaje, ciudadano, campesino u originario? La complejidad de la construcción conceptual de la categoría “indígena”.

“Tantos años llamando al indígena salvaje no lo han convertido en uno”,
LUTHER STANDING BEAR, sioux oglala.

Ante la pregunta de *¿quién es un indio?*¹¹¹, podríamos encontrar una multiplicidad de respuestas que en unos casos serían equivalentes pero en otros puede que contradictorias sin querer siquiera llegar a serlo. Ya sabemos que no existe en Bolivia unicidad en la definición aplicada a la categoría de pueblo indígena como tal. Esto les lleva a Ramiro Molina y Alcides Vadillo a declarar la ausencia conceptual y metodológica que gira en torno a esta cuestión (2007: 15).

En cada periodo se pueden establecer diversas categorías analíticas que demuestran la heterogeneidad que ha formado parte de los procesos territoriales acaecidos en el país sudamericano. A cada etapa le corresponden ciertas identidades configuradas en base a una dinámica (histórica) especular que da lugar a una serie de resignificaciones de tales categorías discursivas. Según los distintos periodos de análisis podemos toparnos con diferentes concepciones que han ido adoptando los grupos étnicos de Bolivia y que les han sido asignadas de mano de investigaciones sociales. Existe, por tanto, una *“permanente recreación que, según las épocas, mostrará nuevos rostros de una misma problemática”* (Molina R. y Vadillo, 2007: 9). De ahí que dependiendo del periodo que se esté estudiando se les nomine y considere a estos actores sociales como indios, salvajes, comunidades campesinas, pueblos originarios,

¹¹¹ Parafraseando a Fernando Mires que recurre a este título con el que abre su obra dedicada al análisis del discurso de la indianidad (1991).

pueblos autóctonos, tribales, pueblos indígenas y un largo etcétera. La categorización más habitual sería ésta última por el hecho de ser la reconocida en el derecho internacional y como consecuencia la más efectiva en el plano del reconocimiento de las demandas.

Isabella Combès, antropóloga boliviana del *Instituto Francés de Estudios Andinos*, de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), contribuye a la presente investigación con un artículo que lleva por título *Cuando el nombre no hace al indio* (2006). En éste se demuestra la conveniencia de los grupos indígenas, originarios, nativos, etcétera, a la hora de asumir las diversas definiciones que les han sido otorgadas por historiadores, antropólogos, sociólogos, lingüistas, etcétera, en el momento de efectuar sus demandas en cada contexto. De igual modo señala de qué manera dicha diversidad etimológica, deriva en implicaciones para los investigadores sociales que se dedican al estudio con y para indígenas.

En el mismo nivel pero de distinta manera son los propios indígenas -si bien influenciados por las categorías discursivas de los científicos que reflexionan y construyen el discurso de estos pueblos *originarios*- quienes generan a partir de la adaptación de una tendencia discursiva dominante y hegemónica, sus propios argumentos (Albert, 2004: 230-231). El científico social Guy Rozat Dupeyron, quien ha dedicado varias de sus investigaciones al análisis sobre la construcción de los imaginarios indígenas, dedicó uno de sus artículos a este fenómeno. Publicó *Antropólogos, ¿qué han hecho del indio?* (2002), en el que analiza cómo desde el siglo XVI se ha ido construyendo una imagen del indio irreal, imágenes de las antiguas sociedades americanas que han trascendido hasta la actualidad y que calaron muy hondo en el imaginario nacional cotidiano. Comenta las dificultades que a día de hoy deben los indígenas enfrentan debido a la identificarse que les asocia con tales imágenes, lo cual le conduce a la conclusión que la construcción actual de la imagen del indio del pasado tiene mucho peso y determina la figura del indio del presente (*ibíd.*).

El término de *indios* fue asignado por los conquistadores europeos quienes lo impusieron a los habitantes de lo que creían ser las Indias. Pese a ser un error se ha mantenido. Esto es descrito por Fernando Mires quien explica que la denominación de *indios* se constituyó como un “concepto homogeneizante” surgido por oposición a quien los había descubierto (1991: 11). Mires defiende por tanto, que el indio debe ser considerado como resultado de la imaginación precolombina que le concedió unas características y atributos determinados (*ibíd.*, 57). También Forbes hace mención a la imagen de los indígenas como “salvajes”, “naturales”, como seres no racionales, primitivos y no civilizados, temidos y peligrosos, la cual trascendió y fue difundida por el pensamiento europeo moderno (2001: 106-107). Y Wolf distingue entre los

“naturales de la tierra” o “indios” y la “gente de razón” representada en los españoles (1987: 165).

En línea con dicha continuidad, durante la república, los criollos enarbolaban la bandera de la libertad frente al aparato represor, corrupto y retrógrado representado por el gobierno español, utilizando la imagen de los indios como los verdaderos, auténticos y *originarios* representantes de la América recién independizada, a quienes les sería asignada la etiqueta *rousseauiana* del *buen salvaje* haciendo referencia a su estado natural (Mires, 1991: 165-167).

Debido en buena medida a la influencia generada por los escritos de uno de los pensadores más influyentes de las primeras décadas del siglo XX en América Latina - Juan Carlos Mariátegui- la categoría de “indio” se impuso desde una perspectiva marxista en su acepción de “*pobre y explotado*” lo cual venía a referirse a “*su condición social y económica, como clase*” por encima de sus “*identidades culturales*” (Albó, 2008: 237). El logro de Mariátegui fue aunar y sintetizar de alguna manera la cuestión indígena con la teoría marxista o como mejor lo expresa Mires: “*introducir la cuestión indígena en el contexto de una teoría de la revolución (la marxista-leninista), cuyos fundamentos habían sido contruidos haciendo omisión de las luchas étnicas*” (1991: 175). Logró además la síntesis entre el indigenismo que buscaba integrar a los indios en la nación (indigenismo integracionista); el indianismo que recuperaba el origen indígena para refundar la nación y la teoría socialista que pretendía hacer la revolución, por lo que se podría decir que consiguió aunar lo “*clasista, lo nacional y lo étnico*” (*ibíd.*, 181-182).

Tras los acontecimientos desencadenados al hilo de la Revolución Nacional del año 52, la categoría étnica de *indígena* sería suplantada por otra de carácter socio-económico como es la de *campesino* (Andolina, Radcliffe y Laurie, 2005: 139) primando la relación hombre-tierra por encima de la relación hombre-hábitat (Libermann y Godínez, 1992: 15). La categoría de campesino –caracterizado éste por la posesión de una pequeña superficie de tierra para el sustento del grupo familiar- es puesta en relación con el discurso dominante de aquella época, un discurso que giraba en torno a las clases sociales (Mamani, 2005: 14).

Contemporáneamente *La Ley de Reforma Agraria* del 53 calificaba a los indígenas como selvícolas¹¹² que habitaban en comunidades de acuerdo a su cultura particular (artículo 129) (Mihotek K., 1996: 35; Guzmán, Flores y Paz: 2002: 7; Albó,

¹¹² Esta acepción marcadamente peyorativa es lamentablemente utilizada aún a día de hoy por las generaciones más mayores de la población blanca en Mojos. Más que selvícolas se refieren a los indígenas como salvajes, reproduciendo el clásico discurso cargado de connotaciones. Otras acepciones incluidas en documentos jurídicos de Bolivia son “grupos étnicos marginales” en la Ley de Colonización de 1996; “indios selvícolas” en el Código Penal de 1973 o “tribus selvícolas” en la Ley Forestal de 1974 (Guzmán, Flores y Paz: 2002: 7).

2008: 36). Lo peor del uso de este adjetivo no es la descalificación a la que se somete a las poblaciones indígenas, sino las implicaciones que ello conlleva. Y es que de esta manera el Estado se atribuía la plena potestad de tutelar a estos grupos como si de menores de edad se tratara. A consecuencia de ello les eran negados todos los derechos que la ciudadanía concedía a los miembros del Estado-nación. Las poblaciones indígenas se encontraban sumidas en una total indefensión frente a los abusos de grandes empresas, colonos y de las élites gobernantes.

Otro aspecto importante que destaca Libermann y Godínez es que hasta la llegada de la democracia en Bolivia lo indígena en el país aparece identificado con lo andino, excluyendo a las poblaciones del Oriente y el Chaco (1992: 16). Quizá sea éste el motivo por el que en más de una ocasión se ha pretendido cierta identificación entre el indigenismo (concebido éste como movimiento social) con las poblaciones amazónicas y por el contrario, el indigenismo como proyecto de Estado con los pueblos andinos, con los ancestros de las antiguas sociedades prehispánicas, lo cual no es más que un error (Letamendia, 2011: 138-139).

Pablo Mamani realiza un brillante repaso a la construcción conceptual tanto de la categoría de campesino como de indígena y, en consecuencia, a las estrategias de estas poblaciones a la hora de clasificarse en categorías identitarias (2005). Este autor deja claro el fenómeno de la reapropiación y consecuente readecuación que estos grupos han llevado a cabo en función de la estructura sociopolítica dominante en cada momento. A parte de esto, un aspecto de enorme interés que pone sobre la mesa Mamani es el reconocimiento del origen de dichas categorías, todas ellas construidas por las esferas del poder, por los Estados, por los intelectuales -debido a la necesidad que surge en un determinado momento por clasificar y definir al *otro* una vez que entra a formar parte de la misma estructura de poder controlada y gobernada por aquel- (*ibíd.*, 13-14).

Lo mismo ha ocurrido con el *neoindigenismo*, que con su discurso enunciado principalmente por científicos sociales, recupera en cierto modo la imagen que en la república se hizo del indio como el anti-europeo¹¹³.

A tenor de todo esto Xavier Albó señala que tras todo este “juego de autoidentificaciones” a día de hoy el término más comúnmente usado es el de originarios o indígenas, los cuales se utilizan indistintamente aunque prevalece por encima de todo la identificación con el pueblo al que se pertenece (2008: 238-239) (mojeño-ignaciano en este caso). No hay que olvidar que las categorías identitarias son utilizadas en función del contexto sociopolítico, cuestión a tener muy presente. En este

¹¹³ En relación a la aparición de esta corriente cabe señalar dos episodios. El primero es la *Declaración de Barbados* en el año 1971, la cual fue suscrita exclusivamente por antropólogos y etnólogos. Para la segunda, del año 1977, se unieron algunos representantes de organizaciones indígenas (Mires, 1991: 201-205).

sentido es muy ilustrativo cuando al comienzo de la *Declaración General del II Congreso Indígena Interamericano de Recursos Naturales y Medio Ambiente*, reunido en San Ignacio de Mojos el 7 de diciembre de 1991, los grupos étnicos manifiestan que “durante los debates, hemos decidido denominarnos como pueblos o Naciones Originarias o indígenas de América o Abya Yala (tomado de la lengua kuna de Panamá) que significa territorio ilimitado o continental” (Liebermann y Godínez, 1992: 47). A parte de lo llamativo que pueda parecernos el hecho de optar por una denominación identitaria u otra como si se tratase de una condición que pueda ser intercambiada y elegida cada día, también llama la atención el carácter transnacional del Congreso al hacer referencia a la *Abya Yala*. Mamani advierte que pese a que la construcción de la categoría de indígena haya sido una construcción procedente de otros, los propios indígenas se han re-apropiado de ella y la han hecho suya como estrategia sociopolítica (2005).

En Mojos, no por casualidad se comenzó a adoptar la categoría de indígena a partir de la segunda mitad de la década de los 80 y en los años 90 del siglo pasado- en pleno auge del proceso de explotación forestal del bosque de Chimanes- por lo que es un fenómeno bastante reciente (Molina y Soletto, 2002: 72)¹¹⁴. A partir de ese momento, señalan los autores citados, y en el contexto del proceso político que estaba viviendo el municipio de San Ignacio, la identidad adquiere un significado hasta entonces desconocido entre los vecinos de las comunidades hasta el punto de que si de un tiempo a esta parte lo indígena se vinculaba en Mojos con los aspectos más folclóricos, ahora por el contrario ser indígena se traduce en ser un actor social con pleno reconocimiento a nivel local y municipal (*ibíd.*, 72-73 y 94). La identificación colectiva permite reforzar la identidad étnica que es compartida por el conjunto de comunidades indígenas ignacianas lo cual conlleva inextricablemente a consolidar el sentimiento de pertenencia al territorio que reivindican y el cual defienden haber habitado ancestralmente. Sin embargo, de forma paralela las antiguas reducciones mojeñas del periodo misional (ignacianas, trinitarias, javerianas, loretananas) van adquiriendo un carácter preponderante por encima de la propia identidad mojeña llegando al punto que los habitantes de Mojos se consideran en primer lugar ignacianos o trinitarios y cuando la situación lo requiere, mojeños¹¹⁵. Molina analiza la apropiación de la

¹¹⁴ Algunos investigadores señalan al boom del caucho como el motor que propició la adopción de una conciencia identitaria en el departamento del Beni, momento éste a partir del que la población *beniana* asumió una conciencia identitaria en base a la componente geográfica (Molina *et al.*, 2008: 14).

¹¹⁵ Se discute en términos de identidad de dónde surge el término “mojo”, si es propio, si corresponde a una autoidentificación. Pero es un término de origen colonial. Hasta antes de las luchas por el territorio, los mojeños se identificaban no como mojeños sino como javerianos, trinitarios, ignacianos, y probablemente según sus parcialidades étnicas antiguas. Los que hablan de mojos son los misioneros (a ello se refieren las fuentes historiográficas). Ante esta

categoría *mojeña* y expone en qué medida algunos actores urbanos han pretendido que dicho concepto se asuma como condición de la identidad del Beni superponiendo la base territorial a la étnica pese a que para los indígenas mojeños prime el enfoque étnico y en particular las identidades específicas (ignaciano, trinitario, etcétera) que son las usadas para “*marcar sus diferencias étnicas*” (2008: 179-180). Un aspecto no menos que sorprendente en todo esto, al que apunta el trabajo de Molina y Soletto, es que incluso los estancieros, a parte de los comunarios, han asumido la identidad ignaciana (2002: 72) por el hecho de pertenecer al municipio de San Ignacio de Mojos. Tal categoría étnica conduce entonces a significados diferentes en función del grupo social que se adscriba a ella. Esto nos remite una vez más por un lado al carácter dual y reversible de la identidad, por el otro a considerar a ésta como estrategia de acción. Sin restarle el interés que se merece, nuestro estudio considera a los ignacianos como los habitantes de las antiguas reducciones creadas por los jesuitas a partir del siglo XVII en Mojos cierta historicidad con algunas de las actuales comunidades indígenas ignacianas.

2. 4. 7. 1. Préstamos discursivos en el proceso de construcción de la identidad.

Algunas pistas se han anticipado acerca de la manera en que los pueblos indígenas bolivianos han generado su propio repertorio discursivo a partir del elemento étnico como sustentador del discurso identitario y a partir de préstamos externos. Cabe reiterar asimismo que han fundamentado además la ocupación histórica del territorio sobre la identidad indígena. De tal manera que las comunidades indígenas se ven inmersas en un proceso de auto-objetivación. La indianidad les confiere el ámbito en el que definirse con respecto a una territorialidad concreta.

Los grupos indígenas han desarrollado estrategias de resistencia adaptándose y adoptando las reglas del juego establecidas principalmente por los organismos internacionales. Como consecuencia van generando tanto sus propias estrategias identitarias como su propia retórica reivindicativa. En palabras de Albert, desde el movimiento indígena “*se entablan, por este medio, procesos de reproducción que dependen tanto de los repertorios de legitimación impuestos por los estados*

idea Zulema Lehm cree que sería más lógico pensar que es a partir de las luchas por el territorio y por el tema de la representación política, en la década de los 80 y 90, cuando aparece el uso del término y la autclasificación como mojeños para identificar a este conjunto de parcialidades que prácticamente ya no existen (entrevista). Los ignacianos tienen una identidad muy consolidada como tales. Se consideran antes ignacianos que mojeños (grupos de discusión en las comunidades mojeñas). Y es que la reciente creación de la provincia de Mojos ha tenido mucho peso en este proceso de identificación otorgando primacía a la antigua parcialidad frente a la identificación con la provincia.

desarrolladores y las organizaciones de solidaridad como de sus propios recursos político-simbólicos” (ibíd., 221). Las reflexiones que siguen a continuación proponen analizar esta dialéctica de recomposición identitaria y territorial.

En ocasiones, los discursos del movimiento indígena, en donde confluyen la reformulación de una parte del discurso hegemónico (del que se apropian para adaptarlo a sus propios intereses) con el pensamiento *tradicional* de sus pueblos de origen, da lugar a un discurso que cae en contradicciones, cuestionamientos o queda a veces obsoleto. En el caso del movimiento indígena mojeño se hace evidente la influencia de los discursos provenientes de las ONGs que operan en la región. A causa de las acciones desplegadas por estas en base a talleres de capacitación política y empoderamiento, los comunarios de Mojos han incorporado un nuevo lenguaje que recoge nuevos elementos cualitativos con el que canalizar sus demandas. Pero esto no nos debe llevar a pensar que ha habido un desmantelamiento de sus posturas originales sino que aportes externos fueron dando forma a un nuevo mensaje mediante “*argumentos compatibles con su racionalidad y sus lógicas de ocupación territorial*” dando lugar a una “*combinación de factores de tipo moral, ecológico, cultural y religioso, cada uno de los cuales a su vez, son un componente de la cosmovisión y la lógica de percepción territorial*” (Ávila H., 2009: 52). Da la sensación que se asimilaron rápidamente los nuevos discursos de la cultura política que imperaba en otros países del continente americano. Estas acciones discursivas se conformaban de elementos provenientes de la multiculturalidad, los derechos colectivos, la participación, la consulta, el reconocimiento de los derechos territoriales, etcétera.

Otra incorporación importante a los discursos del movimiento indígena mojeño llegó de la mano del movimiento ecologista y ambientalista que reivindicaba los valores de la naturaleza, la protección de la biodiversidad y la conservación de los ecosistemas. Desde las corrientes occidentales se fijó la mirada en las poblaciones indígenas y se les otorgó el papel de *guardianes de la naturaleza* lo cual fue asumido por estos quienes comenzaron a reivindicar dicho rol atribuido desde fuera. Es por ese motivo que toda una serie de medidas encaminadas a la protección de la naturaleza pasaron a formar parte de las nuevas demandas, buscando de esta manera hacerse con el control de los recursos naturales que les habían sido expropiados. Se comenzó a hondear con más ahínco la bandera verde bajo el *slogan* de los pueblos indígenas como protectores del mundo natural.

Muy elocuentemente Ellison y Martínez Mauri expresan que:

“*La necesidad de las organizaciones indígenas de hacer frente a los nuevos retos que plantea la globalización las ha forzado a elaborar demandas que muchas veces se*

tiñen de un ecologismo que insiste, con acierto, en la conservación de los bosques tropicales y el respeto a la ‘Madre Tierra’, per obvia las prácticas y representaciones locales del medio ambiente” (2009: 8).

Los discursos que dan forma y ordenan las demandas de los movimientos indígenas son una forma de apropiación del discurso occidental por parte de estos. Aún así es una opción del todo legítima dado que los organismos internacionales son quienes más pueden hacer por salvaguardar la diversidad cultural de las comunidades indígenas. Por esta razón se ven obligados a adoptar un lenguaje político diferente. El derecho positivo prima, por consiguiente, sobre el derecho consuetudinario ante el que históricamente han respondido. Sin embargo, es una gran oportunidad de la que disponen a la hora de hacer efectivas sus demandas.

En más de una ocasión los movimientos indígenas han creado sus propias identidades a partir de construcciones históricas que con frecuencia poco tienen que ver con la lógica de su propia cosmovisión. Hay quienes tacharían de exagerado el afirmar que se ha producido cierta “invención” del indígena. Si bien, analizando ciertos aspectos de sus discursos no parecería una idea tan descabellada. Trabajos como el de Copeta en base a la definición del antropólogo Remotti, reconocen que “*la identidad es en realidad una invención*”, “*un recurso*”, “*es una exigencia irremediable*” y que “*hay que negociarla continuamente*” (1995, cit. en Copeta, 2009: 20). El trabajo de Rozat Dupeyron al que hacía referencia anteriormente, el cual sólo por su sugerente título ya nos invita a la reflexión, es un ejemplo claro de lo que venimos tratando.

En múltiples ocasiones, por medio de la reconstrucción y recuperación -tanto desde adentro como desde y hacia fuera- de la etimología de las poblaciones indígenas, se pretende obtener financiamientos de los organismos internacionales. Por dicho motivo, a menudo el elenco de nombres que se identifican con una colectividad, no implican necesariamente una realidad étnica objetiva. Así, en el proceso de definición de la propia identidad influyen tanto las imposiciones de categorías externas. Una cita que es enormemente ilustrativa al respecto es la de Isabella Combès, quien señala que “*si bien el nombre no hace al indio, contribuye no poco a su definición, y por ende a su actuar*” (2006: 23).

El *V Centenario* de la llegada de los españoles a América, provocó diversas reacciones. Por un lado tuvieron lugar celebraciones y festejos promovidos por España y respaldados por algunos gobiernos latinoamericanos. Por otro lado dicha celebración desencadenó un movimiento en contra de la misma y de lo que ésta significaba. En éste se insertaban diferentes colectivos y sectores sociales, intelectuales, estudiantiles, campesinos, obreros, pero sobre todo indígenas. Del 7 al 12 de octubre de 1989 tuvo

lugar en Bogotá, Colombia, el *Encuentro Latinoamericano de Organizaciones Campesino-Indígenas*, en donde se decidió lanzar la *Campaña de los 500 años de Resistencia Indígena y Popular* cuyo objetivo era “potenciar el nivel organizativo campesino-indígena local, nacional, regional y latinoamericano” (Caudillo, 2005: 57), teniendo el lema de los 500 años como “un elemento movilizador y articulador de propuestas y demandas de las bases” (Juncosa, 1992: 281-282).

Menos de un año después se celebró en Quito, Ecuador, del 17 al 21 de julio de 1990, el *Primer Encuentro Continental de Pueblos Indios*¹¹⁶. Gloria A. Caudillo lleva a cabo un análisis donde pretende buscar las “*constantes culturales que se expresan en el discurso, pero también la apropiación, el redimensionamiento y la elaboración conceptual hecha por los líderes indígenas quienes fungen como intermediarios culturales de sus pueblos*” (2005: 59). Analiza el discurso de líderes indígenas y de diversos pronunciamientos como el de Quito. Demuestra hasta qué punto es necesario para incentivar el pensamiento indígena, participar en la sociedad dominada por la ideología hegemónica aún reproduciendo ésta. Es decir, es necesario hacer uso de las mismas reglas del juego que llevan a la élite dominante a imponerse en la arena política. Así se crea un discurso indígena a partir del discurso occidental lo cual no está exento de peligro ya que estos discursos indios en ocasiones reflejan los valores de la sociedad dominante o al menos se hacen eco de ella.

Una vez más y volviendo a la problemática epistemológica, la noción de “pueblo”¹¹⁷ no es menos equívoca. Así en la *Declaración de Quito*¹¹⁸ los propios líderes indígenas reconocen que lo importante es lograr el autogobierno y si para ello es necesario que se les reconozca como “pueblos”, reivindican que así lo son. Es decir, lo importante no es el nombre de pueblo, población, nación, cultura, etcétera, la cuestión es que deben actuar conforme a las reglas que marca la comunidad internacional si lo que quieren es ser escuchados por ésta.

¹¹⁶ Caudillo Félix señala la importancia de que dicho encuentro se celebrase en Quito, ya que fue allí donde se produjo el levantamiento indígena de *Inti Raymi* que paralizó el país (2005).

¹¹⁷ Luis Villoro lo define como “*colectividad que: 1) participa de una unidad de cultura (lengua, creencias básicas comunes, ciertas instituciones sociales propias, formas de vida compartidas, etc.); 2) se reconoce a sí misma como una unidad, es decir, la mayoría de sus miembros aceptan su pertenencia a esa colectividad y son aceptados por ella; 3) comparte un proyecto común, es decir, manifiesta la voluntad de continuar como una unidad y de compartir un futuro colectivo, y 4) está relacionada con un territorio geográfico específico*” (2002: 84).

¹¹⁸ Es enormemente ilustrativo en este sentido los alegatos contenidos en esta declaración que manifiesta que “*cada pueblo indio tiene el derecho de adoptar la denominación que vaya de acuerdo a sus luchas políticas según convenga al mejor desarrollo del proyecto político en su país. En el interés por encontrar una denominación común, la mejor es quizás la de los pueblos indios, ya que la categoría de pueblo tiene un rango en los documentos del derecho internacional (ONU, OEA), donde se especifica que todos los pueblos tienen derecho a la autodeterminación*” (Juncosa, 1992: 241-242).

Gabriela Canedo, se inspira en estudios de Gilberto Giménez para tratar la cuestión de la “instrumentalización de la identidad” (2009: 40). Para esta antropóloga boliviana supone una “*estrategia identitaria que los grupos utilizan tal o cual rasgo para demandar territorio*” (ibíd.). De esta manera aprovechan la coyuntura que el Estado les brinda para autoidentificarse como indígenas y así tener la posibilidad de reclamar territorios. Los recursos identitarios consisten, por lo tanto, en una eficaz herramienta a la hora de reclamar derechos colectivos. En palabras de Canedo “*podría darse algún grado de instrumentalización de la identidad para reivindicar el territorio especialmente explicitado en los discursos del movimiento indígena que retoma concepciones de tipo esencialista –los ancestros, las raíces– para fundamentar dicha reivindicación*” (ibíd.).

Tanto en la *Declaración de Quito* como en la gran parte de pronunciamientos indígenas (*Congreso Nacional de Pueblos Indígenas, Conferencia Internacional y VI Asamblea General del Consejo Mundial de los Pueblos Indígenas, II Encuentro Continental, Campaña 500 años de Resistencia Indígena, Negra y Popular, Declaración sobre el V Centenario, Campaña Continental por el auto descubrimiento de Nuestra América*, etcétera), el *V Centenario* es reformulado, siendo convertido en un símbolo político de unidad y lucha y en un elemento aglutinador de la identidad indígena de América Latina. Se convierte en los “500 años de resistencia india”. A diferencia de lo que significó para España y para los gobiernos latinoamericanos, los cinco siglos del, para muchos, mal llamado “descubrimiento”, consistió para los movimientos indígenas de América Latina en un momento trascendental debido a que aprovecharon tal acontecimiento para otorgarle su significado particular. Por esta razón aparecen declaraciones (*Conferencia Internacional y VI Asamblea General del Consejo Mundial de los Pueblos Indígenas*) que reiteran la necesidad de “RECHAZAR la Conmemoración del Quinto Centenario” o “DECLARAR al año 1992: AÑO MUNDIAL DE LA DIGNIDAD Y DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS” (Juncosa, 1992: 142).

De esta manera se puede comprobar de qué forma los pueblos indígenas han procedido a la apropiación de la normativa nacional e internacional. Las estrategias que parten de la hibridación de las categorías discursivas tienen lugar en el contexto al que me he referido. Retomando a Bruce Albert, “*la cuestión indígena no ha podido constituirse en tanto que causa legítima en el seno de un espacio público nacional y después internacional sino a partir de una apropiación indígena de los sistemas de normas (legales) y de valores (simbólicos) de los protagonistas que dominan este espacio*”, por lo que dicha hibridación discursiva, propia del movimiento indígena proviene tanto “*de las fuentes de la retórica indigenista oficial (jurídica y*

administrativa) como de las del imaginario político (culturalista, comunitario y ecologista) de los diferentes componentes de la solidaridad no gubernamental” (2004: 226 - 227). Albert, quien hace especial hincapié en la influencia que han tenido grupos y asociaciones externas al indigenismo a la hora de generar un discurso identitario indígena (ibíd., 230), no ha sido el único en advertir la manera en la que los grupos indígenas adoptan discursos de fuera (Letamendia, 2011; Murray Li, 2008). Esta última autora rescata algunas de las investigaciones que han conectado los discursos ambientalistas con los movimientos indigenistas amazónicos (Fisher, 1996; Hecht y Cockburn, 1990). Este fenómeno, como no podía ser de otra manera, ha tenido también lugar en el movimiento indígena mojeño.

Como conclusión es conveniente añadir las palabras del propio Albert y constatar que *“las demandas indígenas se encuentran pues generalmente acompañadas de importaciones discursivas que muestran, esencialmente, una combinación de tres grandes registros de legitimación (identitaria, político-ética y ecológica)”* (2004: 235). Por lo que podemos concluir que los pueblos indígenas a la hora de elaborar la retórica indigenista se han apropiado de algunas herramientas discursivas ajenas a sus propios códigos y símbolos para efectuar una readaptación de la práctica discursiva, identidad étnica y ciudadanía indígena (Paz S., 1998: 126 – 128)¹¹⁹.

2. 4. 8. Emergencia de los pueblos indígenas como nuevos sujetos políticos.

Una serie de preocupaciones a nivel internacional fueron saltando a la palestra a fines del pasado siglo. Entre ellas se encontraban temas como la protección por el medio ambiente, el respeto a la diversidad cultural, el desarrollo sostenible, el reconocimiento a las minorías, la redefinición de la ciudadanía, la creación de nuevas identidades políticas y culturales, la emergencia de estados poliétnicos, la multi e interculturalidad, etcétera. Es en este contexto en el que aparece la “cuestión étnica” que se hace eco en los convenios y acuerdos nacionales e internacionales gracias a la emergencia del movimiento indígena.

¹¹⁹ Este fenómeno se ha podido constatar en el marco global de los movimientos indígenas y no exclusivamente en América Latina. Un ejemplo es el trabajo de Murray Li sobre la identidad indígena en Indonesia en el que muestra hasta qué punto en dicho país los discursos de las ONGs son importados a aquellos utilizados por las poblaciones indígenas, favoreciendo la articulación identitaria que entraña un gran interés estratégico y oportunista, fenómeno que le lleva a hablar a la autora de “invención de la tradición” en la que en numerosas ocasiones se han enmarcado, por dicho motivo, debates acerca de la identidad étnica (2008). En opinión de esta autora la autoidentificación de los grupos sociales como indígenas o tribales no es ni una cosa ni la otra, sino que más bien aparece ligada al contexto en el que se localiza al mismo tiempo que se alinea con su propia historia, prácticas culturales, representaciones y significados, a través de lo cual establecen nuevas formas de conexión frente al Estado (ibíd.).

La emergencia de las nacionalidades étnicas en todo el continente latinoamericano y en particular en Bolivia transformó la realidad política y social de la mayor parte de países, abriendo un nuevo debate político y cultural acerca de la multiculturalidad y los derechos colectivos y sobre la representación de las minorías políticas en los nuevos estados que comenzaban a reconocerse como plurinacionales¹²⁰.

La Constitución Política del Estado define a Bolivia como un Estado intercultural y plurinacional (artículo I). A pesar de que los campesinos e indígenas hayan logrado representación política, se hace imprescindible un mayor nivel de democracia y que las instituciones estatales se muestren capaces de articular una relación más equitativa en todos los niveles entre el Estado y la sociedad civil con el fin de acabar con las redes de las élites que históricamente han acaparado todos los ámbitos de la vida política, económica y social de Bolivia. La cada vez mayor presencia de los sectores sociales más humildes en el gobierno y la reactivación de la ciudadanía deben implicar necesariamente cambios estructurales en el sistema. Estos cambios se están produciendo pero no sin la aparición de conflictos entre los distintos sectores sociales. Esto es precisamente lo que ha ocurrido en el contexto de Mojos entre los grupos indígenas y los *carayanas*.

El movimiento indígena en Bolivia dirige sus esfuerzos a lanzar la propuesta de crear un nuevo Estado en el que el concepto de autonomía tendrá mucho que decir. Pese a que el aparato estatal se ha encaminado en efectuar reformas desde el punto de vista jurídico, esto no ha provocado como efecto directo la disminución de las reivindicaciones del movimiento indígena (Molina R. y Vadillo, 2007: 8).

El movimiento indígena mojeño ha sido concebido por algunos expertos bajo la lógica de los movimientos sociales del continente latinoamericano al cumplir algunos de los requisitos o condiciones propios de estos: sujetos y estructuración del movimiento, organización y discursos y acciones colectivas¹²¹ (Lazo, 2007: 113-116).

Todo este proceso de inclusión en el panorama político del país ha supuesto un importante empuje por parte de los movimientos sociales y en nuestro caso del movimiento indígena¹²². Como consecuencia, dichos grupos étnicos se han visto

¹²⁰ Kymlicka señala que “*algunos dirigentes indígenas afirman valorar más los derechos comunitarios que los derechos individuales*”, con lo que persiguen un reconocimiento como comunidad y reivindican por ello derechos colectivos (1996: 237).

¹²¹ En cuanto a los sujetos, estos son las comunidades indígenas de Mojos, organizadas en torno a los cabildos indigenales, subcentrales y centrales indígenas, manejando discursos en los que las reivindicaciones territoriales constituyen el eje de estos y llevando a cabo acciones colectivas como toda la serie de movilizaciones, principalmente las marchas (Lazo, 2007: 113-116).

¹²² El movimiento indígena se enmarca en el contexto de los *nuevos movimientos sociales* (Riechmann y Fernández Buey, 1994; Wieviorka, 2005; Vargas-Hernández, 2005). Estos autores coinciden en señalar que los movimientos indígenas buscan ante todo abrir espacios de diálogo y participación en la política nacional para canalizar de esta manera sus demandas frente al Estado. A parte de los derechos territoriales que, como ya comenté, constituyen el eje

sometidos a un proceso de construcción de nuevas identidades. La adopción de la ciudadanía, uno de los pilares de la modernidad, ha sido un referente de enorme importancia en la construcción identitaria del movimiento indígena. Esto ha contribuido notablemente a lograr una mayor visibilización de los movimientos indígenas en América Latina y en el caso que nos ocupa en Bolivia, lo cual supone un desafío para el neoliberalismo, el cual ha sido cuestionado, al verse los estados obligados a incorporar a estas nuevas identidades y adoptar determinados cambios en la ciudadanía.

El país boliviano es un claro ejemplo de ello. El hecho de que Evo Morales, un indígena aymara (aspecto éste sometido a fuertes críticas desde muchos frentes, incluso desde su propio partido) haya llegado al poder, nos hace ver el cuestionamiento al que ha sido sometida la estructura estatal de Bolivia.

Los movimientos indígenas se han caracterizado por conformar “*procesos de construcción nacional en la búsqueda de identidades colectivas*” (Vargas-Hernández, 2005: 456). Por ello los Estados plurales y multiétnicos como es el caso del boliviano, deben estar preparados y efectuar el reconocimiento de las diversas identidades étnicas que albergan (siendo una de ellas el pueblo indígena mojeño). Por ello supone para Bolivia un reto el hecho de reconstruir su propia identidad (pluri)nacional. La emergencia que ha supuesto en este país el movimiento indígena y la relevancia que ha cobrado el mismo, nos hacen pensar en la crisis del Estado monocultural y homogéneo y el consecuente intento de búsqueda y reconocimiento de una nación multicultural y plurinacional¹²³ además de modelos más incluyentes de ciudadanía en el que haya espacio para las diferencias étnico-culturales (Villoro, 1998; Kymlicka, 1996).

En Bolivia, el imaginario de nación planteado por los grupos indígenas supone un cambio de óptica y una nueva relación con el Estado-nación que implica una mayor participación de las nuevas identidades con nuevas estrategias de acción encaminadas a

articulador del resto de demandas, los más comunes entre los derechos colectivos son: el derecho a la gestión de los recursos naturales de sus territorios, el derecho al uso de las lenguas originarias, a ser consultados en caso de cualquier acción que se lleve a cabo al interior de sus territorios comunales, el derecho a ser reconocidos como pueblos y el derecho al autogobierno y a la autodeterminación.

Para una definición de movimiento social nos apoyamos en aquella de Ramírez que lo expresa de la siguiente manera: “*aquellas movilizaciones colectivas que, en el ánimo de cambiar o recuperar determinadas situaciones y concentraciones de poder político, económico e ideológico, se constituyen en fuerzas colectivas que pueden entrar en la arena del juego político formal de instituciones y administraciones (legislativas, judiciales, ejecutivas, educativas, culturales, laborales, etc.), sin ceñirse a estos espacios y modos de vindicación y contestación y que oscilan entre una semiestructuración organizativa y agencial*” (2007: 242).

¹²³ Bolivia se considera un país plurinacional ya que en su seno coexisten diversas naciones, entendiendo nación como “*comunidad histórica, más o menos completa institucionalmente, que ocupa un territorio o una tierra natal determinada y que comparte una lengua y una cultura diferenciadas*” (Kymlicka, 1996: 26), lo cual no tiene porqué significar que el conjunto de la ciudadanía no se “*autoconsidere un único pueblo*” (ibíd., 29).

alcanzar la constitución de un Estado plural con espacio para las diversas identidades étnicas. Es vital la reconstrucción de la ciudadanía de la nación boliviana. Consiste en una responsabilidad que atañe al conjunto de la población.

Las demandas territoriales -articuladas en términos de identidad, de pertenencia a un lugar- que han sido efectuadas por parte de los mojeños-ignacianos, entre otros, debemos situarlas, por tanto, en este contexto de emergencia de las identidades étnicas en busca del reconocimiento de sus derechos colectivos. Según afirma Gabriela Canedo en su tesis *“la demanda territorial se enmarca en la lucha por el reconocimiento, en la lucha por la ciudadanía, que plantee una mayor inclusión, basada en el reconocimiento y la participación política, económica, social y cultural de los diferentes actores”* (2009: 28).

Supone un debate de actualidad la confrontación entre los derechos individuales y los derechos colectivos¹²⁴. Extrapolándolo a nuestro ámbito de estudio nos referimos al derecho a la TCO frente a derechos individuales (Canedo, 2009: 31).

Will Kymlicka nos deja en su obra unas indicaciones muy importantes: la concesión de derechos poliétnicos favorecería la integración de todos los ciudadanos al generar un sentimiento de pertenencia común, por lo que el Estado debería promoverlo (1996: 247-255). En Bolivia por el contrario, éste se ha visto incapaz de lograr articular tal sentimiento de pertenencia que aglutine al conjunto de la población nacional (Molina *et al.*, 2008).

Durante muchos años se han llevado a cabo en Bolivia (no únicamente) políticas de asimilación, las cuales fueron dirigidas a anular a las minorías étnicas. A pesar de ello y de su fuerza, los grupos indígenas de la Amazonía boliviana han sabido resistir ante estos fenómenos y proteger y consolidar sus culturas.

La identidad étnica del pueblo mojeño ha sido clave en el proceso de titulación de tierras. Y con respecto a la cuestión de territorio¹²⁵, el hecho de demandar el reconocimiento como pueblos les abre las puertas para la reivindicación más importante del movimiento indígena: la territorial. Por ello finalizo este capítulo demostrando el estrecho vínculo que une a los pueblos indígenas con sus territorios, fenómeno que se produce visiblemente en Mojos. Pese a ello existen estudios que cuestionan el desajuste que a día de hoy aún se da en la región amazónica boliviana entre la identidad étnica y territorial dado que un determinado pueblo indígena no se acopla del todo a un espacio territorial determinado y configurado en las TCOs (Molina W. *et al.*, 2008: 59). Un ejemplo de ello lo constituiría el *Territorio Indígena*

¹²⁴ Para más información sobre derechos colectivos véase Kymlicka (1996).

¹²⁵ Éste concebido en su dimensión espacial por la cual se procede al uso, control y manejo de los recursos naturales y en su dimensión identitaria por la que se establece la relación entre la sociedad indígena y la misma tierra donde se desarrollan sus culturas.

Multiétnico de Mojos. Esta idea es también compartida por Ismael Guzmán quien afirma que adquiere más peso el hecho de pertenecer a un territorio que el factor étnico (entrevista). No obstante, la legislación boliviana hace equivaler la categoría de pueblo indígena con la dimensión territorial, como así queda demostrado en la *Ley de Participación Popular* que asocia a las *Organizaciones Territoriales de Base* con el *Pueblo Indígena* entendido éste como:

“la colectividad humana que descende de poblaciones asentadas con anterioridad a la conquista o colonización, y que se encuentran dentro de las actuales fronteras del Estado; poseen historia, organización, idioma o dialecto y otras características culturales, con la cual se identifican sus miembros reconociéndose como pertenecientes a la misma unidad sociocultural; mantienen un vínculo territorial en función de la administración de su hábitat y de sus instituciones sociales, económicas, políticas y culturales. En el marco de la definición anterior se consideran Organizaciones Territoriales de Base de carácter indígena a las Tentas, Capitanías, Cabildos Indígenas del Oriente, Ayllus, Comunidades Indígenas y otras formas” (artículo 1, punto II)¹²⁶.

Es ampliamente reconocido que el factor identitario ha sido decisivo en el proceso de reivindicación territorial y en la autoidentificación como pueblo indígena en Bolivia. Es éste un proceso de retroalimentación. Vimos de qué manera el INRA exige además identificarse como pueblo indígena en la coyuntura de las demandas y titulación de tierras indígenas. El mismo *“proceso de manipulación, de manejo creativo de la identidad”* -indica Lehm- que se repite en toda América Latina (entrevista).

Para concluir este capítulo y de igual manera que hice con la definición de “territorio”, incluyo una definición de “pueblo indígena” que será la que guíe el presente trabajo. Teniendo en cuenta la multiplicidad conceptual de esta categoría, mi intención no es, ni mucho menos, aportar una nueva, sino presentar aquella en torno a la que este trabajo girará. Consideraré a los pueblos indígenas, por tanto, como *el sujeto social colectivo que comparte determinados trazos culturales como son la lengua, historia, cultura e identidad los cuales utilizan para legitimar la acción colectiva que les conduce a reivindicar como propio un territorio que actúa como sustentador de su identidad étnica y que les sirve para dar cuenta de la historicidad como pueblos originarios*. Ésta es pues la definición que siguiendo la estela de todo el conjunto de trabajos consultados, he *construido* a partir de elementos diversos provenientes de variadas aproximaciones y que he procurado englobar en la misma. La pretensión es dar forma a una concepción concreta que pueda ser utilizada como herramienta analítica y categoría descriptiva a lo largo de toda la investigación. Cabría la posibilidad

¹²⁶ http://www.legislacionmunicipal.fam.bo/Archivo/Docs/Leyes/Ley_1551.pdf

de ser acusada de contribuir, como todos aquellos estudios enmarcados en las ciencias sociales, a la clasificación y definición de quienes han venido siendo considerados como los *otros*. Lejos de ello queda mi deseo. Es, por el contrario, una manera de facilitar la comprensión de las dinámicas sociales y territoriales que se irán presentando en el presente trabajo. Me ceñiré, en la medida de lo posible, a la definición tipo *puzzle* que he (re)construido a partir de las piezas ofrecidas por el resto de estudios, por el propio trabajo de campo así como por las experiencias vividas en la memoria colectiva y narradas por los miembros de las comunidades indígenas del TIMI. Dicho esto quiero reiterar una vez más que la categoría de pueblos indígenas continúa estando inmersa en un complejo proceso de definición. El motivo de ello es que tal noción es contingente, dinámica, flexible y fluctuante por lo que, como señalé en varias ocasiones, se re-adapta al contexto en el que opera. La definición de indígena depende de los criterios que se utilicen para su categorización. Concluyo entonces a este apartado señalando que la definición hace al indígena sin ser éste el que define la categoría a través de la que es clasificado. El imaginario del concepto de indígena se configura conforme a las circunstancias y necesidades coyunturales, siendo como consecuencia funcional. Y sobre todo se configura en un contexto espacial concreto, en un lugar, lo cual nos remite al comienzo del capítulo, para reiterar una vez más el vínculo de la identidad con el territorio, variables ambas que se reformulan en un proceso de *feedback*.

La alusión a la dimensión territorial me conduce a introducir el siguiente capítulo, dedicado al análisis del contexto geográfico de Mojos y del *Territorio Indígena Mojeño-Ignaciano*. Sin más, doy paso al mismo.

3. Contexto geográfico: La Amazonía boliviana y los Llanos de Mojos.

La región amazónica conforma una vasta región de Sudamérica, un gran espacio sociobiogeográfico sobre el que se ha escrito una ingente literatura desde las más diversas disciplinas. Los estudios sobre la Amazonía se han multiplicado desde campos tan dispares como complementarios como pueden ser la Biología, Geografía, Antropología, Ecología, Historia, Botánica, etcétera. No corresponde a esta investigación lo que desde tantos trabajos ha sido expuesto acerca de cuestiones tan habituales relacionadas con la consideración del espacio amazónico como pulmón verde, sobre la diversidad biótica, el endemismo de las especies animales y vegetales, los impactos sobre el bosque tropical y sus consecuencias, las poblaciones autóctonas que habitan la región, las estrategias geopolíticas de los países que la conforman, los modelos de explotación de los recursos naturales, etcétera, optaré por el análisis de la Amazonía como espacio geográfico sujeto a un amplio conjunto de concepciones que determinan su percepción, así como su desarrollo actual. Pese a la multiplicidad de trabajos, a día de hoy carecemos de un concepto que defina tal espacio. No se ha logrado un consenso que establezca las delimitaciones correspondientes para el territorio que lo engloba.

La Amazonía se extiende por hasta 8 países de Sudamérica: las Repúblicas de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela (Eva y Huber, 2005: 1) (véase **cuadro 3. 1**). Otros estudios incluyen además el departamento de ultramar de Keyena en la Guyana francesa (Bernal, 2006: 41). En cada uno de ellos son manejados diferentes conceptos para referirse a un mismo ámbito lo cual ha impedido la existencia de una demarcación territorial específica para este espacio. Cada uno de ellos opera desde diferentes aproximaciones en función de los criterios a los que se confiera una mayor validez: geográficos, físicos, ecológicos o incluso político-administrativos. Pero incluso utilizando criterios idénticos “*pueden utilizar diferentes*

umbrales, por ejemplo zonas de altitud para establecer la diferencia entre las regiones andinas y las amazónicas”, por eso sería más conveniente hablar de “amazonías”, debido a la dificultad que entraña su delimitación por los distintos puntos de vista de los expertos (Eva y Huber, 2005: 1).

Cuadro 3. 1. Territorio definido por cada uno de los países del Tratado de Cooperación Amazónica (TCA) y superficie correspondiente.

| País | Superficie incluida en TCA (Km²) | Porcentaje (%) | Territorio incluido |
|------------------|--|-----------------------|----------------------------|
| Bolivia | 600.000 | 7,9 | Cuenca fluvial y bosque |
| Brasil | 5.144.800 | 76,8 | Amazonía Legal |
| Colombia | 419.346 | 5,5 | Amazonía Legal |
| Ecuador | 131.000 | 1,7 | Cuenca fluvial y bosque |
| Guyana | 215.000 | 2,8 | Bosque |
| Perú | 756.992 | 10,0 | Cuenca fluvial y bosque |
| Surinam | 142.800 | 1,9 | Bosque |
| Venezuela | 180.145 | 2,4 | Estado de Amazonas |
| Total | 7.590.083 | 100,0 | |

Fuente: Eva y Huber, 2005: 2.

Pero más allá de aclaraciones conceptuales, el consenso sobre los límites de esta región es importante establecerlo principalmente por un motivo. Y es que a la hora de implementar políticas públicas al conjunto del territorio amazónico, que afectarán al conjunto de su población, algunas regiones pueden quedar fuera en base a las consideraciones que se asuman. Es importante generar una base de datos compartida por el conjunto de países que conforman la Amazonía. Un manejo integral de la información de este inmenso territorio supondría un gran avance a la hora de articular proyectos y estrategias de desarrollo a escala panamazónica.

El estudio conjunto de PNUMA y OTCA (2009) pone de manifiesto la multiplicidad de significados que se le concede a la Amazonía en cada uno de los países que la integran. Este hecho más allá de la cuestión conceptual, genera una serie de problemáticas que tienen que ver con la implementación de políticas coordinadas a escala supranacional. En el conjunto de países “amazónicos” se desarrollan programas encaminados a velar por la sostenibilidad ambiental, por el adecuado manejo de recursos naturales, por la protección de la naturaleza y de las poblaciones humanas que lo habitan. Pese a ello son insuficientes los esfuerzos realizados en materia de integración de todo el espacio amazónico en base a un marco institucional común.

3. 1. BOLIVIA: PAÍS MEGADIVERSO.

Antes de dar paso al análisis de la región amazónica, de manera breve quiero introducir algunos datos sobre el país con el fin de contextualizar en el espacio los aspectos geográficos, demográficos y ambientales del área de estudio en cuestión.

Bolivia es uno de los países con mayor biodiversidad del Planeta¹²⁷. Por dicho motivo forma parte del conjunto de países insertos en la categoría de países “megadiversos” (Ibisch y Mérida, 2003: 463 y Junquera, 1995; 2004). Esto se debe en buena medida al altísimo número de especies, tanto de fauna como de flora, que alberga su territorio.

En las tierras bajas del oriente boliviano predominan los ecosistemas pertenecientes a la Hoya Amazónica, bosques tropicales, llanuras, ríos, lagos, lagunas y humedales diversos, con una importante cantidad y variedad de especies de animales y vegetales. Muchas de estas especies aún no han sido clasificadas ni estudiadas. Sin embargo, forman parte de un importante trabajo que se está llevando a cabo actualmente gracias a la emergencia de un joven equipo de científicos encargados de profundizar en este ámbito de estudio el cual cuenta con grandes posibilidades.

Pero no sólo se debe hablar de la diversidad biológica -o biótica como prefieren algunos- sino que la diversidad cultural alcanza del mismo modo cifras sobresalientes. Bolivia contempla una gran riqueza en cuanto a diversidad cultural (véase **cuadro 3. 2**). Entorno al 60% de la población boliviana se autoidentifica como indígena (INE, 2001). Son numerosísimos los grupos étnicos que articulan el conjunto de identidades culturales en Bolivia. En este sentido Bolivia constituye un país multiétnico y pluricultural, como así lo atestigua la *Constitución Política del Estado* (Artículo 1º, punto I, Disposiciones Generales). Gran parte de los grupos étnicos del país dependen, en buena medida, para su desarrollo de la biodiversidad que alberga el territorio boliviano. Y comprobaremos a lo largo de la investigación hasta qué punto está ligada la biodiversidad con la diversidad cultural del país y de qué manera los impactos sobre aquellas inciden en gran medida sobre los grupos étnicos.

En lo que respecta a las poblaciones indígenas del Oriente boliviano, se podría establecer un vínculo entre las alteraciones que están teniendo lugar en los sistemas productivos locales en base al proceso de degradación ambiental que está viviendo la región amazónica. Debido en gran parte a la pérdida de biodiversidad, muchas poblaciones se ven abocadas a un empobrecimiento no sólo desde el punto de vista económico, sino también sociocultural. El problema actual más acuciante es que la

¹²⁷ En el año 1994 el país pasó a formar parte como signatario de la *Convención de Diversidad Biológica*, ratificando dicho Convenio (CDB) mediante *La Ley de la República N° 1580* (Ibisch y Mérida, 2003: XVII).

Amazonía está siendo destruida por la acción humana. La presión a la que está siendo sometida a causa de la deforestación constituye una cuestión de enorme interés, no sólo para los habitantes autóctonos sino para el conjunto del planeta. La invasión incontrolada de este territorio durante las últimas décadas ha provocado graves desequilibrios ecológicos, dado que no se ha tenido en cuenta ni la importancia de su biodiversidad ni a los grupos nativos que habitan en este espacio. Siendo tal la riqueza en términos tanto de diversidad biológica como de diversidad cultural, Bolivia tiene la obligación de orientar sus políticas a la conservación, mantenimiento y respeto de su medio ambiente así como de sus colectividades étnicas. Así al menos queda manifiesto en la Constitución en donde se reconoce la importancia de la cuenca amazónica boliviana la cual *“constituye un espacio estratégico de especial protección para el desarrollo integral del país por su elevada sensibilidad ambiental, biodiversidad existente, recursos hídricos y por las ecorregiones”*, a lo que se añade que *“el desarrollo integral de la Amazonía boliviana, como espacio territorial selvático de bosques húmedos tropicales, de acuerdo a sus específicas características de riqueza forestal extractiva y recolectora, se regirá por ley especial en beneficio de la región y del país”* (artículo 390)¹²⁸.

Cuadro 3. 2. Poblaciones indígenas de Bolivia.

| Nº | Descripción | Total | % sobre población total del país |
|----|-------------|-----------|----------------------------------|
| 1 | Quechua | 2.539.044 | 30,69 |
| 2 | Aymara | 2.084.171 | 25,19 |
| 3 | Guaraní | 132.205 | 1,60 |
| 4 | Chiquitano | 183.006 | 2,21 |
| 5 | Mojeño | 75.575 | 0,91 |
| 6 | Ayoreo | 1.412 | 0,02 |
| 7 | Baure | 817 | 0,01 |
| 8 | Canichana | 347 | 0,00 |
| 9 | Cavineño | 1.403 | 0,02 |
| 10 | Cayubaba | 515 | 0,01 |
| 11 | Chacobo | 438 | 0,01 |
| 12 | Chimán | 7.006 | 0,08 |
| 13 | Esse ejja | 672 | 0,01 |
| 14 | Guarayo | 9.811 | 0,12 |
| 15 | Itonama | 2.432 | 0,03 |

¹²⁸ <http://bolivia.unfpa.org/content/constituci%C3%B3n-pol%C3%ADtica-del-estado>

| | | | |
|---|------------------------------|------------------|----------------|
| 16 | Leco | 3.998 | 0,05 |
| 17 | Mosetén | 1.328 | 0,02 |
| 18 | Movima | 10.126 | 0,12 |
| 19 | Reyesano | 4.494 | 0,05 |
| 20 | Tacana | 5.873 | 0,07 |
| 21 | Uru-Chipara | 1.977 | 0,02 |
| 22 | Weenhayek | 1.687 | 0,02 |
| 23 | Yuracaré | 2.280 | 0,03 |
| 24 | Otros pueblos ¹²⁹ | 1.164 | 0,01 |
| Total de la población adscrita a un pueblo indígena | | 5.071.782 | 61,30 |
| Total de la población que no adscrita a ningún pueblo indígena | | 3.202.543 | 38,70 |
| Total población del país | | 8.274.325 | 100,00% |

Fuente: elaboración propia en base a Ibisch y Mérida, 2003: 163 y <http://www.amazonia.bo>

En el escenario geográfico humano de Bolivia sobresalen por encima del resto dos grupos étnicos: los quechuas y los aymaras. Entre ambos aglutinan a casi la mitad de la población total del país y a más de la mitad de la población *originaria* del mismo, distribuyéndose el resto entre 36 grupos étnicos, de los cuales el pueblo mojeño es uno de los que posee un mayor índice demográfico, como se aprecia en el anterior cuadro. Todo este conjunto de poblaciones se distribuye de manera relativamente uniforme por el escasamente poblado territorio nacional que presenta un bajo nivel de densidad demográfica. Por el contrario, la mayor parte de la biodiversidad del país se concentra en la región amazónica, pero no sólo.

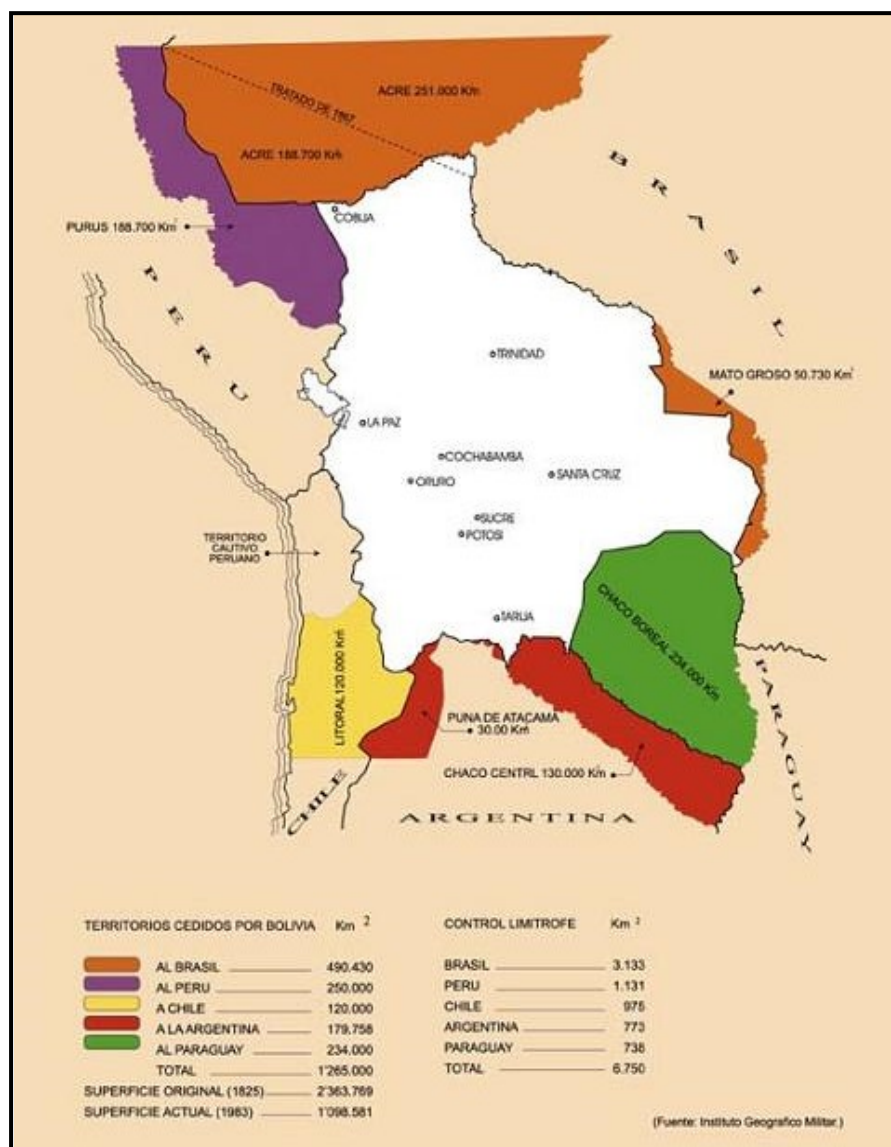
Bolivia es el quinto país sudamericano tras Argentina, Brasil, Colombia y Perú, que abarca una mayor superficie: 1.098.581 Km² pese a la pérdida de buena parte de su territorio nacional en guerras disputadas frente a países vecinos (Brasil, Chile, Perú o Paraguay) tras cuyas derrotas su extensión se vio mermada¹³⁰. A pesar de que en su

¹²⁹ Para la región amazónica estos pueblos son: Araona (112 habitantes); Guarasugwe (31 habitantes); Sirionó (308 habitantes); Machineri (155 habitantes); Moré (101 habitantes); Pacahuara (25 habitantes) y Yaminahua (188 habitantes).

¹³⁰ De manera sucinta cabría señalar que frente a Chile, Bolivia perdió su salida al mar tras la Guerra del Pacífico disputada a finales del siglo XIX; debido a la derrota frente a Brasil en la Guerra del Acre, Bolivia cedió parte de su territorio oriental a dicho país; ante Argentina cedió del mismo modo parte de su superficie más meridional; ante Perú tuvo lugar una disputa por la provincia de Copacabana tras la que Perú se apropiaría de la misma; y por último, frente a Paraguay se disputó el chaco boreal en la Guerra del Chaco, en la década de los años 30 del siglo XX logrando para este país la casi totalidad de tal región (Montes de Oca, 2005). Para Letamendia todos estos conflictos tuvieron un evidente carácter económico: el caucho fue lo que enfrentó en la región del Acre a Brasil y Bolivia; el guano primero y los nitratos naturales después frente a Perú y Chile; las reservas petrolíferas, además de causas patrióticas, enfrentaron a Bolivia y Paraguay (2011: 27-28).

independencia naciese con 2.363.769 km², perdería más de un millón de km² tras los conflictos bélicos frente a países limítrofes (véase **figura 3. 1**).

Figura 3.1. Mapa de pérdidas territoriales de Bolivia.

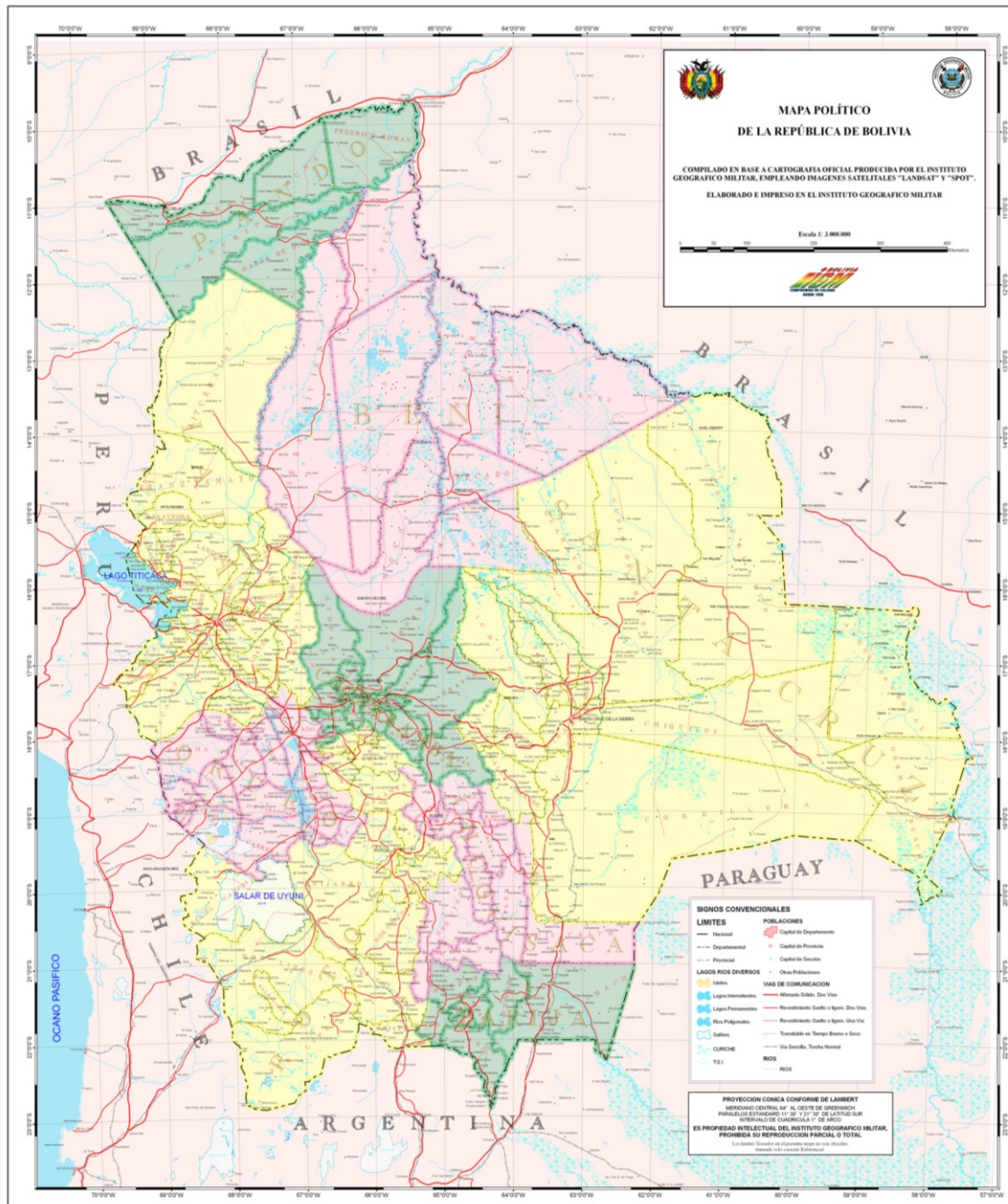


En el departamento del Beni en particular se perdieron algo más de 50.000 Km², puesto que se pasó de 264.455 a 213.564 Km² (Pinto Parada, 2001: 44).

Bolivia presenta la particularidad de tener la capital oficial y sede del poder judicial en Sucre mientras que la sede del gobierno (poder ejecutivo y legislativo) se encuentra en La Paz. Tal disociación de la administración central es motivo de conflicto. Y más en estos momentos en los que el futuro del país es un tanto incierto debido en buena medida a los intentos autonómicos de los departamentos más importantes desde el punto de vista económico, como Santa Cruz o Beni, en los que se encuentran la mayor parte de los recursos naturales susceptibles de ser explotados,

fundamentalmente hidrocarburíferos y forestales.

Mapa 3. 1. Mapa político de Bolivia.



Bolivia con una extensión de 1.098.581 km² limita al Norte y al Este con Brasil, al Sureste con Paraguay y al Sur con Argentina, al Suroeste con Chile y al Oeste con Perú.

Desde el punto de vista político-administrativo, Bolivia se presenta subdividida en 9 departamentos (véase **cuadro 3. 3**), 112 provincias, 327 municipios y 1.384

cantones¹³¹, los cuales cuentan con mayores niveles de autonomía tras la entrada en vigor de la ley de *Descentralización Administrativa* de 1995 y con la reciente *Ley Marco de Autonomías* que aún está en ciernes. La cabeza de cada departamento está constituida por un Consejo Departamental, elegido por las municipalidades, y un Prefecto, el cual es elegido por votación popular desde el año 2005. Éste a su vez es el encargado de designar a los subprefectos y corregidores. El gobierno central por su parte viene representado a nivel del departamento por los delegados departamentales que previamente han sido nombrados. La división administrativa de las provincias se realiza en base a los departamentos los cuales cuentan con los subprefectos como cabezas de gobierno. Por último se encuentran los municipios, los que a cargo de un alcalde conforman la división de las provincias.

Cuadro 3. 3. División político-administrativa de Bolivia.

| DEPARTAMENTO | CAPITAL DEPARTAMENTO |
|--------------|-------------------------|
| La Paz | La Paz |
| Tarija | Tarija |
| Cochabamba | Cochabamba |
| Chuquisaca | Sucre |
| Potosí | Potosí |
| Beni | Trinidad |
| Pando | Cobija |
| Santa Cruz | Santa Cruz de la Sierra |
| Oruro | Oruro |

Fuente: Montes de Oca, 2004.

3. 1. 1. Grandes regiones y subdivisiones regionales.

Conforme a la definición recogida en la *Ley Marco de Autonomías*, una serie de requisitos deben cumplirse para que una región pueda conformarse como tal:

“entre unidades territoriales con continuidad geográfica que compartan cultura, lenguas, historia, economía y ecosistemas, con una vocación común para su desarrollo integral y deberá ser más grande que una provincia, pudiendo agregarse a ésta algunas unidades territoriales pertenecientes a otra provincia. Una sola provincia con

¹³¹ <http://geografia.laguia2000.com/geografia-regional/america/geografia-de-bolivia-generalidades>

características de región, excepcionalmente podrá constituirse como tal” (art. 21)¹³².

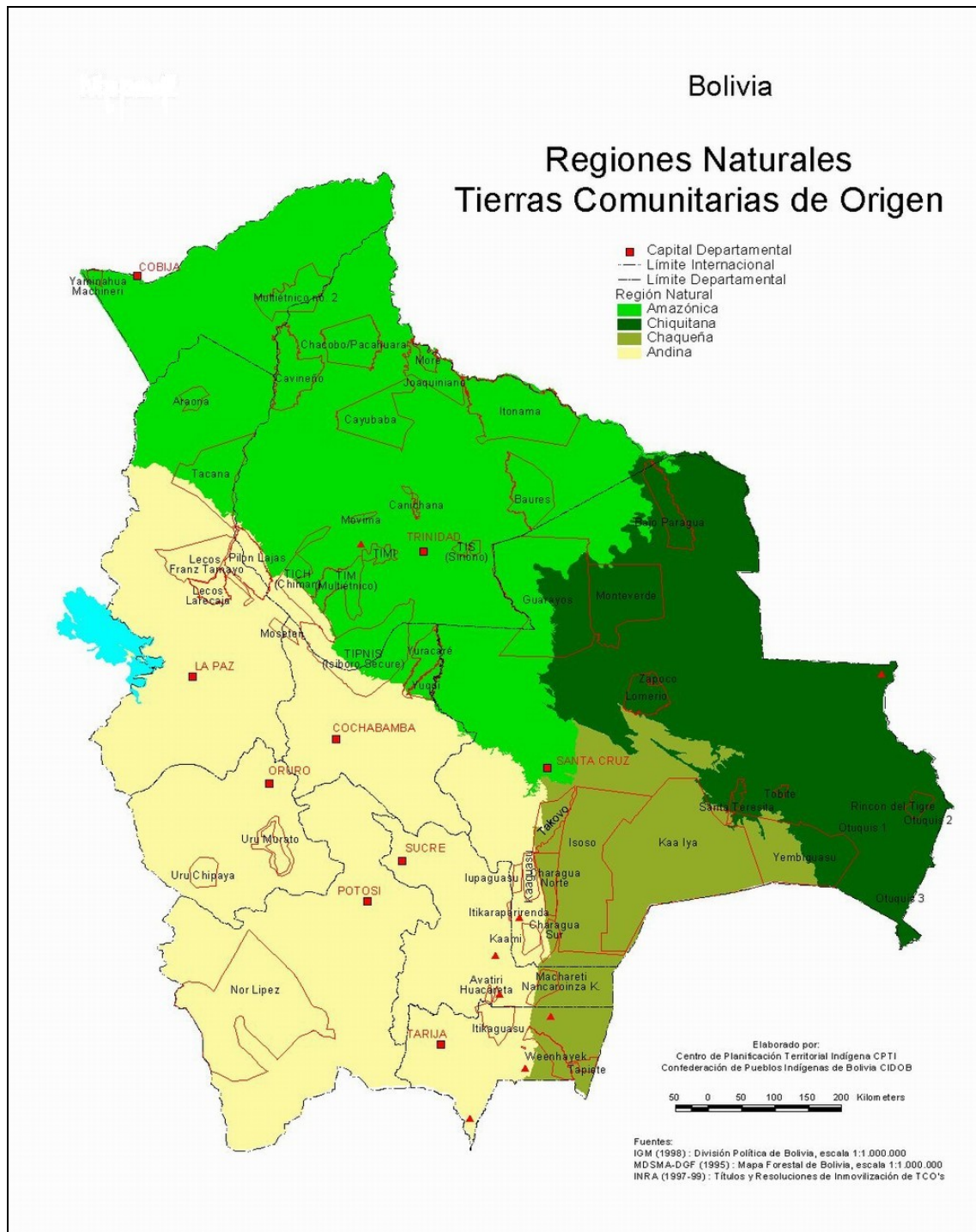
En base a tal definición queda constatada la conformación de la región de Mojos, y de esta manera se entenderá cuando este estudio así se refiera a ella. En ésta, superior en superficie a la propia provincia de Mojos, se cumplen los criterios de lengua, cultura, historia, economía y ecosistemas comunes.

El país boliviano aparece dividido en dos grandes regiones: la andina (departamentos de Potosí, Chuquisaca, Oruro, La Paz, Cochabamba y Tarija) y la región de las tierras bajas que alberga al Oriente, el Chaco y la Amazonía (departamentos de Santa Cruz, Beni, y Pando y parte de La Paz, Tarija, Cochabamba) (Molina W. y Soletto, 2002: 43). Pablo Pacheco se refiere a la ambigüedad que encierra el término de Tierras Bajas, al igual que sucede con otros conceptos como Oriente o Trópico boliviano (2009: 191). Éste autor utiliza un criterio ecosistémico para delimitar este espacio geográfico, por lo que expone que las tierras bajas corresponden al “*extremo oriental*” de Bolivia en donde predominan los “*sistemas ecológicos tropicales y subtropicales*” que van desde “*las estribaciones andinas al oeste (a unos 3.000 msnm), hasta las tierras bajas que hacen parte de la región amazónica por debajo de los 500 msnm*” (departamento de Santa Cruz, Beni, Pando y parte del departamento de La Paz y Cochabamba) (*ibíd.*). La diversidad existente en cuanto nos referimos a factores naturales como la latitud, altitud, la gran biodiversidad vegetal o los vientos, hace que por un lado las características climáticas de Bolivia sean altamente diversas y estén notablemente marcadas entre las tierras bajas y entre las tierras altas, entre el Oriente y el Occidente.

Veremos en los siguientes epígrafes que el área de estudio de esta investigación se inserta en las sabanas de los Llanos de Mojos, en el departamento del Beni. Atendiendo a algunos trabajos, las sabanas formarían parte de la Amazonía. Este es el caso de la clasificación de las regiones naturales del país elaborada por el CPTI las cuales aparecen representadas en el mapa inferior. Para este centro de investigación la llanura beniana así como el territorio mojeño ignaciano (TIMI), el cual aparece igualmente representado, pertenecería a la región amazónica.

¹³²<http://www.gobernabilidad.org.bo/component/content/article/2-noticias/362-ley-marco-de-autonomias-y-descentralizacion-de-bolivia>

Mapa 3. 2. Regiones naturales y TCOs de Bolivia.



Por el contrario, otros trabajos ubican las llanuras del Beni en la región brasileño-paranense y no en la región amazónica y lo hacen en base a distintos criterios de clasificación, como ocurre en este caso con la vegetación (Navarro, 1997). En estos se establece una división biogeográfica de Bolivia en cuatro regiones diferenciadas (Navarro, 1997; Navarro y Maldonado, 2002):

- las región amazónica

- la región brasileño-paranense,
- la región chaqueña
- la región andina.

Cuadro 3. 4. Unidades biogeográficas de Bolivia.

| I. REGIÓN ANDINA | |
|--|--|
| SUBREGION PUNEÑA | |
| 1. Provincia de la Puna Peruana | |
| 1a. Sector del Titicaca | |
| 1b. Sector de la Cordillera Real | |
| 1c. Sector del Tunari | |
| 2. Provincia Altiplánica | |
| 2a. Sector del Sajama-Desaguadero | |
| 2b. Sector de Uyuni | |
| 2c. Sector de Lípez | |
| 3. Provincia Boliviana interandina | |
| 3a. Sector Los Frailes-Chichas | |
| 3b. Sector Cuenca San Juan del Oro | |
| 3c. Sector Serranías subandinas | |
| SUBREGION PARAMUNO-YUNGUEÑA | |
| 4. Provincia de los Yungas Peruano-bolivianos | |
| 4a. Sector Yungas del Alto río Beni | |
| 4b. Sector Yungas del Alto río Ichilo | |
| II. REGION CHAQUEÑA | |
| 5. Provincia del Chaco andino | |
| 5a. Sector Cuenca del río Grande | |
| 5b. Sector Cuenca Pilaya-Pilcomayo | |
| 6. Provincia del Chaco boreal | |
| 6a. Sector del Izozog | |
| 6b. Sector Alto-Paraguayo | |
| 6c. Sector Pilcomayo-Paraguayo | |
| III. REGION BRASILEÑO-PARANENSE¹³³ | |
| 7. Provincia del Cerrado | |
| 7a. Sector Guarayos-Paraguá | |
| 7b. Sector Chiquitano | |
| 7c. Sector de Huanchaca | |
| 8. Provincia Beniana | |
| 8a. Sector Beniano septentrional | |
| 8b. Sector Llanos de Moxos | |
| 8c. Sector Cruceño | |
| 9. Provincia del Pantanal | |
| 9a. Sector del Pantanal septentrional | |
| IV. REGION AMAZONICA | |
| 10. Provincia Amazónica meridional | |
| 10a. Sector Pando-Bajo Iténez | |
| 10b. Sector Chapare-Alto Madidi | |

Fuente: Navarro, 1997: 34.

¹³³ La región brasileño-paranense está presente además en Brasil, en el este, centro y sur; al este de Paraguay y en el extremo norte de Argentina, además de en el este de Bolivia. Incluye a las provincias de Tocantins; Provincia de la Caatinga; Atlántica; Paranense; Provincia del Cerrado; del Beni y del Pantanal, estando representadas solamente las tres últimas en Bolivia (Navarro y Maldonado, 2002: 47-48).

Esta clasificación se elabora en base a la jerarquización de las diferentes unidades: región, provincia y sector. Se establece en función de la dispersión, diversidad y el origen de la fauna y la flora, teniendo en cuenta “*la vegetación y las continuidades del complejo de interacciones entre las variables geofísicas y biológicas del ambiente. Se consideran el clima, la geomorfología y los suelos (variables geofísicas) y las comunidades animales y las actividades humanas (variables biológicas)*” (Montes de Oca, 2004: 198).

En base al estudio de Navarro y Maldonado, la provincia biogeográfica del Beni constituye desde el punto de vista geomorfológico una gran llanura aluvial de inundación policíclica en la cual se depositan sedimentos del cuaternario¹³⁴ como limos, arcillas y arenas finas -de origen fluvial y fluvio-lacustre- las cuales se sitúan sobre estratos paleozoicos, mesozoicos y cenozoicos (2002: 159-160). Los suelos del Beni, al igual que ocurre por lo general con los suelos de las áreas tropicales, son más sensibles a la erosión debido a las fuertes lluvias a las que se ven sometidos. Las condiciones en las que se originan estos suelos hacen que sean altamente arcillosos con alto contenido en nutrientes y bajo en el pH (Lavelle, 1987).

Montes de Oca opta, en cambio, por una división igualmente en provincias biogeográficas, pero más específica (2004: 198):

- Provincia del Cerrado
- Provincia del Beni
- Provincia del Pantanal
- Provincia del Chaco Boreal
- Provincia de la Puna Peruana;
- Provincia de los Yungas
- Provincia Boliviano-Tucumana y
- Provincia Altiplánica

Ibisch y Mérida por su parte desarrollan un exhaustivo estudio sobre la biodiversidad de Bolivia donde esta vez encontramos una división del país en base a las ecorregiones¹³⁵.

¹³⁴ La mayor parte de estudios coinciden en el origen de los procesos geológicos en la Amazonía, los cuales sitúan en el cuaternario. No obstante, otros trabajos como el de Irion, exponen que tales procesos pueden retrotraerse al Pleistoceno principalmente en lo que respecta a la formación de sabanas (1984). Otros expertos como Eden afirman que tales depósitos no sólo corresponden con el cuaternario sino con el último periodo del terciario, incluso se atreve a afirmar que los sedimentos más jóvenes de la Amazonía se datan en el Plio-Pleistoceno, correspondiendo los depósitos de las terrazas fluviales al Pleistoceno propiamente dicho y las llanuras aluviales al Holoceno, las cuales comprenden la zona de várzea o zona húmeda y cuyos sedimentos cubren apenas una pequeña parte de las región amazónica (1990: 25-26).

¹³⁵ Se entiende el concepto de ecorregión como “*un área que consiste en una agrupación característica de comunidades naturales que: a su vez comparten muchos taxa, dinámicas ecológicas y condiciones ambientales; tienen una mayor interrelación e interdependencia*”

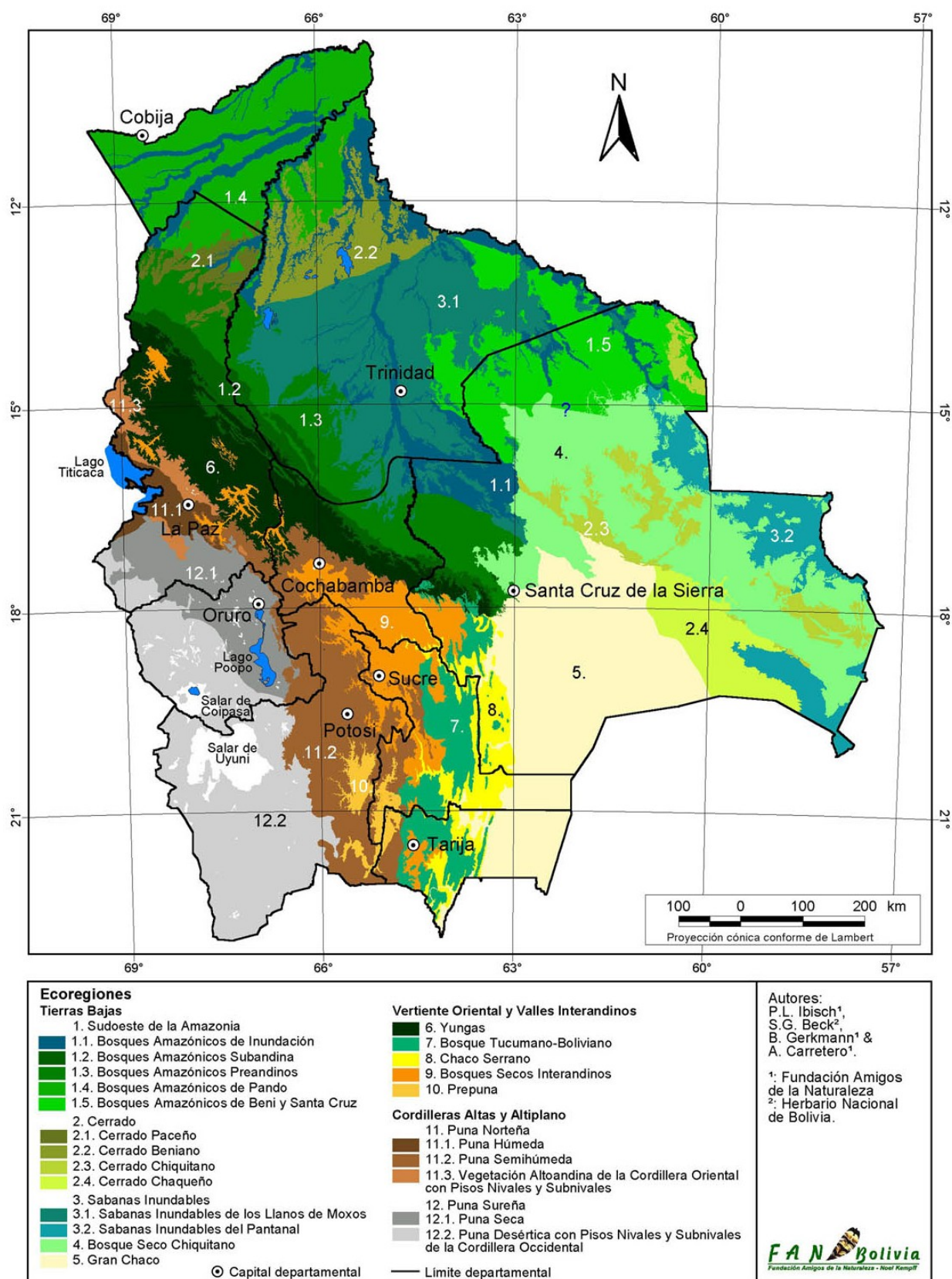
Cuadro 3. 5. Ecorregiones de Bolivia

| REGIÓN | ECORREGIÓN | SUBECORREGIONES |
|--|---------------------------------------|--|
| Tierras Bajas | 1. Bosques del Sudeste de la amazonía | 1.1. Bosques Amazónicos de Inundación |
| | | 1.2. Bosques Amazónicos Subandinos |
| | | 1.3. Bosques Amazónicos Preandinos |
| | | 1.4. Bosques Amazónicos de Pando |
| | | 1.5. Bosques Amazónicos de Beni y Santa Cruz |
| | 2. Cerrado | 2.1. Cerrado Paceño |
| | | 2.2. Cerrado Beniano |
| | | 2.3. Cerrado Chiquitano |
| | | 2.4. Cerrado Chaqueño |
| | 3. Sabanas Inundables | 3.1. Sabanas Inundables de los Llanos de Moxos |
| | | 3.2. Sabanas Inundables del Pantanal |
| | 4. Bosque Seco Chiquitano | por determinar |
| | 5. Gran Chaco | por determinar |
| Vertiente Oriental y Valles Interandinos | 6. Yungas | por determinar |
| | 7. Bosque Tucumano-Boliviano | por determinar |
| | 8. Chaco Serrano | por determinar |
| | 9. Bosques Secos Interandinos | por determinar |
| | 10. Prepula | por determinar |
| Cordilleras Altas y Altiplano | 11. Puna Norteña | 11.1. Puna Húmeda |
| | | 11.2. Puna Semihúmeda |
| | | 11.3. Vegetación Altoandina de la Cordillera Oriental con Pisos Nivales y Subnivales |
| | 12. Puna Sureña | 12.1. Puna Sureña |
| | | 12.2. Puna Desértica con Pisos Nivales y Subnivales de la Cordillera |
| | | |

Fuente: Ibisch y Mérida, 2003: 49.

biológica y ecológica entre sí, que con las comunidades que se encuentran fuera de ella; además muestra patrones comunes para la producción de biomasa, incluyendo la forestal y la agropecuaria” (Ibisch y Mérida, 2003: 48).

Mapa 3. 3. Ecorregiones de Bolivia.



Fuente: Ibisch y Mérida, 2004: 51.

Estos autores reconocen la heterogeneidad de opiniones a la hora de delimitar las regiones geográficas del país¹³⁶ en base a las variables a las que se apunte. Retomando nuevamente el trabajo de Ismael Montes de Oca, se puede establecer una nueva división de Bolivia. Esta vez atendiendo a criterios geográficos, el país aparece dividido en tres grandes regiones (1989, 2004):

- el altiplano,
- los valles
- los llanos.

Algunas ediciones publicadas por el Ministerio de Educación prefieren, siguiendo la misma línea de los trabajos de Montes de Oca, distinguir 3 grandes regiones geográficas: la Zona de los Llanos, la cual abarca una extensión aproximada del 59% del territorio nacional, la Zona Subandina y la Zona Andina (Vargas R., 2005). La primera de ellas comprendería dos tipos de ecosistemas: de praderas y de bosques tropicales. Abarcaría el departamento de Pando al completo, la provincia Iturralde de La Paz y el norte de los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba y Beni.

Incluso en algunos estudios existe una coincidencia entre ecosistemas como unidad de análisis y las ecorregiones. A esta investigación en particular le interesa no tanto la precisión terminológica como la identificación exacta de la región en la que el área de estudio se localiza y a la cual por lo tanto se refiere.

La investigación de PNUMA y OCTA, presentan una clasificación del bosque tropical amazónico en el que se distinguen varios tipos: bosques de tierras altas, bosque denso, bosque inundable o sabana inundable (2009: 133) como es el caso de la llanura mojeña. Éste último corresponde a la várzea –planicies o llanuras de inundación periódicas- que se extiende a lo largo de cursos de agua. En cuanto a la Amazonía boliviana, varios estudios se refieren al *Informe de Desarrollo Humano del Norte Amazónico* (2003) en el que se reconoce la indefinición en el concepto de “Amazonía boliviana”, la cual comprendería los departamentos de Pando, Beni, así como la zona más septentrional de los departamentos de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba -280. 120 km²- y clasifica además las formaciones forestales en 3 unidades: “*el bosque amazónico, el bosque húmedo de llanura y (la pampa de Mojos) y el bosque húmedo del Escudo Precámbrico*” (Molina W., 2008: 177; Molina W., Vargas C. y Soletto, 2008:

¹³⁶ Incluso cabe señalar que según la NCPE, la región a la que nos referimos en nuestra investigación, no es considerada dentro de la Amazonía: “*la amazonia boliviana comprende la totalidad del departamento de Pando, la provincia Iturralde del departamento de La Paz y las provincias Vaca Díez y Ballivián del departamento del Beni*” (artículo 390), excluyendo la provincia de Mojos, donde se inserta el área de estudio del presente trabajo.

43; Molina W. *et al.*, 2008: 61)¹³⁷. Para Navarro (1997) los bosques de la llanura aluvial del Beni formarían parte de la provincia biogeográfica beniana de la región brasileño-paranense. Estos son clasificados por este autor como:

“Grupo de mesobosques semidecíduos y palmares más o menos abiertos, estacionalmente anegables de forma somera e irregular, asentados sobre solonchales y vertisoles útrico-alcalinos de las semialturas del Beni central y oriental. Generalmente más o menos sabanizados por intervención humana (fuego y ganadería) y transformados en pampas arboladas” (1997: 12).

Teniendo como criterio la cobertura vegetal, *“la región amazónica es una unidad fitogeográfica con un bosque tropical húmedo de alta biomasa y gran heterogeneidad”* (Marden dos Santos, 1987: 27).

Desde un punto de vista fisiográfico, es de consenso generalizado distinguir las siguientes unidades fisiográficas (Montes de Oca, 2004):

- Cordillera Occidental
- Cordillera Oriental
- Altiplano
- Subandino
- Llanuras
- Escudo brasileño

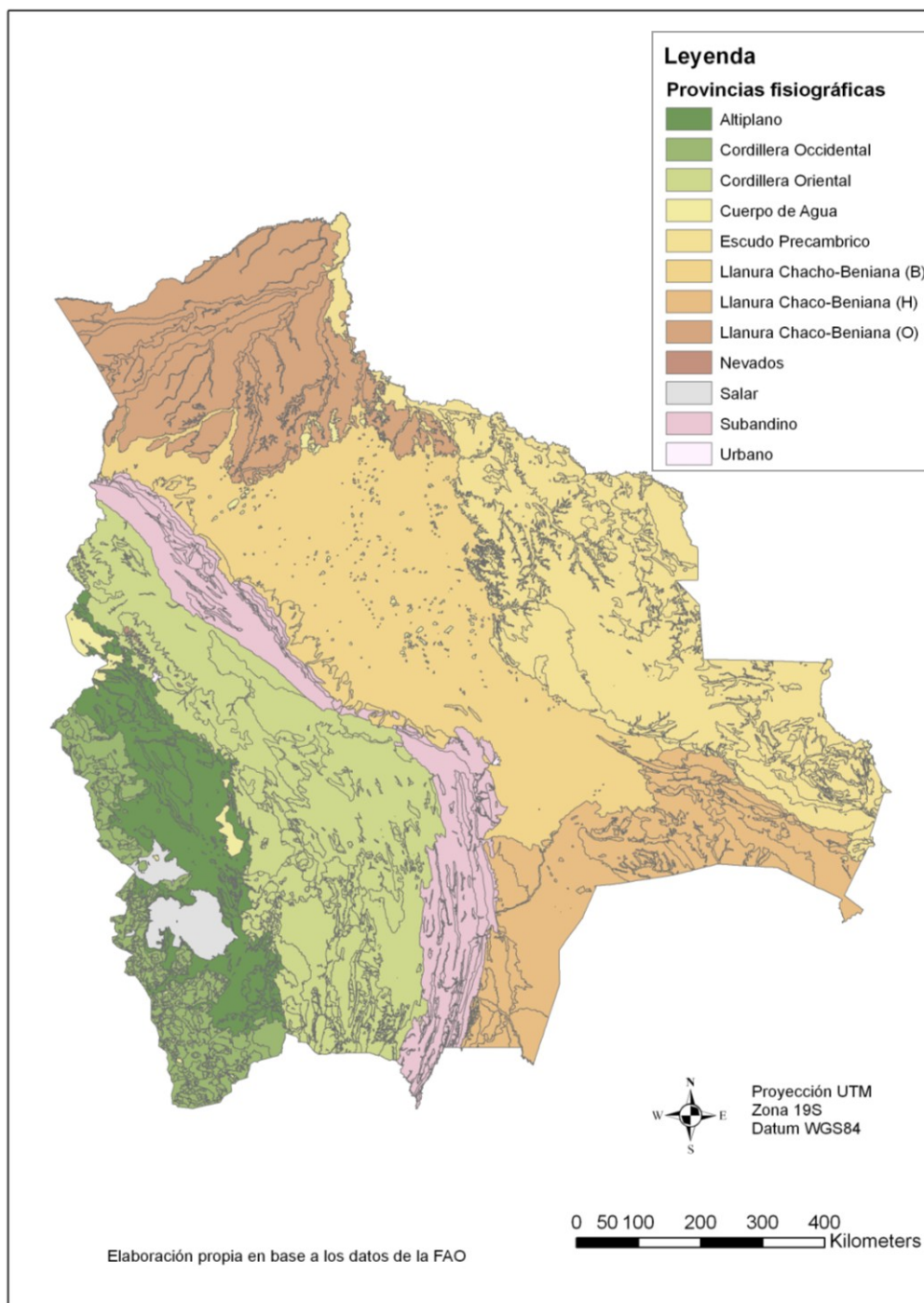
Sin embargo, el mismo autor, responsable de los trabajos geográficos más importantes de Bolivia de los últimos años, en su estudio del año 1989 añadía una provincia fisiográfica más: las “Serranías Chiquitanas”, que en el trabajo más reciente del año 2004 no se incluye. Algo similar sucede en relación a las unidades que desde el punto de vista morfológico conforman las Llanuras. En estudios más antiguos, aparece dividida en: Llanuras de inundación del río Beni; Zona de pie de monte; Llanos y terrazas aluviales poco disectadas; Llanuras aluviales; Llanura del Chaco (*ibíd.*, 1989: 159). Por el contrario, actualmente encontramos que las Llanuras comprenden dos unidades morfológicas en su interior: la “Llanura beniana” y el “Ondulado Amazónico” (*ibíd.*, 2004: 148). La primera de ellas se correspondería a las Llanuras de inundación del río Beni. Esta zona se caracteriza por la presencia de extensas y amplias planicies y

¹³⁷ Estos trabajos recogen las informaciones de diferentes estudios realizados a cargo de agencias de cooperación europeas que dan datos acerca de la superficie de esta región, las cuales oscilan entre los 74.000 km², 85.000 km² y 104.561 km², en base a los distintos conceptos que se asuman en función de criterios geográficos, ecológicos o incluso sociológicos.

llanuras aluviales, de planas a ligeramente onduladas, con algunas zonas de islas de bosque allí donde existe mayor altura capaz de concentrar una vegetación arbórea que escapa a los efectos de las inundaciones del bosque, lugar en donde se concentran las poblaciones agrícolas y ganaderas (*ibíd.*, 1989: 2005).

Otras fuentes, como las que maneja la FAO ofrecen una división fisiográfica diferente (véase **mapa 3. 4**).

Mapa 3. 4. Unidades fisiográficas de Bolivia



3. 2. LA COMPLEJIDAD DE LA REGIÓN AMAZÓNICA.

“(...) se pensaba que la Amazonía era una región, un territorio sin historia, ya que, evidentemente no había jugado un papel importante en el proyecto europeo en América después de los estados republicanos. La Amazonía había sido considerada siempre un territorio de indígenas, en forma despectiva, sin ninguna historia y totalmente invisible”¹³⁸.

Cuadro 3. 6. Superficie de la cuenca amazónica en los países que la contienen.

| País | Extensión en Km² | Porcentaje respecto a la cuenca | Porcentaje respecto al territorio nacional |
|----------------|------------------------------------|--|---|
| Brasil | 3.560.000 | 66,00% | 54% |
| Perú | 785.000 | 15,00% | 61% |
| Bolivia | 510.000 | 9,20% | 47% |
| Colombia | 309.000 | 5,50% | 27% |
| Ecuador | 138.000 | 2,50% | 48% |
| Venezuela | 100.000 | 0,80% | 9% |

Fuente: Landázuri, 1987: 20, cit. en Jordán, 2001: 489.

Pilar García Jordán, hace en sus trabajos continuo hincapié sobre la tradicional falta de interés que, desde el punto de vista histórico, ha tenido la región amazónica a la cual se ha invisibilizado por haber sido considerada una tierra de espacios vacíos y habitados por poblaciones indígenas. Como señala la historiadora: *“a tal situación ha contribuido en buena medida, el desinterés de los historiadores que ha ninguneado la historia de la zona por considerar que era región de indígenas y, como en los presupuestos históricos tradicionales, estos no tenían historia (...)”* (ibíd., 487).

La misma imagen recoge la obra de Radcliffe y Westwood al cuestionar el imaginario que ha provocado la percepción del espacio amazónico como espacio vacío y deshabitado (1999: 172). Esta imagen de *terra nullius* ha propiciado la colonización de la Amazonía, basada ésta en la depredación irracional de los recursos naturales (Chirif, 1983).

Ahora bien, en los últimos años la región amazónica ha comenzado a adquirir mayor presencia por las riquezas que alberga, principalmente desde el punto de vista ambiental. De esta manera, la opinión pública ha adquirido un mayor conocimiento de dicha región. Tanto los ambientólogos como los antropólogos han contribuido a ello (Jordán, 2001: 487). La historiadora señala que para entender el concepto de “Amazonía” depende de los criterios que se usen en su conceptualización y propone tres: físico, político y geográfico (ibíd., 488).

La región amazónica abarca aproximadamente una extensión del 44% del total

¹³⁸ Pilar García Jordán en las Jornadas “Las voces de la Amazonía”, Barcelona, Mayo 2005.

del territorio de Sudamérica y está en su gran parte cubierta por selva tropical. Dicho territorio se conforma por el curso del río Amazonas y del río Orinoco además de sus afluentes. Se estima que la cuenca amazónica cuenta con entorno a 7,5 millones de km², limitando al Oeste con los Andes peruanos y ecuatorianos, en la parte este con el Océano Atlántico, en la parte septentrional con los Llanos y el Macizo del Orinoco y en la meridional con los altos llanos bolivianos, el Mato Grosso y la Sierra Roncador del Brasil (CEAM, 2005: 27). Para Bernal, esta región que alcanza casi los 8 millones de km², *“va desde el estuario o archipiélago de la Isla Marajó a nivel del Océano Atlántico en el Estado de Pará en Brasil, hasta las nieves perpetuas de la cordillera de los Andes en Perú y Bolivia, a 6000 m.s.n.m”* (2006: 40).

Es bien sabido que la cuenca amazónica supone la mayor masa de bosque tropical del planeta, hasta el punto de que *“alberga el 50% de la diversidad del planeta, estimado entre 5 y 30 millones de especies, con sólo 1,5 millones de especies clasificadas”* (CEAM, 2005: 27). Igualmente hay que destacar la riqueza cultural existente en su seno. Son numerosísimas las poblaciones étnicas que habitan en la cuenca amazónica. De esta manera destaca tanto la biodiversidad como la diversidad cultural, tan íntimamente ligadas entre sí. El ecosistema amazónico integra factores climáticos, de vegetación, fauna, y geológicos, que favorece el intercambio entre todos ellos, permitiendo la reproducción de este complejo biótico (Pacheco P., 1992: 11).

3. 2. 1. Confusiones conceptuales sobre la “Amazonía”. Diversidad de criterios.

Conforme a los diversos trabajos consultados se encuentran conceptos tan variables como Amazonía o selva amazónica, Amazonía legal, región amazónica o cuenca amazónica. La primera de ellas hace referencia al bosque amazónico entendido como selva amazónica. La Amazonía a menudo se refiere a un ecosistema particular. La Amazonía legal corresponde a una división sociogeográfica de Brasil, que comprende los estados de Rondonia, Amana, Amazonas, Acre, Mato Gross, Tocantins, Maranhao, Para y Roraima y la cuenca amazónica a una divisoria de aguas.

Bernal Zamudio examina las diferentes categorías referidas al espacio amazónico, y son las siguientes:

1. Selva Amazónica o Gran Amazonía con una extensión de 7.989.004 km².
2. Cuenca hidrográfica que cubre 7.352.112 km².
3. Para la Organización del *Tratado Amazónico de Cooperación* (OTCA), la extensión equivale a 7.590.083 km².

4. Para la *Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica* (COICA) la superficie alcanza 10.268.471 km² (2006: 41).

El mismo trabajo establece además, en base al estudio de Gutiérrez *et al.* (2004), cuatro subregiones geomorfológicas (*ibíd.*):

1. La Amazonía nororiental.
2. La Amazonía suroriental.
3. La Amazonía central.
4. La Amazonía occidental.

La polémica entonces está servida a la hora de definir los límites de esta región. Cada uno de los países que forman parte del *Tratado de Cooperación Amazónica* hace uso de definiciones particulares de su Amazonía nacional, lo cual constituye un reto para avanzar en una definición de los límites geográficos. Esta disyuntiva se procuró solventar en el año 2005 cuando se concluyó que la región amazónica no tendría porqué coincidir con la cuenca hidrográfica, más cuando ambas constantemente se ven modificadas tanto por intervenciones externas como por procesos naturales¹³⁹.

Figura 3. 2. Propuesta Amazonía.



Fuente: http://www.herencia.org.bo/index.php?q=amazonia_boliviana/contexto en base a los datos de CADMA, BID-PNUD.

¹³⁹ http://www.herencia.org.bo/index.php?q=amazonia_boliviana/contexto

La *Red Amazónica de Información Ambiental Georreferenciada* (RAISG) viene realizando desde su fundación en el año 1996 un trabajo interdisciplinar encaminado a lograr un consenso en cuanto al concepto de Amazonía. La pretensión de esta red es poder establecer una metodología de trabajo coordinada, a la vez que descentralizada, entre los países miembros de la región amazónica así como elaborar una base de datos integral que recoja información cartográfica digital de todos los países participantes. No obstante, reconocen las dificultades existentes aún a día de hoy al referirnos a esta región.

Fotografía 3. 1. Imagen de científicos deliberando los límites geográficos de la Amazonía.



Fuente: <http://www.raisg.socioambiental.org>.

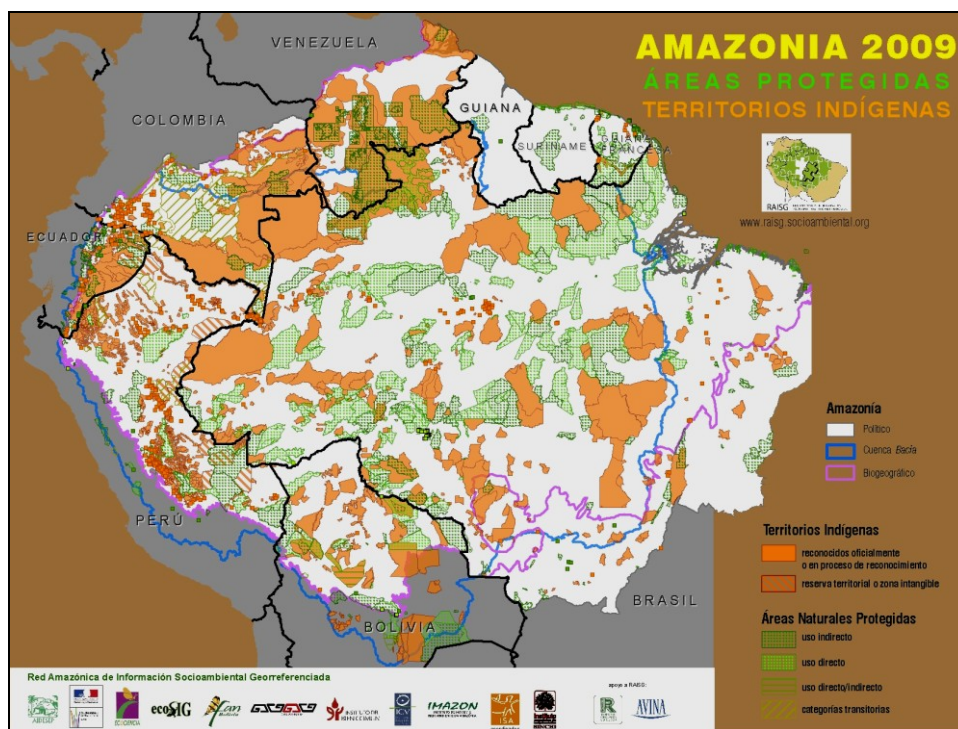
La RAISG ha establecido que la Amazonía sería “la sumatoria de los límites políticos de las regiones amazónicas de cada país”, donde “en Bolivia, Perú y Venezuela coinciden con el límite biogeográfico; en Ecuador y Colombia, corresponden a los municipios o las provincias que comprenden el límite biogeográfico; y para Brasil es una definición administrativa llamada *Amazonía Legal*”¹⁴⁰.

Desde el punto de vista hidrológico también se han propuesto divisiones como la de Harald Sioli quien distingue entre la cuenca alta del Amazonas, la media y la baja (1984a).

A continuación (véase **figura 3. 3**) se muestran los límites de la cuenca amazónica además de los biogeográficos, así como los territorios indígenas que se localizan al interior de dicho espacio.

¹⁴⁰ <http://www.raisg.socioambiental.org>.

Figura 3. 3. Cuenca amazónica y límites biogeográficos.



Esta imagen nos aporta una gran ventaja visual y es que queda demostrado de manera clara hasta qué punto el límite político no coincide con el biogeográfico ni con el establecido para la propia cuenca. Se estima la extensión de ésta en una superficie de 5.913.491 km². Por el contrario, la superficie sería mayor si se presta atención a criterios biogeográficos (donde Guyana y Surinam fueron agregadas por completo)¹⁴¹. De aquí se extraen algunos datos muy significativos y es que Surinam y Guyana Francesa quedarían fuera de la cuenca amazónica; Guyana y Venezuela apenas sí tendrían representación; Brasil y Colombia contarían con un área menor que la que marcan los límites políticos; mientras que los países andinos como Ecuador, Perú o Bolivia, verían ampliada su extensión¹⁴².

En el año 2005, según se mencionaba anteriormente, se llegó a un acuerdo acerca de los límites de este espacio geográfico, tras un taller de consultas a expertos, organizado por la Comisión Europea en colaboración con la *Organización del Tratado de Cooperación Amazónica*. Los criterios manejados a la hora de elaborar una definición de lo que consideraron región amazónica fueron fundamentalmente tres:

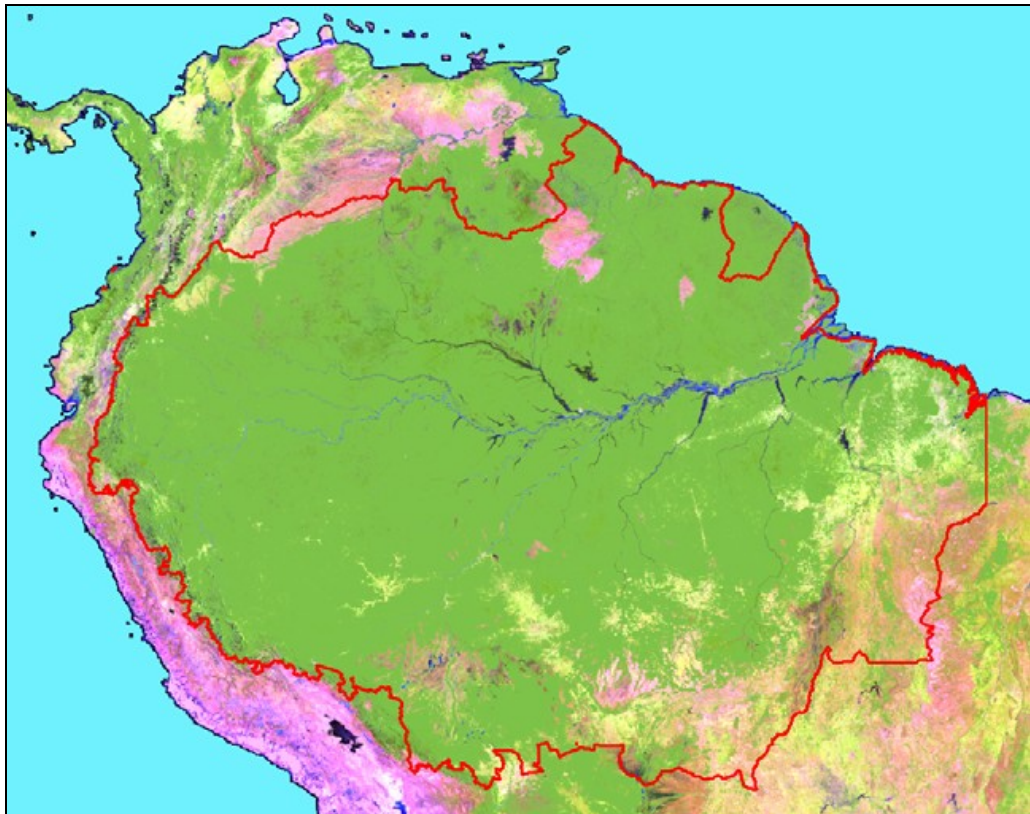
1. Criterio hidrográfico.
2. Criterio ecológico.
3. Criterio biogeográfico.

¹⁴¹ <http://www.raisg.socioambiental.org>.

¹⁴² *Ibíd.*

El primero de ellos hace referencia a la extensión de tierra regada por el río Amazonas y Tocantins y constituye el “*elemento central de la definición*”; el criterio ecológico dividiría a esta región en diversas ecorregiones y el biogeográfico se basa en la “*extensión históricamente conocida del bioma forestal amazónico de tierra baja (Amazon lowland rainforest)*” (Eva y Huber, 2005: 10). El resultado de la combinación de dichos criterios de ordenación se aprecia en la siguiente figura.

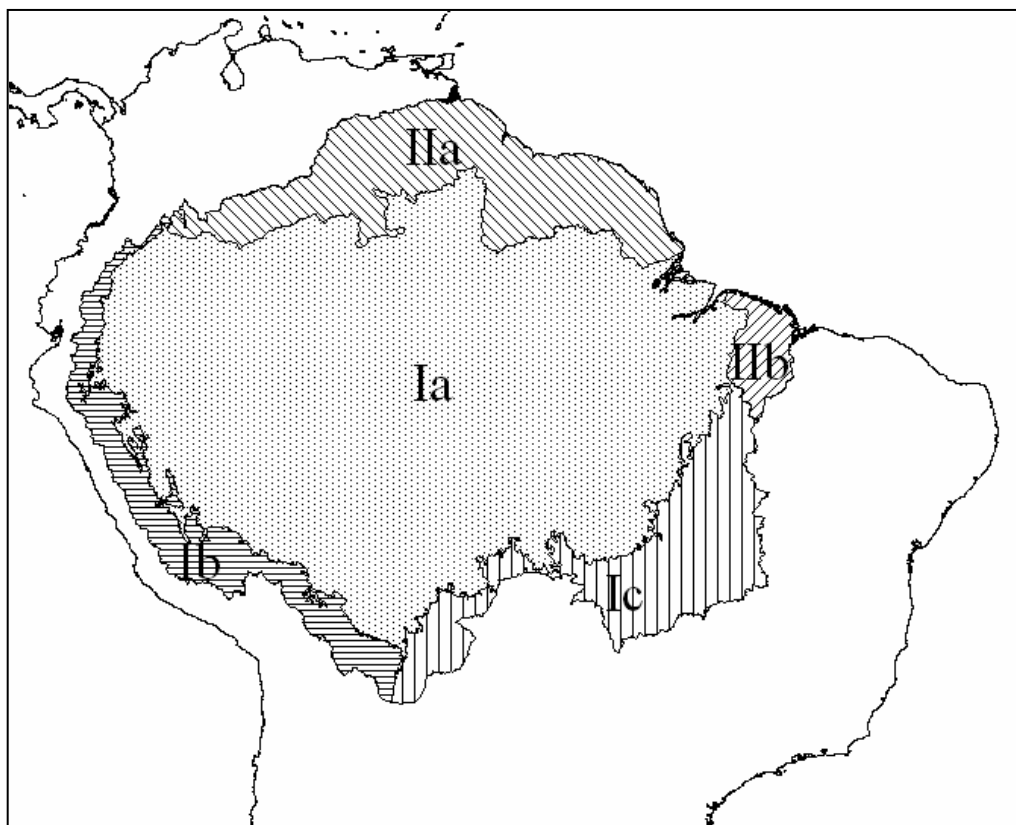
Figura 3. 4. Delimitación geográfica de la Amazonía



Fuente: Eva y Huber, 2005: 2.

No obstante esta amplia región viene subdividida a su vez por 5 subregiones, las cuales corresponderían a la Amazonía, estrictamente dicha; la subregión de los Andes; de Planalto; Guayana y de Guripí. Las tres primeras se adscriben a criterios ecológicos y biogeográficos a diferencia de las dos restantes delimitadas en función de la “*presencia del bioma forestal amazónico de tierra baja*” (ibíd.). Conforme a esta nueva subdivisión la figura resultante sería la siguiente.

Figura 3. 5. Mapa Amazonía y subregiones.



Fuente: *ibíd.*, 11.

UNIDAD I = Cuencas de los ríos Amazonas y Tocantins [*“Cuenca Amazónica Total”* o *“Amazonía hidrográfica”*]

Ia = Área de las cuencas de los ríos Amazonas y Tocantins cubierta por el bioma forestal amazónico de tierra baja [*“Amazonía sensu stricto”*]

Ib = Andes (Área de la cuenca amazónica andina cubierta por biota montanos y alti-andinos, no de tierra baja (> 700 msnm))

Ic = Planalto (Área de la Amazonía meridional (en las cuencas de los ríos Amazonas y Tocantins) cubierta por biota no-forestales)

UNIDAD II = Áreas ubicadas fuera de la Unidad I, pero cubiertas por el bioma forestal amazónico de tierra baja

IIa = Guayana

IIb = Gurupí

Ia + IIa + IIb = Dominio total del bioma forestal amazónico de tierra baja [*“Hylaea”* o *“Amazonía sensu lato”*]

I + II = Cuencas de los ríos Amazonas y Tocantins + área del bioma del bioma forestal amazónico de tierra baja ubicado fuera de la Cuenca Amazónica [*“Amazonía sensu latissimo”*]

[términos entre corchetes = denominaciones alternativas]

Cuadro 3. 7. Superficie subregiones Amazonía.

| Subregión | Superficie (km ²) | % de superficie |
|---------------------|-------------------------------|-----------------|
| Ia. Amazonía | 5.569.174 | 68 |
| Ib. Andes | 555.564 | 7 |
| Ic. Planalto | 864.951 | 11 |
| IIa. Guayana | 970.161 | 12 |
| IIb. Gurupí | 161.463 | 2 |
| Total | 8.121.313 | 100 |

Fuente: *ibíd.*, 14.

Queda comprobada la variabilidad en cuanto se refiere al establecimiento de una definición sobre el concepto de Amazonía. Frente a la diversidad de concepciones, los países que forman parte de esta región están encaminando sus esfuerzos en concebir a la Amazonía como un espacio bien definido desde el punto de vista geográfico (los sistemas de información geográfica y un sistema de monitoreo son la herramienta principal con las que trabajan). Y esto por una razón principalmente y es que a la hora de diseñar e implementar políticas dirigidas a lograr un desarrollo sostenible en la región es necesario que todos los países pertenecientes a la Amazonía compartan una serie de directrices de acción integral y los mismos patrones de actuación en las estrategias que tomen. Únicamente de esta manera se podrá generar un desarrollo equitativo que beneficie a todos los países por igual, sin privilegiar a unos sobre otros o favorecer unas regiones en detrimento de otras o unas poblaciones sobre otras. Si se generan acuerdos entre los países miembros, sería positivo que se ajustasen a cierta delimitación biofísica porque de otra manera podrían prevalecer los intereses políticos. Es por ello que cada uno de los países debe aceptar por unanimidad y sin dejar lugar a dudas la extensión y los límites del territorio amazónico al emprender cualquier tipo de proceso político, económico, ecológico o sociocultural encaminado a impulsar el desarrollo integral amazónico.

3. 2. 2. Ecosistemas amazónicos.

Por el contrario y tomando en cuenta a la Amazonía como ecosistema, ésta se halla dividida en 3 ecosistemas diversos que sintetizan el gran mosaico que supone la diversidad de esta región. Estos corresponderían según Pilar Jordán a la *várzea*; *tierra firme* y la *selva alta* (2005: 51). El primero viene referido al ecosistema que se localiza en el llano y en el bajo Amazonas, es decir, la selva baja o el llano amazónico que se sitúa entre los 200 y los 400 metros sobre el nivel del mar; la tierra firme o llanura alta alcanza los 1.000 metros sobre el nivel del mar; por último la selva alta se encuentra

entre los 1.000 y 3.000 metros sobre el nivel del mar y es el lugar que alberga el nacimiento de los ríos amazónicos (*ibíd.*).

João Murça clasificó los bosques amazónicos en *tierra firme*, *várzea* e *igapó* (1984). Aunque por las mismas fechas otros autores distinguieron por su parte dos hábitats bien diferenciados: la *tierra firme* y la *várzea* por lo que se asemeja a la distinción establecida por Jordán, a excepción de la selva alta, que en este caso no queda incorporada a la clasificación de estos trabajos (Meggers, 1984; Sioli, 1984a; Junk, 1984). La *tierra firme* corresponde a las tierras que se localizan entre los ríos de la cuenca amazónica, así como a los márgenes de los ríos de aguas negras y claras que supone el 98% de la región amazónica, lo cual deja a la *várzea* con el sólo 2% del resto del territorio amazónico correspondiente a las zonas de inundación y a los ríos de aguas blancas (Meggers, 1984: 630). Años más tarde, otros trabajos se harían eco del trabajo de Meggers para revalidar la división de la Amazonía en *tierra firme* y *várzea* (Morán, 1995; Carneiro, 1995). Si bien Morán, no del todo convencido con tal clasificación, divide a su vez ambas en varias subregiones: la zona baja, alta y el estuario para el ecosistema de la *várzea* y otras 5 zonas para la *tierra firme* entre las que se incluye las sabanas y como ejemplo pone los Llanos de Mojos (1995: 74-82).

La *várzea* viene considerada como “un complejo sistema de lagos, ríos canales, pantanos, islas y embalses” que almacenan parte de las aguas de los ríos durante las inundaciones para devolverlas a estos cuando el nivel de aquellos desciende (Junk, 1984: 238). En estas zonas, al encontrarse próximas a ríos y arroyos se produce un intercambio de nutrientes y material orgánico entre la vegetación terrestre y acuática (*ibíd.*, 234-235). Si por lo general los suelos de la Amazonía han sido considerados pobres en nutrientes, Junk defiende lo contrario resaltando la “alta fertilidad de los suelos aluviales” de la *várzea*, a pesar de que para ello se base en la gran cantidad de especies de peces y otros animales acuáticos así como en la alta cantidad de sedimentos que aportan los ríos de aguas blancas (*ibíd.*, 236). Estas áreas poseen además una enorme importancia para actividades como la agricultura y ganadería ya que al estar exentas de inundación pueden librarse del impacto negativo de ésta. Pese a que no exista unanimidad a la hora de determinar el origen de la *várzea*, trabajos como el de Junk proponen que estas áreas pudieron haber surgido debido a que durante el periodo glacial se formaron en la Amazonía central profundos y anchos valles que fueron rellenados con sedimentos del terciario y posteriormente -periodo interglacial- subió el nivel del mar, provocando que los ríos de aguas blancas precipitasen nuevos procesos de sedimentación en tales valles, dando lugar a la aparición de la *várzea* (*ibíd.*, 218).

Para Michael Eden el término *várzea* se aplica a las zonas inundables por los ríos de aguas blancas, aunque en un contexto más amplio se puede incluso referir a casi

cualquier área “estacionalmente-inundada” (1990: 26). La falta de consenso acerca del origen de la *várzea* se debe como bien señala Sioli a que esta unidad geográfica se encuentra en continuo proceso de construcción-destrucción-reconstrucción por la acción de los ríos (1984b: 687).

Michael J. Eden considera a la Amazonía como la unidad fitogeográfica que viene siendo denominada como “*hylaea*” –referida al ecosistema correspondiente al bosque tropical amazónico- la cual “*va mas allá de los márgenes de la cuenca de los afluentes del Amazonas*” (1990: 2-3 y 39). Eden propone además prestar especial atención al análisis de las sabanas y a los humedales, ecosistemas ambos que conforman el bosque amazónico y los cuales presentan características diferentes (*ibíd.*, 3). Cuestiona asimismo la muy simplificada distinción entre tierra firme- *dryland* o *upland*- y várzea-*wetland* o *floodplains*- que se ha venido realizando por la mayor parte de los estudios sobre la Amazonía, sumándose a aquellos –como Emilio Morán- que discrepan acerca de la simplificación del espacio amazónico en esos dos ecosistemas (1990: 12 y 40). Morán rechaza esta dicotomía entre tierra firme y várzea como áreas ecológicamente diferentes (1995: 71-95). A pesar de que este autor critique tal simplificación, se ve obligado a admitir en base a tantos estudios previos la distinción entre ambos ecosistemas (llega a reconocer que “*la mayoría de los ecólogos y antropólogos continúan dependiendo de la distinción entre la tierra firme y várzea*” aún a sabiendas de las diferencias internas) y utiliza tales categorías de manera idéntica al resto de trabajos (*ibíd.*, 117). No obstante, reclama para todo este conjunto de investigaciones mayor atención a las disimilitudes ecosistémicas en pro del reconocimiento de la heterogeneidad y diversidad interna de las unidades ecológicas (1993). En la misma línea defiende Carlos Junquera las disparidades que se encuentran en el “*mosaico de ecosistemas*” amazónicos si atendemos las formaciones vegetales y los criterios biogeográficos (1995: 14).

Para finalizar con este epígrafe y teniendo en cuenta la definición sobre los límites de la Amazonía propuesta por la RAISG, se podría afirmar con rotundidad que el territorio mojeño-ignaciano se inserta en dicha región, a pesar de que otras fuentes no lo admitan, como veremos a continuación.

3. 3. LA AMAZONÍA BOLIVIANA.

Al igual que sucedía con el significado y alcance territorial del concepto de Amazonía, para la región amazónica boliviana sucede lo mismo. No existe una definición o una expresión específica referida a ésta. Varios trabajos examinan la caracterización de la región como espacio, territorio, zona o área geográfica (Molina W.,

Vargas C. y Soruco, 2008; Molina W. *et al*, 2008). En estos estudios se admite que en función de la perspectiva asumida –geográfica, ecológica o incluso sociológica- la dimensión del concepto se verá alterada. Ambos trabajos explican el uso indiferenciado que algunos intelectuales hacen entre la región amazónica de Bolivia y el departamento del Beni a los que equiparan con la Amazonía; otros en cambio la piensan como un espacio territorial más amplio (*ibíd.*, 44-45; *ibíd.*, 62-63).

La conformación desde el punto de vista sociohistórico del espacio amazónico boliviano se puede dividir en 3 periodos: el precolombino, el misional y el periodo republicano, en los cuales se fueron configurando los departamentos amazónicos del Beni y Pando durante la ocupación de la pampa mojeña por parte de las misiones jesuíticas y la masiva migración desencadenada a causa del proceso de explotación forestal y ganadera a partir del siglo XIX (Molina W., Vargas C. y Soruco, 2008: 16-17).

Otros estudios distingue entre:

- Amazonía boliviana,
- Selva o Hylea amazónica,
- Región amazónica boliviana¹⁴³

La primera retoma un criterio fisiográfico dado que hace referencia a la superficie que cubre el escurrimiento de las aguas de la cuenca y subcuencas amazónicas, por lo que se podría decir que esta visión asume un “*sustrato teórico (...) eminentemente hídrico*”, ocupando en torno al 70% del territorio nacional. La selva o hylea amazónica corresponde a la selva o bosque amazónico, con una superficie del 35% del país y combinando para su delimitación la dimensión hídrica junto con la biodiversidad (*ibíd.*). Esta región estaría conformada “*por un mosaico de extensos bosques húmedos tropicales, sabanas de inundación, bosques semihúmedos de transición hacia el Cerrado y el Chaco, y bosques tropicales subandinos, caracterizados por su elevada biodiversidad*”¹⁴⁴. Por último, la región amazónica boliviana constituiría el “*área geográfica contenida dentro de las dos definiciones anteriores*”, pero se le añade el factor socioeconómico y cultural referido a las acciones humanas emprendidas en esta región en base a estrategias de explotación y de apropiación de este espacio (*ibíd.*).

En cuanto al mapa forestal boliviano (véase **mapa 3. 3**) se refiere, el país se divide en 4 regiones: La Amazónica, la Chiquitana, la Chaqueña y la Andina, siendo la primera de ellas la que mayor superficie ocupa en relación a la extensión del territorio nacional (véase **cuadro 3. 8**).

¹⁴³ http://www.herencia.org.bo/index.php?q=amazonia_boliviana/criterios

¹⁴⁴ <http://www.raisg.socioambiental.org>.

Cuadro 3. 8. Regiones forestales de Bolivia y su extensión.

| Región | Área en Millones de Hectáreas |
|-------------------|-------------------------------|
| Amazónica | 22,2 |
| Chiquitana | 7,5 |
| Chaqueña | 10,1 |
| Andina | 13,7 |
| TOTAL | 53,5 |

Fuente: <http://www.cfb.org.bo/CFBInicio/BoliviaForestal/Bosques%20Naturales.htm>

La región amazónica se ubica, según fuentes de la *Cámara Forestal de Bolivia*, en el Norte y Noreste del territorio nacional, en el espacio comprendido entre los ríos Heath, Beni, Mamoré, San Miguel e Itonamas, desde el pie de los Andes hasta los ríos Abuná y Acre hacia el Norte. Presenta una cobertura vegetal caracterizada principalmente por dos formaciones: los bosques localizados en los “paisajes de llanura con una topografía casi plana a ondulada y las sabanas de gramíneas con bosques de galería e islas de bosque, sobre topografía plana a ligeramente ondulada” (ibíd.). Diversos factores como lo son las condiciones climáticas especiales, la localización geográfica o la edafología, convierten a la región amazónica en un espacio geográfico en el que se concentran diferentes tipos de formaciones forestales:

- “Bosque denso mayormente perennifolio ombrófilo de baja altitud en llanura de relieve ondulado.
- Bosque denso mayormente perennifolio ombrófilo de baja altitud en llanura plana a ondulada no inundable.
- Bosque denso mayormente perennifolio ombrófilo de baja altitud en llanura plana a ligeramente ondulada, inundable.
- Sabana arbórea o arbustiva con islas de bosques dispersas en llanura suavemente ondulada”¹⁴⁵.

Autores como Zeitum se posicionan firmemente declarando que es preferible el uso del concepto de región amazónica boliviana, contrario al de cuenca amazónica dado que esta última “no expresa más que un escurrimiento sin imbricación en la topografía, menos en habitáculos, ni en la morada del hombre (...) tampoco en el carácter del morador, lo puede dar lugar a la confusión” (1991: 9). Sin embargo, no es del todo común tener en consideración el factor humano en el conjunto de definiciones de este espacio.

Pablo Pacheco, haciendo referencia a la disparidad de criterios utilizados en cuanto a la definición de Amazonía, se inclina por considerar a este espacio como

¹⁴⁵ <http://www.cfb.org.bo/CFBInicio/BoliviaForestal/Bosques%20Naturales.htm>

geosistema amazónico (1992). A pesar de reconocer la predominancia de aquellas definiciones que prefieren el uso de términos como cuenca e hylea amazónica, insiste en la existencia de otras en las que se tiene en cuenta “*cierta homogeneidad ecológica, una cierta identidad étnico-cultural y un estado uniforme de desarrollo*” (ibíd., 8). Sin embargo, atendiendo a esta aproximación bien sea de cuenca, hylea o región amazónica, se atenta contra la heterogeneidad que envuelve a este espacio que si por algo se caracteriza es por su enorme complejidad. De hecho, veremos a continuación cómo en relación al ecosistema amazónico las sabanas inundables de Mojos contribuyen a convertir esta región en un mosaico paisajístico y biológico singular. Del mismo modo choca con la imagen del paisaje de la selva tropical amazónica de Bolivia, definida como:

“amplia masa boscosa de características casi homogéneas, donde las innumerables variedades de especies forestales se ocultan en una extensa vegetación siempre verde, cruzada por grandes corrientes de agua que conforman ríos de importantes dimensiones, en su curso hacia el Amazonas” (ibíd., 11).

Veremos de qué manera la llanura inundable de Mojos rompe esta continuidad paisajística, al introducir diferentes unidades fisiográficas como pueden ser las islas de bosque o bosques de galería, pampas, bosques inundables, yomomos, etcétera, para conformar el escenario natural caracterizado por las particularidades geográficas y morfológicas de la sabana mojeña.

Algo similar sucede cuando se pretende conferir una imagen de planicie horizontal a la Amazonía boliviana, la cual no es ni mucho menos una extensión plana sin relieve a pesar de las bajas altitudes (Zeitum, 1991: 13) que alcanzan casi los 7.000 metros de altitud en la región andina.

Pese a la imagen de país andino que le ha sido otorgada a Bolivia, éste es un país que viene ocupado en más de un 65% de su territorio nacional por la cuenca amazónica, siendo la superficie de ésta alrededor de 724.000 Km² (véase **figura 3. 6**). La gran mayoría de estudios coinciden en afirmar la existencia en Bolivia de las siguientes cuencas hidrográficas¹⁴⁶:

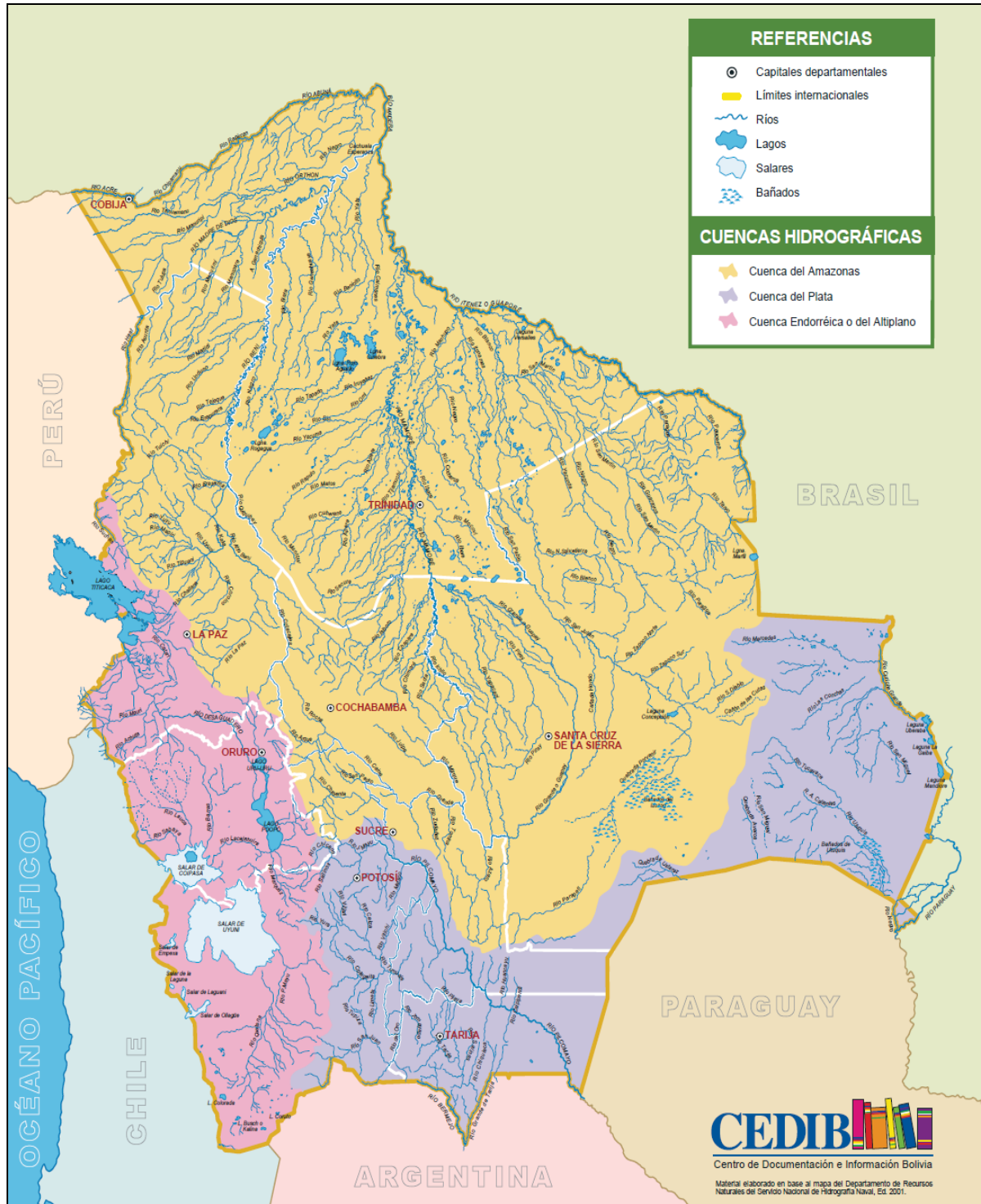
- la cuenca del Amazonas
- la cuenca del Plata
- la cuenca del Altiplano o Cerrada.

De entre estas, la cuenca del Amazonas sería la más importante por la extensión

¹⁴⁶ La Cuenca del Orinoco no atraviesa suelo boliviano.

en relación a la superficie del país. La cuenca amazónica boliviana comprende una vasta superficie que se extiende desde la Cordillera de los Andes hasta “*el sistema orográfico chiquitano en el oriente*”, toda la “*mitad septentrional*” del país (Muñoz Reyes, 1991:81).

Figura 3. 6. Mapa hidrografía de Bolivia



Fuente: CEDIB, en <http://www.cedib.org/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/Mapa-4-Hidrografia.pdf>

Cuadro 3. 9. Principales vertientes hidrográficas de Bolivia.

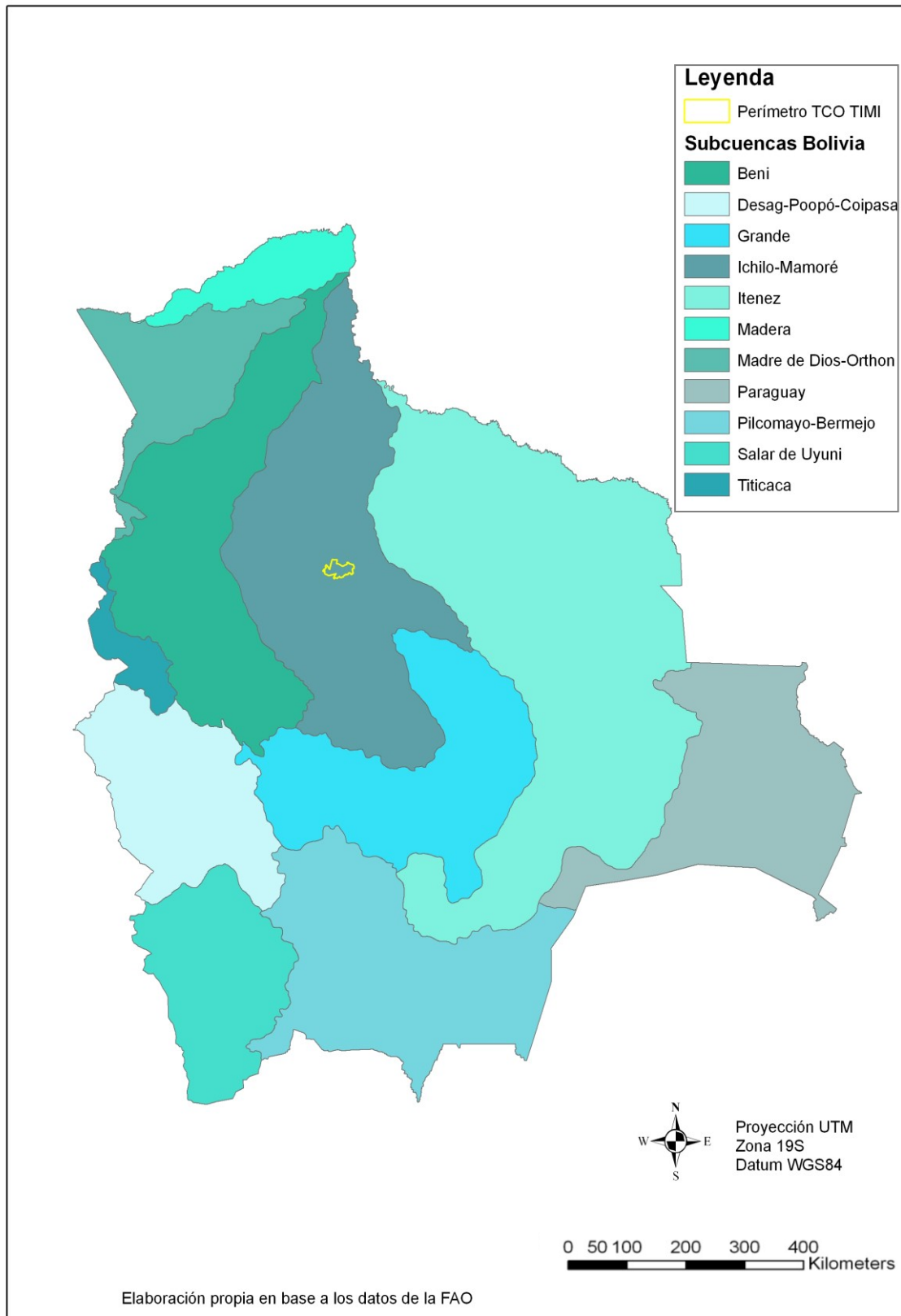
| Vertiente | Principales ríos | Superficie drenada ⁽¹⁾ (km ²) | Escorrentía media anual (km ³) | Rendimiento específico (mm/año) |
|--------------|---|--|--|---------------------------------|
| Amazonas | Madre de Dios, Orthon, Abuna, Beni, Grande, Mamoré e Iténez | 887 990 | 572 | 648 |
| Plata | Pilcomayo, Bermejo, San Juan y Paraguay | 234 648 | 47,5 ⁽²⁾ | 202 |
| Altiplano | Desaguadero, Lago Titicaca, Poopó, Salares de Uyuni y Coipasa | 191 293 | 14,7 | 77 |
| Total | | 1 366 400 | 627,8⁽²⁾ | 288 |

Fuente: http://www.fao.org/nr/water/aquastat/countries_regions/bolivia/indexesp.stm

Otras fuentes consultadas, como la FAO, han contribuido al aporte de información relativa a la subdivisión de las cuencas. Para la FAO, la cuenca amazónica boliviana “*corresponde a la mitad superior de la cuenca del río Madeira, una parte de la cual pertenece a Perú (12%) y otra a Brasil (16%)*”¹⁴⁷ (véase **mapa 3. 5**). La imagen que aparece a continuación incluye los límites del *Territorio Indígena Mojeño Ignaciano*. De esta manera, se pudo visualizar la ubicación exacta de dicho territorio en relación a la cuenca en la que se inserta. Concretamente corresponde a la subcuenca del Beni, que conforma junto con otras tres cuencas, la cuenca amazónica de Bolivia.

¹⁴⁷ http://www.fao.org/nr/water/aquastat/countries_regions/bolivia/indexesp.stm

Mapa 3. 5. Subcuencas de Bolivia



Es preciso aclarar a qué nos referimos cuando hablamos de Amazonía boliviana. Algunos estudios proporcionan una definición en la que se articulan tanto elementos geográficos como ecológicos y definen a la región amazónica como *“unidad ecológica y humana”* referida a un *“ecosistema definido y singular, caracterizado de manera clásica por un espacio plano, por un grado de humedad ambiente, una precipitación pluviométrica promedio anual, una determinada recepción solar, etc., que hace de la floresta circundante el bosque húmedo tropical amazónico, con características suigéneris exclusiva, cuyo entorno es el hábitat de una fauna singular y la morada de un hombre que tiene una especial respuesta ante su mundo circundante”*¹⁴⁸. Se contempla la región amazónica boliviana de una parte como la extensión de tierra que viene regada por los afluentes del río Amazonas que en el caso de Bolivia son los que aparecen en la siguiente tabla.

Cuadro 3. 10. Principales ríos de la cuenca amazónica boliviana.

| Nombre | Cuenca | Subcuenca | Desde | Hasta | Longitud (Km) |
|----------------|-----------|-----------|--|--|---------------|
| APERÉ | Amazónica | Mamoré | Serranías Eva Eva (Dpto. Beni) | Río Mamoré (Dpto. Beni) | 250 |
| BENI | Amazónica | Beni | Nevado Chacaltaya (Dpto. La Paz) | Río Mamoré, Villa Bella (Dpto. Beni) | 980 |
| ITÉNEZ GUAPORÉ | Amazónica | Mamoré | Boca del río Verde (frontera con Brasil) | Río Mamoré (Dpto. Beni) | 600 |
| ITONOMAS | Amazónica | Mamoré | San Ramón (Dpto. Santa Cruz) | Río Mapucho, La Horquilla (Dpto. Beni) | 820 |
| MADRE DE DIOS | Amazónica | Beni | Puerto Heath, frontera con Perú (Dpto. La Paz) | Riberalta, río Beni (Dpto. Beni) | 1,700 |
| MAMORÉ | Amazónica | Mamoré | Tiraque (Dpto. Cochabamba) | Villa Bella (Dpto. Beni) | 2,000 |
| MADIDI | Amazónica | Beni | Serranía Jatumari (Dpto. La Paz) | Puerto Cabinas, río Beni (Dpto. Beni) | 320 |
| PARAGUÁ | Amazónica | Mamoré | Santa Anita, San Ignacio de Velasco (Dpto. Santa Cruz) | Río Iténez Guaporé, puerto Engaño (Dpto. Beni) | 380 |
| YACUMA | Amazónica | Mamoré | Serranía del Pílon (Dpto. Beni) | Río Mamoré (Dpto. Beni) | 260 |
| YATA | Amazónica | Mamoré | Lago Rogaguado | Río Mamoré, | 480 |

¹⁴⁸ Instituto de Estudios Amazónico de Riberalta.

| | | | | | |
|--|--|--|--------------|----------------------|--|
| | | | (Dpto. Beni) | Yata (Dpto. Beni) | |
|--|--|--|--------------|----------------------|--|

Fuente: Zeitum, 1991: 11.

El conjunto de ríos que aparecen en el cuadro superior (**3. 10**) son los afluentes bolivianos del río Amazonas. Por lo general son ríos caudalosos y meandriformes, lo cual facilita la formación de lagos y lagunas. Según se aprecia, el más importante –no sólo de la región sino de todo el país boliviano– es el Mamoré, que tiene una longitud de 2.000 km y el cual conforma parte de la frontera entre Bolivia y Brasil. En su recorrido desembocan numerosos afluentes. De entre todos ellos el principal es el Iténez o Guaporé. Finalmente forma el río Madera, en su confluencia con el río Beni, que alcanza una longitud de casi 1000 Km.

En la cuenca amazónica boliviana se distinguen dos ecosistemas: el ecosistema de la sabana o pampa y el ecosistema de la hylea amazónica (*ibíd.*, 14). Dicha cuenca comprende las cuatro subcuencas que aparecen en el **cuadro 3.11**. Estas cuencas están a su vez constituidas por otras subcuencas.

Cuadro 3. 11. Subcuencas de la cuenca amazónica boliviana.

| | |
|---------------------------------|--|
| Subcuenca del Río Beni | Beni, Kaka, Orthon, Madidi, Madre de Dios, Tahuamanu, Manuripi, Heath, Geneshuaya, Biata, Ivon, Benicito, Maupare, Manurimi, Esmeralda, Negro I, Negro II, Emero, Tejeque, Tuichi, Inambari, Toromona |
| Subcuenca del Río Mamoré | Mamoré, Itonamas, Iténez, Baures-Concepción, Sécore, Chipiriri, Grande-Guapay, Ichilo, Apere, Yacuma, Piray-Río Grande, Yata, Pargua |
| Subcuenca del Río Madera | Beni, Mamoré, Abuna |
| Subcuenca del Río Acre | Acre |

Fuente: *ibíd.*, 59-60.

Zeitum lamenta lo desaprovechada que se encuentra la red fluvial amazónica de Bolivia y el escaso apoyo recibido por parte de los gobiernos a pesar de la articulada coherencia interna que presenta, pudiendo haber constituido un elemento primordial en el desarrollo de la región y, en definitiva, del conjunto del país (*ibíd.*, 60-61).

Retomando el debate sobre la concepción del espacio amazónico boliviano, cabe añadir que otras investigaciones como la de Castillo han optado por la denominación de Amazonía boliviana (2001) a la que considera una “*vasta región natural (...) constituida de tierras bajas a clima calido y húmedo, cubierta por selva ecuatorial*”, la

cual está dividida por cuatro “*zonas ecológicas*” (2001: xix). Éstas serían de manera sintética el Sudeste (región del Chaco) donde predominan los bosques claros semi-húmedos; el Este (departamento de Santa Cruz), caracterizado por la presencia de selva o bosque húmedo bajo y montañoso; el Noroeste conformado por la llanura inundable de Mojos y las cuencas fluviales de los ríos Madre de Dios, Beni y Mamoré, zona de selva tropical húmeda y hacia el Sur una franja montañosa de la vertiente oriental de la cordillera de los Andes, cubierta por selva húmeda tropical (*ibíd.*).

Son diversas las estimaciones que reflejan la superficie referente a la cuenca amazónica en base al territorio boliviano. Algunos estudios proponen que en Bolivia son 724.000 km² los que pertenecen a la cuenca amazónica, lo cual supone alrededor de un 67% (Romero I. y Pastó, 2003: 15). Para otros investigadores como Pablo Pacheco “*El área amazónica considerada cubre una superficie de 595.661 Km², comprendida dentro de la cuenca del Amazonas. Abarca la totalidad de los departamentos del Beni y Pando y parte de los departamentos de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba*”, lo cual significa que el 80% del territorio de las tierras bajas de Bolivia se inserta en la región amazónica (1998: 56). En cambio, el estudio elaborado por la CUMAT “*estimó que los bosques cubrían un 68% de la superficie total de la Amazonía boliviana (402.537 Km²)*” (*ibíd.*).

Por otra parte esta región se caracteriza por un ecosistema caracterizado por cierta uniformidad. Zeitum intentan aclarar lo que se entiende por región amazónica boliviana y para ello la definen como “*uniforme espacio geográfico regido por un ecosistema*” (1991: 9). Si bien es cierta la existencia de un ecosistema regido por componentes naturales presentes en todo el conjunto de la región, también al interior de ésta encontramos una amplia variedad en cuanto a unidades fitogeográficas. De echo, la propia autora llama la atención sobre la diversidad ecosistémica las regiones al interior de la cuenca amazónica de Bolivia con la “*hilea del bosque tropical húmedo*” y las sabanas mojeñas, y regiones como la andina, la chaqueña o la platense (*ibíd.*, 15). La región de las sabanas mojeñas abarcaría las provincias Nuño de Chávez, Velasco y Guarayos del departamento de Santa Cruz, la provincia Iturrealde (departamento de La Paz), las provincias Vaca Díez, Ballivián, Yacuma, Mamoré e Iténez (departamento del Beni) y el conjunto de las cinco provincias del departamento del Pando: Nicolás Suárez, Abuná, Federico Román, Manuripi y Madre de Dios (*ibíd.*, 14-15).

Desde un enfoque sociológico algunos estudios han prestado mayor atención a los aspectos sociales en referencia a la construcción del territorio amazónico como concepto transdepartamental (Molina W., Vargas C. y Soruco, 2008). En base a investigaciones de la historiadora Pilar Gamarra (2003), estos autores argumentan que hasta principios del siglo pasado la región amazónica de Bolivia estaba, desde el punto

de vista de la geopolítica, aún en ciernes, atreviéndose a afirmar que “*la Amazonía no tiene existencia específica en el imaginario geográfico del Estado, ya sea en calidad de espacio o de territorio*” y que a pesar del reconocimiento que ha adquirido esta región de manos de la opinión pública internacional por su importancia ecológica, “*el Estado no logra desplazar en su imaginario su condición periférica*” (*ibíd.*, 15). Sería en la década de los ochenta cuando desde el Gobierno se comenzó a considerar la Amazonía en su dimensión desarrollista, como región integrante en la ordenación del territorio. Sin embargo, la escasa efectividad que tuvieron las políticas de desarrollo en la región amazónica explica la inexistencia de unas condiciones dadas que permitiesen la construcción de una identidad amazónica, lo cual se debe principalmente a la territorialización institucional y de identidades en departamentos y municipios (*ibíd.*, 15-16). Estos elementos forman parte de una misma realidad pero se sitúan en distintos escenarios de acción. Las coordenadas teóricas manejadas para uno y otro no son coincidentes. Esto desencadena un desequilibrio entre la propuesta de la construcción social del territorio en la región amazónica y las propuestas con vistas a la conservación y el desarrollo de las instituciones de los municipios reales (*ibíd.*, 16).

Desde una perspectiva mas antropológica “*lo amazónico puede ser entendido, por tanto, como una identidad abarcadora de las varias identidades que transitan en ese territorio*”; aunque al máximo se admite cierta identidad en el proceso de construcción del espacio amazónico que envuelve una compleja variedad cultural y pese a que desde la esfera estatal se haya definido la Amazonía como “territorio ecológico”, los propios habitantes de esta región no han asumido esta identidad regional como tal (*ibíd.*, 80). Esto puede ser debido a la fuerte influencia ejercida por las reducciones creadas durante el periodo misional, cuando las antiguas parcialidades étnicas quedaron divididas en distintos sectores, participando en nuevos procesos de adscripción étnica. Así fue surgiendo un amplio catálogo étnico: ignacianos, loretanos, trinitarios, javerianos, chimanes, movimas, yuracarés, sirionós, guarayos, baures o morés, que dificultaron la emergencia de una identidad amazónica.

3. 4. LOS LLANOS DE MOJOS DEL DEPARTAMENTO DEL BENI.

El departamento del Beni fue creado en el año 1842 por el Mariscal de Ingavi José Ballivián integrando en el mismo a las antiguas provincias de Mojos, Yuracarés y Caupolicán, que correspondería a la “*antigua jurisdicción geográfica del Gran Mojos o Gran Paititi*” (Lijerón, 1997: 70). Este departamento se inserta en las tierras bajas que forma parte de la Amazonía boliviana (Molina W. y Soleto, 2002: 43). El mismo ocupa en la actualidad una extensión de 213.564 Km², o lo que viene a ser lo mismo, el 19% del territorio total nacional, siendo el segundo más grande en superficie del país (Montes de Oca, 1989: 49), con la ciudad de Trinidad como capital. Se encuentra a su vez dividido en ocho provincias: Cercado, Ballivián, Iténez, Mamoré, Marbán, Mojos, Vaca Díez y Yacuma, las cuales se dividen en municipios y estos en secciones. Cuenta con una población total de 362.521 habitantes (INE, censo 2001). Los límites geográficos del departamento del Beni son el departamento del Pando al Norte; al Noreste el estado de Rondonia de Brasil; al Sur limita con el departamento de Santa Cruz; con el departamento de Cochabamba al Suroeste y con el de La Paz al Oeste.

Cuadro 3. 12. Provincias y capitales de provincia del departamento del Beni.

| PROVINCIA | CAPITAL PROVINCIA |
|----------------|----------------------|
| Cercado | San Javier |
| Vaca Díez | Riberalta |
| José Ballivián | Reyes |
| Yacuma | Santa Ana de Yacuma |
| Mojos | San Ignacio de Mojos |
| Marbán | Loreto |
| Mamoré | San Joaquín |
| Iténez | Magdalena |

Fuente: Montes de Oca, 1989: 49.

En cuanto interesa al presente trabajo, la Provincia de Mojos se presenta dividida en 4 cantones que a su vez están conformados por localidades.

Cuadro 3. 13. Relación de los cantones y localidades de la provincia de Mojos.

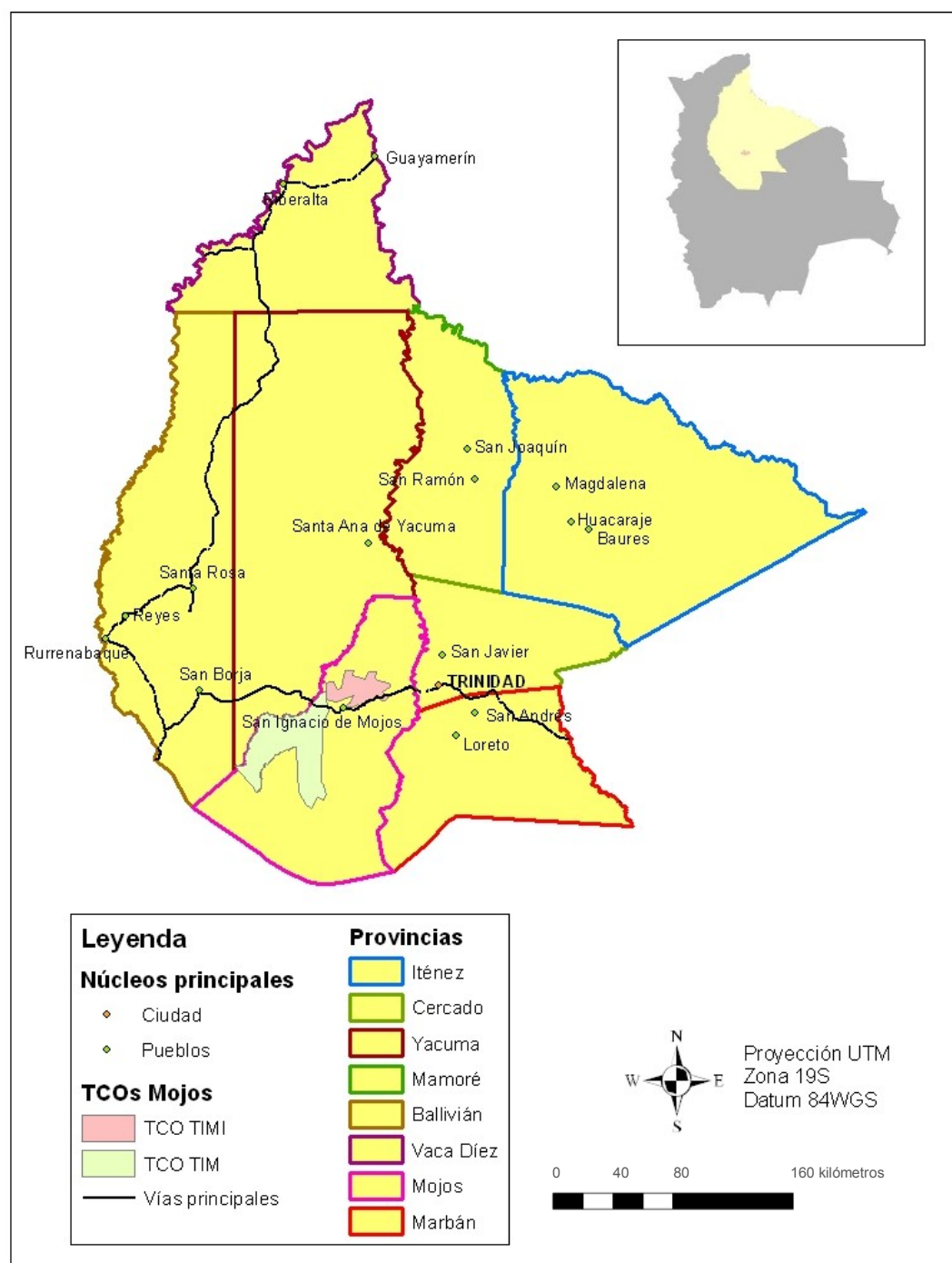
| CANTONES | LOCALIDADES |
|----------------------|---|
| San Ignacio | |
| San Francisco | Puerto San Lorenzo |
| San Lorenzo | Fátima de Mojos, Bermeo, La Argentina. Santa Rosa Río Apere, Monte grande, San Ignacito |

Fuente: Fuente: Montes de Oca, 1989: 51.

Como parte integrante de la cuenca amazónica boliviana cuenta con la presencia de una extensa red fluvial en la que destacan ríos como el Iténez o Guaporé, el río Beni o el Mamoré -navegables todos ellos-, así como múltiples arroyos, lagos y lagunas. Además de las serranías y zonas boscosas, la llanura mojeña o pampa ocupa una importante extensión en el Beni. Por ello en cuanto a la orografía se refiere, se puede mencionar que si bien el departamento se caracteriza por constituir una enorme planicie con un escaso desnivel -9 centímetros por kilómetro (Woynarovich y Romero I., 2003: 96)- existen elevaciones montañosas hacia el Oeste, así como las mencionadas serranías. El relieve viene determinado por una *“topografía regular con amplias planicies cubiertas por pastizales, y una profusión de lagunas de formas regulares”*¹⁴⁹.

¹⁴⁹ <http://www.bolivia.com/geografiadebolivia/cap10.htm>

Mapa 3. 6. Departamento del Beni.



Fuente: elaboración propia en base a CPTI

En función de criterios geomorfológicos y geológicos, en el departamento del Beni se encuentran cuatro provincias fisiográficas: la llanura amazónica; el ondulado amazónico; el escudo precámbrico y la provincia subandina, aunque las dos primeras suelen aparecer integradas constituyendo la provincia fisiográfica de la llanura chaco-beniana (Lijerón, 1997: 20). Nuestro interés particular prestará atención a la primera de ellas.

El departamento del Beni presenta una variedad geomorfológica en la que destacan las serranías del subandino; zonas onduladas o muy onduladas; planicies, llanuras inundables estacionales y prolongadas (*ibíd.*). Por el contrario, las características geológicas más representativas son los “*depósitos cuaternarios en la llanura amazónica, materiales del precámbrico al terciario y cuaternario, en el ondulado amazónico y formaciones litológicas del devónico al terciario, en el subandino*” (*ibíd.*).

3. 4. 1. La sabana de Mojos.

A pesar de la tendencia predominante entre los trabajos amazónicos de prestar mayor atención a las zonas de bosque, poco a poco fueron surgiendo aquellos que desviaron su análisis hacia las zonas de sabana y humedales, aunque estos fueran principalmente motivados por las posibilidades que el tipo de suelos -más resistentes y “*menos vulnerables a daños irreversibles que en los bosques tropicales*”- podían proveer en tales espacio para el desarrollo productivo¹⁵⁰ de estas aéreas (Eden, 1990: 162).

Este estudio considera los llanos de Mojos, la sabana del Beni o la pampa mojeña, como marco geográfico de la investigación. Ésta consiste en una dilatada cuenca hidrográfica la cual se ha generado debido al escurrimiento de las aguas provenientes de la Cordillera Oriental de los Andes (Lijerón, 1997: 15). La cuenca del departamento del Beni “*configura un gran triángulo verde cuyo vértice superior está formado por la confluencia de los colosos fluviales Beni y Mamoré, que dan nacimiento al Madera, principal afluente del río Amazonas*” (*ibíd.*). Pero en esta inmensa planicie no todo es homogeneidad. La llanura se caracteriza por la predominancia de la sabana, pero ésta agrupa en su interior una variada diversidad paisajística que a continuación será expuesta.

Las Sabanas Inundables de los Llanos de Mojos corresponden a una de las subecorregiones de la ecorregión de las Sabanas Inundables integrada a su vez en la región de las Tierras Bajas (véase **cuadro 3. 5**). Atendiendo a las unidades biogeográficas, los Llanos de Mojos se ubican en la región brasileño-paranense (véase **cuadro 3. 4**). Y volviendo al mapa de las unidades fisiográficas establecidas por la FAO (véase **mapa 3. 4**) localizaríamos este espacio geográfico en la llanura chaco-beniana.

¹⁵⁰ Algunas propuestas serían la agricultura de productos como la soja, el maíz o el café y sistemas de ganadería extensiva.

Cuadro 3. 14. Esquema ecorregión sabanas inundables de los Llanos de Mojos.

| | |
|---|--|
| Ubicación geográfica (áreas político-administrativas) | Beni (Ballivián, Cercado, Mamoré, Marbán, Moxos, Iténez, Yacuma), Cochabamba (Carrasco, Chapare), Santa Cruz (Guarayos, Velasco). No existen fuera de Bolivia. |
| Superficie (Km ²) | 94.660 |
| Altitudes | 100 - 200 m |
| Temperaturas promedias anuales | 22 - 27°C |
| Precipitación promedia anual | 1.100 - 5.500 mm. |
| Paisajes | Planicies de mosaicos de alturas, semialturas y bajíos de suelos aluviales recientes, relativamente fértiles, neutros hasta básicos; inundaciones sobre todo por desborde de los ríos Beni, Mamoré y sus afluentes. |
| Vegetación | Sabanas dominadas por gramíneas y ciperáceas; plantas acuáticas y de pantanos (yomomo, curichi); diferentes tipos de islas de bosque, bosques abiertos (tajibales, palmares) y espinosos bajos (tusecales). Bosques de galería a lo largo de los ríos. |
| Familias botánicas más importantes | Alismataceae, Arecaceae, Bignoniaceae, Bombacaceae, Cyperaceae, Leguminosae, Poaceae, Pontederiaceae. |
| Número de especies de árboles (estimación) | 200-400 |
| Uso del suelo | Ganadería, turismo. Impacto histórico en los ecosistemas por las culturas precolombinas de Moxos (Mojos) estableciendo terraplenes, camellones, canales y diques. |
| Especies de árboles/arbustos importantes | <i>Attalea phalerata</i> , <i>Copernicia alba</i> , <i>Machaerium hirtum</i> , <i>Rhedia (Garcinia) achachairu</i> , <i>Tabebuia heptaphylla</i> |

Fuente: elaboración propia en base a los datos de Ibisch y Mérida, 2003: 66.

Las zonas de sabana se caracterizan por el predominio de comunidades de herbáceas además de arbustos y árboles dispersos (Eden, 1990: 50). Las sabanas de Mojos presentan la morfología propia de estas unidades ecológicas. El paisaje de sabana de esta región constituye una gran llanura en la que predomina la vegetación herbácea y donde aparecen islas de bosques esporádicas (Muñoz, 1991: 130) y cursos de agua, así como especies arbóreas que se ubican en el paisaje de manera aislada, entre las que destacan las palmeras (principalmente el motacú, *Attalea phalerata*) o especies arbóreas de mayor tamaño como el tajibo (*Tabebuia serratifolia*), común en pampas.

La formación de la sabana, como biomas de las zonas tropicales caracterizados por la presencia de especies herbáceas entre las que destacan las gramíneas, enfrenta diversas opiniones acerca de su origen. Gerardo Budowsky argumenta que en contra de lo que se pensaba sobre las causas de la aparición de estas llanuras -como el

decrecimiento de precipitaciones desde el Ecuador a los polos- es el fuego provocado por la acción humana el responsable del origen de las sabanas (1971). Este autor menciona que la gran parte de los estudios demostraban que las sabanas se creaban debido a una fuerte alternancia entre el periodo seco y el periodo de lluvias y si bien es cierto que las sabanas se localizan fundamentalmente en áreas tropicales en donde prevalecen periodos muy marcados de lluvias y sequías, esta razón no puede ser considerada como la principal. Budowsky señala dos teorías que explicarían el origen de la sabana: debido a factores edáficos o por la causa del fuego, tras lo que opta por la segunda (*ibíd.*, 73). El fuego, en palabras de Budowsky, constituye un rasgo común en las sabanas tropicales, el cual “*no sólo reduce substancialmente la cantidad de materia orgánica, sino que durante algún tiempo después de su paso, deja el suelo relativamente yermo y completamente expuesto a los elementos meteorológicos*” (*ibíd.*) además de crear un marcado límite entre las zonas de bosque y la sabana propiamente dicha. Por su parte, Jorge Muñoz Reyes defiende que si bien las sabanas pueden haberse originado por el fuego, este correspondería en todo caso a quemas producidas de manera natural por los rayos del sol durante el periodo seco (1991: 130).

Otros estudios sobre los paisajes de Mojos recogen el debate existente entre geógrafos y ecólogos sobre el origen de las sabanas (Madueño, 2009) señalando del mismo modo al fuego como el principal responsable de la sabanización de la región. Según Antoni Madueño los ganaderos de Mojos, desde la época jesuítica, han sometido a las sabanas a quemas periódicas como parte del manejo del sistema de ganadería extensiva (2009: 45) y reconociendo que “*en muchos ecosistemas de sabana, y también de bosques, el fuego representa un factor ecológico natural, su frecuencia e intensidad se ha visto fuertemente incrementada por la intervención humana*” (*ibíd.*). Sin embargo, posteriormente añade que diversos estudios de polen indican la existencia previa de las sabanas a los primeros asentamientos humanos en la región, lo cual demostraría la presencia de diversas especies de plantas y arbustos que han desarrollado una adaptación al fuego –“*la mayoría de las especies leñosas en áreas sometidas a quemas estacionales tienen cortezas gruesas y suberosas y forma sinuosa, normalmente atribuida a su patrón de quema y crecimiento periódico, protectores en las yemas apicales y otras muchas adaptaciones*”-, es decir, que son “pirofíticas” presentando “*no sólo una tolerancia al fuego, sino en ocasiones una dependencia de éste*” (*ibíd.*). Todo esto invita a la reflexión, por lo que cabría preguntarse varias cuestiones: ¿es la aparición de la sabana más antigua que la de los primeros pobladores?, ¿desarrollaron las antiguas poblaciones de la región un manejo del territorio menos agresivo?, ¿fueron estos los responsables de la sabanización de la llanura mojeña?, ¿existió una superficie cubierta de masa forestal en la actual llanura?,

¿se podría señalar el siglo XVII -con la llegada de las misiones jesuíticas y la introducción del ganado- como la fecha a partir de la que el paisaje de Mojos comenzó a verse transformado debido a una intervención humana más intensa de la que hasta el momento había tenido lugar?, ¿podemos declarar tajantemente una única causa en la formación de las sabanas?. Y es que no es posible dar respuesta a todas y cada una de estas preguntas en el presente estudio. Lo que si me atrevo a expresar es que existe una gran probabilidad de que las sabanas no se hayan originado por un único y exclusivo motivo. Por ello prefiero apuntar a la multicausalidad en el proceso de sabanización de Mojos en donde prevalece un “*equilibrio existente en los componentes del sistema*” (Madueño, 2009: 49). Es cierto que las quemas anuales que se efectúan en la Llanura de Mojos, principalmente de manos de ganaderos en las estancias de su propiedad, propician la extensión y el mantenimiento de las sabanas. Es común en el ámbito agropecuario llevar a cabo quemas de amplias superficies buscando la regeneración de los suelos. Si bien, las condiciones climáticas de la región contribuyen en buena medida a la formación de éstas. La clave está en que en Mojos las quemas se repiten año tras año en idénticos lugares impidiendo el natural ciclo de regeneración de la vegetación y el reemplazamiento por otras especies además de propiciar la aparición de pastos cada vez más resistentes frente a los efectos del fuego. Cabría apuntar al clima, los suelos o la topografía como elementos favorecedores en la aparición de las sabanas o incluso la tasa de oxígeno del agua de inundación así como la temperatura, dado que las aguas más frescas y que presentan un mayor nivel de oxigenación propician más el desarrollo de vegetación que aquellas aguas menos oxigenadas y con temperaturas superiores, propias éstas de las zonas de sabana inundable estacional (*ibíd.*). A continuación me detendré a examinar la alta toxicidad de los suelos de Mojos, arcillosos y bastante pobres en nutrientes, el escaso relieve de la región la cual constituye una vasta planicie, el deficiente drenaje, la marcada alternancia entre la época de lluvias y el periodo seco, etcétera. Todo esto constituye un conjunto de elementos que junto con el fuego influiría en el origen de la pampa mojeña sin que ninguno de ellos sea determinante de manera exclusiva, en dicho proceso de sabanización.

Con todo, las plantas de la sabana se deben adaptar a las quemas anuales. Algunas especies, como ocurre con las pirófitas (aquellas que presentan una resistencia o incluso dependencia al fuego) no sufren el impacto de dichos incendios. Por otro lado el pisoteo que viene causado por el ganado propicia la aparición y extensión de las sabanas puesto que imposibilita el enraizamiento de algunas plantas y favorece la compactación de los suelos haciendo desaparecer a algunas especies (Fabricano *et al.*, 2009: 212).

Denevan ya apuntaba en su estudio sobre la geografía cultural de los Llanos de Mojos hasta qué punto la combinación de dos factores: el fuego y la inundación –ésta última considerada factor ecológico– determinaba las formaciones vegetales características de esta región (1980: 37). Sin quitar la razón a Denevan, actualmente son otros elementos que actúan además en la composición morfológica vegetal de la llanura mojeña, y señalo a la ganadería como el principal.

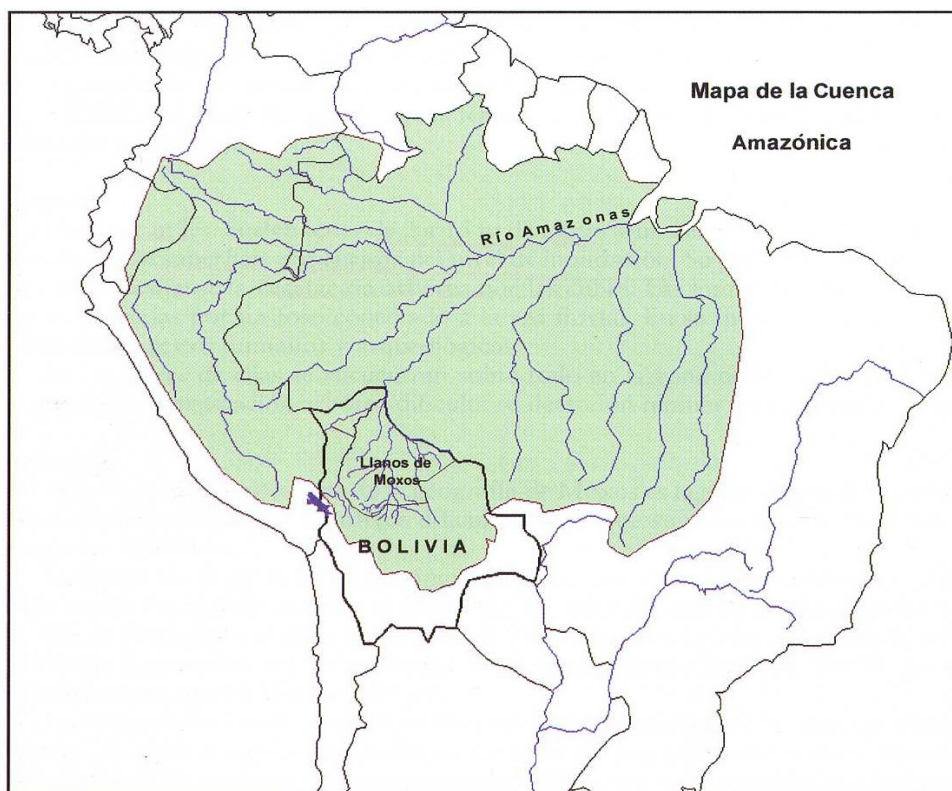
Un aspecto importante cabría añadir para finalizar este apartado. Pese a que se tienda a considerar a las sabanas como espacios con una menor presencia de diversidad biológica en comparación a las zonas de bosque, sabana no es equivalente a inexistencia de biodiversidad y en palabras de Madueño –refiriéndose a la sabana mojeña– *“tanto por el número de especies herbáceas como leñosas, estas sabanas ocupan un primer lugar. Una gran biodiversidad vegetal que sugiere una evolución durante varios milenios antes de la llegada de los humanos, y unas sabanas tan únicas e inherentes a los neotrópicos como los bosques húmedos”* (2009: 45). Desde el punto de vista de la vegetación, las sabanas presentan una enorme diversidad, lo cual podría ser debido a la previa continuidad de ésta a través de la cuenca amazónica en los periodos más secos del Pleistoceno (Eden, 1990: 50-51). No ocurriría lo mismo en lo que a fauna se refiere, existiendo una menor presencia de animales en comparación con las zonas de bosque amazónico (*ibíd.*, 52). Aunque si bien es cierto que la riqueza faunística no es comparable a la que caracteriza los bosques de la Amazonía, veremos a continuación como en el caso de la sabana de Mojos se encuentran importantes comunidades de animales.

3. 4. 1. 1. Escenario geográfico.

Las llanuras de las tierras bajas de Bolivia suponen aproximadamente dos tercios del territorio boliviano. De manera precisa los llanos de Mojos o “El País del Agua” (Romero I., 2000), como así ha sido denominado por algunos autores, se ubican en la región inundable del departamento del Beni, la cual vienen delimitada al Oeste por el pie de monte de los Andes; por el río Beni y Madre de Dios al Norte; por el río San Miguel e Iténez al Este y por el paralelo 17’ 30” al Sur (Molina W. y Soletto, 2002: 19; Romero I. y Pastó, 2003: 15; Lijerón, 1997: 16), abarcando una superficie de 213.564 Km² (Romero I. y Pastó, 2003: 15).

La pampa mojeña ha sido anteriormente señalada como uno de los ecosistemas de la cuenca amazónica de Bolivia. En la figura que aparece a continuación podemos comprobar de qué manera se inserta la llanura mojeña en la cuenca amazónica de Bolivia.

Figura 3. 7. Llanos de Mojos en relación a la cuenca amazónica.



Fuente: Barba, 2003a: 26.

3. 4. 1. 2. Geomorfología.

Atendiendo a la geomorfología esta enorme llanura conforma una “*cubeta rellena de sedimentos modernos inconsolidados, con espesores variables entre 5.500 metros hacia el pie de los Andes –coincidentemente con una fosa tectónica que acompaña al pie de monte andino, hasta el codo de Santa Cruz- hasta unos 300 metros hacia el oriente del río Mamoré*” (Molina W. y Soletto, 2002: 19). Geomorfológicamente, los llanos de Mojos consisten en una gran llanura prácticamente plana, si bien con distintos grados de inundación (*ibíd.*, 2002: 21). Del mismo modo, se podría definir como una enorme llanura que presenta un nivel de pendiente notablemente bajo, de Sur a Norte ya que “*en las últimas estribaciones cordilleranas la altitud alcanza a 290 metros sobre el nivel del mar (Villa Tunari) y el lugar poblado más septentrional (Villa Bella) está a 150 metros sobre el nivel del mar*” (Lijerón, 1997: 16). Esta región se divide en dos regiones: las sabanas o “*praderas naturales*” y los “*bosques de galería y bosques densos primarios que la circundan y sirven de perímetro geográfico al departamento*” (*ibíd.*).

El sector biogeográfico de los llanos de Mojos se caracteriza por el macrorrelieve llano en donde se superponen múltiples formas de microrrelieve de las llanuras aluviales (Navarro y Maldonado, 2002: 163).

Figura 3. 8. Llanos de Mojos en relación a la geomorfología continental.



Fuente: elaboración propia en base a TerraGo Technologies.

Los trabajos geográficos más tempranos dedicados al estudio de esta región apuntaron en cuanto al análisis del relieve a cifras que oscilaban entre los “*270 metros al sur y 180 metros al norte*” (Denevan, 1980: 21). A día de hoy y gracias en gran medida al avance de las tecnologías geográficas, sabemos que es aún menor puesto que en San Ignacio de Mojos y en el área que comprende la TCO del TIMI se han anotado cifras de hasta 150 metros sobre el nivel del mar, valiéndome para llevar a cabo dicha afirmación, del trabajo de campo efectuado con el uso de los sistemas de navegación terrestre como fue el GPS.

3. 4. 1. 3. Geología y fisiografía.

“(...) la provincia de Moxos presenta una llanura uniforme (...) es una inmensa hoyo, completamente plana, tan anegadiza en la época de las lluvias, que se la puede recorrer de un extremo a otro en piragua, sin preocuparse por las líneas divisorias entre los numerosos ríos que la surcan. No se ve una sola montaña en esta provincia, sino apenas tres eminencias aisladas, que no se alzan a más de treinta metros sobre la llanura y a las cuales sólo la horizontabilidad del terreno les da una importancia relativa”

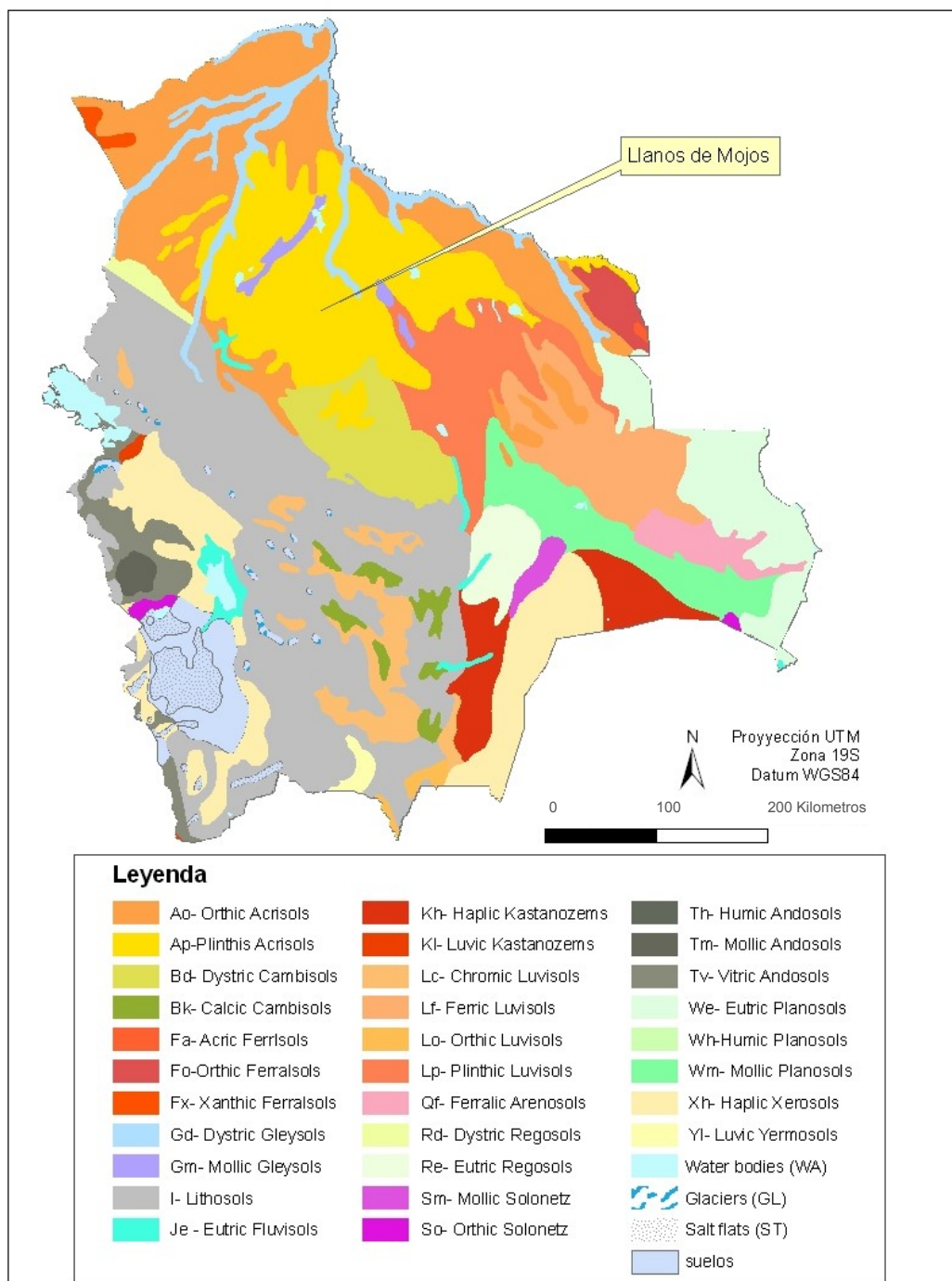
ALCIDE D'ORBIGNY, *Viaje a la América Meridional*, vol. 4.

Han pasado algunos años desde que autores como Sioli, se atrevieran a afirmar que los suelos de la región amazónica están cubiertos totalmente por zonas boscosas y selváticas de tipo amazónico, lo cual sabemos que no es del todo correcto puesto que la sabana alberga una vegetación que presenta claras distinciones frente a la de los bosques amazónicos. Sí que podríamos estar de acuerdo con este autor en que *“los suelos de las mayores áreas de tierra firme en la baja Amazonía pertenecen, en términos químicos, a los más pobres de la tierra, y no disponen de nutrientes o de reservas nutritivas con las que pueden crecer los árboles del bosque”* (1984a). También lo admitía ya en la década de los ochenta Chirif (1983). Contrario a ellos y a la mayor parte de estudios, Balée, años más tarde aclaraba que la fertilidad o infertilidad de los suelos de la Amazonía debía ser entendida en términos de los nutrientes requeridos por las cosechas (1989). Se sirvió del ejemplo de las poblaciones indígenas de la Amazonía como los *yanomamos*, quienes manipulan los suelos a partir de una extensa variedad de cultivos que les permite adaptarse a la singularidad de aquellos (*ibíd.*). A estos mismos procesos de adaptación y en la misma obra de compilación, se refería el trabajo de Morán sobre los modelos nativos de las sociedades amazónicas (1989).

Geológicamente cabría mencionar que la llanura de la pampa de Mojos, a diferencia de otras regiones morfoestructurales como la andina, el escudo brasileño o el pie de monte, se ha conformado a partir de *“la deposición aluvional de rocas sueltas”*, entre las que prevalece *“el cuarzo anguloso, esparcido en cemento arcilloso de hidróxido de hierro, limos, arcillas y arenas”* (Zeitum, 1991: 15). La composición geológica no es muy antigua, ya que existe una predominancia de suelos desde mesotróficos a eutróficos (Navarro y Maldonado, 2002: 163). Estos suelos arcillosos le confieren a la región un alto grado de impermeabilidad que favorece la inundación. Además de la impermeabilidad, los suelos limoarcillosos de la región se caracterizan por la presencia de un alto índice de acidez y aluminio propician la particular pobreza en cuanto a nutrientes se refiere (Lijerón, 1997: 17).

Atendiendo a la nomenclatura propuesta por la FAO sobre la clasificación de suelos (véase **mapa 3. 7**), en los Llanos de Mojos encontramos los acrisoles, propios de los sedimentos de formación aluvional del cuaternario y de áreas pobremente drenadas, siendo más susceptibles a la erosión como resultado de su horizontalidad (Eden, 1991: 35-36). De ahí que se puedan señalar como limitaciones el escaso drenaje, la deficiente fertilidad y la presencia de suelos finos (Molina W. y Soletto, 2002: 23).

Mapa 3. 7. Mapa de unidades de suelo de Bolivia.



Fuente: elaboración propia en base a la FAO.

La cuenca del Beni es un enorme depósito de sedimentos, procedentes tanto del espacio marino como del continental, a partir de los que se ha generado dicha llanura, estable y escasamente móvil, motivo por el que “*en casi toda la extensión de los llanos las capas del suelo son horizontales o semihorizontales*” (Lijerón, 1997: 15). La procedencia de estos sedimentos sería doble: por un lado desde el flanco oriental han llegado sedimentos del escudo precámbrico brasileño y por el flanco occidental desde la Cordillera de los Andes (*ibíd.*). La presencia de suelos con una alta tasa de hierro favorece la formación de capas horizontales. Este fenómeno viene simplificado de la siguiente manera: durante el periodo de lluvias la llanura queda inundada; con la llegada de la época seca comienza la evotranspiración y el retiro de estas aguas estancadas, lo cual deja a los componentes férricos expuestos a la oxidación al entrar en contacto con el aire; esta deposición genera el endurecimiento de los suelos que presentan texturas notablemente gruesas (Budowsky, 1971: 77). Los bosques prevendrían este fenómeno permitiendo la circulación de materia orgánica y un mayor drenaje de las aguas, evitando de esta manera la erosión de los suelos (*ibíd.*, 78).

Los bosques de galería constituyen un caso excepcional en relación a la pobreza de nutrientes de la pampa mojeña y es que estas zonas reciben las aguas blancas de los ríos provenientes desde la región andina, que vienen cargados con sedimentos depositados en estas áreas, aportando dichos nutrientes (Fabricano *et al.*, 2009: 218 y Meggers, 1984: 630). Aunque, en conjunto la llanura mojeña recibe anualmente gran cantidad de agua lo cual provoca la pérdida de nutrientes de los suelos al estar estos expuestos a un fuerte lavado (Fabricano *et al.*, 2009: 216). No obstante, la composición de los suelos varía en función de las unidades fisiográficas y geomorfológicas. De esta manera, en las semialturas que comprenden las terrazas fluviales medias, abanicos aluviales o zonas altas de inundación, los suelos -alcalinos en su mayor parte- no están bien drenados y se anegan estacionalmente alcanzando un metro de profundidad durante al menos 4 meses; en los bajíos o bajuras estacionales que conforman las terrazas fluviales bajas, las zonas bajas de playas fluviales y los canales y cañadas de crecida, los suelos -fluvisoles, vertisoles, planosoles y plintisoles- además de presentar un mal drenaje, permanecen inundados entre 5 y 8 meses al año al desbordarse los ríos a causa de las precipitaciones; por último, en los bajíos o bajuras permanentes como los cauces fluviales abandonados, los lagos, lagunas o las llanuras aluviales de inundación, los suelos -de texturas finas- se mantienen inundados más de 8 meses al año (Navarro y Maldonado, 2002: 160). Los fluvisoles suelen aparecer en las zonas más altas a causa de las características sedimentarias particulares en estas áreas (Junk, 1984: 533).

En la llanura del Beni predominan los plintisoles (véase **mapa 3. 7**) que se caracterizan por presentar un perfil en el que se puede distinguir claramente la

transición entre dos capas de suelo: el horizonte superior (A) con texturas relativamente ligeras, con una estructura débil y con un subhorizonte por encima de un segundo horizonte (B) con una textura más gruesa originada por la compactación de diversos materiales vastos y pequeñas partículas rojizas conformando un complejo sedimentario ligero y grisáceo y con una estructura que varía entre débil a moderada por la lateralización o plintización de estos tipos de suelos (Sombroek, 1984: 529). Debido a la exposición al aire durante largos periodos de tiempo, dichas partículas se convierten de manera irreversible en escorias sedimentarias lo cual constituye la característica definitoria de los plintisoles, además del componente arcilloso si atendemos a la clasificación de los suelos de la FAO y la taxonomía de suelos de Norteamérica aunque en el caso de la terminología utilizada por la FAO aparezcan agrupados como acrisoles (“plinthic acrisols”) (*ibíd.*). Los estudios dedicados al análisis de este tipo de suelos a menudo señalan las sabanas, los campos de herbáceas graminoides y diversas especies de palmeras como las formaciones vegetales predominantes (*ibíd.*, 530). Las características de estos suelos impiden la agricultura intensiva puesto que su capacidad de carga es bastante baja y cuanto más sean sometidos a una mayor presión, más posibilidades tendrán de verse sometidos al fenómeno de la erosión (*ibíd.*). La plintita está presente en este tipo de suelos que habitualmente no retienen los nutrientes esenciales como el magnesio o el potasio y además son rellenados por iones de aluminio que les otorgan el carácter ácido (Eden, 1990: 32). Este autor menciona que “*los acrisoles se vinculan con los sedimentos del cuaternario de áreas pobremente drenadas, como es el caso de la región de Mojos de Bolivia*” siendo suelos que presentan un bajo nivel de fertilidad y una mayor tendencia a la erosión debido a la fuerte horizontalización que sufren (*ibíd.*, 35-36).

Trabajos como el del geógrafo William Denevan¹⁵¹ establecieron en los años 80 una distinción de los suelos de Mojos en 3 tipos bien diferenciados. Por un lado los “suelos boscosos” de los terrenos altos y bien drenados compuestos de arenas finas aluviales recientes y arcillas, con un pH altamente ácido -entre el 5.2 y el 6.2- y un alto nivel de nitrógeno; los “suelos de terreno intermedio” que permanecen inundados de manera estacional, que consisten en arcillas aluviales de descalcificación y en ocasiones arcillas arenosas o margas con una acidez que oscila entre el 4.8 y el 5.5 y con un nivel bajo en nitrógeno y fósforo pero mediano y alto en potasio; por último los “suelos de pampa” que ocupan más de la mitad de la llanura mojeña y presentan una abundancia de arcillas caoliníticas con un pH inferior al 5.0 y con muy bajo contenido en nitrógeno,

¹⁵¹ En fechas tempranas Denevan cuestionó los escasos estudios en relación a la geografía de Mojos. De ahí que el suyo sea de imprescindible consulta por la ruptura que marcó con el periodo anterior.

al igual que ocurre con el fósforo y el calcio pero no con el potasio que presenta un nivel medio (1980: 30-32).

En el trabajo de Woynarovich y Romero se recogen datos sobre el pH de las aguas de la región de Mojos, que lo sitúan cerca de la neutralidad, entre 6,78 y 7,13, “*con una conductividad que fluctúa entre 174 $\mu\text{S}/\text{cm}$ y 118 $\mu\text{S}/\text{cm}$ y con una composición química de aguas de tipo bicarbonatado-cálcico*” (2000: nota a pie de página 4).

Las inundaciones son la característica más relevante de la región. Éstas intervienen en la configuración del paisaje, cubriendo de agua una vasta superficie durante al menos la mitad del año. Esto es favorecido por la clara alternancia entre la estación seca y la estación húmeda, lo cual provoca la existencia de sequías y fuertes inundaciones. La época de lluvias va desde noviembre a abril y es entonces cuando los ríos aumentan su caudal hasta provocar la inundación al desbordarse por las llanuras de Mojos.

En base al estudio de Felicia Fabricano *et al.*, (2009) se pueden establecer tres tipos de inundación en los Llanos de Mojos:

1. “Inundación por grandes lluvias en los Andes pero poca lluvia en la llanura”: tiene lugar cuando el Mamoré arrastra un gran caudal a diferencia de sus afluentes, lo cual provoca la inundación en el entorno más próximo a dicho río.
2. “Inundación por grandes lluvias en la llanura pero pocas lluvias en los Andes”: en este caso son los afluentes del Mamoré los que se desbordan y no éste que, sin embargo, ve incrementado su nivel al recibir las aguas de dichos afluentes.
3. “Gran inundación causada por la combinación de grandes lluvias en los Andes y grandes lluvias en la llanura”: este fenómeno ocurre en el momento en el que tanto el Mamoré como sus afluentes se desbordan inundando la llanura (*ibíd.*, 170).

Fotografías 3.2. Imágenes aéreas de inundación de la llanura del Beni.



Fuente: Barba y Sánchez, 2009: 17

Con el paso del periodo de lluvias quedan al descubierto un sinfín de pozas que anegadas por las lluvias, siendo muchas de ellas abundantes en pescado. Esto es aprovechado por los habitantes de la región, quienes se ven beneficiados por el alimento que les brindan éstas, el cual supone una muy importante fuente de alimentación para las familias de Mojos. Veremos en próximos capítulos cómo de la mano de organizaciones como HOYAM –quienes han creado una piscifactoría en Mausea-, se están recuperando prácticas *tradicionales* de manejo desarrolladas por antiguos pobladores de la pampa, habiendo construido pozas comunitarias en casi la mayor parte de las comunidades mojeño-ignacianas. Este es uno de los efectos positivos resultante de las inundaciones.

Fotografías 3. 3. Imágenes de la intransitabilidad del camino Trinidad-San Ignacio de Mojos¹⁵².



Fuente: Virginia Jabardo Pereda

Sin embargo, las inundaciones suponen, por lo general, un grave obstáculo en cuanto a las comunicaciones se refiere así. Las comunidades del TIMI, suelen permanecer incomunicadas de manera intermitente, aproximadamente 5 meses al año. Los caminos se vuelven intransitables a cualquier medio de transporte, lo cual dificulta sobremanera el abastecimiento de la población local. Incluso ha habido años, como en la gran inundación del 2008, que los alimentos y necesidades primarias sólo pudieron llegar vía aérea a través de avionetas. Huelga explicar el incremento económico que esto provocó sobre algunos productos básicos.

Ya allá por la década de los ochenta, autores como Junk reconocieron la importancia del fenómeno de la inundación para las redes alimentarias en la región

¹⁵² Los vehículos que se aprecian en las fotografías intentaron durante horas avanzar pero finalmente se quedaron paralizados a la espera de un tractor que les remolcase.

amazónica a partir de la interacción entre ecosistemas acuáticos y terrestres (1984). Las inundaciones facilitan la aparición de peces en las pozas al mismo tiempo que las plantas acuáticas (macrófitas o higrofitas) sirven como alimento para múltiples especies de animales terrestres y acuáticos, como es el caso de las capirabas o tortugas o de diversas especies de invertebrados terrestres que se alimentan del detritus y del fitoplacton de estas plantas acuáticas (*ibíd.*, 233). Esto es lo que ocurre con especies enormemente abundantes en Mojos, como el pacú (*Colossoma macropomum*) que basa su dieta en el zooplacton de la várzea (*ibíd.*, 234). Todo este conjunto de especies debe adaptarse a las condiciones morfológicas, etológicas y fisiológicas de los ecosistemas de inundación (*ibíd.*).

Durante el periodo de lluvias, la región se convierte, por lo tanto, en un enorme pantanal. Algunos estudios¹⁵³ han estimado que la superficie inundada puede ser de entre 100. 000 a 150.000 Km² (Romero I. y Pastó, 2003: 15); otros manejan cifras más optimistas que alcanzan los 200. 000 Km² (Lijerón, 1997: 16) señalado que los Llanos de Mojos conforman la superficie inundada más extensa del mundo (*ibíd.*) con un promedio que registra en torno a un metro de profundidad durante un periodo de 3 a 4 meses al año (Molina W. y Soletto, 2002: 20 y Lijerón, 1997: 16), cuando quedan inundadas dos terceras partes del área de la sabana¹⁵⁴.

Fotografía 3. 4. Imagen Llanos de Mojos¹⁵⁵.



Fuente: Virginia Jabardo Pereda

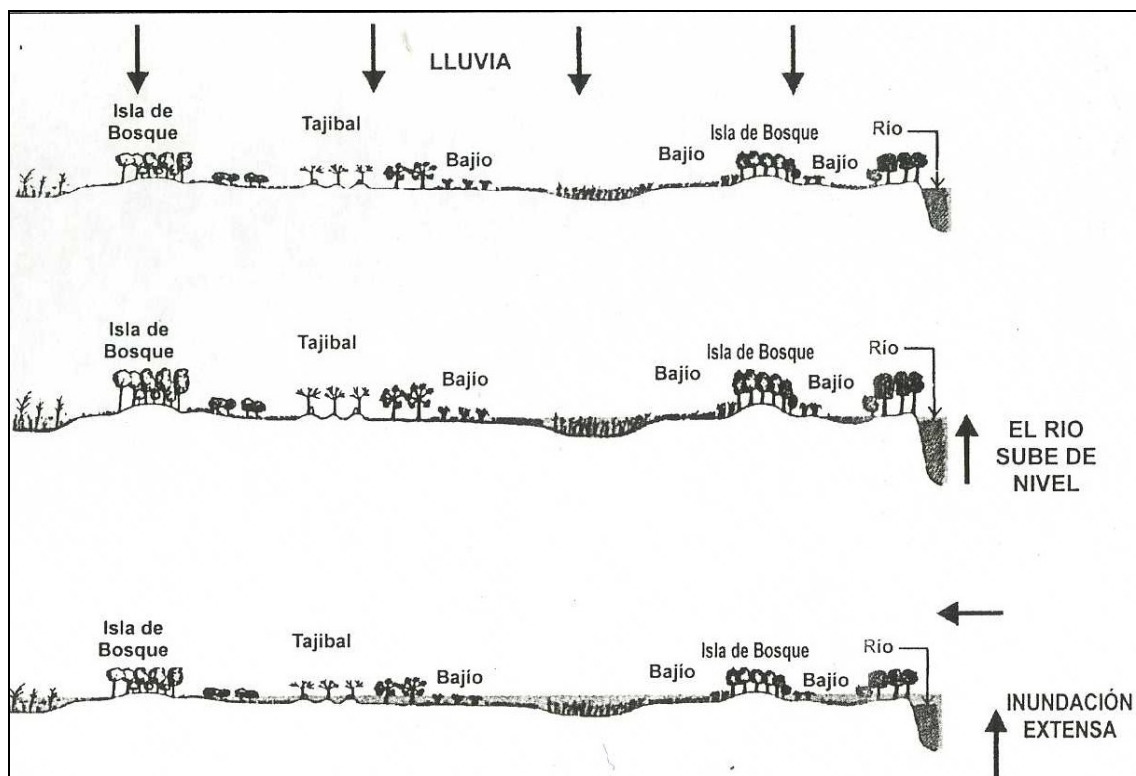
¹⁵³ Según el estudio de Calandra y Salceda (2004) la superficie de los Llanos de Mojos abarca 110.000 km². Otros estudios más antiguos como el de Denevan (1980), estiman que dicha cifra puede alcanzar incluso los 180.000 Km².

¹⁵⁴ http://www.fao.org/ag/AGP/AGPC/doc/Counprof/spanishtrad/bolivia_sp/Bolivia_sp.htm

¹⁵⁵ En esta imagen se puede observar el crecimiento del tarope (*Eicchornia crassipes*), la cual es una planta acuática flotante que cubre gran parte de las lagunas de la llanura mojeña dando lugar a la formación de lagunas anaeróbicas que aportan oxígeno a la capa superficial del agua (Pastó, 2003: 130).

Hay diversas hipótesis que pretenden explicar el porqué de las inundaciones de la sabana beniana. Algunas señalan que la razón principal que provocaría las inundaciones es que en la zona norte de los llanos el basamento asoma impidiendo que las aguas que drenan hacia el río Madera encuentren vía libre, provocando que durante el verano -periodo en el que más abundancia de lluvias se produce- los ríos se desborden en la sabana (Molina W. y Soletto, 2002: 19). Cabría añadir que las inundaciones se ven favorecidas por el relieve de la región que, como ya sabemos, presenta una escasa pendiente (*ibíd.*, 20). Y esto es lo que defienden otros estudios como el de Arnaldo Lijerón quien argumenta que *“las torrenciales lluvias del verano en la zona de los Andes Orientales con más de 5.000 mm/año y en la región amazónica, así como la escasa pendiente de los suelos y la alta permeabilidad de estos, causan el rebalse de los ríos y las inundaciones anuales que cubren una vasta superficie”*, a lo que se sumaría el escaso drenaje de los suelos y el lento proceso de evaporación (1997: 16).

Figura 3. 9. Proceso de inundación en la Llanura de Mojos.



Fuente: Romero I. *et al.*, 2000: 14.

Esta figura nos muestra cómo en el primer piso, con la llegada de las primeras lluvias, el nivel de los ríos se ve incrementado hasta cubrir de agua toda la extensión de la Llanura, a excepción de las islas de bosque. Se puede anticipar un dato y es que este hecho es la fuente que origina gran parte de los conflictos entre los diversos actores

sociales de Mojos. Las islas de bosque constituyen los lugares más elevados y por tanto suponen un óptimo lugar para el cultivo de los chacos. Pero al mismo tiempo es el lugar más propicio en el que asentar el ganado durante el periodo de lluvias, por constituir los espacios libres de inundación (véase **fotografía 3. 5**). La imagen anterior (**figura 3. 9**) representa también los tajibales, que consisten en bosques abiertos de semialtura, y los bajíos, donde se encuentra una presencia de suelos -medianamente adecuados para la agricultura- de origen fluvial debido a los nutrientes aportados por el exceso de agua.

Fotografía 3. 5. Imagen de ganado en pastizal parcialmente inundado.



Fuente: Virginia Jabardo Pereda

Desde el periodo prehispánico existen evidencias de un manejo de los recursos y del uso de la tierra determinado por las inundaciones, a lo cual las antiguas poblaciones de la pampa mojeña tuvieron que adaptarse. En relación a esto, algunos expertos han indicado de qué manera *“la red de canales de las pampas en combinación con los terraplenes permitían llevar las aguas de estos ríos a cualquier punto del norte y distribuirlas a voluntad entre los lugares de producción en un territorio de más de 30.000 Km²”* (Barba, 2003d: 90), demostrando así la enorme capacidad de adaptación del pueblo mojeño a las condiciones impuestas por el ecosistema de inundación de la pampa. Tales ecosistemas han sido en ocasiones considerados como *“sistemas intermedios entre lagos y ríos”* puesto que facilitan la interrelación y el traspaso de nutrientes entre uno y otro sistema (Junk, 1984: 235). La concentración de aguas en determinados lugares ha condicionado los hábitats de muchas especies animales.

Las amplias sabanas aparecen propiciadas por el relieve de bajo nivel (véase **figura 3. 9**) y por la alternancia entre la época de lluvias y el periodo seco, alternándose

con bosques de semialtura y várzea. La llanura aluvial de los Llanos de Mojos presenta un relieve bajo, plano a ligeramente ondulado, que se ha originado gradualmente por el relleno de sedimentos cuaternarios que provienen de la erosión y deposición de rocas andinas, de una cuenca pericratónica localizada entre la Cordillera de los Andes y el Escudo Brasileño (Navarro y Maldonado, 2002: 619). Y es que los Llanos de Mojos constituyen una gran cubeta de sedimentación al recibir toda esta carga de sedimentos. De ahí el escaso relieve. De esta manera se genera una diversidad paisajística en la que predominan las sabanas o pampas, los bosques de galería (corredores de enormes volúmenes de agua) o superficies de semialtura¹⁵⁶.

Cuadro 3. 15. Fisiografía de las sabanas aluviales de Mojos, Beni.

| Sub-región | Topografía | Área | |
|--|---------------------------------------|-----------------|------|
| | | Km ² | % |
| Planicies onduladas | Escasamente onduladas | 23.718 | 17,5 |
| Planicies aluviales | Inundaciones estacionales ocasionales | 57.966 | 42,6 |
| Planicies aluviales con influencias fluviales | Estacionalmente inundadas | 39.377 | 29,0 |
| | Ocasionalmente inundadas por ríos | 14.882 | 10,9 |

Fuente:

http://www.fao.org/ag/AGP/AGPC/doc/Counprof/spanishtrad/bolivia_sp/Bolivia_sp.htm

3. 4. 1. 4. Vegetación.

A pesar de que el 60% de la superficie de la llanura amazónica esté cubierta de pastizales -*Andropogon bicornis* (cola de ciervo), *Aristida cetifolia* (palillo fino), *Axonopus canenses* (pasto felpudo), *Eryochloa distachia* (arrocillo) o *Leersia hexandra* (arrocillo)- las especies más características de esta región serían: la *Cebra pentadra* (mapajo), *Hura crepitans* (occhó), *Guarea guidonea* (trompillo), *Terminalia amazonica* (verdolago), *Tetragastris altísima* (palo romano), *Hymenaea courbaril* (paquí), *Serculia apetala* (sujo), *Enterolobium cichocarpum* (oreja de mono), *Machearium hirtum* (tuseque) y otras especies de palmeras como *Attalea princeps* (motacú), *Syagrus sancona* (sumuque), *Acrocomia aculeata* (totai), *Astrocaryum aculeatum* (chonta), *Iriartea deltoidea* (pachiuba) y *Euterpe predatoria* (asai) (Molina W. y Soleto, 2002: 21). Del mismo modo cabría destacar como especie de alto valor comercial la *Sweitenia microphylla* (mara) o la *Cederla odorata* (cedro) (ibíd., 22).

¹⁵⁶ Es en estas áreas más elevadas donde los antiguos pobladores de Mojos establecían sus asentamientos y las zonas de cultivos, para evitar el impacto de las inundaciones lo cual confirma de qué manera estas poblaciones prehispánicas se sometieron a un proceso de adaptación a las condiciones que sus entornos les exigieron, para lo cual construyeron terraplenes, lomas, canales, etcétera.

Veremos a continuación que muchas de estas se encuentran igualmente en el territorio mojeño-ignaciano.

Navarro y Maldonado señalan a las “*pampas herbáceas y arboladas inundadas estacionalmente*” como vegetación dominante en los Llanos de Mojos, además de los “*bosques semidecíduos mal drenados o palmares en las semialturas y selvas de várzea con flora amazónica, formando una franja a ambos lados del río*” (Navarro y Maldonado, 2002: 163).

De entre las especies citadas anteriormente aquellas que más destacan por su abundancia serían el verdolago, el occhó, el palo maría y el bibosi -representando el 13,76% de la abundancia total de la región amazónica- así como aquellas especies que destacan por su valor comercial (siendo consideradas como muy valiosas) como son la mara, el cedro y el roble¹⁵⁷, concentrando este último grupo el 47,5 % de la abundancia total, lo cual nos lleva a pensar en el importante valor comercial del conjunto del bosque amazónico (véase **cuadro 3. 16**).

Según fuentes del Ministerio de Desarrollo Sostenible de Bolivia, los principales tipos de bosque que alberga la región amazónica del país son los siguientes:

- “*Bosques no inundables.*”
- *Bosques inundables.*
- *Sabana arbórea o arbustiva*¹⁵⁸.

Cuadro 3. 16. Abundancia de las principales especies forestales de la región amazónica.

| Nombre común | Nombre científico | N * | Porcentaje del N total |
|-----------------------|--|------|------------------------|
| Almendrillo | <i>Dipteryx odorata / Apuleia leiocarpa</i> | 1.05 | 1.18% |
| Bibosi | <i>Ficus spp.</i> | 2.8 | 3.14% |
| Cedro | <i>Cedrela spp.</i> | 0.74 | 0.83% |
| Cquino | <i>Pouteria spp.</i> | 0.66 | 0.74% |
| Guayabochi | <i>Calycophyllum spruceanum / Capirona decorticans</i> | 1.06 | 1.19% |
| Jorori | <i>Swartzia jorori</i> | 0.93 | 1.04% |
| Mara | <i>Swietenia macrophylla</i> | 0.35 | 0.39% |
| Momoqui | <i>Caesalpinia pluviosa</i> | 0.33 | 0.37% |
| Ochoó | <i>Hura crepitans</i> | 3.12 | 3.50% |
| Palo maría | <i>Calophyllum brasiliense</i> | 2.84 | 3.18% |
| Paquí | <i>Hymenaea spp.</i> | 0.26 | 0.29% |
| Roble | <i>Amburana cearensis</i> | 0.42 | 0.47% |
| Sangre de toro | <i>Virola peruviana / Iryanthera juruensis</i> | 2.56 | 2.87% |
| Sirari | <i>Ormosia nobilis</i> | 0.45 | 0.50% |
| Tajibo | <i>Tabebuia spp.</i> | 0.35 | 0.39% |
| Trompillo | <i>Guarea spp.</i> | 1.79 | 2.01% |

¹⁵⁷ <http://www.cfb.org.bo/CFBInicio/BoliviaForestal/Bosques%20Naturales.htm>

¹⁵⁸ *Ibid.*

| | | | |
|------------------|-------------------------------|--------------|----------------|
| Verdolago | <i>Terminalia spp.</i> | 3.52 | 3.94% |
| Yesquero | <i>Cariniana estrellensis</i> | 0.35 | 0.39% |
| Totales | | 20.06 | 22.50 % |

* arb/ha; N total =89.25 arb/ha

Fuente: <http://www.cfb.org.bo/CFBInicio/BoliviaForestal/Bosques%20Naturales.htm>

Desde el punto de vista de las formaciones vegetales podríamos diferenciar diversas áreas en la Amazonía boliviana, las cuales aparecen recogidas en el siguiente cuadro.

Cuadro 3. 17. Tipos y superficie estimada (en millones de hectáreas) de cobertura vegetal en la Amazonía boliviana.

| Amazonía | Área de bosque | Tierra firme | Bosque húmedo | Áreas de no-bosque | Sabana | Áreas de herbáceas | Tierras de cultivo ¹⁵⁹ |
|----------|----------------|--------------|---------------|--------------------|--------|--------------------|-----------------------------------|
| 52.7 | 36.6 | 30.5 | 6.1 | 16.1 | 0.6 | 14.5 | 1.0 |

Fuente: Eden, 1990: 173.

3. 4. 1. 5. Características climáticas.

El clima propio de esta región -como ya mencioné- es un clima tropical húmedo caracterizado por la alternancia de la estación de lluvias y el periodo seco. La estación de lluvias comprende los meses que van de noviembre a abril, mientras que la estación seca, la cual coincide con el invierno, corresponde al resto del año.

En cuanto a la temperatura podemos afirmar que ésta se sitúa en un promedio anual de unos 25 °C, oscilando entre los 22 y 27 °C, situándose las mínimas entre los 16 y 17 °C y las máximas por encima de los 35 °C (Ibisch y Mérida, 2003: 66; Lijerón, 1997: 17 y Molina W. y Soletto, 2002: 23). Cabría señalar como fenómeno peculiar de esta región los “surazos” o “*masas de aire frío provenientes de zonas subpolares antártidas*” que dan lugar a una fuerte bajada de temperaturas –entre 12 y 16 °C- (Lijerón, 1997: 17) las cuales pueden durar hasta una semana. El surazo se produce cuando al comienzo del invierno una masa de aire frío llega desde el Sur y tras mezclarse con el aire tropical caliente genera un frente frío que desencadena la bajada de temperaturas y lluvias. Este fenómeno climático se percibe en mayor medida en la zona de las llanuras mojeñas por no existir en ellas obstáculos o barreras geográficas que eviten la penetración de estas masas de aire frío. Al existir cuotas de humedad tan altas, la temperatura máxima puede llegar a alcanzar los 40° C. En cambio, con la presencia de los surazos las mínimas pueden llegar a descender hasta los 15° C.

Denevan comentaba así este fenómeno climático:

¹⁵⁹ Superficie estimada para las tierras de cultivo a finales de los ochenta.

“Durante la estación seca, penetran a los llanos los frentes fríos esporádicos procedentes del sur, que provocan bajas bruscas de la temperatura, fuertes vientos y, a veces, lluvia. Sólo muy raramente los surazos hacen baja la temperatura por debajo de los 10°; pero la gente encuentra las temperaturas incluso de 15° muy incómodas. Los vientos predominantes durante la mayor parte del año son del norte, con una velocidad promedio de 4.8 km/hora; son raros los vientos de superficie registrados de hasta 96 km./hora” (1980: 27-28).

La precipitación anual es de 1.800 mm aproximadamente, oscilando el promedio anual de las precipitaciones entre 1.100 a 5.500 mm según las zonas. Los vientos provenientes de la cuenca del Amazonas traen muchas lluvias, que caen a menudo en forma de tormenta. Entre octubre y abril los vientos toman una componente noroeste muy marcada y se vuelven más secos. El clima se torna caliente, húmedo y lluvioso. Sin embargo, entre mayo y septiembre, estos vientos producen una precipitación mínima¹⁶⁰. Las precipitaciones mínimas para mantener el bosque húmedo son de 1.800 mm anuales -siendo el óptimo de 2.000 mm- distribuidos regularmente durante todo el año.

El clima de la llanura beniana ha sido clasificado como: clima de sabana tropical de invierno seco, donde la temperatura media alcanza los 26 °C y el nivel de precipitación sobrepasa los 2.000 mm provocando las inundaciones debido al desbordamiento de los ríos (Montes de Oca, 2004: 128). Incluso ha habido quienes se refieren al bioclima pluviestacional característico del sector biogeográfico de los Llanos de Mojos como un ombrotipo subhúmedo y húmedo (Navarro y Maldonado, 2002: 161).

3. 4. 1. 6. Recursos hidrográficos.

“¿Sabes amor como es el río Mamoré? ¿Razón de ser de mi tierra, raíz de agua de mi pueblo?

Río, solo un río, sin puntas, simplemente un ovillo del tiempo que corre, avasalla, se fatiga, se revuelca, se embravece como cien toros malheridos y hace un tajo en la campa, se sumerge y arrasa en su prisa y sus ansias de mar”.

RUBER CARVALHO UREY. *Río Mamoré.*

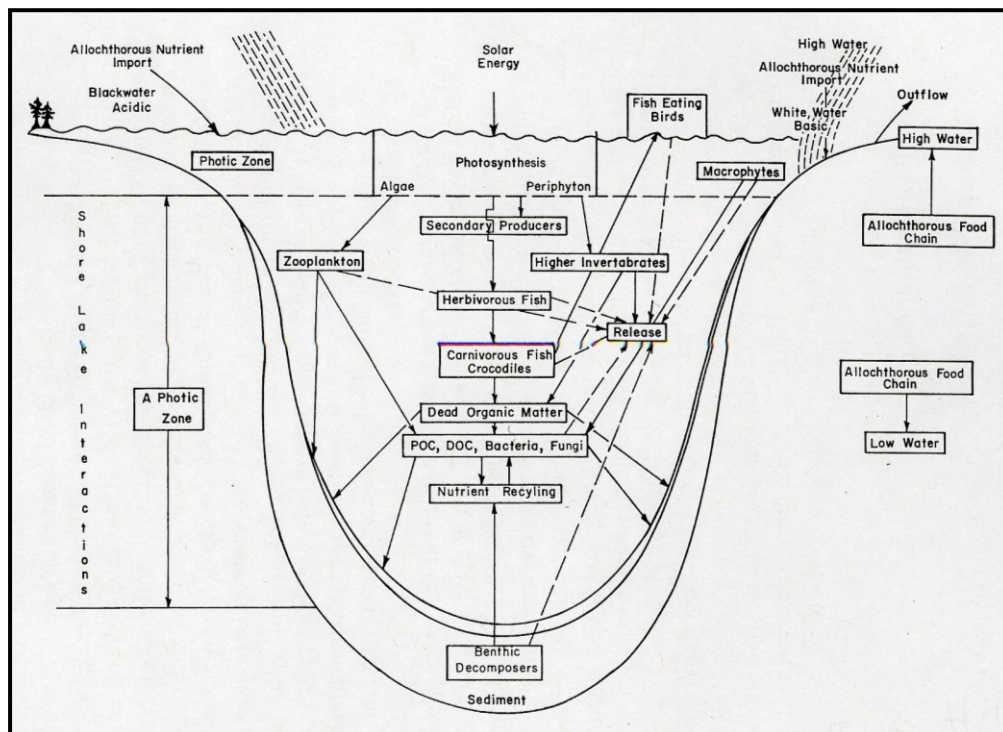
La gran cantidad de lagunas, pantanos, lagos y arroyos de la llanura de Mojos ha llevado a algunos autores a considerar a esta región como un “*gigantesco humedal estacional*” (Molina W. y Soletto, 2002: 20). Otros estudios mencionan que los humedales de la región constituyen las zonas más bajas de la planicie, puesto que son

¹⁶⁰ <http://www.geografia.laguia2000.com/climatologia/bolivia-clima>.

aquellas que quedan anegadas de manera permanente (Lijerón, 1997: 16). Los Llanos de Mojos se someten anualmente a la inundación originada por el desbordamiento de los ríos y por las precipitaciones locales (Navarro y Maldonado, 2002: 163).

Existen en los Llanos de Mojos gran infinidad de arroyos menores y lagunas. Éstas –con una cifra estimada que supera el millar- son consideradas el “*elemento más importante de la geografía de Moxos*” (Barba, 2003a: 22). Este autor defiende además el origen natural de éstas. Otros trabajos que rebajan la cifra al medio millar, consideran por el contrario, la posibilidad de que fuesen construidas por los antiguos pobladores de Mojos¹⁶¹. Existe una muy variada morfología que las caracteriza (Barba, 2003a). Autores como Navarro y Maldonado han distinguido entre las lagunas de origen tectónico y aquellas que se han originado a raíz de los meandros que abandonan los ríos (2002: 632). Las primeras aparecen orientadas en dirección NE-SO y presentan gran variedad de formas, principalmente son rectangulares y elípticas, con fondos planos y de escasa profundidad, en torno a 1-1.5 metros (*ibíd.*). Más allá de estos datos, lo importante es la función biológica que desempeñan la cual aparece sintetizada en la siguiente figura.

Figura 3. 10. Esquema del intercambio de energía/biomasa en los lagos amazónicos.



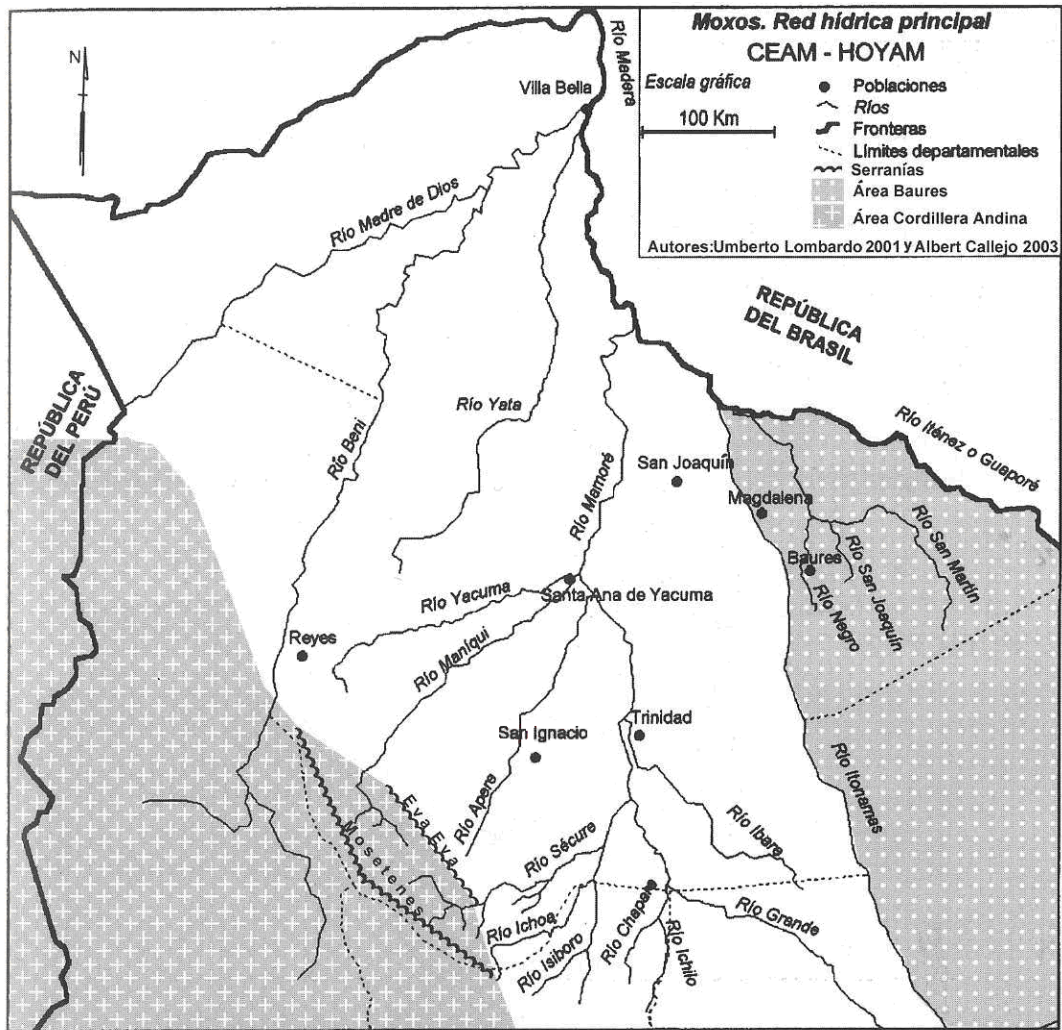
Fuente: Rai y Hill, 1984: 332.

¹⁶¹ Hay que tener en consideración que el estudio al que me estoy refiriendo fue publicado 3 años antes que el posterior de Barba en donde se manejan cifras de hasta 1000.

El esquema superior (véase **figura 3. 10**) refleja la relación entre los lagos y los ríos de la región amazónica y el intercambio de energía por el que los lagos y lagunas transforman los nutrientes y la luz en biomasa proveniente de la absorción de los ríos. La producción primaria es significativa sólo en los dos metros superiores dado que es ahí donde penetra la luz. Este nivel de producción se ve afectado por la falta de oxígeno cuando el nivel de agua se incrementa por encima de los 6 metros debido a las interacciones de las riberas de los lagos (*shore-lake interactions*) y a las limitaciones de los nutrientes (*ibíd.*, 331). Los organismos que se descomponen en la zona bentónica, que corresponde en este caso al nivel más bajo de los lagos, son reciclados y reconvertidos en nutrientes por parte de las bacterias, al igual que ocurre con la materia orgánica muerta procedente de los restos de animales, los cuales pueden ser carnívoros -cocodrilos o caimanes o herbívoros, quienes forman parte de los productores secundarios. En el caso de las especies de peces éstas se procuran el alimento del zooplacton que proviene de las algas o de las plantas macrófitas que se localizan en la zona fótica -el lugar de los lagos donde más luz llega y donde tiene lugar como consecuencia la fotosíntesis de dichas plantas-. Estos cuerpos de agua de los que venimos hablando aparecen debido a la convergencia de las aguas blancas que descenden de la región andina, al agua de la lluvia y al agua que permanece estancada tras el periodo de inundaciones.

En cuanto a los ríos de esta región, habría que señalar que son poco profundos pero muy numerosos. Los más importantes son el Mamoré y el Iténez. Ambos se desbordan durante la época de lluvias, lo cual provoca la inundación, propiciada como ya sabemos por la planicie y los suelos de deficiente drenaje.

Mapa 3. 8. Red hidrográfica de Mojos.



Fuente: Barba, 2003a: 27.

El Mamoré, que va formando meandros a lo largo de su curso, es el principal río de esta región y desemboca en el Iténez, el cual a su vez desemboca en el Madeira. A medida que serpentean van arrastrando consigo sedimentos de las orillas, originando a su vez desplazamientos a medida que los cursos discurren. Durante la época de lluvias el Mamoré se ve incapacitado para absorber el ingente volumen de agua que en él desemboca, provocando las inundaciones que me vengo comentando.

Fotografías 3. 6. Imágenes del río Mamoré a su paso por la pampa mojeña.



Fuente: Virginia Jabardo Pereda

Si bien se han reconocido tres tipos de aguas presentes en la Amazonía: blancas, negras y claras (Sioli, 1984a: 137 y Navarro y Maldonado, 2002: 620) -proviniedo los dos últimos tipos de los que se han venido a denominar “*ríos no turbios*” (Eden, 1990: 30)- en el caso de la Llanura del Beni se han detectado las dos primeras (Navarro y Maldonado, 2002: 620). Las aguas blancas proceden del área andina y portan una elevada cantidad de elementos sólidos (*ibíd.*). Estos ríos alcanzan gran velocidad en sus cabeceras lo cual provoca el arrastre de un gran número de partículas que son trasportadas en el agua por suspensión, dando lugar al color blanquecino de ésta (Fabricano *et al.*, 2009: 166). Al contener una alta cantidad de minerales, estas partículas proveen a los ríos de gran cantidad de nutrientes que favorecen la reproducción de un elevado número de peces de gran tamaño (*ibíd.*). Por el contrario, las aguas negras se originan en la propia llanura, lo cual explica que exista una escasa presencia de sólidos (Navarro y Maldonado, 2002: 620). El tono que adquiere el agua de estos ríos se debe al ácido húmico que se genera a causa de la descomposición de la materia orgánica presente en yomomos, curichis y pampas (Fabricano *et al.*, 2009: 166). La acidez del agua tiene como resultado la pobreza en cuanto se refiere a las especies de peces, al tamaño y su abundancia, si bien se dan excepciones como es el caso del río Apere o Tijamuchí (ambos transcurren por el territorio mojeño-ignaciano) (*ibíd.*) (véanse **fotografías 3. 7 y 3. 18**).

No obstante, cabe puntualizar que para algunos expertos, la simplificada distinción entre aguas claras, blancas y negras, comúnmente aceptada, ignora la diversidad fluvial de la cuenca amazónica (Eden, 1990: 17).

Fotografía 3. 7. Imagen río Tijamuchí.



Fuente: Virginia Jabardo Pereda

Otro de los elementos a destacar que conforma la compleja red hídrica de Mojos son los canales, los cuales constituyen antiguos cursos artificiales. Gran parte de estos son utilizados aún a día de hoy como parte de la red de transporte de la población local (Barba, 2003e: 79). En el próximo capítulo me detendré a exponer la interesante cultura hidráulica que desarrollaron los habitantes de Mojos en tiempos precolombinos.

3. 4. 1. 7. Paisajes naturales.

“Crucé por un hermoso huerto de cacao, luego un bosque de cañas y entré en un bañado cubierto de árboles, en donde era preciso agacharse para pasar bajo los bejucos entrelazados o saltar las grandes raíces de las que el suelo aparecía sembrado. Llegué a una planicie inundada en la que los caballos se hundían hasta la rodilla (...) crucé un arroyuelo profundo, continuando por un bosque ralo que estaba anegado, y volví a encontrar en seguida unos pantanos en donde el agua llegaba hasta la barriga de los caballos”.

ALCIDE D´ORBIGNY, *Viaje a la América Meridional*, vol. 4.

El paisaje natural de la pampa del Beni o la llanura de Mojos, alberga en su interior una amplia variedad de unidades paisajísticas. El presente estudio ha optado por la clasificación de dichas unidades en base al factor vegetacional, considerado éste como factor predominante¹⁶². Desde el punto de vista geomorfológico, la llanura aluvial de Mojos presenta una gran heterogeneidad paisajística debido a las diversas formas que genera la acción fluvial, lo cual hace que se combinen terrazas aluviales, llanuras,

¹⁶² Si tomásemos en cuenta factores como la elevación o el drenaje de los suelos, hablaríamos de unidades agro-ecológicas. No obstante, la clasificación no difiere de la que aquí se plantea a partir del factor vegetacional.

cauces fluviales, albardones y lagunas (Navarro y Maldonado, 2002: 628). La vegetación es el principal indicador que nos permite establecer las distinciones correspondientes entre una y otra unidad del paisaje natural de esta región. De esta manera, la heterogeneidad existente en la sabana recrea un mosaico conformado por una rica variedad vegetal, expresada en función de las distintas morfologías que ésta presenta. Madueño advierte que dicha diversidad geomorfológica proviene de la combinación de varios aspectos como son los contrastes entre los distintos relieves en la región, las diferentes texturas de suelos, así como las conexiones que se establecen entre los ríos y la llanura (2009: 50). Este elenco de factores retroalimenta a su vez el ciclo de la inundación puesto que *“el clima hiperestacional que rige las sabanas del Beni explica el flujo y disponibilidad de nutrientes, junto con la tasa de renovación del sistema, la diferenciación y evolución de los suelos y el reparto en el espacio de los distintos tipos de vegetación, que a su vez influyen en los suelos”* (ibíd.). La vegetación *–“el grado de cobertura, la morfología, composición florística y estructura de las comunidades vegetales”* (ibíd.)- es el elemento principal que confiere una identidad propia a cada una de las unidades y que permite exponer la siguiente clasificación:

✓ **Unidades paisajísticas de altura y semialtura o islas de bosque,** en donde se encuentran aquellos suelos más fértiles, los cuales se inundan durante el periodo de lluvias. Un aspecto que dispara las alarmas lo constituye el hecho de que estas zonas están cada vez más expuestas a la deforestación a causa de la conversión en pastizales de estos suelos debido en buena medida al uso del fuego en la estación estival. En los bosques de semialtura domina la *“macroserie edafohigrófila de Piptadenia robusta y Tabebuia heptaphylla”* -“pocpipipahi” y “uguagerenojgi” en idioma mojeño- además de los *“mesobosques semidecíduos y palmares más o menos abiertos, estacionalmente anegables de forma somera e irregular, asentados sobre solonetz gleicos y vertisoles eútrico-alcalinos”* (Navarro, 1997: 10). La intervención en ellos a través del fuego y la ganadería ha influido en su sabanización, transformándolos en “pampas arboladas” (ibíd.). Navarro incluye una amplia lista de las especies florísticas que se pueden encontrar en estas áreas: *Casearia aculeata*, *Cereus braunii*, *Cissus hassleriana*, *C. palmata*, *C. spinosa*, *Coccoloba cujabensis*, *C. paraguariensis*, *Copernicia alba*, *Cordia glabrata*, *Curatella americana*, *Genipa americana*, *Machaerium hirtum*, *M. latifolium*, *Marsdenia weddellii*, *Panicum tricholaenoides*, *Paspalum virgatum*, *Piptadenia robusta*, *Sapium bolivianum*, *S.haemospermum*, *Simira catappifolia*, *Smilax febrifuga*, *Sorocea saxicola*, *Swartzia jorori*, *Tabebuia aurea*, *T. nodosa*, *T. heptaphylla*, *Zizyphus guaranitica* (ibíd.).

Fotografía 3. 8. Imagen bosque de semialtura



Fuente: Virginia Jabardo Pereda

El hecho de localizarse estas unidades paisajísticas en una elevación superior que las zonas sometidas a inundaciones, les permite evitar tal fenómeno o, al menos, mitigar su impacto, así como desarrollar un tipo de vegetación diferente. Estas unidades de bosque suelen aparecer de manera esporádica en el conjunto de la sabana. La duda se cierne sobre el origen de estas formaciones, al igual que ocurría con el origen de la sabana. Madueño apunta a *“la fragmentación y erosión naturales de diques de canales abandonados”* como el factor que más ha intervenido en la génesis de las islas de bosques y no a *“la fragmentación natural de bosques, la colonización de termiteros o de la sabana por especies boscosas”*, aunque tal explicación no pueda ser generalizada a la formación de todas las islas de bosque puesto que muchas de ellas responden a otras causas en las que la intervención humana ha sido primordial (2009: 50-51). El mismo autor considera que éstas pudieron haber constituido zonas aptas tanto para cultivos como para los asentamientos humanos ya en el periodo prehispánico (*ibíd.*, 51), lo cual tiene mucho sentido ya que las islas de bosque se localizan en las zonas que menor impacto ante las inundaciones estacionales de la sabana. Estas zonas están además expuestas a diferentes fenómenos entre los que destacan las quemadas anuales, las fuertes precipitaciones durante la época lluviosa alternadas por las sequías de la época seca o el pastoreo del ganado (Fabricano *et al.*, 2009: 158).

Los bosques de altura presentan una mayor diversidad frente a la existente en las sabanas o bajíos debido a que se encuentran ajenos al fenómeno de la inundación, lo cual en las zonas de bajura genera junto con la sequía, las quemadas o el pastoreo del ganado, la aparición de suelos más pobres en nutrientes (Fabricano *et al.*, 2009: 178).

✓ **Unidades paisajísticas de bosques de galería** denominados de esta manera por formar corredores de árboles de gran altura en las riberas de los ríos. Aunque en el caso de Mojos aparecen además entre la pampa y los ríos (Fabricano *et al.*, 2009: 156). En estas zonas se encuentra una exuberante vegetación arbórea y muchas de las especies susceptibles de ser comercializadas como la mara (*Swietenia microphylla*), el occhó (*Hura crepitans*), el verdolago (*Terminalia amazonica*), sangre de toro (*Virola Boliviensis*), el yesquero (*Cariniana estrellensis*), así como numerosas especies de la familia de las *moraceas* que estrangulan a aquellos árboles encima de los que crecen y una entramada red de plantas trepadoras como las lianas, entre las que destaca el bejuco. La exuberante vegetación se debe a la fertilidad de estos suelos que son bañados por las aguas blancas cargadas de nutrientes (Junk, 1984). La escasa luz solar que llega al nivel inferior a causa de la frondosa vegetación de estas unidades, propicia la aparición en éste de una alfombra de musgo y de herbáceas de diversos tipos, entre las que destacan las epifitas (Muñoz, 1991: 130) que germinan adheridas a las ramas y troncos de los árboles. Una vez más este trabajo se vale del exhaustivo estudio de flora de Navarro para clasificar a estas zonas como “macroserie edafohigrófila mesotrófica aluvial de *Calycophyllum spruceanum* y *Hura crepitans*” - “poquereji” en el idioma mojeño- correspondiente a “selvas (meso y macrobosques) semidecíduas a semi-sempervirentes de VARZEA, estacionalmente inundadas hasta 1-1.5 m por aguas blancas del Beni”, las cuales se desarrollan frecuentemente “sobre suelos con microrelieve gilgai (“sartenejal”) (1997: 10). Al interior de dicha macroserie encontramos “series diferenciables por las características de la inundación (frecuencia, ritmo, altura), flujo del agua (estánico, flúvico) y rapidez de desagüe después de la inundación” (ibíd.) Estos bosques además son característicos de aquellas zonas inundadas de manera estacional por aguas blancas de los ríos al desbordarse estos (Navarro y Maldonado, 2002: 183). A pesar de estar ubicados en las zonas altas de la pampa, son bosques expuestos a la inundación durante la época de lluvias. A día de hoy corresponde a ecosistemas con predominancia de las siguientes especies: *Alibertia edulis*, *Astrocaryum murumuru*, *Bactris major*, *Batocarpus amazonicus*, *Calophyllum brasiliensis*, *Calycophyllum spruceanum*, *Cavanillesia hylogeiton*, *Ceiba pentandra*, *Copaifera reticulata*, *Dipteryx odorata*, *Ficus adhatodaeifolia*, *F. eximia*, *F. pertusa*, *F. trigona*, *Guadua angustifolia*, *Heliconia episcopalis*, *H. marginata*, *H. metalica*, *H. rostrata*, *Hura crepitans*, *Ischnosiphon puberulus*, *Pseudolmedia laevis*, *Rheedia acuminata*, *Salacia elliptica*, *S. gigantea*, *Syagrus sancona*, *Symphonia globulifera*, *Tocoyena foetida*, *Xylopia ligustrifolia*.

Fotografía 3. 9. Imágenes bosque de galería



Fuente: Virginia Jabardo Pereda

En la región de los Llanos de Mojos, se distingue muy fácilmente los bosques de galería puesto que se insertan en el complejo de la sabana. La vista aérea nos permite definir con total claridad los límites de este tipo de bosque dado que en las inmediaciones no existe bosque alto, más bien pampas herbáceas. La siguiente imagen (3. 12) enfoca dos ríos mojeños, en concreto el Tijamuchí y el Senero. Ambos atraviesan el territorio ignaciano. Gracias a esta imagen área podemos hacernos una idea de la morfología de los bosques de galería que discurren a ambos lados de los ríos que les permiten desarrollarse.

Fotografía 3. 12. Imágenes aéreas del Río Senero y Tijamuchí del TIMI.



Fuente: Google Earth.

Las formas meandriiformes de estos ríos favorecen además la emergencia de este tipo de bosques puesto que el agua que se desborda de los meandros aporta gran cantidad de nutrientes a estos suelos que son aprovechados para el crecimiento de los árboles (Fabricano *et al.*, 2009: 224). Pero el hecho de estar sometidos a las variaciones continuas de estos ríos serpenteantes, impide la consolidación de estos bosques por estar sujetos a las arbitrariedades de los cauces que pueden regar ciertas áreas al igual que pueden dejarlas inundadas (*ibíd.*). Este fenómeno implica la existencia de bosques más bien jóvenes en los que se puede, por tanto, establecer una sucesión ecológica en la que se distinguen la aparición de las especies vegetales en función de cada una de las etapas bien definidas: en primer lugar aparecen bancos de arena a lo que le sigue una rápida colonización de cañuelas gracias a los sedimentos que los ríos han depositado; más tarde comienzan a crecer especies como el ambaibo¹⁶³ en unos 3 ó 4 años que genera unas condiciones de semisombra que permiten la aparición de árboles de sombra los cuales crecerán más lentamente como es el caso del palo maría, la mara, el cedro o el guayabochi hasta que el río altere su cauce y estos bosques puedan llegar a desaparecer (*ibíd.*, 224 y 274). El mismo proceso ha sido también comentado por Eden quien establece la siguiente sucesión: en primer lugar aparecen las especies de plantas heliofíticas (como las leguminosas en el caso de la región mojeña); estas especies pioneras que cubren los claros del bosque con enorme rapidez, dan paso a especies de árboles entre los que destaca la mara o caoba y el cedro (Eden, 1990: 58)¹⁶⁴.

¹⁶³ Esta especie anuncia que va a llover cuando sus hojas se vuelcan (Fabricano *et al.*, 2009: 144).

¹⁶⁴ Esto posibilita la regeneración de los suelos, lo cual es muy positivo para las comunidades indígenas mojeñas que convierten las áreas de monte, es decir las zonas más altas del bosque, en chacos o parcelas de cultivo. El sistema de rotación sobre el que se rigen permite que apenas se abandone un chaco, éste queda al cabo de no mucho tiempo integrado en el bosque. De este modo, tras un periodo que oscila entre los 15 y los 25 años se podría utilizar nuevamente como campo de cultivo, aunque los suelos no estuvieran del todo regenerados, puesto que para que reaparezca el bosque primario se requiere de mucho más tiempo y siempre que no estemos hablando de grandes áreas destinadas a una explotación ganadera extensiva o a grandes plantaciones agrícolas (Eden, 1990: 58). La sabana mojeña está sujeta a la inundación periódica, lo cual propicia la regeneración de los suelos. Es más, este mismo autor apunta a la potencialidad de recuperación de las sabanas, a diferencia de las zonas de bosque tropical, más vulnerables a daños irreversibles desde el punto de vista de la biodiversidad (*ibíd.*, 162).

Fotografía 3. 11. Imágenes plantas heliofíticas (leguminosas)



Fuente: Virginia Jabardo Pereda

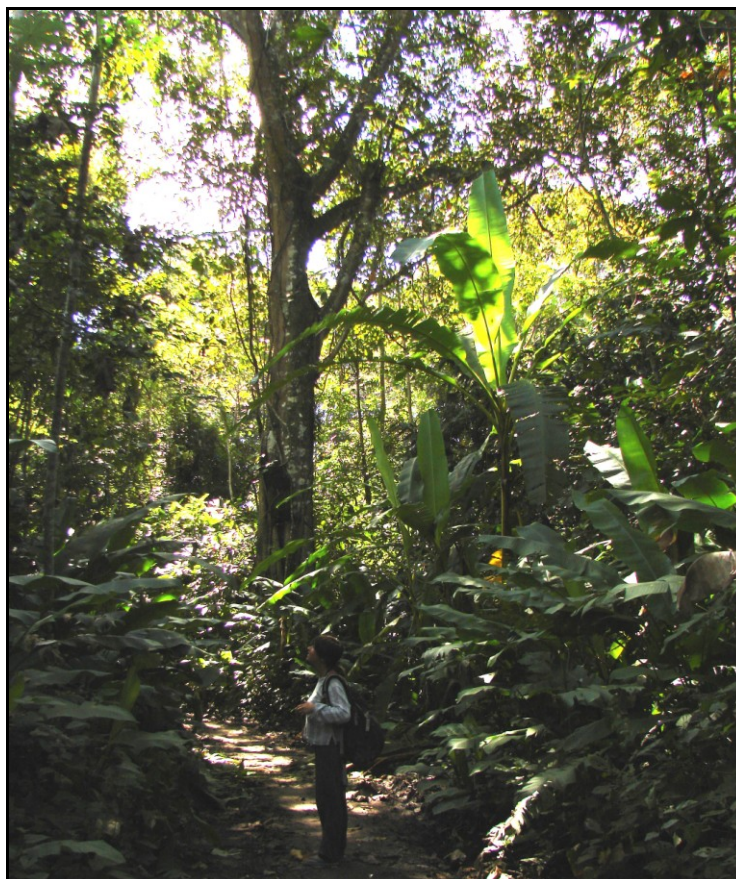
La sucesión ecológica permite por tanto la regeneración de los suelos¹⁶⁵. La formación de la cobertura vegetal viene determinada por una serie de factores entre los que destacan la edad de los suelos en los que se establece la textura de los sedimentos, la tasa de sedimentación y la periodicidad de la inundación (Junk, 1984: 221). Las características de la cobertura vegetal han sido analizadas en la *várzea* amazónica por investigadores como Junk quien expone los condicionamientos de la inundación en la emergencia de la vegetación característica de estas zonas. Para él las fluctuaciones del nivel de agua determinan la aparición de un tipo u otro de vegetación debido principalmente a los nutrientes y la materia orgánica que se depositan en estos suelos (*ibíd.*, 236).

Han quedado demostradas las discrepancias existentes acerca de la localización de los Llanos de Mojos en la región brasileño-paranense o en la región amazónica. No es de extrañar, por lo tanto, que se den ciertas características compartidas entre los tipos de bosque de ambas regiones. En concreto se podría afirmar esto si nos referimos a los bosques del TIMI en donde existe la presencia de un tipo de bosque que se podría clasificar como de piedemonte andino (véase **fotografía 3. 12**), siendo estos los más

¹⁶⁵ Junk propone otra serigrafía distinta en donde en una primera fase comienzan a aparecer las herbáceas que en ocasiones son reemplazadas por especies acuáticas cuando el nivel del agua asciende; más tarde otras plantas semiacuáticas perennes como *Paspalum fasciculatum* o *Echinochloa polystachya* comienzan a establecerse; mientras que las partes de mayor altitud son colonizadas por árboles como *Alchornea castaneaefolia*, *Cecropia* spp., o *Cassia* spp, que finalmente eliminan las herbáceas (1984: 221).

altos del país al alcanzar sus árboles los 50 metros de altura (Fabricano *et al.*, 2009: 156). Cabe además otra distinción interna en cuanto a bosques de galería se trata y es que se percibe una diferenciación de las especies arbóreas que estos albergan en función de la proximidad a los ríos, a la pampa o por el contrario a las áreas más cercanas al interior de dichas unidades paisajísticas (*ibíd.*, 158).

**Fotografía 3. 12. Imagen de bosque amazónico de piedemonte andino en el
TIMI**



Fuente: Ivan Castigliola

✓ **Unidades paisajísticas de sabanas o pampas**, ocupadas principalmente por pastos naturales además de algunos árboles o arbustos aislados. Los árboles de estas sabanas se presentan comúnmente de manera dispersa e irregular aunque en ocasiones forman pequeños grupos (Navarro y Maldonado, 2002: 182). Corresponden a zonas sometidas a inundación estacional. Son praderas graminoides altas cerradas a semicerradas que alcanzan una altura que oscila entre 1.5 y 2.5 metros y en donde predominan las cañuelas o cañas que llegan a alcanzar los 10 y 15 centímetros de diámetro cuando estas pampas no han sido severamente intervenidas por la acción del ganado y del fuego (*ibíd.*, 181). Las principales especies entre los

pastizales naturales son: el pasto amargo (*Paspalum conjugatum*), paja cerda (*Sporobolus poireti*), toruna (*Tripsacum sp.*), camalote (*Paspalum sp.*), arrochillo bajo (*Leersia hexandra*), arrochillo alto (*Oeryza latifolia*), cañuela morada (*Echinocloa polystachya*) o cañuela blanca (*Hymenachne amplexicaulis*) (Muñoz, 1991: 131). Para Navarro estas áreas corresponderían desde un punto de vista florístico a la “macroserie edafohigrófila de *Machaerium aristulatum* y *Erythrina fusca*” -denominados “cosoriosales” y “mpiguimó” y “cricheji” para los mojeños- (1997: 10). Consisten en “microbosques abiertos sabanoides (pampa higrófila arbolada), sempervirentes a semidecíduos, casi permanentemente inundados por aguas estancadas mesotróficas de los bajíos del Beni” (ibíd.). La vegetación a destacar sería: *Alchornea schomburgkii*, *Buchenavia oxycarpa*, *Combretum jacquini*, *Crataeva tapia*, *Cyperus giganteus*, *Echinocloa polystachya*, *Erythrina fusca*, *Eschweilera ovalifolia*, *E. ovata*, *Genipa americana*, *Inga pallida*, *I. punctata*, *I. stenopoda*, *I. uruguensis*, *Machaerium aristulatum*, *Matayba macrostylis*, *M. rusbyana*, *Peritassa dulcis*, *Pithecellobium multiflorum*, *Salacia elliptica*, *S. impressifolia* (ibíd.).

Fotografía 3. 13. Imagen de sabana mojeña



Fuente: Virginia Jabardo Pereda

✓ **Unidades paisajísticas de bajíos, curichis y yomomos**¹⁶⁶ que conforman el gran humedal, ecosistema característico de los Llanos de Mojos con una vegetación en la que predominan las plantas acuáticas entre las que destaca el tarope. Destaca asimismo en estas zonas la presencia de vegetación acuática, principalmente hidrófitas y pleustófitas, que aparece tanto de manera sumergida como flotante, la cual suele estar enraizada al fondo aunque la parte superior del tallo y las hojas emerjan sobre el agua (helofíticas) (Navarro y Maldonado, 2002: 187). La vegetación acuática en

¹⁶⁶ Considerados como charcos y lagunas respectivamente por los habitantes de la región.

estos humedales está dominada por la presencia de gramíneas o ciperáceas así como monocotiledóneas de biotipo helofítico (*ibíd.*).

Los bajíos consisten en depresiones de escasa profundidad que permanecen inundados durante una parte del año mientras que en la otra el agua es absorbida, lo cual da lugar a la aparición de especies deciduas (la parte superior muere durante algunos meses) y sempervirentes (la parte superior está siempre viva y verde) (Fabricano *et al.*, 2009: 160). Tras el paso de la época seca estas zonas pueden ser transitadas por el ganado lo cual hace que gradualmente debido al pisoteo continuo se conviertan en sabana.

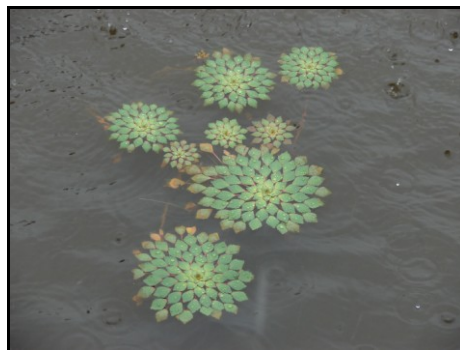
Los curichis, por el contrario, son profundas depresiones de la pampa que permanecen estancados durante todo el año debido en buena medida a la falta de corriente de los arroyos. En estas depresiones aparece una vegetación de la que destacan las cañuelas y el tarope (*ibíd.*, 162) (véase **fotografía 3. 15**). Los curichis concretamente emergen al quedar el agua de las lluvias estancada, permaneciendo prácticamente todo el año. O debido a “*curvas cerradas de los ríos o meandros que quedan separados del curso principal*” en forma de media luna (Muñoz, 1991: 131). Son pantanales o esteros que se anegan durante las inundaciones anuales. Estas zonas son abundantes en especies iliófagas y detritívoras, lo cual significa que se alimentan de lodo y de desechos orgánicos que se encuentran con abundancia en estos humedales (Fabricano *et al.*, 2009: 198).

Los yomomos en cambio emergen en los bajíos en donde es poco pronunciada la oscilación del nivel del agua durante el periodo seco, con una profundidad entre los 80 y los 150 centímetros (*ibíd.*, 160). En estas zonas la vegetación predominante es el junquillo que da lugar a los junquillares y cubre el resto de plantas a pesar de que en ocasiones aparecen algunas especies enraizadas como el tarope, tal y como ocurría en el caso de los curichis, el trébol de agua o el pochi (*ibíd.*, 162) (véase **fotografía 3. 14**). Estos conjuntos de plantas acuáticas propician la aparición de colchones en algunos casos difícilmente impenetrables a otras especies vegetales. Las principales especies que encontramos en los yomomos son: *Cyperus giganteus*, *Hymenachne amplexicaulis*, *H. donacifolia*, *Leersia hexandra*, *Eleocharis acutángula*, *Fuirena robusta*, *F. umbellata*, *Paspalum repens* y *Panicum elephantipes* etcétera (Navarro y Maldonado, 2002: 188).

En algunos yomomos en vez de junquillos encontramos patujú, por lo que en estos casos adquiere el nombre de patujusales, lo cual suele producirse cuando el nivel de inundación es inferior (Fabricano *et al.*, 2009: 162). Constituyen formaciones de helófitos, es decir, un conjunto de junquillares, yomomales flotantes, cañuelares, etcétera (Navarro y Maldonado, 2002: 186) (véase **fotografía 3. 17**). Las comunidades

más abundantes serían: *Cyperus giganteus*, *Oryza grandiglumis*, *Hymenachne amplexicaulis*, *Luziola peruviana*, *Leersia hexandra* y comunidades de *Typha domingensis*, *Eichhornia azurea* y *Eichhornia crassipes* (el tarope al que hacíamos alusión), *Azolla caroliniana*, *Salvinia auriculata* y *Cabomba furcata* y *Nymphaea amazonum* (ibíd., 188-189).

Fotografía 3. 14. Imagen de curichi con tarope (arriba) y especie de trébol de agua (abajo).



Fuente: Virginia Jabardo Pereda

Fotografía 3. 15. Imagen de curichis con cañuelas



Fuente: Virginia Jabardo Pereda

Fotografía 3. 16. Imagen de *Victoria regia* en bajíos mojeños.



Fuente: Virginia Jabardo Pereda.

Fotografía 3. 17. Imagen de junquillar de un yomomo



Fuente: Virginia Jabardo Pereda

En la misma temática la Fundación TIERRA presenta un estudio que recoge una clasificación similar a la que he presentado acerca de los paisajes naturales con

predominancia vegetal de Mojos. No obstante, en ésta se opta por la utilización de “suelos” como categoría clasificatoria. Distingue entonces entre los siguientes tipos:

- 1) *“Boscoso de terreno alto;*
- 2) *Sabana en terreno intermedio con presencia de arbustos y arboleda discontinua y;*
- 3) *Pampas en terrenos bajos alterados por curichis, yomomos y otras fuentes de agua de presencia temporal”* (2005: 16).

Si tuviéramos que englobar de manera muy amplia los complejos paisajísticos de Mojos podríamos sintetizarlos en dos grandes unidades: el bosque denso siempreverde con bosques de altura o incluso aquellos que se pueden incluir en la clasificación de bosques de piedemonte andino y la sabana que en su interior alberga además a las pampas de herbáceas graminoides y a varios tipos de bosque como son los bosques de galería e islas de bosque así como las zonas de humedales, en donde destacan los yomomos y curichis.

A parte del paisaje natural de la pampa mojeña, existen otros elementos que conforman un paisaje cultural (Denevan, 1980: 17). Estos otros componentes han sido descubiertos y estudiados en profundidad por distintos arqueólogos. Gracias a los trabajos pioneros de Kenneth Lee¹⁶⁷, el conjunto de construcciones adaptadas al ecosistema de inundación característico de las Llanuras mojeñas (terraplenes, lomas, canales, campos elevados, etcétera) (véase **figura 3. 11**), se ha convertido en objeto de análisis de aquellos estudios encargados en dilucidar los mecanismos de adaptación al entorno de las culturas mojeñas.

Existe un gran número de terraplenes en toda la región de los Llanos, los cuales fueron construidos por los antiguos pobladores de Mojos y su principal función consistió en *“desviar las aguas de la sabana hacia los ríos, descartándolas, mientras que las aguas fértiles eran mantenidas en una cota relativamente alta que permitía distribuirlas por una zona más amplia”* (Barba, 2003b: 64) o puede que fuesen diques con los que se canalizaba el agua hacia las lagunas y hacia los campos elevados a los que más adelante me referiré (Romero I. *et al.*, 2000: 27). Actualmente los terraplenes constituyen espacios libres a la inundación –donde el ganado puede pastar- gracias a la altura suficiente (*ibíd.*). Por ello se convierten en lugares de refugio para la ganadería, la cual suele verse enormemente perjudicada durante el periodo de lluvias al encontrarse insuficientes terrenos aptos en los pastizales (Barba, 2003a: 23). Es por

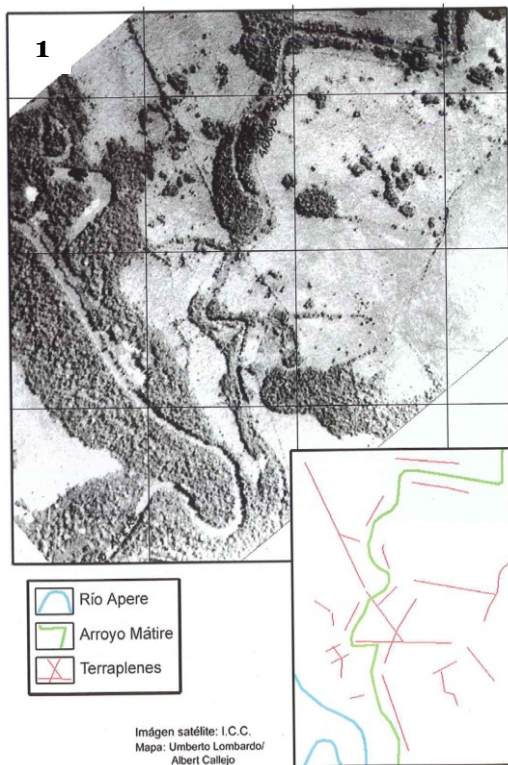
¹⁶⁷ Considerado padre de la arqueología beniana, quien se interesó por las obras hidráulicas prehispánicas de los llanos de Mojos, así como de las investigaciones de principios de siglo del renombrado arqueólogo Nordenskiöld, encargado de los trabajos en esta región.

dicho motivo que es en esta época cuando el ganado se concentra en las islas de bosque. Éstas corresponden a su vez, tal y como ya indiqué anteriormente, a los espacios a los que acude la población de las comunidades indígenas de Mojos a cazar y a cultivar sus chacos. A esto se le añade otro elemento y es la abundante presencia de los recursos maderables destinados al comercio (Barba, 2003b: 63), puesto que en estas áreas se localizan especies forestales tan valiosas como la mara, el cedro o el palo maría. Como consecuencia, han sufrido un importante proceso de deforestación, convirtiéndose en las zonas más vulnerables de la región desde el punto de vista medioambiental.

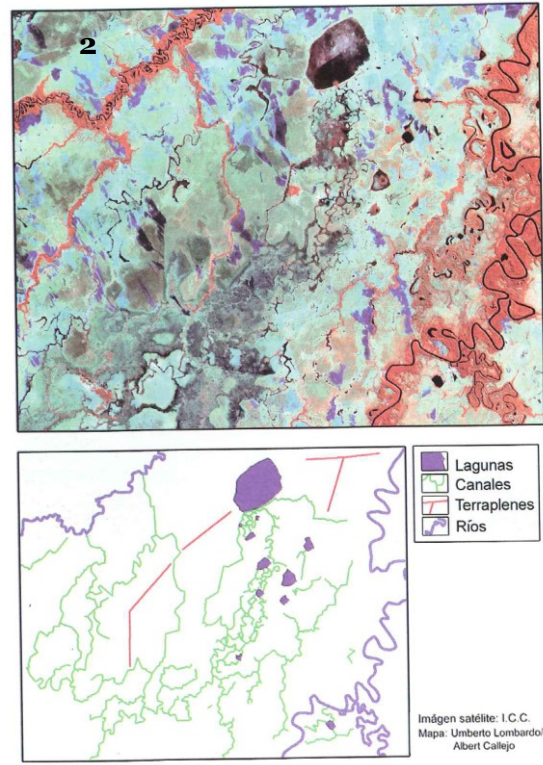
Otra de las obras del aparato hídrico de Mojos en las que intervino la mano del hombre fueron las lomas. Éstas consisten al igual que los terraplenes en espacios libres de inundación debido a su construcción en altura. Josep Barba hace mención en su estudio a la distinción entre las lomas construidas durante el periodo prehispánico y las lomas naturales, denominadas estas últimas como “cerros” (2003d: 69). Estas islas de monte se convirtieron en el lugar preferido de los antiguos pobladores de Mojos (Romero I., 2000: 25). Las lomas crecieron en tamaño a medida que aumentaba el número de miembros de las familias, de ahí que su dimensión sea enormemente variable, llegando a alcanzar las más grandes los 300 metros de ancho por 150 metros de largo y 6 metros de altura (*ibíd.*, 26).

Y por último señalar los campos elevados, los cuales si bien presentan una baja fertilidad debido a la presencia de suelos impermeables y arcillosos, son nutridos por plantas acuáticas como el tarope (véase **fotografía 3. 14**), para lograr de esta manera un aumento de la fertilidad. Los campos elevados se localizan principalmente en zonas de monte y actualmente se atestigua su presencia por la subida y bajada continua del terreno –formando surcos que son los canales que se alternan con los campos elevados los cuales servían para regar los cultivos de estos- el cual fue antiguamente utilizado para asentar las zonas de cultivo (*ibíd.*, 26-27).

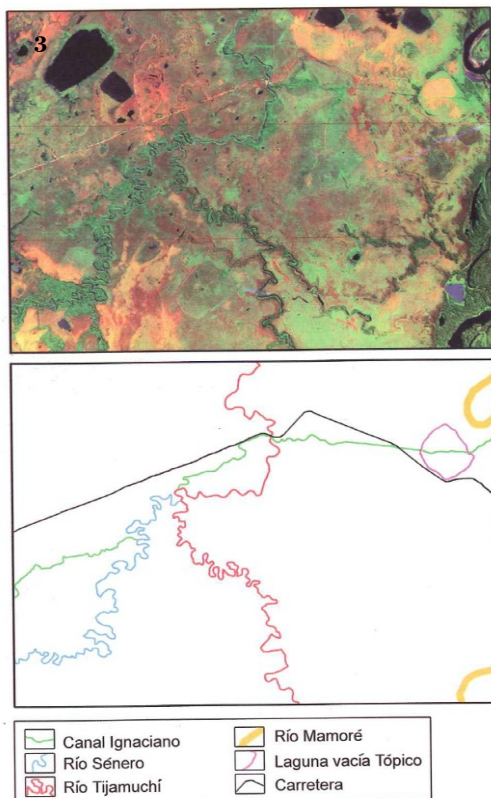
Figura 3. 11. Terraplenes (1,3); Canales (2,3); Lagunas (3); Campos elevados (4).



Fuente: Barba, 2003b: 68



Fuente: Barba, 2003e: 86



Fuente: Barba, 2003e: 82

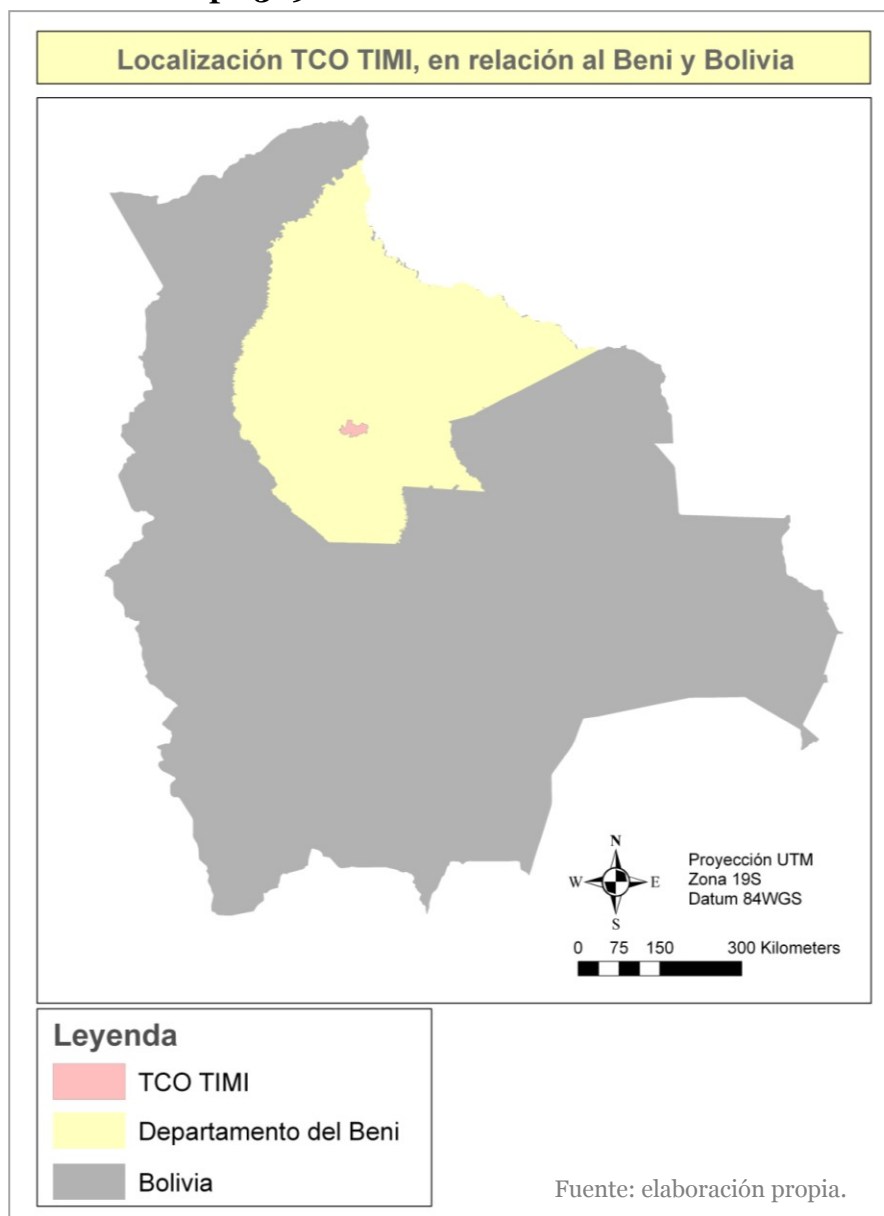


Fuente: Barba, 2003d: 91

3. 5. GEOGRAFÍA DEL TERRITORIO INDÍGENA MOJEÑO IGNACIANO.

El *Territorio Indígena Mojeño-Ignaciano* (TIMI), corresponde a una *Tierra Comunitaria de Origen* (TCO), una unidad geográfica, además de un Distrito Municipal Indígena perteneciente a su vez al Municipio de San Ignacio de Mojos. Geográficamente se inserta en las subcorregión de las Sabanas Inundables de los Llanos de Mojos, correspondiente a la ecorregión de las Sabanas Inundables que a su vez pertenece a la región de las tierras bajas de Bolivia, según el esquema clasificatorio de Ibisich y Mérida (2003) (véase **cuadro 3. 5**). Y desde el punto de vista biogeográfico -según Navarro y Maldonado (2004)- el TIMI se localizaría en la ecorregión brasileño-paranense de la provincia beniana, del sector de la llanura aluvial de la subcuenca del río Mamoré, que a su vez pertenece a la cuenca amazónica.

Mapa 3. 9. Bolivia-Beni-TCO TIMI



En la TCO del TIMI las temperaturas medias oscilan entre los 24 y 25 grados centígrados y se ha registrado un promedio anual de precipitaciones de casi 2.000 mm (CIPCA, 2008: 10) en las dos estaciones bien definidas –la época de lluvias desde noviembre a marzo y el periodo seco de abril a octubre- al igual que ocurre en el conjunto de la sabana. Un fenómeno climático que tiene lugar anualmente en esta región son los denominados “surazos”, que como ya mencioné en su momento consisten en masas de aire polar provenientes desde el sur del Pacífico, desde donde ascienden hacia el norte, penetrando en el continente sudamericano y empujando al aire tropical caliente del país, lo cual genera un frente frío acompañado de fuerte nubosidad (Montes de Oca, 2004: 115). Se distingue entre sur con agua y sur seco. Como bien indica el nombre, el primero trae consigo precipitaciones a diferencia del sur seco que viene acompañado de niveles relativamente bajos de humedad y pocas precipitaciones (Fabricano *et al.*, 2009: 144). Los habitantes de Mojos manejan diversas argucias que les llevan a predecir la llegada de los surazos: para averiguar si va a llegar el sur con agua fijan su atención en los movimientos de las hormigas, lo cual ocurre cuando éstas se agitan, o cuando el macono canta sobre un palo verde; en cambio, si lo hace sobre un palo seco se espera la llegada del sur seco (*ibíd.*). Sin embargo, la dirección predominante de los vientos es de norte a noroeste y el promedio de su velocidad es de 4.1 nudos (CIPCA, 2005: 80).

La humedad relativa en esta área oscila entre el 62 y 82% y varía en función de la época del año y principalmente del régimen de lluvias (*ibíd.*).

Los suelos de esta región repiten las características a las que hacíamos alusión cuando hablábamos acerca de la fisiología de la llanura beniana y se caracterizan por: acidez moderada a alta; fertilidad moderada a baja; drenaje moderado a bajo (lo cual provoca el anegamiento); textura arcillosa o limo-arcillosa; alto contenido de aluminio en algunas partes (toxicidad moderada a alta) y lixiviación fácil por el lavado de los nutrientes del suelo debido a la acción del agua (*ibíd.*, 84).

La hidrología de la región adquiere una importancia primordial y es que por un lado los ríos constituyen para la población local medios de comunicación fundamentales, sobre todo en la parte del año en que la sabana sufre las consecuencias de la inundación anual. Hay que añadir otra idea importante y es que las comunidades se localizan próximas a ríos y arroyos, lo cual demuestra una vez más la importancia del sistema fluvial para la comunicación entre éstas.

Fotografía 3. 18. Imagen del río Apere¹⁶⁸ (aguas negras)



Fuente: Virginia Jabardo Pereda

Por otro lado, a parte de la red fluvial, las numerosas lagunas que se encuentran esparcidas en el TIMI (San Antonio, Mapunami, Isirere¹⁶⁹, por citar algunas de las más importantes por su tamaño) (véanse **fotografía 3.19** y **3.20**) constituyen una fundamental fuente de recursos para los comunarios de la TCO. Éstas se clasifican en naturales y artificiales en función de su origen y su formación. Tanto en unas como en otras los comunarios ignacianos se aprovisionan de pescado, complemento proteínico básico para la población local.

Woynarovich y Romero en su estudio sobre la piscicultura en Mojos declaran que en esta región han sido descubiertas cientos de lagunas de morfología rectangular fechadas en el periodo precolombino, ascendiendo a 375 para el año 2003 (fecha del trabajo) equivalentes a una superficie de 1.170 km² (2003: 98).

¹⁶⁸ El río Apere es el afluente del río Mamoré más importante de la región.

¹⁶⁹ En realidad la laguna Isirere se localiza en San Ignacio de Mojos pero como se puede apreciar en el **mapa 3.15** que aparece a continuación, está muy próxima a la propia TCO. Esta laguna guarda además una leyenda la cual cuenta que dos serpientes gigantes la guardan de la pesca masiva de los pobladores de la región, siendo lo permitido un máximo de tres piezas pescadas por cada uno, a mal de caer la maldición de la laguna para quien pretenda comerciar, con el fin de lucrarse, con las especies que se encuentran en ella.

Fotografía 3. 19. Imágenes de la laguna Isirere¹⁷⁰



Fuente: Virginia Jabardo Pereda

Fotografía 3. 20. Imagen laguna natural TIMI.



Fuente: Virginia Jabardo Pereda

El minucioso estudio encabezado por Felicia Fabricano y llevado a cabo junto con un amplio equipo de colaboradores, establece la distinción de dos tipos de lagunas. Por un lado se refiere al tipo que denomina “lagunas de codo” o “de meandro”, las cuales se originan debido al abandono de un río por parte de un meandro en el momento en el que dos codos del río se aproximan tanto hasta el punto de unirse (2009: 162).

En la gran mayoría de las comunidades del territorio ignaciano existe una laguna rectangular. Esta particular morfología nos anuncia la construcción de una hondonada para la cría de peces: surubí y pacú en concreto.

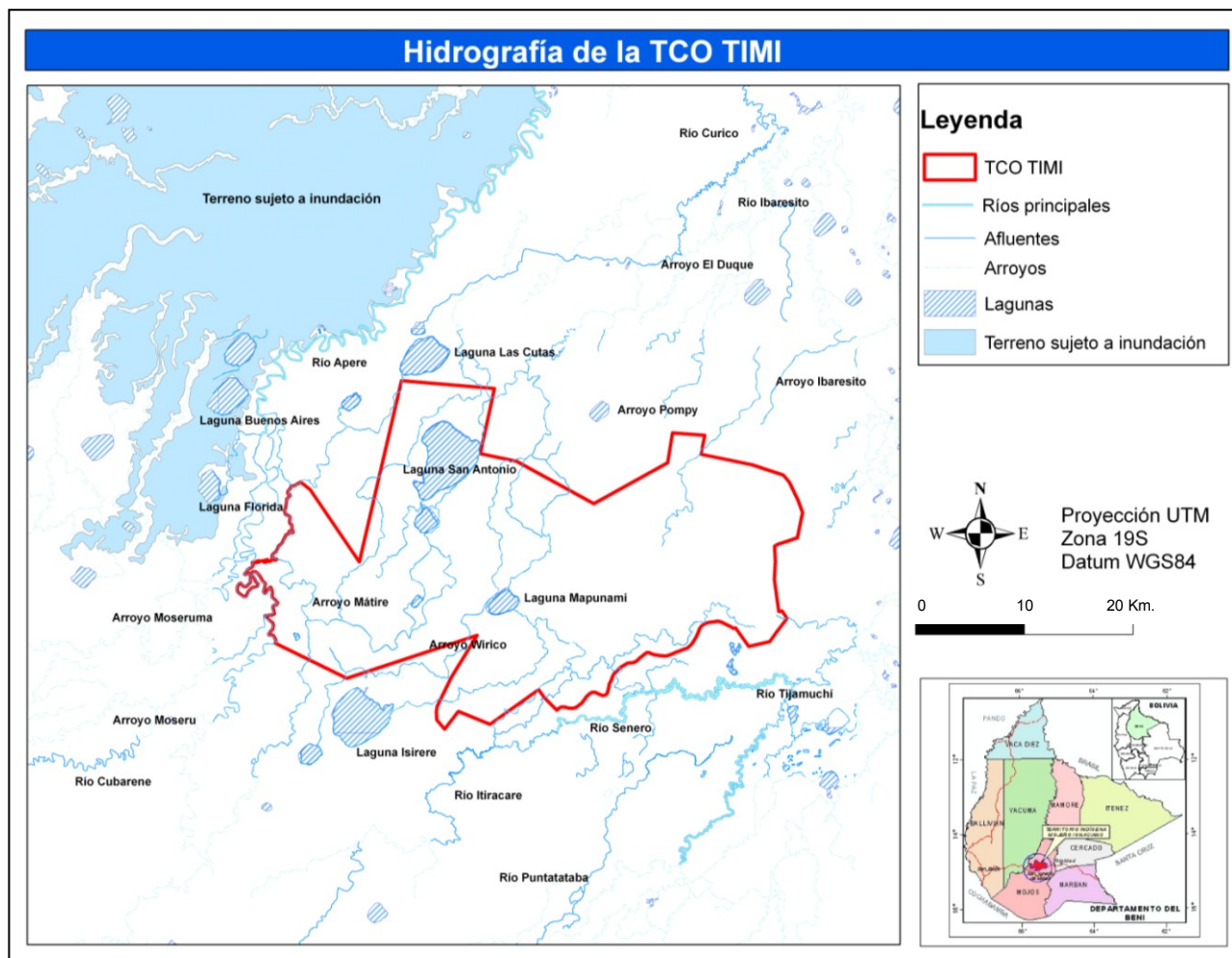
¹⁷⁰ La escultura que aparece en la imagen (véase **fotografía 3. 18**, izquierda) representa a Isiboro, el niño que desapareció en la laguna mientras su madre pescaba y que se cree que fue engullido por dos serpientes gigantes, las cuales también se aprecian en la imagen en torno al niño, quien lleva en la mano los peces que su madre capturó.

Fotografía 3. 21. Imagen laguna artificial TIMI



Fuente: Virginia Jabardo Pereda.

Mapa 3. 10. Hidrografía TIMI.



Fuente: elaboración propia en base a los datos del CPTI

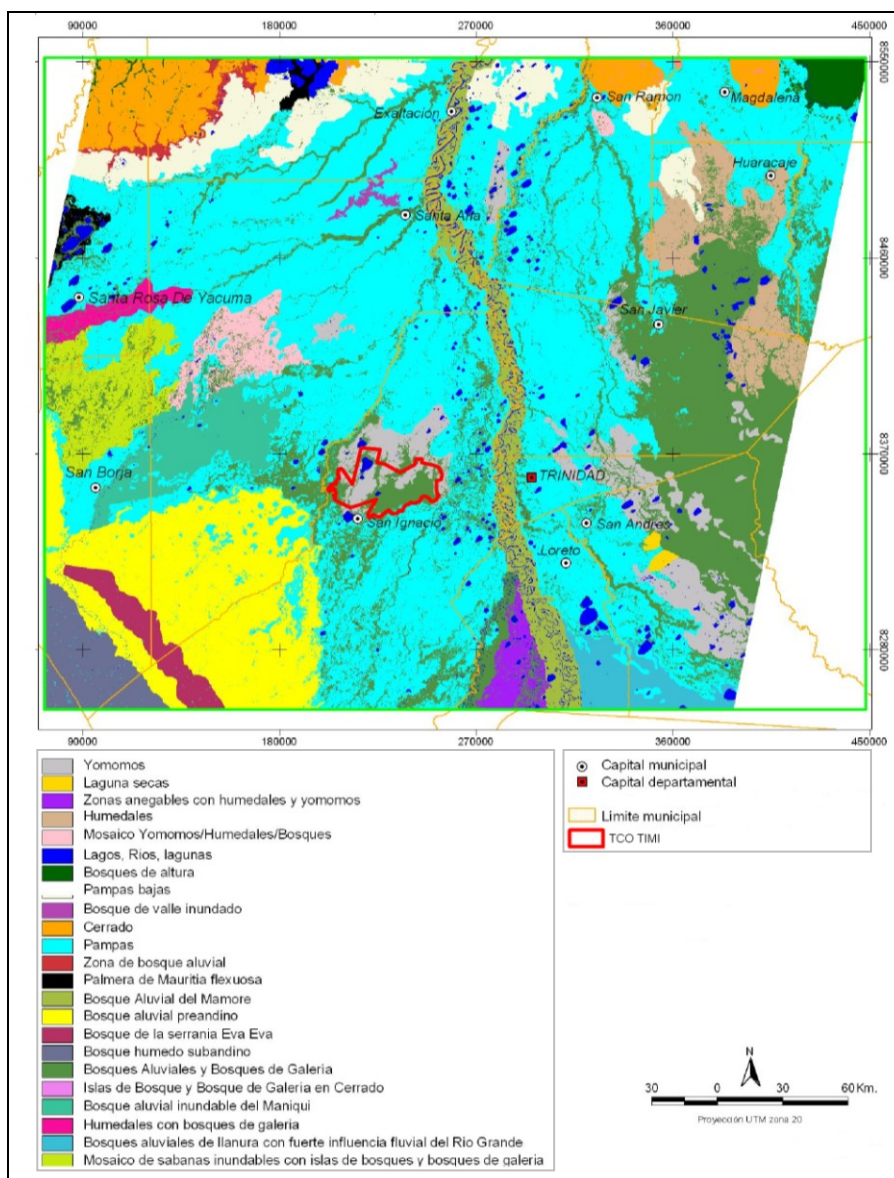
Mencionaba anteriormente la presencia de algunos elementos paisajísticos de carácter estacional en los llanos de Mojos. Estos son los yomomos y curichis que emergen al quedar estancada el agua de las lluvias y son espacios aprovechados tanto por las comunidades indígenas como por las estancias ganaderas, puesto que constituyen un depósito vital de agua para el ganado. Por su parte los pobladores ignacianos esperan a que pase el periodo de lluvias para que les resulte más fácil apresar a los peces que se quedan atrapados en estas pozas que surgen de manera natural.

Fotografía 3. 22. Imágenes de yomomos y curichis TIMI.



Fuente: Virginia Jabardo Pereda

Mapa 3. 11. Ecosistemas de Mojos y TCO TIMI

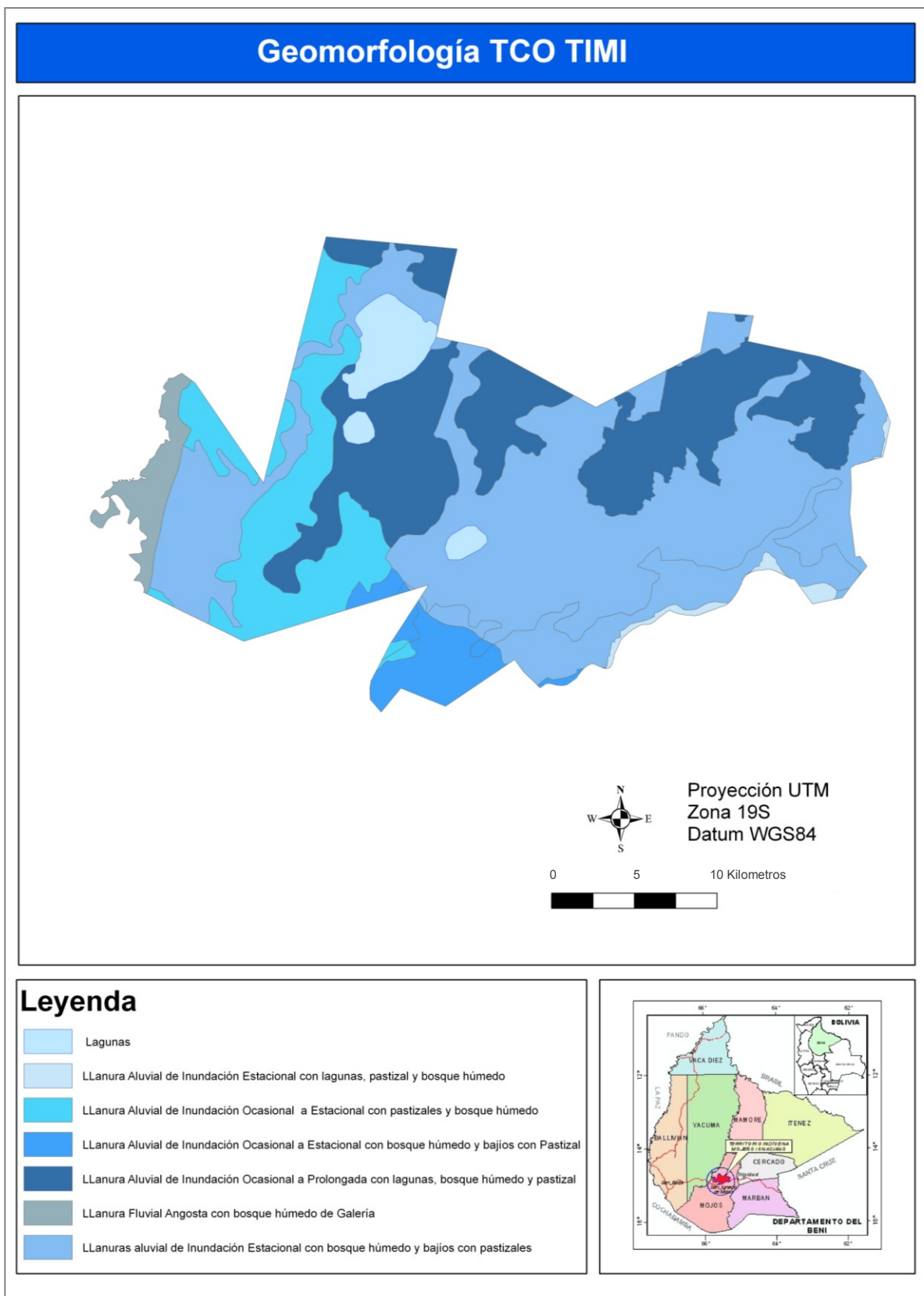


Fuente: elaboración propia en base a los datos de FAN.

La imagen superior (**mapa 3. 11**) viene referida a los ecosistemas de una sección de la Llanura mojeña. Atendiendo a tal representación cartográfica, al interior del territorio ignaciano existen dos ecosistemas bien definidos: los yomomos o lo que podríamos considerar zonas de inundación de carácter estacional y los bosques aluviales y bosques de galería a los que hacía alusión anteriormente.

Si bien el municipio de San Ignacio de Mojos comprende geomorfológicamente 3 zonas que son la serranía subandina, el escudo precámbrico y la llanura de Mojos, la TCO TIMI se inserta, absolutamente, en ésta última -tal y como se aprecia en el siguiente mapa (**3. 15**)- la cual viene definida por constituir la llanura aluvial de inundación estacional con bosque húmedo y pampas y bajíos con pastizales.

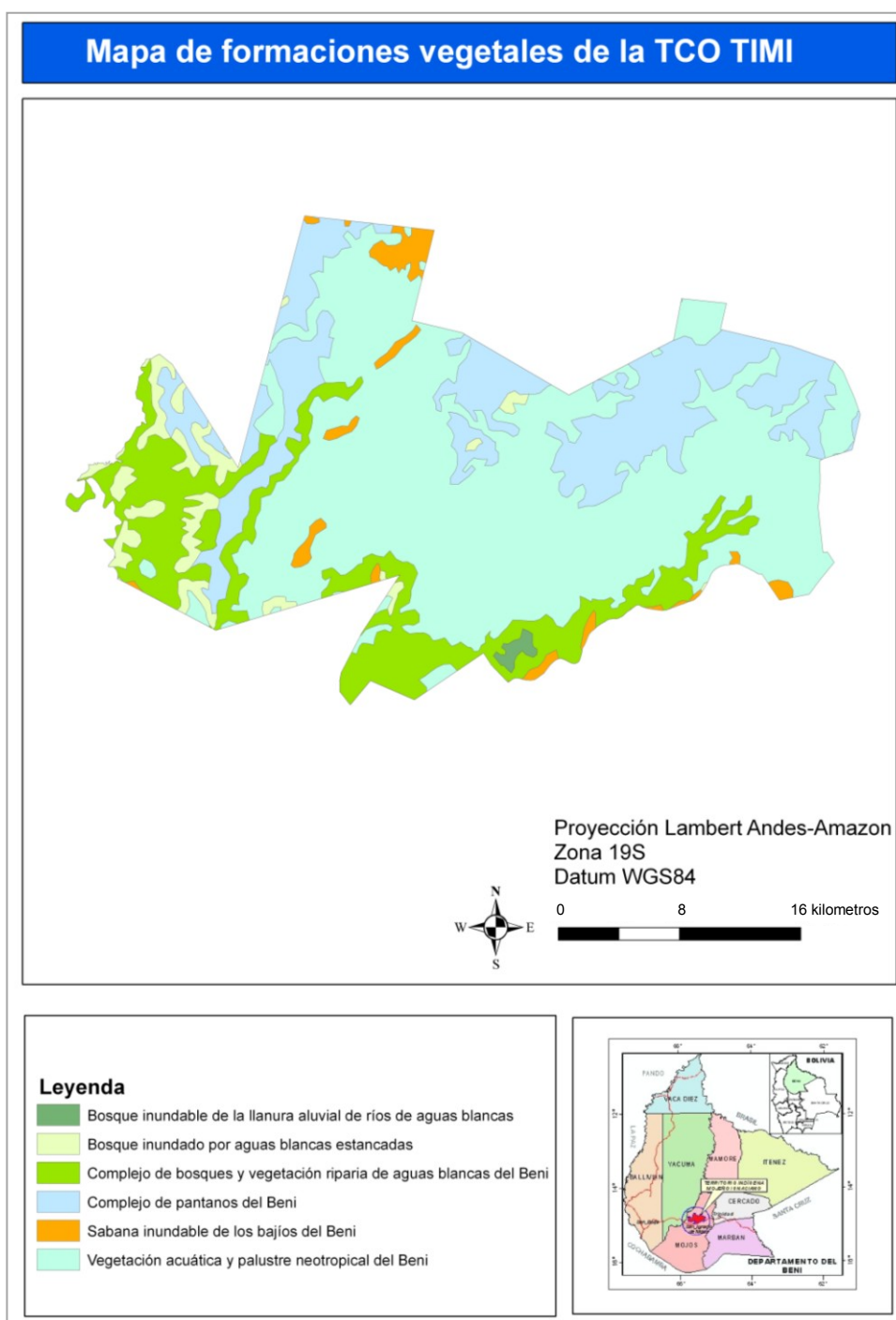
Mapa 3. 12. Geomorfología TIMI.



Fuente: elaboración propia en base a los datos del CPTI.

Desde el punto de vista geomorfológico el TIMI ocupa la llanura aluvial de inundación en donde las formaciones vegetales corresponden a un intrincado mosaico de bosques, pantanos, bosques de galería, lagunas y sabanas en las predominan las herbáceas graminoides y los pastizales (véase **mapa 3. 13**). La vegetación es el criterio dominante utilizado por los mojeños para definir el entorno natural. Este reconocimiento de las especies vegetales y su clasificación supone uno de los factores configuradores del principio de sostenibilidad en los bosques y sabanas de las Amazonía, facilitando el proceso de regeneración forestal en la región. Esto ha sido clasificado por algunos autores como el fenómeno de la “sucesión ecológica” (Toledo y Barrera-Bassols, 2008).

Mapa 3. 13. Formaciones vegetales TIMI.



Fuente: elaboración propia en base a los datos de NatureServe, <http://www.natureserve.org>

Al interior de la *Tierra Comunitaria de Origen* del TIMI, se distinguen seis unidades bien diferenciadas de vegetación entre las que destaca la vegetación acuática y palustre -características de los ambientes pantanosos: yomomos, curichis y bajíos-. Encontramos además bosques inundados por las aguas blancas que, como ya quedó explicado, son aquellas que provienen de la región andina y que debido a la fuerza con la que descienden portan consigo una gran cantidad de sedimentos sólidos. Estas aguas permanecen estancadas buena parte del año lo cual propicia la aparición de humedales. Lo mismo se podría decir de las unidades de bosque inundable conformadas por humedales. Por el contrario, en los complejos pantanosos emergentes en las zonas de bajíos permanentes, la vegetación guarda una estrecha relación con la vegetación acuática de plantas flotantes, junquillares, patujusales, etcétera, predominante en las zonas de humedal. Dicha zona forma parte, en todo su conjunto, de la llanura aluvial del Beni. Por último, mencionar que la franja o el corredor que transcurre por el área más meridional del territorio ignaciano y por la parte más occidental corresponde a la unidad denominada como *complejos de bosques y vegetación riparia*. Ésta se refiere a los bosques de galería que albergan dicho tipo de vegetación, la cual crece frondosamente a la orilla de ríos o arroyos y aparece comúnmente en tales zonas que permanecen a salvo de las inundaciones, propiciando que sean pobladas rápidamente por una vegetación que crece muy por encima del sotobosque y la cual puede llegar a alcanzar un dosel de hasta 50 metros de altura.

En cuanto a la vegetación del TIMI nos referimos presenta un alto grado de diversidad, tanto de recursos naturales renovables como no renovables. La vegetación es muy variada, principalmente por la existencia de diversos tipos de suelos. Las especies más destacadas que podríamos señalar son las siguientes: *Palmae*, *Luguminosaseae*, *Lecythidaceae* o *Moreaceae* (Fabricano *et al.*, 2009: 192). Algunos de los recursos renovables cuentan con un gran valor comercial. Aquellos que presentan un mayor índice de abundancia en este territorio y que ya han sido mencionados con anterioridad (véase **cuadro 3. 16**) son los siguientes: palo maría, mara, occhó, o el tajibo y diversos tipos de palmeras, entre las que destaca el motacú y toda una serie de plantas enredaderas, lianas y trepadoras como el bibosi o el bejuco, por citar las más abundantes (véase **fotografía 3. 21**). Esta última especie es muy característica de la vegetación amazónica y forma parte de aquellas plantas enredaderas, estranguladoras y trepadoras que pugnan frente a otras por alcanzar la luz solar. En un principio actúan como epífitos, es decir, generan súbitamente raíces aéreas que buscan enraizarse en los suelos para posteriormente matar al árbol el cual les servía de soporte (Tellería, 2003: 69). Los arbustos y las herbáceas constituyen el estrato basal del bosque (*ibíd.*, 71).

Los suelos de este área advierten de la presencia del ión aluminio, el cual es tóxico para las plantas superiores además de ser el responsable del incremento de acidez de los mismos (CIPCA, 2008: 9).

En cuanto a la fauna amazónica se refiere, es de sobra conocido la gran riqueza que existe, y no podría ser menos en la llanura mojeña. En la TCO del TIMI se encuentra gran variedad faunística (véase **fotografía 3. 22**). Esta región constituye un hábitat natural que alberga un sinnúmero de especies animales, las cuales están sin clasificar en muchos casos. Fundamentalmente corresponden a especies adaptadas al ecosistema de inundación de los Llanos de Mojos.

Entre la fauna terrestre las más destacadas son los monos (*Alouatta caraya*), el jochi pintado (*Cuniculus paca*), el oso hormiguero (*Tamandua tetradactyla*), el puerco espín (*Coendou prehensilis*), el tatú (*Priodontes maximus*) o el taitetú (*Pecari tajacu*) y la capibara (*Hydrochoerus hydrochaeris*).

En los ecosistemas acuáticos es muy común encontrar reptiles, fundamentalmente lagartos como el *Caimán yacaré*, o las tortugas –todos ellos habitan en los humedales–, al igual que las petas de agua (*Podocnemis expanda*). Otra clase de reptiles que no se encuentran exclusivamente en los ecosistemas acuáticos son los ofidios, y entre ellos los más habituales son las víboras como las *Bothrops neuwiedi* y *Crotalus durissus*.

Entre las aves destacan las parabas azules (*Ara glaucogularis*) y un sinnúmero de especies como la jatata y diversos tipos de garzas, de zancudas y de cigüeñas como la *Ciconia maguari* o el *Jabiru mycteria*.

Y en relación a los peces, quedó indicado que aquellos que más abundan son las especies nativas como el pacú (*Colossoma macropomum*) y surubí (*Pseudoplatystoma fasciatum*) principalmente, por ser estos además los que se crían en cautividad para su venta y comercialización por parte de las comunidades mojeñas al ser las especies más abundantes y por ello las que más fácilmente se reproducen (y como consecuencia las más consumidas entre los ignacianos). Además de éstas, también son habituales: el tambaquí (*Piaractus brachypomus*), sábalo (*Prochilodus nigricans*), boga (*Schizodon fasciatus*) y zeti (*Astronotus ocellatus*) (Canal, 2003: 117; Montes de Oca, 2004: 596).

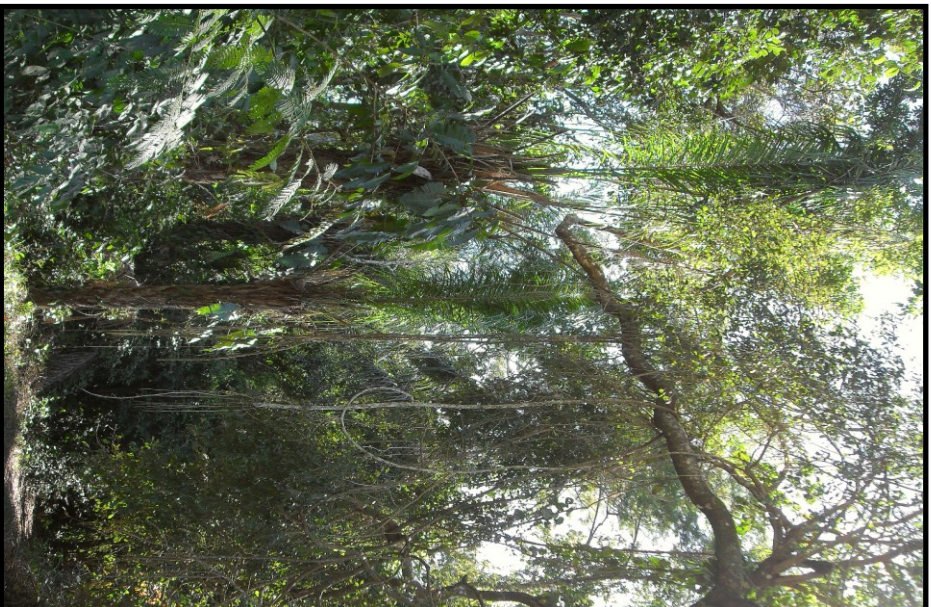
Concluir añadiendo una reflexión y es que algunas de las especies se encuentran cada vez con mayor dificultad y en número más reducido en Mojos, como ocurre con los caimanes, osos hormigueros, los monos, el taitetú o el tatú (es habitual escuchar lamentarse a los propios comunarios sobre ello al narrar episodios de partidas de caza). Habría que responsabilizar una vez más a la deforestación que viene teniendo lugar en la región desde hace más de dos décadas como una de las principales causantes que pone en peligro la supervivencia de muchas especies en Mojos. La extinción de especies

de animales tendría unas negativas consecuencias sobre la población local que ve mermado el aporte proteínico que tradicionalmente han conseguido gracias a los recursos de los bosques. Y es que los habitantes de Mojos están estrechamente vinculados al entorno natural. El territorio y los elementos que lo configuran forman parte del devenir etnohistórico de los mojeños. A ello dedicaré en buena parte el siguiente capítulo.

Fotografía 3. 21. Flora del territorio mojeño-ignaciano



Bejuco

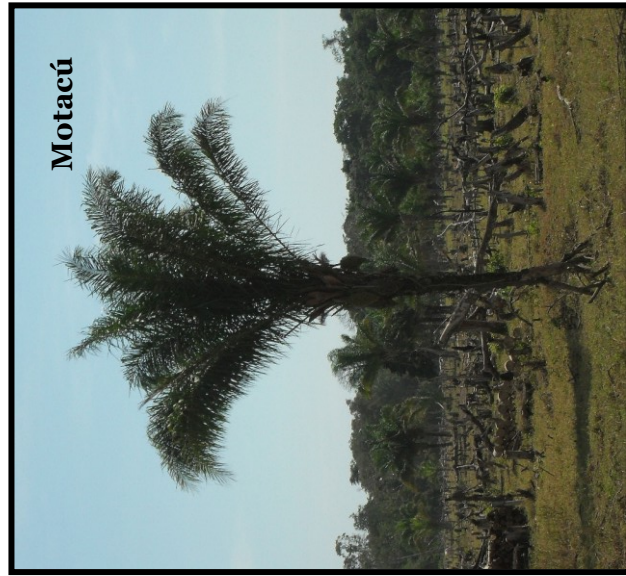


Lianas



Bibosi

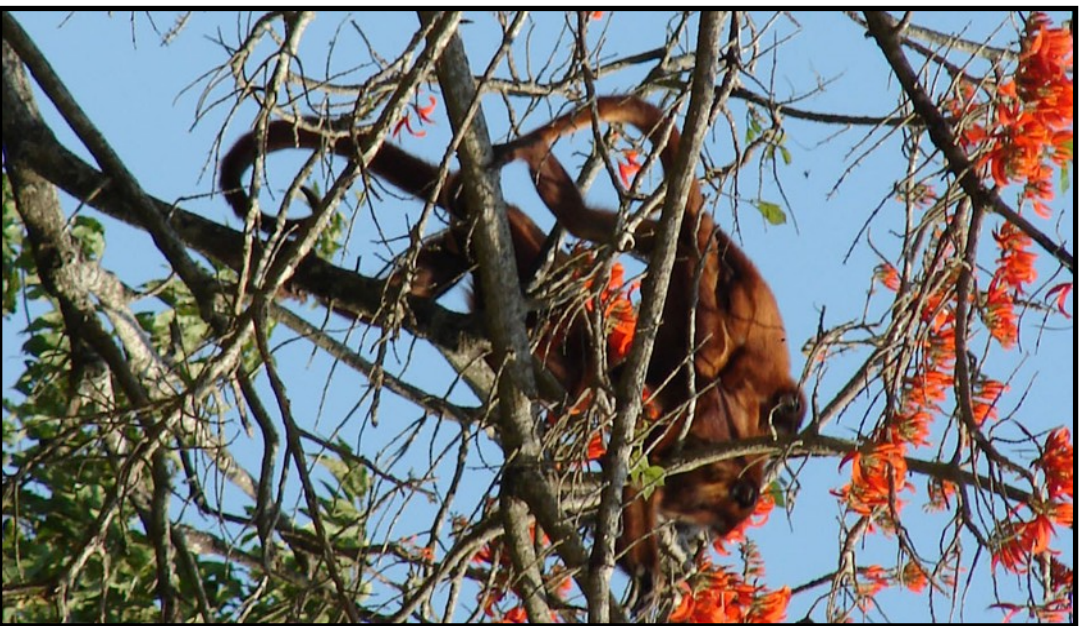
Fuente: Virginia Jabardo Pereda



Fotografía 3. 22. Fauna del territorio mojeño-ignaciano



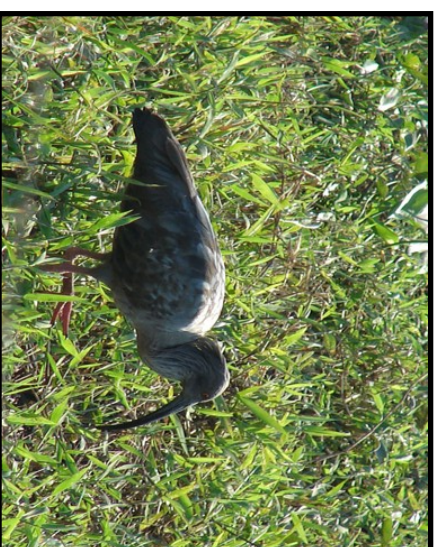
Caimán negro: *Caiman yacare*



Mono aullador rojo: *Alouatta seniculus*



Capibara: *Hydrochoerus hydrochaeris*



Bandurria mora: *Theristicus caerulescens*

Fuente: Virginia Jabardo Pereda



Jacana: *Jacana jacana*



Cigüeña americana: *Ciconia maguari*



Garza blanca o real: *Ardea alba*



Carancho: *Polyborus plancus*



Jabirú o tuyuyu: *Jabiru mycteria*



Zamuro negro: *Coragis atratus*

Fuente: Virginia Jabardo Pereda



Benteveo: *Pitangus sulphuratus*



Garza Amarilla: *Syrigma sibilatrix*



Paraba barba azul: *Ara glaucogularis*

Fuente: Virginia Jabardo Perreda

4. Revisión etnohistórica¹⁷³: del reino del *Gran Paitití* al Estado Plurinacional.

4. 1. MOJOS PRECOLONIAL¹⁷⁴.

Son diversos los términos empleados para referirse al legendario país de *Mojso* o al *Reino del Paitití* (Lehm, 1999; Block, 1997; Lazo, 2007). Fue la imagen otorgada por los españoles tras la llegada al Nuevo Mundo en base a la creencia de esta región como tierra fértil, rica en metales y con la presencia de una naturaleza exuberante. Incitados por dicho mito, se sucedieron las incursiones al *Gran Paitití*, que no sería conquistado sino tras varias expediciones militares que se transcurrieron bajo múltiples adversidades.

Castillo afirma a partir del estudio de las crónicas españolas del siglo XVI, que las poblaciones andinas ya intentaron integrar esta región amazónica a los estados de

¹⁷³ Para Wolf la “etnohistoria” no es más que la historia de aquellos a quienes se ha considerado desde Occidente como pueblos primitivos, no civilizados, pero que en realidad es parte de su misma historia (1987: 33-34).

¹⁷⁴ José Chávez Suárez lleva a cabo un análisis etimológico de “Moxos”. Para este autor existen tres posibilidades sobre el origen de la palabra. Podría provenir de la palabra aymara “Mojsa” que se traduciría por “dulce, grato, melificado”, pero no parece que tenga mucho respaldo; la segunda opción proviene del quechua: “Mosoj-llacta” o “Moxos Jallpa” refiriéndose a “tierra nueva”, o “Mocko-Ckallpa” o “Mojo-Callpa” en relación a “territorio desocupado” (incluso podría provenir de “Musu” o “Moso”, traducido como joven). La última versión hace mención al término autóctono “Musu” que significa para los mismos habitantes de la región “país llano y boscoso” (1986: 3-4). Según otra versión –incluida en el libro de David Block sobre la cultura reduccional del pueblo mojeño– la palabra “Mojos” proviene de la respuesta de un indígena de la misma región a los españoles: al preguntarle estos cuál era su nación respondió “ñuca muha” que pese a que significase literalmente “yo tengo sarna”, los españoles creyeron que ese era el nombre del pueblo, por lo que pasaron a denominarlo “Moja” o “Moha”, por la similar pronunciación (1997: 49). Y un último trabajo pretende aclarar que la palabra “mojos” viene del término “tmóhoru o tmojoro” que quiere decir “horizonte azulado sin límites” por lo que “tmóhoronano” significaría “mojeño” y los mojeños serían aquellos que viven en el territorio del horizonte azulado sin límites” o “los que viven en la llanura sin fin” (Fabricano, Semo y Olivio, 2003: 7).

Todas estas hipótesis nos llevan a la conclusión de que aún a día de hoy la proveniencia del término de “mojos” no ha sido aclarada.

Tiawanaku (o Tiahuanaco como se encuentra en otros textos, el cual corresponde a la cultura preincaica de la civilización tihuanacota, una de las más poderosas y duraderas del continente americano) (véase **fotografía 4. 1**) y *Tiawantinsuyo* -nombre concedido por el Inca Garcilaso de la Vega y que hacía referencia a las cuatro partes en las que los reyes Incas dividieron el imperio, mucho antes que lo hicieran los conquistadores españoles- (2004: pie de nota de xx). El ocaso de la cultura de Tiahuanaco marcaría, con su disolución, el comienzo del imperio incaico que se extendió hasta la llegada de los españoles.

Fotografía 4. 1. Imágenes de Tihuanaco.



Fuente: Virginia Jabardo Pereda

Según qué investigaciones se maneje se considera que la Amazonía experimentó una importante movilidad de poblaciones en torno al año 300 a. C., las cuales alcanzaron los llanos de Mojos hacia el año 500 d. C (D'Alá, 2008: 26).

La región de Mojos abarcaba una superficie vastísima. En base al trabajo de Chávez Suárez: para los españoles comprendía una extensión que iba “desde el río Pilcomayo¹⁷⁵ hasta el Amazonas” (1986: 5). Esto indica que “Moxos comprendió una región sin fronteras determinadas, que abarcaba, en un principio, extensísimos territorios habitados por variado conjunto de naciones de indios, donde según la leyenda se situaban los fantásticos reinos del Paitití y el Dorado”¹⁷⁶ (ibíd.). Conformaría por tanto, un área mucho más extensa de lo que hoy constituye tal espacio geográfico. Otros estudios identifican algunos de los pueblos que emigraron desde el

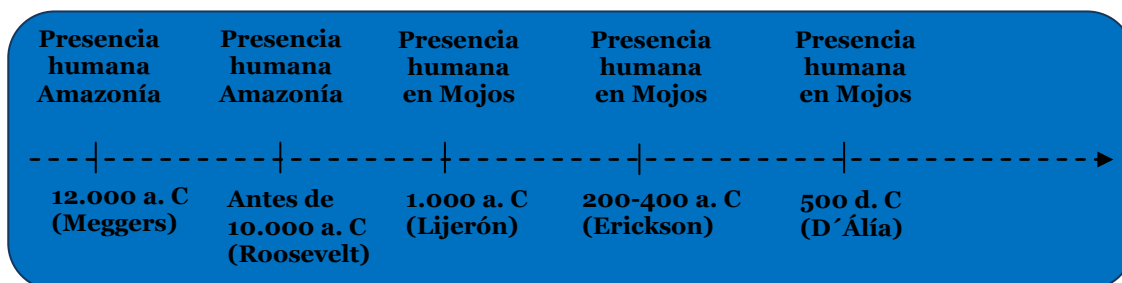
¹⁷⁵ El río Pilcomayo, nombre actual, pertenece a la cuenca del Plata que discurre por Argentina, Paraguay y Bolivia, teniendo su nacimiento en este último país, concretamente en la cordillera de los Andes, entre los departamentos de Oruro y Tarija, de los que desciende en su curso para convertirse en la frontera natural entre Paraguay y Argentina.

¹⁷⁶ Fidel Gabriel Castillo sitúa “en alguna parte de la selva Amazónica” el Gran Moxos o Paitití, al que considera uno más de los reinos imaginarios tales como “El Dorado” o “El País de la canela” (2004: xx).

norte tropical del continente sudamericano hasta los Llanos de Mojos. Estos serían: los *panuanas*, *morémonos*, *boseonos*, *muboconos*, *paucunas*, *morocosi*, *baure*, *torocosi*, *mujunaes*, *mojoronos* o *mojocosi* (Pinto G., 2002: 15). “Los Mojo” se situarían en los llanos benianos, en la zona comprendida entre el este del río Mamoré y el Sur de Trinidad y hasta lo que es a día de hoy San Ignacio de Mojos, por el oeste (*ibíd.*, 16).

Por el contrario, la información proporcionada por datos radiocarbónicos de algunas lomas artificiales próximas a la ciudad de Trinidad, apuntan a fechas que se sitúan en torno a los 1.000 años a. C, lo cual adelanta la fecha de los asentamientos mojeños en la región (Lijerón, 1997: 26). Este último autor afirma que si no se han analizado más vestigios antiguos de la región amazónica¹⁷⁷ es porque no se han buscado, puesto que se conoce de la existencia de cerámicas que se remontan a finales del VIII milenio y principios del VI (*ibíd.*, 27). Pero el descubrimiento y posterior estudio por parte de Clark Erickson -junto con la Universidad de Pennsylvania y el Smithsonian Institute de Estados Unidos- de otra serie de camellones localizados entre San Borja y San Ignacio de Mojos, concretamente en el Villar, apuntan a fechas que oscilan entre el 200 y el 400 a. C. (*ibíd.*, 26).

Figura 4. 1. Esquema cronológico de la ocupación humana de la Amazonía y Mojos.



Fuente: elaboración propia.

Las cifras manejadas para esta población varían entre los 50.000 habitantes que señala Castillo, a los 4.000 divididos en 50 pueblos de los que habla Orellana, a las “400 casas, 90 cocinas y 9 bebederos” que apunta Juan de Limpias o el medio millón al que se refiere Denevan (Pinto G., 2002: 17-18) y los 350.000 que recogen estudios como el de Ana María Lema (1995: 90). Algunos años más Pinto, Terceros y Landívar rectifican el dato anterior y señalan que Denevan estimó una población en Mojos de unas 100 mil personas para el año 1690, mientras que Block calculaba en torno a 200

¹⁷⁷ Betty Meggers sitúa –en base a pruebas del carbono-14– la presencia de población en la cuenca amazónica hace 12.000 años y estima el tamaño de la población en un rango entre los 500.000 y 10.000.000 antes de la llegada de los europeos (1984: 627 y 629). Eden por su parte apunta a cifras que no exceden los 4.000.000 de habitantes (1990: 63). Y para Roosevelt, la Amazonía fue ocupada por sociedades humanas antes del 10.000 a. C (1989).

mil para 1679 (2010: 61). La insuficiente información disponible explica la dificultad que entraña precisar la población que para entonces ocupaba la provincia de Mojos. Nos debemos conformar con este baile de cifras. Lo que sí se podría afirmar es que antes de la llegada de los conquistadores españoles al continente americano, la región mojeña estaba habitada por una numerosa población, superior en número a la que vivió durante el periodo reduccional. Tras el contacto con la población europea –la cual trajo enfermedades desconocidas que diezmaron a la población indígena por contagio- se experimentó un descenso demográfico.

Por último, algunos datos más acerca de la población de los llanos de Mojos del periodo prehispánico son los que aporta Alcides D´Orbigny -naturalista y geógrafo francés- quien en la década de los años 30 del siglo XIX -financiado por el Museo de París, en donde trabajaba- realizó un viaje al continente sudamericano. Esta institución le encomendó la misión de recorrer los países de Sudamérica, incluido la República de Bolivia. Tras su estancia en este país, D´Orbigny agrupó a las naciones que habitaban la provincia de Mojos antes de la llegada de los españoles en 9 grandes bloques en función de las lenguas habladas: *moxos* (*baures* y *muchojeones*); *itonamas*; *canichanas*; *movimas*; *cayuvavas*; *itenes*; *pacaguaras*; *chapacuras* y los *maropas* (2002: 1571).

4. 1. 1. Organización política y socioespacial.

En fechas tempranas admitía Carneiro la existencia de jefaturas en la Amazonía lo cual más tarde corroboró en trabajos posteriores (1976; 1995). Se refería como ejemplo a aquellas de los llanos de Mojos en donde el poder de los líderes políticos superaba a aquel de las sociedades del bosque tropical propiamente dicho.

En contra de la imagen medieval del *buen salvaje* (que tanta influencia ha ejercido sobre el imaginario actual de los indígenas), los pueblos de la región de Mojos contaban con sus propias estructuras de gobierno (D´Alía, 2008). Block se inspira en la obra de este autor al hablar de la existencia de “una *élite de especialistas políticos y religiosos, que gozaban de diversos grados de poder y privilegios*” (1997: 62). Lo que no queda claro si estos jefes ocupaban sus cargos por vía hereditaria. En este sentido Chávez Suárez señala que “*no siempre el cargo de Cacique era hereditario, podía sucederle un pariente o nombrarles otra persona*” (1986: 27). Según Block y D´Alía, para obtener el cargo de jefe o cacique -también denominados “*aramas*”: Chávez Suárez, 1986: 27; Eder, 1985: 84; D´Alía, 2008: 26; Block, 1997: 62- se tomaba más en consideración las hazañas que el linaje. Otros autores señalan que estos jefes eran elegidos anualmente y la autoridad venía determinada por la personalidad (Lijerón, 1997: 34; Lazo Zubieta, 2007: 30 y 61) con una influencia sobre el resto del grupo muy limitada (D´Orbigny, 2002: 1572). En estas sociedades una persona era digna de

convertirse en jefe de la tribu exclusivamente en base a sus competencias, destrezas o habilidades personales, pero siempre debía estar al servicio de la sociedad por lo que nunca podría abusar de ella, ya que era ésta quien legitimaba su autoridad a través del consenso colectivo¹⁷⁸. Las únicas ocasiones excepcionales en las que podía darse que este jefe o cacique ejercieran un poder superior, eran las guerras contra otros grupos. Sólo entonces el jefe podía tomar decisiones personales, si bien alentadas por su pericia guerrera. Cuando los episodios bélicos concluían, se tornaba a la normalidad. Este cacique era el encargado de ejecutar diversas funciones: tomar el mando en situaciones de guerra, actuar como juez en situaciones de conflicto entre la población, declarar sentencias de muerte, velar por el buen rendimiento de las cosechas, controlar la organización de las celebraciones, etcétera. Un aspecto que destaca la literatura consultada es que uno de los mayores privilegios de estos caciques era el respeto que le profesaba el conjunto de la comunidad.

Estudios como el de Inés Romero y Elisenda Pastó (2003) se basan en testimonios arqueológicos para evidenciar la existencia de una sociedad con una fuerte estructura social jerárquica. Gracias a las investigaciones arqueológicas se han constatado evidencias de una jerarquía política, en base a los cacicazgos. El estudio de CEJIS comparte esta visión y entiende que la sociedad del Mojos precolonial era una sociedad notablemente estratificada con un “*sistema de cacicazgos teocráticos*” en los que “*la autoridad era un hombre distinguido por algunas hazañas*” (2003: 208).

Algunas obras se remiten a Julian Steward o Louis Faron para utilizar el concepto de “jefaturas selváticas”, caracterizadas éstas por la presencia de varios elementos como: la “*agricultura excedentaria, sistemas desarrollados de comercio y arte bélico, especialistas políticos y religiosos, y un sistema de creencias con una jerarquía de divinidades*” (Block, 1997: 56; Pinto G., Terceros y Landívar, 2010: 62). También se sabe de la existencia de una jerarquía religiosa gracias a los testimonios y diarios de viaje de algunos de los misioneros que llegaron a Mojos (Lehm, 1999: 22-23). En relación a esta cuestión, los autores anteriormente citados, mencionan la existencia de chamanes quienes actuaban como intermediarios frente a los dioses de las aldeas y se dedicaban a la cura de hombres y mujeres haciendo uso para ello de plantas medicinales, de las que poseían altos conocimientos. Se podría decir por tanto, que existían dos tipos de autoridad: la de carácter político-administrativo y la de carácter

¹⁷⁸ Estos planteamientos nos recuerdan mucho a la descripción y análisis del “Gran Hombre” melanesio de Marshall Sahlins, quien encarna a un líder que encierra determinadas características personales que le elevan a la categoría de héroe a los ojos de la sociedad que comanda. Este líder debe velar por el buen funcionamiento de la sociedad. Para conseguirlo basa su autoridad en una red de relaciones de lealtad (2007).

espiritual, estando la primera encarnada en jefes o caciques y la segunda en mediadores espirituales, sacerdotes o sanadores (CIPCA, 2005: 7).

Contra la idea que ha prevalecido durante tanto tiempo la cual asegura que las sociedades primitivas carecen de Estado, el ejemplo de la sociedad mojeña nos sirve como réplica¹⁷⁹. Son diversas las teorías encargadas en explicar el porqué de la aparición del Estado: teorías del conflicto interno, del conflicto externo, demográficas, teorías de la institucionalización del liderazgo, teoría de sistemas, etcétera (Lewellen, 2003). Para el caso mojeño existe una teoría que podría adecuarse más que otras en cuanto a la aparición del Estado se refiere. Ésta es la denominada “teoría hidráulica” postulada por Karl Wittfogel, la cual defiende la idea de que aquellas sociedades que dependían de las inundaciones, estaban obligadas a planificar y coordinar a las poblaciones con el fin de abastecerlas, para lo cual se requería de cierta organización social además de una élite administrativa encargada de controlar los trabajos (*ibíd.*, 81-82). Esta teoría se ve complementada por otra versión de Marvin Harris quien otorga una primordial importancia al factor tecnológico puesto que la adaptación tecnológica de una sociedad al medio en el que habita determina la organización social de dicha sociedad (*ibíd.*, 82-84).

En base a estas teorías sobre la creación del Estado, Ismael Guzmán, retomando a David Block y apoyándose en la teoría del conflicto externo, expone de qué manera la organización comunal se transformaba en grandes confederaciones en caso de peligro de guerra, las cuales se diluían cuando el conflicto era superado, recuperando así la forma original (2004: 21). Retomando el concepto de “jefaturas selváticas”, se puede decir que las poblaciones mojeñas cumplían los criterios para ser calificadas como tales.

Trabajos como el de David Block, reconocen el establecimiento de redes comerciales estables entre los pueblos de la región amazónica, incluso las mantenidas con las poblaciones altiplánicas (1997: 59). La mercancía que intercambiaban iba desde productos artesanales (arcos, flechas, canoas, vasijas, redes de pesca, trampas, hachas para el desmonte de los campos, textiles, adornos como collares o brazaletes, raspadores, agujas, etcétera) al excedente agrícola de las cosechas anuales (yuca, maíz, frijol y ají). Eric Wolf admite el contacto abierto entre los pueblos de la llanura de Mojos y la región andina, entre los que intercambiaban plumas y telas de algodón de los bosques tropicales por “*adornos e instrumentos de metal*” (1987: 87).

¹⁷⁹ El trabajo de Gustavo Pinto, Óscar Terceros y Jorge Landívar afirma rotundamente que los pueblos de Mojos eran “sociedades o culturas sin Estado” (2010: 63) en donde la unidad familiar constituía la entidad principal en torno al que se articulaba el resto de la sociedad, aunque al mismo tiempo reconocen la existencia de una organización política fuertemente consolidada y controlada por una élite a la que denominan “achichacos” (*ibíd.*, 64). También Balée considera a las poblaciones indias de la Amazonía, como sociedades sin-Estado (1993).

Pero no todo eran relaciones comerciales. Algunos estudios dan testimonio acerca de los conflictos entre los pueblos denominados de “arriba” y los de “abajo” (Castillo, 2004) referidos los primeros a aquellos que ocupaban la selva amazónica y los segundos a las sociedades andinas. Estas últimas fueron avanzando hacia las tierras bajas de Bolivia en busca de algunos recursos naturales que en ellas se encontraban (*ibíd.*, xxi). Este autor considera que algunos parajes arqueológicos que a día de hoy se mantienen, como es el caso de Samaipata (véase **fotografía 4. 2**), Iskanwaya, Incallacta, Incahuasi, Oronta, etcétera, constituirían las antiguas fortalezas que reflejan el avance fronterizo de las “Altas Culturas” que además servían como defensa frente a las “Bajas Culturas”, las cuales llegaban a ascender hasta la región de los valles altos (Coroci, Ayopaya, Mizque, Pocomo o Zongo) (*ibíd.*, xxi-xxii).

Fotografía 4. 2. Imágenes del yacimiento de Samaipata.



Fuente: Virginia Jabardo Pereda

Las “jefaturas selváticas” se caracterizaban además por la adopción de sistemas de acción bélicos, lo cual también aparece atestiguado en las fuentes documentales junto con las “*técnicas militares de cerco y sitio*” (Tormo, 1967: 15). No se ha hecho un inventario específico sobre las armas de guerra pero sí se sabe que dentro del conjunto de los utensilios que fabricaban estos pueblos, existía un elenco de objetos con fines bélicos. En tiempos de guerras decoraban sus cuerpos con pinturas negras, azules o rojizas, se adornaban con plumajes de colores o se hacían perforaciones en la nariz o en los labios (Chávez J., 1986: 22). Esta última práctica ha trascendido hasta nuestros días. Actualmente “los Macheteros” constituyen uno de los grupos tradicionales y del folclore mojeño más emblemáticos, siendo la danza beniana más conocida del país. A pesar de que el significado actual es de carácter cristiano, el origen es evidentemente nativo, habiéndose dado un sincretismo de dicha danza *tradicional*.

Por otro lado cabe añadir que en los estudios dedicados a las poblaciones mojeñas del periodo precolonial es común el reconocimiento del alto desarrollo cultural de estos

pueblos, incluso se especifica que “*dentro de los pueblos amazónicos, los mojos habían adquirido el más alto nivel cultural (...)*” (Tormo, 1967: 15).

4. 1. 2. Actividades económico-productivas.

En los términos usados por Pierre Clastres se podría calificar el tipo de economía practicada por esta sociedad como economía de subsistencia (2007). Esto es, rechazando la idea de que al definirla como de subsistencia nos estemos refiriendo con ello a una inferioridad tecnológica. Por el contrario, se considera que este tipo de economía rechaza el trabajo excesivo generador de unos excedentes que serán destinados al comercio, estando orientada a la satisfacción de las necesidades primarias. Clastres defiende que “*cuando los indios descubrieron la superioridad de las hachas de los hombres blancos, las quisieron, no para producir más en igual tiempo, sino para producir tanto como antes en un tiempo diez veces más corto*” para apoyar tal planteamiento (*ibíd.*, 395).

Dicho esto y en referencia a las actividades productivas del Mojos prehispánico, la agricultura se posiciona como la principal actividad. Los productos cultivados son prácticamente los mismos que los actuales: la yuca (el alimento principal que constituye la mayor fuente de carbohidratos para las poblaciones de Mojos) plátano, camote (el cual empleaban para elaborar la chicha: bebida alcohólica consumida cuando había actividades rituales, bélicas o religiosas) maíz, etcétera.

Cada familia poseía su pequeña superficie dedicada al cultivo de dichos productos, la cual viene a denominarse actualmente con el nombre de “chacos”. Existía cierta división sexual del trabajo ya que los hombres y mujeres realizaban diferentes labores. Los desmontes normalmente los llevaban a cabo los hombres, por ser una actividad que requería un mayor esfuerzo físico. El cuidado del hogar, de los hijos y el cultivo eran realizados por las mujeres. A la hora de limpiar el bosque para convertirlo en chacos, utilizaban el mismo método que actualmente, de tumba, roza y quema. Tras cortar con las hachas los árboles prendían fuego al terreno. Las cenizas servían como abono lo cual favorecía la fertilidad de los suelos.

Además de estos cultivos, otras actividades como la pesca o la caza eran practicadas por los habitantes de la región. Ambas constituían un importantísimo complemento proteínico a la alimentación indígena. Antes de la llegada de los españoles, cuando las poblaciones indígenas no conocían la existencia de las armas de fuego, utilizaban el arco y la flecha como instrumentos para cazar. Las especies más comunes que cazaban eran el tapir y el jabalí (Block, 1997: 58). Tal actividad se desarrollaba en zonas de bosque.

Por el contrario, los pueblos que se situaban más cercanos a las riberas de los ríos se dedicaban mayormente a la pesca. Ésta tenía lugar preferentemente en lagunas y riachuelos de la región. Tras la época de inundación emergían pequeñas pozas en las que los peces permanecían intentando sobrevivir a medida que éstas se secaban. Usaban anzuelos y redes tejidas por ellos mismos con cortezas de árboles.

La recolección de frutos silvestres era igualmente importante como complemento alimenticio por un lado y como recolección de plantas medicinales por otro, utilizadas por los chamanes o hechiceros para elaborar tratamientos de cura para diversas enfermedades o para su uso en rituales. Entre los productos recolectados se encontraban -además de los frutos- huevos, miel, tortugas, etcétera (Block, 1997: 58).

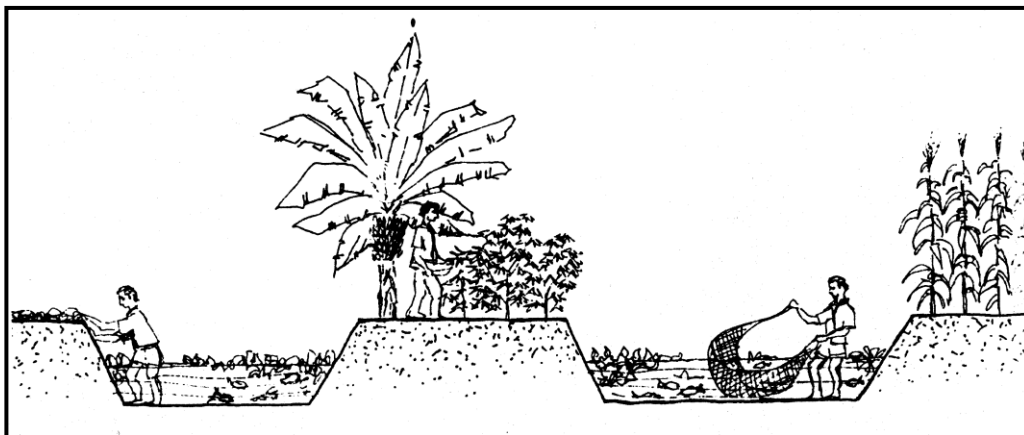
Leandro Tormo Sanz -desde una perspectiva marxista- nos brinda en su estudio sobre el sistema comunalista indiano, una amplia información en relación a la propiedad de la tierra en la región de Mojos (1967). Según este autor, las tierras pertenecían al pueblo indígena en cuestión a pesar de que se carezca de la documentación pertinente que lo confirme. Pese a ello, en base a los testimonios que se han encontrado -fundamentalmente de jesuitas- se sabe que *“la propiedad directa de las tierras era comunal, perteneciendo a las distintas agrupaciones indígenas, la propiedad útil era individual, correspondiendo al jefe de familia el pedazo de terreno que anualmente escogía y cultivaba”* (ibíd., 30). Significa que la propiedad en cuestión estaba en manos del colectivo. Sin embargo, lo que cada familia cultivaba era en beneficio propio, poseía por lo tanto el usufructo de la tierra, de una superficie particular dentro de la propiedad comunal (ibíd., 31). El mismo autor resume los tres tipos de propiedad existentes en la región de Mojos durante el periodo prehispánico: *“comunal, semicomunal e individual, habiendo dentro de estos tipos distintos matices. La propiedad de la tierra pertenecía directamente a la comunidad indígena y útilmente al individuo que la sembraba, lo cual únicamente hacía por dos o tres años en el mismo lugar, cambiando después a otro”* (ibíd., 33).

4. 1. 3. Patrón de asentamiento.

Las excavaciones arqueológicas han sacado a la luz la construcción de obras de ingeniería hidráulica, como son las lomas, los canales, terraplenes o lagunas artificiales¹⁸⁰. A día de hoy se encuentran vestigios de estas obras en la región de Mojos (véase **figura 3. 8**) Esto nos lleva irremediablemente a pensar en una sociedad jerárquica y organizada, donde cada uno tenía su función, donde existía cierta división del trabajo –puede que incluso esclavitud- y la cual se encontraba al mando de liderazgos con una autoridad respetada. Dicho aparato hídrico presupone, por tanto, la existencia de jefes que organicen y controlen al resto de la población para llevar a cabo este tipo de obras artificiales sobre el terreno.

Los primeros pobladores de Mojos, aprendieron a domesticar el entorno en el que vivían y a elegir con criterios ecológicos los lugares más propicios para el cultivo (véase **figura 4.2**). De esta manera supieron lidiar con los condicionamientos biofísicos de la llanura de inundación para hacer frente a las adversidades del terreno. De ahí que se haya considerado que las poblaciones prehispánicas de Mojos “sabían manejar las aguas y sacarles provecho para producir alimentos” (Romero I., 2000: 50).

Figura 4. 2. Sistema de manejo de recursos



Fuente: *ibíd.*, 49.

En referencia a esto y tras su estadía en la provincia de Mojos, D’Orbigny escribe en su cuaderno de viajes que “*como no podían viajar por tierra en cualquier tiempo, las corrientes de agua eran sus caminos ordinarios, que recorrían incesantemente en*

¹⁸⁰ Los terraplenes hacían la función de diques de contención que frenaban las aguas de la inundación; los canales servían para facilitar el drenaje de las lagunas y al mismo tiempo para el riego de los camellones, así como para incrementar las posibilidades de navegación al interior del territorio; las lagunas posibilitaban la obtención de recursos de pesca y constituían a la vez reservas de agua y las lomas eran las zonas donde se localizaban los poblamientos (Lijerón, 1997: 18-21).

piragua para cazar o pescar” (2002: 1572). La red de hídrica de la llanura beniana inundable les obligada a desplazarse por el territorio en canoas (Chávez J., 1986: 26).

En su revisión etnohistórica de Mojos, Arnaldo Lijerón pone énfasis en la perspectiva ecológica ligada al patrón de asentamiento característico del periodo prehispánico mojeño, mencionando *“las condiciones geográficas y las adaptaciones practicadas por los pueblos originarios guiados por su experiencia y conocimiento de su hábitat”* (1997: 54).

Los pobladores del Gran Mojos, desarrollaron entonces un particular proceso de adaptación al medio. Tanto las construcciones de obras de tierra descubiertas por las excavaciones arqueológicas como el aparato hídrico construido a partir de lagunas, ríos, canales, etcétera, así lo demuestran. Se manifiesta de esta manera la existencia de un sofisticado sistema de control hidráulico.

En la región de los Llanos de Mojos, se producen todos los años fuertes inundaciones, lo cual obliga a su población a preparar los terrenos para facilitar los asentamientos humanos, la cría de animales, el cultivo de la tierra, etcétera. Estas construcciones de obras de tierra descubiertas por las excavaciones arqueológicas atestiguan la adaptación del pueblo mojeño a las características de su entorno. Estudios como el de David Block hacen referencia al *“carácter anfibio de la cultura de la sabana”* para demostrar el grado de adaptación de estas poblaciones al ecosistema de inundación. El mismo autor señala que:

“cuando las aguas en ascenso cubrían las plazas de sus aldeas, los indios construían barbacoas elevadas, las cubrían con tierra y proseguían su normal coccimiento. Viajaban por la sabana inundada, navegando con sus canoas por lo que los europeos consideraban un océano sin carta de navegar. Dormían atando simplemente más arriba de sus hamacas en el palo en el que se apoyaban (una verdadera revelación para los españoles con sus pabellones enrollables)” (1997: 57).

Los documentos recogidos por Eder son algo menos idealizados. El siguiente fragmento comenta las desventajas de las inundaciones, principalmente con respecto a los daños que ésta causaba en la arquitectura doméstica:

“por entonces los indios que no tienen casas elevadas y construidas sobre estacas, han de construir algún piso improvisado en que vivir día y noche con su familia y animales, teniendo la canoa atada a la puerta para poder movilizarse cuando quieran. En estas circunstancias no es raro que desde el piso superior de la casa pesquen con flecha los peces que circulan por abajo, pues éstos y –lo que es más divertido– los

caimanes transitan libremente por la plaza, calles y aun casas, haciendo presas de los perros y patos desprevenidos” (1985: 62).

Son algunas de las dificultades que debido a las inundaciones aún a día de hoy deben hacer frente. Durante la época de lluvias *“sucede con frecuencia que en una noche inunde (el Mamoré) con vertiginosa rapidez toda la vecindad que se extiende junto a su ribera, rodeando de tal forma por todos lados las manadas de caballos o vacas que pastan, que no pueden escapar a la muerte” (ibíd.).* Es por ello que debido a las subidas del nivel de las aguas, los pobladores mojeños se veían obligados a construir elevaciones -como las lomas- para evitar que el agua lo anegara todo: casas y campos de cultivo. Por tal motivo *“siempre escogían los parajes más o menos altos en las riberas de los ríos, arroyos o lagunas, donde el agua no alcanzaba en el periodo de las inundaciones, para levantar los pueblos” (ibíd., 22).*

No sólomente adoptaron ciertas respuestas adaptativas ante el medio semiacuático sino frente al abastecimiento de recursos naturales. Estas poblaciones se vieron forzadas a adoptar un patrón de asentamiento disperso ajustándose a las posibilidades de obtención de recursos y fundamentalmente a la escasez de caza, propia del nomadismo practicado por los habitantes de tierras bajas. Por esta razón era más adecuado, a medida que crecía la población de las aldeas, que algunas familias se trasladaran a otro territorio y creasen nuevos asentamientos. Cada uno de ellos estaba gobernado por su respectivo cacique. Así lo expresa Eder: *“donde encuentran abundante caza o pesca se instalan bajo la arboleda y permanecen allí hasta que el hambre los empuja a otro lugar: cuando toda la caza ha huido o la laguna ha agotado su pesca, parten hacia otro punto en busca de lo mismo” (1985: 83).*

Chávez Suárez comenta de qué manera los pobladores de Mojos vivían diseminados en un amplio número de aldeas *“con lenguas diversas, pero con rasgos físicos más o menos parecidos (...)” (1986: 22).* El trabajo de Block estima una población de entre cien o doscientos pobladores (1997: 61) donde cada poblado contaba con un líder político encargado del buen funcionamiento de la comunidad.

El conjunto de literatura consultada¹⁸¹ dedicada al estudio de la región, nos habla de la existencia de diversos pueblos indígenas o “parcialidades” étnicas -pertenecientes a la familia *arawak*- diseminadas por el territorio, las cuales estaban divididas en unidades territoriales menores. Éstas estaban compuestas por diversas aldeas que funcionaban de manera independiente: *“cada parcialidad que llevaba su nombre particular se divide en varios pueblos o aldeas, también cada una con denominación*

especial” (Chávez J., 1986: 6). Correspondía a un patrón de asentamiento establecido en base a las necesidades de subsistencia. Algunos autores prestan especial atención a la componente ecológica tanto de los asentamientos mojeños como del uso y manejo de recursos, basado en una lógica más propia de poblaciones nómadas caracterizada por la movilidad, lo cual evitaba conflictos entre las diversas comunidades por la ocupación del territorio y el acceso a los recursos naturales (Lijerón, 1997: 55).

Con respecto a cuestiones arquitectónicas los estudios coinciden en que las casas eran redondas y cuadradas, construidas con materiales del entorno: las paredes de barro y los techos de paja. Las primeras constituían las viviendas familiares y las segundas se utilizaban como despensas de alimentos y cocinas. Existen además evidencias de la existencia de “bebederos”: especie de templos donde se reunía la comunidad para celebrar las festividades y otro tipo de cultos (Chávez J., 1986: 24; Pinto Parada, 2001: 21).

Las casas eran grandes y estaban dotadas todas ellas de una puerta principal que permitía el acceso desde la plaza central, aunque si bien es cierto que éste constituyó el patrón general de asentamiento, sufrió continuas modificaciones debido en buena medida a las constantes inundaciones de la pampa y al traslado que obligaba la búsqueda de recursos (Lazo, 2007: 31). Las casas presentaban una forma circular y los materiales que se destinaron a su construcción fueron el chuchío para las paredes y las hojas de motacú para techos (Pinto Parada, 2001: 21) lo cual se mantiene en la actualidad. Las lomas y los terraplenes fueron dos elementos arquitectónicos que determinaron, como anticipaba en el comienzo de este capítulo, el tipo de asentamiento de estas poblaciones.

En relación a las celebraciones de culto habría que añadir algunos apuntes y es que algunos de los instrumentos musicales preferidos por los mojeños eran la flauta y el tambor lo cual demuestra que los padres jesuitas no serían los responsables de la introducción de la música en Mojos, pues estos eran ya aficionados a ella previa a la llegada de aquellos. Para cada una de las naciones de Mojos existía un tipo de religiosidad diferente (actualmente en cada una de las comunidades existen fiestas particulares que conmemoran la fundación de dicha comunidad) pese a que el culto a la naturaleza era común en todas ellas: “*reverenciaban a un dios que gobernaba el agua, a los animales, a los cultivos, a la caza o a la pesca y dirigía a las nubes y al rayo*” (D’Orbigny, 2002: 1572).

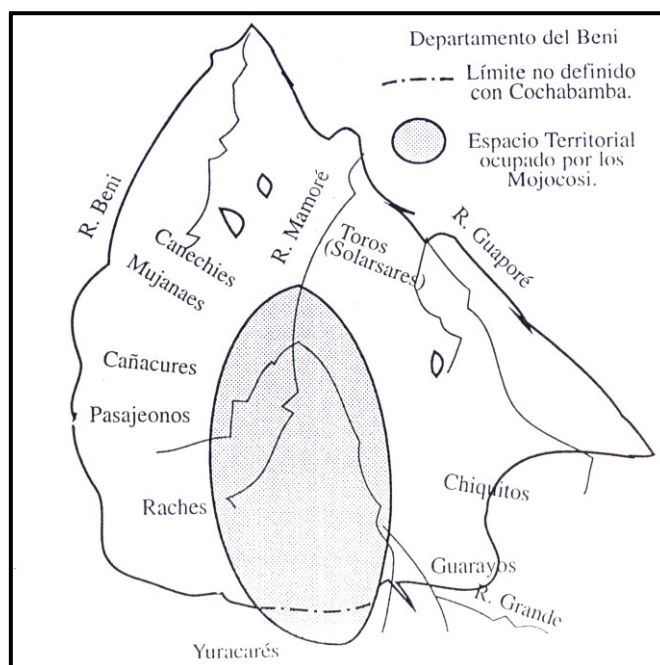
En estas celebraciones la población se ataviaba con sus mejores galas. Sabemos que el algodón era un cultivo destinado a la confección de las vestimentas, conocidas con el nombre de “*camijeta*” para los hombres y “*tipoy*” para las mujeres (Pinto Parada, 2001: 21) que con la llegada de los jesuitas fueron alargadas y las cuales podían

ser de dos colores: blancas o rojas (Lazo, 2007: 30). En relación a los adornos corporales con los que se ataviaban, D'Orbigny hace alusión a las plumas que se colocaban en la cabeza y las pinturas que cubrían sus rostros además de los adornos que colgaban de la nariz y labios o los dientes de los enemigos a quienes se habían enfrentado en combate y los que decoraban sus cuellos (2002: 1572). A día de hoy parte de estos abalorios se han mantenido en los típicos vestidos folclóricos con los que los vecinos de Mojos se visten en los días de fiesta.

4. 2. PERÍODO REDUCCIONAL.

Gustavo Pinto se atreve a localizar geográficamente a los *mojocosi* -los antiguos “mojo”- e incluso a definir los límites territoriales del espacio que ocupaban allá por el siglo XVII (véase **figura 4.3**). Este autor considera que los *mojocosi* -término utilizado por los españoles asentados en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra para denominar al pueblo mojeño- provendría de “mujuono” lo cual suena de la misma manera que en lengua moja el término “mujus”, constituyendo el sufijo “ono” el plural de dicho término (2002: 36). En realidad lo importante es la idea de que el concepto de Mojos es una construcción colonial que fue impuesta por los recién llegados ejércitos de españoles.

Figura 4. 3. Límites territoriales de los *Mojocosi*.



Fuente: *ibíd.*

Se ha señalado a 1561 como el año en el que la expedición liderada por Lorenzola región mojeña Suárez de Figueroa consiguió penetrar en la región de Mojos (Lema,

1995: 90). D'Orbigny recoge en sus crónicas otra fecha y retrasa la penetración a al año 1564, cuando Diego Alemán alcanzaría dicha región desde Cochabamba (2002: 1573).

El enfrentamiento entre las tropas del ejército español y los pueblos de la Amazonía boliviana dejaron un balance muy negativo, principalmente para el segundo bando. Las tropas al mando de los capitanes Juan de Ayola y Ñuflo de Chávez, penetraron desde Paraguay a los llanos de Mojos dejando un número elevadísimo de víctimas (Castillo, 2004: xxii). Tras su paso por el este amazónico fundaron la que sería la primera ciudad española de lo que a día de hoy es hoy el Oriente boliviano: Santa Cruz de la Sierra, con la que se establecía una fragmentación entre el Este y el Oeste de la Amazonía, que se ha visto perpetuado hasta la actualidad en cuanto al desarrollo de ambas regiones se refiere (*ibíd.*, xxii-xxiii).

Tras algunos intentos fallidos por parte de diversas expediciones frustradas, las autoridades españolas decidieron un cambio de estrategia -al igual que se había hecho éxito en Paraguay- comandada por misioneros (Lijerón, 1997: 37). Los antiguos caciques servirían de intermediarios entre las poblaciones indígenas y los misioneros, siéndoles concedidas a aquellos algunas competencias como la organización de turnos de trabajo, el control de los trabajos agrícolas o la organización de fiestas religiosas (CIPCA, 2005: 7).

D'Orbigny relata la manera en que los jesuitas llegaron a fundar las misiones de Mojos (2002: 1574-1575). Este autor narra cómo el padre Juan de Soto partió a la provincia de Mojos donde volvería más tarde con José Bermudo y Julián Aller. Pese a haber aprendido estas unas nociones básicas de la lengua indígena, los pobladores de Mojos, asustados, los expulsaron a Santa Cruz, negándose a convertirse al cristianismo. D'Orbigny narra cómo tras varios intentos fallidos, el padre José del Castillo encandiló a las indígenas con regalos, ofreciéndoles más si permitían la entrada de otros jesuitas. De esta manera en el año 1674, Pedro Marbán, José Bermudo y Cipriano Barace fueron recibidos en Mojos. Paulatinamente, los jesuitas se fueron ganando la confianza de los indios y comenzaron a introducir pequeños cambios en los modos de vida de estos hasta que lograron fundar las misiones en las que llevarían ganado y establecerían la agricultura para lograr su consolidación.

Con la llegada de los españoles al Nuevo Mundo se comenzaron a establecer las reducciones de indios en base a una división etnosocial de la población, la cual fue reproducida por las estructuras del Estado-nación, consolidando la segmentación entre la población blanco-mestiza y la población indígena. Esto se debe a que las reducciones permitieron “*evoluciones culturales diferentes y sociedades nacionales con identidad y estructura únicas, frente a identidades indígenas por lo menos diferenciadas de*

aquellas en términos de organización y exclusividad locales” (Esteva Fabregat, 1990: 110-111) afianzando uno de los pilares de la sociedad colonial.

Aunque la mayor parte de estos estudios afirmen que la llegada de los jesuitas a la región data en la segunda mitad del siglo XVII, otros la adelantan a finales del siglo XVI. En concreto, Fidel Castillo señala en su estudio sobre la Amazonía boliviana indígena, al año 1582 cuando el jesuita Eguiluz identificó a más de 37 grupos étnicos amazónicos entre los que sobresalían los “Mojos” por ser el más numeroso de todos ellos (2004: 4).

Lo que se encontraron estos religiosos fue una sociedad ya organizada no sólo desde el punto de vista social sino también en el ámbito de la religión, lo cual no quiere decir que los jesuitas no encontraran resistencia y desconfianza para el asentamiento de las misiones. No obstante, de manera gradual, éstas fueron estableciéndose gracias al “pacto reduccional” por el que los jesuitas se comprometían a defender a los indígenas de la esclavitud de los españoles y a facilitar el acceso de aquellos a *“herramientas y bienes materiales de origen europeo”* (Lehm, 1999: 33-34).

La primera reducción de la región de la que se tiene constancia es la de Loreto (1682). La fundación de la misión de San Ignacio no se produciría hasta 1689, siendo la tercera más antigua (véase **mapa 4. 1**). Su templo sería fundado el 1 de octubre de 1694. Alcides D’Orbigny tuvo la posibilidad de visitar esta última a la que se refirió como *“una de las más bellas y antiguas de la provincia”* (2002: 1474). A día de hoy algunos restos de dicho templo se conservan en Ichasi Awásare (una de las comunidades del TIMI) puesto que en el año 1749 el pueblo se trasladaría al territorio que ocupa actualmente San Ignacio de Mojos -el cual había sido ya ocupado por las parcialidades mojeñas precoloniales- creando allí un nuevo asentamiento a manos del religioso Bartolomé Bravo¹⁸². La misión de San Ignacio concentró a las familias indígenas que previamente se asentaban en las parcialidades mojeñas de las riberas del Mamoré, así como de zonas de bosque y pampa próximas a dicho río (Molina W. y Soletto, 2002; Lehm, 1999). De ahí que los mojeños que pasaron a conformar la reducción misional de San Ignacio adquirieron la denominación de ignacianos, término con el que a día de hoy se identifican.

¹⁸² Información obtenida del Gobierno Municipal de Mojos en San Ignacio.

Mapa 4. 1. Reducciones jesuíticas siglo XVIII.



Fuente: Lopes de Carvalho, 2012 (<http://nuevomundo.revues.org/62485>)

A través de las reducciones, los jesuitas procuraron lograr cierta homogenización de la población indígena. Algunos autores hacen alusión al proceso de “etnogénesis” (Herbás y Patiño, 2010: 9) que condujo a la aparición de nuevas realidades socioculturales que con el tiempo recrearían nuevas identidades (Jordà, 2003: 153) como veremos a lo largo de la presente investigación. Del mismo modo trabajaron en la implantación de actividades que propiciasen la sedentarización como lo sería la agricultura (si bien ésta ya era practicada por las parcialidades prehispánicas), la fabricación de productos de artesanía o la ganadería (Molina W. y Soletto, 2002: 66). Wolf considera que las directrices adoptadas en las repúblicas de indios supusieron una redefinición de su naturaleza desde el punto de vista religioso además de demográfico, económico, jurídico y administrativo, que les confirió una nueva identidad (1987: 182).

En función del tipo de fuentes consultadas, encontramos o bien posturas críticas frente al papel jugado por las misiones jesuíticas asentadas en Mojos o bien aquellas que muestran una actitud más indulgente. De esta manera el escritor boliviano

Guillermo Lora apunta a la nostalgia vivida en las reducciones mojeñas con la expulsión de los religiosos (1988: 2, cit en Lazo, 2007: 34). La misma opinión es compartida por Rodolfo Pinto cuando refiriéndose a los jesuitas expone que:

“enseñaron oficios y manualidades, en octubre de 1682 introdujeron la ganadería a la región, unificaron el idioma y organizaron pueblos que hoy existen” aunque al mismo tiempo declara que no se puede negar el hecho de que *“destruyeron gran parte de las culturas nativas y en forma indirecta ocasionaron la muerte de muchos habitantes de Mojos al transmitir epidemias y enfermedades para las que los nativos no tenían ninguna defensa”* (2001: 30).

Otro estilo más censor encontramos en los discursos de autores como José Mújica quien reflexiona sobre la desintegración y destrucción de los pueblos indígenas como consecuencia de la implantación de las misiones y de la subsiguiente evangelización que trajo consigo el pago de tributos y cargas de diversa índole (1991 cit. en Lazo, 2007: 35).

Esto es sólo un ejemplo de las posturas irreconciliables manifestadas sobre la influencia que ejerció la Iglesia católica en el seno de las poblaciones indígenas de Mojos. Éstas oscilan entre la acritud y la crítica feroz hacia las atrocidades cometidas por los padres religiosos y la obra “civilizadora” que a través de la prédica del evangelio y la conversión tuvo lugar en dicha región. Quizá pueda sorprender la opinión actual que en San Ignacio se tiene de las misiones jesuíticas y es que ante la persistente imagen que se ha generado desde ciertos discursos y la cual ha cuestionado la obra de dichos párrocos, son muchos los mojeños que defienden la importancia de mantener el legado misionero traspasado por los jesuitas anunciando que:

*“los hermanos latinoamericanos que compartimos esta importantísima experiencia del legado misionero de las reducciones guaraníes, de Mojos y de Chiquitos, y que de una u otra manera estamos comprometidos con él, reconocemos en San Ignacio de Mojos, hoy, a los mayores exponentes de estos virtuosos poseedores de un saber que los identifica y los diferencia”*¹⁸³.

¹⁸³ Fragmento de la declaración de San Ignacio de Mojos como “*Capital Espiritual de las Misiones Jesuíticas del Cono Sur Americano*” durante la “*Ichapekene Piesta Inasianuana*” del 2010, cuando ésta fue postulada como candidata para obtener la declaración de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad ante la UNESCO.

4. 2. 1. Organización política y socioespacial.

Un aspecto que tuvo mucho éxito como consecuencia de la creación de las reducciones fue la reestructuración política en base a los cabildos -institución colonial que se ha mantenido hasta nuestros días llevando a cabo prácticamente las mismas funciones que las originarias-. Según indica la socióloga Zulema Lehm:

“los cabildos constituían el gobierno local de cada misión. Cumplían una función de mediación entre los jesuitas y la sociedad indígena, organizaban los turnos en el trabajo comunal, controlaban las labores agrícolas y <<la conservación de la moral cristiana>> en el nivel familiar y también cumplían un rol central en la organización de la vida ritual y festiva en cada misión” (1999: 31).

Los cabildos organizaban la vida de las comunidades indígenas. En un principio los sacerdotes elegían en la Casa del Cabildo a los ancianos más respetados y experimentados. El Cabildo estaba constituido por un Cacique, Alférez, dos tenientes, dos Alcaldes de Familia y dos de Pueblos (D´Alía, 2008: 42-43 y Chávez J., 1986: 304). Los antiguos caciques indígenas mantuvieron sus cargos.

La permanencia de la nobleza o élite india se encuentra también presente en la obra de Wolf quien explica las funciones que les fueron atribuidas a ésta en las repúblicas de indios -como la supervisión de las comunidades locales- al más puro estilo del imperio británico con la *indirect rule* (1987: 181).

D´Orbigny añade más cargos a dicha institución, los cuales eran ostentados de manera jerárquica: el Cacique, el Alférez, tenientes, capitanes y fiscales (2002: 1576-1577). Veremos en qué medida se ha perpetuado en la actual organización sociopolítica.

4. 2. 2. Actividades económico-productivas.

Las actividades económicas se vieron transformadas con la llegada de los nuevos pobladores. La caza, pesca y recolección pasaron a un segundo plano, dando prioridad a la agricultura y ganadería, habiendo sido esta última introducida por los padres jesuitas -caballos, bueyes, mulas o vacas-. Ambas se convirtieron en las actividades básicas de subsistencia en este periodo.

Con respecto a la agricultura se mantuvo la producción de cultivos autóctonos (yuca o maíz) en las riberas fluviales -constituyendo estos la base de la alimentación- pero además se introdujeron en los campos elevados nuevos cultivos de procedencia europea -como el arroz o algunos frutales- actuando como complemento alimenticio. La utilización de técnicas agrícolas procedentes de Europa intensificó el agotamiento de los recursos naturales influyendo en la fertilidad de los suelos (Block, 1997: 99-100).

En relación a la propiedad de la tierra de las comunidades indígenas, habría que aclarar que si bien fue gestionada durante el periodo reduccional por los jesuitas, la propiedad en sí se encontraba en manos de los Cabildos (Tormo, 1967: 27). No obstante, los padres jesuitas procuraron hacerse con las antiguas propiedades indígenas aprovechando que los mojeños no contaban con títulos que pudieran demostrar la posesión de las tierras (*ibíd.*).

El modo de producción agrícola intensivo tuvo como consecuencia que las reducciones mitigaran el grado de nomadismo de los grupos indígenas de Mojos, lo cual dio como resultado un incremento de la concentración poblacional en núcleos menos dispersos.

El conjunto de cambios socioeconómicos junto con la gestión jesuítica provocó la aparición de una variedad de oficios que desarrollaron una actividad diversificada de producción indígena: albañiles, tejedores, carpinteros, artesanos, vaqueros, herreros, etcétera. Entre ellos cabe destacar a aquellos que se dedicaron a la elaboración de objetos de ornamentación y de instrumentos musicales como violines, flautas, flautines o tambores (véase **figura 4. 4**) Los padres jesuitas dedicaron bastante tiempo a enseñar a los mojeños a tocar música barroca, la cual se ha mantenido hasta nuestros días, existiendo una importante escuela de música actualmente en San Ignacio de Mojos.

Figura 4. 4. Imagen de indígenas del periodo jesuítico tocando el “jeruri”



Fuente: Museo San Ignacio de Mojos

4. 2. 3. Patrón de asentamiento.

Los cambios traídos de la orden religiosa tuvieron también su efecto en el patrón de asentamiento, el cual se vio modificado, pasando a caracterizarse por la “*concentración y sedentarización*” (Molina M., *et al.*, 2008: 57). Sin embargo, al mismo tiempo se produjo un descenso demográfico. Este fenómeno fue debido a que la población se situó en núcleos más concentrados lo cual propició la transmisión de enfermedades procedentes de Europa.

La arquitectura misional destacó por la variedad de la ornamentación a base de metales preciosos, por la decoración de los templos, por el uso de maderas valiosas como el cedro o la caoba, por las tallas de sus bajo-relieves y por sus proporciones de escala europea, pese a que se vieran obligados a utilizar los materiales propios de la región. Por ejemplo “*los edificios de las misiones estaban contruidos con paredes de adobe (...) El techo estaba cubierto con paja, hojas de palmera (motacú), o con tejas*” (Chávez J., 1986: 303).

Las reducciones aprovecharon el conocimiento del territorio de la población local a la hora de ubicar los asentamientos. Así se optó por los sitios elevados que a su vez contaran con accesos a los recursos fluviales como las lomas, para evitar las inundaciones. En el centro de las reducciones se encontraba una plaza la cual albergaba en uno de sus lados la típica iglesia misional. En el centro de la misma se colocaba una cruz. Las viviendas de los indígenas se conformaban en manzanas articuladas de manera perpendicular –con una disposición ortogonal del espacio- con respecto a la plaza central, siguiendo el estilo marcado desde Europa (Lehm, 1999: 32).

Si bien los jesuitas aplacaron las incursiones militares en la región mojeña, ejercieron tal influencia en las comunidades indígenas que ésta no puede pasar por alto: evitaron un incremento del exterminio indígena en esta zona y llevaron a cabo un proceso de homogenización de las antiguas parcialidades indígenas. Gracias, en buena medida, a ellos conocemos parte de los trazos culturales *tradicionales* de las culturas indígenas. Al mismo tiempo implementaron nuevas lógicas de comportamiento -socioeconómico y cultural- y estilos de vida que paulatinamente se fusionaron con los propiamente indígenas. Haciendo balance de lo explicado hasta el momento para esta fase histórica periodo se podrían sintetizar en:

1. la imposición de nuevos esquemas de organización política como la institución del Cabildo Indigenal,
2. los cambios en los modos de producción orientados a la exportación,

3. la homogenización de prácticas socioculturales como fue la adopción de una misma lengua, de la religión católica o la sedentarización de los grupos indígenas en un mismo espacio territorial,
4. la introducción de la industria ganadera, en detrimento de la caza o pesca,
5. la adopción de nuevos patrones profesionales, dedicándose a oficios especializados.

4. 3. PERÍODO POSTJESUÍTICO. El colonialismo en “Moxitania”.

“El resultado global buscado por el dominio colonial era efectivamente convencer a los indígenas de que el colonialismo venía a arrancarlos de la noche (...) No se contenta (el colonialismo) con imponer su ley al presente y al futuro del país dominado (...) Por una especie de perversión de la lógica, se orienta hacia el pasado del pueblo oprimido, lo distorsiona, lo desfigura, lo aniquila”.

FRANTZ FANON, *Los condenados de la tierra*.

“¿Qué ocurriría cuando el Buen Jesús contemplara el desamparo en que habían dejado su casa? ¿Qué diría del proceder de esos pastores que, en vez de ayudar al pobre, le vaciaban los bolsillos cobrándole por los servicios de la religión? ¿Se podían vender las palabras de Dios, no debían darse de gracia? ¿Qué excusa darían al Padre aquellos padres que, pese al voto de castidad, fornicaban?”

MARIO VARGAS LLOSA, *La guerra del fin del mundo*.

En 1767, ante el poder que iba acumulando la Compañía de Jesús, el rey Carlos III de España determinó la expulsión de sus miembros mediante un decreto real. Hay quienes declaran que pese al decreto de expulsión -15 de diciembre de 1768- el obispo de Santa Cruz -Francisco Ramón de Herbozo- dictó un reglamento, el cual había sido aprobado por la Audiencia de Charcas, que permitía el mantenimiento de todas las instituciones jesuíticas aunque los curas fueran reemplazados (D’Orbigny, 2002: 1579).

Comenzó con ello el gobierno civil español. Con la llegada de nuevos misioneros comenzaron los conflictos ya que *“estos curas acostumbrados más a la atención de parroquias en los centros urbanos, ignoraban la complejidad y fragilidad de las misiones”* (Lehm, 1999: 36-37). Estos nuevos padres provenían de Santa Cruz y de otros distritos de la Audiencia de Charcas y no se reconocían desde el punto de vista espiritual con los anteriores misioneros (Lijerón, 1997: 55). A resultas de ello se produjo una decadencia en cuanto al sistema reduccional se refiere. Las reducciones

entraron en crisis, algunas fueron abandonadas o quedaron desatendidas, por lo que gran parte de la población indígena optó por refugiarse en los montes al sentirse desamparados por no contar con el brazo protector de los jesuitas. El abuso de la Monarquía española contra los nativos se hizo patente y ante ello surgió un descontento generalizado entre las comunidades *originarias*.

El periodo borbónico apostaba por un fomento de las relaciones comerciales, poniendo el énfasis en la industria. El nuevo gobierno civil instauró una serie de reformas de carácter liberal (Block, 1997: 184-186) con la intención de integrar las misiones jesuíticas en el nuevo sistema comercial, dando por concluido el anterior. Algunas novedades fueron las implantaciones de nuevas instituciones económico-administrativas al ser considerada la región de la sabana como un foco de recursos naturales susceptibles de ser explotados. Se enviaron funcionarios españoles que se hicieran cargo de la Gobernación. Entre ellos destacó Lázaro de Ribera, que se convirtió en el nuevo Gobernador de Mojos en 1785. Ribera implantó un “Nuevo Plan” que tenía como objetivo evitar el comercio informal entre los curas de las antiguas reducciones y los comerciantes de la provincia de Santa Cruz. Este tipo de comercio iba en contra de los intereses de la metrópolis. La Audiencia de Charcas aprobó en 1789 el plan de reforma encaminado a otorgar a los curas competencias exclusivamente espirituales, correspondiendo aquellas relativas al comercio a un administrador secular de cada misión (D’Orbigny, 2002: 1579).

Podríamos considerar al gobernador Ribera como uno de los pocos que mostró cierta preocupación por la situación en la que vivían las poblaciones indígenas al defender *“la dignidad y la vida de los indígenas”*, denunciando en diversas ocasiones la actitud y acciones de los nuevos curas ante las autoridades de la Audiencia de Charcas o incluso ante el propio gobierno español (Lijerón, 1997: 58). El siguiente fragmento es una de tales acusaciones de denuncia efectuada por parte del propio Ribera:

“Que parroco de Moxos no ha saqueado la provincia, vendiendo los intereses mas respetables del Rey a los dominios de Portugal? Examine V. A estos monstruosos delitos y crímenes de Estado. Considere su piedad unos pueblos desmantelados, unos templos saqueados, unos indios oprimidos por una crueldad que espanta, y atropellados hasta el extremo de no poder contar con la seguridad de sus mujeres, de sus hijas, victimas infelices de las liviandades e impudicia de sus parrocos” (Carvalho 1977, cit. en Lijerón, 1997: 59).

Y es que cuando dicho gobernador tuvo conocimiento del trato de los nuevos curas a los indios, se vio en la obligación de denunciarlo ante la Audiencia de Charcas

en donde reclamó al auditor el retorno de la libertad para aquellos, ante lo cual éste se negó alegando que “*los indios no podían gobernarse por sí mismos*” (D’Orbigny, 2002: 1384).

También podemos mencionar al liberal Francisco Viedma -intendente de Cochabamba- como otro de los defensores de los indios de Mojos, llegando incluso a solicitar la libertad para dicha provincia, aunque finalmente prevaleciera el reglamento de Ribera (*ibíd.*, 1580).

Otros testimonios sobre el trato que recibían los indígenas de Mojos nos han llegado de la mano de viajeros extranjeros. Este es el caso del ingeniero Franz Keller que en el año 1874 declara en la siguiente cita extensa pero muy ilustrativa que:

“En el estado actual de las cosas, los indios se encuentran enteramente en manos de una multitud de aventureros sin ley, sin otras miras que el lucro personal...So capa de negocio, todos estos defraudan y engañan de la manera más vergonzosa a los inexpertos amarillos. Parece, además, que toda esta gente se hubiese confabulado para destruir toda noción de moral ente estos hijos de la naturaleza. Los curas, pastores de los pueblos, hacen especialmente lo posible para deshacer la obra de sus antecesores. Para dichos sacerdotes nada hay ilícito: ni los sagrados vasos de palta, ni las esposas ni hijas de sus feligreses; y, ¿cuáles será la influencia que tales ejemplos de depravación ejercerán sobre las costumbres de los indios y sobre su innata frivolidad y sensualismo?” (Keller, 1874 cit. en Lijerón, 1997: 77).

D’Orbigny relata una vez más la situación en la que estaban sumidos los indígenas para principios del siglo XIX, cuando declaraba que “*están hundidos en la más profunda miseria, y sus costumbres son muy disolutas. Se castiga a latigazos a hombres y mujeres, según los caprichos de sus jefes españoles o indígenas; por eso su aspecto denuncia en ellos a seres degradados por la esclavitud*” (2002: 1582).

En la misma línea existen relatos que muestran una actitud eminentemente abusiva cometida por parte las autoridades regionales sobre las poblaciones indígenas de Mojos. El cronista Vaca Díez -uno de los personajes que más poder económico adquirió con el boom del caucho- expresa:

“(...) Pero ni en el desierto se libran estos indígenas de las hostilidades que ya son arraigadas en Mojos para los naturales (...). Las autoridades despliegan un sistema perverso de maquinaciones, haciendo girar su ambición y egoísmo en torno a cada pueblo, en torno a cada familia de indios. Esto es increíble. Todo es de las autoridades, vidas y haciendas (...). Flagelan, desquician matrimonios; introducen el pánico en las familias humildes de esos pueblos casi extinguidos por la ferocidad de la raza blanca. Poblaciones de más de mil matrimonios, hoy se ven reducidos a cien (...). No hay un solo

indígena que no haya recibido el infamante suplicio del látigo. No hay familia que no cuente alguna desgracia; no hay pueblo que no haya sido teatro de todos los vicios y del crimen (...)" (Vaca Díez, 1876 cit. en Lijerón, 1997: 76).

Esta serie de testimonios coincidiría en las duras condiciones a las que tanto las autoridades políticas como religiosas sometían para entonces a los indígenas de la región de Mojos.

El gobierno civil asignó a los nuevos párrocos el papel de meros consejeros espirituales ya que existía un cuerpo de administradores financieros que se ocupaban de los asuntos económicos relativos a las misiones. Tanto los curas como la población india, liderada por las jefaturas indígenas, mostraron una actitud de rechazo frente a las nuevas reformas económicas y políticas. Todo esto desencadenó una serie de levantamientos indígenas contra el régimen impuesto por los funcionarios del imperio español¹⁸⁴ (Block, 1997: 188).

Se abrió como consecuencia un periodo de inestabilidad que contó como máxima expresión con la insurrección que tuvo lugar tras el encarcelamiento de Pedro Ignacio de Muiba -cacique mojeño que sostenía en sus discursos la recuperación de los territorios indígenas-. Se le ha llegado a denominar como "*el gran caudillo mojeño-trinitario de la independencia de Mojos que ya desde los primeros años del nuevo siglo, había puesto en evidencia su rechazo rotundo al sistema opresor*" quien tras ser capturado y liberado más tarde llegaría a crear un gobierno autónomo en la ciudad de Trinidad y de Loreto, convirtiéndose estas ciudades en la vanguardia de la revolución (Lijerón, 1997: 63-64).

Ante tantos abusos cometidos hacia las poblaciones de Mojos no se haría esperar la aparición de algunos rebeldes que dedicaron su vida a la lucha contra las injusticias desplegadas por parte del gobierno y sus funcionarios, destacando entre ellos el nombre de Pedro Ignacio Muiba, seguido por otros líderes indígenas como Andrés Guayocho o José Santos Noco Guaji.

Hay que mencionar que en 1776 se creó el Virreinato del río de la Plata, con sede en Buenos Aires, nuevo centro comercial que dejaba a Lima en un segundo plano. Debido en parte al cambio administrativo que suponía el paso de las dependencias del Alto Perú al nuevo Virreinato se produjo un consecuente alejamiento de Lima que desembocaría en el debilitamiento de la autoridad real, lo cual facilitó el surgimiento de revueltas indígenas (Justo L., 2007: 79). En este contexto geopolítico, la región de la

¹⁸⁴ Es relevante en este sentido la excomunión por parte de los curas al gobernador Miguel Zamora y Treviño, incitando a la población indígena a posicionarse en contra del mismo (Block, 1997: 99-100). Este hecho desembocó en la capitulación de Zamora, lo cual deterioró aún más la dirección de las reformas que comenzaron ya con Ribera.

Moxitania –situada al este de La Paz y entre los ríos Beni y Guaporé o Iténez y al norte de Cochabamba y de Santa Cruz de la Sierra- pertenecía al gran Perú colonial y se (véase **figura 4. 5**) (Jordà, 2003: 154).

Figura 4. 5. Mapa “Moxitania” en el Perú colonial.



Fuente: *ibíd.*

4. 3. 1. Transformaciones económicas.

A raíz de la implantación de las medidas borbónicas tuvo lugar una apertura comercial. Se produjo una “reorientación económica” a partir de las exportaciones (Block, 1997: 190) (véase **cuadro 4. 1**) con el fin de incrementar los ingresos a costa de los recursos existentes en las misiones. Se vio modificado el tipo de contrato entre los nuevos comerciantes españoles y los indígenas, los cuales obtenían en este momento menos recursos que durante el periodo jesuítico (*ibíd.*, 209-210).

Cuadro 4. 1. Exportaciones de Mojos, 1807-1820

| Año | Cacao (libras) | Tela de algodón (varas) | Manteles | Pañuelos finos |
|------|----------------|----------------------------|----------|----------------|
| 1807 | 5.200 | 4.214 | 61 | 622 |
| 1816 | 12.100 | 6.918 | 18 | 224 |
| 1819 | 13.175 | 11.832 | 21 | 305 |
| 1820 | 9.100 | 3.471 | 58 | 246 |

Fuente: *ibíd.*, 196.

A parte de la explotación industrial desarrollada en Mojos en los primeros años del periodo republicano, destaca el ganado que introdujeron los jesuitas. Además de los rebaños de reses, se explotaba la producción del algodón, con el que se fabricaban manteles, sábanas, servilletas, etcétera; cacao; la cera de los bosques; las plantaciones del tamarindo; la vainilla silvestre; la caña de azúcar; el café; las grasas obtenidas de las reses y el cuero; diversos aceites (de almendra, aceite maría, aceite de copahú); tabaco y pequeños trabajos de marquería que en realidad no se contabilizaban sino que se regalaban en las transacciones comerciales (D'Orbigny, 2002: 1583-1585).

Otra serie de productos naturales se obtenían de actividades como la pesca; entre los recursos forestales se explotaban maderas, frutas silvestres, etcétera, plantas para la elaboración posterior de medicinas y tinturas (*ibíd.*).

Las reducciones experimentaron ciertos cambios. Los nuevos curas que llegaron desatendían sus funciones en las misiones. Como consecuencia de ello comenzó un proceso de abandono de las reducciones por parte de los indígenas.

4. 4. PERIODO REPUBLICANO.

La instauración de la República (1825) dio comienzo al período liberal que transformó el estatus de los indígenas. La intención era abrir el mercado de tierras y hacer que estos se convirtieran en propietarios agrícolas, lo cual requeriría el estatus de ciudadanos¹⁸⁵. El decreto de Ballivián declara que “(...) *Los habitantes de Mojos y los demás pueblos comprendidos dentro de los límites de la provincia, se elevan a la clase de ciudadanos y como tales capaces de los derechos de igualdad, libertad y propiedad que las leyes garantizan a los bolivianos*” (Lijerón, 1997: 72).

Una de las consecuencias más negativas que el reconocimiento de la ciudadanía trajo para la población indígena fue el acrecentamiento de la esclavitud al tenerse desde estos momentos en cuenta, la condición de clase social de los pueblos *originarios*, priorizando sobre la componente étnica. Tomando en consideración que los asuntos de índole privada eran ajenos a las poblaciones indígenas, se puede llegar a entender las arbitrariedades que se perpetraron contra éstas siendo el resultado de todo ello el despojamiento territorial indígena. Como consecuencia, se reconfiguraron las categorías sociales: los indios pasaban a formar parte del grupo social más pobre de

¹⁸⁵ La socióloga Zulema Lehm ha estudiado de qué manera tras el Decreto de Creación del Departamento del Beni en 1842, se estipuló que los indígenas pasaban a formar parte de la clase de ciudadanos, por lo que se les podía considerar propietarios de las tierras siempre a cambio de sufragar el pago de ciertos impuestos (1999: 16). La índole liberal de este decreto permitía la apertura del Beni al comercio externo, lo cual significaba que nuevas hordas de colonizadores irían llegando y poblando dicho departamento.

la estructura social republicana. Por otro lado durante el periodo republicano se favoreció la colonización en pro del sector ganadero.

La población indígena de Mojos se vio diezmada hasta el punto de quedar reducida –en opinión de algunos investigadores- a una cuarta parte de la población original a causa de las guerras de conquista, las reducciones jesuíticas, las guerras del Acre y del Chaco y el asentamiento de las barracas gomeras y las haciendas ganaderas (Paz Ballivián, 2003: 54).

Las medidas liberales obligaban a los indígenas a pagar el tributo indigenal. Por esta razón, en el paso de la época colonial a la época republicana, se incrementaría en gran medida el fenómeno de la esclavitud además de la pérdida de territorio indígena. La república convirtió en propietarios a los indígenas siempre que pagasen un precio determinado para obtener los títulos de propiedad de la tierra correspondiente. Autores como González Pazos señalan de qué manera:

“a partir de los años sesenta del siglo XIX se activará un profundo proceso de expolio sobre la propiedad comunitaria de la tierra y el sistema tradicional de uso ecológico del territorio en aquellas áreas donde había sobrevivido. Se pretende ahora la imposición de la propiedad privada de la tierra y no comunitaria, mediante la compra directa de parcelas, haciendo uso de discursos para la integración social de los indígenas, mediante la conversión de estos en campesinos libres” (2007: 34).

Si tenemos en cuenta que los indígenas carecían de estos recursos económicos podemos entender de qué manera fueron explotados por los grandes propietarios de tierras quienes les ofrecían la posibilidad de pagar el tributo con su fuerza de trabajo. Los nuevos propietarios, en su mayor parte los ganaderos, aprovecharon la nueva coyuntura jurídica, de tal manera que, la institución socio-económica de la encomienda –instaurada con la llegada de los españoles- se vio perpetuada. Las tierras que en su día fueron de propiedad comunitaria, pasaron a ampliar las propiedades de una élite cada vez más poderosa, tanto económica como políticamente¹⁸⁶.

A pesar de algunas transformaciones con respecto al periodo anterior, las bases estructurales -de tipo feudal- en el ámbito rural, se mantuvieron inalteradas desde el periodo de la Colonia española, sirva como ejemplo el caso de la hacienda, que se perpetuó en su esencia desde la época colonial como unidad económica en el oriente boliviano (Romero C., 2003: 86-87).

¹⁸⁶ González Pazos tras una recopilación de diversos estudios ha llegado a la conclusión de que “si bien en 1880 la mitad de la tierra estaba en poder de las comunidades, veinte años después, éstas poseían menos de un tercio” (2007: 34).

Fue en el periodo republicano en el que Mojos -gracias a las maniobras del mariscal Ingavi José Ballivián- se convirtió en el departamento del Beni; exactamente un 18 de noviembre del año 1842, cuando esta provincia—junto con Yuracarés y Caupolicán, las cuales formaban con la anterior la antigua jurisdicción geográfica del Gran Paitití o Gran Mojos- se independizaría de Santa Cruz (Lijerón, 1997: 70; Pinto Parada, 2001: 43)¹⁸⁷. El decreto fundacional de este departamento ha sido considerado como el anticipo de la llegada en masa de colonos a la provincia de Mojos y “*la agresión más drástica que hasta entonces habían sufrido los pueblos indígenas*” de dicha provincia y de manera particular los mojeños (Lijerón, 1997: 72-73). A mitad del siglo XIX se pusieron a la venta las pocas tierras comunales que aún quedaban libres.

Consecuentemente, se sucedieron varios levantamientos indígenas. Diferentes réplicas articuladas por estos actores emergieron como respuesta, llegando incluso a matar en 1855 a un Corregidor en San Ignacio de Mojos (Lehm, 1999: 39). Sin embargo, la estrategia indígena más extendida fue la huida y el retorno a los espacios ocupados ancestralmente. Como consecuencia, en los espacios vacíos de los montes que aún no habían sido colonizados, se fundaron nuevos asentamientos. Estos se encontraban alejados de las antiguas reducciones jesuíticas. Se crearon los “ranchos”, en los que se mantuvieron algunos de los aspectos de las misiones, como los Cabildos Indigenales, la planificación espacial y las prácticas culturales y festivas de periodos anteriores (*ibíd.*, 39-40). Entre estas estrategias no se puede dejar de mencionar el movimiento milenarista de la *Búsqueda de la Loma Santa* (véase **figura 4. 6**), el cual significó una huida de los grupos *originarios* en busca de la “tierra prometida”. Huían de la explotación laboral a la que estaban siendo sometidos por el poder colonial. Y al mismo tiempo pretendían consolidar su territorialidad reconquistando los espacios de los que habían sido desposeídos por la población blanco-mestiza. Este movimiento conjugó cierta ideología mesiánica con una estrategia de supervivencia por parte de los indígenas (*ibíd.*). Para Miguel Peña la *Búsqueda de la Loma Santa* “*es propiamente ir a buscar un espacio geográfico en el que no hay perturbación de los carayanas: gente que nos ha explotado a nosotros, algo así como una mezcla de ideología y filosofía entre el indígena y lo que viene en la biblia: buscar una loma santa, donde no nos molesten, donde vivamos en paz*” (entrevista).

La *Loma Santa* significó la apropiación de un espacio identitario, de una geografía imaginaria y simbólica. La *Búsqueda de la Loma Santa* permitió articular la identidad indígena mojeña configurándose así en la memoria colectiva de este grupo

¹⁸⁷ Años después algunos mandatarios como el senador Antonio Vaca Díez pretendieron cambiar el nombre del departamento del Beni por el de Mojos, sumándose a aquellos gobernantes que buscaron restaurar el nombre original de Mojos (Lijerón, 1997: 71).

Sécure (Madueño, 2009: 318). Frente a la pretendida autenticidad del movimiento, algunos testimonios reconocen el oportunismo de aquellos que se presentaban como mesías y engañaban a quienes creían en ellos (*ibíd.*).

En otro orden de cosas, hacia la segunda mitad del siglo XIX tuvo lugar el “boom del caucho” que se prolongó hasta principios de la segunda década del siglo XX cuando el mercado asiático tomó el relevo desbancando a esta región en cuanto al comercio de la goma. Fue uno de los momentos más críticos con respecto a la deforestación de la Amazonía boliviana. Miles de hectáreas fueron deforestadas para obtener los recursos maderables de la goma. Pero no sólo esto, sino que como consecuencia de este “boom” se intensificó la llegada masiva de población blanco-mestiza. Fue ésta quien utilizó a los indígenas como fuerza de trabajo. Como resultado se produjo un sometimiento de dichos grupos a unas condiciones laborales enormemente precarias. Si bien fue la región más septentrional de la Amazonía de Bolivia el foco principal de atracción de la actividad gomera -departamento del Pando fundamentalmente- los indígenas de Mojos fueron requeridos como mano de obra para trabajar como peones en las explotaciones caucheras por medio de los “enganches” por los que pasaron a ser reclutados de manera forzosa. Una vez más, la población indígena de Mojos se vio diezmada tal y como lo expresa Block: *“la razón de esta baja de la población india (de Mojos) hay que encontrarla, sin duda, en los funestos efectos para Bolivia de la recolección de la goma en los ríos Madera y Purús... El auge gomero desencadenó después de 1860 fuerzas centrífugas en Mojos”* (1997, cit. en Lijerón, 1997: 84).

Todo este proceso coincidió y no por casualidad con la toma de conciencia indígena por la lucha territorial frente a los grandes propietarios. Constituyó el germen de las demandas territoriales de finales del siglo XX, anunciando el preludio de la lucha por el reconocimiento de los territorios indígenas. Andrés Guayocho y José Santos Noco Guaji, darían nombre al movimiento mesiánico conocido como *Guayochería* que propició un éxodo a los montes de Mojos con la consecuente persecución violenta declarada por el gobierno republicano en la que Guayocho sería finalmente cogido preso y torturado (*ibíd.*, 81). Madueño recoge algunos testimonios de aquellos que huyeron a los montes en el siguiente fragmento:

“Tata, mejor iremos contigo (...) son muchos los vejámenes que sufrimos de los carayanas; se nos lleva el río arriba y río abajo, y hasta el Madera mismo en donde tantos perecen (...) ya no nos han dejado ni un pedazo de tierra en donde hacer un chaco o levantar una casa (...) por esto hemos resuelto abandonarles a los carayanas nuestras tierras, las tierras de nuestros padres, e irnos en busca de otras nuevas en donde Dios nos dé a entender” (2009: 316).

La Guayochería, que ha sido considerada por algunos como la *Loma Santa*, pretendió restaurar un nuevo orden o sociedad en base a nuevos valores y normas tradicionales (*ibíd.*, 315).

Además de lo hasta ahora expuesto se sumó a partir de 1850 lo que Lehm ha denominado como “*período de la gran matanza de vacunos*” (1999: 39). Desde Brasil eran demandadas enormes cantidades de cuero de ganado bovino. Las extensas sabanas mojeñas se convirtieron en un tétrico escenario plagado de cadáveres de reses de vacuno esparcidas por la pampa después de haber sido despellejadas. Pasada la fiebre del caucho, la región mojeña comenzó a recibir una fuerte demanda de carne, por lo que gran parte de sus territorios dieron paso a la producción ganadera.

La guerra del Chaco (1932-1935) contribuyó al despoblamiento de la región amazónica. Por un lado numerosos indígenas fueron llamados a filas para engrosar los batallones del ejército boliviano. Por el otro se produjo nuevamente una huida masiva a los montes donde los indígenas permanecieron escondidos (entrevista a Luis Rivero Parada). Las grandes estancias ganaderas vieron incrementadas sus extensiones al aprovecharse de los amplios espacios vacíos que quedaban a raíz del abandono por parte de la población indígena.

Anteriormente mencioné la creación del departamento del Beni. Para entonces, San Ignacio de Mojos fue incluido en la provincia Yuracaré, como parte de un cantón hasta que en el año 1937 el gobierno llevó a cabo una nueva división provincial por la que se erigió la provincia de Marbán -además de los cantones de San Ignacio, San Lorenzo, San Francisco y San Antonio- siendo San Ignacio su capital (Molina W. y Soletto, 2002: 67). Hubo que esperar hasta el 27 de noviembre de 1941 cuando se creó la provincia de Mojos dividida ésta en los cantones de San Ignacio de Mojos, San Francisco de Mojos y San Lorenzo de Mojos por lo que San Ignacio adquirió la calidad de cantón, sección de provincia y de capital de la misma (*ibíd.*).

Una fecha enormemente significativa en la historia agraria boliviana y de manera particular para las poblaciones indígenas de Bolivia, fue 1952, año de la Revolución Nacional. Sumándose a la ola que tuvo lugar en parte del continente sudamericano, se llevó a cabo, al año siguiente, la Reforma Agraria en Bolivia. Si bien en un principio tuvo el cometido de facilitar el acceso y control de la tierra a los campesinos –siguiendo el lema de “la tierra para el que la trabaja”- tuvo el efecto contrario. Supuso la consolidación del latifundio en la parte oriental y se fomentó nuevamente la colonización de las tierras bajas. El gobierno boliviano facilitó la colonización del Beni con la intención de dar salida a la “presión demográfica” soportada en los Andes, descongestionando esta región (Lehm, 1999: 41). Pero desde ese momento proliferó la

emergencia de empresas tanto ganaderas como madereras, principales responsables de la deforestación de los bosques amazónicos. Se consolidaron además las estancias de los grandes terratenientes. En la región de Mojos “*el cercamiento de las propiedades ganaderas implicó un proceso de expulsión de la población indígena asentada en las islas de bosque de la sabana e impulsó su reubicación en los bosques ribereños y la reocupación de las áreas boscosas próximas a las estribaciones de la Cordillera Oriental*” (ibíd.).

Desde 1970 se produjo un incremento de la colonización en la región debido a la creación de la carretera que llegaba desde la ciudad de Trinidad, capital del Beni, hasta La Paz, por un lado y hasta Santa Cruz de la Sierra por otro (ibíd.). Buena parte de estos colonos arribaron con la intención de enriquecerse a costa de la explotación de los recursos naturales de Mojos. En las últimas dos décadas del siglo pasado, a causa de las concesiones forestales, los bosques benianos sufrieron una vez más los efectos de la deforestación tras la entrada de empresas madereras. Si bien éstas hicieron mucho daño a las comunidades indígenas por la explotación de los recursos naturales de sus territorios no fueron las únicas. Las propiedades ganaderas expropiaron -muchas veces de manera ilegal- a algunos comunarios indígenas, dedicándose a la compra de tierras -a través de medios ilícitos-, incluso manipulando o falsificando los títulos que avalaban la posesión de la tierra.

En este contexto de depredación de recursos y de despojamiento territorial comenzaron a emerger las organizaciones indígenas que luchaban por la consolidación de sus territorios. Estas organizaciones articularían la *Marcha por la Tierra y la Dignidad* del año 1990 en la que el pueblo mojeño actuó como protagonista entre el conjunto de pueblos indígenas del oriente boliviano. Este conjunto de cuestiones serán examinadas de manera detallada en el siguiente epígrafe.

4. 5. PERIODO ACTUAL.

Actualmente los pueblos indígenas de la Amazonía boliviana están inmersos en el proceso autonómico del que aún es difícil valorar qué sucederá. El proceso de las autonomías debe ser enmarcado en la lucha por el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Desde esta plataforma se reivindica el control sobre espacios territoriales concretos. Implicaría pues, la posibilidad de que los pueblos *originarios* tuvieran competencias propias desde el punto de vista jurisdiccional en las tierras comunitarias, además de poder ejercer el control, uso y aprovechamiento de los recursos naturales existentes en sus territorios.

El enorme peso de los grandes intereses económicos, contrarios a ceder sus privilegios en favor de los pueblos indígenas, jugará un papel decisivo en la Amazonía boliviana a la hora de establecer el futuro de estas poblaciones.

El proceso autonómico debería contar con la participación del conjunto de grupos sociales del estado boliviano. La definición de Bolivia como estado autonómico, podría constituir un ejemplo para el resto de países del continente sudamericano que cuenten en su seno con pueblos *originarios*, como es el caso de Ecuador, Colombia, Perú, Guatemala, Brasil, Venezuela, etcétera. Habrá que esperar para conocer el desenlace de todo ello.

4. 5. 1. Características sociopolíticas y demográficas del municipio de San Ignacio de Mojos.

San Ignacio de Mojos supone en la actualidad un centro clave para las comunidades mojeño-ignacianas, puesto que constituye el eje en torno al que gira la vida política y económica de la región. Es a él donde acuden los comunarios a realizar la compra-venta de bienes de primera necesidad. Además de ser el lugar en el que están establecidos los organismos institucionales a nivel político.

San Ignacio de Mojos se localiza al Sudeste del Beni, en la provincia de Mojos. Los límites de Longitud Sur son 64° 57' 00" y Longitud Oeste 14° 10' 00" y 16° 50' 00"; limita al Norte con las Provincias Cercado y Yacuma, al Sur con Cochabamba, al Este con la Provincia Marbán y al Oeste con las Provincias Yacuma y Marbán (Molina W. y Soletto, 2002: 82). La extensión de la provincia de Mojos es de 33. 616 km², siendo una de las 8 que conforman el departamento del Beni, con San Ignacio como capital (Ávila H., 2006: 23).

Este municipio constituye además la única sección de la provincia de Mojos y se presenta dividido en 4 cantones: San Ignacio, San Francisco, San Lorenzo y Desengaño, y en 6 distritos rurales creados estos últimos a través de la resolución municipal en el año 1995 (Molina W. y Soletto, 2002: 82), de los que tres de ellos son Distritos Municipales Indígenas que a su vez coinciden con las tres *Tierras Comunitarias de Origen* del municipio: el TIM, el TIPNIS y el TIMI (CIPCA, 2005: 4).

Fotografía 4. 3. Imagen de la entrada a San Ignacio (desde San Borja).



Fuente: Virginia Jabardo Pereda

Existe en el municipio un amplio conjunto de organizaciones de carácter popular que aparecen recogidas en el *Plan de Gestión Territorial Indígena* efectuado por CIPCA (2005). En éste se incluyen: organizaciones indígenas (en torno a 105 Cabildos Indígenales, las Subcentrales Indígenas del TIMI, TIM, TIPNIS, San Lorenzo, San Francisco, Desengaño e Isiboro y la CPEM-B); organizaciones populares urbanas (Federación de Juntas Vecinales, Central Obrera Regional, Mujeres Trabajadoras del Hogar, Clubes de Madres, Federación de Maestros Urbanos, Federación de Maestros Rurales, Asociación de Comerciantes Minoristas, Grupos Juveniles, etcétera); organizaciones de grupos económicos (Asociación de Ganaderos de San Ignacio de Mojos, Transportistas, etcétera). Y a nivel institucional destacan las instituciones gubernamentales (Alcaldía, Prefectura, Policía, Unidad Militar, Juzgado Agrario, Juzgado Civil, Defensoría de la Niñez y la Adolescencia); instituciones cívicas (Comité Cívico Provincial de Mojos, Comité Cívico Femenino de Mojos); instituciones no gubernamentales (Iglesia, HOYAM, CIPCA, CEPOIM) (*ibíd.*, 4-5).

Según los datos del INE, en el año 2001 -último censo realizado- San Ignacio de Mojos albergaba a una población de 21. 643 habitantes, de los que 11. 606 eran hombres y 10.037 mujeres y en torno al 60% (o lo que es lo mismo: 12.750) vivía en el área rural, habitando el resto (8.893) en el área urbana (Fundación TIERRA, 2005: 16).

Cuadro 4. 2. Distribución de la población en San Ignacio de Mojos.

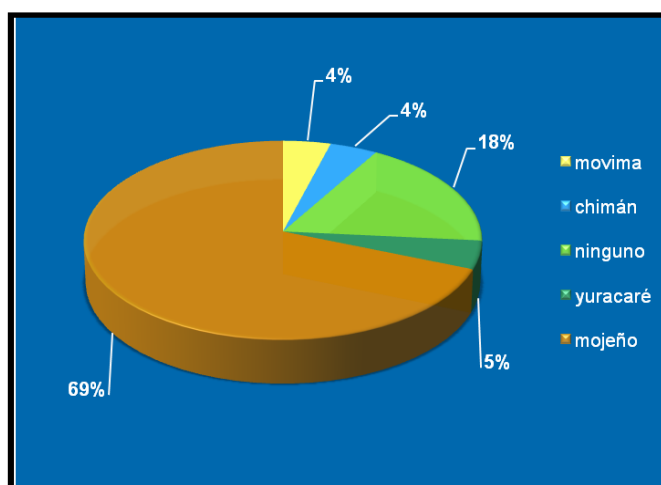
| Población | Total | Hombres | Mujeres |
|-------------|--------|---------|---------|
| Área rural | 12.750 | 7.092 | 5.658 |
| Área urbana | 8.893 | 4.514 | 4.379 |
| Total | 21.643 | 11.606 | 10.037 |

Fuente: INE, 2001.

San Ignacio cuenta además con una amplia mayoría de población indígena (el 82% del total de la población se autoidentifica como perteneciente a un grupo étnico indígena) según el INE (2001). El apenas 20% restante corresponde a la población blanco-mestiza aunque cabe señalar, llegados a este punto, que es este grupo social - vinculado históricamente al sector ganadero- quien pese a constituir una minoría aplastante desde el punto de vista demográfico, detenta el poder político y económico municipal. Las relaciones sociales entre ambos están marcadas por los conflictos, principalmente desde que arrancó el proceso de saneamiento de la tierra con las consecuentes titulaciones de territorios indígenas.

En la provincia de Mojos *“habitan 5 pueblos indígenas diseminados en comunidades donde convive con otros pueblos: el Mojeño-Ignaciano, el Mojeño Trinitario, Yuracaré, Chimán y Movima”* (Ávila H., 2006: 23). En el municipio de San Ignacio aquellos que se autoidentifican como indígenas son de procedencia multiétnica (Molina W. y Soletto, 2002: 83-84). El cantón de San Ignacio en concreto alberga una población de 6.782 habitantes, lo cual supone algo más del 30% de la población total de la provincia de Mojos (Urioste y Pacheco P., 2001: 127).

Gráfico 4. 1. Población de Mojos.



Fuente: elaboración propia en base a los datos de www.amazonia.bo

El pueblo mojeño-ignaciano es uno de los más importantes de la región de Mojos y a ello se refieren Díez Astete y Murillo al afirmar que *“los mojeños son en la actualidad el pueblo indígena principal de la amazonía Bolivia; además por su antigüedad hispánica, y porque su idioma fue utilizado como lengua franca durante las misiones jesuíticas”* (1998: 147) además de *“por la cantidad de población y la extensión geográfica que ocupa”* (CEJIS, 2003: 221). Recordemos que el pueblo mojeño es el que más población posee de la Amazonía boliviana.

Otros datos, siempre del INE, señalan que en el Departamento del Beni, donde se encuentra San Ignacio de Mojos, algo más del 20% de la población vive dentro del espacio que comprenden las TCOs (2001).

En el territorio del municipio de San Ignacio de Mojos se encuentra el TIMI: *Territorio Indígena Mojeño Ignaciano*, el cual abarca a 19 comunidades¹⁸⁸ ignacianas con un total de 414 familias contabilizadas en el 2009 por CIPCA (aunque si bien es verdad que en muchas conviven comunarios de origen trinitario dado que la movilidad es bastante común entre las comunidades mojeñas), que apuntaría a una cifra algo superior a las 2.100 personas aproximadamente (véase **cuadro 4. 4**).

Cuadro 4. 3. Población originaria por género de la TCO TIMI.

| POBLACIÓN TOTAL | VARONES | MUJERES | FAMILIAS |
|--------------------|---------|---------|----------|
| 2.378 | 1.331 | 1.047 | 402 |

Fuente: elaboración propia en base a INE, 2001.

Las familias extensas y monogámicas son la forma de organización tradicional aunque de manera gradual y por influencias externas se ha producido una tendencia hacia la familia nuclear del mismo modo que el patrón de residencia ha pasado de patrilocal a neolocal (Lema, 1995: 88; Mihotek, 1996: 96).

Cuadro 4. 4. Población comunidades TIMI.

| Comunidad | Origen étnico | Nº familias | Nº de habitantes | Año de fundación | Distancia a San Ignacio (km.) |
|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------------------------|
| Argentina | Mojeño Ignaciano | 42 | 231 | 1955 | 49 |
| Bermeo | Mojeño Ignaciano/Triunitario | 50 | s/d ¹⁸⁹ | 1950 | 38 |
| Fátima | Mojeño Ignaciano | 53 | 396 | 1955 | 39 |
| El Buri | Mojeño Ignaciano | 13 | s/d | s/d | 34 |

¹⁸⁸ En palabras de Barragán se entiende por comunidades: “un territorio sobre el que todos los miembros tienen cierto derecho común y exclusivo, y sobre el que se establecen reglas para que cada familia mantenga sus derechos individuales, claramente diferenciados de los demás. En este sentido la comunidad es la primera instancia en que se busca equilibrio entre el derecho común y la autonomía familiar” (2007: 37).

¹⁸⁹ s/d: sin datos

| | | | | | |
|-----------------------------|---------------------|----|-----|------|-----|
| Villa Esperanza | Mojeño Ignaciano | 13 | s/d | 1979 | 30 |
| Santa Rita | Mojeño Ignaciano | 43 | 246 | 1965 | 22 |
| Litoral | Mojeño Ignaciano | 20 | 48 | 1952 | 12 |
| Chontal | Mojeño Ignaciano | 20 | 82 | 1983 | 14 |
| Bella Brisa | Mojeño Ignaciano | 30 | 136 | 1972 | 8 |
| Algodonal | Mojeño Ignaciano | 26 | 83 | 1962 | 4 |
| Santa Anita del Máti | Mojeño Ignaciano | 14 | 41 | s/d | 29 |
| San Miguel del Máti | Mojeño Ignaciano | 30 | 187 | 1980 | 38 |
| Chanekere | Mojeño Ignaciano | 14 | 62 | s/d | 16 |
| Ichasi Awásare | Mojeño Ignaciano | 23 | s/d | s/d | s/d |
| Monte Grande Km. 5 | Mojeño Ignaciano | 23 | 171 | 1952 | 7 |
| Flores Coloradas | Mojeño Ignaciano | 12 | 42 | 1968 | 5 |
| Florida | Mojeño Ignaciano | 12 | 110 | s/d | 65 |
| Nueva Brisa | Mojeño Ignaciano | 5 | s/d | s/d | 4 |
| Santa Clara | Mojeño Ignaciano | 9 | s/d | s/d | 31 |

Fuente: elaboración propia en base a CIPCA, 2009¹⁹⁰; Molina W. y Soleto, 2002; Casanovas, 2002; INE, 2001 y trabajo de campo.

El porcentaje de población en el municipio de San Ignacio de Mojos corresponde principalmente al grupo étnico mojeño. En el área urbana de San Ignacio el 70% de la población es indígena lo cual, concuerdo con Molina y Soleto, contribuye a desmitificar la imagen rural de los grupos étnicos (2002: 74). Pese a la predominancia de la

¹⁹⁰ Datos estimados con Corregidores.

población indígena, algunos centros como la biblioteca, la posta y la escuela de música¹⁹¹ son gestionados por población española. De la misma manera, los juzgados – especialmente el agrario- y el registro, están bajo el control de *carayanas*. Y más sorprendente aún es que la población indígena les sea vetado el acceso al club social por los miembros de éste (*carayanas* en su totalidad). Esta serie de instituciones establecen una demarcación social y determinadas barreras que proyectan la diferencia que en el día a día se pone de manifiesto en la cotidianeidad de San Ignacio. Para ello mantienen ciertos espacios que simbólicamente perpetúan tales diferencias identitarias: el club social para los *carayanas* y el cabildo Indigenal para los indígenas. No es casualidad que hasta este nuevo siglo, el municipio haya estado siempre gobernado por la población blanca, a pesar de ser minoría. Cabría preguntarnos entonces si se repiten los esquemas colonizadores. Al margen de polémicas, nos podemos cuestionar si se perpetúan en Mojos las antiguas instituciones coloniales y si es pura coincidencia o se reproducen las viejas lógicas de dominación.

Otro aspecto a comentar en relación a las tendencias demográficas de Mojos, es el tema de la movilidad. Las oleadas de inmigrantes procedentes de Santa Cruz de la Sierra tuvieron en la población indígena mojeña un efecto el empuje hacia el ámbito rural, ocupando las familias de colonos el espacio urbano que les facilitaría consolidarse en los puestos de poder económico e político. En torno a la década de 1940, numerosas familias ignacianas que habían habitado el núcleo urbano de San Ignacio, se desplazaron a lo que constituyen a día de hoy las comunidades, contribuyendo de tal manera a la “*nueva configuración urbano-rural del espacio local*” (Molina W. y Soleto, 2002: 71-72).

En base a la información obtenida en el trabajo de campo la movilidad presenta un alto índice y consiste además en una estrategia de adaptación a las dinámicas territoriales. Quedan establecidos dos tipos de migración: una a escala intracomunitaria, al interior del TIMI y la otra a escala extracomunitaria, dirigida principalmente a Trinidad y Santa Cruz de la Sierra (incluso otras ciudades del territorio nacional como lo son La Paz o Cochabamba)¹⁹². Hay quienes consideran que si este segundo tipo de migración, la que he denominado como extracomunitaria, se diera de manera masiva, se convertiría en un problema (entrevista a Gregorio Nuni). En cambio, algunos investigadores expertos en la realidad social de Mojos -caso del sociólogo Ismael Guzmán- discrepan con estos planteamientos. Guzmán opina de

¹⁹¹ Ésta goza de gran popularidad enviando incluso a alumnos y alumnas indígenas a destinos internacionales para realizar intercambios y ampliar así su formación en dicha disciplina.

¹⁹² No es común que los indígenas mojeños crucen las fronteras del país. En cambio, esta tendencia se encuentra entre parte de la población blanco-mestiza quienes cuentan con mayores posibilidades de acaudalar cierta suma de dinero que le permita emigrar a otros países.

manera diversa al considerar que este tipo de migración no es tan significativa sino más bien mínima. En cuanto al primer tipo, más frecuente, defiende el efecto positivo que puede desencadenar al contribuir a que los comunarios configuren su propia idea de territorio lo que favorecería procesos de revitalización cultural (entrevista). Un estudio de CIPCA ha clasificado estos tipos de emigración como “*emigración definitiva y emigración temporal*” (2005: 44). La primera de ellas se refiere a aquellos que tras su partida no tienen intenciones de volver; la segunda está relacionada con factores coyunturales que obligan a que alguno de los miembros de la familia marche en busca de trabajo por un periodo de tiempo definido (*ibíd.*).

Es la generación de los más jóvenes quienes mayores inquietudes muestran por trasladarse a las zonas urbanas. Este fenómeno es percibido de manera negativa por los comunarios de mayor edad que ven cómo este grupo social pierde interés en mantener las costumbres locales, que consideran se van viendo alteradas. Una idea a destacar en este sentido es que cuanto más cercanas se encuentran las comunidades indígenas al núcleo urbano más incorporaciones de elementos propios de la sociedad regional son apropiados lo cual guarda “*relación con el grado de contacto que tienen las familias con la sociedad moderna*” (*ibíd.*, 64). Actualmente se está reactivando cierto empuje a nivel comunitario tras un período de desidia, lo cual se espera favorezca el mantenimiento de las prácticas culturales.

La movilidad entre las distintas comunidades del TIMI es algo que sucede de forma habitual (incluso se da el traspaso entre las comunidades y San Ignacio y viceversa). La elección racional de la nueva comunidad en la que se empezará de cero viene determinada por el deseo de mejora para el grupo familiar. Los lazos de parentesco desempeñan un rol decisivo en este sentido. Pero no es el único. Otro motivo que no es menos importante es que los ignacianos suelen lamentarse de los altos precios que tienen que pagar por la vivienda y por una pequeña parcela en San Ignacio, que además al no ser ésta lo suficientemente grande para el cultivo de los productos básicos, les obliga a comprarlos en el mercado local, lo cual resulta para la mayoría de las familias sumamente costoso. Por otro lado, en el caso de las familias que permanecen de manera estable o permanente en una comunidad en particular, la actividad agrícola es el factor dominante que les ata a la tierra y no el resto de actividades productivas como lo son la caza, la pesca o la recolección. Esto quiere decir que los chacos, los cuales se mantienen en el mismo lugar durante al menos 3 años, obligan en cierta manera al arraigamiento del grupo familiar a una determinada comunidad, en contra de lo que a mitad del siglo pasado defendía Meggers y que años más tarde fue contradicho por Carneiro (Eden, 1990: 76). El resto de actividades no condicionan a los comunarios a cambiar su residencia, son más bien secundarias, lo

cual confirma que la agricultura se concibe como la principal y más básica ocupación para la población ignaciana. El mismo Eden apuntaba además que aquellos grupos que presentan una mayor dependencia de la caza o de la recolección, son aquellos que presentan un índice más alto de itinerancia (*ibíd.*, 76-77), a la vez que admite que las poblaciones de la várzea amazónica dependen principalmente de la agricultura (*ibíd.*, 79). En el caso de las comunidades locales de Mojos queda comprobado que es la agricultura que empuja a las familias a la movilidad.

Un aspecto interesante a comentar, en la línea de lo que viene siendo tratado, es la discontinuidad e intermitencia de la configuración de las comunidades entre el espacio local urbano y rural a lo largo del tiempo. La desarticulación espacio-tiempo ha definido los movimientos de ida y vuelta entre el núcleo urbano, esto es San Ignacio, y el ámbito rural en el que a día de hoy se asientan las comunidades ignacianas. Si trazásemos una historia lineal de la localización de los asentamientos indígenas en Mojos podríamos establecer 3 grandes bloques en los que se distinguiría claramente el momento en el que los antiguos “mojos” vivían esparcidos por el espacio que ocupan en la actualidad las comunidades del TIMI; más tarde se concentrarían en la reducción misional de San Ignacio y ya en la mitad del siglo XX, con la invasión de la población colona, retornarían a los bosques de la sabana. Sin olvidar los episodios en los que numerosas familias huyeron hacia el interior de los montes motivados por los movimientos mesiánicos y como estrategia de resistencia hacia la invasión externa. Se podrían calificar por tanto, de movimientos pendulares que han permitido a los habitantes de la región identificarse con el espacio que ocupan y sentirse partícipes del proceso de articulación territorial, permitiéndoles al mismo tiempo configurar su propia definición de territorio, a partir de la relación con éste.

La cuestión de la movilidad conduce a comentar el tema de las comunicaciones, las cuales son de tres tipos: vía terrestre a través de la carretera que comunica San Ignacio de Mojos con Trinidad, a 90 kilómetros de distancia y la carretera que comunica con el municipio de San Borja -a 120 km de distancia de San Ignacio- hacia La Paz. Las carreteras mencionadas no están asfaltadas, hecho que dificulta enormemente las comunicaciones durante la época de lluvias. La segunda modalidad para acceder al municipio sería por vía aérea dado que llegan avionetas desde Trinidad a un pequeño aeropuerto que se encuentra a las afueras del núcleo urbano. Por último mencionar el transporte fluvial (canoas) necesario para alcanzar algunas de las comunidades ignacianas como Chanekere o Ichasi Awásare.

4. 5. 2. Estructura económica mojeña.

Pese a las continuidades del sistema agrícola indígena practicado por las poblaciones mojeñas, ciertas modificaciones han tenido lugar en las últimas décadas. De manera gradual se han ido incorporando mecanismos de adaptación a los condicionamientos tecnológicos y productivos, así como ecológicos. La tierra es el factor en torno al que gira el conjunto de actividades económicas de las comunidades locales. Iremos viendo a qué se refiere esta idea.

Conforme a la obra de Sutton y Anderson, el pueblo mojeño se asociaría a las sociedades de horticultores (2004). Mientras que Wolf iría más allá especificando con el uso del término “horticultura hidráulica” (1987: 169). Estos grupos habitarían en los mismos lugares durante todo el año y se dedicarían principalmente a actividades agrícolas las cuales serían practicadas por los miembros de la unidad familiar para el consumo propio. A esto se añadiría la cría de animales domésticos, como veremos más adelante, y otros recursos que les ofrecerían los bosques del entorno en el que habiten.

La producción agrícola es la base de la alimentación para los mojeño-ignacianos. El tipo de producción es de carácter familiar y la reciprocidad esté muy presente en las relaciones económicas (Lazo, 2007: 46). Los cultivos predominantes y los cuales forman el grueso de la producción familiar ignaciana son principalmente el arroz, la yuca¹⁹³ y el plátano. Además de estos, se cultivan otros como el camote, la papaya, el cacao, el mango o los cítricos, entre los que destacan las toronjas. La mayor parte se cultivan en las zonas más altas, que corresponden a las unidades agroecológicas de las islas de bosque, para mitigar el impacto de las inundaciones. Cada una de las familias posee un chaco o superficie equivalente a una hectárea o hectárea y media (algunas familias poseen una superficie incluso algo superior).

El sistema de cultivo agrícola es el denominado de roza, tumba y quema, practicado *tradicionalmente* en la sabana por las poblaciones autóctonas que en ella habitan. Se denomina de esta manera porque tras tumbar a base de hachazos y machetazos los árboles más altos y la maleza del terreno lo que queda se quema. Después de la quema queda la *chafra*, por lo que se requiere basurear -acción de quitar la *chafra*- (entrevista a Pedro Áñez) (véase **fotografía 4. 4**). La quema ocasional elimina las plagas de insectos –sobre todo hormigas- y las malas hierbas de la tierra, además de liberar nutrientes de la biomasa (Eden, 1990: 70, 74-75). Es importante dejar el mayor número de árboles alrededor ya que esto hará que se mantenga la humedad del terreno (Fabricano *et al.*, 2009: 162).

¹⁹³ La yuca es una especie que se ha adaptado fácilmente a los suelos con predominancia de acrisoles (Eden, 1990: 72) como es el caso de los suelos de Mojos.

Fotografía. 4. 4. Imágenes de chacos.



Fuente: Virginia Jabardo Pereda

Algunos autores han aclarado el porqué del método *tradicional* agrícola que emplean las sociedades indígenas de la Amazonía, el cual es el más apropiado debido a la pobreza de los suelos de la región, pese a que ha sido comúnmente considerado como primitivo (Chirif, 1983: 171; Sutton y Anderson, 2004: 194; Posey *et al.*, 2004: 81). La técnica de la roza, tumba y quema sería el método más adecuado al permitir trasladar el chaco y continuar la producción agrícola cuando los suelos están exhaustos.

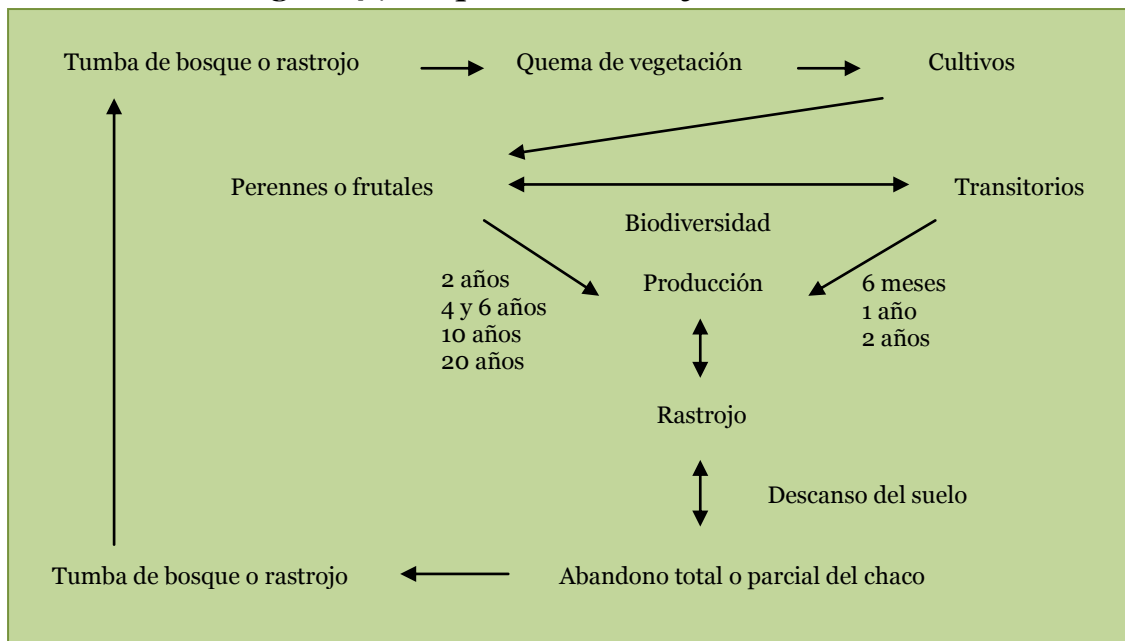
La agricultura es itinerante y viene denominada como “agricultura de basureo” (entrevista Pedro Añez). En la elección del terreno se cuenta con cuatro condicionantes: la altura, la cercanía a la comunidad, la separación frente a las áreas donde pastorea la ganadería y la fertilidad de los suelos (Fabricano *et al.*, 2009: 162). El proceso de chaqueo tiene lugar durante los meses de agosto, septiembre u octubre, es decir, durante los meses del periodo seco. Posteriormente, se lleva a cabo la siembra entre noviembre y enero esperando hasta abril para la cosecha (entrevista a Ignacio Apace). Esteban Pacema -corregidor de Chontal- narra que:

“La siembra es con punzón, con palo, hay veces que por una hectárea nos dura por 3 días sembrando si somos solitos nos tiramos 5 días sembrando. Una hectárea

trabajando cuando uno es solito nos dura por 3 meses, por eso nos cuesta hacer nuestros chacos. Hay veces que no puede cultivar todo porque es mucho trabajo” (entrevista).

Existe la rotación de cultivos, que va de 3 a 4 años, con la intención de que el suelo se mantenga rico en nutrientes y no se agote (véase **figura 4. 7**). Cuanto más pequeño es el chaco, más rápidamente es absorbido por el bosque, reduciendo notablemente el impacto ambiental (Sutton y Anderson, 2004: 194, 198).

Figura 4.7. Esquema de manejo de un chaco



Fuente: Bernal, 2006: 96.

Cuadro 4. 5. Rotación de cultivos y utilización de chacos.

| Tipo de terreno | 1º Año | | 2º Año | | 3º Año | | 4º Año | Más de 4 años |
|-------------------------------------|----------------------------------|--|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| | Verano | Invierno | Verano | Invierno | Verano | Invierno | Verano | |
| Monte primario altura | Arroz y maíz | Frejol, soya, sorgo, camote | Plátano, yuca | Plátano, yuca | Plátano | Plátano, yuca | Plátano, yuca | Recuperación natural |
| Monte primario altura | Arroz y maíz | Maíz y fréjol, yuca | Arroz, plátano, yuca | Plátano | Plátano | Plátano | Plátano | Recuperación natural |
| Monte primario altura | Arroz, maíz, plátano y chocolate | Plátano, chocolate, camote, fréjol, soya | Plátano, chocolate, camote | Plátano, chocolate, camote y galusa | Plátano, chocolate y galusa | Plátano, mara, chocolate, cítricos y otros | Plátano, mara, chocolate, cítricos y otros | Plátano, mara, chocolate, cítricos y otros |
| Monte secundario altura | Arroz, maíz | Plátano, yuca, frejol | Plátano | Plátano | Plátano | Recuperación natural | | |
| Monte secundario altura | Arroz, maíz, yuca y plátano | Plátano, yuca | Plátano | Plátano | Recuperación natural | | | |
| Monte primario bajura | Arroz | Frejol | Arroz | Recuperación natural | | | | |
| Monte primario relativamente bajura | Arroz, maíz | Frejol, sorgo, soya, caña | Caña | Caña | Caña | Caña | Caña | Caña |
| Monte secundario bajura | Arroz | Pasto | Pasto | Pasto | Pasto | Pasto | Pasto | Pasto |

Fuente: CIPCA, 2005: 111.

Los suelos se recuperan pasados 15 ó 20 años. La tecnología empleada en el cultivo agrícola es más bien rudimentaria y sumamente tradicional. Los comunarios ignacianos continúan usando machetes y hachas puesto que les resulta imposible el uso de máquinas más sofisticadas como son las motosierras a las que no pueden acceder económicamente. No obstante, esto no ocurre en San Miguel del Mátire en donde se compraron motosierras para el uso colectivo, es decir, pertenecen al conjunto de la comunidad, por lo que las familias solicitan su uso en función de sus necesidades. En el caso de Santa Rita reconocían su deseo de poder acceder a éstas dado que son conscientes de hasta que punto facilita enormemente el duro trabajo que supone clarear el monte (entre 35 y 40 jornadas de trabajo) (véase **cuadro 4. 6**).

Cuadro 4. 6. Días invertidos en la preparación de 1 hectárea de terreno según el sistema de chaqueo *tradicional*.

| Actividad | Monte primario (monte alto) | Monte secundario (barbecho) |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------|
| Roza | 8 | 10 |
| Tumba | 25 | 20 |
| Quema | 0,5 | 0,5 |
| Basureo | 8 | 4 |
| Total | 41,5 | 34,5 |

Fuente: CIPCA, 2005: 109.

Mencionaba que cada familia posee su propio chaco al interior del territorio comunal y la superficie de éste se establece en función del número de miembros de la familia que tengan la posibilidad de dedicarse al trabajo agrícola (véase **cuadro 4.7**). Normalmente son los hombres los que trabajan en él. Esto se debe a un motivo principal y es que las mujeres, mientras tanto, se dedican al cuidado de los hijos, al cuidado del hogar, a actividades de artesanía -como puede ser el hilado de hamacas, cestos, tejidos, etcétera- aunque también contribuyan de manera ocasional a las labores agrícolas requeridas para el trabajo en los chacos.

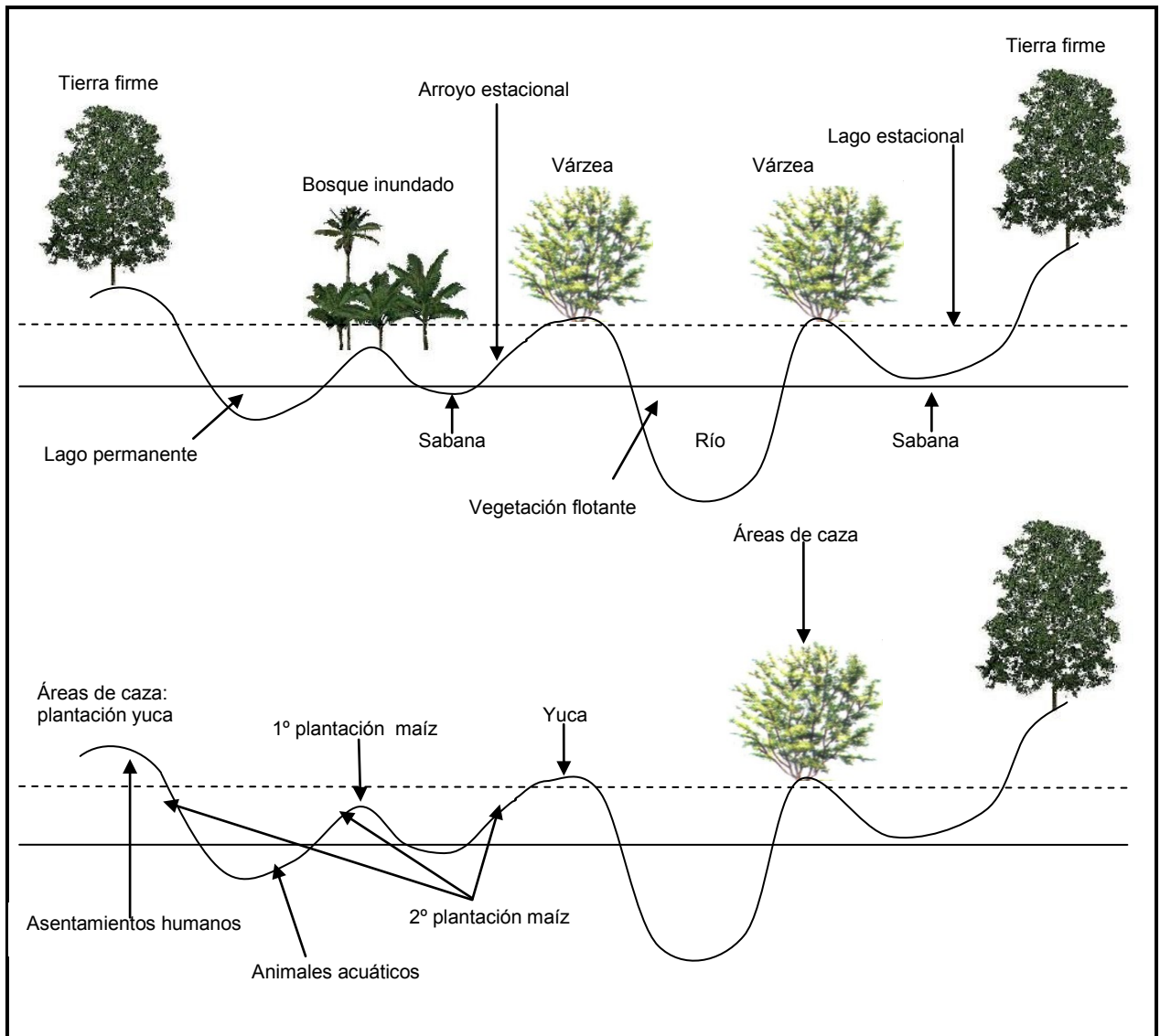
Cuadro 4. 7. Participación en trabajos agrícolas

| Actividades agrícolas | Hombres | Mujeres | Niños | Mano de obra externa |
|-------------------------|---------|---------|-------|----------------------|
| Chaqueo | 50 | 25 | 5 | 20 |
| Cosecha | 20 | 40 | 20 | 20 |
| Limpieza | 30 | 35 | 20 | 15 |
| Secado y almacenamiento | 16 | 64 | 20 | 0 |
| Siembra | 20 | 30 | 25 | 25 |

Fuente: CIPCA, 2005: 137.

Tal y como se aprecia en el cuadro anterior, la actividad que más esfuerzo físico requiere –en este caso el chaqueo– es desempeñada por los hombres que frecuentemente son ayudados por otros comunarios al ser consideradas estas labores que forman parte del trabajo comunal. Esto significa que el conjunto de habitantes de cada comunidad tiene la obligación moral -incluida en el código de conducta- de colaborar de manera recíproca en este tipo de actividades. Por otro lado, comprobamos que el resto de actividades agrícolas son desarrolladas por las mujeres ayudadas en muchos casos por los hijos del grupo familiar quienes en la medida de sus posibilidades participan en el desempeño de las mismas.

En la actualidad, las poblaciones mojeñas continúan desarrollando los mismos sistemas de cultivo que sus antecesores. La várzea permite aprovechar las zonas de mayor altura para el cultivo y las zonas inundadas estacionalmente para la captura de peces. Sólo de esta manera se evita someter a una intensa actividad los suelos de la región y dejarlos exhaustos desde el punto de vista de la fertilidad, lo cual ocurriría en caso de que se liberasen totalmente del placton, las plantas macrofitas y la fauna acuática que en ellos habita (Sioli, 1984: 687-688). Por otro lado, el sistema de rotación de los chacos permite la regeneración de los suelos puesto que estos son rápidamente cubiertos por plantas heliófitas que dan paso a una vegetación de tipo secundario (Eden, 1990: 58). En la región de Mojos, las inundaciones condicionan el uso del suelo. Los bien marcados periodos entre la estación seca y la estación de lluvias determinan el tipo de actividad que en cada uno de los pisos ecológicos puede ser desarrollada (véase **figura 4. 8**).

Figura 4. 8. Esquema de nichos ecológicos: uso agrícola y productivo.

Fuente: Meggers, 1984: 643.

La práctica totalidad de las familias mojeñas cubren las necesidades alimenticias mediante la producción agrícola. El aporte anual de la agricultura al total de ingresos de una familia se sitúa en torno al 35% (CIPCA, 2005: 109). Los indígenas mojeño-ignacianos destinan la mayor parte de su producción al autoconsumo familiar aunque otro porcentaje importante -en torno al 30%- sea destinado a la venta. Ésta viene favorecida por la alta demanda de productos agrícolas en el mercado local de San Ignacio, lo cual les permite obtener recursos económicos, aunque muy limitados. El dinero que obtienen en dichas transacciones es invertido en la compra de productos básicos como pueden ser: aceite, queroseno, jabón, pilas para las radios, calzado, ropa, sal, azúcar, etcétera, o lo que es lo mismo, aquellos bienes que son imposibles de obtener en las comunidades. También se destina a cubrir gastos imprevistos que

puedan surgir en el seno de las familias: compra de algunas medicinas para alguno de los miembros del núcleo familiar que hay caído enfermo, material escolar, reparar desperfectos en la vivienda, etcétera.

Habría que mencionar que la inmersión en las redes comerciales de los mercados locales es más bien reciente. Previo al contacto más directo con la sociedad nacional, las poblaciones indígenas practicaban una economía más informal, basada en la reciprocidad y en los lazos de parentesco. Sin embargo, a día de hoy viven “*con un pie en la economía de mercado y otro pie en las relaciones de reciprocidad*” (Urioste, 2007c: 226). Su inmersión en la lógica del mercado local se ha visto incrementada en los últimos años. Esto se debe en buena medida a la intervención de las organizaciones que trabajan en el municipio de San Ignacio, quienes de manera gradual han empujado a las comunidades indígenas a convertirse en un actor económico más de estas redes de comercio local, desempeñando un rol autónomo al mismo nivel que el resto de grupos sociales de la región frente a los que se encuentran –en muchas ocasiones– compitiendo.

Un estudio coordinado por Lorenzo Soliz y Silvia Aguilar (2005) distingue dentro del subsistema agrícola –correspondiente al sistema productivo indígena– cultivos anuales y cultivos perennes. Entre los primeros destacan el arroz (*Oryza sativa*), el plátano (*Musa sp*), la yuca (*Manihot esculenta*), el maíz (*Zea mays*) y el fréjol (*Vigna unguiculata*) (véanse **fotografías 4.5** y **4.6**). Entre los cultivos perennes destacan los cítricos, principalmente toronja, limón, naranja, lima o mandarina. Estos cultivos se pueden encontrar en los alrededores de las viviendas de las comunidades (*ibíd.*, 161).

Cuadro 4. 8. Tipos de cultivo y promedio de superficie cultivada.

| Tipo de cultivo | Hectáreas por familia |
|------------------------|------------------------------|
| Arroz | 0,7 |
| Plátano | 0,5 |
| Yuca | 0,3 |
| Maíz | 0,2 |
| Otros ¹⁹⁴ | 0,15 |
| TOTAL | 1,85 |

Fuente: Elaboración propia en base a Soliz y Aguilar, 2005: 160-161.

¹⁹⁴ Caña de azúcar, gualusa, tabaco y ají, entre otros.

Fotografía 4. 5. Imagen de arrozales (izquierda) y de maíz (derecha).



Fuente: Virginia Jabardo Pereda



Existe otro tipo de cultivos a los que podemos denominar semiperennes, como es el caso del cacao o incluso el plátano.

Fotografía 4. 6. Imagen plantación de plátanos en Santa Anita del Máitre



Fuente: Virginia Jabardo Pereda

Dicho grupo forma parte del denominado sistema de producción agroforestal, el cual contribuye a la diversificación de la producción a partir de las plantaciones de cacao criollo, cítricos y recursos maderables. Este tipo de cultivos se ubica en el monte alto. Con respecto al cacao CIPCA puso en marcha en el año 2008 el *Plan de Manejo Forestal Específico de Cacao “Theobroma Cacao”* en algunas comunidades del TIMI

como San Miguel del Mátire. También se implementó recientemente un proyecto para la elaboración de champú de motacú a partir de las semillas de este árbol. Son cuestiones éstas que retomaré para analizar en profundidad en el capítulo 7. Por el momento cabe señalar que tales ejemplos nos remiten a la práctica de la asociación de cultivos, la cual constituye una actividad habitual practicada entre las familias mojeñas (véase **cuadro 4.8**). La más común es la asociación entre gramíneas (arroz y maíz); entre gramíneas y leguminosas (maíz, frejol, sorgo y soya) o incluso entre cultivos frutales perennes y maderables.

Por sistema agrosilvoforestal se entiende aquel que combina cultivos agrícolas con los sistemas de explotación forestal a largo plazo. Con esto se logra -desde el punto de vista medioambiental- la sostenibilidad de los recursos, al no constituir un modelo intensivo en cuanto al uso de la tierra se refiere. Estos sistemas están siendo cada vez más desarrollados en las comunidades del TIMI en donde se combinan los cultivos tradicionales con frutales, principalmente cítricos, u otras especies como el caco silvestre. Eden señala los beneficios que acarrea este tipo de sistemas, los cuales favorecen la fertilidad de los suelos y mitigan los efectos de la erosión; aportan una cantidad extra de nutrientes -sobre todo si los árboles plantados pertenecen a la familia de las “leguminoseae”- y previenen la aparición de plagas ante las que algunas especies se muestran más vulnerables –caso del cacao o la mara- (1990: 152).

Por este motivo convendría más hablar de sistema de producción agroforestal dado que la gran mayoría de la población local combina tanto el sistema agrícola como el forestal, siendo ambos complementarios. De hecho, el *Plan de Desarrollo Municipal* (PDM) del municipio de San Ignacio de Mojos, menciona para tal municipio la vocación agroforestal como la más importante y de mayor potencial puesto que “*la gran mayoría de los habitantes del sector rural (comunidades indígenas) son agricultores, complementando esta actividad con la explotación forestal principalmente*” (2001: 6).

Cuadro 4. 9. Asociación de cultivos en las comunidades de Mojos.

| Antes | | Actualmente | |
|--------------------------------------|---------------------------|---|---------------------------|
| Cultivo | Características | Cultivo | Características |
| Arroz-maíz | Anuales-anuales | Arroz-maíz | Anuales-anuales |
| | | Arroz-maíz, plátano | Anuales-multianuales |
| | | Arroz-plátano-chocolate-mara-cítricos-coco-piña | Anuales-multianuales |
| Maíz-fréjol | Anuales-anuales | Maíz-frejol | Anuales-anuales |
| | | Maíz-soya | Anuales-anuales |
| Yuca-maíz | Anuales-anuales | Yuca-fréjol-sorgo-camote | Anuales-anuales |
| | | Yuca-maíz-arbejita | Anuales-multianuales |
| Plátano-camote-yuca, plátano-gualusa | Anuales-multianuales | Plátano-camote-tuca-gualusa | Anuales-multianuales |
| Cítricos-caco-algodón-café | Multianuales-multianuales | Plátano-plátano-cacao criollo-mara-cítricos-serebó-piña | Multianuales-multianuales |

Fuente: CIPCA, 2005: 112.

Cuadro 4. 10. Calendario agrícola

| Cultivos | Roza y tumba | Siembra | Limpieza 1 | Limpieza 2 | Limpieza 3 | Cosecha |
|----------|------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------|----------------------------------|
| Arroz | Mayo-septiembre | Septiembre-diciembre | Noviembre-enero | Diciembre-abril | Diciembre | Diciembre-mayo |
| Maíz | Mayo-septiembre | Septiembre-abril | Octubre-julio | Diciembre-febrero y junio-julio | | Diciembre-abril y agosto-octubre |
| Plátano | Mayo-noviembre | Enero-diciembre | Noviembre-mayo y agosto-septiembre | Marzo-mayo y agosto-septiembre | Junio-julio | Mayo-junio y agosto-noviembre |
| Yuca | Marzo-septiembre | Mayo-diciembre | Mayo-octubre | Septiembre-enero | | Marzo-diciembre |
| Camote | Mayo-agosto | Octubre-julio | Octubre | Noviembre | | Junio-agosto |
| Caña | Marzo-agosto | Marzo-julio | Mayo-agosto | Junio-octubre | Diciembre | Abril-mayo |
| Fréjol | Mayo-agosto | Diciembre-junio | Abril-julio | Junio-julio | | Junio-septiembre |

Fuente: Fabricano *et al.* , 2009: 261.

La agricultura es la principal actividad pero no la única: la caza, la pesca y la recolección constituyen los complementos alimenticios para la población local.

En el caso de la actividad cinegética, ésta constituye un importantísimo aporte proteínico para las comunidades indígenas. Existen áreas comunes de monte alto donde los indígenas salen a cazar, pero siempre dentro de la comunidad, para evitar la incursión en los espacios comunales vecinos. Lo hacen de noche o de día, indistintamente, y suelen ir entre 2 y 3 personas, siempre hombres, para protegerse, aunque puede realizarse de manera individual. Suelen ir además acompañados de perros para seguir más fácilmente el rastro de las presas. Utilizan como armas el salón - especie de rifle- y escopetas, además de usar trampas y lazos¹⁹⁵. Las especies más valoradas son el taitetú y el jochí pintado, tatú, anta, o la peta.

Un aspecto ritual relevante relacionado con esta actividad cinegética es que previo a la partida deben pedir permiso a los dueños o señores del bosque para que estos les concedan su aprobación. Estos son los “jichis”, encargados de cuidar de la naturaleza, de los bosques, de los animales, de las plantas. Los más importantes son:

¹⁹⁵ Abundante literatura mantiene que hoy en día los indígenas de la región continúan usando el arco y las flechas para cazar. Esto es sólo verídico en el caso del pueblo Tsimane. Dicho pueblo se mantiene relativamente aislado de la sociedad nacional, estableciendo escasos contactos con la misma.

“Ichinichichana”, “Eyeye”, “Siripuku” y “Kataisisi”. El trabajo de CEJIS incluye además a “A’eana” como espíritu del agua (2003: 242).

Los mojeños deben dar a conocer a los “jichis” su intención de salir a cazar y están obligados a no capturar más de 3 piezas. El hecho de no poder cazar un número superior tiene una explicación ecológica y es que de esta manera se permite la regeneración de las especies y no se abusa de las mismas (entrevista a Celso Saavedra). Según la creencia mojeña, si por algún motivo no se cumpliera este dictamen, una maldición a modo de castigo, caería sobre los cazadores o sobre sus familias. Así lo expresa Esteban Pacema –corregidor de Chontal–: *“si se caza de más los dueños del bosque se enojan y otra vez que vayas ya no cazas más. En la laguna también están los ichis que si se enojan porque se pesca mucho se seca la laguna”* (entrevista). El estudio de CEJIS en relación a esto concluye que *“por respeto a esos espíritus, un mojeño-ignaciano sabe que no se debe cazar en exceso, porque el amo de los animales, el amo del bosque, hechizará al cazador como castigo”* (ibíd.).

Libermann y Godínez recogen testimonios que reconocen que *“el hombre tienen que intercambiar, tiene que comunicarse con los dueños de la selva y ese intercambio establece reglas que llevan a un cierto equilibrio, es decir a un uso mesurado del medio ambiente”* (1992: 145) en donde se repite esta idea de reciprocidad entre la naturaleza y las sociedades indígenas que en su seno habitan.

Estas prácticas rituales se pueden entender desde dos perspectivas: como respuesta adaptativa al ecosistema de la sabana en donde no abundan tantas especies animales como ocurre en las zonas de bosque tropical, es decir, como respuesta a los límites de este tipo de recursos. Así ha sido interpretado por Eden, como mecanismo adaptativo para el control y manejo de los recursos (1990: 83). O bien como una serie de tabús que de una u otra manera limitan la adquisición y consumo de los animales del bosque. De esta manera las explicaciones en las que prima el factor ecológico chocan con otras de carácter sociocultural. Las primeras defienden que si no se supera una partida máxima de animales capturados es porque el número de miembros que participan en dichas cacerías no es lo suficientemente numeroso como para poder optar a más (ibíd., 84). Otro motivo que nos ayuda a entender las dinámicas que envuelven a la caza lo constituye el sedentarismo y es que siempre será más difícil dar presa a ciertos animales en los mismos espacios. En relación a esto último, Calavia utiliza el concepto de “sedentarismo inestable” –caracterizado por el desplazamiento de cortos plazos– cuando examina las actividades productivas de los *yaminawa* de Brasil quienes debido a la escasez de animales de caza o al incremento de la pobreza de los suelos, se ven obligados a desplazarse en trayectos cortos para volver a los mismos enclaves (2004: 123). Tanto este planteamiento como los factores ecológicos que regulan dicha

actividad, son los más acertados para entender las lógicas que explican el funcionamiento de esta actividad entre la población local mojeña.

El pescado constituye otro de los complementos alimenticios del pueblo mojeño. El ecosistema de inundación de las sabanas es aprovechado por las comunidades indígenas. Mencioné que durante la época de lluvias un gran número de pozas o pequeñas lagunas ven incrementado su nivel de agua. En ellas aparecen gran cantidad de peces que al llegar el periodo seco se ven atrapados y son capturados por los pobladores de la región. Los ríos y arroyos -por donde se desplazan con las canoas- son lugares abundantes en pesca.

Fotografía 4. 7. Imagen de canoas (Laguna Isirere, San Ignacio de Mojos)



Fuente: Virginia Jabardo Pereda

Los utensilios más utilizados para la pesca son los anzuelos, redes o mallas, algún tipo de veneno como el barbasco y arcos y flechas aunque sólo en ocasiones. Con este conjunto de instrumentos se pescan especies como el pacú, el surubí, el sábalo, las bogas o las pirañas.

Fotografía 4. 8. Imagen malla de pescar.



Fuente: Virginia Jabardo Pereda

Desde hace unos años la ONG HOYAM junto con la contraparte española CEAM, ha venido realizando proyectos de piscicultura semi-intensiva –como alternativa productiva y económica- para recuperar algunos elementos de las prácticas locales en Mojos. Siendo la pesca una de las actividades -económica y cultural- principales en la región, se han desarrollado proyectos piscícolas de cultivo de peces, los cuales pretenden “*recuperar ciertas prácticas culturales realizadas tradicionalmente por las poblaciones autóctonas*” (entrevista a Dafne Skalidou). Por ello se rehabilitaron por un lado antiguas pozas y se construyeron otras nuevas. Desde el punto de vista medioambiental supone una actividad absolutamente sostenible que propiciará el desarrollo de las comunidades indígenas de manera autogestionada.

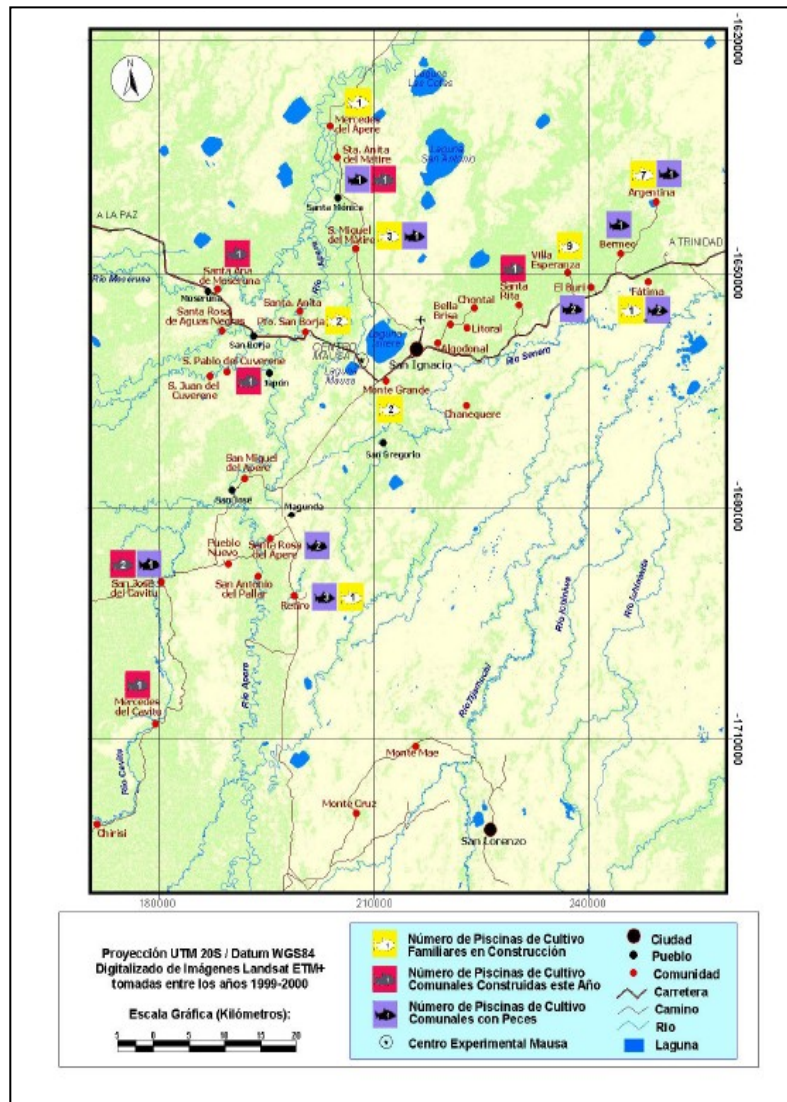
Las pozas se construyen con tractores que sacan la tierra, creando piscinas en las que el agua puede alcanzar los 2 y 3 metros de profundidad. Algunas comunidades obtienen de ellas el agua que utilizan en: la higiene personal, el consumo diario, el lavado de ropa y utensilios de cocina o en la preparación de alimentos. Este agua no es evidentemente potable y proviene de las mismas pozas en donde se cultiva el pescado, lo cual ocurre en aquellas comunidades que se encuentran alejadas de fuentes de agua naturales como arroyos, lagunas o ríos.

Fotografía 4. 9. Imagen de poza de la comunidad de Monte Grande km 5.



Fuente: Virginia Jabardo Pereda

Mapa 4. 2. Piscicultura en los Llanos de Mojos, promovida por Hoyam (hasta 2005)



Fuente: Barba y Sánchez, 2009.

HOYAM-MOJOS se está sirviendo de la colaboración de ASOPIM, la *Asociación de Piscicultores Indígenas Mojeños*. Una de las prioridades de HOYAM es lograr que ASOPIM se autogestione y conseguir de esta manera que en un corto periodo de tiempo sean los propios comunarios quienes coordinen todo el proceso y la cadena de actividades económicas y productivas. Poco a poco lo están logrando.

Fotografía 4. 10. Imagen ASOPIM (izquierda) y HOYAM (derecha).



Fuente: Virginia Jabardo Pereda

Dicho proceso es el siguiente: en las pozas de las comunidades se cultivan los peces –principalmente pacú por constituir una especie autóctona y por evitar de esta manera la dependencia de los mercados externos-¹⁹⁶. Una vez que están listos para ser recogidos tiene lugar la cosecha, de la que parte corresponde a los propios comunarios y comunarias participantes del programa. Mientras que la otra parte es transportada por las camionetas de HOYAM-MOJOS hasta ASOPIM, donde se dispone para su posterior comercialización en los mercados de San Ignacio y de Trinidad¹⁹⁷. Desde ASOPIM se han contabilizado en el año 2009 40 toneladas de producción piscícola, lo que supone un incremento de más del 100% al haber sido recolectadas en el año anterior aproximadamente 16 toneladas de pacú (entrevista a Dafne Skalidou).

HOYAM busca la implicación de un número cada vez mayor de indígenas que participen y se involucren en las labores de conservación, envasado y transporte. Asimismo se pretende incrementar la construcción de más pozas en las distintas comunidades.

Mausa es el nombre de la estación piscícola de producción y de investigación para la mejora del proceso piscícola. Se sitúa próxima a San Ignacio de Mojos. En ella tiene lugar la cría de alevines de pacú y tambaquí, ambas especies autóctonas. Una vez que los peces han sido criados en Mausa son trasladados a las comunidades, en donde se depositan en las pozas correspondientes. Los peces se recogen una vez han alcanzado el peso ideal el cual ronda los 500 gramos para lo cual necesitan un mínimo de 3 meses.

¹⁹⁶ En un principio se cultivaba de manera comunitaria, pero al comprobar que esto no funcionaba como se esperaba (se llegaron incluso a generar conflictos entre los comunarios por la falta de organización, de repartición de tareas o de repartición de recursos) se decidió conceder una pequeña poza a la familia que así lo solicitase. La adjudicación de la misma es por un periodo de aproximadamente 2 años. Actualmente existen unas 130 familias asociadas del TIMI y del TIM, siendo 12 las comunidades del TIMI que cuentan con pozas en sus territorios comunales (entrevista a Dafne Skalidou).

¹⁹⁷ Se está contemplando la posibilidad de abrir mercados también en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y Cochabamba.

Si a la hora de sacarlos no son aún lo suficientemente grandes se vuelven a dejar para que crezcan durante algún tiempo más. El peso correspondiente a la cantidad de peces que se suele obtener en la recogida oscila entre los 100 y los 200 kilogramos. Desde Mause el pescado va a parar a ASOPIM, encargado del comercio y la distribución, y a su vez se transporta -una vez que ha sido congelado- hasta uno de los mercados de San Ignacio de Mojos (en donde existe un puesto de dicha asociación). Dicha asociación paga 18 pesos bolivianos por cada kilogramo de pescado a las familias de las comunidades, siendo posteriormente vendido en el mercado local por 21 pesos.

En las comunidades, los peces de las pozas se alimentan con “balanceado” que consiste en un tipo de pienso compuesto de proteínas animales y vegetales. El problema es que estas últimas no se encuentran fácilmente en Mojos puesto que en esta región no hay soya y el maíz no da lo suficiente. La solución se resuelve comprándolo en Santa Cruz de la Sierra lo cual hace que el valor se vea incrementado debido al transporte. Las familias que participan de estos procesos pagan unos 5 pesos por cada kilo de “balanceado”, razón por la cual se elaboró un proyecto para solicitar la construcción en San Ignacio de una fábrica para la elaboración de dicho producto. Y es que normalmente los peces comen 2 veces al día o incluso 3, en cuyo caso llegan a pesar un kilo en algo más de medio año.

Los propios comunarios son los encargados, junto con los técnicos de HOYAM, en extraer el pescado de las pozas, para lo que utilizan grandes mallas manejadas por unas 4 personas. Tras esta fase se disponen a su limpieza que consiste en la extracción del interior y el raspado de las escamas.

Fotografía 4. 11. Proceso de captura y preparación del pescado en comunidades



Fuente: Virginia Jabardo Pereda

Con respecto al sector pecuario, a parte de la ganadería, se incluye el ganado ovino, porcino, avícola y caballar. La cría de animales domésticos es otra de las actividades de subsistencia que llevan a cabo los comunarios del TIMI. En las comunidades ignacianas se pueden encontrar chanchos (*Sus scroffa*) –cerdos-, patos (*Cairina moschata*), gallinas (*Gallus gallus*) o pollos, los cuales se crían y posteriormente son destinados al consumo familiar, además de a la provisión de carne y huevos.

Fotografía 4. 12. Animales domésticos en comunidad ignaciana.



Fuente: Virginia Jabardo Pereda

Desde hace apenas unos años CIPCA ha puesto en marcha programas encaminados a la cría de ovejas de pelo (*Ovis Aries*) que están viendo incrementado notablemente su número gracias al apoyo y la financiación de instituciones como aquella¹⁹⁸. Contribuyen al aporte de las familias en cuanto a la producción de leche y carne puesto que la lana no se aprovecha. Se requiere de una superficie menor que la destinada a la cría de ganado, lo que viene a ser una hectárea para cada 20 ovejas.

Fotografía 4. 13. Imagen de ovejas de pelo en Villa Esperanza y en la feria anual de San Ignacio de Mojos.



Fuente: Virginia Jabardo Pereda

De enorme importancia para la región es la ganadería. Supone la actividad productiva más relevante de Mojos. Si bien es una actividad controlada, en gran medida, por la población blanco-mestiza, pese a que la práctica totalidad de los peones son indígenas temporeros, está comenzando a ser incorporada a pequeña escala en las comunidades indígenas.

Recientemente, el gobierno de Evo Morales ha implementado una política, la cual ha sido tildada por algunos de asistencialista, por la que han sido concedidas a las comunidades indígenas varias cabezas de ganado, que pastan en el territorio comunal. Dependiendo de la población que habita en cada una de ellas así han recibido. Suelen ser de propiedad comunal aunque se dan casos que las familias las poseen a título individual. De entre las comunidades del TIMI, más de la mitad cuentan con un pequeño hato de ganado.

¹⁹⁸ Anualmente CIPCA realiza la feria de la oveja de pelo en el municipio de San Ignacio de Mojos a la que las comunidades que cuentan con ejemplares de este animal les llevan para darlos a conocer y organizar comidas multitudinarias que sirvan para obtener beneficios.

Fotografía 4. 14. Imágenes de ganado en comunidades del TIMI.



Fuente: Virginia Jabardo Pereda



En relación a la ganadería, como subsistema del sistema pecuario de producción, se debe especificar que es practicada bajo un sistema de tipo extensivo tanto por parte de la población indígena como por los grandes hacendados. La superficie dedicada a la producción ganadera es irrelevante en el caso de las comunidades indígenas, a diferencia de lo que ocurre con las grandes extensiones que ocupan las grandes estancias. Los rendimientos son igualmente escasos en lo que respecta al sistema ganadero practicado por los propietarios privados quienes obtienen beneficios mucho más altos.

Pese a que las comunidades indígenas también practiquen la crianza de ganado vacuno, aunque en menor escala, constituye un importante aporte para las familias gracias a la elaboración de quesos y obtención de carne.

En cuanto al sector forestal se refiere, la región de Mojos cuenta con una abundante riqueza en el conjunto de sus bosques, con presencia de especies tanto maderables como no maderables. El problema más acuciante en este sentido es la tala selectiva indiscriminada de los recursos forestales y la lenta regeneración de los suelos.

Las comunidades indígenas han desarrollado un uso sostenible –desde el punto de vista medioambiental- de los recursos forestales, siendo el aprovechamiento de la madera esencialmente destinado para fines domésticos y en ocasiones para la venta, con el propósito de satisfacer algunas necesidades puntuales –construir la vivienda familiar o cubrir algún tipo de gasto imprevisto- requeridas por las familias o incluso por la comunidad en cuestión. Los recursos maderables son destinados además para la fabricación de canoas, carretones, para la elaboración de herramientas y algunos utensilios domésticos de cocina (véase **fotografía 4. 15**). Otros recursos no

maderables a parte de los ya citados serían los frutos silvestres, la miel y las plantas destinadas al uso medicinal.

Coomes y Barham reconocen que pese a la existencia de una ingente literatura etnográfica acerca de las formas de vida de las poblaciones amazónicas, en lo que se refiere a las prácticas *tradicionales* vinculadas con el sector forestal, persiste un sesgo epistemológico debido a la primacía de trabajos acerca de “*la etnobotánica, el manejo agroforestal y la conservación de la vida silvestre*” en base a los productos que los grupos étnicos extraen, dejando de lado los factores culturales de dichas prácticas (2001: 55).

Fotografía 4. 15. Imágenes de objetos fabricados con madera.



Fuente: Virginia Jabardo Pereda



Otro ejemplo de introducción de programas encaminados a incrementar los ingresos de los grupos indígenas es el de plantío de mara en comunidades como Fátima. Estos programas de recuperación de la especie, la cual fue enormemente amenazada por la explotación y tala selectiva en la década de los 80 y 90 del siglo pasado, consisten en proyectos a largo plazo, ya que se estima en 40 años el crecimiento regular y la posterior tala de esta especie maderable. A pesar de los planes de manejo forestal, la *Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra* (ABT) -la cual ha sido la Superintendencia Agraria hasta mayo del año 2009- no contempla con buenos ojos el desarrollo de estos proyectos por la falta de estudios previos.

La explotación forestal que hizo mella en las comunidades del TIMI está, al igual que ocurría con la actividad ganadera, en manos de la población blanca. Los ricos

bosques de mara constituyeron un foco de atracción para empresas foráneas las cuales se dedicaron durante años a la explotación de dicha especie maderable, entre otras.

La artesanía constituye una de las actividades de tipo artístico a la vez que económico puesto que una parte de los productos fabricados se destinan a la venta, como es el caso de las hamacas, los manteles, la cestería o los instrumentos musicales (véase **fotografía 4. 16**) –principalmente flautas, además de violines, violas y chelos para el acompañamiento de músicas barrocas, lo cual demuestra el creciente interés adquirido por la música bajo influencia de los padres jesuitas (Fabricano *et al.*, 2009: 157)-. No obstante, son también objetos de uso y disfrute de los propios indígenas.

Fotografía 4. 16. Imágenes artesanía mojeña



Fuente: Virginia Jabardo Pereda

Asimismo, los ingresos familiares se ven incrementados en ocasiones gracias a la venta de la fuerza de trabajo, principalmente en las estancias ganaderas. Frecuentemente los comunarios participan en estas labores y obtienen en torno a 20 pesos bolivianos por día trabajado, si la dieta está incluida. En caso de que ésta no forme parte del jornal éste puede llegar a alcanzar los 30 pesos. En el siguiente capítulo, en el que se analizarán las relaciones entre el sector ganadero e indígena se retomarán estas cuestiones.

A tenor de todo lo expuesto hasta el momento, se puede considerar al manejo local indígena como un manejo que permite la sostenibilidad de los recursos del medio natural en base a un conjunto de prácticas culturales que previenen la sobreexplotación y que no infringen en el entorno natural daños irreversibles. Una reflexión –inspirada en el trabajo de Eden (1990: 62)- que podemos extraer de todo lo comentado hasta el momento es que la adaptación de los antiguos pobladores de Mojos consistió en un proceso de larga duración que les permitió aprender a manejar y gestionar los recursos de los territorios en los que vivían. En cambio, los nuevos sistemas de explotación efectuados por parte de empresas forestales o de estancias ganaderas, ha ocurrido en un periodo de tiempo mucho más corto e intenso, impidiendo la adaptación a los ciclos biofísicos de la naturaleza.

Ya señalé en el primer capítulo que han sido elaborados numerosos trabajos sobre los recursos animales y vegetales de la región amazónica y sobre la adaptación de sus pobladores a las condiciones de su entorno. De entre ellos destacan las investigaciones de Betty Meggers (1984) y Michael Eden (1990), que desde época temprana, principalmente en el primer caso, se dedicaron al estudio de la explotación de recursos por parte de las sociedades indígenas de la Amazonía, así como al análisis de los modelos de uso de la tierra y los impactos sobre el paisaje de la región. Sin embargo, sin dejar de reconocer el mérito de los trabajos citados, la presente investigación no profundizará en los análisis acerca de los aportes proteínicos de los recursos naturales, no porque carezca de interés sino porque el objetivo del trabajo escapa o no se ciñe a dichas cuestiones. Pero sí que resulta pertinente extraer una idea y es que en el caso de Eden se reconoce que, tras el contacto con la población europea, muchos aspectos culturales de estas sociedades se vieron alterados debido a la incorporación de nuevos elementos, aunque esto no ocurriese en relación a los “tradicionales” modelos de explotación de la tierra y el bosque (*ibíd.*, 67-68) que han persistido, si bien con pequeñas variaciones, pese a las múltiples innovaciones que se han ido agregando.

4. 5. 3. Movimiento étnico en Bolivia: contexto internacional y emergencia del pueblo mojeño como nuevo sujeto político.

La progresiva usurpación territorial de los espacios comunales ocupados por los pueblos indígenas de todo el continente sudamericano, ha constituido una de las piezas clave en el movimiento indígena a nivel internacional. En la región de Mojos, la invasión histórica de *terceros* –alentada por políticas estatales- en los territorios habitados por pueblos indígenas ha impulsado la demanda frente al Estado nacional boliviano, del reconocimiento de derechos territoriales, convirtiéndose estos en la principal reivindicación del movimiento indígena de tierras bajas y en el eje articulador del resto de demandas (Jabardo, 2011) surgida por:

“la necesidad de asegurar a los indígenas el acceso a los recursos naturales que necesitan para el mantenimiento y el desarrollo de sus propios sistemas de producción, frente a la creciente presión sobre sus espacios tradicionales por parte de terceros. Además nace del deseo de administrar su espacio según sus propias costumbres, sin necesariamente seguir las normas del Estado” (de Vries, 1998: 7).

Las reivindicaciones territoriales no supusieron una excepción de las poblaciones *originarias* de la Amazonía boliviana ya que una gran parte de pueblos indígenas del continente sudamericano, alzaron sus voces contra los gobiernos de turno reclamando el respeto de los derechos colectivos de estos pueblos así como el reconocimiento de la diversidad étnico-cultural de los mismos¹⁹⁹.

Pero para entender el porqué de la emergencia de dicho movimiento debemos comprender el contexto internacional. Ya se venían escuchando voces de alarma desde la década de los 80, incluso previamente, que clamaban por la modificación de los actuales sistemas de desarrollo capitalistas por otros en los que se tuviera más en cuenta la búsqueda de la sostenibilidad medioambiental.

¹⁹⁹ Como bien analiza Mónica Quijada, el etnocidio nazi de la segunda guerra mundial, la descolonización de Asia y África de la década de los sesenta y las luchas por los derechos civiles en Norteamérica, permitieron la toma de conciencia sobre la importancia de reconocer y valorar la diversidad étnica y cultural además de los derechos de las comunidades indígenas (2004: 19). Estos fenómenos fueron imprescindibles para que los “grupos minorizados”, como así los denomina Guillermina Herrera (2006: 120) reivindicaran sus derechos. Para Marta Casaús se dieron además otras razones que empujaron a estos pueblos a reclamar lo que consideraban propio. La más importante para Casaús fue la celebración del Quinto Centenario del “descubrimiento” de América -comúnmente utilizada en el discurso indígena actual- además de “la celebración del Decenio de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas” o “la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajadores”, entre otras (2004: 32). Es así como me permito afirmar el surgimiento del Movimiento de los “Pueblos Originarios”, el cual presenta en su seno una gran heterogeneidad a pesar de que todos ellos guarden entre sí rasgos comunes.

Los pueblos indígenas se convirtieron en esta coyuntura en los abanderados de la lucha contra la depredación forestal y el respeto a la biodiversidad, adoptando el rol de los guardianes de la naturaleza. Desde plataformas internacionales, lideradas por ONGs de occidente, se llamó la atención sobre el vínculo existente entre la diversidad biológica y la diversidad cultural. Esto unido a una nueva perspectiva etnoecológica adoptada por parte de movimientos de corte ecologista e indianista, generó un clima propicio para la emergencia de dichos movimientos. Sin olvidar la oportunidad que encontraron con la entrada en vigor de las declaraciones y decretos provenientes de organismos internacionales como la *Organización Internacional del Trabajo* (OIT), desde donde se confirmaba la urgencia de reconocer los derechos territoriales de las poblaciones *originarias*.

Además de los factores internos que intervienen a escala nacional, a nivel continental influyeron otra serie de elementos que propiciaron la eclosión de las naciones étnicas. Por citar algunos de ellos: la penetración por parte de empresas transnacionales en los espacios territoriales indígenas para la explotación de recursos naturales; el desplome de la ideología socialista y de los principales paradigmas del marxismo que facilitaría la emergencia de la conciencia indígena en el continente latinoamericano y el modelo neoliberal de carácter excluyente frente a las mal llamadas minorías étnicas (Albó, 2003: 327). Letamendia añade otros factores como la toma de conciencia de la situación indígena, la pérdida de credibilidad en los populismos y en los programas de reforma agraria, además de las lógicas impulsoras de la diferenciación en el marco de la globalización (2011: 137). En el caso de Bolivia, un cúmulo de razones se conjugaron para precipitar el surgimiento del movimiento étnico de Bolivia. En palabras de Xavier Albó se debió a:

“la penetración de las transnacionales en la explotación de recursos naturales, especialmente en las tierras bajas (...), en términos ideológicos, el derrumbe de la utopía socialista también ha creado condiciones favorables para la emergencia indígena en América Latina. Y, por supuesto, el modelo neoliberal, por su carácter excluyente” (2003: 327).

Las numerosas investigaciones dedicadas al estudio de la emergencia de los movimientos indígenas a nivel continental -incluso internacional- inciden en la categoría étnica de los nuevos actores sociales emergentes. La identidad adquiere una cobertura primordial en la mayor parte de dichos trabajos.

La emergencia de movimientos indígenas -a raíz principalmente de la celebración del V aniversario de la llegada de los españoles al continente americano - guarda

múltiples analogías entre los diversos países de Latinoamérica, pudiéndose hablar de la “transnacionalización” de dicho movimiento (Briones, 2005). Los nuevos movimientos sociales emergentes en América Latina abogaron por la consecución de una nueva realidad tanto social como política, *“la multiétnicidad y multiculturalidad, la reivindicación de las nacionalidades, los derechos colectivos, los derechos territoriales y la participación política se convirtieron en el centro del debate en distintos países, con especial énfasis en aquellos con una presencia importante de población indígena como Bolivia”* (Bazoberry O., 2008: 47).

En una gran mayoría de países latinoamericanos, la incesante presión de los movimientos indígenas obligó a los gobiernos a adoptar políticas multiculturales con el fin de hacer frente a las exigencias de los nuevos actores sociales. Así lo atestigua la legislación referente a la cuestión indígena. En una buena parte de los estados latinoamericanos tuvieron lugar algunas transformaciones institucionales *“para reconocer la diversidad étnica a partir de los años 80 y el ‘giro multiculturalista’ de las políticas públicas (...) en los años 90”* (Sieder R., 2006: 1).

En Bolivia en particular, a parte de las leyes creadas para dar cabida al conjunto de reivindicaciones del movimiento indígena, se crearon algunas instancias como la *Subsecretaría de Asuntos Étnicos* (SAE), que se convertiría en el *Viceministerio de Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios* (VAIPO), hechos que demuestran la voluntad del Estado boliviano de atender la cuestión indígena (Lema, 1997)²⁰⁰. Era la posibilidad más real con la que hasta entonces habían contado las organizaciones indígenas para poder revertir las estructuras del Estado y abandonar el aislamiento al que los gobiernos les habían confinado. La promulgación de la *ley 1715* correspondiente a la Reforma Agraria, por la que se reconoce la figura legal de las TCOs, supone un claro ejemplo del mencionado “giro multiculturalista”. Las políticas de asimilación implantadas en Bolivia y el peso del neoliberalismo de gobiernos anteriores, perjudicaron en gran medida a las poblaciones indígenas del oriente boliviano. No obstante, estos pueblos supieron hacer frente, logrando consolidarse como entidades culturales con una identidad étnica bien definida y consolidada. Este hecho ha sido fundamental en el proceso de titulación de tierras. El reconocimiento de la identidad indígena mojeña ha permitido hacer efectiva la demanda de territorio. El reconocimiento de tales derechos supondrá que las organizaciones indígenas obtengan el control y manejo -de manera participativa- de sus territorios de acuerdo a sus sistemas culturales, además de fortalecer la gestión territorial indígena.

²⁰⁰ www.siamazonia.org.pe/Archivos/Publicaciones/Amazonia/Libros2/Bolivia/politica.htm: “Las políticas étnicas y las acciones emprendidas”.

Sin embargo, la contextualización de la reciente emergencia de dicho movimiento, no debe invisibilizar las luchas históricas que han desempeñado las comunidades étnicas a lo largo de los años, concretamente desde que comenzaron a sufrir el fenómeno de despojamiento territorial de los espacios que habían sido ocupados por sus culturas desde el periodo previo a la invasión colonial.

En Bolivia se han atestiguado, a partir de fuentes históricas, claros ejemplos de resistencia indígena en el conjunto del territorio nacional desde la llegada de los conquistadores al país. Desde la zona andina hasta la región amazónica, tuvieron lugar numerosas rebeliones y levantamientos contra la ocupación territorial llevada a cabo por diversos actores sociales. No sólo en el oriente boliviano sino que “*al mismo tiempo, a parte de en las tierras bajas hubo otras movilizaciones, había otros movimientos en el resto del país. La guerra del agua en Cochabamba, la del gas en La Paz, los movimientos sin tierra en Tarija. Todos ellos demandan dos temas principales: el tema de los recursos y el tema de participación política*” (entrevista a Miguel Peña: representante asambleísta del pueblo mojeño en la Asamblea Constituyente). Las demandas territoriales constituyeron -aún a día de hoy lo hacen- la punta de lanza del movimiento indígena del oriente boliviano. En torno a éstas tal movimiento pudo consolidarse.

En todo este elenco de resistencias indígenas acontecidas en Bolivia sobresalen por la envergadura y alcance obtenidos, el mencionado *Movimiento Milenarista de la Loma Santa* -fechado en torno a la mitad del siglo XIX y el cual persiste en el momento actual- así como la *Marcha por el Territorio y la Dignidad*²⁰¹ del año 1990 la que

²⁰¹ Ambos guardan algunas similitudes. La que más interesa destacar en relación con la presente investigación sería la afirmación de la identidad indígena mojeña vinculada a las demandas territoriales. Algunas de las características comunes que presentan son: el componente étnico, la autonomía de las bases del movimiento, la analogía en las reivindicaciones expuestas, el surgimiento como respuesta a situaciones insostenibles que atentan contra la supervivencia de las comunidades y la afirmación de la identidad o en su caso, de la etnicidad. Sin embargo, presentan en su seno ciertas divergencias que analiza de manera muy precisa la socióloga Zulema Lehm (1999: 126-130). Entre ellas destaca que a diferencia del movimiento milenarista, el cual estaba conformado por el pueblo mojeño, el movimiento de la *Marcha* estaba constituido por otros grupos étnicos como pudieron ser los *movimas* o los *tximanes* aunque fueran las comunidades mojeñas las que jugaron un papel más relevante. El movimiento de la *Búsqueda de la Loma Santa* actuaba clandestinamente y no estaba abierto a negociaciones mientras que el nuevo movimiento contaba con la posibilidad de negociar los territorios demandados, lo cual suponía, como consecuencia, lograr una amplia cobertura de visibilización, recurriendo para ello a la aparición en los medios de comunicación cuando fue posible. Esto tiene que ver con otra de las diferencias entre ambos movimientos y es que el movimiento milenarista pretendía una “*diferenciación radical de la sociedad nacional*” a diferencia de la *Marcha* indígena que “*buscaba el reconocimiento de derechos ciudadanos y la atención del Estado a las demandas indígenas*” (ibid., 126). Y mencionar por último los componentes religiosos de la ideología mesiánica del movimiento milenarista de la *Loma Santa* que incluía una visión más trascendental que el nuevo movimiento de la *Marcha por el Territorio y la Dignidad*. Por último cabe señalar que -como bien expone Lehm- la *Loma Santa*

permitió visibilizar a los indígenas del oriente boliviano como nuevos sujetos políticos que se abría paso en la esfera gubernamental. Es a partir de ese momento cuando se comenzó a hablar de pueblos indígenas como sujetos de derecho. La Marcha del año 90 articuló al conjunto de pueblos indígenas de las tierras bajas de Bolivia, entre los que el pueblo mojeño llevó la voz cantante. Si bien no sería justo conceder un exclusivo protagonismo a los mojeño-ignacianos, sí se debe resaltar el papel jugado por la Subcentral de San Ignacio, la cual se convertiría en la “*principal organización de defensa de las comunidades indígenas de la zona de Mojos, hasta la Marcha por el Territorio y la Dignidad*” (Ávila H. 2009: 49). Fue en este contexto en el que aparecieron las Subcentrales indígenas que a su vez comenzaron a plantearse la posibilidad de demandar territorio de manera conjunta. Y es tanto éstas como los cabildos indígenas actuaron como pieza clave en la en la gestación del movimiento indígena de esta región.

La *Marcha por el Territorio y la Dignidad* del año 1990 sentó las bases para la organización política de los grupos indígenas de Mojos y propició la aparición de una serie de estudios que enfocaban el movimiento indígena del Beni desde la perspectiva de los nuevos movimientos sociales²⁰² (Molina W., 2004; Lazo, 2007; Bazoberry, 2008; Ávila, 2009). Ésta -liderada por la *Central de los Pueblos Indígenas del Beni* (CPIB)- tuvo una duración de 34 días, los necesarios para llegar desde la ciudad de Trinidad -capital del departamento del Beni- hasta La Paz -capital del poder ejecutivo y judicial de Bolivia- reuniendo a unas 700 personas dispuestas a modificar la cultura política predominante en Bolivia hasta ese momento e implantar nuevos valores democráticos y participativos en la sociedad boliviana (Contreras, 1991; Ávila H., 2009). Constituyó un punto de inflexión en las relaciones entre los pueblos indígenas de la Amazonía boliviana y el Estado así como en las estructuras sociopolíticas indígenas mojeñas (Jabardo, 2011).

sentó las bases para la emergencia de la posterior *Marcha* (*ibíd.*). Una cuestión enormemente significativa es que en la ideología generada por la organización de la *Marcha Indígena*, son palpables numerosos elementos configuradores de la propia ideología de la *Búsqueda de la Loma Santa* que aparecen reformulados en el nuevo movimiento, deviniendo en importantes herramientas discursivas a las que las organizaciones indígenas han recurrido desde entonces a la hora de formular sus demandas. El aspecto que más nos interesa subrayar, es que gracias tanto al movimiento milenarista de la *Búsqueda de la Loma Santa* como a la *Marcha por el Territorio y la Dignidad* se ha visto propiciada la toma de conciencia por parte de los indígenas de la Amazonía boliviana y en concreto del pueblo mojeño, acerca de la importancia que supone la organización comunal capaz de canalizar las demandas territoriales. Esta movilización ha significado una rearticulación e reinterpretación del antiguo éxodo protagonizado por el movimiento milenarista de la *Búsqueda de la Loma Santa*.

²⁰² Estos autores defienden la idea de que el nuevo movimiento indígena lo que pretende no es tanto la representación sino el reconocimiento, el hacerse visibles ante el resto de la sociedad boliviana (Ávila H., 2009: 42; Molina W., 2004: 1). Este movimiento, en palabras de Molina, “*pese a contener diversos actores en su interior y reivindicar la heterogeneidad étnica como un valor, constituye una identidad colectiva manifiesta cuya estrategia y eje de acción gira alrededor de la demanda de reconocimiento legal de territorios*” (*ibíd.*, 2).

Como resultado directo, el gobierno de Paz Zamora promulgó varios Decretos Supremos que reconocían 4 territorios indígenas, lo cual supuso un gran logro aunque no suficiente dado que quedaban miles de hectáreas por titular que se traducían en conflictos aún por resolver (véase **cuadro 4. 10**). Fue la primera vez que dirigentes del gobierno se sentasen a dialogar con los pueblos indígenas del oriente boliviano y tras intensas y largas negociaciones se logró la firma dichos decretos, considerado uno de los éxitos más inmediatos.

Cuadro 4.11. Decretos Supremos iniciales.

| Personería jurídica | Composición étnica | Población (habitantes) | Superficie (hectáreas) | Fecha de resolución | Decreto Supremo |
|---|--|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------|
| Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro-Sécure | Mojeños-trinitarios, Yuracarés, Chimanes | 6.500 | 1.100.000 | 24 de Septiembre 1990 | D. S. 22610 |
| Territorio Indígena Multiétnico | Mojeños-Trinitarios, Mojeño-Ignacianos, Yuracarés, Chimanes, Movimas | 2.500 | 355.000 | 24 de Septiembre 1990 | D. S. 22611 |
| Territorio Indígena Chimán | Chimanes | 4.000 | 392.000 | 24 de Septiembre 1990 | D. S. 22611 |
| Territorio Indígena Sirinó | Sirionós | 500 | 32.000 | 24 de Septiembre 1990 | D. S. 22609 |

Fuente: elaboración propia en base a los datos de Navia, 2003: 16 y Herrera, Cárdenas y Terceros, 2003: 23.

Aún tras los logros conseguidos, algunas voces más críticas a día de hoy se lamentan de no haber alcanzado los verdaderos objetivos de la lucha territorial que les impulsó a movilizarse. Miguel Peña se remonta a la década de los 80 y 90 del siglo pasado para cuestionar la ambigüedad de los decretos que si bien reconocían los mencionados territorios, dejaban a un lado el fondo de la cuestión puesto que el tema de los derechos sobre los recursos naturales quedaba aún sin definir (entrevista).

Las comunidades ignacianas que más tarde se constituirían en la Subcentral del TIMI, no formaron parte de tal proceso de reconocimiento territorial, a pesar de la

ferviente participación de los mojeños en la Marcha del 90. El episodio de la promulgación de tales decretos, marcó un hito en la historia del movimiento indígena de las tierras bajas que alentó la articulación del conjunto de organizaciones de la región para reclamar prioritariamente el reconocimiento de los derechos territoriales indígenas. Como bien expresa Lazo Zubieta, el hecho de lograr el control efectivo de sus territorios, acarrea la gestión y autonomía en el resto de asuntos relativos a las estructuras políticas, económicas, sociales y culturales (2007: 14).

Esta primera marcha, a la que le sucedieron muchas más, como veremos a continuación, favoreció la aparición de un nuevo escenario político donde confluyeron nuevos valores y comportamientos democráticos. Aparecieron igualmente nuevas propuestas de acción y participación política que buscaron remover la anclada concepción modernista del Estado-nación. Ésta demostró haber quedado obsoleta frente a la diversidad étnica del país que describía una realidad multiétnica no ajena al cambio y a los reajustes necesarios para que toda la colectividad social se viera representada. La eclosión del movimiento indígena en el oriente de Bolivia anuncia la crisis de la legitimidad institucional y el cuestionamiento del aparato estatal, el cual durante tanto tiempo excluyó a los pueblos indígenas. A estos el Estado les negó hasta finales del siglo XX la participación política y la representatividad social, incluso les había negado la ciudadanía cuando estos estaban sujetos al tutelaje estatal el cual tenía la responsabilidad de velar por ellos como si de menores de edad se trataran.

Gracias a la *Marcha por el Territorio y la Dignidad*, los grupos étnicos lideraron campaña que ponía en tela de juicio las estructuras sociopolíticas vigentes hasta el momento, cuestionando los espacios de poder y planteando propuestas dirigidas a la reformulación del modelo estatal. Uno de los trabajos que mejor explica lo que supuso el episodio de la Marcha ha sido el de Enrique Herrera, Cleverth Cárdenas y Elva Terceros, quienes indican que ésta:

“marcó una nueva relación entre el Estado y los pueblos indígenas (...) y redimensionó el carácter político del problema indígena. El Estado debía asumir su rol y considerar las demandas de este sector de la sociedad. En la conciencia política del Estado, los planteamientos reivindicatorios indígenas adquirieron una dimensión nacional. A partir de esa fecha el discurso político de las organizaciones sociales y del gobierno cambió, porque se integró el tema indígena” (2003: 23).

Fue entonces a raíz de esa movilización cuando a nivel nacional, desde las esferas del poder político comenzaron a replantearse seriamente los derechos de los pueblos indígenas. Como efecto directo desencadenó la reforma constitucional en el año 94: la primera constitución de Bolivia que reconoció al país como pluricultural y multiétnico,

además de reconocer en el artículo 71 los derechos colectivos de territorio de los pueblos indígenas (entrevista a Hernán Ávila).

La *Marcha por el Territorio y la Dignidad* ha sido la primera de una serie de marchas que se han ido sucediendo a lo largo de los años a medida que las reivindicaciones eran formuladas como respuesta a las acciones del gobierno.

A la marcha del año 90 le siguió en el año 1996 la Segunda Marcha por el *Territorio, el Desarrollo y la Participación Política de los Pueblos Indígenas*, entre Santa Cruz de la Sierra y Samaipata -departamento de Santa Cruz- tras la que la CIDOB, junto con la participación de otras organizaciones de campesinos, mujeres y colonizadores del departamento de Santa Cruz, consiguió la promulgación de la ley 1715 -la Ley INRA- y el reconocimiento de 33 TCOs. El *Instituto Nacional de la Reforma Agraria*, pese a ser la entidad encargada en la regularización de los títulos de propiedad de la tierra, de gestionar la demanda y conceder títulos, no supo estar a la altura de las circunstancias y cometió un sinnúmero de irregularidades. Pese a ello –y sin olvidar la violencia del conflicto- se logró en Mojos el reconocimiento de tres *Tierras Comunitarias de Origen*: el TIM o *Territorio Indígena Multiétnico*, creado en 1990 y habitado por una disparidad de grupos étnicos como son los mojeños, yuracarés, tsimanés o movimas; el TIPNIS o *Territorio Indígena Parque Nacional Isidoro Sécuré*, de similar composición étnica y el TIMI o *Territorio Indígena Mojeño Ignaciano*. Entre dichas TCOs, el TIMI está siendo la más perjudicada siendo la que más mojones rojos²⁰³ presenta en su interior y la que más está sufriendo la lentitud del proceso. A día de hoy solamente les han sido concedidas en torno al 50% de las hectáreas solicitadas. Persisten aún los conflictos entre la población indígena y los *carayanas*. Y lo que es peor, mientras no se resuelve la situación, la explotación irregular, irracional e ilegal continúa mermando los recursos que el pueblo mojeño ignaciano requiere en su vida cotidiana.

En el 2000 se marchó desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra hasta Montero. Esta tercera marcha fue denominada *Marcha por la Tierra, el Territorio y los Recursos Naturales* y en ella la *Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz* (CPESC) y el pueblo indígena mojeño-ignaciano, entre otros, jugaron un papel protagonista, de la mano de organizaciones campesinas y de colonizadores de los departamentos de Santa Cruz, el Beni y Tarija. Los logros más relevantes esta vez estuvieron relacionados con la inclusión de la *Función Económico Social* (FES) –la cual fuerza a cumplir determinados niveles de productividad en las propiedades

²⁰³ Los mojones rojos son los hitos que indican las delimitaciones de las lindes entre grupos indígenas y ganaderos que aún no se han resuelto. El TIMI es la TCO que mayor número de mojones rojos contabiliza en su interior.

agropecuarias tierras agropecuarias- en la ley INRA, además de una serie de modificaciones a dicha legislación, sobre las que me detendré en los dos próximos capítulos.

La Marcha por la Asamblea Constituyente, la Soberanía y los Recursos Naturales, se desarrolló en el año 2002 entre las ciudades de Santa Cruz de la Sierra y La Paz. En esta ocasión los participantes fueron organizaciones indígenas y campesinas -CPESC, CPEMB, MST- incorporadas en el Bloque Oriente, además de organizaciones campesinas, de mujeres y colonizadores. Esta 4ª marcha supuso una de las de mayor envergadura por el número de organizaciones sociales que aglutinó (más de 50). Aunque su importancia radica sobre todo en la escisión al interior del movimiento indígena del oriente cuando los dirigentes de CIDOB acordaron unilateralmente realizar una marcha paralela o contramarcha por la *Asamblea Nacional Constituyente*. Ambas posturas se posicionaron a favor de incluir la Asamblea Constituyente en la *Constitución Política del Estado*. Hay quienes acusaron a los dirigentes de CIBOD de traidores puesto que:

“se hicieron asesorar por el gobierno, hicieron una huelga de hambre y el gobierno les aconsejó hacer una marcha paralela a la nuestra. Después de estar sin comer 30 días uno se da cuenta de no poder marchar. Nosotros salimos de Santa Cruz pero ellos llegan primero y negocian en la Paz, algunos fueron llevados en aviones para negociar con el gobierno” (entrevista a Miguel Peña).

En el año 2004 tuvo lugar la *Marcha por la Inclusión Social y Política*, que fue desde San Javier a Puerto Pailas para exigir al gobierno la finalización de los procesos de saneamiento y de la titulación de tierras, la expulsión de los *terceros* que habían ocupado propiedades de manera ilegal, así como la redistribución de tierras fiscales a comunidades indígenas y campesinas (PASOC-CIPCA, 2007: 106-111).

La 6ª *Marcha por el Territorio y la Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria* del 2007, constituyó la primera del nuevo gobierno del MAS. Marchó nuevamente desde Santa Cruz pero esta vez hacia Sucre, sede de la Asamblea Constituyente. Se logró finalmente que se aplicase la *Ley de Reconversión Comunitaria de la Reforma Agraria* (véase **punto 6. 6**).

En el verano de 2010 se produjo una nueva marcha, esta vez denominada: por la *Autonomía y el Territorio*, la cual partió desde Trinidad, capital del Beni. Los motivos que la impulsaron fueron la *Ley Marco de Autonomía y Descentralización*, siendo liderada una vez más por CIDOB. Una característica que la diferencia del resto es que fue suspendida puesto que se llegó a un acuerdo –no para todos beneficioso- al lograr el

reconocimiento de las autonomías indígenas e incorporarlas a la *Ley Marco de Autonomía y Descentralización*.

La última de esta serie de movilizaciones tuvo lugar el pasado 2011 cuando el sector indígena decidió emprender una nueva marcha en protesta por la construcción de la carretera que atraviesa el TIPNIS. Se saldó con varios muertos y heridos, además de niños desaparecidos, debido a los enfrentamientos con la policía quien actuó cumpliendo órdenes del gobierno. Y en el verano de 2012 se volvió a repetir al no haberse encontrado una solución a dicha controversia.

Mencioné varios elementos impulsores de los movimientos indígenas en América Latina. En el caso particular del Beni, el factor que determinó su surgimiento fue, sin lugar a dudas, la explotación feroz que tuvo lugar en los bosques de Mojos por parte tanto de empresas madereras como por estancias ganaderas, tras la llegada masiva de colonos y su progresivo asentamiento en la región de las tierras bajas, principalmente desde mediados del siglo XIX. Esto supuso el detonante final para la movilización de las poblaciones indígenas mojeñas y la culminación del movimiento en cuanto a acciones y estrategias reales se refiere.

La práctica desaparición, en la década de los 80 y 90 del siglo XX, de la mara (*Swietenia macrophylla*) o caoba en los bosques mojeños, constituyó uno de los elementos clave que despertaría la toma de conciencia por parte de la población mojeña del saqueo al que estaban siendo sometidos los bosques de la región. Habría que añadir que el alto nivel de deforestación alcanzado en ese periodo fue posible en gran parte por la Ley Forestal de 1974 -modificada en 1996: fecha enormemente significativa al coincidir, no por casualidad, con la entrada en vigor de la nueva Ley de la Reforma Agraria-. Pero fue principalmente en la década de los 70 cuando comenzó el proceso de ocupación de territorios por parte de los concesionarios madereros que provocaron la deforestación. A este fenómeno se unió el hecho de que superficies cada vez más grandes de territorio fueran ocupadas por haciendas ganaderas. Numerosas comunidades indígenas perdieron el derecho sobre los territorios en los que habitaban.

En el caso particular de Mojos sucedió lo siguiente. Durante el gobierno de Paz Zamora se firmaron títulos pro-indiviso²⁰⁴, situación de la que se aprovecharon los

²⁰⁴ Los títulos proindiviso fueron incluidos por primera vez en la Ley de la Reforma Agraria de 1953, aunque Barragán señala que se pueden remontar al periodo colonial, y pese a que constituyeran una “figura de titulación colectiva” esto no tenía porqué implicar la inexistencia de cualquier propiedad familiar o individual al interior de la comunidad (2007: 36). Mendieta se suma a afirmar que los títulos pro-indiviso fueron una creación colonial surgida tras la Ley de Exvinculación que enajenó la propiedad indígena, lo cual provocó numerosos conflictos que las autoridades intentaron solventar mediante la entrega de dichos títulos referidos a un tipo de propiedad colectiva que permitía a las comunidades indígenas no dividir la propiedad (2008: 61-62). Hacían referencia a un tipo concreto de propiedad de la tierra: la propiedad de la comunidad indígena que se basaba fundamentalmente en un principio nuclear y es que dichas

terceros -pese a actuar sin validez jurídica- comprando de manera individual territorios a las familias de las comunidades mojeño-ignacianas. En otros casos, los títulos de propiedad ni siquiera existían o no eran válidos. Con respecto a esta idea tiene mucho que ver el hecho de que las comunidades indígenas se rigieran por el derecho consuetudinario, con unos principios diferentes a aquellos que el derecho nacional estipulaba. En base a su concepción, las poblaciones de Mojos no requerían de ningún tipo de documento que legitimase su presencia en dichos territorios dado que ésta estaba legitimada por la ocupación histórica del mismo. Los *terceros* vieron en ello una oportunidad única para obtener más tierras, argumentando la falta de títulos de propiedad por parte de las comunidades mojeñas, como así justificaron ante el Estado la adjudicación de las mismas.

Las comunidades indígenas configuraron entonces las reivindicaciones territoriales a partir de varios elementos. Me remito al estudio de Carlos Navia Ribera (2003) para señalar los más significativos: la “intensidad” del proceso –por la gran cantidad de encuentros que tuvieron lugar a nivel de las organizaciones indígenas entre las diversas instancias, movilizaciones, eventos, entrevistas, etcétera- lo cual facilitó la emergencia del movimiento indígena del oriente boliviano como nuevo actor social; la “participación”, y en especial la participación de las mujeres; la “gradualidad” con la que desplegaron sus demandas desde el municipio de San Ignacio de Mojos hacia instancias mayores de gobierno; la “solidaridad social y política” del movimiento que con sus demandas fue adquiriendo un carácter extensible desde el departamento del Beni hasta el conjunto de la sociedad nacional y por último mencionar la perpetración de “propuestas claras y específicas”, así como viables y flexibles (*ibíd.*, 25-29), lo cual demuestra la inteligencia de la organización con vistas a hacer efectivas las demandas dado que en el caso que éstas se hubiesen planteado de forma excesiva lo más probable es que no hubieran sido aceptadas por la instancia correspondiente. Una de las premisas que más se tuvo en cuenta en el momento de plantear la demanda -en base a una construcción colectiva²⁰⁵- fue la viabilidad. Cada comunidad aumentaba los límites de las zonas que consideraban -previo a la ocupación por parte de *terceros*- de acuerdo a sus conocimientos locales de uso de la tierra pero restringiéndose siempre lo más posible para alcanzar dicha viabilidad. En primer lugar se tenía en cuenta el espacio geográfico comunal y se marcaban los puntos de georreferenciación. Esta demanda

“comunidades indígenas eran propietarias privadas de las tierras que poseían en conjunto” (Fundación TIERRA 2005: 39). Es decir, el título de propiedad de la tierra se concede a nivel comunitario, lo cual impide a la familia vender determinada parcela de manera unilateral puesto que todo el territorio pertenece al conjunto de la comunidad.

²⁰⁵ Los comunarios elaboraron la propuesta tras los encuentros de corregidores, talleres, visitas, etcétera, todo ello encabezado por la Subcentral del TIMI y contando con el apoyo de CIPCA o CPTI, entre otras organizaciones.

colectiva validada por el encuentro de corregidores, dio lugar a la solicitud de las algo más de 98.000 hectáreas, las cuales podrían haber supuesto una superficie más amplia, con lo que se correría el riesgo de ser rechazada, razón por la que se optó por ajustarse a tal dimensión geográfica (entrevista a Ismael Guzmán). El caso de la TCO TIMI es muy revelador del porqué de la delimitación geográfica de dicho territorio indígena y del porqué de la demanda de 98.398 hectáreas y no más. Y es que esta TCO está prácticamente rodeada por franjas naturales y por otras tierras comunitarias –caso del TIM- que impiden que se pueda extender más allá del área demandada.

A tenor de todo esto no queda sino concluir este punto reconociendo la trascendencia de la aparición de nuevas dinámicas de emergencia política y social en el contexto del movimiento indígena del oriente boliviano. Se produjo una reconfiguración de las estructuras organizativas desde la perspectiva políticosocial; un surgimiento de nuevos mecanismos de participación en la cultura política; el acceso de los indígenas a la esfera política; la adopción de determinados roles de comportamiento que hasta entonces habían sido ajenos a las sociedades indígenas de la Amazonía boliviana y la imbricación en un nuevo tejido político que les permitió ser partícipes de las estrategias del Estado y de los espacio de poder. De ahí que Herrera, Cárdenas y Terceros señalen que en un contexto como el expuesto *“los sectores indígenas fueron construyendo y redefiniendo sus identidades étnicas a través de una serie de prácticas sociales que nunca antes habían contemplado”* (2003: 11).

El empoderamiento político en el que se ha visto inmerso el pueblo ignaciano le ha concedido la oportunidad de formar parte como nuevo sujeto político y actor social de la realidad por la que atraviesa la región. En estos momentos, diversos cambios en la arena política están por ocurrir. Es el momento de las autonomías, las cuales les confieren a los pueblos indígenas mayor capacidad de gestión, no sólo a nivel territorial. Es justo entonces reconocer la iniciativa tan novedosa del proceso autonómico que incluye la autodeterminación, elemento que entraña una fuerte polémica más allá de la innovación que supone. Los nuevos comportamientos sociales y los nuevos modos de relacionarse que despliegan las poblaciones indígenas para con el Estado, poco tienen que ver con la tradicional exclusión a la que se vieron sometidos en los periodos de los gobiernos militares y más tarde neoliberales.

Pese al lamento manifestado por algunos en referencia al olvido o marginación de las poblaciones *originarias* de las tierras bajas frente a los grupos étnicos del occidente boliviano, un nuevo horizonte se perfila para estos pueblos con la entrada en vigor de la *Ley Marco de Autonomías*. Todo esto ha significado un gran avance para el conjunto de las poblaciones indígenas del país, independientemente del grupo étnico. Es ésta una oportunidad única que les ha sido brindada para romper con las estructuras que

históricamente les han oprimido. Sólo de esta manera las comunidades indígenas podrán adquirir competencias para la gestión de su propio desarrollo económico, político, social y cultural en base a su propia cosmología e identidad. Será conveniente prestar atención a los nuevos procesos de aprendizaje y capacitación política que están en estos momentos teniendo lugar en el seno de los pueblos indígenas, y de manera particular para este trabajo: en el pueblo mojeño-ignaciano.

4. 5. 3. 1. La organización sociopolítica: nuevas formas de organización indígena en Mojos.

Las organizaciones indígenas de Mojos presentan una estructura jerárquica y piramidal que abarca desde aquellas de carácter nacional y regional a aquellas locales e incluso comunales.

Las estructuras sociales establecidas por los jesuitas en el siglo XVII han trascendido hasta nuestros días. El ejemplo más claro que encontramos es el Cabildo Indigenal, el cual se mantiene en su forma original constituyendo la organización *tradicional* mojeña. Éste está compuesto en primer lugar por el corregidor, quien es el máximo responsable y el encargado de múltiples funciones: representar al conjunto de la comunidad, intervenir en la resolución de conflictos, organizar las fiestas, realizar funciones para la obtención de recursos, convocar las reuniones en las que se discuten y tratan cuestiones que atañen a los comunarios y comunarias, etcétera. Por debajo del corregidor se encuentran otros cargos como el Capitán Grande, el Primer y Segundo Cacique, el Alcalde, el Policía, Fiscales, el Secretario de Actas y un número ilimitado de comisarios. En el caso del Cabildo Indigenal de San Ignacio de Mojos suele haber entorno a 12 ó 15 comisarios²⁰⁶. Este Cabildo juega un papel de intermediario entre las comunidades indígenas de la región y el resto de la sociedad mojeña. Atiende a su vez todas las cuestiones referentes a la organización de la vida cotidiana de los indígenas, a la organización de las fiestas religiosas, etcétera. CEJIS ha expresado muy bien lo que se entiende en las comunidades mojeñas por Cabildo Indigenal:

²⁰⁶ El corregidor sustenta la máxima autoridad del cabildo y abarca las funciones más importantes que conciernen al buen funcionamiento de la comunidad; el Capitán Grande asesora al corregidor o en caso de que aquel esté ausente, le suple, al igual que a los caciques; el Primer Cacique es el suplente del corregidor de quien recibe órdenes directas, además de ser el intermediario entre éste y los comisarios; el Segundo Cacique reemplaza al anterior en caso de ausencia de aquel; el Alcalde vigila los trabajos comunales como pueden ser la restauración del Cabildo, de la iglesia, escuelas, etcétera; el Intendente actúa como juez en casos de surgimiento de conflictos entre comunarios ante los que propone sentencias o castigos si se considera que atenta contra el orden social; la Policía aplica los castigos cuando así se requiere; los Fiscales trabajan para que se mantenga el orden tanto en asambleas comunales como en actos religiosos y los Comisarios llaman a reuniones y visitan la comunidades si en ellas las hubiera (Lazo, 2007: 63-64).

“un canal de reproducción de costumbres y tradicionales dentro de la comunidad, organiza la fiesta, planifica los trabajos, en muchas comunidades alienta el uso de la lengua nativa y es un conducto de tipo político, porque plantea demandas sociales de la comunidad ante autoridades del municipio y autoridades gubernamentales, realiza gestiones de interés comunal, defiende los intereses y los recursos de la comunidad, otro de sus roles es el de normar la vida interna dentro de las comunidades” (2003: 230).

Fotografía 4. 17. Imágenes Cabildo Indigenal: Villa Esperanza (izquierda) y San Ignacio (derecha).



Fuente: Virginia Jabardo Pereda

El Cabildo Indigenal constituye el primer escalón del nivel local de la organización social de los mojeños:

“el Cabildo entre los mojeños, más que para otros pueblos indígenas, representa una auténtica autoridad étnica especialmente en lo relativo a la vida diaria de las comunidades, las cuestiones de salud y educación y muy particularmente a la realización de las festividades religiosas que el Cabildo organiza distribuyendo tareas y responsabilidades anuales a sus miembros” (CEJIS, 2003: 211).

Aún habiéndose replicado las antiguas estructuras organizativas propias del periodo misional, los indígenas mojeños se han visto sumidos en un proceso readaptativo en cuanto se refiere a las *tradicionales* formas de organización, principalmente las formas políticas. A esto se refiere Ismael Guzmán al exponer las transformaciones que el cabildo ha sufrido con el correr de los años y señala para ello que la actual estructura organizativa mojeña deriva de la articulación sincrética a lo largo del tiempo de las organizaciones originarias, las organizaciones misionales y las organizaciones sindicales de las tierras altas bolivianas, lo cual ha generado una “estructura intersindical” característica en las centrales y subcentrales (2004: 21-22). Esta adaptación se puede llegar a entender si tomamos en consideración que las nuevas

realidades sociales y la coyuntura política actual exigen un cambio de rumbo en las demandas de las organizaciones indígenas.

Otros niveles configuran esta red de relaciones, como el comunal, el regional e incluso el departamental. En cada una de las comunidades existe el cabildo en el que se reúnen los comunarios para dirimir cuestiones relativas al buen funcionamiento de la misma. En el caso de las comunidades ignacianas que conforman la TCO TIMI, la representación trasciende a una entidad superior: la *Subcentral del Territorio Indígena Mojeño-Ignaciano* -principal organización que vela por la defensa de los derechos de las comunidades ignacianas-, que representa a las comunidades ignacianas localizadas “a ambos lados del camino entre San Ignacio de Mojos y San Borja en los límites entre el Cantón José A. Palacios y las secciones Primeras de las Provincias Moxos y Yacuma” (Fabricano *et al.*, 2009: 137). En el año 1986 se creó la Subcentral Indígena de San Ignacio, con Antonio Coseruna como el primer dirigente (Molina W., 2004: 5). En palabras del sociólogo Wilder Molina estas estructuras “aglutinan a determinado número de comunidades (18 en la Subcentral del TIMI), adscritas ya sea por estar ocupando una unidad geográfica o por afinidad étnica” (*ibíd.*, 6; Ávila H., 2009: 50). En el caso de la *Subcentral del Territorio Indígena Mojeño-Ignaciano*, ciertas comunidades se encuentran fuera del área geográfica definida por la propia TCO: Florida, Monte Grande km5, Santa Clara, Chanekere, Ichasi Awásare o Nueva Brisa, están fuera de los límites del territorio ignaciano. Sin embargo, y retomando la idea apuntada por Molina, éstas se autoidentificaron como ignacianas por la tradición que comparten con aquellas que por el contrario sí que están insertas en dicho territorio. Incluso alguna de ellas, como sucede con la comunidad de Florida, se localizan más próximas a otra TCO, en este caso al *Territorio Indígena Multiétnico*. Pese a la proximidad geográfica, la procedencia étnica prima y refuerza los lazos de unión con aquellas comunidades con las que poseen más elementos en común, estrechando ese vínculo que les une y les hace partícipes de las mismas lógicas de comportamiento y de las mismas estrategias de acción. Prevalece por encima de todo el sentimiento de pertenencia étnica.

La estructura de la Subcentral presenta a su vez una jerarquía bien establecida. En la cúspide de la pirámide se encuentra el Presidente, un escalón por debajo el Vicepresidente, al que le siguen los secretarios de Tierras y Territorio, de Recursos Naturales, de Infraestructura, de Producción, de Salud o de Educación, coordinada este último con el *Consejo Educativo del Pueblo Originario Indígena Mojeño* (CEPOIM). La Subcentral juega un papel de intermediario entre las organizaciones comunales y el Estado. Asimismo trabaja conjuntamente con los cabildos de las comunidades a la hora de resolver conflictos. Los cargos son votados por los corregidores de cada comunidad

cada dos años: se elige al Presidente, Vicepresidente y al Secretario de Tierras y Territorio, pudiendo ser todos ellos reelegidos. Si se decide relevar a uno de ellos de su cargo, son los 3 los que deben cambiar, es decir, funcionan como una unidad (entrevista a Pedro Añez, Secretario de Tierras y Territorio). A su vez, los corregidores son votados por los comunarios. Aunque esto no siempre fue así. Al contrario, es un fenómeno bien reciente puesto que no sería hasta principios de la década de los 90 cuando los corregidores dejaron de ser designados por el subprefecto, lo cual explica las influencias ejercidas por parte de los partidos políticos gobernantes y otras presiones externas sobre aquellos (Bazoberry, 2008: 100-101).

A nivel regional destaca la *Central Indígena del Oriente Boliviano* (CIDOB), representando a las organizaciones indígenas de este espacio geográfico. Ésta fue creada en el año 1982 en el departamento de Santa Cruz, tras la celebración del primer encuentro indígena boliviano, y sería determinante para aquellos pueblos indígenas que carecían de estructuras organizativas formales (*ibíd.*, 28). En un primer momento agrupó a los pueblos chiquitano de Lomerío, guaraní de Izozog, guarayo y ayoreo y posteriormente -en el año 1989- se incorporaron los pueblos indígenas del Beni y Pando habiendo reunido en la actualidad a 34 pueblos del Chaco, el Oriente y la Amazonía boliviana (Herrera, Cárdenas y Terceros, 2003: 22; Birk, 2000: 21)

Hay quienes han criticado los derroteros que tomó esta organización que acabó participando e incluso estableciendo alianzas con los sectores tradicionales –ganaderos y madereros- de los partidos de los gobiernos neoliberales, desde donde se produjo la cooptación de los líderes indígenas²⁰⁷, quienes acabaron al servicio de dichos partidos y quienes llegaron incluso a instrumentalizar a la misma organización (entrevista a Hernán Ávila), lo cual fue bastante cuestionado. Por dicha razón las Subcentrales tanto del TIMI como del TIM optaron por desafiliarse de la CPIB. El motivo alegado fue que ésta última no tuvo en cuenta las demandas de los pueblos de Mojos (entrevista a Rosario Cunavi).

A nivel supranacional fue constituida una nueva instancia transamazónica en 1984: la *Coordinadora Indígena de la Cuenca Amazónica* (COICA) bajo propuesta de las principales organizaciones indígenas de la región amazónica de Ecuador (CONFENIAE), Perú (AIDASEP) y Bolivia (CIDOB) (Albó, 2002: 205-206).

²⁰⁷ En el caso de la Subcentral del TIMI, Erasmo Yujo, quien ha sido su presidente por varios años, ha sido cuestionado incluso por la dirigencia por acciones no del todo claras en asuntos de negociaciones territoriales.

Con algunos de estos líderes se llegó a establecer una especie de alianza por la explotación de los recursos naturales –ejemplo del bosque de Chimanes, uno de los más ricos en mara-. Esto hizo que las comunidades indígenas que no se beneficiaron de esos acuerdos comenzaron a organizarse de manera separada, lo cual alentó el surgimiento de un movimiento muy fuerte.

Sintetizando la jerarquía que define la organización sociopolítica del pueblo mojeño: las comunidades se organizan en cabildos los que a su vez se afilian a la subcentral del TIMI, que por su parte pertenece a la CPIB y ésta a CIDOB.

De acuerdo con Xavier Albó, es interesante reflexionar acerca de la escasa coordinación en las acciones conjuntas de los pueblos indígenas de tierras bajas y tierras altas de Bolivia, o lo que es lo mismo, entre la región andina y la región amazónica (2002). Curiosamente esto sucede al mismo tiempo que se estrechan los vínculos internacionales como medio para lograr resultados ante el Estado, lo cual es considerado más conveniente al hecho de actuar de manera individual. Y es que sería sólo a partir de mediados de los noventa cuando las direcciones indígenas andinas y amazónicas bolivianas como la *Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia* (CSUTCB) y CIDOB decidieron trabajar de manera conjunta y unificar las demandas hacia el Estado. En relación a esto, Óscar Bazoberry expone la relevancia del encuentro de Corqueamaya en el que se “*definieron las líneas maestras de la reivindicación de los 500 años que se pueden sintetizar en identidad y autodeterminación e identificándose la necesidad de la unidad del movimiento campesino indígena y su irrupción en la política y el Estado*” (2008: 28). Esto ocurriría previamente a la *Marcha Indígena por los Territorios, el Desarrollo y los Derechos Políticos*. En esos momentos el vicepresidente de la República, Víctor Hugo Cárdenas, anunció la creación de la *Subsecretaría de Asuntos Étnicos* (SAE), lo cual actuó como una inyección de esperanza para los pueblos indígenas del país, que comenzaron a formalizar las demandas territoriales (Brito, 1998: 132). La lentitud del proceso y las consiguientes acciones depredadoras de recursos naturales llevadas a cabo por empresarios madereros, motosierristas y ganaderos, alentó la puesta en marcha por parte de pueblos indígenas y campesinos de una agenda común de interpelación frente al Estado.

En base al discurso de algunos líderes indígenas se percibe aún la presencia de ciertas reticencias y desacuerdos -hasta el momento han sido insalvables- entre las organizaciones indígenas de ambas regiones. El siguiente fragmento relata algunos episodios de la Marcha del 2002 y nos dan una idea acerca de las diferencias existentes entre los indígenas del oriente y el occidente boliviano:

“Al principio no hubo consenso entre los indígenas de tierras altas y bajas. Nosotros demandamos territorios grandes y no pueden entender nuestro mundo igual que nos pasa a nosotros con ellos. Vivimos un mundo bien diferente, ellos viven otra realidad. Recuerdo en la marcha de 2002 nosotros marchamos con la bandera beniana, la boliviana; ellos marchaban con la wiphala (nombre de la bandera usada por algunos grupos étnicos andinos de Bolivia, principalmente por los aymaras y que a día de hoy es

uno de los símbolos étnicos del país al haber sido reconocida además en la constitución) y nos dijeron un día: aclárennos nomás si ustedes son indígenas o bolivianos. Hace un tiempo conversando con Evo (Morales) comentábamos que ellos (los indígenas de tierras altas) quieren reconstruir el Tawantinsuyu (estado precolombino surgido en la región andina que quiere ser recuperado por los indígenas del occidente boliviano) pero en Mojos no queremos reconstruirlo, ¿ponemos a Mojos: “mojontinsuyu”?, le decía a Evo. Estas diferencias se han manifestado en la Asamblea Constituyente pero sin renunciar a la lucha por el espacio de poder y de los recursos naturales. Se han superado algunas cosas” (entrevista Miguel Peña- primer asambleísta mojeño).

Algunas organizaciones indígenas de tierras bajas se sienten de alguna manera excluidas del paquete de medidas proindigenistas desarrolladas por el actual gobierno. Algunos testimonios dan fe de ello:

“En realidad pareciera ser que los pueblos de las tierras bajas no han tenido mucha inserción de lo que es la política de Evo (Morales), porque Evo nació del seno del altiplano, de los valles, y bueno, él habla de los pueblos indígenas pero habla de un sector, dos sectores que son los quechuas y aymaras. Pero en el departamento del Beni somos ocho pueblos étnicos, y de esos no se habla nada. Entonces eso también estamos pidiendo: que el gobierno nos respete, nos respete y reconozca el país como un país multiétnico. Un país con diversos pueblos indígenas y diversas lenguas maternas. Y muy poco, muy poco nos toma en cuenta” (Víctor Eamara, en Madueño, 2009: 409).

Este sentimiento es común entre los dirigentes de las organizaciones indígenas de Mojos. Ángela Noza –dirigente de la CPEM-B- se refiere a ello en las siguientes palabras:

“Nosotros (los grupos indígenas de tierras bajas) siempre hemos sido olvidados, siempre hemos sido postergados aunque el gobierno con algunas cosas ha querido decir que nos han atendido pero no es verdad porque nosotros siempre hemos planteado la defensa y garantía de nuestros territorios y no han respetado nuestros derechos. Por ejemplo en el caso de los megaproyectos (se refiere a la carretera que travesará el TIPNIS) aunque el gobierno decía que los derechos de los pueblos indígenas se respetan y la ley 169 de la OIT ahí dice bien claro que cualquier megaproyecto que afecte a los pueblos indígenas tienen ellos derecho a paralizar y a ser indemnizados, tampoco el gobierno nos ha consultado con la apertura de la carretera. Con este gobierno no ha cambiado mucho la situación de los pueblos indígenas” (entrevista).

A nivel supracomunal y a escala regional surgió el 7 de marzo de 1987 una nueva organización: la *Central de Cabildos Indígenales Mojeños* (CCIM), creada a la luz del *Primer Encuentro de Autoridades Mojeñas*. La CCIM fue conformada por los cabildos de cada una de las comunidades del conjunto de pueblos indígenas de Mojos. El surgimiento de esta nueva organización fue trascendental puesto que facilitó el surgimiento posterior de otras organizaciones a nivel local, como las subcentrales indígenas.

Algunos autores reconocen cierto dualismo debido al carácter local y urbano de esta nueva estructura, propiciado por el origen –urbano– de los promotores de aquel encuentro (Molina W., 2004). La CCIM contó desde un primer momento con el apoyo de organizaciones como CIDDEBENI o CIPCA, lo cual determinó en buena medida, el tipo de lenguaje que reproduce el movimiento indígena mojeño, en donde están presentes ciertas herramientas discursivas características de las ONGs que operan en la región. Uno de los logros a destacar de la CCIM es que propició la creación de la Subcentral de San Ignacio la cual “*asumió inmediatamente la emergencia de las comunidades y terminó como su interlocutora*” (Ávila H., 2009: 46).

Y continuando con la misma secuencia histórica hay que destacar la importancia dos años más tarde de la celebración del *Primer Congreso de Cabildos Indígenales y Pueblos Nativos del Beni* -los días 10 y 11 de noviembre de 1989- tras el que se decidió crear la *Central de Pueblos Indígenas del Beni* (CPIB²⁰⁸), constituyendo de esta manera la primera organización y máxima entidad representativa de carácter étnico a nivel departamental que representaba a 18 poblaciones indígenas benianas, alcanzando el nivel departamental.

Con la creación de la CPIB, el pueblo mojeño pasó a convertirse en la vanguardia del movimiento indígena de la Amazonía boliviana, el cual pivota sobre dos temáticas concretas: “*la búsqueda del reconocimiento de sus derechos sobre la tierra, territorio y los recursos naturales y la búsqueda de su reconocimiento en la plenitud de su ciudadanía*” (Ávila H., 2009: 48). A partir de este momento las organizaciones indígenas del departamento del Beni pasaron a articularse en una instancia organizativa superior. Tanto la CCIM como la CPIB, han venido a ser denominadas como las “*nuevas organizaciones indígenas*” al condensar en su seno la antigua estructura misional, la sindical, así como la herencia del periodo precolonial (*ibíd.*, 2009).

Pero pasados algunos años comenzaron las discrepancias entre las subcentrales mojeñas y la dirigencia de la CPIB. Como consecuencia de ello en el año 2000 nacería la *Coordinadora de Pueblo Indígenas Mojeños* (COPIM), que aglutinaba a las

²⁰⁸ Dicha instancia funcionó, al igual que la CCIM, hasta 1997.

subcentrales de Mojos, esto es a las Subcentrales del TIMI, TIM, TIPNIS, San Lorenzo, San Francisco y Desengaño (entrevista a Rosario Cunavi).

Pese a que desde el año 2001 la Subcentral de San Ignacio y la Subcentral del TIM no tenían buenas relaciones, en 2002 comenzaron a trabajar de manera conjunta hasta consolidar una organización fuerte que se caracterizó por adoptar una postura política contraria a la que tenían sus organizaciones matrices: la CPIB y CIDOB, vinculadas ambas a los gobiernos neoliberales (entrevista a Hernán Ávila). Esta nueva dirigencia mojeña es quien conformó la COPIM, presentada en julio de 2002 con motivo de la celebración del congreso de Santa Ana de Yacuma donde se produjo de manera definitiva la ruptura frente a la CPIB, constituyendo una nueva organización regional a la que se denominó *Central de Pueblos étnicos Mojeños del Beni* (CPEM-B²⁰⁹) –creada gracias en parte a los recursos dotados por parte de la Pastoral Indígena- en septiembre del mismo año, con las Subcentrales del TIMI y del TIM como las organizaciones más fuertes que se mantendrán por un periodo al margen del movimiento indígena.

A pesar de haber sido creada en San Ignacio, su sede se ubicó en la ciudad de Trinidad (entrevista a Rosario Cunavi). Esta nueva estructura organizativa congrega a las 9 subcentrales indígenas. La CPEM-B selló la división frente a la CPIB –principal organización indígena existente hasta entonces- debido a la presencia de divergencias en las estrategias de acción que llevaron a esta última a establecer alianzas con otros grupos sociales que habían sido considerados enemigos de los pueblos indígenas del Beni, como son el sector empresarial maderero o el sector ganadero, además de ser acusados de establecer contactos comerciales con ellos, beneficiándose sólo algunos dirigentes en detrimento del resto de comunarios (Ávila H., 2009). Desde ese momento trabajaron por separado, confirmando la quiebra al interior de la organización indígena beniana. La CPEM-B declaró su objetivo de rescatar la esencia del movimiento indígena, oponiéndose abiertamente a CIDOB, a quien consideraba una traidora (*ibíd.*, 86). Uno de los logros más destacados de la nueva organización fue la influencia política que adquirió tras articular los movimientos sociales campesinos e indígenas del Beni (Bazoberry, 2008: 103).

Pero sin lugar a duda, en el caso que nos ocupa, el primer resultado exitoso logrado por la CPEM-B tuvo lugar en el contexto de las elecciones municipales del año

²⁰⁹ La CPEM-B llegó a participar en el Pacto de Unidad, documento elaborado en 2006 en el que se proponen los pasos a seguir para “la creación de un Estado comunitario y plurinacional” y el cual ha sido definido como “la más acabada expresión del proyecto político indigenista” (Polet, 2010: 62). Pese a que en la década de los noventa ya se produjeron algunos indicios en el oriente boliviano por los que los indígenas clamaban por la constitución de la Asamblea Constituyente, no sería sino hasta 2006 que ésta se constituyó para alcanzar un nuevo pacto social con la inclusión de las poblaciones indígenas en la nueva estructura estatal.

2002 cuando Sixto Vejarano Congo -ignaciano y dirigente de la CPEM-B- se convirtió en el primer alcalde indígena, mojeño (si bien por medio de acuerdos con el sector *carayana*), del municipio de San Ignacio de Mojos, lo cual significó un hecho de enorme trascendencia que marcó la vida política de dicho municipio. La victoria de la CPEM-B en las elecciones municipales, demuestra el peso que había ido adquiriendo en términos políticos. A la vez, tanto la CPIB como CIDOB modificaron su estrategia. Esto hizo que se llegase a una reconciliación con la CPEM-B que si bien rompió el clima de enfriamiento que las había caracterizado, se mantendría separada de la CPIB.

Pero no sólo el año 2002 fue convulso para San Ignacio por dicho episodio político. Tuvieron lugar además una serie de disturbios, conflictos sociales abiertos e incluso el homicidio del que para entonces era el alcalde. En este clima de tensión, las subcentrales, junto con el Gran Cabildo Indigenal, las juntas vecinales, clubes de madres, asociación de carretoneros, moto-taxistas, comerciantes, sindicato de ladrilleros y otros gremios, decidieron unirse y formar la Coordinadora Interinstitucional de Defensa de los Derechos Humanos de San Ignacio de Mojos, conformada por la Parroquia de San Ignacio, CIPCA, PRODEMO, las hermanas ursulinas, las Subcentrales indígenas, la Central Obrera Regional y otras organizaciones e instituciones (Ávila H., 2009: 78-79). El objetivo principal era defender los derechos humanos en Mojos por lo que se decidió denunciar ante el Parlamento nacional una serie de abusos y violaciones cometidas precisamente contra los derechos humanos por parte de las autoridades municipales y con el consentimiento de algunos funcionarios del INRA y de ganaderos (*ibíd.*).

Otro acontecimiento que propició la inestabilidad en la región fue el mantenimiento de los prefectos a pesar del cambio de presidencia (Gonzalo Sánchez de Lozada renunció, convirtiéndose Carlos D., Mesa Gisbert en el nuevo presidente de la República)²¹⁰. Esto desencadenó el bloqueo de la carretera que va de Trinidad a La Paz en la comunidad ignaciana de Bermeo (*ibíd.*, 87-88). Ante este cúmulo de acusaciones, desde el sector ganadero se dio un ultimátum a la asociación CIPCA, considerándola responsable de agitar a los vecinos indígenas, por lo que se le concedió 3 días para abandonar el municipio de San Ignacio. Inmersos en este clima conflictivo Guido Suárez, un ganadero, acompañado de sus sicarios, amenazó verbal y físicamente a Arturo Casanovas, funcionario de CIPCA y a Enrique Jordà, párroco del municipio y

²¹⁰ De Lozada fue reemplazado por Carlos D. Mesa Gisbert, quien pasó a ocupar la presidencia de la república tras el convulso clima con el que arrancó el siglo XXI en Bolivia, con acontecimientos tales como la “guerra del gas” o la “guerra del agua”, surgidos a consecuencia de la adopción de las nuevas políticas de ajuste estructural que condujeron a la privatización de importantes sectores del país, que precipitaron el exilio de Lozada a Estados Unidos a causa de los episodios de movilizaciones, resistencias, cortes de carretera y en definitiva, de una situación revolucionaria liderada por los nuevos movimientos campesinos e indígenas (Petras y Veltmeyer, 2000: 175-219).

reconocidamente partidario de la población indígena (*ibíd.*, 80). Se atacó además a la organización CIPCA destruyendo material y parte de la oficina (*ibíd.*, 88). Tras estos incidentes, se convocó un Cabildo abierto que reunió a más de 2.000 personas y el cual atacó los agravios cometidos hacia ambos personajes, declarando la solidaridad y apoyo hacia estos (*ibíd.*, 80 y 88). En este Cabildo abierto se pidió que CIPCA se mantuviera en el municipio.

En todo este proceso de empoderamiento político, los pueblos indígenas de la Amazonía de Bolivia fueron tomando cada vez más conciencia sobre los derechos que les debían ser reconocidos y respetados por parte del Estado para lo que comenzaron a elaborar una serie de propuestas que se convertirían en demandas formales (Brito, 1998). Como bien señala esta autora, este rico proceso de participación abrió un espacio de debate y reflexión en donde se manifestaron los intereses, las preocupaciones y propuestas de las poblaciones indígenas y que culminó con la creación del “*Proyecto de Ley de los Pueblos Indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía Boliviana*” (*ibíd.*).

Más reciente ha sido la creación en 9 de octubre del 2008 de COASUR (*Coordinadora de la Amazonía Sur para el Cambio*) que agrupa a diversas organizaciones que participan en movimientos sociales de Mojos con la intención de “*competir en el escenario electoral para tener representantes idóneos en el congreso de Bolivia, en la composición de la Asamblea plurinacional*” (entrevista a Miguel Peña). Esta coordinadora está conformada por varias organizaciones sociales de San Ignacio además de las Subcentrales. Los objetivos prioritarios de la COASUR son “*tener nuestros propios representantes en la Asamblea Constituyente y el desarrollo local: bajarlo directamente desde el poder ejecutivo a las comunidades sin intermediación, sin la prefectura ni alcaldía, esto es un proceso burocrático que hace que no se llegue a nada*” (*ibíd.*).

Antes de finalizar este punto no se puede dejar de mencionar a las organizaciones de mujeres que existen en cada una de las comunidades del TIMI así como en la misma Subcentral. Ya en el seno de la CPEM-B se luchó por la equidad de género y la igualdad de la mujer, lográndose incorporar a la estructura organizativa de esta organización. Desde la *Organización de Mujeres de la Subcentral* se pretende “*fortalecer, dar seguimiento, apoyar y atender las demandas de las hermanas de las comunidades: ese es el trabajo orgánico que se hace en las comunidades (...) velar por las ayudas que tienen que llegar a las mujeres*” (entrevista a Rosario Cunavi). Son conscientes que hasta no hace mucho tiempo las mujeres no eran casi escuchadas pero afortunadamente esta situación fue revertida y las mujeres cada vez más ocupan el lugar que se merecen tanto a nivel comunal como regional. La Subcentral ha puesto en

marcha diversos proyectos encaminados al empoderamiento de las mujeres y a la elaboración de trabajos artesanales en los que éstas participan, con los que contribuir a la economía del grupo familiar. Estos proyectos promueven fundamentalmente labores de artesanía en donde se trabaja con el algodón, semillas, hoja de motacú, madera, loza, etcétera, fabricando múltiples objetos que van desde las hamacas, alforjas, maceteros, vestimentas, cántaros, bordados y telas (entrevista a Rosario Cunavi y Esli Jare). Rosario Cunavi, quien fuera Presidenta de la Organización de Mujeres de la Subcentral del TIMI, relata su experiencia con la ONG “Pijaraipa”, gracias a la que participó en diversos talleres encaminados a la formación y liderazgo que posteriormente aplicaría en los proyectos de artesanía para motivar al resto de comunarias.

4. 5. 3. 2. Participación política en Mojos.

“Estamos gobernando, estamos al poder, estamos orgullosos que el pueblo mojeño vaya adelante” (Rosario Cunavi).

“Se entiende el tema del ejercicio del poder para nosotros los indígenas como una filosofía de servicio. Para nosotros el tema no es llegar al poder, para nuestro mundo el poder se ejerce como servicio” (Miguel Peña).

La emergencia del pueblo mojeño como nuevo sujeto político recién incorporado al sistema gubernamental oficial allanó el camino para que en el municipio de San Ignacio por primera vez en la historia un indígena pasara a ocupar el cargo de alcalde. Pero para que esto ocurriese fue necesario esperar hasta el año 1994 cuando entró en vigor -el 20 de abril- la Ley n° 1551, conocida como *Ley de Participación Popular* que pasó a reconocer la personalidad jurídica de las *Organizaciones Territoriales de Base* (OTB)²¹¹ –las cuales estarán representadas por un representante designado por los

²¹¹ Lo que se entiende por *Organización Territorial de Base* viene regulado en el Decreto Supremo n° 23858, con fecha de 9 de septiembre de 1994, es decir, apenas 4 meses más tarde de la Ley 1551, y considera a ésta como “la unidad básica de carácter comunitario o vecinal que ocupa un espacio territorial determinado, comprende una población sin diferenciación de grado de instrucción, ocupación, edad, sexo o religión y guarda una relación principal con los órganos públicos del Estado a través del Gobierno Municipal de la jurisdicción donde está ubicada”. Entre otras, son OTB el Pueblo Indígena el cual corresponde a una “colectividad humana que descende de poblaciones asentadas con anterioridad a la conquista o colonización, y que se encuentran dentro de las actuales fronteras del Estado; poseen historia, organización, idioma o dialecto y otras características culturales, con la cual se identifican sus miembros reconociéndose como pertenecientes a la misma unidad socio-cultural; mantienen un vínculo territorial en función de la administración de su hábitat y de sus instituciones sociales, económicas, políticas y culturales” (artículo 1). En base a esta definición anterior se considera OTB a los Cabildos Indigenales del oriente boliviano. Pero además “se reconocerán a las Asociaciones Comunitarias integradas por las Organizaciones Territoriales de Base con personería jurídica reconocida, tales como las Capitanías, Ayllus, Subcentrales, Centrales, Federaciones y otras formas de organización, según sus usos y costumbres o sus disposiciones estatutarias, cuando estén comprendidas dentro de la jurisdicción territorial de un Gobierno

miembros de la comunidad en función de los “*usos, costumbres y disposiciones estatutarias*” de la correspondiente comunidad (artículo 3)- tanto del área urbana (como hasta entonces había ocurrido) como del área rural, en donde se insertaban las comunidades indígenas, las que se convirtieron gracias a esta ley en “*sujetos de la Participación Popular*” (artículo 3º, punto I).

El objeto primordial de ésta es reconocer, promover y consolidar “*el proceso de participación popular articulando a las comunidades indígenas, campesinas y urbanas, en la vida jurídica, política y económica del país (...). Con una más justa distribución y mejor administración de los recursos públicos*”. Así como fortalecer “*los instrumentos políticos y económicos necesarios para perfeccionar la democracia representativa, facilitando la participación ciudadana y garantizando la igualdad de oportunidades en los niveles de representación (...)*” (artículo 1º). Un elemento de enorme trascendencia de la misma es que no sólo se transfirieron las competencias al nivel municipal sino que éstas se vieron ampliadas. Esta ley además pretende corregir los desequilibrios históricos entre el ámbito urbano y rural (artículo 2).

Debido a la carencia de un reglamento que permitiese a la población de las comunidades indígenas del área rural participar de los procesos electorales, hasta el año 1995 los habitantes de las comunidades del TIMI no contaron con la posibilidad de votar en las elecciones municipales. De ahí se explica que “*los habitantes de las comunidades no participaban y menos tenían valor electoral para los políticos locales, lo que quiere decir que no eran ciudadanos plenos*” desde el punto de vista del significado de ciudadanía puesto que “*no había participación de los comunarios como electores y/o candidatos porque la alcaldía era una forma de autoridad que sólo abarcaba el área urbana*” (Molina W. y Soletto, 2002: 85). El proceso de municipalización (1993-2000) otorgó a los municipios en términos políticos, la posibilidad de adquirir mayor autonomía (Molina W. et al., 2008: 14) y consiguió ampliar la participación a las comunidades de los territorios municipales (Molina W. y Soletto, 2002: 85).

La ampliación de la participación política de los habitantes del municipio conllevó una reconfiguración de las estructuras del poder en éste, en donde por primera vez todos los habitantes pudieron participar, incrementando la legitimidad del proceso electoral y el nivel de democracia del mismo. La participación de las organizaciones indígenas en las elecciones municipales de 1995 fue el episodio más relevante en cuanto

Municipal, siguiendo el procedimiento establecido por este reglamento” (artículo 12) (véase http://www.legislacionmunicipal.fam.bo/Archivo/Docs/Decretos/DS_23858.pdf).

a ejercicios políticos se refiere y propició asimismo tanto la transformación de los grupos étnicos de Mojos que pasaron de ser tenidos en cuenta como actores políticos - se convertirían en los responsables del debilitamiento bipartidista entre el MRN y el ADN- como la consolidación del proceso de politización indígena (*ibíd.*, 88-93). Hasta entonces, el gobierno municipal de Mojos estuvo dominado, como ya sabemos, por los *carayanas*, pese a que estos constituían un sector escasamente representativo.

Desde el año 2010 nuevamente un mojeño ocupa el cargo de alcalde del municipio de San Ignacio: Basilio Nolvani. Éste se presentó por el MAS pese a pertenecer a la CPEM-B (al ser ésta una organización y no un partido resultaba imposible presentarse a unas elecciones municipales). Tras haber obtenido el 49.2% de los votos se configuró un concejo municipal de coalición conformado por un concejal de un partido del Beni, otro del MNR (de derechas) y otros 3 del MAS (entrevista a Basilio Nolvani).

La diferencia frente a la primera vez que un indígena ocupó el cargo de alcalde en San Ignacio, es que aquella se puede definir más como un ensayo, mientras que ahora el poder político del sector indígena está más reforzado y se va consolidando al verse respaldado por el gobierno de la nación liderado a su vez por el mismo partido político.

4. 5. 4. Aspectos socioculturales.

Las actividades económico-productivas a las que me he referido, poseen además un carácter cultural. En este epígrafe comentaré brevemente otros aspectos del ámbito cultural de estas poblaciones.

4. 5. 4. 1. Conocimiento local mojeño.

“De ellos aprendieron a cazar, a pescar, a levantar chozas estables y resistentes a los vendavales, a reconocer los frutos comestibles y los venenosos, y sobre todo, de ellos aprendieron el arte de convivir con la selva”

LUIS SEPÚLVEDA, *El viejo que leía novelas de amor*.

Han sido varios los autores que han cuestionado la distinción entre conocimiento indígena y conocimiento occidental (Raffles, 2002; Dove, 2002; Sundar, 2002; Follér, 2002). Critican la consideración del conocimiento indígena como local, contextual, holístico frente al conocimiento occidental universal, compartimentalizado y codificado dado que en base a dicho planteamiento se deja a un lado el vínculo y la interacción entre ambos, lo cual negaría la circulación de conocimientos y la participación en los circuitos cognitivos extra locales, tan en boga en el marco de la globalización. Para Dove

en concreto, esta distinción tiene mucho que ver con lo que Foucault denominó “prácticas divisorias” en referencia a la manera en la que una sociedad objetiva a otra logrando privilegiarse a sí misma (1982: 208, cit. en Dove, 2002: 87). Estos autores sin dejar de reconocer la singularidad de los conocimientos indígenas, se muestran reticentes a marcar una línea divisoria entre ambos. Raffles por su parte advierte del riesgo que corremos al tomar al conocimiento indígena como local dado que en muchas ocasiones esta cualidad aparece referida a algo estático, primitivo y restrictivo (2002: 54). El mismo autor expone de qué manera lo local aparece vinculado a un lugar particular, a un *locus* determinado, pero su trabajo de campo en la Amazonía, le permite entender hasta qué punto los lugares se hacen constantemente, las gentes que su apropiación de ellos los resignifican a través de las relaciones sociales, su carácter es por tanto, móvil y relacional (2002) (recordemos lo explicado en el capítulo 2).

Muchos trabajos no se sienten cómodos con el uso de la acepción de *tradicional*. Como consecuencia intentan esquivar o sustituirlo por circunloquios que pasan de puntillas sobre ella. Consciente de la incomodidad que produce su uso me decanto por utilizarlo en las ocasiones que considere el más adecuado en función del contexto al que esté aludiendo. Para ello quiero dejar claro lo que entenderé en tales momentos por “tradicional”. No lo asumo en absoluto en oposición a “moderno” o “progreso”, ni como alusión a una condición primitiva. Comparto la definición que Manuela Carneiro da Cunha propone en uno de sus últimos trabajos en el que define a los *pueblos tradicionales* como aquellas poblaciones que lucharon o luchan por conquistar una identidad basada en el “uso de técnicas ambientales de bajo impacto, formas equitativas de organización social, presencia de instituciones con legitimidad para hacer cumplir sus leyes, liderazgo local, y, por fin, trazos culturales que son selectivamente reafirmados y reelaborados” (2009: 300). Esta antropóloga brasileña concede especial énfasis al proceso de autoconstitución de tales poblaciones. Tal proceso requiere de negociaciones, transacciones, incluso confrontaciones y relaciones de poder entre estos grupos e instituciones y organizaciones externas para consolidar aquellos elementos que son pactados como sustentadores de lo que es asumido como *tradicional*. Las poblaciones indígenas que se autorepresentan como *tradicionales* buscan por lo tanto aprovechar sus experiencias históricas dotándolas de un nuevo significado capaz de lidiar con el contexto actual. El proceso de reinención en el que se sumergen se amarra en la historicidad de determinados elementos culturales y formas de organización social. Como sostiene Carneiro da Cunha, más adecuado sería considerarlas “neotradicionales” (*ibíd.*).

Tendré presente estas consideraciones, sumamente interesantes, cuando me refiera a la condición de localidad del conocimiento *tradicional* mojeño.

En la tradición mojeña los saberes sobre el medio natural han sido transmitidos de generación en generación. Los sistemas *tradicionales* cognitivos aportan al individuo una manera de entender el mundo y de relacionarse con él. A día de hoy cada vez son menos los jóvenes de Mojos que tiene acceso a estos conocimientos sobre la naturaleza. Ello dificulta la transmisión y consolidación de parte de las estructuras cognitivas mojeño-ignacianas. Esto unido a la sobre-explotación que sufrieron los bosques amazónicos hace varias décadas, provocó que en las comunidades surgiese la idea de elaborar un estatuto que estableciera unas determinadas pautas de comportamiento comunales. A través de éstas se regularía el acceso y aprovechamiento de los recursos de los bosques, y en concreto los forestales. Hasta entonces, no había sido necesario por, como hemos advertido, disponer cada una de las familias de los bienes requeridos para su subsistencia. Y además porque anteriormente no estaban inmersos en redes comerciales de explotación de recursos. Al haber participado algunos comunarios en ciertas negociaciones negligentes con empresarios madereros o comerciantes, desde las comunidades surgió la propuesta de regular tales acciones (éstas fueron en muchos casos enormemente desproporcionadas y la explotación selectiva de recursos naturales produjo un fuerte impacto en los bosques de la región). Por tales motivos se pretendió controlar el acceso a los recursos, limitando la extracción de madera que a cada comunario.

No obstante, estas medidas si bien han sido formalizadas, no siempre se cumplen y todavía aparecen casos de comunarios que practican la extracción y venta ilegal de la madera.

Estos estatutos incluyen una serie de artículos dirigidos a regular las normas de conducta que los indígenas deben afrontar a la hora de relacionarse con el medio natural y con los recursos naturales que se encuentran en éste²¹². El hecho de formalizar las normas de conducta por medio de un estatuto, resulta lo menos sorprendente. Ante esto Maj-Lis Follér sugiere hablar preferiblemente de conocimiento “híbrido” o “situado”, para referirse a aquel que trata de incorporar el conocimiento “científico” al “tradicional” construido en un contexto sociocultural determinado²¹³. Tras los avatares vividos en las últimas décadas del siglo pasado, así como la asimilación de las maniobras efectuadas desde más altas esferas en el contexto del movimiento indígena -ya sea a nivel nacional o internacional-, los pueblos *originarios*

²¹² Kaj Århem realizó un estudio sobre las poblaciones amazónicas del Norte como los *makuna* de Colombia, entre los que examina los estatutos comunales que regulan el acceso a los recursos naturales de los bosques y los ríos, el cual está limitado por restricciones éticas compartidas por el conjunto de la comunidad (1998).

²¹³ “Del conocimiento local y científico al conocimiento situado e híbrido –ejemplos de los shipibo-conibo del sureste peruano”

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/3239/1/anales_5_foller.pdf

de la Amazonía boliviana aprendieron un lenguaje –sobre todo jurídico- hasta entonces ajeno a ellos. El hecho de precisar ciertas normas de comportamiento estipuladas como válidas en sus estatutos –los cuales datan de poco más de una década- nos revelan una vez más el influjo absorbido por las poblaciones indígenas de discursos provenientes del campo de las ciencias sociales, de organizaciones del mundo de la cooperación y de líderes indígenas cooptados por organismos internacionales. Es fuerte, por tanto, la presencia de elementos provenientes de la legislación occidental. Pero el simple hecho de formalizar un código normativo, a pesar de no ser éste de carácter vinculante, ilustra de manera muy clara las intenciones de los mojeños de no volver a caer en trampas, engaños y cualquier tipo de tretas en lo que respecta al aprovechamiento de los recursos naturales. Sin embargo, a pesar de la puesta por escrito de esta serie de normas, éstas no se han creado recientemente sino que “*son el producto de una construcción histórica y tradicionalmente son transmitidas de manera oral*” (CIPCA, 2005: 28).

Los sistemas cognitivos de las comunidades mojeñas han ido configurando con el tiempo ciertos esquemas mentales que regulan los modos de proceder frente a la naturaleza y los seres que la conforman. De esta manera, como apuntan algunos investigadores “*las sociedades indígenas albergan un repertorio de conocimiento ecológico que generalmente es local, colectivo, diacrónico y holístico*” (Toledo y Barrera-Bassols, 2008: 54). Estos 4 factores describen muy claramente el conocimiento indígena y están presentes en la cosmovisión mojeño-ignaciana. Es local en el sentido de que la escala geográfica a la que atiende se restringe a los espacios que ellos habitan y de los que se apropian (no exclusivamente desde el punto de vista demográfico sino del amplio paisaje contenedor de los recursos naturales) (*ibíd.*). El elemento colectivo es igualmente de enorme importancia. A lo largo de esta investigación hemos comprobado de qué forma en base a la toma de decisiones del grupo se llevan a cabo las acciones que se derivan de las mismas. Lo colectivo juega, por tanto, un papel primordial en la articulación de los sistemas socioculturales de las comunidades de Mojos. Al mismo tiempo es diacrónico puesto que se refiere a procesos que se han venido configurando a lo largo del tiempo. El hecho de transmitir el conocimiento indígena de generación en generación ha posibilitado establecer tales esquemas cognitivos. Estos instauraron las bases sobre las que se asientan los códigos de actuación actuales. Y con respecto a esto, indicar en último término que el conocimiento indígena está impregnado y funciona, en buena medida, debido al mecanismo holístico, puesto que cada elemento que conforma y da vida al sistema integral natural, forma parte de ese todo y es manejado por los comunarios mojeños como partes integrantes de los ecosistemas.

Grayson habla de un “conocimiento tradicional ecológico” (*Traditional Ecological Knowledge*: TEK) que se inspira en una ética basada fundamentalmente en la cooperación del grupo, en la transmisión oral a través de las generaciones, en la escala local, en los principios de sostenibilidad, en las restricciones a la explotación de recursos naturales y en los derechos territoriales (2004: 135). Comparte con otros estudios mencionados la condición de holismo y dinamismo constante y vuelve a cuestionar la consideración de tradicional como antiguo y primitivo (*ibíd.*, 136).

Sin embargo, los condicionamientos sociales, políticos y económicos de cada época modifican y reelaboran los mecanismos de comportamiento, es decir, las normas están inmersas en un proceso constante de “reconstrucción colectiva” (CIPCA 2005: 28). Podemos verificar, no obstante, algunos elementos que funcionan como desarticuladores de estos mecanismos de regulación (*ibíd.*, 28):

- *Contacto más intenso con la sociedad nacional*, dominada por unas pautas occidentales.
- *Comercialización de los recursos forestales*. Esto genera una actitud más propensa a la obtención de recursos monetarios que como consecuencia puede desembocar, en ocasiones, en conflictos entre los propios comunarios.
- *Adopción de nuevos esquemas de comportamiento*, principalmente entre la gente más joven, provocando un cambio de mentalidad.
- *Resistencia hacia el cumplimiento de las normas de comportamiento* mostrada por parte de algunos comunarios.

Retomando la cuestión de los estatutos, cabe añadir que estas reglas de comportamiento social no sólo se refieren a la conducta que debe guiar a los individuos entre ellos sino a estos con respecto al resto de seres vivientes que habitan en los espacios naturales que comparten. Se regula asimismo “*lo que está permitido y lo que está prohibido en el aprovechamiento de los recursos naturales de la comunidad*”, lo cual incluye el comportamiento frente a los animales de caza, pesca, frente a las especies maderables y no maderables, etcétera (capítulo undécimo del estatuto de la comunidad de Santa Anita del Máti: véase **anexo 3**). Los espíritus del bosque vienen encarnados en plantas y animales y forman parte del mismo esquema simbólico y cultural que articula las relaciones entre los seres humanos y la naturaleza. Por tanto, las categorías binarias desplegadas desde las perspectivas teóricas y desde las

epistemologías occidentales no resultan válidas en la percepción de estas sociedades. Sen base a la percepción del pueblo mojeño, hombre y naturaleza aparecen como indivisibles, se pertenecen, son sólo uno, constituyendo, se podría afirmar, una unidad. Sin embargo, el hecho de ordenar en categorías y establecer una clasificación de la naturaleza supone una reducción de ésta. Con los estatutos orgánicos de las comunidades se corre el riesgo de que se desvirtúe, por tanto, el significado de los espacios naturales de los Llanos de Mojos. Cosifican y materializan uno de los elementos orgánicos de las relaciones entre los hombres y los entornos naturales, dejando de lado la espiritualidad característica de sus territorios ancestrales²¹⁴. Propongo tener en cuenta el concepto de “medio donante” (*giving environment*) de Bird-David, retomado por Laura Rival para analizar en uno de sus trabajos la percepción del bosque por parte de un pueblo indígena de Ecuador, los *huaorani*. Esta investigadora utiliza el término de “medio donante” para demostrar la sociabilidad de las sociedades igualitarias -como así considera a las sociedades de cazadores-recolectores y horticultores- donde “*objetos naturales y seres humanos constituyen un mismo ámbito social*” (2004: 97). En otros términos, otros investigadores se han referido a esto como “vecindad inmediata” que hace referencia a la subsistencia de los pueblos indígenas, en la que prima más el intercambio ecológico que el intercambio que se produce en términos económicos, es decir existe una preferencia por los intercambios frente a la naturaleza que frente al mercado (Toledo y Barrera-Bassols, 2008: 55). Esto va muy en la línea de las estrategias económico-productivas desarrolladas por las poblaciones amazónicas, las que vienen denominadas como “estrategias de uso múltiple”, las cuales les permite la diversificación de recursos y por tanto de medios para proveerse con vistas a la subsistencia del grupo (*ibíd.*, 2008).

Veíamos anteriormente cómo el pueblo mojeño recurre a un sistema de diversificación de cultivos. En base a una racionalidad que canaliza el conocimiento de la realidad geográfica, física y ecológica, así como de las estructuras socioculturales, los indígenas de Mojos ponen en marcha una serie de estrategias dirigidas a satisfacer las necesidades de las comunidades. Aquellos mismos autores, defienden que “*en la cosmovisión indígena cada acto de apropiación de la naturaleza tiene que ser negociado con todas las cosas existentes*” (*ibíd.*, 54). En relación a esta idea ya vimos porque los mojeño-ignacianos ejecutan una especie de ritual con los “dueños del bosque” a la hora de cazar, a quienes solicitan le permiso para ello, comprometiéndose a no superar las 3 piezas.

Por el contrario, podría pensarse que el hecho de depender de la domesticación de plantas desvirtuar la concepción del medio natural como donante, entendido éste

²¹⁴ Las luchas por el territorio están estrechamente vinculadas con estos fenómenos.

como espacio de naturaleza abundante donde proveerse de los recursos naturales destinados a la reproducción del grupo, como espacio reflejo de una lógica de oposición entre espacio salvaje y espacio domesticado, reflejo de la discontinuidad de la que se caracteriza el conjunto del territorio mojeño-ignaciano.

A pesar de la aparición de estos estatutos, el saber *tradicional* en Mojos ha funcionado históricamente como elemento articulador de las relaciones entre las sociedades humanas y el mundo de la naturaleza, si estos pueden aparecer disociados. En la línea de los estudios de Toledo y Barrera Bassols, podríamos asegurar que este corpus de conocimientos se sustenta sobre dos principios básicos: sobre aquel que configura las relaciones entre los elementos de la naturaleza, las dinámicas y usos de los recursos naturales y paisajes y sobre la clasificación de los conocimientos sobre fenómenos geográficos, climáticos, geo-físicos, astronómicos, biológicos o ecológicos (2008: 75).

Cuadro 4. 12. Matriz de conocimientos tradicionales.

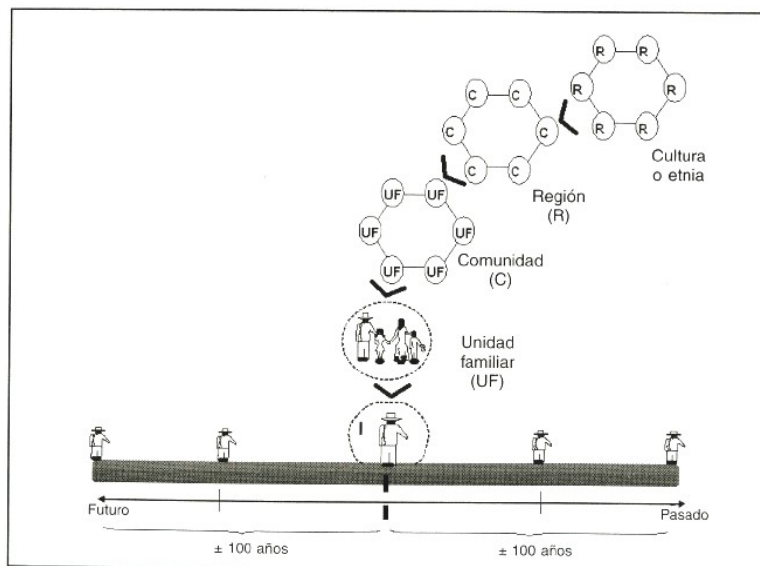
| Astronómico | | Física | | | Biológico | Ecogeográfico |
|--------------------|--|--------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| | | Atmósfera | Litosfera | Hidrosfera | | |
| Estructural | Tipo de astros | Tipos de clima, vientos, nubes | Unidades de relieve de rocas | Tipo de aguas | Plantas, animales, hongos, microbios | Unidades de vegetación y paisaje |
| Relacional | Varios | Varios | Varios | Varios | Varios | Varios |
| Dinámico | Movimientos y ciclos solares, lunares, estelares | Movimiento de vientos y nubes | Erosión de suelo y otros | Movimiento del agua | Ciclos de vida | Sucesión ecológica |
| Utilitario | Varios | Varios | Varios | Varios | Varios | Varios |

Fuente: *ibíd.*, 76.

Con todo, el sistema cognitivo total aparece estructurado de manera orgánica en varias dimensiones, incluida la espacial, donde las distintas escalas se encuentran moduladas (véase **figura 4. 9**). Éstas serán la escala “*cultural*”, referida al “saber total” de determinada cultura, en este caso la mojeña; la “*regional*”, correspondiente al territorio delimitado por la TCO del TIMI; la “*comunitaria*”, como el espacio apropiado por cada comunidad, la “*doméstica*”, concerniente al área en el que el grupo familiar

interactúa con el medio y entre sus miembros, y por último la “individual” que se refiere de manera exclusiva al espacio del individuo en sí (ibíd., 75-76).

Figura 4. 9. Dimensiones espacial y temporal del conocimiento indígena.



Fuente: ibíd., 72.

Entre las comunidades ignacianas los elementos de la naturaleza forman parte del sistema cognitivo total donde estos se combinan integrando la identidad colectiva del pueblo mojeño. Cada una de las partes integrantes del saber local de este pueblo, constituye un elemento transmisor de las prácticas simbólicas y culturales mojeño-ignacianas. La cita que aparece a continuación sirve de ejemplo para ilustrar esta idea:

“Los árboles tienen algo de conocimiento como señales, cuando florece y cuando no es el tiempo de florecer lo que significa es que ve dos aspectos, uno para sequía y otro para agua, si no florece anuncia que va a haber sequía y si es su tiempo también puede va a haber mucha agua, ellos conocen. De todas maneras ellos son vivos. Porque dicen los curanderos que son vivos, cuando nosotros vamos a pedir, vamos a sacar remedios, ahí a ese palo, ya sea el bejuco, la hoja, el que sea, hay que pedir, es como los materiales (...)” (Ignacio Apace, corregidor del Cabildo de San Ignacio de Mojos²¹⁵).

En este caso son los árboles quienes transfieren ciertos saberes relacionados con la climatología específica de la región de Mojos. Asimismo proveen de múltiples recursos utilizados en la cotidianeidad de las comunidades, a través de la interconexión entre al individuo y dicho elemento de la naturaleza, en este caso el árbol. En realidad

²¹⁵ Fabricano *et al.*, 2009: 238.

todo el conjunto de saberes posee enorme interés para la sociedad mojeña y es que las observaciones de la luna, el sol, las nubes, lluvias, los suelos, plantas, animales, etcétera, contribuyen al establecimiento de parámetros de manejo del entorno. Gracias a este conocimiento local y colectivo, acumulativo e histórico, las comunidades de Mojos adquieren la capacidad de interactuar con el medio natural de una manera eficaz. Esto es así puesto que cuentan con la posibilidad de prevenir riesgos naturales o al menos de mitigar los daños cuando estos ocurren, sabiendo qué tipo de estrategias de comportamiento adoptar.

El catálogo de saberes mojeños presenta una compleja diversidad a la hora de clasificar las unidades de paisaje²¹⁶. En la región amazónica es donde existe una mayor clasificación debido a la riqueza biológica de los ecosistemas allí presentes. Los mojeños distinguen entre pampas (*wama'iana*²¹⁷), montes, curichis (*kuricheana*²¹⁸), yomomos (*yamamana*²¹⁹), lomas (*tiupujupupa'iana*²²⁰), lagunas (*kakiureana*²²¹), etcétera, así como un sinfín de topónimos referidos a las unidades de paisaje natural. La distinción entre todos estos términos correspondientes a diversas categorías paisajísticas contribuye a facilitar la organización espacial, desde su propia racionalidad, a la hora de realizar actividades como la caza, la pesca o el cultivo de chacos.

Marcus Colchester hace hincapié en su estudio sobre el vínculo entre las sociedades indígenas y la biodiversidad, en la íntima relación armónica de dichos grupos para con el medio natural en el que habitan (1995). Este autor defiende la idea de que el modo de vida autosuficiente al que se orienta su economía de subsistencia favorece la preservación de la naturaleza y lo expresa señalando que “*muchos entornos de esas comunidades están menos modificados y degradados que las zonas circundantes*” (*ibíd.*, 27). Colchester alerta acerca de las consecuencias que puede acarrear para las poblaciones indígenas la presión de agentes externos sobre sus territorios ancestrales, lo cual está ocurriendo con gran rapidez. Como resultado de ello tiene lugar la alteración de “*los modelos tradicionales de propiedad, gestión y uso de la tierra*” así como la transformación de “*los sistemas de valores, las organizaciones sociales y los procesos de toma de decisiones tradicionales*” lo cual propiciará la alteración de “*las relaciones de los pueblos indígenas con su medio ambiente, y pueden provocar el uso sobreintensivo de la tierra y la degradación medioambiental*” (*ibíd.*,

²¹⁶ Otros autores las han denominado como unidades ecogeográficas (Toledo y Barrera-Bassols, 2008).

²¹⁷ Idioma ignaciano.

²¹⁸ Idioma ignaciano.

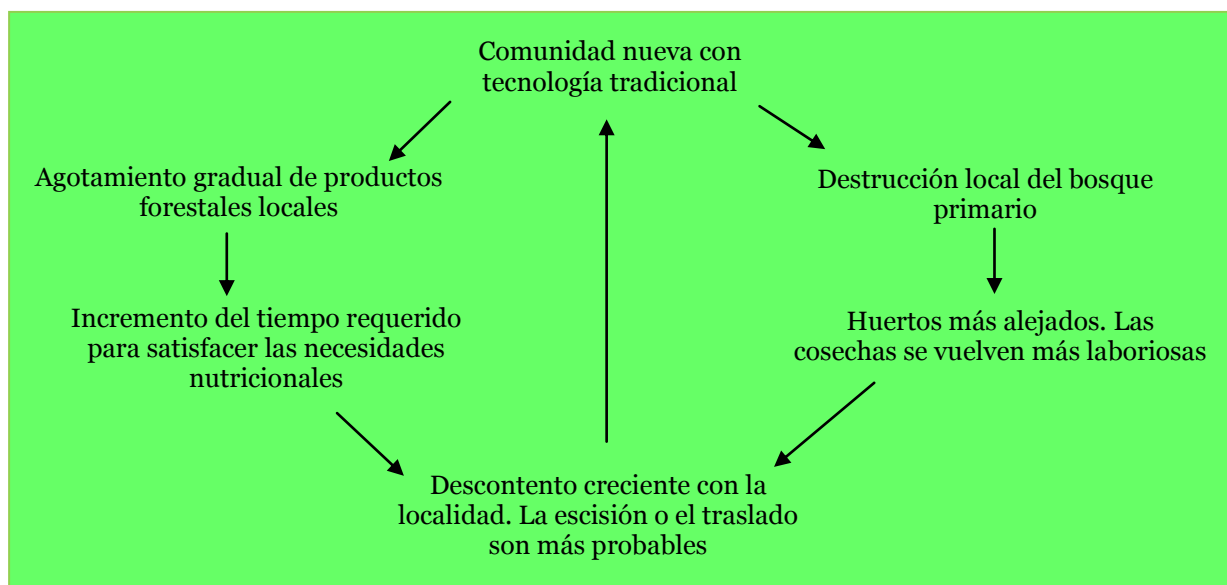
²¹⁹ Idioma ignaciano.

²²⁰ Idioma ignaciano.

²²¹ Idioma ignaciano.

28). La siguiente figura expresa el ciclo de retroalimentación negativa que evita la sobreexplotación del medio natural a largo plazo.

Figura 4. 10. Sistema tradicional de uso de recursos



Fuente: *ibíd.*, 30.

Para concluir cabría indicar que pese a que tales estatutos orgánicos comunales supongan un instrumento de registro de normas, más allá de eso, la tradición oral, la propia cosmovisión de los mojeños y sus costumbres, estructuran las formas de vida y las relaciones tanto internas como las establecidas con el resto de elementos de los entornos naturales. Por ello, se puede decir que estos estatutos no excluyen los principios normativos que rigen en las comunidades mojeño-ignacianas. Estos vienen definidos por las construcciones históricas y la oralidad que permiten que los conocimientos *tradicionales* se hayan perpetuado aunque sujetos a la reformulación en base a la cotidianeidad de las comunidades. Además han permitido dar forma a un conjunto de estrategias de supervivencia que les han servido para hacer frente a las dificultades desplegadas desde sus escenarios vitales a la hora de apropiarse de los espacios naturales. Quedan establecidas por tanto, unas normas de comportamiento social acordes con la naturaleza. Se consigue de esta manera, un equilibrio entre la *tradición* y el consenso al que se llega con la toma de decisiones en los espacios comunales de deliberación (CIPCA, 2005: 28). Los estatutos orgánicos podrían actuar de manera negativa al perturbar la lógica de acción de estas comunidades en el caso de que se produjera una lucha de intereses. Es más, como ha sido señalado “*a veces se toma en cuenta el estatuto en la administración de normas y otras veces se lo deja de*

lado” (*ibíd.*, 29). En ello tiene mucho que ver la aún reciente aplicación de estos mecanismos. El conocimiento acumulado y el saber *tradicional* que ha provisto a los mojeños de una serie de normas de conducta y de valores y que ha ido siendo transferida de unas generaciones a otras, se ha desvirtuado en parte a raíz de los contactos con la sociedad regional. En la codificación de las normas de conducta de los mojeños, juega un papel más importante la propia cosmología indígena que la sistematización de un catálogo de reglas. La forma de relacionarse con el mundo, con los seres humanos y con el resto de seres de la naturaleza, marca las pautas de las relaciones sociales y espaciales de los mojeño-ignacianos. Del mismo modo, la percepción que estos poseen de sus entornos naturales, de sus bosques, configura las estructuras de la propia organización social y cultural de las comunidades.

4. 5. 4. 2. Percepción del entorno por la población local.

Sin la intención de efectuar un análisis en profundidad en torno al paisaje de Mojos, lo que sí pretendo mostrar es una pequeña aproximación en lo que se refiere a la percepción del entorno por parte de los grupos locales. El trabajo etnográfico estuvo en parte orientado a conocer el imaginario colectivo de los complejos paisajísticos representados por las poblaciones mojeñas. Me interesaba principalmente obtener información acerca de los componentes del paisaje y los elementos formales del entorno geográfico que determinan la imagen colectiva que los pobladores de esta región poseen sobre el mismo así como conocer el grado de sensibilidad ambiental que los habitantes de las comunidades de Mojos poseen. Esto facilitaría la identificación de las dinámicas espaciales que tienen lugar en el TIMI y contribuiría además a precisar el grado de preocupación entre los pobladores a causa de las transformaciones del paisaje que han tenido lugar en Mojos. Sin embargo, en esta etapa del trabajo empírico me topé con una barrera: la de la traducción conceptual (véase **punto 1. 6. 2**) (del Val Cid y García de Cortázar, 2005; Cruces, 2007), referida fundamentalmente a la noción de “paisaje”. Los sujetos con los que trabajé no se mostraban familiarizados con tal término, lo que limitaba las conclusiones y resultados que pude obtener al respecto. Como consecuencia me vi obligada a modificar los términos de mis preguntas, de tal manera que en numerosas ocasiones dicha categoría fue traducida como “espacio” -aún siendo consciente del equívoco conceptual que eso suponía- para facilitar el discernimiento de los pobladores locales. A su vez, a medida que estos elaboraban sus discursos sobre dicha cuestión se inclinaban por el uso de conceptos como “territorio” – principalmente- pero también “tierra”. Si en un principio decidí excluir de la investigación estas cuestiones debido a los discutibles resultados alcanzados, finalmente rectifiqué y resolví al menos dar cuenta de ello por una cuestión

fundamental referida no tanto a su interés analítico sino por su relevancia metodológica. Y es que este tipo de reflexiones no pueden pasar desapercibidas en el proceso etnográfico, dado que forman parte de él. Ilustran los problemas a los que como científicos sociales nos enfrentamos al pretender aproximarnos a la realidad de cualquier grupo social con el que interactuamos. De la relativa información que extraje se derivan las siguientes conclusiones:

- ✓ La población de Mojos no percibe ningún enclave en particular en el conjunto paisajístico de la región. Dependiendo del grupo social al que se le consulte unos espacios serán más valorados que otros en función de los aportes de estos a dicho grupo. Por tanto, por un lado si se pregunta a los indígenas ignacianos, se deduce que para estos ningún aspecto es considerado como de gran valor paisajístico, entendiéndolo desde una perspectiva occidental. Aunque es cierto que los montes son las unidades paisajísticas que cuentan con una mayor consideración social por ser estimados como los mejores espacios en donde asentar los chacos de cultivo y porque constituyen los lugares donde más especies de caza se encuentran, al ser las zonas más inaccesibles. Si bien, reconocen el valor que posee el territorio desde un enfoque holístico, mostrando una concepción territorial definida por la integralidad y organicidad.

Para las empresas madereras o los propios motosierristas que trabajan de manera autónoma, los montes destacan igualmente como las unidades paisajísticas más valoradas por ser estos los que mayor concentración de masa arbórea presentan.

Por el contrario, si son los ganaderos los encuestados, serán las pampas las que posean un enorme valor por constituir las áreas más convenientes para las pasturas del ganado.

Se podría confirmar la estrecha relación existente en Mojos entre el paisaje y los usos correspondientes a los usuarios del bosque. Dependiendo del interés -sea éste comercial, social o económico- los grupos sociales recrearán unos valores hacia el paisaje que funcionará como condicionante en la percepción que hacia éste poseen.

- ✓ Las inundaciones estacionales es la imagen que mejor define el territorio del TIMI puesto que éstas condicionan el calendario agrícola y como consecuencia su organización sociocultural. Entre los habitantes de la región se encuentra aún

muy vivo el recuerdo de las fuertes inundaciones sufridas en el 2008 y las pérdidas que éstas acarrearón.

- ✓ Muchos apuntan a los yomomos y curichis, además de los montes, como elementos que describen el paisaje de la región. El motivo de ello podría ser que al sufrir estas transformaciones claramente perceptibles desde el punto de vista visual, destaquen por encima de otros.
- ✓ La carretera principal que va de Trinidad a San Ignacio de Mojos es una de las principales referencias de este territorio por el hecho de ser a través de ella desde donde se accede a los caminos que llevan a cada una de las comunidades. La inaccesibilidad a éstas es un aspecto valorado de manera muy negativa dado que significa quedarse incomunicados durante el periodo de lluvias (prácticamente la mitad del año).
- ✓ Cabe resaltar la importancia otorgada al núcleo urbano de San Ignacio, por su ubicación, pero principalmente por los servicios que desde él se ofrecen a las comunidades: mercado local, servicios hospitalarios, posta, etcétera.
- ✓ Los encuestados demuestran una clara concienciación y sensibilización, principalmente las poblaciones indígenas, acerca de las transformaciones que están teniendo lugar en los paisajes de Mojos y tienen la absoluta convicción de a qué se debe. Señalan como responsables a las estancias ganaderas y empresas madereras que operaron en la región hace ya algunas décadas. Reconocen abiertamente el daño que está provocando la expansión de la actividad ganadera al transformar los usos del suelo.
- ✓ No sólo los diversos grupos sociales perciben el paisaje de manera diversa sino que en el estudio de percepción también aparece un criterio generacional, y no exclusivamente sociocultural. Es muy claro en el caso de la población indígena: las generaciones más jóvenes se muestran menos sensibilizadas ante las transformaciones paisajísticas. Entre éstas además son aquellos que residen en núcleos poblacionales como San Ignacio, Trinidad o incluso Santa Cruz de la Sierra, quienes poseen una imagen más difusa e incompleta del territorio, a diferencia de aquellos que aún habitan en el núcleo familiar de las comunidades del TIMI.

Como conclusión se puede señalar que las alteraciones que ha sufrido el paisaje en Mojos, esencialmente debido a los cambios de uso del suelo, son reconocidas por el conjunto de su población. El deterioro que sufren los ecosistemas de la sabana es perceptible en buena medida si atendemos –principalmente- a la vegetación arbórea como indicador. Ante este fenómeno la población muestra una fuerte preocupación al ser conscientes de la importancia de la conservación de los ecosistemas naturales de Mojos, puesto que poseen un alto valor bien sea económico, bien sea social. Los efectos negativos causados por la actividad ganadera y forestal son, a ojos de la población indígena, los que requieren de soluciones apremiantes capaces de mitigar el impacto provocado en el conjunto paisajístico de Mojos.

Una vez más insisto en las dificultades encontradas en relación a la equivalencia conceptual. Por tanto habría que aclarar que las conclusiones a las que se ha llegado poseen un sesgo de traducción conceptual el cual, sin embargo, se ha pretendido reducir al máximo.

4. 5. 4. 3. La educación en el momento actual.

Las encuestas de hogar realizadas en las comunidades del TIMI desvelaron que hasta no hace mucho las lenguas *originarias* estaban estigmatizadas socialmente. Este aspecto es muy importante para el mantenimiento de la identidad indígena ya que si no mucho tiempo atrás los indígenas se avergonzaban de serlo, poco a poco han ido tomando conciencia de la importancia que tiene el hecho de que sean ellos mismos los encargados de mantener su cultura, sus costumbres y su lengua. Hoy en día es común escuchar cada vez más palabras en lengua ignaciana, por ejemplo en los saludos. Ya no se avergüenzan de poner en práctica lo poco que conocen.

Si el grupo familiar había sido el difusor de la cultura indígena se acabó convirtiendo paradójicamente en el principal represor de la misma. A día de hoy no es fácil encontrar a ignacianos que hablen su lengua materna, sobre todo entre los más jóvenes. El motivo que dan como explicación es que en su familia dejó de hablarse por temor, se sentían avergonzados por su pertenencia étnica y por eso es que no lo aprendieron. Esto sucedió hace unas 3 generaciones.

La lengua ignaciana se estaba perdiendo y es cierto que sólo unos pocos la hablan. Pero pese a la pérdida gradual del uso de la lengua indígena se han dado en Mojos intentos encaminados a su recuperación. Actualmente se comienza a desarrollar un programa dirigido a revitalizar las lenguas indígenas *tradicionales*. CEPOIM, una de las instituciones de San Ignacio de Mojos dedicada fundamentalmente al ámbito de la educación indígena, es quien más esfuerzo está dedicando a estas cuestiones.

De manos de dicho organismo se han puesto en marcha programas dirigidos a la rehabilitación en las escuelas de las comunidades y en el mismo San Ignacio del idioma ignaciano. Se ofrecen también cursos de lengua indígena a los profesores y profesoras que así lo quieran. Pero aún más importante es el hecho de que en el seno familiar sus miembros recuperen la lengua que antaño hablaban.

Gracias al trabajo de campo, pude comprobar que en aquellas familias en las que existía una mayor toma de conciencia en relación a los derechos sociopolíticos de las poblaciones indígenas, existía a su vez una mayor implicación en el ámbito de la educación indígena. En estas familias se percibe el orgullo que sienten por su condición étnica y el deseo de mostrarse como tales sin tapujos. Lamentablemente esto no fue siempre así y es que el proceso de invisibilización al que me vengo refiriendo, abarcaba todos los ámbitos, incluido el de la educación. Los indígenas que hablaban su propia lengua eran ridiculizados, lo cual les llevó a abandonar su uso puesto que además se encontraban inmersos en un proceso de castellanización lingüística que incrementaba la aculturación de estas poblaciones. No es casual que a medida que fue emergiendo el movimiento étnico en Bolivia, las lenguas indígenas experimentaron un resurgimiento. En realidad, la lengua sirvió además como instrumento discursivo que legitimaba la pertenecía étnica de un determinado pueblo indígena.

En el año 1994, el 15 de julio, y formando parte del paquete de políticas multiculturales, entró en vigor la *Ley de la Reforma Educativa*, la ley n° 1565. Su lectura encierra ciertos aspectos sumamente cuestionables. Y es que si bien apela a la interculturalidad y al bilingüismo, reconoce exclusivamente dos lenguas étnicas, éstas son el quechua y el aymara, pese a la existencia en Bolivia de más de 30 lenguas *originarias*. Esto no tiene mucho sentido si al mismo tiempo se apuesta por la creación de los “*Consejos Educativos de Pueblos Originarios*”, organizados en “*Aymara, Quechua, Guaraní y Amazónico multiétnico y otros*” (artículo 6). De ahí que algunos hayan calificado a la educación como “andinocéntrica” dado que la historia, la cultura que han aprendido las poblaciones amazónicas, ha sido la historia andina, lo cual no refleja la diversidad multiétnica del país (Arnaldo Lijerón, en Madueño, 2009: 412). Tampoco se entiende bien si tenemos en cuenta que en uno de sus puntos señala que esta reforma pretende “*fortalecer la identidad nacional, exaltando los valores históricos y culturales de la Nación Boliviana en su enorme y diversa riqueza multicultural y multiregional*” (artículo 2)²²².

²²² Véase http://www.legislacionmunicipal.fam.bo/Archivo/Docs/Leyes/Ley_1565.pdf

El rescatar una cultura no se puede reducir a recuperar las tradiciones folclóricas, sino que va más allá y eso es lo que se pretende en Mojos y por lo que CEPOIM está desarrollando un intenso trabajo.

En cada comunidad se encuentra una pequeña escuela. En ella los alumnos y alumnas aprenden fundamentalmente en idioma castellano, lo cual demuestra que la realidad está lejos de las pretensiones expresadas en la ley 1565.

Fotografía 4. 18. Imagen de escuela (comunidad de Flores Coloradas)



Fuente: Virginia Jabardo Pereda

4. 5. 4. 4. Medicina *tradicional* versus medicina industrial.

En relación a la sanidad se da un proceso doble. Por un lado, los comunarios ignacianos obtienen del entorno las plantas medicinales que tradicionalmente han usado para combatir enfermedades. Sin embargo, también reconocen que cada vez más a menudo acuden a las farmacias o a la posta (el centro médico de San Ignacio de Mojos) a comprar medicinas para curarse, porque es menos complicado que adentrarse en el monte para buscar las plantas necesarias. La medicina tradicional se ve cada vez más subordinada a la medicina industrial o farmacéutica, lo cual podría derivar en un proceso de desvalorización de algunas prácticas locales.

Pese a ello, los comunarios ignacianos continúan utilizando una gran diversidad de plantas para uso medicinal. Poseen un vasto conocimiento de la biodiversidad, de la que extraen algunos de los remedios para curarse de enfermedades. Algunos de ellos son el bejuco para combatir la fiebre alta -o *arrebato*-; para arañazos o leves heridas utilizan corteza de curupaú o la uña de gato contra las mordeduras de serpiente, fiebres, tos, etcétera (entrevista a Ignacio Apace).

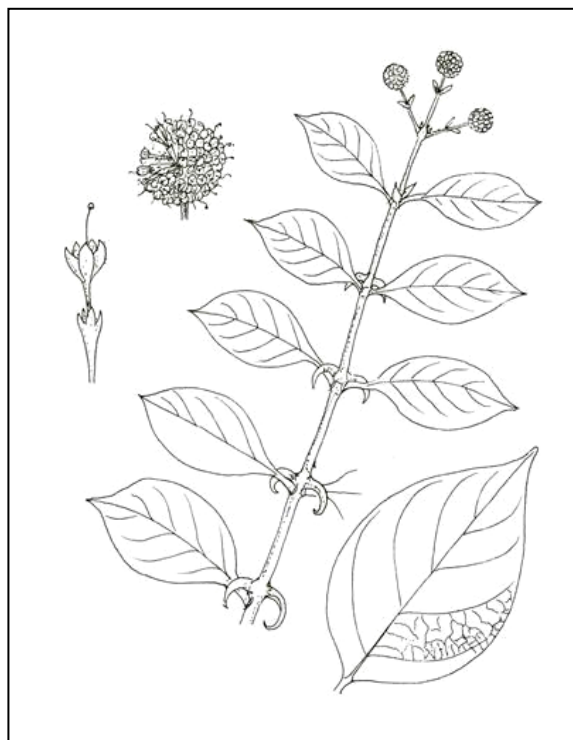
En el año 1984 se aprobó en Bolivia, tras las presiones ejercidas por los pueblos indígenas, un decreto que permitía el ejercicio de la medicina *tradicional* y se crearía

años más tarde - el 8 de junio de 2006- el *Viceministerio de Medicina Tradicional e Interculturalidad* (Fabricano *et al.*, 2009: 232). Este organismo se convertiría desde entonces en el encargado de promover, fortalecer y preservar la medicina *tradicional*, desarrollada en Bolivia principalmente por los grupos indígenas.

La concepción de la salud y las enfermedades aparece sumamente ligada a la naturaleza, no sólo por el uso de plantas medicinales sino además por la creencia de la aparición de afecciones y enfermedades vinculadas al medio ambiente (*ibíd.*, 234). Algunas prácticas que lo ejemplifican son mostrar a un recién nacido al sol y al viento para evitar que le agarren vientos malignos o realizar el baño en el día de San Juan para fortalecer la personalidad (*ibíd.*, 236-238).

Los remedios se hacen con toda clase de extractos vegetales o animales, suelen tener un sabor amargo y suelen ser suministrados por los siguientes agentes de la salud: curanderos; sobadores en caso de que exista fractura o luxación de huesos o las parteras a la hora de dar a luz (*ibíd.*, 242-250).

Figura 4. 11. Imagen de la hoja de uña de gato (*Uncaria guianensis*)



Fuente: Mejía y Rengifo, 1995: 96.

La explotación masiva a la que han sido expuestos los bosques en la región mojeña ha constituido un episodio sumamente negativo para las poblaciones indígenas que en ella habitan. La escasez de recursos influye en la perpetuación las prácticas medicinales. Algunos aspectos del conocimiento local se están perdiendo

irreversiblemente. Esta pérdida no es sólo para los pueblos indígenas, sino para el conjunto de la humanidad.

4.5.4.5. Fiestas *tradicionales* y costumbres.

La fiesta más importante y que más expectación recibe entre el pueblo mojeño-ignaciano es la fiesta del patrón San Ignacio de Loyola, la cual se celebra el 31 de julio para conmemorar la fundación de la misión. Este evento se denomina la *Ichapekene Piesta* y se hace posible gracias a la colaboración de una gran parte de comunarios que participan de manera voluntaria con el Cabildo Indigenal, en donde se organiza el grueso de las celebraciones que duran hasta 5 días. En este día acuden a San Ignacio de Mojos cientos de personas, de todo el Beni e incluso de otros departamentos del país, para ver la representación de la danza de los “macheteros”. San Ignacio se convierte en la capital folclórica de la Amazonía boliviana. Es en esta fecha y durante estas celebraciones cuando los dos principales grupos sociales si no se funden se entremezclan.

Fotografía 4. 19. Imagen fiesta de San Ignacio: procesión y desfiles



Fuente: Virginia Jabardo Pereda

San Ignacio de Mojos ostenta desde el año 1975 el título de “Capital Folklórica del Beni” y desde el año 2008 el título de “Capital Espiritual de las Misiones Jesuíticas del Cono Sur Americano”. Esto hace que cada año acudan cientos de turistas para conocer esta legendaria danza que contribuye a preservar el patrimonio cultural.

Fotografía 4. 20. Imágenes “macheteros” y flautistas



Fuente: Virginia Jabardo Pereda

La danza de los “macheteros” tiene su origen en la época colonial a pesar de ser representada desde una interpretación indígena. Esta danza es interpretada también en fiestas menores.

Los “macheteros” van ataviados con una especie de tocado de plumas dispuestas en semicírculo, de colores propios de aves amazónicas, las cuales representan el recorrido del sol desde el amanecer hasta el ocaso. Sería una especie de calendario. Danzan –durante el alba y al anochecer- al ritmo de la música de tambores y flautas, al mismo tiempo que mueven el plumaje de sus cabezas y los machetes de madera que portan en las manos, de ahí su nombre. En los tobillos se colocan una especie de pulseras hechas a base de semillas, lo cual les permite acompañar a la música, siguiendo el ritmo de ésta con el instrumento que se colocan en los pies. Sobre la

espalada se colocan un manto de piel de tigre. Simbolizan un ceremonial combate entre guerreros.

En las fiestas tienen lugar bailes y danzas en las que los participantes se disfrazan como animales (toritos, tigres, osos, caballos o ciervos); astros (sol, luna, estrellas); seres extraños (*ju'ari roba* o come-niños); tribus antiguas (*ajucharaki*, *chunchos*); *japutuki* (encargado de que nadie robe), etcétera (Museo de San Ignacio de Mojos). Todos ellos hacen referencia a antiguos seres y dioses del periodo prejesuítico aunque fueron incorporados de manera gradual a la nueva religión católica.

Otros personajes característicos del folclore popular mojeño son los “chasqueros” y los “achus” que participan junto con los “macheteros” en las procesiones de San Ignacio de Mojos.

Fotografía 4. 21. Imagen de “Achs”



Fuente: Virginia Jabardo Pereda

En cuanto a la religión se refiere se puede afirmar con total rotundidad que los ignacianos sienten muy presente la religión católica, introducida en su momento por la Orden de los Jesuitas. Sin embargo, también es cierto que mantienen otro tipo de religiosidad de carácter animista que tiene su origen en el periodo previo a la llegada de los europeos y que ha trascendido hasta la actualidad dado que a día de hoy aún se practica entre los comunarios ignacianos, fundamentalmente a la hora de relacionarse con el entorno en el que habitan. Los espíritus del bosque y de las aguas juegan un papel determinante en el sistema cultural de los mojeños. Por tanto podríamos definir la religiosidad mojeña como un sincretismo producto del amalgamamiento de elementos procedentes de diversas formas de religiosidad.

4. 5. 4. 6. Formas arquitectónicas.

Las viviendas de las comunidades han procurado mantener sus estructuras originales, repitiendo los esquemas de construcción, pese a que desde la época precolonial se han visto modificadas desde el punto de vista morfológico. Si en dicho periodo predominaban las estructuras circulares, actualmente las viviendas presentan una forma rectangular (véase **fotografía 4. 23**).

En las comunidades se pueden distinguir dos tipos de construcciones. Las primeras conforman lo que sería la vivienda familiar, prevaleciendo una pauta de residencia fundamentalmente neolocal o sino patrilocal (entrevista a Esli Jare). El segundo tipo son construcciones, igualmente rectangulares, pero por lo general de menor tamaño, que constituyen la cocina. Ambos tipos presentan techos a dos aguas. Como acceso existe una puerta, normalmente en uno de los lados más largos del lateral. Las ventanas no existen, procuran con ello evitar la incursión de pequeños animales y sobre todo de los moquistos. Pese a ello es común que alguna serpiente se cuele entre los recovecos de las paredes. Algunos mojeños se pueden permitir la construcción de hornos de leña a pocos metros de las casas para cocinar.

Fotografía 4. 22. Imagen horno de leña en una vivienda ignaciana



Fuente: Virginia Jabardo Pereda

El centro de encuentro de la comunidad lo suele constituir el Cabildo, lugar donde se reúnen los comunarios y comunarias a la hora de tomar decisiones conjuntas sobre cuestiones que atañen al conjunto de vecinos.

Los materiales predominantes en la arquitectura doméstica son la madera de tacuara y motacú y los techos de hoja de palma. Las paredes son recubiertas de barro mezclado con paja y los suelos son de tierra.

Fotografía 4. 23. Imágenes vivienda mojeña (comunidad de Fátima, TIMI)



Fuente: Virginia Jabardo Pereda.

En San Ignacio de Mojos, en las manzanas ubicadas en torno a la plaza central, las casas son construidas con materiales más consistentes –ladrillos, cemento y madera- y conservan arquitectónicamente el estilo colonial. Son por lo general las casas de la población blanco-mestiza, lo que nos lleva a hablar de una disposición jerárquica del espacio urbano.

Destaca como edificio representativo y simbólico la Iglesia de tipo arquitectónico misional que construyeron los jesuitas en el periodo reduccional y cuya decoración corresponde al estilo amazónico caracterizado por motivos vegetales y animales propios del entorno (véase **fotografía 4. 24**). Ésta se encuentra situada en uno de los lados de la plaza central.

Fotografía 4. 24. Imágenes Iglesia de San Ignacio de Mojos



Fuente: Virginia Jabardo Pereda.

Introducción Parte II.

Bolivia es uno de los países del continente latinoamericano con la tasa de población rural más alta. La mayor parte de dicha población corresponde a su vez a población indígena, que al mismo tiempo presenta los índices más altos de pobreza (menos de un dólar al día). La pobreza rural hace que numerosas familias bolivianas dependan del acceso a la tierra para superar su exclusión. En torno a 660.000 unidades agrícolas existen en el conjunto del país, de las cuales el 87% están conformadas por pequeños productores, principalmente de origen indígena-campesino (Chumacero, 2010a: 11; Urioste, 2011: 9). Otro dato interesante que señala Urioste en la introducción de su trabajo sobre el agro boliviano, es que de los 109 millones de hectáreas que conforman el territorio nacional, aproximadamente la mitad están cubiertas por bosques que presentan un alto grado de diversidad (2011: 9). Los recursos naturales de estos bosques son el sustento para los grupos étnicos que en ellos se habitan. Sin tales recursos las culturas indígenas verían muy difícil el mantenimiento de sus formas de vida.

En la región amazónica la situación se repite, con la particularidad de que este espacio geográfico está habitado por 34 grupos étnicos, siendo uno de ellos y el más numeroso desde el punto de vista demográfico, el pueblo indígena mojeño.

En Mojos, al igual que sucede en el resto del país, la problemática de la tenencia de la tierra viene de lejos. Ya en el periodo republicano el gobierno nacional tuvo que tomar una serie de medidas en lo que se refiere al reconocimiento de la propiedad agraria. En concreto, las poblaciones indígenas vieron como se sucedía un continuo despojamiento territorial en los espacios que ellos habían venido ocupando históricamente. Tal usurpación fue amparada por ciertas disposiciones legales -*Ley de exvinculación* del año 1874 que privatizó las tierras y abolió aquellas de propiedad comunal- que dejaron a los indígenas absolutamente inermes para hacer frente a dicha situación.

La problemática que gira en torno a la tierra, al uso de los suelos así como al manejo y aprovechamiento de recursos naturales, pivota en un factor de primer orden: la concepción territorial manejada por un lado por los discursos oficiales, y aquella entendida por los grupos indígenas. Acerca de esta controversia se trató en el capítulo 2, pero debemos tenerlo muy presente a partir de este momento dado que nos facilitará entender muchos aspectos del proceso de titulación de tierras, los conflictos por la ocupación territorial y las relaciones interétnicas entre los distintos grupos sociales.

La política de explotación de tierras y territorios se perpetuó hasta la edad contemporánea. El oriente boliviano fue la región que más impactos sufrió debido a los programas de colonización puesto en marcha por los gobiernos nacionales desde mediados del siglo XIX. A consecuencia de ello, la expropiación de tierras a los pueblos indígenas se vio incrementada. Caracterizándose además esta región por albergar los recursos forestales con mayor valor comercial del país, se perpetró una explotación masiva de estos.

Teniendo en cuenta que los recursos naturales que se encuentran en estos territorios son la base del sustento de las poblaciones indígenas que en ellos habitan, podemos hacernos una idea de los graves impactos a todos los niveles que sufrieron estas poblaciones originarias y de los beneficios que acarrió para el sector ganadero y forestal fundamentalmente.

La política agraria implementada en Bolivia ha conducido a serias y negativas consecuencias para los pueblos indígenas. Un intento de revertir esta situación ha sido el proceso de saneamiento de tierras, encaminado a restituir las tierras que les fueron usurpadas a las poblaciones indígenas. Veremos cómo desde el Estado se ha titulado una importante superficie a favor de las TCOs. Sin embargo, es justo admitir que en la mayor parte de los casos han sido redistribuidas tierras fiscales pertenecientes a aquel, tales como parques nacionales, áreas naturales, reservas nacionales, etcétera, que ahora se superponen con los territorios indígenas comunales (Urioste, 2011: 75).

Existe una correlación a nivel mundial entre las áreas que albergan mayores riquezas en cuanto a biodiversidad se refiere y a diversidad cultural. La Amazonía boliviana, hogar de numerosos grupos indígenas, demuestra tal vínculo. Por este motivo es tan importante titular a favor de estas poblaciones indígenas, incluida la mojeña, los territorios que ocupan y de los que se sirven para su desarrollo, así como respetar sus derechos de uso y manejo de recursos para la preservación de estas culturas que, en realidad, contribuirá a la preservación de la diversidad cultural a nivel planetario.

La población indígena ignaciana del TIMI desarrolla un manejo del territorio acorde con sus esquemas de conocimiento. Es un saber local de tipo acumulativo que ha sido transmitido por la experiencia colectiva del grupo y el cual ha ido incorporando nuevas lógicas externas de acción, en función del contexto en el que se desenvuelve. Tales sistemas cognitivos son transmitidos al resto del grupo mediante la práctica cotidiana basada en la oralidad (Toledo y Barrera Bassols, 2008). En el caso particular de esta investigación, el *Gran Mojos* ha sido el escenario local pese a que en la actualidad haya sido confinado a la TCO TIMI. Desde el periodo prehispánico el pueblo ignaciano ha reformulado sus mecanismos socioeconómicos y de conocimiento internos, con el fin de hacer frente a las singularidades de su entorno local a partir de un modelo cultural específico de uso de la naturaleza.

El reconocimiento de estos modelos de uso de la naturaleza distintos a los que han caracterizado al sistema de producción económico propio de la modernidad, ponen de manifiesto que otros modelos alternativos a éste son posibles. Las formas locales de uso de la naturaleza pese a entrar en conflicto con los sistemas agroindustriales de producción, no tienen porqué ser excluyentes sino que pueden adoptar estrategias de uso múltiple mediante la combinación de diferentes formas productivas. En efecto, éstas pueden contribuir a preservar la riqueza de los modos locales y preservar el vínculo entre la diversidad biológica y la diversidad cultural. Por dicho motivo, para los pueblos indígenas, la reducción y explotación masiva de los territorios en los que habitan, va en detrimento tanto del mantenimiento de sus culturas como de la preservación de la biodiversidad²²³. Esto nos lleva a hablar del “concepto de conservación simbiótica” (Nietschmann, 1992, cit. en Toledo y Barrera-Bassols, 2008: 53) que reconoce la interdependencia entre biodiversidad y diversidad cultural. Existe la idea extendida entre los mojeños de que la preservación de sus culturas y el mantenimiento de sus sociedades pasa inevitablemente por el reconocimiento y el respeto de sus derechos territoriales que frenen y pongan fin al proceso de pérdida de territorio.

En la coyuntura autonómica por la que atraviesa actualmente Bolivia y cuya implementación tendrá importantes consecuencias para los pueblos indígenas, la gestión del territorio se convierte en la principal herramienta con la que las poblaciones mojeño-ignacianas cuentan a la hora de ordenar sus sistemas de producción agrosilvopastoril y ser soberanas de los territorios que habitan sin someterse a las

²²³ Toledo y Barrera-Bassols reconocen la correspondencia a nivel planetario entre las áreas de mayor biodiversidad y aquellas habitadas por pueblos indígenas, las cuales se solapan en una muy alta proporción (2008: 53, 59).

políticas agrarias y forestales dictadas desde la esfera gubernamental, dirigidas a la producción agroindustrial.

Todo esto me lleva a cuestionarme toda una serie de planteamientos: ¿en qué medida han influido las políticas encaminadas a regular el agro boliviano sobre las poblaciones indígenas?, ¿qué tipo de impactos a nivel socioeconómico, ecológico y cultural han sufrido el pueblo mojeño-ignaciano?, ¿son los saberes locales indígenas una opción a tener en cuenta en el ordenamiento territorial del país?, ¿en qué grado la *Gestión Territorial Indígena* beneficiará al uso y manejo de recursos naturales por parte de estos grupos?, y por último ¿qué tipos de conflictos y frente a qué actores provocan la apropiación y ocupación territorial en Mojos?

En este segundo bloque procuraré dar respuesta a estas cuestiones. La exposición de los capítulos contenidos en el mismo, facilitará la comprensión de las dinámicas territoriales y forestales de Mojos y la manera en la que el pueblo indígena ignaciano está lidiando frente a esta compleja situación.

5. ¿La tierra para el que la trabaja? o ¿el territorio para los indígenas? Tenencia de la tierra en Mojos.

Los conflictos agrarios en Bolivia aparecen estrechamente vinculados a la tenencia de la tierra. Esta es una problemática que se debe en buena medida a las legislaciones agrarias que se han venido aplicando desde la Reforma Agraria del año 53 del pasado siglo, que pese a dirigirse a la abolición de los latifundios en el oriente boliviano, no han hecho sino que consolidarlo e incrementar el despojamiento territorial al que se han visto sometidos los pueblos indígenas de dicha región desde al menos el siglo XVII.

Asimismo, las leyes agrarias que surgieron en el seno de la Revolución Nacional de 1952, no tuvieron en consideración el uso tradicional de la tierra y la ocupación del territorio de las poblaciones que lo habitaban. Progresivamente, el acceso a los territorios comunales en Mojos se fue viendo restringido a medida que el sector ganadero ampliaba su frontera a base de alambradas y cercos. La entrega de enormes superficies de territorio por parte del gobierno a los intereses privados, fue una constante que se repitió desde el periodo republicano. Los *terceros* se vieron enormemente beneficiados por las disposiciones legales referidas al agro, gracias en buena medida a las concesiones que desde el Estado les fueron otorgadas. Esto se debió a que, según la antigua *Constitución Política del Estado* -vigente desde el año 1967 y modificada en el año 2004- la tierra era propiedad estatal, así como el suelo y subsuelo (Gudrun, 2000: 16; Valenzuela, 2008: 15)²²⁴. Las superposiciones que como consecuencia aparecieron entre los territorios comunales y las estancias ganaderas -

²²⁴ “Son de dominio originario del Estado (...) el suelo y el subsuelo con todas sus riquezas naturales, las aguas lacustres, fluviales y medicinales, así como los elementos y fuerzas físicas susceptibles de aprovechamiento” (artículo 136)

<http://www.umsa.bo/umsa/uploads/transparencia/ConstitucionPoliticaDelEstado.pdf>

caso de la TCO TIMI- se sucedieron hasta que esta situación se hizo insostenible para las propias comunidades ignacianas. A mitad de la década de los ochenta del siglo XX los programas de ajuste estructural llevados a cabo por gobiernos neoliberales, desencadenaron una fuerte concentración de tierras en el oriente debido al reparto indiscriminado de tierras efectuado de forma gratuita. Las denuncias pusieron el primer escalón para que las poblaciones indígenas de tierras bajas se articularan como movimiento de reivindicación por el reconocimiento de los derechos territoriales. La presión internacional por parte de la cooperación internacional ejerció también de empuje en esta coyuntura, buscando revertir la situación de abuso hacia los pueblos indígenas. El Estado boliviano no tuvo más remedio que poner en marcha una nueva reforma agraria en la que la tenencia de la tierra y el uso de recursos naturales fueron ordenados bajo otros criterios que -esta vez sí- tuvieron en cuenta los sistemas de producción y manejo indígena. La voluntad en principio pareció honesta y fue recibida con gran ilusión por parte de los grupos indígenas. Pero veremos de qué manera gradualmente las esperanzas se fueron desvaneciendo a medida que acontecían las irregularidades protagonizadas por las instituciones oficiales. La falta de determinación de estos organismos frenó la utopía que se estaba convirtiendo en realidad por lo que el despojo territorial y la explotación de recursos naturales continúa hasta día de hoy.

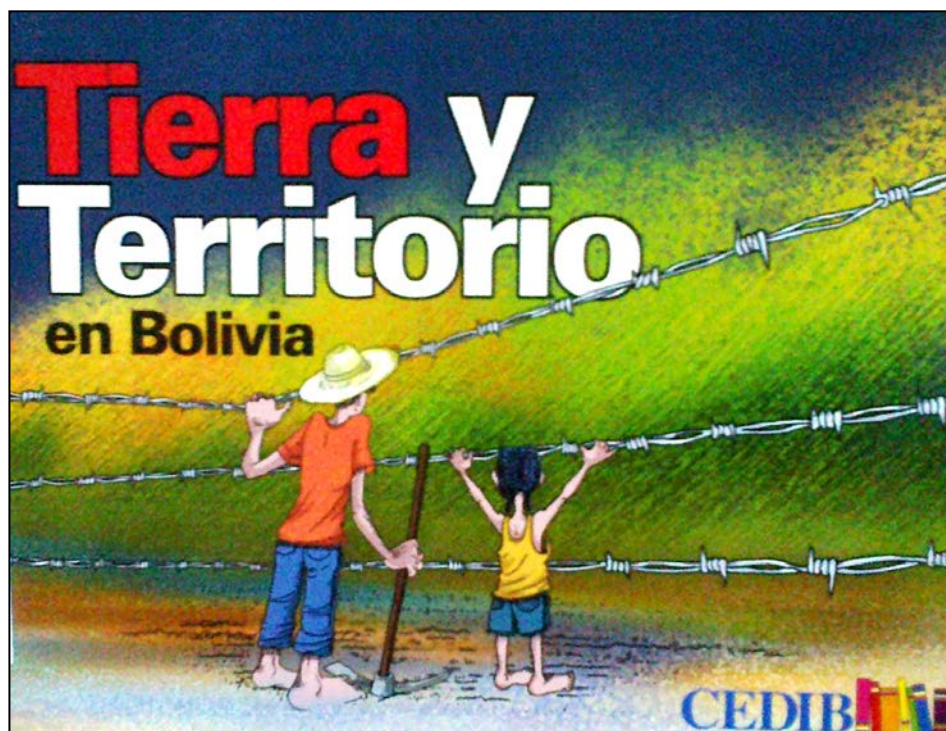
La desigualdad ha definido por tanto la tenencia de la tierra en Bolivia (veremos de qué manera se vincula con las relaciones interétnicas). La tenencia de la tierra en Bolivia es entonces un tema a tratar de manera obligatoria por el particular interés que entraña para la presente investigación.

Antes de comenzar a examinar las cuestiones referentes a este capítulo, cabe hacer mención a las enormes dificultades encontradas a la hora de obtener información proveniente de fuentes oficiales. Ha supuesto el principal obstáculo con el que me he tenido que enfrentar a la hora de redactarlo. Han sido diversos los impedimentos que he encontrado para obtener la información apropiada y manejar cifras oficiales. Me topé en primer lugar con una gran ausencia de fuentes disponibles y de materiales adecuados para la elaboración del mismo. Me ha sido además imposible acceder a los catastros y consultar gran parte de la información relativa a los títulos de propiedad otorgados por el Estado a través del INRA y a los títulos de territorios indígenas. Y es que no existe disponibilidad ni libre acceso a este tipo de información y mucha de ella ni siquiera está actualizada. Recientemente, en el año 2011, se ha realizado el último censo agropecuario del país que debería permitir consultar la información relativa a los derechos sobre la propiedad de la tierra en el país.

Por otro lado el hecho de que el proceso de saneamiento de tierras continúe abierto ha tenido mucho que ver. En efecto, los conflictos acaecidos en razón de la

tenencia de la tierra han condicionado el acceso a la información. Supone un tema bastante delicado que implica al conjunto de la población de Mojos y no sólo, ya que diversas instituciones han sufrido las amenazas –incluso ataques violentos- por parte de sujetos a quienes no interesa que se normativice, bajo parámetros legales, los títulos de propiedades agrarias. La superposición de tierras y la existencia de predios al interior de tierras colectivas es una realidad en Mojos. Los conflictos entre sus propietarios están a la orden del día. Por tal motivo he optado por no hacer explícita la fuente directa a través de la que he accedido a conocer las situaciones más delicadas relacionadas con el proceso agrario y las irregularidades del saneamiento de tierras en Mojos. De esta manera queda reservado el anonimato de aquellos que me han permitido constatar tales negligencias. Esta advertencia sirve también para el próximo capítulo.

Figura 5. 1. Imagen territorios cercados



Fuente: Valenzuela, 2008 (portada).

5. 1. ACTORES SOCIALES Y RELACIONES DE PODER

Díaz de Rada cuestiona la clásica tendencia, convertida en prejuicio, que ha llevado a los trabajos etnográficos dedicados al análisis de relaciones interétnicas a “*identificar los grupos étnicos*” a la hora de establecer un marco analítico que permita estructurar a dichos grupos en un espacio determinado (2008: 193). Si bien es cierto que en Mojos el espacio interétnico ha sido configurado por el conjunto de actores sociales que lo constituye en un proceso de interacción, sí quedan establecidos dos grupos sociales que tradicionalmente se han opuesto pero que al mismo tiempo se complementan. Por eso se hace necesario no dejarnos llevar por un enfoque que enfatice la dicotomía étnica pese a que para el caso que nos ocupa sea del todo evidente la existencia y coincidencia de la población indígena por un lado y la población blanco-mestiza por otro o, dicho de otra manera: los mojeños y el sector ganadero. Cabe admitir no obstante, la porosidad y permeabilidad que define a las fronteras étnicas en los términos usados por Frederick Barth y tener en cuenta, como bien propone Díaz de Rada, que “*la relación interétnica no divide dos zonas homogéneas, demarcables e identificables con dos sujetos sociales alternos*” sino que se da una “*comunicación constante en diversas escalas de práctica*” puesto que “*los agentes sociales ponen en juego diferentes escalas de sujeto*” (ibíd., 203).

El enfoque de este trabajo, aspira a reconocer la heterogeneidad al interior de cada grupo puesto que presentan particularidades internas aunque en último término se reconozcan como miembros de un grupo socio-étnico en particular. De la misma manera que no pretendo enfrentar a ambas colectividades pero sí poner de manifiesto los conflictos que aparecen entre ellas por la ocupación territorial. Será por tanto una difícil tarea el no situarlos en un esquema excluyente sin dejar de reconocer las disputas que tradicionalmente les han enfrentado y que a día de hoy se han visto agudizadas a causa del reconocimiento de los derechos territoriales a favor de los pueblo indígenas de Bolivia. Al mismo tiempo daré a conocer aquellos episodios en los que tanto unos como otros actúan en la misma escala en función del contexto que marque las situaciones a las que en cada momento deban enfrentarse tales sujetos sociales.

Desde el siglo pasado, en el oriente boliviano se ha configurado un nuevo espacio social a partir de las políticas de colonización puestas en marcha por los correspondientes gobiernos. Resultado de ello son las nuevas lógicas que desde entonces ordenan el escenario social de Mojos. Las nuevas interrelaciones sociales entre la población blanco-mestiza y la población indígena han venido a ser definidas en términos de conflicto pese a compartir espacios comunes en donde se tejen las

relaciones sociales²²⁵. De entre estos adquiere especial relevancia el municipio de San Ignacio dado que tanto los unos como los otros forman parte del gobierno municipal. Por ello es justo reconocer que estos espacios sociales son actualmente constituidos en base a elementos socioculturales aportados por ambos grupos y no a partir de la exclusión o la sumisión de uno sobre el otro. Por el contrario, se dan profundas interrelaciones sociales que más adelante serán desveladas.

No obstante, sí que es cierto que tanto las comunidades indígenas como los *carayanas* configuran sus formas particulares de organización social. Y además de estos un tercer espacio social emerge en la interacción de indígenas y *terceros* a través de mecanismos de ordenación de la vida social que han ido apareciendo en la nueva coyuntura social y principalmente en las relaciones cotidianas, las cuales aparecen mencionadas a continuación. Sin embargo, los conflictos étnicos han constituido un factor esencial que ha contribuido a definir las complejas y dinámicas relaciones sociales de Mojos.

Al mismo tiempo algunas actividades permiten la complementariedad: la vida política en la época actual, el peonaje, las fiestas municipales, algunas prácticas económicas, etcétera. Pero también los sistemas de organización social de los indígenas se han visto desvirtuados a causa de la acción que los *terceros* han llevado a cabo en los territorios de aquellos a través de la actividad ganadera o forestal, fundamentalmente. A su vez la alteración de los ecosistemas naturales de Mojos ha forzado a los indígenas a estrechar sus vínculos sociales con los *terceros*, a quienes conciben al mismo tiempo como rivales y patrones a los que acudir en casos de emergencia. Los territorios comunales del TIMI constituyen por excelencia los espacios conflictivos entre los grupos sociales predominantes del espacio local. Algunos de estos conflictos se han caracterizado por su gravedad y han influido en las formas de vida de ambos grupos.

Espacialmente la población blanco-mestiza se ubica en el centro de San Ignacio de Mojos. Se podría decir que existe una jerarquía espacial ya que en torno a la plaza central es el lugar donde se disponen las zonas de mayor actividad económica y social, los espacios donde se tejen las redes sociales que articularán la administración y política en Mojos.

Un aspecto significativo lo constituyen las redes familiares y de parentesco que han logrado mantenerse en el poder desde que el primer alcalde de San Ignacio de Mojos tomó su cargo a principios del siglo XX. El cuadro que aparece a continuación

²²⁵ En este sentido son del todo elocuentes las palabras de Monseñor Manuel Eriguren recogidas por Antoni Madueño en las que da a entender la situación polarizada en la que vive el Beni y el abuso por parte de terceros a las comunidades indígenas, señalando que “*aquí en el Beni les hemos dado la caña para pescar a los indígenas y resulta que los ganaderos les han quitado la laguna. Han alambrado las lagunas. Entonces no sirve*” (2009: 410).

(5.1) da muestra expresa de ello si atendemos a los apellidos de los personajes que se han convertido en alcaldes de este municipio.

Cuadro 5. 1. Relación cronológica de Alcaldes de Mojos.

| Nombres y apellidos | Desde | Hasta |
|----------------------------|--------------|--------------|
| Manuel José Parada | 1907 | s/d |
| Emilio Antelo | 1908 | s/d |
| Manuel José Parada | 1912 | 1914 |
| Belisario Jiménez | 1914 | 1916 |
| José Anival Paniagua | 1916 | 1917 |
| Nicanor Gil | 1917 | 1918 |
| Belisario Jiménez | 1918 | 1919 |
| Manuel José Parada | 1919 | 1920 |
| Rómulo Moreno | 1919 | 1920 |
| Eulogio Cortés | 1921 | 1921 |
| Adolfo Natush | 1921 | s/d |
| Manuel Rivero Zabala | 1922 | 1924 |
| Rómulo Moreno | 1928 | 1929 |
| José Justiniano | 1929 | 1929 |
| Hernán Castedo Leigue | s/d | s/d |
| Alejandro Rea Vaca | 1937 | 1938 |
| Gerardo Villavicencio | 1938 | 1938 |
| Hernán Castedo Leigue | 1938 | 1939 |
| Marcial Ruiz Suárez | 1940 | 1943 |
| Sócrates Parada Eguez | 1944 | s/d |
| Bernardo Selum Rossell | 1945 | 1946 |
| Miguel Antonio Rivera | 1946 | 1946 |
| Manuel Rivero Zabala | 1946 | 1946 |
| Marcial Ruiz Suárez | 1946 | 1946 |
| Miguel Antonio Rivera | 1947 | 1947 |
| Miguel Antonio Rivera | 1947 | 1947 |
| Honorato Vélez Hurtado | 1948 | 1948 |
| David Antonio Abularach | 1948 | 1948 |
| Carlos Justiniano | 1950 | 1951 |
| Víctor Velasco Lara | 1951 | 1951 |
| Segundo Herrera Suárez | 1951 | 1952 |

| | | |
|-----------------------------|------|------|
| Lidio Barba Salvatierra | 1952 | 1952 |
| Segundo Herrera Suárez | 1952 | 1952 |
| Demetrio Ruiz Cambará | 1954 | 1955 |
| Víctor Velasco Lara | 1955 | 1956 |
| José María Vaca Rivero | 1956 | 1956 |
| Óscar Ortiz Avaroma | 1957 | 1957 |
| Segundo Herrera Suárez | 1958 | 1959 |
| Jaime Gutiérrez Basadre | 1960 | 1961 |
| Marcial Ruiz Peinado | 1962 | 1963 |
| Emilio Abularach | 1964 | 1965 |
| Celia Figueroa Lino | 1965 | 1966 |
| Alberto Kiyoto M. | 1966 | 1967 |
| Walter Llano Mercado | 1967 | 1968 |
| José Villafani Pardo | 1968 | 1969 |
| Remberto Rivero Gonzales | 1970 | 1970 |
| Sócrates Parada Rossell | 1971 | 1971 |
| Mario Justiniano Pinto | 1971 | 1971 |
| Adhemar Rea Arias | 1971 | 1972 |
| Sócrates Parada Rossell | 1972 | 1973 |
| Segundo Herrera Suárez | 1973 | 1976 |
| Nelly Vélez de Abularach | 1975 | 1979 |
| Mario Justiniano Pinto | 1979 | 1979 |
| Sara Cardona de Gutiérrez | 1980 | 1980 |
| Francisco Velasco Raldez | 1980 | 1982 |
| Hugo Castedo Suárez | 1982 | 1982 |
| Ángel Zelada Suárez | 1982 | 1983 |
| Alfonzo Elorriaga Elorriaga | 1983 | 1983 |
| Ciro Ruiz Peinado | 1983 | 1984 |
| José Bello Camacho | s/d | s/d |
| Dora Rivero Barba | 1984 | 1985 |
| Nelly Vélez de Abularach | 1985 | 1988 |

| | | |
|--------------------------|------|------|
| Ana María Ruiz Antelo | 1988 | 1989 |
| Carlos Abularach Boabum | 1989 | 1990 |
| Ana María Ruiz Antelo | 1991 | 1992 |
| Olga Suárez de Abularach | 1992 | 1993 |
| Marcial Ruiz Antelo | 1994 | 1995 |
| Eduardo Vaca Abularach | 1996 | 1999 |
| Eduardo Vaca Abularach | 2000 | 2004 |

Fuente: Casanovas, 2002: 24-25.

El apellido es indicativo, por tanto, de una determinada posición en el espacio social de Mojos, es un criterio que tácitamente organiza no sólo la estructura social del municipio sino también la política. Los apellidos han servido para conformar alianzas orientadas a consolidar el poder económico pero sobre todo el poder político de estas familias. La composición del club social de San Ignacio, al que la entrada queda restringida a estos grupos de familias, refleja perfectamente este fenómeno. Tiene lugar una absoluta correspondencia entre estos grupos de parentesco y las esferas de poder político pero no sólo. También los ganaderos con más poder económico adquieren un rol privilegiado e influyente a nivel político. Algunos investigadores como Hernán Ávila han llegado a afirmar que *“el origen y conformación de los grupos de poder del Beni y San Ignacio, se debe mucho al carácter de la ganadería extensiva, la estancia ganadera es la base de todo el sistema ideológico de los grupos de poder de esta zona, definiendo un tipo de propiedad privada y una actividad económica”* (Ávila H., 2006: 57). Tal afirmación quedará demostrada a lo largo del presente capítulo.

Quienes tradicionalmente se han presentado como grupo hegemónico han visto mermado su poder al menos en la esfera política. Paralelamente, las comunidades indígenas han visto profundamente alterados sus patrones socioculturales que se encuentran en franco proceso de cambio. Y a la vez, aunque parezca contradictorio, la identidad se ha visto consolidada en todo este complejo proceso. Este juego de relaciones de poder ha llevado a algunos autores a afirmar que en Bolivia *“las relaciones sociales están mediadas por profundas relaciones de conflicto de base étnica”* en donde *“el indígena se ha convertido en el factor estructurante de la nueva realidad social y política”* (Mamani, 2005: 122). Es en el espacio territorial indígena mojeño en donde se reconfiguran las identidades locales. Ya fueron comentadas las negociaciones que subyacen entre los distintos grupos sociales en el proceso de reconfiguración identitaria. Mojos es un clarísimo ejemplo que así lo confirma. Estas

son algunas de las consecuencias que están teniendo lugar en la región mojeña debido a las dinámicas territoriales que en ella operan.

La titulación de tierras se recibió en un principio como una gran victoria lograda por el movimiento indígena mojeño. Si bien pasado algún tiempo y entendiendo que no era suficiente, un sentimiento de frustración se fue apoderando de muchos comunarios. La falta de mecanismos de control que velaran por el cumplimiento de los derechos territoriales estaba aún lejos de hacerse realidad. Los vacíos normativos continúan incluso a día de hoy en la legislación boliviana. Esta situación fue aprovechada por particulares privados y empresas con fuertes intereses en la explotación de tierras por encima de los derechos colectivos de las comunidades indígenas. Por un lado continuó la explotación de recursos efectuada de manera ilegal por parte de *terceros* al interior de algunas comunidades indígenas y por otra el Estado dispuso en los territorios comunales de Mojos del uso y manejo del suelo a su antojo, siendo la construcción de la carretera del TIPNIS un claro ejemplo de ello.

Me atrevo a afirmar que Bolivia es un país que polarizado socialmente. Esta polarización se da en varios niveles. La encontramos entre el oriente y el occidente, la región andina y la región amazónica, entre indígenas rurales e indígenas urbanos, pero por encima de todo aparece entre la población indígena y la población blanco-mestiza, entre *collas* y *cambas*, llegando a adquirir tintes racistas. Los discursos manejados por ésta última son bastante radicales y críticos con los pueblos indígenas (incluso conversando con gente de San Ignacio se escucha el empleo de un término tan arcaico y despectivo como “salvaje” para referirse a los propios indígenas del municipio), principalmente en lo que respecta a la posesión de tierras que consideran excesivas para el uso y disfrute que de ella hacen.

Del mismo modo, los comunarios han mantenido un tipo de discurso que cuestiona de forma feroz la colonización europea, especialmente la del imperio español, a quien señalan como principal responsable de su actual situación. El resentimiento se mantiene aún vivo, lo cual contribuye a perpetuar una imagen de los *carayanas* como férreos enemigos y culpables de todos los males por los que los pueblos indígenas han atravesado.

La concentración de la propiedad de la tierra en pocas manos ha sido una de las características más significativas de la tenencia de la tierra en Bolivia. La inequidad en la propiedad de la tierra ha sido una constante desde la época colonial, concretamente tras el periodo de las misiones. La conflictividad en torno a esta problemática ha constituido una componente histórica. A nivel nacional existen cifras que indican que *“las unidades campesinas e indígenas originarias con hasta cinco hectáreas, que representan el 68% de las unidades productivas del país, cuentan únicamente con el*

1,4% de la superficie total” (MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, 2004: 18)²²⁶.

Esta cuestión está relacionada en el caso del Beni con la apropiación por parte de propietarios ganaderos de las tierras de la región. En la provincia de Mojos el número de hectáreas en manos de empresarios ganaderos supera muy ampliamente la superficie ocupada por las comunidades indígenas. Sin embargo, el problema más acuciante es que, a pesar de las normativas que han regido y que se han encargado de redistribuir la propiedad de la tierra, la ocupación de territorios por parte de la población blanca-mestiza no se ha visto reducida. Paulatinamente los pueblos *originarios* van consolidando sus tierras comunitarias pese a los conflictos existentes. En el caso de la TCO del TIMI estos han tenido lugar de manera muy violenta. Los conflictos han caracterizado el acceso a la tierra. Sobre este asunto trataré con mayor profundidad en el próximo capítulo, ahora me centraré en las relaciones sociales que han tenido y tienen lugar entre los diversos actores sociales en Mojos (la tenencia de la tierra en Mojos está estrechamente asociada a la componente étnica).

Éstas consisten en relaciones interculturales que se caracterizaron históricamente por la subordinación y dominación por parte de la población indígena con respecto a la población blanco-mestiza. Es decir, son relaciones sociales basadas en la dominación de un grupo social frente a otro, en la dominación manifestada a nivel económico y político, situación que se está revirtiendo pero muy lentamente. La categoría étnica juega un papel fundamental puesto que codifica el tipo de relaciones entre ambos. Así, la adscripción a un grupo social u otro ha supuesto la adopción de ciertos roles de comportamiento y de acceso a los medios de producción.

Sin embargo, hay que señalar que en la actualidad la estructura de poder está sufriendo ciertas transformaciones debido a que la población mojeña ha formado parte, como sujetos de acción, en los procesos políticos del municipio de Mojos (Guzmán I., *et al.*, 2007: 198). Es el tercer espacio al que me refería al comienzo del capítulo.

Pero estas relaciones presentan una doble cara. Si bien por un lado son, como hemos visto, relaciones de poder basadas en la dominación, nos hablan también de cierto paternalismo. Prácticamente el 100% de la mano de obra de las estancias ganaderas son peones indígenas o temporeros o jornaleros, que recurren a los ganaderos a solicitar empleo y complementar así los ingresos familiares. Valeriano Matéñez -comunario de Santa Rita- relata que *“las necesidades de la comunidad nos hacen salir, ir a buscar. No hay recursos y hay que salir a buscar trabajo por día, de jornaleros, pero luego uno vuelve a su comunidad a trabajar sus chacos, es el único progreso que tenemos aquí, cultivando”* (entrevista).

²²⁶ Información extraída del informe de la FAO (2001).

En muchas ocasiones los estancieros se convierten en algo más que jefes de estos peones. Entre ambos se establece una relación de dependencia mutua, un sistema de relaciones sociales y laborales en el que entran en juego y son permitidas cierto tipo de concesiones. Por otro lado, al mismo tiempo los ganaderos son sus cómplices y sus verdugos. Las relaciones entre ambos actores sociales están cargadas de tensión, están marcadas por los conflictos y enfrentamientos directos.

En referencia a la cuestión de las relaciones de dominación-subordinación cabe señalar varios aspectos importantes y es que la población indígena de Mojos ha asimilado que la población blanca es quien posee la capacidad de control y del ejercicio del poder en diversos niveles. Este hecho es producto de un discurso de construcción ideológica que se ha venido conformando desde hace mucho tiempo atrás (entrevista a Ismael Guzmán). Se han ido estableciendo de manera paulatina ciertas barreras económicas, socioculturales, de conocimiento, así como barreras políticas que han contribuido a impedir el acceso y la ocupación de un lugar por parte de una población indígena en una sociedad pensada para no-indígenas. Actualmente se vive en Mojos un proceso de cambio político que aportará nuevas oportunidades para estos actores sociales ya que el acceso al gobierno municipal y la participación política de los mojeños ha derivado en un proceso de empoderamiento político a raíz de verse incrementada la resistencia ante la población que tradicionalmente ha tenido en sus manos el poder en Mojos. A día de hoy, las relaciones de poder han sufrido modificaciones por la progresiva incursión del sector indígena en la esfera política.

Wilder Molina y Wigberto Soletto (2002) identifican en su trabajo las transformaciones que han tenido lugar a raíz de la entrada en el ámbito público de las organizaciones indígenas en San Ignacio. La participación política de los movimientos indígenas ha permitido dejar atrás el estatus de los grupos indígenas como meros espectadores del devenir socio-político de la región. Ante este fenómeno del que trataré posteriormente de manera más detenida señalan que “*subsiste una relación de subordinación afectiva en las relaciones entre los comunarios y las familias ricas de los pueblos ganaderos del Beni, que compromete fidelidad por encima de cualquier decisión de las organizaciones indígenas*” (ibíd., 90).

Como consecuencia directa de este tipo de relaciones se establece una dependencia por parte de los indígenas que han establecido contacto con los *terceros*. El estudio de Guzmán, Flores y Paz incluye algunos favores como el “traslado” de enfermos a San Ignacio, la compra de alimentos, el ofrecimiento de empleo o cualquier tipo de visita en la que demuestran la amabilidad y amistad que les une frente a la población indígena cuando así lo requieren sus propios intereses (2002: 169).

Esta dependencia se despliega en un nivel simbiótico puesto que los *terceros* requieren de la mano de obra indígena en sus estancias o para conocer las zonas más ricas en recursos forestales. Incluso en el comercio de carne los ganaderos que poseen estancias próximas a las comunidades más alejadas de San Ignacio aprovechan su situación privilegiada. Es común entre las comunidades que cuentan con mayores dificultades –por su a la hora de trasladarse al centro urbano –como son el caso de Argentina, Fátima, El Buri o Villa Esperanza- con el objetivo de comprar carne, el llegar a un acuerdo con los ganaderos de su entorno. En estos casos el precio de la carne se dispara, siendo los ganaderos conscientes de las escasas alternativas que les quedan a estos comunarios. Lo mismo ocurre cuando las comunidades compran cabezas de ganado, obteniendo cada una de ellas por unos 350 dólares, mucho más de lo que en realidad cuestan en el mercado nacional. Es por ello que investigadores como Urioste y Pacheco señalen que “*estas relaciones, a la vez, limitan el acceso a los recursos que tradicionalmente eran considerados como propiedad de los grupos indígenas*” (2001: 113).

Los mismos autores mencionan “empadronamiento” surgido a raíz de la intensificación de la actividad ganadera para con los indígenas (*ibíd.*, 125) para referirse al tipo de relaciones laborales entre ambos sectores sociales. En términos similares interpretan otros análisis este tipo de relaciones, caracterizándolas como “*relaciones de parentesco ritual- tales como padrinos, compadres y ahijados- entre indígenas e intermediarios*” (Soliz y Aguilar, 2005: 167).

Un aspecto importante es que por un lado los ganaderos generalmente no reconocen la pertenencia étnica de los indígenas ignacianos sino que los consideran campesinos. Y además definen a las relaciones que mantienen con estos de amistosas, negando que estas sean de carácter conflictivo (entrevista a Miguel Arias, Presidente Asociación de Ganaderos de San Ignacio de Mojos).

Para Ismael Guzmán, los actores sociales que articulan la red de relaciones en la provincia de Mojos en torno a la tenencia de la tierra corresponden a 3 categorías: el “gran propietario individual”, en este caso los ganaderos que “*en concordancia con el control de los espacios de poder local y regional, poseen casi la totalidad de las pampas (áreas de pastura natural) de Mojos y una extensión considerable de áreas boscosas*”; el “propietario colectivo”, que correspondería a las comunidades indígenas y por último el “pequeño propietario individual” que según Guzmán son en su mayor parte indígenas (2004: 22-23).

5. 1. 1. Comunidades indígenas.

Dedicaré este punto a comentar lo relacionado con la tenencia de la tierra y los usos del suelo desarrollados en base a los sistemas de producción agrícola indígena.

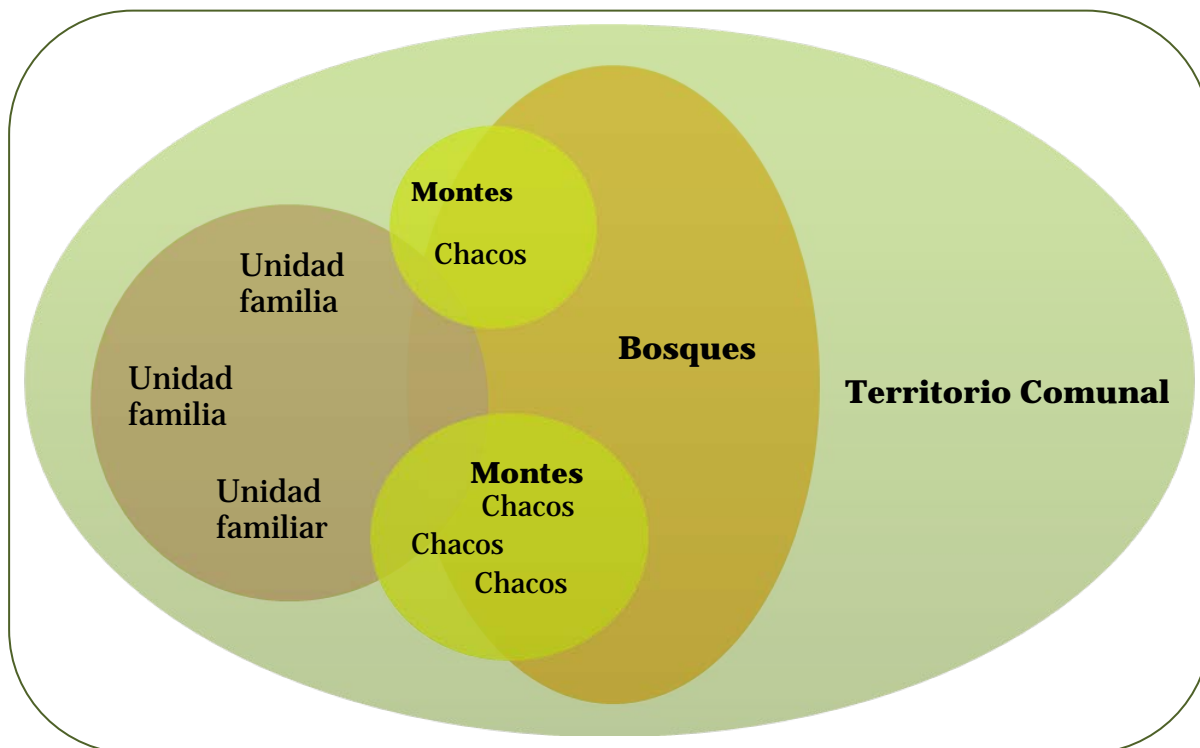
El derecho consuetudinario mojeño regulaba el acceso a la tierra en base a unos mecanismos diferentes a los implantados por el Estado. Sabemos que en el siglo XIX los indígenas de Bolivia adquirieron el estatus de ciudadanos. Desde una visión liberal (y jurídica) esto les permitía convertirse en propietarios de las tierras que trabajaban. El problema que para obtener la titulación de éstas era necesario realizar un contrato de compra en un plazo de 60 días, lo cual no pudo ser asumido por la práctica totalidad de familias indígenas que carecían de recursos monetarios. Lo que ocurrió en el Beni es parte de la historia del despojamiento territorial indígena: los territorios indígenas pasaron a formar parte del mercado de tierras del país y extensas superficies fueron ocupadas por propietarios particulares que mediante la compra obtuvieron los títulos de propiedad; las tierras que antiguamente pertenecieron a los indígenas pasaron a convertirse en haciendas ganaderas y estos en los peones encargados de su trabajo. Ya en el siglo XX se llevó a cabo una reforma agraria que en principio pretendía eliminar el latifundio en las tierras bajas del país. En cambio no hizo más que acrecentarlo, lo que supuso otro revés para los pueblos indígenas de dicha región, entre los que se encontraba el pueblo mojeño.

Posteriormente veremos de qué manera las comunidades indígenas acceden a la tierra. Pero por ahora cabe señalar que los títulos “pro—indiviso” que estaban en manos de las familias mojeñas, les fueron comprados -si bien entre tretas y fraudes- por parte de propietarios privados. En muchos casos las propias comunidades ni siquiera poseían los títulos que demostraran su derecho a la tierra como propietarios colectivos, situación de la que sacaron beneficio los *terceros*. Esto es lo que ocurrió en el territorio comunal ignaciano.

En cuanto al sistema de aprovechamiento ignaciano éste se adapta a las condiciones geográficas y climáticas del TIMI. La organización del territorio se dirige a aprovechar de la mejor manera posible el potencial agroecológico del entorno local. Por este motivo la organización territorial es flexible dado que debe ajustarse constantemente a los condicionamientos tanto ajenos a su manejo como propios de las dinámicas internas (presión demográfica, sobreexplotación de los suelos, ampliación de la frontera ganadera, depredación de recursos forestales, invasión de estancias, etcétera). El paisaje de Mojos está conformado a partir de distintos pisos ecológicos a los que les corresponden distintos tipos de uso y aprovechamiento del suelo manejado en función de las necesidades requeridas por la población indígena. En la figura que

aparece a continuación y la cual representa un territorio comunal indígena, se puede apreciar la existencia de varios espacios internos diferenciados.

Figura 5. 2. Esquema territorial de las comunidades ignacianas del TIMI.



Fuente: Elaboración propia.

En primer lugar podemos diferenciar la zona en la que se ubican las viviendas familiares compuestas de una o dos estancias en función de la situación de cada unidad familiar indígena y del número de miembros que la componen. Los asentamientos familiares se sitúan de manera dispersa en un sector determinado del territorio comunal y generalmente se localizan próximas a caminos y arroyos. Veíamos además en el capítulo 4 que es en estas áreas en donde se levantan algunos elementos complementarios del asentamiento familiar como es el caso de los hornos o las pozas de agua en las que crían los peces. Es habitual encontrar alrededor de las unidades familiares árboles frutales plantados por ellos mismos, así como los animales domésticos que sirven de complemento alimenticio (patos, gallinas, cerdos) o animales de compañía como perros y gatos. El asentamiento familiar está delimitado sin unas demarcaciones físicas concretas aunque sea de sobra conocido y por tanto respetado

por el resto de grupos familiares²²⁷. Y es que a cada una de las familias le pertenece un espacio concreto de aprovechamiento al interior del espacio comunal.

En algunas comunidades ignacianas es posible encontrar hatos de ganado vacuno o incluso ovino, que en algunas ocasiones pertenecen al conjunto de la comunidad y en otras consisten en explotaciones familiares correspondiendo la propiedad a la susodicha familia. Este ganado generalmente pasta libremente por los espacios comunes de la propiedad del territorio indígena. Muchas de las actividades de tipo productivo -como ocurre con el ganado cuando éste es de propiedad comunal- que tienen lugar en los espacios comunes, pertenecen a las actividades que los comunarios sujetos al estatuto comunal de cada una de las comunidades están en la obligación de cumplir. El derecho consuetudinario indígena regula este tipo de actividades así como los mecanismos que de manera consensuada, desde el cabildo, se establecen para dicho reparto organizado por los corregidores, como dirigentes estos de la comunidad, junto con el resto de comunarios.

Al interior del espacio comunal existen a su vez dos zonas diferenciadas en las que tienen lugar formas de aprovechamiento colectivo y formas comunales de propiedad y de acceso a la tierra: los chacos -los que están cada vez más alejados de las viviendas y buscan situarse en las zonas más elevadas del territorio comunal para evitar las inundaciones que echan a perder los cultivos- y las zonas de bosque (aluviales y de galería), que corresponden al hábitat para las especies de fauna y flora que también complementan el sustento del grupo familiar. Un aspecto problemático en el caso de las comunidades indígenas es que las tierras que ocupan suelen ser las más infértiles. Este aspecto influye en el rendimiento de los suelos y en las características de las cosechas, lo cual provoca como consecuencia que los comunarios se vean obligados a efectuar desplazamientos cada vez más alejados de las comunidades en busca de suelos más fértiles. La vulnerabilidad de estos espacios es, por tanto, cada vez mayor. Pero no sólo por dicha razón y es que las estancias ganaderas van avanzado en su ocupación territorial provocando que se amplíen los límites entre ambos.

Cada uno de dichos espacios aparece asociado con un uso de los suelos diverso. Es decir, un uso agrícola sería propio de las zonas más próximas a la vivienda, a diferencia de las zonas de bosque en las que predominaría el uso silvopastoril y forestal limitado. Las estrategias de uso múltiple desplegadas por las comunidades ignacianas se acoplan a los diversos tipos de suelo del espacio territorial del TIMI.

²²⁷ Los únicos hitos que delimitan el territorio comunal mojeño-ignaciano son los mojones rojos que sirven como señalización de aquellas zonas conflictivas entre los linderos de estancias ganaderas y el propio territorio entre los que aún existe una disputa sin resolver.

5. 1. 2. Ganaderos.

Pinto Parada rastrea los orígenes de la ganadería beniana. Se remonta entonces hasta el año 1682 cuando el padre jesuita Cipriano Barace se trasladó desde Santa Cruz hasta el Beni, donde fundó la misión de Loreto (parcialidad mojeño-loretana) con hasta 200 cabezas de ganado vacuno (2001: 77). En base a los datos aportados por Pinto Parada, el incremento de este tipo de ganado fue exponencial puesto que calcula que para el año 1767 -año de la expulsión de los jesuitas- el Beni contaba con más de 50.000 cabezas que se multiplicaron casi por 3, debido al reducido mercado de consumo, alcanzando la cifra de 120.000 hacia los años 30 del siglo XIX (*ibíd.*). Estos datos fueron mucho antes presentados por el explorador francés Alcides D´Orbigny quien dejaba indicado en su libro de viajes que en las primeras décadas del siglo XIX, en concreto del año 1825 a 1830, se produjo un “*aumento inmenso de la cantidad de rebaños*” (vacuno) sin contar con el ganado salvaje de las llanuras de Carmen y de la misión de Reyes que sumaba en total cerca de 120.000 cabezas (2002: 1583, 1586).

No fue hasta bien entrado el siglo XX que el ganado se destinó para consumo de carne. Hasta entonces sólo había sido utilizado para la venta de cuero, lo cual convertía a la pampa mojeña en un escenario grotesco plagado de animales desollados, pasto de rapiñas. De ahí el nombre que adquirió este “*período de la gran matanza de vacunos*” iniciado en 1850 por la demanda creciente desde Brasil de cueros de res (Lehm, 1999: 39). Fue en la primera mitad del pasado siglo que de manera paulatina se fueron constituyendo las estancias ganaderas de la sabana de Mojos por medio, como señala Lijerón, del “encerramiento” del ganado (antecedente de las estancias) pese a que la actividad ganadera se mantenía aún en estado embrionario (1997: 108).

A finales de la década de los 40, dio comienzo la “etapa ganadera” en el Beni debido, en la opinión de Lijerón, a varios motivos: el transporte aéreo y la instalación de mataderos y frigoríficos que facilitaron la especialización y consolidación de esta actividad, propiciada además por el descenso de la producción agrícola y agroindustrial (*ibíd.*, 120-121). Para el año 1950 se manejaban cifras de más de 700. 000 cabezas de ganado bovino en el Beni, lo equivalente al 31,75% del hato ganadero nacional (Romero C., 2003: 94).

Por tanto desde la época en la que los jesuitas introdujeron partidas de vacunos y caballares, en el actual departamento del Beni, esta actividad no dejó de incrementarse.

La colonización proveniente de Santa Cruz de la Sierra fue asentándose gradualmente en la llanura mojeña, instalando sus estancias ganaderas que consolidaban la ocupación del lugar y que consecuentemente empujaban a la retirada o huida de los indígenas que en él habitaban. Lazo Zubieta relata de qué manera los indígenas vieron cómo el territorio que constituía su hogar les era usurpado por los

ganaderos, quienes recurrieron a toda una serie de estrategias, engaños y fraudes para hacer valer su -más que cuestionada- legalidad ante los órganos públicos y demostrar así su condición de propietarios privados de las tierras que habían estado ocupadas por poblaciones indígenas mojeñas (2007: 57). Inmersos en tal situación, los comunarios no veían otra solución que desalojar dichos lugares al tiempo que los *carayanas* incrementaban sus posesiones alambrando superficies de tierras cada vez más extensas. Lazo Zubieta resalta hasta qué punto los colonos se sirvieron del desconocimiento que los pueblos indígenas poseían acerca de la legislación relativa a las propiedades de tierras, dado que estos se habían regido históricamente por su particular manejo del territorio que no implicaba ningún tipo de trámite para obtener títulos como propietarios (la propiedad privada era del todo ajena a estas comunidades) (*ibíd.*, 58). Al mismo tiempo los vacíos que dejaron los pueblos *originarios* al desplazarse con el fin de ocupar nuevos asentamientos, fueron aprovechados por los ganaderos para consolidar sus propiedades de tierras. La apropiación de tierras a favor de los ganaderos es por lo tanto un fenómeno que lleva ocurriendo en la región desde mucho tiempo atrás. Asimismo, el poder económico de este sector aparece vinculado con el poder político en Mojos²²⁸. No por casualidad, uno de los cargos más importantes del partido que tradicionalmente ha gobernado en Mojos, lo ocupa el presidente de la Asociación de Ganaderos del municipio de San Ignacio.

La ganadería a gran escala es una de las grandes batallas que los pueblos indígenas del oriente boliviano están librando. Es este tipo de actividad está causando la creciente deforestación en la provincia de Mojos concretamente y en el departamento del Beni en general. La ganadería extensiva practicada por los grandes hacendados se ha convertido en el primer responsable de la modificación de los usos del suelo en Mojos. Existen dos razones fundamentales que explican este hecho: la ganadería extensiva por va ocupando cada vez más superficie de tierra y además las zonas que pasan a formar parte de los pastos de las propiedades ganaderas se someten durante la época seca a la quema. El pisoteo que sufren estas áreas y la ausencia de rotación influyen igualmente en la pérdida de fertilidad de sus suelos.

Las estancias ganaderas de Mojos han contribuido por tanto a configurar el paisaje de esta región. El ganado constriñe la extensión de la vegetación herbácea puesto que al ser una ganadería de tipo eminentemente extensivo, el ganado se desplaza por amplias superficies territoriales e impide que la vegetación de la sabana se recupere de forma natural.

²²⁸ Hasta las últimas elecciones municipales -abril de 2010- San Ignacio de Mojos estuvo gobernado por el partido político PODEMOS (Poder Democrático Social), partido de tendencia liberal-conservadora y opositor al MAS de Evo Morales, creado en el año 2005 a partir del partido político ADN (Acción Democrática Nacionalista).

A su vez, el ganado se ve limitado por dos factores. El primero lo constituye el régimen de lluvias y la estacionalidad característica de la llanura mojeña y supone una de las mayores problemáticas que preocupan al sector ganadero. Las inundaciones anuales a las que se ve sometido este territorio hacen que en torno a 6 meses al año el ganado permanezca atrapado. Por este motivo es que durante esta época los ganaderos se ven obligados a trasladar a los animales a lugares más altos de las pampas para evitar que estos fallezcan ahogados, lo cual es bastante habitual entre los meses de noviembre a marzo.

Cuando estas aguas se retiran, otros 6 meses de restricciones se suceden y durante este periodo, el ganado se ve obligado a abastecerse en los curichis y yomomos que retienen el agua de lluvia. Tanto las inundaciones como las sequías consisten en limitantes significativos para la supervivencia del ganado. Como medida preventiva para hacer frente a la época de sequías, se construyen al interior de las estancias pequeñas lagunas artificiales que se llenan de agua durante el periodo de lluvias y sirven de fuente de abastecimiento para el ganado. El problema de ello es que llegado cierto punto, este agua estancada se va contaminando y se convierte en dañina para el ganado. Las enfermedades que afectan a éste -entre las que la fiebre aftosa es la más común- son por tanto habituales. Con la intención de paliar dicha situación, desde la *Federación de Ganaderos del Beni* (FEGABENI) se ponen en marcha campañas de vacunación anuales, llegando entorno al 85% de cabezas de ganado que lo reciben (entrevista a Aguilera, Técnico veterinario de FEGABENI).

Otra de las limitaciones son los fuegos de la sabana que tienen lugar durante la época estival. Anualmente son numerosas las cabezas de ganado que perecen atrapadas por la llamas al verse acorraladas en las sabanas y no poder escapar.

Fotografía 5. 1. Imagen de vaca con signos de quedar atrapada en las quemas estivales (TIMI).



Fuente: Virginia Jabardo Pereda

No obstante el ganado aporta ciertos beneficios a nivel ambiental y es que como señala Eden, mantiene el control de plagas de insectos e incluso de otros animales como son las serpientes (muy comunes en la zona), además de contribuir al control de la invasión de plantas arbustivas (1990: 138).

El departamento del Beni se caracteriza por ser una región en la que predomina la actividad ganadera aportando prácticamente la mitad del *Producto Interno Bruto Regional* de los sectores productivos y el 4,7% del PIB agropecuario a nivel nacional según datos de FEGABENI (2001: 3). Se ha llegado a afirmar que “*el departamento del Beni, es el mayor centro de producción de ganado bovino de carne de Bolivia*” habiéndose convertido en el proveedor de los departamentos de La Paz, Santa Cruz o Cochabamba (*ibíd.*, 6). Si atendemos a algunas otras cifras emitidas por los estudios de FEGABENI, se advierte que dicho departamento abastece aproximadamente al 55% del consumo nacional de carne bovina contando con casi el 50% del hato ganadero de Bolivia, es decir, casi 3 millones de cabezas de ganado repartidas en algo más de la mitad de la superficie del departamento, lo cual confirma el carácter eminentemente ganadero de la región así como su potencial agropecuario. A día de hoy tal es la magnitud de esta actividad pecuaria en el departamento del Beni que algunos han llegado a anunciar que la ganadería bovina extensiva “*es el segundo rubro agropecuario en importancia económica nacional y es el sector que ocupa más espacio del territorio nacional (unos 30 millones de hectáreas)*” (Bojanic, 2003: 129).

De entre las provincias del departamento del Beni, Mojos es una de las más importantes en cuanto a la producción ganadera se refiere tras Ballivián, Yacuma y Mamoré, situándose muy por encima de las restantes (véase **cuadro 5. 1**).

**Cuadro 5. 2. Población bovina y unidades productivas ganaderas
(provincias del departamento del Beni).**

| PROVINCIA | CABEZAS | % | UND. PROD. | % |
|------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| BALLIVIÁN | 631.733 | 21.09 % | 2.810 | 33.82 % |
| YACUMA | 633.030 | 21.14 % | 886 | 10.66 % |
| MAMORÉ | 507.942 | 16.96 % | 1.002 | 12.06 % |
| MOJOS | 429.031 | 14.32 % | 1.100 | 13.24 % |
| ITÉNEZ | 271.674 | 9.07 % | 701 | 8.44 % |
| CERCADO | 259.814 | 8.67 % | 550 | 6.62 % |
| MARBÁN | 225.076 | 7.52 % | 829 | 9.98 % |
| VACA DÍEZ | 36.706 | 1.23 % | 430 | 5.18 % |
| TOTAL | 2.995.006 | 100.00 % | 8,308 | 100.00% |

Fuente: Aguilera, 2004: 19

Según el cuadro anterior, la provincia de Mojos es la cuarta en relación al número de cabezas de ganado bovino del departamento del Beni. Sin embargo, es importante señalar que las provincias de Ballivián y Yacuma -primera y segunda en cabezas de ganado respectivamente- presentan una extensión de casi el doble de superficie. Es más, si atendemos a la tabla, Mojos aporta algo más del 13% de entre las unidades productivas de ganado, colocándose en un segundo puesto. Por lo que se podría concluir a partir de estos datos que Mojos es, en proporción, una de las provincias con mayor población bovina del Beni teniendo en cuenta lo que ello acarrea para las comunidades indígenas: una gran pérdida territorial al pasar una importante extensión de hectáreas a manos de los ganaderos.

Según algunos estudios, de los 225.646,53 km² del departamento del Beni, el 47,66% de ellos corresponden a uso ganadero. El 46,4% del hato nacional pertenece a dicho departamento, lo equivalente a 3.026.718 cabezas de ganado, concentrándose el 11,77% del hato ganadero del Beni en el municipio de San Ignacio de Mojos correspondiente a 245 propiedades según el catastro rural del 2003 elaborado por el *Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria* (SENASAG). Estas propiedades, las cuales están en manos de haciendas privadas, ocuparían el 76,20% de la superficie del municipio de San Ignacio (Fabricano *et al.*, 2009: 1994).

Fotografía 5. 2. Imagen de estancias ganaderas al interior de la TCO TIMI





Fuente: Virginia Jabardo Pereda

Existen en el Beni en torno a 7.000 ganaderos; quienes se clasifican según el número de cabezas de ganado que poseen: entre el grupo de los *pequeños propietarios* se encuentran aquellos ganaderos que poseen menos de 500 cabezas de ganado; a estos les sigue los *medianos propietarios* quienes poseen entre 501 y 2500 cabezas de ganado; por último se encuentran los *grandes propietarios*, aquellos que cuentan en su hato de ganado con más de 2500 cabezas (entrevista a Miguel Arias) (véase **cuadro 5. 3 y 5. 4**).

Dependiendo de las fuentes a las que recurramos obtendremos unas cifras u otras las cuales nos indican la disparidad de datos en torno a esta cuestión. A continuación aparecen dos cuadros que dan cuenta de ello.

En base a las cifras que aportan el anterior cuadro: el 94% de los ganaderos corresponden al sector que se considera pequeño –menos de 500 cabezas de ganado- y mediano –entre 501 y 2500 cabezas de ganado-, siendo únicamente el 6% el correspondiente al sector de grandes ganaderos, es decir aquellos que poseen un hato de ganado superior a las 2. 500 cabezas.

Cuadro 5. 3. Clasificación de ganaderos según datos de FEGABENI

| | PEQUEÑOS | MEDIANOS | GRANDES |
|------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Nº CABEZAS | 500 | 501-2500 | MÁS DE 2500 |
| PORCENTAJE | 50% | 44% | 6% |

Fuente: FEGABENI, 2001: 3.

Por el contrario, otras informaciones como las de Roberto Aguilera Guzmán - Médico Veterinario Zootecnista y gerente Técnico de FEGABENI- autor del estudio más reciente publicado hasta fecha de hoy, incrementan notablemente el grupo de pequeños propietarios (2004). Aguilera insiste en destacar que a pesar de que generalmente se ataca a los grandes propietarios éste grupo no es muy significativo en términos numéricos y que además lo que más abunda en el departamento del Beni son los pequeños propietarios, quienes menos perjudican a los indígenas en la ocupación territorial.

Cuadro 5. 4. Clasificación de ganaderos según datos de Roberto Aguilera

| CATEGORIA | RANGO EN CABEZAS | PRODUCTORES | % |
|--------------|---------------------|--------------|----------------|
| GRANDE | MAS DE 2. 501 CAB. | 228 | 3,23% |
| MEDIANO | DE 501 A 2.500 CAB. | 792 | 11,23% |
| PEQUEÑO | MENOS DE 500 CAB. | 6.035 | 85,54% |
| TOTAL | | 7.055 | 100,00% |

Fuente: Aguilera, 2004: 10.

5. 1. 2. 1. Sistemas de explotación ganadera.

El sistema de explotación predominante en la región de Mojos es el que viene denominado como sistema de crianza extensivo mejorado, el cual se desarrolla en grandes extensiones de pastos, del mismo modo que el sistema tradicional de explotación. Sin embargo, a diferencia de éste último se procura una mayor calidad en la sanidad, una monta estacionada y con mayor control, se registra el peso de los animales en su nacimiento y el destete se lleva a cabo con tecnología más avanzada (entrevista a Roberto Aguilera).

Cuadro 5. 5. Sistemas de explotación ganadera

| SISTEMA DE EXPLOTACIÓN | PORCENTAJE |
|------------------------|------------|
| EXTENSIVO TRADICIONAL | 90% |
| EXTENSIVO MEJORADO | 10% |

Fuente: FEGABENI, 2001: 3.

Fotografía 5. 3. Imagen de estancia ganadera del sistema de explotación extensivo al interior del TIMI²²⁹.

Fuente: Virginia Jabardo Pereda

Desde el punto de vista de FEGABENI, el sistema de explotación extensiva conlleva varias ventajas, como por ejemplo que al ser pasto natural, los fertilizantes y pesticidas están ausentes²³⁰. Por otro lado consideran que el sistema de explotación extensivo evita los desmontes que tienen por finalidad ampliar la superficie dedicada a los pastos, lo cual es notablemente beneficioso para el mantenimiento del equilibrio ecológico ya que no atenta contra los ecosistemas de la región.

Sin embargo, este conjunto de alegaciones referidas a los beneficios que acarrea

²²⁹ En esta imagen queda comprobado hasta qué punto las estancias ganaderas arrasan con la cobertura vegetal al interior del territorio comunal de Mojos, en donde se localiza en concreto la estancia que aparece en la fotografía.

²³⁰ Los ganaderos deforestan la vegetación que se encuentra en sus tierras y cultivan pasto que sirve para alimento del ganado. La única cobertura vegetal que permanece son los árboles de motacú que presentan una doble finalidad. Por un lado los frutos de este tipo de palmera son aprovechados por el ganado como aporte dietético y por otro permiten espacios de sombra vitales frente a las altas temperaturas y el calor sofocante que debe soportar dicho ganado.

la ganadería extensiva, no son del todo ciertas puesto que la conversión de usos del suelo a pastos trae como consecuencia la reducción de los bosques de la sabana. Es en estas zonas precisamente en donde las comunidades indígenas obtienen la mayor parte de los recursos destinados a su subsistencia. Por otro lado los desmontes son una constante en la época seca. Durante los meses de junio, julio y agosto es común en la región la presencia de focos de calor llevada a cabo por los ganaderos con la finalidad de lograr la regeneración de los suelos. Las quemas no controladas es una grave problemática del departamento del Beni. En definitiva, las lindes encargadas de separar los territorios indígenas y las estancias ganaderas se van ampliando generalmente a favor de estos últimos. Son cuestiones estas que anticipo pero a las que dedicaré los dos próximos capítulos.

Las razas que predominan en la región son: la Mestiza –cruce de Criolla con Cebú (véase **fotografía 5. 4**)-, la cual supone un 85% del total; detrás de ella la raza Nelore, que representa un 12%; en tercer lugar la Criolla con un 2% y el último 1% corresponde a diferentes razas como la Brahaman, Gir, Gir-Holando, Pardo Suizo, Santa Gertrudis, Chianina, Holandesa y otras (FEGABENI, 2001: 6).

Fotografía 5. 4. Imagen de vaca de raza cebú.



Fuente: Virginia Jabardo Pereda

De los 4 cantones de la provincia de Mojos, el de San Ignacio es el que más cabezas de ganado alberga en su interior.

Cuadro 5. 6. Población bovina de los cantones de la provincia de Mojos.

| | |
|---------------|---------|
| SAN IGNACIO | 139.410 |
| EL DESENGAÑO | 116.910 |
| SAN FRANCISCO | 123.665 |
| SAN LORENZO | 49.046 |

Fuente: Aguilera, 2004: 9

Teniendo en cuenta que la población de San Ignacio está en torno a los 24 mil

habitantes, nos podemos hacer una idea del potencial vacuno que existe en el municipio. A nivel departamental existen datos que nos hablan de la relación numérica existente entre los bovinos y la población humana (Aguilera, 2004) (véase **cuadro 5. 7**). De esta manera podemos hallar el potencial excedentario de carne de la provincia de Mojos.

Cuadro 5. 7. Relación población humana- cabezas de ganado bovino

| PROVINCIA | BOVINOS | HUMANOS | RELACIÓN |
|-----------|---------|---------|----------|
| MOJOS | 429.031 | 21.643 | 19,82 |

Fuente: Aguilera, 2004: 43.

Admitiendo que una relación por encima de 2:1 normalmente genera excedentes, según los resultados la provincia de Mojos es eminentemente ganadera y de exportadores natos puesto que por cada habitante existen casi 20 cabezas de ganado. Y si atendemos a la densidad poblacional de la provincia de Mojos, podemos comprobar tras un sencillo cálculo que si la extensión de la provincia son 3. 361. 600 hectáreas, y la población bovina es de 429. 031 cabezas de ganado, nos da una relación de 7,84 hectáreas por cada cabeza de ganado. Teniendo en cuenta que en San Ignacio de Mojos la TCO del TIMI ocupa más de 90. 000 hectáreas de las que gran parte de ellas constituyen monte alto y que casi la mitad de dicha TCO está ocupada por estancias ganaderas, nos podemos hacer una idea de la pérdida de territorio que están sufriendo las comunidades indígenas ignacianas a favor de las estancias ganaderas.

Fotografía 5. 5. Imagen de ganado y peones





Fuente: Virginia Jabardo Pereda

Los ganaderos alegan que a cada cabeza de ganado le corresponden 5 hectáreas en el sistema de explotación de ganadería extensiva. La problemática que anticipo es que en numerosas ocasiones los ganaderos ocupan extensiones de tierra mucho más amplias de lo que corresponde al hato ganadero que poseen. Un fenómeno que no deja de sorprender por su peculiaridad es el conocido comúnmente como “vacas turistas” o “vacas voladoras”. Éste consiste en el traspaso entre ganaderos de parte de su hato en el momento de contabilizar el número de reses. Esto es debido a que cada cabeza de ganado mayor equivale a 5 hectáreas de pastos naturales. Por esa razón ocurre el singular fenómeno que hace que entre ganaderos se intercambien los hatos que poseen y de esta manera pueden ver incrementada la superficie de tierras recibidas. Esto hace que al interior de las TCOs el territorio disponible para las comunidades indígenas se vaya viendo mermado cada vez más (entrevista a Miguel Aragón, coordinador CPIB (CIDOB)).

5. 2. PROBLEMÁTICAS EN TORNO A LA TENENCIA DE LA TIERRA EN MOJOS.

La tenencia de la tierra en el oriente boliviano aparece ligada a factores adscriptivos raciales y étnicos. La desigualdad en el acceso a la propiedad de la tierra tiene mucho que ver con la etnicidad de los sujetos sociales. Según el estudio de Ismael Guzmán –el cual se basa en datos del desaparecido *Consejo Nacional de Reforma Agraria* (CNRA: datos de hasta 1992)- existe una “*discriminación del tipo de propietario entre indígena y no indígena*”²³¹, lo cual quiere decir que la titulación en base a las TCOs ha permitido compensar el desequilibrio en cuanto a la distribución desigual de la propiedad de la tierra en Mojos. No obstante, la balanza aún se decanta a favor de los *terceros* ya que siendo la población blanca entorno al 20% del total de Mojos, ésta tiene en sus manos más del 50% de la propiedad de la tierra, mientras que los indígenas, que suponen en torno al 80% de la población, poseen la parte restante. Con estas cifras manejadas se confirma que la desigualdad en lo que se refiere al acceso de la tierra, por lo tanto, aún está presente.

La tenencia de la tierra se constituye por tanto en un elemento más del sistema de relaciones sociales de Mojos dado que es un modo de apropiación de los recursos del espacio territorial que mueve los intereses de unos y otros. Ingold nos recuerda que la “tenencia de la tierra” es un concepto inaplicable a las sociedades no occidentales (1986: 134)²³². Si bien esta noción se ha vuelto familiar para los comunarios ignacianos con el proceso de titulación de tierras.

Como ya indicaba al inicio del capítulo, las relaciones de poder en Mojos se han articulado en base a la propiedad de la tierra. Las luchas por el poder tienen mucho que ver con todo este proceso de apropiación territorial y acceso a los recursos naturales. El acceso a la tierra se ha visto modificado históricamente. Vimos de qué manera con la llegada de los jesuitas se fue imponiendo la propiedad privada y más tarde los *terceros*

²³¹ Los datos demuestran que “*los propietarios no indígenas ocupan el 89% de la superficie de tierra reconocidas por el Estado en la zona*” (Guzmán I., 2004: 29). Otros datos muestran que contabilizando la superficie de las 3 TCOs de la provincia de Mojos se establece que “*con la titulación de las TCO sobre las superficies consolidadas durante el proceso de saneamiento la población indígena-es decir, el 81,6% de la población de la provincia- poseería el 48 por ciento de las tierras*” (Fundación TIERRA, 2005: 28).

²³² Discrepo frente Ingold el planteamiento acerca de la asociación entre tenencia de la tierra y sociedades agrícolas por un lado y territorialidad y sociedades de cazadores-recolectores por otro (1986: 135) puesto que pese a que este autor mantenga que ambas corresponden a diferentes términos de la misma cosa, en el caso de Mojos son bien diferentes y a lo largo del presente capítulo se entenderá el porqué. Ingold defiende esta idea desde un planteamiento marxista por el que la tenencia estaría vinculada a las relaciones de producción y es un “*aspecto de las relaciones entre personas como sujetos*” con un matiz más simbólico que ata a las personas a la tierra mientras que por el contrario la territorialidad viene relacionada con las fuerzas de producción, siendo una herramienta de apropiación de la tierra que además sirve para ordenar la organización del trabajo (*ibid.*, 136-139).

fueron llegando en masa con al apertura del oriente boliviano a los nuevos colonizadores.

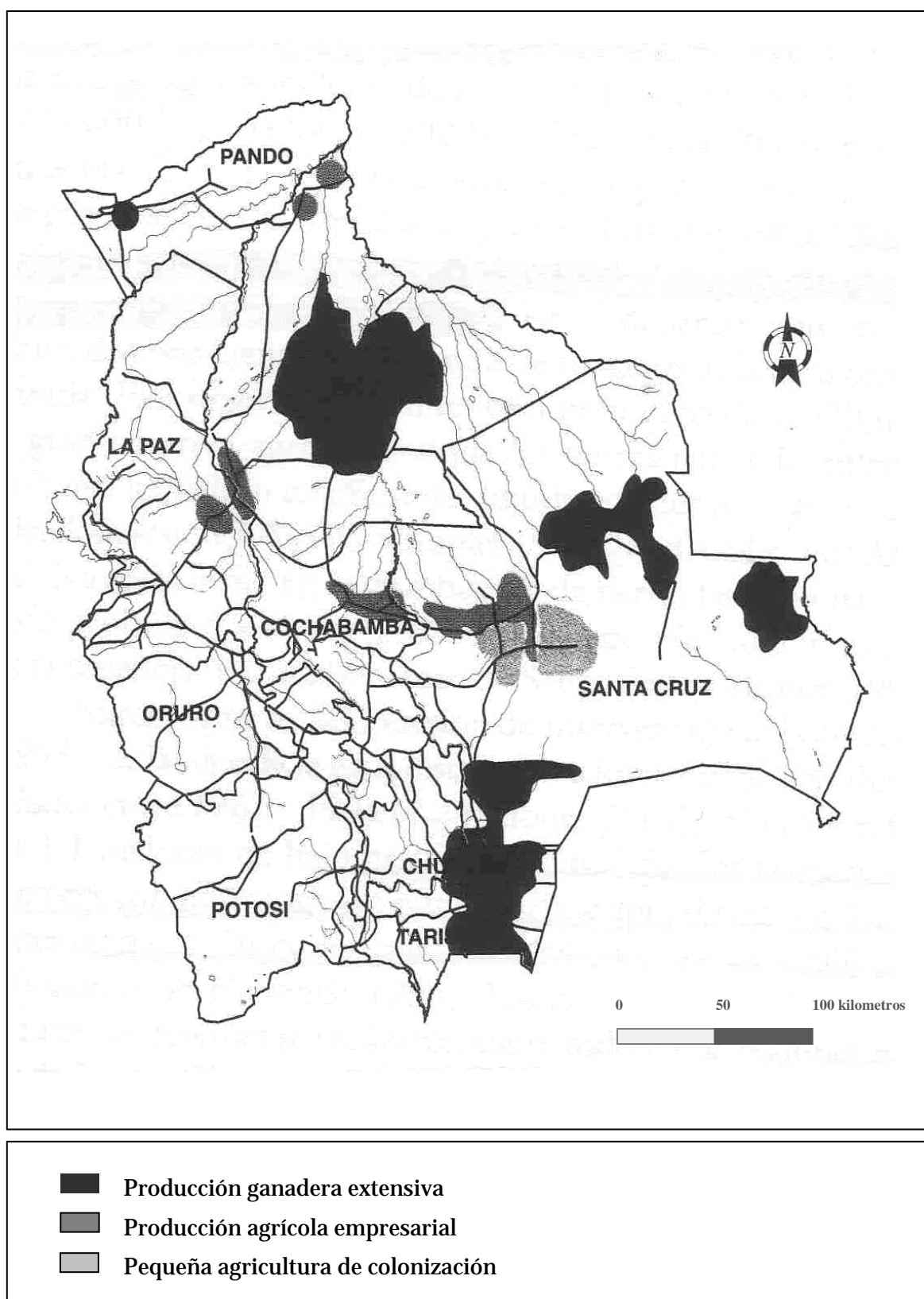
5. 2. 1. Sistemas de tenencia de la tierra.

Los sistemas de tenencia de la tierra en Bolivia y el acceso a la misma se han visto modificados a lo largo del tiempo, según las épocas y los actores involucrados. Esto guarda una estrecha relación con el *tradicional* patrón de ocupación de espacios de las comunidades indígenas. En la región amazónica de Bolivia las poblaciones *originarias* mantuvieron en la época precolonial un patrón de asentamiento disperso que fue utilizado para defender la existencia de tierras baldías y grandes vacíos de población en la Amazonía.

Sabemos que durante el período prehispánico las comunidades indígenas vivían esparcidas por el territorio y seguían un patrón de ocupación espacial basado en las necesidades según la provisión de alimentos (caza, pesca, recolección). Cada área correspondía a una aldea (Block, 1997: 48). Con la llegada de los jesuitas el patrón de asentamiento se transformó. Dio lugar a “*la concentración de poblaciones de distintas lenguas en asentamientos relativamente estables*” (Lehm, 1999: 33). La época republicana supuso de nuevo la modificación en el acceso a la tierra. Por un lado comenzaron a constituirse los grandes latifundios por parte de poderosos terratenientes. Por el otro se produjo lo que Zulema Lehm ha denominado “fugas al monte” por parte de los mojeños quienes optaron por huir a dichos espacios para escapar del sistema de servidumbre y de los abusos cometidos a mano de grandes terratenientes (*ibíd.*, 44). Lehm ha trabajado ampliamente este tema, ya que para ella el hecho de que los indígenas penetrasen cada vez más hacia selva adentro significó la reocupación de sus espacios *tradicionales*. El movimiento milenarista de la *Búsqueda de la Loma Santa* canalizó la reacción del pueblo mojeño, propiciando la rotación de tierras y como consecuencia la oxigenación de los terrenos y la recuperación de los espacios donde practicaban la caza, la pesca o la recolección.

La ocupación de estos espacios territoriales por parte de la población blanco-mestiza se produjo fundamentalmente durante el período republicano pero sobre todo se vio incrementado con la Reforma Agraria del año 1953. Ésta en principio fue pensada para llevar a cabo la abolición de la servidumbre y del latifundio así como la restitución y reparto de tierras entre los campesinos e indígenas, sin embargo lo que realmente ocurrió fue todo lo contrario. Apareció un nuevo latifundio en el país y tanto campesinos como indígenas fueron sometidos igualmente al trabajo servil.

Mapa 5. 1. Áreas de producción agrícola y ganadera en las Tierras Bajas



Fuente: Pacheco P., 1998: 69

En Bolivia existe gran heterogeneidad en lo que se refiere a los sistemas de tenencia de la tierra (véase **cuadro 5. 8**) lo cual ha generado “*una pronunciada segmentación regional*” (CEDIB, 2005: 25).

Cuadro 5. 8. Sistemas de tenencia de la tierra en Bolivia

| Sistemas de tenencia de la tierra | Zona de Ubicación | Características |
|--|--|--|
| I. Sistema agro-silvo pastoril | Amazonía y Chaco | Iniciar desarrollo de la agricultura e integración a los mercados locales y regionales. Uso libre de las tierras comunales para explotación de recursos naturales. La diferenciación entre los miembros de la comunidad de acuerdo a derechos de usufructo y no de propiedad de ciertos pedazos de tierra. |
| II. Sistema de explotación ganadera extensiva | Llanuras Benianas y sabanas chaqueñas | Propiedad formal de la tierra individual y corporativa (con 2 patrones al estilo junker). Peones que trabajan para el Patrón. Vínculos con los mercados a través del “Patrón” o la migración temporal de los peones. |
| III. Sistemas comunales | Zona Andina (Altiplano) | Riesgo climático alto. Formas sofisticadas de organización comunitaria para reducir riesgos y precautelar bienestar común. Propiedad comunal discontinua (en varios pisos ecológicos). Mayormente producción y ganadería familiar. La asignación (no de su propiedad pero sí a través de decisiones comunales o autoridades naturales de la comunidad. |
| IV. Sistemas Familiares de producción | Zonas Subandinas | Organizaciones en comunidades. Con menor riesgo climático y mayor vinculación con los mercados. Propiedad comunal con usufructo individual. |
| V. Sistemas Familiares de Propiedad | Zonas de Expansión Agrícola en el extremo Oriental de la Cordillera de los Andes | Explotación agrícola complementaria a la de las zonas Altiplano y valles. Estructura comunitaria débil. La función de la organización comunitaria es para fines de titulación de tierras y demanda de servicios públicos. Derechos de propiedad, disposición y uso de tierras están bien establecidos. |
| VI. Sistemas | Valles Integrados y | Poca o ninguna organización territorial, si ésta |

| | | |
|--|-----------------------------------|--|
| Familiares o Individuales de propiedad (tipo <i>farmer</i>) | regiones orientales de Santa Cruz | existe mayormente se trata a nivel gremial con fines de comercialización o negociación frente al Estado. Con organización cooperativa cuando la tecnología de producción es costosa y requiere de esfuerzos conjuntos. |
|--|-----------------------------------|--|

Fuente: CEDIB, 2005: 25.

En base al cuadro anterior comprobamos que en la Amazonía predomina un sistema agro silvopastoril, característico de las poblaciones indígenas, definido por estar regulado por el uso que éstas hacen de los suelos y por los requerimientos de los recursos naturales del entorno que no tienen porqué ajustarse a las constricciones asociadas a la propiedad de la tierra sino a las necesidades de la unidad familiar. La propiedad comunal propia del sistema de manejo indígena y de acceso a los recursos se rige por los usos y costumbres locales de estas poblaciones. Por el contrario, el sistema de ganadería extensiva de la sabana beniana sí que está sujeto a, en la mayor parte de los casos, la propiedad individual de la tierra, o corporativa, en la cual se emplean peones, generalmente temporeros.

En función de las investigaciones consultadas se encontrarán diversas clasificaciones. La siguiente da muestra de ello (CEDIB, 2005: 22):

- El acceso abierto o libre, que no define los derechos de propiedad.
- La propiedad comunal en la que los derechos sobre la propiedad corresponden a una comunidad en concreto y es ésta la encargada en regular las normas de uso y acceso a los recursos.
- La propiedad privada individual donde los derechos corresponden a personas individuales o entidades, a pesar de que el Estado pueda intervenir.
- La propiedad estatal en la que el Estado cuenta con los derechos de propiedad los cuales pueden ser transferidos a personas individuales o comunidades.

En la región de Mojos predomina el sistema de explotación correspondiente a la ganadería extensiva. Indiqué que es el sector de los ganaderos el más influyente a nivel político y económico en la provincia de Mojos. Durante muchos años las instituciones encargadas del reparto de tierras han estado en manos de este grupo social, quien se ha visto enormemente favorecido en lo que respecta a la adjudicación de títulos de propiedad. La inequidad con respecto a la distribución de la tierra en Mojos y la fuerte concentración de la tierra en manos del sector ganadero ha estado presente en todo momento durante dicho proceso. Inequidad que guarda estrecha relación con la

inequidad a nivel político, social y étnico²³³, inequidad de género²³⁴ o jurídica (Huanca, 2004).

Según Romero Bonifaz “*la estructura concentrada de tenencia de tierra deriva de la instauración de un sistema político altamente excluyente (...)*” (2003: 29). La articulación de estructuras sociales de carácter excluyente influye de manera directa en la confrontación y condiciona al mismo tiempo las relaciones sociales en las tierras bajas de Bolivia. Este fenómeno aparece vinculado con relaciones de poder a las que me he referido anteriormente y es que “*a partir de la concentración excesiva de la tierra en pocas manos, se genera un conjunto de relaciones económicas sustentadas en un sistema de explotación económica, con características servidumbres en muchos casos, y de alta explotación de la fuerza laboral, indígena y campesina*” (ibíd.). Un factor fundamental en este proceso es para Romero Bonifaz “*la estructuración económica homogénea que no ha permitido diversificar la economía*” (ibíd., 30).

5. 2. 2. Tipos de propiedad agraria. El caso del Territorio Indígena Mojeño-Ignaciano.

Existen en Bolivia hasta seis tipos distintos de propiedad de tierras, estipuladas por la Ley INRA. Esta investigación se decanta por adoptar dicha clasificación por ser la que más se ajusta al espacio territorial que constituye el objeto de estudio de este trabajo. De acuerdo a la clasificación presente en dicha ley los tipos de propiedad son: *Solar Campesino, Pequeña Propiedad, Mediana Propiedad, Empresa Agropecuaria, Tierras Comunitarias de Origen (TCO's) y Propiedades Comunarias*²³⁵.

❖ El *Solar Campesino* constituye el lugar de residencia del campesino y su familia. Es indivisible y tiene carácter de patrimonio familiar inembargable;

❖ La *Pequeña Propiedad* es la fuente de recursos de subsistencia del titular y su familia. Es indivisible y tiene carácter de patrimonio familiar inembargable;

²³³ El 89% de las tierras están ocupadas por propietarios no indígenas. Para ello la investigación del sociólogo Ismael Guzmán establece dos categorías en relación al apellido del propietario, siendo la única referencia razonable para ello.

²³⁴ La mujer aparece como propietaria en un 19% del total de las propiedades, de las cuales la mujer indígena solo representa un 9% como propietaria individual y un 2% mancomunada con el esposo o como parte de la comunidad.

²³⁵ Ley INRA (artículo 41, Clasificación y extensiones de la Propiedad Agraria) (véase <http://constituyentesoberana.org/info/?q=texto-ley-agraria>)

❖ La *Mediana Propiedad* es la que pertenece a personas naturales o jurídicas y se explota con el concurso de su propietario, de trabajadores asalariados, eventuales o permanentes y empleando medios técnico-mecánicos, de tal manera que su volumen principal de producción se destine al mercado. Podrá ser transferida, pignorada o hipotecada conforme a la ley civil;

❖ La *Empresa Agropecuaria* es la que pertenece a personas naturales o jurídicas y se explota con capital suplementario, régimen de trabajo asalariado y empleo de medios técnicos modernos. Podrá ser transferida, pignorada o hipotecada conforme a la ley civil;

❖ **Las Tierras Comunitarias de Origen son los espacios geográficos que constituyen el hábitat de los pueblos y comunidades indígenas y originarias, a los cuales han tenido tradicionalmente acceso y donde mantienen y desarrollan sus propias formas de organización económica, social y cultural, de modo que aseguran su sobrevivencia y desarrollo. Son inalienables, indivisibles, irreversibles, colectivas, compuestas por comunidades o mancomunidades, inembargables e imprescriptibles;** y,

❖ Las *Propiedades Comunarias* son aquellas tituladas colectivamente a comunidades campesinas y ex haciendas y constituyen la fuente de subsistencia de sus propietarios. Son inalienables, indivisibles, colectivas, inembargables e imprescriptibles.

Las *Tierras Comunitarias de Origen* constituyen por tanto un tipo *per se* de propiedad de la tierra reconocido por la legislación oficial del país y como tal se ajusta a los derechos estipulados en la ley, que deben ser respetados. Vimos en el segundo capítulo hasta qué punto la condición de indivisibilidad se pone en entredicho. La TCO del TIMI es un claro ejemplo que así lo ilustra. Me atrevo a afirmar que, en buena medida, el resto de características se cumplen.

La Constitución Política del Estado por su parte añade varios puntos que considero del todo pertinentes incluir:

I. La propiedad agraria individual se clasifica en pequeña, mediana y empresarial, en función a la superficie, a la producción y a los criterios de desarrollo. Sus extensiones máximas y mínimas, características y formas de conversión serán reguladas por la ley. Se garantizan los derechos legalmente adquiridos por

propietarios particulares cuyos predios se encuentren ubicados al interior de territorios indígena originario campesinos.

- II. La pequeña propiedad es indivisible, constituye patrimonio familiar inembargable, y no está sujeta al pago de impuestos a la propiedad agraria. La indivisibilidad no afecta el derecho a la sucesión hereditaria en las condiciones establecidas por ley.
- III. El Estado reconoce, protege y garantiza la propiedad comunitaria o colectiva, que comprende el territorio indígena originario campesino, las comunidades interculturales originarias y de las comunidades campesinas. La propiedad colectiva se declara indivisible, imprescriptible, inembargable, inalienable e irreversible y no está sujeta al pago de impuestos a la propiedad agraria. Las comunidades podrán ser tituladas reconociendo la complementariedad entre derechos colectivos e individuales respetando la unidad territorial con identidad²³⁶.

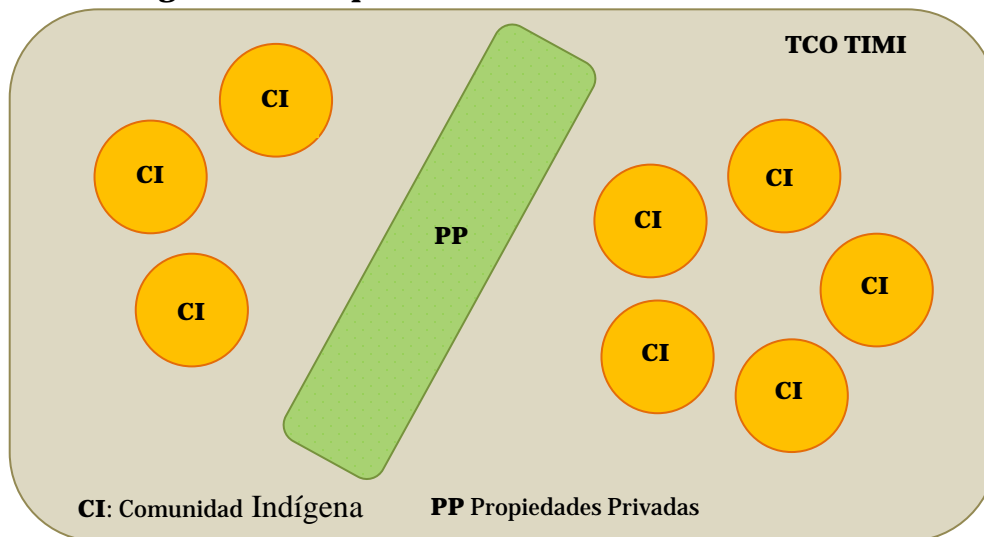
He querido resaltar algunos aspectos contenidos en este artículo de la CPE que considero merecen la pena ser brevemente comentados. En primer lugar llama la atención que pese a que se reconozca en varias ocasiones la indivisibilidad de los territorios indígenas, se reconozca al mismo tiempo la *legalidad* de los predios que se localizan al interior de un territorio comunal, lo cual puede resultar contradictorio. Esto nos lleva a pensar en el amparo legal que reciben los *terceros* que poseen propiedades insertas en cualquier TCO, como ocurre en el TIMI (véase **mapa 6. 5**). Mientras posean los títulos de propiedad no se cuestiona el tipo de actividad económica y de producción que se desarrollan en sus predios, hecho que incide en la vulnerabilidad de las comunidades indígenas ante la explotación masiva de recursos naturales que lejos de verse frenada se legaliza. Paradójicamente el texto constitucional expresa la defensa y garantía de los territorios indígenas comunales lo cual resulta complicado de entender si tenemos en cuenta que a la vez da luz verde a las actividades de explotación de recursos en los mismos.

Las TCOs constituyen un tipo específico de propiedad de la tierra que pese a basarse en la integridad de la misma -aspecto fundamental de la noción de territorio indígena- es sabido que esto no ocurre, al menos en el caso TCO TIMI, puesto que las estancias ganaderas lo impiden. Es decir, no existe continuidad interna en el territorio comunal ignaciano debido a la existencia de propiedades privadas. Como consecuencia

²³⁶ CPE (artículo 394) (véase <http://www.umsa.bo/umsa/uploads/transparencia/ConstitucionPoliticaDelEstado.pdf>)

de ello se hace muy difícil el lograr un desarrollo integral y colectivo del conjunto de la comunidad mojeño-ignaciana (entrevista a Wilder Molina). Molina afirma que las TCOs no tienen correspondencia con la noción de territorios indígenas. Según este investigador, estos no tendrían cabida en la estructura territorial actual. Al ser tituladas las áreas indígenas pasan a convertirse en propiedades privadas colectivas. Para este autor las TCOs se podrían considerar como “residuos”, al mismo tiempo que reconoce la gran dificultad de que los territorios que en su día fueron ocupados por población *originaria*, sean restituidos de manera íntegra. Hay que ser realistas y tener plena conciencia de que es enormemente difícil que esto ocurra puesto que los grupos sociales asentados en estos espacios no cederán parte de su patrimonio ni concederán parte de la titularidad de la propiedad de la tierra a las poblaciones indígenas, que como la mojeña, lo reclaman actualmente.

Figura 5. 3. Esquema discontinuidad interna TCO.



Fuente: elaboración propia.

Mencionaba que uno de los requisitos de la demanda de la TCO del TIMI fue la continuidad geográfica. Sin embargo es la discontinuidad territorial de las comunidades indígenas de Mojos una de las características definitorias de las tierras comunitarias de la región. Constituye además una de las cuestiones que más problemas ha causado a la hora de conceder títulos de propiedad. El desmembramiento territorial ha venido provocado por la “*caótica e irrespetuosa división administrativa del territorio*” (Lema, 1997). En la opinión de esta investigadora, la creación de los distritos municipales indígenas supone una gran ocasión para compaginar a nivel de organización social las jurisdicciones territoriales puesto que no existe correspondencia en relación a la división político administrativa (*ibíd.*).

Algunos autores como Ismael Guzmán nos aclaran lo que en realidad ocurre. Éste, al explicar la conformación por parte de las comunidades del TIMI, enfatiza la afinidad orgánica de dichas comunidades así como la articulación de las mismas en base a un fuerte sentimiento de pertenencia al territorio de la TCO en cuestión. Se mantiene por tanto la coherencia con el resto de comunidades que tradicionalmente decidieron constituirse en organización territorial (entrevista). Aquí entra en juego la cuestión étnica (las comunidades del TIMI pertenecen al pueblo mojeño-ignaciano²³⁷). En esta TCO el sentimiento de pertenencia étnica, orgánico, es muy fuerte y es por tal motivo que algunas comunidades, como ocurre con Florida, han decidido formar parte del TIMI y no del TIM o de la misma Subcentral de San Lorenzo, la cual engloba a comunidades con predominancia étnica más trinitaria y no ignaciana. Lo mismo sucede con Ichasi Awásare o Chanequere, que poseen el mismo referente étnico.

Las *Tierras Comunitarias de Origen* tienen por un lado la obligación de cumplir la *Función Económico-Social*. Por otro lado la propiedad privada supone una amenaza para la organización sociocultural y productiva de las comunidades locales ya que conduce a la privatización de tierras que se encuentran al interior de las propias TCOs. En la propia definición de TCO, éstas se entienden como el hábitat de los pueblos y comunidades indígenas que en ellas habitan y donde desarrollan sus propios sistemas socioeconómicos y culturales, los cuales les permiten mantener sus formas de vida. La propiedad privada incursiona de manera negativa en la organización de estas sociedades además de influir en las leyes que rigen el funcionamiento de las mismas.

Conocemos además las diferentes concepciones de tierra y territorio manejados por la población indígena y los grandes propietarios, en este caso el sector ganadero. Para estos últimos la tierra supone un enorme potencial económico y un importantísimo recurso con el que incrementar sus beneficios y consolidar su estatus económico y por lo tanto social. Las TCOs para los ganaderos se han convertido en el mayor obstáculo frente al desarrollo económico del departamento y en aquello que, en definitiva, impide al país emprender el despegue a nivel económico. Los ganaderos de Mojos consideran que la superficie de tierras concedidas a las comunidades ignacianas es demasiado extensa para el sistema de producción de éstas. No entienden el interés que tienen los indígenas en poseer tan amplias superficies de tierras si, en su opinión, no saben cómo trabajarla desde el punto de vista productivo. Constituye este otro indicio que demuestra de qué manera difiere la percepción que del espacio territorial

²³⁷ No ocurre lo mismo en otras TCOs de la provincia de Mojos como pueden ser el TIM o TIPNIS. En relación a la primera de ellas el referente en la demanda de TCO es más de tipo espacial puesto que además de la existencia de comunidades ignacianas, las hay también que pertenecen al grupo étnico yuracaré, movima o chimán, con presencia por tanto de un fuerte componente multiétnico.

poseen los ganaderos frente a la percepción indígena que no establece distinciones en lo que se refiere al agro. Aquellos, mantienen una visión marcadamente mercantilista y agrarista: para ellos no es necesario que las comunidades dispongan de espacios de tanta extensión si la tierra no es explotada con fines comerciales. Reproducen las lógicas de explotación que han definido las políticas agrarias en Bolivia en las que aún subyacen algunos prejuicios que condicionan el acceso a la propiedad de la tierra en función del grupo social y como bien señalan Chirif y García Hierro “*que el prejuicio es fuerte da muestra de la obstinación estatal en arrebatar las tierras del control indígena y entregarlas a la colonización*” (2007: 29).

El Presidente de la Asociación de Ganaderos de San Ignacio de Mojos -Miguel Arias- comenta que Mojos es la tercera provincia ganadera del departamento del Beni y que casi el 40% de la región vive de este sector (entrevista). Según datos de dicha asociación, el sector ganadero ocupa una superficie de 2.400.000 hectáreas en dicho departamento mientras que la superficie ocupada por los territorios indígenas es de 3.500.000 hectáreas. Por lo que si ellos son fundamentales para el desarrollo de la región, deberían poder utilizar una superficie mayor de la que disponen las comunidades indígenas. Los territorios de la región suponen para los ganaderos las áreas que posibilitan la cría de ganado bovino y la constitución de las tierras comunitarias supone como consecuencia, la imposibilidad de dedicar dichos espacios a la producción ganadera, lo cual se traduce en pérdidas económicas para el sector. Incluso han cuestionado firmemente las leyes que amparan la posesión de tierras colectivas de los pueblos indígenas y el reconocimiento de la propiedad colectiva, llegando a denominar a estos como los *nuevos terratenientes*, poseedores de grandes latifundios consolidados en forma de TCO. En la visión de los ganaderos priman los aspectos relativos a las utilidades de la tierra frente a los aspectos relativos a la subsistencia que la posesión de ésta supone para los mojeño-ignacianos.

Es común entre quienes se identifican con este sector escuchar declaraciones en las que califican la Ley INRA como paternalista por dirigirse, en palabras suyas, a favorecer a los pueblos indígenas. Lo consideran como freno al desarrollo por el hecho de imposibilitar la consolidación de un mercado de tierras, acusando además de la escasa productividad de los territorios en los que prevalece el modelo local de producción indígena, el cual creen se verá abocado a la exclusión frente a un avance económico del resto del país en caso de que decida mantener su tendencia. Desde el sector empresarial (incluso campesino) se considera que no trabajan lo suficiente como para hacer rentables las tierras de la región. No tienen en cuenta la manera de vivir y trabajar de los indígenas, quienes defienden por su parte que trabajan al día, para vivir,

sin intención de lucrarse. De ahí el calificativo de “flojos” con el que la población blanca denomina a los indígenas.

Los *terceros* cuestionan que no exista una tendencia a generar crecimiento económico a pesar de las potencialidades reales de la tierra. Desde una lógica productivista propia del sector ganadero se considera que lo óptimo sería poseer una superficie compacta, un predio con carácter de continuidad con la finalidad de producir mayor ganado. De forma similar, para un campesino lo más adecuado es que el total del número de hectáreas que posee estén cultivadas en su conjunto.

A diferencia de estos, el sector indígena opta por poseer la mayor cantidad posible de monte, puesto que es en estos espacios donde se ve garantizada su supervivencia. A pesar de que los montes sean considerados por los ganaderos como tierras ociosas, para el sector indígena suponen espacios territoriales en producción constante puesto que es aquí donde se reproducen los animales que serán cazados y aportarán la carne a la comunidad, los materiales para la construcción de viviendas, para la fabricación de medios de transporte (carretones, canoas), materiales para la elaboración de herramientas y utensilios, son además los espacios donde se encuentran las plantas medicinales, etcétera (entrevista a Ismael Guzmán). Desde esta perspectiva, la titulación de tierras, incluso la ampliación de la demanda por parte de las comunidades indígenas, vendría a ser considerada como una reparación histórica en la que los sectores que más territorios han perdido desde la colonia, saldrían beneficiados de la manera más justa posible. Por ello no es de extrañar que la actitud que adoptaron los *terceros* constituyó uno de los motivos que obstaculizó el proceso de saneamiento al ralentizarlo, ya que los grandes propietarios presentaron una férrea oposición.

Del mismo modo, otros estudios se refieren a esta problemática dando a conocer la contradicción resultante entre el modo de explotación de uno y de otro sector:

“algunos propietarios medianos y grandes sostienen que la Ley INRA está generando dos clases de ciudadanos: los indígenas con derechos preferenciales y privilegiados, que no tienen que trabajar para retener su propiedad, ni pagar impuestos; y los productores agrícolas (como se llaman a sí mismos), con títulos de propiedad, que pagan impuestos, generan empleos y crean prosperidad pero sufren de inseguridad jurídica y violación a sus derechos” (Barragán, 2004, cit. en Urioste y Kay, 2005: 54).

Se genera por consiguiente un choque de lógicas de producción. Desde la cosmovisión indígena se advierte una manera diferente de relación productiva con el espacio.

Pero, ¿de qué manera se puede justificar el hecho de que las comunidades indígenas requieran de superficies más amplias de lo que hasta ahora ha sido titulado? Según estudios efectuados desde CIPCA, se calcula que en estos momentos la superficie de tierra corresponde a 29 hectáreas per cápita (entrevista a Ismael Guzmán). Esta cifra, si bien puede parecer más que suficiente, no tiene en cuenta que gran parte del espacio territorial se refiere a la ocupación por asentamiento de la comunidad así como a espacios de bajura o curichis que existen dentro del territorio. Aquí entra en juego una contradicción de lógicas y es que desde una perspectiva productivista, el espacio por habitante debería ser mucho más reducido. Esta idea es propia del discurso de los ganaderos quienes lo utilizan para justificar sus acciones, su postura. Y esto deriva en una cuestión fundamental, ¿qué se entiende por lo necesario para la subsistencia de una familia? Como bien explica Ismael Guzmán “*en términos sociales hay un problema de discriminación*” en relación a esta problemática, puesto que desde la *Nueva Constitución Política del Estado* se establece la categoría de empresario -aquel que posea una superficie superior a las 5.000 hectáreas- viéndose reducida esta cantidad a 50 hectáreas en el caso de campesinos (entrevista).

Cabría tener en consideración el incremento demográfico que si muestra una tendencia alcista reducirá la proporción del espacio territorial en relación a la población indígena que lo habita, la cual quedaría constreñida en el mismo y vería enormemente reducido el acceso a los recursos naturales.

Por último, cabe mencionar el aspecto que se refiere a la complementariedad de la propiedad individual y colectiva de las comunidades indígenas y que aparece en la CPE. En realidad, las acciones a título individual llevadas a cabo en los territorios indígenas están sujetas a la función social y comunitaria que los estatutos de cada una de las comunidades dictaminan y que los comunarios deben desempeñar. Por lo tanto, lo estipulado en este sentido en la CPE posee un papel meramente figurativo dado que son las altas jerarquías de las comunidades quienes priman unas acciones sobre otras, las cuales quedan reguladas mediante los usos y costumbres que rigen en cada comunidad.

5. 2. 3. Modalidades de acceso a la propiedad de la tierra.

CIPCA efectuó un estudio publicado en el año 2008 en donde diferencia dos modalidades de acceso a la propiedad de la tierra por parte de los indígenas en la región de Mojos:

- “Acceso a la tierra bajo el sistema de propiedad colectiva”
- “Acceso a la tierra bajo el sistema de propiedad familiar” (Guzmán I., *et al.*, 2007: 201-203).

La primera modalidad es la más común y la que prevalece actualmente a pesar de que los espacios a los que tienen posibilidad de acceder las comunidades mojeñas sean cada vez más reducidos, con los suelos menos fértiles y caracterizados por verse delimitados por mojones y alambradas, lo cual dificulta la movilidad de la población indígena (*ibíd.*, 202).

El segundo fue el más desventajoso para los indígenas puesto que perdieron más cantidad de tierra a manos de los nuevos propietarios, quienes presentaron títulos de propiedad que o bien no siempre se ajustaban al marco de la legalidad o bien los obtuvieron tras persuadir a estas familias sobre la venta de sus propiedades. El error que cometieron los indígenas fue confiar en la acreditación del derecho consuetudinario como garantía de posesión de las propiedades. Al no haber efectuado el trámite de titulación de tierras siguiendo los mecanismos jurídicos que dictaminaba la ley, estas familias se vieron obligadas a ceder sus tierras a *terceros* quienes, en muchos casos, acabaron convirtiéndose en sus patronos (*ibíd.*, 203). Pedro Añez - Secretario de Tierras y Territorio de la TCO del TIMI y de Recursos Naturales desde el año 2010- explica de qué manera se aprovecharon los *terceros* de los títulos “pro-indiviso” firmados durante el gobierno de Paz Zamora (entrevista). Estos títulos se concedían al conjunto de la comunidad, al conjunto de familias de la misma, las cuales se convertían en propietarias al mismo nivel unas de otras. Esto suponía que ninguna de ellas podía disponer del territorio comunitario de manera individual, puesto que la propiedad era colectiva. Pese a ello, los *terceros* compraron títulos de propiedad a algunas de estas familias, lo cual derivó en los conflictos que tienen lugar en la actualidad.

Miles de hectáreas fueron dotadas a propietarios privados en todo el país, especialmente en los departamentos de Santa Cruz, Pando y Beni. Acerca de este último existen datos registrados que indican las principales familias que se vieron beneficiadas de las dotaciones de tierras por las instituciones agrarias encargadas de ello y el

respectivo número de hectáreas correspondiente a cada superficie otorgada. El siguiente cuadro recoge dicha información.

Cuadro 5. 9. Familias terratenientes en el departamento del Beni.

| Propietario | Nº de predios dotados por el CNRA | Superficie dotada por el CNRA en Has. | Superficie mensurada por el INRA en Has. |
|------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|
| Familia Llapiz | 23 | 98.584 | 26.031 |
| Familia Guiteras | 11 | 73.536 | 26.634 |
| Familia Sattori | 8 | 23.340 | 79.851 |
| Familia Bruckner | 40 | 126.555 | 5.715 |
| Familia Quaino | 9 | 23.484 | 18.996 |
| Familia Dellien | 10 | 29.718 | 25.594 |
| Familia Avila | 7 | 14.389 | 51.132 |
| Familia Nacif | 10 | 48.649 | 36.623 |
| Familia Antelo | 12 | 45.843 | 36.567 |
| Familia Salek | 1 | 50.697 | 46.457 |

Fuente: INRA, 2008 cit. en Valenzuela, 2008: 19.

Echando la vista atrás, a la lista de alcaldes que han pasado por el municipio de San Ignacio de Mojos desde principios del siglo XX, llama la atención si comparamos con el **cuadro 5. 1**, el nombre de la familia Antelo, que ha ocupado la alcaldía de dicho municipio hasta en 4 ocasiones y a su vez ha sido durante el mismo siglo una de las grandes beneficiadas no sólo del departamento del Beni sino de la provincia de Mojos en lo que respecta a dotaciones agrarias. A día de hoy, una de las familias con más poder en Mojos, tanto a nivel económico como político, es la familia Abularach, de origen israelí (considerados turcos en la región).

Otro informe elaborado por INRA nos da detalles de las dotaciones llevadas a cabo en el departamento de Santa Cruz. Esta información muestra que la misma familia –Antelo- recibió hasta 12 dotaciones correspondientes a 116.647 hectáreas en la provincia de Ñuflo Chávez del departamento de Santa Cruz. No deja de sorprender que la familia Antelo se vio beneficiada con más de 45.000 hectáreas en el Beni lo cual equivale a la superficie de uso real correspondiente al TIMI puesto que no hay que olvidar que la mitad de esta TCO está ocupada por estancias ganaderas (cuestiones que explicaré con mayor detalle en el próximo capítulo).

Si nos fijamos atentamente descubrimos otro dato interesante y es que la familia Justiniano Ruíz -apellidos que aparecen también en varias ocasiones en la lista de alcaldes mojeños (véase **cuadro 5. 1**)- recibió en el mismo periodo 2 dotaciones

también en Santa Cruz, que sumaban entre ambas hasta 43.580 hectáreas (Valenzuela, 2008: 18). Otros estudios afirman igualmente que entre 1952 y 1985, las empresas ganaderas y forestales del oriente boliviano salieron reforzadas gracias a las ayudas financieras y crediticias recibidas de manos del Estado para la consolidación de las grandes y medinas propiedades, siendo la ganadería bovina el caso paradigmático del Beni (Paz Ballivián, 2003: 54-55).

Todo esto demuestra la correlación entre el sector ganadero, los grandes terratenientes, y el poder político.

Recordar el particular asunto de las “vacas voladoras” o “vacas turistas” nos obliga a incluir una información que cuando mencionaba ese extraño fenómeno no comenté. Y es que el Estado ha beneficiado la consolidación de las grandes propiedades con la finalidad de que éstas sean orientadas al mercado, para lo que determina para las dotaciones de tierras las siguientes proporciones:

- 500 hectáreas para la pequeña propiedad ganadera.
- 2.500 hectáreas para la mediana propiedad ganadera.
- 50.000 hectáreas para la gran empresa ganadera, estando sujeta esta superficie a la exigencia de alcanzar mil cabezas de ganado mayor.

Teniendo en cuenta que la TCO del TIMI abarca una superficie titulada de 98.388 hectáreas y volviendo al cuadro anterior (5.9) en el que se muestra que de las 10 familias que más dotación de tierras recibieron en su día por parte del antiguo CNRA, 4 de ellas superan las 50.000 hectáreas y otras 2 acarician esa cifra, nos puede dar una idea aproximada de los beneficios que los propietarios privados han recibido y de la inequidad en el acceso a la tierra en detrimento de las poblaciones indígenas.

Carlos Valenzuela acusa abiertamente a los gobiernos neoliberales (Jaime Paz Zamora) y militares (Hugo Bánzer Suárez) de distribuir la mayor proporción de tierras en el país, lo cual coincidió con los momentos de mayor inestabilidad política, gobiernos dictatoriales y golpes de Estado incluidos (2008)²³⁸ (véase **cuadro 5. 10**).

²³⁸ Estudios como el de Urioste y Kay (2005) recogen informaciones sobre las “*transferencias de tierras ilegales a facciones políticas del gobierno*” (principalmente del gobierno militar de Hugo Bánzer 1971-1978 y de García Mesa 1980-81). La descarada corrupción en el mercado de tierras llevó al cierre del CNRA durante el gobierno de Jaime Paz Zamora (1989-1993) (*ibíd.*, 31). Más tarde, con la administración de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997) se crearía la Ley INRA, gracias en buena medida al apoyo del Banco Mundial que pretendía fomentar el mercado de tierras en Bolivia, al igual que estaba sucediendo en el conjunto de países de América Latina. El interés prioritario era “*establecer mayor seguridad sobre la tenencia de tierras y promover un mercado de tierras, con el fin de incrementar la productividad y crear un sector agropecuario más viable*” (*ibíd.*, 36). El estudio de la Fundación TIERRA señala también la coincidencia entre los ciclos dictatoriales y los periodos en los que mayor distribución de tierra se llevó a cabo por parte del Estado (2005: 28). Y del mismo modo Germán Huanca reconoce que durante la

En particular se señala a 3 quinquenios: de 1969 a 1973; de 1974 a 1978 y de 1989 a 1993 cuando se distribuyó el 70 de la superficie (57,3 millones de hectáreas) concedida entre 1953 (año en el que entra en vigor la reforma agraria) y 1993 (año en el que es intervenido el CNRA y el Instituto Nacional de Colonización –INC-, instituciones encargadas del reparto de tierras en el país y acusadas de cometer toda serie de ilegalidades y abusos en su labor²³⁹). En el primer quinquenio se distribuyeron 9 millones de hectáreas que corresponderían a un 15,86%; en el segundo se incrementó hasta alcanzar los 17,5 millones que supondrían un 30,4% y finalmente en el último quinquenio la cifra oficial fue de 13,6 millones de hectáreas, lo que equivaldría al 23,7% (*ibíd.*, 26)²⁴⁰. Los beneficiarios fueron desde pequeñas propiedades hasta grandes empresas y propiedades comunarias. Valenzuela señala además a los favores políticos y a las prebendas a amigos y parientes como la constante común que determinó las dotaciones (*ibíd.*).

Cuadro 5. 10. Distribución de tierras según presidentes por periodo de gobierno antes de la intervención.

| Nombre Presidente | Periodo | Nº Títulos | Superficie (has.) | Porcentaje |
|-----------------------|-----------|----------------|-------------------|----------------|
| Vítor Paz Estenssoro | 1952-1956 | 7.863 | 98.415 | 0,2 % |
| Herán Siles Suazo | 1956-1960 | 38.973 | 825.872 | 1,9 % |
| Vítor Paz Estenssoro | 1960-1964 | 172.096 | 4.188.865 | 9,7 % |
| René Barrientos | 1964-1965 | 70.538 | 3.844.144 | 8,9 % |
| Alfre Ovando | 1965-1966 | 12.616 | 962.002 | 2,2 % |
| Juan José Torres | 1970-1971 | 4.303 | 1.729.089 | 4,0 % |
| Hugo Bánzer Suárez | 1971-1978 | 225.751 | 17.947.495 | 41,7 % |
| Juan Pereda Asbún | 1978 | 10.655 | 609.549 | 1,4 % |
| Alberto Natusch Busch | 1979 | 2.661 | 732.779 | 1,7 % |
| Luis García Mesa | 1980-1981 | 18.043 | 772.255 | 1,8 % |
| Herán Siles Suazo | 1982-1985 | 30.958 | 1.779.943 | 4,1 % |
| Vítor Paz Estenssoro | 1985-1989 | 40.026 | 2.104.551 | 4,9 % |
| Jaime Paz Zamora | 1989-1993 | 145.905 | 7.491.695 | 17,4 % |
| TOTAL | | 819.115 | 43.086.654 | 100,0 % |

Fuente: Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente, Viceministerio de Tierras e Instituto Nacional de Reforma Agraria, 2007: 21.

década de los sesenta y setenta en Bolivia, cuando ésta vivía sumida bajo el yugo de dictaduras militares estos gobiernos entregaron tierra en Mojos a grandes propietarios (2003). También el *Plan Estratégico Nacional de Saneamiento y Titulación de Tierras* 2007-2013, da muestra de dichas coincidencias (Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente, Viceministerio de Tierras e Instituto Nacional de Reforma Agraria, 2007: 10).

²³⁹ Miguel Urioste –director de la Fundación TIERRA- relata en la presentación de *Los nietos de la Reforma Agraria. Tierra y comunidad en el altiplano de Bolivia* (2007), el descubrimiento por parte de dicha Fundación de unos documentos que desvelaban que el para entonces (1992) Ministro de Educación -Edim Céspedes- solicitó una superficie de 100.000 hectáreas como dotación gratuita a la empresa BOLIBRAS, hecho que tras ser denunciado desembocó en la intervención tanto del CNRA como del INC. El episodio del denominado “caso Bolibrás” aparece también en el estudio de Valenzuela (2008: 30)

²⁴⁰ Información ordenada en base a los datos de INRA, 2008.

Los departamentos que mayor cantidad de tierras recibieron fueron Santa Cruz y el Beni, lo cual coincidió con la política conocida como “Marcha hacia el Oriente” propia del programa del MNR y es que efectivamente, entre ambos sumaron 57,3 millones de hectáreas entre 1953 y 1993 o lo que viene a ser lo mismo un 58,26% del total de la superficie dotada (Valenzuela, 2008: 26). Si consideramos que entre ambos departamentos albergaban algo más del 30% de la población del país y que fueron estos los que más superficie recibieron se puede confirmar el fomento en Bolivia de la concentración de la tierra en pocas manos, al menos en el oriente boliviano, zona que atrae nuestro interés de estudio.

Estas políticas consolidaron la imagen de “tierras baldías” que ha caracterizado a esta región y que ha propiciado la colonización de la misma (*ibíd.*, 28). El siguiente cuadro (5. 11) nos aporta dos informaciones relevantes: refleja la desproporción en la distribución de tierras a pequeñas, medianas y grandes propiedades en relación a las dotaciones a tierras comunitarias indígenas al haber recibido aquellas, en el mismo dicho periodo, en torno a la mitad de tierras distribuidas en Bolivia y confirma la concentración de tierras en pocas manos.

Cuadro 5. 11. Tierras distribuidas en Bolivia a través de la Reforma Agraria (según clase de beneficiario y propiedad), 1953-2002.

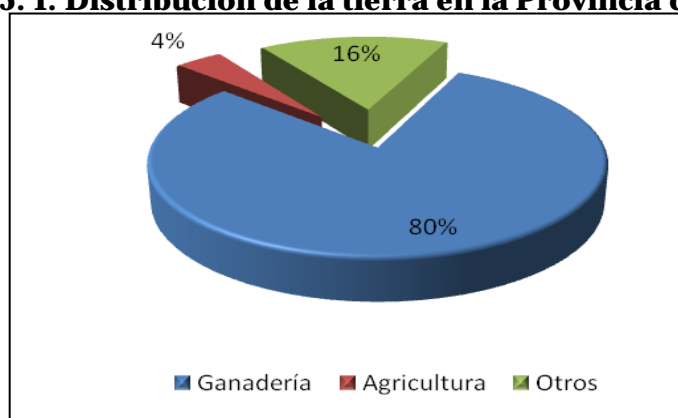
| Tipo de propiedad | Nº Beneficiarios | % | Superficie de la tierra (hectáreas) | % | Tamaño promedio (hectáreas) |
|-------------------|------------------|--------|-------------------------------------|--------|-----------------------------|
| Pequeña | 279.523 | 32,48 | 5.043.024 | 5.41 | 18 |
| Mediana | 125.029 | 14,53 | 16.532.904 | 17.74 | 132 |
| Empresa | 19.486 | 2,26 | 31.097.404 | 33.37 | 1.596 |
| Solar | 4.026 | 0,47 | 23.881 | 0.03 | 6 |
| Propiedad comunal | 342.491 | 39,80 | 12.829.088 | 13.77 | 37 |
| TCO | 77.714 | 9,03 | 26.718.826 | 28.68 | 344 |
| Sin información | 12.358 | 1,44 | 931.485 | 1.00 | 75 |
| Total | 860.627 | 100,00 | 93.176.792 | 100,00 | 108 |

Fuente: Urioste y Kay, 2005: 25.

En lo que respecta a Mojos otros estudios, tras efectuar una evaluación sobre el papel del CNRA, confirman algunos datos relativos a la distribución de tierras (véase **gráfico 5. 1**). Según estos, hasta el año 1993, fecha en que se intervino dicho Consejo,

1.302.902.51 hectáreas -lo que equivale al 38,7% del total de la superficie de la provincia de Mojos- fueron repartidas entre 719 predios en dicha provincia, lo cual corrobora una vez más la concentración de tierras (Fundación TIERRA, 2005: 28). Las cifras de este estudio señalan que fueron 1.129.687 hectáreas (99,2% de los predios distribuidos en Mojos) la superficie de tierras que el Estado entregó “*con una generosidad sospechosa*” mediante el mecanismo de la dotación (*ibíd.*)²⁴¹. Esta reconocida ilegalidad en el acceso de tierras por medio de dotaciones gratuitas, fue el motivo principal de la creación en este periodo de grandes latifundios. Tal ilegalidad no sólo se refiere a la dotación de tierras sino que también se sabe de la existencia de documentos que atestiguan el solapamiento de hasta siete demandantes sobre una misma propiedad (Vargas R., 2003: 66).

Gráfico 5. 1. Distribución de la tierra en la Provincia de Mojos.



Fuente: Elaboración propia en base a los datos de Fundación TIERRA, 2005: 28.

El 80% de las tierras -lo correspondiente a 1.042.492 hectáreas- fue, por lo tanto, otorgado a propietarios ganaderos, en total 463, a diferencia del 4% de tierras, destinadas a propiedades agrícolas, cifra que supone 46.046 hectáreas, lo cual reitera una vez más la tendencia a la concentración de la tierra en Mojos y la consolidación de los latifundios. El siguiente cuadro refuerza este planteamiento con nuevos datos.

Cuadro 5. 12. Tipo de actividad

| Tipo de actividad | Superficie (has) | % | Mínimo Has. | Máximo Has. | Nº Propietarios |
|-------------------|------------------|----|-------------|-------------|-----------------|
| Agrícola | 46.046 | 4 | 9 | 3.150 | 121 |
| Agropecuaria | 191.975 | 15 | 25 | 10.933 | 123 |
| Ganadera | 1.042.492 | 80 | 29 | 28.276 | 463 |

²⁴¹ En efecto, diversos testimonios locales atestiguan que dichas dotaciones se realizaron tras la ocupación efectiva del espacio físico (Fundación TIERRA, 2005: 28), hecho que coincide con los testimonios de los comunarios ignacianos.

| | | | | | |
|------------------------------|------------------|------------|------------|--------------|------------|
| Sin tipo de actividad | 22.389 | 2 | 589 | 5.077 | 12 |
| Total | 1.302.903 | 100 | | | 719 |

Fuente: Guzmán I., 2004: 27.

A tenor de todo lo expuesto hasta el momento queda demostrado que el acceso a la tierra en Mojos ha estado caracterizado por la desigualdad y el conflicto social. Las causas son diversas pero en todos ellos se da un rasgo común y es que históricamente ha sido la población indígena la más expuesta a la usurpación territorial por parte de otros actores sociales, en su mayor parte grandes propietarios. En el próximo capítulo realizaré un análisis más pormenorizado sobre la tipología de dichos conflictos, en este momento me interesa hacer hincapié en la idea de la conflictividad ligada al acceso a la tierra.

En la Provincia de Mojos existen dos modalidades principales para adquirir tierras (véase **cuadro 5. 13**):

1. La dotación.
2. La compra.

Cuadro 5. 13. Modo de adquisición de la propiedad

| Modalidad | Superficie (ha) | % | Superficie mínima (ha) | Superficie máxima (ha) | Nº propietarios | % |
|------------------|----------------------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------|
| Dotación | 1.291.687 | 99.14 | 9,7 | 28.297 | 706 | 98,2 |
| Compra- venta | 5.176 | 0.40 | 563,0 | 2.456 | 3 | 0,4 |
| Sin precisar | 6.039 | 0,46 | 8,0 | 2.803 | 10 | 1,4 |
| TOTAL | 1.302.902 | 100 | 719 | 100 | | |

Fuente: Guzmán I., *et al.*, 2007: 232.

El primer modelo corresponde a algo más del 99,2% de la superficie y la compra supone el 0,4% de la misma, el resto de los datos quedan sin registrar por falta de información (*ibíd.*, 231).

Existe una serie de factores presentes en las formas de acceso por parte de las comunidades indígenas a la tierra: las normas de conducta relativas a la asignación y distribución de recursos se están viendo debilitadas; la movilidad -característica de las dinámicas espaciales de estas poblaciones- constituye un elemento que impide la ocupación permanente de los territorios indígenas dando lugar a tierras baldías; la

adopción de ciertos patrones ajenos a sus lógicas de comportamiento económico con respecto a la compra-venta de las tierras; el empatronamiento y las relaciones de mutua dependencia entre los indígenas y los ganaderos condicionan la defensa de los derechos territoriales de los primeros (Urioste y Pacheco P., 2001: 131).

Tras todo este repaso al proceso de distribución de tierras y ocupación de espacios que se ha ido configurando a lo largo del tiempo en Mojos, se concluye que es necesaria la revisión de dicho proceso y el cumplimiento de la nueva política de tierras basada en los principios de igualdad y justicia social que definitivamente pongan fin a tantos años de abusos, de explotación feudal y dominación basada en un sistema de tenencia de la tierra caracterizado por la concentración en manos de unos cuantos terratenientes.

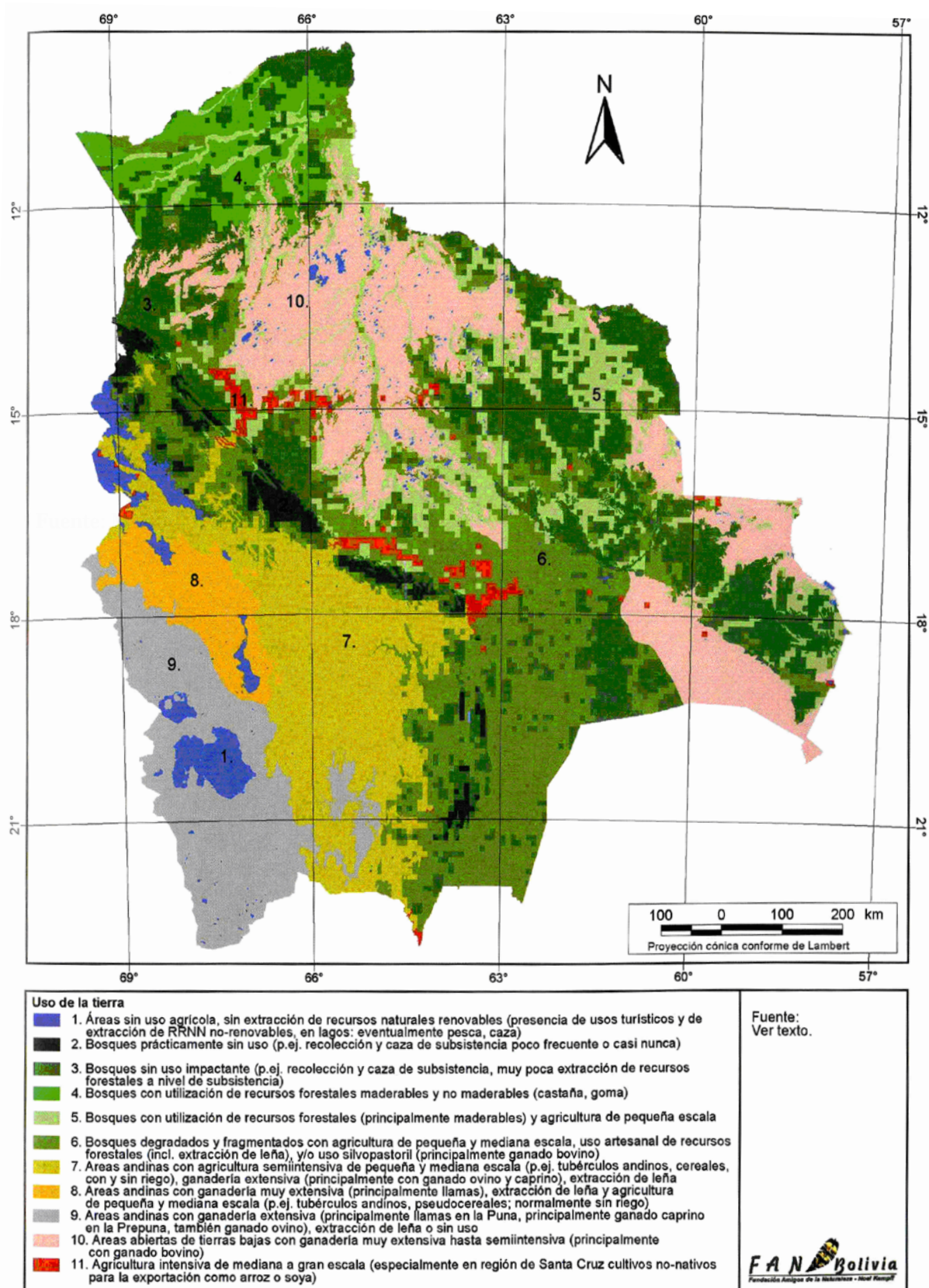
5. 3. ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y USOS DEL SUELO.

Bolivia alberga una enorme diversidad, tanto desde el punto de vista fisiográfico como ecológico y climático lo cual condiciona a lo largo y ancho del territorio nacional la distribución de la ocupación espacial así como el uso de los suelos. A pesar de ello, se ha avanzado más bien poco en cuanto al ordenamiento territorial se refiere. De manera simplificada se podría decir que las áreas con cobertura de bosque denso o ralo atienden a un uso del suelo de tipo forestal; aquellas con predominancia de herbáceas gramínoideas a un uso tanto ganadero como silvopastoril; las regiones de cultivos corresponderían a un uso agrícola, etcétera (véanse **cuadro 5. 14** y **mapa 5. 2**).

Cuadro 5. 14. Categorías y subcategorías del uso de la tierra en Bolivia.

| Categorías | Subcategorías |
|---------------------------------------|--|
| Tierras de uso agropecuario intensivo | - Uso agrícola intensivo - Uso ganadero intensivo |
| Tierras de uso agropecuario extensivo | - Uso agrícola extensivo - Uso ganadero extensivo |
| Tierras de uso agrosilvopastoril | |
| Tierras de uso forestal | - Uso forestal maderable - Uso forestal múltiple |
| Tierras de uso restringido | - Uso agropecuario intensivo limitado - Uso agropecuario extensivo limitado - Uso agrosilvopastoril limitado - Uso forestal maderable limitado - Uso forestal múltiple limitado - Áreas de protección y uso agroforestal limitado - Otras tierras de uso restringido |
| Área natural protegida | |
| Urbano | - Urbano - De reserva urbanizable - No urbanizable |

Mapa 5. 2. Usos de la tierra en Bolivia



Fuente: Ibisch y Mérida, 2003: 287.

El ordenamiento territorial -considerado prioritario en la agenda de gobierno actual en el marco de la búsqueda del desarrollo sostenible- viene definido en Bolivia como el *“proceso de organización del uso del suelo y de la ocupación del territorio, en función de sus características biofísicas, socioeconómicas, culturales y político institucionales”* (Ministerio de Desarrollo Sostenible, 2001a: 11, 2001, s/f: 1). Se entiende por tanto como el *“instrumento de la planificación, a través de la consideración del territorio, como sustento de los recursos naturales y de las actividades humanas, promueve y orienta el desarrollo físico espacial, la organización y localización de los asentamientos humanos y sus actividades económico sociales”* (Saavedra y Ávila X., 2002: 6).

El principal objetivo que se persigue es articular el conjunto del territorio nacional -en función de sus potencialidades y limitaciones- en base a unos parámetros de sostenibilidad determinados, con el fin de contribuir al desarrollo de un uso y manejo óptimo del suelo en los diferentes asentamientos humanos así como minimizar la vulnerabilidad de impactos negativos ambientales en zonas de riesgo para lograr un adecuado uso de la tierra y ocupación del territorio (Ministerio de Desarrollo Sostenible, s/f: 3).

El procedimiento metodológico a seguir en la planificación territorial de Bolivia, pretendía definirse por su enfoque integral -apoyado en la metodología de la *Zonificación Agro-Ecológica* (ZAE) (véanse **figura 5. 5** y **mapa 5. 3**)- para lo que se pusieron en marcha diversas técnicas de investigación que iban desde el uso de imágenes de satélite (LANDSAT, SPOT o NOA), la producción de cartografía sobre el uso actual de la tierra y vegetación en cada uno de los departamentos -con el software de información geográfica SIG-, al análisis de las dinámicas socioeconómicas así como al estudio de las unidades del paisaje en las diversas regiones biogeográficas del país. Todo ello con la finalidad de comprender la articulación entre los diversos niveles de interacción de los aspectos biofísicos y las actividades sociales y económicas.

5. 3. 1. Instrumentos del ordenamiento territorial en Bolivia.

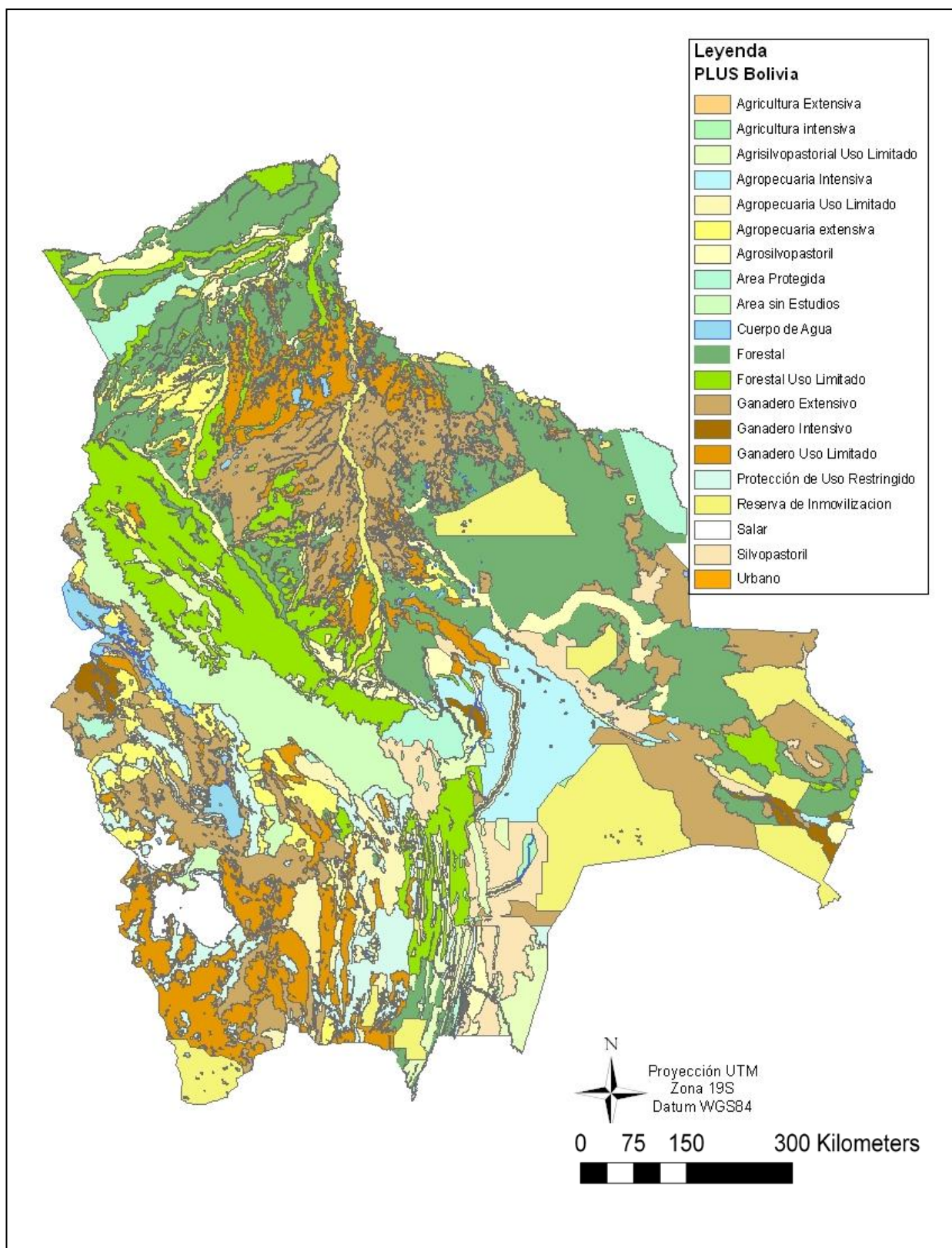
Fue a partir de los años noventa cuando el Estado boliviano comenzó a tomar conciencia sobre la necesidad de regular el ordenamiento territorial y se empezaron a dar los primeros pasos para crear toda una serie de disposiciones legales y administrativas inexistentes hasta entonces. Se crearon varios instrumentos para facilitar la implementación del ordenamiento territorial en el país, como ocurrió con la *Unidad de Ordenamiento Territorial* (UOT) que a su vez puso en marcha el *Sistema Nacional de Información para el Ordenamiento Territorial* (SNIOT) encargado del

registro y la actualización de información territorial, así como de la elaboración de información cartográfica y bases de datos para representar espacialmente los atributos biofísicos y socioeconómicos de Bolivia (Ardaya, 2009: 66-67).

Los instrumentos operativos del ordenamiento territorial en Bolivia, a parte del mencionado SNIOT, son los *Lineamientos de Políticas de Ordenamiento Territorial* (presenta la estrategia del ordenamiento territorial), los *Informes de Evaluación del Ordenamiento Territorial* (documentos de evaluación técnica elaborados cada 5 años para valorar el grado de aplicación) y *las Guías Metodológicas* (definen el marco conceptual y los procedimientos metodológicos de los que se servirán las prefecturas y gobiernos municipales a la hora de elaborar los correspondientes planes de ordenamiento) (Ministerio de Desarrollo Sostenible, s/f: 4).

En cuanto a los instrumentos operativos, el principal con el que cuenta Bolivia para la gestión del territorio son los *Planes de Ordenamiento Territorial* (PLOT) -en los niveles nacional, departamental y municipal- siendo dicha disposición legal que “*identifica las potencialidades y limitaciones de los recursos naturales; se orienta a la optimización de su uso y la distribución de los asentamientos humanos; y define acciones para optimizar la relación entre la población y el territorio; por lo tanto es un instrumento político de planificación*” (de Vries, 1998: 65). El PLOT integra a su vez dos herramientas técnicas como son: los *Planes de Uso del Suelo* (PLUS) y los *Planes de Ocupación del Territorio* (POT). El primero de ellos define las categorías y subcategorías de uso del suelo, las reglas de intervención, de uso, recomendaciones de manejo, etcétera, encaminadas a conseguir un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. El PLUS “*define el uso adecuado según la capacidad de suelo y/o las potencialidades socioeconómicas de cada zona (...), por lo tanto es un instrumento legal de regulación de uso*” (ibíd.).

Mapa 5. 3. Plan de Usos del Suelo Bolivia

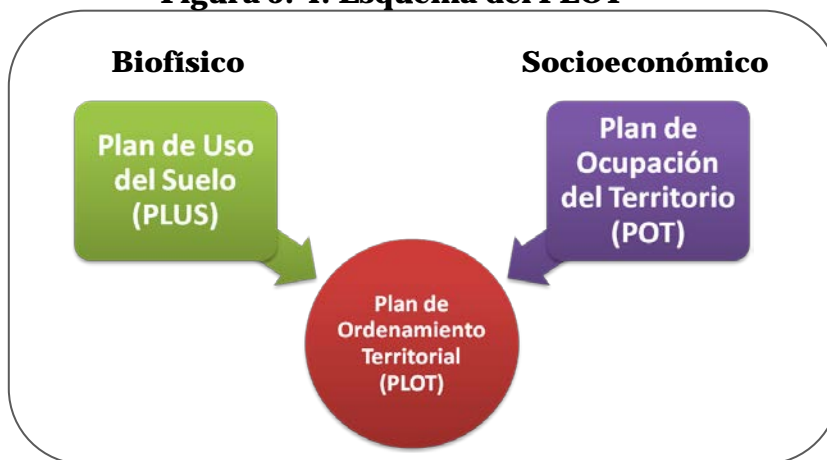


Fuente: elaboración propia en base a los datos de la Unidad de Ordenamiento Territorial, 2004²⁴²

El POT es, por el contrario, el instrumento encargado en articular y vertebrar el territorio, atendiendo a los centros, redes y flujos de las actividades productivas y de distribución de los servicios en función de la jerarquía de los asentamientos humanos con el fin de generar la regionalización²⁴³ (Ministerio de Desarrollo Sostenible, s/f: 4-6). En este caso sería del todo necesaria la participación de las poblaciones indígenas dado que puede resultar que se vean integradas en un espacio local o regional que no reconocen o frente al que no poseen un sentimiento de pertenencia, lo cual distorsionaría su relación con el territorio y la habitabilidad del lugar en sí.

Las experiencias que han tenido lugar acorde con el ordenamiento territorial en Bolivia se han enfocado a la ordenación de los usos del suelo por encima de otras cuestiones relativas a la gestión del territorio. Pablo Pacheco apunta a la búsqueda de legitimación de los usos del suelo ya existentes como una de las mayores limitaciones del PLUS (1998: 299).

Figura 5. 4. Esquema del PLOT



Fuente: elaboración propia

El instrumento técnico más importante a nivel local lo constituye el *Plan Ordenamiento Predial* (POP), aquel que deben realizar los propietarios por cuenta propia de manera obligatoria en sus respectivos predios y presentar ante el *Instituto Nacional de Reforma Agraria* para justificar los derechos de propiedad. La finalidad de éste es fomentar un uso sostenible de la tierra, de acuerdo a la aptitud de ésta para

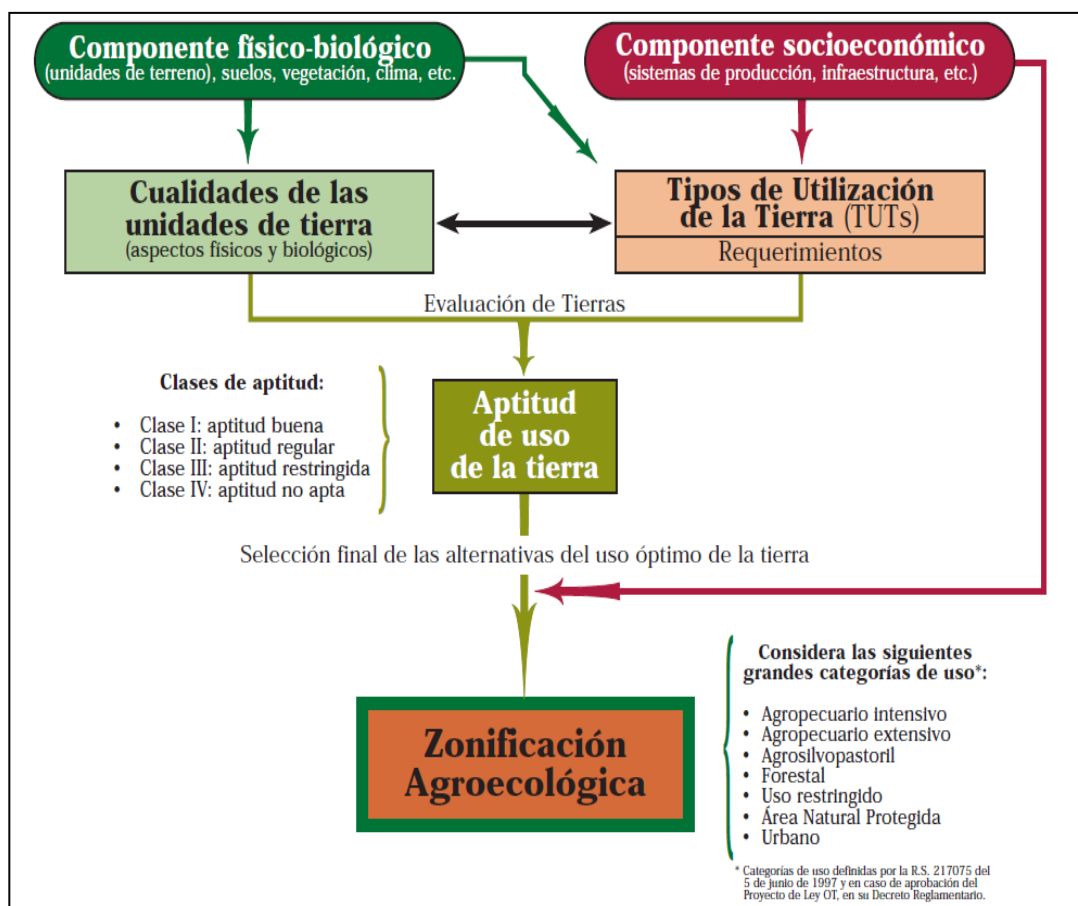
²⁴² http://essm.tamu.edu/bolivia/mapas_es.htm

²⁴³ Ésta se entiende como el “proceso de constitución de regiones”, las cuales se consideran como “espacios menores al territorio nacional o a los departamentos, interrelacionados, organizados, vertebrados y articulados, y que generan y fortalecen flujos, intercambios y complementariedades funcionales” (Ministerio de Desarrollo Sostenible, s/f: 6).

que la capacidad productiva no se vea afectada (CEDIB, 2005: 20). A cada sector del predio se le asigna por tanto un uso específico. En estos se debe definir los usos del suelo del predio en cuestión y además deben ajustarse a la normativa medioambiental. Las TCOs están igualmente sujetas a la elaboración del POP así como aquellos propietarios individuales que soliciten planes de manejo forestal o desmontes en sus propiedades privadas (de Vries, 1998: 66). En la actualidad sin embargo, el INRA concede prioridad a la FES por la que las propiedades deben cumplir una serie de condiciones pre-establecidas (entrevista a Oliver Vaca).

En relación al PLUS hay que destacar el instrumento técnico de la ZAE el cual *“permite conocer la aptitud de la tierra para diferentes usos agropecuarios y forestales, y en base a sus aptitudes y a las condiciones socioeconómicas de la población, determina cuál es el uso más adecuado para aprovecharla sin perjudicar su capacidad productiva”* (Ministerio de Desarrollo Sostenible, s/f: 6)²⁴⁴.

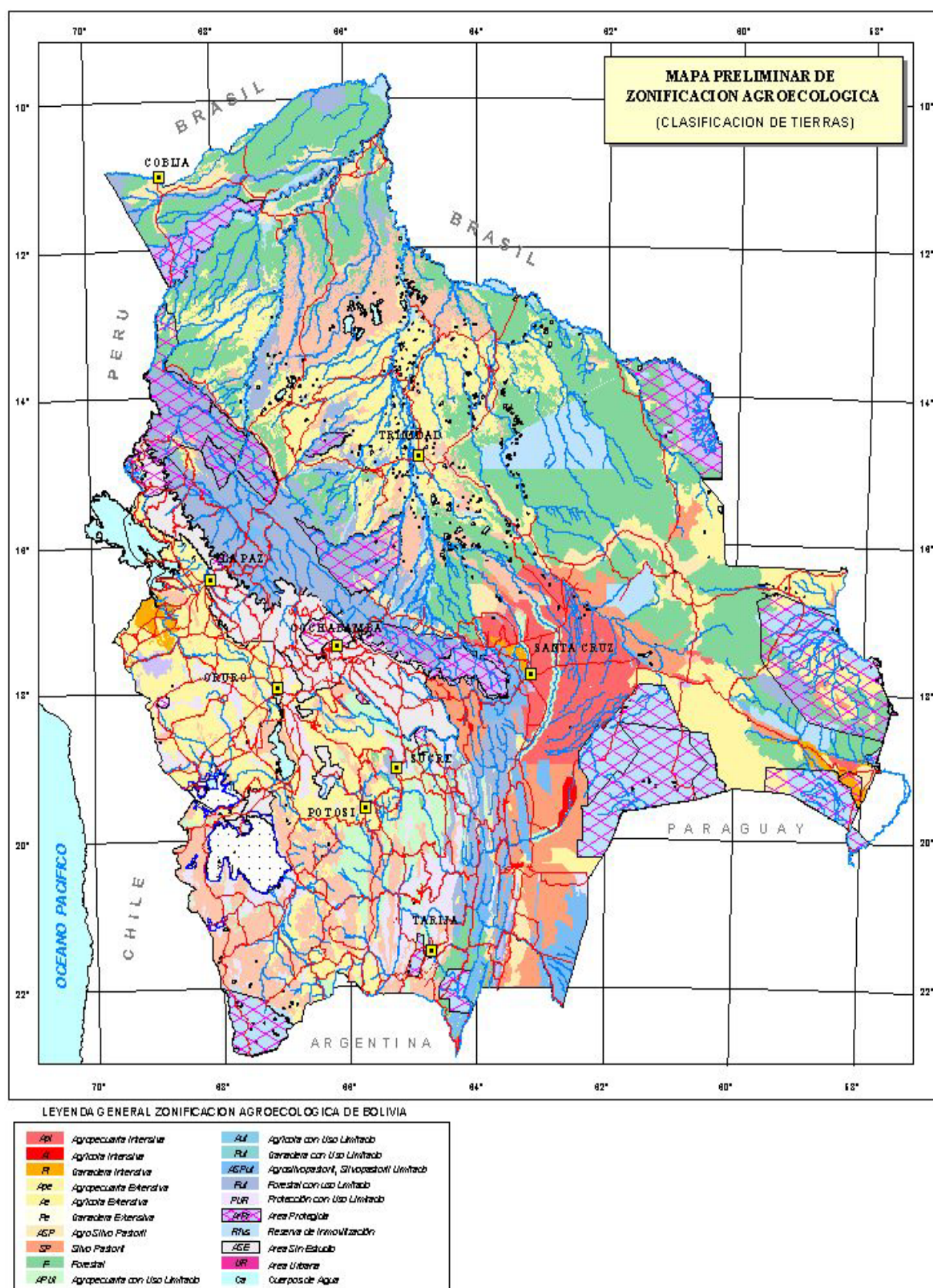
Figura 5. 5. Esquema de la ZAE



Fuente: Ministerios de Desarrollo Sostenible, 2001b: 47.

²⁴⁴ Otra propuesta metodológica fue la *Zonificación Ecológica-Económica (ZEE)*, un instrumento del ordenamiento territorial basado, como bien indica su nombre, en criterios tanto económicos como ecológicos, conducente a lograr armonizar las actividades económicas con las cualidades medioambientales del espacio geográfico en cuestión (Ponce, 1998).

Figura 5. 6. ZAE de Bolivia.



Fuente: Unidad de Ordenamiento Territorial, 2004²⁴⁵.

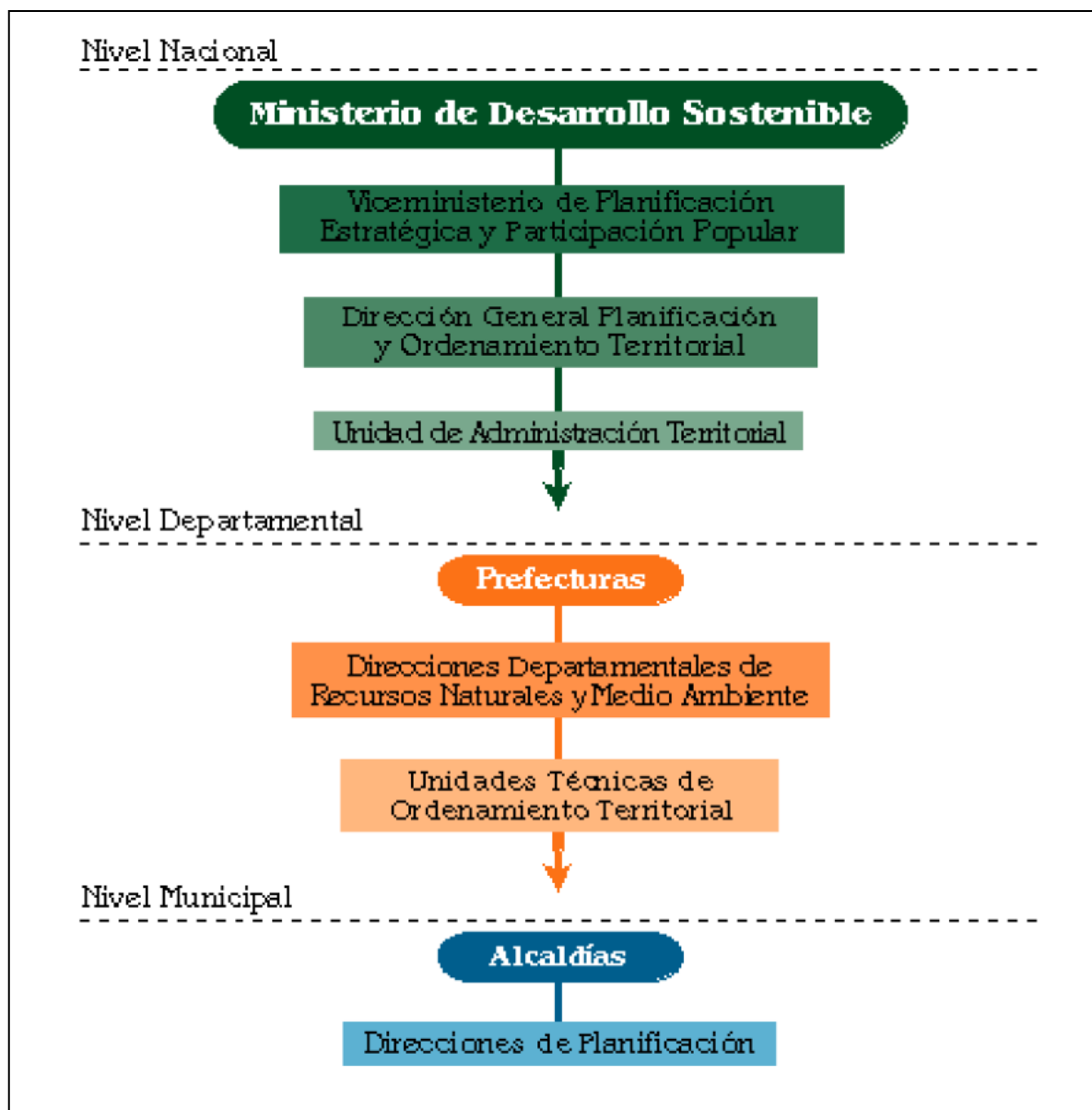
²⁴⁵ http://essm.tamu.edu/bolivia/mapas_es.htm

5. 3. 2. Niveles de ordenamiento territorial en Bolivia.

El ordenamiento territorial se gestiona en Bolivia en cuatro niveles administrativos (véase **figura 5. 7**):

- Nacional
- Departamental
- Municipal
- Predial

Figura 5. 7. Estructura Institucional del Ordenamiento Territorial de Bolivia.



Fuente: Ministerio de Desarrollo Sostenible, 2001c: 21.

En cuanto al primer nivel habría que señalar que no existe a escala nacional un plan de ordenamiento territorial sino que los PLUS de cada departamento hacen las veces de éste. Desde la antigua Superintendencia Agraria se recurre a la certificación de *Capacidad de Uso Mayor de la Tierra* (CUMAT).

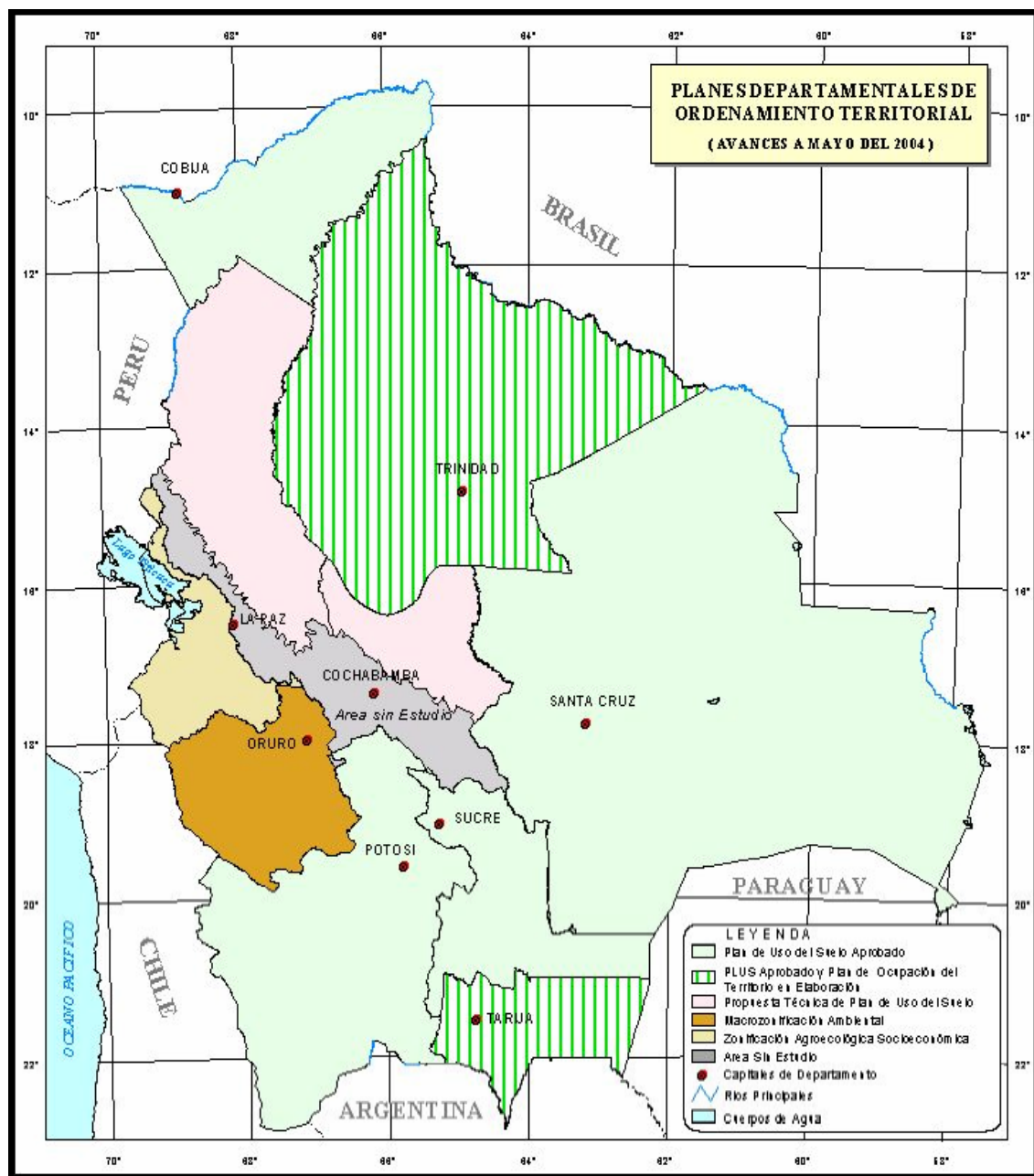
Cuadro 5. 15. Capacidad de uso mayor de la tierra del departamento del Beni (superficies en porcentajes)

| Uso mayor de la tierra | Beni |
|------------------------------|--------|
| Cultivos Intensivos | 0.00 |
| Cultivos Extensivos | 7.92 |
| Ganadería Extensiva | 58.74 |
| Uso Forestal | |
| Natural Maderable | 17.17 |
| Protección y uso restringido | 13.83 |
| Otros | 2.34 |
| Total | 100.00 |

Fuente: elaboración propia en base a los datos de SIA, cit. en Galoppo, 2003: 183.

En el cuadro anterior se aprecia de manera clara la vocación ganadera del departamento del Beni, en particular del sistema de ganadería extensiva, seguido de un uso maderable, lo cual resulta evidente si tenemos en cuenta que este departamento alberga uno de los potenciales más ricos desde el punto de vista de los recursos forestales.

Al segundo nivel (véase **figura 5. 8**) le corresponde el PLUS además *del Plan de Desarrollo Departamental* (PDD).

Figura 5. 8. Ordenamiento territorial en Bolivia por departamentos.

Fuente: Ministerio de Desarrollo Sostenible, s/f: 8

A escala municipal existen los *Planes de Desarrollo Municipales* (PDMs) (véase **anexo 4** para el *Plan de Desarrollo Municipal de San Ignacio de Mojos*). En ellos se establecen y regulan las políticas que se ejecutarán durante 15 años en el municipio. En octubre de 2010 fue elaborado el nuevo PDM de San Ignacio de Mojos. Éste fue realizado por la unidad de planificación a convocatoria y consulta de toda la población. El Consejo Municipal, conformado por el Presidente, Vicepresidente, Secretario y 2 concejales, es el encargado de aprobar o rechazar el PDM a través del comité de vigilancia, el cual es el organismo encargado en controlar que las leyes se cumplan

según las directrices (entrevista a Gladis Viana Moreno, Presidenta del Concejo Municipal de San Ignacio de Mojos). El *Plan de Ordenamiento Anual* (POA) por su parte, es el documento formal que se elabora anualmente y que especifica las vocaciones del municipio²⁴⁶.

El mayor inconveniente es que al analizar los diversos planes de manejo que se dan en los distintos niveles se perciben ciertas anomalías o incompatibilidades entre ellos que pueden dar lugar a ambigüedades (incluso con la ley INRA existen contradicciones). Un claro ejemplo es que a la hora de realizar el saneamiento de una TCO no se contempla el PLUS puesto que el propio saneamiento determina los derechos de la propiedad. El PLUS se contempla exclusivamente en algunos casos particulares como pueden ser la modificación del uso del suelo o el hecho de efectuar programas de aprovechamiento, elaboración de planes de manejo forestal, etcétera, siempre y cuando sea al interior de una TCO.

También en la Constitución Política del Estado se especifica que para garantizar el equilibrio ecológico “*los suelos deberán utilizarse conforme con su capacidad de uso mayor en el marco del proceso de organización del uso y ocupación del espacio, considerando sus características biofísicas, socioeconómicas, culturales y político institucionales*” (artículo 380)²⁴⁷, señal de los esfuerzos del Estado por alcanzar un desarrollo sostenible y la preservación desde el punto de vista ambiental de los recursos naturales del país. Asimismo se han concretado los mecanismos para elaborar los planes de ordenamiento territorial y del uso de suelos, en coordinación con los planes del nivel central del Estado, departamentales e indígenas (artículo 302)²⁴⁸.

5. 3. 3. Avances del proceso de ordenamiento territorial.

Algunas metas cumplidas en relación al ordenamiento territorial en Bolivia hasta el momento son los planes de ordenamiento territorial realizados a nivel departamental (véase **cuadro 5. 16**) relacionados con la planificación de usos del suelo como es el caso de los PLUS aprobados mediante Decreto Supremo en los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca, Beni, Tarija, Potosí y Pando y las propuestas técnicas de PLUS en el área amazónica y la cuenca del altiplano de La Paz y del área amazónica de Cochabamba; a nivel municipal el ordenamiento territorial se ha reducido a la elaboración de los proyectos referidos a la zonificación agroecológica de ZONISIG o BID AMAZONIA, entre otros, en los departamentos de La Paz, Chuquisaca, Pando,

²⁴⁶ En el caso del municipio de San Ignacio de Mojos son la forestal, la cultural, la pecuaria y la turística.

²⁴⁷ <http://bolivia.unfpa.org/content/constituci%C3%B3n-pol%C3%ADtica-del-estado>

²⁴⁸ *Ibíd.*

Potosí y Tarija y otros planes de uso del suelo, como son el caso de Huacareta, Villa Montes, Entre Ríos, Monteagudo y Puna; finalmente *Planes Municipales de Ordenamiento Territorial* (PMOT) (véase **cuadro 5. 17**) como los de Magdalena, Baures, Huacaraje (el único del Beni), Coroico, Caranavi, Coripata, Villa Tunari, Cabezas y parte de Charagua (CEDIB, 2005: 21)²⁴⁹.

Cuadro 5. 16. Avances del proceso de ordenamiento territorial a nivel departamental.

| Departamento | Productos y Superficies | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| | PLUS con D.S. (Km ²) | PLUS elaborado (Km ²) | Estudios de ZAE-SE (Km ²) | Areas sin estudio (Km ²) |
| Santa Cruz | 370.621 | | | |
| Pando | 63.827 | | | |
| Beni | | 213.564 | | |
| La Paz (ZONA AMAZÓNICA) | | 79.663 | | |
| Cochabamba (ZONA AMAZÓNICA) | | 30.451 | | |
| La Paz (ZONA ALTIPLÁNICA) | | | **33.221 | |
| Tarija | | | **37.623 | |
| Potosí | | | **118.218 | |
| Chuguisaca | | | 51.524 | |
| Oruro* | | | 53.588 | |
| La Paz (VALLES INTERANDINOS) | | | | 20.501 |
| Cochabamba (ZONA NO AMAZÓNICA) | | | | 25.180 |
| TOTAL (Km ²) | 434.448 | 323.678 | 294.774 | 45.681 |
| % de la superficie nacional | 4 0 % | 2 9 % | 2 7 % | 4 % |

* Macrozonificación Ambiental.

** ZAE en proceso de concertación.

Fuente: Ministerio de Desarrollo Sostenible, 2001c: 26

²⁴⁹ Miguel Sevilla junto a Rafael Mata han diagnosticado en varios trabajos, incluida la propia tesis doctoral de Sevilla (2010) el ordenamiento territorial en el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integral de Cotapata, en el departamento de La Paz.

Cuadro 5. 17. Avances del proceso de ordenamiento territorial a nivel municipal.

| Departamento | Municipio | Superficies (km ²) |
|--------------------------|------------------|--------------------------------|
| Santa Cruz | Cabezas | 5.338 |
| | Yapacaní | 9.208 |
| | Santa Rosa• | 4.808 |
| | San Carlos• | 3.997 |
| | Charagua• | 6.145 |
| Beni | Magdalena• | 12.668 |
| | Huacaraje | 7.879 |
| | Baures• | 16.030 |
| La Paz | Caranavi• | 2.938 |
| | Coripata | 1.317 |
| | Coroico | 864 |
| | San Buenaventura | 1.425 |
| Cochabamba | Villa Tunari• | 11.538 |
| | Colomi• | 339 |
| | Arbieto | 98 |
| Tarija | Villamontes | 9.291 |
| | Entre Ríos | 5.309 |
| Chuquisaca | Monteagudo | 3.386 |
| | Huacareta | 2.086 |
| | Tomina | 715 |
| | Villa Serrano | 2.000 |
| | Villa Alcalá | 555 |
| | Padilla | 1.346 |
| TOTAL (km ²) | | 92.855 |
| % de la sup. nacional | | 8.5% |

• Parte del municipio

Fuente: Ministerio de Desarrollo Sostenible, 2001c: 26.

En el caso del departamento del Beni existe una tendencia a la expansión del uso del suelo que desemboca en un uso ganadero. Cada vez con mayor frecuencia se lleva a cabo la habilitación de tierras destinadas a la explotación ganadera lo cual provoca como consecuencia la pérdida de biodiversidad y la transformación de los sistemas locales de explotación desarrollados por las comunidades indígenas. En el departamento del Beni y concretamente en Mojos se pueden establecer una clara diferenciación de los sistemas de producción agrícola, pecuaria y agroforestal. Estos sistemas provocan las paulatinas modificaciones de la cobertura vegetal.

Como antecedente del ordenamiento territorial del Beni, en noviembre del año 1992, se firmó el convenio ATN/SF-4104-BO entre el Gobierno de Bolivia y el *Banco Interamericano de Desarrollo* (BID) “Proyecto BID-Amazonia” (OTRA) el cual se insertaba en el “*Programa para el Ordenamiento Territorial de la Región Amazónica Boliviana en los Departamentos de La Paz, Beni y Cochabamba*”, en base al ordenamiento territorial del proyecto de la Amazonía para la elaboración de toda una serie de proyectos siendo el objetivo general “*apoyar los esfuerzos del Gobierno de Bolivia en la definición y aplicación de una política de ordenamiento territorial para*

la región amazónica boliviana en los departamentos de La Paz, Beni y Cochabamba (Suárez, s/f).

5. 3. 4. Planificación territorial en el Beni.

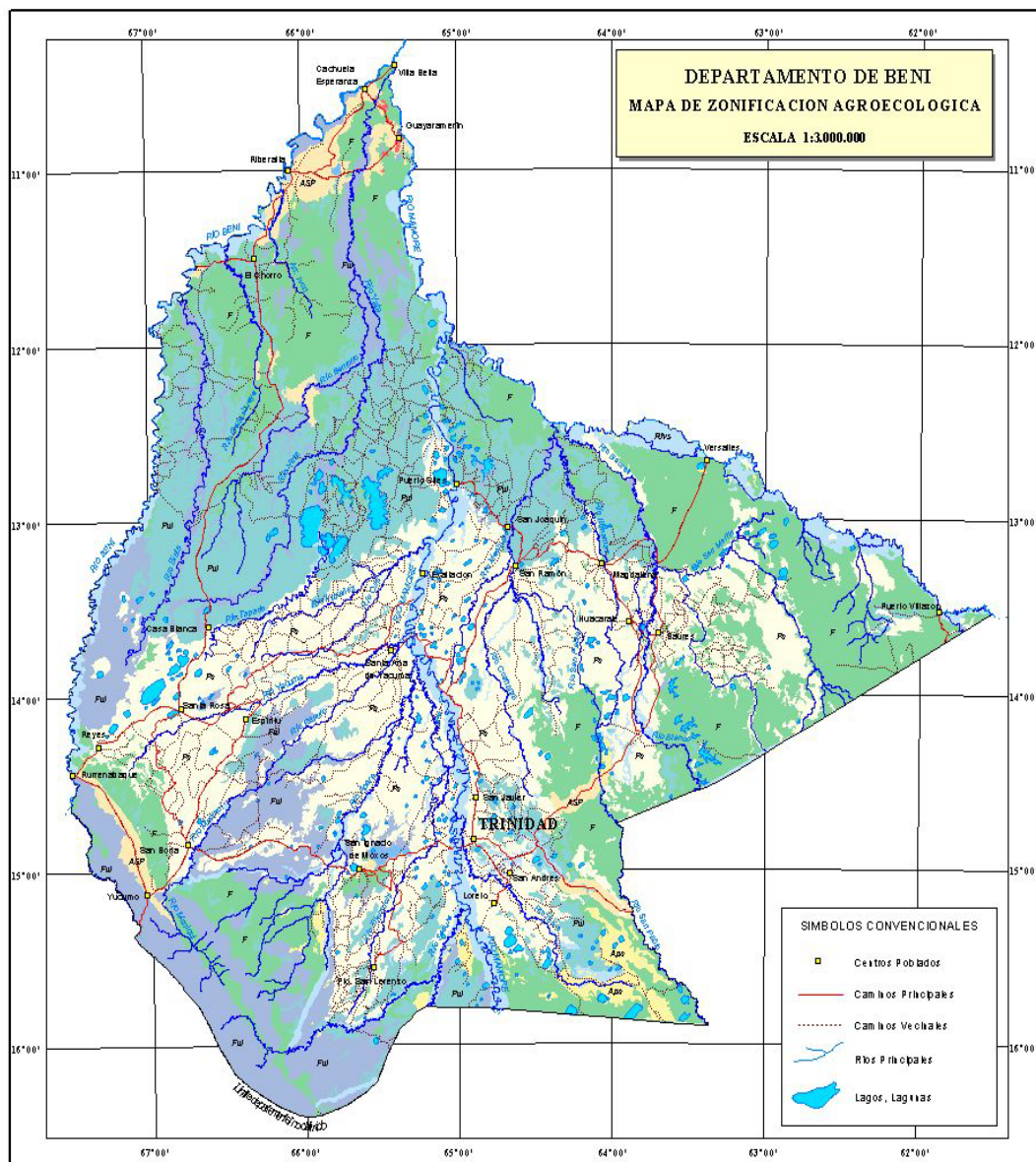
Sin embargo, si atendemos el cuadro anterior (5. 17) podemos apreciar que en este departamento sólo se han llevado a cabo tres planes de manejo en cuanto al ordenamiento territorial a nivel municipal (Magdalena, Huacaraje y Baures) siendo inexistente dicho plan para el municipio de San Ignacio de Mojos. Al menos, a nivel departamental sí se han dado pasos para avanzar en el ordenamiento territorial.

El PLUS que se elabora para este departamento se inscribe en una de las primeras etapas en lo que al ordenamiento territorial se refiere. El 30 de julio del 2002 entra en vigor el Decreto Supremo No. 26732 que establece el Plan de uso de suelos del Departamento del Beni. El mismo recoge en su artículo 3º que “*se aprueba el Plan de Uso del Suelo para el Departamento del Beni (PLUS- BENI), propuesto por la Prefectura del Departamento del Beni, compuesto por los siguientes documentos:*

- a) El mapa del “Plan de Uso del Suelo” basado en la zonificación agroecológica y socioeconómica, a escala de trabajo 1:250.000, con seis (6) categorías generales y catorce (14) subcategorías de uso del suelo.*
- b) Las reglas de intervención, las Reglas de Uso y Recomendaciones de Manejo del Plan de Uso del Suelo del Departamento del Beni, para cada una de las categorías y subcategorías.*
- c) La matriz de reglas de uso según las unidades consignadas en las categorías y subcategorías mencionadas”* (Suárez, s/f).

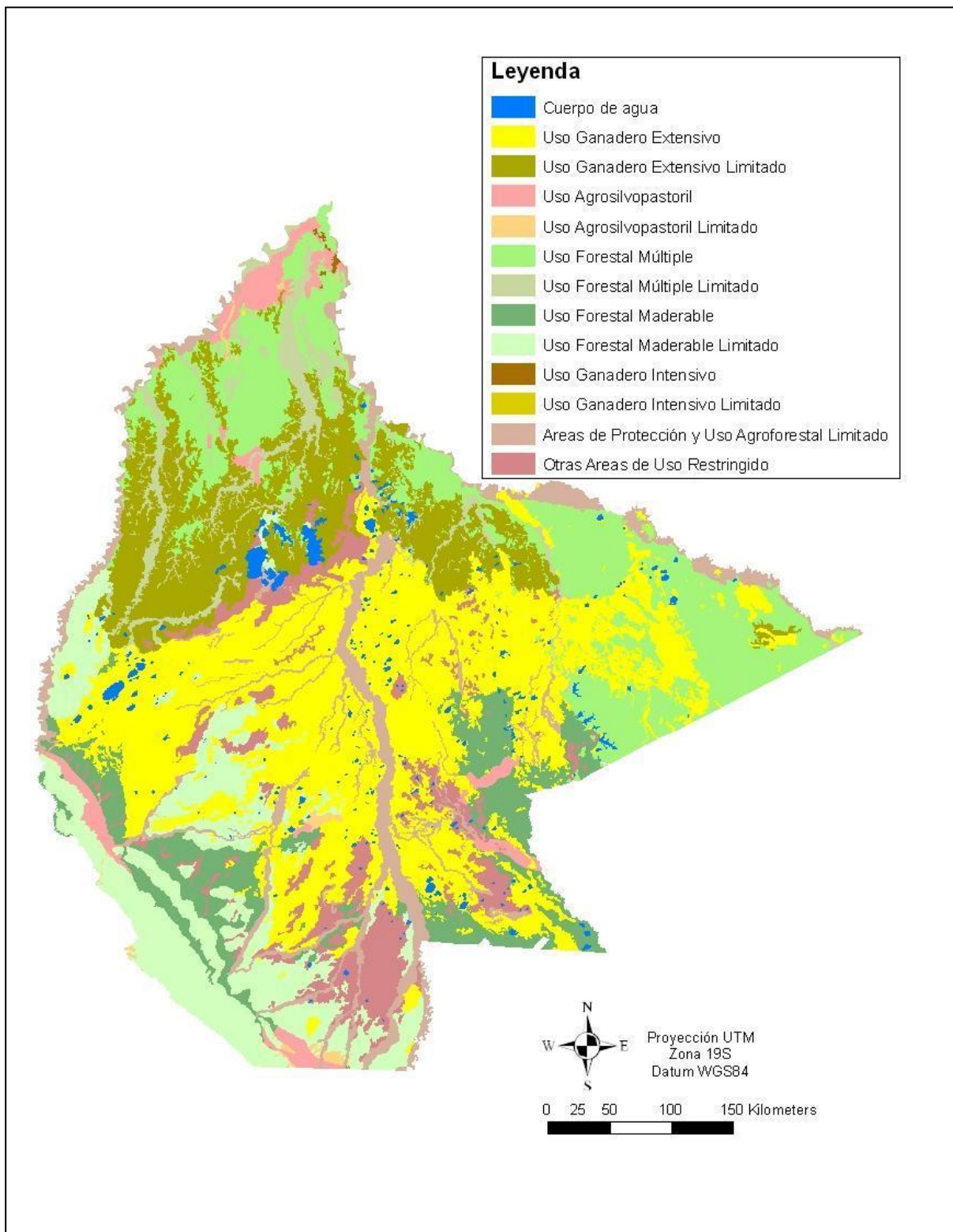
Para el caso del departamento del Beni, el cual es el que atrae el interés del presente trabajo por ser el que alberga al espacio territorial comunal de los mojeños, si bien es cierto que se elaboró el *Plan de Ordenamiento de Uso del Suelo* (PLUS-Beni) en el año 2002 (véase **figura 5. 8**) y se llevó a cabo un *Proyecto de Zonificación Agroecológica* (véase **mapa 5. 4**) con su respectiva base de datos y sistema de información geográfica, éste no ha sido implementado con vistas a lograr un desarrollo sostenible. Pese a todo, el proyecto BID-Amazonia constituiría hasta entonces el mayor esfuerzo realizado desde la administración del gobierno a la hora de efectuar un ordenamiento territorial en la región amazónica (Ministerio de Desarrollo Sostenible, 2001a: 15).

Mapa 5. 4. ZAE del Beni.



Fuente: <http://www.fan-bo.org/biodiversidad/sdap-beni>

Mapa 5. 5. Usos del suelo departamento del Beni.



Fuente: elaboración propia en base a los datos de CPTI.

En el PLUS-Beni se menciona que es a los gobiernos municipales a quienes les corresponde el rol de elaborar de manera paralela sus propios *Planes de Uso del Suelo* los cuales se deben ajustar al plan departamental. Teniendo certeza de la existencia de

un plan de ordenamiento territorial de la gobernación del Beni -lo que hasta hace poco era la prefectura- a nivel municipal no existen más evidencias que indiquen la aplicación efectiva de planes de ordenamiento territorial a dicha escala. Este es el gran vacío de la ordenación del territorio en el departamento puesto que muchos de los municipios que lo conforman aún no lo han hecho efectivo. La provincia de Mojos es un claro ejemplo de ello.

La muy cuestionable actuación humana en el territorio del Beni y, principalmente en la región de Mojos, ha contribuido a incrementar los efectos de las inundaciones. La agresiva deforestación que han sufrido los bosques mojeños durante la década de los 80 y noventa del siglo pasado y la expansión de las estancias ganaderas que transforman los suelos forestales en zonas de pasto, constituyen los principales aspectos que requieren de la intervención de medidas reguladoras encaminadas a minimizar el impacto sobre los suelos de la pampa. La vulnerabilidad de estos suelos de carácter limoarcilloso y con una fuerte presencia de acrisoles, constituye una amenaza a tener en cuenta fundamentalmente durante el periodo de inundación.

Ha quedado explicado que la región amazónica boliviana alberga gran parte de la biodiversidad del país, constituyendo el hábitat no sólo de las poblaciones indígenas que en ella habitan sino de un sinfín de especies de fauna y flora, permitiendo el mantenimiento del vínculo entre diversidad cultural y diversidad biológica o biodiversidad. Sin embargo, los sistemas de explotación forestal y de usos del suelo, basados fundamentalmente en la extracción selectiva de recursos, han preferido ignorar en Mojos el enorme valor ecológico y económico así como sociocultural que supone la preservación de dichos recursos y el respeto por las formas de vida locales de los habitantes de las comunidades indígenas amazónicas.

5. 3. 5. Ordenamiento territorial en Mojos, la TCO TIMI.

Existe en Mojos un fuerte predominio de sistemas de ganadería altamente extensiva hasta semiintensiva. En dicho mapa se percibe con mayor claridad que este sistema de explotación se da a gran escala en el territorio de la llanura mojeña, donde se inserta la TCO TIMI, en el que aparecen pequeños núcleos en torno a los ríos en los que prevalece el uso de bosques con utilización de recursos forestales (principalmente maderables) y agricultura de pequeña escala además de algunas zonas de bosques degradados y fragmentados con agricultura de pequeña y mediana escala, uso artesanal de recursos forestales y uso silvopastorial (principalmente de ganado bovino). El color rojo indica agricultura intensiva de mediana a gran escala que suele corresponder a cultivos no-nativos para la explotación como el arroz o la soya.

El particular medio físico de la llanura de Mojos y los ecosistemas predominantes de sabana y bosque húmedo, han condicionado el manejo y gestión territorial así como los patrones de ocupación del espacio. No sólo el conjunto de componentes biofísicos se han adaptado logrando un equilibrio ecológico perceptible en el paisaje mojeño. Las dinámicas sociales han jugado un papel determinante en la conformación del mismo. Las variables biofísicas, socioeconómicas y político-administrativas han otorgado al territorio un carácter particular que ha permitido el establecimiento de ciertos patrones de comportamiento con respecto a sus ecosistemas. Por dicha razón a la hora de efectuar el análisis de los procesos territoriales que están teniendo lugar en Mojos y de efectuar el correspondiente plan de ordenamiento territorial, se requiere de una comprensión real de las dinámicas existentes en esta región así como de la relación entre los actores sociales y el desarrollo físico espacial. La toma de contacto con la realidad de la región permite conocer el escenario geográfico, así como la comprensión de las dinámicas territoriales que en él están teniendo lugar y de los actores involucrados en las mismas. El hecho de acceder a este conocimiento y tener la posibilidad de poder identificar el contexto territorial en el que se produce la interacción de los subsistemas que lo conforman, genera un discernimiento sobre el fenómeno de la ocupación de espacios en el territorio de la llanura de Mojos. En este proceso no se debe dejar al margen los criterios que llevaron a las poblaciones locales a escoger los espacios de ocupación territorial. Es prioritario considerar las condiciones que han influido en sus lógicas de ocupación del territorio y sus pautas de manejo y gestión del mismo puesto que el sistema biofísico se mantiene a pesar de que el paisaje haya sufrido modificaciones de tipo antrópico. El hecho de identificar, comprender y describir la relación vinculante entre el ámbito espacial y los asentamientos humanos no cabe duda que constituye una parte esencial del proceso de la toma de decisiones posteriores referentes al ordenamiento territorial y los usos del suelo.

La utilización efectiva del uso del suelo y el aprovechamiento de los recursos naturales en base a unos parámetros de sostenibilidad es fundamental para la conservación del medio ambiente en Mojos y para establecer los tipos de usos más adecuados a la tierra en esta región.

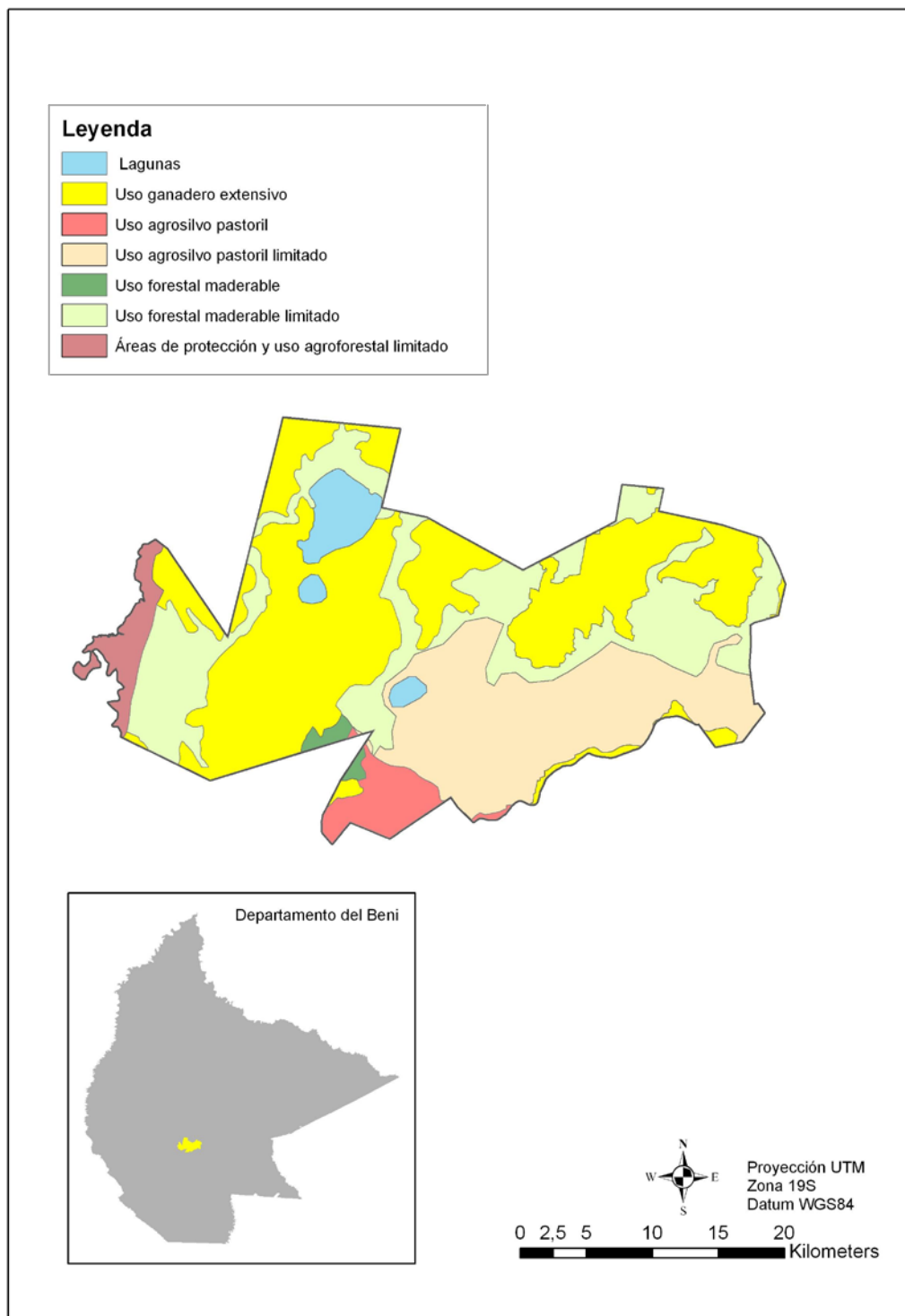
De acuerdo con la clasificación del Ministerio de Desarrollo Sostenible, (**cuadro 5. 15**) el área de estudio de esta investigación corresponde a tierras de uso ganadero extensivo con manejo de bosque, dado que constituyen tierras de baja fertilidad y susceptibles de sufrir inundaciones. Además *“tiene presencia de un complejo de pastizales inundadizos, con interfluvios de terrenos elevados cubiertos de arboledas y bosque. El potencial forestal está limitado a islas de bosques”* (CORDECRUZ *et al*, 1995: 8)²⁵⁰. Por otro lado la presencia de sabanas inundables con potencial forrajero es apta para la ganadería extensiva.

Los suelos de la región son aptos para un buen desarrollo de la producción agrícola. Atendiendo a la capacidad de uso de la tierra podemos señalar diversos tipos de suelos destinados a la producción agroforestal y ganadera:

- Suelos altos: dedicados generalmente a los cultivos de chacos de los comunarios pese a suponer superficies reducidas. En estos hay presencia de bosques de galería e islas de bosque.
- Suelos semi-altos: constituyen suelos delicados y con fertilidad reducida por las inundaciones que sufren temporalmente y por las condiciones físico-químicas, además de que *“la fuerte presencia de sodio afecta al crecimiento de la vegetación”* (CIPCA, 2005: 84).
- Bajíos: conocidos comúnmente como pampas. Son áreas que ocupan gran parte de la llanura de Mojos. Constituyen zonas ocupadas generalmente por el ganado. En ellas se da la presencia de pasturas tanto naturales como artificiales dado que los ganaderos cultivan pasto con la finalidad de que sirva como alimento para el ganado. Son suelos que a consecuencia de las inundaciones – las pampas son las superficies que más tiempo permanecen anegadas al ser los suelos de menor altura- presentan un mayor índice de fragilidad.

²⁵⁰ www.lidema.org.bo/Manuales%20PDF/PLUS%20Y%20POP.pdf

Mapa 5. 6. Usos del suelo de la TCO TIMI



Fuente: elaboración propia en base a los datos del Centro Digital de Recursos Naturales de Bolivia y de CPTI.

En la figura superior se puede deducir cierta información pertinente para el presente trabajo. El uso ganadero extensivo coincide plenamente con las estancias

ganaderas del territorio ignaciano que ocupan las pampas, bajíos y yomomos de la sabana, en donde aparece una cobertura vegetal de herbáceas graminoides, mientras que el uso agrosilvo pastoril coincide prácticamente con el territorio de cada una de las comunidades del TIMI caracterizados por la presencia de bosques aluviales y bosques de galería. Asimismo en las áreas más internas de dicha TCO se da un uso forestal maderable limitado que correspondería a las áreas que dedican las comunidades indígenas a la extracción de tales recursos y que en el pasado fueron sobreexplotadas por la intervención externa.

Desde el Ministerio de Desarrollo Sostenible se considera que en la región de los Llanos de Mojos, a excepción de la actividad ganadera, la tierra está subutilizada (2001c: 34-35). Esto nos demuestra la escasa consideración que se otorga a los sistemas de manejo local practicados por las comunidades indígenas que, en contra de la opinión del propio gobierno, requieren de amplias superficies de tierra, lo cual quiere decir que si se destinara parte del espacio geográfico de la llanura beniana al cultivo de productos agrícolas, el territorio comunal mojeño se vería enormemente mermado, hecho que repercutiría de manera muy negativa en la preservación de los recursos naturales del lugar y en la continuidad del modo de producción indígena.

Pese a los esfuerzos realizados desde la administración boliviana por regular el ordenamiento territorial en el país, éste constituye a día de hoy una asignatura pendiente. Hasta el momento no son muy abundantes los estudios encargados en sistematizar y tipificar de manera rigurosa aspectos relacionados con la ordenación y gestión del territorio. Debemos reconocer por otra parte que se ha procurado implantar una metodología integral como es el caso de ZONISIG –proyecto puesto en marcha gracias a la cooperación con el gobierno de Holanda- la cual ha contribuido a desarrollar *Planes de Ordenamiento Territorial* en algunos de los departamentos del país.

Esta voluntad del gobierno por ordenar el ordenamiento territorial se manifestó en la creación de los instrumentos técnicos que he señalado. Desde finales de la década de los 90 del siglo pasado el Estado boliviano creó distintas herramientas legales y administrativas con el fin de ordenar el territorio de la nación, encaminadas éstas a regular el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales, los cuales estaban siendo sometidos a un fuerte proceso de agotamiento. La iniciativa más importante en este sentido fue la creación del *Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente* (MDSMA), la promulgación de la Ley de Medio Ambiente del año 1992 y la creación del *Sistema Nacional de Áreas Protegidas* (SNAP) (Pacheco P., 1998: 298-299).

A nivel municipal, pese al cambio de actitud por parte del Estado -expresada en la creación de tales instrumentos-, a día de hoy son sólo algunos pocos los casos concretos

en los que se ha aplicado de manera efectiva la ordenación territorial, principalmente a nivel municipal, lo cual no es positivo ni para Mojos ni para el territorio ignaciano.

Por lo tanto pese a los avances que se han producido en materia de planificación territorial, existen, sin embargo, diversas carencias y limitaciones en lo que se refiere a la ordenación del territorio en Bolivia. Una de ellas sería la prioridad concedida a la regulación de los usos del suelo, provocando que se marginen cuestiones que comparten la misma relevancia como es la ocupación del territorio. Uno de los motivos que ha permitido que esto ocurra han sido las políticas de explotación de recursos naturales que han imperado en el país, y de manera específica aquellas de corte neoliberal. Y es que a mediados de la década de los años 80 del siglo pasado se implementaron en Bolivia las medidas de ajuste estructural dictaminadas por el FMI. Estas recetas de corte neoliberal propiciaron la apertura a los mercados internacionales de los recursos forestales del país, lo cual generó un fuerte proceso de deforestación, principalmente en las tierras del oriente boliviano. La “Marcha al Oriente” -como así se denominó la política de colonización diseñada en la década de los años 60 que impulsó la ocupación de grandes extensiones de tierra en los departamentos del Pando, Beni, Cochabamba o Santa Cruz- fue otra de las consecuencias de la desarticulación territorial, del uso indiscriminado de las riquezas agroforestales, del desequilibrio regional y de la inadecuada ocupación del territorio del país. Son estas cuestiones que han sido ya tratadas y sobre las que retomaré más adelante, si bien por su relevancia en las cuestiones que estamos desentrañando conviene recordar.

Uno de los principales motivos por el que no ha sido regulado el ordenamiento territorial en Bolivia, ha sido la falta de voluntad política en unos casos o la negligencia de ciertas instituciones y organismos públicos –como la Superintendencia Forestal o Agraria o el INRA- quienes prefirieron ignorar lo que a día de hoy es una realidad, como la extinción de diversas especies forestales, la transformación descontrolada de usos de suelo o la desigualdad regional.

Actualmente la aplicación de los diversos instrumentos encargados de regular la ordenación y gestión territorial en el país, queda en entredicho por la escasa repercusión manifestada en la práctica en las políticas de ordenación territorial.

En cuanto se refiere a las cuestiones de ordenación territorial para los pueblos indígenas cabe señalar varios aspectos. Una vez más y como sucede con la cuestión de los títulos de propiedad de los territorios comunales indígenas, el ordenamiento territorial parte de un concepto de territorio no compartido por las poblaciones indígenas. La zonificación y el ordenamiento territorial maneja una noción geográfica de territorio que es asumido como amalgama o suma de diversas dimensiones: las formas de propiedad, la organización de los asentamiento humanos, la disposición de

recursos naturales, el uso y manejo de estos, los atributos biofísicos, los ecosistemas, etcétera. Por el contrario, los pueblos indígenas, como bien quedó demostrado en el capítulo 2 de esta investigación, conciben el territorio desde una visión relacional, como un tejido en el que todas aquellas esferas están conectadas, se relacionan y son indivisibles. Manejan una noción a la que Echeverri ha venido a denominar como “no areolar” referido a la concepción del territorio no como un área geográfica concreta sino como un cuerpo viviente, en el que sus partes están en constante interacción (2004). El ordenamiento territorial debería atender a las relaciones socioculturales, ecológicas y productivas que las poblaciones mantienen para con los espacios territoriales que ocupan. El cumplimiento real de este precepto conduciría al respeto por los usos y manejos que del territorio hacen los pueblos indígenas. Es decir, el ordenamiento territorial podría ser positivo visto de esta manera. El problema es que en Bolivia alguno de los principios sobre los que éste se basa, como es el caso de la “participación” (el resto son la “integralidad”, la “conurrencia”, la “subsidiariedad” y el principio “precautorio”, Ministerio de Desarrollo Sostenible, 2001a: 12-13; 2001c: 12.13; s/f: 3) no se cumplen. La participación se refiere a la interlocución ente la sociedad civil y los niveles estatales del ámbito público y las entidades privadas, lo cual en Mojos está aún muy lejos de la realidad. Pese a que la Ley Forestal estipule que para la elaboración de planes de ordenamiento predial en las TCOs se deberá desarrollar *“procesos de consulta participativa que consideren aspectos referidos a los usos y costumbres de los pueblos indígena, incluyendo sus valores culturales y espirituales”* (artículo 28, Reglamento General de la Ley Forestal N° 1700) esto se ha llevado a cabo en el territorio comunal de cada una de las comunidades. Teniendo en cuenta que en la TCO TIMI la mitad de su territorio está ocupado por estancias ganaderas nos podemos hacer una idea de las dificultades que encuentran las comunidades al establecer pautas de manejo de recursos al interior de ésta.

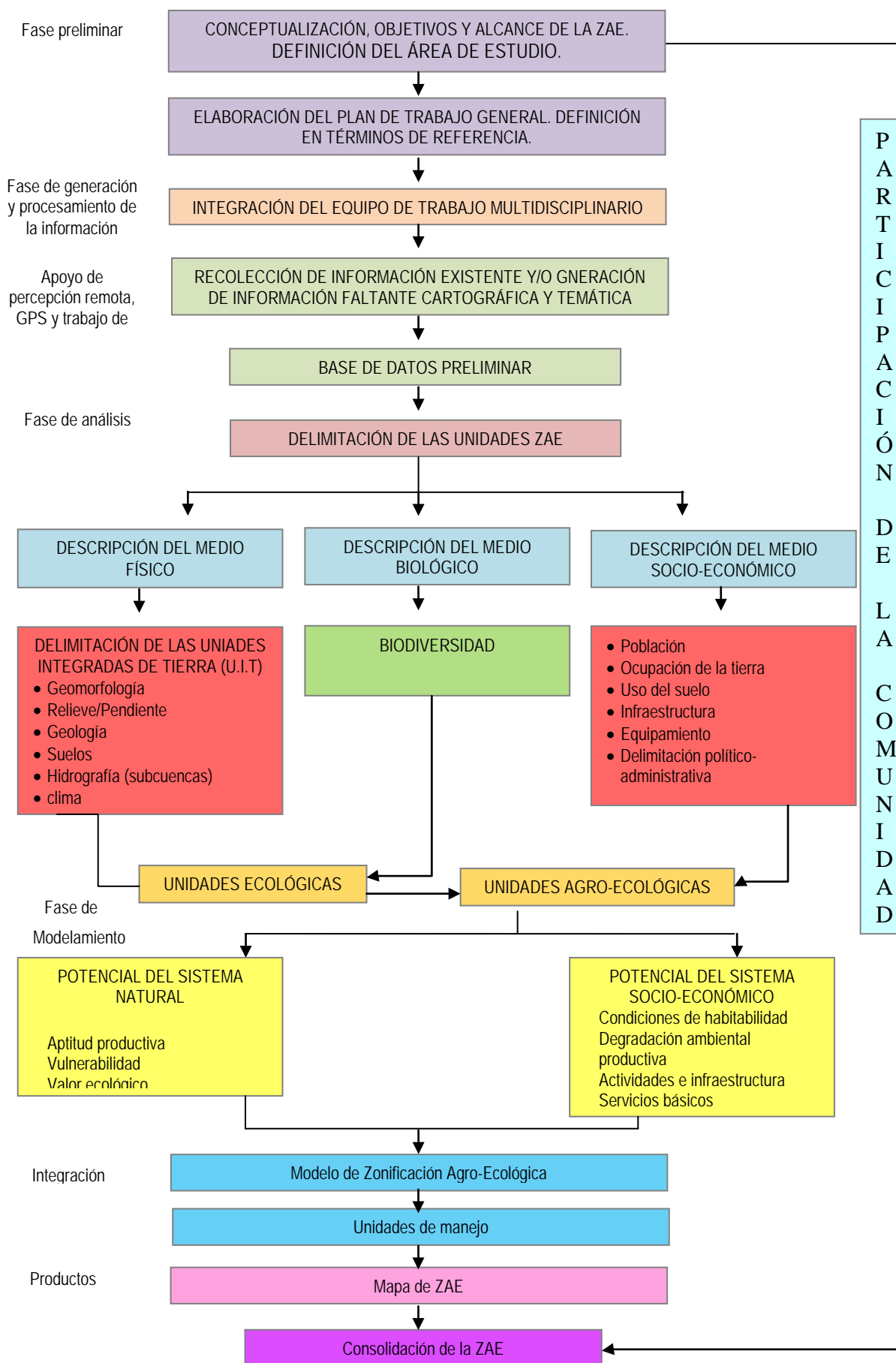
En la región mojeña lo que ha tenido lugar más bien es una imposición por parte del Estado de los diferentes usos del suelo lo cual ha sido definido tras los acuerdos alcanzados con empresas del sector privado, que son las que más intereses comerciales poseen. En otras ocasiones, las más de las veces, es el propio municipio de San Ignacio que delimita y concede derechos de explotación y da recomendaciones de uso agropecuario y forestal del territorio mojeño en base a los estudios de la aptitud y vocación de la tierra a través de la aprobación del PDM estando validado por el comité de vigilancia quien actúa como responsable del cumplimiento de lo concretado en el PDM por la alcaldía del municipio. El problema aquí reside en que hasta muy recientemente ha sido la población blanco-mestiza que ha llevado las riendas del gobierno municipal lo cual les ha otorgado la posibilidad de imponer sus preferencias

en cuanto a la distribución de servicios sociales, infraestructura vial, reglas de uso y lugares de aprovechamiento de los recursos, etcétera. No olvidemos que este grupo social está estrechamente vinculado al sector ganadero y forestal en Mojos quienes han llevado a cabo una ordenación territorial del todo desventajosa para las comunidades indígenas del lugar. De ahí que algunos autores hayan llegado a señalar que *“el proceso decisional es un factor importante en la dinámica socioterritorial que configura el escenario geográfico”* (Saavedra y Ávila X., 2002: 139).

Los leves intentos de superar los incipientes avances logrados en materia de ordenamiento territorial, encuentran una traba que no ha logrado ser superada. Y es que la participación pública de las poblaciones a las que afectará dicho ordenamiento no ha sido tomada en cuenta. Las carencias en este campo siguen siendo evidentes y el camino por recorrer será complicado debido, en gran parte, a las discrepancias existentes entre los diversos actores sociales que intervienen en el proceso. Un ejemplo innegable corresponde al departamento del Beni, donde los fuertes conflictos entre los terceros (ganaderos, agricultores, colonos y las comunidades que no son miembros del Pueblo Indígena u Originario) y las poblaciones indígenas. Dado que la organización del uso del suelo y la ocupación del territorio son parte esencial del ordenamiento territorial así como la gestión del mismo, nuestro trabajo dedicará el último de sus capítulos a realizar un diagnóstico con mayor detalle sobre la gestión del territorio en Mojos, en particular nos detendremos en el análisis de la gestión del territorio en las comunidades indígenas. Destacaremos algunos planes de manejo forestal que constituyen ejemplos de buenas prácticas en cuanto se refiere al uso del suelo, en este caso uso forestal, para demostrar la importancia que encierra el hecho de considerar los sistemas de uso y manejo del suelo que vienen efectuando las comunidades locales a la hora de proyectar una correcta planificación territorial.

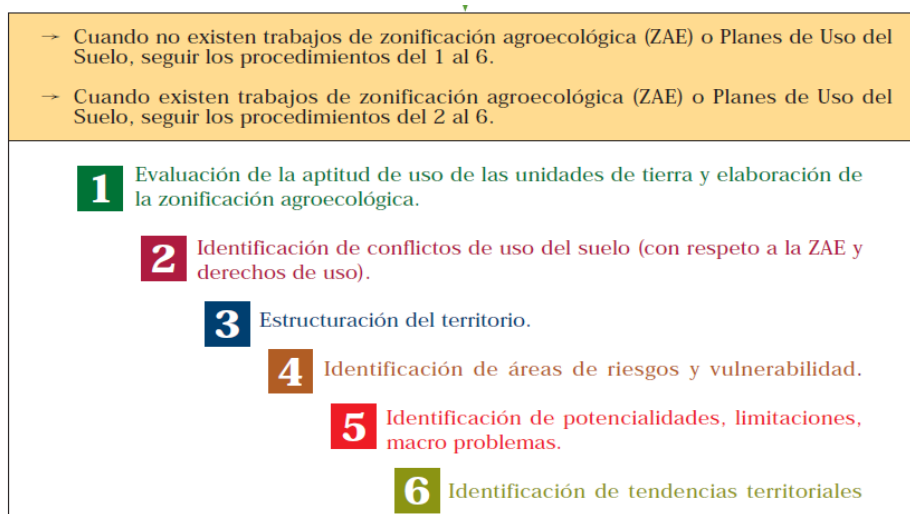
Lamentablemente la presente investigación no ha sido capaz de realizar un plan de usos del suelo que pueda contribuir al ordenamiento territorial de la TCO TIMI. Son diversas las etapas a completar en el proceso de ZAE (**figura 5. 9**) que sólo son posibles con un equipo de trabajo multidisciplinar e interinstitucional de expertos que tenga a su disposición todo aquel material necesario para realizar dichas operaciones. Pese a que el capital humano y técnico hayan constituido nuestros principales limitantes, el tiempo dedicado al trabajo de campo no hubiera sido el suficiente. Pero por encima de todo, la accesibilidad a todos los rincones de la TCO, ya anunciaba que fue del todo imposible.

Figura 5. 9. Esquema ZAE



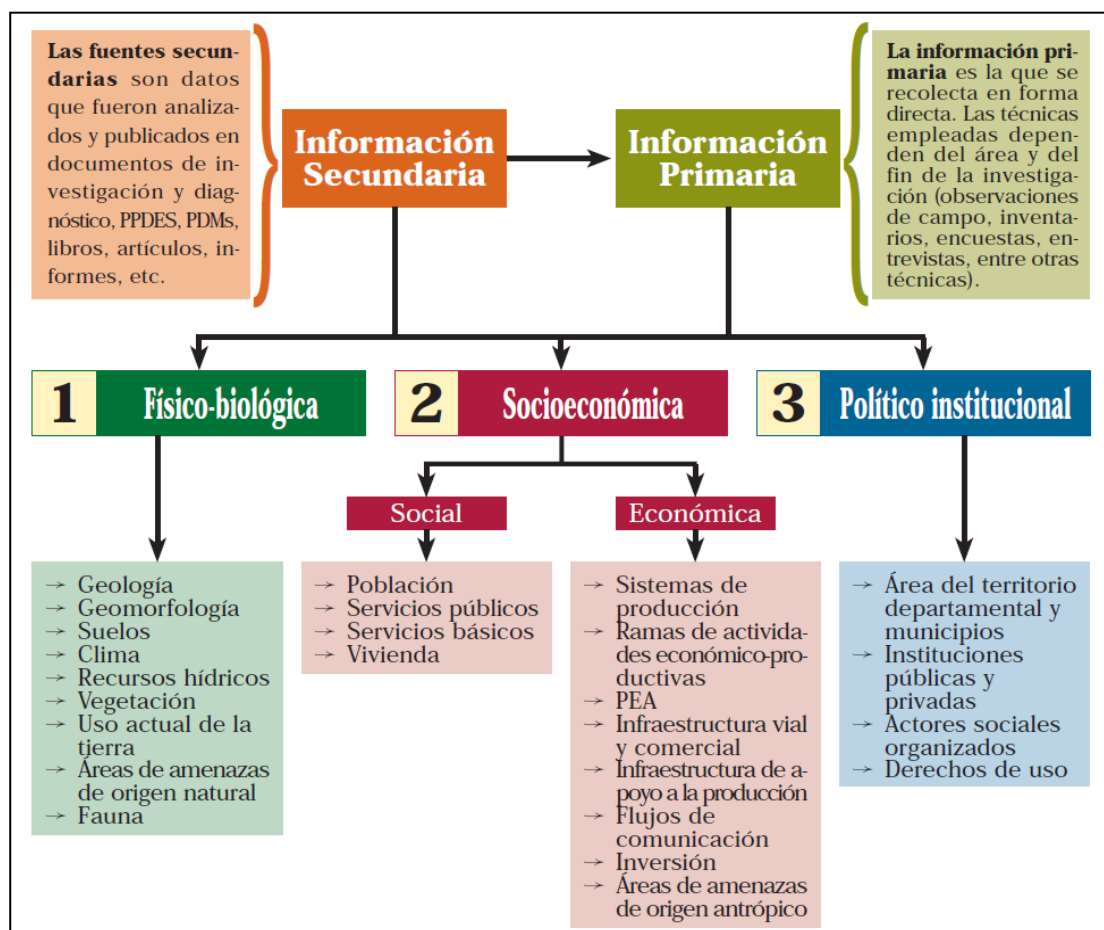
En base al trabajo de Aguilera *et al.* (1995) se establecen varias fases de trabajo hasta llegar a la zonificación agroecológica. Tras una primera fase caracterizada por los levantamientos integrados a partir de imágenes satelitales a escala al menos de 1:250.000 (en Bolivia las fotografías aéreas no se han actualizado desde hace unos 40 años), se debería llevar a cabo un inventario socioeconómico de los recursos del espacio en cuestión: la TCO TIMI. Posterior a ello se debe llevar a cabo un estudio de las unidades de paisaje teniendo en cuenta distintos atributos como el relieve, la litología, geomorfología, recursos hídricos, vegetación, etcétera. Más tarde se creará un mapa de uso de suelos y del potencial de la tierra, los cuales nos servirán para detectar conflictos de uso y ocupación, superposiciones, concesiones (forestales, mineras, ganaderas), tierras no aptas, tierras con vocación silvopastoril, etcétera. El siguiente paso sería elaborar un diagnóstico socioeconómico de la población (mojeño-ignaciana) que incluya las actividades tradicionales de manejo de la tierra, los sistemas de tenencia de la tierra, los flujos migratorios, la ocupación del espacio, el nivel de analfabetismo, la accesibilidad vial, densidad poblacional de asentamientos humanos (núcleos rurales), sistemas agrícolas, etcétera. Una vez completadas estas etapas de trabajo se integra toda la información recopilada hasta el momento. Se volcaría el conjunto de la información obtenida en una base de datos que permitan establecer una base digital con un sistema de información geográfica para finalmente dar como resultado un único mapa que integra todos los anteriores el cual será el de “zonificación agroecológica y socioeconómica del uso de la tierra” al que se llega tras la realización de un “inventario de los recursos naturales, una evaluación física y socioeconómica y, por último, una zonificación que nos conduce al ordenamiento territorial” (Aguilera *et al.*, 1995: 26-27) (véase **figura 5. 11**).

Figura 5. 10. Diagnóstico del territorio.



Fuente: Ministerio de Desarrollo Sostenible, 2001b: 45.

Figura 5. 11. Recopilación y Sistematización de la Información.

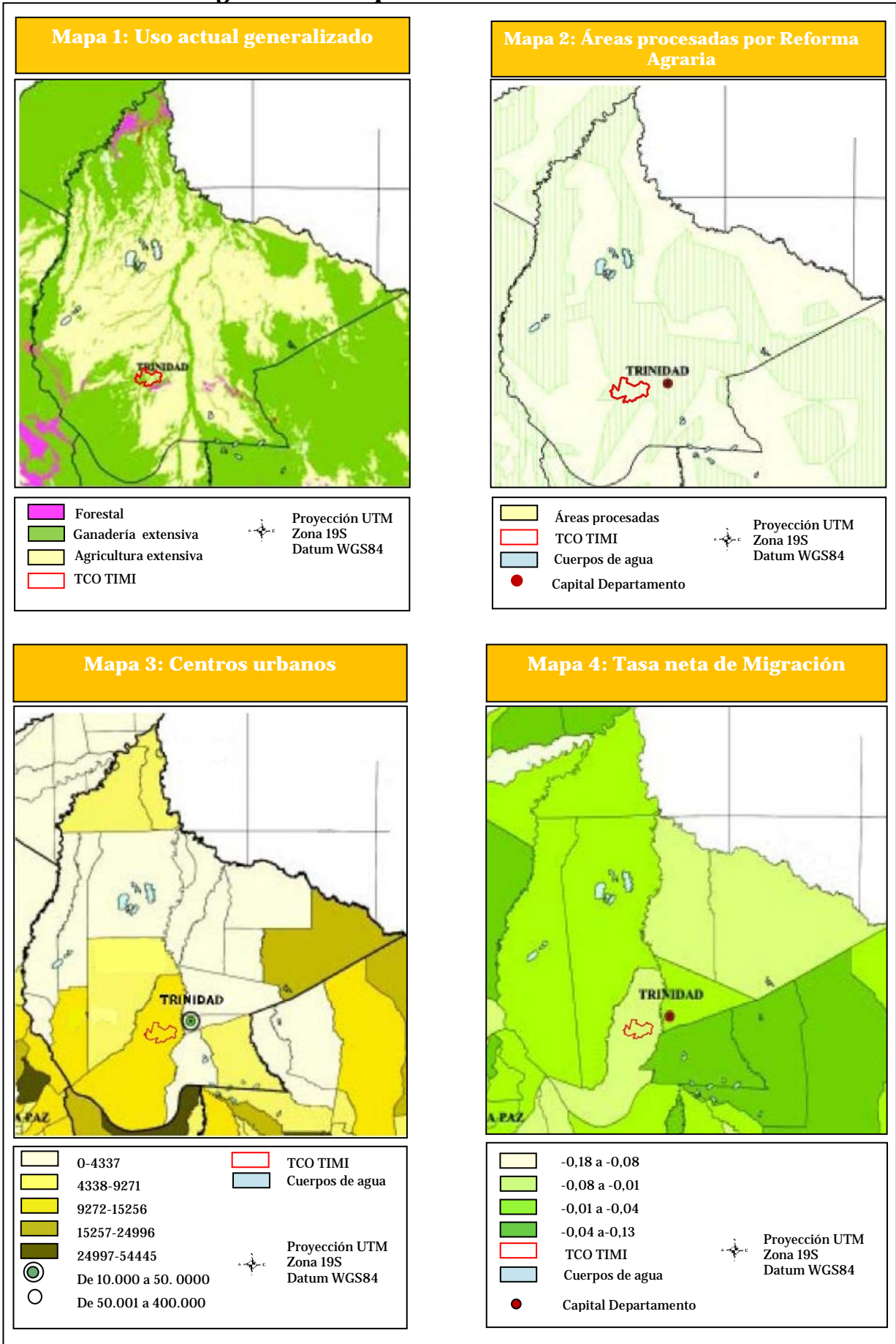


Fuente: Ministerio de Desarrollo Sostenible, 2001b: 21.

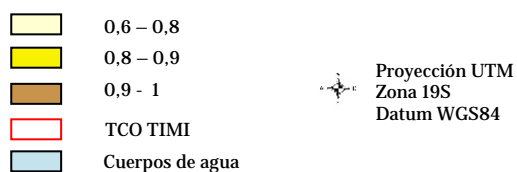
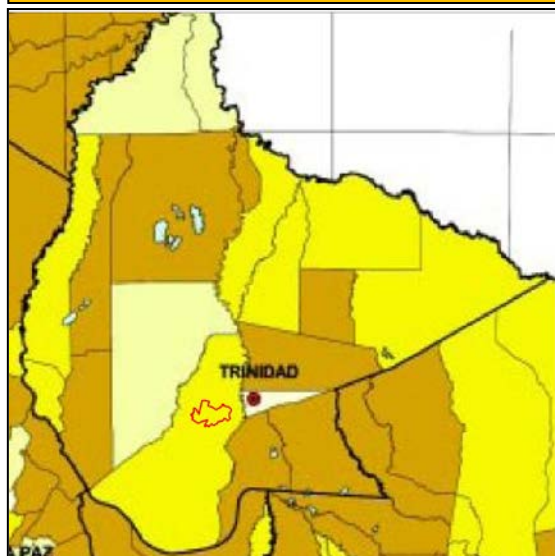
En concreto para la zona de sabanas del Sur del departamento del Beni, donde se localiza el territorio indígena de los ignacianos de Mojos, se ha concluido que el potencial principal correspondería a la actividad ganadera seguido del manejo de fauna silvestre, agricultura y turismo (Aguilera *et al.*, 1995: 34).

Con todo podríamos vaticinar que para la TCO TIMI se podrían identificar varias asignaciones de uso del suelo como zonas de colonización; áreas de extracción sostenida de recursos forestales; zonas para ganadería extensiva, áreas críticas para protección del suelo; áreas críticas de inundación o áreas protegidas para fauna y flora. A continuación se muestran varias figuras que integran algunos estudios que podrían formar parte del plan de uso del suelo para el TIMI en base a la información que de ello existe del departamento del Beni (véase **figura 5. 12**). Es un intento de ordenación del territorio pese a tener la plena conciencia de los obstáculos insalvables que existen para ello y de mis propias limitaciones.

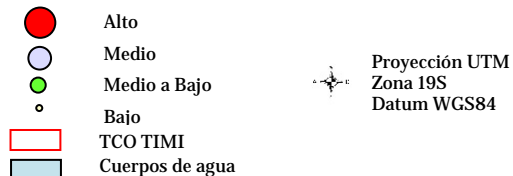
Figura 5. 12. Propuesta PLUS-TCO TIMI.



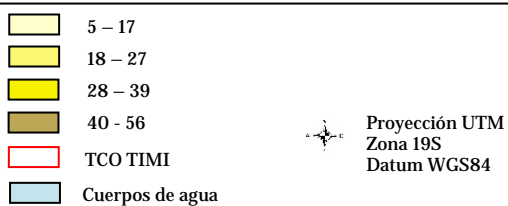
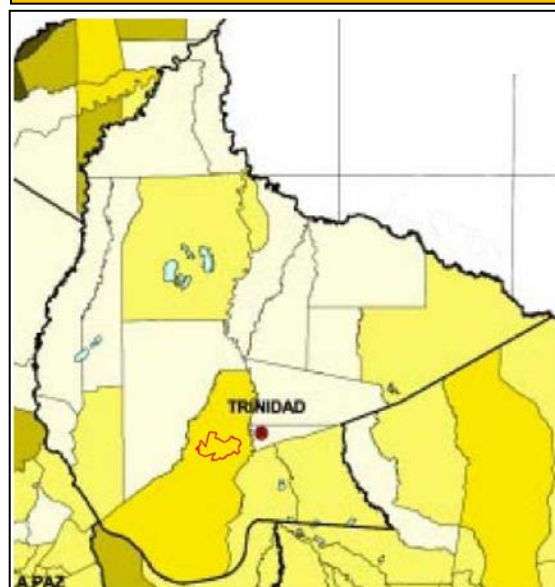
Mapa 5: Índice de pobreza por municipios



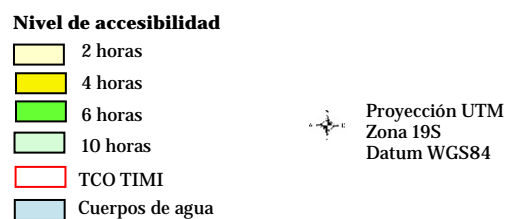
Mapa 6: Servicios sociales, saneamiento básico y electricidad

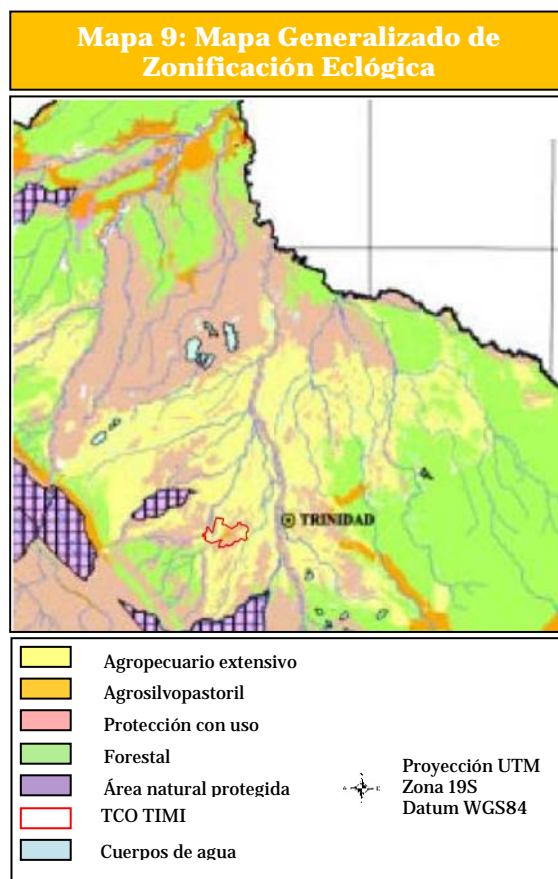


Mapa 7: Tasas de analfabetismo



Mapa 8: Estructuración del territorio





Fuente: elaboración propia en base a los datos del Ministerio de Desarrollo Sostenible.

El caso de Mojos consiste en un claro ejemplo que demuestra hasta qué punto se ha otorgado prioridad a los intereses económicos en detrimento del desarrollo sostenible en la provincia. Mojos ha sido escenario por un lado de una fuerte depredación de los recursos forestales, entre los que destaca la mara o caoba y por otro constituye un espacio geográfico ocupado en buena parte de su extensión por la ganadería extensiva. La inexistencia de un adecuado ordenamiento territorial ha permitido que ambas actividades hayan desarrollado un uso del suelo y de los recursos naturales no acorde con la sostenibilidad del mismo.

Por eso hace algunos años comenzaron a desarrollarse algunas propuestas encaminadas a la búsqueda de una mejor gestión territorial en Mojos. Tras realizar el correspondiente diagnóstico sobre la aptitud de la tierra para usos agropecuarios y forestales y las condiciones socioeconómicas de la población, la organización CIPCA elaboró diversos planes de manejo forestal, entre los que se encuentra el Plan de Manejo Forestal del Caco Silvestre en la Tierra Comunitaria de Origen del Territorio Indígena Mojeño Ignaciano, implementado en base a la norma técnica para la elaboración de planes de manejo específico orientados al aprovechamiento forestal sostenible de recursos forestales no maderables. Éste ha constituido un ejemplo de

cómo crear nuevas estrategias de manejo de recursos forestales y a él se dedicarán unas páginas en el capítulo 7.

Para concluir este apartado simplemente señalar que una reflexión más profunda se requiere acerca del actual uso de la tierra en el departamento del Beni así como del diagnóstico sobre la planificación territorial boliviana a nivel nacional. El ordenamiento territorial podría constituir una herramienta de primer orden conducente a la preservación de los recursos naturales. En Mojos encontrarían una oportunidad única para ello. Si bien sería absolutamente necesario que se cumpliesen los principios en los que el ordenamiento territorial se basa, fundamentalmente el principio de participación. Sólo de esta manera se otorgaría voz a las comunidades indígenas quienes contarían con la posibilidad de expresar bajo sus propios términos el manejo de la tierra y el uso de los recursos naturales, tanto de fauna como de flora, recursos hídricos, patrones de asentamiento, necesidades espaciales, etcétera, necesarios para el cumplimiento y mantenimiento de un desarrollo sostenible en el territorio comunal mojeño. Consideramos muy a tener en cuenta la incorporación de los conocimientos ecológicos tradicionales de las comunidades locales en el manejo de recursos, teniendo muy presente la importancia de la participación pública ciudadana en la intervención en las dinámicas territoriales y en la toma de decisiones, con la finalidad de alcanzar una vertebración territorial acorde con las capacidades del uso de la tierra que pueda evitar la fragmentación de las unidades del territorio.

Siguiendo a Chirif y García Hierro, estamos de acuerdo en que un factor esencial es que *“los títulos territoriales se correspondan con la realidad de la relación pueblo-territorio en la dimensión espacial”* (2007: 38) pero no sólo ya que para la ordenación del territorio en el contexto indígena de la Amazonía es del todo necesario tener en consideración el ejercicio de la territorialidad de estos pueblos que integran *“aspectos materiales, simbólicos, sociales y emocionales”* para lo que se requiere de *“mecanismos que adecuen las fronteras político-administrativas a los procesos socio-culturales de las poblaciones que habitan en el territorio nacional”* (Franky y Echeverri, 2000: 206).

El hecho de que a penas existan estudios relacionados con este campo de investigación en el espacio local del TIMI aporta gran relevancia al presente trabajo, debido a que contribuye a reflexionar por un lado sobre las causas que han impedido que el proceso de ordenamiento territorial en Bolivia se haya completado como realidad y por otro para reflexionar sobre el porqué de la no aplicación e incumplimiento de las directrices que promueven el desarrollo sostenible en el país y en la región amazónica en particular. El presente estudio ha pretendido destacar, si bien de manera muy simplificada, las limitaciones y las potencialidades relativas a la

cuestión territorial en el Beni y apuesta por la implementación de alternativas de aprovechamiento sostenible de recursos, como pueden ser el caso de algunos de los planes de manejo forestal que en los últimos años se han venido multiplicando en la región. Estas cuestiones serán retomadas en el capítulo 7 que trata de manera particular sobre las dinámicas forestales en Mojos. Y es que no sólo en dicho departamento sino en el conjunto del territorio nacional, la preservación de los recursos naturales se convierte en una necesidad de primer orden puesto que una gran parte de la población boliviana hace uso directo de esos recursos en su día a día. El grave impacto ambiental desencadenado a causa de la extracción selectiva de recursos naturales en el Oriente boliviano, fue motivado en buena medida por la inexistencia de una adecuada gestión y ordenamiento territorial permitiendo la explotación masiva de recursos que provocó un resquebrajamiento de las estructuras socioeconómicas en las comunidades locales de la región amazónica principalmente. Las políticas de ordenación de los usos del suelo para entonces no quisieron atender las particularidades poblacionales en esta región y las consecuencias no se hicieron esperar²⁵¹. A día de hoy numerosas poblaciones han visto modificados sus sistemas de producción debido a la reducción de recursos. La sostenibilidad de dichos recursos se vio menoscabada por la permisividad con la que se actuó. Por lo tanto, la enorme importancia que tiene la preservación de los recursos naturales en esta región requiere, como prioridad, la implementación de planes de manejo sostenible así como el diseño de políticas coherentes con las capacidades del uso de la tierra. Es por dicha razón que lograr un manejo sustentable de los recursos naturales en la región amazónica del país, supone un desafío para los organismos encargados de regular las políticas de ordenamiento territorial en Bolivia. Dicho proceso, además de direccionarse hacia la organización del uso y la ocupación del territorio, debería lograr la dinamización de una planificación participativa que consiga involucrar al conjunto de la sociedad nacional puesto que en el uso del suelo intervienen diversas variables relacionadas directamente con el ámbito espacial y con las actividades socioproductivas de las poblaciones locales. Para concluir indicar que puesto que cuestionábamos las carencias de la planificación territorial en Bolivia, sería conveniente incidir en la necesidad del avance en este campo, de estudios que visibilicen la problemática actual y puedan servir como instrumento de reflexión para futuras investigaciones. Desde el propio Ministerio de

²⁵¹ Zulema Lehm explicaba en su diagnóstico acerca de la situación de las poblaciones indígenas de la zona de Trinidad y alrededores (1987), las negativas consecuencias que sufrieron tales poblaciones a raíz de la construcción de la carretera entre La Paz-Trinidad y Trinidad-Santa Cruz que se hizo sin tener en cuenta las singulares características físicas de la región, lo cual supuso que las inundaciones que anteriormente eran del todo predecibles por poblaciones ribereñas del Mamoré dejaran de serlo, con las implicaciones que ello acarreo.

Desarrollo Sostenible y Planificación se reconoce la necesidad de implementar políticas de ordenamiento territorial en el nivel nacional, departamental y municipal para *“lograr el adecuado uso del suelo y ocupación del territorio, el uso racional de los recursos naturales y la optimización de las actividades socioeconómicas”* (Ministerio de Desarrollo Sostenible, s/f: 12). Incluso la Nueva Constitución Política del Estado (NCPE), aprobada hace apenas dos años, atiende a la necesidad de dar prioridad a la elaboración del ordenamiento territorial en Bolivia, así como la ejecución de dichos planes. Pero esto solo será posible previa elaboración y ejecución de planes de ordenamiento territorial en cada uno de los municipios. Hasta entonces no dejan de ser pretensiones teóricas. Solo con el cumplimiento de dicha agenda se podría pensar en la consecución de un desarrollo sostenible para el conjunto del país.

5. 4. CONCLUSIONES

En torno a la tenencia de la tierra en el contexto local de Mojos giran una serie de dinámicas que no sólo han influido en las relaciones interétnicas que los distintos grupos sociales han mantenido. Por un lado la ocupación del territorio comunal mojeño ha afectado a las relaciones sociales y ha dado como resultado un creciente número de situaciones de conflicto. Por otro lado sabemos que la desigual distribución de la tierra en la región y la inequidad que caracteriza el acceso a la misma sirvió de revulsivo a las poblaciones mojeñas en la organización del movimiento indígena encaminado a revertir la situación en la que se veían inmersos a causa de las políticas agrarias vigentes desde el siglo XIX pero sobre todo desde la reforma del 53. Dicha desigualdad dio lugar a la aparición de un escenario social definido en términos de conflictividad. La frontera ganadera avanzaba rápidamente. Los terceros incrementaban sus posesiones territoriales aunque ello significara saltarse la legalidad y superponer sus propiedades a aquellas comunales de los territorios indígenas. La reproducción tanto física como cultural de las comunidades ignacianas se hacía cada vez más complicada de perpetuar. Éstas quedaban recluidas en mosaicos espaciales cada vez más limitados. Los conflictos por la propiedad de la tierra y la ocupación del territorio en el espacio local se hicieron insostenibles. Había quedado demostrado que la legislación agraria no estaba de parte de los pueblos indígenas, quienes eran los dueños de una proporción de superficie muy inferior a la que correspondía a la población blanco-mestiza. La única salida que vislumbraron fue la articulación como movimiento para canalizar las demandas de tierras y territorio frente a los organismos nacionales e incluso internacionales. Tendrían que esperar un tiempo cargado de tensiones, actos violentos y episodios de miedo en el contexto municipal de San Ignacio hasta que la alcaldía cayera en manos

del sector indígena. Con la irrupción de estos en el panorama político las antiguas lógicas sociales se desvirtuaron y un nuevo escenario en el que ambos grupos compartían estrategias al mismo tiempo que competían por la obtención del poder político emergió. La población mojeño-ignaciana se sometió a un profundo proceso de empoderamiento.

La presión ejercida por el movimiento indígena provocó el derrumbamiento de las que hasta principios de los años 90 del siglo pasado habían sido las instituciones encargadas de regular la tierra en el país, quienes cometieron toda clase de irregularidades en lo que a las dotaciones de tierras se refiere, por las que los grandes terratenientes del Oriente de Bolivia salieron enormemente beneficiados. El latifundio que generó la concentración de la tierra en manos de aquellos que por lo general guardaban buenas relaciones con los gobiernos neoliberales y militares, generó la fragmentación territorial en el espacio comunal de los mojeños. Y no sólo, sino que estas propiedades privadas fueron en el mayor de los casos dedicadas a un sistema de ganadería extensiva que no hacía más que continuar la invasión del espacio local ignaciano y de explotar los recursos en los que estos se basaban para su desarrollo, así como degradar los suelos de la pampa mojeña, sometidos a presiones extremas.

La desigualdad que caracterizó por tantos años a la tenencia de la tierra en Bolivia buscó ser frenada por el movimiento indígena de Tierras Bajas. Una nueva institución agraria, el INRA, con su respectiva legislación marcó un punto de inflexión en la historia del agro boliviano. El proceso de saneamiento de tierras parecía ser la solución definitiva a la realidad de dominación política y socioeconómica de los pueblos indígenas. Lejos de la realidad la TCO TIMI se vio inmersa en un largo proceso que recientemente ha llegado a su fin en la fase administrativa. La Ley INRA instituyó además una nueva propiedad de la tierra: las *Tierras Comunitarias de Origen*, que se asociaban a los pueblos indígenas que se autoidentificaran como tales. Con vistas a lograr convertirse en titulares de dichas propiedades agrarias, las poblaciones indígenas, se vieron obligadas a pasar por un proceso de reformulación identitaria que legitimase su pasado originario. Esto es lo que ocurrió en el seno del pueblo mojeño-ignaciano. Por eso podemos afirmar que no sólo la participación en la esfera del gobierno municipal modificó las relaciones interétnicas que allí se desplegaban. La nueva condición jurídica que asumían fue otro factor más que intervino en el proceso de (re)construcción de la identidad indígena.

En todo este contexto el ordenamiento territorial supone una herramienta esencial para solventar la problemática agraria en Mojos. Conforme al artículo 300 de la NCPE, la elaboración de planes de ordenamiento territorial son competencias que corresponde a los gobiernos autónomos departamentales, municipales e indígena lo

cual quiere decir que si San Ignacio se convierte en Autonomía Indígena contará con la posibilidad de elaborar su propio plan de ordenamiento territorial. Si bien, las lógicas territoriales de la población ignaciana deben ser tenidas en cuenta para no infringir de nuevo en el resquebrajamiento del territorio comunal y deben ser en segundo lugar coherentes con el ordenamiento territorial a nivel municipal y nacional en último término. Para ello el sistema de manejo indígena y los usos de suelos que estos tradicionalmente han venido desarrollando deben ser respetados y garantizados por el Estado. Algunos pasos se han dado: se ha creado la figura legal de las TCOs que si bien es cierto que para el caso del TIMI no se ajusta a todos los principios que definen a dicha propiedad agraria, es un paso en el avance del reconocimiento de los derechos territoriales.

Se está procurando que las graves repercusiones que para el pueblo mojeño ha tenido la usurpación de su territorio ancestral no vayan a más dado que la preservación de la cultura ignaciana corre peligro si la invasión por parte de los terceros no se logra detener. Sólo un proceso de saneamiento, transparente, incluyente, justo y participativo podría revertir la situación de dominación cultural a la que el pueblo ignaciano ha estado históricamente sometido.

Sin la intención de desviarme de la problemática agraria, el saneamiento de la tierra constituye, por lo tanto, el hilo conductor del próximo capítulo.

6. Pueblos indígenas tocando a las puertas del derecho²⁴⁹. El proceso de saneamiento de tierras y sus consecuencias.

Tras haber analizado la estructura agraria de la región mojeña, así como las dinámicas vinculadas con la tenencia de la tierra, dedicaré el presente capítulo a diagnosticar el proceso de saneamiento de tierras puesto en marcha en Bolivia en 1996 y de manera particular en la provincia de Mojos, dando a conocer el estado actual de la titulación de la TCO TIMI, las estrategias adoptadas por los actores sociales involucrados en tal proceso, los trámites, los mecanismos de resistencia que han ejercido unos y los mecanismos de lucha de otros. Efectuaré un breve repaso histórico con la finalidad de contextualizar dicho proceso de saneamiento y facilitar la comprensión de la situación actual, en la que se ha logrado sólo en parte los objetivos que se perseguían. Trataré cuestiones relativas a los elementos reguladores así como a los instrumentos legales del proceso. Asimismo, examinaré los conflictos de tipo territorial (y étnico) que han surgido esencialmente entre la población indígena y los *terceros* y de qué manera tales conflictos han ejercido una influencia en las dinámicas sociales y políticas del municipio. Concluiré planteando una serie de propuestas dirigidas al avance de la distribución de tierras en Bolivia.

Las fórmulas para el proceso de saneamiento y la titulación de tierras son distintas en cada país: en Venezuela ambos corren de manera paralela; en Nicaragua el saneamiento se realiza posteriormente al proceso de titulación, todo lo contrario a lo que sucede en Bolivia en donde el saneamiento se efectúa previo a la titulación (Chirif y García Hierro, 2007: 326). Sin embargo, en todos ellos existe un denominador común: las altas cotas de conflictividad (*ibíd*). Y es que el proceso de titulación de tierras

²⁴⁹ Título inspirado en el capítulo de Pedro García Hierro: *Territorios Indígenas: tocando a las puertas del Derecho*, 2004.

indígenas no se atrevió a revertir territorios o compensar a las poblaciones indígenas con las tierras que les habían sido usurpadas. Chirif y García Hierro se valieron del ejemplo del Beni en donde de los más de 20 millones de hectáreas, 14 correspondían al sector ganadero, repartiéndose el resto entre pequeños productores campesinos, concesiones forestales y comunidades indígenas, lo cual debería presionar al gobierno del país para ejecutar dicha reversión o expropiación a los grandes terratenientes a favor de los derechos territoriales indígenas (*ibíd.*, 48). Lejos de la realidad, tal sector se vería favorecido con dotaciones de tierras que, según estos autores, “*serviría para garantizar la seguridad reproductiva del ganado*” (*ibíd.*, 49-50).

La presente investigación muestra un especial interés en el saneamiento de las TCOs lo cual ha permitido un mayor control de las poblaciones indígenas sobre sus espacios territoriales que han estado bajo explotación y dominio externo durante cientos de años.

La Ley INRA define el proceso de saneamiento como “*el procedimiento técnico-jurídico transitorio destinado a regularizar y perfeccionar el derecho de propiedad agraria*” el cual es ejecutado “*de oficio*” o “*pedido de parte*” (artículo 64)²⁵⁰. El saneamiento de tierras se encarga de regular la titularidad de la tierra con el objetivo de redistribuirla en base a principios de equidad, igualdad y justicia social.

Chirif y García Hierro sugieren que:

“un proceso de saneamiento tiene por objetivo ordenar y consolidar la tenencia de la tierra, regularizar y perfecciona la propiedad agraria irregular, imperfecta o conflictiva y actualizar o regularizar su estado registral, armonizando en su conjunto los derechos agrarios que definen un área catastral determinada de antemano” (ibíd., 325).

El saneamiento de la tierra concede la posibilidad de transformar la estructura de la tenencia de la tierra sobre el principio de la equidad y reestructurar el régimen agrario vigente desde hace medio siglo, recordando que la tierra constituye el recurso indispensable sobre el que se basa el desarrollo de los pueblos indígenas. El saneamiento de tierras es una oportunidad entonces con la que cuentan estas poblaciones para vertebrar a otro nivel las relaciones sociales entre las comunidades indígenas y los *terceros* que han determinado la historia agraria de Bolivia. Con la aparición de las TCOs como nueva propiedad agraria se inaugura un ciclo en el que los pueblos indígenas vislumbran la posibilidad de ver reconocidos sus derechos

²⁵⁰ <http://constituyentesoberana.org/info/?q=texto-ley-agraria>

territoriales. Las comunidades ignacianas pueden lograr un desarrollo local sobre la base territorial.

Del mismo modo que ocurrió para el capítulo anterior, la tarea de investigación y redacción de este capítulo se ha visto limitada por la dificultad en el acceso a la información publicada y difundida por fuente oficiales²⁵¹. La página web del *Instituto Nacional de Reforma Agraria* ha servido pero sólo parcialmente dado que la información o bien es muy general -sin incurrir en detalles precisos para municipios y TCOs- o no se encuentra actualizada o ni siquiera está registrada. Un aspecto a tener en cuenta es la posición partidista del INRA que se ha esforzado en los últimos años en discriminar la superficie saneada por los anteriores gobiernos y aquella sometida al proceso de saneamiento desde la llegada al poder de Evo Morales.

6. 1. ANTECEDENTES DEL PROCESO DE SANEAMIENTO: DE LA REFORMA AGRARIA A LA MARCHA POR EL TERRITORIO Y LA DIGNIDAD²⁵².

Sabemos de qué manera la implantación del Estado-nación moderno provocó la inversión de la categoría étnica para dar paso al reconocimiento de los indígenas como ciudadanos del nuevo Estado. Este hecho, ligado a la instauración definitiva de la propiedad privada, estableció un nuevo régimen de tenencia de la tierra el cual se vio favorecido desde entonces por la dotación de tierras en favor de la población blanco-mestiza del Beni. En ello tuvo mucho que ver las políticas de colonización formalizadas por los gobiernos de turno (sabemos que fue en la época de los gobiernos dictatoriales del siglo pasado cuando se produjo el mayor proceso de concentración de la propiedad agraria en detrimento de las comunidades indígenas). La Reforma Agraria del año 1953 consolidó el latifundio en la región amazónica del país. Como consecuencia de todo el

²⁵¹ No puedo dejar de mencionar las reticencias por parte de la Dirección Nacional del INRA a aportar la información necesaria para el desarrollo de la presente investigación. A pesar de cumplir con todos los requisitos que me fueron exigidos, se negaron a colaborar alegando que no disponían –presuntamente- de la información que les era solicitada cuando ésta se limitaba a la consulta de la cartografía correspondiente a la TCO del TIMI, a consultar la demanda de titulación efectuada por las comunidades mojeño-ignacianas y a mantener una entrevista con alguno de los técnicos de dicha institución para la mejor comprensión del proceso de titulación de la TCO en cuestión y de un absoluto rigor en el manejo de las fuentes de información. Afortunadamente, otras instituciones, igualmente oficiales como el CPTI o el IGM –tanto de la ciudad de Santa Cruz como de la ciudad de Trinidad- aceptaron colaborar así como proporcionar la información solicitada.

²⁵² Un estudio muy completo en este sentido es el de Sonia Brito Sandoval, quien en su obra *Mujeres indígenas protagonistas de la historia*, en el capítulo correspondiente a “La Marcha Indígena por los Territorios, el Desarrollo y los Derechos Políticos”, lleva a cabo un repaso histórico -enormemente clarificador- desde principios de la década de los 90 del siglo pasado, concretamente desde la creación de la *Subsecretaría de Asuntos Étnicos* (SAE), referido al reconocimiento de los territorios indígenas a nivel nacional (1998).

proceso de ocupación de tierras, las poblaciones mojeñas se vieron cada vez más relegadas a ocupar espacios que consideraban insuficientes, encontrándose confinadas en los mismos (véase **mapa 6. 4**). El fermento resultante de todo ello junto con la penetración masiva de colonos en las últimas décadas del siglo XX, la deforestación y colonización en masa de la región, la emergencia a nivel internacional de movimientos indígenas reclamando el reconocimiento de derechos colectivos, de su diversidad, efectuando demandas territoriales, de justicia social, equidad, igualdad de género, etcétera, sería el caldo de cultivo para la aparición de los indígenas mojeños en el escenario público del país.

6. 1. 1. La Reforma Agraria de 1953.

Colchester ha sido uno de los científicos que ha defendido la necesidad de llevar a cabo reformas estructurales en el ámbito agrario de los países del Tercer Mundo, orientadas a asegurar la igualdad en el acceso a la tierra y a frenar los procesos de deforestación en ellos (1993). No ha sido el único. Las políticas desarrollistas de mitad del siglo pasado también apostaron por la implantación de estas medidas. Bolivia se sumaría a estas iniciativas.

Una de las disposiciones más importantes adoptadas tras la revolución boliviana de 1952, a raíz de la expulsión de los hacendados por parte de milicias campesinas principalmente en la región de los valles de Cochabamba, fue la entrada en vigor de la Ley Agraria -“la más importante ocurrida en América Latina después de la revolución mexicana de 1910, significó la cancelación del Estado liberal en Bolivia”²⁵³ (PASOC-CIPCA, 2007: 19)- un año más tarde, en 1953. La enorme importancia concedida de manera unánime por numerosos autores a esta reforma se debe, como señalan algunos investigadores, a que “supuso un punto de inflexión no sólo para la estructura y sistemas de tenencia del agro boliviano, sino también para las formas de organización y gestión del territorio y de sus recursos agropecuarios por parte de las comunidades” (Martín, Mata y Santa Cecilia, 2008: 535). Un hecho muy significativo es que se creó en el mismo año y a efecto directo, la *Confederación Nacional de Trabajadores Campesinos de Bolivia* (CNTCB). Además de las dos instituciones

²⁵³ Son numerosos los estudios que coinciden en esta idea. Recordar brevemente que la Revolución Mexicana contra la dictadura de Porfirio Díaz, repartió algo más de 20 millones de explotaciones ejidales, tras las luchas zapatistas y el gobierno del Lázaro Cárdenas (Choncol, 2003: 208). Choncol desarrolla un interesante análisis del conjunto de reformas agrarias que tuvieron lugar en América Latina en el siglo pasado, haciendo un repaso a países como México, Bolivia, Guatemala, Chile, Perú, Cuba o Venezuela. Un análisis similar lleva a cabo en la misma obra de compilación de artículos sobre las reformas agrarias en América Latina y en concreto en Bolivia, uno de los más renombrados investigadores de Bolivia, Xavier Albó, con una diferencia, este último articula su reflexión en torno al papel jugado por las poblaciones indígenas así como a la emergencia de las naciones étnicas.

encargadas de la dotación de tierras desde entonces, hasta la más reciente Reforma Agraria de 1996: el *Consejo Nacional de Reforma Agraria* y el *Instituto Nacional de Colonización*, quienes, como ya señalé, no demostraron la eficacia y capacidad esperada –al igual que el posterior *Servicio Nacional de Reforma Agraria*- puesto que en el caso de los llanos orientales, la distribución de tierras se caracterizó por su “*excesiva concentración*” (PASOC-CIPCA, 2007: 20-21).

La Reforma Agraria contribuyó a desarticular, en términos socioeconómicos, las comunidades indígenas al convertirlas en campesinas y vincularlas al mercado de tierras. La cosmovisión cultural indígena así como la concepción integral que estas manejaban del territorio fue distorsionada en el momento en el que desde la nueva legislación se reconocía exclusivamente el nivel superior de la tierra (Lijerón, 1997: 119). Las consecuencias serían funestas para los indígenas del Beni, quienes, en la opinión de Arnaldo Lijerón, serían los más desfavorecidos por esta reforma al no poder titular sus tierras de acuerdo a su propia organización socioeconómica (*ibíd.*, 120). Pese a reconocer la existencia de *grupos selvícolas* -como así fueron denominadas las poblaciones indígenas- sus derechos como propietarios no se normativizaron, o dicho de otra manera, los derechos territoriales no fueron legalmente reconocidos. Este vacío legal fue aprovechado por los *terceros* que ocuparon tierras en las que habitaban poblaciones indígenas, las cuales consiguieron titular como propiedades privadas.

El artículo 129 de la Ley de Reforma Agraria que estipula que “*los grupos selvícolas de los llanos tropicales y subtropicales que se encuentran en estado salvaje y tienen una organización primitiva, quedan bajo la protección del Estado*” (Mihotek, 1996: 35; Albó, 2008: 36) permite comprender la tutela ejercida a manos del Estado boliviano hacia las poblaciones indígenas en materia agraria, lo cual explica en buena medida, la expropiación de tierras que estas poblaciones soportaron así como la concentración de tierras a favor de *terceros*.

La Reforma Agraria permitió en Mojos consolidar legalmente la hacienda ganadera que a día de hoy concentra las grandes propiedades de los más poderosos terratenientes y, consecuentemente, la riqueza de la región. De la misma opinión es Lazo Zubieta quien calificó como nefasto el proceso de Reforma Agraria para los indígenas mojeños quienes vieron cómo la propiedad ganadera se incrementaba a costa del cercamiento de las pampas y los montes, reclusando a las comunidades indígenas en espacios que no se correspondían con su noción de territorialidad, que igualmente se vio desvirtuada (2007: 44-45). Zulema Lehm ya sugirió que el empuje hacia espacios marginales que sufrieron las comunidades indígenas se debió en buena medida a la “*expansión y cercamiento de las estancias en el área rural que se ha venido realizando con renovado ímpetu*” desde la década de los ochenta del siglo pasado, lo cual dificulta

enormemente la reproducción del grupo que vive en condiciones precarias (1987: 7). Las políticas de colonización puestas en marcha por la Reforma Agraria incidieron en la imagen de la región amazónica como espacio deshabitado lo que dio como resultado la apertura a oleadas de colonos que crearon nuevos asentamientos que a su vez incrementaron la presión sobre la población mojeña.

Algunos autores afirman que la Reforma Agraria del 53 tenía como objetivo prioritario aplicar los lineamientos del desarrollo capitalista²⁵⁴, transformando las antiguas haciendas en empresas capitalistas a través de la inyección de capital por parte del Estado a los grandes complejos agroindustriales o a través de dotaciones de tierras que permitiesen consolidar los grandes latifundios (Romero C., 2003: 84).

La investigación elaborada entre la *Pastoral Social Cáritas* (PASOC) y el *Centro de Investigación y Promoción del Campesino* (CIPCA), en base a los datos de un anterior estudio sobre la ley INRA, mencionan los objetivos que se pretendieron conseguir en un principio con la Reforma Agraria de 1953:

- “La abolición de la servidumbre, para cambiar el sistema feudal de tenencia y explotación de la tierra.
- La liquidación del latifundio imponiendo una justa redistribución entre los que la trabajaban, instituyéndose el trabajo como fuente del derecho de adquirir la propiedad de la tierra.
- La restitución a las comunidades indígenas de las tierras que les fueron usurpadas.
- La tecnificación y el aumento de la producción agropecuaria.
- La promoción de corrientes de migración y la vertebración económica del oriente con occidente.
- La conservación de los recursos naturales” (2007: 20-21).

²⁵⁴ El Plan Bohan de 1942 -uno de los elementos integradores de la cooperación entre Estados Unidos y Bolivia- advertía al país sudamericano la necesidad de aplicar una serie de medidas orientadas a propiciar la apertura de mercados con dos objetivos principales: diversificar la economía y la substitución de importaciones (Romero C., 2003). Algunos años más tarde, en la década de los ochenta y noventa del siglo pasado, las agencias de desarrollo tales como el Banco Mundial o la FAO fomentaron toda una serie de reformas agrarias en países del Tercer Mundo, considerando que éstas eran esenciales para lograr el desarrollo de tales países en base a un acceso equitativo a la tierra y recursos a partir de la reorganización de la tenencia de la misma para asegurar un uso eficiente de ésta (Colchester, 1993). Lamentablemente, según este autor, los resultados fueron el incremento de la concentración de la tierra, lo cual le llevó al Banco Mundial a admitir los errores, los costos medioambientales de dichos programas y a renunciar en posteriores proyectos a cuestiones referentes a reformas agrarias además de adoptar una nueva visión en los años 90 en la que la sostenibilidad pasó -en teoría- a formar parte de las nuevas políticas (*ibíd.*). Dichos organismos se mostraron incapaces de corregir las desigualdades del mundo agrario en los países subdesarrollados.

Sin embargo, teniendo la posibilidad de comprobar con perspectiva histórica lo que realmente ocurrió, casi ninguno de los objetivos que se perseguían se hicieron efectivos, sino todo lo contrario, ya que tuvo lugar desde entonces un marcado proceso de intensificación y consolidación del latifundio. Esto ocurrió principalmente a partir de 1966, momento en el que se comenzaron a distribuir tierras fiscales, y que al parecer se efectuó de manera “*arbitraria, ilegal, desordenada y pagando favores políticos, lo que condujo a la creación de un nuevo latifundio en el país*” (ibíd., 21-22).

Sabemos que esta situación despuntó especialmente en la década de los años 70 del siglo XX, coincidiendo con la época de los gobiernos militares -instaurada tras el golpe de estado militar del General René Barrientos- cuando el Estado, mediante el mecanismo de dotación, otorgó enormes cantidades de tierras que se constituyeron como predios.

No obstante, habría que decir que uno de los puntos expuestos sí se ha cumplido, es el relativo a la migración. Y es la apertura de caminos hacia la provincia de Mojos propició la entrada masiva de colonos procedentes principalmente de la provincia de Santa Cruz y de la región andina. Jesús González Pazos muestra de qué manera el proceso de colonización de tierras en el oriente boliviano se vio incrementado debido a la implantación de la nueva política conocida como “Marcha hacia el oriente”, que iniciada ya en la década de los años 40 se agudizó llegando a su momento álgido en los años 60 con la expansión de migraciones masivas hacia dicha región, mediante las que se procuraba la vertebración entre las tierras bajas y las tierras altas en el país (2007). La colonización de estos espacios se llevó a cabo “*sin tener en cuenta la presencia, ni reconocer los derechos sobre el territorio, de los pueblos indígenas de esta extensa área que suponía los dos tercios del país, quienes eran sometidos, expulsados o directamente eliminados*” (ibíd., 45).

Por el contrario, no se logró la pretendida articulación económica entre ambas regiones. Es más, sobre la distribución de tierras se podría decir, en base a los datos de PASOC-CIPCA, que tuvo el efecto contrario puesto que en el Chaco, el Oriente y la Amazonía de Bolivia, los campesinos fueron dotados con superficies de 50 hectáreas máximo, mientras que los grandes propietarios privados recibieron superficies de hasta más de 50.000 hectáreas (2007: 21) lo cual desdice absolutamente la pretendida distribución equitativa y justa de la Reforma Agraria de 1953.

6. 1. 2. La Reforma Agraria de 1996.

La Reforma Agraria acometida en el año 53 demostró que los problemas estructurales del agro boliviano no se resolverían con una nueva redistribución de la tierra sino que era imprescindible transformar los factores socioculturales vinculados con la tenencia de la tierra que actuaban como determinantes en la regulación del proceso agrario, *“de otro modo, serán los factores ajenos a la legalidad los que, definirán en última instancia -más allá del alcance de lo jurídico- quién accede a la tierra”* (Fundación TIERRA, 2005: 60). Una de las diferencias más reveladoras entre la Reforma Agraria del 53 y la del año 1996 es que la primera *“se enfocó en el Occidente andino”* a diferencia de la segunda reforma que *“ha tendido a reflejar más la situación de los llanos de Oriente”* (Urioste y Kay, 2005: 31).

Desgraciadamente no se aprendió de los errores cometidos en el proceso anterior y muchos de ellos se repetirían en la nueva reforma de los años noventa. Las instituciones encargadas del proceso de titulación de tierras cedieron ante las presiones de los grandes terratenientes, al igual que sucedió en la primera reforma, y se consolidaron predios que no se encontraban en una situación regular.

La lentitud del proceso es aún evidente si tenemos en cuenta la información de Chumacero que indica que a finales del año 2005 la superficie del país sin sanear era del 53% mientras que en el año 2009 dicha superficie era prácticamente la misma: 52,1% (2010a: 17).

El proceso de saneamiento no consiste exclusivamente en la regularización de la posesión de la tierra y de los títulos agrarios, sino que va más allá. En éste juegan un papel predominante las connotaciones sociopolíticas ligadas a la tenencia de la tierra. Como bien señala Carlos Romero y han suscrito tantos investigadores: *“el saneamiento de tierras debe ser entendido en su doble dimensión, es decir, como proceso social y político, y como procedimiento técnico-jurídico”* (2003: 116). No obstante, es de capital importancia la implementación en Bolivia de una normativa legal que sea respetada y acatada por el conjunto de actores sociales vinculados a la cuestión agraria, para la consecución de la normalidad legal agraria boliviana, enmarcada en la pretendida equidad en la distribución de la tierra. Es el primer paso además para que las poblaciones indígenas vean consolidados sus derechos territoriales, de los que se derivarían el resto de derechos colectivos.

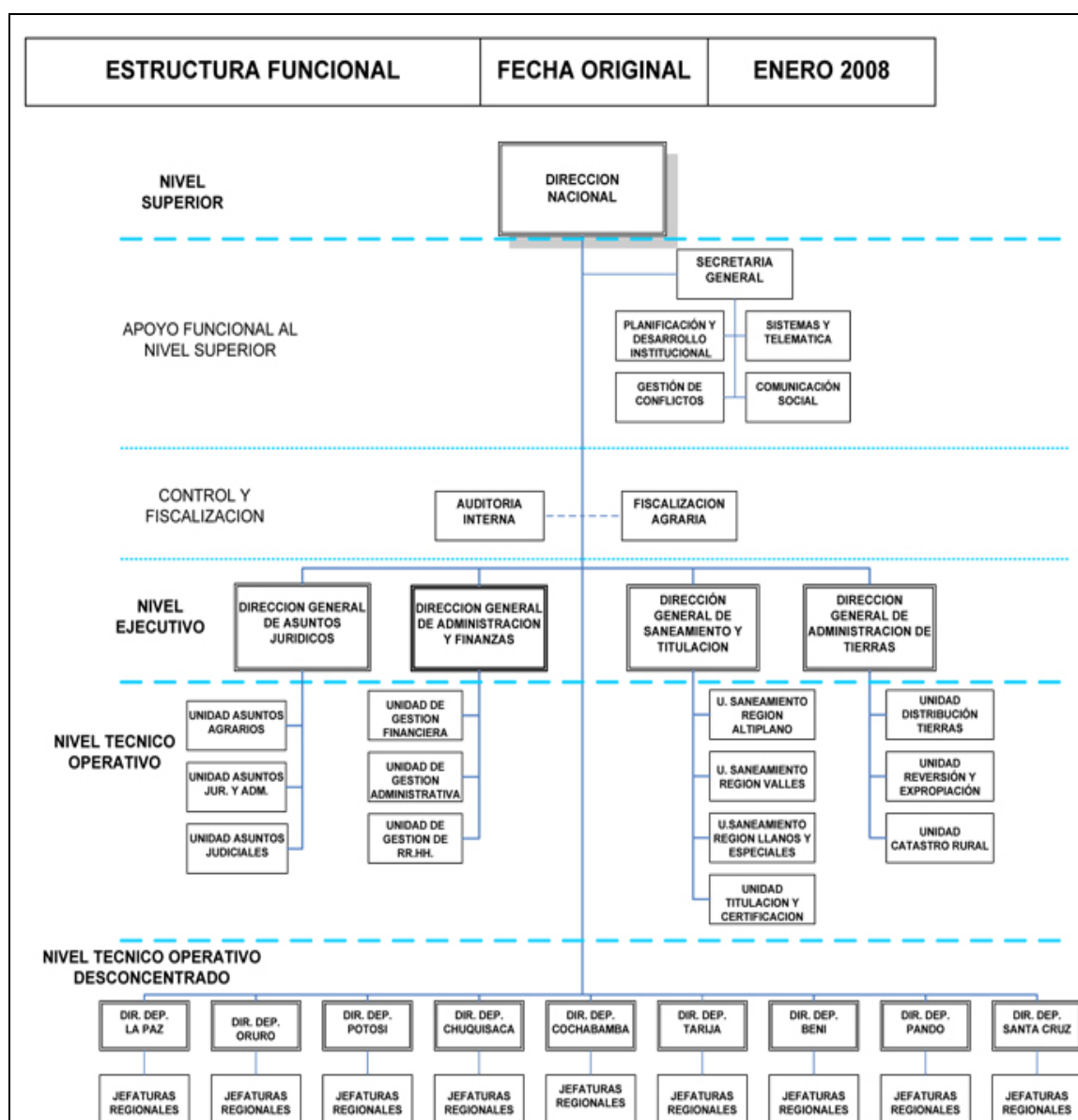
Para comprender el proceso agrario que ha significado el proceso de saneamiento en Bolivia hay que entender el contexto en el que se creó la nueva ley de tierras. La promulgación de la ley n° 1715 –más conocida como *Ley INRA*- formó parte del paquete de medidas neoliberales que comenzaron a implementarse en el año 1985, orientadas a impulsar el libre mercado que reducía al mínimo el papel del Estado

(Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente, Viceministerio de Tierras e Instituto Nacional de Reforma Agraria, 2007). El mercado de tierras y la propiedad de los recursos naturales se abrieron a las empresas transnacionales. La Ley 1715 surgió en dicha coyuntura. Pero también como respuesta a la presión ejercida por las constantes reivindicaciones de organizaciones indígenas y campesinas y a la segunda marcha del año 96 (véase **punto 4. 5. 3**). La situación con respecto al agro boliviano era tan insostenible que incluso desde la jerarquía de la Iglesia católica del país se emitió en 2002 una Carta Pastoral *-Tierra, Madre fecunda para todos-* por la que se instaba al gobierno a la aceleración del proceso de saneamiento con el fin de evitar los conflictos entre los sectores sociales imbricados en el mismo (PASOC-CIPCA, 2007: 22).

La Ley INRA propició a su vez la creación del *Instituto Nacional de Reforma Agraria* con el fin de regular los procesos de saneamiento de tierras en el país (desde el INRA se emiten los títulos de propiedad de tierras y certificados catastrales y ante él es que se efectúa la demanda de las mismas). Este organismo nació como institución pública descentralizada del *Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación* y fue la encargada de gestionar e implementar las políticas del *Servicio Nacional de Reforma Agraria*, que afianzaran la Reforma Agraria de 1996. Además de éste se creó la Superintendencia Agraria²⁵⁵ y el Tribunal Agrario, todos ellos piezas clave para canalizar el proceso de la distribución de la tierra en Bolivia.

²⁵⁵ Desde el mes de mayo de 2009 la *Superintendencia Agraria* y la *Superintendencia Forestal* se fusionan en una misma instancia: la *Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras* (ABT).

Figura 6. 1. Organigrama general del INRA



Fuente: <http://www.inra.gob.bo/>

El propio instituto dio a conocer las atribuciones del mismo. Éstas son las siguientes:

1. “Dirigir, coordinar y ejecutar políticas, planes y programas de, reagrupamiento y redistribución de tierras, priorizando a los pueblos y comunidades indígenas, campesinas y originarias que no las posean o las posean insuficientemente, de acuerdo a la capacidad de uso mayor de la tierra;
2. Proponer, dirigir, coordinar y ejecutar las políticas y los programas de asentamientos humanos comunarios, con pobladores nacionales;

- 3. Emitir y distribuir títulos, en nombre de la autoridad máxima del Servicio Nacional de Reforma Agraria, sobre tierras fiscales incluyendo las expropiadas o revertidas a dominio de la Nación, tomando en cuenta la vocación de uso del suelo establecida en normas legales correspondientes;*
- 4. Emitir disposiciones técnicas para la ejecución del catastro rústico legal de la propiedad agraria, coordinar su ejecución con los municipios y otras entidades públicas o privadas;*
- 5. Determinar la ubicación y extensión de las tierras fiscales disponibles, de las tierras comunitarias de origen, de las áreas clasificadas por normas legales y de la propiedad agraria en general;*
- 6. Expropiar fundos agrarios, de oficio por la causal de reagrupamiento y redistribución, o a denuncia de la Superintendencia Agraria, por incumplimiento de la función económico-social, en los términos establecidos en esta ley;*
- 7. Revertir tierras de oficio o a denuncia de las entidades recaudadoras o beneficiarias de impuestos, de las comisiones agrarias departamentales y de la Comisión Agraria Nacional, por la causal de abandono establecida en esta ley;*
- 8. Determinar y aprobar las áreas y superficies a distribuir por dotación o adjudicación de tierras, de acuerdo a la capacidad de uso mayor de la tierra y a las necesidades socio-económicas del país, previo dictamen de las comisiones agrarias departamentales;*
- 9. Promover la conciliación de conflictos emergentes de la posesión y del derecho de propiedad agraria;*
- 10. Actualizar y mantener un registro sobre tierras distribuidas, sus beneficiarios y la disponibilidad de tierras fiscales. Esta información tendrá carácter público;*
- 11. Coordinar sus actividades con las entidades públicas y privadas encargadas de dotar de infraestructura, de servicios básicos y de asistencia técnica a zonas de asentamientos humanos;*
- 12. Certificar derechos existentes en tierras fiscales destinadas a la conservación, investigación, ecoturismo y aprovechamiento forestal; y*
- 13. Otras que le asigne la Ley 1715 y su reglamento”²⁵⁶.*

²⁵⁶<http://www.inra.gob.bo/>

Algunos estudios se han mostrado muy críticos con los planteamientos de la Ley INRA. Este es el caso del *Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario* (CEDLA), quienes tras realizar un análisis de las propuestas electorales durante la campaña de 2005, llegaron a la conclusión que los tres partidos más importantes de dicha campaña -MAS, PODEMOS y UN-, apoyaron los lineamientos agrarios de la economía de mercado, considerando que “*la Ley INRA es una norma jurídica que promueve la contra reforma agraria y que se enmarca en los enfoques del neoliberalismo regulando los derechos de propiedad de los recursos naturales y de los factores productivos, principalmente de la tierra, de tal manera que se garantice la libre movilidad de ese factor*” (Urioste y Kay, 2005: 49). Consideran, por tanto, que este instrumento legal se encamina a consolidar los grandes latifundios. Cuestionan además el cambio de actitud del MAS, quien pasó de la crítica -por el carácter neoliberal de la Ley INRA- al reconocimiento de su importancia en la campaña electoral del 2005 (*ibíd.*, 50).

A pesar de la renovación del INRA, está testimoniada la perpetración de numerosas y graves irregularidades en sus comienzos, por lo que fue sumamente cuestionado. Las críticas se lanzaron desde las propias comunidades, las Subcentrales Indígenas, desde instituciones de apoyo a los pueblos indígenas, asociaciones, expertos y analistas dedicados a la investigación de este proceso, etcétera. Todos ellos se sentían engañados por las acciones netamente parciales de los funcionarios del INRA, quienes favorecieron a grandes propietarios y ganaderos. Las voces críticas cuestionaron tanto la falta de eficiencia y de efectividad como la incompetencia de los funcionarios de esta institución y la lentitud del propio proceso en términos burocráticos. Los indígenas mojeños adoptaron una actitud del todo escéptica que aún hoy día se percibe.

Un factor de enorme importancia impidió el normal desarrollo e implementación del proceso de saneamiento además fue la oposición de los grandes propietarios quienes dificultaron el mismo con el fin de ralentizarlo y de esta manera poder consolidar las propiedades que con estatus ilegal poseían así como acceder a tantas otras parcelas de tierras. Chirif y García Hierro comentan en relación a esto que las “*élites (del oriente boliviano) no están dispuestas a modernizar su sistema de uso permanentemente expansivo del suelo ni a perder su apuesta especulativa o a debilitar una sólida posición hegemónica regional construida sobre la libre disposición de suelos y recursos*” lo cual les lleva a mantener una posición intransigente ante el proceso de titulación de tierras (2007: 47). Estos autores parten para defender estos argumentos de los informes del propio INRA, en los que se admite que el proceso de saneamiento que busca regular con transparencia el régimen de tenencia de la tierra no interesa a quienes han recibido dotaciones de tierras, lo cual ha

generado “*acciones de resistencia al saneamiento, con el propósito de detener estos procesos, obstruirlos o finalmente de torcerlos a favor de sus intereses*” (ibíd., 77).

A causa de las anomalías cometidas en los primeros años de trabajo, la institución fue perdiendo de manera progresiva la credibilidad y confianza que en un principio se depositó en ella. A día de hoy las críticas efectuadas por parte de los comunarios se han visto mitigadas y se reducen a casos puntuales. Persisten en lo que se refiere a los plazos establecidos por el INRA a la hora de enviar a sus técnicos a que realicen las correspondientes pericias de campo cuando se producen conflictos entre linderos.

Desde el INRA actual, se presenta la gestión en lo correspondiente a la titulación de tierras realizada durante el mandato de Evo Morales -hasta el momento- y la que fue realizada con los anteriores gobiernos. A pesar de que desde el gobierno de Evo Morales se jacten de haber titulado en sus años de mandato más tierras que en el periodo anterior, existen datos que contradicen estas informaciones y es que desde la Fundación TIERRA se han contrastado las cifras manejadas llegando a la conclusión que la mayor parte del saneamiento consisten en propiedades que estaban ya inmersas en dicho proceso antes de 2006, por lo que éstas son, en realidad, cierres de expedientes (2009). Otros estudios así lo confirman: los datos apuntan a que durante el periodo 1996-2009 de los 37,7 millones de hectáreas saneadas y tituladas, 28,4 millones se han concluido durante la primera gestión del actual Presidente de la República (Chumacero, 2010a: 16-17). Para este investigador otro indicio que desmiente los alcances logrados en el proceso de saneamiento durante la primera gestión gubernamental de Evo Morales es que, durante este periodo, lo que se ha hecho en realidad es concluir los procesos ya iniciados y en efecto, la superficie en proceso de saneamiento pasó de un 28,1% en el año 2005 al 12,5% a fines del 2009 (2010a: 18).

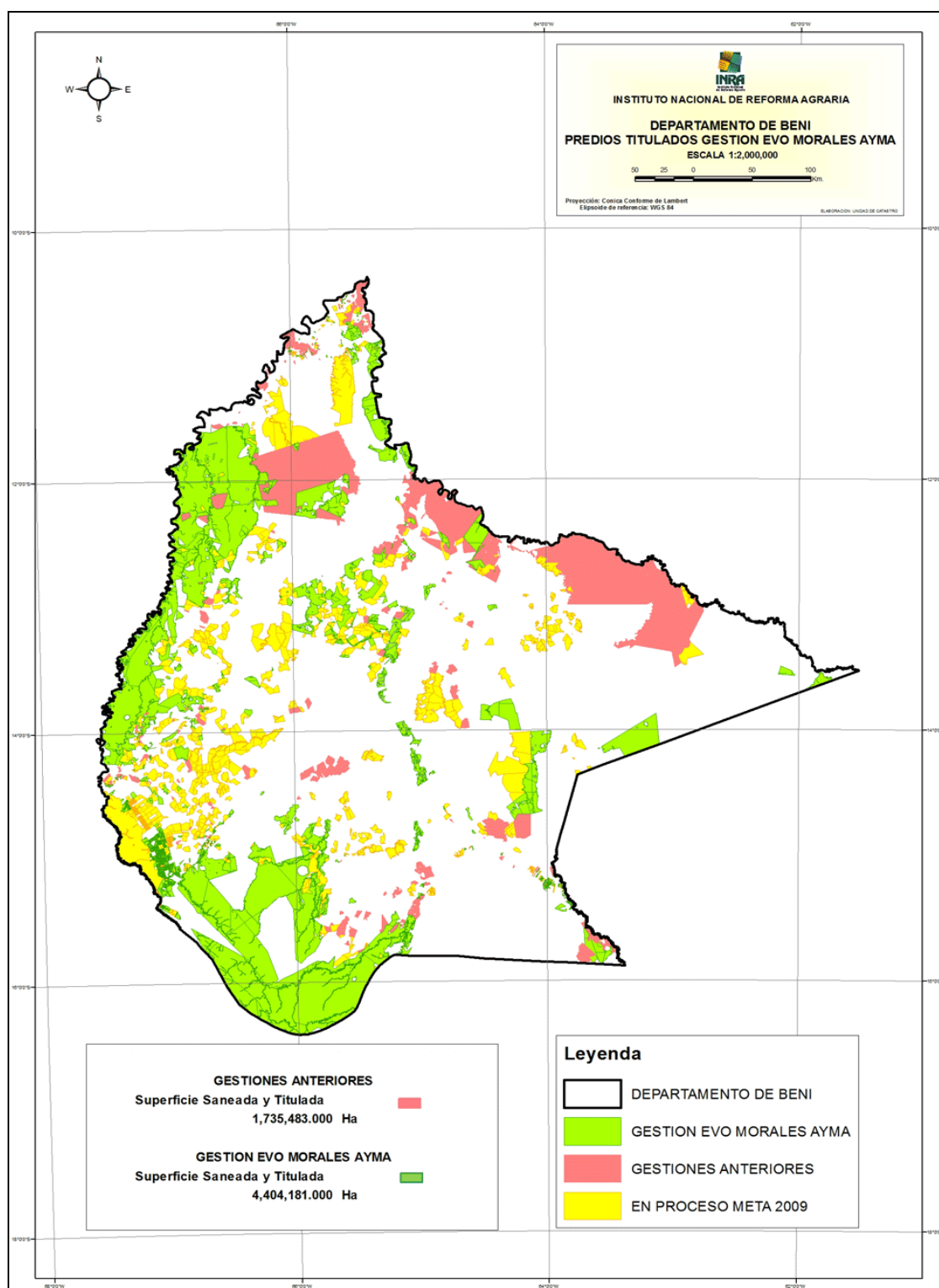
Cuadro 6. 1. Estado del proceso de saneamiento en el 2010 (en millones de hectáreas).

| Fase | Hectáreas |
|---|------------|
| Titulación | 67.800.000 |
| Resolución final de saneamiento | 18.000.000 |
| Exposición pública de resultados | 9.500.000 |
| Evaluación Técnica Jurídica | 3.000.000 |
| Pericias de campo concluida | 8.500.000 |
| Identificado y recuperado para su distribución | 7.500.000 |

Fuente: elaboración propia en base a datos del INRA 2011.

El mapa (6. 1) que aparece a continuación refleja desde una perspectiva parcial los logros realizados durante el gobierno de Evo Morales.

Mapa 6. 1. Predios titulados a agosto de 2009.



Fuente: <http://www.inra.gob.bo/> (2009).

Las irregularidades cometidas tuvieron no obstante algunos efectos positivos: afianzó la propia articulación interna del movimiento indígena del oriente boliviano;

propició el fortalecimiento identitario por parte de las comunidades indígenas frente a los *terceros* y confirmó la existencia de unas relaciones asimétricas de poder gestadas desde la llegada de los españoles al continente americano.

Uno de los aspectos que más interesa al presente trabajo con respecto a esta nueva reforma agraria de Bolivia, fue la inclusión de la figura legal de las TCOs en la Ley 1715, que pretendía asociarse a la definición de territorio manejada por los pueblos indígenas. Constituyó el primer gran éxito para las poblaciones indígenas del país que veían más cerca el reconocimiento de sus derechos territoriales. De esta manera se reconoció por primera vez el “*derecho de los indígenas a sus territorios, los cuales fueron denominados oficialmente Tierras Comunitarias de Origen*”²⁵⁷ (TCOs) (Birk, 2000: 12). Las TCOs pasaron a constituir “*la base fundamental para el ejercicio de los demás derechos políticos, económicos y sociales, así como el acceso y aprovechamiento de los recursos naturales*” (Villanueva, 2004: 41).

Sin embargo, existe un claro contratiempo frente a lo que se entiende por TCO y es que esta figura emergió en gran parte como respuesta a las demandas canalizadas por las poblaciones étnicas de tierras bajas, lo cual significa que los indígenas andinos no participaron en dicho proceso, siendo una fuente de conflicto posterior al manifestar estos últimos su rechazo inicial ante las directrices del proceso de saneamiento, diseñado para atender las demandas de los pueblos indígenas del oriente boliviano (Urisote, 2007c: 230).

Se consideró un plazo estimado de 10 años para la conclusión del proceso de saneamiento, el cual no se cumplió. Por dicha razón los pueblos indígenas han continuado presionando, si bien es cierto que cada vez con menos vigor.

6. 2. NORMATIVA LEGAL REFERENTE A LA CUESTIÓN AGRARIA.

Además de la comentada ley 1715 de la Reforma Agraria, han sido varios los instrumentos legales que han servido como reguladores del acceso y tenencia de la tierra en Bolivia.

²⁵⁷ Si bien ya en el año 1994, en la reforma de la CPE –la cual incorpora por vez primera la noción de Estado multiétnico y pluricultural en su artículo 1º- se reconocen los territorios indígenas, así como el uso de los recursos naturales por parte de las poblaciones originarias. Según el artículo 171 “*se reconocen, respetan, protegen en el marco de la ley los derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas que habitan en el territorio nacional, especialmente los relativos a sus tierras comunitarias de origen, garantizando el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, su identidad, valores, costumbres e instituciones*”

(<http://www.umsa.bo/umsa/uploads/transparencia/ConstitucionPoliticaDelEstado.pdf>).

Sería el avance más importante alcanzado hasta el momento por las poblaciones indígenas de Bolivia, en cuanto al reconocimiento de los derechos territoriales colectivos.

La población mojeña no poseía un amplio conocimiento legislativo en materia agraria. A causa de ello, sufrieron múltiples engaños a manos de *terceros* que les llevó a la pérdida de tierras. Desde el momento en el que el movimiento indígena del Beni se organizó, comenzó a acceder a espacios políticos que anteriormente le habían sido vetados. Esto le permitió empaparse de discursos jurídico-políticos que hasta el momento le habían sido ajenos y que había ignorado por completo. En este proceso jugaron un papel enormemente relevante los líderes del propio movimiento, quienes a partir de los discursos provenientes de organizaciones internacionales, instituciones pro-indigenistas o investigadores sociales, pusieron en marcha un proceso de hibridación discursiva que emanaba tanto de sus propias experiencias como de fuentes jurídicas tanto internacionales, como del propio país boliviano, de las que se apropiaron.

Sería conveniente contextualizar este periodo en el “giro multiculturalista” que la gran mayoría de estados latinoamericanos adoptó en los años 90. La implementación de programas multiculturales coincidió con la implementación del programa neoliberal, que en Bolivia tuvo lugar concretamente a partir de 1985. Las nuevas políticas de reconocimiento de la multiculturalidad estuvieron condicionadas por la intervención de instancias internacionales tales como el *Banco Mundial*. Dicho organismo en el año 1993 comenzó a intervenir económicamente en Bolivia, como “apoyo técnico y financiero” con la finalidad de elaborar el *Proyecto Nacional de Administración de Tierras* (PNAT) (PASOC-CIPCA, 2007: 23). Las nuevas lógicas de desarrollo amenazaban la supervivencia de los pueblos indígenas y de sus territorios. Las políticas multiculturalistas produjeron la decepción en el seno de los movimientos indígenas, lo cual conllevó al cuestionamiento del nuevo modelo económico (Sieder, 2006: 1), basado en los preceptos marcados por el Consenso de Washington. En la década de los años 80, organismos internacionales como el *Banco Mundial* (BM) o el *Banco Interamericano de Desarrollo* (BID) impulsaron el programa denominado como “*Reformas agrarias asistidas por el mercado*”, el cual estipulaba el acceso a la tierra a través del mercado (Urioste, 2003: 41).

En el caso boliviano, la marcha del año 1990 propició el surgimiento de una nueva relación entre los pueblos indígenas y el Estado y la cuestión indígena se delimitó nítidamente en el terreno político hasta el punto de que, como bien indican algunos autores, “*a partir de esa fecha el discurso político de las organizaciones sociales y del gobierno cambió, porque se integró la cuestión indígena*” (Herrera, Cárdenas y Terceros, 2003: 23). Esta inflexión en el rol del Estado marcó un antes y un después a la hora de hacer frente a las reivindicaciones efectuadas desde el movimiento indígena. Desde este momento se comenzó a tener en cuenta los planteamientos de los nuevos

sujetos políticos: los pueblos indígenas. En lo concerniente a este proceso, autores como Herrera, Cárdenas y Terceros o Jürgen Riester –fundador de APCOB²⁵⁸–, llaman la atención en la participación de diversas organizaciones no gubernamentales en temas, fundamentalmente, de empoderamiento, así como de la cooperación internacional (*ibíd.*) que presionaba por el cumplimiento de los derechos humanos en los países menos desarrollados o en vías de desarrollo.

6. 2. 1. Instrumentos legales internacionales.

Los más importantes y de mayor trascendencia en este caso serían la ratificación del *Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)* y la *Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas*. Fundamentalmente el primero de ellos. Ambos provenientes de la legislación occidental.

6. 2. 1. 1. Convenio 169 OIT²⁵⁹.

Dicho convenio fue ratificado como Ley 1257, no por casualidad el 11 de julio de 1991, un año después de la *Marcha por el Territorio y la Dignidad*. En lo que se refiere al vínculo entre las poblaciones indígenas y sus territorios, debemos atenernos a los siguientes artículos:

❖ *Artículo 7.*

1. *Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe el proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.*
2. *Los gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas pueden tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios*

²⁵⁸ El sociólogo alemán Gudrun Birk menciona al respecto la importancia del trabajo realizado por la ONG APCOB, organización fundada por un grupo de antropólogos comprometidos en la defensa de los derechos de las poblaciones originarias de Santa Cruz de la Sierra (2000: 20-21).

²⁵⁹ Para consultar los artículos que aparecen a continuación véase: <http://www.ilo.org/indigenous/Conventions/no169/lang--es/index.htm>

deberán ser consideradas como criterios fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas.

3. *Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan.*

Estos 3 puntos correspondientes al artículo 7, clarifican por un lado el tema de la participación en los procesos de toma de decisiones siempre que se dé el caso de la elaboración de cualquier proyecto de desarrollo que se prevea acometer en los territorios en los que habitan poblaciones indígenas. Por otro lado cabe subrayar el reconocimiento de la condición social, cultural así como espiritual del desarrollo de estos pueblos y su vínculo con el medio ambiente, el cual es concebido como un requerimiento de primer orden para alcanzar tal desarrollo. Especial atención merece la Parte II, relativa al tema “Tierras”. Los artículos en cuestión son los siguientes:

❖ *Artículo 13*

1. *Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación.*

2. *La utilización del término «tierras» en los artículos 15 y 16 deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna u otra manera.*

Concretamente el artículo 13 se refiere al vínculo existente entre los pueblos indígenas y los territorios en los que habitan. El segundo punto del presente artículo nos hace retomar la noción de territorio indígena, que aquí se corresponde además con la noción de *tierras*, sin establecer diferenciación entre ambos conceptos. Este punto es esencial para las reivindicaciones indígenas puesto que especifica la superficie que debe ser considerada como territorio para estas poblaciones, y que no es exclusivamente aquel en el que habitan sino aquel que además utilizan y del que se apropian.

❖ *Artículo 14*

1. *Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos*

interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes.

2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión.

3. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados.

Estos 3 puntos son de enorme importancia dado que sirven de garante para la protección de los derechos territoriales de las poblaciones indígenas en el caso de que se produzcan conflictos por la superposición frente a *terceros*, hecho muy habitual en la región de Mojos que sucede con bastante frecuencia entre ambos sectores sociales. Apunta además al gobierno como máximo responsable de la protección de los derechos territoriales indígenas, lo cual se incluiría en el año 1994 en la reforma del texto constitucional a través del artículo 171 y posteriormente en la Ley INRA en lo relativo a las *Tierras Comunitarias de Origen*. Por ello un aspecto de gran relevancia de este artículo es la llamada a establecer una legislación que regule las situaciones conflictivas que puedan surgir por la ocupación territorial. En este caso la balanza se posiciona a favor del sector indígena siempre que éste haya efectuado actividades de manejo y aprovechamiento de los recursos en el territorio en cuestión, a pesar de que en algún momento haya sido ocupado por *terceros*.

La referencia a la ocupación *tradicional* llama la atención al reconocer la dimensión histórica de la relación entre los pueblos indígenas y los territorios que han ocupado ancestralmente.

❖ *Artículo 15*

1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos.

2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían

perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades.

El artículo 15 del Convenio reconoce el derecho por parte del Estado a la explotación –en la que podrán participar los pueblos indígenas– de los recursos naturales que se encuentren en las tierras en las que estas poblaciones habitan. De manera un tanto cínica se les reconoce asimismo el derecho a ser indemnizados en caso de que se produzca cualquier tipo de perjuicio a consecuencia directa de la realización de tales actividades. Esta ambigüedad es común en la legislación boliviana (ley forestal frente a ley agraria y ambas frente a la constitución) y de esta manera el Estado se apropia en última instancia de la explotación de recursos naturales a través de la apropiación efectiva de estos.

❖ *Artículo 16*

- 1. A reserva de lo dispuesto en los párrafos siguientes de este artículo, los pueblos interesados no deberán ser trasladados de las tierras que ocupan.*
- 2. Cuando excepcionalmente el traslado y la reubicación de esos pueblos se consideren necesarios, sólo deberán efectuarse con su consentimiento, dado libremente y con pleno conocimiento de causa. Cuando no pueda obtenerse su consentimiento, el traslado y la reubicación sólo deberán tener lugar al término de procedimientos adecuados establecidos por la legislación nacional, incluidas encuestas públicas, cuando haya lugar, en que los pueblos interesados tengan la posibilidad de estar efectivamente representados.*
- 3. Siempre que sea posible, estos pueblos deberán tener el derecho de regresar a sus tierras tradicionales en cuanto dejen de existir la causa que motivaron su traslado y reubicación.*
- 4. Cuando el retorno no sea posible, tal como se determine por acuerdo o, en ausencia de tales acuerdos, por medio de procedimientos adecuados, dichos pueblos deberán recibir, en todos los casos posibles, tierras cuya calidad y cuyo estatuto jurídico sean por lo menos iguales a los de las tierras que ocupaban anteriormente, y que les permitan subvenir a sus necesidades y garantizar su desarrollo futuro. Cuando los pueblos interesados prefieran recibir una indemnización en dinero o en especie, deberá concedérseles dicha indemnización con las garantías apropiadas.*

5. *Deberá indemnizarse plenamente a las personas trasladadas y reubicadas por cualquier pérdida o daño que hayan como consecuencia de su desplazamiento.*

El artículo 16 se refiere al traslado de los pueblos indígenas a otros territorios distintos a los que ellos habitan. Aunque, según el presente convenio, este fenómeno no debería producirse. No obstante, en el caso de que así sucediera, estos pueblos deberían tener el derecho a participar en el proceso de consulta con el fin de conceder su consentimiento. Tras la ejecución de estas medidas que deberían ser en todo caso excepcionales, los pueblos indígenas que se vieran obligados a ser trasladados a otros espacios, podrán volver a sus territorios de origen. En última instancia los gobiernos correspondientes tendrían que indemnizar a las poblaciones autóctonas si no se les hubiera reubicado en territorios con las mismas condiciones de aquellos en los que habitaban. Esto concede a los estados una oportunidad única a la hora de desalojar amplias espacios territoriales con vistas a su explotación.

❖ *Artículo 17*

1. *Deberán respetarse las modalidades de transmisión de los derechos sobre la tierra entre los miembros de los pueblos interesados establecidas por dichos pueblos.*
2. *Deberá consultarse a los pueblos interesados siempre que se considere su capacidad de enajenar sus tierras o de transmitir de otra forma sus derechos sobre estas tierras fuera de su comunidad.*
3. *Deberá impedirse que personas extrañas a esos pueblos puedan aprovecharse de las costumbres de esos pueblos o de su desconocimiento de las leyes por parte de sus miembros para arrogarse la propiedad, la posesión o el uso de las tierras pertenecientes a ellos.*

Este artículo es particularmente relevante para la presente investigación puesto que las expropiaciones de territorios indígenas en Mojos se han sucedido a lo largo del tiempo, como ya sabemos. Ya ha sido comentado de qué manera los *terceros*, quienes bien podrían ser tomados por *extraños* por las comunidades mojeñas -como aparece indicado en el punto 3-, engañaron a los comunarios a la hora de comprar títulos de propiedad de la tierra, debido en gran parte, al desconocimiento de estos en materia agraria. O las propias empresas forestales que también mediante engaños estafaron a los indígenas mojeños en la explotación de recursos.

Otro aspecto importante en este artículo es que se hace referencia al respeto del derecho consuetudinario que rige las normas de conducta de las poblaciones indígenas así como al conocimiento local transmitido entre generaciones. En el caso del pueblo

mojeño, ya hemos visto que la propiedad de la tierra es de tipo comunal. Existen principalmente dos modalidades en cuanto a las formas de acceso a la tierra en Mojos: el acceso bajo el sistema de propiedad colectiva y el acceso a la tierra bajo el sistema de propiedad familiar; siendo la primera de ellas la más común y practicada actualmente en Mojos. El segundo tipo viene más a colación con la interpretación del artículo 17 del Convenio y es que los comunarios mojeños confiaron en el derecho consuetudinario como garante de la propiedad de sus tierras, situación que fue aprovechada por los *terceros* para arrebatarles múltiples posesiones. El error principal cometido por las comunidades indígenas fue el *desconocimiento de las leyes*. Al ser éste un episodio que, desafortunadamente, se ha venido repitiendo a nivel continental en el seno de cientos de pueblos indígenas, el Convenio 169 de la OIT, ampara por medio del presente artículo a las poblaciones *originarias* que se encuentren en tal situación.

❖ *Artículo 18*

La ley deberá prever sanciones apropiadas contra toda intrusión no autorizada en las tierras de los pueblos interesados o todo uso no autorizado de las mismas por personas ajenas a ellos, y los gobiernos deberán tomar medidas para impedir tales infracciones.

El artículo 18 se refiere a la regulación del acceso y el uso de los recursos naturales de toda persona ajena a los territorios habitados por poblaciones indígenas. Asimismo traslada la responsabilidad a los gobiernos nacionales quienes deberán ser los encargados en hacer efectivas las normativas legales referidas a estas cuestiones. En el caso boliviano, existen diversas normas jurídicas que fueron creadas con el fin de hacer frente a la incursión de *terceros* en territorios indígenas. Un claro ejemplo de ello es el aplicado al sector forestal, que será analizado en el próximo capítulo.

❖ *Artículo 19*

Los programas agrarios nacionales deberán garantizar a los pueblos interesados condiciones equivalentes a las que disfruten otros sectores de la población, a los efectos de:

- a. la asignación de tierras adicionales a dichos pueblos cuando las tierras de que dispongan sean insuficientes para garantizarles los elementos de una existencia normal o para hacer frente a su posible crecimiento numérico;*
- b. el otorgamiento de los medios necesarios para el desarrollo de las tierras que dichos pueblos ya poseen.*

En el caso boliviano, esto se cumple sólo a medias puesto que si bien es cierto que existe una ley agraria, reformada como hemos visto previamente en 1996, ésta no se aplica como se debiera en algunos casos particulares. Concretamente el pueblo mojeño-ignaciano ha manifestado su preocupación por la escasez de territorio con el que cuentan que consideran debería incrementarse dado que la población va en aumento. A pesar de estas denuncias, el organismo encargado de otorgar los títulos de propiedad de tierras –en el caso de Bolivia el INRA-, una vez que se cierra el proceso de saneamiento, no vislumbra la posibilidad de conceder tierras adicionales más allá de lo que se estipula en el saneamiento correspondiente. El TIMI cuenta con una superficie de algo más de 98.000 hectáreas y se calcula que en torno a unos 30 años éstas no serán suficientes para las 18 comunidades que alberga este territorio. Se deberá por lo tanto, reformular la legislación boliviana concerniente al agro para que el conjunto de poblaciones indígenas del país tenga, en un futuro, las mismas posibilidades que otros sectores sociales para desarrollarse según sus condiciones.

Pese a lo significativo del Convenio en materia de derechos territoriales para los pueblos indígenas, éste no deja de ser meramente enunciativo dado que, en realidad, no tiene efecto real sobre la situación de los pueblos indígenas y pese a que las organizaciones indígenas hayan recurrido a él para legitimar sus reivindicaciones, el gobierno boliviano es quien decide en última instancia el carácter que le otorga (Herbás y Patiño, 2010: 213) a pesar del carácter vinculante de dicho instrumento jurídico. Sin embargo, cabría tener muy en cuenta que el *Convenio 169 de la OIT* sentó las bases en Bolivia para la elaboración de la Ley INRA. Esto es porque como bien se expone en el estudio de CEDIB (2005) los países que ratifican el convenio suelen incorporarlo a la legislación nacional para que éste sea efectivamente aplicado. Para el caso de Bolivia la Ley del SNRA establece que “*la denominación de tierras comunitarias de origen comprende el concepto de territorio indígena, de conformidad a la definición establecida en la parte dos del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo*” (artículo 3).

6. 2. 1. 2. Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas²⁶⁰.

Dicha resolución fue aprobada por la Asamblea General el 13 de septiembre de 2007 y reconoce, de igual manera que el *Convenio 169 de la OIT*, la necesidad de que los pueblos indígenas participen, de manera activa, en las decisiones que afecten a sus tierras y territorios.

²⁶⁰ Para consultar los artículos que aparecen a continuación véase http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf

Del mismo modo que el artículo 16 del anterior convenio, la presente Declaración recoge que *“los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios. No se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas interesados, ni sin un acuerdo previo sobre una indemnización justa y equitativa y, siempre que sea posible, la opción del regreso”* (artículo 10). Llama la atención también en este documento, la ambivalencia entre los conceptos de “tierra” y “territorio”.

Otra clara analogía existente entre ambos documentos es en lo tocante al tema de la usurpación de tierras y territorios, las indemnizaciones correspondientes. La Declaración de Naciones Unidas en su artículo 28 señala que:

1. *Los pueblos indígenas tienen derecho a la reparación, por medios que pueden incluir la restitución o, cuando ello no sea posible, una indemnización justa y equitativa por las tierras, los territorios y los recursos que tradicionalmente hayan poseído u ocupado o utilizado y que hayan sido confiscados, tomados, ocupados, utilizados o dañados sin su consentimiento libre, previo e informado.*
2. *Salvo que los pueblos interesados hayan convenido libremente en otra cosa, la indemnización consistirá en tierras, territorios y recursos de igual calidad, extensión y condición jurídica o en una indemnización monetaria u otra reparación adecuada.*

Queda con ello comprobado las similitudes que guardan ambos artículos en cuanto a las reparaciones que deben llevarse a cabo en caso de ocupación, confiscación o usurpación de los territorios indígenas (una vez más encontramos la historicidad que aparece ligada al territorio), defendiendo una postura, en este tema, del todo afín.

Con respecto a la cuestión correspondiente con tierras y territorio, encontramos en la resolución de la Asamblea General un artículo que hace referencia específica a la protección del medio ambiente en territorios indígenas por la importancia que éste revierte para las poblaciones indígenas. El artículo en cuestión es el 29, en el punto 1 y 2, en los que se puede leer lo siguiente:

1. *Los pueblos indígenas tienen derecho a la conservación y protección del medio ambiente y de la capacidad productiva de sus tierras o territorios y recursos. Los estados deberán establecer y ejecutar programas de asistencia a los pueblos indígenas para asegurar esa conservación y protección, sin discriminación.*
2. *Los Estados adoptarán medidas eficaces para asegurar que no se almacenen ni eliminen materiales peligrosos en las tierras o territorios de los pueblos indígenas*

sin su consentimiento libre, previo e informado.

Tras este breve repaso a los artículos de la *Declaración de Naciones Unidas* vinculados con el tema agrario en relación a los pueblos indígenas, podemos comprobar hasta qué punto este documento se inspira en el mencionado convenio, siendo netamente compatibles. No obstante, se puede afirmar que la declaración amplía ligeramente el catálogo de derechos con los que cuentan las poblaciones indígenas. Lo más importante es que ambos suponen en lo concerniente al respeto de los derechos humanos de estas poblaciones, una herramienta fundamental a nivel internacional. Constituyen un instrumento jurídico vinculante²⁶¹ que propicia la adopción, por parte de aquellos países que lo ratifican, de una legislación acorde y coherente con lo postulado en ellos, por lo que las normativas jurídicas nacionales deberían ser reformuladas en base a los preceptos marcados tanto por la *Declaración de las Naciones Unidas* como por el *Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo*.

6. 2. 2. Instrumentos legales nacionales.

En la década de los noventa del siglo pasado se produjo un claro avance en relación al reconocimiento de derechos de las poblaciones indígenas y campesinas, lo cual supuso un indicador de la voluntad de las autoridades estatales de atender las demandas de tales actores sociales. Además de la legislación en materia agraria, como la ley INRA, otra serie de regulaciones jurídicas fueron normativizadas²⁶². En este apartado me centraré en aquellas que permiten entender, con mayor claridad, los fenómenos de los que el presente capítulo viene tratando.

6. 2. 2. 1. Legislación sobre la Reforma Agraria en Bolivia.

Habiendo analizado al comienzo del capítulo las leyes correspondientes a la regulación de la tenencia de la tierra en Bolivia, no es mi intención extenderme más en este apartado. Simplemente hacer hincapié una vez más en la importancia que tuvieron la *Ley de Reforma Agraria* (LRA) promulgada en 1953 y de la *Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria* (Ley INRA), promulgada en 1996, para las poblaciones indígenas del oriente boliviano y concretamente para los territorios ocupados por estos pueblos.

²⁶¹ Véase García Hierro y Surrallés, 2009.

²⁶² Ley de Participación Popular, la Ley del Medio Ambiente, Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria, Ley de Reforma Educativa, la Ley Forestal, etcétera, son algunos ejemplos.

Un aspecto directamente vinculado con la concepción territorial indígena vislumbrado en la ley agraria del año 53, y que no ha sido señalado anteriormente, es que “*no se tomó en cuenta el uso integral que los pueblos indígenas de la tierras bajas hacen tradicionalmente de la flora y fauna silvestre y que es el garante para su supervivencia cultural*” (Birk, 2000: 12). El Estado por su parte distinguía 3 niveles diferentes con relación a la tierra como espacio de producción y aprovechamiento (*ibíd.*, 18). Esto sumado al hecho de que el Estado se declaraba en la constitución como propietario de las tierras y de los recursos naturales de éstas (artículo 136), nos presenta un panorama altamente conflictivo en relación al aprovechamiento de dichos recursos en territorios ocupados por poblaciones indígenas. Estos surgieron en buena medida debido a las superposiciones derivadas de las concesiones estatales–mineras, forestales-. El Estado otorgó numerosos permisos de explotación de recursos en tierras que contaban con títulos de propiedad previos a tales concesiones. La legislación en materia agraria en Bolivia buscaba revertir por tanto, la aparición de este tipo de situaciones.

6. 2. 2. 2. Ley de Participación Popular 1551.

El presente instrumento jurídico nacional, el cual entró en vigor el 20 de abril de 1994 siendo Presidente de la República Gonzalo Sánchez de Lozada, no hace mención directa a los derechos territoriales de los pueblos indígenas de Bolivia. Sin embargo, es de enorme importancia ya que incluye la única definición de “Pueblo Indígena” –junto con la última *Constitución Política del Estado*- manejada en la legislación nacional boliviana. A ellos se refiere como “Organización Territorial de Base”, categoría definida como:

“la unidad básica de carácter comunitario o vecinal que ocupa un espacio territorial determinado, comprende una población sin diferenciación de grado de instrucción, ocupación, edad, sexo o religión y guarda una relación principal con los órganos públicos del Estado a través del Gobierno Municipal de la jurisdicción donde está ubicada” (artículo 1, punto I)²⁶³.

Exclusivamente la definición no aporta demasiado. Sin embargo, la correspondiente ley hace referencia a las competencias de dichas organizaciones y a los derechos de éstas en diferentes ámbitos y es de enorme importancia para las comunidades indígenas de Bolivia puesto que “*promueve y consolida el proceso de participación popular articulando a las comunidades indígenas, campesinas y*

²⁶³ http://www.legislacionmunicipal.fam.bo/Archivo/Docs/Leyes/Ley_1551.pdf

urbanas, en la vida jurídica, política y económica del país” (Título I, Capítulo I, Artículo 1º). Aparte de ello incluye el derecho que poseen las comunidades indígenas a participar en actividades relacionadas con “*la gestión del medio ambiente, el equilibrio ecológico y el desarrollo sostenible*” (artículo 7, apartado b) íntimamente relacionado con el artículo 33 (sección I, capítulo V) referido al “Derecho al Medio Ambiente” de la CPE.

Algunos autores defienden la trascendencia de esta ley, la cual “*marca un hito en la historia del país al constituirse como el primer instrumento para el ejercicio democrático del poder local*” (Lema, 1997)²⁶⁴ dado que permite la participación de la sociedad civil a nivel local. Gracias a esta nueva legislación el conjunto de la sociedad civil, “*organizada territorialmente en el marco del municipio*”, vivió un proceso de empoderamiento a nivel político que permitió a las poblaciones indígenas participar en “*las instancias de la administración pública*” constituyendo una buena opción para ello los “*distritos municipales indígenas*”, los cuales correspondían a las “*unidades socioculturales*” donde la jurisdicción coincidía con la de las “*jurisdicciones de las organizaciones indígenas*” - los cabildos en el caso del pueblo mojeño - (1997).

La *Ley de Participación Popular* junto con la *Ley de Descentralización*, “*marcan el inicio de uno de los cambios de mayor influencia hacia la redefinición del rol del Estado en las áreas rurales*” (Urioste y Kay, 2005: 37). Ambas permitieron fortalecer los instrumentos legales dirigidos a consolidar la participación ciudadana en los municipios, aprovechando además la creación de las municipalidades. En otro de sus trabajos, Urioste se refiere a la *Ley de Participación Popular* como el instrumento jurídico que transformó las relaciones entre el Estado y la sociedad civil de las áreas rurales sirviéndose para ello de la creación de los municipios indígenas, como nueva entidad administrativa con “*nuevas formas de gestión territorial y de jurisdicción político-administrativa con autonomía local*” (2003: 34-35). Esta es una cuestión candente en el panorama actual de Bolivia que cerrará la investigación.

Desde esta nueva plataforma participativa es desde donde se elabora el *Plan Operativo Anual* (POA) y el *Plan de Desarrollo Municipal* (PDM) de cada municipio. Actualmente la *Ley Marco de Autonomías* genera una mayor descentralización a nivel departamental que permite a los gobiernos municipales disponer y gestionar sus propios recursos económicos de acuerdo con las necesidades de cada uno. Por dicha razón los pueblos indígenas son fervientes defensores de la autonomía y concretamente en el caso de Mojos, donde el municipio de San Ignacio está gobernado por el sector indígena. Las comunidades indígenas han accedido a un mayor control político y se han

²⁶⁴ www.siamazonia.org.pe/Archivos/Publicaciones/Amazonia/Libros2/Bolivia/politica.htm: “Las políticas étnicas y las acciones emprendidas”.

articulado en torno a los gobiernos municipales al haberles sido otorgados estas concesiones.

6. 2. 2. 3. Constitución Política del Estado²⁶⁵.

En la reforma de la Constitución Política del Estado del año 1994 es la primera vez que por parte de la autoridad estatal es reconocido el carácter "multiétnico y pluricultural" del país (artículo 171), así como los derechos territoriales de las poblaciones indígenas. Sin embargo, más allá del mero reconocimiento simbólico era preciso un mayor avance en la consecución de derechos indígenas.

El último texto constitucional de la historia de Bolivia, entró en vigor el 7 de febrero de 2009, tras ser promulgado por el actual Presidente de la República Evo Morales. En ella se regulan los derechos territoriales de las poblaciones indígenas. En primer lugar, el Capítulo 4 referido a los "Derechos de las Naciones y Pueblos Indígena Originario y Campesino²⁶⁶" incluye en el apartado II, punto 4, el derecho a "*la titulación colectiva de tierras y territorios*", lo cual guarda estrecha vinculación con el proceso de titulación y saneamiento de tierras estipulado por la ley INRA. El mismo capítulo contiene 3 puntos relativos a la cuestión territorial:

15. *A ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. En este marco, se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan.*

16. *A la participación en los beneficios de la explotación de los recursos naturales en sus territorios.*

17. *A la gestión territorial indígena autónoma, y al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables existentes en su territorio sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por terceros.*

²⁶⁵Para consultar los artículos que aparecen a continuación véanse <http://bolivia.unfpa.org/content/constituci%C3%B3n-pol%C3%ADtica-del-estado> y <http://www.umsa.bo/umsa/uploads/transparencia/ConstitucionPoliticaDelEstado.pdf>

²⁶⁶ En el punto I del artículo 30, inserto en este capítulo IV, se hace referencia a la definición de pueblo indígena que ya mencioné en el 2º capítulo de esta investigación. Éste sería "*toda colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión colonial española*".

Es evidente el paralelismo de estos enunciados con algunos de los artículos en los que me he detenido a analizar en anteriores epígrafes. El artículo 17 sin embargo, introduce un factor que llama la atención, éste es el concerniente a la gestión territorial indígena, relacionado con la cuestión de las autonomías. A ello dedicaré de manera íntegra el último capítulo de la investigación por la trascendencia que guarda en la esfera política boliviana, teniendo efectos directos en la organización social de las comunidades indígenas.

En la sección IV de la presente constitución, viene regulado el derecho a la propiedad, por el que queda clara la idea de que cualquier propiedad, ya sea individual o colectiva, debe cumplir una función social (artículo 56), pero no sólo (anticipé el requerimiento de que además se cumpla una función económica). Este elemento viene explicitado más adelante cuando se añade que será el Estado el que reconozca la propiedad de la tierra siempre que ésta *“sea utilizada para el cumplimiento del objeto de la creación del agente económico, la generación de empleos y la producción y comercialización de bienes y/o servicios”* (artículo 315, punto I). Y más concretamente en el artículo 393 queda establecido que *“el Estado reconoce, protege y garantiza la propiedad individual y comunitaria o colectiva de la tierra, en tanto cumpla una función social o una función económica social, según corresponda”*²⁶⁷.

Cuando me detenga a examinar los conflictos que han tenido lugar en el interior de la TCO del TIMI comprobaremos hasta qué punto es importante cumplir dichas obligaciones con vistas a mantener la propiedad y evitar que el Estado, en este caso, actúe en beneficio público, expropiando las propiedades que no se ajusten a la legislación actual (artículo 57)²⁶⁸. Del mismo modo es fundamental garantizar que las propiedades privadas no perjudiquen el interés colectivo (artículo 56, punto II, sección V), punto éste polémico en el caso que nos atañe dado que ciertas estancias del TIMI no respetan esta normativa.

El artículo 307, reconoce por su parte el papel del Estado para con la organización económica comunitaria, la cual conforma los sistemas de producción y reproducción de la vida social, instituidos en base a la cosmovisión propia de las naciones y pueblos indígenas originario y campesinos. Tales poblaciones contarían con el aval de ver

²⁶⁷ Según la Constitución se entiende por función social como *“el aprovechamiento sustentable de la tierra por parte de pueblos y comunidades indígena originario campesinos, así como el que se realiza en pequeñas propiedades, y constituye la fuente de subsistencia y de bienestar y desarrollo sociocultural de sus titulares”* y por Función Económica Social (FES): *“el empleo sustentable de la tierra en el desarrollo de actividades productivas, conforme a su capacidad de uso mayor, en beneficio de la sociedad, del interés colectivo y de su propietario”* (artículo 397).

²⁶⁸ Asimismo la Constitución igualmente establece que *“la propiedad empresarial está sujeta a revisión de acuerdo con la ley, para verificar el cumplimiento de la función económica y social”* (artículo 397).

garantizado el respeto a sus sistemas productivos y reproductivos. Sería pertinente añadir que actividades dirigidas a la conservación de los suelos, recursos forestales y bosques, son competencias ejercidas de manera compartida entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas²⁶⁹ (artículo 299). Ahora les toca a las TCOs -denominadas en la nueva constitución como TIOC (*Territorio Indígena Originario Campesino*)- dar el paso a la transición hacia las entidades territoriales autónomas. Una de las consecuencias más directas de ello es que supondrá para las autonomías indígenas la ejecución de los mecanismos propios de articulación interna, de acuerdo con sus propias normas, procedimientos y valores.

La aparición de la nueva forma de propiedad agraria, TIOC, responde a las modificaciones que la NCPE estipula en relación a la clasificación de las propiedades de la tierra: además de desaparecer el solar campesino y las antiguas propiedades comunarias, redefine a las antiguas TCOs como TIOC. Para ello deberán someterse a un trámite de reconversión al nuevo tipo. Lo más importante de este cambio es, en palabras de Gonzalo Colque, que se “*adecua la CPE a la Convención de la OIT N° 169 de 1986 y la “Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas” ratificada el 2007 mediante Ley N° 3760*” (2010: 44).

El artículo más pertinente referido a “tierra y territorio” de la actual Constitución de Bolivia, sería el 403, el cual además de definir el concepto de “territorio indígena originario campesino”, incluye los derechos vinculados a dicha categoría, entre los que destaca “*la facultad de aplicar sus normas propias, administrados por sus estructuras de representación y la definición de su desarrollo de acuerdo a sus criterios culturales y principios de convivencia armónica con la naturaleza*”.

El haber realizado este somero repaso a las cláusulas vinculadas con la cuestión agraria, incluidas en la NCPE, nos ofrece una amplia visión de las herramientas jurídicas con las que los ignacianos pueden hacer efectivas sus demandas territoriales y las cuales han sido aprovechadas durante el proceso de saneamiento de tierras. Del mismo modo nos servirá para comprender con mayor nitidez el proceso autonómico y la gestión territorial indígena por el que está atravesando el pueblo mojeño-ignaciano.

Por último cabe añadir otra de las instancias referidas a la cuestión agraria en Bolivia como es el Juzgado Agroambiental. Las competencias de éste son varias y van desde dirimir en problemas de deslinde²⁷⁰ y mensura de terrenos, de establecimiento y

²⁶⁹ Es de enorme interés el descubrir que en el borrador de la última Constitución boliviana en los artículos 290, 291 y 292 se recurrió a la categoría de “entidad territorial”, la cual definitivamente no se utilizó y se optó por modificarla por la categoría de “autonomía”. Visto que ambas se utilizan como dispositivo constitucional indistintamente, habría que analizar el porqué de la preferencia entre una y otra y lo que implica el uso de la una sobre la otra desde el punto de vista político-jurisdiccional.

²⁷⁰ Determinación de los límites entre terceros colindantes.

extinción de servidumbres²⁷¹, garantizar los derechos de la tierra y la protección de estos, resolver situaciones de conflicto cuando dos o más individuos alegan ser propietarios del mismo terreno, solucionar conflictos por el uso y aprovechamiento de aguas, reparar cuestiones relativas a la retención, adquisición y recuperación de un fundo, etcétera. Contribuye del mismo modo a la recuperación de un terreno en el caso de que un *tercero* haya ocupado un determinado asentamiento sin autorización o apoya la toma de posesión de un dueño sobre un terreno el cual le pertenece.

En el caso de San Ignacio de Mojos, no existe a día de hoy Juez Agrario puesto que fue transferido a la ciudad de Trinidad, capital del departamento. Por dicha razón cada dos meses acude un suplente para resolver las cuestiones que puedan haber surgido. Pero en realidad en el municipio apenas existen denuncias por tema de tierras. Lo que sí existen son demandas de interdicto²⁷² que tienen lugar por dos motivos: para retener tierras o para recobrarlas cuando sucede que algún *tercero* ha entrado a una propiedad y su propietario legal la reclama con la intención de recobrarla (entrevista a Jackeline Ruíz Suárez). En estos casos se hace una vista oral tras la que se dicta sentencia. El Juzgado Agroambiental resuelve, por tanto, a través de la conciliación²⁷³ o del proceso oral agrario, el cual tiene lugar en la Audiencia Pública en presencia de las partes afectadas y del Juez Agroambiental, quien dicta sentencia en un plazo de 60 días. Incluso en el momento en el que el INRA procede a efectuar el saneamiento de tierras si no se está de acuerdo con aquello que ha sido tramitado, con los pasos y procedimientos que señala la legislación, cabe la posibilidad de presentar una demanda contencioso-administrativa ante el Tribunal Agroambiental de Sucre.

6. 3. EL PROCESO DE SANEAMIENTO DE TIERRAS EN MOJOS.

En el municipio de San Ignacio de Mojos existen 3 territorios indígenas (véanse **cuadro 6. 2** y **mapa 6. 2**): el *Territorio Indígena Multiétnico* (TIM), el *Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro-Sécure* (TIPNIS) y el *Territorio Indígena Mojeño-Ignaciano* (TIMI).

²⁷¹ Se refiere al paso para hacer camino o canal de riego.

²⁷² Procedimiento encaminado a obtener del juez una resolución rápida, a efectos de evitar un peligro o reconocer un derecho posesorio.

²⁷³ Forma de solucionar los conflictos a través del acuerdo amigable entre las partes.

Cuadro 6. 2. Territorios indígenas de Mojos.

| TCO | Polígonos | Provincia | Sección Municipal |
|---------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| TIMI | 1 | Mojos | San Ignacio, |
| TIM | 1 | | |
| | 2 | | |
| TIPNIS | 1 | Mojos, Ballivián y | San Ignacio y |
| TIPNIS | 2 | Marbán (Beni), | Loreto (Beni), |
| TIPNIS | 3^a | Ayopaya y | Villa Tunari |
| TIPNIS | 3B | Chapare | (Cochabamba) |
| TIPNIS | 4^a | (Cochabamba) | |
| TIPNIS | 4B | | |
| TIPNIS | 5 | | |
| TIPNIS | Área priorizada | | |

Fuente: Elaboración propia en base a datos de CIPCA.

Tanto la TCO del TIM como del TIPNIS, fueron los territorios de la provincia de Mojos que se demandaron en primer lugar. Tras la entrada en vigor de la ley INRA los conflictos con *terceros* se vieron acrecentados, lo cual llevó al movimiento indígena mojeño a instar al gobierno a iniciar el proceso de saneamiento en la provincia (Guzmán I., *et al.*, 2007: 204). Fueron las organizaciones en torno a la Subcentral del TIM y TIPNIS las que se constituyeron como punta de lanza del movimiento indígena en tierras bajas logrando la promulgación de los decretos supremos que reconocían los respectivos territorios (véase **cuadro 4. 11**). La TCO del TIMI ha sido, por tanto, la que más recientemente ha demandado el saneamiento de tierra en Mojos.

Cuadro 6. 3. Resolución Área de Saneamiento

| TCO | Resolución Determinativa Área de Saneamiento | AÑO |
|---------------|--|------|
| TIPNIS | R-ADM-TCO-0015-98 | 1998 |
| TIM | R-ADM-TCO-006/2002 | 2002 |
| TIMI | R-ADM-TCO-032/2000 | 2000 |

Fuente: elaboración propia en base a los datos de Guzmán I., *et al.*, 2007: 218-222.

La principal diferencia existente entre estos 3 territorios es la componente étnica, puesto que tanto en el TIM como en el TIPNIS las comunidades que habitan en su

interior nos revelan un mosaico de grupos étnicos: mojeños, movimas, yuracarés o chimanes. En cambio, la población de la TCO del TIMI es mayoritariamente ignaciana, a pesar de que existan algunos trinitarios que se hayan trasladado a las comunidades del territorio mojeño-ignaciano por motivos que tienen que ver esencialmente con los matrimonios interétnicos.

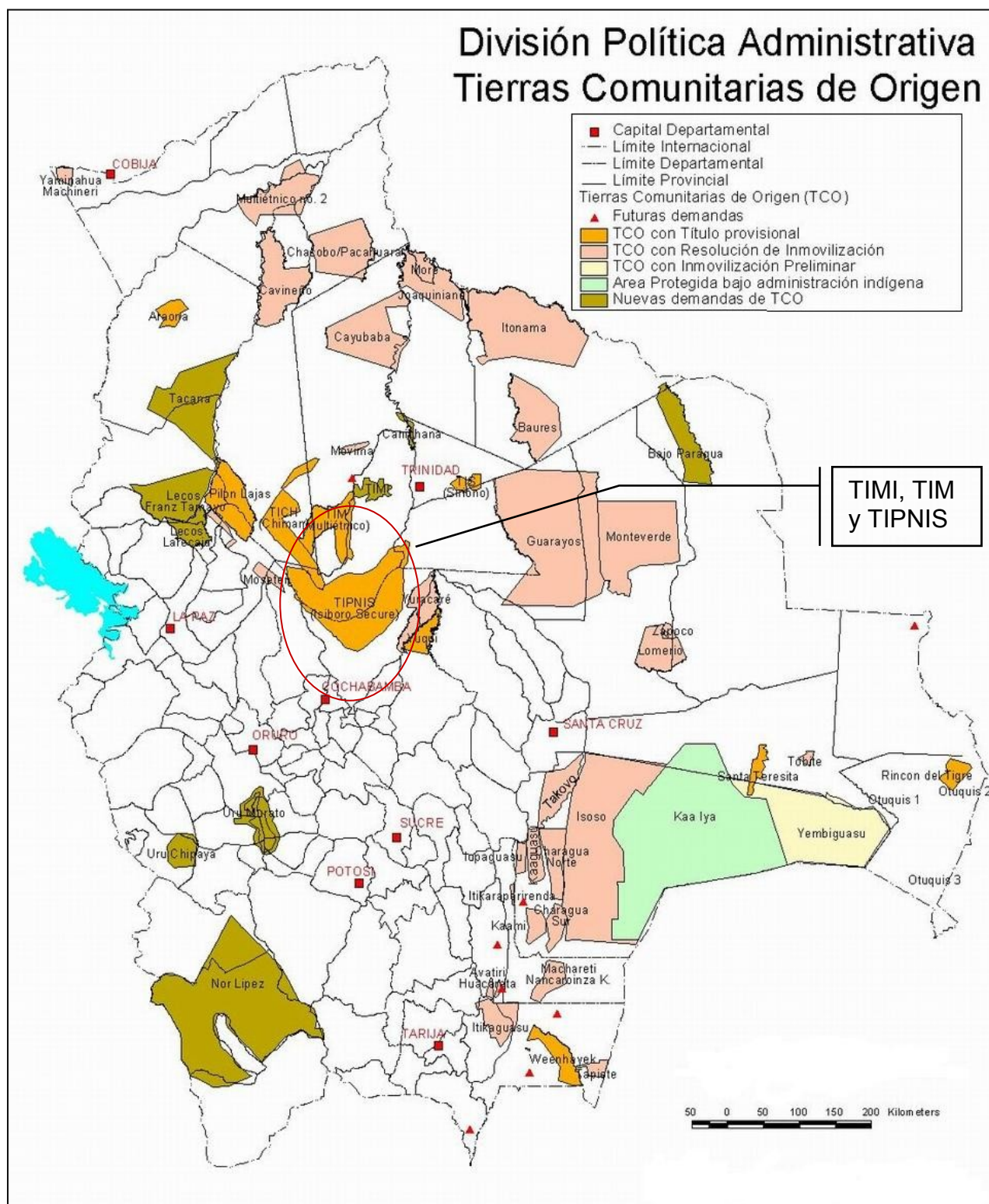
El INRA establece que los sujetos del saneamiento *“son todos aquellos ciudadanos del país con propiedades agrarias o en busca de tierras para poder substituir, que reciben los servicios de saneamiento y distribución de tierras del INRA, y quienes reciben o recibirán información sobre la propiedad agraria del país”* y clasifica a estos en:

- ✓ **Los pequeños productores de comunidades y pueblos indígenas y originarios campesinos del país.**
- ✓ Los medianos productores agrarios y empresas agropecuarias.
- ✓ Las instituciones públicas del Estado Central y los municipios.
- ✓ Los propietarios de tierras en el área rural con actividades no productivas (Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente, Viceministerio de Tierras e Instituto Nacional de Reforma Agraria, 2007: 49).

El primer grupo constituye el sector social más numeroso del país y se asocia a la propiedad agraria colectiva. El pueblo indígena mojeño-ignaciano correspondería a dicho grupo y es éste el que ha demandado el reconocimiento de los títulos de propiedad de la TCO del TIMI.

En el segundo grupo se incluyen específicamente las *“haciendas ganaderas de las pampas de Moxos”* -las que practican un uso extensivo de la tierra- (*ibíd.*, 52-53) y destaca la representación de éstas en FEGABENI además de incluir un cuadro de aquellas familias que poseen grandes extensiones de tierra entre las que aparece una vez más la familia Antelo. De acuerdo al poder que acapara este sector social se explica el vínculo con las esferas del poder estatal o incluso la participación en el mismo y hasta qué punto utilizaron sus influencias para oponerse al saneamiento de las TCOs en las que ellos poseían propiedades individuales haciendo valer sus intereses particulares con el fin de consolidar latifundios pese a que en muchos casos fueran improductivos y ni siquiera cumplieran la FES (*ibíd.*, 53).

Mapa 6. 2. TCOs de Bolivia y territorios indígenas de Mojos²⁷⁴.



Fuente: elaboración propia en base a CPTI, IGM e INRA.

²⁷⁴ Además de las tres TCOs remarcadas, en la provincia de Mojos se encuentra una pequeña superficie de la TCO Canichana y del Territorio Indígena Chimán.

6. 3. 1. Etapas del proceso de saneamiento.

Éstas vienen explicitadas en la ley INRA y son las siguientes:

- **Presentación de la demanda.** Consiste en la solicitud de territorio efectuada por el correspondiente pueblo indígena frente al Estado.
- **Certificado de identidad étnica.** Es el documento que le corresponde elaborar al *Viceministerio de Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios* (VAIPO) con información relativa a la población que demanda el territorio, el área que tradicionalmente ha sido ocupada, así como la que ocupa en la actualidad, el acceso a los recursos naturales y el uso de los mismos (Birk, 2000: 29).
- **Georreferenciación del área demandada.** En esta etapa el *Instituto Nacional de la Reforma Agraria*, ubica y posiciona geográficamente la superficie solicitada en un sistema de coordenadas específico.
- **Resolución determinativa de área de saneamiento.** Consiste en la inmovilización por parte del INRA del territorio demandado, en el cual hasta que no finalice el proceso de saneamiento no podrán establecerse nuevos asentamientos, concesiones, etcétera (*ibíd.*).
- **Informe de necesidades espaciales.** Constituye el documento nuevamente elaborado por VAIPO, por el que se lleva a cabo un estudio sobre aspectos demográficos, económicos y de usos del suelo del territorio demandado para evaluar la superficie que el pueblo en cuestión requerirá en el futuro con el fin de mantener su sistema cultural y económico (*ibíd.* 29).
- **Relevamiento de información en gabinete y en campo.** Consiste en el reconocimiento, por parte de los técnicos del INRA, de la legalidad de las propiedades privadas que existen al interior de las áreas demandadas. Si todo está en regla, se confirman los títulos de dichas propiedades, influyendo en la superficie que será concedida a la TCO (*ibíd.*, 30).
- **Evaluación técnico jurídica.** En esta fase se revisan los títulos ejecutoriales, así como los asuntos agrarios que se encuentren en proceso de trámite y se identifica a los propietarios legales.
- **Exposición pública de resultados.** Se procede a dar a conocer públicamente los resultados que han sido alcanzados durante el proceso.
- **Declaración de área saneada.** Es la titulación como TCO del área demandada.

El cumplimiento de todas y cada una de las fases del proceso administrativo para el saneamiento de la TCO TIMI fue ralentizando el desarrollo del mismo. De todo ello

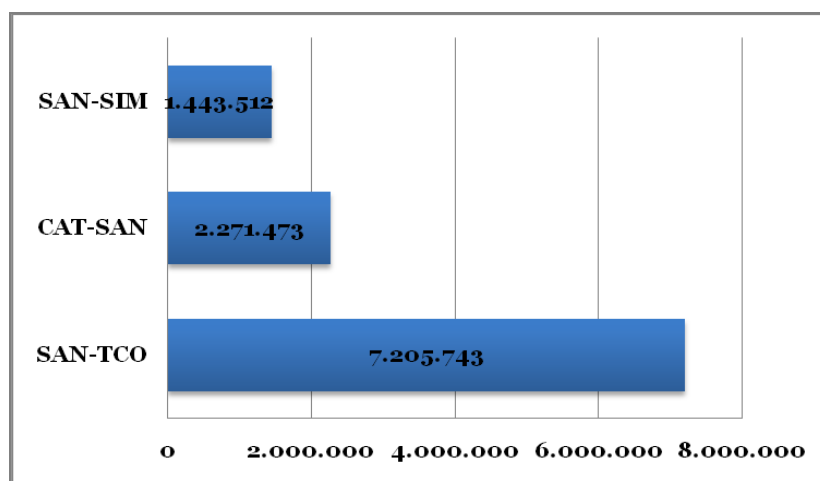
hubo un gran beneficiario: el sector ganadero, dado que la lentitud del proceso le concedía el tiempo suficiente para sobornar directamente a los funcionarios del INRA o para llevar a cabo traspasos de ganado (recordar el fenómeno de las “vacas turistas” o “vacas voladoras”) entre estancias con las que intercambiar hatos de ganado que les permitiese cumplir la FES. De ahí que algunos se hayan atrevido a sugerir la eliminación de algunas fases del proceso de saneamiento como por ejemplo el estudio de las necesidades espaciales (Chirif y García Hierro, 2007: 317). Desde CEDIB se ha cuestionado también dicha fase pero por otras razones: se ha considerado que en los estudios de necesidades espaciales los *terceros* ejercieron su influencia sobre el VAIPO con la intención de reducir la superficie demandada por el pueblo indígena en cuestión (2005: 34).

6. 3. 2. Modalidades de saneamiento.

El artículo 148 de la Ley INRA, establece los distintos tipos de modalidad de saneamiento, las cuales serían las siguientes:

- a) Saneamiento Integrado al Catastro Legal (CAT-SAN).
- b) Saneamiento Simple (SAN-SIM), de oficio o a pedido de parte; y
- c) Saneamiento de Tierras Comunitarias de Origen (SAN-TCO).

Gráfico 6. 1. Superficie titulada por modalidad de saneamiento en Bolivia a 2006 (has).



Fuente: Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente, Viceministerio de Tierras e Instituto Nacional de Reforma Agraria, 2007: 27.

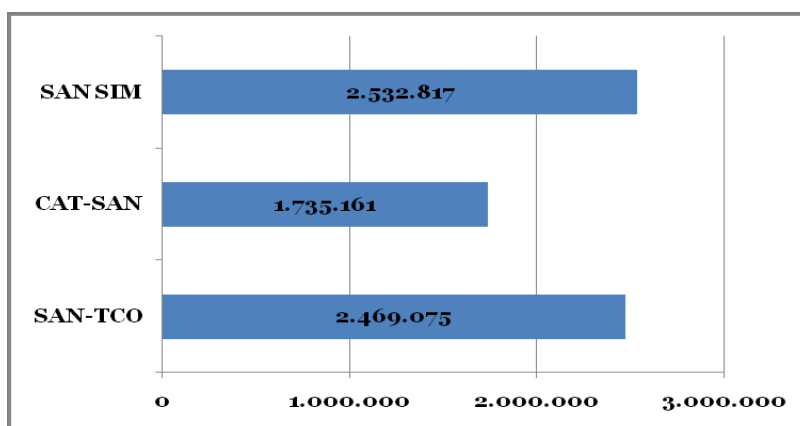
El gráfico superior nos permite apreciar que la SAN-TCO constituye la modalidad por la que hasta el año 2006 se tituló mayor superficie de tierras en el país, con más de

7 millones de hectáreas, en cambio, la modalidad de CAT-SAN y SAN-SIM evidencia que se han saneado un número mucho menor de hectáreas, sobre todo para en el segundo tipo.

El primero de ellos se refiere al saneamiento llevado a cabo en tierras catastrales, entendiéndose por catastro legal *“el sistema público de registro de información en el que se hacen constar datos relevantes a la propiedad agraria y derechos que sobre ella recaen, así como su superficie, ubicación, colindancias y límites”* (artículo 71). Los criterios para que se lleve a cabo el CAT-SAN son, según el Reglamento de la ley, los siguientes: irregularidades técnicas y jurídicas en trámites agrarios; conflictos de derechos en propiedades agrarias; indicios de incumplimiento de la función económico-social; posesiones de tierras sin título y ejecución de proyectos de interés público.

La tendencia que rige en el país en lo que se refiere a la modalidad de SAN-TCO, no se sigue en el departamento del Beni, en donde el SAN-SIM superaría a aquel (véase **gráfico 6. 2**).

Gráfico 6. 2. Superficie de estado de saneamiento según modalidad en el departamento del Beni a 2006 (has.)



Fuente: elaboración propia en base a Rojas, s/f.

Sin embargo, el Saneamiento de Tierras Comunitarias de Origen y el Saneamiento Simple, constituyen las modalidades que han tenido lugar principalmente en Mojos (Guzmán I., 2004: 38, Fundación TIERRA, 2005: 44-45). En relación a la primera se encontraban en proceso de saneamiento 1.637.069 hectáreas y con relación al SAN-SIM descendía hasta 25.509 más otras 18.314 ya tituladas (Fundación TIERRA, 2005: 45).

El saneamiento simple *“es la modalidad que se ejecuta a solicitud de parte, en áreas no catastrales, o de oficio cuando se detecte conflicto de derecho en propiedades*

agrarias, parques nacionales, reservas fiscales, reservas de la biodiversidad y otras áreas clasificadas por norma legal” (artículo 70). El SAN-SIM posee dos variantes. Una de ellas es el saneamiento simple a solicitud de parte, que corresponde a aquel que demanda un propietario individual con el fin de normalizar su derecho de propietario; el saneamiento simple de oficio viene en cambio definido por el Estado, dependiendo del grado de conflictividad que exista en torno a la tenencia de la tierra (INRA, 2008: 84; CEDIB, 2005: 30).

Una de las mayores dificultades que debe superarse aún es el retraso que caracteriza este procedimiento debido a que son los propios demandantes quienes deben pagar las pericias de campo correspondientes (9 dólares por hectárea) lo que hace que en ocasiones ni siquiera se dé por finalizado el proceso (CEDIB, 2008: 35; 2005: 30)²⁷⁵. Mojos, ha sido una de las regiones donde se aplicó más tempranamente la modalidad del saneamiento simple. Entre las comunidades del TIMI que hicieron uso de ello se encuentran algunas como Florida, Chanekere, Flores Coloradas (Fundación TIERRA, 2005: 41) o Monte Grande Km 5 (véase **cuadro 6. 4**). El motivo de ello es muy claro y es que precisamente son estas comunidades las que se encuentran fuera del área de la TCO, por lo que deben ajustarse a dicha modalidad, sin poder solicitar el SAN-TCO. Comunidades como Florida, Chanekere o Ichasi Awásare se beneficiarán del mismo modo que el resto de comunidades de la demanda a pesar de contar con su propio espacio territorial demandado por SAN-SIM.

Cuadro 6. 4. Comunidades con saneamiento simple en la TCO TIMI hasta 2008 (en hectáreas).

| TCO | Comunidad | Demanda | Consolidado | % |
|-------------|-------------------|---------|-------------|-----|
| TIMI | Chanekere | 4.021 | 4.021,18 | 100 |
| | Flores Coloradas | 220 | 130,30 | 59 |
| | Monte Grande KM 5 | 343 | 343,21 | 100 |
| | Florida | 1.668 | 1.668,45 | 100 |

Fuente: elaboración propia en base a Guzmán I., *et al.*, 2007: 223.

Según la Ley INRA el SAN-TCO se ejecuta de oficio o a pedido de parte, en las áreas comprendidas en las tierras comunitarias de origen; se garantiza la participación de las comunidades y pueblos indígenas y originarios en la ejecución del mismo; se revierten además a tales poblaciones aquellas propiedades de *terceros* tituladas al

²⁷⁵ Las pericias de campo incluyen determinar la ubicación geográfica de los predios, la superficie de estos, el cumplimiento de la FES, la identificación de tierras fiscales, etcétera (Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente, Viceministerio de Tierras e Instituto Nacional de Reforma Agraria, 2007: 37).

interior de las TCOs que no cumplan la FES y en caso de que éstas abarquen extensiones que disminuyan significativamente las tierras del pueblo o comunidad indígena u organización, con una superficie y calidad suficientes, en zonas donde existan tierras disponibles (artículo 72 de la Ley INRA).

Zulema Lehm relata algunos episodios que tuvieron lugar en aquellas zonas en las que en un principio, el INRA, por iniciativa propia planteó el CAT-SAN para áreas que posteriormente se demandaron como TCO, en los que las poblaciones no eran consultadas a la hora de hacer las pericias de campo en esas áreas de saneamiento (entrevista). Cuando se cambió a la modalidad de SAN-TCO la situación cambió radicalmente, los gobiernos municipales convocaron a la población para que se inscribiesen en listas y lo que ocurrió fue que multitud de personas que nada tenían que ver con los pueblos indígenas se presentaron para adquirir territorios (entrevista a Zulema Lehm). Son algunas de las consecuencias del juego de identidades que surge en torno a la reivindicación territorial que demuestra una vez más la retoalimentación entre la identidad y el proceso de reconocimiento de derechos colectivos en el que están inmersos los pueblos indígenas en Bolivia.

El SAN-TCO es la modalidad que más interesa a este trabajo dado que es ésta la correspondiente a la demanda del TIMI, así como del TIM y TIPNIS. Alentado por los constantes conflictos con los *terceros*, el sector indígena “*planteó mediante una estrategia de trámites y presiones, la ejecución de la tramitación del proceso de regulación del derecho propietario destinado a los territorios indígenas y a las tierras comunales*” (Guzmán I., 2004: 38).

El SAN-TCO se encarga, entre otras cosas, de designar exclusivamente a las tierras de las poblaciones indígenas, incorporando a éstas en el proceso mediante su participación, revelando las propiedades de *terceros* existentes en el interior de la superficie demandada, examinando el cumplimiento de la FES, etcétera (INRA, 2008: 85). Esta modalidad ha sido la más conflictiva debido a que una gran superficie de las TCOs de Mojos están ocupadas por *terceros* (véanse **mapa 6.3** y **6.4**).

6. 3. 3. Evolución del proceso de saneamiento y titulación del Territorio Indígena Mojeño-Ignaciano.

La titulación de la TCO TIMI se concibió por parte de las organizaciones indígenas de Mojos, como la herramienta que lograría modificar la estructura de la propiedad agraria del territorio ocupado por las comunidades indígenas. Lejos de ello, no parece que vaya a ser así dado que los derechos territoriales de estos grupos no se respetan según marca la legislación dictada desde el Estado nacional.

El *Territorio Indígena Mojeño-Ignaciano* (véase **figura 1. 1**), corresponde a una TCO y a un distrito Municipal Indígena, perteneciente al Municipio de San Ignacio de Mojos. La demanda comprende 17 comunidades (véase **cuadro 6. 5**), que aparecen indicadas en el siguiente cuadro.

Cuadro 6. 5. Comunidades demandantes de la TCO TIMI.

| Clasificación | Nº | Comunidades | Población | Total familias |
|----------------------------------|----|------------------------|--------------|----------------|
| Comunidades dentro de la demanda | 1 | Bermeo | 291 | 46 |
| | 2 | Argentina | 243 | 41 |
| | 3 | San Pablo de Chontal | 144 | 25 |
| | 4 | San José de Algodonal | 111 | 18 |
| | 5 | Fátima | 240 | 43 |
| | 6 | El Buri | 56 | 9 |
| | 7 | Villa Esperanza | 48 | 9 |
| | 8 | Santa Rita | 197 | 32 |
| | 9 | Bella Brisa | 190 | 31 |
| | 10 | Santa Anita del Mátire | 70 | 12 |
| | 11 | San Juan del Litoral | 114 | 22 |
| | 12 | San Miguel del Mátire | 127 | 22 |
| Comunidades fuera de la demanda | 13 | Monte Grande Km. 5 | 166 | 27 |
| | 14 | Nueva Brisa | 16 | 3 |
| | 15 | Flores Coloradas | 51 | 9 |
| | 16 | Florida | 87 | 14 |
| | 17 | Carmen del Chanequere | 227 | 39 |
| TOTAL | | | 2.378 | 402 |

Fuente: MACIGG/VAI, (EINES, 2002), cit. en Canedo, 2008: 210.

Atendiendo al estudio coordinado por el sociólogo Ismael Guzmán incluyo algunos datos referentes al proceso de titulación del TIMI. El *Territorio Indígena Mojeño-Ignaciano* efectuó su demanda de titulación como TCO el 2 de agosto de 1999, consiguiendo como consecuencia que el INRA iniciase el proceso de saneamiento el 12

de agosto de ese mismo año mediante Auto de Admisión (Guzmán I., *et al.*, 2007: 220). La superficie demandada y admitida fueron 98.388, 90 hectáreas, a pesar de que el *Estudio de Necesidades Espaciales* sugiriese una superficie de 269.116 hectáreas para la TCO hasta el año 2042. Actualmente es prácticamente imposible ampliar la demanda puesto que ya no queda más espacio disponible. Por tal motivo se puede afirmar que *“la demanda tenía un alcance menor a la mitad de lo espacialmente necesario y la consolidación ha sido la mitad de esa demanda planteada”* (entrevista a Ismael Guzmán). El TIMI logró de esta manera ser declarado el 7 de noviembre del año 2000 zona de inmovilización según la Resolución Determinativa de Área de Saneamiento N° R-ADM-TCO 0031/2000 (Guzmán I., *et al.*, 2007: 220). Un aspecto particular a señalar de este territorio *“es que se planteó la demanda sobre la base de un conjunto de comunidades contiguas, la mayoría de ellas con título comunal sobre sus tierras y aglutinadas desde 1988 en torno a la SubCentral de Cabildos Indígenales de San Ignacio de Mojos”* (entrevista a Ismael Guzmán).

Pasado algo más de año y medio, el 15 de julio de 2002 comenzó la campaña pública para dar a conocer –principalmente a los *terceros*- el proceso de delimitación del territorio. En efecto, comenzaron las pericias de campo que concluyeron el 19 de noviembre del mismo año. Un año más tarde, en abril de 2004, finalizó la fase de Evaluación Técnica Jurídica (Guzmán I., *et al.*, 2007: 220). En el año 2006 se dio a conocer públicamente los resultados en San Ignacio de Mojos, los cuales corresponden a los datos siguientes:

- Demanda inicial: 98.388 hectáreas
- Superficie admitida: 98.388 hectáreas
- Superficie mensurada: 89.671 hectáreas
- Predios dentro de la TCO: 47
- Predios no reconocidos: 4
- Superficie de dominio público: 4.176 hectáreas
- Superficie ocupada por terceros: 36.060 hectáreas
- Superficie a favor de la TCO: 48.865 hectáreas
- Superficie tierra fiscal: 7.920 hectáreas
- Porcentaje de consolidación TCO: 49,7%

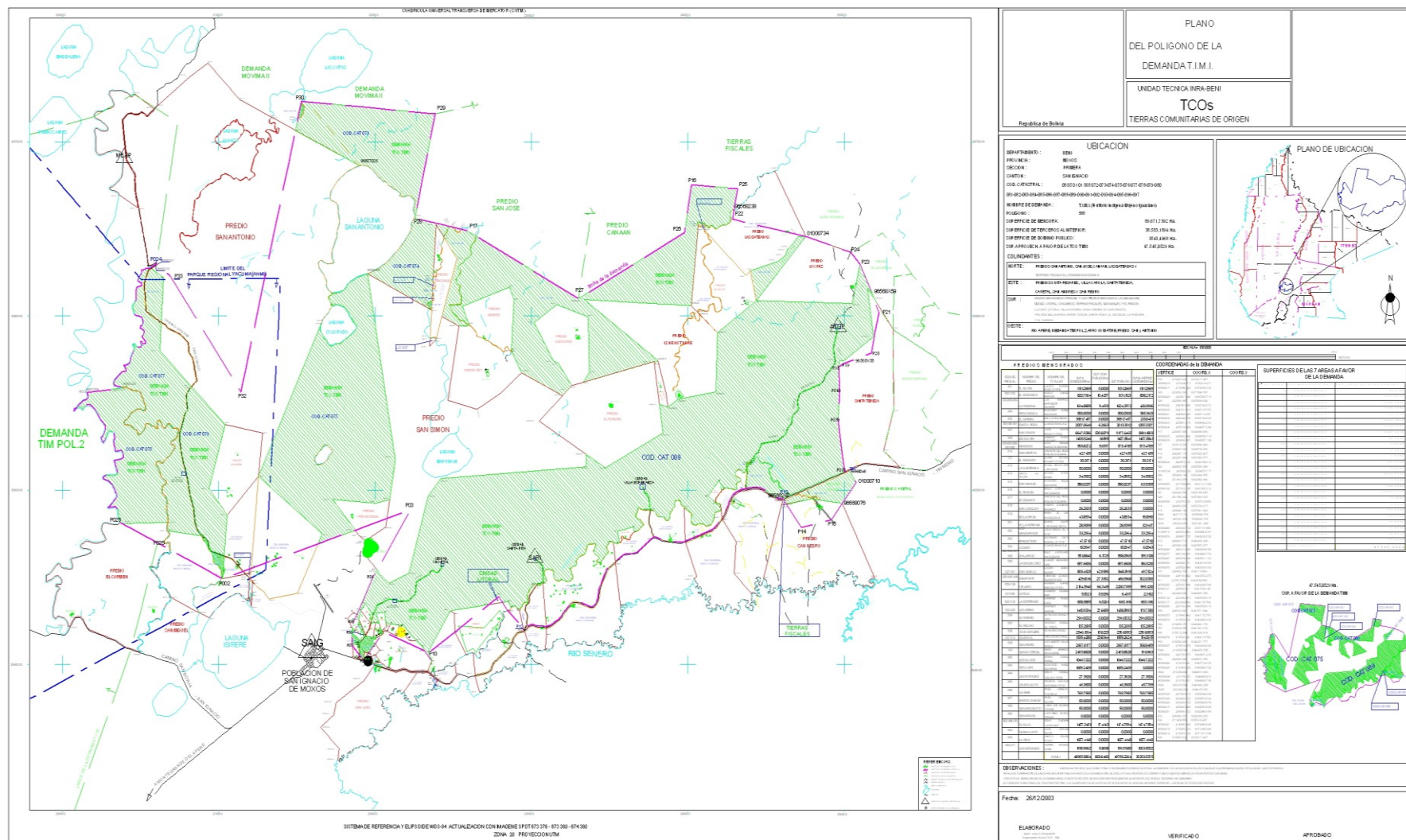
Los equipos técnicos del INRA se dedicaron a mensurar el territorio demandado para delimitar la petición. El levantamiento topográfico fue efectuado entre el 8 y el 15 de junio de 1999 (véase **figura 1. 5**). Tras configurar los 36 puntos o vértices del polígono correspondiente a la TCO del TIMI, se estableció además que el propietario

sería *La Subcentral de Cabildos Indígenales de Mojos*, y el nombre de la propiedad: *Tierra Comunitaria de Origen Mojeño Ignaciano*. Una vez creado el plano preliminar de la demanda de TCO se diagnosticaron las condiciones al interior de este área (por la existencia de predios). En el caso de que estos se encontrasen habría que identificar las situaciones de conflicto, si es que éstas se dieran en el caso del TIMI –lo cual efectivamente así sucedió–.

Tras el levantamiento topográfico preliminar, la unidad técnica del INRA-Beni, elaboró el diseño del polígono de la demanda de TCO (véase **mapa 6. 3**), en el que a diferencia del anterior se ubicaba la correspondiente superficie junto con sus respectivas colindancias con otras demandas de TCO –como pueden ser MOVIMAS II o TIM- o con el Parque Regional Yacuma, así como con las tierras fiscales ubicadas al Norte y Sur de la TCO TIMI. Del mismo modo fueron incluidos los 50 predios existentes al interior.

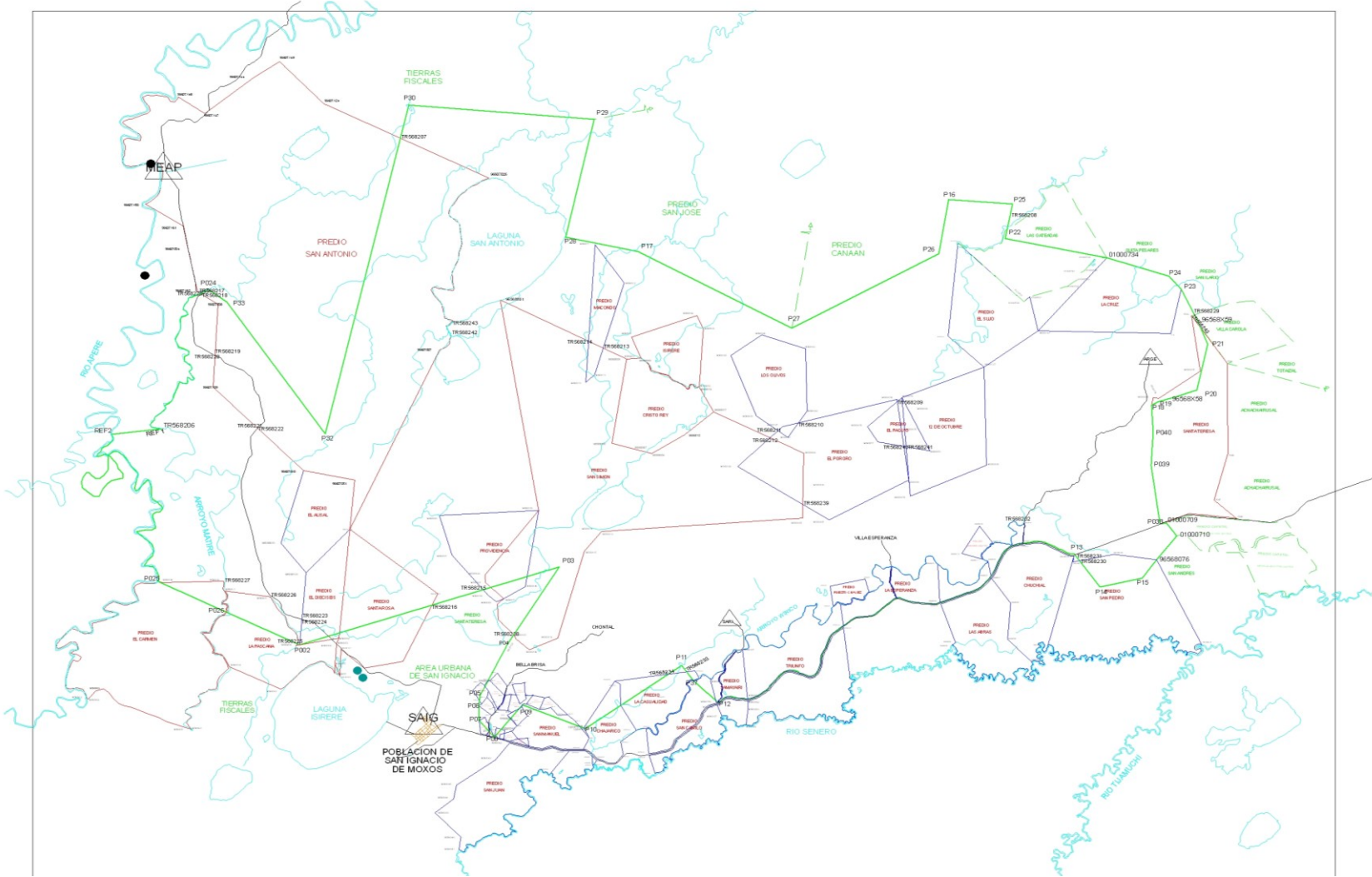
En la fase de las pericias de campo se produjeron reducciones por parte del INRA, que supusieron la pérdida de aproximadamente unas 10.000 hectáreas (entrevista a Ismael Guzmán). Los motivos de ello fueron varios: la falta de responsabilidad por parte de la organización, principalmente de sus líderes, la aptitud parcial de los técnicos de la institución encargada del proceso de saneamiento y los condicionamientos geográficos. Tras conocer estos hechos, una cuestión viene a ser respondida y es que es inevitable plantearse la pregunta del porqué no se llevó a cabo la demanda de una superficie mayor de tierra. Para dar respuesta a esto me remito una vez más a la cuestión de la viabilidad de la demanda. Por temor a ser rechazada y porque no había más espacio se limitó el espacio territorial consecuente. Algunos expertos reconocen que la demanda se pudo haber ampliado por la parte norte, debido en gran medida a que al interior ya se asentaban las estancias ganaderas (entrevista a Ismael Guzmán). El problema es que sobre los espacios más septentrionales se posee escaso conocimiento y existen además abundantes curichis, que deberían ser superados, algo complicado y sin mucho sentido. Otra parte corresponde a tierra fiscal y no se tuvo en cuenta, sino que se tomó como referente los espacios hasta entonces ocupados, los espacios utilizados en ese momento. La posibilidad de ampliación territorial incorporando la franja norte, fue una alternativa que no se llegó a plantear. En este caso, la organización indígena pecó de ingenua, le faltó visión. Ahora ya es demasiado tarde para ampliar la demanda inicial.

Mapa 6. 3. Polígono de la demanda de la TCO TIMI



Fuente: CPTI

Figura 6. 2. Demanda TCO TIMI Y polígonos de predios



Fuente: CPTI

Actualmente el proceso de saneamiento del TIMI está finalmente cerrado. Aunque hubo que esperar hasta el mes de marzo de 2011²⁷⁶ debido a un pequeño detalle administrativo y es que a la hora de demandarse la personería jurídica se presentó a nombre de la *Subcentral de Cabildos Indigenales de Mojos* en vez de corresponder la demanda, y como consecuencia la posterior titulación, al *Territorio Indígena Mojeño-Ignaciano* (entrevista a Rosario Cunavi, Vicepresidenta de la CPEM-B).

Cuadro 6. 6. Proceso de saneamiento del TIMI.

| Fecha | Etapas | Superficie |
|--|---|-------------------------|
| 2 de agosto de 1999 | Demanda del territorio | 98.388 Hectáreas |
| 12 de agosto de 1999 | Auto de Admisión | 98.388 Hectáreas |
| 7 de noviembre de 2000 | Resolución Determinativa R-ADM-TCO 031/2000 Saneamiento | 48.865 Hectáreas |
| 15 de julio de 2002 | Resolución R-ADM-TCO 006/2002. Campaña pública | |
| 15 de julio-19 de noviembre de 2002 | Pericias de campo | |
| Abril de 2004 | Finalización Evaluación Técnica Jurídica | |
| 16 de diciembre de 2006 | Exposición pública de resultados | |
| Julio de 2010 | Personería Jurídica | |
| Marzo 2011 | Titulación TCO TIMI | |

Fuente: elaboración propia en base a los datos de Guzmán I., *et al.*, 2007: 220.

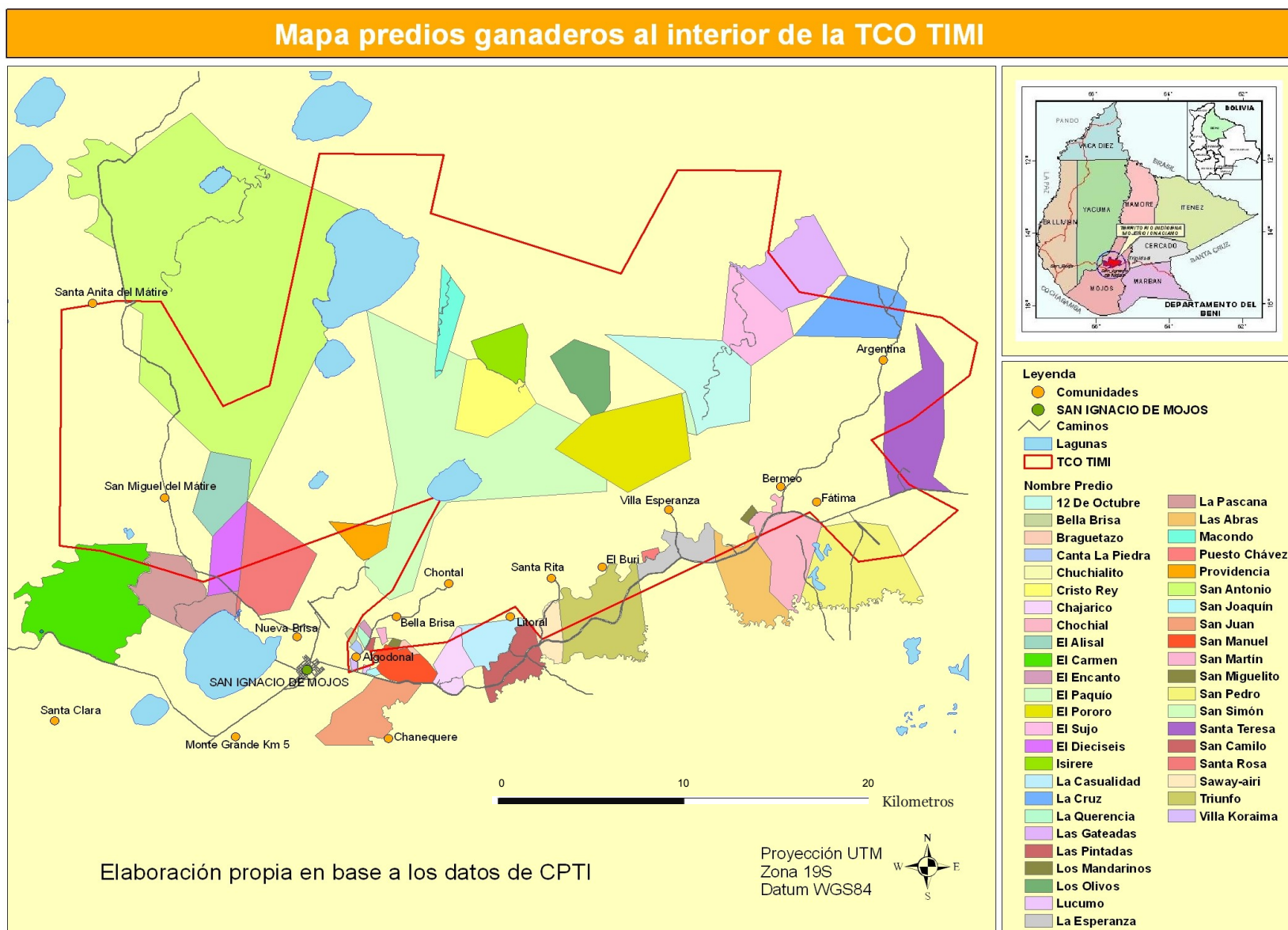
Los predios ganaderos al interior de la TCO TIMI (véase **mapa 6. 4**), nos permiten obtener una imagen visual de lo que ocurre al interior de la misma. Nos permiten, del mismo modo, entender el proceso de ocupación territorial llevado a cabo de manos de *terceros* en el área demandada del TIMI, hasta el punto de que la mitad de la TCO está ocupada por haciendas ganaderas, llegando alguna de ellas a alcanzar casi las 10 mil hectáreas como es el caso de la hacienda de San Simón o San Antonio que alberga casi 20 mil hectáreas. Es más, se percibe de qué manera el conjunto de estancias forman un perímetro que rodea a una gran mayoría de las comunidades del TIMI. Todos estos hechos han contribuido a generar los conflictos que están teniendo

²⁷⁶ Durante el VIII Encuentro de Corregidores celebrado en la comunidad de Chontal los días 25, 26 y 27 de marzo, un técnico del INRA anunció la resolución definitiva del título de propiedad de la TCO TIMI.

lugar en este espacio territorial en la actualidad. En la práctica totalidad de las comunidades del TIMI se considera que el territorio titulado no es suficiente, si no que es “*harto chico*” por lo que “*hemos perdido gran parte*” (entrevista Huáscar Gutiérrez de la comunidad Monte Grande).

En el caso de la comunidad de Flores Coloradas, Dionisio Noza, explica que la superficie del monte de dicha comunidad es de 109 hectáreas lo cual es del todo insuficiente para el conjunto de comunarios, para la caza sobre todo, que ya no se encuentra de manera abundante (entrevista). Dionisio señala una zona que explica cómo anteriormente era monte pero que tras “*meter las motosierras*” las convirtieron en propiedades para *terceros* (entrevista). En Chontal, en el verano de 2010 había sólo 40 hectáreas tituladas, algo irrisorio para la comunidad (entrevista a Esteban Pacema, corregidor de Chontal).

Mapa 6. 4. Estancias ganaderas en el TIMI



Cuadro 6. 7. Predios de la TCO TIMI

| Nro | CODIGO PREDIAL | NOMBRE DEL PREDIO | NOMBRE DEL TITULAR | SUP. MENSURADA (Ha.) | SUP.AL INTERIOR DE TCO(Ha.) |
|------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 1 | 001 | EL ALISAL | EULOGIO MUÑUNI MICHE Y OTROS | 1131,2669 | 1131,2669 |
| 2 | 002-062 | EL DIECISEIS | ADOLFO SUAREZ MENDOZA | 831,1921 | 808,2172 |
| 3 | 003-063-064 | LA PASCANA | LUIS FERNANDO BARTHELEMY CALDERON | 1624,3372 | 426,9016 |
| 4 | 004 | PROVIDENCIA | SIGILFREDO NÚÑEZ VELA ARIAS | 1422,4794 | 1307,8407 |
| 5 | 005 | EL CARMEN | EMILIO ARIAS BAZAN | 3691,7457 | 213,8431 |
| 6 | 006-060-061 | SANTA ROSA | EDUARDO ARIAS DIEZ | 2013,3312 | 1255,3327 |
| 7 | 007 | SAN SIMON | JAIME IRIARTE ANGULO Y OTROS | 10313,7108 | 9863.4899 |
| 8 | 008 | CRISTO REY | ARMANDO RIVERO GUTIERREZ | 1407,5841 | 1407,5841 |
| 9 | 009-065-066-067-068 | MACONDO | LAIDA MASABY VELASCO DE MENDOZA | 575,4789 | 575,4789 |
| 10 | 010 | SAN MARTIN | CARLOS MIGUEL ANGEL MOLLINEDO ZEGARRA | 42,7439 | 42,7439 |
| 11 | 011 | EL ENCANTO | ELIANA CHIVACO NOLVANY Y OTROS | 39,3171 | 39,3171 |
| 12 | 012 | LA QUERENCIA | MIGUEL SALVATIERRA JUSTINIANO | 57,2199 | 56,5359 |
| 13 | 014 | CANTA LAS PIEDRAS | ALFREDO RIVERO PARADA | 34,5952 | 34,5952 |
| 14 | 015 | SAN MANUEL | SIGILFREDO NÚÑEZ VELA ARIAS | 580,0237 | 63,5335 |
| 15 | 016 | EL RINCÓN | NELLEY JUSTINIANO Vda. De ZELADA | 45,6144 | 8,4982 |
| 16 | 017 | 25 DE MAYO | CARLOS MIGUEL ANGEL MOLLINEDO ZEGARRA | 17,9618 | 0 |
| 17 | 018 | SAN JOAQUIN | VICENTE SUCUBONO MATARECO | 26,2633 | 0 |
| 18 | 019 | BELLA BRISA | MARIA DE LAO MATARECO NOE | 43,8934 | 19,8910 |
| 19 | 021 | VILLA KORAIMA | MARINA CHAPPY JUSTINIANO GOITIA | 28,9099 | 12,9417 |
| 20 | 022 | LOS MANDARINOS | JESUS PACHIRI GIL Y OTRO | 33,2964 | 33,2964 |
| 21 | 023 | BRAGUETASO | SATURNINO CAITY MASAPAIJA Y OTRO | 47,5710 | 47,5710 |
| 22 | 024 | LÚCUMO | EDUARDO ARIAS DIEZ | 19,4434 | 6,0943 |

| | | | | | |
|----|-----------------|------------------|---|-----------|-----------|
| 23 | 025-056-057-058 | CHAJARICO | NELLY JUSTINIANO Vda. De ZELADA | 775,6133 | 139,3108 |
| 24 | 026 | LA CASUALIDAD | EDUARDO ABULARACH VACA | 697,6606 | 156,5210 |
| 25 | 027-051 | SAN CAMILO | EDISON BRAVO VELASCO | 848,3915 | 49,7524 |
| 26 | 028-040-048 | SAMAYAIRI | FRANCISCO EDUARDO VELASCO RIVERO | 456,9368 | 302,0300 |
| 27 | 029-039 | TRIUNFO | ADHEMAR SUAREZ MENDOZA Y OTRO | 2200,7359 | 995.1210 |
| 28 | 031-059 | LOYOLA | FERNANDO HERRERA ALBA | 6,4317 | 2,3182 |
| 29 | 032-030 | LA ESPERANZA | FERNANDO RIVERO EGUEZ | 665,1116 | 665,1116 |
| 30 | 033-020 | LAS ABRAS | WILFREDO RUIZ CARDONA | 1438,5993 | 179,7330 |
| 31 | 034 | EL PORORO | ALINA ADAD CHAVEZ Y OTRO | 2911,5032 | 2911,5032 |
| 32 | 035 | EL PAQUIO | WILFREDO ROSSELL GIL Y HNOS. | 325,4593 | 325,4593 |
| 33 | 036 | 12 DE OCTUBRE | ALINA ADAD CHAVEZ | 2561,8193 | 2561,8193 |
| 34 | 037-013 | CHUCHIAL | WALTER ADAD CHAVEZ | 1559,2624 | 154,0615 |
| 35 | 038 | SAN PEDRO | LUIS ALBERTO SELM BOWLES | 2667,8177 | 368,8459 |
| 36 | 041 | SANTA TERESA | MARIO ARMANDO AVILA SUÁREZ | 2493,8828 | 191,6163 |
| 37 | 042 | LOS OLIVOS | EFRAIN CORTEZ CHAVEZ | 1224,0874 | 1224,0874 |
| 38 | 043 | SAN JUAN | SIGILFREDO NÚÑEZ VELA ARIAS | 1659,2409 | 0 |
| 39 | 044 | LAS PINTADAS | SONIA ROSSELL CUELLAR Y OTROS | 27,3926 | 27,3926 |
| 40 | 045 | CHUCHIALITO | SÓCRATES GUATAICA CARTAGENA Y OTRO | 46,3600 | 45,7769 |
| 41 | 046 | ISIRERE | ANGEL HUMBERTO DIEZ MALUE | 769,7985 | 769,7985 |
| 42 | 047 | PUESTO CHAVEZ | ANGEL CASTEDO VELARDE | 161,4943 | 161,4943 |
| 43 | 049 | SAN MIGUELITO | JUANA JARE CAGUANA Y OTROS | 113,4961 | 113,4961 |
| 44 | 050 | SAN MIGUEL | LUCIO-PABLO PEDRIEL ROSALES | 0 | 0 |
| 45 | 052-069-070 | EL SUJO | CESAR GUAGAMA JUSTINIANO | 1474,7594 | 1474,7594 |
| 46 | 053 | GUANAJUATO | VILMA ARRIAZA ZELADA | 0 | 0 |

| | | | | | |
|----|---------|--------------|-------------------------|------------|------------|
| 47 | 054 | LA CRUZ | WALTER ZELADA RIVERO | 1657,4148 | 1657,4148 |
| 48 | 055-071 | LAS GATEADAS | HERMAN NOGALES DURAN | 1911,7680 | 1063,5002 |
| | | | | 52683,0171 | 32895,8970 |

Fuente: Informe técnico – jurídico del INRA.

Una de las grandes desventajas en relación a la titulación de las TIMI fue que, previamente al proceso de saneamiento de la misma, los *terceros* que ocupaban las haciendas del interior de esta entidad indígena, debían regularizar sus propiedades privadas, situación que aprovecharon para acaparar las mejores parcelas.

En los talleres grupales en Santa Rita²⁷⁷ se recogió la siguiente información:

“nuestro territorio era un poco más allá, otro monte y cuando vinieron los técnicos del INRA nos recorrimos más para acá porque ellos nos dijeron que tenían títulos de propiedad más viejos. Ellos (los terceros) compraron esa estancia, tumbaron el monte porque sabían que se venía esto de sanear la tierra y así nosotros no seguíamos para adelante y quedó como límite el Wirico” (grupo de discusión).

También relatan fervientemente cómo Jaime Iriarte, un diputado del MNR y ganadero “pudiente”, quien posee una de las estancias ganaderas colindantes con el territorio comunal de Santa Rita, estuvo a punto de recortar 10.000 hectáreas pero la *“comunidad no se dejó, fuimos, les pillamos y cortamos su alambre. Nuestra propia autoridad somos nosotros, no tenemos otros medios para defendernos. Nosotros no lo comunicamos al INRA porque en ese tiempo el INRA estaba a favor de ellos”* (grupo de discusión).

De igual manera, Esteban Pacema –corregidor de Chontal- declara en relación a las acciones fraudulentas cometidas por los ganaderos que *“cuando venían las comisiones del INRA, los ganaderos movieron los mojones y dijeron hasta aquí llega mi propiedad. Han cogido las partes altas donde el agua no alcanza el ganado y es ahí donde nosotros cazábamos y cultivábamos”* (entrevista).

La presencia de estas haciendas ganaderas ha contribuido a ralentizar el proceso de saneamiento y a ha interferido en la continuidad geográfica del territorio comunal ignaciano. Recordando lo explicado en el anterior capítulo, queda comprobada la fragmentación territorial del espacio comunal ignaciano. Huáscar Gutiérrez cuenta que

²⁷⁷ También tuvieron problemas pero esta vez causados por uno de los propios comunarios de Santa Rita que quiso vender una parcela a un ganadero: *“después para este lado también hemos tenido otro problemita con otro señor ganadero y eso era porque un comunario de aquí estaba queriéndole vender y la comunidad fue y lo paró. No podemos vender porque es una TCO”*.

“los ganaderos entraron en estas zonas que hace 40 años estaban baldías, yo las conocí así, y llegaron sin títulos, entraron porque tienen plata, al final se quedaban con ello y al final por no pelear tanto con ellos la comunidad les cedía” (entrevista).

6. 3. 4. Conflictos territoriales en Mojos.

Si rastreamos en Bolivia las raíces de los conflictos por la tierra debemos retrotraernos al periodo colonial.

Se entiende conflicto por la tierra como aquel “*hecho social en el cual entran en contradicción los intereses de al menos dos partes en relación a los derechos de propiedad, o en su caso, de uso, sobre la tierra*” (Wehrmann, 2008, cit. en Chumacero, 2010b: 73) pudiéndose ver incrementada la tasa de conflictividad cuanto más opuestos sean los intereses de ambas posiciones sociales (*ibíd.*). Los conflictos por la tierra son muy comunes en Bolivia debido a la desigual distribución de tierras entre los diversos grupos sociales que pueblan el país.

En el *Plan Estratégico Nacional de Saneamiento y Titulación de Tierras* (PENSAT) 2007-2013, se incluye una definición del conflicto agrario como “la lucha expresada entre, por lo menos, dos partes independientes que perciben metas incompatibles, por escasez de recursos e interferencia entre sí, para la consecución de sus metas u objetivos” (Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente, Viceministerio de Tierras e Instituto Nacional de Reforma Agraria, 2007: 76). Lo interesante es que además se indica que si bien los conflictos suelen poner énfasis en las fricciones entre las partes, estos poseen una dimensión positiva, “*constructiva, al enfocarla como un motor de cambio social, como la oportunidad de resolver un problema*” (*ibíd.*). La literatura antropológica está plagada de ejemplos en los que tras situaciones conflictivas, incluso con altas tasas de violencia, se restaura un clima de paz en las sociedades.

Hablar de territorio es hablar en la mayor parte de las veces de conflictos y es que la conflictividad es inherente a los procesos de territorialización. En estos procesos surgen conflictos entre aquellos actores que comparte el mismo espacio y pugnan por su apropiación.

Graciela Malgesini y Carlos Giménez, inspirados por el trabajo de Piris (1996) señalan como una de las causas tradicionales de los conflictos: las territoriales y étnicas²⁷⁸, entre otras, además del deterioro ambiental que forma parte de las causas

²⁷⁸ Mamani utiliza la definición de Rodolfo Stavenhagen para definir el conflicto étnico como la “*confrontación social y política prolongada entre contendientes que se definen a sí mismos y a los demás en términos étnicos; es decir, cuando algunos criterios como la nacionalidad, la religión, la raza, el idioma y otras formas de identidad cultural se utilizan para distinguir a los contrincantes*” y se explican por el surgimiento de “*situaciones históricas específicas, se*

modernas (2000: 73). En el caso específico del entorno local ignaciano se combinan ambas, aunque implícitamente también encontramos razones históricas. La defensa del territorio es la base de la mayor parte de conflictos. Estos autores incluyen además a los pueblos indígenas entre las diversas tipologías de comunidades en conflicto (*ibíd.*, 74).

Para Mamani, los conflictos, principalmente de tipo étnico, propician la aparición de espacios sociales (recordemos lo dicho en el capítulo 5) caracterizados por el intento de dominación e imposición del modelo de vida de un grupo sobre otro, lo cual puede implicar por un lado transformaciones en los patrones culturales de estos últimos o el fortalecimiento de la identidad como instrumento de resistencia frente a los primeros (2005: 49). Algo similar es lo que ha ocurrido en Mojos.

El primer paso a la hora de describir los conflictos de tierras es identificar los actores sociales involucrados en ellos. En Mojos en particular, este tipo de conflictos ha enfrentado al sector ganadero y a las comunidades indígenas entre quienes se han generado las mayores fricciones. Si bien, las empresas forestales han jugado un papel determinante en este proceso.

Estudios como el de CEJIS apuntan al saqueo de recursos naturales como uno de los conflictos habituales en las comunidades mojeño-ignacianas debido a la incursión de *piratas*, quienes frecuentemente ingresan en los territorios comunales para aprovecharse de sus recursos (principalmente tajibo y cedro) (2003: 257). Si bien este tipo de conflictos por la apropiación de recursos naturales surge como “*resultado del paulatino desalojo de sus territorios tradicionalmente ocupados, los cuales son codiciados por ganaderos y foráneos*” (*ibíd.*, 258). Las principales causas que hacen estallar los conflictos por la tierra en el TIMI son varias y van desde la distribución desigual de la tenencia de la tierra, las superposiciones con empresas forestales, la ampliación de la frontera ganadera, las alambradas de las estancias, las deficiencias en la definición de los límites territoriales, la ausencia de un registro catastral de la información actualizado y transparente, y por supuesto, la apropiación de los recursos naturales. Pablo Pacheco subraya la ambigüedad concerniente a la definición de los

originan debido a diversas circunstancias particulares y únicas, y su construcción se debe a ciertos intereses idealistas e ideológicos, visionarios y oportunistas, líderes políticos y diferentes ‘intermediarios étnicos’ (2001: 4, cit. en Mamani, 2005: 22).

Por otro lado, los conflictos étnicos entre dos grupos sociales fueron entendidos desde un planteamiento marxista, desde la dialéctica de clases sociales, como la reproducción del conflicto de clases. Sin embargo, autores como el citado anteriormente, defienden que las relaciones de conflicto han estado caracterizadas en Bolivia por la condición étnica (“*aunque con importantes grados de conflicto de clase*”) y lo defiende argumentando que “*es étnica porque los grupos dominantes se definen a sí mismos desde el sentido común dominante fundado en el color de la piel ‘blanca’ (aunque no sea blanca) y los indios o indígenas definen también esta relación desde su propio sentido común organizado en el color de la piel ‘morena’*” (Mamani, 2005: 111). Esta argumentación puede resultar simplista al basar la definición de la categoría étnica sobre un rasgo físico (recordemos capítulo 2) aunque nos permite orientarnos en la cuestión de los conflictos sociales de base étnica en Bolivia.

derechos de propiedad, las superposiciones de propiedades, la falta de competencia y autoridad por parte de los entes gubernamentales encargados en la gestión de la tierra²⁷⁹, la inexistencia de mecanismos de control dirigidos a supervisar el acceso y ocupación de tierras, así como el desconocimiento por parte de las poblaciones indígenas de la legislación referente a la cuestión agraria (1998b: 67). Estos son algunos de los principales motivos que explican el porqué de los conflictos en Mojos.

Algunos estudios señalan que el municipio de San Ignacio de Mojos es, de entre todos los del Beni, el que mayor grado de conflictividad presenta (Fundación TIERRA, 2005: 64). A raíz del choque de lógicas explicado en el epígrafe anterior es que se producen los conflictos por el acceso y la posesión del territorio en Mojos.

Tradicionalmente, las relaciones en Mojos entre ambos actores sociales -basadas en la dominación y subordinación- han guardado un estrecho vínculo con la tenencia de la tierra, como expuse en el anterior capítulo. El control de la tierra y los recursos naturales han sido motivo suficiente para el surgimiento de los conflictos en la región, lo cual *“configura las relaciones de poder existentes en la zona y se reproducen en el conjunto de la vida social y política, a tal punto que no puede ocultarse un ambiente de malestar social y un exaltado estado de confrontación entre los sectores”* (Guzmán I., 2004: 59). Los conflictos en San Ignacio de Mojos, presentan una evidente componente histórica y es que:

“la disputa se puede resumir como el choque de dos realidades: la realidad ganadera (el 80 por ciento de las tierras distribuidas en Mojos corresponde a 463 propietarios ganaderos) que ocupó la zona, sobre todo, mediante dotaciones realizadas a lo largo de los gobiernos militares frente a la realidad indígena que se fue desarrollando a partir de los años 90 y que se expresa a través de tres demandas de TCO (TIM, TPNIS y TIMI) (...)” (Fundación TIERRA, 2005: 64).

Los conflictos entre ambas partes surgen, principalmente, por la ubicación de linderos y límites territoriales pero, sobre todo, por la sobreposición de tierras puesto que en las zonas solicitadas se asentaban comunidades, empresas madereras con concesiones forestales previas, estancias ganaderas, o incluso áreas protegidas²⁸⁰. Sin embargo, la mayor parte de los autores coincide en las sobreposiciones como causa mayor, así se refieren a ello otros estudios:

²⁷⁹ Como pueden ser el CNRA, el INC o el INRA.

²⁸⁰ Gabriela Canedo afirma que previamente a la Ley INRA los límites de los predios ganaderos se mensuraban desde las avionetas o directamente en los despachos, sin existir por lo tanto una evaluación técnica en el terreno, provocando como consecuencia la superposición de propiedades (2009: 220).

“Si bien la naturaleza de los conflictos es diversa, la mayoría de ellos se refiere a problemas de linderos y a la invasión de terceros, el 86,9% de los casos, por lo que se puede concluir que la expansión de la hacienda es en realidad la causa principal de los conflictos; las otras causas secundarias están muy articuladas a las anteriores, debido a que los productores ganaderos se encuentran por lo general colindando con las comunidades campesinas e indígenas” (Urioste y Pachecho D., 2001: 137).

Las superposiciones entre los espacios territoriales indígenas y otros espacios son una constante en el paisaje de Mojos. Constituyen uno de los mayores problemas a los que tienen que enfrentarse los pueblos indígenas en relación con el uso de los recursos naturales. La cuestión que surge es cómo regular el uso en un mismo espacio territorial del suelo, subsuelo y del espacio arbóreo. La coexistencia de diversos sistemas de manejo propicia la aparición de muchos de los conflictos existentes en Mojos. La escasa coordinación entre instituciones encargadas en regular el ordenamiento territorial o las concesiones forestales es determinante en la irresolución de los conflictos. El acceso a la tierra se ha desenvuelto por tanto, en un clima de conflictividad.

Otras investigaciones defienden que, tradicionalmente, las poblaciones mojeñas han procurado evitar los conflictos movidas por su propio código ético, optando por mantener, siempre que se pueda, relaciones de convivencia en una actitud de “resignación condescendiente” (Guzmán I., 2004: 61). Uno de los efectos más directos de dicha actitud para tales poblaciones fue la pérdida de territorio a manos de los *terceros*, quienes se aprovecharon de la postura adoptada por la población indígena. Sin embargo, la experiencia les ha llevado a luchar por lo que consideran que les pertenece y es desde esta toma de conciencia que se han agudizado los conflictos en torno a la posesión de la tierra (Canedo, 2009: 219). De similar forma lo ha explicado Guzmán denominando “evasión del conflicto” a la táctica seguida por las poblaciones indígenas desde la llegada de los europeos y de los colonos más tarde.

Algunos de los testimonios recogidos en las comunidades indígenas demuestran la postura pacífica que los comunarios mojeños han preferido mantener, evitando los enfrentamientos en la medida de lo posible. En este sentido Ignacio Cusere –corregidor de Algodonal- reconoce que “*nosotros no peleábamos por los campos de ellos*” (de los ganaderos) (entrevista) y del mismo modo, Húascar Gutiérrez, también menciona que cedieron mucho ante los ganaderos en el momento que estos vinieron a ocupar territorios comunales (entrevista). Y Teodosia Rojas -corregidora de Santa Rita- propone el diálogo frente a los ganaderos para lograr la conciliación por conflictos de linderos (entrevista).

En otros casos como en Bella Brisa la táctica seguida ante el avance de potreros de estancias ganaderas en el territorio de la comunidad, fue decomisar las herramientas

porque “ellos (los ganaderos) como tienen plata se sienten dueños y hay que pararlos porque no sabemos cuántas hectáreas es que ocuparon” (grupo de discusión).

Tras los escasos resultados se daría paso a la “resistencia pasiva” en la que nuevamente se procuró evitar la confrontación. Como última opción se decantaron por la “movilización”, desarrollando acciones que sirviesen para presionar a los terceros, fundamentalmente empresas madereras, con vistas a defender los recursos naturales al interior de los espacios territoriales donde habitaban (Guzmán I., 2004: 60).

Sin embargo, esta posición es más que discutible puesto que las poblaciones mojeñas han participado desde siglos atrás en las resistencias indígenas por la defensa de sus espacios. Enric Jordà narra cómo desde 1723, los mojeños, obtuvieron permiso por parte de la corona española, para usar armas de fuego frente a las incursiones de portugueses por la defensa de sus tierras (2003: 157).

Si las poblaciones indígenas no se han visto inmersas antes en esta espiral de conflictos podría ser igualmente por el desconocimiento legal de los derechos de propiedad y no sólo movidos por unas normas de conducta específicas de dichos grupos étnicos. Si bien es cierto que la huida a los bosques, propia del *Movimiento de la Búsqueda de la Loma Santa*, puede ser considerada una estrategia de resistencia frente al Estado-nación, no debemos incurrir en el error de dar por supuesto que entre estas poblaciones haya prevalecido una actitud pasiva ante la ocupación de territorios hasta finales del siglo XX. La postura de Canedo se refiere más bien a las formas más sutiles mediante las cuales los pueblos indígenas han hecho frente al Estado, lo cual está en la línea de la resistencia cotidiana, magistralmente estudiada por James Scott, sobre las estrategias campesinas de resistencia, las cuales van desde los engaños, hurtos y rumores hasta pequeños incendios (2000).

Algo que es común a todas las comunidades es la convicción que poseen de la necesidad de protegerse ellos mismos ante las amenazas de los ganaderos dado que se sienten vulnerables y desprotegidos por las autoridades competentes.

Hay que mencionar un factor relevante y es que la lucha por la tierra en los diversos países de Latinoamérica y en concreto en Bolivia, estuvo definida durante casi la totalidad del siglo pasado por la participación campesina, en detrimento de la categoría étnica, lo cual no quiere decir que las poblaciones indígenas se mantuviesen al margen. Un claro ejemplo en Mojos lo constituyó la *guayochería*, a la que hacía mención en el capítulo 4.

Independientemente de las estrategias adoptadas por las poblaciones mojeñas, un denominador común presente en los estudios que se han dedicado al análisis de los conflictos en la región de las tierras bajas en Bolivia, es que estos -sin prestar atención a las características de los mismos- han surgido básicamente en el momento en el que el

avance territorial y la expansión por parte de *terceros* hizo que la única solución posible fuese el enfrentamiento entre ambos sectores a causa de la sobreposición de derechos y ocupaciones ilegales.

Los conflictos entre comunidades indígenas y *terceros* constituyen una constante en Mojos, siendo además una de las características definitorias del proceso de saneamiento de tierras. Es bien sabido que el sector ganadero continúa cometiendo irregularidades, a pesar de la serie de procedimientos legales que existen para evitar que sucedan estos hechos. Como consecuencia, las tierras comunales se ven cada vez más reducidas. Tras las visitas a las comunidades se percibe el sentimiento de impotencia frente a las acciones ilícitas de los ganaderos. Los territorios de las comunidades indígenas se ven cada vez más mermados y más cercados por las estancias ganaderas. Un aspecto esencial a tener en cuenta que condiciona todo este proceso es que, el crecimiento vegetativo de las comunidades mojeño-ignacianas va en aumento, por lo que, a medida que la comunidad crezca, requerirá superficies mayores de las que poseen a día de hoy. El problema fundamental es que sin territorios suficientes o con territorios que no sean del todo fértiles o abundantes en recursos naturales (en Monte Grande se lamentan de estar rodeados de “pampitas”, zonas de bajura, que no sirven para el cultivo de chacos) sus condiciones de vida se verán cada vez más afectadas y así lo atestigua el siguiente testimonio²⁸¹:

“Referente a nuestro proceso de saneamiento de tierras yo podría decirle que de las 98 000 hectáreas que es la demanda del territorio mojeño ignaciano, unas 47 000 que se quiere consolidar, casi el 50% es, si nosotros nos ponemos a pensar con nuestros hijos y todo, como está la nueva ley digamos, de distribución de tierras, no alcanza el mínimo de 14 hectáreas por familia y yo creo que eso no es suficiente para el territorio” (entrevista a Julio Sita, corregidor de Villa Esperanza).

Y retomando la cuestión de las relaciones sociales entre los terceros y las comunidades indígenas, indicar que, como bien señalan algunos autores, “a pesar de

²⁸¹ Los chacos familiares se someten a un proceso de rotación cada 4 años aproximadamente, para permitir que la tierra se recupere; la actividad cinegética de la caza requiere igualmente de extensas superficies. A este respecto, los comunarios han podido constatar la reducción del número tanto de piezas como de especies. En las entrevistas realizadas a la población local de Mojos, reconocían que no hace muchos años que contaban con un aporte de proteínas proveniente, principalmente, de la caza de los montes. Actualmente, debido a la reducción de dicha actividad se ven obligados a acudir a los mercados de San Ignacio para comprar alimentos cárnicos. No obstante, la percepción general entre el sector ganadero es que las comunidades indígenas no requieren de superficies tan amplias como las que estos demandan. Curiosamente, los comunarios del TIMI consideran que 5 hectáreas para una vaca son demasiadas, creen que con una hectárea sería suficiente. Este discurso recuerda a aquel otro propio de los ganaderos que no entienden porqué las comunidades indígenas demandan superficies tan amplias de territorio para los escasos rendimientos que obtienen.

los conflictos, la población indígena depende cada vez más de las dinámicas diseñadas por los hacendados y, en la práctica, las comunidades indígenas están completamente rodeadas por propiedades ganaderas” (Urioste y Pachecho D., 2001: 105).

De Vries, en sus reflexiones relacionadas con la problemática a tratar, se refiere a ello de la siguiente manera *“los pueblos indígenas que hasta hace poco vivían en condiciones tradicionales se ven aceleradamente influenciados y en muchos casos avasallados por otros sectores en su crecimiento, cada vez más limitando el acceso a las áreas de uso tradicional”* (1998: 9). Es por esta razón que las comunidades indígenas demandan más territorio para poder desarrollar sus formas de vida. La cuestión es si los ganaderos estarán dispuestos a ceder parte de sus propiedades.

6. 3. 4. 1. Tipología de los conflictos en Mojos.

El INRA distingue 3 tipos de conflictos en el proceso de saneamiento: conflictos por límites político-administrativos; conflictos de acceso a la tierra y conflictos en las demandas de dotación de *Tierras Comunitarias de Origen* y otros actores que habitualmente presentan resistencia (2007: 78).

En base a este último tipo los conflictos surgen entre las TCOs y los *terceros* al ocupar espacios territoriales que se superponen. En la TCO TIMI han existido superposiciones de los títulos de propiedad comunal indígena con las concesiones forestales otorgadas en su día por la Superintendencia Forestal sin tener en cuenta la exclusividad en el manejo forestal de las TCOs. El problema fue que previo a la entrada en vigor de la Ley Forestal existían concesiones forestales que operaron al interior del TIMI y que debían ajustarse al nuevo reglamento jurídico en materia forestal. La ambivalencia tanto de la legislación forestal como de la legislación agraria propició estos conflictos.

Conforme al trabajo de Ismael Guzmán (2004), a continuación se presenta una tipología de los conflictos que han tenido y tienen lugar en Mojos. Estos han sido clasificados en tres categorías distintas:

- **Conflictos de confrontación directa de baja intensidad.** Este tipo de conflictos se produce con gran frecuencia entre las comunidades mojeño-ignacianas y los propietarios de las estancias ganaderas colindantes, debido, fundamentalmente, a la intrusión de una de las partes en las propiedades de la otra. La principal característica de este tipo de conflicto es la bilateralidad por el hecho de verse restringido el mismo a

una disputa entre ambos sectores sin necesidad de intervención por parte de intermediarios externos.

- **Conflictos de confrontación violenta.** Consiste en el uso de la violencia por una de las partes o de ambas. Las acciones más frecuentes serían las peleas, amenazas, quema y destrucción de viviendas, uso de armas de fuego y el emplazamiento de mojones rojos y alambradas. En numerosas ocasiones este tipo de confrontaciones aparece acompañada de acciones judiciales. Se sabe que los ganaderos vallan a menudo superficies que no les corresponden, haciendo caso omiso de la normativa vigente. Por esta razón las disputas de las comunidades indígenas frente a ganaderos (y en ocasiones también con empresas madereras) muchas veces desemboca en enfrentamientos violentos.

- **Conflictos de confrontación judicial.** Esta modalidad ha ido incrementándose en la región, puesto que hasta el comienzo del proceso de saneamiento no era muy común en Mojos recurrir a procedimientos judiciales²⁸². Una de las partes recurre a instancias como el INRA o incluso a la policía, y en raras ocasiones a la Superintendencia Forestal y Agraria o al Juzgado Agrario. Como bien señala Guzmán, la población indígena se siente en numerosas ocasiones desalentada por las respuestas del INRA que o no llegan a tiempo o no les son del todo favorables (2004: 65). Así ocurrió por ejemplo en la comunidad de Nueva Brisa, cuando el INRA departamental de Trinidad les convocó para una fecha concreta con la finalidad de realizar –los técnicos de dicha institución- las pericias de campo correspondientes. Sin embargo, pasado un tiempo aún no habían acudido a la cita (entrevista a Juan Jau, corregidor de Nueva Brisa).

En muchos casos las comunidades solicitan al INRA la reversión de tierras en el caso de que los propietarios de las haciendas no cumplan la *Función Económico Social*²⁸³, caso de Villa Esperanza.

²⁸² La conciliación consiste en un instrumento jurídico de negociación estipulado en la ley INRA, por el que ambas partes deben estar dispuestas a ceder en su postura. Se han atestiguado algunos casos en los que las comunidades indígenas han optado por llevar a cabo la titulación lo antes posible a pesar de que esto signifique perder parte del espacio territorial demandado. El problema es que en la mayoría de los casos los ganaderos no se han presentado para solucionar el conflicto, como ha sucedido en el TIMI (CANEDO, 2009: 233).

²⁸³ Según lo dispuesto en el artículo 401 de la CPE, “*El incumplimiento de la función económica social o la tenencia latifundista de la tierra, serán causales de reversión y la tierra pasará a dominio y propiedad del pueblo boliviano*”. Del mismo modo “*el Estado regulará el mercado de tierras, evitando la acumulación en superficies mayores a las reconocidas por la ley*” (artículo 396). La Constitución igualmente “*prohíbe el latifundio y la doble titulación por ser contrarios al interés colectivo y al desarrollo del país*”, entendiéndose por latifundio “*la tenencia improductiva de la tierra; la tierra que no cumpla la función económica social; la explotación de la tierra que aplica un sistema de servidumbre, semiesclavitud o esclavitud en la relación laboral o la propiedad que sobrepasa la superficie máxima zonificada establecida*

No obstante, se podría añadir una modalidad más y es que se han dado diversos casos en los que dos comunidades mojeño-ignacianas se han visto involucradas en una confrontación por el acceso al territorio comunal de una de ellas con el fin de obtener recursos. Esto ha sucedido por ejemplo entre las comunidades de Bermeo y Villa Esperanza, quienes han solucionado la disputa por medio de la conciliación efectuada por la Subcentral del TIMI (entrevista a Luis Matareco, corregidor de Bermeo).

Si bien es cierto que los conflictos han sido constantes en Mojos, no siempre tiene porqué darse esta situación. Han existido casos en que lo que prima es una relación de reciprocidad (si bien puede ser ésta encubierta para lograr algún beneficio para alguna de las partes). Dicho de otro modo, algunos propietarios de haciendas ganaderas –los menos- permiten a los comunarios acceder a sus propiedades para obtener algunos recursos, a cambio de favores. Para confirmar esta idea podemos acudir al ejemplo de la comunidad de Nueva Brisa en donde existe una especie de acuerdo informal entre los comunarios y uno de los ganaderos, propietario de una de las haciendas colindantes con el territorio de la comunidad. El dueño de esta estancia ganadera permite a los habitantes de Nueva Brisa acceder a sus tierras para cazar u obtener recursos forestales para uso doméstico (nunca para la venta) previo permiso. Así lo atestigua el corregidor de la comunidad:

“Ese tercero que vive aquí en esa propiedad es buena persona porque todo el mundo viene a cazar ahí y no ha dicho nada (...). Hasta estos años que hemos vivido ahí no ha habido problemas (...). De ahí nos proveemos, digamos lo que es para hacer las casas, le pedimos la madera al dueño y él nos lo regala y él nos pregunta, si es para ustedes sáquenla, pero si es para vender hasta ahí no más. Él nos lo regala cuando uno le pide, pero si uno entra también así como le digo a robar, eso es un problema, pero se le consulta con él como dueño” (Entrevista Juan Jau, corregidor de Nueva Brisa).

Sin embargo, si las comunidades se han visto obligadas a entrar en tierras de propietarios privados ha sido por el hecho de verse confinadas en una superficie muy restringida, penetrando en tales propiedades con vistas a obtener recursos para la propia comunidad, como ha ocurrido en el caso de la comunidad ignaciana de Nueva Brisa (entrevista Juan Jau, corregidor de Nueva Brisa).

La buena voluntad de este ganadero no debería ser considerada como una acción generalizada puesto que este acto de generosidad no es común entre los

en la ley. La superficie máxima en ningún caso podrá exceder de cinco mil hectáreas” (artículo 398) <http://www.umsa.bo/umsa/uploads/transparencia/ConstitucionPoliticaDelEstado.pdf>).

estancieros. Está demostrada, más que de sobra, la ausencia de altruismo entre los ganaderos de Mojos.

Otra tipología distingue entre conflictos directos y conflictos derivados (Guzmán I., *et al.*, 2007: 215-217). En la primera categoría son incluidos los procesos judiciales²⁸⁴, la retención de equipos y movilidad en respuesta a la postura parcial de los técnicos del INRA, la orden de desalojo de una comunidad y la penetración de campesinos colonizadores (ambas infrecuentes en el TIMI), el bloqueo de caminos y los conflictos de competencias entre diversas instancias por corresponder a diferentes jurisdicciones. La segunda se refiere a la agresión física y persecución a dirigentes²⁸⁵, la agresión a instituciones de apoyo²⁸⁶ y los Cabildos Abiertos por los que se reúnen las comunidades para tratar la defensa del territorio, entre otras cuestiones.

Nuevamente recurro a la obra de Ismael Guzmán -uno de quienes mejor ha documentado los conflictos en Mojos- para mostrar una tipología referida a la apropiación de tierras comunales que tiene lugar en Mojos por parte de terceros (2004: 62-63):

- **Apropiación forzosa.**
- **Apropiación mediante la exposición de documentos de titulación.**
- **Apropiación mediante el recorrido unilateral de los mojones²⁸⁷ limítrofes.** Esta es otra de las modalidades más comunes en la región.
- **Apropiación mediante relaciones comerciales.**
- **Apropiación mediante permiso temporal.**
- **Apropiación mediante ofertas de compensación.**

La segunda modalidad ha estado muy extendida en Mojos –la cual viene atestiguada por numerosos expedientes (**anexos 7 y 8**)- puesto que los *terceros* se aprovecharon del desconocimiento legal de los indígenas y perpetraron gran cantidad de abusos (véase **mapa 6. 5**). Tras la reforma agraria del año 53 comenzó una ola de

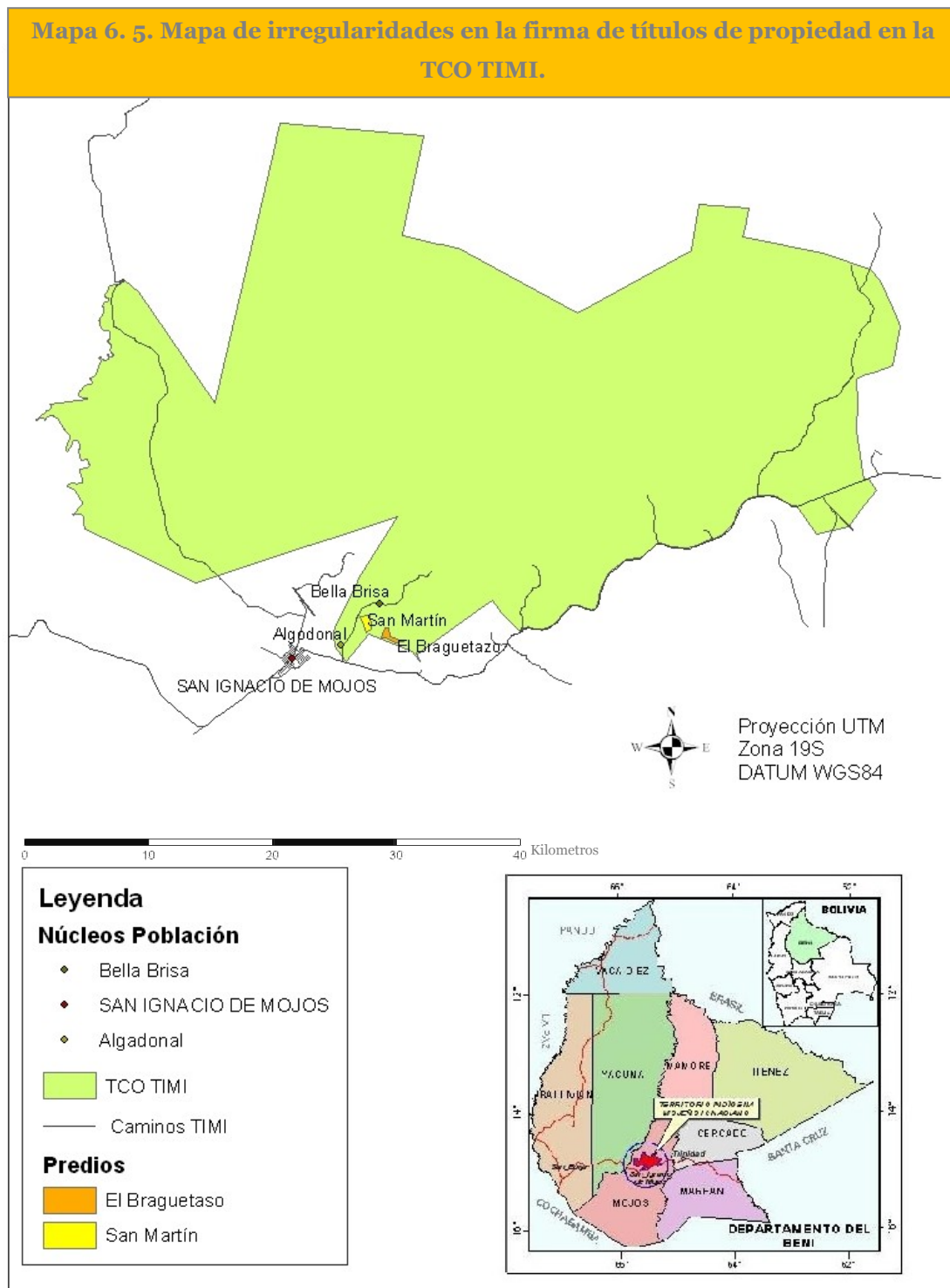
²⁸⁴ Corresponden a “conflictos de confrontación judicial” según la tipología de Guzmán *et al.* Se refieren a todos aquellos procesos judiciales entre terceros y comunarios o técnicos del INRA.

²⁸⁵ Se han producido diversos episodios en relación a esta cuestión. Sixto Vejarano –quien fuera presidente de la Subcentral del TIMI y alcalde del municipio de San Ignacio de Mojos- sufrió agresiones físicas, así como otros personajes como el párroco, Enrique Jordà o dirigentes como Pedro Nuni.

²⁸⁶ El 19 de diciembre de 2003 tuvo lugar el asesinato de Eduardo Abularach, alcalde municipal de San Ignacio de Mojos, perpetrado por uno de los trabajadores de sus estancias, debido a una deuda pendiente entre ambos. Los partidarios de la víctima dirigieron sus acusaciones hacia los técnicos y personal de la ONG CIPCA, así como hacia varios dirigentes de las Sucentrales, entre ellas la Subcentral del TIMI. El día posterior al asesinato, se produjo el destrozo y quema de parte del mobiliario de las oficinas de CIPCA, así como agresiones a aquellos que apoyaban institucionalmente a las comunidades mojeñas.

²⁸⁷ La TCO TIMI, es el territorio indígena del departamento del Beni con más mojones rojos en su interior.

compra de títulos de propiedad por parte de *terceros* a comunidades indígenas, en la mayor parte de los casos de manera ilegal. Los ejemplos de los expedientes, incluidos en los anexos 7 y 8, son enormemente reveladores al demostrar de qué manera se ha falsificado la firma del corregidor del Cabildo de San Ignacio de Mojos en el caso del predio “San Martín” y del predio “Braguetazo”, incluso se explica cómo aparece en el título de propiedad la firma del corregidor hecha, curiosamente, con tinta de un color diferente al resto del documento.



Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo y datos de CPTI.

Tras este pormenorizado análisis de la situación de la tenencia de la tierra en Mojos y los conflictos inherentes a la misma, podemos obtener una amplia panorámica del proceso de saneamiento de tierras y llegar a comprender de manera más nítida la expropiación territorial a la que se han visto expuestas las comunidades mojeño-ignacianas, lo que realmente esto ha significado y la trascendencia que ha tenido para este grupo étnico de la Amazonía boliviana.

6. 3. 4. 2. Estudios de caso: Villa Esperanza, San Miguel del Mátire y El Buri.

Doy paso a ilustrar de manera breve tres conflictos concretos que han tenido lugar en la TCO TIMI en relación a la problemática que venimos tratando (**mapa 6. 7**). La intención es que nos pueda ayudar a entender mejor lo que realmente sucede entre el sector indígena y el sector ganadero en torno a la propiedad de la tierra y de qué manera se formalizan dichos conflictos.

➤ **El caso de Villa Esperanza.** Los predios del “12 de Octubre” y “El Pororo”, con una superficie de 3.000 y 2.800 hectáreas respectivamente, se asientan muy próximos a la comunidad, hasta el punto de invadir las tierras comunales de estos. La primera de ellas no cumple la FES²⁸⁸, presentando además un alto nivel de abandono. Es por dicho motivo que la comunidad redactó, durante el proceso de saneamiento, una carta denunciando esta situación ante el INRA, alegando tales razones así como la intromisión de la estancia en los montes comunales, siendo posteriormente impugnado por el propietario frente al Tribunal Agrario (entrevista a Julio Sita, corregidor de Villa Esperanza).

Con la intención de garantizar la FES, la familia Abad, llevó a cabo un intento de introducir ganado en los predios mencionados por el camino vecinal, frente a lo cual la comunidad de Villa Esperanza se opuso, bloqueando dicho camino. Esto supuso el aliciente para que la familia Abad comenzase un proceso judicial contra el para entonces corregidor de la comunidad -Demetrio Sita-. A pesar de la oposición de los comunarios, el ganado finalmente logró ser introducido por otro camino de una comunidad próxima a Villa Esperanza (Guzmán I., *et al.*, 2007: 215). A día de hoy a la

²⁸⁸ Se refiere a la tenencia improductiva de la tierra y latifundios que sobrepasen la superficie máxima regulada por el Estado, siendo éste el encargado de revertir las tierras, que se convertiría automáticamente en tierras fiscales, las cuales podrían ser otorgadas como propiedades comunales en las TCOs.

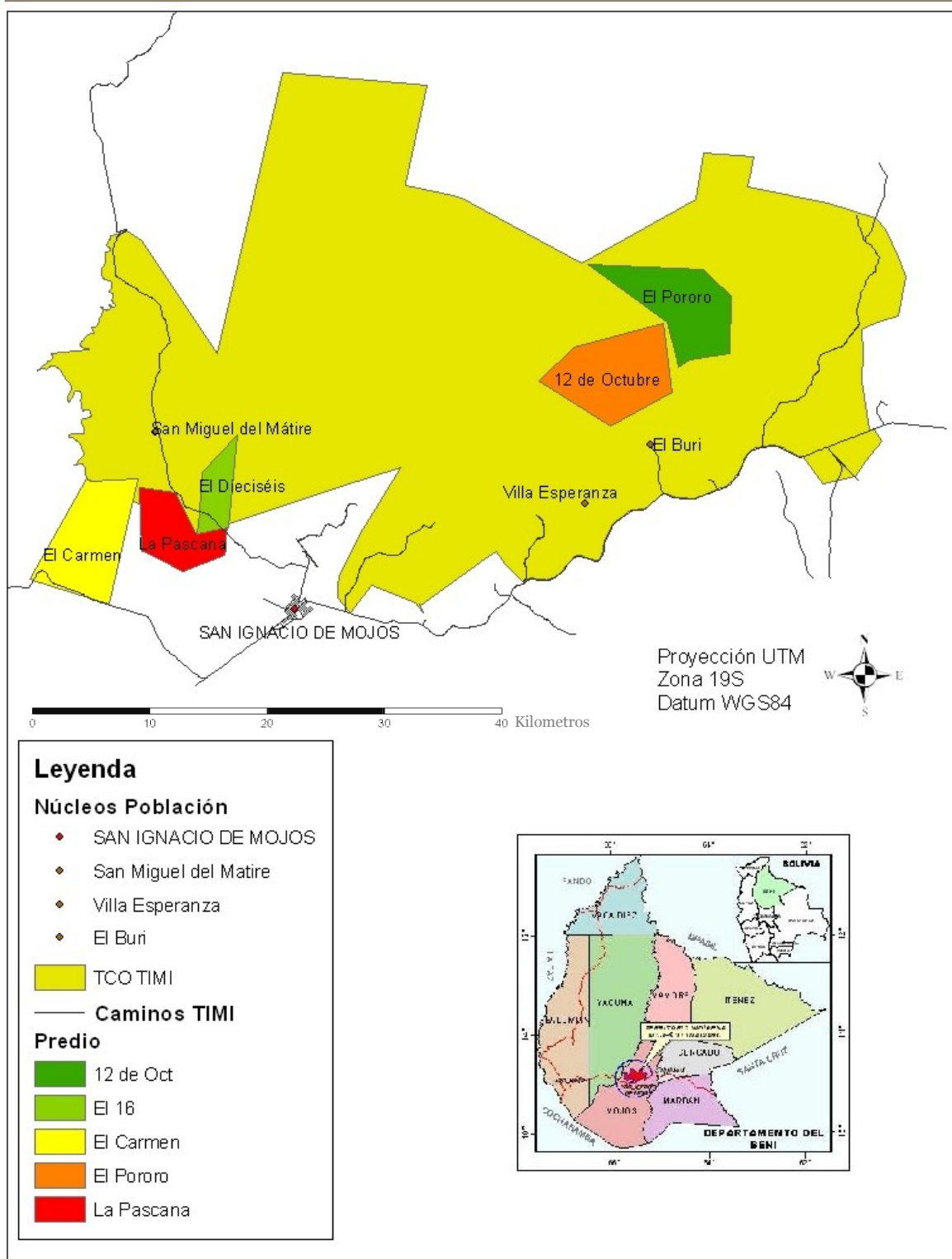
espera están de que el INRA les conceda parte de dichas superficies, las cuales quedarían incorporadas en el territorio comunal de dicha comunidad del TIMI²⁸⁹.

➤ **El caso de San Miguel del Máture.** En esta comunidad ha ocurrido una situación muy similar entre ella y 3 estancias circundantes: “La Pascana”, “El Carmen” y “San Antonio”, entre las que ocupaban una superficie superior a las 2.000 hectáreas. En este caso han logrado una conciliación en dos partes. Frente a la primera de las estancias, la comunidad está intentando incorporar parte de la superficie de ésta (700 hectáreas) a la TCO, puesto que fue adquirida por el propietario de manera negligente, ya que durante una de las etapas del saneamiento correspondiente a las pericias de campo, colocaron mojones rojos y lo hizo valer ante el INRA a pesar de carecer de los títulos de propiedad, con lo que la superficie de dicho predio se vio incrementada (entrevista a Juan Bautista, corregidor San Miguel del Máture).

➤ **El caso del Buri.** Como último caso ilustrativo de los conflictos en Mojos, podemos mencionar el existente entre la comunidad del Buri frente al predio “12 de Octubre”, en el que se logró la conciliación no sin fuertes enfrentamientos previos dado que una vez más el propietario del predio mencionado, pretendió ampliar su estancia mediante la ubicación de mojones rojos, ante lo que los comunarios se opusieron, logrando impedirlo (entrevista a Wilson Rocel, corregidor de El Buri).

²⁸⁹ Al ser una tierra revertida ésta pasa al Estado y se convierte en tierra fiscal, la cual puede ser dotada a las comunidades indígenas y campesinas “*que no las posean o las posean insuficientemente, de acuerdo con una política estatal que atienda a las realidades ecológicas y geográficas, así como a las necesidades poblacionales, sociales, culturales y económicas*” (artículo 395).

Mapa 6. 6. Conflictos TIMI.



Fuente: elaboración propia en base al trabajo de campo y datos de CPTI.

6. 3. 4. 3. Evaluación del proceso de saneamiento de tierras en Mojos. Resultados positivos y negativos.

El proceso de saneamiento de la tierra ha sido evaluado en Mojos desde distintas perspectivas. Cada uno de los sectores implicados lo percibe desde una visión particular. Si nos referimos a las poblaciones indígenas se podrían distinguir varias fases. En un principio, con el anuncio de la promulgación de la legislación agraria, se vivieron momentos enormemente esperanzadores que crearon grandes expectativas, dado que se creyó que el nuevo régimen jurídico supondría la consolidación de los espacios territoriales en los que habían habitado desde siglos atrás y que finalmente serían reconocidos de forma legal para frenar, de esta manera, las constantes usurpaciones en ellos por parte de *terceros*. Tras esta etapa inicial de gran entusiasmo se dio paso a otra nueva fase caracterizada por la decepción al ver cómo la legislación no se cumplía en la manera acordada y se cometían, como consecuencia, numerosas irregularidades. Actualmente, a pesar de que la mencionada sensación de desencanto perdure, reina un escepticismo mezclado con cierta satisfacción puesto al haberse combinado dos factores fundamentales: la titulación de tierras y los conflictos habituales con los *terceros* por el incumplimiento de las disposiciones legales.

Por parte del sector ganadero se podría decir que el denominador común es el resentimiento que alberga por considerar a la Reforma Agraria contraria a sus intereses y beneficiosa exclusivamente para las comunidades indígenas, quienes, en opinión de aquellos, no requieren de tan extensas superficies de tierra en relación al uso y disfrute que hacen de ésta. Los ganaderos insisten en sus quejas en los cambios que se producen en relación a la FES²⁹⁰ y extienden sus demandas a la cuestión del latifundio (ganadero mojeño).

Se podría afirmar que ni los unos ni los otros han quedado satisfechos con el proceso de saneamiento. Desde ambas partes se ha cuestionado la legislación agraria así como los procedimientos jurídicos a seguir. La evaluación por lo tanto, no ha sido favorable excepto para las instancias del gobierno, desde donde se reconoce el importante esfuerzo acometido desde la administración central con el fin de regular el derecho de la propiedad agraria, a pesar de que, como veremos a continuación, reconocen la necesidad de introducir modificaciones en la ley agraria para que ésta sea verdaderamente efectiva y suponga una real redistribución de la tierra. Sin embargo, es cuestionable que los cambios que se han planteado vayan en esa dirección.

²⁹⁰ Argumentan que en los últimos años han sufrido pérdidas en el hato ganadero, principalmente tras las fuertes inundaciones que tuvieron lugar en el departamento del Beni en el 2007, por lo que si cada dos años se verifica el correspondiente hato cabe la posibilidad de que incumplan la FES, cayendo en el riesgo de que sus tierras sean revertidas.

Estudios como el efectuado por la Fundación TIERRA distinguen entre “factores externos” y “factores inherentes” al proceso agrario, que han actuado como determinantes en la evolución de dicho proceso de saneamiento (2005: 50-60). Entre ellos se podrían destacar las diversas irregularidades cometidas en torno a la tierra como la especulación, la venta, transacciones, las relaciones laborales y sociales basadas en el conflicto entre los distintos actores sociales, las diversas modalidades de organizaciones y la consolidación de éstas, la participación de los gobiernos municipales por un lado y los vínculos de los grandes propietarios con las élites nacionales y locales por otro, la participación política de las poblaciones indígenas y campesinas, la insuficiente información sobre la legislación agraria entre dichos sectores, las distintas concepciones de la tierra y el territorio, etcétera (*ibíd.*, 50).

Otros análisis diferencian dos tipos de problemas relacionados con el saneamiento. El primero de ellos correspondería a los problemas estructurales y el segundo a los coyunturales, dividiéndose a su vez ambos en: técnico-jurídicos y socio-políticos. Entre los elementos del primer bloque se encontrarían la lentitud y la carga burocrática características del proceso de saneamiento, las negligencias cometidas por parte de los funcionarios del INRA a la hora de aplicar la ley, el desajuste planificador y la escasa fortaleza de la institución (politizada, controlada y manipulada por las élites dominantes), irregularidades fiscales y jurídicas, la desigual distribución de la tierra, la inexistencia de políticas agrarias, la descoordinación entre el INRA nacional y departamental, etcétera. Entre los problemas coyunturales destacan la corrupción relacionada al tráfico de predios, la justificación de la FES en base a otros predios, la subdivisión de estos, la oferta de tierras fiscales en lugares inaccesibles a comunidades indígenas y campesinas y la escasa credibilidad del INRA (PASOC-CIPCA, 2007: 58-73).

El aspecto que se podría resaltar sin duda del proceso de saneamiento en Mojos, a parte de la consolidación de los territorios indígenas, ha sido la organización del movimiento indígena. Si bien es cierto que la emergencia del movimiento en el oriente boliviano fue, como hemos visto, anterior a la promulgación de la ley INRA, con la entrada en vigor de dicha ley la población mojeña tomó conciencia de la importancia que suponía el organizarse formalmente a la hora de efectuar sus demandas territoriales. Los *Encuentros de Corregidores*, fueron un espacio determinante que indujo el comienzo del proceso de saneamiento de tierras -por medio de presiones-, la organización social y la información necesaria para desarrollar un plan de acción frente al INRA (Guzmán I., *et al.*, 2007: 205).

Hemos visto de la misma manera, los efectos directos que provocaron las movilizaciones sociales y protestas de parte de los pueblos indígenas de Mojos –

pioneros en el planteamiento de demandas territoriales en la región oriental-. Las movilizaciones más visibles han consistido en las *Marchas* como tipo de protesta pacífica, denominador común de todas ellas. Tras el análisis de éstas se puede apreciar que las reivindicaciones se van ampliando y adquiriendo un tono más político. Las demandas se dirigen a la inclusión y participación, a pesar de que en un principio se restringían principalmente a la cuestión territorial. No obstante, esta cuestión en ningún momento queda relegada a un segundo plano puesto que es el eje vertebrador de todas las marchas, constituyendo el elemento en torno al que gira el resto de demandas. Éstas han planteado principalmente el pleno ejercicio de derechos ciudadanos incluidos en la legislación boliviana, así como la modificación y aplicación definitiva de la Ley INRA, encargada en redistribuir la tierra y concluir el proceso de saneamiento en el país. Es cierto que se han logrado avances pero el más importante está vinculado al tema de las autonomías, el cual aún está por ver.

La ferviente participación del movimiento indígena del oriente boliviano -el cual fue emergiendo o resurgiendo, según se considere²⁹¹- estuvo estrechamente vinculada con el proceso de titulación de tierras. Ambos corrieron parejos y al mismo tiempo el proceso de saneamiento sirvió de trampolín al movimiento indígena, el cual fue impulsado por la situación inadmisible de ilegalidad y corrupción a la que se había llegado en el agro boliviano.

A parte del fortalecimiento y empoderamiento de las poblaciones indígenas²⁹², otros aspectos a tener en cuenta fueron el trabajo conjunto que se desarrolló con otros sectores sociales vinculados a las cuestiones agrarias, movimientos sociales de otro signo, la presencia de la CPEM-B en la agenda regional y nacional en materia agraria, la capacidad de exhortar a diversas instituciones de derechos humanos, medios de comunicación (o intelectuales) etcétera (Guzmán I. *et al.*, 2007: 28).

Pero sin duda, no se puede dejar de mencionar dos factores primordiales en relación al tema que estamos tratando. Por un lado cabe destacar la enorme importancia que adquiere la dimensión territorial en la construcción identitaria del

²⁹¹ Para un análisis más detallado de los movimientos indígenas en tierras bajas, me remito nuevamente a los estudios de la socióloga Zulema Lehm.

²⁹² Este fenómeno se debe en gran parte a la labor que han realizado algunas instituciones de San Ignacio de Mojos, como es el ejemplo de CIPCA, desde donde se han puesto en marcha talleres de capacitación y empoderamiento a nivel político entre los comunarios mojeños. Gracias a ello, estos han tomado conciencia de la problemática territorial. De esta manera, además de orientar sus acciones hacia el área económica y productiva, las acciones de CIPCA se dirigen también al fortalecimiento de las organizaciones indígenas con el fin de capacitar a éstas ante los desafíos que se plantean día a día en relación a las luchas territoriales, entre otras cosas. Desde CIPCA, CEJIS y la Pastoral Indígena del Vicariato del Beni, se habilitó un importante número de dirigentes indígenas (en el caso del TIMI concretamente 20) como técnicos de campo, quienes se convirtieron en Técnicos de Tierra y Territorio, personal capacitado para enfrentarse a cuestiones topográficas y de sobreposición de límites territoriales en la fase de las pericias de campo (Guzmán I., *et al.*, 2007: 205).

pueblo mojeño. El movimiento indígena en Mojos, genera un sentimiento de pertenencia a un espacio, a un lugar. Se construye la identidad mojeña ligada a la componente territorial. Los grupos étnicos de Mojos tomaron conciencia de la importancia que suponía la consolidación territorial y lo utilizaron como elemento estructurador del movimiento y como elemento canalizador de las demandas ante el Estado.

Por otro lado hay que señalar la proyección política adquirida por parte de algunos líderes indígenas hacia los espacios de poder político. El caso de San Ignacio de Mojos se ha convertido en una referencia paradigmática puesto que en el año 2004 un indígena (Sixto Vejarano) se convirtió en alcalde del municipio, logrando transformar una estructura política que había sido históricamente vetada a la población indígena. A pesar de la corta experiencia en el cargo, en el año 2010, de nuevo un indígena (Basilio Nolvani) pasó a ocupar el cargo de alcalde municipal, confirmando la validez de estos a la hora de acceder a posiciones de poder y a la toma de decisiones relativas a políticas públicas.

Si bien es cierto que esta realidad aparece empañada por otra no tan positiva para las bases del movimiento, como es el cambio de discurso que han adoptado algunos de estos líderes al ser cooptados por las altas esferas del gobierno. Estos han pasado a formar parte de las filas de diputados del MAS y como consecuencia han asimilado un discurso que no siempre coincide con los presupuestos que defendieron en un principio. Es común encontrar actualmente opiniones no del todo favorables entre los comunarios ignacianos, quienes en algunas ocasiones llegan a lanzar duras críticas contra sus representantes por las incoherencias de los argumentos manejados tras haberse visto favorecidos en parte por sus cargos.

Otra serie de mejoras notorias son constatadas a través de las cifras concernientes a la titulación de las TCOs y en particular a la TCO TIMI. Durante los últimos años se ha logrado la concesión de un importante número de hectáreas, aunque habría que recalcar que éstas se consideran por parte del movimiento indígena insuficientes para lograr un verdadero desarrollo de sus sistemas de producción y reproducción, para lo que sería necesario el acceso a amplios espacios, lo cual supondría un territorio superior al que ha sido titulado. A pesar de esto, el balance positivo para los mojeño-ignacianos se refiere al casi 50% de consolidación del área demandada, aunque sea enormemente inferior a lo que se buscaba. El aspecto más importante es el hecho de haber conseguido revertir la situación de privilegio que caracterizaba a la tenencia de la tierra en el oriente boliviano, al haberse convertido los comunarios ignacianos legalmente en los dueños de los territorios, con títulos de propiedad comunal.

Todo el conjunto de irregularidades mencionadas, desestabilizó al movimiento mojeño, sobre el que se hizo mella. El consentimiento característico de la actitud conciliadora de las poblaciones indígenas de Mojos frente a las acciones fraudulentas realizadas por los funcionarios del INRA, actuó en detrimento de la imagen de los dirigentes del movimiento indígena mojeño, haciendo que estos perdiesen la credibilidad que un día alcanzaron. Aún a sabiendas de que se cometieron graves negligencias, la organización indígena no procedió a tomar medidas dirigidas a la reversión de dichas acciones con lo que las irregularidades continuaron (Guzmán I., *et al.*, 2007: 212-213).

Por parte de los *terceros* las acciones más reprobables fueron en primer término el incumplimiento de las resoluciones de inmovilización, etapa en la que según dicta la ley, ninguna persona tiene el derecho a intervenir en las áreas inmovilizadas hasta que no se haya alcanzado la regulación del derecho de propiedad. Sin embargo, los ganaderos de Mojos, como señala la obra de Guzmán, quebrantaron la ley realizando mejoras con la intención de cumplir posteriormente la FES, cambiaron los mojones de lugar, vendieron parcelas, etcétera (*ibíd.*, 206).

Relacionado con esto último aparece la problemática referida a la ubicación de los mojones rojos. Con respecto a esta cuestión tiene mucho que ver el hecho de que en la fase de las pericias de campo la información recogida era facilitada por los *terceros*, siendo la que contaba en la evaluación técnica jurídica. En el caso de que se diesen conflictos entre comunidades y *terceros*, los técnicos del INRA colocaban los mojones en el lugar indicado por estos últimos, lo cual llevaba a la ampliación de sus propiedades, las cuales se veían consolidadas, en detrimento de la áreas comunales (*ibíd.*, 209-212). El caso del predio de “Santa Cruz” frente a la comunidad “Argentina”, es un buen ejemplo de ello. Guzmán demuestra además de qué manera ocurrió esto en las comunidades de San Miguel del Mátire, Santa Anita del Mátire e Ichasi Awásare pertenecientes todas ellas al TIMI, “*donde este criterio nocivo de colocar el mojón rojo donde señalaba el tercero, dejó incluso al área de asentamiento de la comunidad como parte de la propiedad del tercero*” (*ibíd.*, 211).

Otros expertos como Oliver Vaca, técnico agroforestal de CIPCA, han estudiado los efectos de “*la conversión de bosques en pastizales por parte de terceros*”, la cual se piensa sea “*la más extensa e intensiva de la historia de Mojos*”. Asimismo se indica que “*en la Provincia de Mojos, ente los años 2004 y 2005, se deforestó una superficie total de 2.972 hectáreas, constituyéndose en la cuarta provincia con mayor superficie deforestada en ese lapso de tiempo*” (cit. en Guzmán I., *et al.*, 2007: 206).

Por último cabe mencionar otros factores que han influido en dificultar el proceso de saneamiento como son el desconocimiento de la legislación agraria y de los derechos vinculados a la propiedad y tenencia de la tierra por parte de los ignacianos.

6. 4. LOGROS Y AVANCES CONSEGUIDOS TRAS LEY INRA.

La titulación de tierras a favor de los pueblos indígenas del oriente boliviano es ya de por sí un logro que puede contribuir a modificar la estructura agraria en la región aunque quede mucho camino por recorrer. Sólo de esta manera se podrá poner freno a la expansión del sector ganadero y a la explotación irracional de recursos naturales. En Santa Rita expusieron lo siguiente:

“Si entra un colla a una comunidad no se les saca ni con fuego, porque el colla puede, porque se va a los últimos rincones de la sede de gobierno y puede con todo, nosotros, los cambas nos conformamos con poco pero otra gente trata de ocupar todo y mientras no esté titulado puede entrar todo el mundo y nosotros que estamos cuidando de esas tierras llegan de fueran y hacen un destrozo tremendo y por más que les digamos no podemos hacer nada. Titular es la única solución para que el de afuera no entre” (discusión grupal).

Uno de los éxitos alcanzados más sobresalientes es el reconocimiento de la seguridad jurídica que entraña la creación de la figura legal de las TCOs, ajustándose de esta manera a lo estipulado en el Convenio 169 de la OIT.

Cuadro 6. 8. Superficies tituladas en la modalidad SAN-TCO a 10 años de la Ley INRA.

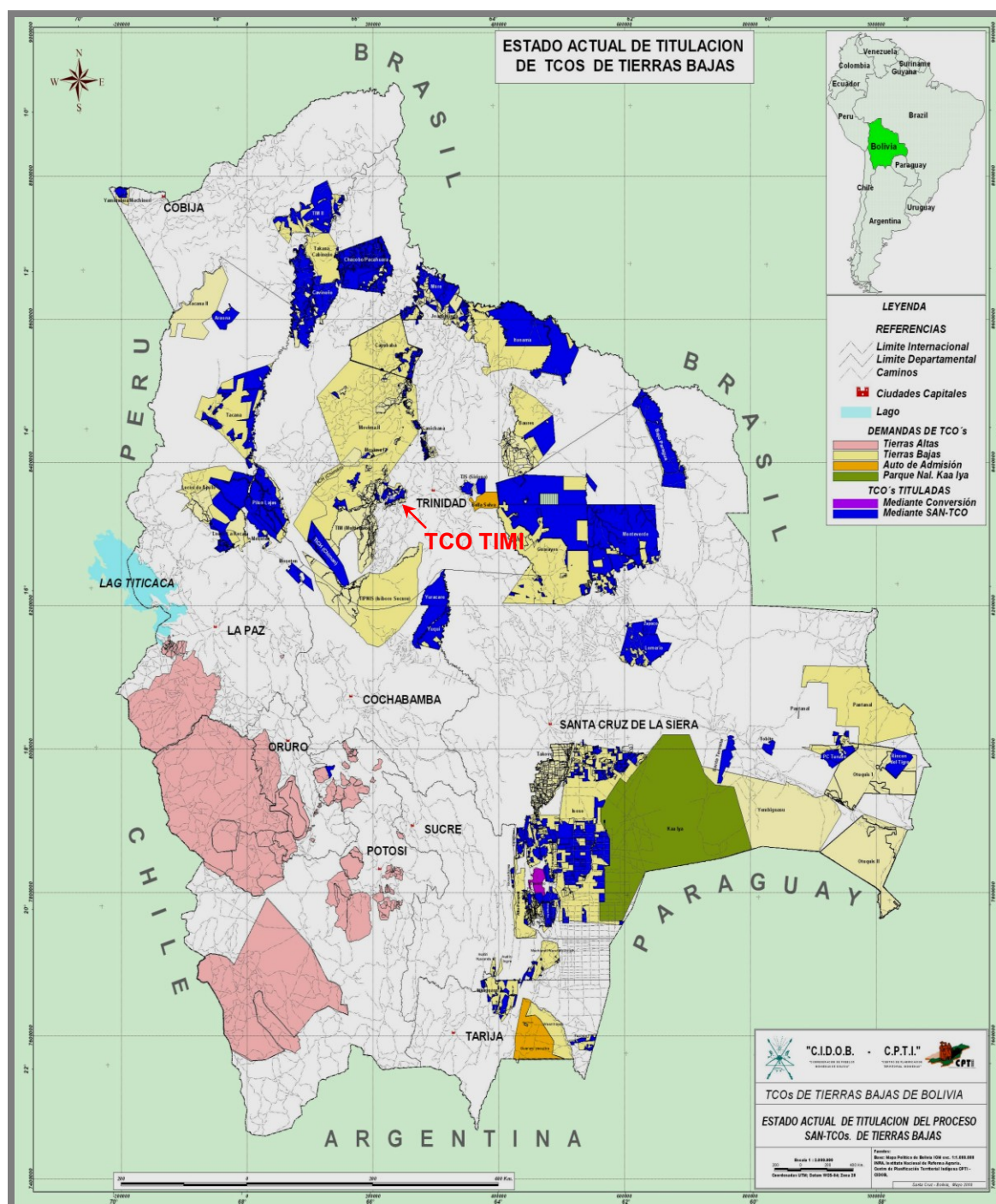
| Departamento | Títulos | Superficie (has.) |
|--------------|------------|-------------------|
| Beni | 122 | 2.170.470 |
| Chuquisaca | 166 | 198.901 |
| Cochabamba | 17 | 426.662 |
| La Paz | 73 | 559.065 |
| Oruro | 11 | 144.170 |
| Pando | 31 | 529.754 |
| Potosí | 50 | 554.172 |
| Santa Cruz | 273 | 2.974.896 |
| Tarija | 33 | 111.675 |
| Total | 776 | 7.669.769 |

Fuente: Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente, Viceministerio de Tierras e Instituto Nacional de Reforma Agraria, 2007: 26.

El cuadro anterior muestra la superficie titulada por la modalidad de SAN-TCO en cada uno de los departamentos de Bolivia y nos permite apreciar que el Beni junto con Santa Cruz, que encabeza la lista, son los departamentos con mayor superficie titulada a favor de pueblos indígenas. No obstante, a 10 años de la Ley INRA, la TCO TIMI se encontraba inmersa en el proceso de saneamiento, por lo que la superficie que aquí representa el Beni no la incluye.

El mapa que aparece a continuación nos da una visión del proceso de saneamiento del país hasta el 2006.

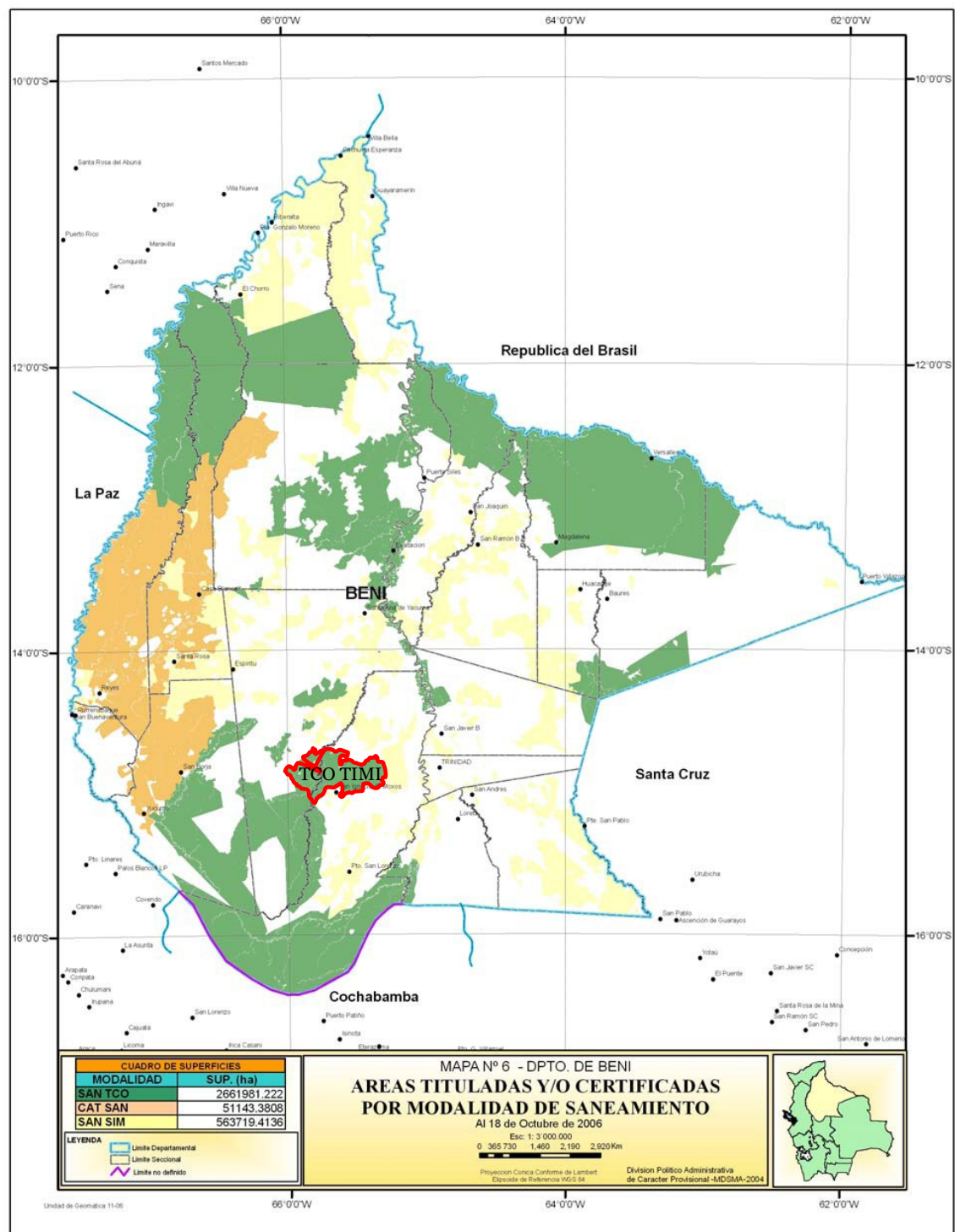
Mapa 6. 7. Titulación de TCOs en las Tierras Bajas de Bolivia.



Fuente: CPTI.

Chumacero señala como otro de los avances en cuanto a la distribución de tierras en Bolivia el hecho de que el texto constitucional limite la propiedad agrícola y ganadera a 5 mil hectáreas (2010: 14), lo cual supone un cambio sustancial para la cuestión agraria.

Mapa 6. 8. Áreas tituladas en el Beni por modalidad

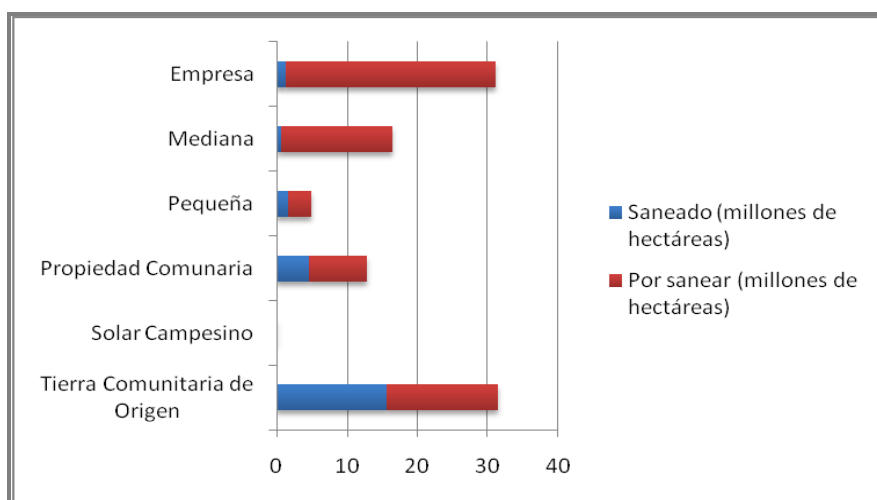


Fuente: Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente, Viceministerio de Tierras e Instituto Nacional de Reforma Agraria, 2007: 141.

En el mapa anterior aparece la TCO TIMI que corresponde a una tierra comunitaria titulada por medio de la modalidad SAN-TCO.

Las conquistas sociales logradas por el movimiento indígena en Mojos se pueden hacer extensibles al conjunto nacional. Tanto la ley INRA como la posterior *Ley de Reconducción Comunitaria* fueron el resultado de incesantes luchas por el reconocimiento y garantía de los territorios comunitarios indígenas. Uno de los resultados más significativos del proceso de saneamiento ha sido entonces la titulación de más de 15 millones de hectáreas de los casi 32 millones, lo cual supone un avance del 49,5% de las tierras demandadas por los pueblos indígenas en Bolivia (**gráfico 6. 3**).

Gráfico 6. 3. Avance del saneamiento según estructura de tenencia de la tierra por tipos de propiedad.



Fuente: Chumacero, 2010a: 25 en base a INRA, 2009.

Si nos fijamos en el gráfico superior detectamos un problema crucial y es que para la mediana propiedad pero sobre todo para la empresa agropecuaria apenas sí se han saneado las propiedades. Sobre esta última y en base al gráfico anterior cabe mencionar que de los 31.100.000 de hectáreas sólo se ha avanzado en el saneamiento lo correspondiente a un 4,3%, es decir, 1.300.000 hectáreas mientras que para la mediana propiedad de los 16.500.000 de hectáreas sólo se habría saneado 700.000 o lo que viene a ser lo mismo, un 4,5%. Esta información corrobora una vez más la desigualdad en el acceso y la distribución de la tierra como el mayor problema del agro en el país y en particular del proceso de saneamiento. En esto tiene que ver las trabas puestas por los *terceros* a dicho proceso alegando que tanto la Ley INRA como la *Ley de Reconducción Comunitaria* no les favorece incluso que atenta contras los derechos de la propiedad privada, lo que explica su oposición (Chumacero, 2010a: 25).

Aquellos quienes consideran a los pueblos indígenas como los grandes beneficiarios del proceso de saneamiento se apoyan en los datos que aparecen a continuación: desde la entrada en vigor de la Ley INRA, las TCOs han sido las que más

superficie de tierra han consolidado al encontrarse un alto porcentaje de sus superficies en proceso de saneamiento. El siguiente cuadro así lo demuestra, llegando al 70% de superficie de tierra saneada.

Cuadro 6.9. Tierra saneada y certificada según tipo de propiedad en Bolivia, 1996-2009 (en hectáreas).

| Clasificación | Periodo 1996-2005 | Periodo 2006-2009 | Total |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Empresa | 921.170 | 418.860 | 1.340.030 |
| Mediana | 309.250 | 427.300 | 736.550 |
| Pequeña | 707.710 | 1.036.010 | 1.743.720 |
| Solar Campesino | 150 | 540 | 680 |
| Propiedad Comunitaria | 1.514.310 | 3.095.220 | 4.609.530 |
| Tierra Comunitaria de Origen | 5.762.060 | 9.801.060 | 15.563.120 |
| Tierra Fiscal | 106.890 | 13.634.210 | 13.741.100 |
| Total | 9.321.540 | 28.413.210 | 37.734.730 |

Fuente: Chumacero, 2010a: 14 en base a la información de INRA, 2009.

Según los datos oficiales, a octubre de 2009 se habían saneado algo más de 37 millones de hectáreas que correspondería al 35% de la superficie susceptible de ser saneada y el 12,5% del territorio estaría aún por sanear, es decir, más de 13 millones de hectáreas de suelo.

El saneamiento de tierras se ha hecho de manera regular en el conjunto de los departamentos, excepto en el Pando en donde se ha concluido el proceso y en los departamentos de Potosí y Tarija donde no ha superado el 20% de sus superficies respectivas.

Con respecto al saneamiento de tierras a favor de las TCOs hay que añadir un dato y es que desde el año 1996 se han titulado 149 *Tierras Comunitarias de Origen* en todo el país o lo equivalente a 15,5 millones de hectáreas (Chumacero, 2010a: 19).

Un desafío de la actual gestión de gobierno es iniciar nuevos procesos de saneamiento dado que, como ya mencionaba, lo que se ha hecho hasta el momento ha sido más bien concluir los ya iniciados por anteriores gobiernos.

Cuadro 6. 10. Estado de saneamiento de tierras en Bolivia hasta 2009 (en hectáreas).

| Departamento | Superficie objeto de saneamiento | Periodo 1996-2009 | % Nacional |
|--------------|----------------------------------|-------------------|--------------|
| Chuquisaca | 5.102.845 | 1.57.990 | 30,5% |
| La Paz | 12.845.006 | 4.552.878 | 35,4% |
| Cochabamba | 5.486.169 | 1.415.757 | 25,8% |
| Oruro | 5.009.697 | 1.804.711 | 36,0% |
| Potosí | 10.570.658 | 1.921.357 | 18,2% |
| Tarija | 3.713.301 | 469.090 | 12,6% |
| Santa Cruz | 36.808.222 | 13.564.656 | 36,9% |
| Beni | 20.907.197 | 6.139.664 | 29,4% |
| Pando | 6.308.625 | 6.308.626 | 100,0% |
| Total | 106.751.723 | 37.734.728 | 35,3% |
| % | 100,0% | 35,3% | |

Fuente: *ibíd.*

Según el informe de Juan Carlos Rojas -actual presidente del INRA- sobre el estado del proceso de saneamiento a 10 años de la Ley 1715, para octubre de 2006 se habrían saneado en el departamento del Beni 2.445.808 hectáreas (s/f: 5) mientras que de acuerdo con el anterior cuadro para el año 2009 esta cifra se incrementaría hasta alcanzar más de 6 millones, y a día de hoy sabemos que se da un mayor aumento, al menos si incluimos la titulación de la TCO TIMI.

Sin embargo, a pesar del reconocido progreso en esta línea, los resultados no fueron los esperados. La falta de seguridad jurídica en materia agraria y la cuestionable gestión de las instituciones responsables está aún latente. La evaluación del proceso no es de carácter positivo, como veremos a continuación.

6. 5. LAS DIFICULTADES DEL PROCESO DE SANEAMIENTO.

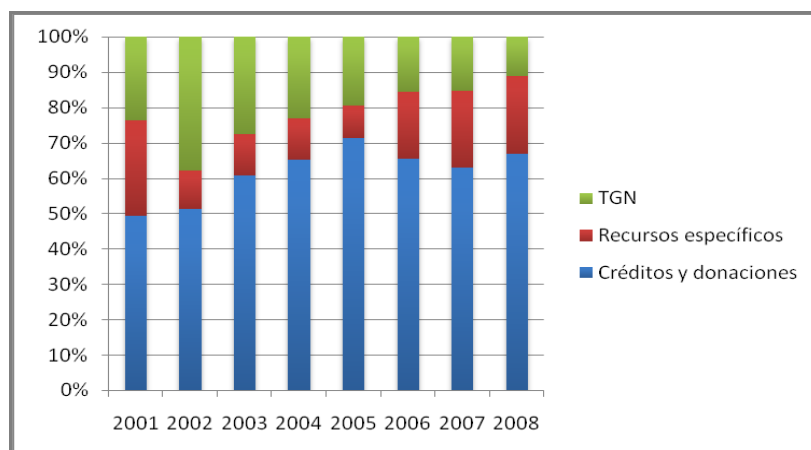
Las limitaciones del proceso de saneamiento de tierras en Bolivia conforman una larga lista de negligencias, arbitrariedades, irregularidades y engaños que ha sido superada sólo en parte y con gran esfuerzo.

Algunos autores señalan que uno de los motivos más importantes que impidieron la conclusión del proceso de saneamiento en el periodo establecido inicialmente, fue la carencia de recursos económicos suficientes para sustentar el proceso agrario (Vargas R., 2003).

Existe una carencia de recursos efectivos para la protección legal de los territorios. La cuestión de la financiación del proceso de saneamiento supone un grave problema dado que está sujeta y por tanto condicionada, a la cooperación internacional²⁹³. En efecto, los donantes externos han permitido financiar *ad hoc* el proceso de saneamiento de alrededor del 60% de las TCOs²⁹⁴ (Chumacero, 2010a: 29). El problema del financiamiento se traduce en que ni el Estado ni las propias comunidades indígenas pueden sufragar los costos del saneamiento de TCOs, lo cual obliga a la dependencia hacia los aportes de la cooperación internacional.

En relación al presupuesto del que dispone el INRA, Chumacero advierte del estancamiento relativo del gasto de la institución en relación al presupuesto de la nación, pasando de un 0,25% en el 2002 a un 0,10% en el 2008 a medida que se incrementa la dependencia hacia la cooperación internacional (2010a: 29-30) (véase **gráfico 6. 4**). Esta tendencia nos indica el escaso interés por la reforma agraria en el país, la cual será enormemente difícil de concluir sin un incremento presupuestario.

Gráfico 6. 4. Presupuesto anual del INRA en porcentajes (2001-2008).



Fuente: Chumacero, 2010a: 31.

El presupuesto asignado por el *Tesoro General de la Nación* (TGN) para el año 2001 fue de 2.134.144 dólares viéndose reducido en el año 2008 a 1.700.726 dólares, coincidiendo el descenso con la llegada al poder de Evo Morales. Estos datos se

²⁹³ Un informe elaborado por Gustavo Pedraza sobre el saneamiento de las TCOs en Bolivia, incluye algunas experiencias previas a la Ley INRA y explica concretamente el proyecto puesto en marcha por la cooperación alemana que en la década de los 80 diseñó un plan para proteger los recursos naturales en el departamento de Santa Cruz, denominado como “Subproyecto de Apoyo a la Delimitación y Consolidación de Comunidades y Áreas Especiales Indígenas” destinado al saneamiento de dicho departamento, donde se realizó además un “estudio para determinar la situación socioeconómica y territorial de los pueblos indígenas” (2006, en http://www.ftierra.org/ft/index.php?option=com_content&view=article&id=882:rair&catid=130:ft&Itemid=188).

²⁹⁴ Financiadas por la *Agencia Danesa de Cooperación al Desarrollo* (DANINA).

contrarrestaron gracias a los recursos específicos que si para el año 2001 eran de 2.446.575 dólares se incrementaron hasta alcanzar los 3.330.880 dólares en 2008. La misma tendencia alcista presentan los créditos y donaciones que en el 2001 suponían un presupuesto de 4.460.655 dólares, ascendiendo para el año 2008 hasta la cifra de 10.171.511 dólares. Haciendo un cómputo global entre las 3 fuentes de financiación para el proceso de saneamiento, el total presupuestario en el año 2001 fue de 9.041.375 dólares llegando a los 15.203.118 dólares en el 2008 (Chumacero, 2010a: 31). De ese total, la cooperación internacional ha sido la que más ha aportado, un 62,2% de media en dicho periodo.

El hecho de no haber logrado consolidar un porcentaje de superficie territorial mayor, ha sido la principal batalla perdida por parte del movimiento indígena mojeño. A pesar del compromiso, por parte del INRA, de sanear todas las propiedades del país en un plazo no superior a 10 años, la lentitud que ha caracterizado el largo proceso de saneamiento, ha impedido que dicha promesa se vea cumplida a día de hoy, constituyendo una de las mayores preocupaciones entre las comunidades indígenas de Mojos. Como consecuencia, ha brotado un sentimiento de frustración y descontento generalizado entre los comunarios ignacianos. Éste se debe en gran parte a una combinación de elementos: los resultados tangibles no han sido los esperados por la no siempre correcta actuación de los funcionarios del INRA y la actitud de algunos dirigentes de la Subcentral que se han acomodado en sus cargos. Esta última es una de las quejas más frecuentes en estos momentos.

Las críticas hacia el INRA han llegado desde las propias comunidades, desde las Subcentrales Indígenas, instituciones de apoyo a los pueblos indígenas, expertos encargados en la investigación de este proceso, etcétera. Desde esta plataforma se ha cuestionado tanto la incompetencia de los funcionarios de esta institución (se les ha acusado de cometer negligencias y doblegarse ante las peticiones de empresas ganaderas y forestales) como la lentitud, desde el punto de vista burocrático, del proceso de titulación.

Se ha producido además cierta incoherencia legislativa en materia agraria. El solapamiento de competencias ha constituido un obstáculo para el correcto proceso de distribución de tierras.

La debilidad institucional del INRA ha sido otro elemento en contra del proceso de saneamiento. Los episodios vividos en algunas sedes como Santa Cruz o Trinidad, con quema de documentos por parte de los *terceros*, así lo confirman. Todo lo cual hace mella en la eficiencia y capacidad de la propia institución que pese a los esfuerzos acometidos por el gobierno actual no ha logrado revertir la situación de la tenencia de

la tierra en el oriente boliviano donde está siendo complicado aplicar la *Ley de Reconducción Comunitaria*.

Las negligencias cometidas desde el INRA en los procedimientos técnicos del saneamiento se han ido sucediendo desde el comienzo del proceso. El nuevo marco legal que supuso la ley INRA careció de la inversión necesaria para poner en marcha todo el engranaje que requería la regulación de la propiedad de la tierra en Bolivia. Es de sobra conocida entre la opinión pública de país, la corrupción llevada a cabo por los técnicos del INRA a la hora de tramitar expedientes, sanear tierras, titular propiedades, ubicar los mojones rojos, etcétera. Estas son sólo algunas de las acciones más comunes de la primera etapa. Como consecuencia de dichos procedimientos efectuados al margen de la legalidad, las presiones y críticas dirigidas hacia esta institución se sucedieron a lo largo y ancho del país. Aún a día de hoy prevalece un sentimiento de desconfianza entre las poblaciones involucradas en procesos de saneamiento, no sólo hacia los funcionarios del INRA sino entre ellos mismos en el caso de que sean requeridos para explicar cómo fue el proceso²⁹⁵.

De igual manera fueron incumplidos algunos plazos establecidos por la institución agraria concernientes a las etapas de evaluación del proceso. Algunos comunarios se lamentan del retraso con el que los técnicos acuden a las comunidades para delimitar las propiedades. A esto hay que sumarle la resistencia mostrada por parte del sector ganadero, quienes procuran por todos los medios retardar el proceso lo máximo posible. El hecho de alargar los plazos es una baza que los ganaderos juegan de manera exitosa puesto que de esta forma ganan tiempo para poder efectuar los trámites necesarios y hacer cumplir así la FES²⁹⁶, habiendo constituido uno de los fenómenos más fraudulentos. Las élites económicas y políticas dominantes han recurrido al establecimiento de redes de solidaridades y reciprocidades entre sí, lo que provoca el encallamiento en las esferas de poder, lo cual les favorece al actuar en su propio beneficio. Los conflictos, los ataques y las agresiones físicas entre los sectores involucrados en el proceso se ven incrementados a consecuencia de toda esta serie de elementos. Como exponente máximo se puede mencionar el ataque a la sede de las oficinas de CIPCA en San Ignacio de Mojos o la quema de documentos en las oficinas de INRA.

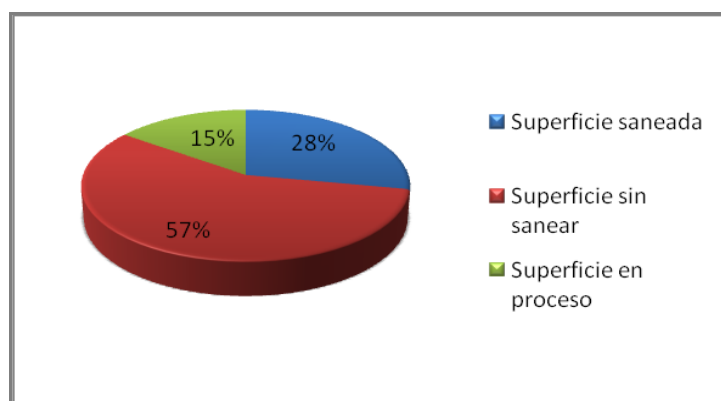
A diez años de la entrada en vigor de la Ley 1715 aún debía sanearse más de la mitad de la superficie agraria del país, correspondiente a más de 60 millones de hectáreas mientras que casi 35 millones de hectáreas han sido saneadas 10 años

²⁹⁵ Para este trabajo en particular, ya comenté en el anterior capítulo, las reticencias del director del INRA- Beni, a la hora de facilitar información relativa al proceso de saneamiento del TIMI.

²⁹⁶ El fenómeno de las “vacas turistas”. En San Ignacio de Mojos se han llegado a contabilizar en una única estancia ganadera 17 razas diferentes de vacas (Fundación TIERRA, 2005: 52).

después de la aplicación del nuevo régimen agrario, estando aún en proceso de saneamiento en torno a 15 millones de hectáreas (véase **gráfico 6. 5**). Los resultados por tanto no fueron los esperados. Esto provocó el desánimo principalmente entre poblaciones *originarias* y campesinas que veían en el saneamiento una oportunidad para consolidar sus derechos sobre la propiedad de la tierra. Aunque si atendemos uno de los últimos informes del INRA se estima que la superficie saneada hasta marzo de 2011 correspondería a 45.606.008 hectáreas (10 millones más que la cifra anterior) (2011: 2).

Gráfico 6. 5. Superficie en estado de saneamiento 1996-2007.



Fuente: elaboración propia en base a los datos de INRA, 2008: 129.

6. 6. INTENTOS DE RECONDUCCIÓN DE LA REFORMA AGRARIA. NUEVOS INSTRUMENTOS LEGALES.

Algunos autores consideran que uno de los peores resultados de la Reforma Agraria en Bolivia fue la consolidación del “neolatifundio” (Urioste, 2003). Coinciden en que con el fin de reorientar la política nacional de desarrollo agrario se requiere mayor flexibilidad en cuanto a los procedimientos legales y la incorporación de medidas de control que resuelvan los problemas pendientes y que concedan una nueva credibilidad a las instituciones encargadas del proceso agrario.

Con la intención de corregir los errores cometidos desde la entrada en vigor de la ley INRA y los vacíos legales y contradicciones de la anterior ley agraria, el 28 de noviembre de 2006 fue promulgada la *Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria* -Ley nº 3545-, modificatoria de la *Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria*, debido a que la inequidad en el acceso a la propiedad de la tierra era un tema aún pendiente en la agenda nacional del país. Es por dicha razón que el INRA puso en marcha el *Plan Estratégico Nacional de Saneamiento y Titulación de Tierras*

2007-2013 (PENSAT), buscando una política agraria “*más consistente, eficiente y transparente*” (INRA, 2008: 115). La Ley n° 3545 amplió por tanto 7 años más el plazo en el que vencía el saneamiento, que en un principio se acordó que fuera de 10 años (hasta el 2006).

La Ley n° 3545, tiene como objetivo principal “*modificar e incorporar nuevas disposiciones a la ley N° 1715*” (artículo 1)²⁹⁷, más conocida como ley INRA. Esta ley incide además en la importancia del cumplimiento de la FES y la consecuente reversión de tierras a campesinos e indígenas, en caso de que ésta no se verifique, así como la redistribución de tierras fiscales²⁹⁸. Pese a la buena voluntad, a día de hoy muy poco se ha avanzado en la reversión de tierras. Esto se debe en buena medida a la propuesta efectuada por la Asamblea Constitucional de 2006 de reducir a un máximo de entre 5.000 y 10.000 hectáreas la propiedad agraria en un futuro, lo cual supone un freno para el intento de eliminar el latifundio en el país (Chumacero, 2010a: 28-29). En base a un informe referente a la reversión de la tierra elaborado por INRA, poco más de 690 hectáreas han sido recortadas a *terceros* para ser redistribuidas a TCOs, habiendo recibido éstas un total de 422.123 hectáreas (2011: 5) lo cual no es una cifra muy optimista. Me atrevo a afirmar que no se han alcanzado resultados contundentes en lo que se refiere a la reversión de tierras por el incumplimiento de la FES. En efecto, apenas existe información sobre propiedades revertidas por el incumplimiento de ésta, lo cual cuestiona la eficacia de tal herramienta.

De suma relevancia es la disposición final décimo primera que señala que “*el Estado apoyará técnica y económicamente a las comunidades campesinas, indígenas y originarias, beneficiadas con dotación de tierras fiscales, para el efectivo desarrollo de sus potencialidades productivas, conforme al uso sostenible de la tierra (...)*”. Es por ello y por la voluntad de concluir los procesos judiciales en materia agraria, que desde la autoridad estatal se manifiesta un reconocido fracaso de la antigua ley INRA y la necesidad expresa en reconducir el proceso de saneamiento. El *Instituto de la Reforma Agraria*:

“*asume entonces la tarea de ejecutar y concluir hasta el año 2013, el saneamiento y titulación de la propiedad agraria, la distribución y redistribución de tierras fiscales, con eficiencia, transparencia, equidad y justicia social, en beneficio de la población rural en general, de los empresarios y de los pequeños productores agropecuarios cuyas propiedades cumplan la Función Económica Social*” (INRA, 2008: 120).

²⁹⁷ <http://ta.organojudicial.gob.bo/1715modificada.pdf>

²⁹⁸ A noviembre de 2009, 10.768.470 de hectáreas fueron intervenidas por el INRA para ser redistribuidas (Chumacero, 2010a: 16).

En los primeros años del gobierno de Evo Morales, además de la *Ley de la Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria*, se pusieron en marcha otros dispositivos orientados en la misma dirección. Uno de ellos fue el *Nuevo Reglamento Agrario*, que entró en vigor por vía del Decreto Supremo 29215 el 2 de agosto de 2007 y el, ya mencionado, *Plan Estratégico Nacional de Saneamiento de Tierras 2007 – 2013*. La Nueva Política de Tierras por un lado y el Plan Nacional de Desarrollo 2006 mediante la *Transformación Estructural Agraria* (TEA), pretendieron “*superar de manera permanente y sostenible, los problemas de pobreza de las poblaciones originarias e indígenas (...)*” (ibíd., 161). Por medio del TEA se buscó consolidar la modificación de la estructura del acceso y tenencia de la tierra.

No obstante, deben ser leídos con cautela los actuales informes del INRA dado que, como ya mencionaba al comienzo del capítulo, el vigente gobierno proclama el avance alcanzado durante su mandato con respecto a la redistribución de tierras (véanse **cuadro 6. 11** y **cuadro 6. 12**). Sin embargo, como veíamos, muchas de éstas se encontraban inmersas en el proceso de saneamiento en la legislatura anterior y es en estos últimos años que ha concluido, como ha sido el caso de la TCO del TIMI. En base al trabajo de investigación de Chumacero, hasta el año 2009 sólo se sanearon 37.700.000 de hectáreas con “*poco menos de 110 mil títulos ejecutoriales y certificados de saneamiento emitidos a nombre de alrededor de 167 mil beneficiarios*” (2010a: 27).

Si bien, no se debe dejar de reconocer el mérito del avance de la superficie titulada y los resultados alcanzados durante la actual administración del presidente Evo Morales. El INRA hace además alarde de que del total de superficies tituladas, las correspondientes a las TCOs han sido las que se han visto más beneficiadas con un total de más de 5 millones de hectáreas (INRA, 2008: 132-133).

Cuadro 6. 11. Títulos y certificados por presidente.

| GESTION | PRESIDENTE | TÍTULOS | CERTIFICADOS | TOTAL TITULOS Y CERTIFICADOS | SUPERFICIE |
|-------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|------------------------------|------------------------|
| 06/08/1993 - 06/08/1997 | Gonzalo Sánchez de Lozada (1er P) | 60 | 0 | 60 | 170,655.4063 |
| 07/08/1997 - 07/08/2001 | Hugo Banzer Suárez | 2,021 | 1,037 | 3,058 | 2,183,032.0387 |
| 08/08/2001 - 06/08/2002 | Jorge Quiroga Ramirez | 2,005 | 330 | 2,335 | 830,670.7466 |
| 07/08/2002 - 17/10/2003 | Gonzalo Sánchez de Lozada (2do P) | 1,232 | 330 | 1,562 | 1,289,556.7986 |
| 18/10/2003 - 09/06/2005 | Carlos D. Mesa Gisbert | 7,618 | 2,265 | 9,883 | 3,049,075.3754 |
| 10/06/2005 - 21/01/2006 | Eduardo Rodríguez Veltzé | 8,762 | 522 | 9,284 | 1,708,787.6505 |
| 22/01/2006 - 10/10/2006 | Juan Evo Morales Ayma | 5,390 | 363 | 5,753 | 2,152,997.5364 |
| TOTAL GENERAL | | 27,088 | 4,847 | 31,935 | 11,384,775.5525 |

Fuente: Rojas, s/f: 10.

Cuadro 6. 12. Saneamiento por tipo de propiedad.

| Clasificación | Anteriores Gestiones | Gestión Evo Morales Ayma | | Total Gestiones |
|--|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| | Superficie (has.) 1996-2005 | Superficie (has.) 2006 | Superficie (has.) 2007 | Superficie (has.) 1996-2008 |
| TCOs | 5.762.057 | 1.977.901 | 3.105.350 | 10.845.310 |
| Pequeña propiedad | 707.714 | 209.972 | 154.956 | 1.072.643 |
| Solar Campesino | 145 | 42 | 18 | 206 |
| Mediana propiedad | 309.247 | 68.424 | 66.186 | 443.858 |
| Empresa | 921.165 | 108.916 | 60.794 | 1.090.877 |
| Propiedad Comunitaria | 1.523.125 | 952.614 | 683.673 | 3.159.413 |
| Tierras Fiscales Indentificadas para distribución²⁹⁹ | 0.0000 | 0.0000 | 3.087.842 | 3.087.842 |
| Total | 9.223.457 | 3.317.871 | 7.158.822 | 19.700.151 |

Fuente: INRA, 2008: 133.

Atendiendo al cuadro superior podemos apreciar que en el segundo año de gestión de Evo Morales, la superficie saneada descendió para todos los tipos de propiedad agraria, lo cual demuestra que hay que ser cautos al revisar los informes en cuanto al saneamiento de tierras durante el actual gobierno. Necesitaríamos información actualizada de los últimos 4 años para conocer si esta tendencia se ha mantenido o por el contrario ha manifestado cambios.

²⁹⁹ Las tierras fiscales son emergentes del proceso de saneamiento concluido en 2006 y 2007.

6. 7. CONCLUSIONES Y RETOS PARA EL FUTURO.

Para los pueblos indígenas de Bolivia el proceso de saneamiento significa la restitución de su pasado, la reconstrucción de sus territorios *originarios*. En principio, el saneamiento de tierras también se tradujo en la resolución de conflictos agrarios al evitar las superposiciones. Lejos de la realidad, a día de hoy la tenencia y el acceso a los derechos territoriales están marcados por la conflictividad. Las organizaciones indígenas han demandado al Estado la toma de conciencia sobre la problemática de la tierra en el país. Esto ha dado como resultado el fortalecimiento de dichas organizaciones que buscan alcanzar la seguridad jurídica y la igualdad en el acceso a la tierra. Por todo ello, el reconocimiento territorial indígena, estipulado bajo la figura de las TCOs, supone un avance sustancial en el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas de Bolivia.

Sin embargo, el proceso ha sido largo y tortuoso, cargado de controversias surgidas -principalmente- por la posesión de la propiedad de la tierra pero también por el uso y la explotación de los recursos naturales. Los conflictos agrarios han marcado el proceso de saneamiento. En el TIMI continúan habiendo a día de hoy situaciones tensas entre el sector ganadero y las comunidades ignacianas.

Parece incuestionable la protección de los territorios habitados por las poblaciones indígenas, sin embargo *“el tema de la pérdida de espacios tradicionalmente aprovechados y de la inseguridad jurídica de las áreas indígenas continúa siendo una cuestión no resuelta”* (Ibisch y Mérida, 2003: 198). Se requiere para ello de una buena disposición y compromiso, tanto de los funcionarios del INRA como de los *terceros*, quienes han obstaculizado en mayor medida el proceso desde sus inicios. Del mismo modo es esencial que se respeten los plazos de las correspondientes etapas, con la finalidad de lograr la mayor celeridad posible en vistas a la conclusión del saneamiento, lo cual evitaría que tuvieran lugar muchas de las incidencias más comunes, que son aquellas derivadas de la tardanza del proceso.

Supone un desafío pendiente lograr que el proceso de saneamiento signifique no sólo un proceso jurídico sino un proyecto social más amplio con miras a revertir la situación de inequidad de la distribución de la tierra que históricamente ha caracterizado a la cuestión agraria en Bolivia. Se debe buscar finalizar el proceso de saneamiento y aplicar, ante todo, la ley; incrementar en la medida de lo posible el presupuesto para capacitar a un número mayor de técnicos capaces de llevar a cabo las tareas requeridas en el proceso de saneamiento como son la georreferenciación, pericias de campo, levantamiento de la información, delimitación de polígonos, elaboración cartográfica, acompañamiento a actores implicados en el proceso, identificación de conflictos agrarios, verificación del cumplimiento de la FES, etcétera.

Esto indirectamente contribuirá además a fortalecer la institucionalidad del INRA y como consecuencia a fortalecer el papel y la presencia del Estado.

Un tema prioritario en la agenda nacional en relación a los derechos territoriales y a los títulos de propiedad es que estos sean definidos con exactitud y sin ambigüedades con el fin de evitar, definitivamente, las superposiciones que generan una buena parte de los conflictos por la tierra.

De manera particular con respecto a los pueblos indígenas, el proceso de saneamiento debe encaminarse a lograr una continuidad geográfica de los territorios indígenas basándose en la máxima racionalidad posible y teniendo siempre en cuenta la concepción territorial de estas poblaciones la cual debería procurar ser respetada y garantizada.

La reversión de tierras –en caso de incumplimiento de la FES- debe ser considerado uno de los mecanismos esenciales para la posterior redistribución de la tierra y la eliminación del latifundio en el oriente boliviano. El gobierno debe tener disponibilidad de tierras, lo cual sólo se podrá lograr mediante la reversión y la expropiación.

En otro orden de cosas, se debe procurar garantizar la seguridad jurídica de los nuevos propietarios de tierras con el fin de lograr la consolidación de los derechos territoriales entre las comunidades indígenas y el resto de grupos sociales. Para ello es necesario acabar de una vez por todas con la discriminación que caracteriza el vínculo entre la estructura de la tenencia de la tierra en el oriente boliviano y los sectores dominantes desde el punto de vista económico y político.

En manos del gobierno nacional está el poder efectuar con éxito la conclusión del proceso de saneamiento de tierras en Bolivia. Sólo de esta manera se logrará una justicia agraria que marque el principio de una nueva etapa en la que los abusos cometidos en el agro boliviano sean corregidos y no vuelvan a suceder. Para ello la institución encargada de la distribución de la tierra debe mostrar fortaleza y actuar de manera transparente, agilizando el proceso de saneamiento. A parte del fortalecimiento institucional, es de suma relevancia la implementación de políticas públicas que tengan como eje articulador de las mismas el desarrollo local y la participación de comunidades indígenas y campesinas en un nuevo escenario marcado por un nuevo pacto social que dé cabida al conjunto de la sociedad civil, como ejemplo de concertación y ejercicio de democracia desplegado por la autoridad estatal.

Rompiendo una lanza a favor de la labor realizada durante estos años por el Estado, valdría reconocer la voluntad demostrada por éste a la hora de enfrentar un fenómeno tan complejo a la par que polémico y tan complicado y cargado de connotaciones políticas como es la cuestión agraria en Bolivia. El Estado no puede

actuar como un ente pasivo, sino que debe intervenir y asumir el papel que le corresponde. Pero no sólo el Estado, sino que los gobiernos locales así como los municipios, deben demostrar su capacidad para apoyar el proceso participativo de sectores rurales y fomentar el desarrollo agrario bajo pautas de sostenibilidad con el fin de definir las propias estrategias de producción agraria. Aunque las buenas intenciones no bastan para alcanzar acuerdos basados en la igualdad en el reparto de la tierra y en la equidad en el acceso y tenencia de la misma.

Para concluir el presente capítulo añadir una última idea y es que las limitaciones en el acceso a la tierra para las comunidades indígenas de Mojos implican además la pérdida de derechos de uso y manejo de recursos naturales, esenciales para el desarrollo local de estas comunidades. Tales dificultades se traducen en la reducción del acceso a los recursos del bosque que, sabemos, constituyen el elemento básico para el sustento de cada unidad familiar indígena. La dotación de tierras a *terceros* en Mojos facilitó la explotación a gran escala de los recursos forestales de la región. Las dinámicas resultantes de este fenómeno serán el hilo conductor del próximo capítulo dedicado a la cuestión forestal en Mojos.

7. Dinámicas Forestales. Planes de Manejo Forestal como alternativa sostenible en Mojos.

“El territorio sin recursos es un esqueleto sin sustancia”

PEDRO GARCÍA HIERRO, *Tierra Adentro. Territorio indígena y percepción del entorno.*

Figura 7. 1. Ilustración Amazonía



No es coincidencia la existencia de una estrecha correlación a nivel planetario, entre diversidad cultural y biodiversidad. En la mayor parte de lugares del planeta en donde mayor número de poblaciones *originarias* existe, la biodiversidad está presente en un nivel alto.

La comunidad internacional ha reconocido oficialmente este vínculo. En este sentido no se puede dejar de mencionar el *Convenio sobre la Diversidad Biológica* (CDB), como uno de los documentos de mayor calado en cuanto a la cuestión de la

conservación de la biodiversidad se refiere, el cual fue redactado en el 1992 por las Naciones Unidas. En éste se expone que:

“reconociendo la estrecha y tradicional dependencia de muchas comunidades locales y poblaciones indígenas que tienen sistemas de vida tradicionales basados en los recursos biológicos, y la conveniencia de compartir equitativamente los beneficios que se derivan de la utilización de los conocimientos tradicionales, las innovaciones y las prácticas pertinentes para la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de sus componentes” (Preámbulo)³⁰⁰.

Y el artículo 8j del mismo convenio anuncia que a efectos de alcanzar la conservación sostenible de la biodiversidad, cada uno de los países, con arreglo a su legislación nacional:

“respetará, preservará y mantendrá los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y promoverá su aplicación más amplia, con la aprobación y la participación de quienes posean esos conocimientos, innovaciones y prácticas y fomentará que los beneficios derivados de la utilización de esos conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan equitativamente”³⁰¹.

La alta correspondencia entre la diversidad biológica y cultural ha dado lugar a lo que algunos han denominado como “axioma biocultural” o “concepto de conservación simbiótica³⁰²” por el que *“la diversidad biológica y la cultural son recíprocamente dependientes y geográficamente coterráneas”* (Toledo y Barrera-Bassols, 2008: 53).

El reconocimiento del vínculo entre la biodiversidad amazónica y la diversidad cultural de las poblaciones indígenas se traduce en el reconocimiento de la relación de reciprocidad que éstas despliegan para con sus territorios, asumidos estos como espacios incluyentes de vida cultural y material, que permiten la supervivencia de tales poblaciones. Esta cuestión merece ser tomada en consideración con el fin de tomar conciencia en una doble dirección: el respeto hacia la biodiversidad amazónica y el respeto hacia las culturas indígenas que habitan en dicho espacio natural y cultural. El grupo étnico mojeño-ignaciano ha mantenido históricamente unas relaciones ecológicas con sus territorios. Sin embargo, éstas se vieron alteradas al ser alcanzadas

³⁰⁰ <http://www.cbd.int/doc/legal/cbd-es.pdf>

³⁰¹ *Ibid.*

³⁰² Este término fue creado por B. Nietschmann (1992) y esta investigación lo recoge a partir del estudio de Toledo y Barrera-Bassols, 2008.

por la espiral de capitalismo que supuso el inicio de una paulatina transformación de las formas de vida de este pueblo de la Amazonía boliviana. Esto nos lleva a reflexionar sobre la indisolubilidad de la diversidad cultural frente a la biodiversidad. Ambas se necesitan mutuamente. Para Andrew Gray:

“la crisis de la biodiversidad mundial es equiparable a la crisis de la diversidad cultural. Los pueblos indígenas viven predominantemente en áreas de alta biodiversidad, comprendiendo al mismo tiempo el 95% de la diversidad cultural del mundo. Se enfrentan a amenazas en contra de sus posesiones territoriales, sus culturas y, en algunas áreas, sobre sus vidas” (1992: 4).

García Hierro defiende que “los bosques amazónicos son unidades ecológicas en las cuales sus elementos están en íntima interrelación” por lo que todos los elementos que *habitan* en ellos se relacionan entre sí (2004: 294). Para García Hierro este es el motivo que explica que en el Convenio 169 se hable de hábitat al tratar los territorios de las poblaciones indígenas, que vendría a referirse a esa unidad que conforma el territorio como un todo integral (*ibíd.*). Y este sería también el motivo por el que los pueblos indígenas de la Amazonía boliviana se aferran a la titulación de las *Tierras Comunitarias de Origen* a través del proceso de saneamiento.

Los recursos naturales que los indígenas extraen de los bosques son un elemento más que aparece inextricablemente unido al territorio en sí y a las poblaciones que lo habitan. Esto no quiere decir que las sociedades indígena no hayan transformado el paisaje natural, todo lo contrario, dado que estos constituyen paisajes antropogénicos por encontrarse sometidos a la acción humana. Sin embargo, el impacto ambiental es mucho menor que el que llevan a cabo otros actores sociales.

Las características biogeográficas del paisaje boliviano, han propiciado el surgimiento de particulares normas de uso del suelo y de acceso a los recursos naturales, en cada una de las regiones forestales de Bolivia. En Mojos, las comunidades indígenas han venido tradicionalmente desarrollando un aprovechamiento forestal sostenible. Con todo, en la región, los principios básicos de sostenibilidad se han visto vulnerados por la feroz actividad maderera desde la década de los años setenta. Ésta se ha basado en nuevos modelos de uso de la naturaleza, en los que predominan intereses económicos de complejos industriales forestales, que no han tenido en cuenta la escasa capacidad de regeneración de los bosques mojeños³⁰³. Esto generó una ruptura del equilibrio entre el desarrollo socioeconómico indígena y los límites de explotación

³⁰³ En el caso de la mara o caoba, ésta es una especie que requiere de un largo periodo de regeneración, en torno a 40 años.

forestal. Una amplia superficie de áreas boscosas fue convertida en tierras para distintos usos, entre los que destacó el uso ganadero.

Los bosques son una de las variables primordiales en un esquema de intercambio entre las sociedades y el medio natural del que éstas se proveen para su reproducción. Los recursos que estos proporcionan son esenciales para lograr la subsistencia del conjunto de la población del planeta. En el caso de Bolivia y, en particular, de los pueblos *originarios* del país, los bosques mantienen un estrecho vínculo -material y simbólico- que les une a tales poblaciones. Los recursos forestales que aportan los bosques a las comunidades del oriente boliviano, son de un inestimable valor ecológico, económico y sociocultural. Los bosques constituyen una fuente tradicional de recursos que debemos procurar, en beneficio de todos, conservar en el marco de la sostenibilidad. Además de la contribución a las comunidades locales quienes dependen de ellos para su desarrollo, los bosques en Bolivia suponen una fuente de trabajo a una parte importante de la población, que desafortunadamente no siempre opera en términos de legalidad. Y no sólo, ya que desde el punto de vista ecológico los bosques contribuyen, entre otras cosas, a mitigar los efectos del calentamiento global, es decir, son reguladores climáticos y constituyen además la principal fuente de biodiversidad a escala mundial. Pero también han sido el escenario de numerosos conflictos entre los usuarios de estos espacios naturales. E incluso frente a otros países. En el caso de Bolivia estos han surgido principalmente en las regiones fronterizas, a causa de la propiedad de los derechos de explotación de los recursos naturales. Otro tipo de conflictos que, infelizmente se está viendo incrementado en general en los bosques tropicales desde hace ya algún tiempo, es el de la biopiratería. Son múltiples los casos en los que industrias extranjeras, con fuertes intereses económicos (por operar las grandes industrias farmacéuticas desde la sombra) se han hecho con el control de las patentes de numerosas plantas que solamente se pueden encontrar en los ecosistemas tropicales.

Teniendo en consideración el potencial forestal con el que cuenta Bolivia y la mayoritaria población indígena que alberga, los siguientes planteamientos procurarán entender cuestiones como: ¿en qué lugar quedan los pueblos indígenas en cuanto a las políticas forestales se refiere?, ¿tienen éstas en cuenta los modelos locales del manejo del medio?, ¿podrían estos contribuir de alguna manera para el desempeño productivo forestal?, ¿qué tipo de modelo cultural de la naturaleza predomina en las políticas forestales efectuadas por los distintos gobiernos de Bolivia?, ¿se puede lograr un desarrollo sostenible de los recursos naturales que alcance al conjunto de actores forestales?, ¿hasta qué punto requieren las poblaciones indígenas de Mojos regular el

acceso a los recursos forestales a través de sus propias estructuras organizativas? A todas estas preguntas intentará responder el presente capítulo.

7. 1. POTENCIAL FORESTAL DE BOLIVIA.

La Amazonía viene considerada como una de las regiones con mayor índice de biodiversidad de todo el planeta, habiéndose estimado que en torno al 10% del total de especies vegetales están representadas en este espacio (PNUMA y OTCA, 2009: 110).

Bolivia alberga una inmensa biodiversidad en su territorio, la cual se encuentra en su mayor parte en los bosques tropicales de tierras bajas. La importancia tanto económica como, principalmente, ecológica y cultural de estos, se ha convertido en un desafío tal para el país y para el resto del planeta, que obliga a adoptar una serie de políticas de conservación y desarrollo forestal capaces de atender las necesidades del conjunto de usuarios directos e indirectos de los bosques bolivianos. El estado actual de los bosques de Bolivia responde a cuestiones de tipo ecológico pero también político y económico. Por tanto, estos supuestos se deben conjugar a la hora de formular propuestas de manejo forestal. El reto en estos momentos consiste en lograr un manejo sostenible sin medrar la capacidad de producción de ninguno de los actores que participan e intervienen en el aprovechamiento de los recursos forestales del país.

Según datos del *Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente* (MDRAyMA), Bolivia es un país “predominantemente forestal” (2008: 11), habiendo sido calificado en la Tercera Cumbre Mundial de la Tierra de Johannesburgo, como uno de los 15 países megadiversos del planeta³⁰⁴. Ello se debe a que el territorio boliviano alberga una gran cantidad de especies, muchas de ellas aún sin clasificar y posiblemente incluso sin descubrir.

En un país como tal, la biodiversidad se ve amenazada constantemente. La deforestación es una de las problemáticas que más debería preocupar a los gobiernos del país. En Mojos, la deforestación se debe, en buena medida, al avance de la ganadería extensiva y a las quemadas anuales. Ya en la década de los ochenta y principios de los noventa algunos estudios comenzaron a señalar a la actividad ganadera como la principal causa que provocaba la deforestación en el conjunto de países del continente latinoamericano a través de la transformación de bosques en zonas de paso para el ganado vacuno (Lavelle, 1987: 201; Hecht, 1993). También el informe más reciente publicado por el *Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente* (PNUMA) junto con la *Organización del Tratado de Cooperación Amazónica* (OTCA), señalaba a

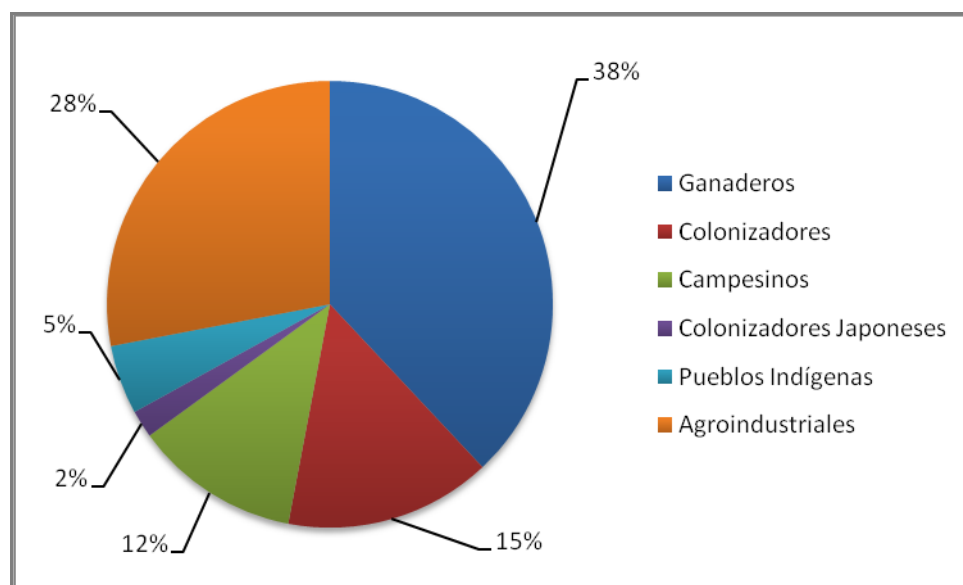
304

http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=290291&Itemid=1 (21-05-11) y Quispe J., 2003: 69.

la ganadería como una de las grandes responsables de la deforestación causada en el conjunto de la región amazónica en el periodo que comprendía entre el año 1990 y el año 2000 y a la que le adjudicaban una tasa deforestación de hasta el 75% (2009: 82).

Atendiendo al gráfico inferior (7. 1) se demuestra que, en Bolivia, son los ganaderos quienes mayor impacto provocan sobre los bosques del país, seguidos por el sector agroindustrial³⁰⁵. Llama la atención el escaso impacto provocado por los pueblos indígenas -tan sólo un 5%- teniendo en cuenta que son estos quienes representan una mayoría poblacional, dependiente de los recursos forestales para su desarrollo.

Gráfico 7. 1. Tasa de deforestación por usuarios forestales en Bolivia.



Fuente: elaboración propia en base a los datos de ABT (<http://www.abt.gob.bo/>).

Hecht reconocía además la existencia de una combinación de factores que influían en la devastación de los bosques de la cuenca amazónica, como los procesos locales, las políticas regionales y las economías nacionales (1993: 165). Para esta investigadora convertir superficies boscosas en pastizales constituía la “*más económica y fácil manera de reclamar derechos de ocupación por parte de los pequeños y grandes productores*” (ibíd., 173). También Bunker acusó a los programas de desarrollo -potenciadores de una economía extractivista- como los grandes responsables de la deforestación de la región amazónica (1988: 91-93). Aunque autores como Colchester reconocían que si bien una de las causas principales que provocaba la deforestación era clarear los bosques para la agricultura, lo que en realidad subyacía era la injusticia social generada por distintos motivos entre los que destacaba el subdesarrollo, la sobrepoblación, la pobreza, el excesivo consumo por parte de los

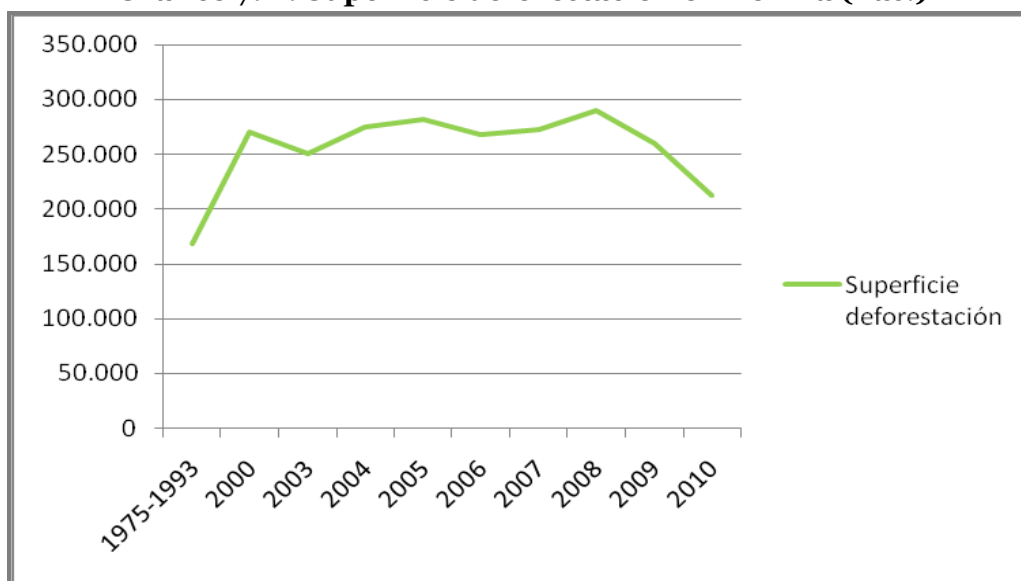
³⁰⁵ En Bolivia se han configurado enormes extensiones dedicadas a monocultivos: soja, maíz o caña de azúcar.

mercados occidentales o las compañías transnacionales (1993a: 4; 1993c: 295-296). Similares argumentos fueron presentados por la Red de Boques de Reino Unido en el año 1995, añadiendo otros como la deuda internacional, la corrupción, los niveles de consumo, la presión del desarrollo económico, la estructura de la tenencia de la tierra, la posición de la mujer en la sociedad y las políticas de colonización (Grayson, 2004: 133). Todos estos motivos fueron recogidos en el informe del PNUMA y OTCA, en donde se incluyeron además el incremento en el precio de los alimentos (lo cual induce a incrementar la producción agropecuaria); la minería informal o el desarrollo de megaproyectos (como puede ser el caso de las represas del Madeira o la construcción de hidroeléctricas) (2009).

Pero frente al argumento desarrollista que defendía que la colonización de los bosques tropicales era necesario para incrementar la producción agrícola que solventaría los problemas del incremento demográfico, Colchester se cuestionaba si tales programas de colonización aliviaban la escasez, propiciaban el desarrollo o si justificaban los costos ambientales (1993).

En Bolivia el Estado implementó un paquete de medidas desarrollistas. Gracias a éste, grandes y medianas empresas recibieron ayudas financieras, como sucedió con las haciendas ganaderas del Beni. En el intento de desarrollar la Amazonía, las poblaciones indígenas no se tuvieron en consideración. En aras a lograr el anhelado desarrollo, se pusieron en marcha proyectos de construcción de carreteras para facilitar la apertura de la región, programas de colonización, subvenciones al sector ganadero, etcétera, todo lo cual propició el incremento de la deforestación como se puede apreciar en el siguiente gráfico.

Gráfico 7. 2. Superficie deforestación en Bolivia (has.)



Fuente: elaboración propia en base a los datos de ABT (<http://www.abt.gob.bo/>).

El gráfico anterior contribuye a entender la tendencia que ha seguido la deforestación en Bolivia, la cual en la década de los noventa sufrió un fuerte y rápido incremento hasta el año 2000 cuando finalmente descendió pese a que posteriormente volviera a experimentar cierto repunte pero de manera leve, situándose entre las 250.000 y 300.000 hectáreas de superficie deforestada anualmente, nivel éste que se ha visto reducido desde el año 2008 y que coincide con el periodo final de la primera gestión de Evo Morales. El PNUMA y OTCA concluyen que para el caso de Bolivia, *“el bosque que no ha sufrido perturbaciones tiene 43% más de biomasa y 70% más de diversidad de especies de mamíferos pequeños, que aquellos que han sido afectados por las actividades indicadas”* (refiriéndose a la actividad maderera y a las quemadas) (2009: 199).

Los estudios realizados sobre el potencial forestal de Bolivia y su aprovechamiento señalan cifras de entre el 44% y 48% de territorio nacional cubierto por masas boscosas (Andaluz, 2007: 15; de Vries, 1998: 31; CFB-SCTP, 2000: 3), lo cual correspondería a entre 48 ó 53 millones de hectáreas respectivamente. De ellas en torno al 80% de las tierras forestales se encuentra en las tierras bajas (Zeballos y Quiroga, 2003: 11).

7. 1. 1. Aprovechamiento forestal en Mojos-Beni.

De los 50 millones aproximadamente de hectáreas de cobertura forestal con las que cuenta el país, casi 8 millones y medio están destinadas al aprovechamiento forestal, siendo algo más de un millón en el caso del departamento del Beni.

Cuadro 7. 1. Superficie de áreas bajo manejo forestal y tipo de autorización en Bolivia y el departamento del Beni.

| Derecho | Nº Bolivia | Nº Beni | Superficie (has.) Bolivia | Superficie (has.) Beni |
|--|------------|---------|---------------------------|------------------------|
| Concesión Forestal en Tierras Fiscales | 85 | 17 | 5.399.278,47 | 686.073,51 |
| Concesión Forestal en Tierras fiscales con fines de Investigación | 3 | - | 262.367,71 | - |
| Concesiones a Agrupaciones Sociales del Lugar en Áreas de Reserva Forestal Municipal | 16 | - | 429.696,70 | - |
| Contrato de Aprovechamiento forestal en Tierras Fiscales (CLP) | 1 | - | 112.000,00 | - |

| | | | | |
|---|------------|------------|---------------------|---------------------|
| Autorización de Aprovechamiento en Tierras Comunitarias de Origen | 21 | 7 | 559.201,75 | 128.582,48 |
| Autorización de Aprovechamiento en Tierras de Propiedad Privada <200 | 499 | 54 | 66.137,42 | 8.542,69 |
| Autorización de Aprovechamiento en Tierras de Propiedad Privada >200 | 91 | 4 | 546.326,13 | 6.266,61 |
| POAF ³⁰⁶ aprobado con cargo a PGMF ³⁰⁷ de Agrupaciones Sociales del Lugar | 23 | 4 | 476.877,60 | 59.287,31 |
| POAF aprobado con cargo a PGMF de Tierras Comunitarias de Origen | 8 | 3 | 163.966,02 | 75.800,00 |
| POAF aprobado con cargo a PGMF de Propiedades Privadas mayores a 200 ha | 87 | 14 | 465.811,55 | 42.674,36 |
| TOTAL | 834 | 103 | 8.481.663,35 | 1.007.226,97 |

Fuente: elaboración propia en base a los datos de CFB, 2006: (<http://www.cfb.org.bo/CFBInicio/>)

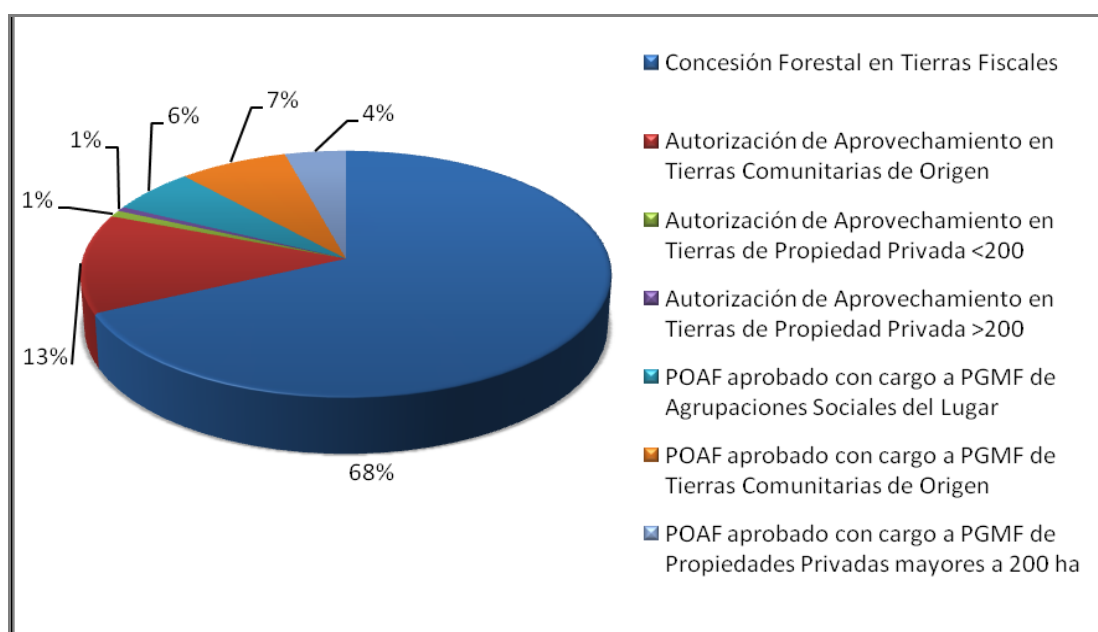
Un dato que podemos extraer del anterior cuadro es el reducido número de áreas de manejo forestal correspondiente a las *Tierras Comunitarias de Origen* frente a propietarios privados, lo cual se manifiesta tanto a nivel departamental como nacional aunque el número de hectáreas sea muy superior. La lectura que podemos hacer en base a esta información es en primer lugar las amplias superficies que los territorios indígenas requieren, lo cual está relacionado con sus sistemas de manejo forestal y en segundo lugar demuestra el leve impacto de este tipo de manejo que pese a abarcar tal superficie apenas sí deja huella. Otra información interesante se obtiene al comparar la relación, tan desproporcionada, de extensión entre TCOs y las concesiones forestales en tierras fiscales, las que por lo general van a parar a manos de empresas privadas. Si atendemos a los datos del departamento del Beni (**cuadro 7. 1** y **gráfico 7. 3**), donde se ubica la TCO del TIMI, podemos comprobar que casi el 70% corresponde a concesiones forestales en tierras fiscales otorgadas a grupos industriales madereros (caso de Cimagro Ltda., la cual ha operado en el territorio mojeño). Mientras que en torno a un 13% es la cifra que indica la superficie de aprovechamiento forestal en los

³⁰⁶ *Plan Operativo Anual Forestal*. Consiste en el instrumento que anualmente establece y regula las actividades forestales, en base a lo dictaminado en el *Plan General de Manejo Forestal* (PGMF).

³⁰⁷ *Planes Generales de Manejo Forestal*. Consiste en el instrumento de gestión forestal que regula las actividades de aprovechamiento forestal en un área determinada.

territorios indígenas (véase **gráfico 7. 3**), entre los que se encuentra el TIMI. También cabría destacar el número de hectáreas que se destinan a los planes de manejo forestal en contraposición al total de la superficie concerniente al aprovechamiento forestal bajo autorizaciones del tipo que sean, comprobando que la información recogida no nos habla de cifras muy elevadas, sino más bien de todo lo contrario. No obstante, al interior de las TCOs el aprovechamiento forestal queda, en exclusividad, garantizado por ley a las poblaciones indígenas que las ocupen.

Gráfico 7. 3. Superficie aprovechamiento forestal en el Beni.



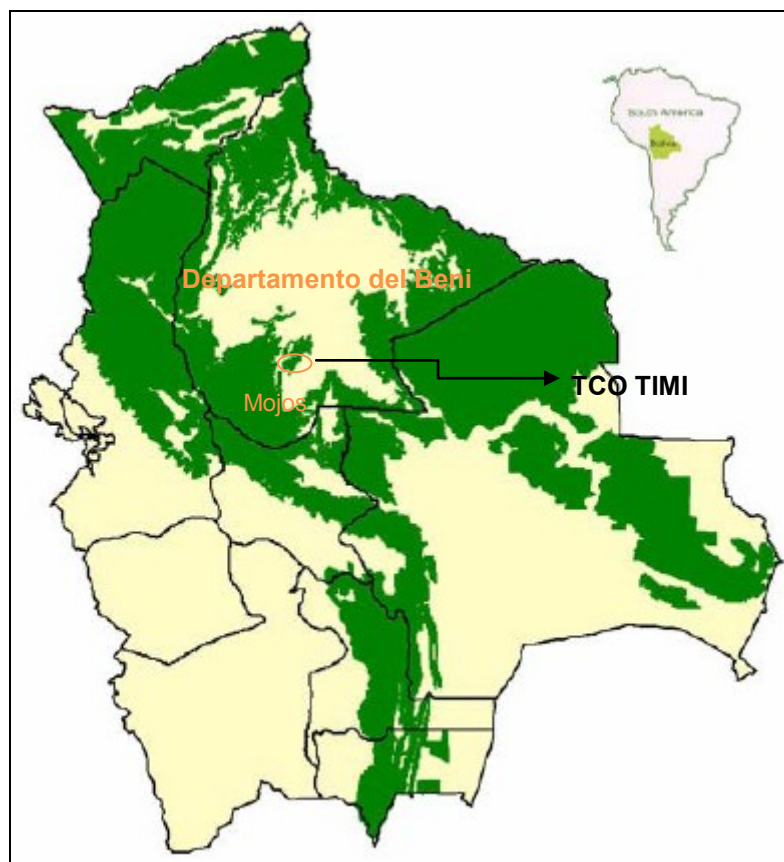
Fuente: elaboración propia en base a los datos de la CFB, 2006 (<http://www.cfb.org.bo/CFBInicio/>)

Concretamente en el municipio de San Ignacio de Mojos existen al menos tres tipos de bosques:

- Pie de monte
- Bosques de alturas
- Bosques de semi alturas

En todos ellos está constatada la presencia de especies maderables de alto valor económico (PDM de San Ignacio de Mojos, 2001, véase **anexo 4**).

Figura 7. 2. Mapa tierras forestales de Bolivia y ubicación de la TCO TIMI.



Fuente: Elaboración propia en base a mapa de CFB, 2007b.

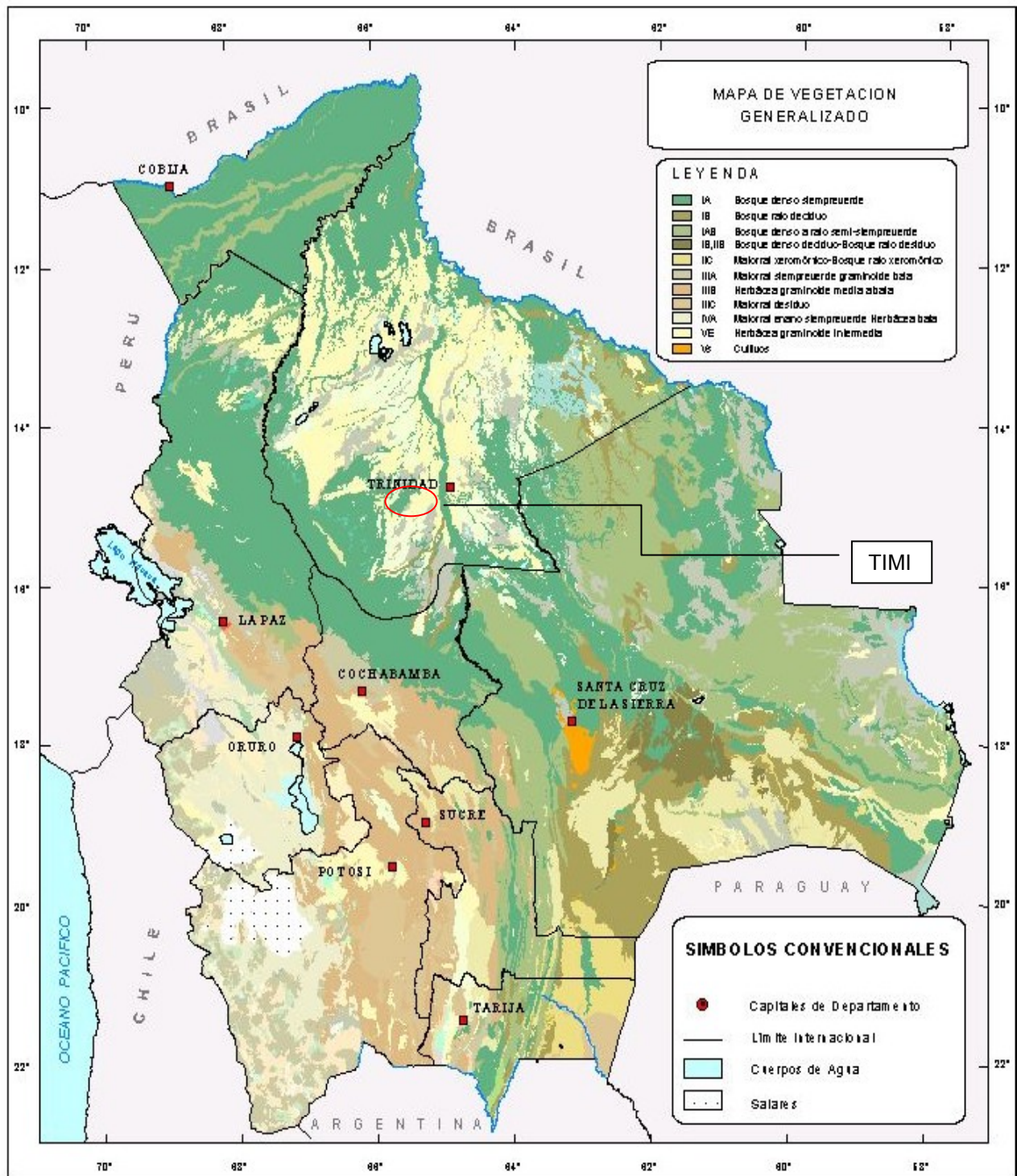
Según un estudio elaborado por la *Unidad de Gestión Territorial Indígena* del *Ministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario y Medio Ambiente* (2008), la TCO del TIMI se conforma por dos tipos de unidades de bosque:

- Bosque inundable, que son aquellos que se caracterizan por “*periodos de inundación frecuentes y con larga duración*”, ocupando una superficie de 53.562 hectáreas.
- Sabana Bosque, referida a la “*llanura aluvial con periodos de inundación y predominancia de pastizales*” que ocupa una superficie de 52.630 hectáreas.

Además de estas dos unidades de bosque existe “*colonización de agricultura establecida*” que se caracteriza por la “*presencia de actividades agrícolas, ganaderas y agrosilvopastoriles en zonas boscosas*” aunque la superficie que ocupa esta actividad en el interior del TIMI sea ligeramente superior a las 2.000 hectáreas (Clavijo, 2008: 11).

Si prestamos atención a la imagen inferior (véase **figura 7. 3**), percibimos que la TCO TIMI se asienta en una zona caracterizada por la presencia de bosque denso siempre verde de alternancia con matorral siempre verde graminoide y predominancia de vegetación herbácea graminoide intermedia. Y si nos remontamos al capítulo 5, sabemos que es en las zonas con predominancia de vegetación consistente en bosque denso siempre verde en las que domina un uso del suelo de tipo agrosilvopastoril y agrosilvopastoril limitado, que coincide en el TIMI con la zona que ocupan las comunidades indígenas, las que se asocian al modelo de explotación sostenible, a diferencia de la ganadería extensiva que ocupa las zonas con vegetación abundante en herbácea graminoide intermedia. Aunque la ganadería extensiva está ocupando igualmente, zonas de bosque siempre verde en detrimento de las comunidades indígenas que ven mermar las áreas boscosas de su territorio comunal, y por consiguiente encuentran dificultades para llevar a cabo sus actividades socioproductivas de acuerdo a sus modelos locales de desarrollo.

Figura 7. 3. Vegetación de Bolivia.



Fuente: Centro Digital de Recursos Naturales de Bolivia:

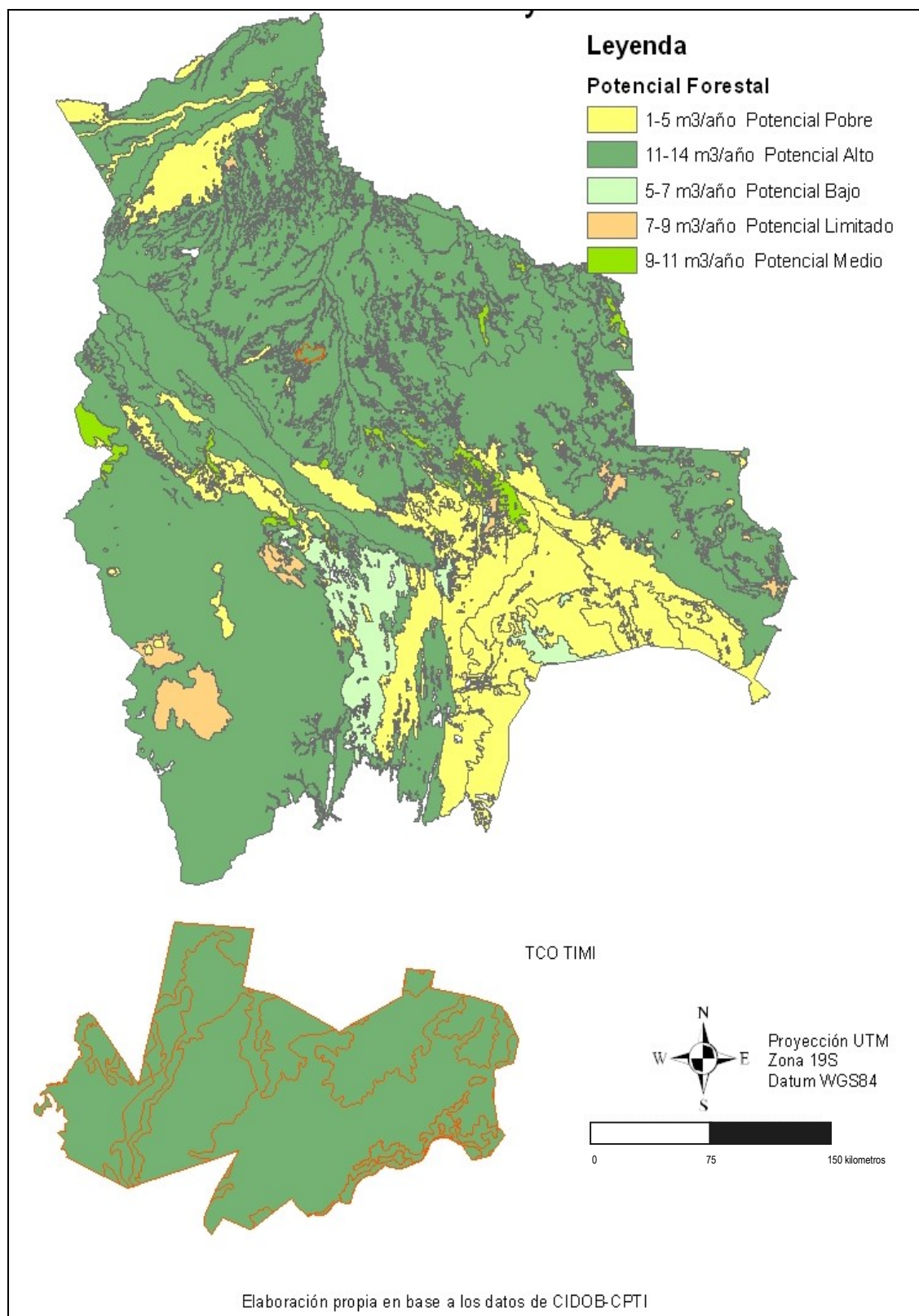
http://essm.tamu.edu/bolivia/ordenamiento_territorial_es.htm

7. 1. 2. Características de la explotación forestal en Bolivia y en el Preandino-amazónico.

Pese a la reconocida vocación forestal del país (véase **mapa 7. 1**), el sector forestal ha sido subestimado para la economía boliviana, habiendo recibido escaso interés por parte de los gobiernos nacionales, los cuales no han orientado sus inversiones a lograr una alta competitividad a nivel internacional en el sector (CFB-STCP, 2000: 1). Debido a ello, y a que los costos en la cadena de producción y el transporte son altos en comparación a los de otros países como Brasil, Malasia, Ecuador o Indonesia, el sector forestal tiene una muy escasa importancia en el comercio internacional de la madera tropical a pesar del enorme potencial de recursos forestales existentes en Bolivia (CFB-STCP, 2000). La poca atención que recibe por parte del Estado, da como resultado una insuficiente información de la que se dispone a la hora de conocer el estado actual de los bosques del país. Se cuentan muy pocos inventarios que recojan una información precisa de los recursos naturales de Bolivia (de ello podemos dar buena cuenta en la presente investigación³⁰⁸).

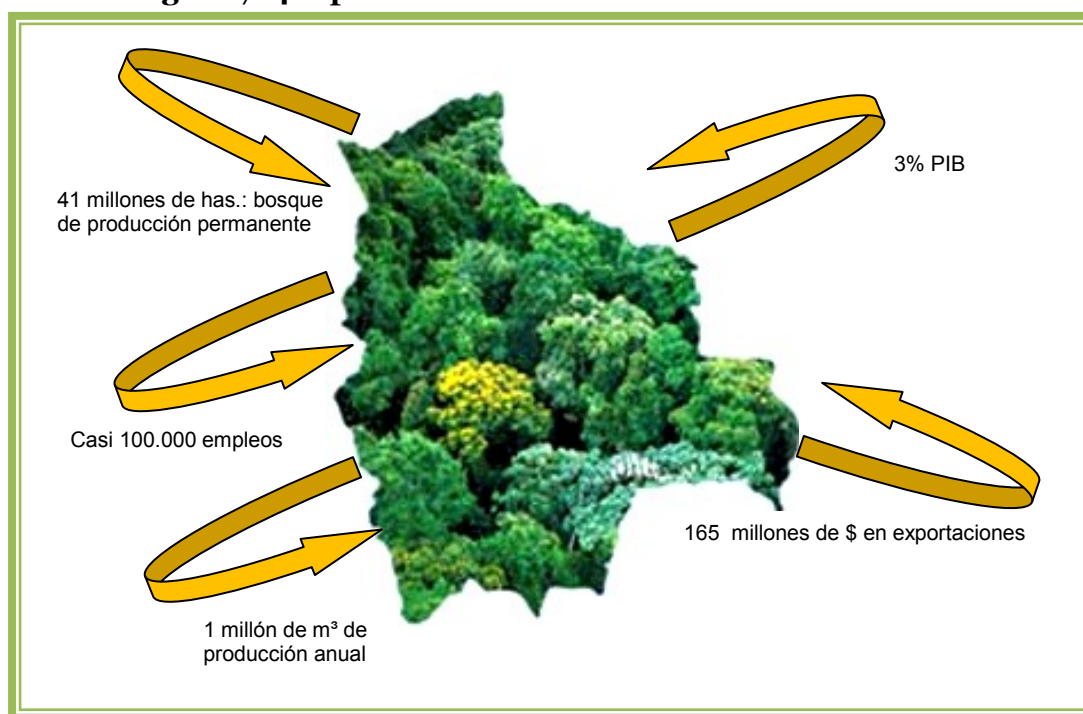
³⁰⁸ En este caso me he valido por un lado de las estimaciones presentadas por parte de la Cámara Forestal de Bolivia, en cuanto al sector forestal se refiere, lo cual es una pequeña aproximación a dicha materia. Por otra parte en base a la información recogida a partir de las entrevistas tanto a técnicos de los organismos oficiales, a expertos de la materia, como a los usuarios de los bosques asentados en el área de estudio, he obtenido una pequeña aproximación o panorámica del contexto actual y pasado en torno al desarrollo forestal de Mojos.

Mapa 7. 1: Potencial forestal de Bolivia y de la TCO TIMI



La cuestión surge al plantear un modelo de gestión forestal encaminado a la consecución de un desarrollo sostenible, lo cual resulta más complicado al no contar con informes de rigor científico que atiendan al uso y conservación de los bosques. A pesar de que la mayor parte de los trabajos destacan la importancia económica que el sector forestal supone para el país (véase **figura 7. 4**), la actividad forestal en Bolivia, nunca ha estado muy presente en las agendas gubernamentales. En efecto, en muchos informes elaborados por las instituciones oficiales, la actividad forestal no se tiene en cuenta a la hora de presentar datos referidos a los sectores económicos como lo pueden ser el sector de los hidrocarburos, la minería, servicios, construcción, transporte, agricultura o ganadería³⁰⁹. Nunca se le ha concedido la importancia que merece, ignorando por un lado la contribución que los bosques suponen para muchas familias a nivel local y por otra a la economía del país³¹⁰. De ahí que los bosques de tierras bajas hayan sufrido tal deforestación. A pesar de ello, el volumen de las exportaciones, tanto de productos maderables como no maderables, se ha visto incrementado, como veremos más adelante.

Figura 7. 4. Aportes del sector forestal a la economía boliviana



Fuente: elaboración propia en base a los datos de CFB.

³⁰⁹ Esto se está procurando modificar y así lo demuestra el Plan Nacional de Desarrollo que incluye al “Medio Ambiente” entre los sectores a los que se debe conceder apoyo productivo: http://www.conicyt.cl/documentos/art_eliana28oct2010/BoliviaPlan_Desarrollo_Nac_2016_2011_cap%20.pdf

³¹⁰ Se manejan datos estadísticos que señalan que sólo entorno a un 3% es el aporte que la actividad forestal supone para el PIB del país (INE, 2009; CFB-STCP, 2000).

Si bien la explotación de la madera (**figura 7.5**) ha ido cobrando gradualmente mayor importancia en la economía boliviana. Una de las características más relevantes del aprovechamiento de la madera es que ésta es enormemente selectiva. La extracción irracional ha conducido a la inexorable depredación de la selva amazónica, donde la parte boliviana no ha constituido una excepción. En el caso de los bosques tropicales de Bolivia, la extracción selectiva ha provocado una grave degradación de las áreas boscosas. Las especies que más depredación han sufrido, principalmente en la década de los años setenta, han sido la mara (*Swietenia macrophylla*), el roble (*Amburana cearensis*), el cedro (*Cedrela sp*) y el occhó (*Hura crepitans*) (Pacheco P., 1998b; Birk, 2000). Algunos datos apuntan que del aprovechamiento de madera aserrada, el 50-57% correspondería a la mara, entre el 16 y el 22% al laurel y entre un 8 y un 16% al occhó, siendo estas especies el 85% del total de la producción nacional de madera (Pacheco P., 1998b: 194). Lo que les ha sucedido a estas especies es que corren un alto riesgo en cuanto a su regeneración. En la actualidad presentan escasa abundancia en los bosques de las tierras bajas. La mayor parte de éstas se destinaba a los mercados externos. En particular, el 90% de la mara era comercializada fuera de las fronteras de Bolivia³¹¹ (Pacheco P., 1998b: 194). Y es que el valor de la exportación en los mercados internacionales se incrementó durante la década de los setenta de 1.9 millones de dólares a 21 millones, hasta alcanzar los 79 millones en 1996 (Birk, 2000: 39). Pero estos impactos negativos no se tuvieron en cuenta y la tala selectiva impidió la regeneración natural del bosque.

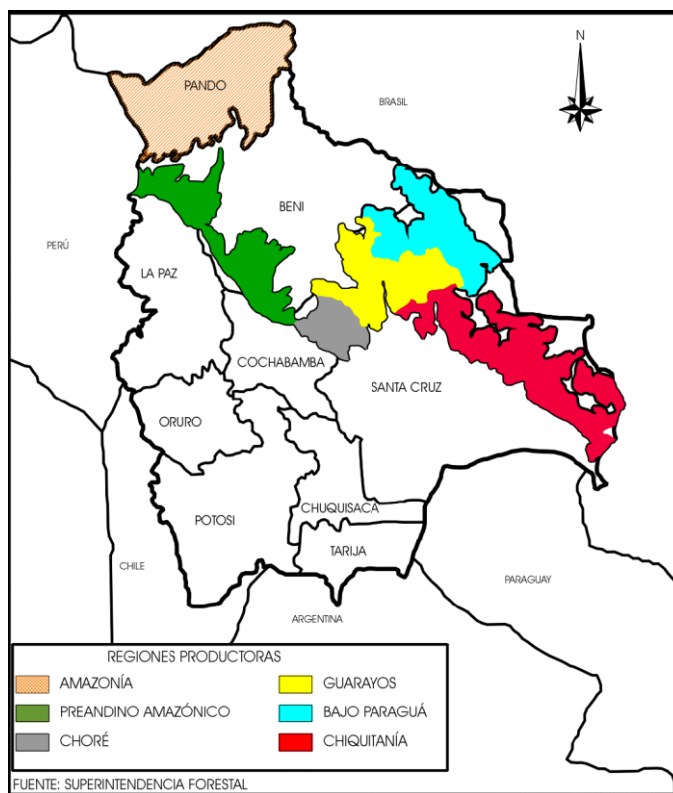
Sólo algunas pocas especies han sido valoradas como productos maderables, susceptibles de ser comercializadas, con la consecuente sobreexplotación de éstas que ello conlleva. Sin embargo, los bosques bolivianos albergan un mucho más amplio conjunto de recursos no maderables –entre los que destaca la castaña en el Noroeste del país-. Estos no han sido considerados lo suficientemente rentables desde el punto de vista económico. No se percibe que la explotación forestal de estos pueda ser potencialmente beneficiosa. Las políticas forestales, por tanto, no han prestado la suficiente atención a estos recursos que podrían reportar importantes ayudas a los actores sociales encargados de su aprovechamiento. En la actualidad, algunas organizaciones, como CIPCA, están desarrollando planes de manejo forestal, con vistas a que familias indígenas y campesinas se vean beneficiadas del aprovechamiento de algunos recursos que habían sido ignorados. De esta manera, la explotación de los bosques puede verse diversificada logrando reducir la tala indiscriminada. Por otra

³¹¹ La mara se exporta principalmente a EEUU. Otras especies forestales como el cedro se reparten entre diversos países: México, Chile o Argentina. China también constituye el mercado de algunas otras especies (entrevista Roberto Ríos).

parte se fomenta de esa manera un uso y manejo más sostenible de los recursos forestales.

El departamento del Beni concretamente, presenta gran variedad de recursos forestales. Sin embargo, como será analizado más adelante, el carácter eminentemente selectivo de la actividad forestal hace que se aprovechen sólo unas pocas especies maderables. Y para demostrar la predominancia de este tipo de aprovechamiento me baso en estudios que señalan que en el departamento del Beni, “*de 105 especies maderables identificadas, apenas 10 son aprovechadas significativamente, debido a la escasa demanda de otras especies, a la carencia de estudios sobre sus propiedades físico-mecánicas y sobre todo al uso de prácticas negativas de aprovechamiento comercial*” (Navia, 2003: 161). Este mismo estudio señala que en los territorios habitados por los pueblos indígenas de la Amazonía boliviana, entre ellos las comunidades mojeñas, “*se han inventariado 244 especies de árboles, de los cuales sin embargo se aprovecha casi exclusivamente la caoba (*Swietenia macrophylla*) a nivel comercial*” (ibíd.). En la opinión de Chirif y García Hierro la extracción de la caoba se intensificó debido a que determinados convenios internacionales como CITES³¹², consideró a esta especie en situación de riesgo por lo que se sugerían medidas encaminadas a restringir su explotación (2007: 321).

Figura 7. 5. Principales regiones forestales productoras de Bolivia.



³¹² The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora.

Si prestamos atención al cuadro inferior, podemos deducir que de las 6 regiones forestales productoras de Bolivia (véase **figura 7. 5**), la región del Preandino-amazónico, donde se asienta el área de estudio de la presente investigación, se encuentra en la tercera posición en cuanto se refiere al volumen de producción forestal.

Cuadro 7. 2. Volumen de madera de las regiones productoras forestales de Bolivia.

| REGIÓN PRODUCTORA | ÁREA | | VOLUMEN (m ³ /ha) ³¹³ | | | | | | |
|---------------------|-------------|------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|
| | MILLÓN has. | % | Especies muy valiosas ³¹⁴ | Especies valiosas ³¹⁵ | Especies poco valiosas ³¹⁶ | Especies potenciales ³¹⁷ | Especies sin valor conocido ³¹⁸ | Especies no maderables ³¹⁹ | TOTAL |
| Bajo Paraguá | 3,8 | 13 | 1,20 | 16,84 | 9,67 | 6,30 | 11,17 | 5,71 | 50,89 |
| Chiquitanía | 6,3 | 22 | 3,55 | 23,63 | 7,92 | 0,64 | 7,20 | 0,45 | 43,39 |
| Choré | 1,6 | 6 | 0,68 | 43,55 | 18,81 | 12,79 | 8,35 | 4,34 | 88,52 |
| Guarayos | 4,2 | 15 | 0,45 | 24,99 | 10,42 | 3,03 | 6,04 | 2,23 | 47,16 |
| Preandino-amazónico | 4,1 | 14 | 2,18 | 30,62 | 14,76 | 7,77 | 15,77 | 5,99 | 77,09 |
| Amazonía | 8,8 | 30 | 2,13 | 21,92 | 16,70 | 14,45 | 33,72 | 26,62 | 115,54 |
| TOTAL | 28,8 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |

Fuente: CFB, 2006 (<http://www.cfb.org.bo/CFBInicio/>)³¹³ DAP (Diámetro a la altura del pecho)¹⁵ ≥ 20 cm³¹⁴ Cedro, Mara y Roble.³¹⁵ Almendrillo, Amarillo, Bibosi, Guayabochi, Mara, Macho, Paquí, Sangre de Toro, Sirari, Tajibo, Trompillo, Verdolago, Yesquero y otras.³¹⁶ Blanquillo, Cabeza de Mono, Coloradillo, Itauba, Mapajo, Mora, Moradillo, Mururé, Begrillo, Picana, Sujo, Toco y otras.³¹⁷ Aguai, Aliso, Bitumbo, Chepereque, Chocolatillo, Gabetillo, Nui, Palo Amarillo, Pitón y otras.³¹⁸ Aceitillo, Cachari, Cafecillo, Cuta, Enchoque, Fariña Seca, Isigo, Isiguillo, Leche Leche, Limoncillo, Manicillo, Mechero, Palo Agua, Palo Santo, Pancho, Pata de Anta, Pata de Michi, Quecho, Ramillo, Sapito, Sombrerillo, Surba y otras.³¹⁹ Ambaibillo, Ambaibo, Castaña, Pacay, Siringa, Tamarindo, Urucucillo y otras (CFB-STCP: 2000).

Atendiendo al cuadro superior podemos extraer una información esclarecedora a fecha de 2006 y es que por un lado son las especies valiosas las que se extraen en mayor cantidad pero si nos fijamos en los datos que se refieren al volumen de madera extraída de especies muy valiosas como la mara, el cedro o el roble, llama la atención la cifra tan reducida en comparación con el resto. Estos datos confirman por tanto la explotación feroz y altamente selectiva a la que fueron sometidas las especies señaladas.

La región del Preandino-amazónico (véase **figura 7. 5**) es la región que más especies forestales alberga en su interior, habiendo sido clasificadas un total de 303 entre las que se calificaron 230 como especies escasas en base al criterio de baja frecuencia, por cubrir poco más del 12% de la abundancia total (CFB, 2006)³²⁰. El siguiente cuadro da muestra de ello.

Cuadro 7. 3. Número de especies por grupos de frecuencia y región productora (DAP \geq 20 cm)

| Región | Nº total de especies | Nº total de especies escasas | Nº total de especies frecuentes | Nº de especies principales |
|---------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Chiquitanía | 246 | 210 | 36 | 14 |
| Bajo Paraguá | 240 | 169 | 71 | 19 |
| Guarayos | 281 | 220 | 61 | 22 |
| Choré | 231 | 158 | 73 | 20 |
| Preandino-amazónico | 303 | 230 | 73 | 18 |
| Amazonía | 283 | 216 | 67 | 15 |

Fuente: *Ibíd.*

En base a los inventarios de la *Cámara Forestal de Bolivia* se entiende que las especies principales no abundan notablemente en el territorio nacional ni en los bosques tropicales en particular. Este hecho podría haber motivado la escasa presencia y competitividad del sector forestal en los mercados internacionales. Sin embargo, en contraposición, existe un alto número de especies frecuentes en todas las regiones (véase **gráfico 7. 4**). Entre ellas son abundantes las correspondientes a los cuatro últimos grupos comerciales que se incluían anteriormente (véase **cuadro 7. 2**) por lo que podrían ser impulsadas en los planes de manejo forestal para lograr la incorporación de éstas a los mercados. Para ello debería ser promocionada la potencial cadena de producción y comercio de dichas especies forestales. Esto constituiría uno de los pasos a seguir en vías a lograr alcanzar un desarrollo sostenible en el país, puesto que suponen una alternativa a las especies más valiosas y cotizadas, y que si hasta el

³²⁰ <http://www.cfb.org.bo/CFBInicio/>

momento no han sido merecidamente reconocidas es por el desconocimiento de su valor comercial³²¹.

Cuadro 7. 4. Número de especies y abundancia por grupos de frecuencia en Preandino-amazónico (DAP \geq 20 cm).

| Frecuencia | Número especies | N ³²² (arb/ha) |
|---------------------|-----------------|---------------------------|
| Especies Frecuentes | 73 | 78.47 |
| Especies Escasas | 230 | 10.78 |
| Totales | 303 | 89.25 |

Fuente: *Ibíd.*

Entre las especies más frecuentes en la región del Preandino-amazónico, se clasificaron 18 especies principales (CFB, 2006)³²³, las cuales se encuentran en abundancia en Mojos.

Cuadro 7. 5. Abundancia de las especies principales en Preandino-amazónico.

| Nombre común | Nombre científico | N | Porcentaje del N total |
|----------------|---|------|------------------------|
| Almendrillo | <i>Dipteryx odorata</i> / <i>Apuleia leiocarpa</i> | 1.05 | 1.18% |
| Bibosi | <i>Ficus</i> spp. | 2.8 | 3.14% |
| Cedro | <i>Cedrela</i> spp. | 0.74 | 0.83% |
| Coquino | <i>Pouteria</i> spp. | 0.66 | 0.74% |
| Guayabochi | <i>Calycophyllum spruceanum</i> / <i>Capirona decorticans</i> | 1.06 | 1.19% |
| Jorori | <i>Swartzia jorori</i> | 0.93 | 1.04% |
| Mara | <i>Swietenia macrophylla</i> | 0.35 | 0.39% |
| Momoqui | <i>Caesalpinia pluviosa</i> | 0.33 | 0.37% |
| Ochoó | <i>Hura crepitans</i> | 3.12 | 3.50% |
| Palo maría | <i>Calophyllum brasiliense</i> | 2.84 | 3.18% |
| Paquíó | <i>Hymenaea</i> spp. | 0.26 | 0.29% |
| Roble | <i>Amburana cearensis</i> | 0.42 | 0.47% |
| Sangre de toro | <i>Virola peruviana</i> / <i>Iryanthera juruensis</i> | 2.56 | 2.87% |
| Sirari | <i>Ormosia nobilis</i> | 0.45 | 0.50% |
| Tajibo | <i>Tabebuia</i> spp. | 0.35 | 0.39% |

³²¹ <http://www.cfb.org.bo/CFBInicio/>

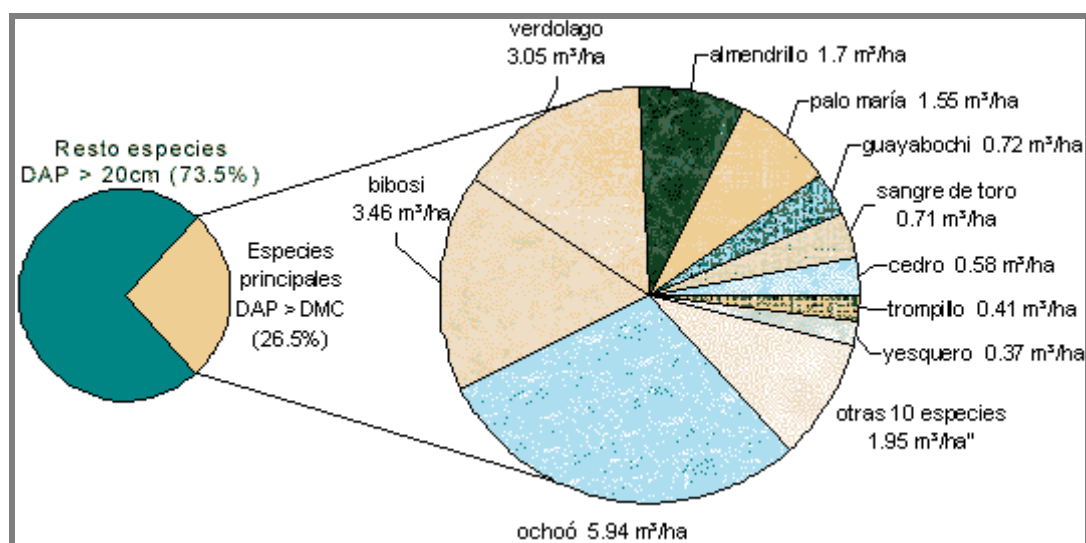
³²² N: símbolo de abundancia

³²³ *Ibíd.*

| | | | |
|------------------|-------------------------------|-------|---------|
| Trompillo | <i>Guarea spp.</i> | 1.79 | 2.01% |
| Verdolago | <i>Terminalia spp.</i> | 3.52 | 3.94% |
| Yesquero | <i>Cariniana estrellensis</i> | 0.35 | 0.39% |
| Total | | 20.06 | 22.50 % |

Fuente: *Ibíd.*

Gráfico 7. 4. Volumen de las especies principales en Preandino-amazónico.



Fuente: *Ibíd.*

Esta región de Piedemonte-amazónico presenta un promedio de volumen aprovechable muy destacado, en el que existe un claro predominio de especies valiosas. Sin embargo, las informaciones que recogen los inventarios también nos hablan de un importante volumen con respecto a las especies no valiosas o sin valor conocido. Según las estimaciones de los inventarios efectuados por la *Cámara Forestal de Bolivia*, se calcula que existen en torno a 8.78 árb./ha. y 29.86 m³/ha. de árboles maduros aprovechables y aproximadamente “el 10% de la abundancia total, 34% del área basal total y el 39% del volumen total de los bosques de pie de monte, corresponden a árboles maduros de especies comerciales que pueden ser incorporados en planes de aprovechamiento forestal”³²⁴.

Tras la fuerte deforestación de la mara ocurrida en la región de Mojos a partir de la segunda mitad del pasado siglo, otras especies han pasado a formar parte de los procesos de explotación forestal de la región, experimentando un incremento en cuanto

³²⁴ *Ibíd.*

al aprovechamiento forestal, como son el verdolago, el bibosi, el palo maría o el almendrillo. Pero entre todas las especies, los ignacianos utilizan el motacú para una gran diversidad de aplicaciones. El motacú aporta desde alimento para los animales, material para la construcción de viviendas, como semillas para la elaboración de jabones. Las comunidades del TIMI han diversificado de esta manera su producción socioeconómica en base a dicha especie que si bien han explotado *tradicionalmente*, ha sido recientemente cuando este manejo se ha visto incrementado debido a la reducción en los volúmenes de extracción de otras especies³²⁵. Este aprovechamiento forestal diversificado podría beneficiar al equilibrio sostenible del sector en el Beni y en Mojos en particular.

Tales especies corresponden a algunas de las más cotizadas en el mercado nacional por su valor comercial para las empresas madereras. Pero además poseen un alto valor agregado para las comunidades ignacianas por su uso socioeconómico. Lamentablemente, al localizarse próximas a los centros de producción y transporte, han sufrido un incremento en cuanto al volumen de explotación se refiere, debido a las facilidades derivadas de su emplazamiento. Sin embargo, esto ha sido frenado en parte, por las dificultades de acceso a los bosques de la región, que no disponen de la adecuada infraestructura vial que posibilite un paso más rápido y seguro.

7. 2. PERSPECTIVA HISTÓRICA DEL DESARROLLO FORESTAL EN MOJOS.

Las dinámicas forestales que se han venido desarrollando en el país desde la llegada de los conquistadores, han marcado las actuales políticas y acciones ligadas al uso de los bosques. El Estado ha ido modificando sus líneas de actuación frente a los actores sociales vinculados con el manejo de los bosques y frente a las singularidades del desarrollo forestal. De esta manera se hace necesario exponer un pequeño repaso de las lógicas de manejo de bosques en Bolivia desde una perspectiva histórica. Dividiré tal revisión en varias fases, y para ello me inspiro en el estudio de Pablo Pacheco -especialista en la cuestión forestal en el país-. La primera iría desde el primer tercio del siglo XIX hasta la mitad del siglo XX; la segunda comenzaría con la Revolución Nacional hasta mediados de la década de los años 80 del siglo pasado; y por último la tercera etapa correspondería a la instauración del periodo neoliberal (Pacheco P., 2009). No obstante, debemos incluir dos etapas anteriores: la prehispánica –cuando aún debería de transcurrir mucho tiempo para que el manejo de los bosques fuese

³²⁵ La quiebra del modelo *tradicional* de manejo forestal desarrollado por las comunidades locales Mojos, tuvo lugar a raíz de la imposición del nuevo modelo de explotación selectiva de los recursos maderables.

institucionalizado- y la colonial –cuando aún no estaba constituido el Estado nacional boliviano, sino que el poder era aún detentado por la corona española-.

7. 2. 1. El uso de los bosques en el mítico “Reino del Paitití”.

Los asentamientos dispersos de las antiguas poblaciones de las Llanuras de Mojos propiciaron un manejo sustentable de las selvas de esta región. La adaptación al medio natural en el que vivían fue clave para la gestión territorial y la organización del espacio. La cosmovisión de las sociedades indígenas permitió establecer relaciones de reciprocidad entre el medio ambiente y las propias poblaciones humanas. Las antiguas poblaciones de Mojos, demostraron su capacidad en el uso de una gran diversidad de técnicas de manejo de los ecosistemas naturales que incluía la construcción de canales, terraplenes, lomas, etcétera. Existen evidencias que atestiguan el menor impacto que los sistemas de producción practicados por las poblaciones indígenas provocan en los bosques, puesto que permiten la regeneración de estos al no ser el deterioro de los suelos tan severo como el provocado por la agricultura o la ganadería a mediana y gran escala. Podemos confirmar por tanto que los sistemas de uso y manejo desarrollados por tales poblaciones antes de la llegada de los conquistadores a la región, supuso un beneficio desde la perspectiva ecológica de la conservación de los bosques de la llanura. A día de hoy estos sistemas integrados se mantienen en buena medida, a pesar de la aparición de nuevos elementos perturbadores de las históricas estrategias de producción de los comunarios de los habitantes de Mojos.

7. 2. 2. La irrelevancia del sector forestal durante el periodo colonial.

Sin detenerme a analizar una vez más las implicaciones que tuvo la introducción del ganado en el siglo XVII en el Departamento del Beni, cabría recordar las transformaciones paisajísticas que tuvieron lugar en Mojos a raíz del asentamiento de las nuevas estancias ganaderas. Sin embargo, es justo reconocer que el impacto de éstas no fue muy elevado si lo comparamos al que hoy en día tiene lugar debido a la presión a la que las estancias someten a los bosques de la sabana. Marcó el comienzo del establecimiento de las estancias que irían ocupando el territorio de Mojos. Sabemos que el proceso de colonización en estas tierras despegaría en esta época debido por un lado a las políticas de colonización puestas en marcha por las administraciones coloniales y por otro lado debido al asentamiento de las misiones, desde donde se promocionó la actividad ganadera. Ésta adquirió todas las atenciones, relegando al sector forestal a un lugar que apenas fue tenido en cuenta. Si bien las potencialidades de los recursos naturales eran enormes, el uso de los bosques se caracterizó por el

manejo local. El descubrimiento posterior del caucho en el noreste del país desvió la atención de los recursos forestales existentes en los Llanos de Mojos hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX, lo cual forma parte de los siguientes epígrafes.

7. 2. 3. La nueva política forestal tras la proclamación de las independencias.

Con la implantación de la República, los bosques y territorios del oriente boliviano pasaron a considerarse como dominio del Estado el cual en un principio –y se podría afirmar que incluso a día de hoy- tuvo una muy escasa presencia en la región amazónica, hecho que favoreció la llegada masiva de colonizadores –siendo conocido este fenómeno como “la marcha hacia el oriente”- quienes fueron despojando a las poblaciones indígenas de los territorios en los que éstas se asentaban (Pacheco P., 2009: 191-193). En esta época se agudizaron las resistencias indígenas en el Beni y en concreto en el caso de Mojos emergió el movimiento milenarista de la búsqueda de la “Loma Santa” como respuesta a la ocupación de territorios por las haciendas ganaderas, las cuales utilizaron a las poblaciones *originarias* como mano de obra, en condiciones de esclavitud, provocando “*fuertes resentimientos de parte de los indígenas contra los patrones*” (*ibíd.*, 193). Esto dio lugar a graves pérdidas de territorios por parte de las comunidades indígenas a manos de los grandes ganaderos, modificando los patrones de ocupación territorial y organización espacial. Durante la segunda mitad del siglo XIX, se produjo una fuerte colonización de población foránea en todo el departamento del Beni estimulada por el “boom” del caucho. Se ha señalado además que en el año 1932 tuvo lugar la Guerra del Chaco, lo cual empujó a parte de la población indígena a huir a los montes. Este masivo proceso de colonización de la región, propició la paulatina deforestación en el Beni.

7. 2. 4. Nuevas directrices políticas a raíz de la Revolución Nacional.

La industria maderera despegó en Bolivia en el año 1953 y debido a que la caoba no era tan abundante en otros países como en el boliviano, este país se convirtió en uno de los productores principales (Barrantes, 2005: 53). La producción forestal pivotó en unas pocas especies de alto valor comercial como fue la mara, el roble o el cedro, que fueron masivamente explotadas corriendo el riesgo de convertirse en especies extintas como sucedió en El Salvador o Costa Rica (*ibíd.*).

Fue en este periodo en el que las poblaciones de Mojos se vieron más confinadas espacialmente. También fue desde entonces que el paisaje de Mojos comenzó a sufrir

una conversión de usos de suelo, transformando las zonas de bosque primario en pastos para el ganado. Además ocurrió que muchas de las áreas ocupadas hasta ese momento por las comunidades mojeñas, sufrieron la superposición de derechos propietarios frente a empresas madereras y ganaderos, debido a que *“las áreas fiscales del trópico empezaron a ser distribuidas de forma gratuita hasta las 50.000 hectáreas si correspondía la solicitud a una empresa ganadera, y hasta las 2.000 hectáreas en caso de una solicitud como propiedad mediana”* (Pacheco P., 2009: 196) en contra de las restricciones que fueron adoptadas frente a pueblos indígenas y pequeños productores del mundo rural. Los programas de colonización de tierras forestales puestos en marcha por los gobiernos en el oriente boliviano, perjudicaron sobremanera a las poblaciones *originarias* de Mojos dado que en este proceso de ocupación de tierras se favoreció a las grandes y medianas propiedades. Las comunidades mojeñas se vieron discriminadas por otra razón y es que el Estado contrajo contratos de explotación con las empresas madereras a las que aplicó fuertes exenciones fiscales o en su defecto éstas evadieron los impuestos aplicados a sus actividades forestales. Pero la pieza clave a tener en cuenta al analizar lo que ocurrió en esta época en el sector forestal es la ausencia de normas reguladas por el Estado encaminadas a controlar y limitar la explotación forestal en la región y en consecuencia la degradación de los bosques de las tierras bajas (*ibíd.*, 198).

En la década de los sesenta del siglo pasado, la explotación masiva de maderas preciosas se intensificó en Bolivia, y tras su agotamiento, nuevas especies menos valiosas pasaron a formar parte del aprovechamiento forestal, principalmente en el oriente boliviano, lo cual provocó la paulatina degradación de los bosques en esta región (Pacheco P., 1998). Debido a la sobreexplotación a la que estas especies fueron sometidas en la década de los noventa, se produjo un cambio en el modelo de aprovechamiento forestal, con el propósito de diversificar la producción, que hizo prestar mayor atención a especies que anteriormente no habían sido tenidas en consideración. Bolivia además podía presumir de contar con un buen número de tales especies de menor valor comercial: el occhó, el cedro y el roble, que desbancaron a la explotación de mara que si, como señala Barrantes, en 1998 se encontraba en el primer lugar de las principales especies forestales, en el 2000 pasó a ocupar el séptimo lugar y en el año 2002 ni siquiera fue registrada entre las 10 especies de mayor producción, debido a la escasez a la que se vio sometida (2005: 57).

7. 2. 5. Las políticas neoliberales en el sector forestal.

En el capítulo 6 se llevó a cabo un exhaustivo diagnóstico de las políticas adoptadas tras la implantación de los ajustes neoliberales dictaminadas desde las altas esferas del FMI. Por otro lado durante el gobierno neoliberal de Paz Estenssoro se implantó la *Nueva Política Económica*, NPE, que ponía en marcha los ajustes estructurales. Este nuevo régimen propició la apertura a la exportación de productos forestales que definió la nueva era en la que la deforestación y degradación forestal marcaron la tendencia.

También vimos de qué manera los gobiernos cedieron en parte a las demandas efectuadas por las organizaciones indígenas promulgando algunas leyes como la *Ley INRA* o la *Ley Forestal* –de la que trataremos en el presente capítulo– en un intento de incluir las reivindicaciones de los grupos sociales más desfavorecidos frente a las nuevas políticas de recortes sociales. Sin volver al proceso de saneamiento de tierras y a la creación de las TCOs sí que es necesario señalar a dicho proceso como responsable de las irregularidades y abusos cometidos en relación a los derechos forestales. Es decir, la regulación de las propiedades agrarias se hizo en detrimento del desarrollo forestal debido a una razón básica y es que la FES tuvo sólo en cuenta criterios de uso agropecuario en contraposición a los forestales, al ser el desmonte el medio más sencillo y económico –legalizado por medio de los *Planes de Ordenamiento Predial* aprobados por la *Superintendencia Agraria* (SA)– que justificaba la posesión de la tierra (Pacheco P., 2009: 203). Ante esto surge una cuestión fundamental y es que no se entienden los motivos que llevaron a discriminar las regulaciones ligadas al desmonte y el porqué la Superintendencia Agraria se interpuso en esta materia a la *Superintendencia Forestal*³²⁶ (SF), a quien le correspondían estas competencias de las que se vio relegada. Incluso desde la Superintendencia Agraria se sancionaron planes de desmonte³²⁷ en áreas que estaban clasificadas como de producción forestal permanente, lo cual es jurídicamente ilegal (*ibíd.* 204).

El proceso de saneamiento de tierras pese a haber supuesto un paso adelante en materia agraria, actuó de manera negativa con respecto a la conservación de los bosques del Beni (véase **cuadro 7. 6**). Y en lo concerniente a las poblaciones indígenas, estas sufrieron los efectos indirectos al ver ocupados sus territorios por parte de las empresas madereras.

³²⁶ la Superintendencia Forestal fue la institución encargada de hacer la vista gorda y conceder permisos de explotación forestal a dichas empresas madereras que operaron en Mojos en la década de los 80 y 90 del siglo pasado.

³²⁷ Los permisos de desmonte son otorgados siempre que se cumplan unos requisitos: ya sea por la instalación de líneas de comunicación, cortafuegos, infraestructura en general o bien desmontes por tierras aptas para diversos usos. A la segunda opción, cargada de ambigüedad por la generalidad que representa “usos diversos”, es a la cual se acogen la mayor parte de los ganaderos a la hora de convertir los suelos de la sabana en pastizales para el ganado.

Cuadro 7. 6. Deforestación en el Departamento del Beni, 1985-1990.

| Superficie Departamento Beni, 1990 (miles de has.) | | Desbosques (miles de has.) | | Porcentaje deforestación ³²⁸ | |
|---|---------|-------------------------------|---------------|--|---------------|
| Total | Bosques | Hasta 1985 | Hasta 1990 | Hasta 1985 | Hasta 1990 |
| 19.627 | 8.341 | 161 | 208 | 1,93% | 2,49% |

Fuente: Elaboración propia en base a Pacheco P., 1998b.

En el caso del Departamento del Beni la falta de infraestructuras y el difícil acceso por vía terrestre permitió mantener un nivel de deforestación moderado hasta la década de los setenta. Por ello durante este periodo la actividad maderera se concentró en el departamento de Santa Cruz hasta la construcción, a finales de dicha década, de la carretera que va de Trinidad a la propia ciudad de Santa Cruz de la Sierra (Pacheco P., 1998b). Esto explica, según autores como Pacheco, el escaso avance del mercado de exportación de recursos forestales a nivel internacional (*ibíd.*, 194). La mara era la especie más buscada en estos momentos y tras haber ocurrido un importante agotamiento de dicho recurso, las empresas madereras y los motosierristas encontraron en la Llanura beniana un nuevo filón para la explotación de dicha especie forestal.

Desafortunadamente, no he obtenido datos oficiales acerca de la tasa de deforestación del Beni que alcance el momento actual. Sí que se ha conseguido de conjunto del país.

7. 2. 6. Tendencia actual del sector forestal en Bolivia y el Beni.

A pesar de los discursos y las propuestas tan bienintencionadas para lograr un manejo integral del bosque en Bolivia, hasta la fecha, debido a la falta de aplicabilidad de los instrumentos que se encargan de reorientar el desarrollo forestal del país, los resultados son aún incipientes y está por ver qué sucederá en un futuro.

En el *Plan Nacional de Desarrollo*³²⁹, 2006-2011, (PND) el capítulo dedicado a los recursos ambientales señala entre los principales proyectos: el “*impulso a la Forestería Comunitaria mediante una gestión integral del bosque*”, así como la apertura de complejos productivos forestales a los mercados, lo cual se refiere al intento por parte del gobierno de paliar las necesidades económicas de las poblaciones

³²⁸ Con respecto a la superficie de bosques del Departamento.

³²⁹

http://www.constituyentesoberana.org/3/propuestas/gobierno/11_Min_Planificacion_Plan_Nal_Desarrollo_Nal.pdf.

con más carencias a partir de la creación de incentivos a la actividad forestal, siempre en el marco de la conservación de la naturaleza.

Otro punto importante incluido en este plan es el referido a la creación del *Instituto Boliviano de Investigación de la Biodiversidad para el Desarrollo* (IBIBD), al que se le encarga la misión de formular y ejecutar “*proyectos integrales y sustentables de investigación y desarrollo para el aprovechamiento y conservación de los recursos de la biodiversidad para la producción, con la participación de la comunidad y el sector productivo*” (ibíd.). Se apunta además a la recuperación y valoración de los saberes y culturas *tradicionales* de los pueblos indígenas *originarios* en el marco de las políticas sociales que el Estado pondrá en marcha, prometiendo como garantía la sistematización, la protección y el registro de estos. Incluso se propuso un cambio de paradigma por el cual se adoptaría un nuevo modelo de desarrollo forestal encaminado a lograr un manejo integral de los bosques, el cual fue formulado por la *Política Nacional de la Gestión Integral de los Bosques* del Ministerio de Desarrollo Rural, Agricultura y Medio Ambiente (MDRAyMA) en el año 2008 (Pacheco P., 2009: 206-207).

Visto así parece que se podría lograr un avance enormemente positivo con respecto al manejo forestal, el cual se pretende que ante todo sea integral. Sin embargo, las aplicaciones reales de la nueva política forestal han sido más bien escasas. A día de hoy los propósitos originales no han dado los frutos esperados por lo que se ha avanzado menos de lo previsto. A pesar de dichas propuestas, en el caso de Mojos, los pocos programas encaminados a lograr un manejo comunitario e integral de los recursos forestales, han sido puestos en marcha por algunas de las organizaciones que trabajan por el reconocimiento de las sociedades indígenas, como son los casos de CIPCA u HOYAM, entre otras. Inclinarsé por un manejo múltiple, como hasta el momento vienen haciendo las comunidades indígenas, favorece la generación de importantes beneficios en el seno de estas familias quienes de esta manera tienen la posibilidad de combinar diversos sistemas de explotación para evitar con ello verse limitados a depender exclusivamente de un único sistema de aprovechamiento de los recursos naturales. Pero no sólo el manejo integral del bosque reportaría beneficios a las poblaciones indígenas, sino que los pequeños productores e incluso las empresas madereras también podrían verse favorecidas al incrementar la explotación a partir de la diversificación en el aprovechamiento de actividades y de comercialización de los recursos forestales, reorientando la producción hacia otras actividades.

Existe cierta información interesante relativa al sector forestal en el Beni. A finales de la década de los ochenta, la madera y los productos elaborados con esta materia prima, suponían un gran aporte al PIB del departamento (véase **cuadro 7. 7**).

Estos sufrieron un importante descenso hasta 1993 cuando repuntó hasta alcanzar cifras de algo más del 33% en el año 1995. Desde entonces experimentó nuevamente una notable caída para mantenerse en la primera década del siglo XX en torno al 3%-4% en relación al PIB del Beni. Estos datos nos llevan a pensar principalmente en una cosa y es que con la entrada en vigor de la Ley Forestal en el año 1996, la extracción y producción de madera se vio reducida. Podría ser debido al incremento de controles y seguimiento en lo que se refiere a los nuevos planes de manejo forestal.

Cuadro 7. 7. Relación del Producto Interno Bruto de la actividad forestal en el departamento del Beni, en porcentaje.

| DESCRIPCIÓN | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
|-------------------------------------|------|------|-------|--------|------|-------|-------|------|------|-------|------|
| PRODUCTO INTERNO BRUTO | 2,29 | 5,25 | -1,01 | -2,19 | 3,64 | 2,68 | 3,15 | 3,47 | 6,53 | 3,59 | 7,2 |
| Madera y Productos de Madera | 9,5 | 2,8 | -5,26 | -10,12 | 6,98 | 33,45 | 33,73 | 5,91 | 4,67 | -0,13 | 7,76 |

| DESCRIPCIÓN | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 (p) | 2007 (p) | 2008 (p) | 2009 (p) |
|-------------------------------------|------|------|-------|-------|------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| PRODUCTO INTERNO BRUTO | 2,69 | 1,9 | -0,08 | -0,07 | 1,7 | 1,14 | 10,36 | 0,91 | 3,48 | 3,75 |
| Madera y Productos de Madera | 3,36 | 1,59 | 0,74 | 1,98 | 2,72 | 0,28 | 3,17 | 4,94 | 8,17 | 3,48 |

Fuente: elaboración propia en base a los datos del INE (www.ine.gob.bo)

Y en cuanto a la superficie destinada al manejo forestal, los datos de la siguiente tabla nos indican varias cuestiones. Por un lado podemos extraer información acerca de las concesiones de manejo forestal, las cuales se han visto reducidas en el caso de las empresas y de los contratos a largo plazo al tiempo que se han incrementado aquellas concedidas a tierras indígenas y campesinas. Y paralelamente a esto se ha producido un aumento de las concesiones a las propiedades privadas. Por otro lado, y lo más importante, es que la superficie dedicada al manejo forestal ha ido ligeramente aumentando. Puede que la razón que explique esta tendencia sea que las empresas madereras hayan solicitado la conversión voluntaria, de lo cual se hablará más adelante, demandando planes de manejo en propiedades privadas para poder continuar con sus actividades forestales, puesto que es en éstas donde ha tenido lugar un incremento más destacado. Pero esto sólo sería una hipótesis puesto que no ha podido ser contrastado. Sería optimista pensar que se debe a que se está llevando a cabo un manejo controlado de los recursos.

Cuadro 7. 8. Superficie dedicada a manejo forestal en miles de hectáreas.

| | En miles de hectáreas | | | En porcentaje | | |
|-------------------------------------|-----------------------|-------|-------|---------------|------|------|
| | 1998 | 2002 | 2006 | 1998 | 2002 | 2006 |
| Concesiones a empresas | 5.449 | 5.399 | 4.911 | 86,8 | 72 | 55,5 |
| Concesiones a ASL | | 481 | 739 | | 6,4 | 8,4 |
| CLP³³⁰ a empresas | 343 | 194 | 194 | 5,5 | 2,6 | 2,2 |
| Propiedades privadas | 93 | 558 | 1.517 | 1,5 | 7,4 | 17,1 |
| Tierras indígenas | 122 | 556 | 977 | 1,9 | 7,4 | 11 |
| Campesinos | | 12 | 279 | | 0,2 | 3,1 |
| Otros derechos | 268 | 302 | 236 | 4,3 | 4 | 2,7 |
| Total | 6.275 | 7.502 | 8.853 | 100 | 100 | 100 |

Fuente: Pacheco P., 2009: 218.

A partir de la entrada en vigor en el año 1996 de la Ley Forestal -Ley nº 1700-, se produjo un decrecimiento en el volumen de las exportaciones de productos forestales³³¹

³³⁰ Contratos de Largo Plazo.

³³¹ Los recursos maderables –roble, mara o cedro- y no maderables provienen de más de 60 especies y de ellos se obtienen productos elaborados y semielaborados. De entre los primeros destaca los tableros, láminas, sillas, muebles, mesas, contrachapados, etcétera, mientras que los recursos no maderables más frecuentes serían la madera aserrada o en bruto, entre otros (CFB, 2006).

que paulatinamente iría remontándose con la llegada del nuevo siglo hasta alcanzar altos valores, como bien indica el dato del 2006 (véase **cuadro 7. 9**).

Cuadro 7. 9. Relación del valor de las exportaciones forestales en millones de dólares.

| AÑO | 1997 | 2001 | 2004 | 2005 | 2006 |
|-------------------|-------|------|-------|-------|-------|
| VALOR EXPORTACIÓN | 135.7 | 86 | 145.1 | 164.7 | 186.7 |

Fuente: elaboración propia en base a los datos de CFB, 2006 (<http://www.cfb.org.bo/CFBInicio/>)

Tuvo lugar un notable incremento en la obtención de productos elaborados frente a la caída, que poco a poco se ha recuperado, de la obtención de productos semielaborados. Esto podría ser entendido como un signo de fortalecimiento del sector forestal en términos comerciales, lo cual reportaría importantes beneficios al país. Para ello sería necesario formular planes de manejo frente a las especies destinadas en mayor proporción a la producción de madera con vistas a la elaboración de productos elaborados (como pueden ser los muebles). El siguiente cuadro ilustra las especies maderables de mayor producción.

Cuadro 7. 10. Especies maderables bolivianas de mayor producción.

| ESPECIE | VOLUMEN DE PRODUCCIÓN (millones de m ³) | PORCENTAJE CON RESPECTO AL TOTAL |
|--------------|---|----------------------------------|
| Ochoó | 145.9 | 14.9% |
| Almendrillo | 72.7 (r) ³³² | 7.4% |
| Tajibo | 55.8 | 5.7% |
| Mapajo | 48.7 | - |
| Roble | 36.1 (r) | - |
| Bibosi | 33.2 (r) | - |
| Hoja de yuca | 32.5 (r) | - |
| Verdolago | - | - |
| Soto | - | - |
| Cedro | - | - |

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de CFB, 2006 (<http://www.cfb.org.bo/CFBInicio/>)

³³² Se refiere al volumen de árboles de raleo.

En cuanto a los países a donde se exportan los recursos forestales, aparecen indicados en el siguiente cuadro.

Cuadro 7. 11. Relación de los países importadores de recursos forestales de Bolivia y su valor en dólares para el año 2006.

| PAÍS | VALOR EN MILLONES DE DÓLARES | PORCENTAJE CON RESPECTO AL TOTAL |
|----------------|------------------------------|----------------------------------|
| ESTADOS UNIDOS | 64.5 | 34.5% |
| REINO UNIDO | 29 | 15.5% |
| PAÍSES BAJOS | 10.7 | 5.7% |
| CHILE | 9.8 | 5.2% |
| CHINA | 9.1 | 4.8% |

Fuente: elaboración propia en base a los datos de CFB, 2006 (<http://www.cfb.org.bo/CFBInicio/>)

Este cuadro (7 .11) se refiere a las exportaciones de recursos forestales en términos generales. Sin embargo, el asunto cambia teniendo en cuenta exclusivamente las exportaciones de recursos maderables. Aquí Estados Unidos mantiene la primera posición pero esta vez es China quien se adelanta hasta el segundo puesto. Aunque el dato más relevante es la participación de Brasil, a quien le corresponde un 4% del total del monto de las exportaciones (CFB, 2007a). Este dato puede resultarnos extraño conociendo el potencial forestal de dicho país sudamericano.

En cuanto a aquellos departamentos de Bolivia que más productos forestales exportan, destaca por encima de todos el departamento del Beni, superior incluso al de Santa Cruz (véase **cuadro 7. 12**).

Cuadro 7. 12. Departamentos³³³ exportadores de productos forestales³³⁴.

| DEPARTAMENTO | PORCENTAJE |
|--------------|--------------|
| BENI | 33% |
| SANTA CRUZ | 27% |
| LA PAZ | 26.5% |
| COCHABAMBA | 9% |

Fuente: elaboración propia en base a los datos de CFB, 2006 (<http://www.cfb.org.bo/CFBInicio/>)

³³³ Esta información se ha obtenido utilizando como criterio el lugar de origen de la empresa, el cual es el que aparece en la factura comercial de la exportación.

³³⁴ Principalmente consisten en productos maderables.

7. 3. USUARIOS DE LOS BOSQUES EN LA REGIÓN DE MOJOS.

En el estudio de los actores participantes del sistema forestal en Bolivia, podríamos establecer la distinción entre los actores económicos y los actores institucionales. He optado por dedicar uno de los epígrafes exclusivamente al segundo grupo y será el correspondiente a las instancias forestales. Por ahora me limito a presentar a los actores sociales.

En la región de Mojos son varios los grupos sociales que hacen uso de los recursos naturales que el bosque aporta. Se han identificado las siguientes categorías: *Tierras Comunitarias de Origen*, empresas madereras, *Agrupaciones Sociales del Lugar* (ASL) y motosierristas y *piratas* (productores ilegales de madera). Sin embargo en algunos casos -principalmente en el de el último grupo- no es tarea fácil identificar a cada uno de ellos dado que en ocasiones operan de manera negligente.

Las dinámicas y las relaciones frente a los recursos naturales de los bosques de Mojos, varían según el grupo social del que se trate. La percepción del entorno natural no es la misma dependiendo de quienes sean los usuarios. La actitud que mantiene cada uno de los actores, se ve condicionada por su particular recorrido histórico, económico y cultural y responde a la contingencia, a la construcción de experiencias acumuladas con el correr de los años. La incidencia sobre las tierras forestales de cada uno de los usuarios del bosque varía en función de los diferentes usos de la tierra y modos de aprovechamiento. Nos enfrentamos, por tanto, a la existencia de una compleja diversidad relativa a las formas de acceso y de aprovechamiento, de niveles de desarrollo tecnológico y de relación con los mercados nacionales en lo respecta a la actividad forestal. Las actitudes que mueven a los usuarios forestales oscilan entre el interés comercial y la sostenibilidad ambiental. Este es el principal motivo de que surjan, frecuentemente, conflictos en Mojos entre los diferentes actores debido a las disputas surgidas a causa del control, uso y manejo de los recursos naturales.

Por el contrario, en buena parte de Bolivia los pequeños agricultores entran en escena como uno de los agentes que más incide en la deforestación de las tierras forestales del país. En el caso de Mojos esto no ha ocurrido dado que este colectivo se ha asentado mayoritariamente en el bosque de Chimanés y en las zonas de producción de coca del Chapare, en donde se han establecido para desmontar importantes extensiones de bosque transformando los usos del suelo, que han pasado a presentar un uso de predominio agrícola.

7. 3. 1. Comunidades indígenas del TIMI.

Desde disciplinas tales como la agroecología o la etnoecología, los sistemas de producción local, como es el caso de los desarrollados por los indígenas, han sido reconocidos por el enorme valor que estos poseen al permitir la regeneración de los recursos. Podemos calificar el aprovechamiento forestal de las comunidades ignacianas como sostenible. Para Grayson este concepto es intrínseco a los sistemas indígenas *tradicionales* los cuales llevan a cabo un manejo forestal inspirado en una ética medioambiental basada en: la cooperación, la transmisión generacional de conocimientos, la búsqueda del bienestar para futuras generaciones, el uso local orientado al autosustento, los derechos territoriales colectivos inalienables a la comunidad y las restricciones a la explotación de recursos en determinados lugares, como los lugares sagrados (2004: 135).

Cuando las empresas forestales incursionaron en el territorio mojeño-ignaciano se produjeron transformaciones en la vida comunal a nivel económico. Los recursos naturales que anteriormente se habían destinado al consumo familiar adquirían ahora un valor económico añadido y se convertían en una fuente codiciada por muchos. Surgieron, como consecuencia, conflictos entre algunas familias de las comunidades y entre éstas y alguno de los dirigentes de la propia organización -la Subcentral del TIMI- quienes movidos por intereses puramente personales contrarios a los intereses colectivos de las comunidades, se apropiaron de manera indebida de los recursos del territorio o incluso llegaron a negociar con los agentes externos por la explotación de estos, dando a conocer los lugares óptimos para su extracción.

En la comunidad de Monte Grande, Húascar Gutiérrez relata que:

“los comunarios vendieron los recursos a los propios ganaderos, no entraron empresas. Aquí hubo corregidores que se aprovecharon de su posición, sin consultar a las bases hicieron chequeos y corta de madera y eso lo vendieron a los ganaderos que compraban madera para hacer sus alambradas” (entrevista).

Algo similar ocurrió en la comunidad de Chontal (entrevista a Esteban Pacema, corregidor).

Desde CIPCA se han señalado varios factores que explican el “*mal negocio*” que las familias involucradas en la explotación forestal realizaron, como fueron “*la falta de experiencias en los mecanismos de mercado*”, las maneras de negociar frente a los comerciantes madereros o “*las condiciones de semiclandestinidad*” (2005: 77). Todo ello provocó, al igual que sucede en el acceso a la tierra, la desigualdad en el aprovechamiento de los recursos forestales.

Las poblaciones indígenas de Mojos mantienen una dependencia directa frente a los recursos forestales. Estos actúan como sustento de las comunidades mojeñas. En el caso particular del TIMI, los bosques proporcionan alimento; material para la construcción de las viviendas (motacú, la tacuara, la chonta o el curupaú); para la fabricación de utensilios de cocina (manija o manatacú para moler grano en el tacú que es un recipiente de grandes dimensiones, sopladores, etcétera); carros; canoas; leña para cocinar; plantas con propiedades medicinales; champús y jabones (entrevista a Juana Muiga).

Fotografía 7. 1. Imágenes de objetos cotidianos utilizados por los ignacianos a partir de recursos maderables.



Fuente: Virginia Jabardo Pereda

La explotación forestal les permite además a los comunarios ignacianos, obtener ciertos recursos monetarios en caso de surgimiento en el seno familiar de una

determinada necesidad como puede ser compra de medicinas, el hecho de que algún miembro de la familia deba acudir al hospital, compra de material escolar, etcétera (grupo de discusión Bella Brisa). No significa esto que recurran a la explotación forestal como modo de generación de ingresos y que puedan dedicarse exclusivamente a esta actividad a la hora de mantener económicamente a la unidad familiar. Tampoco quiere decir que bajo estas circunstancias no exista ningún tipo de control. Cuando la comunidad quiere vender, se reúne y se consensúa entre todos los comunarios. Cuando se dan estos casos, la familia en concreto debe solicitar permiso en el Cabildo al conjunto de la comunidad para que éste le conceda el derecho a obtener varios árboles, los cuales venderá a un comerciante por un precio no estipulado al no estar definido por las leyes de la oferta y la demanda sino por la *“habilidad de las empresas madereras y de los comerciantes que controlan su fijación”* (Flores, Guzmán I., y Paz W., 2002: 68). Este precio es negociado por tanto, en el momento de la transacción. En este intercambio entran en juego varios factores que determinan la desigualdad del mismo.

En base a la terminología propuesta por Elman Service para establecer las tipologías de la reciprocidad en sociedades tribales, podríamos referirnos a estos intercambios como de “reciprocidad negativa” donde las transacciones se dirigen hacia una “ganancia utilitaria neta” y para ello se sirven de engaños, trampas y juego sucio, estrategias todas ellas desplegadas por uno de los participantes con el fin de maximizar su propio beneficio (Moreno Feliú, 2004: 189-218).

Otros autores han apuntado la misma idea en base a la relación que se establece entre el trabajo que un comunario debe emplear en la explotación de recursos maderables y los ingresos que de ello obtiene, demostrando de esta manera hasta qué punto los indígenas no adquieren un beneficio que se corresponda con el esfuerzo y tiempo dedicado (Flores, Guzmán I., y Paz W., 2002). El trabajo citado nos advierte sobre esto con la siguiente fórmula:

“Una persona demora aproximadamente dos días en la extracción de 30 unidades de palmito, entre buscarlo, cortarlo y transportarlo hasta el lugar de venta; el costo de cada palmito puesto en la comunidad es Bs³³⁵. 1,50, por tanto, el ingreso que genera es de Bs. 45. Esta cantidad dividida entre los dos días de trabajo, significa Bs. 22,50 por día, lo que equivale a un jornal de trabajo. De modo que la persona que se dedica a esta actividad, sólo recupera su mano de obra a precio de jornal y el producto sale gratis para el comerciante” (ibíd., 67).

³³⁵ 22,5 pesos bolivianos equivaldría a unos 2 euros y medio. Si bien hay que tener en cuenta que el trabajo de dichos autores se fecha en el año 2002.

Estas dificultades se ven agravadas cuando los comunarios carecen de motosierras y se ven obligados a acudir a motosierristas que les hagan el trabajo, o a que tabloreen los árboles, lo cual significa compartir los ingresos con estos (*ibíd.*).

El desarrollo local y comunitario en las comunidades del TIMI, aparece estrechamente ligado a la gestión del territorio. La revalorización de los saberes locales referidos al manejo de los bosques se hace indispensable para conseguir un desarrollo sostenible e integral. Por dicho motivo la consecución de la autonomía indígena ocupa un lugar de máxima relevancia para las organizaciones indígenas de Mojos y para su gobierno municipal. Los bosques son, además, el hábitat natural donde se asientan las comunidades indígenas, el lugar donde los mojeños van a cazar, a pescar, donde cultivan sus chacos y donde se ponen en marcha, en definitiva, sus esquemas socioculturales y productivos. Se puede afirmar que gracias a los recursos forestales los mojeño-ignacianos logran satisfacer en buena medida sus necesidades diarias.

Algunos estudios distinguen 3 tipos de usos con respecto al aprovechamiento forestal por parte de los indígenas (de Vries, 1998: 38). Estos serían:

- ✓ el uso doméstico-tradicional,
- ✓ uso tradicional-comercial,
- ✓ uso comercial.

El primero de ellos se refiere al aporte que los bosques suponen para las poblaciones indígenas, de donde se proveen para la obtención de una amplio elenco de productos: “*madera para la construcción de casas, escuelas, canoas y puentes; hoja de palmera para los techos de la casa; hojas, fruta, madera para artesanía; plantas medicinales; animales, frutas y miel para el consumo; etc.*” (*ibíd.*). El uso tradicional-comercial hace referencia al aprovechamiento de recursos forestales con la finalidad de obtener un pequeño ingreso económico que les permita la compra de algunos de los bienes básicos requeridos en las comunidades pero inexistentes en ellas como pueden ser el aceite, jabón, sal, ropa, materiales de cocina como cuchillos, pilas para las radios, etcétera. Por último, el tercer tipo, a diferencia del anterior que suponía la extracción a pequeña escala, hace referencia a la obtención de productos maderables y no maderables en un volumen superior con vistas a obtener un mayor monto económico. Éste último es el que menos frecuentemente se practica en las comunidades mojeño-ignacianas, siendo los dos primeros los más habituales.

Habría que añadir un elemento clave en todo esto y es que tanto para el segundo tipo como para el tercero, se requeriría de un plan de manejo forestal el cual se debe presentar a la actual *Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra*

(ABT). Si bien viene estipulado en la Ley Forestal, en las comunidades de Mojos no siempre se respeta. Veremos más adelante cómo con respecto al uso tradicional-comercial, a la hora de entablar negociaciones entre los comunarios y los comerciantes madereros (ya sean motosierristas ilegales, aserraderos o empresarios) el acuerdo al que se llega por ambas partes no se ajusta a ningún tipo de normativa reguladora de la actividad forestal. No se tiene en cuenta la legislación que determina de qué manera se deben realizar estos intercambios comerciales y que establece el marco legal del sector forestal. No obstante, baste mencionar que en los primeros años del siglo XXI sí se pusieron en marcha planes de manejo forestal en 3 comunidades de la TCO del TIMI, siendo éstas: Chontal, Litoral y Villa Esperanza. También se puede anticipar un interesante plan de manejo forestal, en este caso del cacao, que se ha puesto en marcha recientemente en una de las comunidades del TIMI: San Miguel del Mátire.

Los usos forestales desarrollados en las *Tierras Comunitarias de Origen* son predominantemente extensivos y consisten principalmente en la práctica de la agricultura de tumba y quema con rotación de barbechos, lo cual no supone una degradación intensa de los bosques de la región, al contrario, puesto que se propicia su regeneración (Pacheco P., 2009: 212). Los métodos de manejo de los bosques característicos de las poblaciones indígenas del Beni, contribuyen por tanto a la preservación de los ecosistemas amazónicos de la región, hábitat del pueblo mojeño. Este tipo de sistema se caracteriza por integrar el manejo de bosques, chacos, que van rotando y cultivos domésticos en las áreas próximas a las viviendas (como puede ser el motacú, el café, cacao o cítricos). Sin embargo, no existe ningún tipo de incentivos a este modelo de explotación al primar un paradigma dominante de explotación de recursos a corto plazo (Pacheco P., 2009) que precipitó la degradación de las selvas de Mojos. El problema surge cuando el espacio se va viendo progresivamente reducido por el avance de las estancias ganaderas.

A pesar de que *tradicionalmente* los comunarios mojeños habrían controlado con el acceso, el manejo y el aprovechamiento a los recursos naturales de los territorios en los que habitaban, desde varias décadas atrás esto se estaría volviendo más complicado. Los motivos que lo explican son varios. Por un lado cabría señalar la presencia cada vez más importante de otros grupos sociales, principalmente los grandes propietarios de haciendas ganaderas quienes están convirtiendo los bosques y las pampas de Mojos en pasturas para el ganado. Otra razón, no menos importante que la anterior, sería la participación de muchos comunarios en las redes comerciales de venta de productos - tanto maderables como no maderables- donde presionados por la lógica del mercado se han visto imbricados en actividades ilegales de explotación forestal. Se discriminó el modelo de explotación forestal efectuado históricamente por los indígenas adoptando

un modelo de aprovechamiento basado en la explotación selectiva de las especies maderables de más valor desde un punto de vista comercial, como era la mara o caoba, a lo que contribuyeron las políticas encargadas de aplicar la legislación forestal, dando como resultado la concentración en pocas manos de los bosques (Pacheco P., 2009).

La consecuencia de todo ello es que por un lado los bosques de Mojos han sufrido un fuerte impacto medioambiental. Por otro lado provoca cierto resquebrajamiento del tejido social: si, anteriormente, el uso comercial estaba condicionado a los requerimientos básicos de la unidad familiar, en la actualidad se ha incrementado el número de mojeños que buscan lograr un complemento a su economía familiar a través de la venta de recursos obtenidos a partir de la actividad forestal.

7. 3. 2. Empresas madereras.

Antes de comenzar, habría que señalar que en la actualidad apenas sí existe una destacada actividad forestal en cuanto a empresas forestales se refiere. Esto es debido no al cumplimiento de las disposiciones que regulan el acceso a los recursos maderables, sino porque fue durante las décadas de los ochenta y noventa del siglo pasado que la región mojeña sufrió una importante deforestación.

A consecuencia de los Decretos Supremos, firmados en los noventa, que constituirían el primer paso en la titulación de territorios comunales a favor de pueblos indígenas de Mojos (véase **cuadro 4. 11**), los empresarios madereros comenzaron a explotar de manera agresiva los recursos maderables que se encontraban al interior de lo que hasta entonces habían sido sus concesiones (Brito, 1998: 132-133). Aquí marca el origen Sonia Brito del nacimiento de los *motosierristas*, personajes contratados por los propios empresarios para explotar las maderas de forma ilegal. Y es que las concesiones forestales otorgadas por el Estado a las empresas madereras fueron en detrimento de los pueblos indígenas y sobre todo de sus territorios al legalizar la explotación de recursos forestales.

Para Pablo Pacheco, el uso forestal desarrollado por estos grupos sociales consistiría en el aprovechamiento comercial de especies de madera debidamente seleccionadas por medio de las concesiones forestales (2009: 212). Veremos cómo lamentablemente, esto no siempre se ha cumplido.

Ya se ha comentado que dicha región es rica en mara o caoba, una de las especies más cotizadas en los mercados internacionales. Las empresas madereras, tras descubrir el precioso filón que significaba la riqueza de la existencia abundante de mara en los bosques amazónicos de Bolivia, llevaron a cabo una explotación sistemática y selectiva

de este recurso maderable. En este proceso no se tuvo en ningún momento en cuenta a las poblaciones indígenas.

En pocos años el nivel de extracción se multiplicó paralelamente al precio que la caoba adquiriría en el mercado internacional. El Estado aprovechó entonces la coyuntura internacional (recordar que el país estaba inmerso en programas de ajuste estructural caracterizados por seguir una tendencia eminentemente neoliberal). Los gobiernos de turno de Bolivia pusieron en marcha políticas gubernamentales dirigidas al fortalecimiento del sector forestal. Gudrún Birk señala algunas de las medidas adoptadas desde el gobierno de la nación, las cuales estaban encaminadas a la promoción de la exportación de los recursos maderables: *“nuevas políticas de devaluación de la moneda, incentivos fiscales, subsidios para los costos de transporte y la construcción de caminos que abarataron aún más el costo de transporte”* (2000: 39). Las concesiones al aprovechamiento forestal se incrementaron notablemente hasta la entrada en vigor, en el año 1996, de la Ley forestal.

Para el caso de Mojos, se pueden señalar tres empresas que operan o han operado, recientemente, de manera oficial :

- ✓ Hervel Ltda.
- ✓ Cimagro Ltda.
- ✓ Monte Grande Srl.

Estas no han respetado un manejo y aprovechamiento de los recursos orientado a la preservación de la biodiversidad. Una vez más me remito a Birk para indicar que los madereros no estuvieron interesados en desarrollar un manejo sostenible de los recursos puesto que las concesiones forestales se hacían a corto plazo, lo cual quiere decir que *“la inversión en actividades de manejo no les resultaba rentable”* (2000: 40).

Fotografía 7. 2. Imagen de cargado de trozas en rodeo



Fuente: Museo San Ignacio de Mojos.

7. 3. 2. 1. Concesiones forestales.

Las concesiones forestales son otorgadas por la ABT para permitir el aprovechamiento forestal en un área circunscrita a su correspondiente límite. Las concesiones de manejo forestal tienen como finalidad lograr el aprovechamiento sostenible, de ahí la obligación de efectuar los planes de manejo. La concesión se mantiene vigente por un periodo de 40 años para lo cual se realizan las auditorías quinquenalmente por técnicos de la propia institución, quienes proceden a su revisión (entrevista a Roberto Ríos, Jefe Nacional de Promoción del Desarrollo Integral de Bosques, ABT). ABT es quien decide prorrogar su derecho o revertirlo al Estado, independientemente de que les haya sido otorgado por dicho espacio de tiempo. Tal organismo puede hacer inspecciones forestales (se efectúan de manera aleatoria) previa aprobación al plan de manejo y durante la ejecución, aunque para ello dependen del presupuesto disponible para los recursos humanos y la logística (entrevista a Roberto Ríos). En realidad, se hacen controles a las empresas que más producen o que se asientan en aquellas áreas de mayor riesgo ambiental.

La *Ley Forestal* estipula que la concesión forestal es un derecho que se le da a un particular para aprovechar los recursos del bosque pero siempre que esta explotación se lleve a cabo en tierras fiscales, por lo que el Estado debe garantizar que realmente es tierra fiscal el terreno de explotación y que no pertenece a otro propietario. Se deben tomar las precauciones debidas para evitar la sobreposición.

Tras la entrada en vigor de la nueva legislación forestal, de las 185 empresas inscritas en el sector forestal, 104 se acogieron a la figura de la conversión voluntaria y entre éstas 88 obtuvieron concesiones, lo cual supuso una reducción de la superficie en

casi la mitad, puesto que se pasó de 11.757.264 hectáreas a 5.728.017 hectáreas (de Vries, 1998: 33). Sin embargo, estas cifras no se deben acoger con optimismo al conocer que la mayor parte de las concesiones se instalaron en áreas ricas en madera (con anterioridad a la nueva legislación el 40% se ubicaba en áreas sin potencial forestal) (Pacheco, P. 1998b, cit. en de Vries., 1998: 33).

La concesión forestal obliga al pago anual de un dólar por cada hectárea. Esto viene a ser la “Patente Forestal”, estipulada en la Ley 1700 (artículos 36 y 37). Las concesiones forestales suelen tener un plan de manejo forestal con el fin de garantizar la aplicación de buenas prácticas de aprovechamiento³³⁶.

A día de hoy “*no existen concesiones forestales ni ASL en el municipio*” (referido al municipio de San Ignacio de Mojos) (entrevista a Roberto Ríos). Sin embargo, en la TCO TIMI queda atestiguada la concesión en años atrás de varias concesiones forestales a distintas empresas (véase **cuadro 7. 13**) –entre las que se encuentra aquellas que han sido ya citadas anteriormente: Cimagro, Herval y Monte Grande- bajo planes de manejo forestal hasta finales del año 2002 (Superintendencia Forestal, 2003).

Cuadro 7. 13. Concesiones forestales en el municipio de San Ignacio de Mojos, reguladas por PGMF desde marzo de 1997 a diciembre de 2002.

| Nº | Razón Social | Municipio | RS_CO | RS_PGMF | Superficie (hectáreas) |
|----|--|--|----------|----------|------------------------|
| 1 | Compañía Industrial Maderera y Agropecuaria Cimagro tda. | San Ignacio de Mojos | 097/2001 | 028/2001 | 29.019 |
| 2 | Industria Maderera Herval tda. | San Ignacio de Mojos | 097/2001 | 028/2001 | 96.783 |
| 3 | Empresa Maderera Fátima tda. | San Ignacio de Mojos, San Borja, Santa Ana | 103/1998 | 032/1999 | 80.652 |
| 4 | Industria Maderera Monte Grande S. R. L. | San Ignacio de Mojos | 124/1997 | 092/1998 | 66.278 |
| 5 | Proyectos Integrales S. A. (Ex -Yucumo tda.) | San Ignacio de Mojos, San Borja | 058/1997 | 086/1998 | 92.564 |

Elaboración propia en base a Superintendencia Forestal, 2003: Anexo Capítulo 2.

³³⁶ Según la Ley Forestal los pueblos indígenas deben pagar sólo por el área aprovechada anualmente.

La inexistencia a día de hoy de una actividad destacada por parte empresas madereras en el TIMI, nos habla de la escasa importancia concedida al sector forestal en el municipio de San Ignacio de Mojos: no se encuentran tractores, aserraderos, maquinaria particular para la actividad forestal, etcétera. Algunas comunidades lo perciben como limitaciones y otros comparten la idea de que de esta manera se contribuye a evitar la deforestación masiva de los bosques de la región. Y lamentablemente continúan dándose casos de comunarios que obtienen madera de forma ilegal o que contactan con *piratas* y motosierristas ilegales. Sí que existen varios operadores dedicados a la fabricación de *machimbre*, la cual cuenta con un importante mercado en La Paz (entrevista a John Kudrenecky). La intensa actividad forestal del sector tuvo su ocaso en los ochenta y noventa cuando desapareció la práctica totalidad de la mara.

7. 3. 3. Motosierristas, *piratas* y *cuarteroneros*³³⁷.

Constituyen el grupo denominado por Pablo Pacheco como “productores informales de madera” (1998b: 98). Entre ellos la principal fuente de recursos procede de la venta de madera. En este conjunto de productores se incluyen diversas categorías que van desde los “motosierristas y/o *cuarteroneros* hasta los *productores informales* o *piratas*” (*ibíd.*, 98-99). A pesar de que el impacto sobre la masa forestal sea menor que el causado por las grandes empresas madereras³³⁸, es una práctica ilegal y no regulada y que debe, por tanto, ser atajada.

Los motosierristas forman parte de los actores sociales del panorama mojeño, siendo los *cuarteroneros* y *piratas* los que establecen algún tipo de relación directa con algunas familias indígenas dispuestas a facilitar la información pertinente para que aquellos tengan acceso directo a los lugares más adecuados destinados a la explotación de recursos maderables. Pese a que las normas de conducta de cada comunidad ignaciana regulen los comportamientos del conjunto de familias, algunas han llegado a establecer los contactos que permiten a aquellos acceder a los territorios de las comunidades para extraer la madera. Lamentablemente ha sucedido en diversas ocasiones que las familias han sido engañadas por los propios *cuarteroneros* (Flores, Guzmán I., y Paz W., 2002: 166).

Julio Sita -corregidor de Villa Esperanza- reconoce la existencia de *piratas* de San Ignacio en el territorio del TIMI, quienes llevan a cabo la extracción de madera en el

³³⁷ *Cuarteronero* es la denominación por la que se conoce en el oriente boliviano a aquellas personas que establecen contactos con habitantes de TCOs o comunidades indígenas para extraer la madera en *cuarterones*, es decir, aserrada con motosierra.

³³⁸ No obstante y a pesar de la existencia de algunos estudios (no muchos), no se conoce con precisión el nivel de deforestación causado por estos productores.

territorio comunal, siendo la propia comunidad que “los controla”. Sita explica que “la comunidad por necesidad vende 2000-3000 pies” (de madera, correspondiente a 3 ó 4 árboles, cada pie por valor de 0,5 pesos bolivianos). Estos acuerdos se realizan mediante contrato y cuando los piratas terminan se van. Estos “están en casi todas las comunidades del TIMI y hay parte del territorio en el que están dentro sin consulta. Las propias comunidades venden algunos pies de madera sin hacer falta un plan de manejo” (entrevista Julio Sita).

Ignacio Cusere –corregidor de Algodonal- se lamenta de la depredación que ha tenido lugar en el TIMI y lo compara con épocas anteriores:

“ahora ya no es como antes. Antes no se vendía nada porque no había tanta capacidad. Antes no había desastres de madera, lo que había dentro del bosque, los animales, los peces, ahora ya ha cambiado mucho. Los collas, los paisanos, la gente blanca, las empresas entraron y empezaron a derribar la madera buena, esta maderita que se llama la mara. Había mucho en estos bosques del río Apere, ahora ya casi no se pilla porque ya lo han acabado pero no dejan de sacar la madera, pero otra madera, palo maría, cedro, occhó, verdolago y también guayabochi. Aquí dentro de San Ignacio hay muchos paisanos que siguen viviendo de la madera, y algunos comunarios (referido a quienes contactan con los piratas) así que no se beneficia entera la comunidad, siempre hay uno o dos que sacan beneficio. Venden los árboles a parientes paisanos (entrevista.)

Al igual que Julio Sita, reconoce que existen *parqueteros*³³⁹ en todo San Ignacio, pero a diferencia de su compañero que desmiente que estos trabajen de manera ilegal, Cusere afirma que “no piden permisos, cuando la comunidad se entera ya están dentro la gente que compra su madera. Vemos los camiones como lo sacan, son ellos quien venden madera” (entrevista).

Actualmente los comunarios se muestran concienciados de la importancia que para ellos supone la conservación de los recursos forestales y así lo señalan: “los mismos comunarios la vendían, ahora lo cuidan ya ahora, ahora ya no quieren que salgan. Procuran que crezca” (entrevista a Lázaro Fernández).

³³⁹ Otra de las denominaciones conferidas a los productores ilegales de madera que operan en Mojos.

Fotografía 7. 3. Imágenes de árboles recién cortados por pirata.



Fuente: Virginia Jabardo Pereda

7. 3. 4. Productores de madera a pequeña escala: Agrupaciones Sociales de Lugar (ASLs)³⁴⁰.

Otro de los actores forestales de Mojos son las *Asociaciones Sociales de Lugar* (ASLs) definidas por Pablo Pacheco como “*grupos de madereros en pequeña escala que han obtenido acceso legal a áreas de aprovechamiento forestal dentro de reservas municipales de reciente creación*” (2006: 22). Estas asociaciones de empresarios se crean a partir de un mínimo de 20 individuos que puedan garantizar su residencia en el

³⁴⁰ La Ley Forestal 1700 entiende por ASL aquellas “*colectividades de personas con personalidad jurídica o que la adquieran para tal efecto, conformadas por usuarios tradicionales, comunidades campesinas, pueblos indígenas y otros usuarios del lugar que utilizan recursos forestales, dentro de la jurisdicción de una Municipalidad o Mancomunidad de Municipalidades, constituidos y calificados conforme a la Ley y el presente reglamento para ser beneficiarios de concesiones en las áreas de reserva destinadas para tal fin*” (Artículo 1º) (véase http://www.gobernacionlapaz.gob.bo/archivos/Normas/RG_Ley_1700.pdf).

lugar desde al menos 5 años atrás, además de demostrar estar vinculados con algún tipo de actividad relativa al bosque como pueden ser los aserraderos o las carpinterías – lo cual debe ser atestiguado por las gentes del lugar- (entrevista a Roberto Ríos).

Dichas asociaciones vienen financiadas por empresas lo cual nos podría llevar a pensar que el impacto sobre los bosques no dista mucho del que se produce a partir de la extracción de recursos forestales de manos de las empresas madereras propiamente dichas, debido a que los medios y la tecnología que utilizan son muy similares, sino las mismas.

Para Barrantes, la creación de esta personería jurídica que aparece en la nueva normativa, es un claro indicio de la pretensión por adoptar un cambio en el modelo de explotación forestal en Bolivia, abriendo las puertas del sector forestal a la legalidad que conduce a la incorporación de los nuevos actores al mercado por medio de la elaboración de los planes de manejo forestal (2005: 94).

El tipo de uso de recursos forestales llevado a cabo por las ASL, se hace bajo el amparo de planes de manejo en las reservas forestales de los municipios (Pacheco P., 2009: 212). Los municipios deben reservar áreas de aprovechamiento forestal en sus áreas fiscales, ajustándose al 20% del total de dichas tierras.

Como consecuencia de la concesión de planes de manejo forestal a estas asociaciones, parte de las zonas boscosas de la región han sufrido cambios de usos del suelo.

En cuanto a las ASL, en estos momentos no hay constancia al consultar las fuentes oficiales de la ABT que grupos de productores de madera en pequeña escala estén operando al interior de la TCO del TIMI. Son más bien madereros que trabajan de manera autónoma según ha sido ya indicado anteriormente.

Fotografía 7. 4. Imágenes de tabloneado de productores autónomos en San Ignacio de Mojos.



Fuente: Virginia Jabardo Pereda

Aquí entra en juego una cuestión clave y es que a pesar de que actualmente no haya evidencia del trabajo de ASL en el territorio mojeño-ignaciano, sí se producen acciones de algunos motosierristas. Estos podrían ser aquellos trabajadores de las anteriores ASL que hayan decidido trabajar de manera autónoma al desaparecer estas. Son las sospechas de muchos comunarios de Mojos (entrevista a Wilson Rojas³⁴¹). Al ser una actividad que en estos momentos está paralizada al interior del TIMI no nos detendremos en ello.

7. 3. 5. Estancias ganaderas.

Este grupo social ha sido analizado con detenimiento en el capítulo 5 por lo que no repetiré lo ya dicho hasta ahora. Sin embargo, sería conveniente añadir en este punto varios aspectos. Desde el siglo XVII las estancias ganaderas han ido incrementando su ocupación en los territorios comunales a pesar del amplio territorio de sabanas ricas en pastos naturales. Como ya sabemos, las fuertes inundaciones que se producen cada año en la región, han obligado a los propietarios de estas estancias a desplazarse hacia el interior de los bosques pasando a ocupar los montes. Estos son las zonas que mayor altitud alcanzan en toda la región y es por tanto el mejor lugar para lograr mitigar los efectos de las inundaciones, evitando de esta manera el fallecimiento de los animales durante la época de lluvias en la región de Mojos. Recordemos que es en los montes en donde los comunarios acuden a cazar e incluso donde se emplazan sus chacos. Sin embargo, no sólo se han instalado en estas áreas sino que han transformado una gran cantidad de hectáreas de bosques naturales en pastos sembrados, en potreros para el ganado. Pero lo más importante en relación al tema del que se está tratando es que para convertir los pastos naturales en cultivados, los ganaderos practican quemas en la época estival con la intención de lograr una más rápida regeneración de dichos pastos. Estas quemas provocan cada año grandes pérdidas para la biodiversidad de estos bosques, puesto que no todas se hacen de manera controlada, es decir, no todas se ajustan a la normativa que regula las quemas. La cantidad de incendios que tienen lugar en verano a raíz de las quemas de pastos en Mojos, que superan las sabanas llegando a los bosques, se ha visto incrementada de un año para otro. Este fenómeno será analizado con mayor detenimiento más adelante. Sin embargo, a pesar de la deforestación provocada por estos agentes y del incremento en las últimas décadas, los niveles son aún inferiores en comparación a los producidos por los grandes complejos industriales de la madera.

³⁴¹ Seudónimo utilizado para mantener el anonimato del informante bajo su petición.

7. 4. INSTANCIAS DE CONTROL DE RECURSOS FORESTALES.

Si el anterior epígrafe se refería a los actores sociales partícipes en las dinámicas forestales de Bolivia, a continuación doy paso a presentar otros actores de tipo institucional, a revelar las diversas instancias encargadas del control de los recursos del bosque, tanto a nivel comunal como en niveles superiores: Estado, departamentos o municipios.

Pese a la pretendida descentralización forestal a la que se han orientado las políticas forestales en el país, algunos estudios se muestran críticos por lo incompleto de ésta puesto que en realidad *“las decisiones más significativas para la administración de los recursos forestales han permanecido en el nivel central, y se ha avanzado poco en la delegación de responsabilidades a prefecturas y municipalidades, y menos aún a las organizaciones forestales comunitarias”* (Pacheco P., 2005, cit. en MDRayMA, 2008: 20). Esto quiere decir que a la hora de tomar decisiones determinantes quien tiene la última palabra es el gobierno central, sin tener en cuenta las opiniones lanzadas desde los niveles inferiores. Además se han dado casos que demuestran hasta qué punto algunos gobiernos municipales constituidos por quienes tenían intereses particulares en el sector forestal, han actuado incumpliendo lo dictado por la legislación en materia forestal.

El principal organismo encargado de los asuntos forestales en Bolivia es la *Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra*, creada en mayo del 2009 al unificarse la ex Superintendencia Forestal y la ex Superintendencia Agraria.

Esta última se encargaba de que se cumpliesen las normas correspondientes para hacer un uso adecuado del suelo, a diferencia de la Superintendencia Forestal que centraba más sus objetivos en cuestiones forestales específicas. La función de la ABT es preventiva y sus competencias son varias: promover el manejo integral y sostenible de los recursos forestales y de la tierra, conceder permisos y autorizaciones concernientes al uso y aprovechamiento de los recursos forestales, salvaguardar y sancionar los usos inadecuados de los recursos forestales y del suelo, desarrollar acciones de control, prevención, fiscalización y prohibición de usos del suelo improcedentes, elaborar un registro de permisos y autorizaciones de uso y aprovechamiento de recursos forestales y suelo y de los usuarios de estos, denunciar la reversión o expropiación de tierras conforme a lo estipulado en la ley INRA, afianzar la zonificación de tierras así como actualizarla acorde con las directrices ministeriales y por último autorizar *Planes de Ordenamiento Predial*³⁴².

Con respecto a esto último el procedimiento es el siguiente: se elabora un estudio que incluya la caracterización de un predio determinado, independientemente que sea

³⁴² <http://www.abt.gob.bo/index.php/que-hacemos/competencias>

una propiedad pequeña, mediana o grande; se valora y programa el uso de los recursos que se encuentran en dicho predio (siempre respetando la capacidad de uso mayor del suelo; ABT da su visto bueno en base a estos informes y permite el avance de la frontera agrícola o ganadera siempre que se produzca en tierras en donde la capacidad de uso mayor del suelo permita un cambio de uso, evitando además que haya superposiciones (entrevista a Roberto Ríos).

Esta institución de índole conservacionista promueve el desarrollo sostenible en base a un esquema integral propuesto por la nueva gestión del gobierno de Evo Morales. Lo más novedoso de este organismo es la “*alta incidencia y respeto al factor social*” a diferencia de antiguas gestiones gubernamentales en las que se primaban los aspectos ecológicos así como los intereses económicos dejando a un lado las cuestiones sociales, a las que no se les concedía demasiada importancia (entrevista Roberto Ríos). Actualmente desde ABT se busca dar una mayor visibilidad a aquellos usuarios del bosque que contribuyen en buena medida a la conservación de la biodiversidad y a que se perpetúen los saberes locales del país.

En lo referente a las comunidades indígenas cabría señalar la *Unidad de Coordinación con Pueblos Originarios e Indígenas* (UCPOI) y las nuevas *Instituciones Forestales Indígenas* (IFI's), como responsables del aprovechamiento y de la gestión forestal desde el año 2002. Sin embargo, éstas no se han constituido en el caso de las comunidades de la TCO del TIMI³⁴³.

A nivel municipal la institución responsable del control y fiscalización de los recursos naturales es la *Unidad Forestal Municipal* (UFM). En el municipio de San Ignacio, aquélla depende de éste y no de la ABT, con la que colabora y trabaja de manera coordinada. Si la Superintendencia Forestal se encargaba de regular las actividades forestales, en San Ignacio de Mojos fue más que cuestionable su actuación dado que en las TCOs se limitaron a controlar la extracción legal de la madera “*a través de decomisos constantes que se efectúan en las comunidades a denuncia de los comunarios o dirigentes de la subcentral indígena*” (CIPCA, 2005: 33).

La UFM también participa en los procesos de elaboración de planes de manejo en el sentido que verifican y certifican los planes de chequeo pero no los emiten. Para ello envían el informe a la ABT quien determina la resolución de los mismos. Funcionan como intermediarios entre los actores locales y la ABT. El caso de las TCOs es

³⁴³ Las Instituciones Indígenas Forestales constituidas pertenecen a las comunidades Puesto Araona de la TCO Araona; la comunidad Zapoco de la TCO Zapoco en el departamento de La Paz; las comunidades Cururu y Yotau de la TCO Guarayos en el departamento de Santa Cruz; la comunidad Cosorio Palestina de la TCO Monte Verde en el departamento de Santa Cruz; las comunidades San Pedro y Tumupasa (Agrofort) en el departamento de La Paz; la comunidad Tumupasa (Apiat) de la TCO Tacana en el departamento de Santa Cruz y por último la comunidad El Pallar de la TCO Yuracaré en el departamento de Santa Cruz (Superintendencia Forestal, 2003: 91), no existiendo por tanto ninguna IFI en el departamento del Beni.

particular: éstas no elaboran planes de manejo no porque estén exentas de ello sino porque los chacos donde cultivan no suelen sobrepasar las 2 hectáreas, razón que les exime de confeccionar tal plan. Además, al estar reconocidas como territorios indígenas, las comunidades tienen pleno derecho para poder hacer uso de los recursos naturales –siempre de manera controlada-. Desde la Unidad Forestal de San Ignacio nos advierten que en las tierras comunitarias:

“todos son dueños, la tierra es de todos, ellos la cultivan, la cuidan, de acuerdo a sus estatutos. De acuerdo a ellos funciona la comunidad por lo que para nosotros como autoridades nos es difícil poder controlar en las comunidades, donde son los mismos comunarios quienes hacen aprovechamiento. Pero a veces da pena cuando encuentras a los propios comunarios sacando algo de manera ilegal. Esto es lo que se está intentando corregir” (entrevista a Alfredo Matareco, responsable Unidad Forestal de San Ignacio de Mojos).

La Unidad Forestal de San Ignacio está por tanto intentando corregir estas situaciones. Durante los gobiernos anteriores ya existía esta institución en la alcaldía de San Ignacio pero estaba controlada por la población blanco-mestiza, lo cual repercutía de manera negativa sobre los indígenas mojeños puesto que aquella dictaminaba en su propio beneficio. Muchos de quienes estaban en el gobierno municipal eran por entonces propietarios de estancias y de tierras en donde no se aplicaba la *Ley Forestal* de manera correcta. Algunos manifiestan la sensación de que:

“se nos marginaba (referido a los indígenas mojeños) y se trabajaba de esta modalidad, por ejemplo la sociedad alta son los mismos actores, los mismos ganaderos, los mismos terceros, ellos eran las mismas autoridades y no se podían controlar, sino que se favorecían y ese fue el problema para que la cosa no vaya como la ley dice. En cambio ahora es diferente, son del campo, son los propios interesados y afectados para controlar los recursos naturales de la zona los que trabajan en la Unidad Forestal” (entrevista a Alfredo Matareco).

Esto nos lleva a pensar que años atrás se actuaba de manera negligente o al menos no todo lo eficiente que se debería.

En línea con todo esto y de manera anecdótica, cierto día, en el mercado de San Ignacio, un *tercero* contaba a un conocido cómo días atrás había operado en las proximidades de la comunidad de Chontal, en el interior de la TCO TIMI, en donde había extraído hasta 10.000 pies de madera (sin especificar qué especie). Huelga decir que esta acción fue del todo ilegal. Este anécdota es sólo una pequeña muestra de la

ilegalidad que aún opera en la región en relación al manejo de los recursos forestales, siendo una de las problemáticas más que la Unidad Forestal viene intentando solucionar desde mayo de 2010, momento en el que se produjo el traspaso de poderes a un nuevo gobierno controlado en su mayor parte por población indígena. El problema es que el municipio de San Ignacio carece de guardas forestales a diferencia de otras TCOs que en su momento los tuvieron, como puede ser el TIM o el TIPNIS, por la importancia ecológica que presentan. La única manera por tanto de controlar la extracción de madera en el TIMI es a través de las inspecciones, o los denominados “operativos de detecciones”, que desde la Unidad Forestal se realizan entre 3 y 4 veces por semana, conforme a las denuncias recibidas (entrevista a Alfredo Matareco). Al ser imposible llegar a todos los lugares por falta de recursos económicos y personal “*se intenta priorizar en los lugares más conflictivos, donde se cometen más ilegalidades*”, aunque a día de hoy las denuncias no son muy abundantes (*ibíd.*).

En algunas TCOs, como el TIM, se creó, como mencionaba anteriormente, la *Guardia Forestal Indígena* (GFI), conformada por los propios habitantes de las comunidades para “*vigilar y proteger los territorios como propiedad común y preservar los recursos naturales, orientar y apoyar la conservación y uso sustentable de los recursos naturales por parte de las comunidades y confiscar todos los recursos forestales que son extraídos ilegalmente, custodiando los productos y especies confiscadas*” (Guzmán I., Flores y Paz W., 2002: 80). Pero éste no fue el caso del TIMI. Puede que uno de los motivos de ello fuera que en la zona del TIM la actividad forestal fue mucho más intensa y de ahí que se propusieran la creación de tales figuras que ayudasen a mantener un mínimo control en el modelo local de manejo de los recursos forestales. No funcionó sin embargo, puesto que se comenzaron a conocer casos en los que los propios guardas habían entablado relaciones comerciales con otros actores relacionados con la actividad extractivista.

Otra de las instancias encargadas en la regulación de cuestiones forestales en Bolivia, es el Juzgado Agroambiental, reconstituido en el año 2009 (anteriormente era el Juzgado Agrario) y el cual ha asumido más competencias que su predecesor con vistas a la resolución de conflictos sobre la posesión y la propiedad de la tierra; las actividades agrarias, forestales y las relativas al medio ambiente; aquellas referentes al uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, hídricos, forestales y de la biodiversidad; demandas acerca de acciones que atentan contra la fauna, la flora, el agua y el medio ambiente; contra los sistemas ecológicos en general y la conservación de especies (entrevista a Jackeline Ruíz Suárez, secretaria del Juzgado Agroambiental de San Ignacio de Mojos). Ya vimos en el capítulo anterior las problemáticas a las que debía hacer frente el Juzgado Agroambiental, por lo que a ello me remito.

Por último señalar la *Unidad de Control de Desmontes e Incendios Forestales* (UCDIF) y la *Intendencia de Desarrollo Forestal* (IDF), además de las *Unidades Operativas de Bosque*³⁴⁴ que existían en la anterior gestión de la Superintendencia Forestal, así como el *Ministerio de Desarrollo Rural Agropecuario y Medio Ambiente*. A continuación me centraré en mostrar los textos normativos que rigen el manejo forestal en Bolivia.

7. 5. MARCO JURÍDICO REFERENTE A LA CUESTIÓN FORESTAL.

El nuevo escenario internacional marcado por la conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro en junio de 1992, presionó a muchos de los países a que adoptaran cambios en sus agendas sobre el medio ambiente y la conservación de la biodiversidad³⁴⁵. Bolivia no sería menos y junto al paquete de medidas procedentes del gobierno se aprobaron otra serie de regulaciones en materia forestal, siendo la Ley 1700 la nueva legislación reguladora de las actividades de manejo de los bosques del país.

La ilegalidad es uno de los factores que ha ido de la mano del sector forestal en Bolivia. Al igual que ocurrió con el régimen de tierras, el régimen forestal estuvo marcado por ésta constante. La nueva *Ley Forestal* parecía pretender revertir dicha situación. Pero nada más lejos de la realidad. La *Ley Forestal* 1700 fue una ley aprobada en gestiones de gobierno en las cuales había una importante participación de

³⁴⁴ En el caso del Beni existían tres: en Riberalta, en Rurrenabaque y en San Borja.

³⁴⁵ Hacia la década de los 70 del pasado siglo XX, comenzó a surgir entre la población mundial una toma de conciencia ecológica sobre la situación del planeta. La segunda revolución industrial, el modo de vida capitalista, la expansión demográfica, la carrera armamentística, el uso indiscriminado del petróleo, la electricidad, las industrias químicas, la deforestación y desertización, los desastres naturales cada vez más frecuentes, etcétera, hicieron saltar la alarma mundial sobre la crisis medioambiental que sufría el Planeta. Desde la comunidad internacional se comenzó a considerar dicha crisis como una amenaza que comprometía la subsistencia de la vida, incluida la del hombre, en la Tierra. En junio de 1992 se celebró en Río de Janeiro, Brasil, la primera conferencia de las Naciones Unidas sobre medio ambiente, que originó un incremento de la conciencia ecologista en la opinión pública mundial. En ella se reunió la comunidad Internacional convocada por la ONU con el fin de lograr el reto de alcanzar un desarrollo medioambiental acorde con el desarrollo económico, es decir, conservar los recursos naturales en base a un desarrollo sostenible. Nació así el Paradigma del Desarrollo Sostenible. Desde entonces, a pesar de que anteriormente ya tuvo lugar la Primera cumbre de la Tierra en Estocolmo, 1972, tuvieron lugar otras cumbres, tratados, acuerdos, etcétera, para revertir la situación de crisis medioambiental por la que atravesaba el Planeta. A pesar de todo ello y a pesar del despertar de una conciencia ecológica más respetuosa con el medioambiente, en el plano real se ha avanzado más bien poco. La Cumbre de Río pretendió “buscar una conciliación entre el medioambiente y el desarrollo económico sin sacrificar los recursos naturales para las generaciones futuras”, es decir “lograr, a nivel nacional y mundial el desarrollo sostenible” (Quispe V., 2003: 50).

empresarios en las altas esferas de la administración central y muchas de estas leyes se acomodaban a sus intereses particulares.

En los años setenta los gobiernos dictatoriales de Bolivia promulgaron la *Ley Forestal* y la *Ley de Fauna y Vida Silvestre* las cuales dieron luz verde a un sistema basado en la explotación intensiva de los recursos, un aprovechamiento de alta intensidad que presionaba a las especies de alto valor que presentaban en aquellos momentos una alta demanda. Esto incidió de manera negativa en las comunidades indígenas puesto que supuso la negación, en buena medida, de sus derechos territoriales al otorgar concesiones forestales y de caza en los territorios comunitarios (Mihotek, 1996: 35). En esa época, la legislación forestal consideraba aspectos distintos a los tenidos en cuenta a día de hoy, fundamentalmente en la manera de dar seguimiento al aprovechamiento forestal en las áreas de bosque en todo el país. Básicamente lo que le interesaba al Estado no era tanto la sostenibilidad del recurso sino la recaudación, primando los intereses económicos por encima de los aspectos silviculturales y técnicos.

El aprovechamiento ilegal de madera y las conversiones de usos de suelo forestal a otros usos sin los correspondientes permisos, el transporte de productos forestales sin autorizaciones, los desmontes realizados de manera informal o el tráfico ilegal de maderas, constituyen algunos de los problemas estructurales del sector (Pacheco P., 2006) y los cuales aparecen sancionados en la *Ley Forestal*.

La Ley 1700 privilegiaba además el aprovechamiento derivado de los aserraderos. Este punto es explicado con detalle por Roberto Ríos. Al no ser estos accesibles a un gran número de usuarios, el acceso al bosque quedaba restringido a aquellos que tuvieran el capital suficiente. Para aplacar esta medida se creó la figura de las ASL³⁴⁶ (véase **punto 7. 3. 2**). Éstas además de cumplir los requisitos anteriormente mencionados, deben superar el proceso de consulta municipal. Desde el municipio se confirma y verifica que durante al menos 5 años los miembros integrantes de la futura ASL han vivido en él y que han participado en el sector forestal. Tras haber pasado ese filtro se aprueba la calificación de la ASL. Y paralelamente el municipio tendrá que haber determinado, aunque sea de manera preliminar, cuáles son las áreas de reserva forestal municipal dentro de su jurisdicción, que marcarán las áreas fiscales con bosque, a efectos de que puedan ser otorgadas a las ASL con el fin de poner en marcha el aprovechamiento forestal. La superficie máxima que puede ir a parar a explotaciones de ASL no debe superar el 20% de las tierras de áreas fiscales del municipio.

³⁴⁶ Debido a que no tienen capital suficiente, detrás de una ASL siempre hay un empresario. Al estar una empresa detrás, el nivel de impacto es muy similar al causado por las concesiones a empresas pero en realidad no hay datos empíricos.

En lo que se refiere a las TCOs, el problema principal es que en su interior se ejecutan actividades de extracción sin autorización previa. En el municipio de San Ignacio se ha atestiguado la deforestación de las tierras forestales de la región debido a la tala indiscriminada que tiene lugar bajo el amparo de las concesiones madereras, existiendo al respecto un insuficiente control de esta actividad (PDM, 2001, véase **anexo 4**, subsector forestal).

Uno de los elementos generadores de conflictos en el ámbito forestal, hace referencia a la cuestión de las superposiciones entre concesiones forestales de empresas madereras y los territorios de las propias TCOs. Las superposiciones de derechos forestales han sido la razón principal para el surgimiento de conflictos por la disposición de las maderas finas en la Amazonía de Bolivia.

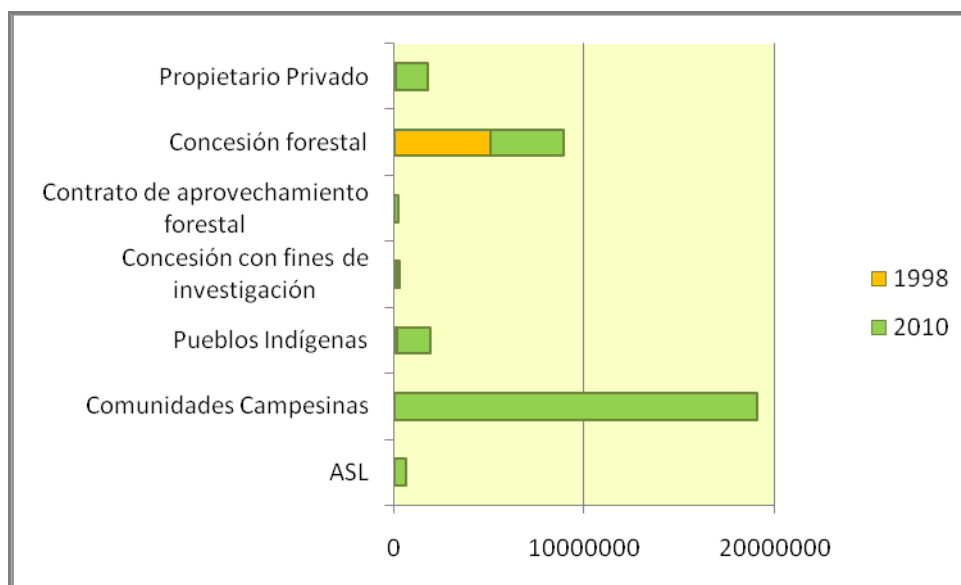
Una gran parte de los bosques se encontraban en áreas donde la titularidad de estos no estaba reconocida, por lo que en esta época se otorgaban contratos de aprovechamiento en zonas que podían ser áreas indígenas, campesinas o tierras fiscales. Interesaba la definición del polígono y una estimación de los volúmenes que se iban a sacar anualmente. En el caso del TIMI era un área potencialmente interesante por la presencia de una alta densidad de especies valiosas, por ser bosques de gran riqueza forestal. Las empresas nacionales que operaban en este área estaban financiadas por capitales norteamericanos. La empresa extranjera les concedía 2 millones de dólares al año a condición de que la empresa boliviana les proveyera de mara durante todo ese año. En principio la empresa boliviana extraía el monto de madera de forma legal y en caso de que no llegase a lo exigido se sucedían las extracciones ilegales de madera, provocando un “*grado de extracción indiscriminada de la especie*” (entrevista a Roberto Ríos).

Este es sólo uno de los ejemplos que urgen a implementar en el país una legislación orientada a la conservación y protección del medio natural. Pero hubo que esperar al año 1996 cuando entra en vigor la *Ley n° 1700*, encargada de “*imponer un mayor control en el sector forestal*” (de Vries, 1998: 32). Con ésta se pretende priorizar el equilibrio social, económico y ecológico del aprovechamiento de los recursos forestales. De forma paralela se constituye la *Ley INRA*, la cual legaliza el derecho propietario y permite definir las áreas fiscales. Este proceso de titulación de tierras corre paralelo a la regulación del proceso forestal dado que para regular el manejo debe estar definida el área, tiene que tener un titular y evitar así conflictos.

Sin embargo, en la realidad, la *Ley INRA* avanzó a muy lentamente en comparación a la *Ley Forestal*. Se debió a que la presión sobre el bosque era permanente y si la ex Superintendencia Forestal -institución encargada en hacer cumplir la Ley 1700- no encontraba mecanismos que permitieran accesibilidad al

recurso en el marco de la sostenibilidad, los *piratas* iban a sacar la madera de igual manera. Entonces consideraron que era mejor dar acceso obviando al titular del territorio. La trampa estaba en la falta de coherencia entre la ley 1715 y la ley 1700. La *Ley Forestal* reconocía la exclusividad del aprovechamiento forestal para las comunidades indígenas que habitasen en TCOs. La cuestión es que para cuando se comenzó a aplicar dicha ley eran muy pocas las comunidades que habían presentado el título de propiedad de la tierra en la que se asentaban sus viviendas y chacos. Y se debe añadir que durante el mes de agosto de 1997 la Superintendencia Forestal entregó 23 concesiones forestales que se instalaron dentro de 8 TCOs, lo cual provocó una superposición de 714.960 hectáreas (*ibíd.*, 34). Por otro lado un gran número de propietarios justificaba la posesión de la tierra en base a los desmontes lo cual les permitía cumplir la FES (Pacheco P., 2009: 203-204). Como bien ha explicado este autor, los desmontes se legalizaron a través de la elaboración de *Planes de Ordenamiento Predial*, que fueron aprobados por la Superintendencia Agraria a pesar de que se encontrasen en las áreas clasificadas como tierras de producción forestal permanente, lo cual iba en contra de la normativa que prohibía los desmontes en dichas áreas (*ibíd.*, 204). Esto dio lugar a nuevos enfrentamientos entre las poblaciones indígenas y dicho organismo quien se excusaba alegando que las empresas a quienes les habían sido concedidas tales concesiones llevaban años operando en la misma zona. A pesar de varias reuniones acontecidas entre las organizaciones indígenas y la Superintendencia Forestal, con el fin de llegar a un acuerdo y de hacer ver a ésta la necesidad de aplicar y respetar los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios y recursos naturales, la Superintendencia actuó a favor de los grandes intereses de las empresas madereras, cometiendo graves atropellos frente a los derechos de propiedad territorial indígenas (Martínez, 2000).

Curiosamente, según la información de la ABT, serían las comunidades campesinas los usuarios que más derechos forestales recibieron, pero desde la entrada en vigor de la *Ley Forestal* esas prerrogativas caerían en manos de las concesiones forestales, las que presionaban a las instituciones de turno en favor de sus propios beneficios (véase **gráfico 7. 5**). En cuanto a los derechos obtenidos por los pueblos indígenas se refiere, los datos demuestran que hasta el año 2010 han ido *in crescendo*, si bien tímidamente. Pero el repunte del segundo periodo (2010) no sería tal teniendo en cuenta los usuarios directos pertenecientes a este grupo, es decir, el número de individuos que se aprovecha de manera directa de los recursos forestales.

Gráfico 7. 5. Derechos forestales otorgados por usuarios

Fuente: elaboración propia en base a los datos de ABT (<http://www.abt.gob.bo/>)

Pese a todo ello, la *Ley Forestal*³⁴⁷ parte de reconocer los derechos de aprovechamiento de los recursos forestales en el interior de las tierras comunitarias. También incluye otros elementos fundamentales con respecto a los pueblos indígenas. Uno de ellos es que señala la necesidad de elaborar en las TCOs planes de manejo forestal, así como *Planes de Ordenamiento Predial*³⁴⁸, los cuales constituyen “*técnica y jurídicamente la determinación definitiva de los usos permitidos, según las distintas formaciones, características y particularidades internas del predio*” (artículo 29). Pero la importancia fundamental de esto es que ambos tipos de planes se deberán elaborar teniendo en cuenta “*procesos de consulta participativa de los pueblos indígenas, incluyendo sus valores culturales y espirituales*” (artículo 28) lo cual significa que además de los técnicos pertinentes encargados de elaborar y asesorar a las comunidades indígenas, éstas son las principales responsables de dichos planes, los cuales vendrán determinados en función de la organización sociocultural de cada comunidad.

Otro factor que debe estar presente en los planes de manejo es la garantía de sostenibilidad, la prevención de extinción de especies forestales aprovechables, además de propuestas dirigidas a disminuir especies tanto vegetales –de manera particular aquellas “*especies claves para la alimentación de los habitantes del lugar*”, como

³⁴⁷ Para consultar los artículos que aparecen a continuación véase: http://www.gobernacionlapaz.gob.bo/archivos/Normas/RG_Ley_1700.pdf

³⁴⁸ Según la *Ley Forestal* el POP se define como el “*instrumento que zonifica las tierras de un predio según sus distintas capacidades de uso o vocación*” (artículo 1º).

pueden ser el bibosí, el paquíu o diversos tipos de palmeras- como animales en riesgo y la “*degradación de suelos y ambientes acuáticos*” (artículo 69).

En cuanto al uso doméstico de los bosques, queda estipulado que no es necesario la elaboración de planes de manejo forestal (artículo 69). Esto quiere decir que las comunidades indígenas no tienen la obligación de dar cuenta, ante la ABT, del manejo forestal que desempeñan en sus territorios comunales. A las poblaciones indígenas de Bolivia se les concede la opción de desarrollar un uso de los bosques en base a sus propios sistemas locales de aprovechamiento de los recursos forestales, reconociendo la función social y cultural que los bosques desarrollan para con ellos. No obstante, el asunto toma otros derroteros si lo que está en juego es el uso comercial. En estos casos el pueblo indígena está obligado a solicitar una concesión a la ABT, a pesar de que el plan de manejo forestal vaya a desarrollarse al interior de la TCO correspondiente. Esto mismo es lo que ocurrió en las comunidades del TIMI: Chontal, Litoral y Villa Esperanza en el año 2000 y 2001 (entrevista a John Kudrenecky, CIDDEBENI).

Otra disposición sancionada por la *Ley Forestal* otorga la posibilidad a las comunidades indígenas de firmar contratos subsidiarios con empresas forestales para ejecutar un plan de manejo forestal. Esta opción puede suceder en caso de que la propia comunidad no cuente con la capacidad técnica ni económica precisada para llevar a cabo actividades de explotación sobre el bosque. Entonces la empresa está obligada a contratar mano de obra indígena además de transferir el 50% de los beneficios obtenidos a dicha comunidad. Este tipo de contratos se deben realizar con “*total conocimiento y a la entera disposición del pueblo o la comunidad en su conjunto. Asimismo, no debe contravenir las normas que exigen sus usos y costumbre*” (artículo 78). Algunas fuentes alegan que en muy pocas zonas del país se ha realizado el tema de los subsidios. A diferencia de ello se hace una especie de regalía, que consiste en alquilar parte del monte, como hizo el grupo étnico chimán (entrevista a John Kudrenecky).

A parte de la legislación en materia forestal creada en la década de los noventa en Bolivia, en la NCPE, se atiende a la cuestión de los recursos forestales en varios de sus artículos³⁴⁹. En ella se muestra la importancia de estos para el desarrollo de la nación, por lo que el Estado se presenta como responsable de gestionar y administrar las actividades de “*conservación y aprovechamiento sustentable*”, así como de reconocer los derechos de “*aprovechamiento forestal a favor de comunidades y operadores particulares*” (artículo 386). Asimismo el Estado es el encargado de poner en marcha planes de reforestación de todas aquellas áreas boscosas que hayan sufrido un fuerte

³⁴⁹ Para consultar los artículos que aparecen a continuación véase: <http://bolivia.unfpa.org/content/constituci%C3%B3n-pol%C3%ADtica-del-estado>

impacto en su cobertura vegetal. Y no sólo, sino que debe “*garantizar la conservación de los bosques naturales en las áreas de vocación forestal, su aprovechamiento sustentable, la conservación y recuperación de la flora, fauna y áreas degradadas*” así como regular “*la protección y aprovechamiento de las especies forestales de relevancia socioeconómica, cultural y ecológica*” (artículo 387).

Conforme al aprovechamiento en las áreas forestales donde habiten comunidades indígenas, la Constitución reconoce el derecho exclusivo de éstas en lo que concierne al aprovechamiento y gestión (artículo 388). La *Ley Forestal* además reconoce el uso doméstico, al que considera “*toda recolección o producción destinada a la satisfacción de las necesidades básicas de la respectiva unidad doméstica o asentamiento humano*” (artículo 1). Éste es el que corresponde al desarrollado por el modelo de explotación de las comunidades indígenas de Mojos, las cuales inciden de manera insustancial en la degradación de los bosques de la región si lo comparamos con otros estilos de desarrollo forestal, garantizando la regeneración de las áreas boscosas.

En el caso concreto de las comunidades indígenas, el tema más importante es el hecho de que éstas, constituidas como TCO, tienen carácter indivisible, irreversible, etcétera, lo cual significa que cualquier actividad dentro de una TCO debería ir en beneficio de todos los que viven en la misma, aunque no sea lo habitual. Por ejemplo “*la comunidad de Chontal tiene sus propios recursos porque el área de bosque está cerca de donde ellos viven pero si es que aportan algo de beneficio a las comunidades del TIMI debe ser mínimo en comparación a lo que ellos perciben y esa no era la idea de las TCOs*” (entrevista a Roberto Ríos). Debe darse además un proceso de consulta en esto: la ABT antes de aprobar el plan de manejo a una comunidad, comprueba y verifica que se cumplen los requisitos de consulta primero a nivel familiar. Para ello realiza la consulta con los usuarios directos, con la gente que va a hacer ese aprovechamiento forestal. Si la comunidad pertenece a una instancia mayor, como a una TCO, además de hacer las consultas a nivel comunal se deben hacer en el nivel superior (en el caso de la TCO TIMI: la Subcentral), elevándose así a todos los niveles jerárquicos, para que en todos ellos se tenga un conocimiento antes de dar el visto bueno. Sólo de esta manera las actividades pueden ser aprobadas y permitidas por ellos mismos. Además de la consulta se deben tener en cuenta aspectos relativos a la equidad de las actividades a desarrollar en los planes de manejo: porcentajes de distribución de beneficios, quienes serán los responsables del aprovechamiento forestal, del manejo contable de los recursos provenientes del aprovechamiento, el modo de ejecutar los estatutos o reglamentos de uso e ingreso a los bosques bajo manejo forestal, etcétera.

A pesar de algunos errores que pueda presentar en su contenido, la *Ley Forestal* ha supuesto un avance en materia forestal. En lo que respecta a las poblaciones

indígenas hacía alusión al reconocimiento del derecho exclusivo de aprovechamiento en las TCOs e incluso la posibilidad de conformarse como ASL, a parte de quedar exentos de dar cuenta ante la ABT en caso de que se lleve a cabo un uso doméstico de los recursos forestales.

La *Ley Forestal* tuvo entonces, algunos resultados positivos que se podrían mencionar. Cabría señalar la reducción del área de los bosques de producción. En torno a esto se barajan cifras que indican que de 22 millones de hectáreas bajo producción forestal contabilizadas a mitad de la década de los noventa se pasó a 5 millones a principios en los primeros meses del siglo XIX (CFB-SCTP, 2000: 4). Si bien es cierto que se ha visto reducida la extensión de bosques bajo concesiones forestales, ha sido incrementada por otro lado la extensión destinada a bosques nativos tropicales certificados de Bolivia, ascendiendo a 700 mil hectáreas en el conjunto del territorio del país, lo cual lo coloca en una de las primeras posiciones en cuanto a bosques certificados a nivel mundial (*ibíd.*, 5), como así lo acreditan las más de 2 millones de hectáreas de bosque certificado³⁵⁰. Este dato supone una garantía para el mantenimiento de un manejo sostenible en los bosques del país.

Del Departamento del Beni se podría señalar a la Industria Maderera San Luis SRL como ejemplo de operación certificada. A ésta le fue otorgada –a través de la certificadora *Smartwood Program/Rainforest Alliance*– una concesión forestal en tierras fiscales, en un área certificada de 60.588 hectáreas con fecha a 8 de enero del 2000, expirando el contrato el 8 de enero de 2005³⁵¹.

Asimismo la *Ley Forestal* del año 1996 modificó el anterior modelo de concesión de patentes forestales. Las concesiones forestales establecen los contratos de aprovechamiento de los recursos del bosque en tierras fiscales. Sin embargo, como veremos a continuación, esta premisa no siempre fue respetada puesto que se permitió que dichas concesiones operasen incluso en territorios indígenas.

Una de las novedades de la *Ley Forestal* fue la aparición de una nueva figura legislativa: la “conversión voluntaria”. Esta figura posibilitaba a los antiguos titulares de áreas de aprovechamiento forestal a “convertir” los contratos vigentes previos a la entrada en vigor de la nueva normativa, y mantener así los derechos de explotación por un periodo de 40 años (Tamburini, 1997: 20) contando con la posibilidad de ser renovado hasta la perpetuidad cada quinquenio. De esta manera, se facilitaba la

³⁵⁰ Según datos recogidos en el informe sobre la Amazonía de PNUMA y OTCA, Bolivia posee 2 millones de hectáreas de bosque certificado, por encima de los 1,8 millones de hectáreas que alberga Brasil (2009: 85), dato que llama la atención si tenemos en cuenta la superficie de cada uno de ellos siendo de 600.000 km² y 5.144.000 km² respectivamente (véase **cuadro 3. 1**).

³⁵¹ <http://www.cfb.org.bo/CFBInicio/>

continuidad en cuanto a la explotación de áreas forestales en beneficio de los grandes propietarios (1997).

Existe no obstante, una falta de rigor a la hora de aplicar la ley dado que el artículo 29 conviene que las concesiones forestales deben efectuarse en áreas fiscales y no en *Tierras Comunitarias de Origen*. Además, y como bien indica en su artículo Leonardo Tamburini, la *Ley INRA* dispone en la Segunda Disposición Final que “*en las tierras de aptitud de uso agrícola o ganadero, en las de protección o producción forestal y en las comunitarias de origen, en las que existiera superposición o conflictos de derechos, prevalecerá el derecho de propiedad agrícola, ganadera o de comunidad campesina, pueblo o comunidad indígena u originaria sobre las concesiones, contratos o autorizaciones de aprovechamiento forestal*” (ibíd., 25)³⁵². Los conflictos surgidos a causa de la superposición con títulos de propiedad al interior de las TCOs no se verían como consecuencia solventados, al contrario, se incrementarían al consolidar las empresas madereras las concesiones forestales que les habían sido adjudicadas anteriormente a la entrada en vigor de la nueva legislación forestal³⁵³. Esto demuestra el trato de favor concedido a empresarios madereros en detrimento del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, ante quienes se atenta a pesar de que estos, por ley, deban ser consultados en caso de que se produzcan este tipo de situaciones. Para ello, la Superintendencia Forestal se escudó en el hecho de que las TCOs poseían para entonces títulos de propiedad que no estaban reconocidos por ley –más bien por el derecho consuetudinario- por lo que predominaban los derechos de los propietarios madereros en los contratos de aprovechamiento (ibíd., 21). Cabría añadir que hasta el 20% de los bosques públicos ubicados al interior de los límites municipales se podían declarar como reservas forestales destinadas a pequeños productores que fueran organizadas previamente como ASL (Pacheco P., 2009: 2009).

En cuanto al aprovechamiento de los recursos forestales, Chirif y García Hierro subrayan que la Ley 1700 distingue finalmente entre los derechos del suelo y los derechos del “vuelo forestal” que delimita los derechos de los *terceros* frente a los de los territorios indígenas, pese a que en la práctica no siempre se cumpla (2007: 48).

Uno de los elementos más novedosos de la nueva legislación en materia forestal fue la aplicación de los *Planes Generales de Manejo Forestal* (PGMF) y del sistema de *Certificación Forestal Voluntaria*³⁵⁴ (CFV) así como la descentralización de la gestión

³⁵² <http://constituyentesoberana.org/info/?q=texto-ley-agraria>

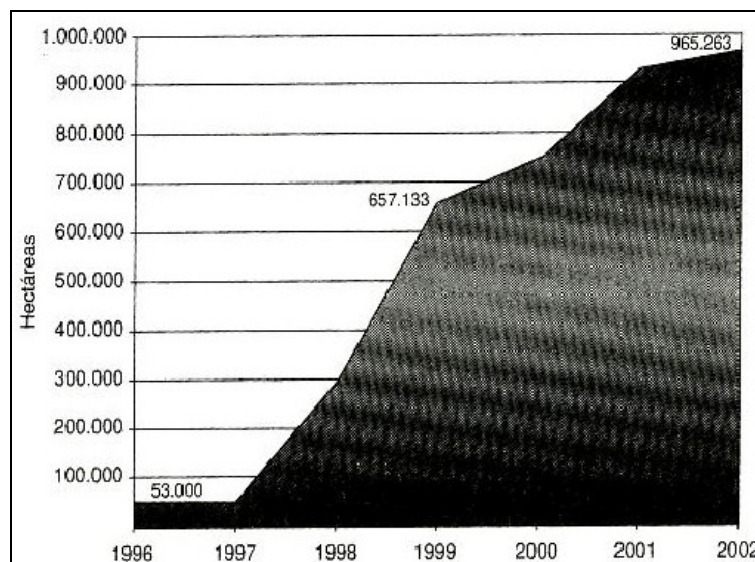
³⁵³ Tamburini señala en su artículo que recién entrada en vigor la nueva normativa, más de 20 empresas contaban con concesiones forestales en *Tierras Comunitarias de Origen*, lo cual suponía un porcentaje del 23,5% del total de concesiones otorgadas (1997: 20-21).

³⁵⁴ La *Certificación Forestal Voluntaria* viene definida como “un mecanismo no gubernamental y voluntario de control social sobre el origen de productos forestales, que funciona a partir de una evaluación de los aspectos sociales, ambientales y económicos del manejo forestal”, los

forestal en diversas unidades administrativas (MDRA y MA, 2008). Con esta certificación se garantiza a los consumidores que los productos forestales que han adquirido han sido extraídos bajo parámetros de sostenibilidad.

En Bolivia se creó la CFV en el año 1995 (Barrantes, 2005: 137). Las certificaciones forestales son exigidas cada vez con mayor presión por los mercados internacionales para obligar a cumplir un buen manejo forestal, bajo el principio de la sostenibilidad. Aunque al mismo tiempo, continúan las exportaciones ilegales de madera. Sin embargo, son muy pocas las TCOs de Bolivia que han solicitado tal certificación: únicamente Yuqui y Lomerío³⁵⁵ (*ibíd.*, 135). En Bolivia existen cerca de 2 millones de hectáreas bajo la certificación forestal voluntaria. La mayor parte son empresas, de lo que se deduce que en algunos casos el manejo se está procurando realizar desde la legalidad y bajo el principio de la sostenibilidad.

Gráfico 7. 6. Áreas con CFV en Bolivia, periodo 1996-2002.



Fuente: Barrantes, 2005: 136, en base a los datos del *Forest Stewardship Council*³⁵⁶ (FSC).

cuales si se cumplen se obtiene dicha certificación y el sello FSC que representa la garantía, frente a los consumidores, de que los productos forestales que obtienen provienen de bosques manejados de manera sostenible (<http://www.consejoforestal.org.bo/>). Los estándares han sido fijados a nivel internacional. Se puede obtener previa petición a cualquiera de las entidades encargadas en expedirla y tras haber contactado con el Consejo Boliviano para la Certificación Forestal Voluntaria – CFV, quienes se disponen a realizar la debida evaluación que certifique la realización de un manejo forestal acorde con lo que marcan las directrices. Tras estas fases se concede la CFV por un periodo de cinco años siendo renovable anualmente si cumple con los principios y criterios de los estándares de la certificación del país. Los beneficios son de diversos tipos: ambientalmente se logra la conservación de la biodiversidad y la protección de las especies del bosque; desde el punto de vista social supone el respeto de los derechos humanos de muchas poblaciones, principalmente indígenas y económicamente fomenta la diversificación de los modos de producción locales (<http://www.consejoforestal.org.bo/>).

³⁵⁵ http://www.amazonia.bo/amazonia_bo.php?id_contenido=2162&opcion=detalle_not

³⁵⁶ Organismo encargado en autorizar las verificaciones del manejo forestal.

7. 5. 1. Planes Generales de Manejo Forestal.

Pero sin lugar a dudas, el logro más destacado de la Ley 1700 fue la creación de los mencionados *Planes Generales de Manejo Forestal*. Estos se convirtieron en un requisito indispensable para el desarrollo de cualquier tipo de actividad forestal en Bolivia.

El Plan de Manejo Forestal aparece definido como el:

“instrumento de gestión forestal resultante de un proceso de planificación racional basado en la evaluación de las características y el potencial forestal del área a utilizarse, elaborado de acuerdo a las normas y prescripciones de protección y sostenibilidad y debidamente aprobado por la autoridad competente, que define los usos responsables del bosque, las actividades y prácticas aplicables para el rendimiento sostenible, la reposición o mejoramiento cualitativo y cuantitativo de los recursos y el mantenimiento del equilibrio de los ecosistemas” (artículo 3)³⁵⁷.

El texto constitucional precisa que en caso de solicitud de una conversión de tierras de “cobertura boscosa a usos agropecuarios u otros”, ésta sólo se podrá realizar en caso de que se haga en un espacio legítimamente designado para ello y siempre que se ajuste a la ley vigente (artículo 389)³⁵⁸. En estos casos es misión de la ABT determinar las zonas destinadas a servidumbres ecológicas y de zonificación de los usos del suelo de dichas áreas. Sólo de este modo se podrá controlar y garantizar la conservación de estos suelos. En caso de cometerse cualquier tipo de infracción se castigará con las correspondientes penalizaciones que vengan determinadas por la ley. Es más, los daños cometidos en tales zonas deberán ser reparados (artículo 389).

Los planes de manejo forestal son iguales para el conjunto de actores, aunque como bien indican Herbás y Patiño, los pueblos indígenas se enfrentan a una dificultad añadida: los elementos técnicos de dichos planes, además de los costos que supone su elaboración (2010: 216). Existe cierta similitud con el SAN-SIM por el tema de los costos y de la lenta burocracia por la que deben atravesar. Esto lleva a que en muchas ocasiones, desde las comunidades, no se respeten los tiempos y se realice un aprovechamiento forestal de manera ilegal urgido por los requerimientos de cada comunidad, que no puede esperar a obtener algunos recursos que se les antojan indispensables (*ibíd.*).

Los PGMF pueden ser aprobados como concesiones a ASL, a empresas, a propiedades privadas o comunales y a TCOs. Para este último caso es la UCPOI la

³⁵⁷ http://www.gobernacionlapaz.gob.bo/archivos/Normas/RG_Ley_1700.pdf

³⁵⁸ <http://bolivia.unfpa.org/content/constituci%C3%B3n-pol%C3%ADtica-del-estado>

responsable de que tales planes sean respetados. Sin embargo, en el caso de los chacos donde las familias indígenas asientan sus cultivos, si estos no superan las 5 hectáreas no tienen la obligación de solicitar permisos a la ABT. En cambio si se pretende hacer un uso comercial se debe elaborar un plan de manejo forestal y que éste sea aprobado.

Otra modalidad que puede ocurrir es que una empresa forestal pretenda realizar un uso y aprovechamiento de los recursos forestales que se encuentran al interior de una determinada TCO, lo cual por ley no está permitido. La legislación dictamina que no se pueden solicitar planes de manejo en estos territorios puesto que, para permitir la explotación de recursos, debería otorgarse una concesión, la cual debe realizarse exclusivamente en tierra fiscal, siendo la TCO tierra privada (artículo 32)³⁵⁹. Anteriormente sí se podían dar concesiones en propiedad privada, ahora sólo en tierras fiscales y la TCO no lo es.

Una alternativa con la que cuentan las empresas es llegar a un acuerdo con los propietarios, previo trámite en los organismos correspondientes. De esta manera la comunidad cede los derechos de aprovechamiento y explotación a una determinada empresa debiendo demostrar ésta que se ha efectuado previa consulta a la comunidad. Uno de los problemas que surge es que en algunos casos concretos son los propios dirigentes indígenas que llegan a acuerdos con las empresas sin haberlo consultado con el resto de comunarios, sin poder ser por tanto evaluado y aprobado de forma colectiva. Los derechos de aprovechamiento de los recursos forestales se otorgan a través de la instancia competente (la ABT) y para asegurar o intentar que los pueblos indígenas se ajusten a la normativa se prevé una norma específica para planes de manejo forestal concretamente en las comunidades indígenas. En estos casos la aplicación la hace la misma comunidad en conjunto con los profesionales que trabajan como asesores y consultores, aunque *“siempre suele haber por detrás alguna ong o alguna empresa que hace este procedimiento”* (entrevista a Roberto Ríos). Asimismo los predios que están dentro de TCOs, pueden presentar planes de manejo. Este sería el caso de los ganaderos de Mojos quienes podrían operar al interior de sus estancias a través de un autorizado plan de manejo. Si bien no es suficiente con que sea propietario sino que *“deben ajustarse a la normativa que dicta la ABT a la hora de transformar los usos del suelo”* (entrevista Roberto Ríos). Es decir debe estar incluido en el POP, el cual a su vez debe estar autorizado y ser concordante con la capacidad de uso de suelo.

Las propias instancias de gobierno han reconocido que los planes de manejo forestal tampoco han constituido una garantía de aprovechamiento forestal sostenible, tras haber salido a la luz diversas irregularidades en las áreas de manejo por falta de

³⁵⁹ http://www.gobernacionlapaz.gob.bo/archivos/Normas/RG_Ley_1700.pdf

instrumentos de control (MDRAyMA, 2008). Si bien los PGMF definirían las acciones de aprovechamiento y gestión forestal con el fin de garantizar el manejo sostenible y propiciar la regeneración natural de las áreas destinadas al mismo, esto no siempre ha ocurrido.

En la TCO TIMI encontramos 3 *Planes Generales de Manejo Forestal* realizados en Villa Esperanza, Chontal y Litoral (véase **cuadro 7. 14**) como indicio del deseo de los habitantes de estas comunidades de desarrollar sus propios sistemas indígenas locales de producción y reproducción forestal.

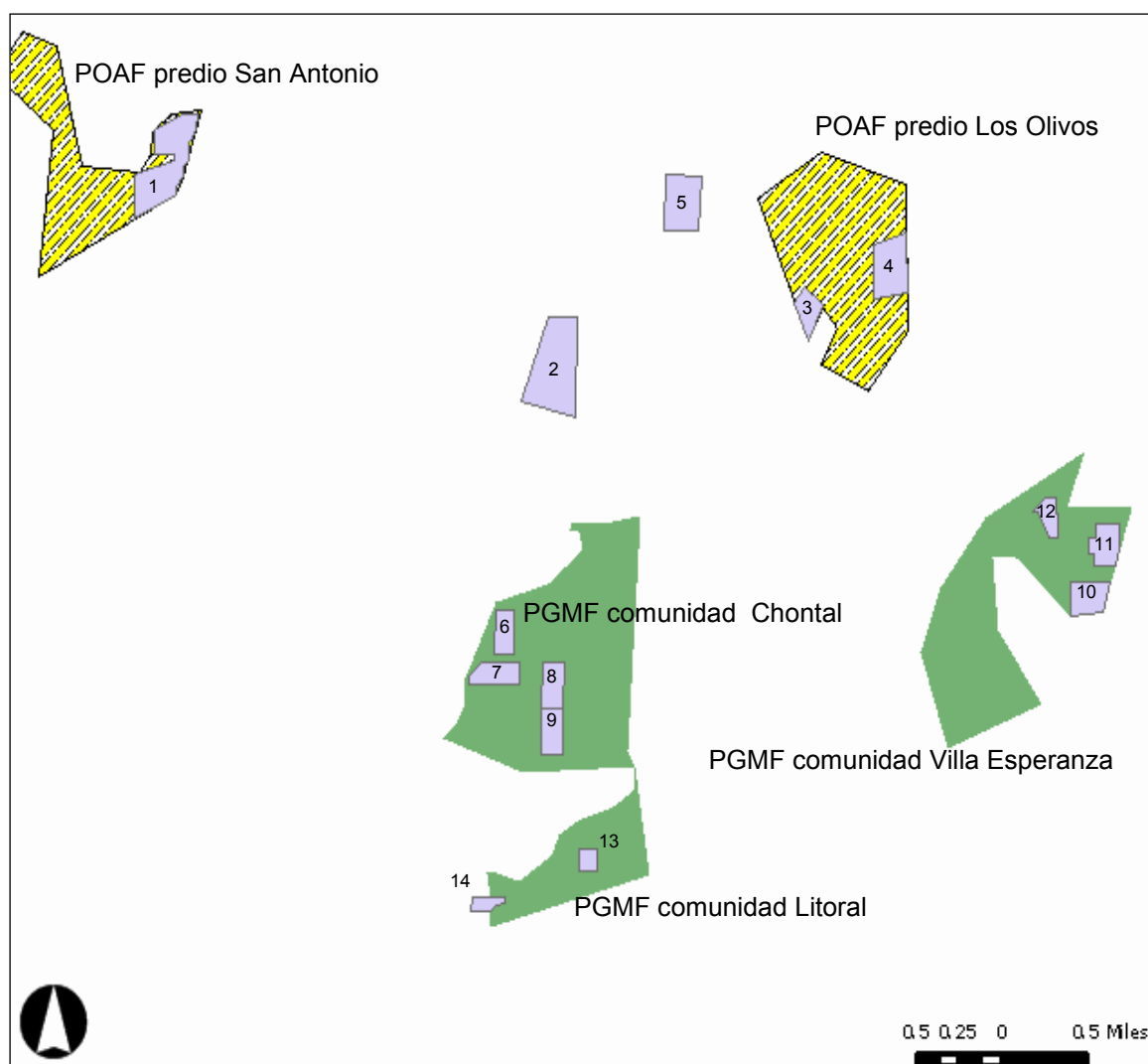
Cuadro 7. 14. Autorizaciones de aprovechamiento forestal en comunidades indígenas de la TCO TIMI bajo PGMF.

| Nº | Nombre de la comunidad | Provincia | Municipio | Resolución administrativa | Fecha | Superficie (has.) |
|----|---|-----------|----------------------|---------------------------|------------|-------------------|
| 1 | Comunidad Indígena Villa Esperanza TCO-TIMI | Mojos | San Ignacio de Mojos | RS 045-2001 | 25/05/2001 | 1.327 |
| 2 | Comunidad Indígena San Juan de Dios de Litoral TCO-TIMI | Mojos | San Ignacio de Mojos | RS 092-2000 | 06/09/2000 | 532 |
| 3 | Comunidad Indígena El Chontal TCO-TIMI | Mojos | San Ignacio de Mojos | RS 065-2000 | 12/06/200 | 1.661 |

Fuente: elaboración propia en base a Superintendencia Forestal, 2003.

En la figura que aparece a continuación (7. 6) se pueden ubicar los PGMF de Villa Esperanza, Chontal y Litoral, comunidades todas ellas pertenecientes a la TCO TIMI. Sin embargo, además de haberles sido concedidos dichos planes, también fueron autorizados los POAF correspondientes, por el hecho de poseer todas ellas superficies mayores a 200 hectáreas en su plan de manejo: 1.327, 1.661 y 532 hectáreas respectivamente (véase **cuadro 7. 15**).

Figura 7. 6. POAF Y PGMF en la TCO TIMI.



Fuente: elaboración propia en base a información de <http://abt.gob.bo/>

Ficha 1

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha | 28/10/2010 |
| Tipo personería jurídica | Propietario privado: Guido Suárez Vaca |
| Superficie en hectáreas | 163.93 |
| Razón Social | San Antonio |

Ficha 2

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha | 09/05/2007 |
| Tipo personería jurídica | Propietario privado: Armando Rivero Guzmán |
| Superficie en hectáreas | 200 |

| | |
|--------------|---------------------------|
| Razón Social | Cristo Rey ³⁶⁰ |
|--------------|---------------------------|

Ficha 3

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha | 14/01/2010 |
| Tipo personería jurídica | Propietario privado: Efraín Cortez Chávez |
| Superficie en hectáreas | 40 |
| Razón Social | Los Olivos |

Ficha 4

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Fecha | 23/08/2006 |
| Tipo personería jurídica | Propietario privado |
| Superficie en hectáreas | 0 |
| Razón Social | Los Olivos ³⁶¹ |

Ficha 5

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha | 23/08/2006 |
| Tipo personería jurídica | Propietario privado: Ángel Humberto Díez Malue |
| Superficie en hectáreas | 100 |
| Razón Social | Isirere ³⁶² |

Ficha 6

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Fecha | 2000 |
| Tipo personería jurídica | Propietario privado |
| Superficie en hectáreas | Sin datos |
| Razón Social | Chontal |

³⁶⁰ Es un POAF a cuenta de PGMF (no tiene aún PGMF): según la Superintendencia Forestal consiste en un plan de manejo forestal que es concedido a aquellas TCOs que no disponen de los recursos necesarios para llevar a cabo un PGMF, por lo que la UCPOI estima conveniente la concesión de dicho POAF bajo el compromiso de un posterior PGMF (Superintendencia Forestal, 2003: 92). Sin embargo, en el mapa confeccionado en base a los datos de ABT-el organismo gubernamental que reemplazó a la ex Superintendencia Forestal- se demuestra la concesión de “POAF a cuenta de PGMF” a propietarios particulares en vez de a TCO o comunidades indígenas, lo cual incurriría en la normativa legal relativa al aprovechamiento y gestión de los recursos forestales. Esto demuestra que una vez más la legislación forestal se ejecuta en beneficio, mayormente, de terceros, perjudicando a las poblaciones indígenas.

³⁶¹ Es un POAF a cuenta de PGMF (no tiene aún PGMF).

³⁶² Es un POAF a cuenta de PGMF (no tiene aún PGMF).

Ficha 7

| | |
|--------------------------|-----------|
| Fecha | Sin datos |
| Tipo personería jurídica | Sin datos |
| Superficie en hectáreas | o |
| Razón Social | Sin datos |

Ficha 8

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Fecha | Sin datos |
| Tipo personería jurídica | Comunidad indígena |
| Superficie en hectáreas | Sin datos |
| Razón Social | Chontal |

Ficha 9

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Fecha | Sin datos |
| Tipo personería jurídica | Comunidad indígena |
| Superficie en hectáreas | Sin datos |
| Razón Social | Chontal |

Ficha 10

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Fecha | Sin datos |
| Tipo personería jurídica | Comunidad indígena |
| Superficie en hectáreas | Sin datos |
| Razón Social | Villa Esperanza |

Ficha 11

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Fecha | Sin datos |
| Tipo personería jurídica | Propietario privado |
| Superficie en hectáreas | Sin datos |
| Razón Social | Villa Esperanza |

Ficha 12

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Fecha | Sin datos |
| Tipo personería jurídica | Comunidad indígena |

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Superficie en hectáreas | Sin datos |
| Razón Social | Villa Esperanza |

Ficha 13

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Fecha | Sin datos |
| Tipo personería jurídica | Propietario privado |
| Superficie en hectáreas | Sin datos |
| Razón Social | Litoral |

Ficha 14

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Fecha | Sin datos |
| Tipo personería jurídica | Comunidad indígena |
| Superficie en hectáreas | Sin datos |
| Razón Social | Litoral |

Fuente: elaboración propia en base a los datos de ABT.

**Cuadro 7. 15. Aprobación de POAF mayores a comunidades de la TCO
TIMI con PGMF.**

| Nº | Razón Social | Tipo de persona | Municipio | Resolución Administrativa | Superficie (has.) |
|----|--|--------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------|
| 1 | Villa Esperanza, Comunidad Indígena | Comunidad Indígena o Pueblo Indígena | San Ignacio | RI-ITE-POAF-090-2002 | 58 |
| 2 | Comunidad San Juan de Dios Litoral-TIMI | Comunidad Indígena o Pueblo Indígena | San Ignacio | RI-ITE-POAF-063-2002 | 21 |
| 3 | Comunidad Indígena de San Pablo de Chontal | Comunidad Indígena o Pueblo Indígena | San Ignacio | RI-ITE-POAF-075-2002 | 44 |

Fuente: Elaboración propia en base a Superintendencia Forestal, 2003.

Estos PGMF se desarrollaron en la comunidad de Chontal desde 1999 hasta 2004 y desde 2001 también hasta 2004, en las comunidades de Villa Esperanza y Litoral. Dichos planes de manejo se desarrollaron por iniciativa de la organización CIDDEBENI, tras la aprobación de la *Ley Forestal* y la *Ley INRA*. Pero ya desde finales de la década de los ochenta y durante la década de los noventa, CIDDEBENI estaba

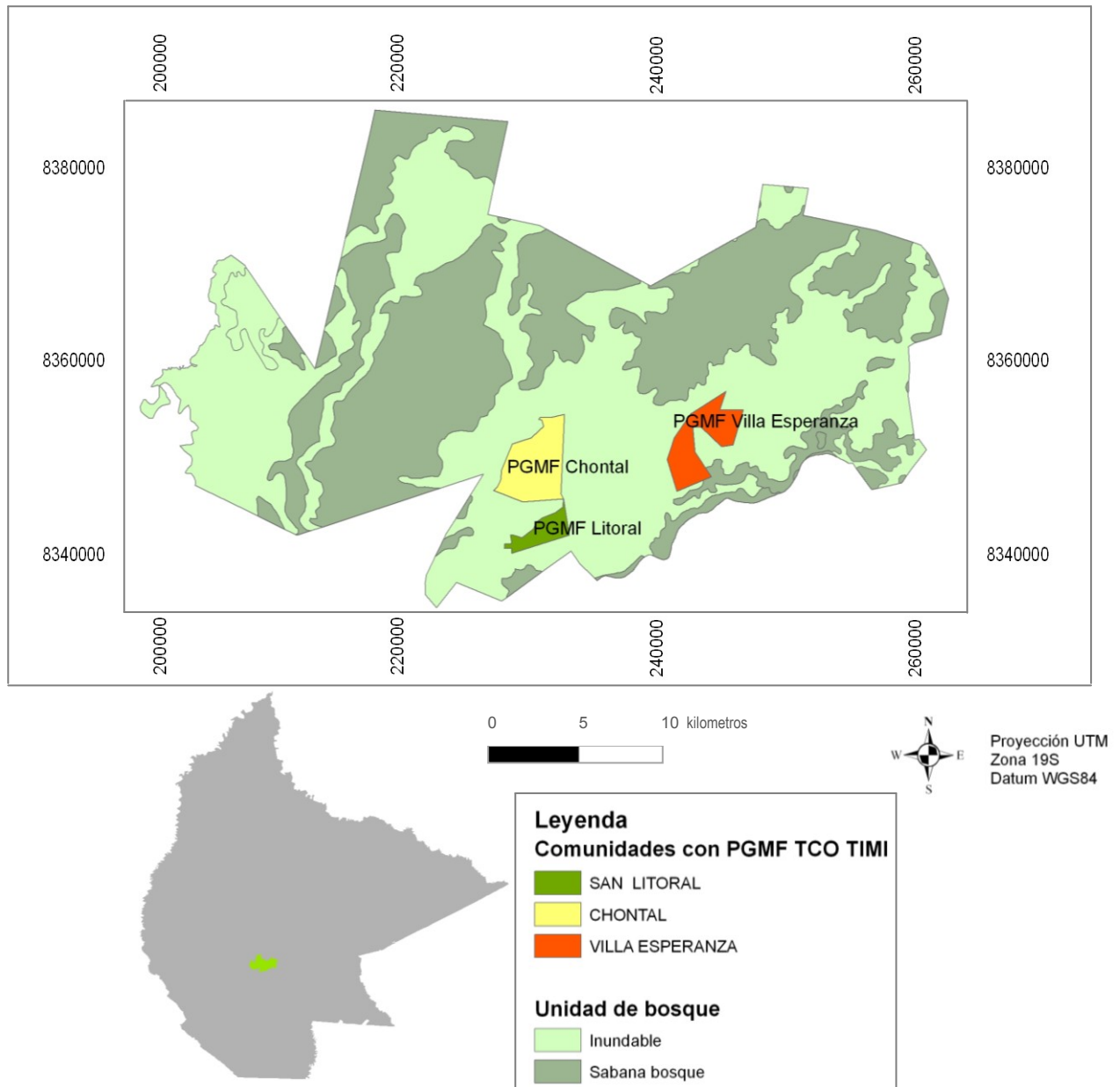
luchando a favor de la consolidación de los territorios indígenas y trabajando en aras de la capacitación indígena (entrevista a Jhon Kudrenecky).

Lamentablemente el manejo forestal sostenible no ha funcionado en el municipio de San Ignacio por la falta de control ya que sólo existe un puesto de control para todo el departamento del Beni, Pando y parte del Departamento de La Paz, a diferencia de Santa Cruz, donde se encuentran un gran número de ellos (entrevista a John Kudrenecky). Es una de las razones por la que hay un elevado nivel de piratería, siendo el palo maría la especie más explotada actualmente en San Ignacio.

Por el contrario, el testimonio de Julio Sita no es del todo coincidente con esta información y aclara, desde su posición, el porqué no funcionaron dichos PGMF:

“Se acabó el plan de manejo por falta de coordinación con nuestros mismos dirigentes. Apareció nuestra institución de apoyo (CIDDBENI) diciendo que los dirigentes habían cerrado la institución dentro de las comunidades. Hubo una denuncia de gente que no había cumplido el reglamento forestal, de los mismos comunarios. Varios comunarios incumplieron el reglamento y la comunidad fue a una reunión a San Ignacio a reunirse con la Subcentral pero ésta decidió cerrar el acuerdo con CIDDBENI” (entrevista).

Mapa 7. 2. PGMF de la TCO TIMI



Elaboración propia en base a los datos del Centro Digital de Recursos Naturales de Bolivia y de CPTI

Desde CIDDEBENI se efectuaron sondeos previos en las comunidades del TIMI con el objetivo de evaluar el valor potencial forestal existente en las comunidades. Además se llevaron a cabo entrevistas y talleres con los comunarios. Se hizo una consulta pública, con notario, en las comunidades, puesto que era uno de los requisitos. Éstas, al ser el representante legal, debían dar su visto bueno al plan de manejo y debían ser quienes presentasen además, el plan a lo que era en su momento la Superintendencia Forestal (entrevista a John Kudrenecky).

Tras estas primeras fases de trabajo, CIDDEBENI propuso a las comunidades de Santa Rita, Chontal y Villa Esperanza el desarrollar un plan de manejo forestal al interior de sus límites territoriales. Según fuentes de CIDDEBENI, Santa Rita lo rechazó porque en esta comunidad se practicaba una notable actividad ilegal de extracción de la madera que interesaba más a algunos de sus vecinos, por los beneficios económicos que reportaba. Al haber sido zonas que habían sufrido ya la fuerte deforestación de épocas anteriores no presentaban un alto potencial forestal lo cual favorecía la inexistencia de conflictos importantes.

En el siguiente mapa (7. 3) aparecen reflejados los derechos forestales de empresas madereras, ASL y TOCs en el conjunto del país. Se advierten los PGMF de las comunidades del TIMI: Chontal (T-17), Litoral (T-18) y Villa Esperanza (T-19), además de la inactividad forestal por parte de empresas o Agrupaciones Sociales del Lugar.

Mapa 7. 3. Derechos forestales Bolivia



Fuente: BOLFOR II, 2007

(<http://www.bolfor.org/documentos/Mapa%20de%20Derechos%20Forestales>.)

7. 5. 2. Controversias en torno a la legislación forestal.

Son varios quienes se presentan como detractores de la *Ley Forestal*. Estos increpan contra las contradicciones existentes entre la Ley 1700 y la Ley 1715 (Tamburini, 1997; Martínez, 2000). La ambivalencia jurídica ha constituido una fuente de conflictos por los derechos de explotación y aprovechamiento de los recursos forestales, principalmente en aquellas zonas donde se ha producido la superposición de dichos derechos.

Una vez más el Convenio 169 de la OIT, constituyó la base jurídica para la legislación forestal boliviana, al igual que sucedió, como ya vimos, con la normativa agraria. Y también del mismo modo que sucedió en materia agraria, la legislación boliviana cayó en algunas contradicciones relativas a los derechos de uso de los recursos naturales. Para demostrar esta idea Chumacero atiende a dos artículos en concreto de la NCPE: si por un lado se expresa que “*los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible, e imprescriptible del pueblo boliviano, y corresponderá al Estado su administración en función del interés colectivo*” (artículo 348), por otro lado aparece que los pueblos indígenas tienen el “*derecho a la tierra, al uso y al aprovechamiento exclusivo de todos los recursos naturales renovables en las condiciones determinadas por ley*” (artículo 403) (2010a: 35). Este solapamiento se traduce en la limitación del uso y manejo de recursos naturales para los pueblos indígenas, a favor de las prerrogativas del Estado, viendo como consecuencia mermados sus derechos colectivos. El Estado reconoce de su propiedad, de su dominio, los recursos susceptibles de aprovechamiento, al mismo tiempo que garantiza el aprovechamiento sostenible de los recursos por parte de las comunidades indígenas conformadas en TCOs, en base a sus propias costumbres e instituciones locales. Otra contradicción en la que incurre la *Ley Forestal* es sobre la que llaman la atención Herbás y Patiño, quienes contrastan el artículo 32 referido a la “*exclusividad en el aprovechamiento forestal de las tierras comunitarias de origen que estén debidamente reconocidas*” con “*la existencia de concesiones forestales anteriores a la titulación de territorios indígenas*” (2010: 216).

El problema crucial es que una vez más existe una total discordancia entre la realidad indígena y la legislación nacional, que no reconoce las dinámicas económicas, culturales y orgánicas de las comunidades indígenas, lo cual conduce a que para éstas resulte complicado cumplir con la ley dado el desajuste entre sus propias normas, intrínsecas a cada comunidad, y la normativa estatal.

Otra de las críticas dirigidas a la *Ley Forestal* es que en la formulación de ésta participaron entes extranacionales con claros intereses económicos en el sector forestal boliviano. El caso del *Proyecto Bolivia Forestal –BOLFOR–* sirve para ilustrar lo que

aquí se sostiene. BOLFOR se creó tras el convenio efectuado entre USAID³⁶³, “*un consorcio de empresas norteamericanas liderado por la Chemonics International – quienes prestaron asistencia técnica al Ministerio de Desarrollo Sostenible de Bolivia y el gobierno boliviano*” (Martínez, 2000). Este autor se atreve a afirmar que a la hora de redactar la nueva ley influyó de manera notable la presión ejercida por las empresas que participaban de los beneficios del sector forestal, lo cual produjo como consecuencia que dicha legislación se redactase con vistas a favorecer tales intereses (*ibíd.*, 214).

El caso de la mara es enormemente ilustrativo. La americana “Newman Lambert” era el comprador casi exclusivo de dicha especie forestal, por lo que casi la totalidad de la producción iba a parar a Estados Unidos (entrevista a John Kudrenecky). En relación a la exportación de esta especie se identificaron dos empresas creadas con capitales de senadores del gobierno americano, las cuales tuvieron un fuerte peso político previo a la gestión del gobierno de Evo Morales (entrevista Roberto Ríos). Según estas fuentes, en la actualidad continúan operando pero con base en EEUU, a pesar de que siguen actuando como financiadores y promotores de ilegalidad. Se produjeron amenazas, aunque no de manera formal, por parte de estas empresas quienes se enfrentaron al gobierno boliviano en pasadas gestiones, alegando que si éste frenaba las exportaciones de dichas empresas, USAID no aportaría financiaciones económicas ni subvenciones a Bolivia.

La ley anterior dejaba varias vías abiertas para que se produjesen acciones ilegales que al mismo tiempo estaban amparadas por la propia legislación.

Al igual que ocurría en Bolivia con la tenencia de la tierra, el régimen forestal se caracterizaba por la alta concentración de las áreas boscosas en pocas manos. Algunos estudios dan cifras y apuntan a que los “*22 millones de hectáreas bajo contrato de aprovechamiento estaban en manos de tan sólo veinte empresas*” lo cual equivaldría casi a la mitad de la superficie del país y la cuarta parte de las áreas boscosas (Martínez, 2000: 214-215).

Desde el propio gobierno admiten como los principales errores del modelo forestal boliviano: el carácter uniformizador y la homogeneidad que se ha implementado en cuanto al manejo forestal, la cual ha excluido como consecuencia, la diversidad de prácticas de manejo forestal desarrolladas tanto por poblaciones indígenas como campesinas, donde no prima el manejo comercial (MDRAyMA, 2008).

Otro de los inconvenientes a batir por las comunidades indígenas es la inaccesibilidad a los mercados de la madera al verse imposibilitados por las grandes empresas extractivistas, las cuales obstaculizan el acceso de estos usuarios del bosque a

³⁶³ Agencia de Cooperación Internacional de los Estados Unidos.

los servicios forestales de los mercados locales así como a los recursos financieros y tecnológicos. Esto ha provocado que se inserten en redes informales de comercio de madera, al no contar con otra alternativa (MDRAyMA, 2008). A pesar de la creación del *Fondo Nacional de Desarrollo Forestal* (FONABOSQUE) -institución ideada para la distribución de recursos económicos que contribuyesen a la promoción de la gestión sostenible de los bosques- ésta nunca llegó a funcionar por “*falta de voluntad política*”, invirtiéndose finalmente dichos recursos en gastos varios de la Superintendencia Forestal o en el financiamiento del saneamiento de áreas forestales (Pacheco P., 2009: 203).

7. 6. LA CUESTIÓN FORESTAL EN MOJOS.

El departamento del Beni alberga un número inestimable de especies forestales de alto valor comercial, siendo la mara o caoba la más destacada. El débil régimen de tenencia de la tierra constituyó uno de los factores principales que propiciaron el ineficiente manejo del bosque por parte de sus usuarios, provocando una fuerte degradación de las tierras forestales en la región. Una adecuada política forestal no sería implementada hasta bien entrada la década de los noventa, cuando las regulaciones en torno al acceso y manejo de recursos naturales fueron estipuladas por la *Ley Forestal*. Hasta entonces, en los bosques del oriente boliviano, primaron por parte de los agentes externos, los sistemas de aprovechamiento selectivo.

Debido a la alta concentración de especies maderables de alto potencial, la TCO del TIMI ha sido una de las áreas del Beni que más ha sufrido los efectos de la deforestación. En el *Plan de Desarrollo Municipal de San Ignacio de Mojos* (2001) se señalan como limitaciones del sector forestal: la fuerte depredación de los bosques y la tala indiscriminada, así como la tala selectiva y la escasa existencia de planes de manejo forestal. Zulema Lehm advirtió que en nombre del progreso, las empresas madereras estaban devastando el territorio mojeño (1987).

7. 6. 1. Causas de la deforestación en el Beni.

Señala Pacheco a las políticas públicas y los procesos socioeconómicos como los principales responsables de la deforestación en Bolivia, los que han provocado las correspondientes transformaciones de la cobertura forestal, siendo las causas principales externas al propio sector forestal (Pacheco P., 1998a)³⁶⁴. Incluso el actual *Ministerio de Desarrollo Rural Agrícola y Medio Ambiente* apunta a las políticas de

³⁶⁴ <http://www.wrm.org.uy/deforestation/LAmerica/Bolivia.html>

desarrollo de las exportaciones y políticas de tierra como los principales estímulos que generaron la deforestación en Bolivia, debido a que fomentaron la agricultura mecanizada, las migraciones hacia las tierras bajas del país y la especulación del mercado de tierras (2008). La incertidumbre aún palpable en la propiedad de la tierra y la especulación que gira en torno a ésta, junto con los incentivos que reportan las actividades no forestales, son motivos añadidos al fenómeno de la deforestación en el país (*ibíd.*).

Pablo Pacheco añade además toda una serie de “*factores vinculados con la naturaleza de las estructuras sociales, los patrones de acumulación de capital, los términos de intercambio, y los cambios tecnológicos y demográficos*” así como “*las políticas macroeconómicas y las políticas sectoriales para la agricultura*” (1998a). Este mismo autor hace referencia a un fenómeno sumamente interesante en este sentido y es lo que él denomina los “estilos de crecimiento”, o dicho de otra manera, los “estilos de desarrollo”. Y es que se podría generalizar al conjunto de países de América Latina, un modelo de desarrollo económico basado en la explotación incontrolada de los recursos naturales, constituyéndose además en un modelo excluyente hacia aquellas poblaciones más desfavorecidas (Pacheco P., 1998b), que a menudo conforman los sectores sociales que más dependencia presentan hacia el patrimonio natural.

La tasa promedio de deforestación anual se incrementó un 100% en poco más de 3 décadas de actividad forestal (véase **cuadro 7. 16**). El mismo autor, en base a diversos estudios, señala que hasta la década de los años sesenta los niveles de desboque en Bolivia se mantuvieron bajos, produciéndose un ligero incremento durante la década de los setenta y ochenta hasta alcanzar los niveles más elevados en los noventa (1998b: 33). Otros análisis coinciden en que la tasa de deforestación entre el 2004 y el 2006 alcanzó en torno a las 300.000 hectáreas (MDRAYMA, 2008; Resnikowski, 2007), aunque matizan que pudo ser una cifra más elevada puesto que no se consideraron los desmontes inferiores a 5,3 hectáreas (Resnikowski, 2007).

La eliminación de las tierras forestales provoca fuertes cambios en los usos del suelo, los cuales pierden su potencial forestal para convertirse en tierras que acogen la expansión de la ganadería o la agricultura.

Cuadro 7. 16. Tasa anual de deforestación en Bolivia.

| Periodo | 1971-1987 | 1990-2000 | 2000-2005 |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| Nº Hectáreas | 140.000 | 168.000 | 300.000 |

Fuente: elaboración propia en base a los datos de Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado y Fundación Amigos del Museo Noel Kempff, 2009.

(<http://museonoelkempff.org/sitio/index.html>).

En el caso del Beni es la actividad ganadera la que más presión está generando en los bosques del departamento. Aquí a medida que avanza dicha actividad, el fenómeno de la deforestación va *in crescendo*. Si unas décadas atrás la causa principal fue la agresiva actividad maderera de carácter extractivista, en la actualidad, lo que más preocupa, es la actividad ganadera. Junto a ellas encontramos algunos otros motivos³⁶⁵ que han contribuido a incrementar la degradación de los ecosistemas benianos, como son las quemas (véase **figura 7. 7**), la apertura de caminos (véase **fotografía 7. 5**), la irregularidad de la tenencia de la tierra, los escasos controles legales procedentes de la política forestal, el auge de los mercados de exportación de madera propiciado por programas neoliberales³⁶⁶ o la escasa conciencia sobre la problemática ambiental.

Fotografía 7. 5. Imágenes de apertura de caminos al interior de la TCO TIMI.



Fuente: Virginia Jabardo Pereda

Lo anterior me lleva a tratar la cuestión de las quemas incontroladas dado que, durante el verano, los ganaderos se disponen a quemar amplias áreas, buscando la regeneración de los suelos, los cuales son reconvertidos en pastizales para el ganado. Las quemas constituyen en la TCO TIMI, otra de las principales causas de deforestación. El uso del fuego ha sido una de las herramientas utilizadas por las poblaciones indígenas en los sistemas agrícolas de subsistencia. En las comunidades eligen el terreno más apropiado en el que ubicar los chacos. Posterior a ello talan y

³⁶⁵ Llamamos la atención al hecho de que en el espacio que ocupa nuestro ámbito de estudio, los cultivos mecanizados, como es el caso de la soja, no tienen cabida, a diferencia de lo que ha ocurrido en el departamento de Santa Cruz, donde un número inestimable de hectáreas ha sido destinado a dicha actividad, habiéndose convertido en la principal causa de deforestación en dicha región.

³⁶⁶ Pablo Pacheco recoge los análisis de otros autores para argumentar que son muchos los que consideran que los programas de ajuste estructural generan un incremento de la pobreza y de la degradación ambiental, y que a la vez estimulan, a base de incentivos, la sobre-explotación de los recursos naturales dejando al sector público sin apenas espacio de maniobra a la hora de implementar políticas públicas. De esto se extrae que los ajustes estructurales incrementaron la presión sobre los bosques del Oriente boliviano “asociado con un crecimiento acelerado de las tasas de deforestación y el incremento de la extracción maderera en bosques no manejados” (1998a: <http://www.wrm.org.uy/deforestation/LAmerica/Bolivia.html>).

desbrozan la zona que será cultivada y dan fuego a los restos que quedan. Por último proceden a basurear, o quitar la “chafra”, tal y como fue explicado en el capítulo 4. Pero es también a través del fuego que los ganaderos aprovechan para ocupar tierras que no les pertenecen y tras desmontar determinadas áreas al interior del TIMI, reclaman los derechos de propiedad sobre dicha tierra.

El modelo de explotación de la ganadería extensiva transforma los suelos de la región al convertirlos en potreros destinados al ganado, incrementando las tasas de desmonte. Por lo tanto, si las quemas han formado parte de los sistemas locales de manejo indígena en el oriente boliviano, desde un periodo más reciente son los ganaderos quienes están recurriendo, con cada vez mayor frecuencia, al uso del fuego para consolidar sus derechos de propiedad. Asimismo, explicaba en el tercer capítulo de este trabajo, que los ecosistemas amazónicos se caracterizan por ser suelos pobres en nutrientes en cuanto al rápido reciclaje de la materia orgánica. El *Plan de Desarrollo Municipal de San Ignacio* reconoce la lenta regeneración de los suelos como una de las limitaciones (2001) (véase **anexo 4**). Al desaparecer la cobertura vegetal en estos bosques, la vulnerabilidad de estos suelos se verá consecuentemente incrementada. Los desmontes aparecidos a causa de las quemas incontroladas, son entonces, uno de los elementos que inciden en la reducción de territorio comunal en el TIMI.

Fotografía 7. 6. Imágenes de quemas en propiedades ganaderas en la TCO TIMI (vista del predio El Dieciséis).



Fuente: Virginia Jabardo Pereda

Según datos de la ex Superintendencia Agraria, la superficie deforestada a causa de las quemas incontroladas en Bolivia, se ha incrementado (véase **cuadro 7. 17**) por el aumento de quemas de chacos y desmontes, lo cual ha corrido de la mano del incremento de los focos de calor en Bolivia, pasando de la cifra de 20.298 en el año 2003 a 46.794 registrados en el año 2004 según datos de la superintendencia Agraria (s/f).

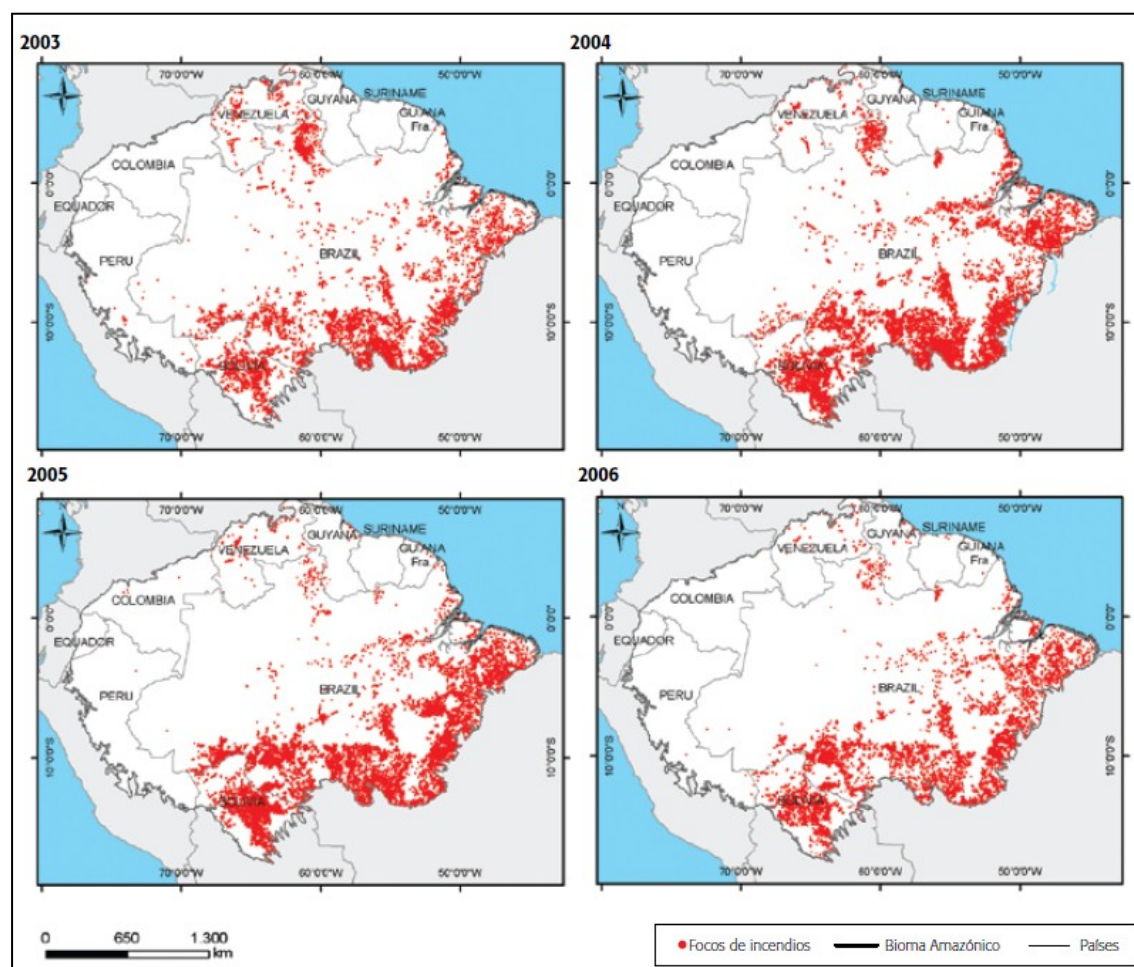
Cuadro 7. 17. Tasa de quemas en Bolivia.

| Número de hectáreas | Año |
|---------------------|------|
| 1.033.230 | 2001 |
| 9.202.110 | 2002 |
| 2.900.000 | 2003 |
| 5.662.074 | 2004 |

Fuente: Superintendencia Agraria (s/f).

La siguiente imagen nos permite apreciar que la mayor parte de los focos de calor que tienen lugar en la región amazónica se localiza en la llanura aluvial del Beni, a parte de en el Sur y Este de la Amazonía brasileña.

Figura 7. 7. Mapas de distribución de incendios en el bosque amazónico (2003-2006).



Fuente: PNUMA Y OTCA, 2009: 144 en base a los datos del sensor MODIS.

Una de las amenazas indirectas provocadas por los incendios, son las que se producen en los bosques adyacentes, en donde existe mayor riesgo de quemas dado que se muestran más vulnerables al haber perdido la protección del bosque que lo precedía,

por lo que incrementa la susceptibilidad de estas áreas al fuego (PNUMA y OTCA, 2009: 142-144).

El 9 de junio del año 1997, tras la entrada en vigor el año anterior de la *Ley Forestal*, fue aprobado el *Reglamento Especial de Desmonte y Quemas Controladas* a través de la *Resolución Ministerial* N° 131-97, de acuerdo con las leyes del Medio Ambiente, Forestal y el Código Penal, así como de las disposiciones de la CPE, siendo las Superintendencias Agraria y Forestal³⁶⁷ las encargadas de ejecutar, supervisar y autorizar los desmontes y quemas controladas. Los desmontes, a través de dicho reglamento, vinieron regulados por ley con el objetivo de evitar la degradación, provocada por las quemas, de las áreas forestales, agrarias y de los pastizales (Superintendencia Agraria).

Del mismo modo fue aprobado el *Procedimiento para la Autorización de Quemas Controladas de Pastizales* dirigido a disponer, en el marco de la legalidad, las autorizaciones de las quemas de pastizales de manera controlada en los predios del Departamento del Beni (Superintendencia Agraria).

Es ante la Superintendencia Agraria-Regional Beni donde los productores agropecuarios así como las comunidades campesinas e indígenas, debían presentar la solicitud de quema controlada de pastizales. Además se pretendió realizar campañas de prevención de incendios a nivel municipal, capacitando a asociaciones ganaderas y a los sectores campesinos e indígenas e implementar una “*Política y Plan Departamental de Prevención y Control de Incendios en áreas Forestales, Agrícolas y Pecuarias del Departamento*” (Superintendencia Agraria), como estrategia que coordinase al conjunto de actores sociales desde las instituciones encargadas. Todo ello quedó en simples propuestas que finalmente no se llegaron a ejecutar, ni a corto ni a largo plazo.

Los gráficos que aparecen a continuación ayudan a entender las dimensiones de las quemas en Bolivia y en el departamento del Beni en particular.

³⁶⁷ La Superintendencia Agraria tiene el cometido de conceder los desmontes y chaqueos y concede asimismo los permisos de quema controlada en áreas boscosas mientras que la Superintendencia Agraria lo hace en las áreas de pastizal (Superintendencia Agraria).

Cuadro 7. 18. Focos de calor según departamento en 2011.

| DEPARTAMENTO | FOCOS DE CALOR | % |
|--------------|----------------|--------------|
| Beni | 12.103 | 41,0 |
| Chuquisaca | 199 | 0,7 |
| Cochabamba | 757 | 2,57 |
| La Paz | 506 | 1,7 |
| Oruro | 29 | 0,1 |
| Pando | 1.949 | 6,61 |
| Potosí | 107 | 0,4 |
| Santa Cruz | 13.579 | 46,0 |
| Tarija | 262 | 0,89 |
| TOTAL | 29.491 | 100,0 |

Fuente: ABT³⁶⁸

Atendiendo a la información de la ABT -actualizada en octubre de 2011- para esta fecha el Departamento de Santa Cruz albergó la mayor cantidad de focos de calor de toda la superficie nacional, alcanzando él solo casi la mitad de todos ellos, aunque muy seguido por el Beni con un 41%. Dado que Santa Cruz posee una superficie de casi el doble del departamento del Beni, este último sería el que más sufriera -en cifras absolutas- las consecuencias de las quemadas. A ambos les sigue, aunque muy por debajo, el Pando, lo cual no es de extrañar dado que estos 3 departamentos del oriente boliviano son los que mayor superficie de masa forestal albergan. En estos es donde se produce una mayor actividad agropecuaria, que transforma las tierras con capacidad de uso forestal en suelos aptos para la agricultura o ganadería.

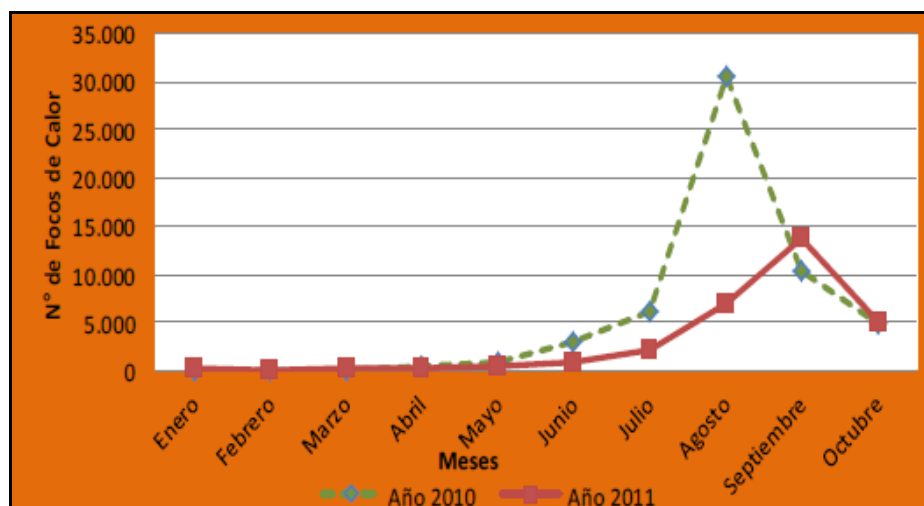
Las quemadas se concentran en el periodo invernal, siendo los meses de julio, agosto y septiembre los meses en los que existe un mayor registro de focos de calor, muy por encima del resto (véase **cuadro 7. 19**). Afortunadamente un dato positivo es que para octubre del 2011 se había reducido a casi la mitad el número de focos de calor perpetrados en el país pese a que los meses de septiembre y octubre superaron las cifras alcanzadas en el mismo periodo para el año anterior (véase **gráfico 7. 7**). No obstante, la cifra de 29.491 no deja de ser preocupante.

El siguiente gráfico (**7. 8**) nos aporta visualmente una imagen muy clara de la tendencia que caracteriza anualmente los focos de calor en Bolivia en donde destaca el repunte alcanzado en el año 2010 en el mes de agosto, el cual sería especialmente alarmante.

³⁶⁸ <http://www.abt.gob.bo/>

Cuadro 7. 19. Focos de calor según época

| Meses | N° Focos | |
|--------------|---------------|---------------|
| | Año 2010 | Año 2011 |
| Enero | 51 | 162 |
| Febrero | 28 | 64 |
| Marzo | 71 | 132 |
| Abril | 373 | 192 |
| Mayo | 739 | 510 |
| Junio | 2.944 | 812 |
| Julio | 6.081 | 2.026 |
| Agosto | 30.540 | 7.026 |
| Septiembre | 10.345 | 13.613 |
| Octubre | 4.809 | 4.954 |
| TOTAL | 55.981 | 29.491 |

Fuente: *Ibíd.***Gráfico 7. 7. Comparación focos de calor 2010-2011**Fuente: *Ibíd.*

Queda evidenciado que el sector ganadero es el principal responsable de las quemadas en Bolivia. Atendiendo al **cuadro 7. 20**, que nos aporta información sobre el número de focos de calor que tuvieron lugar en el 2011, comprobamos que casi la mitad fueron realizados por los ganaderos. En las *Tierras de Producción Forestal Permanente* (TPFP) se han contabilizado hasta 9.732 focos de calor, lo cual adquiere más sentido, aunque sea igualmente una cifra muy a tener en cuenta.

Cuadro 7. 20. Focos de calor según actividad

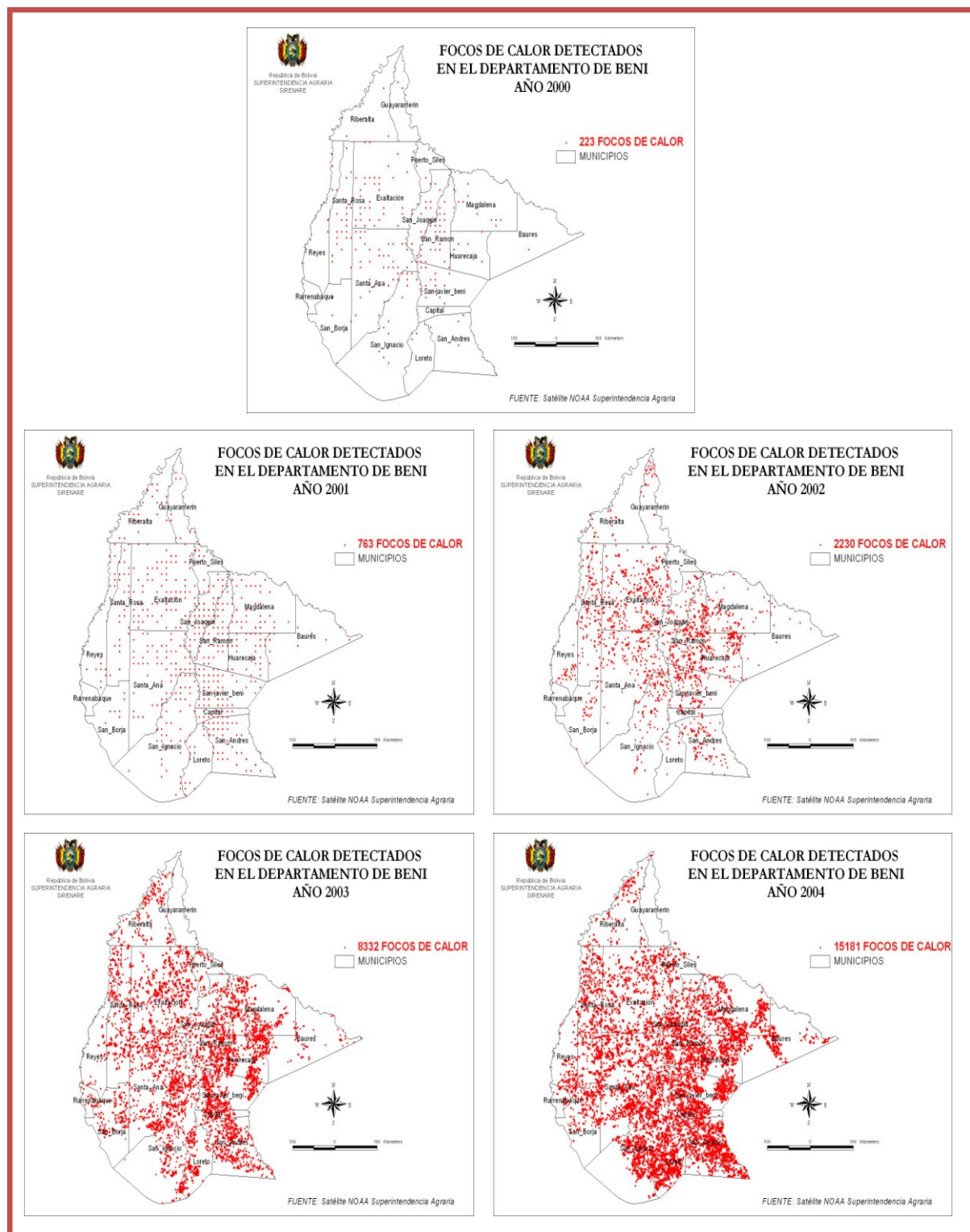
| FOCOS DE CALOR | PORCENTAJE (%) | N° de Focos de Calor |
|---------------------|----------------|----------------------|
| Ganadería | 46 | 13.566 |
| Agrícola | 14 | 4.129 |
| TPFP | 33 | 9.732 |
| Reservas Forestales | 19 | 5.603 |
| Áreas Protegidas | 6 | 1.769 |

Fuente: *Ibíd.*

Algunos de los problemas más acuciantes en lo relativo al control de quemas son: la inexistencia de conocimientos y capacidad técnica además de la falta de una conciencia clara acerca de la problemática de los incendios en el departamento.

Según la siguiente secuencia de imágenes que reflejan el incremento de los focos de calor en el Departamento del Beni, se percibe la evolución en la provincia de Mojos - con San Ignacio como capital- la cual constituye una de las provincias del departamento que mayor concentración de focos de calor presenta en su interior. Se confirma además que la Llanura del Beni es una de las regiones más afectadas por los incendios. La parte positiva de todo esto es que, en las zonas de sabanas existe predominancia de pastos, lo cual se traduce en un menor impacto sobre los bosques en comparación con otras áreas.

Figura 7.8. Mapas de la evolución de los focos de calor del departamento del Beni entre el año 2000 y el 2004.



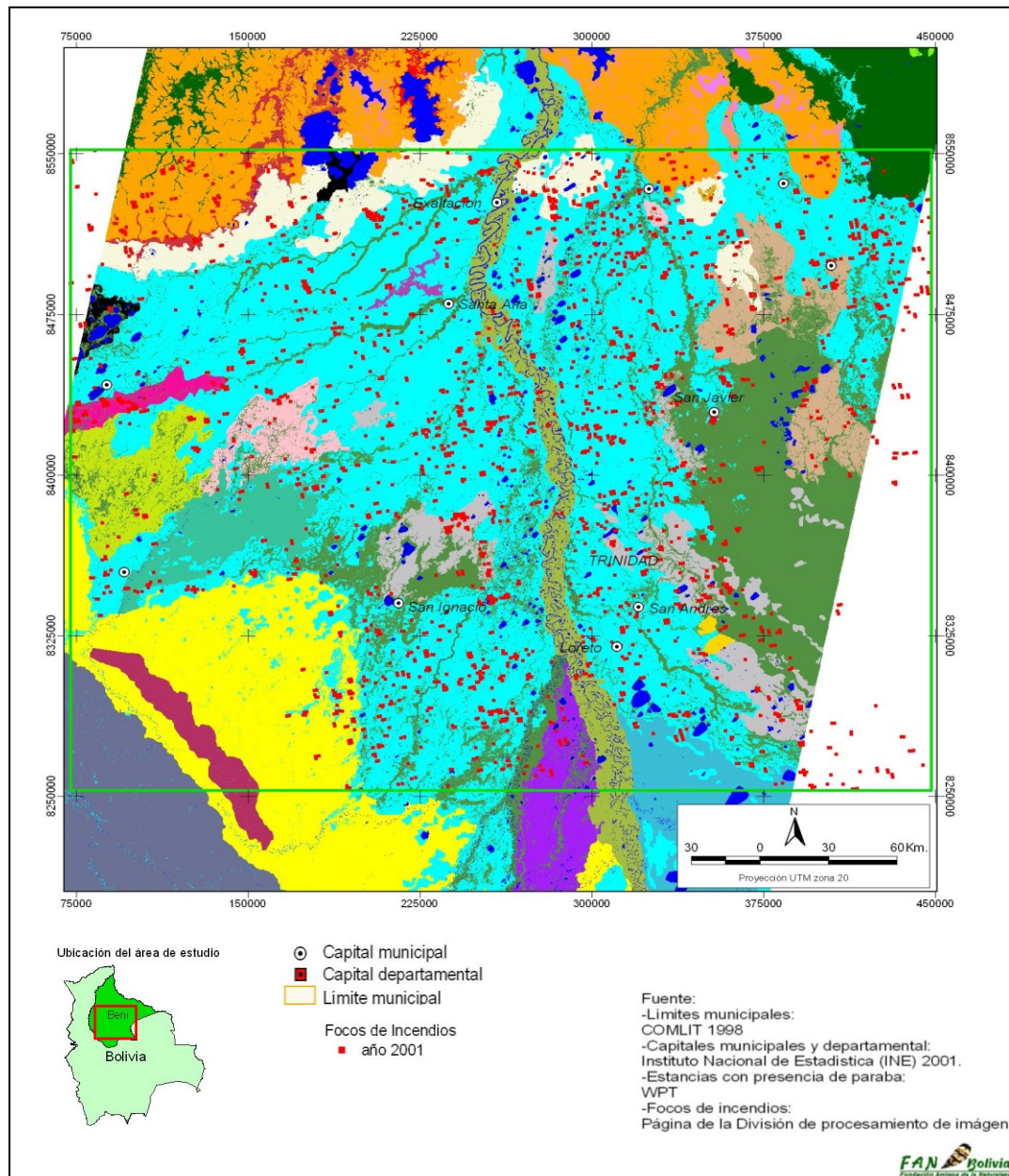
Sorprendentemente, tras la profusión de focos de calor que tuvo lugar durante el año 2004, para el año 2005 los registros recogen apenas unos cuantos (véase **figura 7.8**). Se ha intentado contrastar fuentes pero no he encontrado una explicación, lo cual no deja de ser extraño.

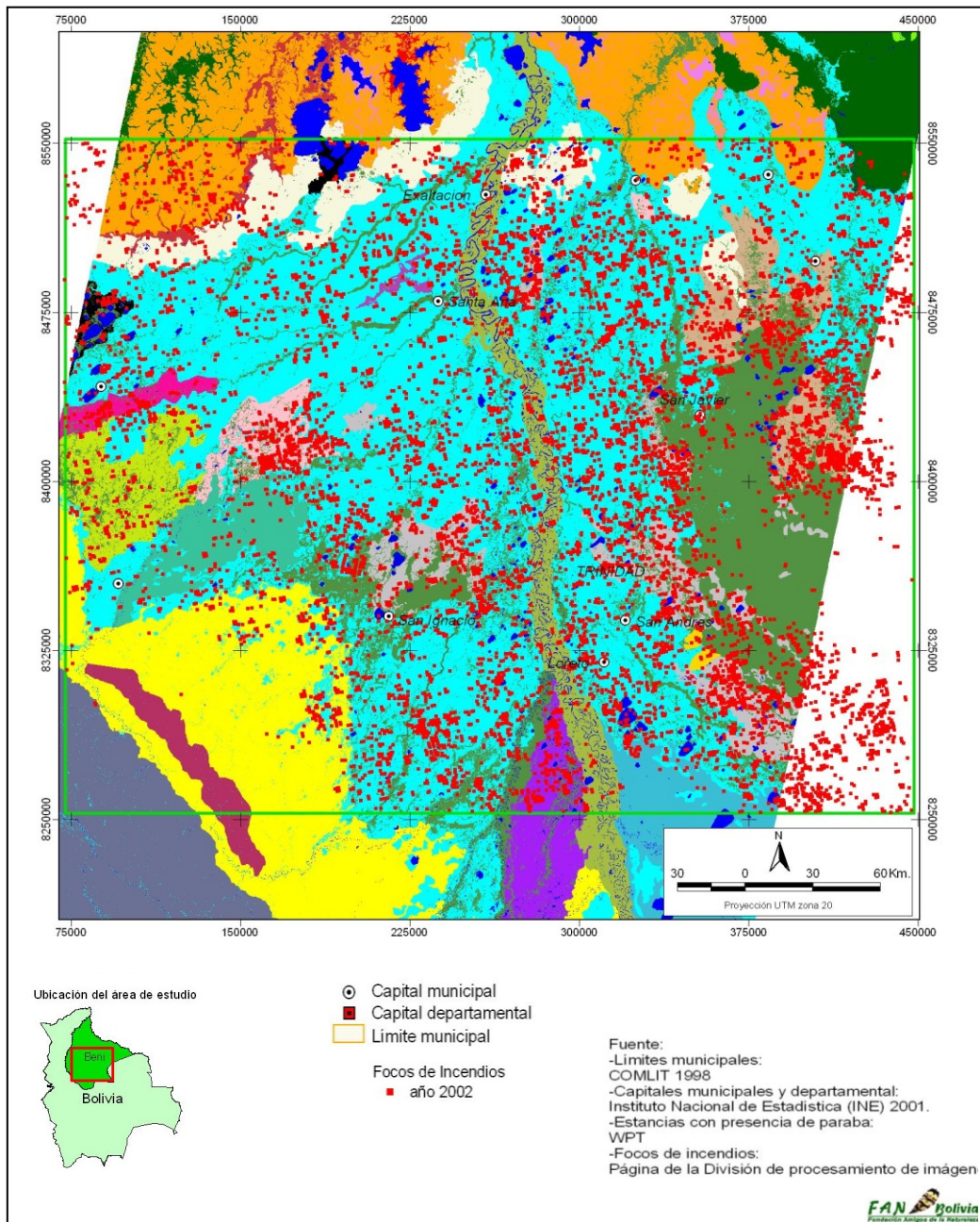
La ABT registra día a día los focos de calor que se producen en Bolivia. Un dato que resulta interesante es que entre el 30 de noviembre y 2 de diciembre del 2010 fueron detectados 119 focos de calor en el conjunto del país, de los que sólo 2 de ellos correspondían al Departamento del Beni³⁶⁹ (el resto tuvieron lugar en el Departamento de Santa Cruz, donde existe una actividad más intensa en cuanto a recursos naturales). El invierno de 2010 fue especialmente delicado en cuanto a quemas se refiere. Muchas comunidades indígenas de Mojos fueron gravemente afectadas por los incendios cometidos por los ganaderos. Por eso desde CIPCA se entregó semillas de arroz, maíz, ramas de yuca y plantas de plátano, entre otros productos, para paliar los daños y conceder la posibilidad de recuperar la producción de las comunidades perjudicadas por las quemas. Se manejan datos que apuntan a la pérdida de múltiples cultivos de un total de 422 familias mojeñas. Éstas pertenecían tanto al TIM como al TIMI, de entre las que destacaron Fátima, Bermeo, Santa Rita, Litoral y San Miguel del Mátire³⁷⁰.

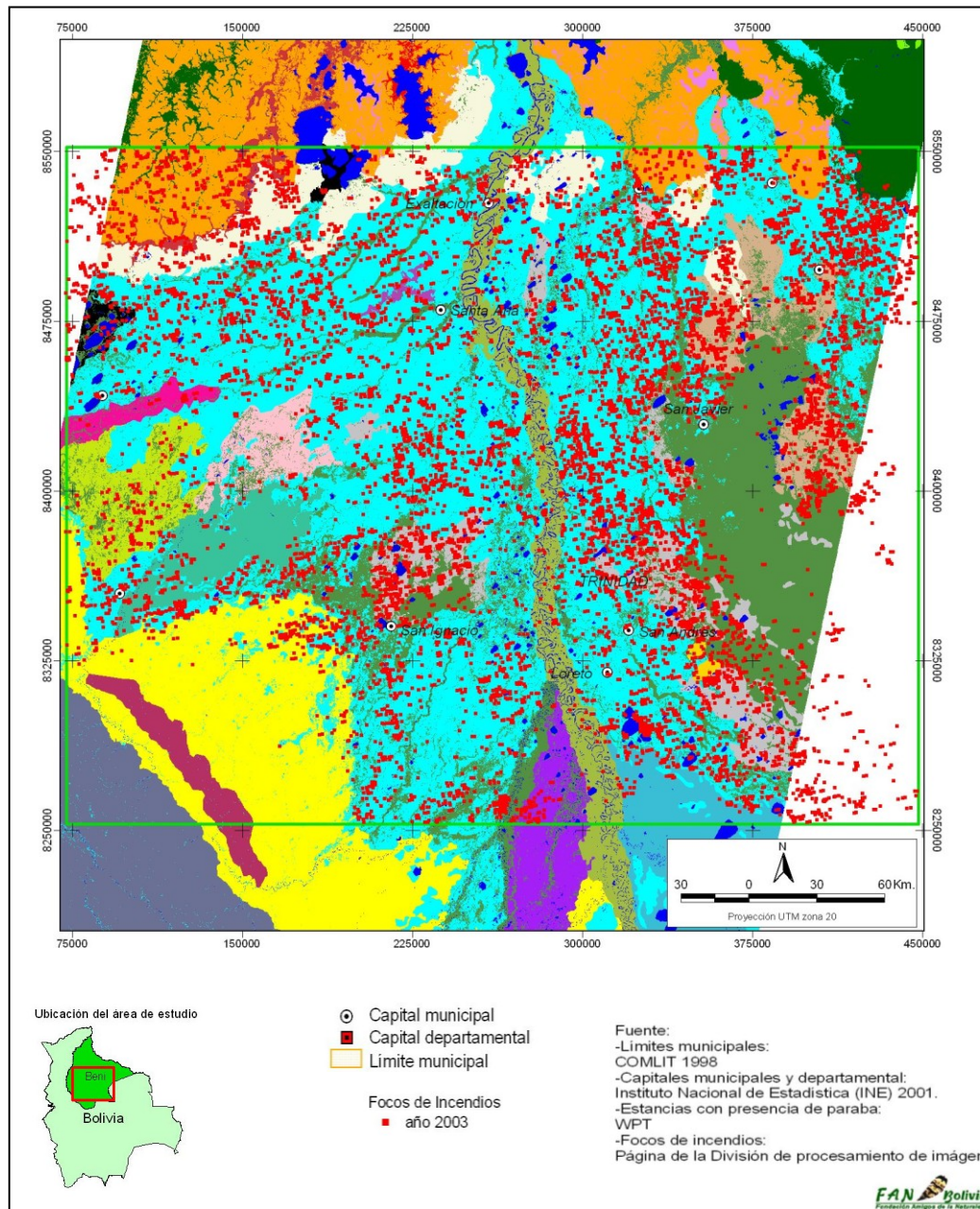
³⁶⁹ <http://www.abt.gob.bo/>

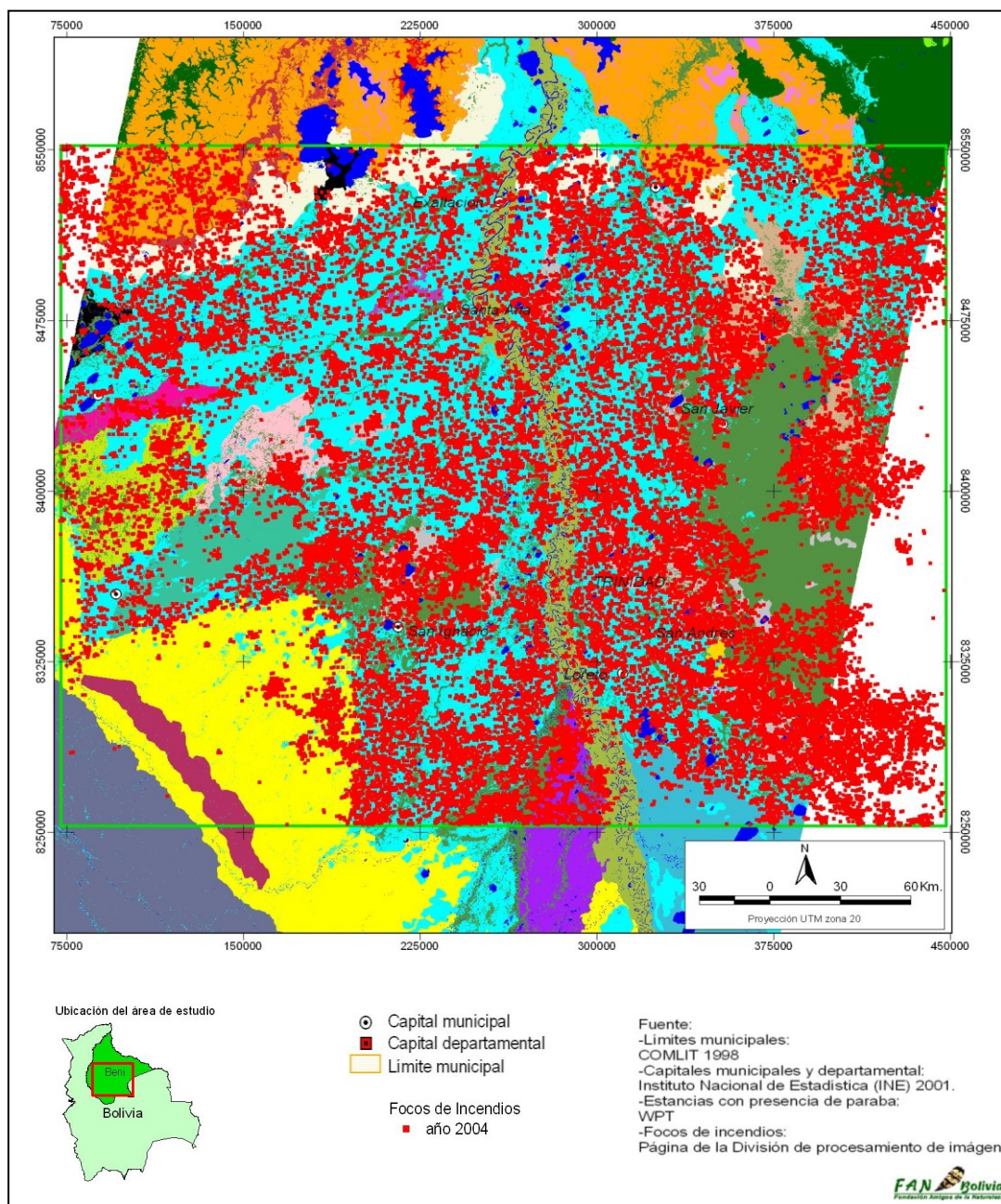
³⁷⁰ <http://www.bolivia.com/noticias/AutoNoticias/DetalleNoticia44523.asp>.

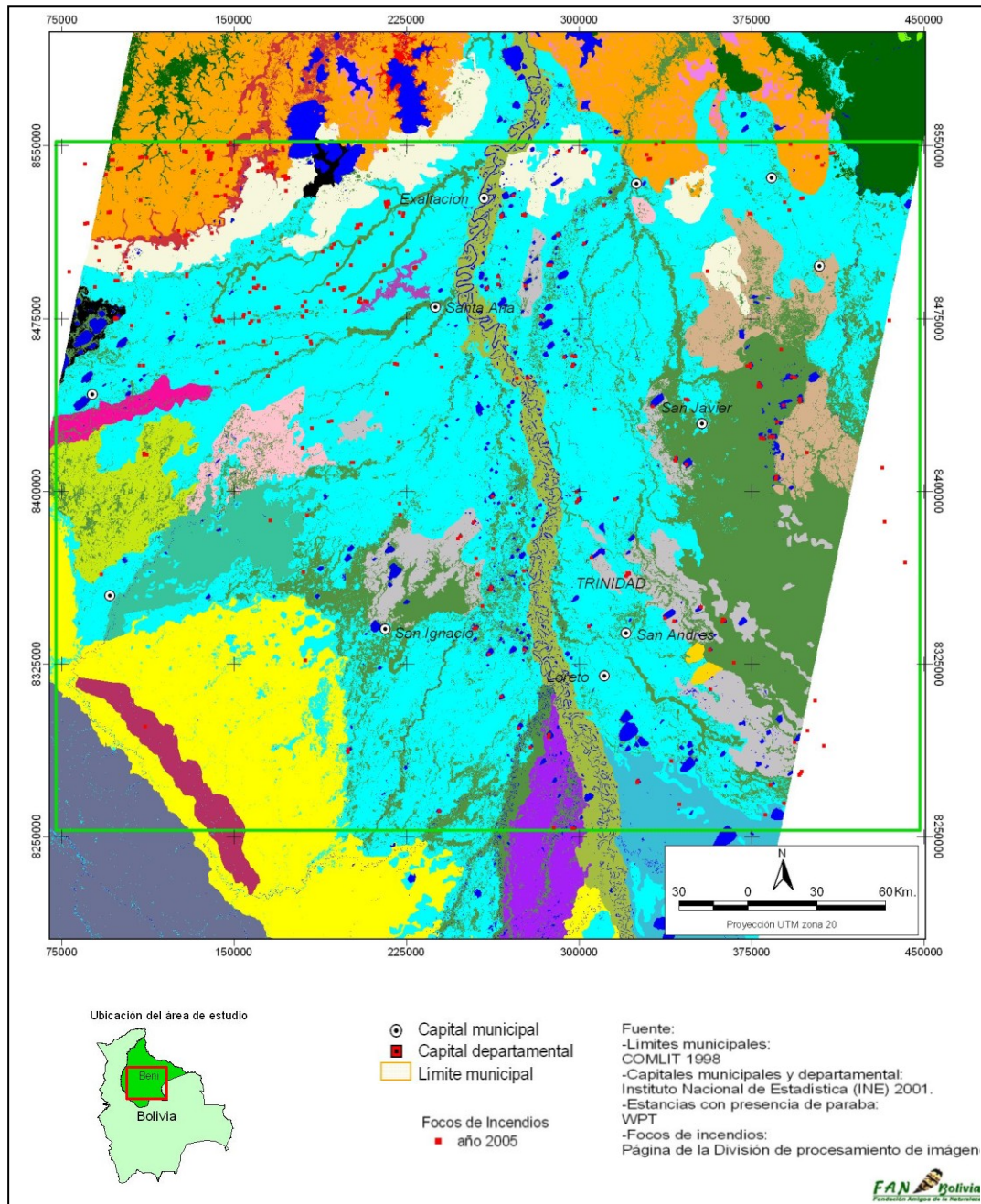
Figura 7. 9. Secuencia de mapas de focos de calor en el municipio de San Ignacio de Mojos (2001-2005).







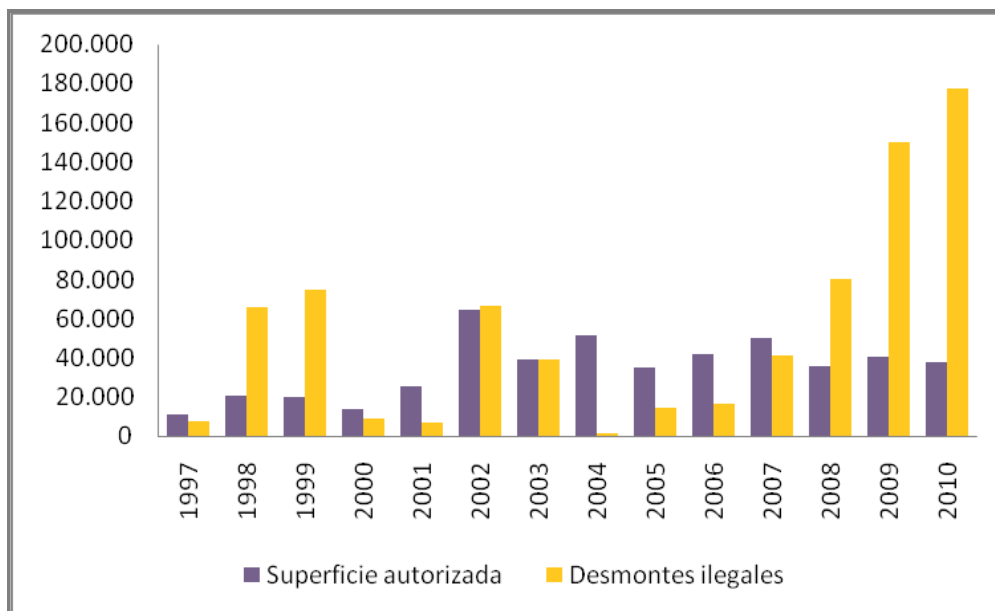




Los desmontes ilegales (véase **fotografía 7. 7**) son también una cuestión que debe preocupar. El **gráfico 7. 8** nos aporta información relativa a los desmontes que, de manera ilegal, se llevaron a cabo desde la entrada en vigor de la Ley 1700 (1996) en relación a la superficie que desde la Superintendencia Forestal primero y ABT después, fue autorizada para ello. Los datos indican una clara tendencia al alza con la promulgación de dicha normativa, aunque paulatinamente se fuera controlando hasta el año 2007 cuando se comenzó a repetir dicha tendencia alcista, esta vez más aguda,

llegando a alcanzar para el año 2010 (último año del que se tiene información oficial) 177.329 hectáreas de las 37.782 autorizadas por la ABT.

Gráfico 7. 8. Desmontes bajo seguimiento (has.).



Fuente: elaboración propia en base a los datos de ABT (<http://www.abt.gob.bo/>)

En mayo de 2009 la Superintendencia Agraria y la Superintendencia Forestal se unificaron para convertirse en la *Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra*. Con la nueva gestión se puso en marcha un programa de teledetección de desmontes ilegales. Se inició con ello un proceso de 364 causas administrativas sancionadoras para regular estas acciones cometidas fuera de legalidad que atentaban contra la preservación de los ecosistemas.

Cuadro 7. 21. N° de procesos según Departamento.

| Departamento | N° de Procesos |
|-------------------|----------------|
| Beni | 14 |
| Santa Cruz | 256 |
| Pando | 78 |
| La Paz | 1 |
| Tarija | 4 |
| Chuquisaca | 10 |
| Cochabamba | 1 |
| Total | 364 |

Fuente: <http://abt.gob.bo/>

El departamento del Beni aparece en tercer lugar, muy por debajo del departamento de Santa Cruz³⁷¹ y del Pando, siendo éste último el caso de mayor gravedad por las dimensiones, en proporción, del mismo. No obstante, los datos reflejados no pueden ser asumidos con optimismo en el caso del Beni si tenemos en cuenta la superficie ocupada por TCOs, como el TIMI, TIM, TIPNIS, Movimas, etcétera, o parques naturales como el de Yacuma.

Fotografía 7. 7. Imagen aérea de zona de desmonte (cercanías de San Ignacio de Mojos)



Fuente: Museo de San Ignacio de Mojos.

7. 6. 2. La tala selectiva en el TIMI.

Algunas de las características de la tala selectiva son: la escasa cifra de especies maderables extraídas; el reducido número de individuos de éstas por área; árboles sometidos a una alta selección y lo mucho que se desaprovecha en el proceso de aserrío (Navia, 2002: 9). Uno de los principales efectos de la tala selectiva, ha sido la deforestación de amplias zonas boscosas, con las consecuencias que de ello se extraen.

³⁷¹ En este departamento las áreas de desmonte pertenecen o bien a grandes empresas agroforestales dedicadas al cultivo de soya o bien a colonias menonitas.

El modelo local de manejo de la naturaleza practicado por las comunidades ignacianas quedó relegado a un segundo plano tras la imposición del modelo forestal de extracción selectiva. En la región de la que este estudio se ocupa destaca, por encima de cualquier otra especie, la comúnmente conocida como mara. Fue, por consiguiente, la especie por excelencia que más sufrió las consecuencias de este tipo de aprovechamiento en Mojos (aunque se pueden mencionar otras especies como son el cedro, el occhó y el roble).

El alto valor comercial de dicha especie propició que numerosas empresas madereras hacia la década de los ochenta y noventa del siglo pasado, se estableciesen en la región, causando grandes daños sobre los ecosistemas amazónicos. Se produjo por tanto, una fuerte deforestación a gran escala, por la que la mara o caoba desapareció prácticamente en su totalidad. En la actualidad apenas sí quedan unos cuantos árboles de esta especie maderable. Por esta razón recientemente se está llevando a cabo programas de plantío de mara en los bosques de Mojos y concretamente en algunas comunidades del TIMI, como es el caso de Fátima, pensando en las generaciones futuras por ser una especie que necesita en torno a 40 años para su crecimiento³⁷².

Fotografía 7. 8. Árbol de mara en San Miguel del Mátire.



Fuente: Virginia Jabardo Pereda.

Otra grave consecuencia de la extracción selectiva es que los beneficios inmediatos que se obtuvieron fueron a parar en primer término a manos de las

³⁷² Queda estipulado en la Ley Forestal que “la reforestación (...) se efectuará preferentemente con especies nativas” (artículo 52) (véase http://www.gobernacionlapaz.gob.bo/archivos/Normas/RG_Ley_1700.pdf).

empresas madereras. Las comunidades indígenas del TIMI se mantuvieron al margen debido en gran parte a los engaños a los que fueron sometidos por parte de dichas empresas, quienes les ofrecían 10 dólares por cada árbol extraído en su territorio cuando en el mercado internacional era vendido por una cantidad 10 veces superior.

Teodosia Rojas –corregidora de Santa Rita- se lamenta de los engaños que sufrieron los indígenas ignacianos por parte de las empresas forestales: *“las empresas liquidaron la madera, nos han fregado engañándonos. Antes no conocíamos el dólar, nos daban 100 y creíamos que estábamos ricos, porque no conocíamos la cantidad y estábamos regalando nuestros recursos. Ni la comunidad progresó, no ha tenido ningún beneficio”* (entrevista).

Los beneficios por tanto no revirtieron en las comunidades mojeño-ignacianas, esta población no se vio beneficiada. Es más, como bien señala John Kudrenecky *“las empresas forestales contrataban indígenas de otra parte, de Guarayos, porque trabajan mejor fuera de casa”*. Y, al contrario, *“muchos indígenas de San Ignacio fueron contratados para trabajar en Santa Cruz”* (entrevista).

Los beneficios que los indígenas ignacianos obtuvieron no fueron muy notables, aunque Kudrenecky cita algunos: *“se contribuyó a la construcción de la Subcentral del TIMI, pero los ignacianos no participaron en los beneficios porque las empresas pagaban el 11% de la madera al comité cívico y no a los indígenas directamente”*. Señala además casos en los que sí se invirtió el dinero obtenido en cosas positivas para la comunidad: comprar una pequeña parcela de terreno o invertir en gastos médicos (entrevista).

Pero no sólo se hicieron negocios con estas empresas sino que hemos visto cómo muchos comunarios a título individual establecían algún tipo de contacto con motosierristas ilegales sin el permiso previo del conjunto de la comunidad. A día de hoy existe la certeza de que este fenómeno sigue ocurriendo. Con todo se ha producido un empobrecimiento de los bosques de Mojos. A pesar de ello no se encuentran apenas estudios dedicados a cuantificar el impacto ambiental que ha tenido lugar en esta región, elemento clave para un adecuado manejo sostenible de los recursos naturales³⁷³.

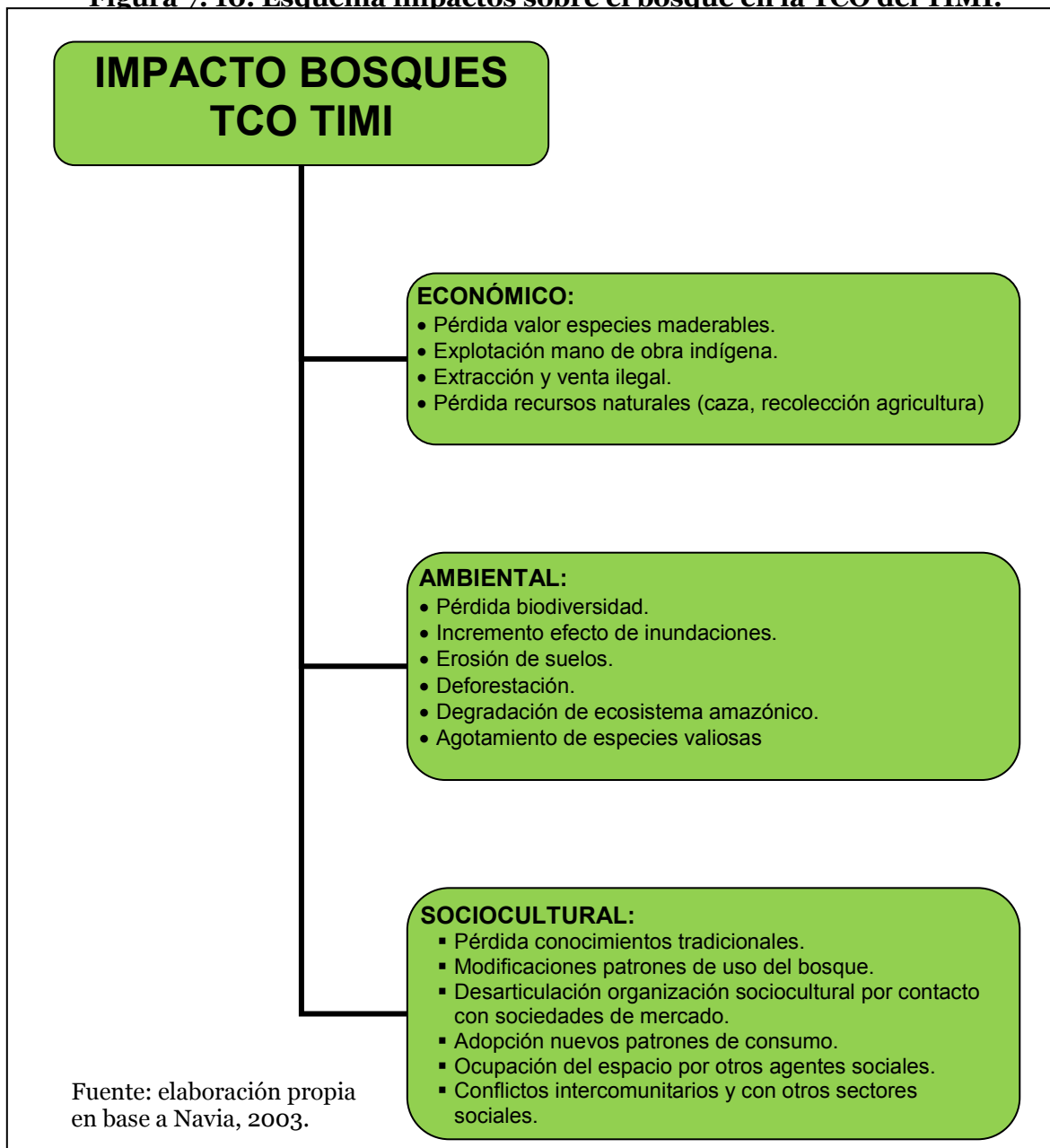
7. 6. 3. Impacto de la deforestación en la región de Mojos

Mucho se sabe acerca del impacto ambiental a nivel planetario que se deriva de la deforestación: pérdida de biodiversidad, degradación de ecosistemas, erosión de suelos, contribución al cambio climático, etcétera. Sin embargo, en lo que respecta al presente trabajo no sólo cabe señalar el impacto ecológico sino también las implicaciones que a

³⁷³ Obtener información acerca de la cuestión forestal en Mojos, derivada de diversas fuentes para poder ser contrastada, ha consistido en una tarea complicada.

nivel social y cultural aparecen, en una escala local, como consecuencia de la desaparición de las masas forestales. Las comunidades indígenas son las grandes perjudicadas al basar su sistema socioeconómico en “*el mantenimiento de la productividad y diversidad de sus ecosistemas naturales*” (Navia, 2003: 162-163). El balance que se extrae de la pérdida de tierras forestales en Mojos presenta un carácter negativo frente a las comunidades ignacianas (véase **figura 7. 10**). La restricción del uso forestal de algunas especies, puede provocar alteraciones en el desarrollo cotidiano de las comunidades mojeñas. De igual forma que los bosques sufren alteraciones debido al tipo de aprovechamiento comercial de la madera llevado a cabo en el país, lo cual demuestra para algunos la incompatibilidad entre el mantenimiento de la biodiversidad y de los ecosistemas naturales del bosque y el sistema extractivista selectivo del sector forestal en Bolivia (Pacheco P., 1998a).

Figura 7. 10. Esquema impactos sobre el bosque en la TCO del TIMI.

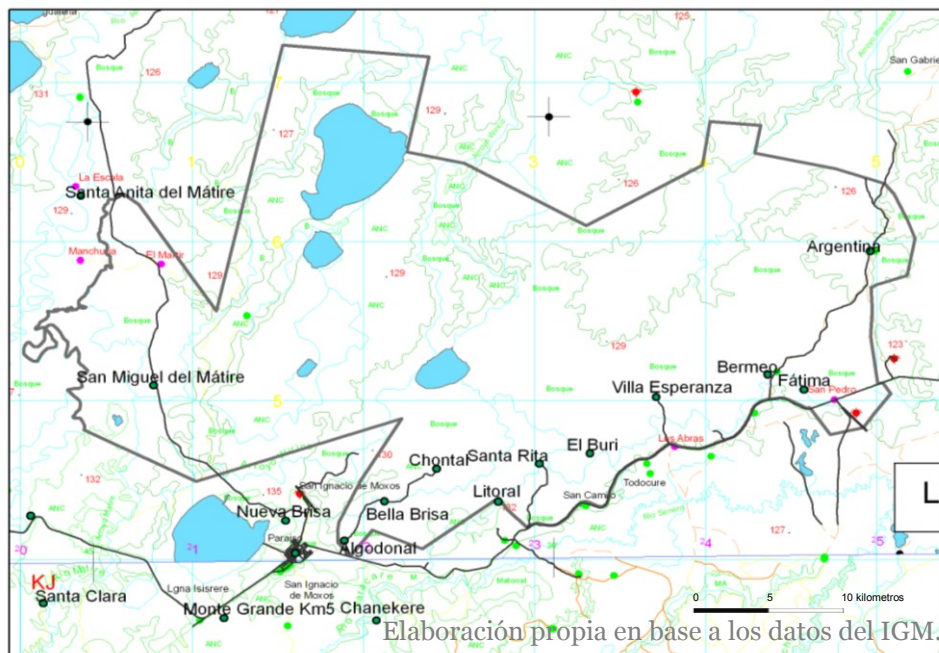


La región del Beni sufrió, tal y como se viene anunciando en el presente capítulo, una fuerte deforestación, que ocurrió principalmente en la década de los años ochenta y noventa del siglo pasado aunque su impacto se esté viendo reflejado aún a día de hoy. En particular en la TCO del TIMI, algunos habitantes manifiestan una clara preocupación con respecto al estado de los bosques: “*cuidamos para que no los destruyan porque si lo destruye de dónde vamos a sacarlo*³⁷⁴” (entrevista Juana Muiga).

Prácticamente la totalidad de TCOs en el país están ocupadas parcialmente por tierras forestales y el TIMI no es una excepción (véase **figura 7. 11**). En estas zonas las comunidades desarrollan su manejo forestal, el cual incide de manera leve en los bosques, provocando un impacto de muy baja escala si lo comparamos con otros usos forestales. Sin embargo, también sucede que al interior de las TCOs han sido otorgadas diversas concesiones forestales a otros usuarios (caso de empresas madereras o estancias ganaderas). Resultado de ello es el surgimiento de conflictos por el uso del bosque y por la superposición de derechos de propiedad, como ya vimos que ocurría con la cuestión de la tenencia de la tierra. Hasta la entrada en vigor de la *Ley Forestal*, las concesiones de manejo no tuvieron en cuenta los usos del suelo desarrollados por otros actores sociales. A esto se le sumaron las acciones fraudulentas acometidas por las empresas madereras, las cuales embaucaron a los comunarios con respecto al precio de venta de los árboles, que no se correspondió con el precio marcado por los mercados internacionales. Como resultado, los indígenas mojeños vendieron a un precio menor las especies más valiosas. Todo esto se tradujo en un incremento de la depredación de los bosques del territorio comunal ignaciano.

³⁷⁴ En relación a los bosques. Les preocupa la desaparición de estos porque con la madera, que de los mismos extraen, elaboran un sinfín de utensilios para sus actividades cotidianas.

Figura 7. 11. Cobertura vegetal TCO TIMI.



7. 6. 3. 1. Impacto de la actividad ganadera.

A lo largo del trabajo se ha ido advirtiendo el impacto que la actividad ganadera causa en las tierras forestales del Beni. En el caso de Mojos a través de imágenes obtenidas de *Google Earth* se nos revela una interesante información por la que visualmente, dado que es claramente perceptible, podemos percibir el impacto que provocan las estancias ganaderas sobre la masa forestal (véase **fotografía 7. 9**). Por el contrario, las comunidades indígenas llevan a cabo pequeños desmontes para establecer sus chacos en las zonas con cotas de mayor altitud, a pesar de que éstas no alcancen los 200 metros sobre el nivel del mar.

Fotografía 7. 9. Imagen impacto en la cobertura vegetal de estancias y comunidades.

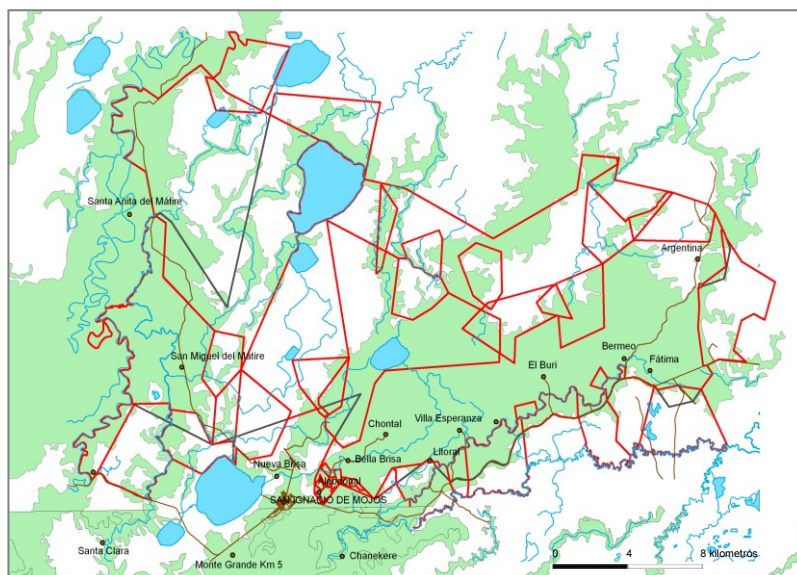


Fuente: elaboración propia en base a la información de *Google Earth*.

En la imagen anterior se define con claridad el avance de la deforestación del predio ganadero de *La Providencia* (arriba) frente a las comunidades del TIMI, en este caso las comunidades de Algodonal, Bella Brisa y Chontal. Las distintas tonalidades marcan la diferencia del uso del suelo. En el caso de la estancia ganadera la mancha que queda tras la transformación del uso del suelo de forestal a ganadero es mucho más intensa que las pequeñas aperturas de bosque de los territorios comunales. En las comunidades, las zonas que presentan un verde más claro se corresponden con los chacos recién tumbados. Éstas convierten espacios que alcanzan un máximo de 2 hectáreas para cultivar los productos en los que basan su dieta diaria. Y éstas, además, al cabo de cierto periodo, que puede variar entre 3 y 5 años, abandonan dicho terreno para trasladar los chacos a otros lugares y permitir de esta manera, la regeneración de los suelos y de la cobertura vegetal. Es más, al estar estos ubicados al interior del

bosque húmedo, la recuperación se ve propiciada por la rápida invasión de los espacios que quedan exentos de uso agrícola. De esta forma la estructura general del bosque no se ve transformada sino que se mantiene sin alteraciones profundas con capacidad de renovación. En cambio, la actividad desarrollada por las estancias ganaderas genera un impacto ambiental muy superior, a pesar de que sea menor al ocasionado por la agricultura mecanizada o por las empresas madereras. Con todo, podemos afirmar que la ganadería es la actividad que más huella ecológica ocasiona en los bosques de la llanura mojeña. La correspondencia entre las estancias ganaderas y las zonas de sabana frente a los espacios comunales y las áreas que mayor masa forestal ocupan se aprecia en la siguiente figura.

Figura 7. 12. Cobertura vegetal del TIMI y predios ganaderos.



Fuente: elaboración propia en base a los datos de CPTI.

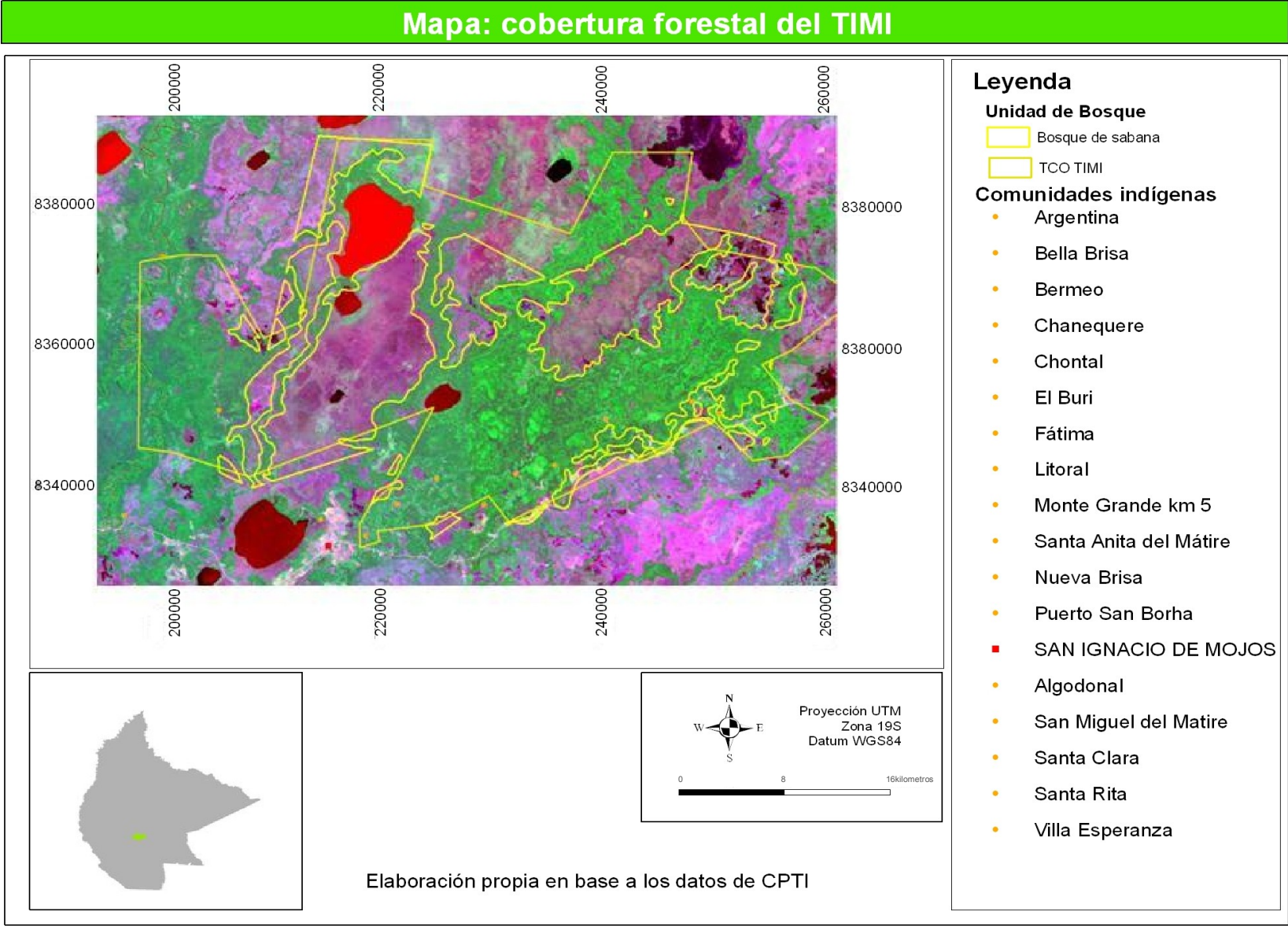
Gracias a la elaboración de estas imágenes podemos comprobar que el área donde se asientan las comunidades del TIMI -principalmente el corredor que conforman Algodonal, Bella Brisa, Chontal, Litoral, Villa Esperanza, El Buri, Bermeo, Fátima, y más al Sur Monte Grande Km 5 y Chanekere- se corresponde con las zonas clasificadas como bosque mientras que por el contrario, las estancias ganaderas se ubican en los espacios registrados como *Áreas No Clasificadas* (ANC)³⁷⁵ que coinciden con las pampas. Las ANC se localizan en la sabana del bosque perteneciente a la llanura aluvial de inundación ocasional a prolongada con laguna, con bosque húmedo y pastizal. Este factor se debe tener muy en cuenta puesto que las estancias ganaderas se sitúan en los espacios que presentan menor cobertura vegetal, estando las comunidades localizadas

³⁷⁵ Clasificación del IGM.

en las zonas de bosque. Por tanto, el impacto sobre las tierras forestales causado por aquellas debe ser identificado en términos relativos.

La siguiente imagen de satélite nos permite ubicar las comunidades indígenas al interior de TIMI las cuales ocupan las áreas boscosas de dicho espacio territorial.

Mapa 7. 4. Imagen satélite de cobertura forestal del TIMI



Los diversos modos de asentamiento establecidos en base a las lógicas territoriales de cada uno de los grupos sociales que ocupan la TCO TIMI, dan lugar a distintos modelos forestales de aprovechamiento de recursos. Esto a su vez constituye una de las fuentes de conflicto más intensas entre el sector ganadero y el sector indígena al procurar aquel ocupar las tierras de estos últimos por ser las más apropiadas, como salvaguarda del ganado, durante el periodo de inundación. Si bien esto es absolutamente cierto también lo es el hecho de que las estancias ganaderas han desarrollado un rápido avance en sus demarcaciones frente a las tierras comunitarias circundantes.

**Fotografía 7. 10. Imagen de conversión de suelo de estancia ganadera:
*La Pascana.***



Fuente: Virginia Jabardo Pereda

7. 7. NUEVAS ESTRATEGIAS DE MANEJO DE RECURSOS FORESTALES. El plan de manejo forestal específico de cacao.

Hace algunos años, ONGs locales comenzaron a desarrollar algunas propuestas encaminadas a la búsqueda de una mejor gestión territorial en Mojos. Tras realizar el correspondiente diagnóstico sobre la aptitud de la tierra para usos agropecuarios y forestales y las condiciones socioeconómicas de la población, la organización CIPCA elaboró diversos planes de manejo forestal, entre los que se encuentra el *Plan de Manejo Forestal del Cacao Silvestre en la Tierra Comunitaria de Origen del Territorio Indígena Mojeño Ignaciano*, implementado en base a la norma técnica para la elaboración de planes de manejo específicos orientados al aprovechamiento forestal

sostenible de recursos forestales no maderables. Éste ha constituido un ejemplo de cómo crear nuevas estrategias de manejo de recursos forestales.

Dicho plan de manejo constituye una buena práctica puesto que además de minimizar el impacto ambiental, promueve la recuperación de los modelos de producción local practicados por las comunidades indígenas que combinan sistemas agrosilvopastoriles. Estos permiten a la población autóctona diversificar la producción, desde el punto de vista socioeconómico, y propician la regeneración de los suelos, logrando un impacto prácticamente inapreciable a nivel ecológico. En palabras de Oliver Vaca, técnico agrónomo de CIPCA-Beni:

“con estas prácticas se promueve la revalorización de este producto milenario, la preservación de la biodiversidad de los bosques, se fortalecen los vínculos del sentido comunitario, se reafirma el sentido de La propiedad y gestión del territorio y, fundamentalmente, la generación de ingresos económicos a las familias indígenas así como la consolidación de una actividad económica sostenible que permite la integración y participación de la familia en su conjunto”³⁷⁶.

Además, a la hora de identificar el área de manejo se hizo teniendo en cuenta los conocimientos y decisiones de la población local, quienes como usuarios del bosque conocen el área, por lo que se este tipo de planes de manejo promueven además la participación a nivel comunal.

Doy paso a comentar, de manera breve, el plan de manejo del cacao que se ha implementado a través de la organización CIPCA en San Miguel del Mátire, comunidad del TIMI. Esta especie de cacao (*Theobroma cacao*), de la familia *Sterculiaceae*, corresponde a un producto forestal no maderable. La *Resolución Ministerial N° 019/2006* especifica la norma técnica para la elaboración de planes de manejo específico orientados al aprovechamiento forestal sostenible de recursos forestales no maderables (CIPCA, 2008).

En el caso del plan de manejo del cacao, en San Miguel del Mátire fue delimitada una superficie de 1.087 hectáreas como unidad de manejo para los chocolates (*ibíd.*, 23). La identificación del área de manejo también se llevó a cabo de acuerdo a los conocimientos de los propios comunarios de San Miguel del Mátire, los máximos conocedores del bosque en esta zona. El área destinada a albergar los cultivos del cacao, presenta un alto grado de productividad y “*por las características de la vegetación es un área que tiene gran abundancia de caco silvestre*” (*ibíd.*).

³⁷⁶

http://www.cipca.org.bo/index.php?option=com_content&view=article&id=246:zdpa&catid=77:zdpa&Itemid=115

En la elaboración del plan de ordenación se decidió dividir la unidad de manejo en dos unidades principales: una de “*producción forestal o bosque productor*”, que corresponde a 99 hectáreas y otra “*de protección*” (CIPCA, 2008: 23). Estos planes de manejo de chocolatales silvestres promueven la participación a nivel comunal de las familias de San Miguel del Mátire. Éstas se dedican a las diversas actividades que requiere el cultivo del recurso. Para las tareas de cosecha, desconchado y transformación del cacao participan las familias de la comunidad, quienes se organizan para dividir en diversas tareas todo el trabajo que acarrea. Para cosechar los frutos utilizan o bien varas de madera o ganchos metálicos o bien lo hacen de manera manual; más tarde se hace el desconchado en base a los conocimientos técnicos que han adquirido a través del asesoramiento de CIPCA; posteriormente se seca de manera natural en maderas denominadas “chapapas” y por último se almacenan los granos en bolsas de yute o de plástico (*ibíd.*, 26-27). Con el fin de lograr obtener un producto de calidad es necesario realizar otra serie de actividades: la limpieza de las áreas donde se cultivar los árboles del fruto del cacao; realizar el “deschuponado” -hacer desaparecer las ramas “chuponas” de la base del tronco-; el “raleo” de ciertas especies forestales que faciliten la entrada de luz solar y viento y el “callejoneado” o “contra fogueo” en aquellas zonas susceptibles de incendios³⁷⁷.

Fotografía 7. 11. Imágenes plantas, árboles, frutos y semillas del cacao.



Fuente: Virginia Jabardo Pereda

³⁷⁷

http://www.cipca.org.bo/index.php?option=com_content&view=article&id=246:zdpa&catid=7:zdpa&Itemid=115

7. 8. DESAFÍOS REFERENTES A LA CUESTIÓN FORESTAL.

A lo largo de este capítulo he desgranado los aspectos más significativos acerca de la problemática forestal que desde años atrás viene ocurriendo en Bolivia. Sabemos que la deforestación supone una grave amenaza para el medio ambiente del país pero también la gran pluralidad de grupos sociales. Hemos visto cómo desde la década de los setenta principalmente, se han perdido miles de hectáreas de bosque del país, las cuales han sido destinadas a nuevos usos de suelo. Existe una correlación entre la reducción de las masas boscosas y el incremento de la superficie transformada en tierras de cultivo o en pastizales para el ganado.

De la misma manera he analizado a lo largo de este capítulo, los errores del modelo de gestión forestal en el país, el que otorgaba prioridad a los intereses comerciales por encima de las necesidades sociales de muchos de los usuarios de los bosques. Una correcta gestión de los bosques debería dar cabida a los requerimientos de aquellos que demandan los recursos forestales para autosostenerse, como es el caso de las comunidades indígenas. Pero esto no tiene porqué suponer una incompatibilidad con una producción forestal, siempre que ésta se realice sobre la base del respeto al medio ambiente y a la conservación de la biodiversidad. Esto quiere decir que la explotación forestal no tiene porqué realizarse en detrimento de los sistemas de manejo local e integrales característicos de las poblaciones indígenas de Bolivia. Por ello la presente investigación aboga por un modelo forestal que garantice los derechos que los grupos *originarios* poseen sobre los recursos naturales de sus territorios comunitarios y reconoce la importancia que los bosques aportan al conjunto del país en lo que se refiere a servicios ambientales.

Tenemos constancia de que los sistemas locales de manejo forestal practicados por los pueblos indígenas amazónicos han propiciado el mantenimiento y la conservación de los bosques de Mojos. Una nueva propuesta de gestión forestal pasa por reconocer las aportaciones de los *saberes tradicionales ecológicos* en cuanto al manejo de los recursos naturales. Tener en cuenta e incluir la visión de estos actores sociales en los programas de sostenibilidad ambiental del país reportará beneficios al conjunto de la población nacional. El fortalecimiento de estos sistemas de manejo se convierte en una de las líneas de acción de las políticas forestales de Bolivia.

Esto nos conduce a hablar del aprovechamiento sostenible y los planes de manejo forestal como puede ser el caso del PGMF del cacao silvestre, los cuales podrían considerarse un ejemplo de gestión forestal sostenible. Los planes de manejo forestal pueden convertirse en una herramienta determinante para la consecución de la sustentabilidad ambiental y el desarrollo socioeconómico en Bolivia. Estos instrumentos cubren múltiples dimensiones de la cuestión forestal: la explotación de

los recursos con vistas a la producción, el reconocimiento de los saberes locales, la preservación de la biodiversidad para las generaciones futuras, la valoración paisajística, la ordenación del territorio, la toma de decisiones de los usuarios del bosque y su participación, etcétera. Los planes de manejo forestal tienen en cuenta, todo el espectro de objetivos socioeconómicos, culturales y ambientales de la política forestal del país. La cuestión es si la ABT, la institución encargada en conceder los permisos y autorizaciones en el manejo y aprovechamiento de los recursos, será capaz de lograr que dichos planes se cumplan y se lleven a cabo conforme a lo que dicta la ley.

Es, por tanto, deber del Estado de Bolivia proceder con voluntad firme para consolidar y hacer cumplir políticas integrales de uso sostenible, lo cual sólo sería posible si los instrumentos jurídicos que regulan en materia forestal se aplicasen sin excepciones de ningún tipo. La *Ley Forestal* supone el eje de la normativa encargada del buen manejo de los bosques del país pero no sólo. Existen otras herramientas judiciales -la *Ley INRA*, la *Ley del Medio Ambiente*, la *Ley de Hidrocarburos*, la *Ley de Participación Popular* o la *Ley Marco de Autonomías*- a las que corresponde actuar de manera paralela y con coherencia si lo que se pretende es el cumplimiento de dichas políticas integrales. Al mismo tiempo, otros instrumentos como el PLUS y el POP - encargados de la planificación de los usos de la tierra- deben aplicarse de manera coordinada para salvaguardar todas aquellas zonas en las que la capacidad de uso mayor de la tierra no permita la transformación de los usos del suelo. Sólo de esta manera las masas boscosas del país permanecerán protegidas y podrán mantener sus objetivos económicos pero también sociales y ecológicos.

Un obstáculo primordial que se debe superar en Bolivia es la escasa existencia de estudios de impacto ambiental y de seguimiento sobre la fauna o vegetación en aquellos territorios en los que se desarrolla cualquier actividad agropecuaria o forestal. En el caso del TIMI, cuando desde CIDDEBENI se pusieron en marcha los PGMF en Chontal, Litoral y Villa Esperanza sabemos que no se hizo un exhaustivo estudio de impacto ambiental sino que sencillamente “una bióloga realizó un seguimiento en el tema de fauna” la cual durante los dos primeros años llevó a cabo un “trabajo sistemático para estimar la densidad de los animales para ver si influía (el plan de manejo) y no se notó nada” (entrevista a John Kudrenecky).

Desde la ABT se pretende lograr un manejo sostenible de los recursos forestales, pero carecen de los medios suficientes para abarcar al conjunto del territorio nacional. Por eso se limitan a realizar inspecciones aleatorias. En todo esto es de suma importancia la existencia de una bien elaborada base de datos. Supone un desafío para la ABT el recabar y mantener actualizada toda esta información. Es fundamental que dicha institución desarrolle suficientes capacidades técnicas para la elaboración de un

sistema de información forestal, así como de un SIG –que hasta el momento, para el caso de los territorios indígenas, es un trabajo realizado por el CPTI perteneciente a CIDOB-. Del mismo modo se requiere de sistemas de monitoreo en la planificación ambiental y en la evaluación de las explotaciones forestales para valorar la sostenibilidad o no de tales actividades llevadas a cabo en los bosques del país. A la hora de crear estrategias políticas dentro del sector forestal se debe tener presente la mayor información posible: la ubicación exacta y el contexto geográfico –y social- de las explotaciones forestales, la calidad y el rendimiento de los suelos, el estado de los recursos naturales, la valoración del paisaje, las decisiones de las poblaciones locales, la capacidad de la tierra, el nivel de productividad, etcétera.

Para avanzar en el futuro además de instrumentos técnicos capaces de regular el ordenamiento forestal se requiere también de una férrea voluntad política que asuma la responsabilidad de llevar a cabo las medidas oportunas y estrategias adecuadas que pongan freno a las irregularidades cometidas durante tantos años. Si esta situación logra ser revertida, las inversiones en el sector se verán incrementadas. Pero para ello se precisa tener constancia de un sector forestal institucionalizado que esté sólidamente consolidado y que cumpla los parámetros exigidos para conseguir beneficios socioeconómicos y ambientales.

Otro problema que recuerda a aquellos que caracterizaron el proceso de saneamiento de tierras es el financiamiento. Bolivia ha necesitado de recursos externos para llevar a cabo gran parte de las políticas forestales, lo cual ha minado su soberanía en este campo y ha influido en la cesión de importantes prerrogativas a intereses particulares.

Un suceso enormemente desafortunado ocurrió durante la penúltima *Marcha Indígena*, iniciada el 15 de agosto de 2011, nuevamente desde la ciudad de Trinidad con dirección La Paz. Pero ésta no llegó a finalizarse debido a la represión desplegada por las fuerzas policiales hacia los manifestantes, incluidos mujeres y niños³⁷⁸. El motivo de la protesta esta vez fue la construcción del segundo tramo de la carretera: Villa Tunari-San Ignacio de Mojos –financiada por el gobierno de Brasil-, que atravesará el TIPNIS. Este suceso es indicativo de hasta qué punto se anteponen en algunos casos, los intereses económicos del gobierno frente a los derechos de los pueblos indígenas de la Amazonía boliviana, tan presentes en un principio en el discurso oficial, el cual se caracterizó por la gran carga indigenista y ecologista. Constituye por otro lado un reflejo de la ruptura que está teniendo lugar en el país entre las bases sociales que apoyaron en un principio al gobierno de Evo Morales. Además se desvela un cierto continuismo en las políticas forestales, las que en Bolivia se han caracterizado por

³⁷⁸ Periódico La Razón (Bolivia), Edición Digital, lunes, 26 de Septiembre de 2011.

favorecer a los intereses de las empresas tanto del país como extranjeras, vulnerando los derechos de los pueblos indígenas y campesinos.

No obstante, ciertas instituciones, como es el caso de ABT o INRA, están esforzándose en exhibir una nueva imagen, basada en la transparencia, al conjunto de la sociedad civil del país y a la opinión pública internacional, que muestre a Bolivia como uno de los referentes de la conservación en Latinoamérica y la Amazonía³⁷⁹. Sin embargo, si no se da el debido cumplimiento de lo estipulado en la legislación forestal, será enormemente dificultoso procurar el amparo de toda una serie de derechos constitucionales, como es el de la consulta a aquellas poblaciones que se vean afectadas por el desarrollo de actividades de agentes forestales externos en los territorios en los que habitan. A esto se une el hecho de que muchos de los usuarios que intervienen en los bosques de Bolivia busquen el interés económico por encima de la sostenibilidad de los recursos. Se produce como consecuencia una oposición entre la visión a corto y largo plazo. Aquella más interesada en mantener el acceso a los recursos del bosque y ésta última que procura salvaguardar los derechos de las poblaciones que dependen directamente de los bosques para su sustento, como es el caso de los pueblos indígenas.

Pablo Pacheco señala la verticalidad que atraviesa la cadena de producción y transformación en el manejo forestal como la diferencia principal entre las actividades de las grandes empresas madereras y el nivel comunal, así como la falta en la pequeña industria de capacidades técnicas encaminadas a mejorar el manejo forestal (2009: 225-226). Este planteamiento recuerda el desafío que supone para las comunidades indígenas el sortear toda una serie de obstáculos para acceder a los mercados. Ante esta realidad Pacheco se preguntan si en este contexto tan desfavorable para las comunidades, las que obtienen escasos beneficios por el comercio de la madera, merece la pena procurar la materia prima a aquellas empresas que sólo buscan maximizar sus ganancias³⁸⁰ (*ibíd.*, 233). Y si el Estado es el encargado de facilitar los recursos financieros y tecnológicos, pero estas ayudas no llegan, ¿qué alternativa les queda a las

³⁷⁹ Bolivia se convirtió en 1987 en el primer país adherido al programa de “intercambio de deuda por naturaleza” (Periódico El Deber, 12/05/2011).

³⁸⁰ Pacheco incluye en uno de sus estudios 6 iniciativas de manejo forestal a nivel comunitario en Bolivia: Santa Mónica (chiquitanos), Salvatierra, Santa María y Yotaú (guarayos) y Ayore-Zapocó y San Pedro (tacana). Tras realizar las correspondientes investigaciones concluye que a pesar del potencial de estas iniciativas, no son rentables por las dificultades que entraña: escaso apoyo de los gobiernos municipales y las trabas que se les pone desde los mercados y los grupos privados (2009: 234-235). Estos ejemplos de emprendimiento en el sector forestal por parte de algunas comunidades indígenas supone un freno a las iniciativas que pretenden insertar la forestería comunitaria en los mercados oficiales de comercio de madera. Ante esto los programas del cacao o de la elaboración de jabón de motacú, pueden constituir una interesante alternativa en lo que al aprovechamiento de los bosques se refiere, en donde el sector privado no cuenta con ningún tipo de intervención. Frente a esto una vez más Pacheco opina que este tipo de programas sólo podría funcionar como complemento a la economía doméstica puesto que los productos que no sean demandados y no posean, como consecuencia, valor agregado en los mercados, no interesan desde el punto de vista comercial (*ibíd.*, 236-237).

comunidades indígenas?, ¿qué tipo de estrategias deben desplegar para participar en el modelo integral de desarrollo forestal?, ¿algún tipo de alianza con el sector privado?, ¿pueden las asociaciones de base encargarse de la gestión de la forestería comunitaria?, y en caso afirmativo, ¿por cuánto tiempo?. Parece claro que la escasa intervención del Estado no ayudará a aquellos actores sociales que más directamente dependen de los recursos del bosque, como es el caso de las poblaciones indígenas. En Mojos se produce esta situación de manera muy visible puesto que son asociaciones como CIPCA quienes se han convertido en los sustentadores de los programas de manejo forestal.

Y retomando la cuestión de la descentralización del sector cabe mencionar la falta de armonía y de articulación entre los diversos niveles de gobierno a la hora de plantear un desarrollo integral del sector forestal (MDRAyMA, 2008: 20). Una falta grave fue considerar el nivel municipal como la “*unidad mínima de gestión forestal local*” puesto que son las organizaciones locales quienes poseen el verdadero control en los bosques (*ibíd.*, 21) y no los municipios.

Un reto futuro al que tendrá que enfrentarse el gobierno municipal de San Ignacio de Mojos, será la coordinación entre sí mismo y la unidad forestal del propio municipio con el fin de lograr el cumplimiento de la ley en materia forestal. Aunque haya quienes que critican la falta de capacidades técnicas que caracterizan a los municipios en materia forestal como una de las problemáticas a resolver (Barrantes, 2005: 90).

La legislación forestal debe encaminarse del mismo modo, a corregir las irregularidades cometidas entre los pequeños productores quienes pueden llegar a operar incluso en los bosques de las tierras fiscales (Pacheco P., 1998a). Sería conveniente por tanto, llevar a cabo una revisión de los procesos institucionales que dan pie a este tipo de situaciones además de endurecer los instrumentos sancionadores. Sólo de esta manera se podría lograr reducir la presión sobre los bosques del país y reorientar el modelo de gestión forestal a la conservación de la biodiversidad.

7. 9. PROPUESTAS DE FORESTERÍA COMUNITARIA Y CONCLUSIONES.

Los proyectos de desarrollo incrementaron la deforestación en la Amazonía, la erosión de los suelos, desertización, las pérdidas de biodiversidad. La acción descontrolada y desmedida sobre los bosques amazónicos, no sólo ha provocado repercusiones desde el punto de vista ambiental sino también a nivel humano.

En este sentido, han sido varios investigadores quienes, en sus trabajo sobre los *Kayapó*, demuestran que el manejo indígena de los ecosistemas amazónicos, puede contribuir a generar modelos alternativos más racionales con respecto al manejo de los recursos de los bosques (Posey, 2008; Grayson, 1997; Balée, 1998). Colchester va más allá y propone redefinir el desarrollo para que éste sea entendido como crecimiento sostenible (1993a). En este desarrollo no se pueden ignorar las prácticas culturales de las comunidades indígenas ni el conocimiento local de estas poblaciones que contribuyen a la conservación de la biodiversidad. Ese pretendido desarrollo, advierte Colchester, que “*solo puede ser alcanzado si las poblaciones locales controlasen sus tierras e instituciones*” (1993b: 87). A ello Hecht añade el escepticismo que muestran algunas instituciones frente al manejo indígena, lo cual propicia las pretensiones que éstas tienen para controlar los territorios habitados por tales poblaciones, reflejo del interés del Primer Mundo por convertir la cuenca amazónica -región susceptible de ser explotada- en otra de sus colonias (1993: 178).

Sabemos que la fragilidad de los suelos de Mojos incide en la capacidad de resiliencia de los ecosistemas de la llanura de inundación a la hora de soportar agresivos fenómenos de explotación y deforestación. Por tal motivo los usos y manejos de la naturaleza desarrollados *tradicionalmente* por las poblaciones indígenas lograron niveles de sostenibilidad medioambiental. En el momento en el que este modelo se ha visto suplantado, los ecosistemas se han sumido en un acelerado proceso de degradación que impide la regeneración de la masa boscosa.

A tenor de todo lo expuesto hasta el momento, me atrevo a lanzar algunas propuestas. Valoro de manera positiva, para el desarrollo forestal de las comunidades locales de Mojos, la aparición de programas forestales de productos no maderables, como es el caso del motacú, que se está desarrollando desde 2010 en diversas comunidades del TIMI. Este programa puesto en marcha desde CIPCA permite a los comunarios diversificar su producción a partir de la elaboración de jabones y cremas a través de un proceso de manejo de los frutos del motacú. Además, en dicho proceso pueden intervenir todos los miembros de la familia, lo cual favorece la inclusión en las actividades comunales.

Fotografía 7. 12. Imágenes de árbol de motacú (superior) y sus frutos en la fase de secado (inferior)



Fuente: Virginia Jabardo Pereda

Esta especie puede convertirse en un importante producto para el mercado, además de serlo ya en para el uso doméstico. Mencioné hasta qué punto la diversificación y rotación de cultivos y los sistemas agrosilvopastoriles, característicos del pueblo mojeño, propician la regeneración de los suelos. El caso concreto del cacao es otro ejemplo de ello. Son sólo algunas muestras de emprendimiento comunitario, no incentivados desde la administración central, sino desde el ámbito local. Pero en ambos

casos estas acciones deben verse acompañadas de un corpus legal que les proteja y de políticas públicas que les incentiven.

Fotografía 7. 13. Imagen de comunaria ignaciana sacando el fruto³⁸¹ del motacú.



Fuente: Virginia Jabardo Pereda

El impacto ambiental de las comunidades locales es mucho menor que el de las grandes empresas forestales. Pero además los bosques poseen un valor socioeconómico y ambiental mucho más importante para aquellas. Es el momento de dejar de ver el bosque como fuente de madera, hay muchos productos no maderables, además de toda una larga serie de servicios, que estos aportan a las poblaciones del país.

Las prácticas locales desempeñan en este contexto un rol fundamental. Por eso en el caso de Mojos, sería de gran valor fomentar proyectos de gestión territorial que tengan en consideración las estrategias de las antiguas poblaciones amazónicas frente a los ecosistemas de inundación, como la “*práctica de campos elevados*” y rescatar “*experiencias precoloniales*” (Navia, 2003: 172). Un modelo de gestión forestal integral no puede dejar al margen a las poblaciones locales.

Lamentablemente algunos pueblos indígenas –bajo presión de empresas madereras- tradujeron su bosque en dinero. Ahora es función del Estado boliviano

³⁸¹ Posteriormente se machacan hasta obtener su aceite el cual será la base para la elaboración posterior del champú.

revertir esta situación y que sean las propias comunidades las que ejecuten su propio aprovechamiento forestal y sus propios modelos culturales de la naturaleza. Pero no sólo se debe limitar dicho aprovechamiento a la extracción de árboles y su transformación, sino que es necesario otorgar un alto valor agregado con mano de obra de las propias comunidades y que los beneficios reviertan en el ámbito local.

Otra propuesta referida a la reforestación apunta a ésta como medida para paliar la erosión de los suelos, frente a lo que se propone la plantación de ciertas especies forestales con un rápido ritmo de crecimiento –como lo son el ambaibo o la perea– que en pocos años posibilitará la aparición de sombra lo cual a su vez propiciará el crecimiento de otras especies que crecen más lentamente como el palo maría, la mara, el guayabochi, el blanquillo o el cedro, proceso que permitirá el enriquecimiento de los suelos (Fabricano *et al.*, 2009: 274). El estudio coordinado por Fabricano, señala además que la reforestación, en el caso de los chacos, depende de factores como el tamaño o la humedad. Aquellos que son más pequeños y que se encuentran en zonas de monte alto permiten una regeneración del bosque más veloz, a diferencia de aquellos de mayor tamaño y que carecen de bosque circundante en donde es más lenta la recuperación de la masa forestal (*ibíd.*). Si por el contrario, se sustituye el suelo forestal por pastizales para ganado, será más complicada la regeneración, provocando con el paso del tiempo la desertización de esa tierra (*ibíd.*).

Un ejemplo ilustrativo de reforestación sería el replantío de mara, al que ya hice alusión. Estos programas constituyen una muestra de la iniciativa que los mojeño-ignacianos (comunidad de Fátima del TIMI) han puesto en marcha tras haber tomado conciencia de que su bosque, que era rico en especies maderables de alta calidad, ahora está empobrecido. La intención principal es asegurar a las generaciones futuras los recursos forestales del entorno local. El problema surgirá cuando estas plantaciones de enriquecimiento lleguen a la edad de aprovechamiento. El Estado, de acuerdo a la normativa forestal, regula sobre los bosques naturales. Sin embargo, en este caso consisten en bosques plantados que además han supuesto un coste y esfuerzo para el propietario y, como señala Roberto Ríos, “*si a mí me ha costado plantarlo y hacer que crezca tendría que tener el derecho de aprovecharlo cuando quiera y como quiera sin pedir permiso a nadie*” (entrevista). No obstante, la ley ordena que las plantaciones deben estar registradas ante el Estado. Esto constituirá un problema porque “*en los bosques naturales con enriquecimiento no se trata de plantaciones uniformes, equidistantes ni uniespecíficas, se pueden enriquecer con varias especies y es muy difícil hacer un seguimiento a esa especie*” (entrevista a Roberto Ríos). Y además, la silvicultura en bosques tropicales nos indica que no puede ser plantación monocultivo, sino que debe ser plantación mixta porque no tiene las tasas de crecimiento adecuadas,

caso de la mara. En realidad no están obligados a solicitar un plan de manejo pero puede suceder que en el momento en que quieran aprobarlo el Estado lo deniegue por no haber sido inscrito (se requiere su ubicación geográfica con las correspondientes coordenadas, la cantidad de árboles plantados, etcétera). El problema es que al no estar registrado, cualquiera podrá disponer de ello. Constituye, por tanto, un tema complejo que en algún momento tendrá que ser normado.

Desde el Ministerio se persigue igualmente la “*restauración de paisajes forestales degradados*”, alegando que es una medida de urgencia en la que debe participar tanto el Estado como los actores locales o usuarios de los bosques; la “*expansión de plantaciones forestales*” o la “*compensación de los servicios ambientales*” (MDRAyMA, 2008: 30-31) así como “*mejorar la gobernabilidad de los bosques*”, “*construir procesos de diálogo multiactores*” y alcanzar la “*descentralización forestal*” (Pacheco P., 2009: 242-244).

Estos son sólo algunos ejemplos que abren nuevas vías para lograr una agenda forestal capaz de integrar el desarrollo económico y la conservación de los recursos forestales junto con el respeto de los derechos de pueblos indígenas y campesinos.

Y para dar fin a este capítulo, señalar que la clave está en superar la incoherencia discursiva entre el modelo productivista forestal que impera en estos momentos en Bolivia y un modelo de aprovechamiento sostenible de los recursos forestales. En el caso del Beni, y en particular en la región de Mojos, se precisan acciones conjuntas que involucren a todos los actores que participan en el sector forestal. Además de incrementar los controles en las quemas que tanto perjudican a los bosques mojeños. En este sentido el sector ganadero debería actuar de manera más responsable y modificar sus lógicas de explotación. La conservación de la biodiversidad en el TIMI, requiere que este tipo de modelos de uso de los recursos se base en unos principios de sostenibilidad, hasta el momento ignorados por los *terceros*.

En este contexto, la gestión comunitaria tiene mucho que aportar. La coincidencia de las poblaciones indígenas con las áreas de mayor biodiversidad hace del todo necesaria la participación de dichas poblaciones en las políticas de manejo y aprovechamiento de los recursos naturales. En estos momentos, Bolivia está inmersa en el proceso autonómico que aparece ligado a la *Gestión Territorial Indígena* (GTI) por el que los pueblos indígenas, buscan a través de la nueva jurisdicción ejercer y administrar un uso y aprovechamiento de los recursos de acuerdo a su propia estructura organizativa y sobre el control de su propia territorialidad. A ello dedicaré, por el interés que entraña para las cuestiones que vienen siendo tratadas y por las incertidumbres que suscita, el siguiente capítulo.

8. Nuevos espacios de poder y de gestión territorial. El proceso de las autonomías indígenas: un capítulo inconcluso.

La historia del reconocimiento de los derechos colectivos indígenas se está escribiendo en Bolivia. El último paso dado en tal dirección ha sido el intento de reconversión de las TCOs en *Autonomías Indígenas Originario Campesinas* (AIOC). La NCPE reconoce hasta cuatro niveles autonómicos: el Departamental, Regional, Municipal y la AIOC, convirtiéndose esta última en la jurisdicción en la que se aplicarán los derechos de los pueblos indígenas (artículo 30)³⁸². Esto le llevó a Wilfredo Plata a bautizar el año 2009 como el “*año de las autonomías en Bolivia*” (2010: 247).

La cuestión autonómica aparece inserta en el contexto de la descentralización político-administrativa en el país. Debido a ello, ha pasado a formar plenamente parte de la agenda pública. Constituye la última fórmula adoptada en el país encaminada a la defensa de la territorialidad indígena.

La TCO TIMI, la cual ha logrado su titulación recientemente (2011), tiene ahora la posibilidad de ver consolidado aún más el control y la administración de su territorio. La *Gestión Territorial Indígena* (GTI) aparece estrechamente ligada a la cuestión autonómica. Tanto es así que autores como Salgado han llegado a afirmar que:

“la GTI es la práctica de las organizaciones indígenas convertida en la reivindicación política de autonomías indígenas, mientras la propuesta de autonomías indígenas responde a lo que las organizaciones indígenas con título de TCO están haciendo en la actualidad en la GTI de sus territorios” (2010: 209).

³⁸² <http://bolivia.unfpa.org/content/constituci%C3%B3n-pol%C3%ADtica-del-estado>

El desarrollo de la población indígena mojeña depende de la disponibilidad de los recursos naturales. A su vez, la capacidad de acceso y uso de estos viene determinada por la gestión territorial. De otra manera, la vulnerabilidad a la que están expuestos se verá incrementada, lo cual no hará más que ampliar la desigualdad social en esta región. Urge, por tanto, la necesidad de preservar los sistemas locales de manejo de recursos y los saberes *tradicionales* que estas poblaciones poseen sobre el territorio y la naturaleza. Las autonomías indígenas constituirían en este sentido un mecanismo fundamental que permitiría el ejercicio del uso y aprovechamiento de los recursos naturales en los territorios indígenas. Los municipios indígenas constituirán nuevas formas de gestión territorial con jurisdicción local.

Veremos a lo largo de este capítulo en qué medida las autonomías indígenas implican el ejercicio del autogobierno en base a las estructuras organizativas, instituciones y derecho consuetudinario de los pueblos indígenas. El autogobierno propicia la adquisición de competencias en cuanto al manejo del territorio se refiere y permite como consecuencia, efectuar una gestión territorial íntegra, participativa, local y efectiva en los territorios comunales.

La adopción de la nueva condición de autonomía indígena supone, por tanto, un gran reto para las poblaciones indígenas del país e institucionaliza la lucha por los derechos colectivos que tales poblaciones han venido librando desde tiempo atrás, como se ha tratado de explicar a lo largo de este trabajo. Supone una nueva conquista de los espacios de poder y concede la posibilidad de “*ejercer autoridad política y jurisdiccional en un determinado espacio territorial*” (Albó y Romero C., 2009: 103).

Ambos mecanismos: la autonomía indígena y la gestión territorial, constituirán los nuevos instrumentos con los que definitivamente los pueblos indígenas de Bolivia podrán “*definir su desarrollo de acuerdo a sus criterios culturales y principios de convivencia armónica con la naturaleza*” (Colectivo Cabildeo, 2008: 41).

No obstante, la novedad del proceso autonómico y el estado embrionario en el que se encuentra, no hacen nada fácil explicar el tema que nos ocupa. Son muchas las preguntas que surgen: dado que la titulación de TCOs no ha implicado el respeto y la garantía de los derechos colectivos indígenas en su totalidad, ¿es la fórmula de las autonomías indígenas la manera definitiva de lograrlo?. Aparecen éstas como el experimento definitivo a ensayar para definitivamente alcanzar la consolidación de los derechos de dichas colectividades. Un factor a tener muy en cuenta en este nuevo panorama es el cuestión de las capacidades asumidas por las distintas instituciones encargadas hasta el momento en ejercer las competencias referidas a la gestión de recursos y de control del territorio para las comunidades indígenas, como son: el INRA, Superintendencia Forestal, Alcaldía municipal o Subcentrales Indígenas. Cabe

8. 1. LAS AUTONOMÍAS INDÍGENAS.

El concepto de autonomía no está perfectamente definido. Revisando las fuentes oficiales del país así como los informes provenientes de diversas organizaciones, encontramos una multiplicidad de significados. Apuntan todos ellos al menos, a cuestiones comunes.

Hablar de autonomías nos conduce a hablar de descentralización. Albó y Barrios consideran que éste sería un *“paso notable porque justamente implica la ruptura del monopolio legislativo, antes restringido al nivel nacional”* y concede más responsabilidades –consecuentemente más atribuciones- a los niveles inferiores (locales) (2007: 177). Estos autores creen que en Bolivia, el proceso descentralizador se ha dado tanto desde abajo hacia arriba, desde las comunidades locales al Estado, como en dirección contraria (*ibíd.*). Es cierto que en el ámbito local, se han tomados las decisiones relacionadas con la organización interna al interior de las comunidades regidas por el derecho consuetudinario propio de las normas comunitarias indígenas. No obstante, al mismo tiempo, ha sido el Estado quien ha dictado las normas a la hora de articular el nivel local con el nivel nacional y quien ha subordinado a los grupos étnicos a las instituciones del ámbito gubernamental regidas por el derecho positivo. Para estos autores, lo ideal sería la combinación de ambas esferas (Albó y Barrios, 2007).

En este epígrafe intentaré presentar de manera breve el alcance de la nueva jurisdicción político-administrativa que supone las *Autonomías Indígenas*. Debido en buena medida a que es un tema del todo reciente, muchas incógnitas no podrán obtener respuesta dado que es un proceso al que le falta madurar y sobre el que habrá que esperar para conocer los resultados. Por ello este capítulo no es más que una llamada a la reflexión, un estímulo que nos mueve a continuar conociendo la realidad sociopolítica por la que Bolivia está atravesando en el momento actual. Aún siendo consciente de la falta de información, he considerado relevante incluir algunas ideas sobre el proceso descentralizador de las autonomías puesto en marcha recientemente en el país y el cual puede ayudar a otros países del continente latinoamericano a adoptar algunas medidas encaminadas a hacer partícipes del modelo estatal al conjunto de sectores sociales que lo conforman.

8. 1. 1. Definición Autonomías Indígenas.

Pese a que la NCPE recoja la noción de *Autonomía Indígena Originaria Campesina*, a nivel efectivo no parece que esté muy claro el significado real y sobre todo el alcance de dicho término:

“La autonomía indígena originaria campesina consiste en el autogobierno como ejercicio de la libre determinación de las naciones y los pueblos indígena originario campesinos, cuya población comparte territorio, cultura, historia, lenguas, y organización o instituciones jurídicas, políticas, sociales y económicas propias” (art. 289)³⁸³.

Aceptando esta definición la Autonomía podría ser utilizada para contraponer el olvido al que ha sido condenado el oriente boliviano, el cual se ha caracterizado por la ausencia del Estado. Debido a ello se ha visto históricamente relegado a un segundo plano. Madueño recoge algunos testimonios que advierten que la autonomía sería *“la respuesta fundamental que ha dado la gente al centralismo”*, siendo la razón de las autonomías *“la necesidad de combatir un centralismo que ha condenado al departamento del Beni al olvido”* (2009: 417).

El nuevo régimen autonómico busca un nuevo modelo estatal incluyente que dé cabida a la plurinacionalidad y a nuevas entidades territoriales que se ajusten a las estructuras organizativas indígenas. De esta manera se posibilita a los pueblos indígenas a incorporarse y formar parte de la estructura del Estado el cual institucionaliza su participación.

Una de las definiciones más completas y que mejor explica el alcance del concepto de autonomía y la cual puede ser aplicada a la autonomía indígena en Mojos, es la que recoge el trabajo de Chirif y García Hierro:

La autonomía “se define en base a un control independiente de las tierras y los recursos, esto es, una competencia, reconocida externamente para disponer las propias normas respecto a un área determinada; el libre uso y administración de los espacios, de los recursos y los elementos físicos y simbólicos que conforman el hábitat; un control social, espiritual y cultural sobre el territorio y sus recursos, incluyendo la protección de los propios conocimientos sobre la biodiversidad, el control sobre la transmisión de valores que constituye la ética económica de cada pueblo y la capacidad de autogeneración de conocimientos en los nuevos contextos interculturales; la libertad para organizar la redistribución interna de derechos y obligaciones entre sus miembros,

³⁸³ <http://bolivia.unfpa.org/content/constituci%C3%B3n-pol%C3%ADtica-del-estado>

para establecer sujetos de derecho interno y para regular la sucesión de derechos de uso; el control económico de las variables que puedan afectar las relaciones sociales de producción, reposición y redistribución de los recursos; y un ámbito de jurisdicción sobre el territorio, que permita la regulación interna de la tenencia y sudo de los recursos y el respeto externo de esas normas y de los órganos comunales encargados de aplicarlas” (2007: 39).

La autonomía indígena se construye por tanto, sobre la base del libre control de los recursos, de la tierra y los territorios, en busca de un desarrollo propio definido por las propias normas, valores y principios de la población indígena en cuestión, acordes con los conocimientos y saberes locales del grupo étnico.

Las demandas autonómicas efectuadas por parte de las organizaciones indígenas reclaman la consolidación definitiva de los derechos de propiedad de la tierra y principalmente de la gestión de los recursos naturales con la finalidad de fortalecer económica y socialmente a las comunidades indígenas. La constitución de los pueblos indígenas en *autonomías indígenas originarias* –basada en los territorios ancestrales (art. 290.I de la NCPE)- se debe hacer de acuerdo a sus criterios históricos y geográficos, socioculturales, organizativos y lingüísticos en el territorio ocupado ancestralmente, administrado y gobernado según sus propias instituciones y autoridades, configuradas en base a los usos, costumbres y saberes *tradicionales* de cada uno de los pueblos y al derecho consuetudinario correspondiente desde las propias comunidades, con el fin de gestionar sus territorios y los recursos naturales de estos con vistas a alcanzar un desarrollo sostenible y la incorporación en otros niveles de la administración desde su propio escenario local.

El investigador Wilder Molina, considera que la autonomía indígena se presenta como derecho colectivo que confiere carácter legal a las *Tierras Comunitarias de Origen* lo cual demostraría que la figura de la TCO aún continúa presentando ambigüedades y es susceptible de ser asumida desde diferentes perspectivas.

Otras definiciones prestan mayor atención a la componente descentralizadora que define al régimen autonómico por el que las nuevas instituciones adquieren nuevas potestades y funciones en diversas esferas (Martínez y Stefanoni, 2005). La *multidimensionalidad* se presenta entonces como la característica definitoria de la autonomía indígena e involucra a diferentes ámbitos, logrando tejer un tejido de relaciones entre ellos. Este aspecto tiene mucho que ver con la noción de *Gestión Territorial Indígena* que a su vez abarca diferentes niveles de acción, como veremos en próximos epígrafes. En este sentido la AIOC se despliega en varios ámbitos para lograr la autonomía territorial, cultural, política y administrativa, en busca de un reconocimiento integral por parte del Estado y del resto de actores sociales.

La *Ley Marco de Autonomías y Descentralización*³⁸⁴, entrada en vigor el 19 de julio de 2010, permite la configuración de las nuevas *Autonomías Indígenas* sobre la base territorial de las TCOs. Esto quiere decir que los antiguos territorios comunitarios indígenas podrán adquirir nuevas facultades correspondientes a las nuevas jurisdicciones.

Mires entiende la autonomía como la “*reformulación de las relaciones entre ‘lo indio’ y lo nacional-estatal*” (1991: 209) dado que es un mecanismo por el que los pueblos indígenas replantean su articulación en los espacios de poder. También García Hierro reconoce la relación que queda establecida en el marco de las autonomías entre las instituciones del Estado y el resto de entidades autonómicas (2004: 299). Y para Miguel Urioste, en Bolivia las aspiraciones autonómicas han hecho emerger “*nuevas expectativas y puesto en conflicto la forma de relación de la sociedad civil rural con el Estado*” (2007b: 205).

8. 1. 2. Antecedentes de las propuestas autonómicas y del modelo descentralizador.

La demanda autonómica no es en realidad un fenómeno reciente de la historia de Bolivia. Ya en la década de los ochenta del siglo pasado, aparecieron los primeros indicios que hasta treinta años más tarde no se harían eco. Las demandas de descentralización comenzaron a hacerse sentir en el departamento del Beni entre 1984 y 1987, fecha en que en la ciudad de Trinidad brotaron movilizaciones que reclamaban la administración descentralizada de los recursos forestales, lo cual dio lugar a la formación del *Centro de Desarrollo Forestal* (Molina W., Vargas C., y Soruco, 2008: 112-113).

Las organizaciones indígenas por su parte, a raíz de la Marcha de 1990, comenzaron a demandar la autogestión de los pueblos indígenas gobernados por sí mismos aunque insertos en el esquema del Estado nacional (*ibíd.*, 2008: 129-130). Desde dicha movilización, la autonomía indígena ha estado implícita en el resto de marchas. Incluso en el año 1982 los pueblos indígenas de tierras bajas llevaron la

³⁸⁴ Esta nueva normativa tiene como apellido “Andrés Ibáñez” quien lideró una revolución en el año 1887 al grito de “Todos somos iguales”, el cual iba dirigido a las élites gobernantes de Santa Cruz y ante este cuestionamiento del “orden estamental” que definía por aquel entonces al país, se alzó la bandera de la igualdad para superar las injusticias y contravenir la concentración del poder. La *Ley Marco de Autonomías* adopta como ejemplo a Andrés Ibáñez en el convencimiento de implantar un modelo de Estado plurinacional con la participación de las diversidades nacionales que lo conforman (preámbulo) (véase <http://www.gobernabilidad.org.bo/component/content/article/2-noticias/362-ley-marco-de-autonomias-y-descentralizacion-de-bolivia>)

propuesta autonómica al Congreso Nacional tras la fundación de la CIDOB (Consejos Educativos de Pueblos Originarios de Bolivia, 2008: 17). Salgado retrasa los conatos autonómicos a principios de este siglo cuando CIDOB adoptó la doble estrategia que consistía en reivindicar la autonomía indígena a nivel político por un lado y fortalecer la GTI de las TCOs a nivel organizativo por otro (2010).

La autonomía aparecía, por tanto, implícita en las demandas indígenas desde que estos grupos comenzaron a organizarse políticamente. Desde las organizaciones indígenas se concebía la autonomía como la manera de desarrollo en el que serían las propias comunidades indígenas las que desde abajo, desde el nivel local, dictaminasen y dispusieran sus propias normas de acción para ejercer el libre ejercicio del autogobierno. Lo habitual había sido (y sería aún) que desde las más altas esferas del nivel gubernamental fuera impuesto tal catálogo de regulaciones por el temor a perder el control sobre estas poblaciones. Esto explica que algunos indígenas como Víctor Eamara consideren que *“la visión de las autonomías tiene que ser desde los pueblos indígenas”* y no como vienen haciendo otros sectores sociales que están intentando apropiarse de las prerrogativas que confiere la autonomía, lo cual lleva a uno de los máximos dirigentes del movimiento indígena mojeño -Pedro Nuni- a declarar que *“siempre hemos pregonado la autonomía indígena y ahora, quienes abanderan las autonomías (...) están pregonando las autonomías departamentales, que no es la propuesta histórica de los pueblos indígenas”* (Madueño, 2009: 419-420).

La *Ley de Participación Popular* del año 1994, primer intento descentralizador llevado a cabo en Bolivia, posibilitó a los municipios articularse de manera más directa con el Estado. Para Urioste esta nueva relación plantearía:

“la creación de municipios indígenas o Entidades Territoriales Indígenas (ETI) – en algunos casos coincidentes en sus límites con los espacios territoriales de las TCO- como nuevas formas de gestión territorial y de jurisdicción político-administrativa con autonomía local, lo cual consiste en realidad en “convertir a la comunidad en la célula territorial, política y organizativa del municipio o de la ETI y por tanto, del Estado boliviano” (2007b: 206).

Asimismo contribuiría a centrar las demandas indígenas, cada vez con más fuerza, en el autogobierno local que ejercerían las propias autoridades locales al interior de sus nuevas jurisdicciones territoriales (ibíd., 2007a: xxxv).

En relación a las poblaciones indígenas, el principal objetivo de la *Ley de*

*Participación Popular*³⁸⁵ fue articular a las comunidades indígenas “en la vida jurídica, política y económica del país” y “con cada uno de los Gobiernos Municipales” (art. 1 y 10). La misma reconocía además la personalidad jurídica de las *Organizaciones Territoriales de Base* expresadas en los pueblos indígenas (art. 2 y 3). Lo que se pretendía era fortalecer la capacidad de gestión de los gobiernos municipales, ampliar sus competencias e incrementar los recursos en favor de estos (art. 2 y 30). Si bien fue un paso adelante el reconocimiento por parte del Estado de 12.000 comunidades campesinas y pueblos indígenas como entidades jurídicas de pleno derecho, Urioste señala como una de las grandes limitaciones que a efectos reales no se otorgasen “competencias a los municipios para administrar los recursos naturales del territorio municipal” por lo que se requeriría de mecanismos alternativos dirigidos a hacer efectivas tales atribuciones así como para lograr el fortalecimiento de la “capacidad de los actores locales y de sus instituciones” (2003: 43; 2007b: 211).

Si echamos la vista atrás y retomamos el *Convenio 169 de la OIT* y la *Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas*, nos podemos dar cuenta que la facultad autonómica se encuentra también presente en estos documentos jurídicos. En sus interpretaciones aparecen de manera implícita los preceptos referentes a la autonomía indígena. En el Convenio 169 en el artículo 14, y en la Declaración, viene especificado en los artículos 3 y 4 el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas para elegir su condición política en aras de lograr un desarrollo económico, social y cultural en base a sus propios criterios y a la autonomía o autogobierno. Asimismo en los artículos 5, 6 y 26 se concreta el derecho de los pueblos indígenas a la libre disposición de los recursos de sus territorios y a la posesión y control de los mismos³⁸⁶.

La autonomía da por tanto paso al autogobierno y es en base a éste que las poblaciones indígenas se ven capacitadas a tomar sus propias decisiones en materia económica, jurídica y sociopolítica para de acuerdo con sus instituciones desplegar sus modelos de manejo local así como sus modelos de producción³⁸⁷.

Pedro García Hierro en relación a la cuestión del autogobierno y la libre determinación de los pueblos indígenas, aclara que la mayoría de tratadistas consideran que la libre determinación sería la condición o el prerrequisito para ejercer el resto de derechos y no un derecho en sí (2004: 298). Anaya va más allá y pone de manifiesto los temores de muchos estados que ven en la autodeterminación el primer

³⁸⁵ Para consultar los artículos que aparecen a continuación véase: http://www.legislacionmunicipal.fam.bo/Archivo/Docs/Leyes/Ley_1551.pdf

³⁸⁶ Véase <http://www.ilo.org/indigenous/Conventions/no169/lang--es/index.htm> y http://www.un.org/esa/socdev/unpfi/documents/DRIPS_es.pdf

³⁸⁷ Para un análisis más en profundidad sobre la libre determinación de los pueblos indígenas y la cuestión autonómica véase Aparicio Wihelmi (2006) y López Bárcenas (2006).

paso para la secesión o para la conversión en países independientes (2006). Por el contrario, y como bien señala García Hierro, las organizaciones indígenas reivindican tal condición con vistas a alcanzar el “*desarrollo económico, social y cultural*” al contar con la posibilidad de disponer libremente de los recursos naturales de sus territorios (*ibíd.*) no habiéndose producido, al menos en Bolivia, llamadas a la independencia.

En un trabajo más reciente, García Hierro, junto con Surrallés (2009) reconocen el punto de inflexión que supuso la *Declaración de Naciones Unidas* en el derecho internacional por varias razones. En primer lugar por su carácter vinculante, al que ya hacía mención en el capítulo 6, y en segundo lugar por reconocer la existencia de un nuevo sujeto de derechos colectivos capaz de definir su propio desarrollo económico, social y cultural, a quien le concede la titularidad jurídica. Estos autores apuntan a dos principios fundamentales que vienen a colación con el tema que venimos tratando. Uno sería la libre determinación o autodeterminación, que consecuentemente se traduce en el derecho a la autonomía, y el otro la “*igualdad de todos los pueblos sin discriminación*” (2009: 20).

La autonomía sería para las poblaciones indígenas de Bolivia, uno de los medios más apropiados para el ejercicio de la libre determinación. La NCPE recoge en relación al autogobierno de las AIOC que éste “*se ejercerá de acuerdo a sus normas, instituciones, autoridades y procedimientos, conforme a sus atribuciones y competencias*” (art. 290. II)³⁸⁸.

Se podría considerar el autogobierno y la libre determinación como uno de los atributos inherentes, o incluso el aspecto más importante, de la autonomía indígena, lo cual está estrechamente ligado al territorio dado que dicha condición jurídico-administrativa permite el control de éste por parte de las comunidades indígenas, adquiriendo de esta manera las atribuciones necesarias para llevar a cabo una gestión integral, participativa y efectiva del mismo.

Un aspecto interesante que ha sucedido en Bolivia es que la pretensión autonomista ha sido asimismo incorporada a las demandas de los grupos más conservadores o de la oligarquía del país, como instrumento que contrarreste la fuerza que han ido adquiriendo las organizaciones indígenas. Marxa Nadia Chávez ha expresado esta idea anunciando que “*las ‘autonomías departamentales’ son el pivote central del proyecto político reaccionario boliviano*” (2010: 140).

³⁸⁸ <http://bolivia.unfpa.org/content/constituci%C3%B3n-pol%C3%ADtica-del-estado>

8. 1. 3. Alcances y limitaciones del régimen autonómico.

Las estrategias que adoptó CIDOB y a las que se hacía mención al comienzo del capítulo, se hicieron reales al menos en la consecución de las autonomías indígenas, lo cual aparece atestiguado en la NCPE que reconoce al país como Estado plurinacional con autonomías, entre ellas la indígena (Salgado, 2010).

La *Ley Marco de Autonomías y Descentralización*³⁸⁹ reconoce a los pueblos indígenas el derecho a ejercer la autonomía, el autogobierno y a que elijan, por consiguiente estos, sus propias autoridades (art. 5). El objetivo de la AIOC será promover “la gestión de su territorio” (art.8), aspecto que vincula la autonomía indígena y la gestión territorial. Asimismo los territorios indígenas, las antiguas TCOs, definidos en la NCPE como *Territorio Indígena Originario Campesino*³⁹⁰ (TIOC) (disposición transitoria 7ª de la NCPE) “se constituye en unidad territorial una vez que acceda a la autonomía indígena originaria campesina” (art. 6).

La NCPE atribuye las siguientes facultades a las AIOC (art. 304)³⁹¹:

1. *Elaborar su Estatuto para el ejercicio de su autonomía conforme a la Constitución y la ley.*
2. *Definición y gestión de formas propias de desarrollo económico, social, político, organizativo y cultural, de acuerdo con su identidad y visión de cada pueblo.*
3. *Gestión y administración de los recursos naturales renovables, de acuerdo con la Constitución.*
4. *Elaboración de Planes de Ordenamiento Territorial y de uso de suelos, en coordinación con los planes del nivel central del Estado, departamentales y municipales.*
5. *Electrificación en sistemas aislados dentro de su jurisdicción.*
6. *Mantenimiento y administración de caminos vecinales y comunales.*
7. *Administración y preservación de áreas protegidas en su jurisdicción, en el marco de la política del Estado.*
8. *Ejercicio de la jurisdicción indígena originaria campesina para la aplicación de justicia y resolución de conflictos a través de normas y procedimientos propios de acuerdo a la Constitución y la ley.*
9. *Deporte, esparcimiento y recreación.*
10. *Patrimonio cultural, tangible e intangible. Resguardo, fomento y*

³⁸⁹ <http://www.gobernabilidad.org.bo/component/content/article/2-noticias/362-ley-marco-de-autonomias-y-descentralizacion-de-bolivia>

³⁹⁰ Según la *Ley Marco de Autonomías y Descentralización* se define a los TIOC como “el territorio ancestral sobre el cual constituyeron las tierras colectivas o comunitarias de origen” (art. 6).

³⁹¹ <http://bolivia.unfpa.org/content/constituci%C3%B3n-pol%C3%ADtica-del-estado>

promoción de sus culturas, arte, identidad, centros arqueológicos, lugares religiosos, culturales y museos.

11. *Políticas de turismo.*
12. *Crear y administrar tasas, patentes y contribuciones especiales en el ámbito de su jurisdicción de acuerdo a Ley.*
13. *Administrar los impuestos de su competencia en el ámbito de su jurisdicción.*
14. *Elaborar, aprobar y ejecutar sus programas de operaciones y su presupuesto.*
15. *Planificación y gestión de la ocupación territorial.*
16. *Vivienda, urbanismo y redistribución poblacional conforme a sus prácticas culturales en el ámbito de la jurisdicción.*
17. *Promover y suscribir acuerdos de cooperación con otros pueblos y entidades públicas y privadas.*
18. *Mantenimiento y administración de sus sistemas de microriego.*
19. *Fomento y desarrollo de su vocación productiva.*
20. *Construcción, mantenimiento y administración de la infraestructura necesaria para el desarrollo en su jurisdicción.*
21. *Participar, desarrollar y ejecutar mecanismos de consulta previa, libre e informada relativos a la aplicación de medidas legislativas, ejecutivas y administrativas que los afecten.*
22. *Preservación del hábitat y el paisaje, conforme a sus principios, normas y prácticas culturales, tecnológicas, espaciales e históricas.*
23. *Desarrollo y ejercicio de sus instituciones democráticas conforme a sus normas y procedimientos propios.*

Como puede apreciarse, tras este largo listado, son amplias las competencias que los pueblos indígenas tienen la posibilidad de adquirir a través de la consecución de la condición autonómica.

En base a la *Ley Marco de Autonomías y Descentralización*, existen dos vías para que a los pueblos indígenas se les conceda la autonomía (art. 44)³⁹²: la vía territorial por la que la TCO se convierte en AIOC. Para esto deben cumplirse toda una serie de requisitos, siendo uno de los más importantes el número de habitantes, que no debe ser menor de 1.000. Este criterio dejaría a la TCO TIMI con posibilidades (recordemos que la población de ésta alcanza más de 2.200 habitantes). Llama la atención que no sea necesario que la TCO en cuestión posea continuidad territorial dado que se considera que ésta se da pese a que existan propiedades de *terceros* en su interior, como sucede en el TIMI. La segunda alternativa es la vía municipal, es decir,

³⁹² <http://www.gobernabilidad.org.bo/component/content/article/2-noticias/362-ley-marco-de-autonomias-y-descentralizacion-de-bolivia>

que el municipio se convierta en AIOC.

Una vía posible en la región de Mojos es, por tanto, la conversión municipal indígena dado que algo más del 80% de la población pertenece a algún grupo étnico. Aunque la autonomía indígena se constituirá por “*la voluntad de su población, expresada en consulta*” (art. 290 y 293 de la NCPE y art. 50 de la *Ley Marco de Autonomías y Descentralización*)³⁹³ al igual que sucede con aquellos municipios que pretendan la conversión en AICO (art. 294 de la NCPE). Tenemos, en definitiva, en Mojos dos opciones: o bien que la TCO se convierta en TIOC y ésta en AIOC mientras que el municipio de San Ignacio mantendría su condición municipal o que el municipio de San Ignacio adquiriese la Autonomía Municipal a través de la segunda vía.

Surgen varios problemas por resolver. Uno emana de la propia constitución que en la 7ª cláusula transitoria instruye que las TCOs tienen que convertirse a TIOC a través de un trámite administrativo. Y como bien explica Zulema Lehm, “*allá donde hay territorios indígenas sin conflictos con terceros no hay problema*” (entrevista) pero en numerosos casos, como sabemos sucede en el TIMI, los conflictos por la tenencia de la tierra son una constante del panorama local.

Otro dilema que surge y del que aún no se conocen las implicaciones, va más allá de los requisitos por la adopción de una condición jurídica u otra. Es más un problema de fondo. El hecho de que los territorios indígenas y campesinos se adscriban en la misma categoría (vaga y confusa que puede dar lugar a malentendidos), diluye a los sujetos de derecho, los sitúa en una ambigüedad legal que condiciona la naturaleza de estos. Y como añade Lehm, esto excluiría además a los indígenas urbanos dado que la NCPE reconoce como única categoría a los indígenas originario campesinos, lo cual dejaría fuera de lugar a los ignacianos que habitan en el municipio de San Ignacio. Una vez más nos enfrentamos a un juego de identidades que determinarán la concesión de derechos.

Xavier Albó y Carlos Romero, interpretan que el sentido de “*naciones y pueblos indígena originario campesinos*” es la de tomarlo como unidad y que “*el uso conjunto de esa retahíla de términos, ensartados (...)*” se debe a que en las tierras bajas se refiere al término de *indígena*, mientras que para los indígenas andinos éste posee una connotación discriminatoria por lo que se opta por el uso de *originario* (2009: 6). El término *campesino* por el contrario hunde sus raíces en la revolución del 52 y en la Reforma Agraria del 53, cuando se procuró evitar el uso de *indígena* que aludía a actitudes despectivas (*ibíd.*, 7). El término *campesino* no atendería a otra colectividad humana opuesta a los grupos indígenas. Del mismo modo los términos de *nación* y

³⁹³ <http://bolivia.unfpa.org/content/constituci%C3%B3n-pol%C3%ADtica-del-estado> y <http://www.gobernabilidad.org.bo/component/content/article/2-noticias/362-ley-marco-de-autonomias-y-descentralizacion-de-bolivia>

pueblo vendrían a referirse a la existencia precolonial de dichas colectividades. Sin la intención de profundizar en estos debates que poseen un fondo jurídico y sociológico, es necesario que sean apuntados con el fin de entender la complejidad de todas las cuestiones que venimos tratando.

Zulema Lehm comenta que determinados planteamientos a favor de los pueblos indígenas son vistos por algunos sectores como inconstitucionales ante lo que ella expone que *“la propia constitución en sí misma alberga sus contradicciones”* (entrevista). Para demostrarlo pone como ejemplo el reconocimiento de la existencia precolonial de los pueblos indígenas (art. 2) al tiempo que se constituye un régimen autonómico circunscrito a jurisdicciones municipales y departamentales que son republicanas. Por ello Lehm considera que no tiene sentido que las autonomías indígenas intenten sujetarse a estos conceptos si se quiere ser consecuente con el principio que recoge el 2º artículo de la NCPE (entrevista).

Otro problema que surge es cómo adecuar las ya existentes instituciones organizativas indígenas, como la Subcentral del TIMI, a la nueva jurisdicción municipal en el caso que ésta se produjera. Es decir, cómo incorporar a los pueblos indígenas a la estructura estatal con las nuevas atribuciones que les han sido otorgadas. A día de hoy no tenemos noticias de que se estén tomando iniciativas encaminadas a alcanzar la condición de AIOC. En Mojos aún no se ha puesto en práctica aunque sí se discute. Wilder Molina informaba que las organizaciones indígenas del municipio de San Ignacio se encontraban en proceso de analizar y dirimir lo que supondría la conversión en AIOC aunque por el momento no habían tomado ninguna decisión (2009). Marxia Chávez aclaraba que como respuesta a la redacción de los estatutos autonómicos en las tierras bajas, el movimiento indígena del oriente tuvo varias reuniones con el fin de preparar los Estatutos Autonómicos Indígenas (2010), de los que no tenemos constancia a día de hoy. Conforme al trabajo de esta socióloga, se entiende que las TCOs –reconocidas como “nueva división política del Estado”- pasarían a constituir el primer nivel del nuevo régimen autonómico, así como a ser reconocidas las *“formas organizativas de cada TCO”* que serían, por tanto, financiadas al pasar a formar parte institucional del aparato estatal; serían además elegidas cada 5 años, pese a que, al mismo tiempo, se mantuvieran los sistemas locales de organización indígena de las tierras bajas (2010: 157-158).

La NCPE ampara la elaboración de estatuto indígenas según su artículo 275 y es conforme a estos que *“se pueden precisar competencias que en un momento dado, una determinada Nación y Pueblos Indígena Originario Campesino, decide adoptar dentro de su autogobierno y otros muchos aspectos de su modo particular de proceder”* (Albó y Romero C., 2009: 80).

Sin embargo, algunos flecos quedan pendientes. En fechas tempranas, Mires advertía que efectivamente no estaban del todo delimitadas “*las posiciones separatistas y las autonómicas*” (1991: 208). En las tierras bajas de Bolivia esto se mantiene. La autonomía es vista por los *terceros*, principalmente por las élites terratenientes, como la oportunidad de desvincularse del gobierno central para lograr adueñarse definitivamente de manera legal, de los recursos naturales de la región y definir, de acuerdo a sus concepciones desarrollistas, la gestión territorial. Efectivamente al inicio del Estatuto Autonómico del Beni se menciona que:

*“La Autonomía es la nueva vía de desarrollo, nuestra región fue víctima del centralismo, ahora, con autonomía ‘el progreso del Beni será obra de los propios benianos’, con la participación de todos los sectores productivos del área rural y urbana, los empresarios, los campesinos, las comunidades indígenas suscriben un Pacto Social Autonómico para salir del atraso y la extrema pobreza promoviendo una economía social solidaria de mercado que dará bienestar general y fortalecerá la unidad del pueblo beniano. La autonomía Departamental se constituirá en motor del desarrollo nacional contribuirá a construir un Estado próspero, soberano, capaz de forjar un mejor destino nacional”*³⁹⁴.

En este fragmento se intuye una visión que pretende basar tal desarrollo en el crecimiento económico de aquellos sectores más prósperos desde el punto de vista productivo, y ya sabemos que los *terceros* manejan en el Beni una percepción de las poblaciones indígenas totalmente contrario a ello. De hecho, se reconoce el fomento desde la Autonomía Departamental de actividades productivas en las TCOs (Artículo: *Fomento a la Productividad en las Tierras Comunitarias de Origen y Comunidades Campesinas*).

Otro fragmento enormemente ilustrativo que guarda una estrecha relación con la cuestión que venimos tratando, es el recogido por la investigación de Molina, Vargas y Soruco, en el que uno de los candidatos del *Movimiento Nacionalista Revolucionario* (MNR) en uno de sus discursos -pronunciado el 11 de junio de 2006 en la ciudad de Trinidad- se refiere de la siguiente manera a la cuestión autonómica:

“El objetivo de la autonomía yo lo reduzco en su planeamiento (...) Decimos que autonomía productiva está en crear las condiciones para un gran despliegue económico, para generar nuestros propios excedentes financieros que nos permitan derrotar la pobreza, derrotar la miseria” (2008: 122).

³⁹⁴ www.constituyentesoberana.org

Por otro lado, se invoca a la identidad beniana a la que parecen deber adscribirse el conjunto de sectores sociales del departamento. Lejos de la realidad, sabemos que las poblaciones indígenas, como puede ser la mojeña, se identifican con su identidad étnica antes que con otra supralocal. Emerge una vez más el debate de las identidades que aparece ahora de la mano del proceso autonómico. En este sentido anuncian algunos autores que el tema de las autonomías ha abierto una reflexión “*de los contenidos de las identidades departamentales en relación con las identidades étnicas y regionales*” (ibíd., 112).

Pero además, llama la atención al leer este documento que desde la jurisdicción departamental se deleguen aquellas facultades que sean capaces de desempeñar las autonomías municipales, justificando una eficaz prestación de servicios, lo cual significa que pueden reservarse aquellas que no consideren convenientes. El siguiente párrafo así lo explica:

*“El régimen Autonómico del Departamento del Beni, apoyará y profundizará la Autonomía Municipal delegándole las funciones y competencias, en aquellas materias en que los Municipios puedan asumirlas, asegurando la debida coordinación y eficacia en la prestación de los servicios”*³⁹⁵.

Es más, las autonomías departamentales ni siquiera reconocen en sus estatutos autonómicos la jurisdicción de las autonomías indígenas (Börth *et al.*, 2008, cit. en Chávez M., 2010: 154).

El separatismo al que puede conducir la demanda autonómica es denunciado en el trabajo de CEDIB que alerta sobre los riesgos que entraña la redacción del estatuto autonómico departamental en los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija los cuales “*garantizan sus intereses privados*” (2008: 71)³⁹⁶. En efecto y en base a lo expuesto en dicho estudio, si el estatuto autonómico del Beni -aprobado el 15 de diciembre de 2007- es una copia, en lo que respecta al tema de tierras y territorio, de aquel de Santa Cruz, podemos entender que éste sea diseñado con vistas a beneficiar a los grupos oligarcas y para demostrarlo existen varios motivos: la no existencia de la figura de la reversión de tierras y la posibilidad de adjudicación de estas a

³⁹⁵ www.constituyentesoberana.org

³⁹⁶ Sería en el año 2003 cuando surgió la “Nación Camba”, organización política que reivindicaba la identidad de la denominada “media luna”, formación que aglutina a los comités cívicos (“*organizaciones de la sociedad civil que se presentan como portavoces legítimos de los intereses regionales*”) de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija “*en un intento de mostrar una articulación socio-territorial afín a un posible escenario de descentralización*” (Molina W., Vargas C., y Soruco, 2008: 112-113). Para Marxia Chávez la adopción del tema autonómico en los proyectos políticos de estos departamentos surgió a comienzos del presente siglo como reacción a la ola de movilizaciones indígenas y de otros sectores como los mineros (2010).

particulares³⁹⁷ (*ibíd.*, 73). Lo primero niega o al menos ignora uno de los máximos objetivos a alcanzar por la *Ley de la Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria*, que como ya se vio en el capítulo 6, buscaba el cumplimiento de la FES con la consecuente reversión de tierras en el caso de que ésta no pudiera ser verificada. Aunque en realidad, sí se reconoce. En cuanto al segundo aspecto cabe añadir que la adjudicación de tierras a particulares supondrá un grave retroceso, el cual pretendía ser de una vez por todas solventado. Podrá contribuir además a incrementar el fenómeno de la concentración agraria en el oriente boliviano, que tanto daño causó a las poblaciones indígenas.

Conforme al trabajo de Wilder Molina, Cynthia Vargas y Pablo Soruco se establecen dos modelos diferentes de demandas autonómicas que desde distintas plataformas cuestionan el modelo centralizador del Estado boliviano (2008). Por un lado se encuentra el sector que conforman los comités cívicos, los ganaderos y aquellos que se identifican con partidos políticos como PODEMOS o el MNR, constituyendo la segunda postura los grupos étnicos (estos basan sus planteamientos en los discursos de intelectuales y teóricos de izquierda vinculados con ONGs pro-indigenistas) quienes por su parte perciben a los primeros como constituyentes del Estado al cual dirigen sus críticas (*ibíd.*, 115). Ambas posiciones parten de distintas concepciones del Estado lo cual determina la adopción de una u otra modalidad autonómica. Aunque como bien señalan aquellos autores, ambas posturas se adhieren a una posición común y es que el Estado centralista debe asumir el rol como garante de las relaciones que quedan establecidas entre las regiones y los departamentos (*ibíd.*, 122). La diferencia principal que mantienen estriba en la unidad estatal y territorial que debería asumir las riendas de la autonomía, que para los primeros serían los departamentos mientras que para los indígenas por el contrario serían las *Entidades Territoriales Indígenas*, lo cual requeriría la conversión de las antiguas TCOs. Se enfrentan por lo tanto una visión regional frente a una local.

Un aspecto que conviene resaltar y que puede que no haya sido madurado como debiera, es la cuestión que atañe a la articulación de funciones entre las diversas instituciones sociopolíticas del aparato central del Estado y de las nuevas entidades descentralizadas como son los municipios o autonomías indígenas o los TIOC. Cada una de éstas requiere (re)definir sus roles y las competencias que a partir de ahora deberá adoptar con el fin de evitar solapamientos con el resto de jurisdicciones político-administrativas y territoriales (la *Ley de Deslinde Jurisdiccional* promueve la cooperación y coordinación entre las diferentes jurisdicciones del nuevo Estado

³⁹⁷ “La adjudicación a título oneroso, a favor de las propiedades medianas, empresas y cooperativas” (Art. Administración y Distribución de Tierras Fiscales del Estatuto Autonómico del Beni).

descentralizado). Sólo de esta manera se podrá alcanzar la seguridad jurídica que ampare toda la serie de derechos colectivos que las organizaciones indígenas han venido reclamando.

La autonomía queda en parte eclipsada por la normativa incluida en la NCPE en lo concerniente a recursos forestales, ganadería, agricultura, etcétera, -en concreto el artículo 299-, actividades todas ellas cuyas competencias corresponden de manera compartida al nivel central y a los niveles autonómicos. Y es que el Estado se reserva la administración de toda una serie de prerrogativas que en realidad obstaculizan la libre disposición que presuntamente parece definir a las nuevas jurisdicciones político-administrativas, pese a que las *Autonomías Indígenas* deban ser consultadas previamente a cualquier actuación relacionada con el manejo de recursos, renovables o no renovables, en sus territorios. Es por ello que el nivel autonómico debe ser del todo efectivo y no dejar huecos por los que puedan traspasar otras entidades institucionales.

8. 2. LA GESTIÓN TERRITORIAL INDÍGENA.

Al igual que se hizo con la cuestión de las Autonomías Indígenas, en relación a la GTI es conveniente entender en qué medida la gestión territorial se ha cumplido como objetivo de las organizaciones indígenas. Pero del mismo modo que ocurría con la cuestión autonómica, carecemos de información suficiente para poder exponer conclusiones cerradas o planteamientos definitivos en torno a este tema. Más bien serán interrogantes que quedarán en buena medida sin respuesta y que una vez más, motivarán a futuros trabajos a continuar esta línea de investigación. Principalmente en el territorio ignaciano, en donde las iniciativas formales son aún incipientes.

Si bien el concepto de GTI es una creación contemporánea *sensu stricto*, que ha salido recientemente a la luz, la gestión territorial es intrínseca al desarrollo de los pueblos indígenas amazónicos. A lo largo de su historia estos han transformado el territorio en base a sus requerimientos y conforme a sus patrones culturales. La actualidad que envuelve al término lo convierte en un “*concepto dinámico y participativo que va definiéndose a medida que se van generando experiencias prácticas de GTI en las TCOs*” (MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, 2004: 35). Pese a su historicidad, no ha sido sino recientemente cuando este concepto ha saltado a la palestra al suponer para las organizaciones indígenas una nueva herramienta de lucha y consolidación de los derechos territoriales.

8. 2. 1. Definición de GTI.

Al igual que sucedía con el concepto de autonomía y de tantos otros que configuran el corpus conceptual de esta investigación, la gestión territorial ha sido definida de diversas maneras. Existen múltiples opiniones acerca del significado de la GTI. No son muchos los trabajos que hayan definido este término para el contexto indígena boliviano. No deja de ser uno más de los conceptos importados desde fuera y aplicados a la propia realidad de los pueblos indígenas y aunque sea una categoría construida e implementada desde arriba hacia abajo, forma parte de la cosmovisión indígena *tradicional*.

La GTI viene a referirse a la manera como los pueblos indígenas administran el territorio y los recursos de éste en el marco de la sostenibilidad ambiental y teniendo siempre en consideración la vocación de los suelos. Aunque algunos trabajos enfatizan asimismo el vínculo entre la gestión territorial y la autodeterminación de los pueblos indígenas y para demostrarlo se apoyan en la definición empleada por DANINA (Herbás y Patiño, 2010). Para la Agencia de Cooperación de Dinamarca -buena conocedora de la cuestión territorial de los pueblos indígenas en Bolivia, como se indicó en el capítulo 6-, la gestión territorial indígena:

“resulta ser la suma de prácticas y reglas incluidas en la protección, funcionamiento y desarrollo de estos territorios en todos sus ámbitos (sean estos ecológicos, productivos, sociales, culturales o espirituales), implementados a partir de la estructura propia de la organización social y política de determinado pueblo. En fin, la gestión indígena es concebida como la autodeterminación plena e idealizada” (2004, s/p. Documento interno, cit. en Herbás y Patiño, 2010: 20).

Organizaciones como la CIDOB aportan, por su parte, la siguiente definición:

*“La gestión territorial indígena es el proceso por el que las organizaciones indígenas dueñas de un territorio titulado como TCO lo manejan de una forma participativa y en consenso entre las diversas comunidades, ejecutando sus decisiones, con el fin de mejorar su nivel y calidad de vida de acuerdo a sus valores culturales. La gestión territorial indígena parte del modelo de gestión familiar, cuyos principios son la participación activa de todos sus miembros de acuerdo a sus roles y la toma de decisión de sus líderes o jefes de familia en las acciones a realizar para la sobrevivencia y el bienestar de la familia”*³⁹⁸

También la noción de autogobierno aparece implícita en dicha noción.

³⁹⁸ <http://www.cidob-bo.org/gti/gti.html> y Salgado, 2010: 212.

Y para los comunarios ignacianos de la TCO TIMI, la GTI fue definida en la celebración del evento que tuvo lugar en el año 2004 en la ciudad de Cochabamba, en donde se reunieron hasta 15 pueblos indígenas, como:

“la manera en que se administra el territorio respondiendo a las expectativas económicas y culturales de la población, a las peculiaridades de la sociedad y la cultura, revalorizando conocimientos y tecnologías tradicionales y enriqueciéndolas con prácticas y tecnologías nuevas y modernas pero sin romper el equilibrio ecológico. Un elemento importante que han añadido los representantes indígenas es la necesidad de incorporar en la GTI las acciones de educación y concientización no sólo a comunarios sino a terceros (ganaderos, productores agropecuarios que viven en el territorio o son vecinos de éste) en la perspectiva de lograr una convivencia respetuosa” (Salgado, 2010: 210).

Un elemento novedoso y que llama la atención es la pretensión del uso de *tecnología moderna*. Esto recuerda a una de los grupos de discusión que se realizaron durante la fase del trabajo de campo en la que algunos comunarios de la comunidad de Santa Rita reconocían que si pudiesen hacer uso de motosierras ahorrarían muchas horas de trabajo de desbroce en los chacos. En la comunidad de San Miguel del Mátire narraron de qué manera se turnaban en el uso de dicha herramienta -que poco tiene que ver con los rudimentarios machetes y punzones usados comúnmente por los comunarios del TIMI- para facilitar a las familias el trabajo de tumba de la vegetación. En esta comunidad las motosierras pertenecían al conjunto de comunarios y se debía solicitar permiso para su uso. Ningún miembro declaró en ningún momento hacer un uso irresponsable de estas. Más allá de lo anecdótico que pueda parecer, lo que trasciende a estas cuestiones son las incorporaciones de elementos culturales externos, que las comunidades mojeñas llevan a cabo, lo cual incide una vez más en la idea de plantear los conocimientos indígenas locales como conocimientos híbridos, situados.

Pero una definición del todo interesante por todo lo que abarca su significado, es la del antropólogo costarricense Carlos Camacho, que aparece recogida en el trabajo de Salgado:

“La gestión territorial indígena es un proceso de transformación del espacio desde una perspectiva étnica y culturalmente sensible bajo el control político de los habitantes de cada territorio mediante sus propias normas (...) La base de esa definición es que el espacio es una construcción social. En tanto tal, es un receptáculo de relaciones sociales y de significaciones. Guarda la impronta de la historia de la sociedad que lo habita y por eso constituye uno de los basamentos de la identidad de su pueblo. Contiene las

coordenadas simbólicas que permiten a cada pueblo identificarse con su territorio. En él también se expresan los signos de la desigualdad y de las contradicciones sociales. Es así como las segregaciones étnicas y de clase que caracterizan la sociedad colonial pueden leerse en la estructura del territorio” (2010: 211).

Esto, ineludiblemente nos recuerda a cuestiones que fueron planteadas en el capítulo 2, en el que se presentaba de forma paralela y entrelazada la temática territorial ligada a cuestiones étnicas. También se repite la idea que define al espacio como construcción social sobre el que un pueblo establece lazos simbólicos de pertenencia. La GTI es además de una construcción social, una construcción cultural dado que es el propio pueblo indígena que a lo largo de su historia la ha ido modelando en base a sus propios criterios. Será interesante recuperar estos debates en las cuestiones finales.

8. 2. 2. Dimensiones de la *Gestión Territorial Indígena*.

Comenzaba mencionando que la GTI no es algo sustancialmente novedoso dado que las poblaciones indígenas de la Amazonía boliviana lo vienen desarrollando desde el periodo prehispánico.

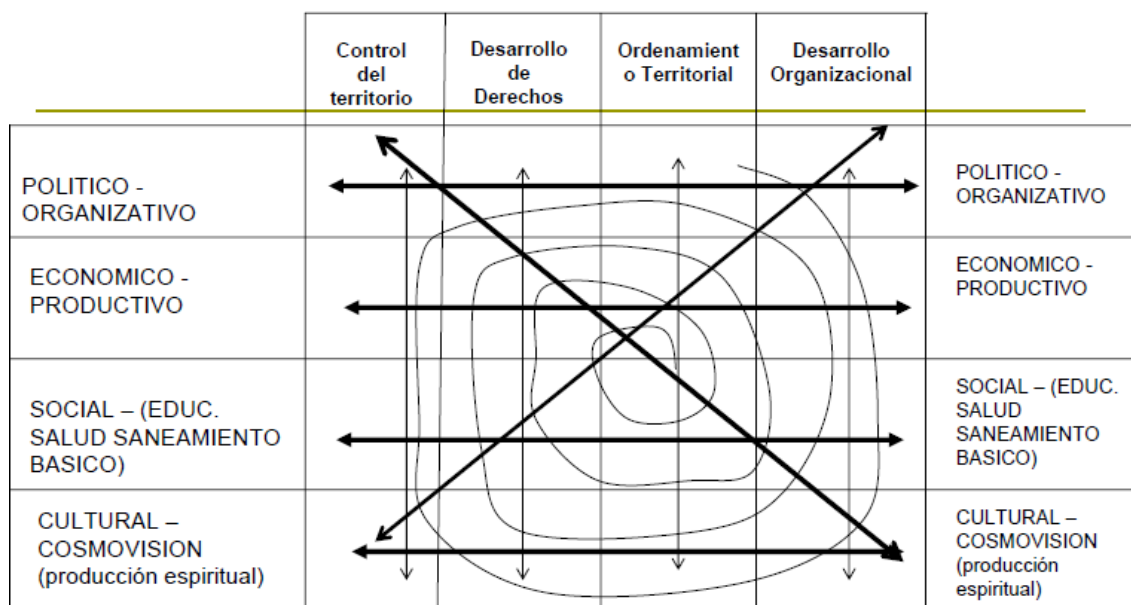
En base al trabajo de Salgado (2010) se establecen distintos tipos de gestión territorial conforme al periodo en el que se insertan: previa llegada a los conquistadores europeos la GTI era “dinámica”; bajo influencia misional de las reducciones jesuíticas y durante el periodo la GTI fue “supeditada”; más tarde con la implantación de la República, la GTI de los pueblos amazónicos varió entre “dinámica”, “supeditada” y “minimizada”; con la Reforma Agraria la GTI pasó a ser “campesinizada” por la acción de los sindicatos agrarios; ya en el periodo actual se fomentó un desarrollismo vertical frente al desarrollo desde dentro (GTI) por lo que las ONGs, en respuesta a aquel, pusieron en marcha la GTI “institucional” y con la implantación de las TCOs la GTI adquirió el carácter “planificado” (además de institucional) debido a que es desde algunas instituciones y organizaciones indígenas donde se elaboran planes -como el Plan de Manejo del cacao silvestre y de motacú en la TCO TIMI (recordemos capítulo 7)- al considerar que son estos los instrumentos más convenientes para comenzar a plantear la GTI y teniendo como ejemplo los planes municipales.

A la hora de implantar una correcta GTI resulta necesario tener en cuenta tanto las características biofísicas y ambientales del territorio como los aspectos socioculturales de los habitantes de dicho espacio territorial. Las acciones de estos serán definidas de forma participativa, incluyente e integral.

Han sido varias las instituciones y las agencias de cooperación internacional (DANINA) las que mayormente han contribuido a poner en marcha la GTI en las TCOs de la región amazónica: en la TCO TIMI en particular fue CIPCA la que apoyó el proceso de GTI. La cuestión que plantea Salgado es si estos planes irán más allá y se alcanzará la GTI y si tales proyectos limitarán la propia GTI de las organizaciones indígenas (2010: 229).

La *multidimensionalidad* a la que me refería al tratar el tema de las autonomías está también presente en la GTI, dado que ésta abarca diversos ámbitos como a continuación se mostrará.

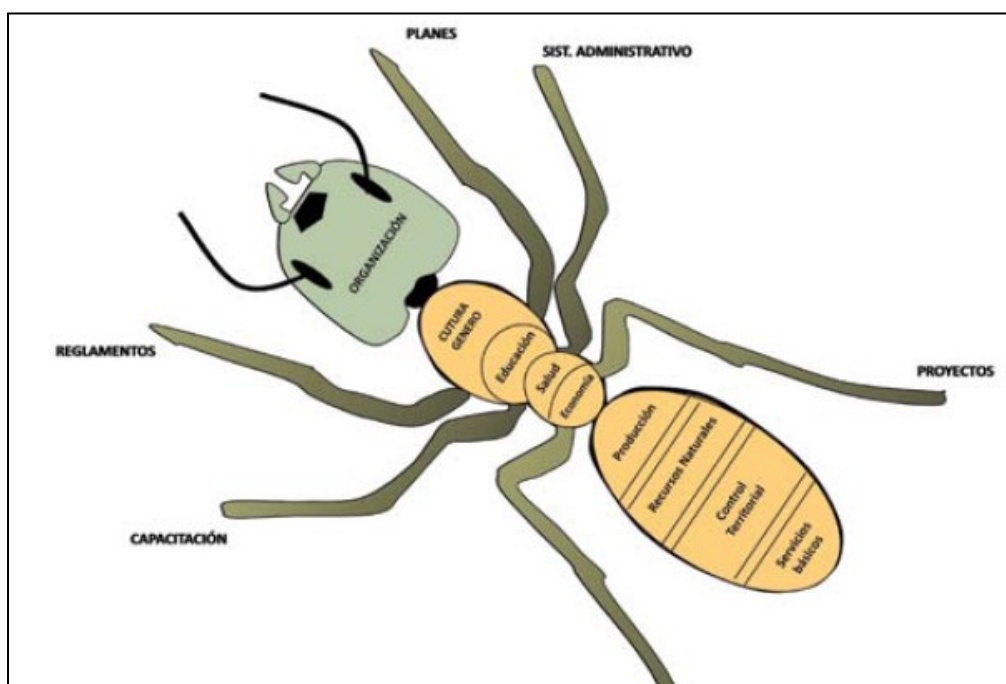
Figura 8. 2. Dimensiones múltiples en la gestión territorial indígena



Fuente: <http://www.cfb.org.bo>

Esas dimensiones aparecen además integradas en un todo, siendo la integralidad otra de las características definitorias de la GTI. Ésta cualidad viene reflejada en la metáfora de la hormiga que fue diseñada por un indígena del pueblo guaraní –José Mani- cuando se le consultó acerca de lo que él consideraba como gestión territorial, habiéndose convertido a día de hoy en el logotipo de la GTI de CIDOB (Salgado, 2010: 230).

Figura 8. 3. Sistema de Gestión Territorial Indígena-CIDOB.



Fuente: *ibíd.*, 246.

La cabeza de la hormiga representa la organización que dirige la GTI; el cuerpo simboliza las líneas de acción en las que se debe trabajar en el territorio: cultura, género, educación, salud, economía, producción, recursos naturales, control territorial y servicios básicos; y las patas serían los procesos que harían que el territorio se transformase con el fin de que, en definitiva, funcione la GTI (*ibíd.*, 230).

8. 3. CONCLUSIONES.

Varios aspectos positivos entraña la perspectiva de la gestión territorial. La adopción de esta perspectiva supone una contribución metodológica para los trabajos enmarcados en disciplinas como las Geografía Indígena. Con ella además, los componentes de la dimensión autonómica, completan los elementos necesarios a la hora de plantear una investigación integral sobre los derechos de los pueblos indígenas.

La GTI proporciona a las autonomías una demostración favorable en cuanto a la discontinuidad territorial se refiere. Y es que la gestión territorial demuestra que esta condición no es un problema para la adopción del estatus autonómico. Ante el dilema de la continuidad o discontinuidad de los territorios indígenas, propone Salgado dos vías a seguir: o bien se adopta una postura más flexible y se reconoce la viabilidad del gobierno autonómico y de la ejecución de la GTI en territorios discontinuos; o por el contrario, se intenta forzar la continuidad territorial (2010: 243-244). Es más que probable que esta última opción constituyera una fuente de conflictos en Mojos o

incluso en la TCO TIMI debido a la existencia de propiedades privadas al interior de los territorios comunales.

Esta es una idea que comparten Albó y Romero quienes reconocen que en los territorios salpicados por propiedades privadas presuntamente éstas deberían acatar las normas establecidas por las propias comunidades indígenas aunque en realidad lo más habitual en tales casos es que se produzca el efecto contrario, es decir que emerjan conflictos entre ambas colectividades (2009: 45).

Las autonomías indígenas suponen una oportunidad única para el libre ejercicio del conjunto de derechos indígenas. Amplía asimismo el ejercicio de libertades y de derechos democráticos en un país plurinacional como, efectivamente, lo es Bolivia. El nuevo régimen autonómico no consiste en negar o rechazar la autoridad del Estado. No es en absoluto una ruptura institucional. Consiste, más bien, en cuestionar o *deconstruir* (Chávez M., 2010) el modelo de Estado centralizado y en adquirir mayores atribuciones a nivel local si bien coordinadas estas con el nivel central del poder. Es por tanto una propuesta de reorganización territorial y política en base a distintos niveles jurisdiccionales cuyas competencias, pese a estar definidas, aún no se han hecho del todo efectivas.

El agotamiento de este sistema y las nuevas propuestas ensayadas por, fundamentalmente, los sectores tradicionalmente olvidados en Bolivia, es analizado por González Pazos (2007).

Como bien señala René Vargas en relación al cambio en las formas organizativas *tradicionales* de los pueblos indígenas en el continente latinoamericano, “*estas organizaciones indígenas, en general, no impugnan la existencia del Estado, sino que buscan su transformación con la posibilidad de construir autonomías dentro del Estado Nacional*” (2003: 439). Este planteamiento se puede perfectamente aplicar al caso boliviano. El régimen autonómico puede ser un instrumento fundamental para que los estados latinoamericanos integren bajo los principios de equidad, justicia social, igualdad y sostenibilidad económica, social y ambiental, la multietnicidad que conforma la gran parte de los países del continente. Sería pues una solución pacífica muy a tener en cuenta a la hora de enfrenarse a los derechos de propiedad tanto de tierra y territorio como de recursos naturales. Podría constituir el reconocimiento definitivo de la existencia de una pluralidad de naciones con unos derechos colectivos determinados.

Una de las consecuencias de las propuestas autonómicas ha sido brillantemente expresada por Martínez y Stefanoni y es la reordenación territorial del país dado que la geografía política de Bolivia se verá reformulada a través de “*los mecanismos de acceso, reparto y ejercicio del poder*” (2005: 31). Un nuevo modelo de Estado se cierne sobre

Bolivia pero habrá que esperar para saber el desenlace de todo este proceso.

Pablo Pacheco se suma a quienes defienden que la descentralización político-administrativa de las autonomías puede intervenir en la gestión de los recursos manejados por los pueblos indígenas, lo cual indirectamente fortalecerá el poder político a escala local (2009: 207). Las demandas locales de manejo autónomo del territorio propician la aparición de programas de gestión territorial. El caso del caco silvestre en el TIMI que presentaba en el capítulo anterior, es sólo un ejemplo de ello.

Será del todo positivo adjudicar los derechos de uso y manejo de recursos a las poblaciones indígenas las cuales podrán definitivamente administrar en base a sus conocimientos la gestión de estos. Y es que ya incidí lo suficiente en el anterior capítulo sobre la importancia de aplicar los conocimientos locales y experiencias indígenas si lo que se pretende es la conservación de los ecosistemas.

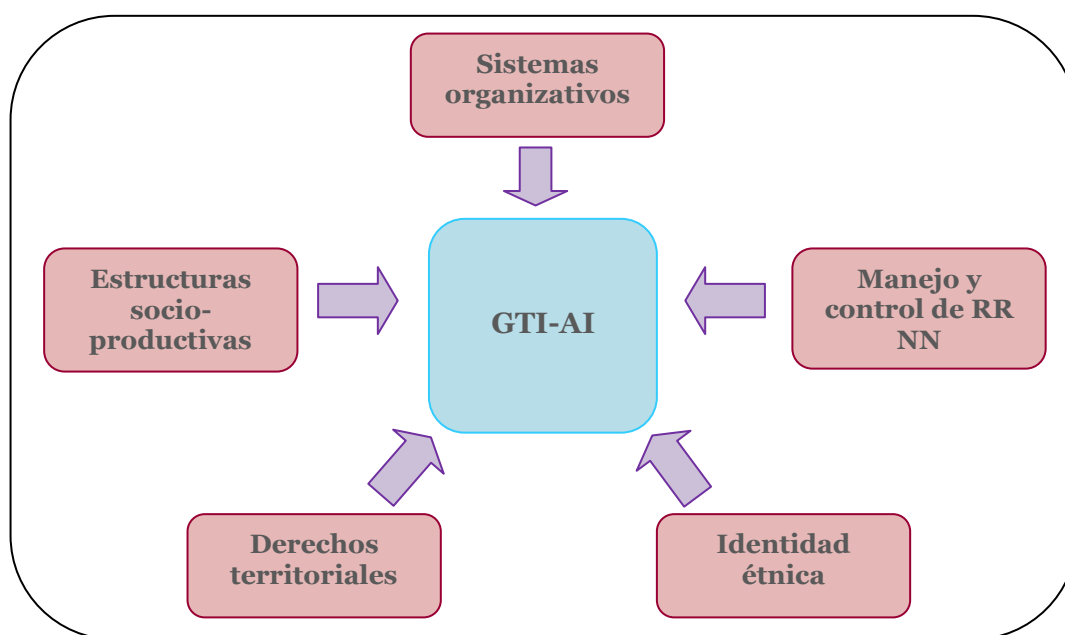
Una vez más, el escaso conocimiento sobre la realidad de los pueblos indígenas del país tiene sus efectos en el día a día de estas poblaciones. Uno de los problemas fundamentales, extrapolable, al conjunto de países latinoamericanos es que se desde los gobiernos se han intentando imponer fórmulas jurisdiccionales propias del Derecho estatal que en absoluto tienen que ver con las que manejaban las poblaciones indígenas. Los ajustes a los que han sido sometidos los textos legales, son un ejemplo de la voluntad de los Estados por hacer cumplir a los pueblos indígenas las leyes específicas de cada país sin importar demasiado la realidad de estos, sus procesos históricos y el modo de incorporación de estos a los estados. García Hierro defiende que para lograr entender las complejas relaciones que los pueblos indígenas establecen con sus territorios, la vía más *“sensata, justa y pluricultural es el dejar al ámbito de la autonomía de cada pueblo la regulación, la protección y el aprovechamiento de sus territorios y los recursos que los integran”* (2004: 305).

Nos enfrentamos a un problema de solapamiento de funciones entre unas y otras instituciones al que hacía referencia anteriormente. La institucionalización del autogobierno se traduce en la libre ejecución de planes de gestión territorial en las nuevas entidades territoriales indígenas. Sin embargo, existe una trampa puesto que al mismo tiempo las autonomías indígenas están insertas en el contexto plurinacional, lo cual le lleva a Salgado a preguntarse: *“¿qué es lo que legalmente se le permite ejecutar y decidir a un pueblo indígena en su territorio?”* (2010: 241). Si, desde el Estado se reconociese plenamente el autogobierno de estos pueblos, no deberían surgir conflictos de competencias o contradicciones en la atribución de facultades. Con todo, es una más de las cuestiones a las que por el momento es imposible dar respuesta.

En Mojos, el nuevo régimen autonómico ofrece la posibilidad de ampliar el poder local de las comunidades indígenas. Es además una gran oportunidad para resolver los

conflictos por la tierra entre los diversos actores locales, que –sabemos– definen el panorama agrario de esta región. La gestión territorial puede optimizar el aprovechamiento de recursos naturales desde un punto de vista económico además de social. Aunque lamentablemente no se puede decir demasiado sobre la GTI en Mojos, la cual es incipiente. Concretamente en la TCO TIMI ésta consiste en tímidos planes de gestión territorial. No ha sido elaborado para esta TCO un Plan de GTI, el cual sí que existe en cambio para el TIM (CIPCA, 2005). Si bien, en buena parte de las comunidades existen estatutos que podrían ser considerados como un plan de GTI dado que regulan la gestión del territorio y la administración de los recursos naturales, entre otros muchos temas. Es más, en base al artículo 292 de la NCPE se les atribuye a las AIOC el derecho a elaborar su propio estatuto “*de acuerdo a sus normas y procedimientos propios*” lo cual les concede automáticamente el derecho a elaborar su propio plan de GTI que aunque venga en buena medida estipulado en los estatutos de cada una de las comunidades, de esta manera se institucionalizaría. Sin embargo, por el momento la TCO TIMI no ha accedido a la AIOC con lo cual no son más que simples conjeturas.

Figura 8.4. Esquema Gestión Territorial Indígena-Autonomía Indígena.



Fuente: elaboración propia.

El territorio entendido como “agente de transformación social” (Bernal, 2006) puede convertirse en un instrumento esencial para el desarrollo local de las comunidades. Para que esto se convierta en una consigna para tal desarrollo no se puede dejar de lado la recuperación del conocimiento local y etnoecológico de las

poblaciones mojeñas, al que se le debe reconocer el valor que encarna. El enfoque a adoptar debe ser desde abajo hacia arriba, desde lo local. Asimismo se consolidará un empoderamiento a nivel comunal y el fortalecimiento de mecanismos de gobernabilidad. Es a nivel local en donde, como bien indica Hernando, “*el fortalecimiento de los lazos sociales y de las pautas de comportamiento colectivo que favorecen la cooperación y la confianza proporciona diferentes beneficios a la comunidad*” (ibíd., 175). Para alcanzar este desarrollo local, la descentralización político-administrativa supone la primera piedra en la construcción de un Estado plurinacional con espacio para el conjunto de naciones étnicas que, con plena facultad de derechos, tomen las riendas de su desarrollo.

Teniendo en cuenta las dificultades que entraña el proceso de adopción de la nueva condición jurídica –AIOC– se puede concluir que los pasos dados en el reconocimiento de los derechos indígenas siguen siendo difusos, ambiguos y limitados, provocado por la debilidad institucional. Como muestra de ello quedan las numerosas normativas legales vinculadas a los derechos de los pueblos indígenas que a lo largo de esta investigación se han venido comentando pero que no han resultado todo lo positivas que se esperaba. Dan la impresión de ser leves intentos sin voluntad de aplicación y cumplimiento efectivo. Continuarán existiendo barreras insalvables si se mantienen las disposiciones actuales marcadas por la ley. La causa principal de ello además de la escasa voluntad demostrada por parte de los gobiernos es la limitada articulación entre las cosmovisiones de los pueblos indígenas, sus formas de vida y sus sistemas de manejo local, sumado a las políticas agrarias que se han venido implementando a lo largo de los años. Si las medidas efectivas no se toman con celeridad, la integridad de los pueblos indígenas puede verse profundamente amenazada.

Son muchas las preguntas que se han planteado en este capítulo. A día de hoy no existe una respuesta satisfactoria para el conjunto de éstas, dado el estado del proceso autonómico y territorial en el que se encuentra sumido Mojos y las comunidades indígenas de esta región. No obstante, sí que podemos formular algunas conclusiones válidas de los planteamientos recogidos en este trabajo. A ello dedico entonces el siguiente y último capítulo, el cual cierra la presente tesis.

Conclusiones.

Dado que cada uno de los capítulos cerraba con algunas reflexiones particulares, lo que pretendo en este último es ofrecer una panorámica general relativa al conjunto del trabajo. Tales conclusiones se presentarán en base a un orden cronológico y prestarán especial atención al escenario actual.

El pueblo mojeño-ignaciano –asentado a día de hoy en la región amazónica de Bolivia- como partícipe del mundo global en el que está inmerso, no es ajeno a las dinámicas socioculturales globales que han contribuido a dar forma a una serie de transformaciones graduales que se han producido en diferentes ámbitos -las formas organizativas comunales, la organización territorial y el universo cultural de las comunidades locales- y que corresponde a esta última sección desgarnar. Los indígenas ignacianos son partícipes de las redes comerciales del mercado local, como productores y consumidores; forman parte de organizaciones sociopolíticas locales y regionales, participan activamente en el aparato estatal y ocupan cargos públicos dentro de éste. La realidad que esta población indígena atraviesa en el momento actual denota la participación que como nuevos sujetos políticos desarrollan en la sociedad nacional.

Desde la llegada al gobierno de Evo Morales, las poblaciones indígenas de Bolivia han adquirido un especial protagonismo no sólo en el contexto nacional, sino en la esfera internacional. No obstante, para el caso concreto de los grupos étnicos de la región amazónica es justo precisar que estos comenzaron a reclamar la participación en la arena política del país durante los gobiernos neoliberales instaurados a mediados de los ochenta del siglo pasado. La presión internacional impulsó el “giro multicultural” que en Bolivia estuvo orientado a reconocer la diversidad étnica a través de una serie de reformas legislativas. Sin embargo, las ambigüedades que éstas recogían, impedían dar fin a las desigualdades que enfrentaban a las poblaciones indígenas y a la población blanco-mestiza.

La reforma del texto constitucional del 7 de febrero del 2009, efectuada durante el actual gobierno de Morales, amplía las competencias que en materia jurídica atañen

a los pueblos indígenas al transitar hacia las *Autonomías Indígenas*. Constituye éste un factor más que previsiblemente influirá en las lógicas locales de Mojos.

Desde el momento en que en el año 1994 el Estado boliviano reconoció de manera oficial el estatus jurídico de los pueblos indígenas en la reforma del texto constitucional, la relación de aquellos frente a éste se vio alterada. Dejaron de ser vistos por el conjunto de la sociedad nacional y por las esferas gubernamentales, como entes pasivos para convertirse en sujetos activos y contribuir de manera directa, a través de la participación política, al diseño del nuevo modelo estatal, un nuevo modelo descentralizado basado en las autonomías indígenas.

La usurpación de territorios comunales indígenas acontecida desde la llegada de los colonizadores europeos, puso en marcha un mecanismo de rearticulación al interior de las comunidades mojeño-ignacianas. Nuevas formas organizativas tales como los cabildos indígenas en el periodo misional (siglos XVI y XVII); las subcentrales indígenas en la época contemporánea (últimos decenios del pasado siglo) y los municipios y autonomías indígenas más recientemente (desde el año 2009), surgieron para establecer canales que permitían la transmisión de competencias entre las comunidades locales y el gobierno nacional en el ámbito económico y político fundamentalmente. El reconocimiento constitucional alcanzado principalmente durante el gobierno de Jaime Paz Zamora en la década de los noventa les permitió hacer uso de ciertas estrategias legales contenidas en diversas normativas jurídicas³⁹⁹. El gobierno del actual mandatario Evo Morales, no hizo sino ampliar tales atribuciones dirigidas hacia los pueblos indígenas (aunque las acciones de su gobierno hayan prestado mayor atención a las poblaciones andinas).

Los conflictos por la propiedad de la tierra han sido una constante en la región de Mojos y para entender el alcance y significación de estos nos debemos remontar a la llegada de los invasores europeos. Desde entonces, las poblaciones indígenas han adoptado diferentes estrategias: huida a los bosques, resignación y luchas abiertas durante la época colonial y republicana o movilizaciones pacíficas y uso de instrumentos de la legislación oficial en el momento actual. Los conflictos agrarios en el oriente boliviano son de naturaleza étnica: consisten en pugnas entre grupos sociales - indígenas y *terceros* principalmente- por la apropiación de la tierra y la explotación de los recursos naturales.

³⁹⁹ Ley del Medio Ambiente (1992); Ley de Participación Popular (1994); Ley de Reforma Educativa (1994); reforma de la CPE (1994); Ley Descentralización Administrativa (1995); Ley INRA (1996); Ley Forestal (1996).

No en vano, el hilo conductor de este estudio ha sido los conflictos territoriales surgidos entre ambas colectividades sociales, hasta el punto de que a día de hoy la demanda territorial indígena ha penetrado de tal manera en la agenda nacional que ha posibilitado la participación en la arena política de tales poblaciones. El foco de análisis de tales contactos interétnicos se sitúa en las interacciones de los diversos grupos sociales de Mojos y no en el grupo en sí, sino en la frontera étnica a la que se refería Barth (1976), en los procesos sociales surgidos como consecuencia de las *fricciones étnicas* (Cardoso de Oliveira, 2007) entre indígenas y propietarios privados, teniendo siempre presente que tales grupos étnicos están insertos en una estructura estatal superior pese a que operen en el nivel local (Bailey, 1969) y considerando tales fronteras como vagas, porosas, dinámicas y como resultado en constante reformulación situacional, lo cual ha propiciado la aparición de espacios de diálogo entre ambas colectividades sociales (caso del gobierno municipal de San Ignacio).

La lucha por el reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas, ha generado toda una serie de implicaciones a nivel político, económico y sociocultural entre los habitantes de Mojos, que desglosaré en los siguientes párrafos. Sugiero entonces, considerar al territorio como el elemento principal en torno al que giran los procesos de cambio en las comunidades locales ignacianas que en estas conclusiones me dispongo a comentar.

Las restricciones territoriales, llevadas a cabo tanto por los *terceros* como por el Estado, las cuales han tenido lugar desde el periodo colonial en la región amazónica de Bolivia, explican que a que a día de hoy las comunidades ignacianas posean en términos geográficos, una pequeña porción del territorio que históricamente habían ocupado, una parte residual del *Gran Mojos*, un territorio incompleto y desconectado.

A la luz de los vestigios arqueológicos descubiertos desde la década de los años veinte del siglo pasado por Clark Erickson⁴⁰⁰; aquellos trabajos dirigidos por Kenneth Lee a mediados del mismo siglo y los más recientes descubiertos por Josep Barba, Umberto Lombardi y Jordi Pascual, hemos podido saber que en la época precolonial habitaban en Mojos numerosas poblaciones (*mojos: baures y muchojeones; itonamas, canichanas, movimas, cayuvavas, itenes, pacaguaras, chapacuras y maropas*) todas ellas de origen *arawak*, quienes ocupaban el territorio de manera dispersa. Estas poblaciones practicaban un modelo de manejo territorial particular basado en la construcción de una singular infraestructura hidráulica (canales, terraplenes, lomas y

⁴⁰⁰ Éste trabajó junto a un equipo de arqueólogos de la Universidad de Pennsylvania y el Smithsonian Institute de Estados Unidos.

campos elevados), el cual se ceñía a las constricciones impuestas por las características biogeográficas del paisaje de la llanura mojeña. No exento de dificultad, este periodo ha sido ampliamente estudiado por numerosos investigadores -tanto bolivianos como extranjeros- (D'Alía, 2008; Tormo Sanz, 1967; Block, 1997; Pinto G., 2002; Pinto G., Terceros y Landívar, 2010; Lehm, 1999; Lijerón, 1997; Chávez Suárez, 1986; Eder, 1985) que nos remiten a la existencia de una consolidada organización política a nivel local creada debido a la imperiosa necesidad de manejar el ecosistema de inundación.

Aún habiendo incorporado, los habitantes de la llanura inundable beniana, algunas adaptaciones tecnológicas y medioambientales⁴⁰¹ a sus sistemas de manejo del territorio, queda de manifiesto que continúan desarrollando, en buena medida, un uso y manejo de la tierra similar al practicado por las culturas hidráulicas del periodo precolonial. Un manejo sujeto a las particularidades geográficas de los Llanos de Mojos, sometidos a la inundación al menos durante la mitad del año. Sirva como ejemplo la construcción de la infraestructura que mencionaba anteriormente y la cual continúa cumpliendo las mismas funciones para los trabajos agrícolas.

Las estructuras sociopolíticas de los habitantes del *Gran Mojos* se vieron transformadas bajo la influencia recibida por la orden jesuita desde el siglo XVII, que inexorablemente se intensificó en la época colonial provocando como resultado la disolución, sino desaparición, de buena parte de las costumbres, lenguas⁴⁰² o prácticas religiosas de las poblaciones mojeñas. Dichas alteraciones se hicieron notar en la creación de los cabildos indígenas, en la prédica del evangelio o en la adopción de un calendario litúrgico católico, pero no sólo. Nuevos modos de comportamiento comunal llegaron de la mano de las reducciones jesuíticas: nuevos sistemas de jefaturas indígenas controladas por los misioneros fueron impuestos; se crearon talleres gremiales dedicados al aprendizaje de distintos oficios entre los indígenas –artesanos, herreros, carpinteros, etcétera- para la manufactura de bienes que posteriormente eran exportados; se implementaron nuevos sistemas de cultivo agrícola que provocaron la sedentarización de los grupos étnicos; se restringió la movilidad territorial y se sustituyó la caza por la ganadería con la introducción de reses traídas desde Santa Cruz. Tales factores propiciaron la quiebra parcial de las estructuras locales indígenas. Una consecuencia sustantiva que salta a la vista, es el proceso de etnogénesis que surgió como efecto directo de la agrupación de diferentes parcialidades indígenas en las misiones. Los ignacianos serían sólo unos más del abanico de grupos étnicos recreados, entre los que podemos mencionar a los baures, chimanes, movimas, o yuracarés. En

⁴⁰¹ Por ejemplo nuevas herramientas para el trabajo agrícola o el cultivo de nuevos productos y la diversificación del sistema agrosilvo forestal y pecuario.

⁴⁰² Se impuso una lengua franca al conjunto de parcialidades étnica.

efecto, los religiosos llevaron a cabo un intento de homogeneización de las parcialidades étnicas que habitaban la llanura de Mojos al mismo tiempo que se buscaba marcar una diferenciación interna entre el conjunto de grupos étnicos con el fin de incrementar el control sobre ellos. El resultado de este proceso fue un entramado de diversas identidades que gradualmente se identificarían con el pueblo mojeño.

Es importante destacar también la sustantiva transformación de los modelos socio-productivos, fruto de la sedentarización de la población indígena. Las antiguas parcialidades fueron asentadas en las reducciones misionales, quedando sujetas mediante el “pacto reduccional”⁴⁰³ al gobierno local de cada una de éstas que a su vez regulaba los trabajos colectivos en su jurisdicción. Pero todavía más significativo para los grupos étnicos fue la introducción en las misiones del ganado bovino por parte de los padres jesuitas a partir de los últimos años del siglo XVII: hecho de crucial trascendencia en la región dado que desdibujó el paisaje mojeño al reducir progresivamente las zonas de bosque y consecuentemente ampliar la superficie que ocupaba la sabana. Ello acarrió la pérdida de niveles de biodiversidad y la limitación del acceso a los recursos naturales sobre los que las familias indígenas sustentaban su reproducción.

Las medidas económicas adoptadas bajo el mandato de la corona de España, a partir del siglo XVIII, se consolidaron con la implantación de la administración republicana en el año 1809. Desde entonces Bolivia pujó por hacerse hueco en el mercado internacional a través de la exportación de materias primas. Sea como fuere, una vez más las poblaciones indígenas de la Amazonía boliviana sufrieron toda una serie de consecuencias expuestas a continuación, desde el momento en que el Estado, a mediados del siglo XIX propició, mediante su plan de colonización, la migración hacia las tierras bajas de colonos venidos de otras regiones del país (incluso de otros países como Brasil o España).

El decreto de Ballivián en el año 1842, declaraba a todos los habitantes de Mojos como ciudadanos con plenos derechos, entre los que se incluía el derecho a la propiedad privada de la tierra. Sin embargo, para convertirse en propietarios, los indígenas debían pagar un tributo, lo cual les resultó en la mayor parte de los casos inaccesible, dejando vía libre a la compra por parte de otros propietarios privados. Quedó pues en entredicho la política de adjudicación de la ciudadanía a todos los

⁴⁰³ Recordemos que por medio de este acuerdo, los jesuitas se comprometieron a defender a los grupos étnicos de los abusos acometidos por los ejércitos españoles al tiempo que les proporcionaban herramientas de trabajo y bienes de proveniencia europea.

miembros integrantes de la nación republicana. Lo que sucedió por el contrario fue la expropiación de un sinnúmero de propiedades comunales, las cuales pasaron a incorporarse al mercado de tierras. Éstas además eran trabajadas, bajo un régimen de explotación, por manos indígenas a las órdenes de grandes propietarios pertenecientes a la élite económica de la región. Estos procesos provocaron la aparición de cambios drásticos para las sociedades indígenas, entre los que destaca la consolidación de la esclavitud; la restricción del acceso a los territorios comunales; la entrada masiva de colonos a la región amazónica en busca de nuevas tierras para su explotación, así como la perpetuidad de la institución de la encomienda que se recreó en la hacienda ganadera característica del Beni. Los indígenas de Mojos se convirtieron en forasteros en sus propias tierras.

A partir de comienzos del siglo pasado, las comunidades indígenas comenzaron a participar de manera más activa en las actividades orientadas al mercado. Una vez más modificaron sus estrategias económicas: además de cubrir el autoconsumo de la unidad familiar con los cultivos agrícolas, echaban la vista al mercado regional y destinaban parte de su producción a éste.

Una de las fechas que más ha marcado el devenir de la historia contemporánea de Bolivia es 1953, año en el que entró en vigor la Reforma Agraria, resultado de la Revolución Nacional del año anterior puesta en marcha por el *Movimiento Nacionalista Revolucionario* (MNR). El Estado boliviano, inmerso en la ola desarrollista, buscaba ampliar la apertura del mercado de tierras frente a los inversores extranjeros, entre quienes sobresalía los que procedían de los Estados Unidos. A la vez, en el artículo 129 de la *Ley de Reforma Agraria* quedaba estipulada la tutela ejercida por parte del Estado hacia los *grupos selvícolas*. Considerando que estos suponían un freno al desarrollo capitalista del país y con el objetivo de lograr su integración en la nación, se concedió prioridad a la condición de clase (campesina) por encima de la condición étnica. En el oriente boliviano, la desposesión territorial efectuada por la administración estatal, consolidó el latifundio y las haciendas ganaderas. Bajo el paradigmático lema de la “tierra para quien la trabaja”, los indígenas comenzaron a desafiar más abiertamente las presunciones de estatismo e inmovilidad que se adjudicaban a la condición identitaria en el país. A partir de este momento se estableció una clara distinción entre la identidad étnica y la identificación étnica, adquiriendo esta última categoría un claro carácter instrumental en la acción política de los grupos indígenas.

De forma paralela a la ocupación territorial que acarreó la implantación de los programas de colonización de tierras en el oriente boliviano a mediados del siglo XX, se

vio incrementado el proceso de desposesión de territorios comunales indígenas. Sabemos que las dotaciones de tierras -practicadas principalmente por los gobiernos militares de Hugo Banzer (1971-1978) y de García Mesa (1980-1981), tras las que algunas familias del oriente boliviano se vieron enormemente beneficiadas (véase **cuadro 5. 9**)- propiciaron la explotación masiva de los bosques de la Amazonía boliviana, los cuales suponían el sustento de cientos de familias indígenas. Como resultado de tal expropiación, las demandas por el reconocimiento territorial pasaron a ocupar desde la década de los años ochenta, un lugar central en las reivindicaciones de un incipiente movimiento indígena que comenzaba a organizarse en el oriente boliviano desde el nivel local.

Las tierras bajas vivían tiempos de gran convulsión política y social a medida que los pueblos indígenas adquirían mayor visibilidad en la esfera pública del país a raíz de las movilizaciones de protesta efectuadas por estos. Una vez más el orden político del país experimentó algunas alteraciones a nivel nacional con la aprobación de una legislación que incluía por primera vez el reconocimiento de derechos colectivos de los pueblos indígenas, tales como el derecho a la autodeterminación, a la gestión del territorio, a la autonomía política, a ser consultados en caso de intervención en sus territorios, etcétera. El hecho más relevante en todo este contexto sería la entrada en vigor en el año 1996 de la ley 1715, más comúnmente conocida como *ley INRA* (parte del programa de ajuste estructural de los gobiernos neoliberales), la cual admitía la demanda de *Tierra Comunitaria de Origen*. Lo más significativo fue que como requisito principal para todo grupo indígena que así lo solicitase, éste debía autoidentificarse como tal⁴⁰⁴. Se requería por consiguiente, una legitimidad histórico-cultural que justificaba la demanda de espacios territoriales. Quedaba, de esta manera, inaugurado un proceso caracterizado por el resurgimiento de la identidad étnica.

Sin desviar la atención de estas cuestiones, cabe afirmar que en respuesta a las directrices marcadas por los órganos de los sucesivos gobiernos, la identidad étnica del pueblo mojeño-ignaciano se ha ido transformando con la intención de aprovechar la coyuntura sociopolítica nacional y regional. De tal manera que considero pertinente el enfoque procesual y la concepción instrumental de la identidad para este trabajo. Actualmente el pueblo ignaciano se encuentra viviendo un proceso de reafirmación y consolidación de su identidad en el que ésta se repliega sobre sí misma una y otra vez. En efecto, la identidad colectiva aparece inmersa en un proceso histórico de

⁴⁰⁴ Este criterio estaba legitimado por el *Convenio 169* de la OIT, el cual fue ratificado en Bolivia en 1991.

construcción gradual. Un nuevo modelo de reorganización étnica se ha puesto en marcha a partir de las disputas por la ocupación territorial, resultado de la interacción entre procesos internos de las propias comunidades locales y las redes nacionales e incluso transnacionales en las que se insertan. Se produce además un doble proceso entre la reafirmación identitaria por un lado y la reafirmación territorial por otro. La consolidación de los derechos territoriales se ha sustentado sobre el reconocimiento oficial como pueblos indígenas y por consiguiente de una certificación étnica –expedida desde órganos ministeriales-, de aquellos quienes demandaban la titulación de TCOs. Esto explica el hecho de haber abordado con tanto énfasis, el binomio territorio-identidad, dado que ambos elementos aparecen inextricablemente unidos en el contexto mojeño.

Desde el punto de vista político ya se ha puesto de manifiesto el impulso que significó para la articulación del movimiento indígena del oriente boliviano las demandas territoriales. El territorio -entendido en este trabajo como el espacio físico delimitado geográficamente e identificado por la colectividad a través del cual (re)formulan su identidad étnica- ha sido el motor decisivo que ha empujado al movimiento indígena a presentar ante el Estado el conjunto de demandas de derechos colectivos que los ignacianos vienen reclamando desde la década de los años ochenta en adelante a través de acciones políticas entre las que destacan las marchas -acción de protesta colectiva por excelencia de los pueblos indígenas del oriente boliviano- que desde 1990 vienen realizando con asiduidad como acto de reivindicación política.

Un hecho del todo relevante y consecuencia directa de las luchas territoriales, es la participación política de los indígenas mojeños quienes se han convertido en un nuevo actor social y sujeto político tanto a nivel municipal y departamental como nacional, que ha pasado a formar parte de la cultura política del país. En concreto, la población indígena en Mojos ha conseguido incluso la alcaldía, después de haber estado históricamente en manos de la población blanco-mestiza (dos indígenas mojeños se convirtieron en alcaldes municipales de San Ignacio de Mojos: Sixto Bejarano en el año 2004 y Basilio Nolvani en el año 2010, respectivamente).

En virtud de lo explicado en el capítulo 4, Miguel Peña -primer asambleísta mojeño en la Asamblea Constituyente del año 2006- hacía alusión a las discrepancias existentes en el movimiento indígena nacional entre los pueblos amazónicos y aquellos de la región andina (quechua y aymara). Éstas parecieron diluirse tras la conquista de la Presidencia por parte del actual presidente de la República -Evo Morales Ayma-. Sin embargo, a día de hoy se mantienen aún latentes por considerar los indígenas de tierras

bajas que muchas de las políticas indigenistas son diseñadas para hacer cumplir las reivindicaciones de los pueblos *originarios* de las tierras altas, pero principalmente por los distintos enfoques en cuanto a la demanda territorial se refiere⁴⁰⁵.

La inclusión de los indígenas mojeños en el escenario político institucional, les ha llevado incluso a establecer alianzas con otros partidos políticos como ha sido el caso del ADN durante el corto mandato de Bejarano o del MAS en las últimas elecciones⁴⁰⁶. Gracias a dichas alianzas, los indígenas mojeños han podido acceder a los espacios de toma de decisiones, como es el caso de la municipalidad de San Ignacio. Se hallan por tanto, controlando las nuevas estructuras del modelo estatal que por el momento se orienta a un modelo descentralizado basado en las autonomías y de manera singular en las autonomías indígenas, como señalé en el capítulo 8. Buscan con ello contribuir a reformular el modelo de Estado de Bolivia y rediseñar la relación para con éste, desdibujando el mapa político del país en el que los partidos tradicionales se habían atrincherado. El nuevo modelo permite a las poblaciones indígenas conformar una nueva jurisdicción territorial y político-administrativa: la *Autonomía Indígena*, con capacidad para legislar en base a sus sistemas jurídicos. Este modelo camina hacia un Estado inclusivo y pretende por tanto, dar fin a la exclusión de las regiones indígenas, al abrir las puertas al autogobierno de los pueblos y naciones *originarias*.

Efecto de ello ha sido la adquisición de nuevas herramientas que manejar en el ámbito político; un nuevo lenguaje que ha permitido a los indígenas de Mojos construir su propia retórica en base a reformulaciones discursivas, con las que legitimar sus reivindicaciones que, sin embargo adolecen de un reconocimiento efectivo por parte del Estado y consecuente cumplimiento.

El hito histórico que supuso la *Marcha por el Territorio y la Dignidad* de 1990 conformada por los pueblos indígenas del oriente boliviano, demostró que lo indígena en Bolivia no sólo se identifica con lo andino, con lo quechua y aymara. También en las tierras bajas lo étnico desempeña un rol determinante en el diseño de las políticas indigenistas.

Por otro lado, dadas las escasas referencias encontradas en otros trabajos, considero importante dar a conocer el papel desempeñado por las ONGs regionales y

⁴⁰⁵ Sirva como ejemplo el incumplimiento de varios artículos constitucionales por parte del actual gobierno, con respecto al episodio de la construcción de la carretera que atravesará el TIPNIS, en donde además de población mojeña habitan otros pueblos indígenas del oriente boliviano (yuracarés o chimanes).

⁴⁰⁶ En el primer caso fue necesario para obtener la mayoría y poder acceder a la alcaldía de San Ignacio de Mojos; en el segundo: Basilio Nolvani, perteneciente a la asociación departamental de la CPEM-B, se vio obligado a presentarse por el MAS en las listas municipales dado que sólo está permitido hacerlo a través de un partido político.

extranjeras (CIPCA, HOYAM-MOJOS, CEPOIM, CIDDEBENI) que operan en Mojos. Uno de los principales objetivos de éstas es proporcionar a los indígenas de la región alto nivel de capacitación y organización política a través de estrategias, programas y talleres de empoderamiento encaminados a dar a conocer a los comunarios los instrumentos necesarios para poder participar en la esfera política del país.

Las *Autonomías Indígenas* y los programas de *Gestión Territorial Indígena* presumen de ser herramientas efectivas para alcanzar el control del gobierno local y consecuentemente la participación activa de las comunidades en la gestión del mismo. En cuanto a las implicaciones de naturaleza económica, señalar que la explotación de recursos naturales por parte de los *terceros* ha tenido como consecuencia la inserción en las redes comerciales nacionales y la participación en el mercado de tierras del país por parte de la población indígena. No obstante, se da una convivencia entre estrategias de producción local y otras incorporadas en los últimos tiempos, como son el uso de motosierras o tractores. Sin embargo, tal tecnología es prácticamente inalcanzable para las comunidades indígenas por el coste que acarrea, por lo que se ven limitados y lamentan verse obligados a emplear tantas jornadas de trabajo en las labores agrícolas y forestales.

A esto se suma un cambio de los patrones de consumo y de la adopción de una visión mercantil en buena parte ajena a la que era manejada por las comunidades ignacianas hace varias décadas. En este sentido el rol desempeñado por las ONGs ha sido decisivo en cuanto en tanto han sido éstas quienes han elaborado los proyectos encaminados a hacerles partícipes de la vida económica regional⁴⁰⁷. Tiene lugar entonces una re-significación de los saberes locales que se entretajan con prácticas mercantiles que hasta no hace mucho se antojaban extrañas a las suyas propias. Estas prácticas se orientan a la obtención de un beneficio económico a nivel familiar, con el que lograr recursos económicos complementarios capaces de esquivar aquellos episodios que ponen en riesgo la manutención de las unidades familiares, como pueden ser las inundaciones. Los técnicos de tales organizaciones apoyan y ponen en marcha dichos proyectos que son re-apropiados por los comunarios ignacianos en base a su conocimiento *tradicional* y su praxis local. Sería por tanto preferible hablar de conocimiento “híbrido” o “situado” –en los términos de Follér (2002)- el cual es negociado en un contexto definido por relaciones de poder. Hay quienes consideran esto como una pérdida de autonomía económica, o al menos de autosuficiencia. Como cuestionamiento y para defender tal postura se basan en que durante la puesta en

⁴⁰⁷ Ejemplos de esto son: la venta de champú de motacú, el proyecto de la oveja de pelo, de plantación de cacao o el proyecto de cultivo de peces.

marcha de estos proyectos, las ONGs someten a las familias indígenas participantes a un sistema de incentivos económicos, con la finalidad de lograr la continuidad de éstas en tales programas. En el momento en que dichas familias se incorporan de pleno al proyecto, tal sistema de incentivos queda suprimido. Esto ha sucedido sólo en algunos casos, por lo que no es un hecho generalizable. Desde las comunidades ignacianas, se está realizando un esfuerzo importante por conciliar los modelos culturales de la naturaleza⁴⁰⁸ -en los términos de Escobar (2000; 2010b)- con un modelo de desarrollo económico más próximo al sistema neocapitalista. O dicho de otro modo, los indígenas ignacianos participan en dichos proyectos pero lo hacen desde sus propios esquemas de conocimiento mediante la apropiación de los mismos, tratando de evitar la enajenación cultural.

La participación de los comunarios ignacianos en el mercado local de San Ignacio de Mojos, incluso en otros mercados como los de Trinidad -capital de la provincia de Mojos, situada a 90 kilómetros de San Ignacio-, se ha visto incrementada a través de la compra-venta de productos de primera necesidad. Se han visto forzados, por las restricciones territoriales, a vender los productos cultivados en los chacos familiares en tales mercados otorgándoles un valor comercial, del cual carecían y el cual estaba sujeto a las redes de intercambio locales y de reciprocidad comunal.

Con respecto a las actividades económicas *tradicionales* complementarias (caza, pesca, recolección), algunos comunarios nos han relatado de qué manera debido en buena medida a la reducción drástica de los espacios productivos, la frecuencia de su práctica ha mermado considerablemente. En esto tiene mucho que ver el hecho de que las comunidades vean limitado el acceso a superficies más amplias de territorio. Consecuentemente los varones adultos de las familias indígenas han pasado a engrosar las listas de peones que trabajan en las estancias ganaderas, por medio del *empatronamiento*, sistema que fuerza a tales trabajadores a permanecer bajo las órdenes del propietario al verse inmersos en un sistema de endeudamiento que es pagado con la mano de obra. Asimismo, este tipo de trabajo constituye la manera más viable de obtener recursos económicos con los que hacer frente a parte de las necesidades familiares (compra de productos que sólo se encuentran en los mercados locales como jabón, sal, aceite, querosén, pilas, ropa, etcétera) pese a trabajar en condiciones del todo precarias: con salarios que no alcanzan los 3 euros por jornada trabajada de más de 12 horas, sin ningún tipo de seguridad laboral. Por otro lado, los

⁴⁰⁸ Recordemos que este término se refiere a aquellas prácticas ecológicas y culturales locales que algunas sociedades ponen en marcha a la hora de apropiarse de la naturaleza y que se presentan como una alternativa a aquellas más agresivas propias del modelo capitalista.

comunarios se lamentan tanto de la escasez de animales de caza y pesca que se encuentran en su territorio como de la escasez de recursos agrosilvopastoriles. Beatriz Guarena –comunaria de Santa Rita- recuerda que “*antes había hartísimo, uno no tardaba mucho en ir a sacar, y ahora ya poco*” y Esteban Pacema –corregidor de Chontal- lamenta que “*los ichis (los espíritus del bosque) no abastecen*”. También Pedro Añez se preocupa por la situación de la comunidad de Litoral en donde los únicos recursos forestales que pueden extraer son aquellos de los chacos debido a que en los montes apenas queda algo.

A raíz de la escasez de recursos en los territorios comunales del TIMI, los habitantes de éstas decidieron a partir de la última década del siglo XX y a comienzos del siglo XXI, redactar un reglamento con la finalidad de regular el acceso y manejo de los recursos naturales del espacio comunal. Constituye una práctica novedosa por la reciente aplicación. Las restricciones de acceso a espacios territoriales estipuladas en tales estatutos comunales, han implicado indirectamente un incremento de la venta ilegal de recursos naturales. Esta se lleva a cabo por parte de comunarios ignacianos ante los productores autónomos locales -denominados *cuarteros* y *piratas*- efectuada de manera particular, sin cumplir con los límites de aprovechamiento establecidos en cada una de las comunidades. La participación en estas redes comerciales llega a provocar la alienación de los recursos naturales por parte de los ignacianos y de las decisiones que se toman sobre su manejo. La causa de ello es la pérdida del control de las acciones extractivas que tienen lugar en los territorios comunales al facilitar la entrada y la explotación a *terceros*.

Con respecto a las transformaciones sociales, ligadas a los proyectos desarrollados por las ONGs mencionadas, quiero llamar la atención sobre el reconocimiento entre el conjunto de comunarios del papel de las mujeres. Y es que en estos proyectos la labor realizada por tal colectivo es fundamental, lo cual favorece la visibilidad en las comunidades de las destrezas desempeñadas por éstas, según relata Rosario Cunavi, quien fuera presidenta de la *Organización de las Mujeres de la Subcentral del TIMI*. Al mismo tiempo esto ha hecho que las mujeres se sientan más seguras de sí mismas, más autónomas y más independientes, por lo que es habitual encontrarlas participando activamente en las reuniones de la comunidad, en los proyectos e incluso ocupando cargos, como sucede en la comunidad de Santa Rita, en donde una mujer –Teodora Rojas- pasó a ocupar el puesto de corregidora de la comunidad en el 2008. Los *tradicionales* roles de género que relegaban el papel de la

mujer al cuidado de los hijos y la realización de tareas domésticas, se han visto por tanto, modificados.

En otro orden de cosas, varias causas empujan a los comunarios del TIMI a migrar en busca de una vida mejor. Las restricciones en el acceso a los bosques de la región, la pobreza a la que son conducidas las familias indígenas por la cada vez mayor escasez de recursos, la dificultad de prosperar o la falta de servicios públicos, son sólo algunas de estas causas. La migración puede ser dos tipos. Por un lado una migración intracomunitaria de los ignacianos en el interior de la TCO del TIMI en busca de mejores tierras de cultivo, con mayores posibilidades para la reproducción del grupo familiar. Este tipo es característico de la idiosincrasia de las poblaciones de Mojos: los desplazamientos por el territorio son parte de las prácticas históricas de los habitantes de las tierras bajas. La peculiaridad ahora son las razones que les conducen a ello: además de la búsqueda de recursos naturales debido a la escasez, la razón principal es la privación del acceso a amplias extensiones del territorio, por encontrarse estos ocupados por otros agentes sociales locales, con la consecuente limitación del aprovechamiento de los mismos que de ello se desprende.

Otro tipo de migración es la extracomunitaria. Ésta, que no ha parado de incrementarse desde hace varias décadas, se dirige a varios destinos. En primera instancia a San Ignacio de Mojos y es que es común el traslado de familias que cambian su residencia al núcleo urbano de manera temporal, principalmente en el caso de tener algún familiar allí que les pueda ayudar a comenzar una nueva etapa. Las razones que priman en estos casos es: o bien continuar con una educación superior en dichos núcleos urbanos (entre las familias indígenas que pueden permitirse tal gasto económico) o la búsqueda de trabajo. Otros destinos cada vez más comunes entre los comunarios más jóvenes son Trinidad o incluso Santa Cruz que se sitúan a 90 y 650 kilómetros de San Ignacio, respectivamente.

Sucede que en muchas ocasiones estos jóvenes que conocen un nuevo estilo de vida en la ciudad, optan por quedarse en ella. Lamentablemente, muchos de los que marchan a otras ciudades en busca de oportunidades lo que encuentran son unas condiciones de vida aún más miserables al carecer de recursos. Los menos, parten a otras ciudades de Bolivia, movidos por las mismas causas que los anteriores y pocos son los comunarios ignacianos que se han dirigido a otros países bien sean del continente latinoamericano, bien de los Estados Unidos o Europa (este tipo de migración por el contrario sí se ha dado con frecuencia entre la población blanco-mestiza por contar con mayores recursos económicos para ello). El no retorno de los más jóvenes es un problema que causa preocupaciones entre las generaciones mayores

puesto que son conscientes del riesgo que acarrea para la continuidad cultural de las comunidades ignacianas. Así lo expresa el comunario de Santa Rita: Valeriano Matéñez, al contar que “*si vienen (los jóvenes) es sólo para dar un paseo*”.

Los periodos de largas ausencias en las comunidades causa la reducción de la reciprocidad y cooperación entre los indígenas que habitan en éstas, así como la pérdida de identificación territorial. Cada familia tiende a procurarse su sustento pese a que continúen los trabajos comunales, regulados por los estatutos de cada una de las comunidades, cuando así se requiere.

Algunos hábitos sociales de alto riesgo, tipo el alcoholismo, están viendo incrementado su consumo. Y es que como mencionaba anteriormente, las dificultades de acceso y aprovechamiento de recursos empujan a los comunarios ignacianos a trabajar como peones en las estancias donde asimilan nuevos patrones de comportamiento en las relaciones sociales que establecen con los propietarios de las haciendas. Asimismo, el disponer de recursos monetarios en cantidades que antes no se conocían, les permite a los mojeño-ignacianos acceder con mayor facilidad a algunos productos de consumo, como es el caso del alcohol, que si bien no es ninguna novedad, cuyo consumo ha crecido exponencialmente entre la población ignaciana de las comunidades.

Este tipo de relaciones posee un marcado carácter paternalista (por parte de los estancieros hacia los peones indígenas). Sin embargo, al mismo tiempo se dan conflictos sociales con estos propietarios privados por la evidente ampliación de las estancias ganaderas que cercan con alambradas e impiden a los indígenas acceder a los espacios comunales. Si la tendencia continúa así podrían incluso surgir conflictos entre comunidades en el momento en el que los recursos se vayan viendo cada vez más limitados. También se pueden dar conflictos al interior de las comunidades por los abusos cometidos por parte de algunos comunarios que establecen contactos con *terceros* por la venta de recursos (maderables principalmente). O puede que sea por el excesivo poder adquirido por algunos corregidores –máxima autoridad de las comunidades indígenas mojeñas- que han tomado decisiones de manera unilateral, lo cual ha molestado al resto de comunarios. Al interior de cada una de las comunidades del TIMI se agudiza la desigualdad social entre familias por el acceso a las fuentes de recursos, que bajo la acción de las organizaciones no gubernamentales, cada vez se presenta más diversificada. Las redes comerciales y de intercambio desplegadas frente a comerciantes madereros, repercute en algunos casos en el incremento de estatus económico a nivel interno de las comunidades indígenas.

Paradójicamente, la participación indígena en las redes comerciales de explotación de recursos territoriales, que genera una tendencia al resquebrajamiento paulatino del tejido social en las comunidades, favorece una rearticulación de las organizaciones locales al reconsiderar la ética que mueve a los indígenas de Mojos a regular el uso y manejo de recursos y reorientar sus estrategias de producción en base a ésta. Al mismo tiempo las ONGs locales, han impulsado la reorganización territorial en base a los nuevos modelos de producción diseñados conforme al ordenamiento territorial impulsado por el Estado. Una vez más se produce una hibridación de prácticas locales a partir de la conjugación de diferentes racionalidades.

Debido al estado reciente del proceso autonómico, aún no se puede pronosticar cómo se articularán los nuevos niveles de administración -diseñados por el Estado para la gestión del territorio- con la racionalidad territorial que las comunidades indígenas han incorporado como parte de una estrategia y un programa de acción particular en el proceso de interpelación frente a aquel. Como señalan García Hierro y Surrallés es esencial que los pueblos indígenas involucrados en los procesos de titulación de tierras y territorios indígenas, recuperen la perspectiva que inspiró algunas de las estrategias desplegadas (2004: 13) y que sean conscientes de sus propias lógicas comunitarias de gestión territorial⁴⁰⁹.

A nivel ambiental, reiterar una vez más los impactos en los ecosistemas de Mojos: la pérdida de biodiversidad, la degradación forestal de sus bosques, la erosión de los suelos, la depredación selectiva y agotamiento de los recursos maderables más atractivos para el mercado internacional, la reducción del número de especies tanto de fauna como de flora, la apertura de caminos que facilita la colonización progresiva de la región e incrementa el impacto ambiental sobre ella, así como las restricciones o reducciones territoriales.

La pérdida progresiva de masa forestal, unida a la escasa capacidad de retención de agua de los suelos de la región, incrementa la vulnerabilidad de éstos, al quedarse desprotegidos frente a las fuertes lluvias del trópico boliviano. La ampliación de la superficie de sabana y la conversión de estas tierras en pastizales para el ganado de propietarios privados, provoca la compactación de los suelos por el pisoteo de aquel, lo cual impide -aún más si cabe- el escaso drenaje y permeabilidad de los mismos. Todo

⁴⁰⁹ Comentan estos autores que para el caso del proceso de titulación de tierras en Perú, al no estar permitida la titulación de superficies extensas, las propiedades comunales se han dividido en territorios menores para cumplir las directrices ministeriales.

ello provoca cambios en el paisaje definido cada vez más por la horizontalidad y la extensión de bajíos en los que se acumula el agua de las lluvias y del desborde de los grandes ríos como el Mamoré, incrementando a su vez el nivel de inundación, con las consecuencias que de ello se traducen.

Queda demostrado que, atendiendo al paisaje de Mojos, se pueden establecer diversas unidades paisajísticas, a las cuales me referí en el capítulo 3, y que cumplen una determinada función para los diferentes grupos sociales que en ellas intervienen. Así las áreas forestales en las que se incluyen los bosques de galería y las islas de bosque, responden a los requerimientos de las comunidades indígenas en cuanto al aprovisionamiento de alimentos para el grupo doméstico. Asimismo, las sabanas dan respuesta a las necesidades del ganado bovino, tan abundante en la región, constituyendo el lugar de los pastizales del ganado de las estancias privadas de Mojos. Uno de los problemas vigentes más acuciantes por el que pugnan ambas colectividades, es la apropiación legítima (aunque no siempre) de la tierra, basada en los derechos de propiedad regulados por la ley INRA. Unos, con la finalidad de limitar el avance ganadero, y otros, con la intención de ampliar su superficie. Se trata de un complejo proceso que alude a una realidad histórica por la que las poblaciones indígenas de Mojos han desplegado diferentes estrategias de resistencia frente a la restricción sucesiva de territorios comunales acontecida en la región por parte de los *terceros*. Como consecuencia, los montes se han visto sometidos a un proceso de conversión en tierras de sabana y bajíos al crecer el número de estancias privadas. Juan de la Cruz -comunario de Monte Grande- menciona que *“lo que eran montes ahora son pampas, se han convertido en potreros”*. Se reduce por tanto el acceso de los indígenas al monte que tantos recursos naturales aportó a las comunidades ignacianas para su desarrollo.

Con respecto a la percepción mojeña local del *paisaje* y al manejo de este concepto, es justo reconocer la inconsistencia de los resultados alcanzados en la tesis. Aunque pretendí llevar a cabo un diagnóstico acerca de la percepción del paisaje en Mojos en base a las unidades paisajísticas que establecí para el mismo, los habitantes de la región no se sentían familiarizados con el uso tal concepto, por lo que desestimé tal propósito. Quizá la explicación se encuentre en los problemas de traducción de los términos conceptuales de una cultura a otra (Velasco y Díaz de Rada, 1997; Cruces, 2004; del Val Cid y García de Cortázar, 2005), que en su momento señalé, los cuales tienen que ver con las dificultades que los estudios sociales encuentran a la hora de describir otra realidad cultural a través de las categorías analíticas creadas en su particular contexto académico y cultural. Y es que en la línea de Wagner (1975), el antropólogo a través de su propia cultura estudia e inventa a las demás. El problema no

fue tanto la traducción conceptual desde el punto de vista léxico, sino más bien la transmisión del mensaje -la formulación de éste en términos de patrimonio paisajístico- el cual no supe transmitir.

En cambio, en lo que se refiere a la cuestión del *territorio* (término con el que por el contrario se sienten del todo identificados), se podría afirmar que los comunarios ignacianos manejan un discurso contestatario (plagado de reivindicaciones de justicia social, derechos de los pueblos indígenas, críticas al neoliberalismo, lucha por la soberanía indígena, etcétera, muchas de ellas compartidas por el MAS). Por lo tanto, dichas reivindicaciones pivotan sobre el reconocimiento de los derechos territoriales, lo cual les ha conducido a incorporar el factor territorio a tales discursos, en donde convergen posicionamientos tanto externos como otros de sus propias experiencias históricas. Se han apropiado de manera muy conveniente de determinada retórica que proviene, principalmente, de convenios y manifiestos internacionales, del movimiento ecologista, de trabajos científicos de la academia, de la Iglesia católica, de sectores pro-indigenistas y de las organizaciones locales que operan entre las comunidades del TIMI. De esta manera se han presentado como “guardianes de la naturaleza”, imagen contemporánea del “buen salvaje” *rousseauuniano*. Esta retórica además se revela saturada de connotaciones reivindicativas sobre las luchas territoriales, la identidad cultural de los pueblos indígenas y la *autenticidad* que afirman les corresponde. En base a ella procuran conferir cierto grado de legitimidad a sus demandas y acciones políticas. No corresponde a este trabajo alimentar el debate acerca de la viabilidad de las convicciones de las demandas lanzadas al Estado por los pueblos indígenas. Si bien, reconozco su legitimidad.

Otro aspecto a comentar en estas conclusiones finales es la toma de conciencia a nivel ambiental que muchos indígenas ignacianos han asumido a raíz del despojo de recursos naturales que, por parte de empresas forestales, tuvo lugar en los bosques de Mojos, sobre todo a partir de los últimos decenios del pasado siglo. Pese a que las prácticas locales de manejo de recursos naturales sean de bajo impacto medioambiental, hemos podido conocer los episodios que tuvieron lugar en lo que respecta a la venta ilegal de recursos maderables que muchos indígenas de Mojos perpetraron a favor de productores autónomos o incluso empresas madereras. En líneas generales, los comunarios ignacianos participan en el control del acceso a los recursos naturales, conscientes de la importancia que estos poseen para la supervivencia de las comunidades. Pese a ello, queda constatado que en esta lógica extractivista, siempre hay quienes continúan llevando a cabo prácticas informales de

explotación de recursos forestales. Frente a estos, el conjunto de la comunidad establece mecanismos de control con la finalidad de corregir tales acciones.

En relación con las prácticas culturales, el problema de mayor envergadura es la desaparición parcial de conocimientos y prácticas locales mojeño-ignacianas⁴¹⁰. La transmisión intergeneracional no está garantizada y la oralidad va quedando relegada a un segundo plano al verse desplazada por la redacción de los estatutos comunales. En un nivel superior supondría la disolución del denominado *conocimiento ecológico tradicional* (*Traditional Ecological Knowledge*: TEK, Grayson, 2004) basado en un aprovechamiento de los recursos, establecido en virtud de las necesidades del grupo doméstico y que a día de hoy ha sido incorporado en los programas de *Gestión Territorial Indígena* (GTI) que apenas comienzan a ponerse en marcha. A través de estos lo que se pretenden es incorporar al manejo territorial las prácticas ecológicas, culturales y sociales de los grupos locales.

Algunos ejemplos relacionados con la pérdida paulatina de los conocimientos indígenas, son el detrimento de la medicina local que poco a poco se ve desbancada por la farmacopea industrial, pese a que ambas coexistan en mayor o menor medida dando lugar a un diálogo de saberes que no tienen porqué ser incompatibles. O el uso de la lengua nativa: en los últimos años los idiomas indígenas están siendo recuperados por el *Centro de Educación de Pueblos Originarios e Indígenas de Mojos*. Aún con los esfuerzos de esta institución educativa, a día de hoy son los menos que hablan la lengua ignaciana a causa de la estigmatización a la que fueron sometidos los indígenas en Bolivia hasta los últimos decenios del pasado siglo. En el momento actual la realidad es otra. Desde el gobierno central de Evo Morales, se han realizado esfuerzos por reconocer, recuperar y fomentar el uso de las lenguas y dialectos indígenas. Así lo recoge la *Nueva Constitución Política del Estado* que insta a implantar programas de aprendizaje en las lenguas de los pueblos indígenas incluso en la educación universitaria (artículo 95), lo cual supone un cambio drástico frente a periodos anteriores. Estos hechos nos sugieren el empeño del gobierno boliviano por recuperar aquellos “trazos culturales” (Grünewald, 1999: 158) que consideran más fuertes a la hora de presentar su identidad indígena.

Para el caso del pueblo ignaciano me atrevo a decir que su nivel de incorporación de elementos culturales ajenos es elevado. Puede que el motivo principal sea la cercanía de muchas de sus comunidades a San Ignacio y es que cuanto más nos alejamos de este

⁴¹⁰ Podría ser que la puesta por escrito de los mencionados estatutos comunales, sea un intento de sistematizar tales saberes.

núcleo municipal, menos evidente se vuelve. Esto debe ser visto como un factor potenciador de las reconfiguraciones culturales de las sociedades. Cuestionaba al comienzo de la investigación la condición de estatismo que se ha otorgado en innumerables ocasiones a las sociedades indígenas. Lejos de la realidad, la adopción de prácticas culturales externas hace que se pongan en marcha los motores de desarrollo cultural que llenan de contenido a tales sociedades, al mismo tiempo que se consolidan prácticas locales culturales.

Relacionado con las actividades económico-productivas, añadir que la mayor parte de éstas, como ocurre con la caza, la pesca o la recolección, son al mismo tiempo actividades culturales y simbólicas o espirituales dado que su realización entraña el despliegue de todo un dispositivo de sistema de creencias que no pueden dejar de ser consideradas de ninguna manera. La componente cultural de estas prácticas locales adquiere enorme relevancia y demuestra una vez más la dinámica relacional y la interrelación en un mismo plano de la cultura y la naturaleza.

Otro aspecto a comentar tiene que ver con la elaboración de objetos artesanales como son las hamacas, cestos, mantelería y los utensilios que se utilizan a diario en las viviendas familiares, así como los instrumentos musicales. Todo este conjunto de artefactos se elabora a partir de los recursos maderales de las tierras de Mojos. No obstante, la dificultad del acceso a estos o incluso la imposibilidad del aprovechamiento debido a la desaparición de muchos de ellos, imposibilita su fabricación. Nicolás Noé, con respecto a esta idea explica que por ejemplo la gaveta (especie de *bañador* o barreño) que los comunarios utilizan actualmente, están fabricados de plástico y se compran en el mercado local de San Ignacio al escasear las maderas que antes se utilizaban en su construcción.

Dicho esto sólo me queda dar cierre a este trabajo haciendo hincapié en el doble proceso de reapropiación que ha tenido, y tiene lugar en Mojos, por parte de los indígenas. Por un lado, la reapropiación de los espacios geográficos o del territorio y, por otro lado, la reapropiación de las identidades étnicas *originarias*. La intromisión de *terceros* y las expropiaciones territoriales acontecidas en los territorios habitados por poblaciones indígenas en Mojos, no son sino una de las causas subyacentes del proceso histórico que conforma las dinámicas socioterritoriales de ocupación y (re)apropiación del espacio, en las que los grupos humanos de la región se han visto envueltos y que se remonta a cientos de años atrás. Por eso, si queremos comprender la complejidad social de Mojos debe ser analizada por tanto, desde una perspectiva histórica para entender el

surgimiento de una nueva sociedad reformulada en base a las circunstancias coyunturales.

La consolidación de las *Tierras Comunitarias de Origen* que institucionaliza los territorios comunales indígenas, si bien es parte de la artificialidad de estos procesos, es, a día de hoy, la opción más viable para el pueblo ignaciano. Paradójicamente la pérdida de territorio puede dar lugar a la consolidación del mismo. Esta realidad justifica el esfuerzo de las comunidades indígenas por visibilizar aquellos caracteres o “trazos culturales” más enraizados en sus estructuras socio-económicas y culturales así como el accionar aquellos símbolos que consideran contribuyen a potenciar la indianidad de la colectividad. La autoidentificación o *self-description* les conduce a presentarse ante la comunidad internacional como una sociedad con un patrimonio cultural propio y por ende a defender el derecho a preservarlo. Ahora bien, los criterios creados por el Estado con el fin de otorgar la denominada “certificación étnica” en base a determinadas preguntas incluidas en un cuestionario cerrado sobre la pertenencia étnica y la autoidentificación, suponen una ficción añadida a los procesos de etnogénesis, tan frecuentes en Bolivia. De esta manera, el Estado sistematiza en un censo, un registro de las identidades étnicas. Tal artificialidad hace que se corra el riesgo de ignorar los mecanismos de reconfiguración identitaria y el consecuente desconocimiento de las emergencias étnicas de muchas poblaciones en Bolivia, las cuales podrían ver negadas su propia condición étnica.

Con respecto a este planteamiento, cabe añadir que desde un punto de vista ontológico, las ciencias sociales se han mostrado reacias a admitir que determinadas formas sociales han sido *inventadas* por sus disciplinas, pese a no haber dudado en cuestionar por ejemplo el papel de las misiones religiosas. Las evidencias empíricas nos ayudan a reconocer que los conceptos aplicados en el análisis de las poblaciones indígenas son creados desde la academia en un momento determinado para un objeto (y sujeto) de estudio particular. Todo esto sugiere una reflexión acerca de nuestro papel como científicos sociales, sobre las abstracciones que nos empeñamos en manejar y que efectivamente poseen un efecto real al ser asumidas por programas públicos. En este sentido retomo las reflexiones que se han hecho eco tanto desde la *Geografía Indígena* como desde las *Metodologías Indígenas* a partir de la primera década del siglo XXI, en los trabajos dedicados a la cuestión indígena. Ambas abogan por avanzar hacia un redimensionamiento de las propias iniciativas diseñadas por las comunidades locales, a las que los trabajos científicos no hagan sino acompañar. Esta propuesta de re-pensar los procesos de investigación exige la adopción de nuevas herramientas de análisis en las que se incluyan las epistemologías indígenas. Las *Cartografías Indígenas* apuestan

asimismo por esta perspectiva y buscan incorporar la visión de las sociedades indígenas para que de esta manera sean ellas mismas las que den forma y otorguen validez a los estudios vigentes con ellas y no sobre ellas. Lo importante es que las comunidades indígenas de Mojos cuenten con medidas efectivas y e instrumentos adecuados para manejar por sí mismas su propio devenir histórico, sin que su capacidad se vea usurpada por imposiciones externas. En este sentido, los mapas podrían convertirse en una herramienta de transformación social.

Asumir una perspectiva local aún sin perder de vista la conexión con los procesos más amplios transcurridos desde hace al menos quinientos años, me ha permitido atender la complejidad del contexto histórico de Mojos entendido éste como un “momento particular” -en términos de Doreen Massey (1994)- en el que confluyen en un escenario espacio-temporal, toda una serie de procesos relacionales.

Al comienzo del trabajo me propuse llenar el vacío existente en cuanto a aquellos estudios que abordan la problemática de los conflictos territoriales y los procesos de reconfiguración identitaria para el caso del pueblo mojeño-ignaciano. Pienso haberlo conseguido en buena parte aunque admito al mismo tiempo la necesidad de mantener una línea de investigación interdisciplinar capaz de dar respuesta a aquellos planteamientos sin resolver y con vistas a abrir nuevos campos de análisis. La convivencia, el diálogo, la interrelación, la complementariedad del conjunto de disciplinas científicas –aún habiendo ocupado la Geografía y la Antropología un lugar central en mi caso- creo que pueden aportar un enfoque analítico-descriptivo oportuno con miras a ampliar el catálogo de este tipo de trabajos. Y retomando las reflexiones planteadas unas líneas más arriba, cabría añadir que se hace del todo necesaria la plena participación de la población mojeño-ignaciana en las investigaciones sociales, para que de esta manera sea ella misma quien acredite los procesos sociales en los que se desenvuelve. Por eso es tan necesario que el diálogo, a parte de darse entre disciplinas científicas, se dé en otra dirección: entre éstas y los propios sujetos sociales de la investigación: los mojeños, en una relación dialógica asentada sobre el equilibrio entre las partes con el fin de que éstas, desde sus propios universos culturales se complementen y se sirvan de manera recíproca.

En la década de los años setenta y ochenta de siglo pasado era común que desde las ciencias sociales –la Antropología fundamentalmente- se realizaran trabajos que actuaron como plataforma reivindicativa de la emancipación de los pueblos indígenas de América Latina y de denuncia de los proyectos colonialistas a las que estos eran sometidos. A día de hoy y para el caso del pueblo mojeño-ignaciano, creo que esta fase está superada. Desde las oficinas de la alcaldía de San Ignacio, los habitantes indígenas

de Mojos han tomado las riendas de su historia. También desde sus comunidades. Puede que los mojeño-ignacianos no necesiten por más tiempo a la academia. Pero la academia sí que necesita poner en evidencia y dar cobertura desde un enfoque crítico a las relaciones asimétricas, de poder, que subordinan a unos grupos sociales frente a los que se muestran como hegemónicos, para contribuir a generar cambios sociales.

A tenor de todo lo dicho hasta ahora, queda justificada para los pueblos indígenas de Bolivia, en nuestro caso particular el pueblo mojeño-ignaciano, la lucha territorial sustentada en la necesidad de restitución de los territorios que consideran *originarios* para mantener su integridad cultural. Sólo de esta manera ven posible les sea resarcida la deuda histórica contraída con el Estado boliviano. A día de hoy no se ha resuelto la incógnita acerca del experimento sociopolítico que supone el modelo estatal descentralizado en Bolivia. No tenemos certeza de que sea el más idóneo para alcanzar el proyecto inclusivo que se pretende conseguir desde las más altas esferas del gobierno. El veredicto de toda esta situación corresponde expresarlo a éste último, a quien los pueblos indígenas del oriente boliviano presionan con vehemencia para que reoriente sus esfuerzos hacia el reconocimiento de los derechos colectivos (fundamentalmente territoriales) de las poblaciones étnicas, para que la utopía anhelada por éstas se convierta algún día en realidad.

Conclusions.

Given that each chapter closed with some concluding reflections, what I intend in this last section is to present an overview of the whole work in a chronological order although my intention is to pay more attention to the current scene.

Social tendencies from the global world are promoting gradual transformations -- new patterns of territorial organization and new cultural practices in local communities-- over the *Mojeño-Ignaciano* indigenous people settled in the Bolivian Amazon,. This indigenous population is participating in a local commercial network, as producers and consumers; they are part of local and regional socio-political organizations, and participate actively in the governmental system, occupying public positions. The reality that the indigenous population is currently going through denotes that they can be considered as new political subjects within the national society of Bolivia.

Since the instauration of Evo Morales's government, Bolivian indigenous people have acquired a special importance not only at the national context but also in the international scene. However, for the specific case of Amazonian ethnic groups , is fair to point out that they began to claim participation in the political arena of the country during neoliberal governments, in the mid-eighties of last century. International pressure promoted the "multicultural turn" which in Bolivia was designed to recognize the ethnic diversity through legislative reforms. Despite of their ambiguities, those laws prevented to end the unequal situation between indigenous peoples and *white-mestizo* population.

The constitutional reform in 2009, made by the last government, expands the indigenous powers through a new legal jurisdiction called: *Indigenous Autonomies*. This is a factor that could influence over the local logics in Mojos.

Since 1994, when the Bolivian government officially recognized the legal status of indigenous peoples the relationship with them was altered. Indigenous peoples ceased to be considered by the whole of society and governmental spheres as passive actors,

and began to participate actively in the design of the new State model, a decentralized one.

The usurpation of indigenous communal lands, which has been occurring since the arrival of European settlers, launched a process of rearticulation within *Mojeño-Ignaciano* communities. New organizational models such as *cabildos indigenales* during the missionary period (XVI and XVII centuries); the indigenous *Subcentrales* in contemporary times (last decades of the last century) and *Autonomías Indígenas* and indigenous municipalities more recently (since 2009), rose up to establish channels that allowed the transfer of some powers between the national government and local communities principally in both the economic and the political field.

Constitutional recognition achieved mainly during the government of Jaime Paz Zamora in the nineties in the 20th enabled indigenous peoples to use certain legal strategies¹. The current government of Evo Morales increased attributions for them (although the actions of his government have paid more attention to Andean populations).

Conflicts over land ownership have been a constant in the region of Mojos and to understand their scope and significance, we must go back to the arrival of the European invaders. Since then, indigenous peoples have adopted different strategies: flight into the woods, resignation and struggles during the colonial and republican period; or peaceful demonstrations and the use of instruments of formal legislation at the present. Agrarian conflicts in eastern Bolivia are part of ethnic conflicts between social groups – indigenous and *third parties* mainly- for the appropriation of land and the exploitation of natural resources.

The thread of this study is constituted by territorial conflicts whose importance is demonstrated by the extent whereby current territorial claims have penetrated the national political agenda and has enabled the participation in the political arena of such populations. The analysis of such ethnic contacts is focussed on in the interactions of various social groups of Mojos and not in the group itself, but in the ethnic boundary that Barth (1969) referred to, in the social processes arising as a result of *ethnic friction* (Cardoso de Oliveira, 2007), keeping in mind that these ethnic groups are embedded in a wider State structure despite they operate at the local level (Bailey, 1969) and considering such boundaries as vague, porous, and dynamic, resulting in a situational constant reformulation, which has led to the emergence of spaces for the dialogue

¹ *Medio Ambiente Law* (1992); *Participación Popular Law* (1994); *Reforma Educativa Law* (1994); reform of *Constitution* (1994); *Descentralización Administrativa Law* (1995); *Ley INRA* (1996) and *Forestal Law* (1996).

between those social groups (for example, with the municipal government of San Ignacio).

The struggle for recognition of indigenous land rights has generated a number of political, economic and sociocultural implications among the inhabitants of Mojos, which I will present in the following paragraphs. I propose considering the territory as the main element around which revolves the process of change in local indigenous communities.

The territorial restrictions, which have taken place since colonial times in the Amazon region of Bolivia, is the reason that *Mojeño-Ignaciano* manage to explain that nowadays their communities have in geographical terms a small portion of the territory they had occupied *historically*, an incomplete and disconnected territory within the Gran Mojos,

Due to the archaeological remains discovered not long ago² we know that various peoples, lived in *Mojos* in pre-colonial times (*mojos: baures and muchojeones; itonamas, canichanas, movimas, cayuvavas, itenes, pacaguaras, chapacuras and maropas*) all of them of *Arawak* origin, who occupied the territory in a scattered way. They practiced a particular way of territorial management, based on the construction of an unique hydraulic infrastructure (canals, embankments, mounds and raised fields) subjected to the biogeographical constraints of the *Mojeño* plain landscape. This period has been extensively studied by many researchers (D'Alia, 2008; Tormo Sanz, 1967, Block, 1997; Pinto G., 2002 G. Pinto, Third and Landivar, 2010; Lehm, 1999; Lijerón, 1997; Chavez Suarez, 1986; Eder, 1985, etc.). All of them refer to the existence of a consolidated local political organization which emerged due to the necessity of managing the flooding ecosystem of Mojos.

Even having the inhabitants of the Beni floodplain incorporated some technological and environmental adaptations to their land management systems³, they keep developing certain use and land management similar to that practiced by hydraulic cultures. Example of that is the infrastructure mentioned above which continues to serve the same functions for agricultural work.

Sociopolitical structures of the inhabitants of *Gran Mojos* were transformed under the influence of the Jesuit order since the seventeenth century, which inexorably was intensified during colonial times causing the dissolution of much of the customs,

² The first archeological remains were discovered since the early twenties of the last century by Clark Erickson who worked with other archeologists from Pennsylvania University and the Smithsonian Institute of the United States; latter those works were continued by Kenneth Lee and the most recent discoverings were made by Josep Barba, Jordi Pascual and Umberto Lombardi.

³ New tools for agricultural works, cultivating products or diversified agrarian and forestry systems.

languages⁴ or religion practiced by native peoples. New communal practices were created during this period: new indigenous chiefdom systems controlled by the missionaries were imposed; there were created also trade workshops dedicated to teach to indigenous population various professions (craftsmen, sculptors, carpenters, etc.), for manufacturing goods which were subsequently exported; there were implemented new agricultural cropping systems which led to the settling of ethnic groups. The replacement of hunting by cattle raising brought from Santa Cruz contributed to consolidate the ethnic groups settlements and hindered the previous pattern of territorial mobility. These factors led to the reorganization of indigenous local structures.

A substantive result was the process of *ethnogenesis* that arose as a direct effect of the grouping of different indigenous peoples in Jesuit missions. The *Mojeño-Ignaciano* indigenous people were one of those ethnically recreated groups. In effect, the priests tried to homogenize and to differentiate internally them in order to increase their control. The result of this process was a patchwork of different identities that gradually arose among the *Mojeño* people.

It is important to highlight the transformation of socio-productive systems, resulting from the settling of the indigenous population in mission reductions through the *pacto reduccional*⁵. But even more significant for the indigenous populations was the introduction of cattle by the Jesuits since the last years of the seventeenth century: a crucial fact in the region which blurred the Mojos landscape, reducing progressively forests areas and increasing consequently the savannas. This led to the loss of biodiversity and limited the access to natural resources from which indigenous families sustained their reproduction.

The economic measures taken under the mandate of the Spanish crown, since the eighteenth century, were consolidated with the establishment of the Republican administration in 1809. Since then, Bolivia tries to participate in the international market through the export of raw materials. Once again indigenous populations of Bolivian Amazon suffered a number of consequences described below. They were caused by State plans for the colonization of the lowlands, in the mid-nineteenth century, which pushed the migration of settlers coming from other regions of the country (even from other countries such as Brazil or Spain).

In 1842, the *Ballivián Decree*, declared everyone in Mojos as citizens with full rights, including the right to private ownership of land. However, indigenous people

⁴ A *lingua franca* was imposed to the ethnic groups of Mojos.

⁵ Through this pact, the priests protected indigenous populations against the abuses committed by Spanish armies meanwhile provide those tools and resources from Europe.

had to pay a tax to become owners, which they found in most cases impossible, allowing the purchase by other private owners.

What happened instead was the expropriation of many communal properties, which were incorporated into the land market and were laboured by indigenous workers under an exploitation system managed by landowners belonging to the regional economic elite. These processes led to important changes for indigenous societies: essentially the consolidation of slavery, the restriction of access to communal lands, the influx of settlers into the Amazon region in search of new lands for exploitation and the perpetuity of the institution of *encomienda* which was recreated in the cattle ranches of Beni. The indigenous peoples of Mojos became strangers in their own land.

Early in the last century, indigenous communities began to participate more actively in market-oriented activities. Once again they modified their economic strategies: besides consuming in the household part of their agricultural crops, they assigned other part of that production to the regional market. .

One of the most important dates in contemporary Bolivian history is the year of 1953, when became effective the first Agrarian Reform, which took place the previous year and which was leaded by the *Nationalist Revolutionary Movement* (MNR). The Bolivian State, immersed in the development wave, tried to expand the land market to foreign investors, essentially from the United States. At the same time, the Article 129 of the Agrarian Reform Act stipulated the tutelage provided by the State to *grupos selvícolas*. Considering that these represented a burden for capitalist development and in order to achieve their integration into the nation, the priority was given to the class condition (peasant) above ethnicity.

In eastern Bolivia, the territorial dispossession carried out by the State administration, consolidated large estates and ranches. Under the paradigmatic slogan of "land to the tiller", indigenous people began challenging more openly the assumptions of immobility that had been attributed to the identity condition in the country. Since this moment a clear distinction between ethnic identity and ethnic identification was established, becoming the latter category an effective tool in political field for indigenous groups.

Parallel to the territorial occupation which brought the establishment of land settlement programs in eastern Bolivia in the mid-twentieth century, the dispossession of indigenous communal lands increased. The granting of land, essentially practiced by the military governments of Hugo Banzer (1971-1978) and García Mesa (1980-1981), after which some families of eastern Bolivia were greatly benefited (**table 5. 9**) contributed to the massive exploitation of Bolivian Amazon forests, and threatened the

livelihood of hundreds of indigenous families. As a result of such expropriation, since the early eighties, the demands for territorial recognition became the most important claim of an emerging indigenous movement which began being organized in eastern Bolivia.

Bolivian lowlands lived times of great social and political upheaval at the same time that indigenous peoples gained greater visibility in the public sphere of the country as a result of protest demonstrations performed by them. Once again the political order of the country experienced some alterations after the approval of a legislation that included the recognition of collective rights for indigenous peoples.

The most significant fact in this context would be the entry into force in 1996 of the 1715 Act, more commonly known as *INRA Law* (part of the structural adjustment program of neoliberal governments), which admitted the demand for *Tierra Comunitaria de Origen* (TCO). To request for that kind of agrarian property the essential requirement was to demonstrate the ethnic identity based on selfdescription and legitimized by normative texts of multilateral organizations (ILO Convention 169 or UN Declaration on the Indigenous Peoples Rights)⁶. Therefore, it was required a cultural-historical legitimacy to justify the *traditional* occupation of territorial spaces. Thus began a process characterized by the resurgence of ethnic identification.

It can be said that in response to the governmental principles, ethnic identity of the *Mojeño-Ignaciano* people has been transformed to adapt itself to the sociopolitical national and regional context. Therefore, I consider relevant for this work the processual approach and the instrumental conception of identity. Currently they are living a process of reaffirmation and consolidation of their identity in which it folds back on itself again and again. Indeed, collective identity is immersed into a historical process gradually constructed. A new model of ethnic reorganization has emerged by the disputes for territorial occupation, resulting from the interaction between internal processes of local communities and national and even transnational networks in which they are inserted. Ethnic collective identity is redesigned. It also produced a double process between identity and territorial reaffirmation. This explains the fact of having emphatically dealt with the binomial territory-identity, both key elements for this work. The consolidation of land rights has been based on official recognition of indigenous peoples as such and therefore on ethnic certification, issued by ministerial offices, of those who demand the titling of TCO.

From a political point of view it has been already revealed what territorial claims meant for the articulation of the indigenous movement in eastern Bolivia. The territory

⁶ This requirement was legitimate by ILO Convention 169 which was ratified in Bolivia in 1989.

-considered in this work as a geographically defined physical space identified by the indigenous peoples and through which they (re)formulate their ethnic identity, has been the decisive engine that has led the indigenous movement to make claims for collective rights since the early eighties.

The indigenous political participation in Mojos is not only a relevant fact but a direct result of territorial fights. They have become a new social actor and a political subject that has turned out to be part of the political culture of the country. The indigenous population of Mojos has even gained the mayor's office, which had been historically in white-*mestizo* hands (two indigenous of Mojos became mayors of San Ignacio de Mojos: Sixto Bejarano in 2004 and Basilio Nolvani in 2010, respectively).

As I mentioned in the fourth chapter, Miguel Peña –first aassemblyman in the Constituent Assembly in 2006- explained the disagreement between Amazonian peoples and those of the Andes (Quechua and Aymara) in the national indigenous movement. Although those discrepancies seemed to have been blurred after Evo Morales taking power, nowadays those remain latent due to the fact that indigenous peoples of the lowlands consider that many policies are designed to enforce the claims of indigenous populations of the highlands⁷. However the main difference between them is the use of different approaches for territorial claims.

The inclusion of *Mojeño* indigenous people into the political scene, has led them to ally with other political actors: the political parties *Acción Democrática Nacionalista* (ADN) during the short term of office of Bejarano, or *Movimiento al Socialismo* (MAS) in the last election. Through these partnerships, indigenous peoples of Mojos have been able to access to decision making spaces, as it is the case of the municipality of San Ignacio. Therefore they are controlling the new model of State structures which is currently focused on a decentralized paradigm based on autonomy and specifically on *Indigenous Autonomy*. Thereby they seek to contribute to reformulate the Bolivian State model and redesign the relationship with it, transforming a political map of entrenched traditional parties. The new model allows indigenous peoples to set up a new territorial and political jurisdiction: *Indigenous Autonomy* -as I mentioned- able to legislate based on their own legal terms. This model leads to an inclusive State and consequently tries to finish the exclusion of indigenous peoples in the regions and opens the exercise of indigenous self government.

⁷ As example can be mentioned the derogation by the State of some constitutional articles concerning the construction of a road which will go through the TIPNIS, a TCO where many ethnic populations live, who are part of the Mojeño people.

An effect of that has been the incorporation of new tools to manage by themselves within the political field, a new language that has allowed them to perform discursive reformulations to legitimate their claims.

The milestone constituted by the *March for Territory and Dignity*, showed that indigenous peoples in Bolivia does not only exist in the Andean universe (*Quechua* and *Aymara*), but that ethnicity also plays a decisive role in the lowlands.

It is interesting to highlight the role of regional and foreign NGOs (CIPCA, HOYAM-MOJOS, CEPOIM, CIDDEBENI). One of their goals is to provide indigenous people with stronger political empowerment through different strategies, workshops and training programs designed to show to *Mojeño* peoples the necessary tools to participate in the political field of the country.

Indigenous Autonomy and *Indigenous Territorial Management* programs are thought to be effective tools to achieve an active indigenous participation in the control of local government.

Regarding to economic implications, I can conclude that the consequence for *Mojeño-Ignaciano* communities of the exploitation of natural resources has been their inclusion in national commercial networks and the participation in Bolivian land markets. However, there is a coexistence between local strategies of production and others which have been recently incorporated, such as the use of mechanical saws or tractors, although it is difficult for community members the use of such technology due to its high prices and they complain about the wasted time employed in manual agroforestry labor.

There have also been changes related to consumption patterns and the adopting of a commercial vision in which NGOs have played a decisive role. They have developed projects to promote indigenous participation in the regional economy of Mojos.

The management of these resources is a clear example of the re-signification of local knowledge when it is interwoven with market practices. These practices are aimed to improve the income of indigenous families to overcome events that endanger the maintenance of households, such as floods. The technicians of such organizations set up those projects which are re-appropriated by indigenous community members through their local knowledge and praxis. Therefore it would be more desirable to refer to "hybrid" or "located" knowledge -in terms of Follér -according to which is negotiated in a context defined by power relations. Some might consider this as a loss of economic autonomy, or at least as a loss of self-sufficiency. This approach is based on the way these projects are implemented: families are subjected to a system of economic incentives in order to ensure the continuity in such programs. At the moment in which these families are fully incorporated, that system is eliminated. This occurs only in

some cases, so it cannot be generalized. It seems that *Mojeño-Ignaciano* communities are making an effort to reconcile cultural models of nature -in terms of Escobar (2000, 2010b)- with an economic development model closer to a neo-capitalist system. Therefore, some *Mojeño-Ignaciano* indigenous participate in such projects but they do so with their own knowledge schemes through the appropriation of those projects, trying to avoid cultural alienation.

The indigenous participation in local markets of San Ignacio de Mojos or Trinidad (even in Santa Cruz de la Sierra) has increased. They have been forced, because of territorial restrictions, to sell in such markets products grown on family gardens, giving them a commercial value, which they lacked before and which was subject to local exchange networks and communal reciprocity.

Due to territorial reduction there has been a decrease in the frequency in the practice of complementary *traditional* economic activities (hunting, fishing, gathering). The limited access to larger areas of territory lead indigenous people to work as farm workers in cattle ranches, through the *empatronamiento* (debt bondage): system that keeps them in those ranches in precarious conditions and forces them to pay debts with their labor. It is the easiest way to get monetary resources in order to face the family needs. In addition, community members complain about the shortage in their territory of both forest and animal resources. Beatriz Guarena -member of Santa Rita's community- remembers that "*there used to be so much (natural resources), no one took a long time to get, and now little*" and Esteban Pacema -corregidor of Chontal's community- complains: "*the ichis (forest spirits) do not supply*". Pedro Añez also worries about the situation of the community of Littoral where the only forest resources that can be obtained are those of family gardens because in the woodlands remain very little.

Due to the shortage of natural resources, some years ago *Mojeño-Ignaciano* communities decided to enact community-laws in order to regulate the access and management of natural resources in communal space. However, the restrictions on access to territorial areas -specified in these statutes-, have indirectly entailed the increase the illegal sale of natural resources. It is made through procedures beyond the control of the communities. This exchange is established between the community members and *cuarteros* or *pirates*. Participation in these trade networks can provoke the banning of the involved individuals from management of natural resources.

I would like to draw attention to the recognition of the role of women among community members in the context to social transformations linked to projects developed by the NGOs,. In these projects the work done by women is essential. It

contributes to increase the skills acquired by them and their visibility, as told by Rosario Cunavi, who was president of the Organization of Women of the *Subcentral* TIMI. At the same time, these activities have made women feel more confident, autonomous and independent. Consequently it is usual to find them participating actively in community meetings, projects and even holding political positions as in the community of Santa Rita where Theodora Rojas is occupying the post of *corregidora*, since 2008. Consequently, *traditional* gender roles have been modified.

Several reasons are pushing TIMI community members to migrate in search of a better life. The increasing scarcity of resources that lead them to poverty, the difficulty of success or the failure of public services, are just some examples. There are two types of migration: intracommunal migration within communal territory of TIMI to seek better areas with greater possibilities for the household reproduction. This type is characteristic of the idiosyncrasy of Mojos population: movements over the territory are part of historical practices of the lowlands population. Another kind of migration is the extracommunal one. This one, which is increasing lately, is aimed to various destinations: to San Ignacio de Mojos (it is very common that families move temporarily to this city, mainly in the case of having a relative there who can help them to get started; Trinidad or Santa Cruz de la Sierra, 90 and 650 kilometers far away, respectively where younger people prefer to move. The reason that prevails in these cases is to continue higher education –for the families that can afford it- or to look for a job.

These young people after getting used to the urban lifestyle usually prefer to stay in these cities. Unfortunately many of those who go to other cities searching for better opportunities just find more miserable living conditions. Fewer people depart to other Bolivian cities such as La Paz. Not many community members have crossed borders towards other Latin American countries or even less to U.S. or Europe where white-*mestiza* population, with greater financial resources, have often migrated.

The non-return of the youngest people is a fact that worries older generations because they consider that this trend could harm their cultural continuity. As told by Valeriano Matéñez, community member of Santa Rita: "*if they (young people) come back is just to take a walk*". The long absence periods lead to the reduction of reciprocity and cooperation among *Mojeño* community members, and to a loss of territorial identification. Each family tends to seek their own livelihood despite communal works which are regulated by community-laws.

Some high-risk habits, such alcoholism, are increasing. The difficulties of access and use of resources push them to work on cattle ranches where they incorporate new

lifestyles and new behaviors shaped by social relations with ranchers. Also, the fact of having money allows them to access more easily to some products as alcohol.

This kind of relationship responds to a paternalistic model. Indigenous peoples remain linked to debt bondage. However, at the same time there are social conflicts because of the expansion of cattle ranches. These are fenced with barbed-wire fence preventing indigenous access to those spaces. If this trend continues like that, internal conflicts between communities may even rise up when resources become increasingly limited. These kinds of conflicts can also occur within communities because of the abuses committed by some community members who have established contact with *thirds parties* for selling natural resources, mainly timber.

Or maybe it is because of the excessive power gained by some communal authorities who have made decisions in a unilateral way, which has upset other community members. Within each community increases the social differentiation among families for the access to resources and sources of income, which are being diversified by NGOs programs. Participation in commercial networks provokes the increasing of economic status.

Paradoxically, the indigenous participation in trade networks of natural resources, which on one hand generates a tendency to gradual breakdown of the social fabric in the communities, on the other hand contributes to rearticulate the local organizations after reconsidering the ethics that moves *Mojeño* people to regulate the use and management of resources and to reorient their production strategies. Meanwhile, local NGOs have driven the territorial reorganization based on new production models designed under the territorial planning approved by the State. Once again, a hybridization of local practices occurs from the conjugation of different rationalities.

Due to recent autonomy process originated in the State, the articulation between the new levels of administration and indigenous rationality cannot be predicted yet. As García Hierro and Surrallés note, is essential that indigenous peoples involved in the process of land titling, regain the perspective which inspired the strategies⁸ used in that process (2004: 13) in order to recover their own communal logic.

From an environmental approach is necessary to reiterate once again the impacts on Mojos' ecosystems: loss of biodiversity, forest degradation, soil erosion, selective predation and exhaustion of the most attractive natural resources, opening of roads, etc.

⁸ These authors mention that for the case of Peruvian land titling process indigenous peoples have divided the communal lands because the titling of large surfaces is not allowed.

The progressive loss of forest cover as well as low water holding capacity of the soils in the region increases those forests' vulnerability, leaving them unprotected from the heavy rains of the Bolivian tropic climate. The conversion of these lands into cattle grazing savannas cause soil compaction which does not allow drainage and permeability. This causes changes in the landscape which is increasingly defined by the horizontal surface and the extent of shallows prone to floods because of rainfall and overflow of rivers such as Mamoré.

It is possible to establish various units related to *Mojeño* landscape, which obey to specific functions for each social group. Therefore forest areas which include the gallery forests and forest islands, respond to the requirements of indigenous communities providing household resources. Savanna responds to the needs of pastures for private cattle ranching the region. The territorial conflicts -between both social groups for the appropriation of land- have been a constant in Mojos: some in order to limit the surface for cattle rising and the others with the intention of expanding it. As a consequence, the forestland has suffered a process of conversion into savanna and shallow areas with the increasing of the number of private ranches. Juan de la Cruz –communal member of Monte Grande, mentions that "*what were before forestland, are now pampas, they have become pastures*". It thus reduces the access to the forestland that provides indigenous communities with natural resources.

Concerning the local perception of the landscape and the management of this concept, is fair to admit the inconsistency of the achieved results. Although I tried to carry out an analysis about perception of the landscape in Mojos, people of the region did not feel familiar with it. Perhaps the explanation is in the problem of translation of the conceptual terms that I pointed out from one culture to another (Velasco and Díaz de Rada, 1997; Cruces, 2004, del Val Cid and García de Cortázar, 2005), which have to do with the difficulties within social studies when describing another cultural reality through the analytical categories created in their particular academic and cultural context. According to Wagner (1975), anthropologists through their own culture, studies and invents others'. The problem was that I could not transmit the message, its formulation in terms of landscape heritage.

By contrast, community members know and use an anti-establishment speech about territorial dynamics, a speech in which converge external positions and other from their own experiences, with criticisms against neo-liberal policies, defending social justice, indigenous rights, and indigenous self-government, positions which are shared with MAS ideology. Therefore, these claims revolve around the recognition of territorial rights, which lead them to incorporate the territory factor into such

discourses, where both external positions and other from their historical experiences converge.

They have incorporated in a very convenient way certain rhetoric that come from multilateral normative texts, environmental movements, scholarly research, the Catholic church, pro-indigenous sectors and local organizations which work within *Mojeño-Ignaciano* communities. They have been presented as themselves as "guardians of nature", the contemporary image of the "noble savage" of Rousseau. This rhetoric also reveals connotations of protest about territorial struggles, cultural identity of indigenous peoples and the authenticity that they claim to, with which they try to achieve a degree of legitimacy for their demands and political actions. This work does not aim to engaging in discussion about the viability of the convictions of these demands. However I acknowledge their legitimacy.

A positive effect in all this context has been the environmental awareness that many *Mojeño-Ignaciano* people have recovered as a result of the dispossession of natural resources that took place in the forests of Mojos, especially since the last decades of the past century. I already spoke about local indigenous knowledge characterized by respect for nature. But we have also known some episodes that took place in regard to the illegal sale of timber. Broadly speaking, community members - involved in the control of the access to natural resources and the management of these- are aware of the importance that these resources have for the communities. Nevertheless, it has been confirmed that in this extractive logic, there are always those who keep making non approved practices of forest resource exploitation. Against this, the whole community establishes mechanisms of control in order to correct these actions.

Certainly the larger problem related to cultural practices is the gradual disappearance of local knowledge. The intergenerational transmission is not guaranteed and the oral tradition is been pushed to the background because of the redaction of communal laws. At a higher level it would mean the dissolution of the *Traditional Ecological Knowledge* (TEK) (Grayson, 2004), based on the use of resources established according to the needs of households and which nowadays have been incorporated into the *Indigenous Land Management* plans. These plans pretend to incorporate local groups' ecological, cultural and social land management practices..

Some examples of the loss of indigenous knowledge, is the practice of local medicine, which gradually is being displaced by industrial pharmacopeia, although both of them coexist resulting in a dialogue of knowledge that are not necessarily incompatible.

Another example is the use of the native language. However, in recent years the indigenous languages are being recovered by the *Education Center for Indigenous Peoples of Mojos*. Even with the efforts of this educational institution, today there are not too many *Mojeño-Ignaciano* native speakers because of the stigma they were subject until the last decades of the century. Currently, the reality is different. The government of Evo Morales has made efforts to recognize, restore and promote the use of indigenous languages. The Constitution of 2009 urges to implement learning programs in indigenous languages, even at the university level (Article 95), which is an important change opposite to previous times. These facts show the Bolivian government's efforts to recover those "cultural traits" (Grünewald, 1999: 158) which are considered stronger in terms of advancing the nation's indigenous identity.

In the *Mojeño-Ignaciano* case, there is a high level of appropriation of external cultural elements. Perhaps the main reason for this is the proximity of many communities to San Ignacio de Mojos. This should be seen as an enhancer factor for cultural reconfigurations. I questioned the static status that has been given countless times to indigenous societies. Far from reality, adopting external cultural practices sets up cultural engines of development that provide diverse contents to such societies, while local cultural practices are consolidated.

Concerning economic and productive activities, I would like to add only one more idea: most of them, such as hunting, fishing and gathering, are both cultural and symbolic or spiritual activities. Their practicing involves an entire belief system that cannot be unconsidered in any way. The cultural component of these local practices acquires great importance and demonstrates once again the relational dynamics and their correlation in the same level of culture and nature.

Another aspect worth commenting has to do with handicrafts (hammocks, baskets, table linens, musical instruments and domestic utensils). This set of artefacts is made from natural resources of Mojos but the difficulty to access them forestland or even the disappearance of many of them, hinder their manufacture. Nicolás Noé, regarding this idea explains that for example "*la gaveta*" (kind of washbowl) used by community members, is bought in the local market of San Ignacio because of scarcity of the proper wood.

To conclude this work I would like to emphasize the dual process of re-appropriation that has taken place in Mojos. On the one hand a re-appropriation of geographic spaces. On the other hand a re-appropriation of ethnic identities. The land expropriations suffered by indigenous populations in Mojos is just one the underlying causes of a historical process of socioterritorial dynamics that consist of space occupation and re-appropriation since hundreds of years ago. Therefore, if we want to

understand the social complexity of Mojos, it must be approached from a historical perspective.

The consolidation of the *Tierras Comunitarias de Origen* has been part of the artificiality of State led processes. In addition, nowadays it is the most viable option for *Mojeño-Ignaciano* people. Surprisingly the loss of territory may lead to the consolidation of it. This fact justifies the effort of indigenous communities for visualizing more rooted cultural features in their socio-economic and cultural structures and the traits that they consider may enhance the collective ethnic identity. Self-description leads them to appear before international community as a society with its own cultural heritage and as such to defend the right to preserve it.

However, the criteria established by the State to provide the so-called "ethnic certification" based on some questions included in a closed questionnaire about ethnicity and self-identification, mean a fiction added to the processes of *ethnogenesis*, so usual in Bolivia. Thus, the State systematizes in a census, a record of ethnic identities. Such artificiality implies the risk of ignoring identity reconfiguration mechanisms and the consequent neglect of the ethnic emergence of many populations in Bolivia which in this way may be denied of their own ethnicity.

Regarding this approach, it should be added that from an ontological perspective, the social sciences have been reluctant to admit that certain social forms have been invented by their disciplines. Empirical evidence helps us to admit that the concepts used in the analysis of indigenous peoples are created in the academia for specific objects of study. This suggests a reflection on our role as social scientists, on the abstractions that we insist on employing which have a real effect when they are assimilated by public programs. For instance I pick reflections on both *Indigenous Geography* and *Indigenous Methodologies* up from scholarly research devoted to indigenous issues. Both advocate going forward with a re-dimensioning of initiatives designed by local communities, which are accompanied by scientists' works. The proposal to rethink the research process requires the adoption of new analytical tools which could include indigenous epistemologies. *Indigenous Cartographies* are also betting on this perspective and seek to incorporate the vision of indigenous societies in order to validate themselves the studies with them and not about them. The important thing is that the indigenous communities of Mojos have effective and appropriate tools to manage by themselves their historical path without seeing their capacity usurped. In this sense, the maps could become a tool for social transformation.

Taking a local perspective, without losing sight of global processes, has allowed me to pay attention to the complexity of the historical context of Mojos, understood as

a "particular time"-in terms of Doreen Massey (1994) where a number of relational processes converge in a spatial-temporal stage.

I decided at the beginning of this work to fill in a gap in scholarly research that analyzes matters referred to territorial conflicts and reconfiguration of identity processes in the case of *Mojeño-Ignaciano* people. I think, that, I have managed to achieve it. At the same time, however, I admit the need of interdisciplinary research capable of responding to some unresolved issues in order to open up new fields of analysis. Coexistence, dialogue, interaction and complementarity of all scientific disciplines –even, as in my case, having held Geography and Anthropology at the center-- can provide an appropriate analytical-descriptive approach in order to expand the range of this kind of works. And picking up the reflections presented a few lines above, one might add that it is entirely necessary for social research, the full participation of *Mojeño-Ignaciano* population in order to give to it the credit of the social processes in which it is involved. Therefore it is so necessary that this dialogue, besides of what might occur between scientific disciplines, be accomplished between those disciplines and the own social subjects of research: the *Mojeño* people, in a dialogical relationship set on the balance between the parties in order to achieve an approach made up from different cultural worlds.

In the decade of the seventies and eighties of the last century there was common for the social sciences –mainly Anthropology – to carry out works which acted as platforms of emancipation for indigenous peoples of Latin America and to denounce colonial projects to which these peoples were submitted. In the case of *Mojeño-Ignaciano* people, I think this phase is overcome. From within the offices of the municipality of San Ignacio, and from inside their communities the indigenous inhabitants of Mojos have taken over their history. Maybe this people no longer need the academia. But the academia does need to highlight from a critical approach the asymmetrical relations of power that subordinate some social groups against those who show themselves as hegemonic, to contribute to generate social changes.

According to what I have aimed to prove in this whole work, the territorial struggle is justified for indigenous peoples, in this case for *Mojeño-Ignaciano* people. It is on the base of the possibility of restitution of those territories needed for maintaining their cultural integrity. Only in this way they consider that the Bolivian State could compensate its historical debt with them.

The outcome of this entire situation will depend on the actions undertaken by the government to whom indigenous peoples of eastern Bolivia vehemently press to refocus its efforts towards the recognition of collective rights -primarily territorial- of the ethnic populations, so that the utopia envisioned by them might be realized one day.

Bibliografía.

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS

- Agnew, J.** (1999) "The New Geographies of Power" en Doreen Massey, John Allen y Phil Sarre (eds.) *Human Geography Today*. Cambridge: Polity Press, pp. 173-193.
- Agnew, J.** (2005) "Space: Place" en Paul Cloke y Ron Johnston (eds.) *Spaces of Geographical thought*. London: Sage, pp. 81-96.
- Agnew, J.** (2006) "Geografía del conocimiento en la política mundial" 2006, en *Tábula Rasa*, Bogotá, n° 4: pp. 49-58.
- Aguilar, C. et al.** (1995) "Ordenamiento territorial y perspectivas de desarrollo departamental del Beni". Serie *Debate Agrario*, n 22. La Paz: ILDIS.
- Aguilera, R.** (2004) *La ganadería del Beni en cifras*. Trinidad: FEGABENI.
- Albert, B.** (2004) "Territorialidad, etnopolítica y desarrollo: A propósito del movimiento indígena en la Amazonía brasileña" en Alexandre Surrallés y Pedro García Hierro (eds.) *Tierra Adentro. Territorio indígena y percepción del entorno*. Copenhague: IWGIA, pp. 221-258.
- Albet i Mas, A.** (2001) "¿Regiones singulares y regiones sin lugares? Reconsiderando el estudio de lo regional y lo local en el contexto de la geografía postmoderna", *Boletín de la A.G.E*, n° 32: pp. 35-52.
- Andaluz, A. et al.** (2007) *Régimen de bosques y tierras forestales*. La Paz: FBDM.
- Andolina, R., Radcliffe, S. y Laurie, N.** (2005) "Gobernabilidad e identidad: indigeneidades transnacionales en Bolivia" en Pablo Dávalos (comp.) *Pueblos indígenas, estado y democracia*. Buenos Aires: CLACSO.
- Andrew, G.** (1992) *Entre la Integridad Cultural y la Asimilación: Conservación de la biodiversidad y su impacto sobre los pueblos indígenas*. Copenhague: IWGIA.
- Albó, X.** (2002) *Pueblo indios en la política*. La Paz: Plural Editores.
- Albó, X.** (2003) "50 años después, emergencia étnica" en John Vargas (coord.) *Proceso agrario en Bolivia y América Latina*. La Paz: Plural Editores; CIDES-UMSA, pp. 321-328.

- Albó, X.** (2008) *Movimientos y poder indígena en Bolivia, Ecuador y Perú*. La Paz: CIPCA.
- Albó, X. y Barrios, F.** (2007) *Por una Bolivia plurinacional e intercultural con autonomías*. La Paz: IDH Bolivia.
- Albó, X. y Romero, C.** (2009) *Autonomías Indígenas en la realidad boliviana y su nueva constitución*. La Paz: Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia.
- Albó, X. y Quispe, V.** (2004) *Quiénes son los indígenas en los gobiernos municipales*. La Paz: CIPCA y Plural.
- Alcina, J.** (1990a) "Introducción" en José Alcina (comp.) *Indianismo e indigenismo en América*. Madrid: Alianza Editorial, pp: 11-17.
- Alcina, J.** (1990b) "El indianismo de Fray Bartolomé de las Casas" en José Alcina (comp.) *Indianismo e indigenismo en América*. Madrid: Alianza Editorial, pp: 34-44.
- Anaya, J.** (2006) "Los derechos de los pueblos indígenas" en Mikel Berraondo (coord.) *Pueblos Indígenas y Derechos Humanos*. Bilbao: Universidad de Deusto, pp. 29- 60.
- Anonymous** (1990) Anuario Indigenista. Vol. XXIX. México D. F.: Instituto Indigenista Interamericano.
- Appadurai, A.** (1996) "Sovereignty without Territoriality: Notes for a Postnational Geography" en Setha M. Low and Denise Lawrence Zúñiga (ed.) *Anthropology of space and place: locating cultures*. Malden, MA: Blackwell Publishing, pp. 337-349.
- Appadurai, A.** (2001 [1996]) "La producción de lo local" en Arjun Appadurai *La modernidad desbordada. Dimensiones culturales de la globalización*. Montevideo: Ed. Trilce, pp. 187-207.
- Arana, E.** (s/f) *Estudio de caso. El ordenamiento Territorial en Bolivia*. La Paz: Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación.
- Ardaya, G.** (2009) *Estado y territorio: la disputa post constitucional*. La Paz: FUNDAPPAC.
- Århem, J.** (1998) "Powers of place: landscape, territory and local belonging in Northwest Amazonia" en Nadia Lovell (ed.) *Locality and belonging*. London: Routledge, pp. 78-102.
- Århem, J.** (2001) "La red cósmica de la alimentación. La interconexión de humanos y naturaleza en el noroeste de la Amazonía" en Philippe Descola y Gísli Pálsson (coord.) *Naturaleza y Sociedad. Perspectivas antropológicas*. México D.F.: Siglo XXI, pp. 214-236.
- Arce, Ó.** (1990) "Del indigenismo a la indianidad: Cincuenta años de indigenismo continental" en José Alcina (comp.) *Indianismo e indigenismo en América*. Madrid: Alianza Editorial, pp: 18-33.

- AIPE** (1996) *Con los pies en la tierra. Reflexiones sobre la ley INRA*. La Paz: AOS-AIPE-TIERRA.
- Augé, M.** (2008) *Los “no lugares”. Espacios del anonimato: una antropología de la modernidad*, Barcelona: Gedisa.
- Ávila, H.** (2006) *El ichini mojeño ha despertado. emergencia de nuevos líderes indígenas mojeños, ante la intolerancia, abusos y atropellos*. Santa Cruz: CEJIS.
- Ávila, H.** (2009) *Nuevas sendas en la milenaria búsqueda del pueblo mojeño: experiencias de su participación político-electoral en Mojos*. Santa Cruz de la Sierra: CEJIS-CPEMB.
- Bailey, F. G.** (1969) *Stratagems and spoils: a social anthropology of politics*. Oxford: Basil Blackwell.
- Balderrama de Moreira, C.** (2003), *Hacia una gestión ambiental participativa y jurídica en Bolivia*. La Paz: LIDEMA.
- Balée, W.** (1989) “The Culture of Amazonian Forests” en Darrel Posey y William Balée (eds.) *Resource Management in Amazonia: Indigenous and Folk Strategies*. Bronx, New York Botanical Garden, pp. 1-21.
- Balée, W.** (1993) Biodiversidade e os Índios Amazônicos en Eduardo Viveiros de Castro (orgs.) *Amazônia. Etnologia e História Indígena*. São Paulo: Núcleo de História Indígena e do Indigenismo da USP: FAPESP, pp. 385-393.
- Balée, W.** (ed.) (1998) *Advances in Historical Ecology*. New York: Columbia University Press, pp. 104-118.
- Balée, W.** (2004) “Diacronich ecotones and anthropogenic landscapes in Amazonia. Contesting the consciousness of conservation” en Kristina Plenderleith (ed.) *Indigenous knowledge and Ethics. A Darrel Posey Reader*. New York: Routledge, pp. 121-132.
- Balza, R.** (2001) *Tierra, territorio y territorialidad indígena*. Santa Cruz de la Sierra: APCOB-SNV-IWGIA.
- Barba, J.** (2003a) “El aparato hídrico de Moxos” en Inés Romero y Elisenda Pastó (coord.) *Moxos: una limnocultura. Cultura y medio natural en la Amazonía boliviana*. Barcelona: CEAM, pp. 21-29.
- Barba, J.** (2003b) “Terraplenes” en Inés Romero y Elisenda Pastó (coord.) *Moxos: una limnocultura. Cultura y medio natural en la Amazonía boliviana*. Barcelona: CEAM, pp. 59-68.
- Barba, J.** (2003c) “Lomas” en Inés Romero y Elisenda Pastó (coord.) *Moxos: una limnocultura. Cultura y medio natural en la Amazonía boliviana*. Barcelona: CEAM, pp. 69-78.

- Barba, J.** (2003d) “Campos elevados” en Inés Romero y Elisenda Pastó (coord.) *Moxos: una limnocultura. Cultura y medio natural en la Amazonía boliviana*. Barcelona: CEAM, pp. 89-92.
- Barba, J.** (2003e) “Canales” en Inés Romero y Elisenda Pastó (coord.) *Moxos: una limnocultura. Cultura y medio natural en la Amazonía boliviana*. Barcelona: CEAM, pp. 79-86.
- Barba, J. y Sánchez, B.** (2009) *Estudios del abastecimiento con agua de lluvia de las pozas de piscicultura en el Beni*. Barcelona: 2009.
- Barnadas, J. y Plaza, M. (2005)** *Mojos: seis relaciones jesuíticas: geografía-etnografía -evangelización, 1670-1763*. Cochabamba: Historia Boliviana.
- Barragán, R.** (2007) “La dinámica de las comunidades y la transmisión de la tierra”: en Fundación TIERRA (ed.) *Los nietos de la Reforma Agraria. Tierra y comunidad en el altiplano de Bolivia*. La Paz: Fundación TIERRA, pp. 27-79.
- Barrantes, R.** (ed.) (2005) *La política forestal en la Amazonía andina. Estudio de casos: Bolivia, Ecuador y Perú*. Lima: Consorcio de Investigación Económica y Social, 2005.
- Barth, F.** (2007 [1976]), “Los grupos étnicos y sus fronteras”, 97-118, en Nuria Fernández (coord.) *Lecturas de etnología: una introducción a la comparación en antropología*. Madrid: UNED, pp. 97-118.
- Bauer, K.** (2009) “On the politics and the possibilities of participatory mapping and GIS: using spatial technologies to study common property and land use change among pastoralists in Central Tibet” en *Cultural Geographies*, 16: pp. 229-252.
- Bazoberry, Ó.** (2004) *Entre el castaño y la hormiguita. Historia de la comunidad Santa María. Provincia Vaca Díez, Amazonía boliviana*. La Paz: CIPCA.
- Bazoberry, Ó.** (2008) *Participación, poder popular y desarrollo: Charagua y Moxos*. La Paz: CIPCA; U-PIEB.
- Berkes, F.** (1989) “Cooperation from the Perspective of Human Ecology” en Fikret Common (ed.) *Property Resources. Ecology and Community-Based Sustainable Development*. London: Belhaven Press, pp. 70-89.
- Bernal, H.** (2006) *Amazonía: Biodiversidad Sostenible*. Bilbao: Universidad del País Vasco.
- Berraondo, M.** (1999) *Los derechos medioambientales de los pueblos indígenas. La situación en la región amazónica*. Quito: ABYA – YALA.
- Berraondo, M.** (2004) “Derecho humano al medio ambiente y pueblos indígenas. Dos derechos con un mismo fin” en Fernando Mariño y Daniel Oliva (eds.) *Avances en la protección de los derechos de los pueblos indígena*. Madrid: Dykinson, pp. 73 – 88.
- Berraondo, M.** (2006) “Tierras y territorios como elementos sustantivos del derecho

humano al medio ambiente” en Mikel Berraondo (coord.) *Pueblos Indígenas y Derechos Humanos*. Bilbao: Universidad de Deusto, pp. 469-487.

Birk, G. (2000) *Dueños del bosque (manejo de los recursos naturales por indígenas chiquitanos de Bolivia)*. Santa Cruz de la Sierra: APCOB – CICOL.

Blaser, M. y de la Cadena, M. (2009) “Introducción” en Revista WAN/RAM, n° 4: pp. 1-9.

Cairo, H. (1997) “Los enfoques de la Geografía Política” en *Espiral*, vol. VII, n° 009. Guadalajara: Universidad de Guadalajara (México), pp. 49-72.

Block, D. (1997) *La cultura reduccional de los llanos de Mojos*. Sucre: Historia boliviana.

Briones, C. (2005) *Cartografías argentinas: políticas indigenistas y formaciones provinciales de alteridad*. Buenos Aires: Antropofagia.

Brito, S. (1998) *Mujeres indígenas protagonistas de la historia*. La Paz: Tijaraipa.

Urioste, M. y Kay, C. (2005) *Latifundios, avasallamientos y autonomías. La reforma agraria inconclusa en el Oriente*. La Paz: FUNDACIÓN TIERRA.

Bojanic, A. (2003) “Lógicas de ocupación territorial en la agricultura y la forestería empresarial en las tierras bajas” en John Vargas (coord.) *Proceso agrario en Bolivia y América Latina*. La Paz: Plural Editores; CIDES-UMSA, pp. 127-135.

Bonfil, G. (1990) “Aculturación e indigenismo: la respuesta india” en José Alcina (comp.) *Indianismo e indigenismo en América*. Madrid: Alianza Editorial, pp: 189-209.

Braun, B. (2008) “Environmental issues: inventive life” en *Progress in Human Geography* 32 (5): pp. 667-679.

Bresler, J. B. (1996) *Human Ecology. Collected Readings*. Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company.

Budowski, G. (1971) “Tropical savanna, a sequence or forest felling and repeated burnings” en Christopher L. Salter *The cultural landscape*. Belmont: Wadsworth Publishing Company, pp. 72-81.

Bunker, S. (1988) *Underdeveloping the Amazon. Extraction, Unequal Exchange and the Failure of Modern State*. Chicago: University of Chicago Press.

Calandra, H. y Salceda, S. (2004) “Amazonía boliviana: arqueología de los Llanos de Mojos” en *Acta Amazónica*, vol. 34 (2): pp. 155-163.

Caudillo, G. A. (2005) *El discurso indio en América Latina*. Jalisco: Universidad de Guadalajara.

Calavia, Ó. (2004) “Mapas carnales. El territorio y la sociedad Yaminawa” en Alexandre Surrallés y Pedro García Hierro (eds.) *Tierra Adentro. Territorio indígena y percepción del entorno*. Copenhague: IWGIA, pp. 121- 135.

- Calavia, Ó.** (2006) “El indio ecológico. Diálogos a través del espejo” *Revista de Occidente*, (298): pp. 27-42.
- CFB – STCP** (2000) *Plan Estratégico para el Desarrollo del Sector Forestal de Bolivia*. Santa Cruz de la Sierra (Bolivia)- Curitiba (Brasil) en www.cfb.org.bo
- CFB** (2007a) *Anuario Estadístico del Sector Forestal de Bolivia*. Santa Cruz de la Sierra en www.cfb.org.bo
- CFB** (2007b) *El sector Forestal en Bolivia*. Sucre en www.cfb.org.bo
- Canal, E.** (2003) “Piscicultura rural con especies nativas: integrando desarrollo y conservación en los Llanos de Mojos” en Inés Romero y Elisenda Pastó (coord.) *Moxos: una limnicultura. Cultura y medio natural en la Amazonía boliviana*. Barcelona: CEAM, pp. 113- 127.
- Canedo, G.** (2008) “La Marcha de Loma Santa a Mojones Rojos” en *Revista Cuarto Intermedio*, n° 87. Cochabamba, pp. 6-19.
- Canedo, G.** (2009) *Una utopía cercada. Las transformaciones del territorio de los grupos indígenas contemporáneos de la amazonía boliviana, en Mojos-Beni*. México D. F.: Ciesas (Tesis de Doctorado).
- Canedo, G.** (2010) “Territorio y Poder: La reivindicación territorial de los indígenas de la amazonía boliviana” en *Revista CUSHO*, vol. 21, n° 1: pp. 9-24.
- Cardoso de Oliveira, R.** (2007 [1976]) *Etnicidad y estructura social*. México D. F.: CIESAS, Universidad Autónoma Metropolitana y Universidad Iberoamericana.
- Carneiro, R.** (1976) “A Theory of the Origin of the State”, en Peter Richerson y James McEvoy (eds.) *Human Ecology. And Environmental Approach*. Massachusetts: Duxbury Press, pp. 239-250
- Carneiro, R.** (1995) “The History of Ecological Interpretation of Amazonia: Does Roosevelt Have It Right?” en Leslie E. Sponsel (ed.) *Indigenous Peoples and the future of Amazonia. An ecological Anthropology of an Endangered World*. Tucson: The University of Arizona Press, 1995, pp. 45-70.
- Carnerio da Cunha, M.** (2009) *Cultura com aspas e outros ensaios*. Cosac Naify. São Paulo: Cosac Naify.
- Casanovas, A.** (2002) *Algo de Mojos*. Mojos: CIPCA.
- Casaús, M.** (2004) “La visibilización de las élites mayas en Guatemala: entre la etnicidad y la ciudadanía” en *Política e Indigenismo*. Madrid, Casa de América, pp. 31-45.
- Casimir M. J.** (1992) “The dimensions of Territoriality: An Introduction” en Michael J. Casimir y Aparna Rao (eds.) *Mobility and Territoriality. Social and Spatial Boundaries among Foragers, Fishers, Pastoralists and Peripatetics*. Providence (USA)-Oxford: Berg Publishers Ltd., pp. 1-26.

- Castells, M.** (1998) *La era de la información: economía, sociedad y cultura. El poder de la identidad*. Vol. II. Madrid: Alianza Editorial.
- Castillo, F.** (2004) *La Amazonía boliviana indígena. Estudio etnohistórico de la economía, la sociedad y a civilización de las selvas bolivianas*. La Paz: CIMA.
- Castree, N.** (1995) "The nature of produced nature: materiality and knowledge construction in Marxism" en *Antipode*, 27: pp. 12-48.
- Castree, N.** (2004) "Differential geographies: place, indigenous rights and 'local' resources" en *Political Geography* 23: pp. 133-167.
- Catoira, C.** (1994) *Nuestra Casa Grande*. Santa Cruz de la Sierra: CIDOB.
- Cea d'Ancona, M.** (1998) *Metodología cuantitativa. Estrategias y técnicas de investigación social*. Madrid: Ed. Síntesis.
- CEAM** (2005) *Les veus de l'Amazònia. Present i futur dels ponles amazònics i el seu entorn*. Barcelona: El Tinter (jornades de debat).
- CEJIS** (2003) *Sistema jurídico indígena. Diagnóstico en comunidades de los pueblos: chiquitano, mojeño-ignaciano y tacana*. Santa Cruz de la Sierra: CEJIS.
- CEJIS** (1997) *Manual ley del SNRA, "La ley n° 1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria, Saneamiento y titulación"*. Santa Cruz de la Sierra, CEJIS.
- CEDIB** (2005) *La gestión de la tierra y el territorio en Bolivia*. Cochabamba: CEDIB.
- Chaves, A.** (1990) "Aculturación e identidad de los Waunana del Chocó (Colombia)" en José Alcina (comp.) *Indianismo e indigenismo en América*. Madrid: Alianza Editorial, pp. 302-316.
- Chávez, J.** (1986) *Historia de Moxos* La Paz: Ed. Don Bosco.
- Chávez, M.** (2010) "Autonomías Indígenas" y "Estado Plurinacional". Proyectos políticos de los movimientos indígenas y campesinos en Bolivia" en François Polet y Pablo Stefanoni (coords.) *La Bolivia de Evo : ¿democrática, indigenista y socialista?*. Madrid: Editorial Popular, pp. 139-165.
- Chirif, A.** (1983) *Saqueo Amazónico*. Iquitos: Ediciones CETA.
- Chirif, A., García Hierro, Chase, R.** (1991) *El indígena y su territorio*. Lima: COCIA y Oxfam América.
- Chirif, A. y García Hierro, P.** (2007) *Marcando territorio. Progresos y limitaciones de la titulación de territorios indígenas en la Amazonía*. Copenhague: IWGIA.
- Choncol, J.** (2003) "La Reforma Agraria en América Latina" en John Vargas (coord.) *Proceso agrario en Bolivia y América Latina*. La Paz: Plural Editores; CIDES-UMSA, pp. 205-222.
- Chumacero, J. P.** (2010a) "Trece años de reforma agraria en Bolivia. Avances, dificultades y perspectivas" en Fundación TIERRA (ed.) *Reconfigurando territorios*.

Reforma agraria, control territorial y gobiernos indígenas en Bolivia. La Paz: Fundación TIERRA, pp. 11-37.

Chumacero, J. P. (2010b) "Conflicto por la tierra en comunidades aymaras, quechuas y chiquitanas en Bolivia" en Fundación TIERRA (ed.) *Reconfigurando territorios. Reforma agraria, control territorial y gobiernos indígenas en Bolivia*. La Paz: Fundación TIERRA, pp. 73-93.

CIDDEBENI (1996) *Diagnóstico socio-cultural del Territorio Indígena Multiétnico (TIM)*. Trinidad: CIDDEBENI.

CIPCA (2005) *Plan de Gestión Territorial Indígena TCO Territorio Indígena Multiétnico. Diagnóstico Socio Económico y estrategia de Gestión*. San Ignacio de Mojos: CIPCA.

CIPCA (2008) *Plan de Manejo Forestal Específico de cacao "Theobroma cacao" San Miguel del Mátire-TIMI*. Beni: CIPCA, 2008.

Clastres, P. (2007) "La sociedad contra el Estado" en Aurora Marquina (comp.) *El ayer y el hoy lecturas de antropología política*. Madrid: UNED, pp. 389-410.

Claval, P. (2002) "El enfoque cultural y las concepciones geográficas del espacio" en Boletín de la AGE, n° 34: pp. 21-39.

Claval, P. (2010) "La geografía en recomposición: objetos que cambian, giros múltiples. ¿Disolución o profundización?" en Alicia Lindón y Daniel Hiernaux (direct.) *Los giros de la Geografía Humana. Desafíos y horizontes*. Barcelona: Anthropos, pp. 63- 82.

Clavijo, A. (2008) *Mapeo de los recursos forestales en las TCO de Tierras Bajas*. La Paz: MDRAYMA-Viceministerio de Tierras-Unidad de Gestión Territorial Indígena en <http://www.vicetierras.gob.bo/contenidosvt/gti/notastecnicas/notatecnica2.pdf>

Cloke, P. et al. (2004) *Approaching Human Geography*. London: SAGE Publications Ltd.

Cloke, P. y Johnston, R. (2005) "Deconstructing human geography's binaries" en Paul Cloke y Ron Johnston (eds.) *Spaces of Geographical thought*. London: Sage, pp.1-20.

Colchester, M. (1993a), "Colonizing the rainforests: the agents and causes of deforestation" en Marcus Colchester & Larry Lohmann (eds.) *The struggle for land and the fate of the forests*. Penang: World Rainforest Movement, pp. 1- 15.

Colchester, M. (1993b) "Forest peoples and sustainability" en Marcus Colchester & Larry Lohmann (eds.) *The struggle for land and the fate of the forests*. Penang: World Rainforest Movement, pp.61-98.

- Colchester, M.** (1993c) "The International Response: Policies of the International Agencies" en Marcus Colchester & Larry Lohmann (eds.) *The struggle for land and the fate of the forests*. Penang: World Rainforest Movement, pp. 293-311.
- Colchester, M.** (1993d) "Future Options: Pushing on a piece of string?" en Marcus Colchester & Larry Lohmann (eds.) *The struggle for land and the fate of the forests*. Penang: World Rainforest Movement, pp. 311- 332.
- Colchester, M.** (1995) *Salvando la naturaleza: pueblos indígenas, áreas protegidas y conservación de la biodiversidad*. Ginebra: UNRISD.
- Colectivo Cabildeo** (2008) *Encuentros deliberantes entre assembleístas y organizaciones sociales*. Tierra y territorio: dossier 2. La Paz: Colectivo Cabildeo.
- Colque, G.** (2007) "Normativas consuetudinarias y formales sobre la tierra" en Fundación TIERRA (ed.) *Los nietos de la Reforma Agraria. Tierra y comunidad en el altiplano de Bolivia*. La Paz: Fundación TIERRA, pp. 137-156.
- Colque, G.**(2010) "La propiedad colectiva o comunitaria. Recientes enfoques y dilemas en la legislación agraria" en Fundación TIERRA (ed.) *Reconfigurando territorios. Reforma agraria, control territorial y gobiernos indígenas en Bolivia*. La Paz: Fundación TIERRA, pp. 39-48.
- Combès, I.** (2006) "Cuando el nombre no hace al indio" en *Definiciones étnicas, organización social y estrategias políticas en el Chaco y la Chiquitanía*. Santa Cruz de la Sierra: IFEA-SNV-El País, pp. 19-23.
- Combès, I.** (2009) "¿Indios y blancos? Hacer (etno)historia en las Tierras Bajas de Bolivia" en *Boletín Americanista*, nº 60. Barcelona, pp. 15-32.
- Consejo Municipal San Ignacio de Mojos** (2001) *Plan de Desarrollo Municipal San Ignacio de Mojos* (2001).BENI: CEPA.
- CEPOIM** (2008) *Autonomías Indígenas*. Cochabamba: Consejos Educativos de Pueblos Originarios de Bolivia.
- Contreras, A.** (1991) *Etapas de una larga marcha*. La Paz: Aquí-ERBOL.
- Coomes, B., Johnson, J. y Howitt, R.** (2011) "Indigenous geographies I: Mere resource conflicts? The complexities in Indigenous land and environmental claims" en *Progress in Human Geography* 00(0): pp. 1-12.
- Coomes O. T., y Barham B. I.** (2001) "Extracción en el bosque húmedo y conservación en la Amazonía" en Mario Hiraoka y Santiago Mora *Desarrollo sostenible en la Amazonía ¿Mito o realidad?*. Quito: Abya-Yala, 2001, pp. 47-59.
- Copeta, C.** (2009) "La identidad: una nueva categoría del territorio y del paisaje en Clara Copeta y Rubén Lois (eds.) *Geografía, paisaje e identidad*. Madrid: Biblioteca Nueva, pp. 17-42.

- CORDECRUZ et al.** (1995) *Manual de uso del PLUS y del POP*. Bolivia, en www.lidema.org.bo/Manuales%20PDF/PLUS%20Y%20POP.pdf
- Cruces, F.** (2007) “Los límites de la traductibilidad. Variaciones sobre un tema de Laura Bohannan” en Nuria Fernández (coord.) *Lecturas de etnología: una introducción a la comparación en antropología*. Madrid: UNED, pp. 305-315.
- Cuentas, M.** (2000) *Adecuaciones coyunturales desarrolladas por los indígenas moxeño ignacianos como estrategias de adaptación a los cambios sociopolíticos y espaciales*. La Paz: UMSA.
- D’Alía, W.** (2008) *La utopía reduccional de Moxos. Paradigma de evangelización*. Cochabamba: Ed. Verbo Divino.
- Darling, F.** (1976) “The Ecological Approach to the Social Sciences” en Peter Richerson y James McEvoy (eds.) *Human Ecology. And Environmental Approach*. Massachusetts: Duxbury Press, pp.284-294.
- Delaney, D.** (2005) *Territory. A short introduction*. Oxford: Blackwell Publishing.
- Del Val Cid, C. y García de Cortázar, M. (2005) *Metodología cuantitativa y antropología social y cultural*. Madrid: UNED.
- Denevan, W.** (1980) *La geografía cultural aborígen de los Llanos de Mojos*. La Paz: Librería Editorial Juventud.
- Denzin, N., Lincoln Y. y Smith L.** (2008) *Handbook of critical and indigenous methodologies*. London: Sage.
- Demeritt, D.** (1994) “The nature of metaphors in cultural geography and environmental history” en *Progress in Human Geography*, 18: 163-185.
- Descola, P.** (1996) *In the society of nature a native ecology in Amazonia*. Cambridge: University Press.
- De Vries, A. (1998) *Territorios Indígenas en las Tierras Bajas de Bolivia*. Santa Cruz: CIDOB/CPTI y SNV.
- Descola, P.** (2001) “Construyendo naturalezas. Ecología simbólica y práctica social” en Philippe Descola y Gísli Pálsson (coord.) *Naturaleza y Sociedad. Perspectivas antropológicas*. México D.F.: Siglo XXI, pp. 101- 123.
- Descola, P.** (2004) “Las cosmologías indígenas de la Amazonía” en Alexander Surrallés y Pedro García Hierro (eds.) *Territorio adentro. Territorio Indígena y percepción del entorno*. Copenhague: IWGIA, pp. 25-35.
- Descola, P., y Pálsson, G.** (2001) *Naturaleza y sociedad. Perspectivas antropológicas*. México D. F.: Siglo XXI.
- Díaz de Rada, A. (2008) “¿Dónde está la frontera? Prejuicios de campo y problemas de escala en la estructuración étnica en Sápmi” en *Revista de Dialectología y Tradiciones Populares*, vol. LXIII, nº 1: pp. 187-235.
- Díez Astete, A. y Murillo D.** (1998), *Pueblos indígenas de las Tierras Bajas*.

Características principales. La Paz: Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación – Viceministerio de Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios.

D´Orbigny, A. (2002 [1945]) *Viaje a la América Meridional: Brasil, República del Uruguay, República Argentina, la Patagonia, República de Chile, República de Bolivia, República del Perú: realizado de 1826 a 1833.* Vol IV. La Paz: Ambassade de France en Bolivie: IFEA.

Dove, M. (2002) “Historias híbridas y conocimientos indígenas entre los pequeños agricultores del caucho en Asia” en *Revista Internacional de Ciencias Sociales* 173: pp. 78-93.

Echeverri, J. A. (2004) “Territorio como cuerpo y territorio como naturaleza: ¿diálogo intercultural?” en Alexandre Surrallés y Pedro García Hierro (eds.) *Tierra Adentro. Territorio indígena y percepción del entorno.* Copenhague: IWGIA, pp. 259-275.

Eden, M. (1990) *Ecology and Land Management in Amazonia.* London: Belhaven Press.

Eder, F. (1985) *Breve descripción de las reducciones de Mojos* (traducido y editado por Joseph Barnadas), Cochamba: Historia Boliviana.

Eder, K. (1996) “The theoretical construction of nature: a critique of naturalistic theories of evolution” en Klaus Eder (ed.) *The construction of nature. A sociology of Ecological Enlightenment.* London: Sage Publications Ltd., pp. 7-32.

Ellison, N y Martínez, M. (2009) “Introducción” en Nicolas Ellison y Mònica Martínez (coord.) *Paisaje, espacio y territorio. Reelaboraciones simbólicas y reconstrucciones identitarias en América Latina.* Quito: Abya-Yala, pp. 7-25.

Erickson, C. (2000) “Lomas de ocupación en los Llanos de Moxos” en Alicia Durán y Roberto Bracco (eds.) *Arqueología de las Tierras Bajas.* Montevideo: Comisión Nacional de Arqueología, pp. 207-226.

Escobar, A. (2000) “El lugar de la naturaleza y la naturaleza del lugar: ¿globalización o postdesarrollo?” en Edgardo Lander (comp.) *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas.* Buenos Aires: Flacso, pp. 113-143.

Escobar, A. (2005) *Más allá del tercer Mundo. Globalización y diferencia.* Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia.

Escobar, A. (2008) *Territories of difference. Place, movements, life, redes.* Durham: Duke University Press.

Escobar, A. (2010a) *Ecologías políticas postconstructivistas* en <http://www.unc.edu/~aescobar/text/esp/escobar.2010.EcologiasPoliticasPostconstructivistas.pdf>

- Escobar, A.** (2010b) *Una minga para el postdesarrollo: lugar, medio ambiente y movimientos sociales en las transformaciones globales*. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales.
- Esteva-Fabregat, C.** (1990) “Indígenas, memorias étnicas y sociedades abiertas, Perspectivas comparadas” en José Alcina (comp.) *Indianismo e indigenismo en América*. Madrid: Alianza Editorial, pp: 102-131.
- Eva, H. D. y Huber, O.** (2005) *Una propuesta para la definición de los límites geográficos de la Amazonía*. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
- Ezra, R.** (1973) “Ecología Humana” en George Theodorson *Estudios de ecología humana*. Barcelona: Editorial Labor, S.A., pp. 43-55.
- Fabricano Noé, F. et al.** (2009) *Saberes del pueblo Moxeño*. Santa Cruz de la Sierra Bolivia: Editorial El país, Centro de Estudios Hoya Amazónica - HOYAM MOJOS.
- Fabricano Noé, F., Semo, J., y Olivio, J.** (2003) *Guía del alfabeto mojeño trinitario*. La Paz: Ministerio de Educación, Viceministerio de Educación Escolarizada y Alternativa.
- Fanon, F.** (1971) (2ª ed. en español) *Los condenados de la tierra*. México D. F.: Fondo de Cultura Económica.
- FAO** (2001) *Informe Final de la Evaluación del programa en el País–Bolivia* (1997-2001). Roma: FAO.
- Farinós, J.** (2005) “Nuevas formas de gobernanza para el desarrollo sostenible del espacio relacional” en ERÍA 67. Oviedo, pp. 219-235.
- FEGABENI** (2001) *Introducción de la ganadería de Moxos*. Beni: FEGABENI. (documento inédito).
- Fenton, S.** (2003) *Ethnicity*. Cambridge: Polity Press.
- Fitzsimmons, M.** (1989) “The Matter of Nature” en *Antipode*, 21: pp. 106-20.
- Fitzsimmons, M.** (2004), “Engaging Ecologies” en Paul Cloke, Mark Goodwin and Philip Crang (eds) *Envisioning Human Geography*. London: Arnold, pp. 30-47.
- Follér, M.** (2002) “Del conocimiento local y científico al conocimiento situado e híbrido –ejemplos de los shipibo-conibo del sureste peruano” en *Anales del Instituto Iberoamericano de Goteburg*, vol. 5., en https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/3239/1/anales_5_foller.pdf.
- Forbes, J.** (2001) “Nature and Culture: Problematic Concepts for Native Americans” en John Grim (ed.) *Indigenous Traditions and Ecology*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, pp.103-124.
- Fundación TIERRA** (2005) *El saneamiento en su laberinto: dossier sobre la situación y perspectivas del proceso de saneamiento en cinco municipios de las*

tierras bajas y el Chaco. La Paz: Fundación TIERRA.

Galoppo, E. (2003) "Resultado de los cambios introducidos por la Reforma Agraria" en John Vargas (coord.) *Proceso agrario en Bolivia y América Latina*. La Paz: Plural Editores; CIDES-UMSA, pp. 177-189.

García Álvarez, J. (2006) "Geografía regional" en Daniel Hiernaux y Alicia Lindón (direc.) *Tratado de Geografía Humana*. Barcelona: Anthropos, pp. 25-70.

García Álvarez, J. (2010) "Geografía y lugares de memoria" en Nicolás Ortega, Jacobo García Álvarez y Manuel Mollá Ruiz-Gómez (eds.) *Lenguajes y visiones del paisaje y del territorio*. Madrid: UAM, pp. 201- 208.

García Canclini, N. (2001) *Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad*. Buenos Aires: Paidós.

García Hierro, P. (2004) "Territorios indígenas: tocando a las puertas del derecho" en Alexander Surrallés y Pedro García Hierro (eds.) *Territorio adentro. Territorio Indígena y percepción del entorno*. Copenhague: IWGIA, pp. 277-306.

García Hierro, P. y Surrallés, A. (2009) *Antropología de un derecho. Libre determinación territorial de los pueblos indígenas como derecho humano*. Copenhague: IWGIA.

Giménez, C. y Malgesini, G. (2000) *Guía de conceptos sobre migraciones, racismo e interculturalidad*. Madrid: Catarata, 2000.

Giménez, G. (2000) "Identidades étnicas: estado de la cuestión", en Leticia Reina (coord.) *Los retos de la etnicidad en los estados-nación del siglo XXI*, México: CIESAS-INI-Porrúa.

Gluckman, M. (2004) "¿Qué es la ley? Problemas de terminología" en Aurora Marquina (comp.) *El ayer y el hoy: lecturas de antropología política. El futuro*. Vol. II. Madrid: UNED, pp. 127-163.

Godoy, I. y Sánchez, A. (2007) "El trabajo de campo en la enseñanza de la Geografía" en *Sapiens* 8 (2): pp. 137-146.

González, J. (2007) *Bolivia. La construcción de un país indígena*. Barcelona: Icaria Antrazyt.

Grayson, A. J. (2004) "Indigenous knowledge, biodiversity, and international rights. Learning about forests from Kayapó Indians of the Brazilian Amazon" en Kristina Plenderleith (ed.) *Indigenous knowledge and Ethics. A Darrel Posey Reader*. New York: Routledge, pp. 133-140.

Grünwald, R. (1999) "Etnogênese e 'regime de índio' na Serra de Umã" en João Pacheco de Oliveira (comp.) *A Viagem da Volta: etnicidade, política e reelaboração cultural no nordeste indígena*. Río de Janeiro: Contra Capa,

- Gupta, A.** (2003 [1992]) "The song of the nonaligned world. Transnational identities and the reinscription of space in late capitalism" en Setha M. Low and Denise Lawrence Zúñiga (ed.) *Anthropology of space and place: locating cultures*. Malden, MA: Blackwell Publishing, pp. 321-336.
- Gupta, A. y Ferguson, J.** (1992) "Beyond "Culture": Space, Identity, and the Politics of Difference" en *Cultural Anthropology*, 7 (1): pp. 6-23.
- Guzmán, I.** (2004) *Provincia Mojos. Tierra, territorio y desarrollo*. La Paz: Fundación Tierra.
- Guzmán, I.** (coord.) (2007) *Saneamiento de la tierra en 6 regiones de Bolivia, 1996-2007*. La Paz: CIPCA.
- Guzmán, I., Flores, E. y Paz, W.** (2002) *Control sociocultural y sistemas normativos en uso de los recursos forestales comercializables en los territorios indígenas del Beni*. Trinidad: PIEB.
- Hammerseley, M. y Atkinson P.,** (1994) *Etnografía. Métodos de investigación*. Barcelona: Paidós.
- Hardesty, D.** (1979) *Antropología ecológica*. Barcelona: Ediciones Bellaterra.
- Harvey, D.** (1996) *Justice, Nature and The Geography of Difference*. London: Blackwell Publishing.
- Hawley, A.** (1975 [1962]) *Ecología humana*. Madrid: Editorial Tecnos.
- Hecht, S.** (1993) "Land speculation and pasture-led deforestation in Brazil" en Marcus Colchester & Larry Lohmann (eds.) *The struggle for land and the fate of the forests*. Penang: World Rainforest Movement, pp. 164-178.
- Herbás, M. A. y Patiño, M. A.** (2010) *Derechos indígenas y gestión territorial: el ejercicio en las TCOs de Lomerío, Mosetén y Chacobo-Pacahuara*. Santa Cruz de la Sierra: PIEB.
- Herrera, E., Cárdenas, C. y Terceros E.,** (2003) *Identidades y territorios indígenas: estrategias identitarias de los tacana y ayoreo frente a la ley INRA*. La Paz: PIEB.
- Herrera, G.** (2006) "Políticas públicas contra el racismo y la discriminación en Guatemala" en Casaús Marta y Amílcar Dávila (eds.) *Diagnóstico del racismo en Guatemala. Investigación interdisciplinaria y participativa para una política integral por la convivencia y la eliminación del racismo*. Vol. IV, Guatemala, pp. 119-127.
- Hiernaux, D.** (2010) "La geografía hoy: giros, fragmentos y nueva unidad" en Alicia Lindón y Daniel Hiernaux (direct.) *Los giros de la Geografía Humana. Desafíos y horizontes*. Barcelona: Anthropos, pp. 43-61.
- Huanca, G.** (2004): *Tierra e inequidades en Moxos, Beni-Bolivia*. La Paz: CIPCA-Notas, pp. 1-3 en <http://www.cipca.org.bo/sistema/detnota.asp?dsubject=o&id=81>

- Ibisch, P. y Mérida, G.** (2003) *Biodiversidad: la riqueza de Bolivia: estado de conocimiento y conservación*. Santa Cruz de la Sierra: FAN.
- Ingold, T.** (1986) *The appropriation of nature. Essays on human ecology and social relations*. Manchester: University Press.
- Ingold, T.** (2000) *The perception of the environment. Essays on livelihood, dwelling and skill*. London: Routledge.
- INRA** (2003) *Informe Circunstanciado Técnico y Jurídico de Campo de las Tierras Comunitarias de Origen T. I. M. I.* Trinidad: INRA-BENI.
- INRA** (2008) *Breve historia del reparto de tierras en Bolivia. De la titulación colonial a la reconducción comunitaria de la Reforma Agraria: certezas y proyecciones*. La Paz: INRA.
- INRA** (2011) *Saneamiento, reversión y redistribución de tierras*. La Paz: INRA.
- Irion, G.** (1984) "Sedimentation and sediments of Amazonia rivers and evolution of the Amazonian landscape since Pleistocene times" en Herald Sioli (ed.) *Amazon. Limnology and Landscape Ecology*. Dordrecht: Junk Publishers, pp. 201-214.
- J. K. Gibson-Graham** (2006) *A Postcapitalist Politics*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Jabardo, V.** (2010) *Dimensiones territoriales en el proceso de construcción de la identidad indígena del pueblo moxeño* en www.planeamientoyurbanismo.com
- Jabardo, V.** (2011) "Dinámicas sociales de las poblaciones indígenas de la Amazonía boliviana. Tenencia de la tierra y relaciones de poder en Mojos" en *Prisma Social*, nº 6: pp. 1-27.
- Jiménez, A.** (1990) "El indio en la imagen y en el contexto de la república de los españoles: Guatemala en el siglo XVI" en José Alcina (comp.) *Indianismo e indigenismo en América*. Madrid: Alianza Editorial, pp: 45-68.
- Johnson, J., Cant, G., Howitt, R. y Peters, E.** (2007) "Creating Anti-colonial Geographies: Embracing Indigenous Peoples' Knowledges and Rights" en *Geographical Research* 45(2): pp. 117-120.
- Johnson, J. y Murton, B.** (2007) "Re/placing Native Science: Indigenous Voices in Contemporary Constructions of Nature" en *Geographical Research*, 45(2): pp. 121-129.
- Jordà, E.** (2003) "Pueblos moxos y su aportación al quehacer nacional de Bolivia" en Inés Romero y Elisenda Pastó (coord.) *Moxos: una limnocultura. Cultura y medio natural en la Amazonía boliviana*. Barcelona: CEAM, pp. 153-170.
- Jordán, P.** (2001) "La Amazonía andina: Presentación" en *Revista de Indias*, vol.61, nº 223: pp. 487-491.

- Jordán, P.** (2005) “Una mirada al pasado. Procesos de cambio hasta la actualidad” en *Les Veus de l'Amazònia. Present i futur del spobles amazònics i el seu entorn*. Barcelona: El Tinter, pp. 48-57.
- Juncosa, J.** (1992) *Documentos Indios. Declaraciones y pronunciamientos*. Tomo I, Quito: ABYA-YALA.
- Junk, W.** (1984) “Ecology of the várzea, floodplain of Amazonia whitewater rivers en Amazon” en Herald Sioli (ed.) *Amazon. Limnology and Landscape Ecology*. Dordrecht: Junk Publishers, pp. 215-243.
- Junquera, C.** (1995), *Indios y supervivencia en el Amazonas*. Salamanca: Amarú Ediciones.
- Junquera, C.** (2004) *Minorías amenazadas en un mundo global. Territorio, lengua y cultura en el Amazonas*. Pamplona: Eunate.
- Justo, L.** (2007 [1961]) *Bolivia: la revolución derrotada*. Buenos Aires: Ediciones Ryr.
- Karim-Aly, K.** (2009) *Biocultural Diversity and Indigenous ways of knowing. Human Ecology in the Artic*. Calgary, Alberta: University of Calgary Press, 2009.
- Keith, M. y Pile, S.** (1993) “Introduction Part 1: The Politics of Place; Introduction Part II: The Place of Politics” en Michael Keith y Steve Pile (eds.) *Place and the politics of identity*. London and New York: Routledge, pp. 1-21; 22-40.
- Kymlicka, W.** (1996) *Ciudadanía multicultural*. Barcelona: Paidós.
- Kovach, M.** (2009) *Indigenous Methodologies: Characteristics, Conversations, and Contexts*. Toronto: University of Toronto Press.
- Labraña, R.** (2010-2011) “La pertinence politique de la pratique de gestion locale de l'eau de l'ONG Hoyam Mojos en Amazonie bolivienne” en *Éducation relative à l'environnement*, Vol. 9: pp. 291-299.
- Lavelle, P.** (1987) “Biological Processes and Productivity of Soils in the Humid Tropics” en Robert E. Dickinson (ed.) *Geophysiology of Amazonia. Vegetation and climate interactions*. New York: John Wiley & Sons, Inc., pp. 175-223.
- Lazo, J.** (2007) *Tierra y territorio. Nación “camba” indígena contra oligarquía latifundista*. Cochabamba: Ed. Verbo Divino.
- Lehm, Z.** (1987), *Diagnóstico de la situación actual de los indígenas de Trinidad y áreas cercanas*. Trinidad: CIDDEBENI.
- Lehm, Z.** (1999) *Milenarismo y movimientos sociales en la Amazonía boliviana. La búsqueda de la Loma Santa y al Marcha por el Territorio y la Dignidad*. Santa Cruz de la Sierra: APCOB-CIDDEBENI OXFAM AMERICA.
- Lema, A. M.** (1995) *Pueblos Indígenas de la Amazonía Boliviana*. La Paz: Ed. El Viso.

- Lema, A. M.** (1997) "Las políticas étnicas y las acciones emprendidas" en www.siamazonia.org.pe/Archivos/Publicaciones/Amazonia/Libros2/Bolivia/politica.htm;
- Letamendia, F.** (2011) *El indigenismo en Suramérica : los aymaras del Altiplano*. Madrid : Fundamentos.
- Lévy, J.** (2010) "Actores, objetos, entornos: inventar el espacio para leer el mundo" en Alicia Lindón y Daniel Hiernaux (direct.) *Los giros de la Geografía Humana. Desafíos y horizontes*. Barcelona: Anthropos, pp. 83-90.
- Lewellen, T.** (2009 [1983]) *Introducción a la antropología política*. Barcelona: Bellaterra.
- Libermann, K., y Godínez, A.** (coord.) (1992) *Territorio y dignidad. Pueblos indígenas y medio ambiente en Bolivia*. Caracas: Nueva Sociedad; La Paz: ILDIS, Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales.
- Lijerón, A.** (1998) *Mojos- Beni. Introducción a la historia amazónica*. Trinidad: Editorial RB.
- Lindón, A.** (2010) "Los giros teóricos: texto y contexto" en Alicia Lindón y Daniel Hiernaux (direct.) *Los giros de la Geografía Humana. Desafíos y horizontes*. Barcelona: Anthropos, pp. 23-41.
- Lindsay, J.** (1997) *Techniques in Human Geography*. London: Routledge.
- Lois, R. y Pazos, M.** (2009) "Apéndice. Nuevas identidades territoriales del presente: una perspectiva desde la Península Ibérica" en Clara Copeta y Rubén Lois (eds.) *Geografía, paisaje e identidad*. Madrid: Biblioteca Nueva, pp. 231-251.
- Lopes de Carvalho, F. A.** (2010) "Cruzando fronteiras e negociando lealdades: índios missioneiros entre os domínios ibéricos de Mojos, Chiquitos e Mato Grosso (c. 1767-1800)" en *Nuevo Mundo Mundos Nuevos*, <http://nuevomundo.revues.org/62485>.
- López, F.** (2006) "Autonomías indígenas en América: de la demanda de reconocimiento a su construcción" en Mikel Berraondo (coord.) *Pueblos Indígenas y Derechos Humanos*. Bilbao: Universidad de Deusto, pp. 423-450.
- Luque, D. y Robles, A.** (2006) *Naturalezas, saberes y territorios comcáac (seri)*. Diversidad cultural y sustentabilidad ambiental. México: SERMANAT, Instituto Nacional de Ecología, Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo A. C.
- MacLean Stearman, A.** (1995) "Neotropical Foraging Adaptations and the Effects of Acculturation on Sustainable Resource Use: The Yuqui of Lowland Bolivia" en Leslie E. Sponsel (ed.) *Indigenous Peoples and the future of Amazonia. An ecological Anthropology of an Endangered World*. Tucson: The University of Arizona Press, 1995, pp. 207-224.

MACPIO (2002) *Pueblos Indígenas y Originarios de Bolivia. Diagnóstico Nacional*. La Paz: Ministerio de Asuntos Campesinos, Pueblos Indígenas y Originarios.

Madueño, A. (coord.) (2009) *Paisajes y voces de Mojos*. La Paz: Plural Editores.

Mamani, P. (2005) *Geopolíticas indígenas*. El Alto (Bolivia): Cades.

Mansilla, H. y Zegada, M. T. (comp.) *Política, cultura y etnicidad en Bolivia: fenómenos de colonialismo interno*. La Paz: Centro Boliviano de Estudios Multidisciplinarios; Universidad Mayor de San Simón, Centro de Estudios Superiores Universitarios.

Marden dos Santos, J. (1987) "Climate, Natural Vegetation and Solis in Amazonia: An Overview" en Robert E. Dickinson (ed.) *Geophysiography of Amazonia. Vegetation and climate interactions*. New York: John Wiley & Sons, Inc., pp. 25-34.

Martín, A. y Giménez, S. (2009) "Benítez: Monte, campo y pueblo. El espacio y la definición de lo aborígen entre las comunidades mocovíes del chaco argentino" en Nicolas Ellison y Mónica Martínez (coord.) *Paisaje, espacio y territorio. Reelaboraciones simbólicas y reconstrucciones identitarias en América Latina*. Quito: Abya-Yala, pp. 163-179.

Martín, R., Mata, R. y Santa Cecilia, F. (2008-2009) "Desarrollo rural y conservación de la naturaleza en áreas protegidas de Bolivia: la puna de Sajama" en *Anuario Americanista Europeo*, nº 6-7: pp. 529-551.

Martínez, J. A. (2000) *Atlas territorios indígenas en Bolivia. Situación de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) y proceso de titulación*. La Paz: CPTI-CIDOB.

Martínez, J. L. y Stefanoni, P. (2005) *Movimientos sociales y Asamblea Constituyente*. La Paz: Pulso.

Martínez de Pisón, E. (2009) *Miradas sobre el paisaje*. Madrid: Editorial Biblioteca Nueva.

Massey, D. (1993) "Politics of identity" en Keith y Steve Pile (eds.) *Place and the politics of identity*. London and New York: Routledge, pp. 141-161.

Massey, D. (1994) *Space, place and gender*. Cambridge: Polity Press.

Massey, D. (1999a) "With the collective: Issues and Debates" en Doreen Massey, John Allen y Phil Sarre (eds.) *Human Geography Today*. Cambridge: Polity Press, pp. 1-21.

Massey, D. (1999b) "Spaces of Politics" en Doreen Massey, John Allen y Phil Sarre (eds.) *Human Geography Today*. Cambridge: Polity Press, pp. 279-294.

Mayorga, F. (2006) *Nacionalismo e indigenismo en el MAS: los desafíos de la articulación hegemónica*. El Alto (Bolivia): Centro de Promoción de la Mujer.

Mazurek, H., (2010). "Los territorios" en *Hablemos de Geografía* (blog), <http://hablemosdegeografia.blogspot.com.br/2010/09/blog-los-territorios-de-hubert-mazurek.html>

- Mckenzie, R.** (1973) "Ámbito de la Ecología Humana" en George Theodorson *Estudios de ecología humana*. Barcelona: Editorial Labor, S.A., pp. 57-68.
- Meggers, B.** (1984) "The indigenous peoples of Amazonia, their cultures, land use patterns and effects on the landscape and biota" en Herald Sioli (ed.) *Amazon. Limnology and Landscape Ecology*. Dordrecht: Junk Publishers, pp. 627-648.
- Meggers, B.** (1995) "Judging the Future by the Past. The Impact of Environmental Instability on Prehistoric Amazonian Populations" en Leslie E. Sponsel (ed.) *Indigenous Peoples and the future of Amazonia. An ecological Anthropology of an Endangered World*. Tucson: The University of Arizona Press, 1995, pp. 15-43.
- Mendieta, P.** (2008) *Indígenas en política. Una mirada desde la historia*. La Paz: Instituto de Estudios Bolivianos-IEB.
- Mendoza, J.** (2001) "Un mundo de regiones: Geografía regional de geometría variable" en Boletín de la A.G.E. n° 32: pp. 15-33.
- Menjía, K. y Rengifo, E.** (1995), *Plantas medicinales de uso popular en la Amazonía peruana*. Lima: AECI-GRL-IIAP.
- Metraux, A.** (1942) "The native tribes of Eastern Bolivia and Western Matto Grosso" en Bulletin of the Bureau of American Ethnology, n° 134, Washington.
- Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente** (2008) *Política Nacional para la Gestión Integral de los bosques*. La Paz: MDRayMA.
- Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente, Viceministerio de Tierras e Instituto Nacional de Reforma Agraria** (2007) *Plan estratégico Nacional de Saneamiento y Titulación de Tierras 2007-2013*. La Paz: MDRayMA.
- Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, Viceministerio de Planificación Estratégica y Participación Popular Dirección General de Planificación y Ordenamiento Territorial Unidad de Administración Territorial** (2001a) *Procedimientos Metodológicos de la Zonificación Agroecológica y Socioeconómica*. La Paz: Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación.
- Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, Viceministerio de Planificación Estratégica y Participación Popular Dirección General de Planificación y Ordenamiento Territorial Unidad de Administración Territorial** (2001b) *Guía Metodológica para la formulación de los Planes Municipales de Ordenamiento Territorial en áreas rurales*. La Paz: Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación.
- Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, Viceministerio de Planificación Estratégica y Participación Popular Dirección General de Planificación y Ordenamiento Territorial Unidad de Administración**

Territorial (2004) *El ordenamiento territorial en Bolivia*. La Paz: Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación.

Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, Viceministerio de Planificación Estratégica y Participación Popular Dirección General de Planificación y Ordenamiento Territorial Unidad de Administración Territorial (2001c). *Guía metodológica para la formulación de los Planes Municipales de Ordenamiento Territorial*. La Paz: Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación.

Ministerio de Desarrollo Sostenible y planificación, Viceministerio de Planificación Estratégica y Participación Popular Dirección General de Planificación y Ordenamiento Territorial Unidad de Administración Territorial (2001d) *Lineamientos de políticas de Ordenamiento Territorial en Bolivia*. La Paz: Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación.

Ministerio de Relaciones Exteriores (2004) *Cuestión Territorial Indígena en Tierras Comunitarias de Origen. Programa sectorial de Apoyo a los Derechos de los Pueblos Indígenas*. La Paz: Ministerio de Relaciones Exteriores.

Miothek, K. (comp.) *Comunidades, territorios indígenas y Biodiversidad en Bolivia*. Santa Cruz de la Sierra: CIMAR – UAGRM.

Mires, F. (1992) *El Discurso de la indianidad*. Quito: Abya-Yala.

Molina, R. y Vadillo, A. (2007) *Los derechos de los Pueblos Indígenas en Bolivia. Una introducción a las normas, contextos y procesos*. La Paz: CEBEM.

Molina, W. (2004) “Cultura política y nuevas formas de organización y liderazgo en los pueblos indígenas del Beni”, disertación preparada para el Seminario Internacional *Liderazgo, Educación y Fuerzas Armadas: Desafíos y Oportunidades* (13-15 de septiembre). La Paz.

Molina, W. (2008) “Autonomías y posiciones identitarias en la región amazónica de Bolivia” en *Tinkazos*, vol.11, n° 23-24: pp. 171-181.

Molina, W. (2009a) “Autonomía indígena es desarrollo pero...”, Trinidad: CIDOB (material inédito).

Molina, W. (2009b) *San Ignacio de Mojos y la autonomía indígena*. La Paz: CIPCA-Notas en http://www.cipca.org.bo/index.php?option=com_content&view=article&id=461&catid=79&Itemid=112

Molina, W. et al. (2008) *Sociedades y territorios culturales en la región Amazónica de Bolivia*. La Paz: Fundación UNIR.

Molina, W. y Soleto, W. (2002) *Sociedad local y municipio en el Beni*. La Paz: PIEB-CIDDEBENI.

- Molina, W., Vargas, C. y Soruco, P.** (2008) *Estado, identidades territoriales y autonomías en la región amazónica de Bolivia*. La Paz: PIEB.
- Monasterios, K., Do Alto, H. y Stefanoni, P.** (2007) *Reinventando la nación en Bolivia. Movimientos sociales, Estado y poscolonialidad*. La Paz: Plural Editores.
- Montañez, G. y Delgado, O.** (1998) "Espacio, territorio y región: conceptos básicos para un proyecto nacional" en *Cuadernos de Geografía*. Vol. VII. Santa Fe de Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, pp. 120-134.
- Montes de Oca, I.** (1989) *La Geografía y recursos naturales de Bolivia*. La Paz: Eds. Banco Central.
- Montes de Oca, I.** (2004) *Enciclopedia geográfica de Bolivia*. La Paz: Atenea.
- Montilla, A.** (2005) "El trabajo de campo. Estrategia didáctica en la enseñanza de la Geografía" en *Geoenseñanza 002*: pp. 187-195.
- Morán, E.** (1989) "Models of Native and Folk Adaptation in the Amazon" en Darrel Posey y William Balée (eds.) *Resource Management in Amazonia: Indigenous and Folk Strategies*. Bronx, New York Botanical Garden, pp. 22-29.
- Morán, E.** (1993) *La ecología humana de los pueblos de la Amazonía*. México D. F.: Fondo de Cultura Económica.
- Morán, E.** (1995) "Disaggregating Amazonia: a Strategy for Understanding Biological and Cultural Diversity" en Leslie E. Sponsel (ed.) *Indigenous Peoples and the future of Amazonia. An ecological Anthropology of an Endangered World*. Tucson: The University of Arizona Press, 1995, pp. 71-95.
- Morán, E.** (2004) *People and nature. An introduction to human ecological relations*. Oxford: Blackwell Publishing.
- Morán, E.** (2008) *Human adaptability. An introduction to Ecological Anthropology*. Philadelphia Westviwe Press.
- Moreno, P.** (2004) *Introducción y guía a la Antropología Económica*. Madrid: UNED.
- Muñoz, J.** (1991) *Geografía de Bolivia*. La Paz: Librería Editorial Juventud.
- Murça, J.** (1984) "The Amazonian Forest" en Herald Sioli (ed.) *Amazon. Limnology and Landscape Ecology*. Dordrecht: Junk Publishers, pp. 581-602.
- Muir, C., Rose, D. y Sullivan, P.** (2010) "From the other side of the knowledge frontier: Indigenous knowledge, social-ecological relationships and new perspectives" en *Rangeland Journal*, 32: pp. 259-265.
- Murray Li, T.** (2008) "Articulating Indigenous Identity in Indonesia: Resource Politics and Tribal Slot" en Michael R. Dove and Carol Carpenter (eds.) *Enviromental Anthropology. A Historical Reader*. Oxford: Blackwell Publishing, pp. 339-362.

- Nah, A.** (2006) "(Re)Mapping Indigenous 'Race'/Place in Postcolonial Peninsular Malaysia" en *Geogr. Ann.*, 88 B (3): pp. 285-297.
- Nate, A.** (2001) *Plantas útiles y su aprovechamiento en la comunidad Tsimane' de Yaranda*, Santa Cruz de la Sierra: CIDO-DFID.
- Navarro, G.** (1997) "Contribución a la clasificación ecológica y florística de los bosques de Bolivia" en *Revista Boliviana de Ecología* (2): pp. 3-37.
- Navarro, G. y Maldonado, M.** (2002) *Geografía ecológica de Bolivia: vegetación y ambientes acuáticos*. Cochabamba: Centro Ecológico Simón Patiño.
- Navia, C.** (2002) *Efectos de la tala selectiva en bosques tropicales*. Trinidad: CIDDEBENI.
- Navia, C.** (2003) *La cuestión indígena en el Beni. Reflexiones en la década de los noventa*. Trinidad: CIDDEBENI.
- Nightingale, A.**, (2006) "Caring for Nature: subjectivity, boundaries and environment". Edinburgh: Institute of Geography. University of Edinburgh. 1- 12.
- Nordenskiöld, E.** (1930) *L'Archéologie du bassin de l'Amazone*. París: G. Van Oest.
- Nogué i Font, J.** (1989) "Espacio, lugar, región: hacia una nueva perspectiva geográfica regional" en *Boletín de la A.G.E.* n° 9: pp. 63-79.
- Nuni, P.** (responsable) (2004) "Expedientes" en *Resumen general de carpetas Saneamiento TCO TIMI*. La Paz.
- Offen, K.** (2009) "O mapeas o te mapean: mapeo indígena y negro en América Latina" en *Tábula Rasa*, n° 10. Bogotá: Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, pp. 163-189.
- Oslander, U.** (2002) "Espacio, lugar y movimientos sociales hacia una "espacialidad de resistencia" en *Scripta Nova*, n°. 6: pp. 105-132.
- Pacheco, P.** (1992) *Integración económica y fragmentación social: itinerario de las barracas en la Amazonía boliviana*. La Paz: CEDLA.
- Pacheco, P.** (1998) *Estilos de deforestación y degradación de los bosques en las tierras bajas de Bolivia*. La Paz: CIFOR/CEDLA/TIERRA.
- Pacheco, P.** (1998a) *Magnitud y Causas de la Deforestación y Degradación de los Bosques en Bolivia*. La Paz en <http://www.wrm.org.uy/deforestation/LAmerica/Bolivia.html>.
- Pacheco, P.** (1998b) *Estilos de desarrollo, deforestación y degradación de los bosques en las tierras bajas de Bolivia*. Serie Bosques y Sociedad n° 2. La Paz: CIFOR/CEDLA/TIERRA.
- Pacheco, P.** (2006) *Descentralización forestal en Bolivia. Implicaciones en el gobierno de los recursos forestales y el bienestar de los grupos marginados*. La Paz: CIFOR – CIID/IDRC.

Pacheco, P. (2009) “Enfoques forestales homogéneos para actores diversos” en Juan Carlos Alurralde et al. *Conflictos y potencialidades de los recursos naturales en Bolivia*. La Paz: Informe sobre Desarrollo Humano, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Bolivia, pp. 191-248.

Panelli, R. (2008) “Social geographies: encounters with Indigenous and more-than-White/Anglo geographies” en *Progress in Human Geography* 32 (6): pp. 801-811.

Panelli, R. (2010) “More-than-human social geographies: posthuman and other possibilities” en *Progress in Human Geography* 34 (1): pp. 79-87.

PASOC-CIPCA (2007) *Saneamiento de tierras e identificación de tierras fiscales en Santa Cruz*. Santa Cruz de la Sierra: Ed. El País.

Patiño, P. (1998) “Los territorios indígenas como reivindicación y práctica discursiva” en *Nueva Sociedad* 153: pp. 120-129.

Pálsson, G. (2001) “Relaciones humano-ambientales. Orientalismo, paternalismo y comunalismo” en Philippe Descola y Gísli Pálsson (coord.) *Naturaleza y Sociedad. Perspectivas antropológicas*. México D.F.: Siglo XXI, pp. 80-100.

Parajuli, P. (2001) “Learning from ecological Ethnicities: Toward a Plural Political Ecology of Knowledge” en John Grim (ed.) *Indigenous Traditions and Ecology*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, pp. 559-589.

Pastó, E. (2003) “Sistemas de depuración natural de aguas residuales en Moxos, Amazonia boliviana” en Inés Romero y Elisenda Pastó (coord.) *Moxos: una limnocultura. Cultura y medio natural en la Amazonía boliviana*. Barcelona: CEAM, pp. 129-135.

Paz Ballivián, D. (2003) “Medio siglo de Reforma Agraria boliviana” en John Vargas (coord.) *Proceso agrario en Bolivia y América Latina*. La Paz: Plural Editores; CIDES-UMSA, pp. 53-63.

Pedone, C. (2000) “El trabajo de campo y los métodos cualitativos. Necesidad de nuevas reflexiones desde las geografías latinoamericanas” en *Scripta Nova*, n°4: pp. 55-78.

Gustavo Pedraza (2006) *Saneamiento de Tierras Comunitarias de Origen en La Paz*: Fundación TIERRA en http://www.ftierra.org/ft/index.php?option=com_content&view=article&id=882:rair&catid=130:ft&Itemid=188.

Peñafiel, O. (2002) *Aproximación teórica del concepto de territorio indígena para los pueblos indígenas de Tierras Bajas de Bolivia*. Santa Cruz de la Sierra: UAGRM.

Petras, J. y Veltmeyer, H. (2005) “The Politics of Adjustment, Reform and Revolution in Bolivia” en James Petras y Henry Veltmeyer *Social Movements and State Power. Argentina, Brazil, Bolivia, Ecuador*. London: Pluto Press, pp. 175- 219.

- Pinto, G.** (2002) *La cultura de los Mojo del Beni-Bolivia: fines del siglo XVII y primera mitad del siglo XVIII*. Cochabamba: Universidad Católica Boliviana, 2002.
- Peña, M. M.** (1998) “Algunos aspectos de la cuestión indígena desde una perspectiva internacional” en *Nueva Sociedad* 153: pp. 130-140.
- Pinto, G., Terceros, Ó. y Landívar, J.** (2010) *La nación de los pueblos orientales. Enohistoria y culturas precolombinas en la ex-gobernación de Mojos o de Santa Cruz y su influencia en la conformación de la nación de los pueblos orientales*. Santa Cruz de la Sierra: Editorial El País.
- Pinto, R.** (2001) *Narasaquije*. La Paz: Ed. Producciones Ciclo Vía Comunicaciones.
- Plata, W.** (2010) “De municipio a Autonomía Indígena. Los once municipios que transitan a la Autonomía Indígena Originario Campesina” en Fundación TIERRA (ed.) *Reconfigurando territorios. Reforma agraria, control territorial y gobiernos indígenas en Bolivia*. La Paz: Fundación TIERRA, pp. 247-272.
- PNUMA Y OTCA** (2009) *Perspectivas del Medio Ambiente en la Amazonía-GEO Amazonía*. Ciudad de Panamá: PNUD.
- Polet, F. y Stefanoni, P.** (coords.) (2010) *La Bolivia de Evo: ¿democrática, indigenista y socialista*. Madrid: Editorial Popular.
- Ponce, R.** (1998) *Zonificación ecológica-económica: una propuesta metodológica para la Amazonía*. Caracas: TCA-FAO-DGIS.
- Posey, D.** (2001) “Intellectual Property Rights and Sacred Balanced: Some Spiritual Consequences from the Commercialization of Traditional Resources” en John Grim (ed.) *Indigenous Traditions and Ecology*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, pp. 3-23.
- Posey, D.** (2008) “Indigenous Management of Tropical Forest Ecosystems: The Case of Kayapó Indians of the Brazilian Amazon” en Michael R. Dove and Carol Carpenter (eds.) *Environmental Anthropology. A Historical Reader*. Oxford: Blackwell Publishing, pp. 89-101.
- Posey, D. et al.** (2004) “Ethnoecology as applied anthropology in Amazonia development” en Kristina Plenderleith (ed.) *Indigenous knowledge and Ethics. A Darrel Posey Reader*. New York: Routledge, pp. 70-87.
- Pualani, R.** (2007) “Can You Hear us Now? Voices from the Margin: Using Indigenous Methodologies” en *Geographical Research* 45 (2): pp. 130-139.
- Puente, P.** (2010) “¿Lugares sin memoria? Retos y dilemas del las geografía” en Nicolás Ortega, Jacobo García Álvarez y Manuel Mollá Ruiz-Gómez (eds.) *Lenguajes y visiones del paisaje y del territorio*. Madrid: UAM, pp. 259-274.

- Quijada, M.** (2004) “Construcción y pueblos originarios: Un camino no lineal entre la homogeneización y la diversidad, de ayer a hoy” en *Política e Indigenismo*, nº 3, Madrid, Casa de América, pp. 8-23.
- Quispe Omi, J.** (2003) *Derechos humanos ecológicos: un medio ambiente saludable como derecho fundamental*. Oruro: Latinas.
- Radcliffe, S. y Westwood, S.** (1999) *Rehaciendo la nación. Lugar, identidad y política en América Latina*. Quito: Abya –Yala.
- Radcliffe, S.** (1999) “Popular and State Discourses of Power” en Doreen Massey, John Allen y Phil Sarre (eds.) *Human Geography Today*. Cambridge: Polity Press, pp. 219-242.
- Raffles, H.** (2002) “El conocimiento íntimo” en *Revista Internacional de Ciencias Sociales* 173: pp. 49-61.
- Rai, H. y Hill, G.** (1984) “Primary Production in the Amazonia aquatic ecosystem” en Herald Sioli (ed.) *Amazon. Limnology and Landscape Ecology*. Dordrecht: Junk Publishers, pp. 311-335.
- Ramírez, E.** (2007) *Etnicidad, identidad y migraciones teoría, conceptos y experiencias*. Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces.
- Reinaga, F.** (1953) *Tierra y Libertad: la revolución nacional y el indio*. La Paz: Rumbo Sindical.
- Resnikowski, H.** (2007) “La detección de la reducción de bosques en Bolivia y las proyecciones futuras de la Superintendencia Forestal en Bolivia” en *Ecología en Bolivia*, vol.42, nº1: pp. 1-3.
- Restrepo, E.** (2004) *Políticas del conocimiento y la alteridad étnica*. México D.F.: Universidad de la Ciudad de México.
- Richerson, P. y McEvoy, J.** (1976) *Human Ecology. And Environmental Approach*. Massachusetts: Duxbury Press.
- Riechmann, J. y Fernández Buey** (1994) *Redes que dan Libertad. Introducción a los nuevos movimientos sociales*. Barcelona: Paidós.
- Rival, L.** (2004) “El crecimiento de las familias y de los árboles: la percepción del bosque de los Huaorani” en Alexandre Surrallés y Pedro García Hierro (eds.) *Tierra Adentro. Territorio indígena y percepción del entorno*. Copenhague: IWGIA, pp. 97-120.
- Rojas, J. C.** (s/f) *Estado del proceso de Saneamiento a 10 años de vigencia de la Ley 1715, 18/10/1996 – 18/10/2006*. La Paz: INRA.
- Romero, C.** (2003) “La reforma Agraria en las tierra bajas de Bolivia” en John Vargas (coord.) *Proceso agrario en Bolivia y América Latina*. La Paz: Plural Editores; CIDES-UMSA, pp. 83-126.

Romero, C. (2009) *Las autonomías indígenas en Bolivia. Naciones y pueblos indígena originario campesinos preexistentes al Estado*. La Paz: FUNDACIÓN TIERRA.

Romero, I. et al. (2000) *Moxos, el país del agua*. Barcelona: CEAM-HOYAM.

Romero, I. y Pastó, E. (2003) “Breve introducción a la región de los Llanos de Moxos” en Inés Romero y Elisenda Pastó (coord.) *Moxos: una limnocultura. Cultura y medio natural en la Amazonía boliviana*. Barcelona: CEAM, pp. 15-18.

Roosevelt, A. (1989) “Resource Management in Amazonia before the Conquest: Beyond Ethnographic Projection” en Darrel Posey y William Balée (eds.) *Resource Management in Amazonia: Indigenous and Folk Strategies*. Bronx, New York Botanical Garden, pp. 30-62.

Rose, G. (1993) *Feminism and geography the limits of geographical knowledge*. Cambridge: Polity Press.

Roth, R. (2009) “The challenges of mapping complex indigenous spatiality: from abstract space to dwelling space” en *Cultural Geographies*, 16: pp. 207-227.

Rozat Dupeyron, G. (2002) “Antropólogos, ¿qué han hecho del indio?” en Guillermo De la Peña y Luis Vázquez (eds.) *La antropología sociocultural en el México del Milenio. Búsquedas, encuentros y transiciones*. México D. F.: Fondo Cultura Económica, pp. 483-508.

Rundstrom, R. (1995) “GIS, Indigenous Peoples, and Epistemological Diversity” en *Cartography and Geographic Information Science*, vol. 22, n° 1 (13): pp. 45-57.

Saavedra, Ó. y Ávila, X. (2002) Planificación participativa y zonificación en municipios del Beni. La Paz: PIEB.

Sahlins, M. (2007) “Hombre pobre, hombre rico, gran hombre, jefe: Tipos políticos en Melanesia y Polinesia” en Aurora Marquina (comp.) *El ayer y el hoy lecturas de antropología política*. Madrid: UNED, pp. 215-237.

Salgado, J. M. (2010) “La Gestión Territorial Indígena en Tierras Bajas: ¿Autonomías Indígenas?” en Fundación TIERRA (ed.) *Reconfigurando territorios. Reforma agraria, control territorial y gobiernos indígenas en Bolivia*. La Paz: Fundación TIERRA, pp. 209-246.

Santos, F. (comp.) *Globalización y cambio en la Amazonía indígena*. Vol. I, Quito: Abya – Yala.

Santos, M. (2000) *La naturaleza del espacio. Técnica y tiempo. Razón y emoción*. Barcelona: Editorial Ariel.

Seeland, K. (1997) “Introduction” Klaus Seeland (ed.) *Nature is culture. Indigenous knowledge and socio-cultural aspects of trees and forests in non European cultures*. London: Intermediate Technology Publications Ltd., pp. 1-6.

- Seminario, Estado, Territorio y Pueblos Indígenas** (2003) *Memoria: Seminario, Estado, Territorio y Pueblos Indígenas*. Cochabamba: CENDA.
- Sepúlveda, L.** (1993) *Un viejo que leía novelas de amor*. Barcelona: Tusquets Editores.
- Shaw, W., Herman, R. y Dobbs, R.** (2006) "Encountering Indigeneity: Re-imagining and decolonizing Geography" en *Geogr. Ann.*, 88 B (3): pp. 267-276.
- Sevilla, M.** (2010) *Organización territorial y campesinado en el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Cotapata (Bolivia)*. Madrid: UAM (Tesis doctoral).
- Sieder, R.** (2006) "El nuevo multiculturalismo en América Latina: ¿Regulación o emancipación?" en *Boletín 30 Aniversario*. Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales A.C., CEAS-CIESAS, México: pp. 29-36.
- Siffredi, A. y Spadafora, A. M.** (2001) "Nativos y naturaleza. Los infortunios de la traducción en las políticas de la sustentabilidad" en *ILHA, Revista de Antropología*, vol. 3, n°1, Florianópolis, pp. 101-119.
- Sioli, H.** (1984a) "The Amazon and its main affluents: hydrography, morphology of the river courses and river types" en Herald Sioli (ed.) *Amazon. Limnology and Landscape Ecology*. Dordrecht: Junk Publishers, pp.125-165.
- Sioli, H.** (1984b) "Former and recent utilizations of Amazonia and their impact on the environment" en Herald Sioli (ed.) *Amazon. Limnology and Landscape Ecology*. Dordrecht: Junk Publishers, pp. 675-706.
- Sletto, B.** (2009) "Indigenous people don't have boundaries: reborderings, fire management, and productions of authenticities in indigenous landscapes" en *Cultural Geographies*, 16: pp. 253-277.
- Smith, D.** (1990) "Introduction: the sharing and dividing of geographical space" en Michael Chisholm and David M. Smith (eds.) *Shares Space: Divided Space. Essays on conflict and Territorial Organization*. London: Unwin Hyman, pp. 1-21.
- Smith, N. y O'Keefe, P.** (1980) "Geography, Marx and the Concept of Nature" en *Antipode*, 12: pp. 30-39.
- Smith, S.** (1999) "Society-Space" en Paul Cloke, Philip Crang y Mark Goodwin, *Introducing Human Geographies*. Oxford: University Press, pp. 12-23.
- Soja, S.** (1999) "Thirdspace: Expanding the Scope of Geographical Imagination" en Doreen Massey, John Allen y Phil Sarre (eds.) *Human Geography Today*. Cambridge: Polity Press, pp. 260-278.
- Soliz, L. y Aguilar, S.** (2005) *Producción y economía campesino-indígena. Experiencias en seis ecorregiones de Bolivia. 2001-2003*. La Paz: CIPCA.
- Sombroek, W.** (1984) "Solis of the Amazonia region" en Herald Sioli (ed.) *Amazon. Limnology and Landscape Ecology*. Dordrecht: Junk Publishers, pp. 521-535

- Soper, K.** (1995) *What is Nature?*. Oxford: Blackwell Publishers Ltd.
- Sponsel, L** (1995a) “Indigenous Peoples and the Future of Amazonia” en Leslie E. Sponsel (ed.) *Indigenous Peoples and the future of Amazonia. An ecological Anthropology of an Endangered World*. Tucson: The University of Arizona Press, pp. 3-9.
- Sponsel, L** (1995b) “Relationships Among the World System” en Leslie E. Sponsel (ed.) *Indigenous Peoples and the future of Amazonia. An ecological Anthropology of an Endangered World*. Tucson: The University of Arizona Press, 1995, pp. 263-293.
- Strang, V.** (2001) “Neogotiating the River: Cultural Tributaries in Far North Queensland” en Barbara Bender y Margot Winar (eds.) *Contested landscapes. Movement, Exile and Place*. Oxford, New York: Berg, pp. 69- 86.
- Suárez, M.** (s/f) *Estado y Resultados de la Zonificación Ecológica y Económica en Bolivia* en <http://www.siamazonia.org.pe/Archivos/Publicaciones/Amazonia/libros2/56/56038.htm>
- Superintendencia Forestal** (2003) *Informe Anual 2002*. Santa Cruz de La Sierra.
- Surrallés, A.** (2004) “Horizontes de intimidad. Persona. Percepción y espacio en los candoshi” en Alexander Surrallés y Pedro García Hierro (eds.) *Territorio adentro. Territorio Indígena y percepción del entorno*. Copenhague: IWGIA, pp. 137-162.
- Sundar, N.** (2002) “‘Indigenizar, nacionalizar y espiritualizar’ –un programa para la educación?” en *Revista Internacional de Ciencias Sociales* 173: pp. 108-120.
- Sutton, M. y Anderson, E. N.** (2004) *Introduction to Cultural Ecology*. Oxford, New York: Berg.
- Svampa, M. y Stefanoni, P.** (2007) *Bolivia: Memoria, insurgencia y movimientos sociales*. Buenos Aires: Clacso.
- Svampa, M., Stefanoni, P. y Fornillo, B.** (2010) *Debatir Bolivia. Perspectivas de un proyecto de descolonización*. Buenos Aires: Taurus.
- Tamburini, L.** (1997) “Un nuevo despojo se consume en los territorios indígenas” en *Biodiversidad y territorios indígenas, Revista de Debate Social y Jurídico*, julio/octubre, n°4, Santa Cruz de la Sierra, pp. 19-28.
- Tellería, M. T.** (2003) “La flora amazónica” en *Sociedad Geográfica Española* 14: pp. 64-75.
- Theodorson, G.** (1973) *Estudios de ecología humana*. Barcelona: Editorial Labor, S.A.
- Toledo, V.** (2002) “Antropología y ecología: aportes y perspectivas de un planteamiento interdisciplinario” en Guillermo De la Peña y Luis Vázquez (eds.) *La antropología sociocultural en el México del Milenio. Búsquedas, encuentros y*

transiciones., México D. F.: Fondo Cultura Económica, pp. 540-556.

Toledo, V. y Barrera-Bassols, N. (2008) *La memoria biocultural. La importancia ecológica de las sabidurías tradicionales.* Barcelona: Icaria.

Toranzo, C. (2004), “Bolivia: influjo del indigenismo en la política” en *Tribuna Americana. Revista de Reflexión Política*, nº 3: pp. 62-73.

Tormo, L. (1967) *El sistema comunista indiano en la región comunera de Mojos-Chiquitos.* Madrid: Instituto de Estudios Sindicales Sociales y Cooperativos.

Trillo, J. M. (2010) “Territorios, paisajes y lugares de memoria transfronterizos? Jano y Némesis, dos dioses para la frontera” en Nicolás Ortega, Jacobo García Álvarez y Manuel Mollá Ruiz-Gómez (eds.) *Lenguajes y visiones del paisaje y del territorio.* Madrid: UAM, pp. 247-258.

Turner, T. (2004) “Clase, cultura y capitalismo. Perspectivas históricas y antropológicas de la globalización” en Aurora Marquina (comp.) *El ayer y el hoy. Lecturas de antropología política. El futuro.* Vol. II. Madrid: UNED, pp. 397-441.

Urioste, M. (2003) “La reforma agraria abandonada: valles y altiplano” en John Vargas (coord.) *Proceso agrario en Bolivia y América Latina.* La Paz: Plural Editores; CIDES-UMSA, pp. 19-53.

Urioste, M. (2007a) “A manera de presentación” en Fundación TIERRA (ed.) *Los nietos de la Reforma Agraria. Tierra y comunidad en el altiplano de Bolivia.* La Paz: Fundación TIERRA, pp. xxiii-lxvi.

Urioste, M. (2007b) “Perspectivas agrarias y comunitarias” en Fundación TIERRA (ed.) *Los nietos de la Reforma Agraria. Tierra y comunidad en el altiplano de Bolivia.* La Paz: Fundación TIERRA, pp. 201-224.

Urioste, M. (2007c) “Conclusiones y algunas recomendaciones” en Fundación TIERRA (ed.) *Los nietos de la Reforma Agraria. Tierra y comunidad en el altiplano de Bolivia.* La Paz: Fundación TIERRA, pp. 225-235.

Urioste, M. (2011) *Concentración y extranjerización de la tierra en Bolivia.*, La Paz: Fundación TIERRA.

Urioste, M. y Pacheco, D. (2001) *Las Tierras Bajas de Bolivia a fines del siglo XX.* La Paz: PIEB.

Vaca, O. (2007) *Beni: manejo de bosques con chocolate silvestre.* La Paz: CIPCA-
Notas en
http://www.cipca.org.bo/index.php?option=com_content&view=article&id=246:zdpa&catid=77:zdpa&Itemid=115

Valenzuela, C. (2008) *Tierra y Territorio en Bolivia.* La Paz: CEDIB.

- Vargas-Hernández, J. G** (2005) “Movimientos sociales para el reconocimiento de los movimientos indígenas y la ecología política indígena” en *Ra Ximhai*, vol. 1, n° 3: pp. 453-470.
- Vargas, J.** (2003a) “La tierra es de quien la trabaja” en John Vargas (coord.) *Proceso agrario en Bolivia y América Latina*. La Paz: Plural Editores; CIDES-UMSA, pp. 65-82.
- Vargas, J.** (2003b) “Ideas y aspectos relevantes del seminario” en John Vargas (coord.) *Proceso agrario en Bolivia y América Latina*. La Paz: Plural Editores; CIDES-UMSA, pp. 429-452.
- Vargas, R.** (2005) *Ecosistemas de Bolivia. Un lugar para vivir*. Beni: SEDUCA.
- Vargas Llosa, M.** (2007 [1981]) *la guerra del fin del mundo*. Madrid: Punto de Lectura.
- Vayda, A. y Rappaport, R.** (1976) “Ecology, Cultural and no Cultural” en Peter Smith, L., (1999) *Decolonizing Methodologies: Research and Indigenous Peoples*. London: Zed Books Ltd.
- Vejarano, S.** (2005) “El territorio, punto clave de la existencia en el mundo indígena” en las jornadas *Las voces de la Amazonía*. Barcelona: CEAM.
- Velasco, H. y Díaz de Rada, A.** (1997) *La lógica de la investigación etnográfica. Un modelo de trabajo para etnógrafos de escuela*. Madrid: Trotta D. L.
- Verdier, N.** (2010) “La memoria de los lugares: entre espacios de la historia y territorios de la geografía” en Nicolás Ortega, Jacobo García Álvarez y Manuel Mollá Ruiz-Gómez (eds.) *Lenguajes y visiones del paisaje y del territorio*. Madrid: UAM, pp. 209-217.
- Villanueva, A.** (2004) *Pueblos indígenas y conflictos de tierras*. La Paz: Fundación Tierra.
- Vieco, J. J., Franky, C. E., y Echeverri, J. A.** (eds.) (2000) *Territorialidad indígena y ordenamiento en la Amazonía*. Santa Fe de Bogotá: UNIBIBLOS.
- Villoro, L.** (2002) *Estado plural, pluralidad de culturas*. México D. F.: Paidós.
- Viola, A.** (comp.) (2000) *Antropología del desarrollo. Teorías y estudios etnográficos en América Latina*. Barcelona: Paidós.
- Viveiros de Castro, E.** (2004) “Perspectivismo y multinaturalismo en la América Indígena” en Alexander Surrallés y Pedro García Hierro (eds.) *Territorio adentro. Territorio Indígena y percepción del entorno*. Copenhague: IWGIA, pp. 37-80.
- Wagner, R.** (1975) *The invention of culture*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Wainwright, J. y Bryan, J.** (2009) “Cartography, territory, property: postcolonial reflections on indigenous counter-mapping in Nicaragua and Belize” en *Cultural Geographies*, 16: pp. 153-178.

- Watts, M.** (2005) "Nature: Culture" en Paul Cloke y Ron Johnston (eds.) *Spaces of Geographical thought*. London: Sage, pp. 142-174.
- Whatmore, S.** (1999a) "Culture- Nature" en Paul Cloke, Philip Crang y Mark Goodwin, *Introducing Human Geographies*. London: Arnold, pp. 4- 11.
- Whatmore, S.** (1999b) "Hybrid Geographies: rethinking the 'Human' in Human Geography" en Doreen Massey, John Allen y Phil Sarre (eds.) *Human Geography Today*. Cambridge: Polity Press, pp. 22-39.
- Wickens, M. y Pualani, R.** (2008) "Mapping Indigenous Depth of Place" en *American Indian Culture and Research Journal* 32: 3, pp. 107-126.
- Wieviorka, M.** (2005) "Identidad y movimientos sociales" en *Quaderns de la Mediterrània = Cuadernos del Mediterráneo*, nº 5: pp. 85-90.
- Wilhelmi, M.** (2006) "El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación" en **Mikel Berraondo** (coord.) *Pueblos Indígenas y Derechos Humanos*. Bilbao: Universidad de Deusto, pp. 399-421.
- Winograd, M.** (1995) "Comportamiento de los grandes ecosistemas latinoamericanos. Ensayo de elaboración de modelos cualitativos" en Gilberto Gallopín (comp.) *El futuro ecológico de un continente. Una visión prospectiva de América Latina*. Vol.1, México D. F.: Fondo de Cultura Económica.
- Wolf, E.** (1987) *Europa y la gente sin historia*. México D. F.: Fondo de Cultura Económica.
- Woynarovich, E. y Romero, I.** (2003) "Piscicultura extensiva en los Llanos de Moxos: una propuesta para la utilización racional de los llanos inundados y las lagunas de Moxos" en Inés Romero y Elisenda Pastó (coord.) *Moxos: una limnocultura. Cultura y medio natural en la Amazonía boliviana*. Barcelona: CEAM, pp. 95-101.
- Zeballos, H. y Quiroga, E.** (2003) *Política y economía de los recursos naturales renovables en Bolivia*. La Paz: COSUDE-SIRENARE.
- Zeitum, S.** (1991) *Amazonía boliviana*. La Paz: Gráfica Visión.
- Zimmerer, K.** (1994) "Human Geography and the "New Ecology": The prospect and Promise of Integration" en *Annals of the Association of American Geographers*, 84: pp. 108-125.
- Zimmerer, K.** (2006) "Cultural ecology: at the interface with political ecology-the new geographies of environmental conservation and globalization" en *Progress in Human Geography*, 30 (1): pp. 63-78.
- Zúñiga, G.** (1998) "Los procesos de constitución de territorios indígenas en América Latina" en *Nueva Sociedad* 153: pp. 141-150.

RECURSOS DIGITALES

Amazonía Boliviana en http://amazonia.bo/amazonia_bo.php

Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra en [\(http://www.abt.gob.bo/](http://www.abt.gob.bo/)

BOLFOR (2007) en

[http://www.bolfor.org/documentos/Mapa%20de%20Derechos%20Forestales.](http://www.bolfor.org/documentos/Mapa%20de%20Derechos%20Forestales)

Bolivia (Estado Plurinacional) en

http://www.fao.org/nr/water/aquastat/countries_regions/bolivia/indexesp.stm

Centro de Planificación y Gestión Territorial Indígena-CIDOB en

<http://cidob-bo.org/cpti/>

Certificación Forestal Voluntaria en <http://www.consejoforestal.org.bo/>

Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia en [www.cidob-](http://www.cidob-bo.org/gti/territorio.html)

[bo.org/gti/territorio.html](http://www.cidob-bo.org/gti/territorio.html)

Constitución Política del Estado en

<http://www.umsa.bo/umsa/uploads/transparencia/ConstitucionPoliticaDelEstado.pdf>

Contexto Regional Amazónico en

http://www.herencia.org.bo/index.php?q=amazonia_boliviana/contexto

Convenio sobre la Diversidad Biológica en [http://www.cbd.int/doc/legal/cbd-](http://www.cbd.int/doc/legal/cbd-es.pdf)
[es.pdf](http://www.cbd.int/doc/legal/cbd-es.pdf)

Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en

<http://www.ilo.org/indigenous/Conventions/no169/lang--es/index.htm>

Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos

Indígenas en http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf

Decreto Supremo nº 23858, Reglamento de las Organizaciones Territoriales de Base en

http://www.legislacionmunicipal.fam.bo/Archivo/Docs/Decretos/DS_23858.pdf

Decreto Supremo nº 29272, Plan Nacional de Desarrollo. “Bolivia digna, soberana, productiva y democrática para vivir bien”. Lineamientos Estratégicos 2006-2011, (2007). La Paz, en

http://www.conicyt.cl/documentos/art_eliana28oct2010/BoliviaPlan_Desarrollo_Nac_2016_2011_cap%20.pdf

Department of Ecosystem Science and Management, Texas A&M University en http://essm.tamu.edu/bolivia/mapas_es.htm

Estatuto Autonómico del Beni en www.constituyentesoberana.org

FAN- Fundación Amigos de La Naturaleza en [http://www.fan-](http://www.fan-bo.org/es/index.php)
[bo.org/es/index.php](http://www.fan-bo.org/es/index.php)

FUAMO - Fundación Amigos del Museo de Historia Noel Kempff Mercado

<http://museonoelkempff.org/sitio/index.html>

Geografía de Bolivia: generalidades en

<http://geografia.laguia2000.com/geografia-regional/america/geografia-de-bolivia-generalidades>

Gestión Territorial Indígena en <http://www.cidob-bo.org/gti/gti.html>

Google Earth en <http://www.google.com/earth/index.html>

Instituto Geográfico Militar en www.igmbolivia.gob.bo/

Ley nº 1551, Ley de Participación Popular en

http://www.legislacionmunicipal.fam.bo/Archivo/Docs/Leyes/Ley_1551.pdf

Ley nº 031, Ley Marco de Autonomías y Descentralización en

<http://www.gobernabilidad.org.bo/component/content/article/2-noticias/362-ley-marco-de-autonomias-y-descentralizacion-de-bolivia>

Ley nº 1565, Ley de la Reforma Educativa en

http://www.legislacionmunicipal.fam.bo/Archivo/Docs/Leyes/Ley_1565.pdf

Ley nº 1700, Ley Forestal en

http://www.gobernacionlapaz.gob.bo/archivos/Normas/RG_Ley_1700.pdf

Ley nº 1715, Ley INRA <http://constituyentesoberana.org/info/?q=texto-ley-agraria>

Ley nº 3545, Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria en

<http://ta.organojudicial.gob.bo/1715modificada.pdf>

Nature Serve en www.natureserve.org/

Nueva Constitución Política del Estado en

<http://bolivia.unfpa.org/content/constituci%C3%B3n-pol%C3%ADtica-del-estado>

Censo 2001, Instituto Nacional de Estadística, en <http://www.ine.gob.bo/>

Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales en

<http://www.olca.cl>

Periódico El Deber (Bolivia) (12/05/2011) “Bolivia se convirtió en 1987 en el primer país adherido al programa de “intercambio de deuda por naturaleza” en

www.eldeber.com.bo/

Periódico La Razón (Bolivia) (26/09/2011) “La policía interviene la Marcha por el TIPNIS” en [http://www2.la-](http://www2.la-razon.com/version.php?ArticleId=138138&EditionId=2665)

[razon.com/version.php?ArticleId=138138&EditionId=2665](http://www2.la-razon.com/version.php?ArticleId=138138&EditionId=2665)

Red Amazónica de Información Ambiental Georreferenciada en

<http://www.raisg.socioambiental.org>.

Sociedad Bolivia.com (2011) “Afectados por incendios reciben semillas en San Ignacio de Moxos” en

<http://www.bolivia.com/noticias/AutoNoticias/DetalleNoticia44523.asp>.

TerraGo Technologies en <http://www.terragotech.com/>

GLOSARIO DE SIGLAS.

| | |
|------------------|---|
| ABT | Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras |
| ADN | Acción Democrática Nacionalista |
| AECID | Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo |
| AIOC | Autonomías Indígenas Originario Campesinas |
| APCOB | Apoyo para el Campesino-Indígena del Oriente Boliviano |
| ASL | Agrupaciones Sociales del Lugar |
| ASOPIM | Asociación de Piscicultores Indígenas de Mojos |
| BID | Banco Interamericano de Desarrollo |
| BM | Banco Mundial |
| BOLFOR | Proyecto Bolivia Forestal |
| CAT-SAN | Saneamiento Integrado al Catastro Legal |
| CCIM | Central de Cabildos Indígenales Mojeños |
| CEAM | Centro de Estudios Amazónicos |
| CEDIB | Centro de Documentación e Información de Bolivia |
| CEDLA | Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario |
| CEJIS | Centro de Estudios Jurídicos e Investigaciones Sociales |
| CEPOIM | Consejo Educativo del Pueblo Originario Indígena Mojeño |
| CFB | Cámara Forestal de Bolivia |
| CFV | Certificación Forestal Voluntaria |
| CIDDEBENI | Centro de Investigación y Documentación de Desarrollo del Beni |
| CIDOB | Confederación Indígena del Oriente Boliviano |
| CIPCA | Centro de Investigación y de Promoción del Campesinado |
| CITES | Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres |
| CNRA | Consejo Nacional de Reforma Agraria |
| CNTCB | Confederación Nacional de Trabajadores Campesinos de Bolivia |
| COASUR | Coordinadora de la Amazonía Sur para el Cambio) |
| COICA | Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica |
| COPIM | Coordinadora de Pueblo Indígenas Mojeños |

| | |
|-------------------|---|
| CPE | Constitución Política del Estado |
| CPEM-B | Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni |
| CPESC | Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz |
| CPIB | Central de Pueblos Indígenas del Beni |
| CPTI | Centro de Planificación Territorial Indígena |
| CSUTCB | Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia |
| CUMAT | Capacidad de Uso Mayor de la Tierra |
| DANINA | Agencia Danesa de Cooperación al Desarrollo |
| ESRI | Environmnet Systems Research Institute |
| FAN | Fundación Amigos de la Naturaleza |
| FAO | Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura |
| FEGABENI | Federación de Ganaderos del Beni |
| FES | Función Económica Social |
| FONABOSQUE | Fondo Nacional de Desarrollo Forestal |
| GFI | Guardia Forestal Indígena |
| GTI | Gestión Territorial Indígena |
| HOYAM | Hoya Amazónica |
| IBIBD | Instituto Boliviano de Investigación de la Biodiversidad para el Desarrollo |
| IDF | Intendencia de Desarrollo Forestal |
| IFI's | Instituciones Forestales Indígenas |
| IGM | Instituto Geográfico Militar |
| IMANI | Instituto Amazónico de Investigaciones |
| INC | Instituto Nacional de Colonización |
| INE | Instituto Nacional de Estadística |
| INRA | Instituto Nacional de la Reforma Agraria |
| MACPIO | Ministerio de Asuntos Campesinos y Pueblos Indígenas Originarios |
| MAIPO | Ministerio de Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios |
| MAS | Movimiento al Socialismo |
| MDRAyMA | Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente |
| MDSMA | Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente |

| | |
|----------------|---|
| MNR | Movimiento Nacionalista Revolucionario |
| MST | Movimiento sin Tierra |
| NCPE | Nueva Constitución Política del Estado |
| NPE | Nueva Política Económica |
| OEA | Organización de Estados Americanos |
| OIT | Organización Internacional del Trabajo |
| ONU | Organización de Naciones Unidas |
| OTB | Organizaciones Territoriales de Base |
| OTCA | Organización del Tratado de Cooperación Amazónica |
| PASOC | Pastoral Social Cáritas |
| PDD | Plan de Desarrollo Departamental |
| PDMs | Planes de Desarrollo Municipales |
| PENSAT | Plan Estratégico Nacional de Saneamiento de Tierras |
| PGM | Plan General de Manejo |
| PGMF | Planes Generales de Manejo Forestal |
| PGTI | Plan de Gestión Territorial Indígena |
| PLOT | Plan de Ordenación Territorial |
| PLUS | Plan de Usos del Suelo |
| PMF | Plan de Manejo Forestal |
| PMOT | Planes Municipales de Ordenamiento Territorial |
| PNAT | Proyecto Nacional Administración de Tierras |
| PND | Plan Nacional de Desarrollo |
| PNUMA | Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente |
| POA | Plan Operativo Anual |
| POAF | Plan Operativo Anual Forestal |
| PODEMOS | Poder Democrático Social |
| POP | Plan de Ordenamiento Predial |
| POT | Plan de Ordenamiento Territorial |
| PRODEMO | |
| RAISG | Red Amazónica de Información Ambiental Georreferenciada |
| SA | Superintendencia Agraria |

| | |
|----------------|--|
| SAE | Subsecretaría de Asuntos Étnicos |
| SAN-SIM | Saneamiento Simple |
| SAN-TCO | Saneamiento de Tierras Comunitarias de Origen |
| SENASAG | Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria. |
| SF | Superintendencia Forestal |
| SIG | Sistemas de Información Geográfica |
| SNAP | Servicio Nacional de Áreas Protegidas |
| SNIOT | Sistema Nacional de Información para el Ordenamiento Territorial |
| TCA | Tratado de Cooperación Amazónica |
| TCO | Tierra Comunitaria de Origen |
| TEA | Transformación Estructural Agraria |
| TEK | Traditional Ecological Knowledge |
| TGN | Tesoro General de la Nación |
| TIM | Territorio Indígena Multiétnico |
| TIMI | Territorio Indígena Mojeño Ignaciano |
| TIOC | Territorio Indígena Originario Campesino |
| TIPNIS | Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécre |
| TPFP | Tierras de Producción Forestal Permanente |
| UAGRM | Universidad Autónoma de Madrid |
| UAM | Universidad Nacional de Educación a Distancia |
| UCDIF | Unidad de Coordinación con Pueblos Originarios e Indígenas |
| UCPOI | Unidad de Coordinación con Pueblos Originarios e Indígenas |
| UFM | Unidad Forestal Municipal |
| UNED | Universidad Autónoma Gabriel René Moreno |
| UOT | Unidad de Ordenamiento Territorial |
| UTM | Universal Transverse Mercator |
| VAIPO | Viceministerio de Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios |
| WGS | World Geodetic System |
| ZAE | Zonificación Agroecológica |
| ZEE | Zonificación Ecológica-Económica |

ÍNDICE DE CUADROS.

| | |
|---|-----|
| Cuadro 2. 1. Índice combinado de etnicidad | 200 |
| Cuadro 3. 1. Territorio definido por cada uno de los países del Tratado de Cooperación Amazónica (TCA) y superficie correspondiente | 221 |
| Cuadro 3. 2 Poblaciones indígenas de Bolivia | 223 |
| Cuadro 3. 3 División político administrativa de Bolivia | 227 |
| Cuadro 3. 4. Unidades biogeográficas de Bolivia | 230 |
| Cuadro 3. 5. Ecorregiones de Bolivia | 232 |
| Cuadro 3. 6. Superficie de la cuenca amazónica de los países que la contienen | 237 |
| Cuadro 3. 7. Superficie subregiones Amazonía | 244 |
| Cuadro 3. 8. Regiones forestales de Bolivia y su extensión | 248 |
| Cuadro 3. 9. Principales vertientes hidrográficas de Bolivia | 251 |
| Cuadro 3. 10. Principales ríos de la cuenca amazónica boliviana | 253 |
| Cuadro 3. 11. Subcuencas de la cuenca amazónica boliviana | 254 |
| Cuadro 3. 12. Provincias y capitales de provincias del departamento del Beni | 257 |
| Cuadro 3. 13. Relación de los cantones y localidades de la provincia de Mojos | 258 |
| Cuadro 3. 14. Esquema ecorregión sabanas inundables de los Llanos de Mojos | 261 |
| Cuadro 3. 15. Fisiografía de las sabanas aluviales de Mojos, Beni | 276 |
| Cuadro 3. 16. Abundancia de las principales especies forestales de la región amazónica | 277 |
| Cuadro 3. 17. Tipos y superficie estimada (en millones de hectáreas) de cobertura vegetal en la Amazonía boliviana | 278 |
| Cuadro 4. 1. Exportaciones de Mojos, 1807-1820. | 342 |
| Cuadro 4. 2. Distribución de la población en San Ignacio de Mojos | 351 |
| Cuadro 4. 3 Población originaria por género de la TCO TIMI | 353 |
| Cuadro 4. 4. Población comunidades TIMI | 353 |
| Cuadro 4. 5. Rotación de cultivos y utilización de chacos | 361 |
| Cuadro 4. 6. Días intervenidos en la preparación de una hectárea de terreno según el sistema de chaqueo tradicional | 362 |
| Cuadro 4. 7. Participación en trabajos agrícolas | 363 |
| Cuadro 4. 8. Tipos de cultivo y promedio de superficie cultivada | 365 |
| Cuadro 4. 9. Asociación de cultivos en las comunidades de Mojos | 368 |
| Cuadro 4. 10. Calendario agrícola | 369 |
| Cuadro 4. 11. Decretos Supremos iniciales | 387 |
| Cuadro 4. 12. Matriz de conocimientos tradicionales | 412 |
| Cuadro 5. 1. Relación cronológica de Alcaldes de Mojos | 439 |
| Cuadro 5. 2. Población bovina y unidades productivas ganaderas (provincias del departamento del Beni) | 453 |
| Cuadro 5. 3. Clasificación de ganaderos según datos de FEGABENI | 455 |
| Cuadro 5. 4. Clasificación de ganaderos según datos de Roberto Aguilera | 455 |
| Cuadro 5. 5. Sistemas de explotación ganadera | 456 |
| Cuadro 5. 6. Población bovina de los cantones de la provincia de Mojos | 457 |
| Cuadro 5. 7. Relación población humana-cabezas de ganado bovino | 458 |
| Cuadro 5. 8. Sistemas de tenencia de la tierra en Bolivia | 463 |
| Cuadro 5. 9. Familias terratenientes en el departamento del Beni | 474 |
| Cuadro 5. 10. Distribución de tierras según presidentes por periodo de gobierno antes de la intervención | 476 |
| Cuadro 5. 11. Tierras distribuidas en Bolivia a través de la Reforma Agraria (según clase de beneficiario y propiedad), 1953-2002 | 477 |
| Cuadro 5. 12. Tipo de actividad | 478 |
| Cuadro 5. 13. Modo de adquisición de la propiedad | 479 |
| Cuadro 5. 14. Categorías y subcategorías del uso de la tierra en Bolivia | 480 |
| Cuadro 5. 15. Capacidad de uso mayor de la tierra del departamento del Beni (superficies en porcentajes) | 490 |

| | |
|--|-----|
| Cuadro 5. 16. Avances del proceso de ordenamiento territorial a nivel departamental | 493 |
| Cuadro 5. 17. Avances del proceso de ordenamiento territorial a nivel municipal | 494 |
| Cuadro 6. 1. Estado del proceso de saneamiento en el 2010 (en millones de hectáreas) | 528 |
| Cuadro 6. 2. Territorio Indígenas de Mojos | 547 |
| Cuadro 6. 3. Resolución Área de saneamiento | 547 |
| Cuadro 6. 4. Comunidades con saneamiento simple en la TCO TIMI hasta 2008 (en hectáreas) | 553 |
| Cuadro 6. 5. Comunidades demandantes de la TCO TIMI | 555 |
| Cuadro 6. 6 Proceso de saneamiento del TIMI | 560 |
| Cuadro 6. 7. Predios de la TCO TIMI | 563 |
| Cuadro 6. 8. Superficies tituladas en la modalidad SAN-TCO a 10 años de la Ley INRA | 585 |
| Cuadro 6. 9. Tierra saneada y certificada según tipo de propiedad en Bolivia, 1996-2009 (en hectáreas) | 590 |
| Cuadro 6. 10. Estado de saneamiento de tierras en Bolivia hasta 2009 (en hectáreas) | 591 |
| Cuadro 6. 11. Títulos y certificados por presidente | 597 |
| Cuadro 6. 12. Saneamiento por tipo de propiedad | 598 |
| Cuadro 7. 1. Superficie de áreas bajo manejo forestal y tipo de autorización en Bolivia y departamento del Beni | 609 |
| Cuadro 7. 2. Volumen de madera de las regiones productoras forestales de Bolivia | 621 |
| Cuadro 7. 3. Número de especies por grupos de frecuencia y región productora (DAP \geq 20 cm) | 622 |
| Cuadro 7. 4. Número de especies y abundancia por grupos de frecuencia en el Preandino-amazónico (DAP \geq 20 cm) | 623 |
| Cuadro 7. 5. Abundancia de las especies principales en el Preandino-amazónico | 623 |
| Cuadro 7. 6. Deforestación en el Beni, 1985-1990 | 630 |
| Cuadro 7. 7. Relación del Producto Interno Bruto de la actividad forestal en el departamento del Beni, en porcentaje | 633 |
| Cuadro 7. 8. Superficie dedicada a manejo forestal en miles de hectáreas | 634 |
| Cuadro 7. 9. Relación del valor de las exportaciones de las especies forestales en millones de dólares | 635 |
| Cuadro 7. 10. Especies maderables bolivianas de mayor producción | 635 |
| Cuadro 7. 11. Relación de los países importadores de productores forestales de Bolivia y su valor en dólares para el año 2006 | 636 |
| Cuadro 7. 12. Departamentos exportadores de productos forestales | 636 |
| Cuadro 7. 13. Concesiones forestales en el municipio de San Ignacio de Mojos, reguladas por PGMF desde marzo de 1997 a diciembre de 2002 | 646 |
| Cuadro 7. 14. Autorizaciones de aprovechamiento forestal en comunidades indígenas de la TCO TIMI bajo PGMF | 668 |
| Cuadro 7. 15. Aprobación de POAF mayores a comunidades de la TCO TIMI con PGMF | 672 |
| Cuadro 7. 16. Tasa anual de deforestación en Bolivia | 680 |
| Cuadro 7. 17. Tasa de quemas en Bolivia | 683 |
| Cuadro 7. 18. Focos de calor según departamento en 2011 | 685 |
| Cuadro 7. 19. Focos de calor según época | 686 |
| Cuadro 7. 20. Focos de calor según actividad | 687 |
| Cuadro 7. 21. Número de Procesos según departamento | 695 |

ÍNDICE FIGURAS.

| | |
|---|-----|
| Figura 1. 1. Localización del área de estudio | 32 |
| Figura 1. 2. Distribución de los pueblos indígenas de Bolivia | 34 |
| Figura 1. 3. Interacción sistema social mojeño-ecosistema | 58 |
| Figura 1. 4. Superposición de límites de la TCO TIMI | 64 |
| Figura 1. 5. Esquema demanda TIMI | 68 |
| Figura 1. 6. Ejemplo de cuaderno de notas | 77 |
| Figura 1. 7. Esquema proceso de investigación | 79 |
| Figura 1. 8. Croquis sobre los usos del suelo y conflictos en el TIMI | 82 |
| Figura 1. 9. Ejemplo de salida gráfica sobre la vegetación del Beni y la TCO TIMI | 84 |
| Figura 1. 10. Roles teórico-sociales para el trabajo de campo | 86 |
| Figura 1. 11. Zonas del área de estudio a las que se accedió | 94 |
| Figura 2. 1. Esquema proceso de territorialidad | 116 |
| Figura 2. 2. Sistemas de conocimiento | 121 |
| Figura 2. 3. Diferencias ontológicas | 124 |
| Figura 2. 4. Diseño imagen “Madre Tierra” | 140 |
| Figura 2. 5. Apropiación del territorio | 167 |
| Figura 2. 6. Todas las identidades son tóxicas | 173 |
| Figura 3. 1. Mapa de pérdidas territoriales de Bolivia | 225 |
| Figura 3. 2. Propuesta Amazonía | 239 |
| Figura 3. 3. Cuenca amazónica y límites biogeográficos | 241 |
| Figura 3. 4. Delimitación geográfica de la Amazonía | 242 |
| Figura 3. 5. Mapa Amazonía y subregiones | 243 |
| Figura 3. 6. Mapa hidrografía de Bolivia | 250 |
| Figura 3. 7. Llanos de Mojos en relación a la cuenca amazónica | 265 |
| Figura 3. 8. Llanos de Mojos en relación a la geomorfología continental | 266 |
| Figura 3. 9. Proceso de inundación en la Llanura de Mojos | 274 |
| Figura 3. 10. Esquema del intercambio de energía/biomasa en los lagos amazónicos | 280 |
| Figura 3. 11. Terraplenes (1,3): Canales (2,3); Lagunas (3); Campos elevados (4) | 298 |
| Figura 4. 1. Esquema de la ocupación humana de la Amazonía y Mojos | 319 |
| Figura 4. 2. Sistema de manejo de recursos | 326 |
| Figura 4. 3. Límites territoriales de los <i>Mojocosi</i> | 330 |
| Figura 4. 4. Imagen de indígenas del periodo jesuítico tocando el “jeruri” | 336 |
| Figura 4. 5. Mapa “Moxitania” en el Perú colonial | 342 |
| Figura 4. 6. Mapa de rutas de la búsqueda de la Loma Santa | 346 |
| Figura 4. 7. Esquema de manejo de un chaco | 360 |
| Figura 4. 8. Esquema de nichos ecológicos: uso agrícola y productivo | 364 |
| Figura 4. 9. Dimensiones espacial y temporal del conocimiento indígena | 413 |
| Figura 4. 10. Sistema tradicional del uso de recursos | 415 |
| Figura 4. 11. Imagen de la hoja de la uña de gato (<i>Uncaria guianensis</i>) | 422 |
| Figura 5. 1. Imagen territorios cercados | 436 |
| Figura 5. 2. Esquema territorial de las comunidades ignacianas del TIMI | 447 |
| Figura 5. 3. Esquema discontinuidad interna TCO | 468 |
| Figura 5. 4. Esquema del PLOT | 485 |
| Figura 5. 5. Esquema de la ZAE | 486 |
| Figura 5. 6. ZAE de Bolivia | 487 |
| Figura 5. 7. Estructura Institucional del Ordenamiento Institucional de Bolivia | 488 |
| Figura 5. 8. Ordenamiento territorial en Bolivia por departamentos | 490 |
| Figura 5. 9. Esquema ZAE | 505 |
| Figura 5. 10. Diagnóstico del territorio | 506 |
| Figura 5. 11. Recopilación y sistematización de la Información | 507 |
| Figura 5. 12. Propuesta PLUS TCO TIMI | 508 |
| Figura 6. 1. Organigrama general del INRA | 525 |
| | 826 |

| | |
|--|-----|
| Figura 6. 2. Demanda TCO TIMI Y polígonos de predios | 559 |
| Figura 7. 1. Ilustración Amazonía | 602 |
| Figura 7. 2. Tierras forestales de Bolivia y ubicación de la TCO TIMI | 612 |
| Figura 7. 3. Vegetación de Bolivia | 614 |
| Figura 7. 4. Aportes del sector forestal a la economía boliviana | 617 |
| Figura 7. 5. Principales regiones forestales productoras de Bolivia | 619 |
| Figura 7. 6. POAF y PGMF en la TCO TIMI | 669 |
| Figura 7. 7. Mapa de distribución de incendios en el bosque amazónico (2003-2006) | 683 |
| Figura 7. 8. Mapa de la evolución de los focos de calor del departamento del Beni entre el año 2000 y 2004 | 688 |
| Figura 7. 9. Secuencia de mapas de focos de calor en el municipio de San Ignacio de Mojos (2001-2005) | 690 |
| Figura 7. 10. Esquema impactos sobre el bosque en la TCO del TIMI | 699 |
| Figura 7. 11. Cobertura vegetal TCO TIMI | 701 |
| Figura 7. 12. Cobertura vegetal del TIMI y predios ganaderos | 703 |
| Figura 8. 1. Diseño de Gestión Territorial | 721 |
| Figura 8. 2. Dimensiones múltiples de la gestión territorial indígena | 740 |
| Figura 8. 3. Sistema de Gestión Territorial Indígena-CIDOB | 741 |
| Figura 8. 4. Esquema Gestión Territorial Indígena-Autonomía Indígena | 744 |

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS.

| | |
|--|-----|
| Fotografía 1. 1. Llanura de Mojos | 33 |
| Fotografía 1. 2 Indígenas aymaras en Bolivia | 38 |
| Fotografía 3. 1. Imagen de los científicos deliberando los límites de la Amazonía | 240 |
| Fotografía 3. 2. Imágenes aéreas de inundación de la llanura del Beni | 271 |
| Fotografía 3. 3. Imágenes de la intransitabilidad del camino Trinidad-San Ignacio de Mojos | 272 |
| Fotografía 3. 4. Imagen Llanos de Mojos | 273 |
| Fotografía 3. 5. Imagen de ganado en pastizal parcialmente inundado | 275 |
| Fotografía 3. 6. Imágenes del río Mamoré a su paso por la pampa mojeña | 283 |
| Fotografía 3. 7. Imagen río Tijamuchí | 284 |
| Fotografía 3. 8. Imagen bosque de semialtura | 286 |
| Fotografía 3. 9. Imágenes bosques de galería | 288 |
| Fotografía 3. 10. Imágenes aéreas del río Senero y Tijamuchí del TIMI | 288 |
| Fotografía 3. 11. Imágenes plantas heliofíticas (leguminosas) | 290 |
| Fotografía 3. 12. Imagen de bosque amazónico de piedemonte andino en el TIMI | 291 |
| Fotografía 3. 13. Imagen de sabana mojeña | 292 |
| Fotografía 3. 14. Imagen de curichi con taropé (arriba) y especie de trébol de agua (abajo) | 294 |
| Fotografía 3. 15. Imagen de curichis con cañuelas | 294 |
| Fotografía 3. 16. Imagen de <i>Victoria regia</i> en bajíos mojeños. | 295 |
| Fotografía 3. 17. Imagen de junquillar de un yomomo | 295 |
| Fotografía 3. 18. Imagen del río Apere (aguas negras) | 301 |
| Fotografía 3. 19. Imágenes de la laguna Isirere | 302 |
| Fotografía 3. 20. Imagen laguna natural TIMI | 302 |
| Fotografía 3. 21. Imagen laguna artificial TIMI | 303 |
| Fotografía 3. 22. Imágenes yomomos y curichis TIMI | 304 |
| Fotografía 3. 21. Flora del territorio mojeño-ignaciano | 311 |
| Fotografía 3. 22. Fauna del territorio mojeño-ignaciano | 313 |
| Fotografía 4. 1. Imágenes de Tihuanaco | 318 |
| Fotografía 4. 2. Imágenes del yacimiento de Samaipata | 323 |
| Fotografía 4. 3. Imagen de la entrada a San Ignacio (viviendo desde San Borja) | 351 |
| Fotografía 4. 4. Imágenes de chacos | 359 |
| Fotografía 4. 5. Imagen de arrozales (izquierda) y de maíz (derecha) | 366 |
| Fotografía 4. 6 Imagen de plantación de plátanos en Santa Anita del Mátire | 366 |
| Fotografía 4. 7. Imagen de canoas (Laguna Isirere, San Ignacio de Mojos) | 371 |
| Fotografía 4. 8. Imagen de malla de pescar | 371 |
| Fotografía 4. 9. Imagen de poza de la comunidad de Monte Grande Km 5 | 372 |
| Fotografía 4. 10. Imagen ASOPIM (izquierda) y HOYAM (derecha) | 374 |
| Fotografía 4. 11. Proceso de captura y de preparación de pescado en comunidades | 376 |
| Fotografía 4. 12. Animales domésticos en comunidad ignaciana | 376 |
| Fotografía 4. 13. Imagen de ovejas de pelo en la comunidad Villa Esperanza y en la feria anual de San Ignacio de Mojos | 377 |
| Fotografía 4. 14. Imágenes de ganado en comunidades del TIMI | 378 |
| Fotografía 4. 15. Imágenes de objetos fabricados con madera | 379 |
| Fotografía 4. 16. Imágenes artesanía mojeña | 380 |
| Fotografía 4. 17. Imágenes Cabildo Indigenal: Villa Esperanza (izquierda) y San Ignacio (derecha) | 395 |
| Fotografía 4. 18. Imagen de escuela (comunidad de Flores Coloradas) | 421 |
| Fotografía 4. 19. Imagen fiesta de San Ignacio: procesión y desfiles | 423 |
| Fotografía 4. 20. Imágenes “macheteros” y flautistas | 424 |
| Fotografía 4. 21. Imagen de “Achus” | 425 |
| Fotografía 4. 22. Imagen de horno en una vivienda ignaciana | 426 |
| | 828 |

| | |
|---|-----|
| Fotografía 4. 23. Imágenes vivienda mojeña (comunidad de Fátima, TIMI) | 437 |
| Fotografía 4. 24. Imágenes Iglesia de San Ignacio de Mojos | 428 |
| Fotografía 5. 1. Imagen de vaca con signos de quedar atrapada en las quemas estivales (TIMI) | 451 |
| Fotografía 5. 2. Imágenes de estancias ganaderas al interior de la TCO TIMI | 453 |
| Fotografía 5. 3. Imagen de estancia ganadera del sistema de explotación extensivo al interior del TIMI | 456 |
| Fotografía 5. 4. Imagen de vaca de reza cebú | 457 |
| Fotografía 5. 5. Imagen de ganado y peones | 458 |
| Fotografía 7. 1. Imágenes de objetos cotidianos utilizados por los ignacianos a partir de recursos maderables | 639 |
| Fotografía 7. 2. Imagen de cargado de trozas den rodeo | 645 |
| Fotografía 7. 3. Imágenes de árboles recién cortados por <i>pirata</i> | 649 |
| Fotografía 7. 4. Imágenes de tabloneado de productores autónomos en San Ignacio de Mojos | 650 |
| Fotografía 7. 5. Imágenes de apertura de caminos al interior de la TCO TIMI | 681 |
| Fotografía 7. 6. Imágenes de quemas al interior de la TCO TIMI (vista del predio El Dieciséis) | 682 |
| Fotografía 7. 7. Imagen aérea de zona de desmonte (cercanías de San Ignacio de Mojos) | 696 |
| Fotografía 7. 8. Árbol de mara en San Miguel del Mátire | 697 |
| Fotografía 7. 9. Imagen impacto en la cobertura vegetal de estancias y comunidades | 702 |
| Fotografía 7. 10. Imagen de conversión del suelo de estancia ganadera: La Pascana | 706 |
| Fotografía 7. 11. Imágenes árboles, frutos y semillas del cacao | 708 |
| Fotografía 7. 12. Imágenes de árboles de motacú (superior) y sus frutos en la fase de secado (inferior) | 715 |
| Fotografía 7. 13. Imagen de comunaria ignaciana sacando el fruto del motacú | 716 |

ÍNDICE DE GRÁFICOS

| | |
|---|-----|
| Gráfico 4. 1. Población de Mojos | 352 |
| Gráfico 5. 1. Distribución de la tierra en la provincia de Mojos | 478 |
| Gráfico 6. 1. Superficie titulada por modalidad de saneamiento en Bolivia a 2006 (has.) | 551 |
| Gráfico 6. 2. Superficie de estado de saneamiento según modalidad en el departamento del Beni a 2006 (has.) | 552 |
| Gráfico 6. 3. Avance del saneamiento según estructura de tenencia de la tierra por tipos de propiedad | 589 |
| Gráfico 6. 4. Presupuesto anual del INRA en porcentajes (2001-2008) | 592 |
| Gráfico 6. 5. Superficie en estado de saneamiento 1996-2007 | 595 |
| Gráfico 7. 1. Tasa de deforestación por usuarios forestales en Bolivia | 607 |
| Gráfico 7. 2. Superficie de deforestación Bolivia (has.) | 608 |
| Gráfico 7. 3. Superficie aprovechamiento forestal en el Beni | 611 |
| Gráfico 7. 4. Volumen de las especies principales en Preandino-amazónico | 624 |
| Gráfico 7. 5. Derechos forestales otorgados por usuarios | 660 |
| Gráfico 7. 6. Áreas con CFV en Bolivia, periodo 1996-2002 | 665 |
| Gráfico 7. 7. Comparación focos de calor 2010-2011 | 686 |
| Gráfico 7. 8. Desmontes bajo seguimiento (has.) | 695 |

ÍNDICE DE MAPAS.

| | |
|---|-----|
| Mapa 1. 1. TCO TIPNIS | 40 |
| Mapa 1. 2. TCO TIM | 40 |
| Mapa 3. 1. Mapa Político de Bolivia | 226 |
| Mapa 3. 2. Regiones naturales y TCOs de Bolivia | 229 |
| Mapa 3. 3. Ecorregiones de Bolivia | 233 |
| Mapa 3. 4. Unidades fisiográficas de Bolivia | 236 |
| Mapa 3. 5. Subcuencas de Bolivia | 252 |
| Mapa 3. 6. Departamento del Beni | 259 |
| Mapa 3. 7. Mapa de Unidades de suelo de Bolivia | 268 |
| Mapa 3. 8. Red hidrográfica de Mojos | 282 |
| Mapa 3. 9. Bolivia-Beni-TCO TIMI | 299 |
| Mapa 3. 10. Hidrografía TIMI | 303 |
| Mapa 3. 11. Ecosistemas de Mojos y TCO TIMI | 305 |
| Mapa 3. 12. Geomorfología TIMI | 306 |
| Mapa 3. 13. Formaciones vegetales TIMI | 307 |
| Mapa 4. 1. Reducciones jesuíticas siglo XVIII | 333 |
| Mapa 4. 2. Piscicultura en los Llanos de Mojos, promovida por HOYAM (2005) | 373 |
| Mapa 5. 1. Áreas de producción agrícola y ganadera en las Tierras Bajas | 462 |
| Mapa 5. 2. Usos de la tierra en Bolivia | 481 |
| Mapa 5. 3. Plan de Usos del Suelos Bolivia | 484 |
| Mapa 5. 4. ZAE del Beni | 495 |
| Mapa 5. 5. Usos del suelo departamento del Beni | 496 |
| Mapa 5. 6. Usos del suelo de la TCO TIMI | 500 |
| Mapa 6. 1. Predios titulados a agosto de 2009 | 529 |
| Mapa 6. 2. TCOs de Bolivia y territorio indígenas de Mojos | 549 |
| Mapa 6. 3. Polígono de la demanda de la TCO TIMI | 558 |
| Mapa 6. 4. Estancias ganaderas en el TIMI | 562 |
| Mapa 6. 5. Mapa de irregularidades en la firma de títulos de propiedad en la TCO TIMI | 576 |
| Mapa 6. 6. Conflictos TIMI | 579 |
| Mapa 6. 7. Titulación de TCOs en las Tierras Bajas de Bolivia | 587 |
| Mapa 6. 8. Áreas tituladas en el Beni por modalidad | 588 |
| Mapa 7. 1. Potencial forestal de Bolivia y de la TCO TIMI | 616 |
| Mapa 7. 2. PGMF de la TCO TIMI | 674 |
| Mapa 7. 3. Derechos forestales de Bolivia | 676 |
| Mapa 7. 4. Imagen satélite de cobertura forestal del TIMI | 705 |

ANEXO 1. LISTADO DE ENTREVISTAS A INFORMANTES CLAVE.

| Nombre | Ocupación |
|--------------------------|---|
| Adela Cucere | Representante Mujeres Algodonal |
| Alfredo Matareco | Responsable Unidad Forestal de San Ignacio de Mojos |
| Ángela Noza | Secretaria de Tierras y Territorio CPEM-B |
| Basilio Nolvani | Alcalde de San Ignacio de Mojos |
| Carmen Tibi | Presidenta Mujeres El Buri |
| Celso Saavedra | Corregidor Santa Anita del Mátire |
| Dafne Skalidou | Técnica HOYAM |
| Dionisio Noza | Corregidor Flores Coloradas |
| Domingo Masueto | Corregidor Fátima |
| Edwin Ardaya (seudónimo) | Ganadero |
| Erasmó Yujo | Presidente Subcentral TCO TIMI |
| Esli Jare | Presidenta Mujeres San Miguel del Mátire |
| Esteban Pacema | Corregidor Chontal |
| Francisco Moye | Corregidor Litoral |
| Gladis Viana | Presidenta Concejo Municipal San Ignacio de Mojos |
| Gregorio Nuni | Responsable de Cultura Municipio San Ignacio de Mojos |
| Hernán Ávila | Directo CEJIS |
| Hilario Jiménez | Corregidor Argentina |
| Ignacio Apace | Corregidor Cabildo San Ignacio de Mojos |
| Ignacio Cucere | Corregidor Algodonal |
| Isidro Yujo | Presidente CPEM-B |
| Ismael Guzmán | Sociólogo (CIPCA) |
| Jackeline Ruiz | Secretaria Juzgado Agrario San Ignacio de Mojos |
| John Kudrenecky | Director HOYAM |
| Juan Bautista | Corregidor San Miguel del Mátire |
| Juan Jau | Corregidor Nueva Brisa |
| Julio Sita | Corregidor Villa Esperanza |
| Luis Matareco | Corregidor Bermeo |
| Luis Rivero Parada | Profesor San Ignacio de Mojos |
| Miguel Aragón | Coordinador CPIB (CIDOB) y antiguo Presidente de INRA |
| Miguel Arias | Presidente Asociación de Ganaderos San Ignacio de Mojos |
| Miguel Peña | Asambleísta Constituyente pueblo mojeño |
| Mirna Liz Inturias | Socióloga (PASOC) |
| Oliver Vaca | Ingeniero Agrónomo (CIPCA) |
| Pedro Añez | Secretario de Tierras y Territorio de TCO TIMI |
| Pilar Juliu | Representante Organización de Mujeres TIMI |
| Regina Jiménez | Presidenta Mujeres Villa Esperanza |
| Robert Ríos | Jefe Nacional de Promoción del Desarrollo Integral de Bosques |
| Roberto Aguilera | Técnico FEGABENI |
| Rosario Cunavi | Vicepresidenta CPEM-B |
| Teodosia Rojas | Corregidora Santa Rita |
| Wilder Molina | Sociólogo (CIPCA) |
| Wilson Rocel | Corregidor el Buri |
| Zulema Lehm | Socióloga (CIDDEBENI) |

ANEXO 2. ENCUESTAS DE HOGAR.

| | |
|----------------------|--------|
| Comunidad: | Fecha: |
| Grupo étnico: | |
| Nombre entrevistado: | |

I. INFORMACIÓN GENERAL.

1. Sexo: M F
2. Edad:
3. Año de escolaridad:
 Primaria Secundaria Universidad
- 4.Cuál es su ocupación actual?
5. Por favor, complete la siguiente tabla:

| Miembros de la familia | Relación (parentesco) | Edad |
|------------------------|-----------------------|-------|
| 1..... | | |
| 2..... | | |
| 3..... | | |
| 4..... | | |
| 5..... | | |
| 6..... | | |
| 7..... | | |
| 8..... | | |
| 9..... | | |
| 10..... | | |

Otros (por favor, especificar).....

6. Idioma con el que aprendió a hablar (lengua materna)
 Castellano Mojeño-ignaciano
7. Actualmente habla lengua indígena. Si es no, ¿por qué?
8. ¿Qué espacios constituyen su vivienda?
Cocina Habitación Chaco (familiar propio/ prestado/ alquilado/ comunal).

II. TENENCIA DE LA TIERRA.

9. ¿A quién pertenecen las propiedades agrícolas que trabaja?
10. ¿Qué superficie posee su chaco?
 Menos de 1 hectárea Entre 2 y 3 hectáreas Más de 3 hectáreas
11. ¿Posee títulos o documentos de propiedad?
12. ¿Ha tenido algún tipo de conflicto por la propiedad de la tierra?
13. ¿Cuántas personas trabajan en el chaco familiar?

| Hombres | Mujeres | Niños/as |
|-----------------------|---------|----------|
| N | | |
| Relación (parentesco) | | |

14. ¿Cuál es la forma de acceso a la propiedad de la tierra?

Dotación Herencia Donación Compra-venta Otra (especificar)

III. ACTIVIDADES NO AGROPECUARIAS.

15. ¿De dónde provienen sus ingresos?

16. ¿Ha trabajado alguna vez de forma temporal como empleado fuera de la comunidad?

17. ¿Durante cuánto tiempo estuvo empleado?

Semanas... Meses... Años ...

18. ¿Cuánto fueron sus ingresos? (Total en Bs.)

19. ¿Dónde destina el dinero de sus ingresos?

20. ¿Qué miembros de su familia trabajan y cuánto ganan entre todos?

21. ¿Usted o algún miembro de su familia ha cambiado alguna vez su residencia?

22. En caso afirmativo, ¿cuál fue el motivo?

23. ¿Por cuánto tiempo?

24. ¿A qué lugares ha sido el traslado?

25. ¿Después de ello volvieron a su comunidad?

IV. ACTIVIDADES AGROSILVOPASTORIALES y GESTIÓN DEL TERRITORIO.

26. ¿Qué tipos de terrenos existen en la comunidad? (nombre y ubicación).

27. ¿Qué de actividades realiza usted y su familia?

Agrícolas Ganaderas Forestales Domésticas Recolectoras Otras
(especificar)

28. ¿Qué sistema de cultivo desarrolla en su chaco?

29. ¿Qué productos obtiene con el cultivo de sus chacos?

30. ¿A qué tipo de consumo se destinan los productos?

| | Venta | Autoconsumo | Trueque |
|------------|-------|-------------|---------|
| Proporción | | | |

31. En caso de venta y trueque, ¿a qué mercados o destinatarios se dirige?

32. ¿Posee su familia animales?

Cerdos Gallinas Patos Ovejas Vacas Otros (especificar)

33. ¿A qué tipo de consumo se destinan?

| | Venta | Autoconsumo | Trueque |
|------------|-------|-------------|---------|
| Proporción | | | |

34. ¿Practica la caza?

35. ¿Qué especies son las más comúnmente obtenidas?

36. ¿Con qué armas sale usted a cazar?

37. ¿Lo hace sólo o en compañía?

38. ¿A qué distancia se desplaza cuando sale a cazar?

39. ¿Cuántas horas le dedica a una partida?

40. ¿Cubre esta actividad el consumo familiar?

41. ¿Existe alguna regulación que controle el número de animales obtenidos en las actividades de caza y pesca?

42. En caso afirmativo, ¿de qué tipo?

43. ¿Desde cuándo?

44. ¿Existen en su comunidad pozas de piscicultura?

Familiares Comunes

45. ¿A qué tipo de consumo se destinan?

| | Venta | Autoconsumo | Trueque |
|------------|-------|-------------|---------|
| Proporción | | | |

46. ¿Los ingresos que obtienen con el cultivo de peces, mejoran la calidad de vida de su familia?

V. MANEJO FORESTAL.

47. ¿Qué recursos forestales extrae usted o su familia?

| Tipo | Proporción (unidades o pies) |
|---------------------|------------------------------|
| Palo María | |
| Verdolago | |
| Ochoó | |
| Mara | |
| Tacuara | |
| Guayabochi | |
| Cedro | |
| Almendrillo | |
| Otros (especificar) | |

48. ¿A qué destinan los recursos maderables?

Viviendas Venta Artesanía Utensilios domésticos

49. ¿Qué herramientas utilizan en la extracción de madera?

Hachas Machetes Motosierras

50. ¿A dónde destinan los ingresos de su venta?

51. ¿A quién vende los productos maderables?

52. ¿Existe control en la extracción de recursos en su comunidad?

53. En caso afirmativo, ¿de qué tipo?

54. ¿Quién concede en su comunidad el permiso para extraer y comerciar con recursos maderables?

55. ¿Cree que deberían existir otras?

56. En caso afirmativo, ¿de qué tipo?

57. ¿Ha incumplido alguna vez las normas?

58. Y ¿algún comunario de su comunidad?

59. ¿Qué tipo de sanción se impone en su comunidad?

60. ¿Le parece correcto que se controle la venta de recursos maderables?

61. ¿Ha mantenido relaciones comerciales con productores autónomos (*piratas* o *cuartoneros*)?

62. En caso afirmativo, ¿cuáles fueron las condiciones del acuerdo?

63. ¿Y con empresas forestales?

64. En caso afirmativo, ¿cuáles fueron las condiciones del acuerdo?

65. ¿Han operado las empresas forestales en esta comunidad?

66. En caso afirmativo, ¿qué tipo de actividades se practicaron?

67. ¿Fue la comunidad beneficiada tras dichas actividades?

68. En caso afirmativo, ¿de qué manera?

69. ¿Conoce usted los planes de manejo forestal?

70. ¿Su comunidad ha adoptado alguna vez algún plan de manejo forestal?

71. En caso afirmativo, ¿quién lo ha diseñado?

72. ¿Qué beneficios obtuvo la comunidad con el plan de manejo?

73. ¿Durante cuánto tiempo se aplicó?

VI. PERCEPCION.

74. ¿Percibe algún tipo de amenazas que hayan tenido lugar o están teniendo en el territorio comunal?

75. En caso afirmativo, ¿de qué tipo?

76. ¿Se han adoptado medidas para resolver tales situaciones?

77. En caso afirmativo, de qué tipo?

78. ¿Considera necesario cuidar de los recursos del territorio?
79. ¿Por qué?
80. ¿Existe algún recurso que resulte difícil conseguir en los bosques comunales?
81. En caso afirmativo, ¿cuáles? y ¿por qué?
82. ¿A qué cree que se debe?
83. ¿Considera que tienen territorio suficiente para sus actividades?
84. ¿Son terrenos adecuados para el cultivo de productos agrícolas?
85. ¿De unos años a esta parte, cree que se han producido cambios en las actividades practicadas en las comunidades?
86. En caso afirmativos, ¿de qué tipo?
87. ¿Cómo es la situación actual en cuanto a los recursos naturales del territorio comunal?
88. ¿Qué significa el territorio para usted?
89. ¿Cree que es suficiente la superficie titulada para la TCO?
90. ¿Qué cree que sucederá si el número de familias aumenta?
91. ¿Está conforme con la resolución del título de propiedad de la TCO del TIMI?
92. Existen conflictos en su comunidad por la propiedad de la tierra?
93. En caso afirmativo, ¿frente a quiénes?
94. ¿Qué estrategias se han adoptado en su comunidad para resolverlos?
95. ¿Qué solución cree que sería posible para consolidar el territorio actual?
96. ¿Qué cree usted que ocurriría en un futuro si vieran restringido el acceso al territorio?
97. El proceso de demanda de tierras, ¿ha generado cambios en su comunidad?
98. En caso afirmativo, de qué tipo?
99. ¿De qué manera transmiten los conocimientos que poseen sobre el manejo de los recursos y de la tierra?
100. ¿Cree que ha habido algún cambio en la forma de relacionarse con los miembros de su comunidad?
101. Y, ¿con los terceros?
102. ¿Cree que el paisaje de la región haya sufrido alteraciones?
103. En caso afirmativo, ¿de qué manera?
104. ¿Cree que las estancias ganaderas han transformado los usos y el acceso a la tierra?
105. En caso afirmativo, ¿de qué manera?
106. ¿Y las empresas forestales?
107. En caso afirmativo, ¿de qué manera?

108. ¿Qué diferencias existen entre los espacios ocupados por las estancias ganaderas y las comunidades?
109. ¿Qué espacios considera más apropiados para las comunidades?
110. ¿Podrían desarrollar las mismas actividades en otros espacios?

ANEXO 3: EXTRACTO DEL ESTATUTO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANITA DEL MÁTIRE.

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO.

Lo que está permitido y lo que está prohibido en el aprovechamiento de los recursos naturales de la comunidad.

Artículo 54. Para todos los comunarios y comunarias está permitido el uso de los recursos naturales de la comunidad bajo los principios de la equidad y siempre y cuando se proceda de acuerdo a lo que se establece a continuación:

- a. Cazar, pero sólo para consumo familiar.
- b. Pescar, pero sólo para consumo familiar.
- c. Extraer madera redonda para construcción de vivienda propia.
- d. Extraer tacuara y hola de motacú para construcción de vivienda propia.
- e. Se puede sacar madera aserrada pero sólo para la construcción de su propia vivienda, pero previamente debe tener autorización de la reunión comunal.
- f. Sacar leña para consumo y para la venta pero solo de su propio chaco, o si es del monte debe ser sólo de palos secos.
- g. Chaquear para sembrar hasta un máximo de dos hectáreas.

Artículo 55. En caso de necesidad justificada, un comunario podrá sacar madera redonda para negocio, pero siempre y cuando tenga autorización de la reunión comunal.

Artículo 56. Para las personas de fuera de la comunidad queda completamente prohibido lo siguiente:

- a. Está prohibido ingresar a extraer madera redonda.
- b. Está prohibido ingresar a extraer madera aserrada., pero sólo para consumo familiar.
- c. Está prohibido ingresar a cazar, caso contrario se le decomisará producto, herramientas y armas.
- d. Está prohibido ingresar a pescar.
- e. Está prohibido el ingreso de ganado vacuno de propietarios de fuera de la comunidad.

ANEXO 4: CUADRO DE POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES POR ZONAS Y SUBSECTORES DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO DE MOJOS:
Plan de desarrollo municipal de San Ignacio de Mojos.

SUBSECTOR FORESTAL.

| Ejes temáticos | Variables de referencia | Potencialidades | Limitaciones |
|-------------------------------|--------------------------------|---|---|
| Aspecto físico natural | Situación geográfica | Existencia de diferentes pisos ecológicos y diversidad de formaciones boscosas | Geografía heterogénea muy frágil |
| | Suelos | Diversos tipos de suelos agroforestales | Suelo con problemas de regeneración (lenta) |
| | Recursos hídricos | Existencia de bosques de galería con gran riqueza forestal | Depredación de bosques y tala indiscriminada |
| | Recursos forestales | Existencia de diferentes tipos de bosques (pie de monte, bosques de alturas y bosques de semi alturas) con presencia de especies maderables de alto valor económico | Tala selectiva de recursos forestales y poca aplicación de planes de manejo |
| Aspecto socio-cultural | Población | Las empresas madereras concentran a cantidad de trabajadores | Movimiento de pobladores hacia los aserraderos temporalmente |
| | Transporte y comunicación | Las empresas madereras cuentan con vías de comunicación que permite el acceso de vehículos hacia los aserraderos | El acopio de la madera produce deforestación de terrenos |
| Aspecto económico- | Sistemas de producción | Existencia de bosques naturales ricos en | Concesiones madereras que |

| | | | |
|---|--|---|--|
| productivo | | especies maderables y no maderables. Comunidades y empresas privadas con planes de manejo y aprovechamiento de recursos forestales | realizan depredación de los bosques con la tala indiscriminada. Control insuficiente sobre la extracción de la madera |
| | Sistemas económicos por zonas y rubros más importantes | Gran demanda de madera en todo el país. Mercado asegurado | La Ley Forestal no ha sido difundida adecuadamente en todo el país. Los planes de manejo no son aplicados, la Ley no se aplica. |
| Aspecto organizativo-institucional | Formas de organización seccional, comunal e intercomunal | La Superintendencia Forestal tiene presencia en la jurisdicción municipal | Poco personal y deficiencias en el funcionamiento de la Unidad Forestal |

SUBSECTOR AGRÍCOLA

| Ejes temáticos | Variables de referencia | Potencialidades | Limitaciones |
|-------------------------------|--------------------------------|---|--|
| Aspecto físico natural | Situación geográfica | Ecosistema diverso y unidades geográficas | Ecosistemas con poco poder de regeneración |
| | Suelos | Existencia de suelos aptos para la agricultura | Fragilidad ecológica de los suelos |
| | Recursos hídricos | Zona o jurisdicción municipal que se encuentra en la subcuenca del Mamoré | Inundaciones permanentes que afecta la producción agrícola |
| | Recursos forestales | Aplicación del sistema de producción agroforestal en las comunidades | Las diferentes concesiones madereras, han depredado los bosques. |

| | | | |
|--|---|---|---|
| | | indígenas, riqueza forestal abundante con presencia de especies maderables y no maderables | Presencia de motosierristas clandestinos que cuartonean la madera |
| | Biodiversidad | Gran cantidad de especies de flora y fauna representativa de la zona | Fragilidad ecológica del medio, limita el aprovechamiento de los recursos de flora y fauna |
| | Evaluación de la calidad ambiental: capacidad regenerativa de los suelos, atmósfera, vegetal y animal | La región es característica de los llanos orientales con abundante presencia de flora y fauna y baja contaminación | La depredación de las riquezas naturales ocasiona un desequilibrio ecológico que vulnera la débil capacidad de regeneración de los bosques y un lento repoblamiento de especies de animales |
| Aspecto socio-cultural-productivo | Población | La población urbana y rural en su mayoría realiza la producción agrícola para cubrir las necesidades de alimentación familiar | La producción es de subsistencia y en pocas cantidades con utilización de especies locales |
| | Transporte y comunicación | Existencia de caminos vecinales hacia los centros poblados más importantes del municipio Transporte fluvial conectado a puertos y carreteras troncales | Alto costo de transporte de los productos agrícolas y estacionalidad en la utilización de carreteras El período de sequía afecta negativamente al transporte fluvial paralizándolo |
| Aspecto | Sistema de | La producción agrícola | La producción es |

| | | | |
|-----------------------------|---|---|---|
| económico-productivo | producción | es realizada por la gran mayoría de los habitantes del sector urbano y rural, cubren las necesidades alimenticias de la familia y generan ingresos económicos Existencia de suelos aptos para la agricultura | tradicional y en pequeña escala con la utilización de variedades locales Debe mejorarse el sistema de producción para realizar un mejor uso del suelo |
| | Sistemas económicos por zonas y rubros más importantes | Gran demanda de productos agrícolas en el mercado local | Poca diversificación de la producción agrícola. Los productos comercializados no cuentan con valor agregado (transformación de productos) |
| | Sistema económico municipal | Existencia de créditos y donaciones de instituciones financieras nacionales y extranjeras que apoyan el municipio con proyectos productivos | Poca experiencia de relacionamiento del municipio con organismos financieros y sus líneas de financiamiento. Una pobre información sobre líneas y entidades financieras debido al centralismo administrativo |
| | Rol productivo de la mujer en el desarrollo del municipio | La mujer ha asumido su responsabilidad dentro de las instancias administrativas del gobierno municipal, prefectural y otras instituciones. | Persistencia del celo profesional. Se utilizan semillas y variedades locales que no permiten tener buenas cosechas |

| | | | |
|---|---|---|--|
| | | A nivel productivo la intervención de la mujer es importante porque ella en el mayor de los casos se encarga de la producción de hortalizas y la comercialización de productos. | |
| Aspecto organizativo-institucional | Formas de organización seccional, comunal e intercomunal | Los productores agrícolas están afiliados a la Federación Departamental de Campesinos y la Central Obrera Departamental | La Federación de Campesinos y la Central Obrera pocas veces se reúnen en la jurisdicción del municipio |
| | Presencia de instituciones públicas y privadas | Existencia de instituciones públicas y privadas consolidadas que prestan servicios y apoyos (ONG's) | Poca coordinación entre instituciones que tienen que ver con el desarrollo del Municipio |
| | Presencia de la mujer en la instancia de toma de decisiones | Presencia de la mujer en las instituciones públicas y privadas, organizaciones sectoriales que crean desarrollo dentro del municipio | Poca capacitación y formación integral de la mujer |

SUBSECTOR PECUARIO

| Ejes temáticos | Variables de referencia | Potencialidades | Limitaciones |
|-------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------------|
| Aspecto físico-natural | Situación geográfica | Zona con diversidad de ecosistemas (serranía, pie de monte y llanuras) favorables para la cría de ganado bovino y otras especies | Fragilidad de los ecosistemas |

| | | | |
|-------------------------------|---|---|---|
| | Suelos | Suelos aptos para la introducción de pasturas y forrajes | Suelos con baja capacidad de regeneración |
| | Recursos hídricos | La existencia de subcuencas en el municipio con ríos navegables y fuentes importantes con abundantes peces | Inundaciones permanentes que afecta la producción pecuaria causando pérdidas. Aprovechamiento descontrolado e ilegal de los peces |
| | Recursos forestales | Recursos forestales disponibles para la construcción de infraestructura de producción pecuaria | Los planes de manejo forestal no se están aplicando adecuadamente |
| | Evaluación de la calidad ambiental: capacidad regenerativa de los suelos, atmósfera, vegetal y animal | Zona tropical con alta riqueza biológica y recursos naturales característicos de la región | Aprovechamiento descontrolado de recursos naturales y aplicación de quemas de chaqueo y pasturas que afecta al medio ambiente |
| Aspecto socio-cultural | Población | El 95% de la población urbana y rural tiene conocimiento del manejo de ganado bovino | Alta tasa de mortalidad pecuaria y pocas inversiones en infraestructura y reducida cobertura de la ganadería intensiva |
| | Transporte y comunicación | Vinculación caminera hacia centros poblados, transitable principalmente en tiempo seco Transporte fluvial es la vía principal hacia algunos cantones y | Alto costo de transporte de los productos agropecuarios. Los caminos vecinales no llegan hasta los sectores más alejados del eje troncal. |

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|---|--|
| | | <p>distritos (TIPNIS, TIM)</p> <p>Los ganaderos en su generalidad cuentan con una red de radio aficionado</p> <p>Existencia de servicios de telecomunicaciones en áreas concentradas (servicio telefónico)</p> | <p>El periodo de sequía afecta negativamente al transporte fluvial paralizándolo todo.</p> <p>Reducida cobertura de servicios de telefonía rural</p> |
| | Acceso a servicios | <p>La población urbana y rural tiene acceso a servicios básicos que se encuentran en estado regular con personal en educación en áreas concentradas.</p> <p>Predisposición de la población hacia la educación formal y no formal</p> | <p>La reforma educativa no se está implementando adecuadamente. Alto porcentaje de profesores interinos. Los servicios de salud y educación reproductiva y otros no se están aplicando de forma adecuada.</p> <p>Las oportunidades de educación a nivel técnico medio y superior no son aprovechadas adecuadamente</p> |
| Aspecto económico-productivo | Sistema de producción | <p>La producción ganadera es practicada en toda la jurisdicción municipal.</p> <p>Praderas naturales aptas para la cría de ganado vacuno y otros animales.</p> <p>Puesta en marcha de la lucha contra la fiebre aftosa (vacunación)</p> | <p>Persistencia del sistema tradicional de cría de ganado vacuno y animales menores.</p> <p>Grandes extensiones de terreno sometidas al pastoreo de ganado, sin manejo o rotación de potreros.</p> <p>Lenta aplicación de las campañas de</p> |

| | | | |
|---|--|--|---|
| | | | vacunación |
| | Sistemas económicos por zonas y rubros más importantes | Mercado asegurado de comercialización de carne vacuna. Comercialización de ganado en pie. San Ignacio atractivo mercado para la comercialización de animales menores (gallinas, cerdos, patos, etc.) | Precio elevados de transporte terrestre aéreo de carne hacia el interior del país. Deterioro de carreteras por el pisoteo de ganado. Estacionalidad en la demanda de animales menores y bajos precios de mercado. |
| | Sistema económico municipal | Ingresos municipales por faeneo | Otros aranceles como del cuero no son los adecuados, causando pérdidas al municipio |
| Aspecto organizativo-institucional | Formas de organización seccional, comunal e intercomunal | Existencia de la Federación de Ganderos de San Ignacio estructurada y afiliada a FEGABENI | Algunos ganaderos no se encuentran afiliados a la Federación. Los ganaderos pequeños cuentan con poco apoyo para mejorar su hato ganadero |

SUBSECTOR ARTESANAL Y FOLCLÓRICO (TURÍSTICO).

| Ejes temáticos | Variables de referencia | Potencialidades | Limitaciones |
|-----------------------|--------------------------------|--|--|
| | Situación geográfica | Existencia de lomas artificiales, canales y camellones precolombinos, atractivo turístico y de investigación | Al momento no existe una reglamentación o normatividad que proteja y promueva el turismo e investigación en el municipio |
| | Población | Población urbana y rural. Principalmente los indígenas | Poco apoyo de instituciones públicas y privadas para la |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | mantienen intactas las manifestaciones culturales (danzas, música, vestimenta, idioma, etc.) | difusión y revalorización de la cultura ancestral |
| | Transporte y comunicación | Vinculación caminera estable y fluida hacia San Ignacio | En la fiesta patronal se evidencia una marcada necesidad de prestación de servicios hoteleros, servicios públicos y una especulación en los precios de productos de primera necesidad. |
| | Acceso a servicios sociales | En San Ignacio de Mojos se cuentan con servicios básicos disponibles. | Existe racionamiento de los servicios básicos en San Ignacio de Mojos |
| | Sistema de producción | Existencia y conservación de la riqueza artesanal. Clubes de madres en el sector rural que trabajan organizadamente. | Poca coordinación entre los artesanos del sector urbano y rural. Los productos artesanales son comercializados a bajos precios |
| | Rol productivo de la mujer en el desarrollo municipal | El trabajo de la mujer es muy importante en la elaboración de trabajos artesanales (tejido, etc.) | Se debe mejorar la calidad de los trabajos artesanales y el fino acabado |
| | Formas de organización seccional, comunal e intercomunal | Las sub centrales de mujeres trabajan exclusivamente en la elaboración de trabajos artesanales (cerámica, tejidos) | Problemas de comercialización y bajos precios de los productos que son comercializados |

Fuente: PDM Municipio San Ignacio de Mojos, CEPA BENI, 2001

ANEXO 5.

INFORMACIÓN FÍSICA ACONSEJADA PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES MUNICIPALES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN ÁREAS RURALES.

| Tema | Información requerida | Fuentes de información |
|---|--|--|
| 1. Zonificación agroecológica y socioeconómica departamental | Unidades de terreno. Unidades de tierra. | Proyectos con trabajos de OT como ZONISIG, BID-AMAZONÍA, PLUS Santa Cruz. |
| 2. Geología | Tipos de rocas superficiales con criterios de resistencia diferencial a la erosión e impermeabilidad. | Estudios de OT; Mapa Geológico de Bolivia (ex-GEOBOL). |
| 3. Geomorfología | De acuerdo con la información anterior, considerar los sistemas de pendientes, procesos de erosión y estabilidad de laderas. | Estudios de OT; Mapa Topográfico del IGM a escala 1:250 000, 1:100 000 y 1:50 000; Mapa de Provincias Fisiográficas de Bolivia (BGR-GEOBOL, 1994). |
| 4. Suelos | Propiedades físicas y químicas. | Estudios de OT; Mapa Preliminar de Erosión de Suelos a escala 1: 1000 000 y Mapa Preliminar de Desertificación de Tierras 1:1000 000, ambos de la Dirección de Conservación de Tierras, MDSMA, 1996. |
| 5. Clima | Temperaturas medias, máximas y mínimas mensuales y anuales. Precipitaciones medias, máximas y mínimas mensuales y anuales. Frecuencia y duración de heladas. | Datos cuantitativos como: información del SENAMHI, AASANA; datos de las estaciones meteorológicas cercanas al área de estudio; mapas temáticos como el de Precipitaciones (Isoyetas), Atlas de Bolivia (IGM, 1997), para analizar la distribución de las precipitaciones; Mapa de Balance Hídrico (ORSTOM, 1997), para ver el régimen de humedad y la disponibilidad de agua; Mapa de Provincias Fisiográficas de Bolivia 1: 1.000.000 (BGR-GEOBOL, 1994); información de proyectos. |
| 6. Recursos hídricos | Caracterización de aguas superficiales (cuencas, ríos, lagos, lagunas) y subterráneas, en su distribución, volumen y calidad. | Mapas topográficos (IGM); información cuantitativa acerca de los caudales de los ríos en diferentes épocas del año (datos del SENAMHI, ORSTOM, Servicio Nacional de Hidrología Naval, GEOBOL, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos); información de proyectos. |
| 7. Vegetación y uso actual de la tierra | Tipos de formaciones vegetales (arbórea, arbustiva, herbácea); tipo de uso de la tierra. | Mapa Forestal, 1: 1000 000 de BOLFOR.; Mapa de Provincias fisiográficas de Bolivia 1: 1.000.000 (BGR-GEOBOL, 1994); Información de proyectos.; Mapa de Cobertura y Uso Actual de la Tierra, GEOBOL, 1978. |
| 8. Áreas de amenazas de origen natural | 1) Deslizamiento y erosión. 2) Inundaciones o sequías. 3) Sismos. | Información espacial y no espacial sobre subsuelo, suelos, relieve, cobertura y uso actual, clima, así como registros históricos de eventos (sismo, inundación, deslizamiento, etc.). |
| 9. Fauna | Describe las principales especies de animales que se encuentran en el departamento, las especies endémicas, amenazadas, en vías de extinción. | Debido a la dificultad de espacializar esta información se sugiere utilizar la información de los proyectos, los mismos que han utilizado fuentes oficiales tales como DNCB, CDC y otras. |

ANEXO 6.

**INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA ACONSEJADA PARA LA
ELABORACIÓN DE PLANES MUNICIPALES DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL EN ÁREAS RURALES.**

| Aspecto | Variables e indicadores | Principales fuentes de información |
|------------------|---|--|
| Social | Demográficas <ul style="list-style-type: none"> - Población total. - Estructura de la población por edad y sexo, origen étnico según municipio, cantón, distrito y localidad. - Migraciones temporales y definitivas. - Mortalidad y morbilidad. - Tasa de crecimiento. | <ul style="list-style-type: none"> - PDM - INE - VPEPP - Experiencia de campo |
| Social | Servicios sociales <ul style="list-style-type: none"> - Infraestructura en salud (número y localización de postas, centros de salud, hospitales básicos, hospitales generales e institutos especializados). - Cobertura y acceso localizado de los servicios de salud. - Infraestructura de educación (número y localización de centros educativos primarios, secundarios, técnicos y superiores). - Cobertura y acceso localizado a servicios de educación. | <ul style="list-style-type: none"> - INE - VPEPP - Experiencia de campo - Ministerio de Salud - Ministerio de Educación |
| Social | Servicios básicos <ul style="list-style-type: none"> - Localización y cobertura a servicios de agua potable, alcantarillado y energía eléctrica. | <ul style="list-style-type: none"> - INE - VPEPP - Experiencia de campo |
| Social | Otros servicios <ul style="list-style-type: none"> - Servicios personales financieros (número de instituciones y su localización). - Servicios jurídicos (notarías, cortes departamentales, juzgados). - Infraestructura hotelera (número, clasificación y localización) | <ul style="list-style-type: none"> - Experiencia de campo - Censo de Municipios 1998 - Superintendencia de Bancos |
| Social | Vivienda <ul style="list-style-type: none"> - Tipo de construcción de vivienda por distrito, zona o cantón. - Localización de rellenos sanitarios, cementerios, instalaciones militares, policiales. | <ul style="list-style-type: none"> - INE - VPEPP - Experiencia de campo |
| Económico | Sistemas productivos <ul style="list-style-type: none"> - Principales cultivos, variedades, superficies cultivadas. - Rendimiento de cultivos. - Composición y tamaño del hato ganadero, sistema de manejo. - Especies y áreas de producción forestal (especies comerciales y no comerciales), sistema de producción y manejo forestal. - Principales productos artesanales - Principales centros y productos mineros, hidrocarburíferos y otras industrias. | <ul style="list-style-type: none"> - PDM - Experiencia de campo - ONGs y proyectos en el municipio |
| Económico | Estructura <ul style="list-style-type: none"> - Sup. de tierra propia por distritos, zonas o cantones. - Sup. de tierra alquilada por distritos, zonas o cantones. - Sup. de tierra prestada por distritos, zonas o cantones. - Sup. de tierra al partido por distritos, zonas o cantones. - Sup. de tierra comunal por distritos, zonas o cantones. - Superficie de tierra bajo otras modalidades por distritos, zonas o cantones. | <ul style="list-style-type: none"> - Experiencia de campo - INRA |

| Aspecto | Variables e indicadores | Principales fuentes de información |
|------------------|--|--|
| Económico | Inversiones municipales <ul style="list-style-type: none"> - Localización de las inversiones en educación. - Localización de las inversiones en salud y servicios básicos. - Localización de inversiones en proyectos de apoyo productivo (camino, microriego y otros proyectos). | <ul style="list-style-type: none"> - PDM - POA - VPEPP |
| Económico | Estructura y sistema comercial <ul style="list-style-type: none"> - Infraestructura comercial (número de mercados o centros de abasto y su localización). | <ul style="list-style-type: none"> - PDM - Experiencia de campo |
| Económico | Infraestructura vial <ul style="list-style-type: none"> - Ubicación de vías camineras (distancias al centro principal o capital de la sección de provincia). - Tipo de red de caminos localizada (red fundamental, complementaria o vecinal). - Tipo de superficie (asfalto, ripio, tierra). - Localización de puertos fluviales y lacustres. | <ul style="list-style-type: none"> - PDM - Servicio Nacional de Caminos - Experiencia de campo - Mapas topográficos - IGM |
| Económico | Energía <ul style="list-style-type: none"> - Localización de generadoras eléctricas, hidroeléctricas y otras redes del sistema. - Localización de pozos de petróleo, gasoductos, oleoductos, refinerías y distribuidoras de derivados de petróleo. | <ul style="list-style-type: none"> - Experiencia de campo - Ministerio de Desarrollo Económico - Superintendencia de Electricidad |
| Económico | Turismo <ul style="list-style-type: none"> - Localización de áreas arqueológicas o de interés cultural. | <ul style="list-style-type: none"> - Experiencia de campo - Talleres participativos |
| Económico | Comunicaciones <ul style="list-style-type: none"> - Ubicación y número de los canales de televisión. - Ubicación territorial y número de radioemisoras. - Ubicación territorial de la existencia de servicios de telefonía. | <ul style="list-style-type: none"> - Censo de Municipios 1998 - Experiencia de campo - Ministerio de Transporte y Comunicaciones |
| Económico | Amenazas de origen antrópico <ul style="list-style-type: none"> - Concentración de la población. - Áreas de actividad industrial. - Infraestructura vial. - Áreas de actividades mineras, petroleras. - Áreas de deforestación. | <ul style="list-style-type: none"> - Fuentes mencionadas anteriormente. |

Fuente: Ministerio de Desarrollo Sostenible, 2001a: 32-34.

**ANEXO 7. EXPEDIENTE DE IRREGULARIDADES DE LA PROPIEDAD DE
LA TIERRA EN EL TIMI.**

TCO. TI MI

NOMBRE DE LA PROPIEDAD SAN MARTIN

PROPIETARIO O POSEEDOR MIGUEL ANGEL MOLLINEDO ZEGARRA

DEPARTAMENTO BENI PROVINCIA MOXOS

CANTON SAN IGNACIO SECCIÓN PRIMERA

SUPERFICIE EXPEDIENTE 50.0000 Has

SUPERFICIE MENSURADA PERICIA DE CAMPO 42.7439 Has

SUPERFICIE QUE CUMPLE LA F.E.S. EN LA E.T.J. 42.7439 Has

PROPIEDAD TITULADA..... TRAMITE..... POSEEDOR..... ✓

OBSERVACIONES E.T.J. Fs. 83-87-

A. Fs. 47. Nuevamente se observa la firma presumiblemente del
Comog. del Cab. de S. I. de Moxo de claramdo o avalando la Posesión
del pudio en cuestión se debe verificar.

A. Fs. 49. Ficha Catastral se observa mejoras (casas, cocina). ademas
de chivos y vacas entre aves de corral y chaco con toda pertinencia a
un Comunal de Bella Briza, en mas se observa el término
"con autorización del Propietario" escrito posteriormente y
con otro color de lapicera.

A. Fs. 77. En el INF. CAMPO se constata la Superficie Sobrepuesta
de 42.7439 has lo que representa el 100% de sobre posición
En los vertices x25 - x39 - x38 y x40 estan en conflicto

A. Fs 86 E.T.J. Conclusiones y sugerencias ya el tecnico encargado
de la E.T.J. valora la observación dando absoluta legalidad los términos
observados escrito posteriormente al llenado de la F. C.

A Fs. 87. Adjudicación simple a favor de Miguel Angel
Mollinedo Z. de la Sup. 42.7439 Has. → Pequeña Propiedad
Agrícola.

ANEXO 8 ⁴¹¹. EXPEDIENTE DE IRREGULARIDADES DE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA EN EL TIMI.

TCO... TIMI.....

NOMBRE DE LA PROPIEDAD... "EL BRAGETAZO".....

PROPIETARIO O POSEEDOR... SATURNINO CAITI MASAPAIJO y OTROS.....

DEPARTAMENTO... BENI..... PROVINCIA... MOXOS.....

CANTON... SAN IGNACIO..... SECCIÓN... PRIMERA.....

SUPERFICIE EXPEDIENTE (Doc. Dotado HAM) 24.000 has S/Exp......

SUPERFICIE MENSURADA PERICIA DE CAMPO 47.5710 has.....

SUPERFICIE QUE CUMPLE LA F.E.S. EN LA E.T.J. 47.5710 has.....

.....

PROPIEDAD TITULADA..... TRAMITE..... POSEEDOR... ☒.....

OBSERVACIONES... E.T.J. Fs. 100 - 103.....

El Presente predio, se encuentra el 100% dentro de la TCO TIMI.

A Fs. 101. Declaración jurada de Posición se indica que esta

avalada por el Corregidor del Cab. de S. Ignacio de Moxo,

cuya firma se presume ha sido falsificada y se debe

verificar?

A Fs. 103. Adjudicación Simple Sr. Saturnino Caiti y Manuel

Caiti Sup. 47.5710 has → Pequeña Propiedad Agrícola

se pintaron de rojo los verticales X 60 - X 34 - X 32 y X 34 por

reposición de la TCO TIMI en señal de desacuerdo al

presente predio en cuestión

⁴¹¹ Expedientes extraídos del "Resumen general de carpetas Saneamiento TCO TIMI", La Paz, 2004, responsable Pedro Nuni Caiti.

**ANEXO 9. EXTRACTO DEL INFORME CIRCUNSTANCIADO TÉCNICO Y
JURÍDICO DE CAMPO DE LAS TIERRAS COMUNITARIAS DE ORIGEN
T.I.M.I.**



INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA
SAN TCO's INRA - BENI



INFORME TÉCNICO - JURÍDICO

A: Lic. Gonzalo Ruiz Gutiérrez
Director Departamental del INRA - BENI

Vía: Dr. Douglas Roca. Suárez
Coordinador SAN TCO's - INRA - BENI

Vía: Ing. Victor Quintanilla Ramirez
Coordinador SAN TCO's INRA - BENI

De: Agrim. Jesús Humberto Maquera M.
Asistente Técnico SAN TCO's - INRA - BENI

De: Dr. Alberto Duran Vargas
Asistente Jurídico SAN TCO's - INRA - BENI

Fecha: Trinidad, 23 de Diciembre del 2003

Ref. : **Informe Circunstanciado Técnico y Jurídico de Campo de las
Tierras Comunitarias de Origen T.I.M.I.**

Relación de hechos-

En fecha 02 de agosto de 1999, mediante memorial dirigido al Director del Instituto Nacional de Reforma Agraria, los señores Ernesto Noe Tamo, Presidente de la Central de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB), Roberto Tababary Malale, secretario de Tierra y Territorio de la CPIB, Leonarda Mosua Noco, Presidenta de la Central de Mujeres Indígenas del Beni (CMIB), Simón Sucubono Maemo, Presidente de la Sub Central de Cabildos Indígenales de San Ignacio de Moxos, Sixto Bejarano Congo, Secretario de Tierra y Territorio y Bertha Bejarano Congo, Presidenta de la Sub Central de Mujeres Indígenas de San Ignacio de Moxos, demandaron la Titulación del Territorio Indígena Mojeño Ignaciano (TIMI), la misma fue admitida en fecha 12 del mes de agosto de 1999 años.

Mediante Resolución Determinativa de Área de saneamiento N° **R-ADM-TCO-0031/2000**, dictada dentro del trámite social agrario seguido por la SUB CENTRAL DE CABILDOS INDIGENALES DE SAN IGNACIO DE MOXOS (TIMI), el I.N.R.A. resuelve declarar como área predeterminada de saneamiento TCO e inmovilizar el área de **98.388,9039 Has. (Noventa y Ocho Mil Trescientas Ochenta y Ocho Hectáreas con Nueve Mil Treinta y Nueve metros cuadrados)**, sito en el Departamento del Beni, Provincia Moxos, Sección Primera, Cantón San Ignacio, salvando áreas Urbanas y derechos legalmente adquiridos por terceros.

Mediante Resolución Administrativa N° **154/2000** de fecha 07 de noviembre de 2000 se resuelve modificar la modalidad de saneamiento de todas las propiedades que se encuentren al interior del área determinada en la Resolución Determinativa N° R-ADM-TCO-0031/2000 disponiendo se continúe con el proceso de saneamiento de dichas propiedades en el estado en que se encuentren, con el cambio de modalidad y la participación indígena.

Mediante Informe de fecha 13 de junio del año 2002 se da a conocer la existencia de 73 propiedades identificadas en gabinete dentro del área determinada y se elabora un mapa base (mosaicado) con la ubicación geográfica, superficie y límites de los predios titulados y procesos agrarios identificados. Encontrándose concluida la fase de identificación en gabinete, el Director Departamental del INRA-BENI dicta la Resolución Instructoria y demás actuados previstos por la Ley 1715 y su Reglamento.

Mediante providencia dictada en fecha 13 de Junio de 2002, se da por concluida la fase de identificación en gabinete dentro del proceso de Saneamiento SAN TCO TIMI.

Mediante Resolución Instructoria N° **R-ADM-TCO-006/2002**, resuelve disponer el inicio del proceso de saneamiento sobre la superficie de **98.388,9039 Has. (Noventa y Ocho Mil Trescientas Ochenta y Ocho Hectáreas con Nueve Mil Treinta y Nueve metros cuadrados)** fijando para ello la ejecución de Pericias de Campo en la TCO TIMI prevista en el Art. 173 del Reglamento de la Ley 1715.

La Resolución N° **R-ADM-TCO-006/2002** de fecha 15 de Julio del 2002, resuelve dar inicio a la Campaña Pública del SAN-TCO TIMI.

La citada Resolución fue notificada mediante edicto en el medio de prensa escrita de circulación nacional "La Palabra del Beni", la publicación se realizó el 15 de julio de 2002.

Se dio inicio a Las Pericias de Campo el 12 de Agosto de 2002 con la publicación del primer comunicado y cronograma de ingresos a Pericias de Campo de la TCO TIMI a los efectos del Art.173 del Reglamento de la Ley 1715.

Se procedió al cierre de las Pericias de Campo en fecha 19 de noviembre de 2002 mediante acta celebrada en la localidad de San Ignacio de Moxos, con la presencia de autoridades de la localidad, indígenas y personal del INRA BENI.

En cumplimiento a la Resolución Instructoria N° **R-ADM-TCO-006/2002**, una vez concluidos los trabajos de Pericias de Campo y de acuerdo a los resultados obtenidos, se determinan las coordenadas que forman el polígono de la Demanda, producto de la mensura en Pericias de Campo las cuales son:

| UBICACION | DESCRIPCIÓN | CODIGO |
|---------------|-------------|--------|
| DEPARTAMENTO: | Beni | 08 |
| PROVINCIA : | Moxos | 05 |
| SECCION : | Primera | 01 |
| CANTON : | San Ignacio | 01 |

De acuerdo a documento provisional COMLIT del 90

RELACION DE SUPERFICIE (Hectáreas)

| (A) SEGÚN RESOLUCIÓN N° R-ADM-TCO -031/2000 | (B) PERICIAS DE CAMPO | (C) DIFERENCIA |
|--|--------------------------|----------------|
| 98.388,9039 Ha. | 89.671,7392 Ha. | 8.717,1647 Ha. |

COLINDANCIAS DEL POLÍGONO DE LA DEMANDA

| | | | |
|---------------|---|---------------|--|
| NORTE: | PREDIOS SAN ANTONIO, SAN JOSE, CANAAN, LAS GATEADAS, TIERRAS FISCALES y DEMANDA MOVIMA II | ESTE: | PREDIOS QUITA PESARES, VILLA CAROLA, SANTA TERESA, CAFETAL, SAN ANDRES Y SAN PEDRO |
| SUR: | CAMINO SAN IGNACIO - TRINIDAD Y LOS PREDIO SAN CAMILO, LA CASUALIDAD, CHAJARICO, TIERRAS FISCALES, SAN MANUEL, EL RINCÓN, LUCUMO, LOYOLA, VILLA KORAIMA, AREA URBANA DE SAN IGNACIO, PREDIOS BELLA BRISA, SANTA | OESTE: | PREDIOS EL CARMEN, RIO APERE, DEMANDA TIM, ARROYO MATIRE, PREDIO y SAN ANTONIO |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | TERESA, SANTA ROSA, EL DIECISÉIS, LA PASCANA y EL CARMEN | | |
|--|---|--|--|

SOBREPOSICION CON AREAS CLASIFICADAS

| Nombre del Área | Base Legal | Fecha | % de sobre posición (Ha) |
|-------------------------------|------------|----------|--------------------------|
| PARQUE REGIONAL YACUMA (ANMI) | D.S.22611 | 24/09/90 | 13.726,6150 |

SOBREPOSICION CON PREDIOS

Durante las pericias de campo, se han identificado 48 predios que fueron mensurados por estar al interior de la Demanda TIMI, ya sea total o parcialmente o al haber presentado sobre posición con un predio que si se encontraba dentro de la Demanda.

AREAS DE SOBRE POSICIÓN ENTRE PREDIOS AL INTERIOR DE LA TCO.

Existen sobre posiciones prediales, las cuales se detallan a continuación:

1. **394,9845 Ha.**, es la sobre posición entre **Providencia - San Simon**.
2. **91,5752 Ha.**, es la sobre posición entre **Macondo - San Simon**.
3. **215,9512 Ha.**, es la sobre posición entre los predios **El Pororo - El Paquio**.
4. **565,7406 Ha.** Es la sobre posición entre los predios **San Simon - El Pororo**.
5. **31,3710 Ha.**, es la sobre posición entre los predios **El Pororo - Los Olivos**.
6. **8,2593 Ha.**, es la sobre posición entre los predios **El Rincón - San Manuel**.

Sup. sobrepuesta de predios a la Demanda(ver cuadro) =
+32.895,8970 Ha.

Sobre posiciones de predios mensurados anteriormente:

Predio San Antonio = +8.249,6519
Ha.

Sup. predial al interior de TCO, incluyendo posiciones prediales =
41.145,5489 Ha.

El total del Área de sobre posiciones prediales = -
1.312,1205 Ha.

Sup. Predial al Interior de la TCO sin sobreposiciones prediales =
39.833,4284 Ha.

Nota. - El predio San Antonio fue mensurado durante el Saneamiento del la TCO-TIM.

SOBRE POSICIONES PREDIALES FUERA DE LA DEMANDA

- ❖ El predio **25 DE MAYO** se encuentra fuera de la Demanda TIMI y se mensuró por razón de presentar conflicto de sobre posición con el predio **SAN MANUEL**.
- ❖ El predio **SAN JOAQUIN** se encuentra fuera de la Demanda TIMI y se mensuró por razón de presentar conflicto de sobre posición con el predio **LUCUMO**.
- ❖ El predio **SAN JUAN** se encuentra fuera de la Demanda TIMI y se mensuró por razón de presentar conflicto de sobre posición con el predio **CHAJARICO**.

Resumiendo, se tienen los siguientes resultados para el Polígono de la **DEMANDA TIMI**

| | |
|---|--------------------------|
| SUP. MENSURADA DE LA DEMANDA TCO T.I.M.I. | = 89.671,7392 Ha. |
| SUP. MENS. DE PREDIOS SOBREPUESTOS A LA TCO | = 39.833,4284 Ha. |
| SUP.DE SERVIDUMBRES AL INTER. DE LA DEMANDA | = 3.543,4968 Ha. |
| TOTAL DE SUP. APROVECHABLE A FAVOR DE LA TCO | = 46.294,8140 Ha. |

CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES

- ✓ Como resultado de las pericias de campo y conforme a las normas técnicas vigentes, la superficie mensurada del área de la Demanda TIMI es de **89.671,7392 Hectáreas**.
- ✓ La superficie Aprovechable a favor de la Demanda libre de Terceros y de las servidumbre, parcialmente son **46.294,8140 Hectáreas**.
- ✓ En total se mensuraron **124** puntos Pintados de Amarillos y **91** puntos pintados de Rojo, haciendo un total de **215** puntos mensurados durante el transcurso de las pericias de campo sin contar con los mensurados por las empresas de SAN SIM. y los puntos mensurados durante el SAN TCO TIM.
- ✓ Durante la elaboración de los planos prediales, se vio la necesidad de determinar puntos o vértices en gabinete, con el fin de realizar la **DIVISIÓN CATASTRAL**, si es que por el predio cruzaba de extremo a extremo ya sea un Río, un arroyo o un Camino troncal, interprovincial o Vecinal, lo cual sucedió en varios de los predios que actualmente tienen varios

Códigos Catastrales (Ver cuadro de los predios Mensurados). 34 puntos de la Demanda, fueron determinados en gabinete.

- ✓ El predio codificado con la numeración **048**, de nombre **CHACO LEJOS**, se fusiono a la DEMANDA TIMI.
- ✓ Durante la Etapa de la Campaña publica, se Identificaron predios que posteriormente en Las Pericias de Campo se verifico que se encontraban fuera del Polígono de la DEMANDA TIMI y actualmente solo son colindantes de esta. Los predios fueron los siguientes:
- ✓ El predio "**LOS TUBOS**", identificado en la Campaña Publica, se fusiono al predio **029-039 "TRIUNFO"**.
- ✓ De los 46 predios que se mensuraron en las Pericias de Campo, la mayoría de ellos se encuentran en conflicto con la **DEMANDA TCO-TIMI**.
- ✓ Existen Dos predios mensurados en fechas anteriores del inicio de las Pericias de Campo de la Demanda TIMI. Los cuales son San Antonio(SAN TCO-TIM), Las Gateadas (SAN-SIM) empresa INYPSA. Solo esta ultima fue sometida a la evaluación Técnica Jurídica del INRA-BENI.
- ✓ también existe predios que fueron identificados como abandonados, se realizo la inspección ocular por parte de funcionarios del INRA, acompañados de los Representantes de la Demanda y se levantaron las actas respectivas. Las Propiedades fueron ubicadas con las siguientes coordenadas UTM. WGS-84:

| PREDIO | ESTE | NORTE |
|------------|--------|---------|
| GUANAJUATO | 247189 | 8360865 |
| SAN MIGUEL | 241382 | 8349501 |

- ✓ Por ultimo mencionar que para la elaboración de los planos prediales, se realizo la actualización de la cartografía Digital de la zona de la TCO TIMI, con tres Imágenes Satelitales SPOT que cubrian en totalidad todo el Territorio Mojeño Ignaciano y estas fueron las siguientes:
 - **673 379**
 - **673 380**
 - **674 380**

Estas Imágenes, fueron tomadas en el año 1999.

SUGERENCIAS

Durante las Pericias de campo del SAN TCO TIMI, se realizo la densificación de los puntos de Control Geodésico SARI y ARGE, de los cuales la información de los

Ajustes de los mismos, se perdió a causa de problemas técnicos de las computadoras en las cuales se realizaron los ajustes y procesos.

Por lo cual se sugiere que, para emplear los puntos anteriormente mencionados, se vuelva a ajustar , ya que los datos Rinex se lograron salvar y posteriormente, comparar con las coordenadas con las que se trabajo todos los ajustes de los vértices prediales y verán que esta dentro de la tolerancia de los 20 centímetros de acuerdo a las Normas Técnicas.

Revisada la Información del predio "Las Gateadas", se observo la ausencia de los datos GPS y su respectivo ajuste de los mismos, se realizo la consulta correspondiente sobre la ubicación de esta información, llegando a conocer que se encuentra en la Nacional del SAN SIM del INRA en LA PAZ, para lo cual se sugiere, adjuntar dicha información a la carpeta del predio "LAS GATEADAS", al Supervisor Técnico a cargo de la presente TCO.

INFORMACIÓN ADJUNTA AL PRESENTE INFORME

Para fines de constancia se adjunta la siguiente documentación e información impresa y en formato Digital que es el producto de todo el trabajo realizado para la conclusión de las pericias de Campo:

- ❖ Plano, producto de las pericias de campo de la DEMANDA de la TCO TIMI.
- ❖ Base se datos de los predios mensurados al Interior de la Demanda TIMI.
- ❖ Una Base de Datos de los vértices mensurados amarillos y rojos.
- ❖ Imágen Satelital SPOT de la Zona de la DEMANDA, esta Revisada y aprobada por personeros de la Nal. de TCO's.
- ❖ Fichas técnicas de campo de los vértices de la DEMANDA mensurados.
- ❖ Reporte de ajuste de los puntos de la Demanda y predios.

Es cuanto informamos para fines consiguientes de Ley.

JHMM/adv
Cc. arch.